CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2000

LDA. MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

SALA PRIMERA (CIVIL)

LDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK
PRESIDENTE

DR. ELIGIO A. SALAS **LDO. JOSÉ A. TROYANO**

LDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

LCDO. CÉSAR PEREIRA BURGOS
PRESIDENTE

LDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. **LDA. GRACIELA J. DIXON C.**

LDO. MARIANO E. HERRERA E.
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

LDA. MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

DR. ARTURO HOYOS **LDO. ADÁN ARNULFO ARJONA L.**

LDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

LDA. MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

LDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK **LCDO. CÉSAR PEREIRA BURGOS**

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

ÍNDICE

ÍNDICE I

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADA POR LA LICDA. ALMA CORTES, EN REPRESENTACIÓN DE MARPESCA S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL RECHAZO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA FITO-ZOOSANITARIA DE IMPORTACIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE SALUD ANIMAL DEL MIDA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR CABLE & WIRELESS PANAMÁ S.A, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-6-N° 20-2000 DE 9 DE MAYO DE 2000, PROFERIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 6. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 3

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR JAEN Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACION, JOSE SEBASTIAN MARTINEZ CORDOBA Y DEISA DE HERNANDEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. 199-99 DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 6

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. RUBÉN JOSÉ LEVY, EN REPRESENTACIÓN DE ISAAC LALO GUERON CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 17 DE FEBRERO DE 2000, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 8

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PRESENTADA POR PORRAS Y PORRAS EN REPRESENTACION DE TROPAC MARITIME, INC., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA NO.431-DGT-00, DE 19 DE ABRIL DE 2000, EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 16

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO DIOGENES ANIBAL AROSEMENEA CONTRA LA ORDEN DE NO HACER EMITIDA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, AL PONERLE UNOS JERÓGLÍFICOS A LA NOTA N°CJ-310-2000. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL. 19

ACCION DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LICENCIADA ALMA L. CORTES EN REPRESENTACION DE PROCESADORA MARPESCA, S. A. CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA NOTA DSA-30 DE 6 DE ENERO DE 2000 DICTADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE SALUD ANIMAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 21

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO, EN REPRESENTACIÓN DE JULIO LA PLAZA CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 22

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL ANTONIO GUILLEN, EN REPRESENTACION DE LUIS ANIBAL CASTILLO, CONTRA LA JEFA DE SECCION DE TRAMITES DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y SUBSIDIOS DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 23

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS GARCÍA, EN REPRESENTACIÓN DE SILVIA MARSHALL, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 24

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADA POR EL LICENCIADO HUMBERTO MOSQUERA B., EN REPRESENTACIÓN DE FRANCO RIVERA U., CONTRA EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE DE COCLE. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 25

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO EN REPRESENTACIÓN DE UNIVERSAL TRAVEL SERVICE, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DRP N°154 DE 24 DE MAYO DE 2000 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 27

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDA POR JUAN ANTONIO CARBONE VAN DER HANS A EFECTOS DE QUE REVOQUE LA RESOLUCION EXPEDIDA EL 27 DE MARZO DE 2000 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 29

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDA POR EL SEÑOR BENY LEON ROZENBAUM BAJTEL CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 33

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ERICK NORMAN BARRIOS CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 44-2000 DE 14 DE MARZO DE 2000 DICTADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE(19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 38

DEMANDA DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JUAN PAULINO RODRÍGUEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ GALO MARTÍNEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA NO.14-700-2023-99, DE 22 DE DICIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 39

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. JUAN PAULINO RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ANAYANSI DEL CARMEN RANGEL ALAIN CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2000 DICTADA POR LOS MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FEDERICO LEE. PANAMA, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 42

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A FAVOR DE CONSTRUCTORA GSM, S. A., CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION S/N DE 18 DE AGOSTO DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 44

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO JORGE DANIEL SAMUDIO VEGA, EN REPRESENTACIÓN DE VILLA CORINA S. A., CONTRA EL JUEZ SEXTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 47

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA FORENSE BERRIOS Y

BERRIOS, EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO CEDEÑO PERDOMO CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO, RAMO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 48

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR BERRIOS Y BERRIOS, EN REPRESENTACION DE GABRIEL ARIEL LAWSON, CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CTO. JUDICIAL, APELACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 50

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LICENCIADA LIZZA MARIE JAEN EN REPRESENTACION DE CABLE & WIRLESS PANAMA, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA N° 24-JCD-2000, FALLO ORAL, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION N°2. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 53

ACLARACIÓN DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. RUBÉN JOSÉ LEVY, EN REPRESENTACIÓN DE ISAAC LALO GUERON CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 17 DE FEBRERO DE 2000, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 55

RECURSO DE HABEAS CORPUS 57

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANIEL GOMEZ DE LEON Y ALI ALBERTO ORTEGA CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . . 57

ACCION DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO A FAVOR DE NICOLAS ACOSTA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE JULIO DEL AÑO DOSMIL (2000). 59

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YAHAIRA YANETH MASCOL MONTALVO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 62

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 65

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO ALLEYNE CONTRA EL FISCAL QUINTO DE CIRCUITO DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 69

HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE JENNY BENITEZ ESTUPIÑAN CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 70

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABDIEL E. ELLEYNE WILLIAMS CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 75

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ ROGELIO DÍAZ VERGARA CONTRA EL DIRECTOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 76

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ Y JULIO GONZALEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 77

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE RIGOBERTO RAMÍREZ TUÑÓN CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE LA CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 78

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO PASTOR GODOY GUERRA CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 81

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ESCOBAR CASTRO CONTRA EL FISCAL PRIMERO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL CON SEDE EN CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 82

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO RAÚL JARAMILLO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 85

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NURIA NATEZ SANTIMATEO E ISMAEL BONILLA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE DROGA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 86

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VANESSA ROQUERO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 88

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VALERIO DEL CARMEN VARGAS SAAVEDRA CONTRA EL FISCAL QUINTO DE CIRCUITO DE PANAMA, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 90

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DEYCA INDIRA CARRERA GONZALEZ CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 93

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONIO CERRUD MONTENEGRO CONTRA LA FISCALÍA DELEGADA ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS DE HERRERA Y LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL DOS MIL (2000). 96

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN EDUARDO MCRAE GONZÁLEZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . 98

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE HÉCTOR ARIEL CEDEÑO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 99

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE RENTERÍA GRANADOS CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 100

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAVIER LUIS JACKSON CONTRA EL FISCAL SEXTO DE CIRCUITO DE PANAMA. APELACION. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FEDERICO LEE. PANAMA, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 102

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARMANDO LÓPEZ MARTÍNEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

. 104

HABEAS CORPUS A FAVOR DE PATRICIA CLARCK MATTEW Y DADYERI MARCUCCI GARCIA CONTRA LA FISCALIA DELEGADA DE DROGAS DE LA PROVINCIA DE COCLE Y VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 106

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FABOR DE ANGEL CACERES ABADIA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 107

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDILDA ALEMÁN QUIRÓS CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 108

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFONSO PRECIADO TORO, CONTRA LA JUEZ PRIMERA DE CIRCUITO PENAL DE COLON, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). . . . 111

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS SINGARES CAMPBELL CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 114

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERICK ANTONIO LUM RUIZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 120

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE CRISTIAN RAMÍREZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 123

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MONTICELLO NARCISO FRANCIS GONZALEZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 123

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RODOLFO CAMAÑO CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 124

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARMEN MARLENIS MARTINEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 125

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARITZA DE GRACIA OVALLE CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 128

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AZAEL FUENTES BETHANCOURTH CONTRA EL FISCAL ESPECIAL SUPERIOR. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 129

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YUKLANN LYLY LEDEZMA DE RAMOS CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 132

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 135

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO NELSON CARREYÓ EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ LEONIDAS JOVEL CONTRA SENTENCIA DE 18 DE ENERO DE 1999, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 135

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA FÁTIMA DE LA GUARDIA CONTRA LA FRASE "HABER CUMPLIDO TREINTA AÑOS DE EDAD", CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 84, 122 Y 152 DE LA LEY N° 29 DE 25 DE OCTUBRE DE 1984, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 139

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RIOS MOLINAR CONTRA EL ARTÍCULO 1399 DEL CÓDIGO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE POLICÍA PROMOVIDO POR EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL CONTRA OCUPANTES DE LA FINCA 6069, FOLIO 552, TOMO 653, UBICADA EN SAN ANTONIO, PROVINCIA DE SANTIAGO. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓN RODRÍGUEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 143

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTO POR EL LICDO. BORIS E. BARRIOS G. CONTRA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY No.1 DE 5 DE ENERO DE 1988, SOBRE CALUMNIA E INJURIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 144

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LIC. JOSÉ MARÍA LEZCANO, EN REPRESENTACIÓN DE ALFONSO URRIOLA CONTRA EL AUTO NO. 202, DE 2 DE AGOSTO DE 1999, DICTADO POR EL JUEZ MUNICIPAL DE BOQUETE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 147

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR CARLOS EUGENIO CARRILLO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 29 DE JUNIO DE 1999, EMITIDA POR EL JUZGADO TERCERO DE CIRCUITO PENAL DE LA PROVINCIA DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 151

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. NELSON CARREYO, EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD MERCEDES BAY CORPORATION, CONTRA LA RESOLUCION DE 23 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 153

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO CARLOS E,. CARRILLO GOMILA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 25 DE AGOSTO DE 1997, PROFERIDA POR EL JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SALOMÓN HOMSANY ABADI. MAGISTRADO PONENTE: CESAR PEREIRA BURGOS. CONTRAPROYECTO: MAG. ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 156

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. RICARDO LANDERO EN REPRESENTACION DEL H. L OLMEDO GUILLEN CONTRA EL ARTICULO 30 DE LA LEY N 28 DEL 20 DE JUNIO DE 1995 "POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA UNIVERSALIZACION DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LA PRODUCCION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 163

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. ALEXIS HERRERA EN CONTRA DE LA FRASE "PREVIO CONCEPTO FAVORABLE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA", CONTENIDA EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 20 DE 15 DE MAYO DE 1995, COMO EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 6° DEL DECRETO NO. 31 DE 5 DE FEBRERO DE 1996. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 171

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LCDA. MONICA GONZALEZ SAGEL CONTRA EL ARTICULO 2204 DEL CODIGO JUDICIAL (PROCESO PENAL SEGUIDO A DIAMANTIS PAPADIMITRIU, ROBERTO DELGADO HERRERA Y OTROS, POR LOS DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA, CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 173

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA DE ABOGADOS ICAZA,GONZALEZ, RUIZ & ALEMAN EN REPRESENTACION DE ARTURO MULLER EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y EN CONTRA DEL AUTO NO. 2302 DISCTADO EL 26 DE AGOSTO DE 1994, POR EL JUZGADO TERCERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 175

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. SIDNEY SITON URETA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS KAM FONG YU, CONTRA LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO ELECTORAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 178

TRIBUNAL DE INSTANCIA 183

QUERELLA CRIMINAL PRESENTADA POR LOS SEÑORES APOLONIO ACOSTA MACK Y CARLOS BELMO GRAHAM CONTRA EL SR. JOSE JOAQUIN VALLARINO, MINISTRO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 183

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD, FORMULADA POR LA LICENCIADA ALMA L. CORTÉS CONTRA EL TÍTULO I Y X DE LA LEY 23 DE 15 DE JULIO DE 1997, POR EL CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO DE MARRAKECH, CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE PANAMÁ A DICHO ACUERDO JUNTO CON SUS ANEXOS Y LISTA DE COMPROMISOS, SE ADECUA LA LEGISLACIÓN INTERNA A LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 188

QUEJA PROMOVIDA POR CHICAGO OIL COMPANY CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARITIMO DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 189

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMIREZ Y ALEMAN, EN REPRESENTACION DE GENETIC INSTITUTE INC., CONTRA LA FRASE "HASTA TRES DIAS ANTES DE LA AUDIENCIA", CONTENIDA EN EL ARTICULO 187 DE LA LEY 35 DE 10 DE MAYO DE 1996, POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . . . 192

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN SEGUIDAS CONTRA EL DR. ARTURO ULISES VALLARINO BARTUANO, POR LE SUPUESTO DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO CULPOSO) EN PERJUICIO DE PEDRO AÑINO AGRAZAL.IMPEDIMENTO PRESENTADO POR EL MAGISTRADO ARTURO HOYOS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 193

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON C. DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. DARÍO E. CARRILLO G., EN REPRESENTACIÓN DE BALDOMIR KRISAJ KREGAR Y EDITH CALVERA, CONTRA EL JUEZ OCTAVO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 194

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 196

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO 197

APELACION INTERPUESTA POR TUNA PACIFICO, S. A. CONTRA LA SENTENCIA No.10 DE 17 DE ABRIL DE 1998 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE JOSE A. OSTIZ & LUIS M. OSTIZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 197

APELACIÓN INTERPUESTA POR LA M/N BARCELONA I CONTRA LA SENTENCIA N°2 DE 17 DE FEBRERO DE 2000 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE DILUPA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 204

APELACION INTERPUESTA POR ABASTECEDORA TEXTIL, S. A. CONTRA LA SENTENCIA No.35 DEL 5 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A WICO, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 207

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 218

JULIETA DE LEÓN Y MARITZA DE LEÓN DE GONZÁLEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO QUE LE SIGUE SAMUEL HUMBERTO GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 218

ARGELIS CECILIA NELSON PHILLIPS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE JUAN BAUTISTA SAMANIEGO BATISTA. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . . . 222

IVONNE FABREGA DE SUCRE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE LE SIGUE A DELSA LORENA FABREGA DE DOWELL, LUMY FABREGA DE ARIAS E INES MARIA FABREGA. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 223

BUDGET RENT A CAR DE PANAMA, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FRANKLIN VEGA PARALTA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 224

ELIA ALZAMORA VDA. DE MARTINEZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CAJA DE AHORROS Y GRACIELA DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 227

ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO LOS GOBELINOS Y VIRGINIA CLARE DE GONZALEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LES SIGUE INVERSIONES ULISES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 231

EMMA PORCEL DE TEJEIRA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE JAVIER TEJEIRA MUÑOZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DICISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 232

NATASHA SUCRE RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ADMINSTRACION MODERNA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 233

TOYOTA RENT-A CAR PANAMA, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO INTERPUESTO POR ALBERTO TORRES CONTRA EDUARDO ATENCIO Y TOYOTA RENT-A CAR PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 236

INVERSIONES Y PROYECTO MARBELLA, S. A., CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A. y

COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE GUILA LALO DE COHEN, MORRIS COHEN Y DAYANA ANA COHEN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 240

JORGE LUIS DE PUY GARCIA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA, SUCESIÓN DE ANDRÉS FERNANDO DE PUY FARRUGIA Ó SUCESORES DE ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 242

JULIO CESAR MORALES LINCK RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE SUCESIÓN TESTADA DE JULIO CESAR MORALES SAENZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 242

CHILE HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED RECURRE EN CASACIÓN EN LAS MEDIDAS CONSERVATORIAS O DE PROTECCIÓN EN GENERAL PRESENTADAS CONTRA LAITH TRADING AND CONTRACTING COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 245

RHONE DEVELOPMENT, S. A. RECURRE EN CASACION EN LA MEDIDA CONSERVATORIA O DE PROTECCION QUE LE SIGUE A BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 246

HOTELERA EL PANAMA, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE RICARDO A. LANDERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 246

MAYA CHANDRU NATHANI RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 249

LUIS FELIPE ESTENOZ HERRERA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 257

BANCO FEDPA, S. A. Y EDILBERTO B. ESQUIVEL MOLTO RECURREN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN EN QUE SE DEMANDA PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA EN EL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR BANCO FEDPA, S. A. CONTRA EDILBERTO B. ESQUIVEL MOLTO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . . 262

MAXIMINO MEJÍA ORTEGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE EL FARO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 264

BIENVENIDA DOMINGUEZ DE GONZALEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO DE NULIDAD DE INSCRIPCIÓN QUE LE SIGUE A BENJAMIN BETESH Y GANAGRO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 265

CARLOS RIZCALLA O CARLOS RENE RIZCALLA TESTA RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE IDONEIDAD DEL TÍTULO PRESENTADOPOR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR RAPID FACTORING, S. A. CONTRA CARLOS RIZCALLA O CARLOS RENE RIZACALLA TESTA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . . . 268

ADRIÁN E. CASTILLERO LANGE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MARTA NEMESIA CASTILLERO Y LOS SUCESORES DE MANUELA CASTILLERO PIMENTEL Y LIBRADA CASTILLERO PIMENTEL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . . . 272

CLINICAS Y HOSPITALES, S. A. (CENTRO MEDICO PAITILLA, S. A.), SONIA PORTILLO H., XIOMARA R. DE ROVIRA, RAMON CRESPO BERGES, ROBERTO ENRIQUE MALEK BOURDETT Y BRENDA VIDAL VALLADARES DE MALEK RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE ROBERTO ENRIQUE MALEK BOURDETT Y BRENDA VIDAL VALLADARES DE MALEK LE SIGUEN A CLINICAS Y HOSPITALES, S. A. (CENTRO MEDICO PAITILLA, S. A.) Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 274

MARÍA LUISA BRAVO ZÚÑIGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A SUCESIÓN TESTADA Y/O INTESTADA DE LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO Y LOS HEREDEROS DECLARADOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 312

FEDERICO DAVIS RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE LE SIGUE A LA SOCIEDAD CENTRAL DE GRANOS DE COCLE, S. A. (CEGRACO, S. A.). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 312

CONFLICTO DE COMPETENCIA 315

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO DECIMOSEXTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA Y EL JUZGADO OCTAVO DE CIRCUITO, RAMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMA EN EL PROCESO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR INCOADO POR GILBERTO VILLARREAL CONTRA MILLENNIUM TECHNOLOGY CORP. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 315

IMPEDIMENTO 318

CALIFICACION DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JOSE A. TROYANO DENTRO DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LOS LICENCIADOS ELIGIO ANDERSON ALLEN Y DARIO E. CARRILLO CONTRA EL AUTO DE 4 DE OCTUBRE DE 1999 DICTADO POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA E ILEGITIMIDAD PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO (RECONVENCIÓN) INCOADO POR ISAAC DAVID MIZRACHI Y PROTECCIONES DE ULTRAMAR, S. A. CONTRA JOSUE LEVY LEVY, RUBEN LEVY LEVY y DOV BINDER. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 318

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JOSÉ A. TROYANO DENTRO DEL RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 31 DE MAYO DE 2000, DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL PROPUESTO POR INVERSIONES FÁTIMA, S. A., CONTRA PROYECTOS URBANÍSTICOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 319

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JOSÉ A. TROYANO DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN EN LAS ACCIONES DE SECUESTRO QUE LE SIGUE ORISTELA FASANO SALAZAR. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 320

RECURSO DE HECHO 321

EL LICENCIADO VICTOR VERGARA ZAMBRANO RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 24 DE ABRIL DE 2000 DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE REMATE DE CREDITOS POR PRETERMISION DEL PROCEDIMIENTO E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION EN EL PROCESO INTERPUESTO POR DOVEY MARINE, S. A. CONTRA BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 321

DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1999 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL INCIDENTE DE NULIDAD, POR FALTA DE COMPETENCIA E ILEGITIMIDAD EN EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO POR LOS LICENCIADO ELIGIO ANDERSON ALLEN Y DARIO E. CARRILLO G. CONTRA EL AUTO DEL 4 DE OCTUBRE DE 1999, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR ISAAC DAVID MIZRACHI Y PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S. A. CONTRA JOSUE LEVY LEVY, RUBEN LEVY LEVY Y DOV BINDER. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 322

EL LICENCIADO GABRIEL LAWSON RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 29 DE MAYO DE 2,000 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE PERSONERIA EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR RAMIRESZ HOLLDING CORP.CONTRA PABLO ESPINOSA URRUTIA Y DESTELLOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 324

TRIBUNAL DE INSTANCIA 325

JULIETA DE LEON Y MARITZA DE LEON DE GONZALEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO QUE LE SIGUE SAMUEL HUMBERTO GONZALEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 326

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 327

AUTO APELADO 328

AUTO APELADO EN PROCESO QUE SE LE SIGUE A HIPOLITO ARCO PEÑA Y ALDO FLACO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE FELIX MONTENEGRO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 328

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 330

AUTO APELADO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CARLOS MANUEL LEDEZMA GUTIÉRREZ, OLIVARREN ONASSIS Y WILSON OMAR MOSQUERA MENA, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECINUEVE (19 DE JULIO DE DOS MIL (2,000). . . . 330

AUTO APELADO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SINDICADO POR TENTATIVA DE HOMICIDIO Y POSESIÓN ILÍCITA DE ARMAS DE FUEGO EN PERJUICIO DE ERIC BUITRAGO. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 335

AUTO DE SOBRESEIMIENTO APELADO 339

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA FISCAL SEGUNDA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ CONTRA LA RESOLUCIÓN PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR, QUE SOBRESEE DEFINITIVAMENTE A PETER ANTHONY BYRNE DEL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE MAXIM CONROY. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 339

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 342

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE LUIS ENRIQUE SEMPERO CÓRDOBA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, CINCO (5) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 342

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO EN EL PROCESO PENAL QUE SE LE SIGUE A SILVINA PAUL, MONIQUE MONROSIER Y ALEXIS PIERRE JEANTY, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 344

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A ALFREDO NAVARRO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL, COMETIDO EN PERJUICIO DEL MENOR JUAN RICARDO MEDINA AMAYA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, ONCE (11) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 346

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE ENRIQUE YAU YAU, CONDENADO COMO AUTOR DEL DELITO DE INJURIA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DOCE (12) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 347

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SANTIAGO BEJERANO BEJERANO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 348

RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARCOS ALVARADO PRADA MEDINA SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). . . . 349

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ANTONIO OSORIO ABREGO, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) JULIO DE DOS MIL (2,000). 350

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA LA SENTENCIA 29 DE DICIEMBRE DE 1999, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUE ABSOLVIÓ A RICAURTER VARGAS, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 352

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA INTERPUESTO A FAVOR DE CARLOS IVAN AYALA SHEFFER SANCIONADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL EN PERJUICIO DE MITALIA GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL 2000). 353

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A BELEN ITZEL JUSTAVINO Y OTRO, SINDICADOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 354

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JULIO M. MEDINA LANKER, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 356

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOSÉ MANUEL LEE ALVARADO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, (DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 357

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO A FAVOR DE GASPAR DUNKKLEY NAVARRO EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE ELSA MARÍA REINA DE TAPIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 358

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA LICDA. MIRIAM JAÉN DE SALINAS EN REPRESENTACIÓN DE RAMON GAITAN SOLIS POR LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMA, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 360

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE HORTENCIO GALLARDO, SINDICADO POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 361

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO A FAVOR DE JORGE L. NELSON AYALA EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ECO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . 365

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO PRESENTADO A FAVOR DE WILFREDO VARGAS JAÉN, EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE MAXIMINO RODRÍGUEZ AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 365

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDILBERTO DEL CID DUEÑAS SINDICADO POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 366

RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS A FAVOR DE VICTORIANO MINOTA ANGULO Y DE JUAN CARLOS PAREDES, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 375

RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A PLÁCIDO A. CAMPINES PINO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZALEZ R. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 378

SE ORDENA LA CORRECCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA LICENCIADA MIRIAM H. JAÉN DE SALINAS, A FAVOR DE ARIEL ACEVEDO, Y CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE OCTUBRE DE 1999, EMITIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO E. GONZALEZ R. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 380

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARIA PIEDAD URIBE MARIN, SINDICADA POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 381

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE BYRON MENDOZA ARIAS, SINDICADO POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 383

ACLARACIÓN DE SENTENCIA FORMULADA POR LA DEFENSA TÉCNICA DE DIOMAR ANTONIO POLO SOTO, SINDICADO POR DELITO DE HURTO CON ABUSO DE CONFIANZA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 387

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FERNANDO DÍAZ HERAZO (A) EDUARDO RÍOS SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD Y EL PUDOR SEXUAL. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 388

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A YOLANDA YEPES Y ANDRÉS SING YEPES, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 390

RECURSO DE CASACION DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD PROMOVIDO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARTA GONZÁLEZ POR DELITO DE MALTRATO DE MENORES EN PERJUICIO DE VICTOR CHAVEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 391

CASACIÓN INTERPUESTA A FAVOR DE JUAN DIONISIO TREJOS RUÍZ EN PROCESO QUE SE LE

SIGUE POR DELITO DE LESIONES PERSONALES CON RESULTADO MUERTE EN PERJUICIO DE JESÚS FRANCISCO AGUILAR CHAVEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 393

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTA A FAVOR DE PASTOR RÍOS GONZÁLEZ, EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 394

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO A FAVOR DE YIMMI SERRANO EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE MIGUEL DE GRACIA ARMUELLES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 395

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE MILTON EDEMIR ZAMBRANO CASTILLO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 396

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARTIN AVECILLA SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 398

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARTIN ORTEGA, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 400

INCIDENTE 401

RECURSO DE APELACIÓN DEL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO PROMOVIDO POR EL DR. MANUEL GARCÍA ALMENGOR DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDUARDO BERBEY POR DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA COMETIDO EN PERJUICIO DE AIDELENA PEREIRA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 401

INCIDENTE DE NULIDAD DE LO ACTUADO POR FALTA DE COMPETENCIA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDUARDO BERBEY POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE AIDELENA PEREIRA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . . 402

RECURSO DE HECHO 405

RECURSO DE HECHO PRESENTADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE SAYURI HERRERA, SINDICADA POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 405

RECURSO DE REVISIÓN 406

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JORGE ENRIQUE VADILLO PAZ, SANCIONADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 406

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO A FAVOR DE VICTOR MANUEL GARCIA SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE EN PERJUICIO DE LUIS ENRIQUE FILLIPS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 407

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO A FAVOR DE EDUARDO VILLARREAL GARCÍA, SINDICADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 409

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO A FAVOR DE SEVERINO SOSA PEÑA, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTISIETE DE JULIO (27) DE DOS MIL (2000). 410

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FRANCISCO ELÍAS ATENCIO FLORES, SANCIONADO POR UN DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO E. GONZÁLEZ R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 410

SENTENCIA APELADA 411

SENTENCIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOHNNY ALEXIS RODRIGUEZ RAMOS Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, ONCE (11) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 411

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GONZALO GONZÁLEZ QUIRÓZ Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO), Y EL PATRIMONIO, ETC. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2,000). 418

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDWIN LINARES VARGAS POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE RUBEN OSES SARMIENTO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 425

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN 428

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACION INTERPUESTA A FAVOR DE ANGEL DNVER SAMUDIO, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALBERTO CUESTA ESPINOZA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 428

SUSTITUCIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA 430

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR A FAVOR DE EDGAR YOVANI VILLAREAL DE LEÓN, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE AGAPITO NÚÑEZ CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 430

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE PETER BYRNE, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE MAXIM CONROY. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 431

TRIBUNAL DE INSTANCIA 432

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN EN VIRTUD DE DENUNCIA PENAL INTERPUESTA POR ROBERTO GARCÍA ALONSO, POR LA COMISIÓN DE HECHOS ARBITRARIOS EN LOS QUE ESTÁ PRESUNTAMENTE INVOLUCRADO ALEJANDRO MONCADA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . . 432

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL 434

CONTENCIOSO DE INTERPRETACIÓN 435

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS ALBERTO PALACIOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL ALCANCE Y SENTIDO DEL ACTO CONTENIDO EN EL OFICIO Q-166 DE 1° DE DICIEMBRE DE 1999, SUSCRITO POR LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE LA SEÑORA MIRLO ERIKA GUERRA LONDOÑO.

MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 435

PETICION DE PRONUNCIAMIENTO, INTERPUESTO POR LA LCDA. LARISSA LANDAU, EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA VIABILIDAD JURÍDICA DEL CONTRATO N°98-93 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y EL ARQUITECTO GUILLERMO RODRIGUEZ, PARA LA INSPECCIÓN DE LA ADICIÓN Y REFORMAS DE LOS EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y BIBLIOTECA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CERCA DE CICLÓN PARA EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 436

PETICION DE INTERPRETACION Y APRECIACION DE VALIDEZ, INTERPUESTA POR EL LCDO. JORGE AGUILERA EN REPRESENTACIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE PREJUDICIALMENTE SOBRE EL CONTENIDO DEL NUMERAL 48 DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO MUNICIPAL N°136 DE 19 DE AGOSTO DE 1996 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N°23, 135 DE 2 DE OCTUBRE DE 1996, SOBRE EL RÉGIMEN MUNICIPAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 439

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 442

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ELIZABETH MORENO TOROK EN REPRESENTACIÓN DE CARMEN DE VERGARA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 029 DE 7 DE FEBRERO DE 2000, SUSCRITA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 442

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA BARRANCOS Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE HENRY PINO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ORDEN CONTENIDA EN LA NOTA DE 10 DE MARZO DEL 2000, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE OPERACIONES MARÍTIMAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 443

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, EN REPRESENTACIÓN DE BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN DRP N° 93-98 DE 4 DE MARZO DE 1998 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 444

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. RAÚL MALDONADO LEARY, EN REPRESENTACIÓN DE ZUNILDA CAJIGA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DRH-591-97 DE 14 DE AGOSTO DE 1997, EXPEDIDA POR LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 450

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALEJANDRO PÉREZ, ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE IRMA ROSA CASTILLO DE QUINTERO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°1421-97 DNP DE 3 DE ABRIL DE 1997, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 454

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINSTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDISON ERNESTO ACEVEDO EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO JUAN MUÑOZ

PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 99-010-D DE 2 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 458

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GERARDO SIMEÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE OSVALDO ARTEMIO RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA NO. DP-DOPA-6115, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 459

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, PROMOVIDA POR EL LICENCIADO JOSÉ PÍO CASTILLERO EN REPRESENTACIÓN DE DIOMILA D. DE HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 220 DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, ONCE (11) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 461

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERIC SANTAMARÍA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JAVIER TORRES VARGAS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 034-2000, FECHADA EL 3 DE ABRIL DEL 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE AMBIENTE, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 462

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE NIDIA DE RIVADENEIRA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 070-2000(D), DE 15 DE ENERO DE 2000, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 463

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JERÓNIMO MEJÍA EN REPRESENTACIÓN DE BALBANEDA MEJÍA DE PÉREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN C.F.C. N° 3532 DEL 24 DE DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA COMISIÓN DE FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 464

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IRENE ÁBREGO, EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO ROBERTO BARRAZA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL ACTA DE PROCLAMACIÓN DEL RECTOR ELECTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNOLÓGICA DE PANAMÁ, INGENIERO HÉCTOR MONTEMAYOR, PARA EL PERÍODO 1998-2003, EMITIDA POR EL GRAN JURADO DE ELECCIONES DE DICHA UNIVERSIDAD Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 465

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROBINSON BERNAL PERALTA, EN REPRESENTACIÓN DE SANTA ISABEL CORTEZ CORTEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTARTIVO CONTENIDO EN LA RESOLCUIÓN NO. D.N. 031-99 DE 2 DE MARZO DE 1999, PROFERIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 470

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ GONZÁLO MONCADA LUNA, EN REPRESENTACIÓN DE RALKA INVESTMENT CORP., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 20-97 D.D. DE 10 DE OCTUBRE DE 1997, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 471

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. TEÓFANES LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ZACARIAS URRIOLA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°D.N.016 DE 26 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE LA REFORMA AGRARIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 474

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA PINZÓN, SANTOS & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE OLIVO AQUILES VANNUCHI, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°263-2000 DICTADA POR EL GERENTE GERERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 479

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA CLAUDIA ELBA BÁRCENAS EN REPRESENTACIÓN DE MARIO LUIS BÁRCENAS PÉREZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 180 DE 30 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 480

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO MARIN, EN REPRESENTACIÓN DE GUSTAVO NELSON COLLADO MILAN, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO. 28 DE 7 DE FEBRERO DE 2000, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 481

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SONIA ALMENGOR, EN REPRESENTACIÓN DE RICAURTER NOEL PITTI MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 80 DE 30 DE MARZO DE 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA (ARI), EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 482

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ICAZA, GONZALEZ-RUIZ Y ALEMAN, EN REPRESENTACIÓN DE DUWEST PANAMA S. A. (ANTES AGROQUIMICOS INTEGRADOS DE CENTROAMERICA S. A.), PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 210-1168 DEL 30 DE JULIO DE 1997, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 483

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VENUS CÁRDENAS, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR HUGO CUÉLLAR, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 2-98 D. G. DE 19 DE ENERO DE 1998, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ,

VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 489

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CRISTOBAL GARRIDO ROMERO EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL MEMORÁNDUM NO. 201-139 DE 15 DE MARZO DE 1997, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, LA RESOLUCIÓN NO. 217-01-118 DE 14 DE JULIO DE 1997, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE HERRERA, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 498

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RODRIGO SÁNCHEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CENTRO ELECTROMUEBLES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 730-96D.G., DE 24 DE MAYO DE 1996, Y LA RESOLUCIÓN DE 26 DE ABRIL DE 1999, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARICIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 502

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BASILIO CHONG, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SAÚL QUIRÓZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 222 DE 1° DE ABRIL DE 2000, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 504

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS R. AYALA EN REPRESENTACIÓN DE IVETH NAVAS DE CHIRU, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 022-2000 DE 3 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL AMBIENTE, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 505

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS R. AYALA EN REPRESENTACIÓN DE EMELDA VISSUETTI, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 024-2000 DE 3 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL AMBIENTE, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . . . 506

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ DUTARY, EN REPRESENTACIÓN DE CLAUDIO CORONADO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 089-98 DE 14 DE AGOSTO DE 1998, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 507

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VICENTE ARCHIBOLD, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DGP/131/98 DE 1° DE JULIO DE 1998, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL FERROCARRIL DE PANAMÁ, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 508

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 508

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. ALMA L. CORTÉS A., EN REPRESENTACIÓN DE IRVING ARIEL TORRES NIETO, PARA QUE SE

DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO.2 DEL 7 DE FEBERO DE 2000, POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CUARENTENA AGROPECUARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO EL COBRO DE UNOS SERVICIOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, 3 TRES DE JULIO DE DOS MIL (2000). 508

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS MOORE EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ACUERDOS NOS. 16 DE 14 DE ABRIL DE 1998, EL NO. 21 DE 16 DE JUNIO DE 1998, AMBOS EXPEDIDOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, (APROBACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ENTRE LA EMPRESA SUFI INTERNATIONAL (PANAMÁ) Y EL MUNICIPIO DE LA CHORRERA). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 510

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LOPEZ, EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METROOESTE S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDI NO. 142 DE 10 DE DICIEMBRE DE 1998, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 511

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUÍ, S. A. Y LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METROOESTE, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LAS PALABRAS 'ELÉCTRICIDAD' CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO PRIMERO, EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL PARÁGRAFO DEL CÓDIGO 11.25.35 DEL ARTÍCULO SEGUNDO, EN EL LITERAL D) DEL CÓDIGO 11.25.65 DEL ARTÍCULO TERCERO, LOS NUMERALES 1.1.1 Y 1.2 DEL PARÁGRAFO DEL CÓDIGO 11.25.35. DEL ARTÍCULO SEGUNDO, EL LITERAL "D.1" EL CÓDIGO 11.25.65 DEL ARTÍCULO TERCERO, DEL ACUERDO N° 19 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 1998, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARÚ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 512

LA FIRMA DE ABOGADOS MORGAN Y MORGAN, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ELOY GRIMALDOS MÉNDEZ Y OTRO, HA INTERPUESTO DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 209-98, DE 19 DE OCTUBRE DE 1998, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 514

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. GABRIEL MARTÍNES, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO N°44 DE 4 DE MARZO DE 1998, DICTADO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 516

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICDA. ALMA CORTÉS EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 117 DE 18 DE AGOSTO DE 1998, EXPEDIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 519

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDGAR ACOSTA, EN REPRESENTACIÓN DE LA REPRESENTANTE DEL CORREGIMIENTO DE RAMBALA, SEÑORA GRACIELA GUTIÉRREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 10 DE MAYO DE 2000, MEDIANTE LA QUE EL CONSEJO PROVINCIAL DE BOCAS DEL TORO CELEBRÓ ELECCIONES PARA ELEGIR LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2000 AL 31 DE AGOSTO DEL 2001. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 524

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS RUBEN MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO NO. 12 DE 17 DE ABRIL DE 1991, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 525

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA L. CORTÉS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PROCESADORA MARPESCA, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA NO. DM-1069-2000 DE 29 DE MAYO DE 2000 DICTADA POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RELACIONADA CON LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS FITOZOOSANITARIAS DE IMPORTACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 526

IMPEDIMENTO 527

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARCELINO JAÉN EN REPRESENTACIÓN DE SUSANA RICHA DE TORRIJOS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 99-028-D DE 2 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 527

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA GARCÍA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE WIL ALFREDO GORDON, CONTRA LA SENTENCIA SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: WIL ALFREDO GORDON -VS-NAVPAN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000) 528

INCIDENTE 529

INCIDENTE INTERPUESTO POR LA FIRMA MONCADA & MONCADA EN REPRESENTACIÓN DE ANIBAL SANCHEZ GUARDIA, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA MONCADA Y MONCADA EN REPRESENTACIÓN DE ANÍBAL SÁNCHEZ GUARDIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 102-98 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1998, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE REFORMA AGRARIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 529

JURISDICCIÓN COACTIVA 531

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HUMBERTO MOSQUERA EN REPRESENTACIÓN DE PASTOR BATISTA MARCIAGA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ LE SIGUE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 531

INCIDENTE DE CAUDCIDAD EXTRAORDINARIA DE LA INSTANCIA, INTERPUESTA POR EL LCDO. RICARDO ACOSTA INSTURAÍN, EN REPRESENTACION DE EUCLIDES FUENTES ARROYO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMA, CASA MATRIZ, LE SIGUE A GABRIEL ZEBALLOS Y EUCLIDES FUENTES ARROYO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 532

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GABRIEL LAWSON EN REPRESENTACIÓN DE JULIO ALCEDO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO

DOS MIL (2000). 534

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GABRIEL LAWSON EN REPRESENTACIÓN DE JULIO ALCEDO VELARDE, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, LE SIGUE A HACIENDA HERRADURA, S. A. Y JULIO ALCEDO VELARDE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 537

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR ELA FIRMA BERRÍOS Y BERRÍOS EN REPRESENTACIÓN DE DORIS ENEIDA VEGA DE LOS RÍOS Y ERNESTO DE LOS RÍOS LOMBARDO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (SUCURSAL DE CHITRÉ). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 541

TERCERÍA COADYUVANTE INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PAOLO & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS DE LA CRUZ ECHEVARRÍA, ELVIA CERRUD SORIANO, GLORIELA MERCEDES PAOLO IVALDI, OMAR AMAT GONZÁLEZ, ARNOLDO DONALDO HERAZO Y HÉCTOR SÁNCHEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL LE SIGUE A LAS EMPRESAS DEL GRUPO AMADO. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 542

EXCEPCION DE PAGO, INTERPUESTA POR LA FIRMA VÍCTOR MÉNDEZ FÁBREGA & ASSOCIATES EN REPRESENTACIÓN DE J. YOUNG, S. A. Y JORGE YOUNG, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 546

TERCERÍA COADYUVANTE INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PAOLO & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS DE LA CRUZ ECHEVARRÍA, ELVIA CERRUD SORIANO, GLORIELA MERCEDES PAOLO IVALDI, OMAR AMAT GONZÁLEZ, ARNOLDO DONALDO HERAZO Y HÉCTOR SÁNCHEZ TEJADA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL LE SIGUE A LAS EMPRESAS DEL GRUPO AMADO. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 551

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LCDO. LUIS ANTONIO CARRASCO MORENO, EN REPRESENTACIÓN DE BERNARDO AVILA DEL CID, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO PANAMEÑO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (IFARHU), LE SIGUE A ROGELIO VAN HORN, BERNARDO AVILA DEL CID Y ADELICIA FERNANDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 555

EXCEPCION DE PRESCRIPCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. RITO TORRES, EN REPRESENTACIÓN DE MOISES FORERO CASTILLO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . 558

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 559

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ANÍBAL HERRERA PEÑA, EN REPRESENTACIÓN DE FRANCO SALGADO LASSO, CONTRA LA SENTENCIA DE 2 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: FRANCO SALGADO LASSO -VS- SEGURIDAD UNIDAD,S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 559

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RAMIRO GUERRA EN REPRESENTACIÓN DE SONIA CARABALLO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 15 DE MAYO DE 2000 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: YANNUS S. A. V. S. SONIA CARABALLO.

MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 561

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ROSAURA REYES EN REPRESENTACIÓN DEL ASENTAMIENTO CAMPESINO 11 DE OCTUBRE, CONTRA LA SENTENCIA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ARISTIDES CASTILLO Y OTROS -VS- ASENTAMIENTO CAMPESINO 11 DE OCTUBRE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 562

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SIXTO ABREGO EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO SILVERA, CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE AGOSTO DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ALBERTO SILVERA -VS- ASEGURADORA MUNDIAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 564

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ALVARO MUÑOZ FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ANTONIO AGUIRRE, CONTRA LA SENTENCIA DE 23 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CARLOS ANTONIO AGUIRRE VS CHIRIQUÍ LAND COMPANY Y/O PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 565

RECURSO DE CASACION LABORAL INTERPUESTO POR EL LICDO. CANDELARIO SANTANA VASQUEZ EN REPRESENTACION DE ARNOLD ELOY VASQUEZ CONTRA LA RESOLUCION DEL 29 DE MAYO DE 2000, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ARNOLD ELOY VASQUEZ VS PARTES DIESEL S. A. Y/O TALLER DIESEL S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 566

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTA POR EL LCDO. RICARDO STEVENS EN REPRESENTACIÓN DE WILLIAM TERAN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 2 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: WILLIAM TERAN -VS- YAPELO, S. A. O CLÍNICA EL CARMEN. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 569

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GASPAR DE PUY EN REPRESENTACIÓN DE JOYERIA LA ESPAÑOLA, S. A. CONTRA LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: DORA ELENA HART -VS- JOYERIA LA ESPAÑOLA,S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 573

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, ALEMÁN Y MORA EN REPRESENTACIÓN DE ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 13 DE ABRIL DE 2999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: BERTA GOFF QUINTERO, VIUDA DEL SEÑOR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ -VS- ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 573

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CÉSAR ELÍAS SANJUR, EN REPRESENTACIÓN DE ARMAR, S. A. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EL 9 DE MAYO DE 2000 POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MERCEDES RIVERA DE PÉREZ O MERCEDES RIVERA -VS- ARMAR, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). . 579

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ELÍAS IBARRA RUIZ, EN REPRESENTACIÓN DE PATRICIO HAWTHORNE STERLING, CONTRA LA SENTENCIA FECHADA EL 25 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO COMÚN LABORAL PATRICIO HAWTHORNE STERLING CONTRA COMPAÑÍA EL PASO Y/O NORA RODRÍGUEZ DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 584

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO BERNARDINO GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE ORIEL ERNESTO JARAMILLO, CONTRA LA SENTENCIA DE 16 DE NOVIEMBRE ED 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ORIEL ERNESTO JARAMILLO -VS- ARISTIDES DE ICAZA HIDALGO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 588

RECURSO DE CASACION LABORAL INTERPUESTO POR EL LCDO. CARLOS DEL CID EN REPRESENTACIÓN DE JOSE ALPIDIO JIMENEZ EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE 19 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JOSE ALPIDIO JIMENEZ VS. COMPAÑIA PANAMEÑA DE ACEITES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 590

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR CARLOS DEL CID EN REPRESENTACIÓN DE JORGE CANO PINILLA, CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JORGE CANO -VS- MARIA JUDITH CANO DE CHACON O MARIA JUDITH CANO CATTAN (LA MISMA PERSONA) DUEÑA DE LA FARMACIA BAHÍA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 595

RECURSO DE CASACION LABORAL INTERPUESTO POR EL LICDO. PEDRO A. CEDEÑO EN REPRESENTACION DE CHIRIQUI LAND COMPANY Y PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY LTD., CONTRA LA RESOLUCION DEL 22 DE JUNIO DE 2000, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EVANGELISTA RIOS VS CHIRIQUI LAND COMPANY Y PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 599

RECURSO DE HECHO 600

RECURSO DE HECHO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GABRIEL LAWSON EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS STANZIOLA, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A CENTRO INTERNACIONAL DE MUEBLES, S. A., ISAAC BLASSER ALEXIS STANZIOLA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 600

RECURSO DE HECHO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GABRIEL LAWSON EN REPRESENTACIÓN DE JULIO ALCEDO VELARDE, DENTRO DEL JUICIO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (CASA MATRIZ), LE SIGUE A LA HACIENDA LA HERRADURA, S. A. Y AL SR. JULIO ALCEDO VELARDE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000). 602

DEMANDA DE REPACIÓN DIRECTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS 603

DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS HERRERA MORÁN, EN REPRESENTACIÓN DE EDUCACION AVANZADA, S. A., POR DAÑOS Y PERJUICIOS, OCASIONADOS POR UNA MALA Y Y DEFICIENTE ADMINISTARCIÓN DE JUSTICIA, POR LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, CON SEDE EN PENONOMÉ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). . . . 604

TRIBUNAL DE INSTANCIA 604

INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, INTERPUESTA POR LICENCIADO MARCELINO JAÉN, EN REPRESENTACIÓN DE RIGOBERTO ENRIQUE PAREDES Y THILCIA ROBLES DE PAREDES, DENTRO DEL JUICIO POR COBRO COACTIVO QUE LES SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 604

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 606

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL 607

EXHORTO LIBRADO POR LA PROCURADURÍA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PIREO, REPÚBLICA DE GRECIA, PARA HACER ENTREGA DE DEMANDA CONTRA LA COMPAÑÍA "SKYDOME CORP." MAGISTRADO PONENTE: CESAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 607

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO PENAL DE CARTAGO, COSTA RICA, DENTRO DE LA CAUSA PENAL NO.99-20172-345-PE SEGUIDA CONTRA JAIME MORA SANDI, POR EL DELITO DE ESTAFA EN PERJUICIO DE WALTER ZUÑIGA MOLINA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 608

CARTA ROGATORIA 610

EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL No. 7 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, DENTRO DE LA CAUSA No. 607 CARATULADA "N.N. S/DELITO DE ACUSACIÓN PUBLICA QUE SE INSTRUYE EN CONTRA DE NORBERTO OSCAR BATTAGLIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 610

EXHORTO NO. 335-2000 EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NO. 2 DE RIBIERA, LA CORUÑA, ESPAÑA LIBRA EXHORTO DENTRO DE LOS AUTOS CIVILES DE MENOR CUANTIA INTERPUESTO POR TRI MARINE INTERNATIONAL (PTE) LTD, CONTRA JUAN RAMON REPARAZ MAIZA, BARONA PROPERTIES INC. Y TRANSATUB S. A. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 611

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO DE INSTRUCCION DEL TRIBUNAL DE GRAN INSTANCIA DE AGEN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA SEBASTIAN DA SOLEDADE. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 612

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 613

ELSA GRAHAM BARKERS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DEL ESTADO DE NUEVA YORK, CONDADO DE KINGS, EN LA CUAL DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE MANTIENE CON EL SEÑOR RICARDO ORTEGA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 613

JERARDO HERNANDEZ SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO PROFERIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE BERRIEN, ESTADO DE MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUE DISUELVE EL VINCULO MATRIMONIAL CON LA SEÑIRA LIZBETH OSIRIS HERNANDEZ. MAGISTRADA PONENTE MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 615

CAROLINA ESTHER GARCÍA IZOS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO NO. 98-03058 DICTADA POR LA CORTE DE DISTRITO DEL CONDADO DE TRAVIS DISTRITO JUDICIAL NO.126 DE TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA EN LA CUAL DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE MANTIENE CON EL SEÑOR CÉSAR ANTONIO SENTMAT ROSAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 616

ENRIQUE ALBERTO ORTEGA MORGAN SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA, DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DEL ESTADO DE NUEVA YORK, CONDADO DE KINGS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR LA CUAL SE DECLARA DISUELTA LA UNIÓN MARITAL QUE MANTIENE CON LA SEÑORA CHARLETTE PETULIA ORTEGA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 618

EXHORTOS 620

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NO. 1 DE MAJADAHONDA MADRID, ESPAÑA, SOLICITA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PARA QUE SE RECIBA DECLARACIÓN A FRANCISCO LAJARRAGA LÓPEZ DE ARROYABE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 620

EXHORTO PROMOVIDO POR EL JUZGADO DE LETRA SEGUNDO DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ, REPÚBLICA DE HONDURAS, EN RELACIÓN A LA CAUSA INSTRUIDA CONTRA JUAN CARLOS RIVERA AGUILAR Y OTROS, POR EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO EN EL DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JESÚS ADOLFO MANZANARES MOLINA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 621

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL N°10, SECRETARÍA 19, DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA DE ARGENTINA, SOLICITA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL, DENTRO DE LOS AUTOS CARATULADOS "CONSTRUCTORA EMBALSE CASA DE PIEDRA S. A. CONTRA ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE ECONOMÍA (DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA). MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 622

JUZGADO DÉCIMO PENAL DE PICHINCHA, QUITO, ECUADOR, SOLICITA LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DENTRO DEL JUICIO PENAL QUE SE SIGUE POR LA MUERTE DE RICARDO ARTURO JARRIN JARRIN (Q.E.P.D.). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 624

EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA NACIONAL EN LO CRIMINAL NO.8 DE BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA DENTRO DE LOS AUTOS CARATULADOS NÚMERO 48.984/99 RELATIVO A LA EMPRESA INVERSABE, S. A. CONTRA VEN YORKA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 626

CARTA ROGATORIA S/N DE 10 DE FEBRERO DE 2000 LIBRADA POR LA FISCALÍA DÉCIMA ADSCRITA A LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, PROCESO NO.224393. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 628

EXHORTO LIBRADO POR LA OFICINA DE EJECUCIONES DEL TRIBUNAL DEL DISTRITO DE LA SARINE DEL CANTÓN DE FRIBOURG, SUIZA, PARA QUE SE EFECTÚE UNA NOTIFICACIÓN A CORNELIS DE JONG. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 630

EXHORTO LIBRADO POR EL FISCAL SECCIONAL CIENTO VEINTUNO - DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE ALI VALLE - REPÚBLICA DE COLOMBIA DENTRO DEL PROCESO QUE SE SIGUE CONTRA MANUEL BENITO LLANOS, IVAN DE JESÚS ARBELAEZ AGUIERRE, GUILLERMO MEJÍA CARVAJAL, HUMBERTO MEJÍA VELÉZ Y ANTONIO LOZANO ARANA DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDA POR EL DELITO DE USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL

(2000). 631

RECURSO DE ANULACIÓN 633

PUNTA BARCO RESORTS, SOLICITA LA ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL PROFERIDO EL DÍA 4 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO DENTRO DEL PROCESO QUE LA SOCIEDAD DISTINCTIVE POOL CONSTRUCTION, S. A. SIGUE CONTRA PUNTA BARCO RESORTS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 633

TRIBUNAL DE INSTANCIA 636

DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR RENE C. QUEZADA M. CONTRA EL LICENCIADO EUDARDO BADILLO P. POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS (2000). 636

DENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA FELIPA ESTHER FLASHY CONTRA EL LICENCIADO RUDESINDO PEREA ARRIETA, POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 638

BUSSIERE CAROLE JEAN INTEPONE DENUNCIA POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO EN CONTRA DEL LICENCIADO RIGOBERTO A. VERGARA C. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 639

DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR HÉCTOR F. LÓPEZ BARRIOS CONTRA EL LICENCIADO LUIS BARRÍA POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 640

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL, DE VALPARAISO, CHILE, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO CARATULADO "COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, S. A.". MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 640

ACLARACIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DE LA SEÑORA YADIRA JIMÉNES ORTEGA ANTE EL TRIBUNAL DE HONOR POR FALTAS A LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO CONTRA LA LICENCIADA MARICELA CEBALLOS DE RUDAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000). 641

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

JULIO DE 2000

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADA POR LA LICDA. ALMA CORTES, EN REPRESENTACIÓN DE MARPESCA S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL RECHAZO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA FITO-ZOOSANITARIA DE IMPORTACIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE SALUD ANIMAL DEL MIDA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la licenciada Alma L. Cortes, contra la orden de no hacer contenida en la resolución de 13 de enero de 2000 (fs. 2 a 4), dictada por la Dirección Nacional de Salud Animal, que rechaza la Solicitud de Importación o Licencia Fito-Sanitaria de 30,000 kilos de camarones congelados, presentada por PROCESADORA MARPESCA, S. A.

De la lectura del libelo de la demanda se advierte que la disconformidad del actor se dirige a la negativa de la Dirección Nacional de Salud Animal para acceder a su solicitud de importación de camarones y, en ese sentido se señala, en primer término, que la supuesta orden de no hacer impugnada no es un acto susceptible de ser atacado por medio de una acción de amparo, pues no se trata de un mandato imperativo para dejar de hacer algo sino de una decisión pronunciada en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales que regulan la materia.

El Dr. JOSE DOLORES MOSCOTE, al referirse a lo que debía entenderse por una orden de hacer o de no hacer, de aquellas contra las que podría recurrirse en amparo se preguntaba y señalaba lo siguiente:

> **¿Qué es una 'orden de hacer o no hacer' que al tenor del artículo 189 de la constitución, dé derecho al recurso de amparo?. Si las palabras se toman en su recto, lógico y natural sentido, no puede ser otra cosa que el mandato emanado de una voluntad arbitraria dirigido a procurar de parte de aquella a quien se impone la ejecución o la no ejecución de un acto del cual resulte disminuido con el goce de algún derecho que la constitución le reconoce y garantiza." (MOSCOTE, José Dolores, Instituciones de Garantía, (Título XV de la Consititución), Edit. Imprenta Nacional, Panamá 1943, p.53).**

En ese orden de ideas, basta leer los hechos en que se fundamenta la acción propuesta para apreciar que lo que se pretende es que a través de esta acción constitucional se examinen cuestiones relativas a la valoración de la documentación aportada por la sociedad solicitante, y la aplicación e interpretación de las normas legales aplicables, posibilidad que resulta inadmisible por cuanto que, como lo ha señalado en numerosas ocasiones esta Corporación, la acción de amparo no es la vía idónea para debatir cuestiones de carácter legal, pues ello "traería como consecuencia desvirtuar el propósito de esta acción autónoma y extraordinaria, que es la de tutelar los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución Nacional". (Registro Judicial, agosto de 1996, página 24-26).

En otro orden de ideas, al revisarse el expediente se aprecia que tratándose de una resolución de naturaleza administrativa, tal como lo reconoce el propio amparista (f.7), no se ha dado el agotamiento de la vía gubernativa. No existe constancia en autos, de que el señor DIONISIO LYMBERÓPULUS haya anunciado recurso de reconsideración, por lo cual se presume que no hizo uso de ese derecho, impidiendo así el agotamiento de la vía gubernativa cuyo último

recurso sería una demanda contencioso-administrativa ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Este criterio ha sido reiterado en innumerables ocasiones por esta Corporación de Justicia, tal como se aprecia en este fallo de 18 de noviembre de 1991:

> "En relación con el cuarto requisito de los actos sujetos a amparo, de que se hayan agotado todos los medios de impugnación que exige la ley, conocido como el principio de definitividad, es la propia legislación la que lo establece en el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, que dice lo siguiente:
>
> 'Solo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.'
>
> Esta misma posición se ha mantenido en relación con los actos administrativos, que requieren igualmente agotar todos los medios de impugnación, incluido el contencioso administrativo, para poder ejercerse la acción de amparo." (lo resaltado es nuestro)

Por último, esta Superioridad advierte que la resolución impugnada fue dictada el 13 de enero del año que transcurre, mientras que la presente acción fue presentada ante la Secretaría General de la Corte Suprema, el pasado 13 de junio, es decir 5 meses después de que fuera dictada la orden atacada, por lo que no se aprecia la existencia de un daño grave e inminente, tal y como lo exige el artículo 2606 del Código Judicial.

De lo que se deja dicho, se estima que la demanda sub examine resulta manifiestamente improcedente y conforme a lo establecido en el artículo 2611 del Código Judicial no debe ser acogida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la presente demanda de amparo de garantías constitucionales.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RORÍGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR CABLE & WIRELESS PANAMÁ S.A, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-6-N° 20-2000 DE 9 DE MAYO DE 2000, PROFERIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 6. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada Lizza Marie Jaén, en nombre y representación de MARTA DE BERMÚDEZ en su condición de apoderada general de la empresa CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S. A., ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Sentencia PJ-6-N° 20-2000, fallo oral inmediato de fecha 9 de mayo de 2000, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión No. 6 de Panamá.

Admitido el amparo, se solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación a esta Superioridad o en su lugar un informe acerca de los hechos materia de esta acción.

En atención a lo anterior, la Presidenta de la Junta de Conciliación y Decisión No. 6, Licenciada Maritza E. González Madrid, envió a esta Superioridad el informe visible a fs. 43-44 del expediente principal, así como el cuadernillo contentivo del proceso laboral instaurado por EVIS F. NASH contra POLY SERVICIOS, S.A y CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A

En la sentencia impugnada, la Junta de Conciliación y Decisión No. 6 resolvió condenar a CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A de las pretensiones en su contra y fundamentó su decisión de la siguiente manera:

> "Ahora bien, en la presente controversia laboral, esta Junta considera conforme a las pruebas que le han sido presentada, que aunque la demandada sólo sea Cable & Wireless, Panamá, S.A, empresa para la cual el trabajador afirma no haber recibido salario alguno o haber laborado para ella, ésta es solidariamente responsable con Poly Servicios, S.A., esto, en su calidad de Contratista y subcontratista respectivamente.
>
> Según el artículo 89 del Código de Trabajo, por su solidaridad ambas empresas son responsables de cancelar al trabajador las prestaciones laborales correspondientes, ya que ha sido acreditada la prestación del servicio a Poly Servicios, S.A., por lo que se presume la existencia de la relación laboral, así como se presume que la misma terminó por despido injustificado, al no poder probarse lo contrario".(fs. 34-36 del expediente principal).

La apoderada judicial de la amparista manifestó que la orden atacada es violatoria del artículo 32 de la Constitución Nacional y en los hechos de la demanda señaló:

> "PRIMERO: Mediante escrito presentado el 12 de octubre de 1999, en la Junta de Conciliación y Decisión de Panamá, EVIS F. NASH ESPINOZA, promovió demanda laboral contra POLY SERVICIOS, S.A. y CABLE & WIRELESS, PANAMÁ, S.A. pidiendo que se condenara solidariamente a ambas a pagarle la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO BALBOAS CON 45/100 (B/.895.45), en concepto de indemnización por haberlo despedido injustificadamente, el preaviso, los derechos adquiridos, los intereses legales y las costas del proceso.
>
> SEGUNDO: El 31 de marzo de 2000, la Dirección General de la Junta de Conciliación y Decisión señala la fecha de audiencia para el día 9 de mayo de 2000.
>
> TERCERO: La suscrita Licenciada Lizza Marie Jaén, el día veinticuatro (24) de abril de 2000, a las doce y cuarenta y cinco de la tarde (12:45 p.m) fui notificada de la fecha de audiencia, en mi condición de apoderada de CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S. A.
>
> CUARTO: El día 2 de mayo de 2000 el representante del demandante el Licenciado JULIO CESAR ACOSTA, presento (sic) desistimiento de la demanda en contra de POLY SERVICIOS, S.A., lo cual fue con posterioridad a la notificación de la fecha de audiencia.
> ...
> SEXTO: El día 3 de mayo de 2000, mediante Edicto No. 2858-DG-SJD-00, se pone en conocimiento a las partes que en el proceso contra POLY SERVICIOS, S.A. y CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., la Junta de Conciliación y Decisión No. 5, acepta el desistimiento presentado por la parte actora de la demanda contra POLY SERVICIOS, S.A. y continuaba el proceso interpuesto por EVIS FERNANDO NASH ESPINOZA

contra CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A.

SÉPTIMO: Esta actuación de la junta es una clara violación al debido proceso y a los artículos 942 y 943 del Código de Trabajo ...
...
NOVENO: Cuando anuncie (sic) la EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO solicité que se practicaran dos (2) inspecciones oculares, la primera a la planilla, a los libros y talonarios de cheques de Cable & Wireless Panamá, S.A. y la otra al departamento de personal para verificar si el señor EVIS FERNANDO NASH ESPINOZA laboró en la empresa y si existía un contrato de trabajo entre el demandante y mi representada Cable & Wireless Panamá, S.A. Cabe señalar que en el acto de audiencia del día 9 de mayo de 2000, ratifiqué las pruebas presentadas con la contestación de la demanda.

DÉCIMO: La juzgadora no evacuó las pruebas solicitas (sic) en la EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO y ratificadas en el acto de audiencia, dejando a mí (sic) representada en un estada (sic) de indefensión".

La parte actora considera que la violación al debido proceso se produjo, al negarse a su representada la posibilidad de aportar pruebas en favor de su pretensión, violando su derecho a la defensa y el principio de contradicción, que garantiza a las partes de un proceso el derecho a ser escuchadas.

Por otro lado, a juicio de la actora, "para que una empresa sea considerada solidariamente responsable deben estar demandadas al mismo tiempo o por separado, pero probando la subordinación jurídica y la dependencia económica y en las pruebas aportada (sic) por la parte demandante, sólo existían talonarios de cheques expedidos por la empresa POLY SERVICIOS, S. A., documentos que no pueden ser aceptados por mi representada".

Encontrándose el presente negocio en estado de resolver, el Pleno advierte que lo que se persigue con la presente acción extraordinaria es que se examine la actuación laboral ya decidida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6 en la sentencia atacada.

Observa el Pleno, que el punto materia de controversia en el presente negocio lo es el juicio externado por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, no así la garantía constitucional del debido proceso legal alegada.

El Pleno de esta Corporación en forma reiterativa se ha pronunciado, en el sentido de que los posibles errores de juicio cometidos por el juez en la interpretación de las disposiciones legales aplicables, no son susceptibles de reparos mediante el ejercicio de la acción constitucional de amparo porque ello convertiría al tribunal que conoce de este tipo de demanda en una instancia más del proceso, lo que resulta incompatible con la finalidad del amparo, cuyo objetivo es el de obtener la invalidación de un acto que afecta al impugnante por ser violatorio de una garantía constitucional.

La no viabilidad del amparo como remedio constitucional extraordinario, se debe en este caso en particular a que se está utilizando para que la Corte revise circunstancias propias de la actividad del juez, tales como la valoración probatoria que desempeñó la Junta para resolver el presente proceso y, "el examen probatorio y el valor que al caudal de pruebas le otorga el juzgador, no tiene que ver con violaciones a garantías constitucionales" (Fallo de 4 de marzo de 1994, Registro Judicial, pág. 4).

En este sentido, la sentencia atacada, alude a las diversas pruebas presentadas en el proceso laboral bajo estudio, y el análisis y apreciación de las mismas se ajustó a las pruebas conducentes en relación a los hechos materia del proceso mencionado.

Ante tales circunstancias, esta Superioridad considera que la demanda bajo estudio resulta contraria a la naturaleza de este recurso constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías interpuesta por la Licda. Lizza Marie Jaén, en nombre y representación de CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A,

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ROGELIO A. FABREGA Z.

Por no compartir la decisión del proyecto respetuosamnete salvo mi voto. La razón de este salvamento estriba en que, a mi juicio, el amparo debió haber sido admitido y fallado en el fondo por cuanto constituye materia constitucional, toda vez que el derecho a proponer pruebas que deben ser practicadas en caso de que sean idóneas con arreglo al ordenamiento procesal, forma parte garantía del debido proceso, como ha quedado dicho.

Panamá, 6 de julio de 2000.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR JAEN Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACION, JOSE SEBASTIAN MARTINEZ CORDOBA Y DEISA DE HERNANDEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. 199-99 DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Jaén y Asociados, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema, demanda de amparo de garantías constitucionales a favor de los señores JOSÉ SEBASTIÁN MARTÍNEZ CÓRDOBA y DEISA LIBIA DE HERNÁNDEZ contra la orden de hacer contenida en Resolución #199-99 de 3 de diciembre de 1999, emitida por el Ministro de Vivienda.

Los hechos que fundan el negocio se sintetizan en que los demandantes viven en los lotes #F-13 y #F-14 respectivamente, ubicados en calle La Loma, Barriada Omar Torrijos -Área Revertida- del Distrito de Arraiján.

Que el señor MARTÍNEZ CÓRDOBA reside en dicho lote desde 1996, y la señora DE HERNÁNDEZ desde 1997, cumpliendo los requerimientos que para el sector, había establecido el Ministerio de Vivienda, al igual que a la Sra. MARINA MONTERO CASTILLO, a quien se le asignó el lote #F-12, colindantes con los ya mencionados.

Que a ambos propietarios el M. I. V. I. les adjudicó sus lotes el 26 de

marzo de 1998, con la obligación de cancelar un canon de hipoteca al Banco Hipotecario Nacional, constituyendo ésta, una venta a título oneroso con retención de dominio; empero, sin perjuicio de esto, la Sra. MONTERO CASTILLO construyó un tanque séptico sin el consentimiento de los otros dos propietarios, tal como quedó demostrado en un Proceso Administrativo de Policía, y en informes de funcionarios subalternos del Ministerio de Vivienda que intervinieron.

Que el título que acreditó la tenencia legítima de los amparistas, establece limitaciones en el sentido de que dichos lotes no pueden ser vendidos, arrendados, hipotecado gravado, sin autorización previa del Banco.

Que la Sra. MARINA MONTERO construyó sobre los lotes ajenos, un tanque séptico y un pozo ciego contra la voluntad y derechos de los otros propietarios dos propietarios, modificando de paso, la dimensión de los lotes de los amparistas.

Que el Banco Hipotecario Nacional (B. H. N.), quien es el propietario de los lotes cuyos límites se disputan, desde el 26 de marzo de 1998, no conoce ni dio su consentimiento para las modificaciones que hizo el Ministro de Vivienda en la Resolución impugnada, quien -según el amparista- no tiene competencia para ello, complaciendo así la voluntad de la Sra. MARINA MONTERO, y violando los principios de seguridad jurídica y legalidad al abrogarse la competencia de volver a conocer asuntos que ya había delegado al B. H. N. y por tanto, fuera de su jurisdicción.

Que no se aplican los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 1973, porque no se está solucionando un problema social de una familia, sino legalizando un acto de despojo, en beneficio de un particular que tiene el mismo derecho que los amparistas, y el mismo espacio según los planos topográficos.

En cuanto a las garantías constitucionales infringidas, conceptuaron los impugnantes constitucionales que la Resolución Ministerial violó los artículos 17, 19 y 44 de la Constitución Nacional.

En cuanto al artículo 17 -deberes de las autoridades de la República-, consideró que, pese a ser de naturaleza programática, sí se produce su violación, porque la considera relacionada con la del artículo 19 íbidem.

Por su parte, este artículo -no habrá fueros ni privilegios ni discriminación por raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas- fue violado por la Resolución #199-99 de 3 de diciembre de 1999, porque legaliza las actuaciones de la Sra. MARINA MONTERO, de construir sobre terreno ajeno para aumentar su propio fundo, por lo que no existe ningún interés público.

Y la presunta infracción del artículo 44 de la Excerta Superior -garantía de la propiedad privada-, estriba en que la Resolución atacada, al correr tres -3- metros los límites de la Sra. MONTERO hacia los lotes de los amparistas, desconoció la garantía contenida en esta norma para los afectados, al constituirse esa Resolución en un acto de expropiación de la porción de terreno cedida a la Sra. MONTERO, en vez de ordenar la construcción sobre su propio terreno.

Que la decisión produce -a juicio de los amparistas- un fuero y un privilegio a favor de MARINA MONTERO, y desconoció los derechos de propiedad y las formalidades constitucionales para su modificación.

Que el derecho de los amparistas, también está amparado por el artículo 432 del Código Civil, atinente al derecho de todo poseedor a que su posesión sea respetada.

Por encontrarse el negocio en estado de admitir, es necesario verificar si el libelo cumple las formalidades establecidas en la ley, para esta clase de

proceso.

En ese sentido, se advierte que el escrito contentivo de la acción cumple las exigencias establecidas en el artículo 2610 del Código Judicial, pues menciona de manera expresa la orden impugnada, así como el nombre del servidor público que la impartió, expone debidamente los hechos en que funda su pretensión, señala las garantías constitucionales que considera infringidas, y cumple las formalidades generales que establece el artículo 654 de la misma excerta.

Empero, el negocio adolece de un defecto que impide su admisión, y el referente al no agotamiento de los medios impugnativos disponibles para poder acoger esta acción.

En efecto, los amparistas impugnaron la Resolución #199-99 de 3 de diciembre de 1999, emitida por el Ministro de Vivienda, por el que aumentó la superficie de terreno que se le había asignado a la Sra. MARINA MONTERO CASTILLO, en detrimento de los fundos de los amparistas, DEISA LIBIA DE HERNÁNDEZ y JOSÉ SEBASTIÁN MARTÍNEZ CÓRDOBA; e incluso, interpusieron recurso de reconsideración, que les fue adverso; con ello se agotó la vía gubernativa.

Empero, los amparistas tenían a su disposición el recurso contencioso-administrativo de plena jurisdicción, ante la Sala Tercera de esta Colegiatura, que no utilizaron, siendo que la Corte ha producido abundante jurisprudencia, que ha establecido la necesidad de utilizar ésta vía, para considerar cumplido lo normado en el numeral 2° del artículo 2606 del Código Judicial, que exige este requisito para la admisión de esta clase de negocio constitucional.

Por ello, no le queda más remedio a esta Superioridad, que no admitir el negocio.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por los señores JOSÉ SEBASTIÁN MARTÍNEZ CÓRDOBA y DEISA LIBIA DE HERNÁNDEZ, contra la Resolución #199-99 de 3 de diciembre de 1999, proferida por el Ministro de Vivienda.

Cópiese, Notifíquese y Archívese

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PLUBIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. RUBÉN JOSÉ LEVY, EN REPRESENTACIÓN DE ISAAC LALO GUERON CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 17 DE FEBRERO DE 2000, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado RUBÉN JOSÉ LEVY, en representación de ISAAC LALO GUERÓN, interpuso Amparo de Garantías Constitucionales contra los Magistrados del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, que profirieron la orden de hacer contendida en la Resolución de fecha 17 de febrero del 2000, mediante la cual se

autorizó la salida del país del niño VÍCTOR LALO MALCA para que acompañe a su madre, la señora LILIANA MALCA, durante los estudios de esta última que pretende llevar a cabo en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.

El amparista fundamenta su actuación en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Los señores Isaac Lalo Guerón y Liliana Malca contrajeron matrimonio civil y religioso.

SEGUNDO: Los señores Lalo y Malca obtuvieron su divorcio.

TERCERO: Producto del matrimonio anterior, nació el menor Víctor Lalo Malca, quien a la fecha cuenta con cinco (5) años de edad.

CUARTO: Al momento del divorcio, los padres del menor Víctor Lalo Malca acordaron, entre otras cosas,

1) Que la madre tendría la guarda y crianza del menor Víctor Lalo Malca, quien viviría habitualmente con ella, sin perjuicio del derecho del padre a un régimen de comunicación, de visitas y a la patria potestad compartida, de conformidad con lo que al respecto dispone el Código de la Familia y del Menor.

2) Que el padre tendría el derecho a un régimen de comunicación y visitas, según lo acordado por las partes y lo aprobado por el Tribunal respectivo.

3) Que en caso de trasladarse la madre a residir fuera de Panamá, debería obtener el consentimiento expreso del padre para llevar el hijo menor con ella. Esta cláusula también es aplicable al padre.

QUINTO: La señora Liliana Malca solicitó al Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia autorización para modificar el régimen de comunicación y visitas convenido entre la partes y aprobado por el tribunal; y para la salida del país del niño junto con su madre, alegando que requería llevar a cabo estudios universitarios por el término de dos (2) años.

SEXTO: El padre del niño Víctor Lalo Malca se opuso a tal modificación y a la referida salida del país del niño Víctor Lalo Malca.

SÉPTIMO: El Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia, mediante sentencia de fecha doce (12) de noviembre de 1999, resolvió no otorgar la referida autorización de salida del país del niño Víctor Lalo Malca.

OCTAVO: El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, al resolver recurso de apelación interpuesto por la peticionaria, decidió, con el salvamento de voto de su Presidente, autorizar la referida salida del país del menor Víctor Lalo Malca, sin establecer plazo alguno, es decir, sólo durante los estudios de su señora madre en los Estados Unidos.

NOVENO: Está probado en autos que los estudios que alega la madre del menor va a llevar a cabo en los Estados Unidos de América se pueden realizar en la República de Panamá, al menos en tres (3) distintas universidades privadas.

DÉCIMO: El señor Isaac Lalo Guerón cumple con todos sus deberes de padre para con su menor hijo, Víctor Lalo Malca, dentro de los que se encuentra el deber de alimentar a su menor hijo.

UNDÉCIMO: La sentencia del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia no está sujeta a recurso ordinario alguno ni al recurso extraordinario de casación.

DÉCIMOSEGUNDO: La sentencia del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia viola derechos y garantías de mis poderdantes puesto que los separa físicamente en forma indefinida e injustificada, en una edad en que el menor necesita del mayor aprovisionamiento afectivo de ambos progenitores, razón por la cual se requiere de su revocatoria inmediata, antes de que ella surta todos sus nocivos efectos.

DECIMOTERCERO: La sentencia impugnada mediante esta acción de amparo no ha surtido sus efectos, a pesar de que se encuentra ejecutoriada, porque la misma dispuso que ella no tendría efectos sino "...hasta tanto el Juzgado de primera instancia reglamente la comunicación y visitas entre el niño y su padre, para lo cual, la madre tendrá que presentar el calendario actualizado de estudios de ella y su hijo. Una vez reglamentada la comunicación y visitas entre el niño y su padre, COMUNÍQUESE la autorización de salida del país a la Dirección Nacional de Migración y Naturalización.

DECIMOCUARTO: El tribunal de primera instancia, es decir, el Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia, mediante sentencia de fecha treinta (30) de marzo del presente año, reglamentó el nuevo régimen de comunicación y visitas del niño con su padre, pero esta resolución ha sido apelada por ambas partes, es decir, por la madre y por el padre del menor Víctor Lalo Malca".

Al interponer la demanda de amparo de garantías constitucionales, el amparista señaló que se violaron los artículos 52, 55 y 17 de la Constitución Nacional, por el hecho de que la salud física, mental y moral de un niño menor no puede protegerse a larga distancia. La simple comunicación telefónica, vía internet o epistolar no es un medio idóneo para que un padre ejerza su derecho, que al mismo tiempo es un deber, de proteger la salud de su hijo menor.

Señala el amparista que la orden de hacer acusada viola, en concepto de violación directa, por omisión, el artículo 52 de la Carta Fundamental, toda vez que los estudios que alega la peticionaria quiere llevar a cabo en el exterior, se imparten al menos en dos distintas universidades privadas en la República de Panamá.

Por otro lado, argumenta el apoderado judicial de ISAAC LALO GUERÓN, Licenciado RUBÉN LEVY, que la orden cuya revocatoria se pide en la presente acción constitucional, autorizó la salida del país sin término fijo, es decir, señalando que era durante los estudios de la madre, a pesar de que la petición original, dirigida al tribunal de primera instancia, era sólo por el término de dos (2) años que estimó la peticionaria durarían sus estudios en el exterior.

Referente al artículo 55 de la Constitución que invoca el recurrente en amparo, fundamenta su disconformidad en el hecho que la obligación de alimentar no requiere la presencia del padre obligado a prestar los alimentos. Sin embargo, la obligación de educar y de proteger no puede cumplirse a distancia.

Sostiene que los estudios que se alega se pretenden llevar a cabo en el extranjero no son necesarios para salvaguardar el interés superior del menor; menos aún cuando los mismos pueden llevarse a cabo, en idénticas condiciones, en la República de Panamá.

Continúa expresando el amparista que, si bien los estudios de la madre en el exterior redundarán, a la postre, en mejorar la condición del hijo menor, esto no debe permitirse en perjuicio del menor mismo y de su padre, al verse privados ambos de la cercanía que mantendrían en la República de Panamá, aún en la

situación de divorcio y separación que viven ambos padres.

Al resolver la salida del país del menor junto a su madre, para realizar estudios por término indefinido, el acto acusado ha violado, en concepto de violación directa, por omisión, la norma constitucional que obliga al padre a alimentar, educar y proteger a su hijo menor, lo que a su vez, constituye un deber y un derecho del padre y un derecho del hijo menor.

Finalmente el amparista citó como norma constitucional infringida el artículo 17, que a pesar como ha dicho el Pleno de la Corte es de naturaleza programática, sólo es susceptible de violación cuando se cita en relación con otra norma o normas que establezcan derechos fundamentales objetivos, como son los artículos 52 y 55 de la Constitución Nacional, por lo que ha sido violada, en concepto de violación directa, por omisión, el artículo 17 de la Constitución, en la medida en que la orden acusada no aseguró la efectividad de los derechos fundamentales del señor LALO GUERÓN así como el menor VÍCTOR LALO MALCA.

Concluye el amparista expresando que la orden acusada es más grave aún, en la medida en que lo que determinará el regreso al país del menor VÍCTOR LALO MALCA es la cesación de estudios de su madre, lo que, a la postre, lo que significa que si tales estudios se prolongan indefinidamente en el tiempo, entonces la autorización se extendería también en forma indefinida, así como se impondría que el padre del menor haga un esfuerzo fuera de lo común, tanto en lo económico como en lo físico, para mantenerse en contacto personal con su hijo menor y cumplir así con sus deberes de padre y permitir que su hijo disfrute de este derecho fundamental.

En otro aspecto, la señora LILIANA MALCA HOLGUIN otorgó poder a la Licenciada MARÍA EDUARDA CÓRDOBA CHEN, con la finalidad de que la represente como Tercero en el presente proceso de Amparo de Garantías Constitucionales, por lo que en el escrito de oposición de la mencionada letrada, en las consideraciones de derecho para oponerse a la demanda de amparo, argumentó en síntesis que, esta acción fue propuesta casi tres meses después de haberse dictado el fallo recurrido, el cual data desde el 17 de febrero del 2000, buscando así dilatar y retardar la pronta salida del menor y su poderdante.

También sostiene la apoderada judicial de la madre del menor VÍCTOR LALO MALCA que los preceptos constitucionales invocados que son los artículos 52, 55 en concordancia con el 17 de nuestra Carta Magna, no han sido violados, toda vez que el Tribunal Superior precisamente en cumplimiento de esos artículos dispuso la reglamentación especial de Comunicación y Visita entre el demandante de esta acción y su menor hijo, como condicionante para la salida de este último.

Continúa fundamento la Licenciada CÓRDOBA CHEN en el libelo de oposición a la presente demanda de Amparo de Garantías Constitucionales que, en cuanto al artículo 55 de la Constitución la potestad como Derecho está plenamente indefinido en sus padres, es claro que la alegación de educar debe partir de otorgar la mejor educación posible y no ser egoísta por circunstancias personalísimas, si igual tienen el demandante el derecho de un Régimen de Comunicación y Visitas en el extranjero como igual lo tiene en la actualidad en la cual tiene y puede tener el acceso a su hijo, y darle lo exigido como progenitor de éste.

Finalmente, la señora LILIANA MALCA como Tercero en el presente proceso constitucional, mediante su apoderada judicial argumentó su oposición en la reiteración que la presente acción de Amparo de Garantías Constitucionales se constituye en una medida dilatoria con el ánimo de detener la buena educación que requiere el menor LALO MALCA, dado el caso de su inteligencia excepcional.

El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia mediante Resolución N° 2-I. -R. De 17 de febrero del 2000 REVOCA la resolución N°324-99 S.F. de 12 de noviembre de 1999, dictada por el Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia de Panamá dentro incidente propuesto por la señora LILIANA MALCA para que se

modifique la reglamentación de visitas de su hijo VÍCTOR LALO MALCA y se autorice su salida del país en la que negó la petición, y en su lugar AUTORIZA la salida del país del niño VÍCTOR LALO MALCA para que acompañe a su madre Sra. LILIANA MALCA durante sus estudios en Estados Unidos, fundamentando su decisión así:

> "...
> En efecto, el artículo 327 establece que si el acuerdo de los padres es atentatorio a los intereses materiales o morales de los hijos o hijas, la cuestión se decidirá por la autoridad competente, que se guiará, para resolver, por lo que resulte más beneficioso para los niños. Asimismo, el artículo 331 dispone que las resoluciones dictadas por la autoridad competente sobre la guarda y crianza y el régimen de comunicación y de visita, podrán ser modificadas en cualquier tiempo, cuando resulte procedente, por haber variado las circunstancias de hecho que determinaron su pronunciamiento.
> ...
> Los nuevos hechos que han surgido en el actual proceso se tratan del traslado al exterior de la madre para iniciar estudios universitarios; como quiere que ella tiene la guarda y crianza del niño VÍCTOR LALO MALCA, ha solicitado autorización para que su hijo la acompañe. Pero el padre del niño se ha opuesto a ello e, incluso, ha solicitado que se le asigne la guarda y crianza.
>
> Para adoptar una decisión hay que considerar que no debe interrumpirse la comunicación del niño con su familia paterna por un período prolongado, ya que puede afectarse los lazos afectivos y su desarrollo personal. Pero, por otro lado, tampoco puede afectarse el derecho de la madre (quien tiene la guarda y crianza) de ofrecer a su hijo mejores alternativas de vida a través de su superación profesional.
>
> De ahí la necesidad de hacer compatibles la solicitud formulada por la madre con el derecho que tiene el padre de mantener comunicación con su hijo. Esto es posible mediante la autorización de salida del país del niño VÍCTOR LALO para que permanezca en compañía de su madre en el exterior, pero el tribunal primario debe establecer un régimen especial de visitas en favor del padre que compense la separación con su hijo.
> ..."

El artículo 327 del Código de la Familia a que hace referencia la sentencia del Tribunal Superior quiere decir que en los acuerdos sobre la guarda y crianza y del régimen de comunicación y visita los decidirá la autoridad competente conforme el Interés Superior del Menor, cuando los mismos sean atentatorios a los intereses materiales y morales de los hijos o hijas, o cuando no se ha mediado acuerdo entre el padre y la madre.

Para resolver, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia debe examinar los cargos que se le formulan a la resolución cuestionada, así como los argumentos del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, lo que efectúa a continuación.

Las constancias procesales ponen en evidencia que la señora LILIANA MALCA desea realizar estudios en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, por lo que al tener la guarda, crianza y educación de su menor hijo VÍCTOR LALO MALCA, requiere que éste resida con ella hasta tanto culmine sus estudios de Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional, tal como lo ha manifestado la señora LILIANA MALCA.

Ante tal situación el padre del menor ha solicitado la guarda y crianza, además de señalar que la señora LILIANA MALCA también puede realizar dichos estudios en distintas universidades privadas en la República de Panamá.

Se encuentran bajo de censura de inconstitucionalidad el acto

jurisdiccional, por encontrarse violadas los artículos 17, 52 y 55 de la Constitución Política.

El artículo 17, ha dicho este Pleno en un número crecido de ocasiones, que constituye una norma programática, que, como tal, no confiere derechos subjetivos de las personas sujetas a la supremacía del Estado, que puedan sustentar la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales. No obstante, este tipo de normas-programa, normas-guía pueden, en un grado excepcional, resultar violados, si la violación es en conjunción con otras normas constitucionales que consagran, en favor de su titular, derechos subjetivos de naturaleza fundamental. Por ejemplo, en una sentencia de 14 de octubre de 1997, el Pleno se pronunció sobre este particular, en la forma que se estima prudente transcribir:

> "Si bien es cierto que el Pleno de la Corte ha mantenido como criterio invariable de calificación de la naturaleza de los artículos 17 y 19 constitucionales, su carácter general y programático, por tratarse de enunciados constitucionales, su carácter general y programático, por tratarse de enunciados descriptivos de principios básicos que conforman el marco conceptual de los programas de gobierno, que exigen un complemento en la misma normativa del texto constitucional o a través de su desarrollo en leyes especiales; en el caso que nos ocupa, junto a los artículos constitucionales que el amparista estima infringidos por la orden de hacer expedida por el Tribunal de Apelaciones y Consultas de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, se aduce también el artículo 55 de la Carta Fundamental, el cual describe una institución del Derecho de Familia -la patria potestad- ubicado entre los derechos humanos sociales de segunda generación y en el segundo párrafo recoge el derecho de alimentos, que es una auténtica garantía constitucional".
>
> (Registro Judicial, octubre 1997, p. 12 y 13)

Por otro lado, sabido es que el artículo 52, que se ocupa de la protección de la familia, otorga una serie de derechos en cabeza de los menores que el Estado debe proteger, y que sintetizadamente se conoce como el principio del interés superior del menor, cuyo fin, al momento de analizar varios derechos, aún fundamentales, en juego en un conflicto familiar, merecen tratarse otorgando al expresado interés superior del menor un lugar preponderante en cuanto a las obligaciones del Estado de su adecuada protección y su eficacia para dirimir conflictos jurisdiccionales donde los derechos de los menores se encuentren involucrados, como sin la menor duda lo es el que ocupa al Pleno en este proceso constitucional. El artículo 52, en particular en su relación con el principio del interés superior del menor, ha sido objeto de pronunciamiento por este Pleno. Así, la Corte, en fallo de 20 de marzo de 1996 concedió el amparo revocando la resolución atacada, fundamentó, en síntesis, en lo siguiente:

> "Sobre este punto el Pleno después de estudiar el caso estima que la protección constitucional de los derechos de los menores, los cuales forman parte de los Derechos Humanos de segunda generación, en nuestra carta Fundamental se mencionan de manera general en el artículo 52, pero sin llegar a precisar los principios y derechos que les asisten en el ámbito procesal. De allí que el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño representa un complemento del texto constitucional al establecer que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor.
> ...
> Respecto a la infracción del artículo 52 de la Constitución, que trata sobre la obligación del Estado de proteger la salud física, mental y moral de los menores y garantizar el derecho de éstos a la alimentación, la salud y la educación y la seguridad y previsión

> sociales, cabe anotar que en el presente caso esa obligación estatal está supeditada a determinar previamente cuál es el interés superior del menor, que es precisamente la omisión que se advierte en la orden de hacer que se impugna."

El artículo 55 de la Constitución Nacional hace referencia a la patria potestad, alegada por el amparista como violado. Concíbese la patria potestad como el cúmulo de potestades que tienen los padres sobre los hijos y las obligaciones que la condición de padre trae aparejada. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de inconstitucionalidad de 29 de mayo de 1996 expresó respecto a esta institución así:

> "El Pleno de esta Corporación estima que no se ha producido la violación del artículo 55 de la Constitución nacional relativo a la Patria Potestad, por cuanto el artículo 330 supracitado no limita ni restringe la Patria Potestad o relación parental que han de ejercer los padres e relación con sus hijos o hijas. La misma guarda relación con una serie de deberes y derechos, consistentes en velar por la vida y salud de sus hijos, tenerlos en su compañía, suplir sus necesidades afectivas, alimentarlos, educarlos, formarlos, corregirlos-razonablemente y moderadamente- y finalmente representarlos y administrar sus bienes. Estos deberes y derechos deben ser ejercidos aún cuando o ambos padres se encuentren sujetos a limitaciones de comunicación o visita, los cuales tal y como lo señal el artículo impugnado, son excepcionales y se imponen en beneficio del menor."

(Lo subrayado es del Pleno en Demanda de Amparo)

Estamos en presencia de un caso en el que está en juego el Superior Interés del Menor, consistente en la que especialmente la integridad emocional de VÍCTOR LALO MALCA, de cinco (5) años de edad, podría estar afectada seriamente por la lejanía de su padre, por un período de tiempo prolongado, como lo es el que concierne a la autorización de viaje acordada por la sentencia que se estima violatoria de derechos fundamentales del padre. Es para el Pleno evidente que el interés superior del menor VÍCTOR LALO MALCA, es puesta en riesgo al solicitar autorización de salida del país de su menor hijo para que resida con su madre en el extranjero. La lejanía convierte los derechos insertos en la patria potestad del accionante en una lesión a los derechos que, con respecto al menor, tiene de la patria potestad, con independencia de si se encuentran separados los progenitores, por cuanto, como ha dicho este Pleno, la separación conyugal no trae como consecuencia el abandono por parte de uno de los progenitores, sino, por el contrario, si permanente atención, como lo establece el artículo 316 y siguientes del Código de la Familia y el Menor.

Nos encontramos, pues, en una encrucijada caracterizada por el interés superior del menor, el cual debe ser salvaguardado en todo proceso en la cual intervenga uno de ellos. Ante esta situación, es el criterio esta Corporación de Justicia que debe primar ese Interés Superior del menor sobre los estudios de su madre en el extranjero, en este caso, toda vez que es inminente el riesgo que corre, ya que se puede producir un desequilibrio emocional por parte del menor VÍCTOR LALO MALCA por no contar con la afectividad de su padre.

La patria potestad del padre resulta disminuída. Este Pleno, al analizar el artículo 316, señala que tal norma no es inconstitucional (como se había pedido), señalando que la patria potestad descansa o guarda relación con una serie de derechos y deberes, consistentes en velar por la vida y salud de sus hijos, tenerlos en su compañía, suplir sus necesidades afectivas, alimentarlos, educarlos, formarlos, corregirlos -razonable y moderadamente- y finalmente representarlos y administrar sus bienes. Pues bien: la lejanía provocada por el viaje a que aspira la madre para su superación profesional, que es un derecho susceptible del mayor respeto, cede ante el efecto que conduce la lejanía del menor de su menor, privando al padre de su compañía o haciendo éste mas difícil

la relación parental en atención precisamente a esa lejanía, y lesionando, en consecuencia, el interés superior del menor VICTOR.

La prelación del interés superior del menor, finalmente, sobre el principio del debido proceso, ya se ha manifestado también esta Corte, mediante el fallo de 13 de marzo de 1998, bajo la ponencia del Magistrado Eligio Salas; entre otras cosas, la resolución dijo lo siguiente:

> "Mediante este amparo se plantea el problema de un derecho que puede resultar afectado por el hecho de que se llegue a practicar una prueba. Pero es importante destacar que, en este caso, el daño que podría ocasionarse, con la ejecución de esa orden atacada (de practicar la referida prueba), trasciende la posible vulneración del debido proceso legal, pues la persona agraviada es un menor de edad, por lo que implicaría la infracción del artículo 52 de la Constitución, en relación con el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, en caso de comprobarse que el funcionario demandado, al emitir la orden, no actuó otorgando prioridad al INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR que debe prevalecer en estos casos.
> ...
> La Corte ha señalado sobre la protección constitucional de los derechos de los menores que estos forman parte de los Derechos Humanos de segunda generación mencionados de manera general en el artículo 52 de nuestra Carta Política, pero sin llegar a precisar los principios y derechos que les asisten en el ámbito procesal y, por ello, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño constituye un complemento a ese texto constitucional, al preceptuar que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor. Este concepto de interés superior del menor, implica el derecho del niño a una protección especial y a la primacía de sus intereses".
>
> (Cfr. S. 20/3/96, R.J., p.23)

A juicio de esta Corporación, el tribunal demandado infringió el artículo 52 de la Constitución, pues no cumplió con la obligación de determinar claramente cuál era el interés superior del menor, que en este caso, según el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia debía coexistir con el derecho a la superación profesional de la madre del menor VÍCTOR LALO MALCA, alejándolo de la afectividad de su padre ISAAC LALO GUERÓN, derecho a la educación que debe ceder al interés superior del menor de permanecer, mientras duran los estudios de la madre, sujeto a la patria potestad del padre en la República de Panamá.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por ISAAC LALO GUERÓN y, por tanto, REVOCA la Resolución N°2-I. -R de 17 de febrero del 2000, emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) GRACIELA J. DIXON
(CON SALVAMENTO DE VOTO)

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LA

MGDA. GRACIELA J. DIXON C. Y EL MGDO. JOSE A. TROYANO

Con todo el respeto que se merecen los Magistrados del Pleno, manifestamos no estar de acuerdo con el proyecto que resuelve conceder el amparo de garantías constitucionales propuesto por ISAAC LALO GUERON, y en consecuencia, revoca la resolución N 2-1.-R de 17 de febrero de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.

Nuestro desacuerdo lo basamos en lo siguiente:

1- El fundamento principal del proyecto para conceder el amparo, consiste en que la patria potestad del padre (amparista) resulta disminuida por el hecho de que el menor se tenga que trasladar a los Estados Unidos con su madre, quien realizará estudios en ese lugar.

2- Que al producirse la lejanía del menor se priva al padre de su compañía, lo que hace a éste más difícil la relación parental afectando así la patria potestad, y con ello una serie de derechos y deberes del padre.

Debemos iniciar indicando que en toda relación familiar, desde el momento en que se rompe el vínculo existente entre los padres, no es posible obtener, ni por la ley ni por ningún otro medio, que la patria potestad, entendida ésta como los deberes que tienen los padres con respecto a los hijos, se pueda dar de una manera normal y plena. Siempre que ocurra separación de los padres, siempre se verá afectado el interés superior del menor. La Ley y el Juez, cuando ocurren estos casos, lo único que buscan es que este interés superior del menor se afecte lo menos posible.

Con fundamento en lo anterior, consideramos que en la resolución dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia que se está revocando por haber infringido según el proyecto el artículo 52 constitucional, no se da tal infracción constitucional por cuanto se puede observar que la referida Resolución, sujeta la autorización de salida del menor a que se dé previamente una regulación de visita, lo que tiende, no sólo a proteger el derecho del padre de tener en su compañía a su hijo, sino también a mantener el derecho del niño a relacionarse con su padre, entre otras cosas, lo que se traduce en el derecho constitucional de velar por el interés superior del menor. Con tal finalidad la antes referida resolución, dice textualmente así: "2. ESTA AUTORIZACION NO TENDRA EFECTOS HASTA TANTO EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA REGLAMENTE LA COMUNICACION Y VISITAS ENTRE EL NIÑO Y SU PADRE, PARA LO CUAL, LA MADRE TENDRIA QUE PRESENTAR EL CALENDARIO ACTUALIZADO DE ESTUDIOS DE ELLA Y SU HIJO". (Ver fojas 13)

Es decir, la resolución que se revoca no vemos que infrinja el artículo 52 de la Constitución por cuanto que:

1- Está condicionando la salida del país del menor a que se reglamente la comunicación y visitas con su padre, y

2- En la misma resolución se está indicando (Punto 3) que solamente se podrá comunicar la autorización de salida a Migración, (una vez esté reglamentada la comunicación y visitas entre el niño y su padre).

Consideramos que con esta medida, la cual es congruente con el artículo 52 constitucional, se está protegiendo la salud física, mental y moral del menor y como es lógico, repetimos, el menor no podrá gozar de los derechos plenos que realmente le corresponden, en virtud de la separación de sus padres, que indefectiblemente produce estas consecuencias, así como su padre tampoco podrá gozar a plenitud de los derechos que la patria potestad otorga.

Ocurrida una separación, lo que debe procurarse es afectar lo menos posible los derechos tanto de los padres como de los hijos, y de esto se encarga la ley y los tribunales de justicia, precisamente como lo decide la resolución atacada mediante la fórmula del Régimen de Comunicación y Visitas, establecido en los

artículos 326 a 331 del Código de la Familia, razón por la cual, de la manera más respetuosa, consideramos que la resolución dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia no viola la Constitución Nacional, pero como esta opinión es contraria a la de la mayoría del Pleno, respetuosamente, Salvamos el Voto.

Fecha ut-supra.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PRESENTADA POR PORRAS Y PORRAS EN REPRESENTACION DE TROPAC MARITIME, INC., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA NO.431-DGT-00, DE 19 DE ABRIL DE 2000, EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma de abogados Porras y Porras, en representación de la empresa TROPAC MARITIME, INC., presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Nota No.431-DGT-00 de fecha 19 de abril de 2000, emitida por la Dirección General de Trabajo, dentro de la Declaratoria de Huelga efectuada por el Sindicato de Trabajadores de Servicios Marítimos de Remolcadores, Barcazas y afines de Panamá (SITRASERMAP) contra al empresa KOLNEY CO. INC.

La acción constitucional fue admitida por esta Corporación de Justicia, requiriéndose del funcionario demandado las actuaciones correspondientes, o en su defecto un informe acerca de los hechos materia del amparo.

En ese sentido, el licenciado Luis Cedeño Merel, Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, remitió el expediente contentivo del Pliego de Peticiones y de la consiguiente Declaratoria de Huelga del SITRASERMAP.

1. ANTECEDENTES

La acción se fundamenta en los siguientes hechos:

-La empresa SYRIUS SHIPPING INC. dio en arrendamiento la nave CHILIBRE a la empresa fletadora TROPAC MARITIME IN. la cual formalizó un contrato por cinco años con al empresa TEXACO para transporte de petróleo desde Bahía Las Minas al Puerto de Cristóbal.

-Las sociedades TROPAC MARITIME INC. y KOLNEY CO. INC., negociaron el traspaso de los marinos, cuando sorpresivamente el día 3 de enero de 2000, antes de finiquitar este acuerdo el (SITRASERMAP) representando sólo a siete (7) marinos que formaban parte de la tripulación de la nave CHILIBRE presentaron un pliego de peticiones y quejas contra KOLNEY CO. INC. y TROPAC MARITIME INC. ante la Dirección General de Trabajo, la cual, mediante Auto No.28-DGT-00 de 9 de febrero de 2000, decidió aceptar el Pliego de Peticiones contra la empresa KOLNEY y rechazó de plano el pliego por improcedente contra la empresa TROPAC MARITIME INC., puesto que no se acreditó que los trabajadores en cuestión laboran para esta empresa.

-El 29 de febrero de 2000 se venció el término de la Conciliación, y las partes al no llegar a un acuerdo en todos los puntos, el SITRASERMAP presentó el día 30 de marzo de 2000, ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral el

escrito de declaratorio de huelga, la cual se inicia el día 5 de abril de 2000.

-La Directora Regional de Trabajo de Colón solicitó al Capitán de la nave CHILIBRE que atracara con el fin de hacer el conteo para la huelga y que los marinos descendieron del barco y, una vez realizado esto, le notificó que, desafortunadamente, por orden del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral la nave quedaba detenida y custodiada por la Policía Nacional con los huelguistas a bordo de la nave.

-El 10 de abril del año en curso el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral expidió la certificación, en la cual se indica que a esa fecha no existía orden de retención contra la nave CHILIBRE.

-La huelga fue demandada por ilegal, por la empresa KOLNEY CO. INC., ante el Juzgado Primero Seccional de Trabajo de la Provincia de Colón, proceso que está en trámite actualmente.

II. LA PRETENSION Y SU FUNDAMENTO.

La parte demandante considera como infringido el artículo 32 de la Constitución Política, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 32: Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

Sostiene el actor que la violación de esta norma ha ocurrido en el concepto de violación directa por omisión, al no aplicarse, porque el hecho de detener la nave vincula directamente a la amparista a los efectos de una convención colectiva que se negocia con otra empresa y no tiene arte ni parte en dicha negociación, y más aún, cuando la consecuencia de la ruptura de esta negociación conlleva los efectos de una huelga en perjuicio directo de la demandante, violación que se hace más evidente cuando la Resolución No.28-DGT-00 de 9 de febrero de 2000 dictada por la Dirección General de Trabajo, por un lado acepta el pliego de peticiones, ordena darlo en traslado a la empresa Kolney Co. Inc., y por otro lado, rechaza por improcedente la negociación con la empresa TROPAC MARITIME INC., que está siendo perjudicada directamente por cada día que se encuentre retenida la nave, más los perjuicios que posteriormente sufra como resultado de lo que se decida en relación con dicha huelga.

Afirma el actor que la orden de hacer demandada en amparo, al detener la nave CHILIBRE y poner su custodia a cargo de la policía y de sus trabajadores, hace que el funcionario demandado incurra en actos que no son de su competencia, ya que los actos de detención de una nave por cualquier razón de inspección, custodia, seguridad o medidas cautelares o de ejecución, solamente pueden provenir de las autoridades a quienes la ley les ha atribuido dicha competencia y en este caso a la Autoridad Marítima de Panamá, conforme al Decreto Ley 7 de 10 de febrero de 1998 (artículo 4), y a los Tribunales Marítimos, conforme lo disponen los artículos 174 y 194 del Código Marítimo de Panamá.

Argumenta además el accionante que la orden de hacer conculca el artículo 44 de la Constitución Nacional que preceptúa lo siguiente:

> "ARTICULO 44: Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales."

Estima el actor que la violación de este precepto constitucional se da en el concepto de violación directa por omisión, debido a que la orden de hacer impugnada no tomó en consideración el perjuicio que con la misma se causa a los propietarios, armadores, fletadores o arrendatario de la nave ilegítimamente retenida, al no poder hacer uso del derecho de usufructo y tenencia que le confiere la propiedad de dicha embarcación, y que protege esta norma fundamental, pilar de nuestro sistema marítimo, económico y jurídico. La privación del uso de

la nave le impide a la amparista recibir, según se estipula en el contrato, seis mil balboas (B/.6,000.00) por cada día que se encuentre detenida la nave y la enfrenta a la posibilidad de perder el contrato, con enorme pérdida económica.

Además, manifiesta el amparista que la Dirección General de Trabajo, con conocimiento de que los actuales tenedores y propietarios de la nave detenida no son los empleadores de los huelguistas, emitió la referida orden lo que hace más evidente la violación al derecho de propiedad de los armadores, propietario y arrendatario de la barcaza, de lo contrario, le hubiese dado traslado del pliego e peticiones, el cual rechazó por improcedente.

III. CONSIDERACIONES DEL PLENO.

Expuesta la opinión del amparista, la Corte procede a resolver el presente negocio.

Resulta palmario que la controversia se centra en el hecho de que la Dirección General de Trabajo, a través de la Nota No. 431-DGT-00 de 19 de abril de 2000, dispuso que, en virtud de una huelga decretada por el SITRASERMAP, se detuviera la Barcaza CHILIBRE, la cual se encuentra arrendada por la empresa fletadora TROPAC MARITIME INC. y no por la empleadora que viene a ser la empresa KONEY CO. INC.

De fojas 30 a 32 consta el Auto No.28-DGT-00 emitido por la Dirección General de Trabajo, a través del cual se "acepta el pliego de peticiones presentado por el Sindicato de Trabajadores de Servicios Marítimos de Remolcadores, Barcazas y afines de Panamá (SITRASERMAP) y se rechaza de plano por improcedente contra al empresa TROPAC MARITIME, INC. puesto que no se acreditó que los trabajadores en cuestión laboran para esta empresa".

No obstante lo anterior, el Subdirector de la Dirección General de Trabajo ordenó la retención de la barcaza CHILIBRE bajo el criterio, según consta en el informe rendido por el funcionario demandado, de que "la orden fue dada en virtud de una huelga declarada por los trabajadores de la Barcaza CHILIBRE, conforme al artículo 492 del Código de Trabajo y se le notificó en tiempo al empleador la declaración de huelga para el día 5 de abril a las 8:30 a. m." además afirma que " de acuerdo con nuestras normas laborales la huelga es el abandono temporal del trabajo en una empresa, establecimiento o negocio, acordado y ejecutado por los trabajadores y cumplidas las formalidades legales, ... y que declarada la huelga la Dirección General de Trabajo sólo puede verificar si fueron agotados los procedimientos de concertación, si el aviso se dio en tiempo oportuno y si la huelga cuenta con el requisito de la mayoría" (Cfr.fojas 70 y 71).

No compartimos el criterio de la Dirección General de Trabajo, pues, no es posible ampararnos en ese criterio violentando derechos de terceros, como ocurre en el presente caso, pues resulta relevante ante estos hechos que la empleadora contra la cual se llevó a cabo la huelga lo constituye KOLNEY CO. INC. y no TROPAC MARITIME, INC., por lo tanto, se está reteniendo una barcaza que no es propiedad de la empleadora de los huelguistas.

Ante este escenario jurídico se descarta además que exista solidaridad entre ambas empresas, pues el artículo 96 del Código de Trabajo establece que para los efectos de la solidaridad en las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, se considerará un solo empleador aquellas empresas o personas que laboren o funcionen en un mismo local, o como unidad económica, y utilicen indistinta o simultáneamente los servicios de un trabajador, con lo cual queda establecido que adicionalmente a la coincidencia del local en el que laboren o de la unidad económica entre estas personas o empresas, se requiere que compartan los servicios el empleado de forma simultánea o indistinta, circunstancia que no fue acreditada en el presente caso en cuanto a la supuesta relación laboral de los demandantes con la empresa TROPIC MARITIME, INC.

Por otro lado, tampoco reposa material probatorio que determine que existe

dependencia económica o subordinación jurídica de los trabajadores suscriptores del pliego para con la empresa TROPAC MARITIME INC., de tal forma que ésta no se puede considerar como su empleadora.

El Código de Trabajo en lo atinente a la declaratoria y actuación de la Huelga establece muy claramente que la comunicación de la huelga se le efectúe al empleador o empleadores afectados. Además, este ordenamiento legal en su artículo 493, obliga al empleador al cierre inmediato del establecimiento si se negare la petición de ilegalidad o venciere el plazo para presentarla. Tenemos entonces que en todo caso la responsabilidad la tiene el empleador.

Por otro lado, a través del Auto No.28-DGT-00 en lo relativo a una inspección judicial a la empresa TROPAC MARITIME INC. se expresó lo siguiente: "... así mismo inspeccionamos la planilla de pagos salariales de esta empresa del mes de noviembre y diciembre de 1999, y tampoco aparecen los trabajadores suscriptores del Pliego de Peticiones, por tanto en base a los datos recabados y la información obtenida no puedo dar fe que los señores REYNALDO ROBINSON, OCTAVIO GARCIA, EULALIO PEREZ, ARNULFO AGUILAR, ELMER CEDEÑO y FRANKLIN RUDAS, sean trabajadores de TROPAC MARITIME, INC.".

Definitivamente el hecho de haber retenido una nave que es propiedad de un tercero, conculca derechos de terceros quienes pueden resultar gravemente perjudicados.

El Pleno considera que en cuanto al resto de la orden impartida por el Subdirector de Trabajo, a través de la Nota No.431-DGT-00 se debe mantener, pues el entrar a considar si la huelga es ilegal o no, es competencia de los Juzgados de Trabajo, y es ante esta jurisdicción que el empleador puede impugnar la misma, resultado que no incide de manera alguna en la decisión que aquí se adopte, pues, una cosa es la declaratoria de huelga contra la empresa Kolney, Inc. por parte de sus trabajadores y otra es retener una nave propiedad de un tercero que no es parte en la controversia.

Resulta evidente que nos vamos a encontrar con una situación muy irregular, pues los trabajadores huelguistas laboran en la nave CHILIBRE, no obstante, ni el armador, ni la empresa Tropac que tiene en arriendo dicha nave son los empleadores, por lo tanto, no puede en este caso, las autoridades de trabajo retener la nave CHILIBRE.

La Corte ha podido comprobar que al retener la nave CHILIBRE se violó el debido proceso y la garantía a la propiedad privada en perjuicio de la sociedad recurrente, derechos que son tutelados por nuestra Constitución Política, pues la autoridades de trabajo no pueden conculcar el derecho a la propiedad que poseen terceros, so pretexto de cumplir con la normativa laboral.

Por estas razones la Nota No.431-DGT-00 de 19 de abril de 2000, debe confirmarse en lo sustancial, modificándola solamente en cuanto a que la orden de hacer sólo debe revocarse en cuanto a la retención de la nave CHILIBRE.

Como corolario de lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la firma Porras y Porras en representación de TROPAC MARITIME INC., en consecuencia, REVOCA la orden de retener la nave CHILIBRE contenida en la Nota No. 431-DGT-00 de 19 de abril de 2000, emitida por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO DIOGENES ANIBAL AROSEMENEA CONTRA LA ORDEN DE NO HACER EMITIDA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, AL PONERLE UNOS JERÓGLÍFICOS A LA NOTA N°CJ-310-2000. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El profesor DIOGENES ANIBAL AROSEMENA, como abogado yactuando en su propio nombre y representación, ha presentado demanda de Amparo de Garantías Constitucionales contra LA ORDEN DE NO HACER que le atribuye al Doctor GUSTAVO GARCIA DE PAREDES, Rector de la Universidad de Panamá, dada para que no se le cancelen las últimas quincenas que laboró en su condición de catedrático de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Le corresponde al Pleno determinar si la demanda satisface los requisitos establecidos en la ley para que proceda su admisión.

En cumplimiento de esa labor es preciso señalar que el amparista ha señalado en su libelo de demanda que la orden que genera el amparo es "un jeroglífico" visible en la parte superior derecha de una fotocopia de la Nota N°CJ-310-2000 (ver fs.34) que, según él afirma, fue estampado por el Rector de la Universidad y que, en su criterio, constituye la orden de no hacer que le niega el pago de los salarios adeudados.

Al examinar el escrito o apunte visible en la parte superior de la nota mencionada, el Pleno puede apreciar que se trata de una escritura ilegible, difícil de entender o de interpretar, sin que sea posible llegar a la conclusión de que se trata de una orden de hacer o de no hacer con capacidad de violar derechos y garantías constitucionales. La leyenda no lleva ninguna firma y en ella tampoco se identifica al funcionario público que supuestamente la emitió.

Cabe agregar que el llamado "jeroglífico" se ha presentado en una copia simple sin autenticar. La leyenda que aparece en el documento de fojas 33 del expediente, escrita por la secretaria del bufete profesional AROSEMENA & AROSEMENA, donde se manifiesta que se trata de "fiel copia de la copia que reposa en nuestro archivos", carece del valor legal que se exige en estos casos. La falta de autenticación ha sido objeto de profusa jurisprudencia de la Corte, donde invariablemente se ha estimado la pretermisión como motivo suficiente para la no admisión de la demanda de amparo presentada en esas condiciones. La misma constituye una violación de lo establecido en el artículo 820 del Código Judicial en el cual se consigna que las "reproducciones de los documentos serán aportadas al proceso por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la ley disponga otra cosa".

La Corte Suprema, en Pleno, en reiterados pronunciamientos emitidos en aplicación de la parte final del artículo 2610 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 820 de la misma excerta legal, ha insistido en la imperatividad de que se acompañen las acciones de amparo de garantías constitucionales con la copia debidamente autenticada del acto acusado. Por ejemplo, en resolución de 31 de octubre de 1991, esta Sala Plena, al conocer de una acción de amparo presentada en condiciones similares a la que nos ocupa, señaló de manera específica lo siguiente:

"El amparista ha presentado unas fotocopias sin auténticar y a pesar

de que a mano se lee "fiel copia de su original", no tiene el respaldo de ninguna firma y menos de persona que, en desempeño de cargo alguno, certifique lo expresado".

Por otro lado, hay que advertir que en el caso bajo estudio, el fondo de lo que se reclama es el pago de tres quincenas de salario adeudadas al amparista en su condición de catedrático de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, pretensión que no es viable dilucidar a través del recurso constitucional de amparo de garantías, sino mediante una acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, previo agotamiento de la vía gubernativa, como ha sido establecido en copiosa jurisprudencia de la Corte. Es más, en la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que cursa actualmente en la Sala Tercera de la Corte, interpuesta por el profesor DIOGENES ANIBAL AROSEMENA, se solicita, entre otras pretensiones, que se le reconozcan los salarios dejados de percibir como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, lo cual incluye, por supuesto, los salarios que está reclamando a través de este amparo de garantías constitucionales. Será en aquel proceso contencioso administrativo en donde cabrá decidir si el profesor DIOGENES ANIBAL AROSEMENA tiene derecho o no a que le sean pagados los salarios demandados por medio de este amparo de garantías constitucionales.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías constitucionales presentado por el licenciado DIOGENES ANIBAL AROSEMENA contra LA ORDEN DE NO HACER emitida por el Rector de la Universidad de Panamá.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LICENCIADA ALMA L. CORTES EN REPRESENTACION DE PROCESADORA MARPESCA, S. A. CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA NOTA DSA-30 DE 6 DE ENERO DE 2000 DICTADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE SALUD ANIMAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

PROCESADORA MARPESCA, S. A., por conducto de su apoderada legal, la licenciada Alma L Cortés Aguilar, ha promovido acción de amparo de garantías constitucionales, a fin de que la orden de no hacer contenida en la Nota N°DSA-30, de 6 de enero de 2000 sea revocada por vulnerar los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Política.

Corresponde en la etapa procesal en la cual se encuentra este proceso Constitucional, que el Pleno se pronuncie su admisibilidad o inadmisibilidad de la acción constitucional, previa comprobación que la acción cumple con los presupuestos de procedibilidad previstos en el artículo 2610 y con los señalamientos que, en esta sede, ha mantenido la Corte.

De entrada debe la Corte señalar que la pretensión de amparo cumple con el artículo 2610 y, a su turno, con el artículo 654, todos ellos del Código

Judicial. No obstante, la Corte debe rechazar la acción intentada, por dos razones fundamentales:

> 1° Se trata de la impugnación de un acto administrativo expedido por la Dirección Nacional de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, como bien lo reconoce la accionante de este proceso constitucional, en cuya impugnación tiene preferencia la vía contencioso-administrativa, como de manera reiterada ha determinado esta Corte en un copioso número de pronunciamientos.

La razón de este requerimiento, es que en el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, las partes tienen a su alcance la plenitudde fases de un proceso pleno, pudiendo solicitar las pruebas pertinentes que considere, así como objetar las que, en desmedro de sus pretensiones, introduzca la Procuraduría de la Administración que representa a la Administración Pública es este tipo de procesos contencioso-administrativos, y formular las alegaciones correspondientes, en suma, ejercer a plenitud el derecho de acción.

> 2° Observa la Corte que el acto administrativo impugnado es una nota de 6 de enero de 2000, por lo que, el transcurso del tiempo que media entre la expedición del acto administrativo y la interposición de la acción constitucional resta de la urgencia que, para este tipo de acciones constitucionales ha señalado esta Corte, por cuanto el transcurso del tiempo en exceso a 6 meses desvirtúa la urgencia y la gravedad de la medida a ser adoptada en sede de amparo de garantías constitucionales.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales presentado por la licenciada ALMA L. CORTES en representación de PROCESADORA MARPESCA, S. A. contra la orden de no hacer contenida en la Nota DSA-30 de 6 de enero de 2000 dictada por el DIRECTOR NACIONAL DE SALUD ANIMAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO, EN REPRESENTACIÓN DE JULIO LA PLAZA CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO, actuando en nombre y representación de JULIO LA PLAZA, ha interpuesto demanda de amparo de garantías constitucionales contra la Orden de No Hacer contenida en la Resolución, sin número y sin fecha, expedida por el Secretario General de la Caja de Seguro Social.

La orden de no hacer objeto de amparo señala que "declara IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEO el escrito presentado por el Licenciado Virgilio E. Vásquez Pinto",

mediante el cual se interpuso Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra del acto contenido en la Nota ACH-CP-N-121-99 de 18 de marzo de 1998.

Seguidamente se procede a examinar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigibles para estos procesos conforme lo establecen los artículos 2610 y 654 del Código Judicial.

En este sentido se observa que el libelo cumple con las exigencias normadas por el artículo 2610 del Código Judicial, ya que hace mención expresa de la orden impugnada; señala el nombre del servidor público que la impartió; así como la Institución a la que pertenece; establece los hechos en que fundamenta su pretensión; y las garantías fundamentales que considera violadas y el concepto en que lo han sido.

En este orden, se observa que el demandante agotó la vía gubernativa a través de la instauración de un recurso de reconsideración con apelación en subsidio en contra de la Nota ACH-CP-N-345-98 de 7 de agosto de 1998 emitida por el Agente Administrativo, Agencia de Chorrera de la Caja de Seguro Social.

No obstante, pese al agotamiento de la vía gubernativa, en este caso se reclama contra un acto administrativo emitido por el Secretario General de la Caja de Seguro Social, por lo que en todo caso podría ser atacado por la vía de lo contencioso administrativo (acción de Plena jurisdicción), que es un proceso en el cual las partes cuentan con medios de defensa, y se pueden examinar con más profundidad el texto legal, que en este caso, es lo que realmente se estima vulnerado, ya que así lo hace notar el accionante al señalar que se ha violado por comisión el debido proceso, por razón que el Secretario General de la Caja de Seguro Social resolvió contra Nota que no había sido expedida por él, sino por el Agente Administrativo de La Chorrera.

En este sentido, no es el amparo de garantías constitucionales la vía procesal adecuada para impugnar el mencionado acto administrativo, criterio que ha sentado la Corte en numerosas ocasiones. (Sentencias de 22 de agosto de 1997, 26 de marzo de 1999 y 30 de diciembre de 1999)

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales interpuesto por el Licenciado VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO en nombre y representación de JULIO LA PLAZA.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL ANTONIO GUILLEN, EN REPRESENTACION DE LUIS ANIBAL CASTILLO, CONTRA LA JEFA DE SECCION DE TRAMITES DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y SUBSIDIOS DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado MANUEL ANTONIO GUILLEN MORALES, actuando en nombre y

representación del señor LUIS ANIBAL CASTILLO, interpone acción constitucional de amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer contenida en el acto expedido por la Jefa de Sección de Trámites del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja del Seguro Social, el 27 de diciembre de 1999, en la solicitud de tramitación de pensión de vejez que la parte accionante interpuso ante la Caja del Seguro Social.

La acción fue repartida y se halla para resolver su admisibilidad, a lo que procede el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en la leyes procesales respectivas. En tal sentido, el artículo 2610 del Código Judicial, que establece los requisitos que debe reunir la demanda de amparo, se refiere en su numeral 1°, a la mención expresa de la orden impugnada. Como se indicó, la orden que se impugnada en el presente caso, es la expedida por la Jefa de la Sección de Trámites del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja del Seguro Social, mediante la cual se niega la solicitud de trámite de pensión de vejez presentada por la parte accionante.

Pretende el apoderado judicial de la parte accionante que se deje sin efecto el acto impugnado, por considerar que la orden contenida en el mismo no ha sido expedida a través de una resolución. De manera que, al incumplirse con esa formalidad en la expedición del acto impugnado, considera el amparista, se le impidió a su defendido hacer uso de los recursos legales correspondientes, dejándolo en la indefensión.

Señala el amparista, que como consecuencia de la omisión anterior, se incurrió en la violación del artículo 32 de la Carta Fundamental, que consagra la garantía procesal del debido proceso legal. En el sentido que se deja expuesto lo señala el accionante:

> "Los trámites legales determinan que la Caja de Seguro Social (Sección de Trámites del Departamento de Pensiones y Subsidios), está obligado a tramitar las solicitudes de pensión de vejez de sus asegurados.
>
> Si se diera el caso, como pretende la Jefa de la Sección de Trámites del Departamento de Pensiones y Subsidios, que el trámite de pensión por vejez ya se realizó en ese Departamento (cuando expresa "nueva solicitud no procede") y por tanto, de no proceder nueva tramitación, ello debe ser expresado en una resolución, la cual pueda ser recurrida por el solicitante LUIS ANIBAL CASTILLO, mediante los medios de impugnación determinados en la ley (art. 29 de la ley 135 de 1943). Como no se ha hecho, mi representado se encuentra en estado de indefensión, sin poder recurrir contra la orden de no proceder al trámite de pensión de vejez solicitada." (f.15)

La naturaleza del acto que se impugna, sin duda, es administrativa. Respecto a la impugnación de este tipo de actos mediante amparo de garantías constitucionales, tiene el Pleno sentada jurisprudencia, según la cual sólo procede esta impugnación, si previamente a la interposición del amparo, la parte interesada ha agotado la vía gubernativa y la vía contencioso administrativa. Se trata, pues, de la doctrina de la preferencia de la vía contencioso y de definitividad de los actos, desarrollada ampliamente por el Pleno en copiosa jurisprudencia, (fallos de 15 de diciembre de 1998, 22 de agosto de 1997, de 13 de septiembre de 1996, por citar algunas).

Considera el Pleno, en atención a lo que viene expuesto, que en el presente caso debió acreditarse el agotamiento de medios de impugnación previstos en la ley, como condición para acceder al amparo de garantías, lo que no hace el accionante. Por el contrario, es el mismo apoderado judicial del amparista el que admite no haber agotado los recursos legales con que contaba su poderdante en la vía gubernativa para impugnar la orden, lo que atribuye, al hecho de que la institución demandada no resolviera, mediante resolución, la solicitud de trámite

de pensión de vejez que formulara su poderdante, de manera que pudiera hacer uso de los recursos legales pertinentes a fin de dejar sin efecto la orden atacada.

El acto impugnado es el que aparece a foja 1 del cuaderno de amparo, en el cual aparece indicado de manera concreta que la pensión de vejez solicitada por el señor LUIS ANIBAL CASTILLO no procede, por que el mismo recibe Ley especial y la pensión de vejez normal fue reembolsada. Para esta Superioridad, apartándose del criterio expresado en el precedente jurisprudencial citado por el accionante, no cabe duda que dicho acto resuelve la solicitud formulada por la parte amparista, la cual, independientemente de su forma, por constituir un pronunciamiento acerca de una solicitud formulada, admite los recursos reservados por la ley para impugnar este tipo de actos, por lo que el afectado con el acto, insiste esta Superioridad, independientemente de la forma del mismo, una vez notificado de lo resuelto por la institución, tuvo la oportunidad de formular los recursos pertinentes, la cual debió aprovechar, al no hacerlo no agotó la vía gubernativa, impidiendo a este Pleno examinar la impugnación que presenta por vía de amparo.

Por razón de lo que viene expuesto, considera el Pleno que la acción que se examina no reúne los requisitos de ley para su viabilidad, razón, por lo cual, debe inadmitirse.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITE, la acción de amparo de garantías constitucionales formulada por LUIS ANIBAL CASTILLO, mediante apoderado judicial, contra la orden expedida por la Jefa de Sección de Trámites del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja del Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS GARCÍA, EN REPRESENTACIÓN DE SILVIA MARSHALL, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Luis García, actuando en nombre y representación de SILVIA MARSHALL, ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales contra el Director General del Instituto Nacional de Deportes.

En esta etapa procesal corresponde decidir sobre la admisibilidad de la acción propuesta, en observancia de los requisitos establecidos por la ley y la jurisprudencia.

En primer lugar, llama la atención del tribunal que el abogado de la amparista endereza la acción contra el Director General del Instituto Nacional de Deportes, como el funcionario que emitió una orden de desalojo del apartamento 3-3 del Edificio Granada, ubicado en el Corregimiento de Juan Días, vivienda que ocupa la recurrente, sin embargo, aporta la Nota 117/2000 Arr de 29 de mayo de 2,000, que está suscrita por Annabella Mejdoub, en su calidad de Jefa del

Departamento de Arrendamiento del Instituto Nacional de Deportes, mediante la cual se comunica a SILVIA MARSHALL que dispone de un término no mayor de treinta días para desalojar el inmueble descrito líneas arriba.

En este orden de ideas, el apoderado judicial de la afectada manifiesta en el libelo de su acción lo siguiente:

> "La orden de hacer emitida por el Licenciado VICTOR D'ANELLO, Director General del Instituto Nacional de Deportes, está consignada en la nota 117/2000 Arr. de 29 de mayo de 2000, suscrita por la señora ANNABELLA MEJDOUB H., Jefa del Departamento de Arrendamiento."

En este tipo de acciones es importante que se identifique con claridad tanto la orden impugnada como el funcionario emisor del acto. Y, en este caso, pareciera existir ambigüedad al respecto.

Por otro lado, si la orden proviene del Director del Instituto Nacional de Deportes y dicha orden le fue comunicada mediante la Nota suscrita por Jefa del Departamento de Arrendamiento, debe aportar la orden emitida como acto que se impugna y no el medio de comunicación de ésta.

Si se tratara de una orden verbal, lo que no aclara la amparista, debe aportarse declaración de dos testigos que den fe de la emisión de dicha orden.

Además, el Tribunal observa que se trata de un acto susceptible de ser atacado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que resulta imprescindible agotar los medios procesales de impugnación ordinarios, antes de recurrir por la vía del amparo.

Ha sido objeto de copiosa jurisprudencia de esta corporación de justicia que si el amparo recae sobre un acto de naturaleza administrativa susceptible de ser impugnado mediante la vía preferente y especial de lo contencioso-administrativo, debe agotarse este recurso.

Por las razones expuestas, no debe dársele curso a la acción presentada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado Luis García, en representación de SILVIA MARSHALL, contra el Director General del Instituto Nacional de Deportes.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) JORGE FEDERICO LEE
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADA POR EL LICENCIADO HUMBERTO MOSQUERA B., EN REPRESENTACIÓN DE FRANCO RIVERA U., CONTRA EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE DE COCLE. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado FELIX LEON PAZ MARIN, actuando como apoderado judicial de FRANCO RIVERA U., ha interpuesto Recurso de Apelación contra la Resolución de 9 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que declara no viable la acción de Amparo de Garantías Constitucionales instaurada contra orden de hacer contenida en la Resolución ARAC-001-2000 de 10 de marzo de 2000 emitida por el Administrador Regional de la Autoridad Nacional del Ambiente de la Provincia de Coclé.

La resolución apelada se fundamenta en que el acto administrativo, emitido por el Administrador Regional del Ambiente de la Provincia de Coclé, es susceptible de impugnación a través de la vía gubernativa y agotada la misma, es recurrible ante la jurisdicción contencioso administrativa. Consecuentemente, la vía del amparo resulta improcedente porque el demandante sólo interpuso el recurso de reconsideración, dejando de agotar los otros recursos que la ley le otorga, contrariando el principio de definitividad exigido por el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial.

Por su parte, el apelante reconoce que presentó recurso de reconsideración y advierte que legalmente su cliente se sencuentra imposibilitado para anunciar y sustentar apelación, ya que el artículo 31 de la Ley 41 de 1998 establece que con la reconsideración queda agotada la vía gubernativa. Sin embargo, no comparte el señalamiento del Tribunal Superior en el sentido que debieron haber recurrido a la Sala Tercera de la Corte para solicitar la impugnación del acto pues, a su juicio, dicha multa no constituye un simple acto administrativo que le afectara algún derecho sustantivo, sino que el mismo es el resultado de un proceso de policía violatorio de garantías fundamentales, contra el cual no se puede interponer una acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción.

Esta Corporación ha podido observar que en la demanda de amparo se menciona como acto impugnado "la Resolución ARAC-001-2000 de 10 de marzo de 2000, y demás actos confirmatorios". Mediante la citada resolución, cuya copia sin autenticar consta en el expediente, se sanciona a FRANCO RIVERA con multa por desmontar hectáreas de bosque natural y áreas de protección y se le ordena reforestar con especies acordes. Posteriormente, la misma autoridad (el Administrador Regional del Ambiente) resolvió un recurso de reconsideración presentado por el afectado, cuya copia autenticada se encuentra de fojas 5 a 6, en la cual sólo se modifica la cuantía de la multa y mantiene todo lo demás.

De lo expuesto se infiere que si bien el agraviado agotó la vía gubernativa luego de haberse resuelto el recurso de reconsideración(fs.6), contrario al criterio de la censura, la resolución cuestionada sí constituye un acto administrativo susceptible de ser atacado ante la jurisdicción contencioso administrativa, mediante la demanda de plena jurisdicción, como lo señaló el tribunal de amparo y lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte en esta materia.

De manera que no le asiste razón al apelante y la Corte procede a confirmar la decisión apelada.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 9 de junio de 2000 dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por FRANCO RIVERA U., contra la orden contenida en la resolución de 10 de marzo de 2000 dictada por el Administrador Regional de la Autoridad Nacional del Ambiente de Coclé.

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) JORGE FEDERICO LEE

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO EN REPRESENTACIÓN DE UNIVERSAL TRAVEL SERVICE, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DRP N°154 DE 24 DE MAYO DE 2000 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO, actuando en representación de UNIVERSAL TRAVEL SERVICE, S. A., ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución DRP No. 154-2000 de 24 de mayo de 2000, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República.

El Pleno de la Corte procede al examen de la acción de amparo, en atención a los presupuestos que establecen los artículos 2606 y concordantes del Código Judicial, como necesarios para su admisión.

En el caso subjúdice se observa que el amparo de garantías constitucionales está dirigido contra la orden de hacer contenida en la Resolución de 24 de mayo de 2000, mediante la cual la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República ordenó la cautelación y puesta fuera de comercio de los bienes muebles, inmuebles y los dineros de UNIVERSAL TRAVEL SERVICE, S. A., hasta la suma de tres millones ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y dos balboas (B/.3,153,492.00).

Al examinar el libelo de la demanda de amparo presentada, el Pleno encuentra que el libelo cumple con los requisitos comunes a todas las demandas, hace mención expresa de la orden impugnada, señala el Tribunal que expidió la orden, explicó los hechos en los cuales se funda la acción y señala la garantía que estima infringida y el concepto de la violación. Sin embargo, se observa que en el expediente no existe prueba alguna de que el amparista haya agotado los medios de impugnación disponibles en la ley para impugnar la resolución No.DRP 154-2000 expedida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, incumpliendo así uno de los requisitos establecidos por la jurisprudencia reiterada de la Corte en concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial.

En este sentido, ha sido criterio reiterado de la Corte, el sostener que la acción de amparo sólo es posible interponerla cuando deviene de una orden arbitraria que no contenga remedios legales para enervar esas consecuencias arbitrarias, y tal no es el presente caso.

Esto es así porque el artículo 4° del Decreto de Gabinete No.36 de 10 de febrero de 19990, publicado en la Gaceta Oficial No.21,479 de 20 de febrero de 1990 señala lo siguiente:

> **"Artículo 4°: Desde el momento en que se inicia el procedimiento indicado, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial está facultada para tomar, en cualquier tiempo y cuando a su juicio hubiere motivos para temer que se hagan ilusorias las pretensiones del Estado, las medidas precautorias, sobre todo o parte del patrimonio del sujeto llamado a responder patrimonialmente. También pueden ser objeto de las acciones precautorias, todos aquellos bienes que aunque no**

> figuren como parte del patrimonio del sujeto, respecto de ellos existan indicios de los cuales se deduzca que tales bienes provienen directa o indirectamente de bienes o valores indebidamente sustraídos del patrimonio del Estado. Las personas distintas del sujeto llamado a responder patrimonialmente que resulten afectadas por las medidas precautorias mencionadas, pueden hacerse parte en el procedimiento señalado, a fin de que tengan oportunidad de hacer valer los derechos legítimos que pudiesen alegar, si ese fuere el caso. Igualmente la Dirección de Responsabilidad Patrimonial los puede considerar como sujetos llamados a responder patrimonialmente dentro del procedimiento que se indica en los artículos 2 y 3 anteriores.
>
> Con las limitaciones y salvedades que se han indicado y en lo que resulten aplicables, se seguirán las reglas del Código Judicial."
> (El resaltado es de la Corte)

Del artículo anterior se desprende que el afectado por la medida cautelar o precautoria expedida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial puede hacer valer sus derechos utilizando los medios y trámites previstos en el Código Judicial sobre la materia y que supletoriamente se aplican de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo citado.

Al respecto, es conveniente citar fallo de 8 de mayo de 1992 emitido al resolver el amparo de garantías constitucionales interpuesto por el señor LUIS CASTILLO, en el cual la Corte declaró lo siguiente:

> "...No obstante lo anterior, la DRP también puede decretar medidas cautelares una vez haya iniciado el procedimiento para determinar la responsabilidad patrimonial frente al Estado de que se trate, tal como lo establece taxativamente el artículo 4 del Decreto No.36, y lo reitera el artículo 18 del Decreto No.65 antes mencionado.
>
> Pero en todo caso el ordenamiento no desampara a las personas que se vean afectadas por la adopción de determinada medida cautelar. Y es a tales mecanismos de defensa que debe recurrir quien se considere afectado con la medida precautoria, y no al amparo de garantías constitucionales como se pretende hacer valer en el presente negocio.
>
> En efecto, el artículo 4 del Decreto de Gabinete No.36 establece expresamente que "las personas distintas del sujeto llamado a responder patrimonialmente que resulten afectados por las medidas precautorias mencionadas, pueden hacerse parte en el procedimiento señalado, a fin de que tengan oportunidad de hacer valer los derechos legítimos que pudiesen alegar, si ese fuere el caso. Igualmente la Dirección de Responsabilidad Patrimonial los puede considerar como sujetos llamados a responder patrimonialmente dentro del procedimiento que se indica en los artículos 2 y 3 anteriores.
>
> Parecida disposición se establece en el artículo 18 del Decreto No.65, que viene a ser precisamente el Decreto que reglamenta el procedimiento a seguir para la determinación de responsabilidad frente al Estado. "Toda y cualquier persona que considere tener derecho sobre el bien objeto de una medida precautoria, podrá comparecer al trámite que se sigue en la Dirección de Responsabilidad Patrimonial en defensa del mismo, en cualquier tiempo, hasta antes de que la Resolución que dicte de acuerdo con lo que dispone el artículo 12 del Decreto de Gabinete No.36 se ejecutoríe." (Subrayado del Pleno) (Ver Registro Judicial del mes de mayo de 1992, páginas 10 a 15).

Por las anteriores consideraciones, es el criterio del Pleno que no debe

acogerse la presente acción de amparo de garantías constitucionales.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías presentado por La firma forense RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO, actuando en representación de UNIVERSAL TRAVEL SERVICE, S. A., contra la orden de hacer contenida en la Resolución DRP No. 154-2000 de 24 de mayo de 2000, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República.

Copiese, Notifiquese y Archivese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) JORGE FEDERICO LEE
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDA POR JUAN ANTONIO CARBONE VAN DER HANS A EFECTOS DE QUE REVOQUE LA RESOLUCION EXPEDIDA EL 27 DE MARZO DE 2000 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JERONIMO MEJIA, actuando en nombre y representación de JUAN ANTONIO CARBONE VAN DER HANS ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la resolución de 27 de marzo de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

ANTECEDENTES

El señor JUAN ANTONIO CARBONE VAN DER HANS fue denunciado por CARLOS VACCARO por la presunta comisión de delitos Contra el Patrimonio (Hurto). Concluida la respectiva instrucción sumarial el procesado es sobreseído definitivamente por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, decisión que fue apelada por el Ministerio Público y el ofendido; por lo que al ser revisada la actuación por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, éste ente colegiado revocó la decisión de primera instancia y profirió auto de llamamiento a juicio en contra del procesado por la presunta comisión del delito de Hurto.

Ahora bien, en el transcurso de la instrucción sumarial, el procesado rindió declaración indagatoria, pero se acogió al derecho constitucional contenido en el artículo 22 de nuestra Carta Magna, es decir, decidió declarar en presencia de su abogado, por lo que la diligencia concluyó. Días después el agente instructor remite el sumario para su valoración al ente jurisdiccional, sin que el señor CARBONE VAN DER HANS respondiera a los cargos que le había formulado la representación social, constituyendo este hecho el origen de esta acción constitucional.

FUNDAMENTO DEL AMPARISTA

El licenciado MEJIA expresa que el sumario estuvo en el Ministerio Público por espacio de siete meses, que al rendir indagatoria su representado se acogió a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución y sólo transcurrieron siete (7) días hábiles cuando el sumario fue remitido al juez de la causa, por lo que

se le impidió ejercer una defensa efectiva y por ende se le vulneró la garantía constitucional contenida en el artículo 32 de la constitución.

Expresa que el artículo 32 fue infringido en concepto de violación directa por omisión porque su representado: "...no rindió una declaración indagatoria, que es el medio de defensa que tiene el imputado para ser oído y realizar los descargos, es decir, para defenderse; ... no fue citado en una segunda ocasión para que pudiera rendir su declaración indagatoria; ... después de acogerse al derecho de declarar en presencia de su abogado, la fiscalía cerró las investigaciones a los 7 días hábiles siguientes, sin darle oportunidad razonable para preparar su defensa ni para defenderse, pues ese plazo realmente es exiguo; ... el proceso se desarrolló con infracción del principio de igualdad de las partes, pues mientras el Ministerio Público y el denunciante (querellante) tuvieron más de 7 meses para preparar las pruebas de cargo, al procesado sólo se le dio 7 días hábiles (10 días calendario) para preparar su defensa."

Solicita que el Amparo de Garantías Constitucionales le sea concedido y en consecuencia se revoque la resolución de 27 de marzo de 2000, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en la que se llama a responder criminalmente a JUAN ANTONIO CARBONE VAN DER HANS, por la presunta comisión de delitos Contra el Patrimonio.

RESPUESTA DEL FUNCIONARIO ACUSADO

El Magistrado JOAQUIN ORTEGA en representación del Segundo Tribunal Superior de Justicia sustenta la decisión adoptada por ese ente jurisdiccional colegiado con la copia debidamente autenticada de la resolución de 27 de marzo del presente año en la que se llama a juicio al procesado CARBONE VAN DER HANS.

El documento en cuestión expresa, que el procesado fue sobreseído definitivamente por la presunta comisión de delitos Contra el Patrimonio porque a criterio del juzgador de primera instancia el padre de la esposa del ofendido tiene derecho a entrar a la vivienda de su hija, ya que contaba con el consentimiento de ésta para entrar a la vivienda que compartía con CARLOS VACCARO.

Esta decisión fue revocada por la segunda instancia porque en el sumario se acreditó el binomio fáctico jurídico que consagra el artículo 2222 del Código Judicial para llamarlo a responder criminalmente.

Expresa la resolución impugnada que, JUAN ANTONIO CARBONE VAN DER HANS tenía la autorización de su hija para entrar a su domicilio y llevarse el vestuario de su hija y nietos, pero ello no le permitía llevarse libros, cristalería, neveras, jarrones, diez cuadros valorados en diez mil dólares (B/10,000.00), 15 cajas de champagna estimadas en veinte mil seiscientos veinticinco dólares (B/20,625.00), un celular y un libro de xilografía denominado "Doce Estampas" cuyo estimado pecuniario es de cuarenta y cinco mil dólares (B/45,000.00). Todos estos bienes fueron debidamente acreditados por el denunciante y ofendido, conforme lo establece el artículo 2090, numeral 8 del Código Judicial, acreditandose el aspecto objetivo del delito investigado.

Con relación al aspecto subjetivo se incorporaron al sumario las declaraciones de los hijos del ofendido (que son nietos del procesado); todos estos bienes fueron dejados en distintos domicilios de la familia del procesado (ver folio 37 del cuadernillo); se incorporaron las declaraciones de las personas que acompañaron al procesado a sacar los bienes de la residencia del ofendido (ver folios 36 y 37 del cuadernillo de amparo).

Siendo ello así, el auto recurrido concluye que, lo procedente jurídicamente es llamar a responder criminalmente a JUAN ANTONIO CARBONE VAN DER HANS, y así se hizo. Esta actuación es la impugnada a través de esta acción constitucional.

DECISIÓN DEL PLENO

La acción de Amparo de Garantías Constitucionales, como bien señala la doctrina y nuestra jurisprudencia, ha sido establecida con el propósito de obtener la revocatoria de una orden de hacer o de no hacer, expedida por cualquier funcionario público, que viole los derechos y garantías que consagra la Constitución Política de la República de Panamá.

En tal sentido el artículo 50 de nuestra Constitución expresa que:

> **"Toda persona contra la cual se expida o ejecute por cualquier servidor público, una orden de hacer, que viole derechos y garantías que ésta constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona.**
>
> **El recurso de amparo de garantías constitucionales a que éste artículo se refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales de justicia."**

Así para que esta acción constitucional prospere es indispensable que la orden de hacer o no hacer sea expedida por cualquier servidor público con mando y jurisdicción, que viole derechos y garantías constitucionales y que por la gravedad e inminencia del daño deba ser reparado prontamente.

En esta oportunidad el amparista ataca el auto de proceder proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia (ver folio 11 del cuadernillo) por considerar que esa resolución ha transgredido la garantía constitucional consagrada en el artículo 32 de su representado.

El auto de proceder tiene por finalidad calificar el sumario y verificar las exigencias del artículo 2222 del Código Judicial, abriendo la fase plenaria; tiene un carácter interlocutorio, por lo que en la generalidad de los casos no puede ser objeto de ésta acción constitucional.

En esa fase, la plenaria se le permite a las partes sostener sus puntos de vista frente al juez de la causa dentro de los principios de oralidad, publicidad y contradicción. Es en ésta etapa en donde se robustecen las pruebas de culpabilidad contra el procesado y éste tiene la oportunidad de desvanecer o minimizar el alcance de esas pruebas, logrando probar su inocencia.

Pero resulta que es la iniciación de ésta fase, lo que indirectamente cuestiona el amparista, ya que el auto de proceder conlleva la apertura de la misma, por lo que resulta procedente ubicar en nuestro derecho positivo, cuándo procede el auto de proceder. El artículo 2222 del Código Judicial expresa en su segundo párrafo lo siguiente:

> **"Si encontrare que hay plena prueba de la existencia del hecho punible y cualquier medio probatorio que ofrezca serios motivos de credibilidad, conforme a las reglas de la sana crítica o graves indicios contra alguno, declarará que hay lugar a seguimiento de causa contra éste."**

La norma transcrita es diáfana y clara, expresa que el auto de llamamiento a juicio procede cuando existe plena prueba de la existencia del hecho punible (aspecto objetivo) y graves indicios de vinculación (aspecto subjetivo). En la resolución impugnada se hace alusión a la incorporación en el sumario de la declaración del ofendido, la propiedad y preexistencia de los bienes hurtados, los testimonios de los hijos del ofendido que señalan haber visto al procesado retirar los bienes muebles, la diligencia de allanamiento en donde se encontraron los bienes del ofendido, así como las declaraciones de las personas que acompañaron al procesado a retirar los bienes del domicilio del ofendido.

Por lo que el Pleno no observa la transgresión del artículo 32 de nuestra

Constitución por parte del Segundo Tribunal Superior de Justicia al proferir su auto de proceder.

Ahora bien, es un hecho cierto que el indagado CARBONE VAN DER HANS no amplió su declaración indagatoria, pero al rendir su primera deposición fue puesto en conocimiento de los cargos que pesaban en su contra y, posteriormente su abogado defensor participó en la audiencia preliminar, solicitando, incluso, una ampliación del sumario al juez de la causa.

Con respecto a ello debe el Pleno reiterar que la declaración indagatoria es el principal medio de defensa del procesado y sólo se recibe "... a las personas a quienes los indicios o las evidencias señalan como presuntos autores o partícipes en la comisión de un delito, siempre que, por otra parte, conste en el sumario la prueba del hecho punible. Por tanto, el funcionario debe hacer un examen racional del hecho denunciado, las aportaciones probatorias que constan en el sumario, las circunstancias que rodearon los hechos investigados, los antecedentes del mismo y la probable conducta del sujeto, antes de vincular el presunto imputado a la encuesta mediante declaración indagatoria." (MONTERO, Adolfo, DERECHO PROCESAL PENAL. Universidad de Panamá, Volumen I, Parte General, El Sumario, Panamá, 1994 pág. 159).

Lo que significa que, sólo cuando se hayan cubierto todos estos aspectos dentro del sumario procede la declaración, por lo que no puede indicarse, en modo alguno, que el sumariado debió ser llamado desde el inicio de la investigación. Por otra parte tampoco es razonable pretender que habiendo transcurrido siete meses de la investigación sumarial el expediente debía permanecer por siete meses más en el Ministerio Público, hasta que el imputado formulara sus descargos, pues ello sería una transgresión a las garantía del debido proceso, ya que la ley establece un término limite para que se surta la instrucción sumarial.

Por otro lado JUAN ANTONIO CARBONE VAN DER HANS, como se anotó en párrafos anteriores, fue representado en el acto de audiencia y solicitó incluso, que el sumario fuese devuelto al Ministerio Público para una ampliación por consideraba que no se encontraba perfeccionado, criterio que no fue avalado por el ente jurisdiccional, ya que sobreseyó definitivamente.

Ahora bien, el artículo 2208 del Código Judicial indica que: "Si el Juez o tribunal de la causa al calificar el mérito del sumario considera que no es el caso sobreseer dictará auto de enjuiciamiento. El artículo 2215 indica que: "El sobreseimiento definitivo no podrá decretarse sino cuando esté agotada la investigación tendiente a comprobar el hecho punible y determinar la identidad del imputado". Por lo que procesalmente la resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia es acorde a derecho y no vulnera por ende las garantías constitucionales del procesado.

El artículo 32 de la Constitución que regula lo relativo al debido proceso consiste en que:

> " ...nadie puede ser juzgado sino de conformidad con la ritualidad previamente establecida, para que se cumpla aquel axioma de que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio con la plenitud de las formalidades legales. Implica la existencia previa de los procedimientos de investigación y de juzgamiento a los que deben ser sometidos los imputados y mediante los cuales se fijan las competencias, las formas y ritos que han de presidir la realización de toda actuación penal.
>
> Esto indica que, desde el punto de vista formal, el debido proceso es la sumatoria de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el funcionario competente, en la oportunidad y el lugar debidos, con las formalidades legales. Se conjugan conceptos como los de la legalidad y del juez natural, limitados en el tiempo, en el espacio y en el modo." (SUÁREZ SÁNCHEZ, Alberto. EL DEBIDO PROCESO PENAL,

Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1998, Pág. 196)

El Pleno observa que JUAN ANTONIO CARBONE VAN DER HANS tenía conocimiento de los cargos que se le habían formulado, y aunque no presentó sus excepciones a los cargos que se le formularon por acogerse al artículo 22 de la Constitución, no se puede concluir que hubo vulneración del debido proceso porque el expediente fuere remitido al ente jurisdiccional sin que se tomara la declaración de descargos.

Ello es así por cuanto sí bien dicha declaración debió ser nuevamente ordenada por el funcionario de instrucción permitiendo al imputado ejercer su derecho a ser asistido por su abogado, tal omisión no reviste la gravedad a que se refiere el artículo 32 de la Constitución, pues dentro del periodo probatorio en el plenario, se pueden practicar las pruebas que estimen a bien las partes y que no fueron evacuadas en el sumario, incluyendo por supuesto, la declaración del imputado.

La fase sumaria se caracteriza por ser acusatoria, mientras que la plenaria hace gala de la amplitud del contradictorio, allí el defensor puede solicitar la practica de pruebas testimoniales, incluso la del procesado, permitiendo al juzgador percibir y valorar de manera directa la prueba, por lo que el artículo 32 de nuestra Carta Magna no ha sido vulnerado.

En consecuencia lo procedente es negar la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por el licenciado JERÓNIMO MEJÍA en representación de JUAN ANTONIO CARBONE VAN DER HANS.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado JERÓNIMO MEJÍA en representación de JUAN ANTONIO CARBONE VANDER HANS.

Notifiquese,

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDA POR EL SEÑOR BENY LEON ROZENBAUM BAJTEL CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada Gilma De León presentó ante el Pleno de la Corte Suprema, en nombre y representación del señor BENY LEÓN ROZENBAUM BAJTEL, acción de amparo de garantías constitucionales contra las órdenes de hacer contenidas en el Auto N° 631 de 14 de mayo de 1999, y el Auto de 22 de febrero de 2000, dictados por la Juez Tercera Seccional de Familia y el Tribunal Superior de Familia, respectivamente, dentro del proceso de divorcio que contra el amparista, interpuso la Sra. JANNETTE ESTELLA TSIMOGIANIS RODRÍGUEZ DE ROZENBAUM.

El Auto N° 631 revocó el Auto N° 489 de 5 de mayo de 1999, que había

admitido la demanda de divorcio impetrada por la Sra. TSIMOGIANIS DE ROZENBAUM, pero le había negado las peticiones especiales consistentes en la autorización para abandonar el hogar conyugal junto a sus menores hijos, OREN MEIR, GUTI AD DAVID y TAMARA BLIMA ROZENBAUM TSIMOGIANIS, y la concesión de su Guarda, Crianza y Educación. Las resoluciones impugnadas concedieron y confirmaron, respectivamente, dichas solicitudes.

La acción se funda principalmente en los siguientes hechos:

Que la esposa del amparista entabló demanda de divorcio en su contra, que quedó radicada en el Juzgado Tercero Seccional de Familia, por las causales contenidas en los numerales 2° -trato cruel físico o psíquico si con él se hace imposible la paz y el sosiego doméstico- y 3° -relación sexual extramarital- del artículo 212 del Código de la Familia y del Menor.

Que el libelo de demanda no hizo referencia alguna ni presentó pruebas sobre la causal de relación extramarital, y que sólo se refiere a la causal de trato cruel, "pero sin presentar pruebas ciertas e indubitables".

Que, por el contrario, la esposa del amparista fue quien incurrió en la causal 3ª de divorcio, al sostener relaciones extramaritales, que son probadas -a su juicio- con declaraciones juradas testimoniales de la esposa del sujeto con el cual las mantiene, de la niñera del matrimonio, de la empleada, así como de otras personas, y también la evaluación sexológica que indica que la demandante sufre de coprolalia.

Que el Auto de primer grado, refutado en amparo, consideró, en cuanto a la petición de Separación Legal de los Cónyuges, que pese a la aportación de las declaraciones testimoniales y de los Informes Psicológicos y Psiquiátricos particulares que recomendaron la separación de los cónyuges, infirió el Juzgado Tercero que dichas declaraciones fueron resultado de entrevistas a una de las partes y a sus menores hijos, sin que se hiciera una evaluación profunda de las características personales del demandado, por lo que la Juzgadora no pudo aseverar que las dificultades conyugales del matrimonio, fueran atribuibles al Sr. BENY ROZENBAUM.

También consideró la Juzgadora que la disfuncionalidad del matrimonio se había iniciado antes de 1996 -según la demanda- circunstancia que la indujo a considerar que las pruebas contenidas en el expediente no le crearon la convicción de que de la necesidad urgente de la separación legal solicitada.

En otro orden de cosas, apuntó la representante legal del amparista que el Auto N° 489 de 5 de mayo de 1999 -que originalmente admitió la demanda de divorcio y negó las medidas especiales solicitadas- fue personalmente notificado a la demandante el día 10 de mayo de 1999, y que quedó ejecutoriado sin que ésta interpusiera el recurso de apelación a que tenía derecho.

Pero un día después de dicha ejecutoria, la representante legal de la demandante presentó un nuevo escrito -extemporáneo según la letrada- a la Juez Tercera Seccional de Familia, en el que reiteraba las mismas medidas especiales ya negadas por el Auto N° 489, pero con carácter de urgencia, por razón de la afección psicológica ocasionada a sus menores hijos.

Dicha solicitud fue concedida por la Juez Tercera Seccional de Familia, mediante el Auto N° 631 de 14 de mayo de 1999, impugnado en amparo, autorizando la separación legal de los cónyuges, su salida del hogar conyugal, así como la Guarda, Crianza y Custodia de sus menores hijos.

Según el amparista, mediante ésta Resolución, la Juez primaria contradijo sus propias conclusiones expuestas en la decisión anterior, por lo que ambos autos son contradictorios sobre una misma materia, y sobre la misma petición.

En el Auto N° 631, la Juez Tercera Seccional de Familia consideró que, si

bien en el Auto anterior había negado las peticiones especiales, la nueva petición aludió a afectación psicológica que podían estar atravesando sus menores hijos, apoyándose en las recomendaciones vertidas por los especialistas privados que elaboraron las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, aportadas con el escrito de demanda.

El demandado -amparista- sostuvo también que el aporte probatorio que hizo para fundar su pretensión fue más abundante, y no fue utilizada por la Juez Tercera de Familia en el Auto N° 631, para revocar de hecho el Auto N° 489, toda vez que en el primero concedió las peticiones especiales sin revocar formalmente la decisión anterior.

Que las pruebas de la demandante fueron recogidas fuera de proceso, sin la comparecencia personal del afectado, y sin ser ratificadas por el Tribunal de la causa.

Que el ad-quem, en vez de sanear el proceso por la existencia de vicio de nulidad, confirmó el Auto venido en apelación.

Que, según el artículo 788 del Código de la Familia y el Menor, el proceso de separación de cuerpos es ordinario o común, y que, aunque el artículo 217 íbidem faculta al Juez de la causa para tomar medidas provisionales de urgencia mientras dure el juicio de divorcio, no puede autorizar a la demandante para que abandone con sus hijos, el hogar conyugal, ni para conceder su Guarda, Crianza y Educación, ya que éstas pretensiones sólo pueden pretenderse mediante un proceso sumario, distinto al ordinario, tal como lo establece el artículo 793, ibid.; por ello, tanto el a-quo como el ad-quem, incurrieron en la violación del principio constitucional del debido proceso, así como en extralimitación de funciones.

Tampoco el régimen de comunicación y visitas, que se le ha negado al amparista, está contemplado en el artículo 217 de la excerta; empero, se le otorgaron las peticiones especiales a la Sra. JANNETTE PSIMOGIANIS, madre negligente, descuidada e inmoral, pese a no habérsele dado al amparista traslado de la demanda, y menos aún haberlo vencido en juicio.

Con ello, los niños -según el actor- han quedado expuestos al mal ejemplo de la madre.

En cuanto a las disposiciones constitucionales violadas y el concepto de dicha violación, conceptuó el amparista que las resoluciones acusadas infringieron los artículos 18, 32, 52 y 55 de la Constitución Nacional.

El artículo 18 -responsabilidades de los servidores públicos- fue infringido por los Juzgadores primario y secundario, al impedir al demandado -amparista- la oportunidad de contradecir las pruebas de su contraparte, basándose en pruebas no ratificadas en juicio y sin citar al demandado; además, violentó el procedimiento legal dispuesto para esa clase de procesos.

También apuntó que el Auto N° 489 que negó las peticiones especiales se ejecutorió, y fue revocado tácitamente por el Auto impugnado en amparo, que concedió las mismas peticiones.

Por ello hubo extralimitación de funciones -a su juicio- de la Juez Tercera Seccional de Familia y el Tribunal Superior de Familia.

En cuanto a la presunta infracción del artículo 32 Constitucional, argumentó que tanto el a-quo como el ad-quem incumplieron el debido proceso, porque infringieron los artículos 771, 781, 804, 818, 831, 837, 858, 896, 910, 982, etc., del Código Judicial, que ordena al Juez observar y admitir personalmente las pruebas, así como inadmitir pruebas extraprocesales sin ratificación ni comparecencia personal del afectado.

También se violó el debido proceso, por cuanto se aplicó un procedimiento distinto -ordinario- al que le correspondía a las peticiones especiales hechas en la demanda de divorcio -sumario-; ello, sin perjuicio de que la Juez Tercera Seccional de Familia desconoció el Auto N° 489, que estaba debidamente ejecutoriado, al emitir el Auto N° 631, sin revocarlo, atentando -a su juicio- contra el principio de seguridad jurídica.

En otro orden de cosas, el artículo 52 de la Carta Magna -deber Estatal de protección al matrimonio, la maternidad, y la familia, así como la salud física, mental y moral de los menores y garantiza su derecho a la alimentación, salud, educación, educación y previsión sociales, y de los ancianos- fue presuntamente infringido, toda vez que las autoridades acusadas prefirieron otorgarle a la madre, la Guarda y Crianza de los niños, sin considerar su carencia de buena condición social y moral.

Finalmente, el artículo 55 de la Carta Política -definición de patria potestad y deber de los padres de educar, alimentar y proteger a sus hijos para que tengan un buena crianza y adecuado desarrollo físico y espiritual, y regulación legal del ejercicio de ella-, fue quebrantado de manera directa por omisión por los Autos impugnados, ya que los Juzgadores le dieron crédito "a una demanda plagada de mentiras para justificar una exabrupta decisión supuestamente provisional y urgente, perjudicando los menores intereses de los menores y de la familia", sin aplicar los principios de la sana crítica ni atender las pruebas presentadas por el demandado.

Admitida la acción, y cumpliendo los trámites procesales pertinentes, se corrió traslado del amparo a la Magistrada del Tribunal Superior de Familia, Ángela Russo de Cedeño -Ponente-mediante Nota N° SGP-1092-00 de 1° de junio de 2000, solicitándosele el envío de la actuación o en su defecto, un informe acerca de los hechos materia del recurso; éste traslado fue respondido mediante Nota No. 44/TSF.AR/2000 de 2 de junio.

Dicho Informe sostiene que, luego de notificado el Auto confirmatorio de 22 de febrero de 2000, el expediente fue enviado inmediatamente al Juzgado de origen, razón por la que el Tribunal no puede remitir el expediente.

También señaló el Tribunal Superior de Familia que ese mismo día, dictó otra resolución relacionada al caso, en la que modificó y adicionó el Auto N° 773 de 16 de julio de 1999, dentro del cuadernillo de medidas provisionales, y que reglamentaba las visitas del Sr. ROZENBAUM, a solicitud propia.

Por otro lado, afirmó el ad-quem que el Auto de 22 de febrero pasado, que confirmó el Auto N° 631, hizo alusión a otra resolución de dicho Tribunal Superior, contenida en cuadernillo de medidas provisionales dentro del proceso de Comunicación y Visitas, aparte, activado por el Sr. ROZENBAUM, y que le fue concedido en primera instancia, y ampliadas por dicho Tribunal en alzada.

Expuestos los principales elementos del caso, se dispone el Pleno resolver el fondo de la controversia, no sin antes verter las siguientes consideraciones.

Considera el amparista que se violó el artículo 18 Constitución -responsabilidad de los particulares por violación de la ley, y de los funcionarios públicos por lo mismo, y por extralimitación de funciones u omisión de ellas-, al conceder la a-quo y confirmar el ad-quem la Guarda y Crianza y Régimen de Comunicación y Visita a la madre de los menores, unilateralmente, sin permitir al padre contradecir dichas pretensiones ni ser oído, ni tomar en cuenta las pruebas por él presentadas, y omitiendo el procedimiento que el Código de la Familia y el Menor le otorga a esta clase de pretensiones.

Que el Auto N° 489, que negó inicialmente las medidas provisionales especiales, quedó ejecutoriado al no apelarlo la demandante, conforme lo establece el artículo 982 del Código Judicial; empero, estando vigente ésta resolución, la misma Juzgadora dictó el Auto N° 631, que sin revocar el anterior,

accedió la petición inicial.

Sobre el particular, hay que manifestar que la abundante jurisprudencia producida por esta Corporación de Justicia, ha establecido que el artículo 18 de la Constitución es una norma de naturaleza programática, por no contener derechos subjetivos susceptibles de ser violados; sólo si la norma se relaciona de manera expresa con otra del mismo rango, que sí contenga este tipo de derecho, puede entonces considerarse la violación de la norma cuya violación estamos analizando.

En este caso, la representante legal del amparista no relaciona la norma sino que trata de establecer su violación autónomamente; por lo tanto, no prospera la pretensión sobre la violación del artículo 18 Constitucional.

Ocupándonos de la presunta violación del artículo 32 Constitucional, es necesario hacer las siguientes acotaciones.

Según el actor, la violación consiste en la infracción de los siguientes artículos del Código Judicial: 771 -práctica personal de las pruebas por parte del Juez o por Juez comisionado-, 781 -principio de preclusión en lo concerniente a las pruebas- 804 -trámite de aseguramiento de pruebas- 818 -práctica de testimonio prejudicial-, 831 -reglas para la prueba de hechos que deben constar en documentos-, 837 -valoración de documentos oficiales que no versan sobre actos jurídicos de la administración-, 858 -apreciación de documentos emanados de terceros-, 896 -testigos sospechosos para declarar-, 910 -requisitos de validez de para las declaraciones rendidas fuera del proceso-, 982 -ejecutoria de las resoluciones- fueron infringidos -violando a su vez el artículo 32 Constitucional-, toda vez que la Juez Tercera Seccional de Familia y el Tribunal Superior de Familia concedieron y confirmaron respectivamente, las solicitudes especiales que hizo la Sra. JANNETTE ESTELA TSIMOGIANIS RODRÍGUEZ en su demanda de divorcio, tomando en cuenta sólo las probanzas procesales por ella presentadas, sin respetar el procedimiento para recepción de dichas pruebas, sobre valorándolas, sin tomar en cuenta las pruebas del amparista, infringiendo así, el debido proceso.

No coincide este criterio con el del Pleno, ya que el objeto de la impugnación que nos ocupa, son "medidas precautorias provisionales", que la Ley autoriza y que se han tomado mientras se desarrolla el proceso de divorcio; al concluir éste, la Juez puede muy bien revocar dichas medidas si la decisión de fondo es contraria a las mismas.

Las normas procedimentales invocadas por la Juez Tercera Seccional de Familia, citadas por el amparista, son pertinentes cuando hay que tomar la decisión de fondo del caso, cosa que no ocurre en esta oportunidad, ya que las medidas son -como se ha dicho- "provisionales", y adoptadas con la finalidad de proteger la integridad emocional y psicológica de los menores; si las medidas luego resultaren equívocas o innecesarias, puede entonces la Juez revocarlas y adoptar las que considere pertinentes.

En este sentido, el artículo 766 del Código de la Familia y el Menor es del siguiente tenor:

> "Artículo 766. Cuando el Juez considere necesaria la protección de los derechos de una parte, antes o durante la tramitación de un proceso, podrá decretar de oficio o a petición de parte, las medidas cautelares o tutelares que estime convenientes, las cuales se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar fianza o caución cuando albergare justo motivo."

Esta norma es de cumplimiento más inmediato que las normas sugeridas por el amparista, toda vez que aquellas son supletorias; además, en el presente caso, la Juzgadora consideró necesario, para proteger el interés superior del menor, evitar un mayor daño psicológico exponiéndolos a la presencia del padre; para tomar tal decisión, se basó en las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas

realizadas a los menores.

También dice la norma transcrita que el Juez puede aplicar "las medidas cautelares o tutelares que considere convenientes", sin hacer limitación alguna de las medidas que puede tomar, y adicionando las medidas taxativas contenidas en el artículo 217 alegado por la representante legal del actor, por lo que la Juzgadora está perfectamente facultada para adoptar medidas provisionales no contempladas en esta norma.

Esto deja sin fundamento el argumento de que el tipo de procedimiento que requiere la adopción de las medidas tomadas por la Juez Tercera de Familia, es diferente al utilizado; esos procedimientos que señala la letrada son obligatorios cuando esos son los procesos de fondo, es decir, cuando la pretensión de fondo de las partes es lograr la separación legal, la Guarda, Custodia y Educación.

En complemento a lo anterior, tampoco prospera el argumento de que ni la Juez Tercera Seccional de Familia ni el Tribunal Superior de Familia tomaron en consideración las pruebas aportadas por el Sr. BENY LEÓN ROZENBAUM, porque la abundante jurisprudencia producida por esta Colegiatura sobre la materia, dejó sentado que la acción de amparo de garantías constitucionales no puede involucrarse en la valoración que hace el Juzgador de las pruebas aportadas, porque convertiría el proceso de amparo en una tercera instancia, lo cual es ajeno a la naturaleza de esta acción constitucional.

Finalmente, en cuanto a la alegación referente a que el Auto N° 631 de 14 de mayo de 1999 concedió a la demandante del proceso de divorcio, las medidas especiales provisionales que había negado mediante el Auto N° 489 de 5 de mayo de 1999, que ya estaba ejecutoriado, es el criterio de esta Corporación de Justicia que la no revocación expresa del auto anterior no produce la nulidad del segundo, ya que, dada la naturaleza del negocio, la ley le otorga al Juzgador la flexibilidad necesaria para aplicar, modificar, cambiar o extinguir las medidas que crea necesarias para proteger, en este caso, el interés superior de los menores, que está involucrado en este caso.

Por lo tanto, tampoco prospera la pretensión del amparista, para que se declare la violación del artículo 32 de la Carta Fundamental.

En otro orden de cosas, para decidir la presunta violación del artículo 52 Constitucional, debemos señalar lo siguiente.

En primer lugar, el contenido de la norma, es del siguiente tenor:

> "ARTICULO 52: El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley determinará lo relativo al estado civil.
>
> El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos."

Consideró el amparista que los Juzgadores de las dos instancias incumplieron la obligación estatal -y de los funcionarios públicos por ende- de proteger la salud física, mental y moral de los menores ROZENBAUM TSIMOGIANIS, al otorgarle la Guarda, Crianza de los niños a su madre, pese a carecer de una situación económica, social y moral sólida, tal como lo hacen constar las probanzas procesales incorporadas por él al expediente.

Considera el Pleno que no es viable ventilar la presunta inconstitucionalidad de los Autos impugnados, ya que para hacerlo, se incurriría en la valoración de los elementos probatorios alegados por el amparista, lo cual, como ya establecimos en el análisis de la infracción anterior, traería como efecto que la Corte se convirtiera en tribunal de tercera instancia, lo cual es

incompatible con la naturaleza constitucional del negocio de marras; no prospera por lo tanto, la pretensión del actor.

Finalmente, para referirnos a la presunta violación del artículo 55 íbidem, debemos observar el contenido de la norma:

> "ARTICULO 55: La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación con los hijos.
>
> Los padres están obligados a alimentar, educar y proteger a sus hijos para que obtengan una buena crianza y un adecuado desarrollo físico y espiritual, y éstos a respetarlos y asistirlos."

Señaló la representante legal del señor ROZENBAUM BAJTEL que la decisión de los Juzgadores de primer y segundo grado, quienes las dictaron pretermitiendo el principio de sana crítica y las contrapruebas aportadas por el demandado, han expuesto a los menores ROZENBAUM TSIMOGIANIS a vivir con su madre, quien ha incumplido sus deberes de esposa y madre, mantiene una conducta inmoral y sostiene una situación económica y psicológica inestable, perjudicando sus intereses.

Incurre la letrada en el mismo vicio de las presuntas violaciones ya analizadas, porque cae nuevamente en la valoración de las pruebas presentadas por el Sr. ROZENBAUM BAJTEL, queriendo que la Corte se constituya en un tribunal de tercera instancia, para entrar a analizar las pruebas por él aportadas al expediente, iniciativa ésta que no puede ser permitida por esta Corporación de Justicia.

Por lo tanto, no prospera la pretensión del actor de que se declare la violación del artículo 55 Constitucional.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo de garantías constitucionales propuesto por el Sr. BENY LEÓN ROZENBAUM BAJTEL contra el Auto N° 631 de 14 de mayo de 1999, dictado por la Juez Tercera Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, y contra el Auto de 22 de febrero de 2000, dictado por el Tribunal Superior de Familia, que lo confirma.

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ERICK NORMAN BARRIOS CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 44-2000 DE 14 DE MARZO DE 2000 DICTADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE(19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ERICK NORMAN BARRIOS, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto demanda de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 44-2000 de 14 de marzo de

2000, mediante la cual el señor Ministro de Vivienda resolvió confirmar en todas sus partes, la Resolución de Rehabilitación N° 02-99 de 28 de julio de 1999 y la Resolución de Reconsideración N° 02-99 de 25 de noviembre de 1999, expedidas por la Dirección General de Arrendamientos, Departamento de Condena y Rehabilitación del Ministerio de Vivienda.

El amparista señala que la orden impugnada viola los artículos 32 y 47 de la Constitución Política.

Ahora bien, para admitir la presente acción de amparo es necesario su examen a fin de comprobar si está debidamente formulada, reúne los requisitos señalados en el artículo 2610 del Código Judicial, y no es manifiestamente improcedente de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 2611 del mismo Código.

En este sentido, este Tribunal de Amparo observa que la orden de hacer que se ataca mediante la presente acción de amparo, es un acto administrativo que fue impugnado en la vía gubernativa (Ver fojas 1 a 11 del cuadernillo), y agotada esta vía, procede la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en virtud de la preferencia de la vía en sede administrativa sobre la vía extraordinaria de amparo constitucional.

Además, al explicar el concepto de la violación del artículo 32 de la Constitución, el demandante hace alusión al incumplimiento del artículo 10 del Decreto Ejecutivo N° 87 de 28 de septiembre de 1993 (f. 28), con lo cual se refiere a un problema de legalidad que debe ser dilucidado en la vía contencioso administrativa.

Finalmente, esta Superioridad estima oportuno reiterar una vez más, que el recurso de amparo de garantías constitucionales, por ser de naturaleza extraordinaria, no procede si existen otros remedios jurídicos consagrados en el ordenamiento legal para tutelar el derecho que se considera conculcado.

Por las razones expuestas la demanda es manifiestamente improcedente y no debe admitirse en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2611 del Código Judicial.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado ERICK NORMAN BARRIOS, en su propio nombre y representación, contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 44-2000 de 14 de marzo de 2000, dictada por el Ministro de Vivienda.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JUAN PAULINO RODRÍGUEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ GALO MARTÍNEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA NO.14-700-2023-99, DE 22 DE DICIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Juan Paulino Rodríguez, actuando en nombre y representacón del señor José Galo Martínez, ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Nota No.14-700-2023, de 22 de diciembre de 1999, proferida por el Director General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda.

La referida nota impugnada consiste en una comunicación que hizo el Director General de Arrendamiento a la señora Corregidora de El Chorrillo en los siguientes términos:

"Estimada Licenciada:

> En vista de haberse extendido en exceso el plazo de noventa (90) días concedidos mediante la Resolución de condena No. 06-97 del 17 de marzo de 1997, proferido por esta Dirección, ordenamos se ejecute el lanzamiento de los comercios establecidos en el edificio No 17-25, conocido como "EL VATICANO" y los cuales son: Cantina Siete Vida, representado por María Vasquez; Bodega Plaza, representada por Sergio Mock Rodríguez/Gertrudis Vargas y Restaurante León, cuyo representante desconocemos".(Destaca el Pleno).

A juicio de la parte actora, esta orden es violatoria de sus derechos constitucionales, específicamente del artículo 32 de la Constitución Política, que consagra la garantía fundamental del debido proceso, y explica la alegada infracción afirmando que "...la Resolución No. 06-97 de fecha 17 de marzo de 1997, proferida por la Dirección a su cargo, RESOLVIO, como punto primero Condenar y Ordenar la demolición del inmueble No.1725, conocido como el Vaticano; en el Punto Segundo: Notificar a los arrendatarios del mencionado inmueble que deberán desalojar el mismo en el término de noventa (90) días, contados a partir de su notificción, (lo cual no cumplió), en el Punto Tercero: Notificar al Propietario o, Representante Legal del Inmueble de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 98 de 4 de octubre de 1973, (lo cual si cumplió)(sic), Punto Quinto: Comunicar a las partes que contra esta resolución proceden los Recursos de reconsideración y apelación..., recursos estos que sólo utilizó el Propietario del inmueble por haber sido notificado en debida forma, no así los arrendatarios del inmueble, por lo que al no haber estado debidamente notificadas las partes de la referida resolución (No. 06-97) la misma no se encuentra en firme y ejecutoriada, en consecuencia la orden de hacer emitida por el Director General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda, dirigida al Corregidor del Chorrillo (sic), viola los derechos y garantías que la constitución Nacional consigna en el artículo 32 que trata sobre el debido proceso".

La Resolución No. 06-97, de 17 de marzo de 1997, a que se refiere el demandante, fue emitida por la Dirección General del Arrendamiento y fue objeto de una demanda de plena jurisdicción por el propietario del bien cuya condena y demolición ordenó la autoridad administrativa, mediante el citado acto administrativo.

El argumento central del actor se observa que consiste en la violación del derecho de defensa contenido en la garantía constitucional del debido proceso; sin embargo, estima el Pleno que la presente demanda no debe ser admitida por las siguientes razones: la Nota objeto de censura ha sido expedida por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a un asunto que fue objeto de un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, ventilado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, litigio que fue decidido por esa jurisdicción especial mediante sentencia de 13 de agosto de 1999, copia autenticada de la cual el propio demandante aporta según se aprecia en el cuadernillo de amparo. Es oportuno citar parte de dicha sentencia en la que se observa que la autoridad administrativa actuó bajo fundadas razones para ordenar, a través de la Resolución No. 06-97, de 17 de marzo de 1997, la condena y consiguiente demolición del edificio en que el amparista alega ser arrendatario. Señaló la

Sala Tercera:

> "...esta Corporación Judicial comprende la posición de los inquilinos, en el sentido de que ellos no querrán que se les condene el inmueble en el que habitan, a pesar del peligro al cual están expuestos, pues los cómodos alquileres o, la ausencia de ellos, beneficia económicamente. Sin embargo esta situación no es lo que toma en cuenta el Director General de Arrendamiento, pues como se señaló, la Ley es clara al prever cuándo se debe acceder a la condena y posterior demolición de viviendas urbanas. En este sentido es obvio el deterioro del inmueble, lo que no da cabida a una rehabilitación, sino a una nueva construcción..., no ve esta Sala interés de la Dirección General de Arrendamiento de 'cerrarle las puertas' a los propietarios de bienes inmuebles que se encuentran en malas condiciones físicas y sanitarias, para la rehabilitación de los mismos pues en este caso claramente existen motivos de peso que obligaron a dicha dependencia del Ministerio de Vivienda a ordenar la condena y demolición del inmueble 17-25, conocido como El Vaticano, como son los informes antes descritos.
>
> Por lo comentado, no prosperan los cargos endilgados a la Resolución No. 06-97 de 17 de marzo de 1997".

Este fallo que decidió la legalidad de la resolución antes mencionada, es final, definitivo y obligatorio, de acuerdo al inciso final del numeral 2, artículo 203, de la Constitución Política de la República.

Tampoco debe dársele curso a la presnete demanda de amparo porque la nota contentiva de la supuesta orden de hacer es parte de los trámites o medidas administrativas de ejecución (cumplimiento) de la orden de condena y demolición que recayó sobre el inmueble 17-25 denominado "El Vaticano", en estado ruinoso, lo cual constituye un peligro para los asociados, entre ellos los inquilinos y comerciantes que habitan el mismo. Esta circunstancia potencialmente peligrosa fue advertida por el Ministerio de Vivienda a través de la dependencia competente con la participación del Representente de Corregimiento, según así se deja constancia en la Resolución No. 06-97, y la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de la República.

Otro motivo específico para la inadmisión de esta acción radica en que el demandante no ha aportado prueba idónea sobre su condición de arrendatario, de lo que resulta que no ha probado el derecho o interés legítimo de rango constitucional que le haya sido vulnerado.

En tal sentido, los autos no registran una orden de desalojo que afecte a José Galo Martínez Reyes. El texto literal de la nota contra la que se dirige el amparo se refiere a otras personas comerciantes cuyos locales ubicados en el edificio "El Vaticano", no han sido desalojados aún por lo que se ordenó al Corrgidor que procediera con el lanzamiento respectivo.

Por último, el Pleno desea dejar constancia del requisito que consiste en la probabilidad de un daño grave e inminente para ourrir en vía de amparo, ya que la Resolución No. 06-97 se emitió el 17 de marzo de 1997, la sentencia de la Sala Tercera de esta Corporación que declaró legal la misma, el 19 de agosto de 1999, y la Nota impugnada mediante el amparo analizado está fechada el 22 de diciembre de 1999, mientras que el amparista utilizó esta acción extraordinaria el 14 de junio del año 2000. Sobre el particular el artículo 2606, en la parte respectiva preceptúa lo siguiente:

> "Esta acción de amparo de garantías constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación

inmediata.
...
...
..." (Destaca el Pleno).

El Pleno, en sentencia de 2 de octubre de 1991, bajo la ponencia del doctor César Quintero, se refirió a la parte del inciso destacado en la norma copiada al explicar que es "precisamente la gravedad y premura de la situación que afecta las garantías constitucionales uno de los aspectos fundamentales por el cual se instituye el amparo, puesto que de no requerirse una revocación inmediata de la orden, se podría impugnar la orden acusada por la vía ordinaria.

Contribuye a reiterar el planteamiento que precede, otro elemento como lo es la naturaleza del procedimiento para la acción de amparo el cual es sumario, lo que evidencia la importancia de remediar la orden impugnada de manera expedita y evitar con ello que se ocasione un daño mayor.

En jurisprudencia reiterada de la Corte -recalca la citada sentencia- se ha sostenido que lo que motiva el establecimiento de un trámite especial en la demanda de amparo, es precisamente la urgencia de la finalidad que persigue, la cual es eliminar inmediatamente la orden que conculca las garantías fundamentales" (Ver R.J. de octubre de 1991, p. 11).

En el presente asunto, el Pleno considera que la acción o demanda bajo estudio, de haber sido procedente, no fue presentada con la prontitud propia que requiere la inminencia y gravedad de una lesión de derechos o garantías constitucionales cuya tutela funda precisamente la acción de amparo.

En mérito de lo expuesto, esta Sala Plena concluye que como la demanda de amparo propuesta es manifiestamente improcedente no debe admitirse, de conformidad con el artículo 2611 del Código Judicial.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el señor José Galo Martínez, mediante apoderado judicial, contra la orden de hacer contenida en la Nota No. 14-700-2023, de 22 de diciembre de 1999, emitida por el Director General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda.

Notifiquese

(fdo.) ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. JUAN PAULINO RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ANAYANSI DEL CARMEN RANGEL ALAIN CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2000 DICTADA POR LOS MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FEDERICO LEE. PANAMA, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado JUAN PAULINO RODRÍGUEZ, actuando en nombre y representación de ANAYANSI DEL CARMEN RANGEL ALAIN, ha presentado demanda de Amparo de Garantías

Constitucionales contra la Resolución de 24 de mayo de 2000 expedida por los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

El amparista fundamenta su actuación en los siguientes hechos:

"PRIMERO: El juzgado Primero de Circuito de Panamá, Ramo Penal, mediante Resolución dictada el 26 de abril de 1999, DECRETO la Ampliación del Sumario seguido a MARGARITA PACHECO AVILA, ENEIDA GARCÍA DE PILE Y ANAYANSI DEL CARMEN RANGEL, por delito Contra el Patrimonio la FE PUBLICA, cometido en perjuicio d e CASA EGEO, S. A..

SEGUNDO: Con fecha 30 de septiembre de 1999, la Fiscalía Segunda del Primer Circuito Judicial de Panamá, luego de cumplir con la ampliación remite al Señor Juez Primero de Circuito, la VISTA DE AMPLIACIÓN N°21, solicitando el LALAMIENTO A JUICIO de las imputadas.

TERCERO: El Juzgado Primero de Circuito de Panamá, Ramo Penal, mediante Resolución dictada el día 12 de enero de 2000, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE a MARGARITA ELIZABETH PACHECO AVILA, ANAYANSI DEL CARMEN RANGEL ALAIN Y ENEIDA GARCÍA PILE de los cargos imputados. Se ordena la compulsa de copias a la esfera municipal en lo relacionado al delito contra la FE PUBLICA y declara la NULIDAD de todo lo actuado, a partir de fojas 914, 919, 926, 931, 940, 941, 948 y de fojas 951 y 967.

De la anterior decisión APELO la Fiscalía Segundo del Circuito de Panamá.

CUARTO: Con fecha 24 de mayo de 2000, el Segundo Tribual Superior de Justicia, ordena otra ampliación del sumario por considerar que la investigación se encuentra imperfecta.

QUINTO: De acuerdo con el artículo 2207-C adicionado al Código Judicial por la Ley 1 de 3 de enero de 1995, la ampliación del sumario solo podrá ordenarse por una sola vez, cuando el Juez considere que la investigación no estuviere completa."

Al interponer la demanda de amparo de garantías constitucionales, el amparista señaló que se violaron los artículos 18 y 32 de la Carta Magna, los cuales consagran los principios de la responsabilidad de los servidores públicos y particulares y el principio del debido proceso, además de que la orden de hacer atacada contradice de forma directa el Código de Procedimiento Penal, el cual en su artículo 2207-C solo permite la ampliación del sumario por una sola vez. Continuó expresando el recurrente que, nuestro Código de Procedimiento Penal no contempla la figura del agotamiento.

Ahora bien, al estudiar el negocio que nos ocupa advierte el Pleno que efectivamente en el proceso penal dentro del cual se profirió la resolución atacada, se han ordenado dos ampliaciones, lo cual vulnera el principio constitucional del debido proceso legal.

El Pleno en un número plural de ocasiones (fallos de 3 de mayo de 1994, 18 de mayo de 1994, 27 de diciembre de 1999 y 26 de junio de 1998) ha señalado el hecho de que el Juzgador señale la práctica de una segunda ampliación de la indagatoria, constituye una lesión del debido proceso.

Así, por ejemplo, en la sentencia de amparo de 26 de junio de 1998, señaló:

"Consideramos que el Tribunal Superior violó el debido proceso constitucional de ABRAHAM DAVID MIZRACHI, al ordenar por segunda vez la ampliación del sumario. Como se observa claramente, en el proceso

penal que se sigue contra el señor MIZRACHI, el Tribunal de instancia ya había ordenado la ampliación del sumario mediante auto N°32 de 23 de junio de 1997. Dicha ampliación fue cumplida por el funcionario de instrucción en su debido momento.

Para justificar su conducta, el Tribunal Superior manifiesta que:

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el demandante, es necesario tener en consideración lo previsto en el artículo 2222 del Código Judicial, el cual prevé que luego de que el tribunal competente haya recibido el proceso respectivo, instruido para comprobar el hecho punible y descubrir a sus autores o partícipes, examinará si la averiguación está completa, pero si no lo estuviere, dispondrá lo conducente a la perfección del sumario, que es lo que se procedió en la actuación atacada vía amparo de garantías constitucionales."

Como se aprecia, el Tribunal Superior no aplicó lo normado en el artículo 2207-C del Código Judicial, que es la norma específica que establece la ampliación, basándose en el artículo 2222 del Código Judicial pero es el caso que esa norma no autoriza a que se decrete una segunda ampliación.

Aceptar ese criterio sería invalidar el artículo 2207-C y las garantías incorporadas en dicho artículo, abriendo así la posibilidad para que los tribunales de justicia decreten ampliaciones ad infinitum, promoviendo nada más que la inseguridad jurídica.

En cuanto a lo anterior, no cabe duda que el artículo 2207-C es el único aplicable al caso que nos ocupa y este a su vez es muy claro al limitar la ampliación a "una sola vez". Dicho artículo fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley N°1 de 1995, Ley ésta que, entre otras cosas, estableció la audiencia preliminar, el proceso abreviado y eliminó el agotamiento del sumario. La posibilidad de ordenar una segunda ampliación del sumario no ha existido en el Código Judicial actual ni antes ni después de la vigencia de la Ley N°1, como ya lo consideró el Pleno, mediante sentencia de 3 de mayo de 1994. En esta ocasión se expresó así esta Corporación:

"Ahora bien, al estudiar el negocio que nos ocupa advierte el Pleno que efectivamente en el proceso penal dentro del cual se profirió la resolución atacada se ha ordenado dos ampliaciones, lo cual vulnera el principio constitucional del debido proceso legal..."

La Corte considera que la norma lo que realmente establece es el principio de que solamente se puede ordenar una vez la ampliación del sumario, sin perjuicio de que se pueda ordenar hasta por quince días el agotamiento de la investigación cuando la ampliación decretada no se hubiese cumplido a cabalidad y existan evidencias relevantes que deban allegarse al proceso.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el Licenciado JUAN PAULINO RODRÍGUEZ, en nombre y representación de ANAYANSI DEL CARMEN RANGEL ALAÍN; en consecuencia, REVOCA la Resolución de 24 de mayo del 2000, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) JORGE FEDERICO LEE

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A FAVOR DE CONSTRUCTORA GSM, S. A., CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION S/N DE 18 DE AGOSTO DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce el fondo del amparo de garantías constitucionales interpuesto por la Firma Forense WATSON & ASOCIADOS, representantes legales de la EMPRESA CONSTRUCTORA G.S.M., S. A., contra la Orden de Hacer contenida en la RESOLUCION S/N DE 18 DE AGOSTO DE 1999, expedida por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a través de la cual se acogió la entrega del Pliego de Peticiones presentado por el Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (S.U.N.T R A.C.S). y se le advirtió a la empleadora (Constructora G.S.M., S. A.), que de conformidad con lo que establece el artículo 443 del Código de Trabajo, la conciliación termina 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se le notificó el pliego de peticiones.

EL ACCIONANTE

Sostiene el amparista, que el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (S.U.N.T R A.C.S) presentó el día 18 de agosto de 1999, ante la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, un Pliego de Peticiones Laborales contra la Empresa Constructora G.S.M.,S. A.

Agrega, que al contestar el Pliego de Peticiones, solicitó a las autoridades del Ministerio de Trabajo, con fundamento en la Cláusula 68 de la Convención Colectiva de Trabajo CAPAC-SUNTRACS, se abstuviera de seguir conociendo del caso, toda vez que en dicha Convención se establece que los conflictos deben solucionarse internamente ante la Comisión de Avenimiento CAPAC-SUNTRACS, y así evitar que surjan procesos ante la esfera administrativa de trabajo, sin embargo, la Dirección General de Trabajo, se inhibe de resolver la Solicitud de Abstención, procediendo a darle continuidad al trámite de Conciliación.

Por otra parte señala, que la Dirección General de Trabajo tenía el deber jurídico de Ordenar la Corrección del Pliego de Peticiones, en los defectos de forma, debido a la carencia de certeza en cuanto a la información que presentaba. No obstante, dicha autoridad omitió ese procedimiento, una vez que fue contestado el Pliego de Peticiones, contraviniendo lo señalado en el artículo 32 de la Constitución Nacional y las Cláusulas que rigen la Convención CAPAC-SUNTRACS.

Por lo anterior solicita, se ordene la suspensión provisional de los efectos legales de la orden de hacer de 18 de agosto de 1999, emitida por la Dirección General de Trabajo. (fs. 2-12)

LA ORDEN IMPUGNADA

La Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mediante resolución calendada 18 de agosto de 1999, señaló lo siguiente:

"Cumpliendo con disposiciones legales contenidas en el artículo 435 del Código de Trabajo, se hace entrega personal a las Empresas: constructora G.S.M.,S. A. de un ejemplar del pliego de peticiones presentado en su debida forma el día 18 de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999) por el SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES.

Se advierte a la empresa, que de acuerdo con lo que establece el Artículo 436 del Código de Trabajo, tiene (5) días hábiles para dar contestación al Pliego de Peticiones, los cuales se comenzarán a contar al día siguiente de haber recibido la notificación.
...

CÚMPLASE,

EDILBERTO MÉNDEZ R.
Director General de Trabajo

NOTA: Se advierte a la parte empleadora que según dispone el Artículo 443 del Código de Trabajo, la CONCILIACIÓN TERMINA transcurridos los QUINCE (15) días hábiles contados a partir de la NOTIFICACIÓN del Pliego de Peticiones. " (f. 11)

CONTESTACIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

El licenciado LUIS CEDEÑO MEREL, en su calidad de Director General de Trabajo, no remitió el informe de los hechos objetos de la demanda, sino que se limitó a enviar mediante Nota No. 572-DGT-99 de 5 de octubre de 1999, el expediente constante de 39 fojas útiles, que contiene el pliego de peticiones presentado por el SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES en contra de la empresa CONSTRUCTORA G.S.M, S. A. (f.36)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Advierte el Pleno de esta Corporación de Justicia, que la presente acción fue presentada el 28 de septiembre de 1999 ante la Sala Quinta de Garantías Constitucionales, fecha en que se encontraba vigente la Ley 32 de 23 de julio de 1999. Con la abolición de dicha norma jurídica, mediante Ley 49 de 24 de octubre de 1999, estos negocios constitucionales pasaron a regirse bajo el imperio de la ley vigente, según lo dispuesto en el artículo 32 del Código Civil.

Señalado lo anterior, se observa, que el acto demandado es la resolución S/N de 18 de agosto de 1999, expedida por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a través de la cual se acogió el Pliego de Peticiones presentado por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, y se le advirtió a la empresa Constructora G.S.M., S. A., que de conformidad con lo establecido en el artículo 443 del Código de Trabajo la conciliación termina 15 días hábiles después de notificada dicha resolución.

En consecuencia, nos corresponde verificar si como se acusa en la presente acción, mediante la orden impartida por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, contenida en la resolución S/N de 18 de agosto de 1999, ha habido violación de las garantías fundamentales establecidas en nuestra Constitución.

En tal sentido observamos, que el mencionado Pliego de Peticiones fue presentado ante el Director General de Trabajo el día 18 de agosto de 1999, como bien se constata a foja 4-5 del expediente. Ese mismo día se instaura ante la Comisión de Avenimiento CAPAC-SUNTRACS, un proceso de incumplimiento por parte de la Empresa Constructora G.S.M., S. A. de la Convención CAPAC-SUNTRACS (f. 45 del antecedente).

Por otra parte, el Pleno advierte, que el amparista señala que la Dirección General de Trabajo no cumplió con una de las cláusulas establecidas en la Convención CAPAC-SUNTRACS 1998-2003, es decir, la cláusula No. 68, que expresa:

> "CLAUSULA 68: Comisión de Avenimiento.
> ...
> El sindicato conviene en que antes de presentar un Pliego de Peticiones contra la Empresa por diferencias de interpretación de la Convención Colectiva o de las normas laborales, llevará sus quejas a la Comisión de Avenimiento para buscarle solución.
>
> El incumplimiento del requisito anterior, faculta a la Empresa a solicitar ante el Ministerio de Trabajo que se abstenga de conocer el caso hasta tanto se cumpla con lo dispuesto en la presente cláusula."

Ante lo dispuesto en la cláusula anterior, el Pleno es del criterio, que si bien la autoridad demandada debió abstenerse de seguir conociendo del proceso, debido a que el mismo había sido sometido a la Comisión de Avenimiento CAPAC-SUNTRACS, no menos cierto es, que tanto la empresa proponente del amparo como el SUNTRACS, revelaron una conducta de poca colaboración para que el mecanismo del avenimiento cumpliera su función, toda vez que se constata a foja 44 del antecedente, que ninguna de las partes asistió a las audiencias programadas los días 24 de agosto y 7 de septiembre de 1999.

Dado lo anterior, debemos llamar la atención al amparista, debido a que, esta vía constitucional tiene por objeto salvaguardar las garantías constitucionales, pero bajo el entendimiento que las partes en conflicto han hecho uso de los procesos y trámites legales que la ley dispensa, de allí, que si de manera voluntaria las partes dejan precluir los términos para el ejercicio de un derecho en determinada etapa procesal, no puede alegarse la vulneración del artículo 32 de la Constitución Nacional, relativa al debido proceso.

Ahora bien, es oportuno igualmente llamar una vez más la atención a las autoridades administrativas de la Dirección General de Trabajo, debido a que la documentación que acompaña el pliego de cargos tiene que ser cuidadosamente revisada, para así verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios.

En tal sentido, en fallo de 27 de noviembre de 1998, el Pleno de esta Corporación Judicial, expresó lo siguiente:

> "La autoridad administrativa se encuentra obligada legalmente a dar traslado del Pliego de peticiones a la empresa, señalándole el término para contestar y el período para la conciliación. No obstante, esta Alta Corporación de Justicia ha manifestado anteriormente que es necesario que el Director General de Trabajo realice las investigaciones pertinentes con la finalidad de establecer la veracidad de las afirmaciones contenidas en el Pliego (Sentencia de 17 de mayo de 1996). También ha sido indicado que el artículo 433 del Código de Trabajo no puede ser interpretado aisladamente, sino en relación con las demás disposiciones que regulan la materia, de manera tal que el funcionario administrativo debe propiciar la corrección, reestructuración o rechazo del Pliego en caso de ser improcedente."
>
> (Mgdo. Ponente. Eligio Salas)

En consecuencia, dado que el recurrente no hizo uso del trámite legal estipulado en la Convención CAPAC-SUNTRACS, el Pleno de esta Corporación de Justicia, concluye en declarar no viable el recurso de amparo de garantías constitucionales interpuesto por la firma forense WATSON & ASOCIADOS en favor de CONSTRUCTORA G.S.M., S. A. y contra el Director General de Trabajo.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el amparo de garantías constitucionales interpuesto por la firma forense WATSON & ASOCIADOS en representación de CONSTRUCTORA G.S.M., S. A., contra la orden de hacer contenida en la resolución S/N de 18 de agosto de 1999, emitida por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO JORGE DANIEL SAMUDIO VEGA, EN REPRESENTACIÓN DE VILLA CORINA S. A., CONTRA EL JUEZ SEXTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema acción de amparo de derechos fundamentales formulada por el licenciado Jorge Daniel Samudio Vega, en representación de Hoodmy E. Samudio Villarreal, contra supuesta orden de hacer contenida en el auto N° 2366 de 24 de agosto de 1999, proferido por el Juzgado Sexto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La alzada se dirige contra el fallo de 20 de junio de 2000, emitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia. Esta medida jurisdiccional decidió no admitir la iniciativa constitucional propuesta, basada en los argumentos de que no se presentó prueba demostrativa de la orden atacada; que no existía daño grave e inminente y que no se comprobó la legitimidad del demandante (fs. 42-44).

Por anunciado el recurso en tiempo oportuno, el Pleno de la Corte procede a resolver conforme a derecho.

El examen de la actuación revela que, tal como señala el Tribunal Superior, el amparista no presentó prueba idónea de la existencia de la orden atacada. En efecto, se aprecia que el demandante aporta copia simple del auto N° 2366 de 24 de agosto de 1999, proferido por el Juzgado Sexto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, contentivo de la supuesta orden de hacer, sin atender el requerimiento de que toda copia de un acto que se pretenda demandar por la vía del amparo debe estar debidamente autenticada por el funcionario correspondiente. Sobre este particular, existe abundante jurisprudencia que advierte la necesidad de acompañar copia autenticada del acto que acusa como violatorio de sus derechos subjetivos de rango fundamental (Cfr. sentencias de 31 de octubre de 1991, de 17 de junio de 1992, de 23 de mayo de 1994 y de 18 de agosto de 1994).

De igual manera, se observa que el demandante omite satisfacer la exigencia legal de incorporar, con el libelo de la demanda, la correspondiente certificación del Registro Público que compruebe quién ejerce la representación legal de la Sociedad Anónima Villa Corina, tal como lo ordena el artículo 626 del Código Judicial. Este requisito es necesario para acreditar la legitimación

procesal activa de la parte demandante.

Como quiera que el libelo de amparo adolece de serios defectos que lo hacen improcedente, lo que corresponde en derecho es confirmar el fallo venido en grado de apelación.

Por las consideraciones expuestas, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 20 de junio de 2000, emitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA FORENSE BERRIOS Y BERRIOS, EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO CEDEÑO PERDOMO CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO, RAMO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por la firma forense BERRIOS Y BERRIOS, en representación de GABRIEL OCTAVIO CEDEÑO PERDOMO y en contra del JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO, RAMO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

Al encontrarse la presente acción constitucional en estado de resolver, a ello se pasa, previa las siguientes consideraciones:

Observa esta Corporación de Justicia que la resolución atacada mediante el recurso vertical, resulta ser la Sentencia de 9 de junio del 2000, proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, dentro de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales arriba descrita, la cual NO ADMITIÓ la referida acción.

Así las cosas, observamos que la promotora de la presente acción constitucional, ahora recurrente, actuando en su condición de apoderada judicial de GABRIEL OCTAVIO CEDEÑO PERDOMO, pretende con la alzada, que se revoque la Sentencia de 9 de junio del 2000, antes mencionada, en la cual el inferior jerárquico decidió NO ADMITIR la acción de amparo interpuesta contra la orden de hacer "contenida en la resolución del 23 de marzo 2000, mediante la cual se le ordena abrir causa criminal en contra del señor Gabriel Octavio Cedeño Perdomo y otras personas, por la comisión del delito genérico de falsificación de documentos en general".

El Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, al resolver en primera instancia el amparo de garantías constitucionales decidió no admitirlo, basándose fundamentalmente en que la acción propuesta no cumple con las exigencias del artículo 2606 del Código Judicial, por lo que consideró que la acción impetrada resulta ser manifiestamente improcedente en los términos previstos por el artículo 2611 del Código Judicial. Su decisión fue motivada en los siguientes

términos:

> "En cuanto a los requisitos que guardan relación con el artículo 2606 del Código Judicial, tenemos que dicha norma exige que el acto o la orden acusada de arbitraria revista las características de una orden de hacer o de no hacer que viole derechos fundamentales. En el presente caso estamos en presencia de un acto proceder el cual es preciso determinar si contiene un mandato imperativo contra determinada persona. Siendo que el auto es un acto de juzgamiento, no es susceptible de ser atacado vía amparo como lo ha sostenido la honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de noviembre de 1992, en la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Angel Lan Arceher contra el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal .." (Fs. 31).

Al sustentar la alzada, la apoderada del amparista manifestó lo siguiente:

> "Nuestra disconformidad con la resolución recurrida estriba en el hecho de que ni la Constitución ni el Código Judicial distinguen en cuanto a si a la orden impugnada debe estar contenida o no en una resolución interlocutoria o en una sentencia para que sea admitida una acción de amparo.
>
> Al respecto se señala en el artículo 50 de la Constitución Nacional que "... Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o no hacer ..." (lo subrayado es nuestro).
>
> Lo transcurrido se repite en el primer párrafo del artículo 2606 del Código Judicial y se señala en el tercer párrafo de dicho artículo que "Esta acción de amparo de garantías constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución ..." (Lo subrayado es nuestro).
>
> Y en el cuarto párrafo se señala que "...La acción de amparo de garantías constitucionales podrá interponerse contra resoluciones judiciales ..." (lo subrayado es nuestro).
> ...
> En cuanto a que si el acto impugnado reviste o no las características de una orden expedida contra una persona determinada, tenemos que en la parte resolutiva del acto impugnado se utilizan términos imperativos y estos términos imperativos se expiden en contra de nuestro poderdante.
>
> Por último, tenemos que si bien es cierto que en el libelo de la acción de amparo se censuran acciones u omisiones del funcionario instructor, no hay que perder de vista que el Juez de la causa, una vez concluido el sumario, es el funcionario encargado de subsanar o no estas acciones u omisiones, y es responsable de toda omisión o acción que ejecute al calificar el sumario, por medio de la cual se permita o se violen garantías fundamentales del procesado." (fs.34-35).

Luego de lo anterior, corresponde al Pleno determinar, si la resolución atacada a través de la presente acción constitucional, contiene una orden de hacer arbitraria, violatoria de derechos y garantías constitucionales. Es decir, lo importante es dilucidar si la decisión del juzgador puede considerarse una orden de hacer susceptible de ser atacada por vía del amparo..

El auto de proceder es un acto jurisdiccional de naturaleza formal, declarativa, interlocutoria, que tiene por objeto dilucidar si concurren o no los presupuestos del juicio oral, es decir, si se encuentran acreditadas en las

sumarias la existencia del hecho punible y la identidad de su presunto autor, con lo que se da inicio a la fase plenaria del proceso penal (artículo 2220 C.J.).

Así lo ha manifestado el Pleno de esta Corporación de Justicia en situaciones similares, tal como lo señaló el Primer Tribunal Superior de Justicia, en torno a la improcedencia del proceso de amparo para enervar este acto jurisdiccional, en Sentencias de 16 de noviembre de 1992, 28 de junio de 1993 y 30 de octubre de 1998.

Por otro lado, en el transcurso de la fase plenaria del proceso penal ordinario la defensa podrá hacer valer los medios de defensa a favor de su patrocinado, los que por la naturaleza extraordinaria del amparo de garantías constitucionales no pueden resolverse por esta especialísima vía.

En virtud de lo anteriormente expuesto, no le queda al Pleno otra alternativa que la de reiterar el criterio ya expuesto en el sentido de que contra el auto de llamamiento a juicio no procede la acción de amparo, por cuanto éste no conlleva una orden de hacer.

Por consiguiente, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el 9 de junio del 2000, en la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la firma forense BERRIOS Y BERRIOS, en representación de GABRIEL OCTAVIO CEDEÑO PERDOMO en contra del JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO, RAMO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, por haber proferido el auto de fecha 23 de marzo del 2000, mediante el cual abre causa criminal contra GABRIEL OCTAVO CEDEÑO PERDOMO Y OTROS, por el delito de Falsificación de Documentos en General.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR BERRIOS Y BERRIOS, EN REPRESENTACION DE GABRIEL ARIEL LAWSON, CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CTO. JUDICIAL, APELACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce este Máximo Tribunal de Justicia, de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por la firma forense BERRIOS Y BERRIOS en representación de GABRIEL LAWSON BLANCO, contra la supuesta orden de hacer calendada 23 de marzo del 2000, dictada por el Juez Primero de Circuito de Panamá, Ramo Penal.

I. LA RESOLUCION DE PRIMERA INSTANCIA

La alzada ha sido dirigida contra la resolución de 9 de junio del 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que negó la admisión de la acción de amparo presentada por el Doctor Julio Berríos.

La motivación fundamental en que descansa la inadmisión de la acción propuesta, recae en el hecho de que el auto penal recurrido abre causa criminal contra el amparista, GABRIEL LAWSON BLANCO por la supuesta comisión del delito genérico de falsificación de documentos, acto que por su naturaleza jurídica no es recurrible mediante la acción extraordinaria de Amparo de Garantías Constitucionales.

En este contexto, el Tribunal A-quo reseña la existencia de jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la que se reitera que el auto que abre causa criminal no constituye una orden de hacer o no hacer dirigida a un particular, y que por ende, no violenta garantías constitucionales.

En la parte medular de la resolución judicial apelada, el Primer Tribunal Superior de Justicia, al momento de decidir sobre la admisibilidad de la acción de amparo, destacó:

> "Y es que, como se dejó anotado, el amparo que nos ocupa se encuentra dirigido contra un auto donde el Juez demandado abre causa criminal, entre otros, contra el amparista, materia esta que el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha declarado, de forma categórica, no puede ser impugnada por vía extraordinaria de amparo de garantías constitucionales.
>
> Prueba del anterior criterio jurisprudencial, lo constituye la sentencia de fecha 16 de noviembre de 1992 dictada con motivo de la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el señor ANGEL LAM ARCHER contra el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, donde nuestro máximo Tribunal de Justicia, dejó expresado:
> .....
> `No debe perderse de vista que el auto de enjuiciamiento es interlocutorio por excelencia, es decir, que no decide el fondo del negocio y no entra por tanto a considerar la inocencia o culpabilidad del procesado, que sigue conservando a su favor el principio de presunción de inocencia, aparte de que no es necesario esperar el auto de enjuiciamiento para tomar medidas cautelares contra el imputado. El auto de proceder tiene por objeto calificar el sumario, es decir, ponderar si existe algún indicio racional de criminalidad en contra de determinada persona y esta apreciación es una facultad inherente a la de juzgar, a fin de declarar si se abre o no la fase plenaria del proceso penal
>
> Este criterio fue reiterado en sentencia de fecha 30 de octubre de 1998 dictada por el mismo augusto tribunal."

II. ARGUMENTOS DEL APELANTE

Al sustentar la alzada, el apelante insiste en la procedencia de la acción de amparo, arguyendo que ni la Constitución ni la Ley, eximen a los actos judiciales de carácter interlocutorio de ser revisados por vía de Amparo.

Añade que el auto que abre causa criminal contiene en su parte resolutiva, términos imperativos contra el afectado, por lo que constituye una orden de hacer susceptible de recurso.

Finalmente, aduce la existencia de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en las que apartándose de los precedentes citados por el A-quo, se ha conocido de acciones de Amparo de Garantías Constitucionales contra autos de enjuiciamiento.

III. DECISION DEL TRIBUNAL AD-QUEM

El análisis de rigor a la resolución apelada y a los argumentos que

sustentan la alzada, permite a la Corte externar lo siguiente:

La decisión del A-quo encuentra asidero jurídico en jurisprudencia sentada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en que de manera uniforme hemos reiterado que la decisión de un juzgador de llamar a juicio a un imputado, no puede ser considerada, en estricto derecho, como una orden de hacer susceptible de ser impugnada por vía extraordinaria de amparo de garantías.

Así, en número plural de ocasiones (v.g. resoluciones de 10 de diciembre de 1993; 28 de junio de 1994 y 9 de noviembre de 1995, entre otras), esta Superioridad ha señalado que la naturaleza meramente interlocutoria del acto jurisdiccional atacado, que tiene por objeto asegurar la secuela del proceso, impide la configuración del concepto de orden de hacer requerido como presupuesto fundamental para la interposición de acciones de amparo.

Queda visto, que en estos casos no se trata de un designio caprichoso del Tribunal de excluir cierta categoría de actos jurisdiccionales del control constitucional subjetivo. Por el contrario, la postura de la Corte encuentra sustento en razonamientos de sólida base jurídica, que evidencian que el auto de proceder, conocido en la doctrina como fase intermedia, es un acto declarativo que no determina la culpabilidad de un sindicado (de ello se ocupa el plenario), siendo su finalidad inmediata la calificación del sumario y verificar las exigencias del artículo 2222 del Código Judicial, abriendo la fase plenaria.

Hemos de conceder al apelante, el argumento de que la Corte ha aceptado -excepcionalmente-, conocer de acciones de Amparo de Garantías Constitucionales contra autos de llamamiento a juicio.

Se trata no obstante, de situaciones especialísimas (v.g. Acción de Amparo presentado por EDGAR LENIS GARRIDO contra el Juez Cuarto de Circuito Penal de Panamá), que por su singularidad han merecido un examen de fondo, en interés de una tutela constitucional efectiva, toda vez que la Corte advirtió de manera clara e inmediata, que la persona contra la cual se abría causa criminal tenía absoluta desvinculación con los hechos criminosos imputados, afectando flagrantemente el principio "in dubio pro reo" contenido en el artículo 22 de nuestro Estatuto Fundamental, actuación que sí constituye un acto susceptible de enmienda por vía extraordinaria de Amparo de Garantías.

Esta circunstancia excepcional no acontece en el negocio que nos ocupa, por cuanto el juzgador penal ha motivado de manera suficiente, razonable y congruente, la posible vinculación del amparista al hecho punible, al ser GABRIEL LAWSON la persona que realizó los trámites de inscripción de una Escritura Pública supuestamente falseada y confeccionada sin la anuencia del ente autorizado (Corporación Financiera Nacional).

Lo anterior pone de manifiesto, que el precedente previamente comentado no desvirtúa la preminencia de la jurisprudencia en que se apoya el Primer Tribunal Superior de Justicia para negar la admisión del Amparo propuesto, por lo que se concluye que la actuación recurrida se ajusta a derecho y debe ser confirmada.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES, la resolución de 9 de junio de 2000, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS

Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LICENCIADA LIZZA MARIE JAEN EN REPRESENTACION DE CABLE & WIRLESS PANAMA, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA N° 24-JCD-2000, FALLO ORAL, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION N°2. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Contra la resolución oral N° 24-JCD-2000 expedida por la Junta de Conciliación y Decisión el 11 de mayo de 2000, en el proceso de despido injustificado que el señor EDGAR LUIS BEITIA, mediante apoderado judicial, interpusiera contra la empresa CABLE & WIRLESS, S. A., interpuso la parte demandada acción constitucional de amparo de garantías constitucionales.

Mediante la resolución que se impugna en amparo, negó la Junta de Conciliación y Decisión Número Dos (2) la excepción de inexistencia de la relación laboral y declara injustificado el despido del demandante, EDGAR LUIS BEITIA, por lo que se condena a la demandada, CABLE & WIRLESS, A.S., al pago de la indemnización correspondiente a favor del demandante.

En los hechos que sirven de fundamento a la pretensión, en términos generales, señala el accionante que la resolución que impugna infringe la garantía fundamental del debido proceso, al desconocer trámites legales que le impiden ejercer, de manera efectiva, el derecho de contradicción y defensa. Afirma la accionante que, en tal infracción incurrió el juzgador al admitir el desistimiento presentado por la parte demandante, respecto de la demanda presentada contra POLY SERVICIOS, S. A., sin el consentimiento de la otra demandada, CABLE & WIRLESS, S. A.. También señala la accionante que violó el juzgador el debido proceso legal, al omitirse la práctica de las pruebas que aduciera en el acto de contestación de la demanda y ratificara en la audiencia oral. Tales pruebas consistían en dos inspecciones oculares, a la planilla, libros y talonarios de cheques de la demandada y al departamento de personal para verificar la existencia de contrato laboral suscrito entre el demandante y la demandada. Los descargos señalados los formula la parte amparista en los hechos de la demanda que, especificamente se transcriben:

> **"TERCERO: La suscrita Licenciada Lizza Marie Jaén, el día veinticuatro (24) de abril de 2000, a las dos y cincuenta de la tarde (2:50 p. m.) fui notificada de la fecha de audiencia, en mi condición de Apoderada Especial de CABLE & WIRLESS PANAMA, S. A..**
>
> **CUARTO: El día 2 de mayo de 2000, el representante del demandante, el licenciada JULIO CESAR ACOSTA, presentó desistimiento de la demanda en contra de POLY SERVICIOS, S. A., lo cual fue con posterioridad a la notificación de la fecha de la audiencia.**
>
> **SEXTO: El día 3 de mayo de 2000, mediante Edicto N° 3851 DG-SJD-00, se pone en conocimiento a las Partes que en el proceso contra POLY SERVICIOS, S. A. y CABLE & WIRLESS PANAMA, S. A., la Junta de Conciliación y Decisión número quince (15), acepta el desistimiento presentado por la parte actora de la demanda contra POLY SERVICIOS, S. A. y continuaba el proceso interpuesto por EDGAR LUIS BEITIA contra CABLE & WIRLESS PANAMA, S. A..**
>
> **OCTAVO: Esta actuación de la Junta es una clara violación al debido proceso y a los artículos 942 y 943 del Código de Trabajo...**

NOVENO: La suscrita Licenciada Lizza Marie Jaén, el día nueve (9) de mayo de 2000, presenté la Contestación de la demanda por escrito y anuncié la EXCEPCION DE INEXISTENCIA DE LA RELACION DE TRABAJO.

DECIMO: Cuando anuncié la EXCEPCION DE INEXISTENCIA DE LA RELACION DE TRABAJO solicité que se practicaran dos (2) inspecciones oculares, la primera a la planilla, a los libros y talonarios de cheques de Cable & Wirless Panamá, S. A. y la otra al departamento de ese personal para verificar si el señor EDGAR LUIS BEITIA laboró en la empresa y si existía un contrato de trabajo entre el demandante y mi representada Cable & Wirless Panamá, S. A.. Cabe señalar que en el acto de audiencia del día 11 de mayo de 2000, ratifiqué las pruebas presentadas con la contestación de la demanda.

UNDECIMO: La juzgadora no evacuó las pruebas solicitadas en la EXCEPCION DE INEXISTENCIA DE LA RELACION DE TRABAJO y ratificadas en el acto de audiencia, además de no aceptar los testimonios de ERICK SAMUEL SANTOS dejando a mi representada en estado completo de indefensión." (33-35)

Como se señaló anteriormente, la parte accionante indica como precepto constitucional infringido por la resolución impugnada, el artículo 32 el cual establece la garantía procesal del debido procesal, integrada por tres derechos instrumentales fundamentales:

a. derecho a ser juzgado por autoridad competente;

b. derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva y disciplinaria; y

c. derecho a ser juzgado conforme a los ordenamientos y trámites legales.

Toda vez que la amparista fundamenta su acción en la violación a los trámites legales del proceso, conviene precisar que la Corte con anterioridad se ha referido a este derecho fundamental, disponiendo que tales trámites legales incluyen, no sólo "el derecho a ser oido, sino también, el de pronunciarse sobre las pretensiones de la contraparte, el de tener iguales oportunidades de defensa que la otra parte, presentar pruebas y oponerse a las aducidas por la contraparte, hacer uso de los medios de impugnación, y proponer excepciones con el fin de defenderse efectivamente." (sentencia del Pleno de 30 de diciembre de 1999).

La base o fundamento jurídico de la protección al derecho fundamental que se examina, viene dada por la necesidad de garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la defensa, por lo que de conformidad con en ese mismo concepto, las objeciones de la amparista a la resolución impugnada serán apreciadas.

La amparista señala que la admisión del desistimiento de la demanda, respecto de una de las partes demandadas, se dió sin su consentimiento como parte demandada en dicho proceso, no obstante aprecia esta Superioridad que el artículo 942 del Código de Trabajo, que la parte amparista cita como infringido, se refiere al consentimiento del demandado notificado de la demanda, respecto del cual se presenta el desistimiento, para su admisión, pues es afecto con dicha actuación y quien, en todo caso, es el que puede oponerse a dicho desistimiento. En el presente caso, el desistimiento de la demanda afecta exclusivamente a la empresa POLY SERVICIOS, S. A., la cual al momento de presentarse dicho desistimiento, no le había sido notificada la demanda, por lo que su consentimiento no era necesario para la admisión del desistimiento de la demanda.

En cuanto a la omisión en la práctica de las pruebas que señala el recurrente, considera el Pleno que incurrió el juzgador en la violación del artículo 32 de la Constitución, toda vez que el juzgador dejó de practicar pruebas aducidas por la parte demandada en el proceso y que, ahora recurre en

amparo. Tales pruebas, como se desprende del escrito de excepción de inexistencia de la relación de trabajo y del acta de audiencia, foja 35 y 42 respectivamente, consistieron en la práctica de inspección ocular a la planilla, libros y talonarios de cheques de CABLE & WIRLESS PANAMA, S. A., así como al departamento de personal para verificar la existencia del contrato de trabajo suscrito por la demandada con el demandante.

Cabe destacar, que la solicitud de práctica de las pruebas mencionadas, fue reiterada por la parte accionante en el acto de audiencia, tal como lo hace constar la resolución que se impugna a foja 105, en la que señala:

> "La empresa demandada al momento de aducir pruebas, reitera la prueba aducida con la contestación de la demanda y solicita el reconocimiento de contenido y firma, también reitera la solicitud de inspección a la empresa representada."

No obstante lo anterior, el juzgador resuelve la causa planteada, sin pronunciarse respecto a las pruebas solicitadas por la parte demandante. En tal sentido, el artículo 9 de la Ley 7 de 1975, que regula el procedimiento a seguir por las Juntas de Conciliación y Decisión en estos casos, establece que la Junta podrá rechazar las pruebas aducidas por las partes, por las razones que la norma taxativamente señala, lo que permite inferir que sólo podrá dejarse de practicar las pruebas aducidas por las partes, cuando las mismas hayan sido rechazadas.

No obstante, aprecia el Pleno que no consta en el expediente que la Junta de Conciliación y Decisión, hubiere rechazado formalmente las pruebas que se mencionan en el escrito de amparo, sin embargo omite practicarlas, razón por lo cual, estima esta Superioridad que se infringió, con ello, la garantía fundamental del debido proceso, en la medida en que se limitó a la amparista la posibilidad material de aportar las pruebas necesarias al proceso en cuestión para su efectiva defensa.

El derecho a la prueba forma parte inherente del debido proceso y consiste en el derecho a proponer pruebas en apoyo de sus pretensiones u oposiciones y el derecho, también, a que sean practicadas por el Tribunal competente, siempre que no hayan sido rechazadas por motivos contenidos en las normas procesales que gobiernan el proceso laboral.

El Pleno es consciente que la resolución de 6 de julio de 2000, bajo la ponencia del Magistrado FAUNDES guarda gran similitud con el presente proceso constitucional. No obstante, en aquella ocasión para inadmitirlo se señaló que se estaba utilizando el remedio procesal constitucional para revisar la valoración probatoria que realizó la Junta de Conciliación y Decisión invocando fallo de 4 de marzo de 1994, que señala que "el examen probatorio y el valor que al caudal de pruebas le otorga el juzgador, no tiene que ver con violaciones a garantías constitucionales" siendo que, en este proceso, se censuró la negativa a practicar una prueba vulnerándose con ello el derecho a la prueba, que integra el debido proceso.

Con fundamento en lo que viene expuesto, debe el Pleno acoger el amparo presentado a favor de la empresa CABLE & WIRLESS PANAMA, S. A. y, en consecuencia, suspender los efectos de la resolución impugnada.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales presentado por la Licenciada LIZZA MARIE JAEN, en representación de la empresa CABLE & WIRLESS PANAMA, S. A. y, en consecuencia, REVOCA la resolución de 11 de mayo de 2000, expedida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 2, dentro del proceso laboral que a la accionante le sigue el señor EDGAR LUIS BEITIA.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACLARACIÓN DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. RUBÉN JOSÉ LEVY, EN REPRESENTACIÓN DE ISAAC LALO GUERON CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 17 DE FEBRERO DE 2000, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada MARÍA EDUARDA CÓRDOBA CHEN, en representación de la señora LILIANA MALCA, ha presentado escrito solicitando aclaración de la sentencia dictada por este Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 6 de julio del 2000, que decidió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por ISAAC LALO GUERÓN contra la orden de hacer contenida en la Resolución de fecha 17 de febrero del 2000 del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, en que se autorizó la salida del país del niño VÍCTOR LALO MALCA para que acompañe a su madre, la señora LILIANA MALCA, durante los estudios de esta última que pretende llevar a cabo en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.

El artículo 986 del Código Judicial establece que la sentencia no puede revocarse ni reformarse por el Juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, puede complementarse, modificarse y aclararse de oficio o a solicitud de parte, dentro de los tres días siguientes a su notificación, sin perjuicio de su replanteamiento con arreglo al artículo 331 del Código de la Familia.

Igualmente, señala que el Juez que dictó una sentencia puede aclarar las frases oscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los términos señalados anteriormente.

En el presente caso, la aclaración que solicita la apoderada judicial de la señora LILIANA MALCA se fundamenta en el supuesto doble sentido del fallo en cuanto al concepto de "patria potestad disminuida", dado que existe un acuerdo entre las partes en cuanto a la guarda, crianza y reglamentación de visita que data de 2 años y existe una reglamentación de visita en el exterior que está aprobada por el Tribunal de primera instancia y en grado de apelación.

En relación con este punto, resulta pertinente el pronunciamiento efectuado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en resolución fechada 22 de junio de 1992, en la que manifestó lo siguiente:

> **"La solicitud de aclaración de sentencia es un remedio que la ley concede a la situación jurídica que se presenta cuando una resolución judicial contiene puntos oscuros en su parte resolutiva.**
> **...**
> **De los artículos transcritos (986 y 2559 del Código Judicial) se puede observar que la parte resolutiva de la sentencia puede ser objeto de la solicitud de aclaración, siempre y cuando lo que se pida tenga que ver con frutos, intereses, daños y perjuicios, costas, etc., de lo contrario no es procedente. La aclaración de sentencia no es otra instancia en que puedan debatirse las**

> motivaciones de la Resolución, o las razones que por las cuales se negaron las pretensiones del demandante, puesto que no es ésta la naturaleza jurídica de la institución." (Registro Judicial, junio de 1982, págs. 187-188)

Consecuentemente, no se puede acceder a la aclaración solicitada, porque ella resulta improcedente al tenor de lo dispuesto en el artículo 986 del Código Judicial.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la aclaración de la sentencia dictada por esta Corporación Judicial el 6 de julio del 2000, dentro de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por ISAAC LALO GUERÓN.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANIEL GOMEZ DE LEON Y ALI ALBERTO ORTEGA CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los señores DANIEL GOMEZ DE LEON y ALI ALBERTO CORREA ORTEGA, actuando en su propio nombre, han presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de Habeas Corpus a su favor y contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá, por considerar que la detención es ilegal.

Una vez acogida la acción se libró el mandamiento de habeas corpus respectivo, el que fue contestado por la autoridad acusada, a través del Oficio No. 156 G. S. de 30 de mayo de 2000 y que señala en su parte medular lo siguiente:

> "A) Los ciudadanos Daniel Gómez De León y Alí Alberto Correa Ortega, fueron preventivamente detenidos por el señor Fiscal Auxiliar de la República, licenciado Carlos Augusto Herrera, según resolución de tres (3) de junio de 1997, visible de fojas 130 a 134 de los autos.
>
> El señor Fiscal Auxiliar mantuvo su decisión mediante resolución de cinco (5) de junio de 1997, visible de fojas 155 a 160.
>
> Cabe indicar que este tribunal dictó el auto de 18 de mayo de 2000, por medio del cual los señores Gómez De León y Correa Ortega fueron llamados a juicio criminal como presuntos infractores de las normas penales contenidas en el Título I, Capítulo I del Libro II del Código Penal, es decir, por el delito genérico de homicidio.
>
> Esta resolución mantiene la medida privativa de libertad que pesa

sobre los acusados y está pendiente de su notificación (Cfr. fs. 325 a 334).

B) Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho de la orden de detención en mención, se encuentran consignados en las resoluciones aludidas en el punto anterior.

C) Es cierto que los detenidos Daniel Gómez De León y Alí Alberto Correa Ortega se encuentran a órdenes de este tribunal y, la razón de ello, es que el sumario ingresó para la calificación de su mérito legal.

Es importante subrayar que los detenidos fueron puestos a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante Oficio No.242 de 30 de enero de 1998, suscrito por el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, Licenciado Juan Antonio Tejada, Hijo, al remitir la Vista Fiscal correspondiente."

ANTECEDENTES DEL CASO

La acción penal que nos ocupa se inicia el 2 de marzo de 1996 con el hallazgo del cadáver de ERWIN PALACIOS GUZMAN (a) BARRIL en Sinaí, sector 3, a un costado de la Parrillada Churrasco. El occiso recibió varios impactos producidos por arma de fuego. En este lugar se encontraron 3 casquillos de 9 milímetros.

A raíz del presunto delito de homicidio de ERWIN PALACIOS GUZMAN se iniciaron las investigaciones preliminares respectivas. En las declaraciones de HERMENIA GRACIELA y MARCELA BARTON se señala como el presunto autor del homicidio a un sujeto apodado GATO LOCO y ALBERTITO (Cfr. fs. 17, 26)

A foja 111 de las sumarias consta la declaración rendida por RAFAELA MARIA ESPINOSA ALVARADO, quien vivía con el occiso y manifestó que el día en que ocurrieron los hechos en horas de la tarde, los señores JULIO (a) GORDO, ALBERTITO, CHELO y DANIELIN, todos con armas de fuego, le preguntaron por el occiso. Agregó además, que días después GORDO y ALBERTITO le reclamaron a ella por haberlos acusado de la muerte de ERWIN PALACIO GUZMAN, y además amenazaron a su hija de 8 años.

Por su parte, el señor ADRIAN PEREZ declaró que en la fecha en que ocurrieron los hechos, en la noche cuando se encontraba por "el Churrasco" los sujetos antes descritos con revolveres y escuadra, excepto DANIELITO, le preguntaron que si había visto a BARRIL, a lo cual contestó que no, y seguidamente a los 3 minutos escucho de 5 a 6 detonaciones. Luego se entero de la muerte ocurrida (Ver fojas 118-120).

Observa el Pleno, que los testimonios presentados coinciden en señalar que MANUEL HIPOLITO JULIO PINEDA (a) MICA y JULIO; DANIEL GOMEZ DE LEON (a) DANIELIN; ALI ALBERTO CORREA ORTEGA (a) ALBERTITO, GATO LOCO y DIABLO; y ARIELIN, el día en que se sucitaron los hechos se encontraban armados y estaban buscando a ERWIN PALACIO GUZMAN.

Como consecuencia de los hechos descritos, el Fiscal Auxiliar de la República mediante diligencia motivada de 3 de junio de 1997, visible a foja 130-134, ordenó la detención preventiva de DANIEL GOMEZ DE LEON, ALI ALBERTO CORREA ORTEGA y MANUEL HIPOLITO PINEDA, de conformidad con el homicidio de ERWIN PALACIOS GUZMAN. Cabe destacar, que la detención preventiva fue mantenida por dicha autoridad, mediante resolución de 5 de junio de 1997 (Fs. 155-160).

La resolución en mención al señalar los fundamentos para establecer la vinculación de los citados sujetos con la comisión del hecho punible, indica:

"De los testimonios citados, se deja ver la persecución a que se vio

sometido el occiso, por parte de los citados sujetos, quienes lo fueron a buscar hasta su lugar de habitación. Por otro lado, se tiene fuertes indicios de modo tiempo y lugar, que los vinculan a la comisión del hecho punible, pues 3 minutos después de haberlos visto con armas en manos, buscando al occiso, se escuchan las detonaciones, resultando la muerte del mencionado BARRIL, que responde al nombre de ERWIN PALACIO GUZMAN" (F.133).

Por otro lado, ALI ALBERTO CORREA ORTEGA rindió declaración y negó los cargos en su contra. Alegó que el 1 de marzo de 1996 se encontraba en compañía de MANUEL HIPOLITO JULIO PINEDA, DANIEL GOMEZ DE LEON y CHELO, y que preguntó por el occiso pero para invitarlo a tomar unas cervezas en casa de ABELITO, pero no lo encontró. Que se quedó en la casa del prenombrado como hasta las ocho de la noche y después se fue para su casa y durmió hasta el día siguiente (Fs. 138-143).

También rindió indagatoria DANIEL GOMEZ DE LEON, la cual consta a fojas 144-148 de las sumarias, se indica que en la misma fecha él estuvo limpiando un carro en compañía de ALBERTO CABALLERO hasta las ocho de la noche, luego se dirigió a su casa. Que no vio esa noche a ALBERTITO, ni a CHELO ni a MICA.

Este Pleno advierte una contradicción en los descargos de los imputados, en cuanto al lugar en que se encontraban éstos al momento de ocurrir los hechos según los testigos.

Por otro lado, en la declaración rendida por el ciudadano RIGOBERTO ZAPATEIRO expresó que fue testigo de los hechos ocurridos, ya que presenció los disparos efectuados contra BARRIL. Señaló que ese día vio a los supuestos enemigos de BARRIL, estos eran GATO LOCO, primo del occiso, MICA y a otros dos que los conocía solo de vista, ellos le preguntaron por ERWIN PALACIO GUZMAN (MEDIO DIA o BARRIL), y estos sujetos andaban armados. Posterior a esto, le avisó a BARRIL pero éste le dijo que seguramente lo buscaban para entregarle una plata.

Continúa manifestando ZAPATEIRO, que fue a tomar unas cervezas en la bodega con BARRIL y KENELMA, luego llegó RAFAELITA. Se quedaron en el lugar hasta las tres y veinte de la madrugada, cuando iban para la casa BARRIL siguió solo y como a los quince minutos escuchó seis disparos de distintos calibres. Agrega que corrió al lugar y vio a varios sujetos disparándole a BARRIL los cuales no pudo reconocer debido a que estaba oscuro y cargaban jackets y gorras. Estos sujetos le intentaron disparar, pero él salió corriendo hacia la casa de KENELMA (Cfrs. fs. 226-228).

Todos estos elementos condujerosn al Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial a solicitar al Segundo Tribunal Superior de Justicia de la causa que abriera causa criminal contra los imputados por el delito contra la vida e integridad personal, en perjuicio de ERWIN PALACIO GUZMAN (a) BARRIL (Ver fojas 280 a 292).

Por último, consta en la foja 325 a 331, la resolución emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en donde por considerar que militan señalamientos directos y graves indicios contra los imputados ALI ALBERTO CORREA ORTEGA, DANIEL GOMEZ DE LEON y MANUEL HIPOLITO JULIO PINEDA, según las sumarias seguidas en perjuicio de ERWIN PALACIOS GUZMAN, mantiene la detención preventiva y abrio causa criminal contra los mismos.

DECISION DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Del examen del expediente, el Pleno ha podido constatar que con relación al delito que se le endilga a los imputados ALI ALBERTO CORREA ORTEGA y DANIEL GOMEZ DE LEON, existen fuertes indicios que los vinculan con la comisión del delito de homicidio en perjuicio ERWIN PALACIO GUZMAN (a) BARRIL.

De la investigación sumarial se desprenden declaraciones, que coinciden de

manera racional en modo, tiempo y lugar, en la presencia de los imputados en el escenario en que ocurrió el hecho punible.

Con relación a la pena fijada para el delito de homicidio, es de cinco años de prisión, razón por la cual la detención preventiva se ajusta a derecho. Se destaca además, que fue decretada por autoridad competente, en resolución motivada, y conforme a lo establecido en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por todas estas consideraciones el Pleno de esta Corporación considera que en la detención de ALI ALBERTO CORREA ORTEGA y DANIEL GOMEZ DE LEON no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, y, por lo tanto, es procedente declarar legal la detención.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de ALI ALBERTO CORREA y DANIEL GOMEZ DE LEON y ORDENA que sean puestos nuevamente a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO A FAVOR DE NICOLAS ACOSTA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE JULIO DEL AÑO DOSMIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado MAURO PEREZ CITTADINI ha presentado ante esta Superioridad, acción de Habeas Corpus Correctivo en favor del señor NICOLÁS ACOSTA HERRERA , contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

I. FUNDAMENTO DEL HABEAS CORPUS CORRECTIVO

El accionante ha fundamentado su recurso en el supuesto desmejoramiento de la situación carcelaria del señor NICOLAS ACOSTA, quien ha sido trasladado del Edificio AVESA a las instalaciones de la Policía Técnica Judicial.

El licenciado PEREZ CITTADINI sobre el particular ha señalado:

> "En las instalaciones en las cuales se encuentra recluido en estos momentos no tiene derecho a salir ni siquiera a tomar el sol, además que no tiene acceso a la dieta que le fue recetada por los médicos que los han visto tanto en la Medicatura Forense, como por parte del Dr. Saucedo, encargado de la salud de los detenidos en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial de Panamá, ya que mi defendido sufre de hipertensión arterial."

II. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

a) Fundamento de la Detención Preventiva

Librado el mandamiento de habeas corpus respectivo, el mismo fue contestado por el señor Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas mediante Nota FD2-12-2288-00 de 6 de junio de 2000, en la que informó a este Tribunal las razones por las cuales el despacho instructor ordenó la detención preventiva de NICOLAS ACOSTA HERRERA el 24 de abril de 1998.

El pormenorizado informe que rinde la autoridad demandada (fojas 6-19 del legajo de habeas corpus), da cuenta de la instrucción de un sumario por la posible comisión de Delitos Contra la Salud Pública relacionados con Drogas, en las que aparece vinculado NICOLAS ACOSTA HERRERA.

Los elementos que reposan en la instrucción ponen de manifiesto la existencia de una organización criminal dedicada al trasiego y venta de estupefacientes, así como el movimiento de capitales hacia la Zona Libre de Colón provenientes del comercio ilícito de dichas sustancias.

La empresa criminal es dirigida por el señor ARTURO NAVARRO, y en ella NICOLAS ACOSTA -quien se encuentra confeso del ilícito-, era el encargado de dirigir y transportar las sustancias ilícitas hacia Costa Rica, para posteriormente ser enviadas por Centroamérica hasta Guatemala, México, Estado Unidos y Europa.

Con sustento en todas estas circunstancias, y previo cumplimiento de las exigencias contenidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, se dispuso la detención preventiva del encartado, misma que ya ha sido examinada por la Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades, declarando su legalidad. (v.g. resoluciones de 3 de diciembre de 1999 y de 25 de mayo 2000)

b) Situación carcelaria del imputado

En lo atinente al traslado del señor ACOSTA HERRERA al sistema carcelario de la sede de la Policía Técnica Judicial, el agente instructor destacó que éste era un acto propio de la Policía Técnica Judicial, bajo cuya custodia se encuentra NICOLAS ACOSTA, sin que ello implique, en su concepto, un desmejoramiento en la condición del detenido.

En este contexto resalta que "desde el inicio de su detención éste estuvo recluido en esa dependencia policial, y debido a su status dentro del sumario que se instruye en su contra, no se le ha considerado para ser trasladado a otro Centro Penitenciario, como en el caso del resto de los imputados." (f. 18 del legajo de habeas corpus)

c) Ejercicio abusivo de acciones por la defensa técnica de NICOLAS ACOSTA HERRERA

La contestación del libramiento de habeas corpus plantea finalmente, la preocupación del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas por la forma excesiva y abusiva, con que se ha venido ejerciendo la defensa técnica del señor ACOSTA.

A este efecto, la Agencia de instrucción ha manifestado:

> "...queremos dejar constancia que, nos preocupa la manera sistemática, como algunos apoderados judiciales y los propios imputados casi desde el inicio del sumario, han concurrido a esa Corporación; al Segundo Tribunal Superior de Justicia y a diversos tribunales jurisdiccionales, con diferentes acciones, recursos, incidentes, tercería y quejas, lo que ha impedido que se practiquen una pluralidad de diligencias tendientes al perfeccionamiento de la investigación, toda vez que las constancias sumariales son requeridas para resolver los mismos."

El funcionario demandado cierra su informe con una cita directa de la resolución de 25 de mayo de 2000 dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro de otra acción de habeas corpus presentada en favor del señor NICOLAS ACOSTA HERRERA, en la que este Tribunal categóricamente indicó:

> "...el ejercicio abusivo del derecho a formular peticiones, solicitudes y reclamos conduce a la dilación de los procesos".

III. EXAMEN DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

A. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE EL HABEAS CORPUS CORRECTIVO

La operancia del llamado habeas corpus correctivo, aceptado por jurisprudencia del Pleno de esta Máxima Corporación Judicial (resolución de 24 de agosto de 1994), se encuentra reservada para situaciones específicas en las que se procure asegurar la eficacia del principio de inmediación entre el detenido y los encargados de administrar justicia, y especialmente entre el detenido y quien ejerce su defensa técnica, o cuando se determine que el detenido está siendo sometido a tratamientos crueles o indebidos.

Ello se desprende del contenido armónico del artículo 23 de la Constitución Nacional, de la Ley No. 87 de 1941 sobre Establecimientos Penales y Correccionales, y del artículo 2153 del Código Judicial que reglamenta la garantía constitucional del derecho de defensa, cuando preceptúa que la detención preventiva debe cumplirse en la respectiva cárcel de la provincia donde se cometió el delito, y en su defecto, en la cárcel del distrito correspondiente, y que ningún imputado podrá ser trasladado a cárceles distintas de la sede del tribunal que conoce de sus casos.

La documentación que obra en autos permite colegir de manera diáfana, que la situación del detenido no se encuentra comprendida dentro del marco de aplicación de esta institución extraordinaria de garantía, toda vez que NICOLAS ACOSTA HERRERA permanece detenido preventivamente en un centro carcelario comprendido dentro de la jurisdicción territorial de la sede del tribunal que conoce de su caso.

Es evidente además, que la inmediación del detenido con sus defensores técnicos no se afecta por el hecho de que haya sido trasladado del edificio AVESA a la Policía Técnica Judicial, instalaciones que se encuentran ubicadas dentro del mismo circuito judicial, e incluso, dentro del mismo distrito geográfico, esto es, el de la ciudad de Panamá.

Los argumentos esgrimidos por el proponente de la acción de habeas corpus tampoco refieren que el detenido esté siendo sometido a tratos crueles o indebidos por sus custodios, o que se le haya colocado en una situación agravante de la limitación que ya pesa sobre su libertad ambulatoria.

Estos son los aspectos que interesan a la institución del habeas corpus correctivo, tal como ha delimitado esta Superioridad. (Cfr. resolución de 30 de mayo de 1994)

Hemos de recalcar que las necesidades de salud del reo NICOLAS ACOSTA, como la de cualquier otro recluso, pueden y deben ser atendidas independientemente del lugar en que se encuentre detenido, y nada indica en este caso que su traslado a la Policía Técnica Judicial implique el desamparo del prenombrado, de la asistencia médica.

B. CONDUCTA PROCESAL DE LA DEFENSA DE NICOLAS ACOSTA

La Corte no puede dejar de referirse a la inquietud que justificadamente ha exteriorizado la agencia instructora de este caso, en el sentido de que su labor investigativa se ha visto seriamente afectada por la forma sistemática en que el imputado y sus defensores han ocurrido a las instancias judiciales a

través de escritos, peticiones y recursos de diversa índole, impidiendo que se practiquen las diligencias necesarias para completar la instrucción sumarial, toda vez que en cada oportunidad en que se presentan tales incidencias, las constancias sumariales son requeridas por los tribunales que han de conocer de los medios impugnativos interpuestos.

Conviene la Corte con la preocupación planteada, toda vez que este Tribunal ha atendido en un corto lapso, tres acciones constitucionales de habeas corpus en favor de NICOLAS ACOSTA, razón por la cual en la resolución de 25 de mayo de 2000, al resolver una de estas iniciativas procesales, le habíamos indicado al proponente que está abusando de su derecho a promover dicho recurso.

La acción de habeas corpus, por la categoría constitucional que ostenta como instrumento de tutela de la libertad individual, debe ser empleada de manera racional, en vías de que constituya un verdadero mecanismo de protección para los ciudadanos; su utilización abusiva, sin que existan las condiciones que realmente la hacen viable, le restan eficacia e idoneidad procesal, y afectan la vitalidad jurídica del proceso principal.

La práctica dilatoria de algunos letrados al presentar acciones sucesivas, carentes de sustento jurídico, ha sido calificada por esta Superioridad como conducta temeraria, desleal e impropia del correcto ejercicio profesional, pues entorpece el desenvolvimiento normal y expedito de la administración de justicia. Por ende, advertimos a la defensa técnica de NICOLAS ACOSTA que de continuar con este ejercicio abusivo, su conducta será sancionada a tenor de lo previsto en el artículo 462 del Código Judicial.

Al Ministerio Público por su parte le recomendamos, que cuando le sean solicitados los antecedentes de un caso por razón de recursos interpuestos en la fase instructiva, se opte por remitirlos en copias autenticadas siempre que ello sea factible, para no propiciar la lentitud de los trámites ni facilitar la eficacia de medidas dilatorias.

IV. DECISION DE LA CORTE SUPREMA

Los razonamientos esbozados permiten concluir, que el traslado de NICOLAS ACOSTA HERRERA, impugnado a través de la acción de marras, no está viciado de ilegalidad.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el traslado de NICOLAS ACOSTA HERRERA hacia las instalaciones de la Policía Técnica Judicial.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YAHAIRA YANETH MASCOL MONTALVO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Víctor Orobio ha propuesto acción de habeas corpus a favor de YAHAIRA YANETH MASCOL MONTALVO contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la privación de libertad que sufre, es ilegal.

FUNDAMENTO DEL HABEAS CORPUS

Señala el proponente de la acción, que el representante del Ministerio Público se equivocó al valorar las piezas contentivas en la presente investigación, para aplicar la detención preventiva, dado que lo único que está acreditado en el expediente es la posesión simple de droga, la cual está corroborada por la propia encartada. Que en ausencia de elementos de prueba no se puede presumir o conceptuar que estamos en presencia de posesión agravada de droga.

Una vez acogida la acción y librado el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el funcionario judicial acusado lo contesta mediante Oficio N° FD2-T01-2419-00 de 15 de junio del año en curso.

CONTESTACIÓN AL MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS

El Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas señaló lo siguiente:

> "1. Si es cierto que se ordenó la detención preventiva de los señores, la misma fue decretada mediante Resolución de este Despacho, fechada 2 de marzo de 2000.
>
> 2. La orden decretada contra la señora YAHAIRA YANETH MASCOL MONTALVO, surge luego de que las unidades policiales solicitan al Corregidor de Santa Ana, realizar diligencia de allanamiento y registro en el Corregimiento de Curundú, Barraca 2, Cuarto 34, en donde al proceder con el registro a dicho inmueble, se encontró en la cocina, en la despensa, en una licuadora, un pedazo de sustancia sólida, de color crema, el cual por su manipuleo se partió haciendo un total de 24 pedazos de sustancia sólida de color crema.
>
> Ante los hechos en comento, este Despacho consideró que existía suficientes méritos para ordenar la declaración indagatoria de las señoras YAHAIRA YANETH MASCOL MONTALVO y MARÍA DEL CARMEN ASPRILLA, y que MASCOL MONTALVO acepta en todo momento los cargos que se le imputan y por los cuales se le detuvo, agregando que eran para su consumo y el de su marido, eximiendo de toda responsabilidad a MARÍA DEL CARMEN ASPRILLA, quien también se encontraba en el cuarto, el día de los hechos.
> .....
> La sustancia incautada fue remitida al Laboratorio Especializado de Análisis del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, a fin de ser evaluadas y así determinar si se trata de sustancias ilícitas, arrojando resultados positivos para la determinación de Cocaína (crack) en la cantidad de 21.64 gramos.
>
> Los fundamentos de derecho sobre los cuales se ha basado la detención preventiva de la señora MASCOL MONTALVO, se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, sumado a la propia confesión de parte de la señora MASCOL MONTALVO, quien acepta en todo momento la comisión del hecho ilícito que se investiga".

ANTECEDENTES

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el habeas corpus, en vías de determinar si la medida cautelar

personal aplicada a la señora YAHAIRA YANETH MASCOL MONTALVO se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva.

Tal como se desprende del informe de actuación que antecede, la encuesta penal que mantiene privado de libertad a la ciudadana YAHAIRA YANETH MASCOL MONTALVO tiene su origen en la diligencia de allanamiento efectuada por autoridades policiales bajo la responsabilidad del Corregidor de Santa Ana (visible a folios 2-5 del cuaderno sumarial). En dicha diligencia se dejó constancia del hallazgo en la vivienda de la señora MASCOL, dentro de una licuadora, de una masa crema que se presumió ilícita, que al manipularla se partió en 24 pedazos y dinero fraccionado que sumaban ciento setenta y un balboas con noventa y cinco centavos (B/.171.95) La prueba de campo efectuada a la sustancia incautada, visible a folio 14 de las sumarias, resultó positiva para la determinación de la sustancia ilícita conocida como Cocaína (crack).

En estas circunstancias, la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos relacionados con Drogas dispone el inicio la instrucción sumarial por tratarse de un presunto ilícito contra la salud pública (cfr. folio 15 del legajo sumarial), posteriormente siendo llamada a rendir declaración indagatoria la señora YAHAIRA YANETH MASCOL MONTALVO propietaria de la vivienda en que se incautaron las sustancias, y presente al momento del allanamiento.

En dicha diligencia (fs. 21-24), la prenombrada aceptó su vinculación con las sustancias incautadas, indicando que las mismas le pertenecían a ella y a su "marido" aceptando además que ambos eran adictos al consumos de narcóticos.

Por otra parte, a foja 54 del cuaderno sumarial reposa el resultado del examen pericial de la sustancia incautada efectuado por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, mismo que arrojó un resultado positivo en cuanto a que las muestras analizadas: 24 sustancias sólidas de color crema resultaron positivas para la determinación de COCAÍNA (crack) en la cantidad de 21.64 gramos.

El Fiscal Segundo Especializado en Delitos relacionados con Drogas, con sustento en los elementos probatorios allegados a la instrucción, profirió la resolución de 2 de marzo de 2000, en la cual ordenó la detención preventiva de YAHAIRA YANETH MASCOL MONTALVO, al considerar que existe vinculación entre la prenombrada, y el hecho punible que se investiga.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Esta Máxima Corporación Judicial una vez realizado un minucioso examen de las piezas que componen esta encuesta penal, y de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean la detención preventiva de la señora YAHAIRA YANETH MASCOL MONTALVO considera que la misma se verificó con ajuste a las formalidades contenidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, puesto que constan en las sumarias, elementos claros que apuntan hacia la persona de la detenida como responsable de las sustancias incautadas dentro de su vivienda: COCAÍNA en la cantidad de 21.64 gramos.

Por ende, existen en la instrucción, las piezas que legitiman la medida cautelar adoptada, al haberse comprobado:

1- la existencia del hecho punible: hallazgo de cocaína que arrojan un total global de 21.64 gramos de sustancia ilícita, lo que permite deslindar, tal como el Pleno de la Corte ha señalado en ocasiones anteriores, que el destino de la sustancia no es el consumo, por la cantidad encontrada.

Cabe acotar que aunque el letrado que, asumió la defensa técnica de la imputada ha señalado que la detenida manifestó de manera voluntaria que las drogas incautadas sí le pertenecían pero estaban destinadas a su consumo, la dosis posológica de Cocaína, de conformidad con lo expresado por el Médico

Forense General del Instituto de Medicina Legal oscila entre los 0.2 y 0.4 gramos (ver fs. 56), por lo que la proporción de sustancias incautadas rebasa ampliamente la dosis de consumo.

No puede soslayarse el hecho de que también se incautó una cantidad apreciable de dinero fraccionado, elemento indiciario de que el imputado podría dedicarse a la venta de sustancias ilícitas.

De las constancias de autos puede inferirse efectivamente, que la pretensión del imputado podía ser la de suministrar en venta dichas sustancias, situación que se adecúa al segundo párrafo del tipo penal descrito en el artículo 260 del Código Penal para calificar el delito de Posesión de Drogas con fines de tráfico (venta o traspaso a cualquier título para consumo ilegal), y cuya punibilidad oscila entre 5 y 10 años de prisión.

2- la vinculación de la imputada con el hecho punible: los informes policiales y del Corregidor de Santa Ana que realizó el allanamiento son enfáticos, en el sentido de que las sustancias ilícitas se incautaron en la residencia de YAHAIRA YANETH MASCOL MONTALVO. Esta por su parte, acepta que la sustancia ilícita le pertenecía a ella y a su "marido", pero que estaban destinadas para el consumo de ambos.

Por consiguiente, esta Corporación es del criterio de que los indicios de presencia y oportunidad en este negocio son irrefutables, lo que en asocio con la aceptación de los cargos por parte de la detenida, permite concluir que en la detención que se ataca de ilegal se encuentran claramente establecidos los elementos procesales que la legitiman: fue ordenada mediante resolución motivada, por autoridad competente, y conforme a lo previsto en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo que la detención preventiva se ajusta a las exigencias constitucionales y legales correspondientes.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señora YAHAIRA YANETH MASCOL MONTALVO, y ordena que sea nuevamente puesto a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado RAUL ANTONIO ALMANZA ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus a favor de ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS, por considerar que la privación de libertad que sufre el prenombrado, es ilegal.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

La parte actora fundamenta su pretensión argumentando que la detención

preventiva del prenombrado ciudadadano, es contraria a lo preceptuado en el artículo 2159, numeral 3 del Código Judicial, debido a la inexistencia del nexo causal entre el delito y el señor JOSEPH LEWIS.

Al respecto nos indica, que la orden en mención fue emitida única y exclusivamente de la declaración del señor REYNALDO ALBERTO LASSO RIVAS (otro sindicado), quien manifestó que JAIME ALFREDO WILLIAM BOONE le había dicho que el había matado al señor REGINAD WAYNE BRUCE WAIGHT, conjuntamente con el señor ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS y otros. Posterior a esto, WILLIAMS BOONE al rendir declaración indagatoria (visible a foja 195 a 201) niega todo lo señalado por LASSO RIVAS, considerando el accionante, que por este motivo se desvincula totalmente del delito de homicidio al señor JOSEPH LEWIS.

También considera la parte actora, que dicha orden de detención es contraria al principio del debido proceso contenido en el artículo 21 de la Constitución Nacional, porque al momento de emitir la misma no se tomo en cuenta el artículo 907 del Código Judicial.

Continúa expresando la parte afectada que, el Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó auto de Llamamiento a Juicio en el proceso de Homicidio en perjuicio de REGINALD WAYNE BRUCE WAIGHT, manteniendo la detención preventiva del señor JOSEPH LEWIS, lo cual a juicio del accionante, constituye una abierta violación al artículo 908 del Código Judicial, toda vez que en subsiguientes ampliaciones declaratoria del señor LASSO RIVAS, señaló que el prenombrado ciudadano no participó en la comisión del delito y explicó los motivos que lo motivaron a rendir esa declaración (Fs. 313-318 y 369-371).

MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS

Una vez acogido el recurso en mención mediante providencia fechada 7 de junio de 2000, se libró el mandamiento de habeas corpus respectivo, el cual fue contestado por la autoridad demandada mediante oficio No. 206-S. F. de 8 de junio de 2000, cuyos párrafos pertinentes reproducimos a continuación:

> "1.- La detención preventiva del señor ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS fue decretada durante la fase preparatoria o de instrucción sumarial, por la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, el día 8 de febrero de 1999 (fs. 242-246) y, mantenida por este Tribunal Superior mediante resolución dictada el día 12 de enero de 2000 (fs. 511-522), que formula cargos de enjuiciamiento criminal en su contra, como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, es decir por el delito de Homicidio Doloso cometido en perjucio del señor REGINALD WAYNE BRUCE WAIGHT.
>
> 2.- Los motivos o fundamentos de hechos y de derecho para sustentar la medida cautelar personal cuestionada, son los siguientes:
>
> 2.1.- El hecho punible consiste en el homicidio llevado a cabo con proyectil de arma de fuego en perjuicio del señor REGINALDO BRUCE WAYNE y está comprobado con la diligencia de reconocimiento y levantamiento del cadáver; protocolo de necropsia y certificado de defunción.
>
> 2.2.- Contra el señor ERNESTO LUCIANI JOSEPH LEWIS constan las declaraciones de REYNALDO ALBERTO LASSO RIVAS Y JOSE LAMARK MAGFLANE. El señor ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS tiene antecedentes penales (fs.290). En forma detallada está explicado en el auto de enjuiciamiento dictado el 12 de enero de 2000, los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la medida cautelar personal cuestionada.
>
> 3.- El señor ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS se encuentra filiado a

órdenes de nuestro despacho desde el día 16 de febrero de 2000, ha sido notificado del auto de enjuiciamiento que no impugnó y está pendiente la notificación de su abogado defensor, Lcdo. Raúl Almanza, quien no ha podido ser localizado según los informes del notificador Valentín Chacón Morcillo, visible a fojas 554 y 555, esa notificación está pendiente, para darle curso al recurso de apelación presentado por el abogado de otro de los procesados."

ANTECEDENTES DEL CASO

La encuesta penal que mantiene privado de libertad al señor ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS, se origina el día 13 de diciembre de 1998, con la diligencia de reconocimiento y levantamiento del cadáver de REGINALD WAYNE BRUCE WAIGHT, encontrado en el sector del Puente del Rey, Panamá Viejo, provincia de Panamá.

De la instrucción sumarial iniciada por la muerte de BRUCE WAIGHT, se observa la declaración jurada de ELIONER ALDEANO (Fs. 18 a 22), el cual indicó que vió por última vez con vida a BRUCE WAIGHT (a) "PATO", el 10 de diciembre de 1998, y que días antes este sujeto había peleado con un muchacho llamado MARIO.

La madre del occiso, IRASEMA WAIGHT LAYONS, también declaró que éste tuvo una riña con un muchacho llamado MARIO, pero que eso lo habían arreglado (Fs. 23 a 25).

Al rendir declaración MARIO GILBERTO JONES, el mismo reconoció que tuvo una pelea con el occiso, porque lo estaba acusando de haberle robado una droga, lo que no era verdad. Manifestó también que, después de este problema "CHINITO" (REYNALDO LASSO) le había preguntado si se atrevía a matar a "PATO" (el occiso), a lo cual le respondió que no porque no había razón para ello. (Fs. 38 a 44)

Consta a fojas 50 y 51, Informe de Novedad de la Policía Técnica Judicial fechado 20 de diciembre de 1998, sobre una llamada anónima, en la cual se expresó que MARIO tenía mucho miedo, ya que el se encontraba presente cuando "CHINITO", en compañía de ERNESTO y TOTITO, le dió un tiro al jovén BRUCE WAIGHT (a) "PATO".

Ante esta información, la Fiscalía Auxiliar de la República procedió a identificar a los sujetos antes descritos, a excepción de ERNESTO. Esta autoridad, a través de la resolución de 22 de diciembre de 1998, visibe de fojas 87 a 89 del expediente, dispuso tomarle declaración indagatoria a los señores MARIO GILBERTO JONES LASHLEY, JAIME ALFREDO WILLIAMS BOONE (a) "TOTITO" y REYNALDO ALBERTO LASSO RIVAS (a) "CHINITO", formulándoles cargos como presuntos infractores del delito de Homicidio doloso cometido en perjuicio de REGINALD WAYNE BRUCE WAIGHT. Seguidamente esta autoridad, mediante diligencia fechada 24 de diciembre de 1998, ordena la detención preventiva de los prenombrados, la cual fue mantenida por la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, por medio de la resolución de 7 de enero de 1999. (Fs. 107-111)

Por otro parte, mediante diligencia motivada de 8 de febrero de 1999 la Fiscal , ordenó recibirle declaración indagatoria al señor ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS y su detención preventiva.

Con relación a los supuestos encontrados dentro de las sumarias que relacionan al señor JOSEPH LEWIS, los cuales fueron tomados como fundamento para ordenar su detención preventiva y formularle cargos por el delito antes citado, se observan los siguientes:

Consta a foja 365 a 366 del cuaderno contentivo de las sumarias, la declaración de JOSE LAMAR MCFARLANE quien indicó, que el 11 de noviembre de 1998 cuando estaba sentado en la Barbería Arturo, ubicada en calle 13, vio llegar un automóvil gris con tres personas, una de las cuales era ERNESTO, detuvieron la marcha para conversar con REYNALDO ALBERTO LASSO RIVAS el cual se encontraba con su novia, luego aquellos se fueron y LASSO RIVAS permaneció en el lugar.

Al rendir declaración REYNALDO ALBERTO LASSO RIVAS, foja 104, se le preguntó por ERNESTO, a lo cual respondió que no lo veía desde dos meses atrás porque ya se había mudado del lugar. Sin embargo, el imputado al ampliar su declaración, la cual se aprecia de la foja 146 a 150 de las sumarias, expresó que JAIME ALFREDO WILLIAMS BOONE le entregó un collar de oro grueso de propiedad de REGINALD WAYNE BRUCE WAIGHT y le dijo que tenía esa prenda porque en compañía de ALEX y ERNESTO, lo habían últimado. También manifestó, que ERNESTO fue quien cargó el cuerpo del occiso hasta el río donde lo arrojaron.

El señor LASSO RIVAS en esta diligencia agregó, que WILLIAMS BOONE lo había amenazado con matarlo si hablaba, y que lo iba a involucrar en el homicidio para que lo mandaran a la Joya o la Joyita. Cabe destacar que posteriormente, este sujeto vuelve a declarar y niega todo lo manifestado, y reitera que su vida está en peligro. (Fs. 313-318, 392, 393)

El Segundo Tribunal Superior de Justicia decretó la ampliación sumarial de la causa seguida en perjuicio del homicidio de BRUCE WAIGHT, mediante resolución de 3 de septiembre de 1999. Como consecuencia de la misma, la Fiscalía Segunda Superior reitera los conceptos vertidos en la Vista Fiscal anterior, consistente en que se ordene la compareciencia a juicio de los imputados antes señalados, mediante Vista Penal No. 152 de 30 de noviembre de 1999, la cual consta de la foja 491 a la 496.

En estas circunstancias, el Segundo Tribunal Superior de Justicia dispuso abrir causa criminal contra los señores JAIME ALFREDO WILLIAMS BOONE, REYNALDO ALBERTO LASSO RIVAS y ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS por el delito de Homicidio doloso cometido en detrimento de REGINALD WAYNE BRUCE WAIGHT, por considerar que se encuentra acreditado el hecho punible y la existencia de suficientes elementos de juicio e indicios graves, que vinculan a los detenidos antes indicados con el hecho punible (Ver fojas 511-522).

DECISION DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Este Tribunal Colegiado conceptúa que en principio, de las piezas probatorias que reposan en el expediente se desprenden ciertos indicios de presencia y oportunidad en contra del señor ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS.

En primer término, consta la llamada anónima en la cual se señalan los nombres de las supuestas personas que realizaron el hecho punible. Una vez identificados los mismos, se aprecia que al rendir declaraciones indagatoria se menciona nuevamente el nombre de ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS, como posible partícipe.

Consta además el testimonio de JOSE MACFLARLANE, quien manifestó haber visto al señor JOSEPH LEWIS en un auto conversando con el imputado REYNALDO LASSO RIVAS, un día después de haber desaparecido el occiso.

Con lo anterior, se advierte contradicción en los descargos presentados por los imputados con relación a la supuesta participación del señor JOSEPH LEWIS, ya que posteriormente expresan que no habían visto y consta un testigo que los vió juntos.

Otro hecho relevante, consiste en que el propio JOSEPH LEWIS reconoce que tenía en su poder un collar de oro el cual le pertenecio al occiso, pero que se lo había entregado a su novia para que lo empeñara.

En estas circunstancias, considera el Pleno que hasta el momento constan en las sumarias señalamientos en contra del señor JOSEPH LEWIS, que presuntamente lo vinculan con la muerte de BRUCE WAIGHT, los cuales fueron tomados como fundamento para ordenar su detención preventiva y formularles cargos en su contra, tal como se observa en la foja 242-246. Esto sin dejar de un lado, que las autoridades judiciales competentes en su momento podrán determinar lo contrario si así lo estimaran luego de que, producto del examen de manera

pormenorizada de todas y cada una de las declaraciones, testimonios, peritajes y otras circunstancias probatorias, emerjan otros hechos que puedan favorecer al encartado.

En el negocio sub-júdice se pone de manifiesto que la detención preventiva decretada contra el señor ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS se ajusta a la legitimidad formal que debe revestir la medida preventiva, dado que el delito de Homicidio doloso que se le imputa al prenombrado cuenta con una pena de prisión mínima de 5 años. Como también se aprecia, que en la misma no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las Leyes de la República.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de ERNESTO LUCIANO JOSEPH LEWIS y ORDENA sea puesto nuevamente a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO ALLEYNE CONTRA EL FISCAL QUINTO DE CIRCUITO DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno contentivo de la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado Humberto Mosquera Bethancourth contra el Fiscal Quinto de Circuito de Panamá.

La resolución impugnada es la proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de 22 de mayo de 2000, mediante la cual se declaró legal la detención preventiva dictada contra ROBERTO ALLEYNE ROSALES, a quien se le sigue proceso por delito contra el patrimonio (robo), en perjuicio de JAVIER MARTINEZ y CECILIA ITZEL GONZALEZ ABREGO.

Este proceso tiene sus inicios cuando el señor JAVIER MARTINEZ suscribe formal denuncia ante la Policía Técnica Judicial el día 21 de enero de 2000, en la que manifiesta que el día 20 de enero de 2000, a la 1:30 de la madrugada, conducía su vehículo en dirección a su residencia, cuando en la avenida 12 de octubre, a la altura del Supermercado El Rey, un automóvil colisionó al suyo por detrás. Al bajarse y reclamarle al otro conductor, observó que en el interior del auto quedaron tres sujetos, uno de los cuales se bajó, lo encañonó con una pistola y, posteriormente, le ordenaron meterse en su propio vehículo. Ya dentro del mismo, lo despojaron de sus prendas, de un pasaporte y de su automóvil, dejándolo abandonado a él en el área de Chivo Chivo.

A foja 9 y 11, reposan las Diligencias de Reconocimiento Fotográfico de la señora CECILIA ITZEL GONZALEZ y la del denunciante JAVIER MARTINEZ, donde éste último reconoce a ROBERTO ALLEYNE ROSALES como uno de los sujetos partícipes del ilícito investigado. También consta la Diligencia de Reconocimiento en Rueda de Detenidos en la cual participó ROBERTO ALLEYNE persona que fue reconocida por

MARTINEZ. (Fs.42-43)

En su declaración indagatoria, a foja 52 de las sumarias, ROBERTO ALLEYNE ROSALES se acoge al artículo 22 de la Constitución Nacional y posteriormente, a foja 87, en la ampliación a su declaración indagatoria, niega todos los cargos formulados en su contra, manifiesta que no sabe manejar, que no posee licencia de conducir y que el día del ilícito se encontraba en su residencia.

Al ampliar su declaración jurada, el denunciante JAVIER ALEXIS MARTINEZ RIOS manifiesta que el único sujeto que pudo reconocer fue al que iba sentado al lado del conductor del vehículo, quien en los reconocimientos llevados a cabo vino a resultar ROBERTO ALLEYNE ROSALES. Cuando se le preguntó al denunciante cuántas personas se montaron en su vehículo, contestó lo siguiente:

> "Tres, uno manejaba, el otro que yo reconocí que iba del lado del pasajero delante, y el que me iba encañonando que iba conmigo atrás....Si los vi, pero al que mejor vi fue al que iba al lado del conductor ya que me quedaba diagonal a mí".

Mediante resolución de 5 de febrero de 2000, la Fiscalía Auxiliar de la República ordena la detención preventiva de ROBERTO ALLEYNE por existir graves elementos indiciarios y probatorios que lo vinculan con el delito contra el patrimonio (robo) cometido.

Una vez efectuado un análisis objetivo de los elementos probatorios allegados al expediente para la comprobación del hecho punible, el Pleno estima que la Diligencia de Reconocimiento Fotográfico y la Diligencia de Reconocimiento en Rueda de Detenidos realizadas, y donde el denunciante JAVIER MARTINEZ reconoce a ROBERTO ALLEYNE ROSALES como uno de los sujetos partícipes del ilícito, constituyen evidencias suficientes que vinculan al detenido con el delito que se le imputa. Dado que el delito contra el patrimonio (robo) tiene fijada pena de prisión mínima superior a los dos (2) años, considera la Corte que en la detención de ALLEYNE ROSALES no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni támpoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que lo procedente es confirmar la resolución apelada.

De consiguiente, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 22 de mayo de 2000 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención del señor ROBERTO ALLEYNE ROSALES y DISPONE que el detenido sea puesto a órdenes de la autoridad competente.

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANEGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE JENNY BENITEZ ESTUPIÑAN CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de habeas corpus presentada por el licenciado Humberto Mosquera, contra el FISCAL SEGUNDO ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, a favor de JENNY BENITEZ ESTUPIÑAN, detenida, por delito contra la Salud Pública.

Acogida la acción de habeas corpus, se libró el mandamiento correspondiente contra el FISCAL SEGUNDO ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, Licenciado PATRICIO ELIAS CANDANEDO M., quien mediante Oficio No.FD2-T09-1901-99 de 17 de mayo del 2000 (fs. 4-9), rinde el siguiente informe:

"A. Si, es cierto que ordenamos la detención de la señora JENNY LORENA BENITEZ ESTUPIÑAN. Dicha decisión fue emitida mediante resolución de treinta y uno (31) de marzo del año que decurre, la cual se encuentra acopiada a fojas 43-46 del presente sumario.

B. Fundamentos de Hecho

Los fundamentos de hecho que motivaron la actuación los exponemos a continuación: Los hechos se inician el día veintinueve (29) de marzo del presente año, cuando son detenidos los señores JORGE ENRIQUE CHALA BERMUDEZ Y YENNI LORENA BENITEZ ESTUPIÑAN, se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas, quien en ocasiones era ayudada por su concubino JORGE CHALA BERMUDEZ.

Narran los agentes captores en sus informes de vigilancia, (fs.3-7), que mientras efectuaban las vigilancias, podían observar cuando sujetos con aspecto de mal vivir llegan a la residencia de YENI BENITEZ, a quien describen físicamente, mantenían un corto diálogo con ésta y posteriormente efectuaban un intercambio, lo que presumieron era un intercambio de dinero por drogas.

Realizadas las vigilancia correspondientes, se efectúa una diligencia de allanamiento. Previo a dicha diligencia judicial, esta agencia de instrucción autorizó la realización de una compra simulada de sustancias ilícitas, para lo cual se utilizaron cuatro (4) billetes de un balboa(B/.1.00) los cuales fueron previamente fotocopiados y autenticados por este Despacho.

Con este dinero se lograron comprar dos (2) sustancias sólidas, color crema, las cuales se presumió eran droga, CRACK. Manifestó la fuente que la venta la efectuó YENI BENITEZ, la cual vestía un pantalón corto negro y un suéter azul, la cual estaba en compañía de JORGE CHALA BERMUDEZ. Se inicia el registro del inmueble, el cual consta de una sola pieza, en presencia de sus ocupantes, YENI BENITEZ ESTUPIÑAN y JORGE CHALA BERMUDEZ. Sobre una mesa se encontró la suma de quince balboas (B/.15.00), los que al ser verificados, pudo encontrarse entre ellos los cuatro (4) billetes utilizados en la compra controlada, también se encontró una gillette con posibles residuos de CRACK. JORGE CHALA BERMUDEZ manifestó ser el propietario del dinero, manifestándole al funcionario de este despacho, que ya había vendido toda la sustancia ilícita.

JORGE ENRIQUE CHALA BERMÚDEZ, rindió declaración el día treinta (30) de marzo del presente año, manifestando que atrás de un supermercado, cuyo nombre no recuerda, se encontró una sustancia ilícita y como estaba necesitado de dinero decidió venderla y que YENI BENITEZ no tiene nada que ver en el presente caso, que el día del allanamiento ya había vendido toda la droga, por lo que las unidades policiales no encontraron mas nada en el lugar.

YENI LORENA BENITEZ ESTUPIÑAN, rinde declaración indagatoria, (FS.37-41), en donde responsabiliza a JORGE CHALA BERMUDEZ, con la venta de la sustancia ilícita realizada en su casa, dice que ella no

se encontraba en la casa, ya que estaba tomando soda y con unos amigos en el supermercado, por lo que desconoce si JORGE CHALA BERMUDEZ se estaba dedicando a la venta de sustancias ilícitas en su casa.

Sigue diciendo que ella se dio cuenta al final que CHALA BERMÚDEZ vendía sustancias ilícitas, aconsejándole que se dejara de eso que se iba a meter en problemas. Niega dedicarse a la venta de sustancias ilícitas y desconoce la procedencia de la sustancia ilícita, que según dice, vendía CHALA.

El teniente CARLOS ALBERTO DELGADO PINO, rinde declaración jurada, en la que afirma y ratifica el contenido del informe de fojas 18-19. Manifiesta Delgado Pino que se hicieron varias vigilancias a la residencia de YENI BENITEZ, manifestando que él participó en tres (3) de esas vigilancias, en las cuales pudieron corroborar que la misma se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas y fue por ello que solicitaron el apoyo de este despacho para practicar la diligencia de allanamiento mediante compra controlada.

Señala Delgado, que según el comprador la venta la realizó YENI BENITEZ, a quien le entregó los billetes marcados y autenticados por este Despacho. Que las vigilancias se estaban realizando desde el mes de diciembre del año pasado, en otro inmueble en el que residía YENI BENITEZ, también en el sector 5 de Cabima.

En este mismo sentido, rinde declaración jurada el Cabo Segundo MANUEL EFREN NIETO CANO, (fs.57-60), quien manifiesta haber participado en las vigilancias, en la que podían observar a sujetos con aspecto de piedreros que llegaban donde YENI BENITEZ, dialogaban con ella, realizando posteriormente un intercambio, en el que los sujetos le entregaban dinero a YENI BENITEZ y este les entregaba algo a cambio, lo que se presume era supuesta droga. Y que JORGE CHALA BERMUDEZ, se mantenía vigilante, tanto en la puerta del inmueble, así como en el patio de la casa y algunas veces caminaba hasta la entrada de la calle.

Lo dicho por Nieto, es corroborado, en la declaración jurada rendida ante esta agencia de Instrucción por el Agente GIOVANNI BARRIA VEGA, (fs.61-63).

C. FUNDAMENTO DE DERECHO:

El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva de la señora YENI LORENA BENITEZ ESTUPIÑAN se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial ...".

Por su parte, el proponente de esta acción constitucional solicita que se decrete ilegal la detención preventiva de JENNY BENITEZ ESTUPIÑAN y se ordene su inmediata libertad, alegando que no existen elementos pertinentes que sustente una detención preventiva y en adición, señala que la señora BENITEZ actualmente está amamantando a su menor hijo con cuatro meses de nacido por lo cual solicita que de no otorgarse la libertad a su representada, se le otorgue una medida cautelar distinta a la detención, a fin que pueda amamantar a su hijo recién nacido.

Al analizar las sumarias en averiguación, se aprecia que en efecto los agentes de la Policía Nacional, Teniente Carlos Delgado, Sargento 2° José Ureña, Cabos 2°s Manuel Nieto y Geovanny Barría al rendir la ratificación de su declaraciones juradas confirman los señalamientos directos manifestados oportunamente en el informe de novedad visible a foja 18 de las sumarias, en contra de la señora Yenny Benitez Estupiñan como la persona que en la compra simulada recibió el pago de los billetes marcados y que posteriormente son

encontrados en la residencia donde la detenida se encontraba, hecho acreditado en autos a foja 22 de las sumarias con la evidencia encontrada por los Agentes del DIIP del Area "G" de Alcalde Díaz.

A pesar que el concubino de la detenida, Chala Bermudez confiesa haber vendido toda la droga el día del allanamiento realizado por la Fiscalía y libera de toda culpa a su compañera YENNY BENITEZ, las declaraciones juradas de tres de los agentes que participaron en la compra simulada y en la vigilancia que con anterioridad se le practicó a la sumariada, indican que ella era la persona que vendía la droga, tal como lo manifiesta el Cabo Manuel Nieto a foja 58 de las sumarias cuando indica que mediante informaciones obtenidas realizaban vigilancia a la ciudadana YENNY de la cual pudo con anterioridad conocer su apariencia física y posteriormente ubicar su domicilio en el sector 5A de la Cabima.

A la residencia de la sumariada llegaban todo tipo de sujetos que realizaban con la detenida intercambio de dinero por algo que se presume eran sustancias ilícitas mientras su concubino era quien vigilaba desde la vereda a fin de divisar si aparecían agentes del orden público.

La detenida negó los cargos formulados en su contra y el Agente captor en la ratificación de su declaración jurada afirma que la vigilancia se realizaba desde el mes de diciembre del año pasado, y al momento del allanamiento una vez realizada la compra controlada y que el comprador retornó con dos piedras de crack la cuales compró utilizando para ello los cuatro billetes marcados y autenticados, se procedió al allanamiento en presencia de los ocupantes de la casa, donde se encontraron sobre una mesa algunos billetes y el funcionario al revisarlos coincidieron con los billetes marcados en la compra controlada. Cabe destacar que la compra simulada se llevó a cabo el día miércoles 29 de marzo, dado que los agentes del Sub D.I.I.P. tuvieron conocimiento que sólo mantendría en la vivienda que ocupaba hasta el 31 de marzo y que además la detenida se abastecía de mercancía los días martes en horas de la noche para mantener suficiente mercancía los fines de semana y cambiaba constantemente de domicilio evitando de esta forma los allanamientos.

Mediante resolución de 31 de marzo del 2000 (fs. 43-47), de la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con drogas, se dispuso recibirle declaración indagatoria a YENNY BENITEZ ESTUPIÑAN, quien al rendir indagatoria (fs. 37 a 41) negó dedicarse a la venta de drogas y cuando se le pregunta si se dedica al consumo de drogas y con qué frecuencia, manifiesta "Nunca he consumido drogas ni cigarrillo fumo", finalmente, indica que tuvo conocimiento que su marido estaba vendiendo drogas y que le dijo que dejara eso.

En el caso en comento, ha sido aportado al expediente la diligencia de prueba de campo realizada por la División de estupefacientes del Ministerio Público de 30 de marzo de 2000, la cual dio un resultado positivo en torno a la presunción de droga correspondiente a "piedra o crack". En adición al momento de realizar el allanamiento, se encontró en la residencia una gillette con restos de los que se presume fuera droga aunado a las declaraciones juradas de los agentes de la Policía Nacional quienes han indicado que por lo menos unas quince o dieciséis personas visitaron a Yenny Benítez con el consiguiente intercambio de dinero por algo que ella les entregaba, bajo la vigilancia en la vereda de su concubino Chala Bermudez, todo lo cual sugiere la comercialización con drogas e indica la vinculación de YENNY BENITEZ ESTUPIÑAN con el hecho ilícito que se investiga, contemplado en el Capítulo V, Título VII, del Libro II del Código Penal.

La detención de YENNY BENITEZ ESTUPIÑAN fue ordenada mediante resolución de 31 de marzo de 2000 (fs. 43-46), de la Fiscalía Segunda Especializada en delitos relacionados con Drogas y como quiera que en este caso la orden de detención fue dictada por autoridad competente, por escrito y mediante resolución motivada en delito penado con un mínimo superior a los dos (2) años de prisión y existen suficientes elementos probatorios contra YENNY LORENA BENITEZ ESTUPIÑAN se cumple en este caso con los requisitos establecidos en los artículos 2148,

2159 y 2568 del Código Judicial y procede declarar legal la orden de detención impugnada mediante esta acción constitucional.

Legitimada la legalidad de la detención, el Pleno entra a conocer de la solicitud de una medida cautelar distinta a la detención preventiva, en virtud que la señora Jenny Benitez Estupiñan se encuentra en período de lactancia materna y dadas las circunstancias, su abogado solicita que dicha detención de que es objeto su defendida, pueda ser sustituida por una medida cautelar menos severa.

De las constancias procesales que reposan en el expediente se aprecia que la detenida dio a luz un menor en el Hospital Santo Tomás el día 30 de enero del 2000, contando en la actualidad el menor con 5 meses y quince días de nacido por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 2147-D del Código Judicial, modificado por la Ley 42 de agosto de 1999, que contempla una protección para la mujer embarazada o que amamante a su prole y para cuyo caso no se decretará la detención preventiva salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia, son perfectamente viables las alternativas que para tal efecto contempla el artículo 2147-B en sus literales a, b y c.

Debe señalarse que el criterio jurisprudencial de la Corte en torno a una sustitución de la detención preventiva no implica una desvinculación del delito que se le imputa a JENNY BENITEZ ESTUPIÑAN, quedando sujeta al resultado de la investigación que se le sigue, sin perjuicio de que sea detenida preventivamente si incumple los deberes inherentes a las medidas que en su defecto se le aplicarán. (cfr. sentencia 26 de febrero de 1999, Magdo. Molino Mola).

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención decretada contra YENNY LORENA BENITEZ ESTUPIÑAN y sustituye la detención preventiva por el término de siete meses contados a partir de esta resolución judicial, por las medidas cautelares personales que establecen los literales a, b y c del artículo 2147-B del Código Judicial consistentes en la prohibición de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial, la obligación de residir dentro de la jurisdicción del distrito de Panamá donde tiene su residencia y el deber de presentarse cada quince días ante la autoridad que tramite la causa.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ADAN ARNULFO ARJONA L.

Con todo respeto deseo expresar que no comparto el criterio respaldado por la mayoría en la presente decisión por las razones que seguidamente preciso:

1. La señora Jenny Benitez Estupiñan fue detenida con motivo de un sumario que se adelanta por la presunta comisión del delito de tráfico y venta de estupefacientes, desde un mueble ubicado en comunidad de La Cabima, Sector 5, Corregimiento de Alcalde Díaz.

2. La sola circunstancia de que la imputada sea una mujer en condiciones de amamantar a su prole no necesariamente significa que la detención preventiva está prohibida, ya que, el propio artículo 2147-D del Código Judicial hace la prevención de que la detención preventiva en ese caso puede ser procedente cuando

existan exigencias cautelares de excepcional revelancia.

3. En el presente caso, existen un conjunto de circunstancias que comprometen grave y directamente a la imputada en la posible comisión del delito de posesión y tráfico de drogas. Estos hechos que surgen del expediente son los siguientes:

a. La detenida ha sido identificada como una persona que desde su residencia realiza en forma habitual operaciones de venta de droga, como se desprende de los informes de vigilancia policial que reposan en los antecedentes.

b. La detenida, poco antes de la realización del allanamiento, vendió la sustancia ilícita a un agente encubierto de la policía, quien pago la mercancía con billetes marcados que Luego fueron encontrados en poder de la imputada durante la diligencia de allanamiento.

c. A la detenida se le encontró con ocasión de allanamiento una cantidad apreciable de droga, así como dinero fraccionado, una hoja de afeitar y otros elementos que prima facie apuntan razonablemente a establecer que ella, en efecto, se dedica al tráfico de drogas.

4. Los hechos que anteceden constituyen a mi juicio, prueba suficiente de que se dan las exigencias cautelares de excepcional relevancia que autorizan en este caso concreto a mantener la detención preventiva, a pesar de la condición de la detenida en relación con su prole. En mi concepto, sustituír la detención preventiva en un caso que tiene visible compromiso con el expendio y tráfico de drogas, debilita la eficacia de esta medida cautelar que dentro de su finalidad persigue interrumpir la ejecución del delito que se comete y preservar la integridad del material probatorio que eventualmente sustentará la acción penal contra el responsable del ilícito.

El delito de tráfico de droga es de aquellos que no admiten la excarcelación mediante fianza (cfr. artículo 2181 numeral 2 del C.J.), por lo que, conceder una medida cautelar sustitutiva de la detención, resulta discutible ya que la misma gravedad del hecho punible y las circunstancias concretas de este caso, hacen pensar que es justificada la imposición de la medida cautelar más grave como lo es, sin duda, la detención preventiva.

La Sala Penal de la Corte en varias decisiones ha mantenido este criterio que puede resumirse así: En los delitos en que no cabe fianza de excarcelación no es posible sustituír la detención preventiva por otra medida cautelar personal (Cfr. Auto de 2 de diciembre de 1993 en el sumario seguido a Eduardo H. Berbey sindicado por el delito de homicido en grado de tentativa; Resolución de 20 de octubre de 1993 en la causa seguida a Guiseppe Stagnaro por el delito de homicido cometido en perjuicio de Abelardo Kenny Monroy Govea; Auto de 25 de febrero de 1994 con ocasión de la solicitud de medida cautelar a favor de Guiseppe Stagnaro, todos expedidos por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia).

Me parece que, en el presente caso, existen exigencias cautelares de excepcional relevancia que justifican y aconsejan no otorgar la sustitución de la detención preventiva, a pesar de la condición de la imputada, ya que razonablemente se puede prever que una vez en libertad pueda continuar dedicándose, como lo hacía, a la venta de drogas desde la residencia que fue objeto del allanamiento por parte de los agentes de la policía.

En conclusión, como en este caso estimo que no se dan las condiciones para autorizar la sustitución de la detención preventiva en un delito de posesión y tráfico de drogas, respetuosamente dejo constancia que, SALVO EL VOTO.

Fecha ut supra.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS

Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABDIEL E. ELLEYNE WILLIAMS CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha sido recibida acción de Habeas Corpus en favor de ABDIEL ERNESTO ALLEYNE WILLIAMS interpuesta en su propio nombre contra el Segundo Tribunal Superior dentro de un proceso por supuesto delito de homicidio en perjuicio de LUIS ALBERTO PAEZ RIZO, hecho de sangre ocurrido el día trece (13) de junio de 1998.

FUNDAMENTO DE LA ACCION.

Manifiesta el accionante que ha quedado demostrado en las diferentes declaraciones, y denuncias que el no participó en el hecho que se le imputa y que existen testigos y familiares que así lo declararon ante la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, lo que prueba plenamente su inocencia, razón por la cual solicita a este Tribunal se verifique y rectifique el caso particular mediante la acción de habeas corpus.

SUSTANCIACION.

Mediante providencia de 9 de junio del año en curso dada la contestación del Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial quien informó que el sindicado se encontraba a órdenes del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, se libró el mandamiento correspondiente con lo cual, se recibió la contestación respectiva, a través del Magistrado Ponente, quien se expresó en los siguientes términos:

> "1) La detención preventiva del demandante fue decretada por la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, el día 27 de agosto de 1998 (fs. 86-90) y mantenida por este Tribunal Superior en el auto de enjuiciamiento dictado el 5 de abril de 1999, visible de fojas 315 a 320, formulándole cargos como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, título I, Libro II del Código Penal, es decir por el delito de Homicidio cometido en perjuicio del señor LUIS ALBERTO PAEZ RIZO. Esa resolución está ejecutoriada porque las partes no presentaron recurso alguno.
>
> 2) Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho consisten en que el día 14 de junio de 1998, el señor LUIS ALBERTO PAZ RIZO recibió herida producida por arma blanca que le ocasionó la muerte debido a lesión en la parrilla torácica izquierda y contra el demandante declaran los señores DAVID ALBERTO HERRERA PALOMINO Y CRISTOBAL PAEZ, quienes lo identifican como una de las personas que agredió con arma filo cortante al occiso. Estos aspectos están desarrollados en los fundamentos jurídicos del auto de enjuiciamiento visible de fojas 315 a 320. El demandante guarda detención preventiva desde el día 11 de diciembre de 1998 (fs.230), es decir desde hace un año y seis meses.
>
> 3) Actualmente tenemos bajo nuestras órdenes al demandante y estamos cursando oficio al director del Centro Penitenciario La joya, para filiarlo bajo la responsabilidad del Honorable Magistrado Sustanciador. La fecha de audiencia está fijada para el día 31 de agosto del año 2000.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Al examinar el expediente principal se advierte que mediante resolución de 5 de abril de 1999 se abre causa criminal contra Ernesto Abdiel Alleyne y David Herrera Palomino por el delito de homicidio en perjuicio de Luis Alberto Paez Rizo y se mantuvo la medida cautelar personal de detención preventiva en contra de los dos imputados tal como se desprende de fojas 315 a 320 del expediente principal. La anterior decisión es consecuencia directa de la valoración de las pruebas que vinculan a Abdiel Ernesto Alleyne Williams como uno de los agresores, quien junto con Herrera Palomino atacan a Paez Rizo con arma blanca, herida esta que le produce la muerte.

La mencionada medida cautelar fue decretada por la Fiscalía Cuarta Superior mediante providencia de 27 de agosto de 1998, teniendo como fundamento la comisión de un hecho punible - homicidio doloso- y el testimonio de Cristóbal Paez quien afirma que Alleyne Williams fue el sujeto que acompañaba a Herrera Palomino (a) Junier el día del homicidio y quienes los atacaron tanto a él como a Alberto Paez Rizo.

Debe advertirse que esta acción solo tiene por objeto reconocer la juricidad de la orden de detención la cual en el presente caso se adecúa a las disposiciones constitucionales y legales que rigen esta medida cautelar y no como pretende el proponente, que se proceda a la revisión del llamamiento a juicio, para cuyo caso ante dicha inconformidad el procedimiento adecuado era el recurso de apelación.

En lo que respecta al aspecto objetivo de la conducta punible, la resolución que ordena la detención señala, expresamente el hecho imputado, el cual aparece debidamente comprobado a fojas 2-3 del expediente, donde reposa la diligencia de reconocimiento del cadáver.

Tal como se señala en el informe, el Segundo Tribunal Superior, en resolución de 5 de abril de 1999, quien decidió abrir causa criminal contra David Alberto Herrera Palomino (a) Junier y Abdiel Ernesto Alleyne Williams por el delito de homicidio en perjuicio de Luis Alberto Paez Rizo, tiene fecha fijada de audiencia para el día 31 de agosto de 2000.

Dado que el delito de homicidio por el cual es sindicado el señor Abdiel Ernesto Alleyne tiene fijada pena de prisión mínima superior de 2 años, la Corte estima que en la detención preventiva del sindicado no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que es procedente declarar legal la detención, pues se considera que, existen fuertes indicios que el sindicado se encontraba en el lugar de los hechos el día y a la hora en que los mismos ocurrieron y que fue uno de los que atacó al hoy occiso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor ABDIEL ERNESTO ALLEYNE WILLIAMS y por los tanto DISPONE que el detenido sea puesto de inmediato a órdenes de la autoridad demandada.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ ROGELIO DÍAZ VERGARA CONTRA EL DIRECTOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Lucas Sinisterra, presentó ante el Segundo Tribunal Superior acción de habeas corpus a favor de JOSÉ ROGELIO DÍAZ VERGARA, contra el Juez noveno de Circuito Penal de Panamá.

Mediante resolución de 30 de mayo de 2000, el Segundo Tribunal Superior decidió inhibirse del conocimiento de la presente acción por razón de que, según el informe de la autoridad demandada, es decir el Juez Noveno de Circuito Penal, el beneficiario de esta acción constitucional, se encuentra a órdenes del Sistema Penitenciario.

A foja 14 del expediente, es visible el oficio No. 1620-S de 9 de junio de 2000, emitido por el Segundo Tribunal Superior, a través del cual se remite el cuadernillo de acción de habeas corpus al Secretario General de la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, a foja 15 del expediente consta el informe secretarial que señala que "anteriormente le fue repartido al despacho del Magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES una acción similar en favor de JOSÉ ROGELIO DÍAZ...". En efecto, advierte este Despacho sustanciador que el Pleno mediante sentencia de 7 de junio de 2000, declaró legal la detención del señor DÍAZ VERGARA, razón por la cual en, el presente caso, se ha dado el fenómeno de cosa juzgada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que en esta causa ha ocurrido el fenómeno procesal de COSA JUZGADA constitucional y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA **(fdo.) ARTURO HOYOS**
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS **(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ**
(fdo.) JOSE A. TROYANO **(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.**
(fdo.) GRACIELA J. DIXON **(fdo.) ROGELIO A. FABREGA**
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ Y JULIO GONZALEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado MAURO OCTAVIO PÉREZ CITTADINI presentó el día 29 de junio de 2000 ante la Corte Suprema de Justicia, Acción de Hábeas Corpus a favor de los señores OSCAR GONZÁLEZ y JULIO GONZÁLEZ, ambos de nacionalidad colombiana y en contra de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, a fin de que se declare ilegal la detención que sufren sus representados, toda vez que no se les ha comprobado ninguna vinculación con ningún hecho punible y se les ha negado su derecho de asesoramiento, violandóse flagrantemente el derecho constitucional a la defensa. (Fs. 1)

La presente acción de Hábeas Corpus fue sometida a la correspondiente regla de reparto, siendo adjudicada a este Despacho, bajo la ponencia del Magistrado José A. Troyano.

No obstante, acogida la presente acción mediante providencia del 30 de junio de 2000, y encontrándose en trámite de notificación el mandamiento de Hábeas Corpus, se recibe en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia escrito de desistimiento presentado por el Licenciado MAURO OCTAVIO PÉREZ CITTADINI, en los siguientes términos:

> "Por este medio yo, LIC. MAURO OCTAVIO PEREZ CITTADINI, abogado en ejercicio, presento escrito de desistimiento de la acción de HÁBEAS CORPUS que presente (sic) a favor de los señores JULIO GONZALES Y OSCAR GONZALES, oriundos de COLOMBIA, y contra el fiscal segundo de Drogas de la Rep. de Panamá. Este desistimiento lo presentamos para así poder proteger los mejores intereses de nuestro(sic) cliente (sic)."

Conforme a la solicitud anterior y de acuerdo a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, que confiere a toda persona el derecho para desistir expresa o tácitamente un incidente, demanda o recurso que haya interpuesto, el Pleno de la Corte considera viable acoger el presente desistimiento.

Por lo anterior, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA el desistimiento de la acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licenciado MAURO OCTAVIO PÉREZ CITTADINI a favor de los señores OSCAR GONZÁLEZ y JULIO GONZÁLEZ y en consecuencia DISPONE el archivo del expediente.

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE RIGOBERTO RAMÍREZ TUÑÓN CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE LA CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación llegó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la Acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licenciado CARLOS M. HERRERA MORAN a favor del Señor RIGOBERTO RAMÍREZ TUÑÓN, en contra de la Resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, calendada 7 de abril del 2000, mediante la cual se declaró legal la Detención Preventiva del Señor Rigoberto Ramírez Tuñón dentro de la Demanda de Hábeas Corpus presentada a su favor y en contra del Fiscal Primero del Circuito del Tercer Circuito Judicial de Panamá, por estar vinculado a un presunto delito contra el Pudor y la Libertad Sexual cometido en perjuicio de la menor Estefani Génesis Ramírez.

Al momento de notificarse de esta decisión jurisdiccional, el Licenciado CARLOS M. HERRERA MORÁN, apoderado judicial del favorecido con la presente

acción, apela; por lo que se concede en efecto suspensivo el presente recurso.

El Licenciado Herrera Morán sostiene que la detención que padece su representado es ilegal, puesto que los Agentes de la Policía Técnica Judicial de la Agencia de Policía Judicial de Vacamonte, al recibirle declaración a la presunta víctima y a sus hermanas, no se les puso en conocimiento de las declarantes las previsiones y garantías contenidas en el artículo 25 de la Constitución Política, constituyéndose éstas, indudablemente en pruebas ilícitas, por lo que dichas pruebas están inhabilitadas para servir de fundamento en una detención legal.

El Tribunal A-quo mediante Resolución de 7 de abril del 2000, declaró legal la detención preventiva del señor RIGOBERTO RAMÍREZ TUÑÓN. Dicha resolución en su parte medular expresa lo siguiente:

"...
1. Al analizar las constancias procesales advertimos que la conducta reprochable consiste en un delito Contra el Pudor y la Libertad Sexual, comprobando en forma debida con el aporte de los informes de servicio social y los resultados de las evaluaciones médico legal y psicológica, practicadas a la menor Estefani Ramírez Tuñón.

2. Al ser indagado, el señor RIGOBERTO MARTÍNEZ TUÑÓN negó los cargos formulados en su contra y manifestó que está separado de la señora Gladys Tuñón, madre de la menor ofendida, hace más de tres años, período de tiempo en el cual había perdido contacto con sus hijos. Señaló que actualmente sus hijos viven en casa del señor Ángel Hinestroza, quien es el actual concubino de Gladys Tuñón y afirmó que su hija Kathiusca le dijo que mientras dormía en la misma cama con Estafani, vio cuando su padrastro (Ángel Hinestroza) se acostó encima de ella, razón por la cual el imputado, acudió a las autoridades competentes.

3. Observamos que si bien el señor RIGOBERTO RAMÍREZ TUÑÓN, aportó su versión en cuanto a los hechos y suscribió formal querella en contra del padrastro de sus hijas, formulándole cargos por el delito de Violación Carnal, constan en autos, los informes de trabajo social y las evaluaciones psicológicas practicadas a sus hijas, las cuales evidencian una situación diferente a la planteada y constituyen graves indicios en su contra. Aunado a ello consta el resultado del examen médico legal practicado a la niña Estefani Ramírez Tuñón, lo cual acredita la existencia del hecho punible.

4. Los juicios Especiales Constitucionales de Hábeas Corpus, no permiten entrar en consideraciones de fondo sobre la culpabilidad o responsabilidad penal, toda vez que éstos son aspectos que deben debatirse durante las fases del proceso penal respectivo, previa valoración del caudal probatorio existente, razón por la cual debemos concretarnos a determinar si fueron cumplidas las formalidades establecidas por la Ley para sustentar la detención preventiva.

5. Ante tales circunstancias, observamos que no se ha violentado lo dispuesto por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, porque el proceso es conducido por autoridad competente; está acreditada la existencia del hecho punible; consta prueba indiciaria en contra del procesado, que lo vincula con el delito, aún cuando éste niega los cargos formulados en su contra; fue dictada la diligencia de detención preventiva; el imputado es asistido por un abogado y se cumplen con las garantías necesarias de acuerdo con la Constitución Política de la República, el Código de procedimiento y las Convenciones de Derecho Humano, ratificadas por Panamá, en consecuencia, la medida cautelar personal censurada debemos

declararla legal" (fs. 10 y 11).

Pasa esta Corporación a resolver la apelación, previas las consideraciones siguientes:

Se impone examinar las constancias procesales que obran en el expediente principal, a fin de verificar si la orden de detención que sufre RIGOBERTO RAMÍREZ TUÑÓN se ajusta a lo contemplado en nuestras normas constitucionales y legales.

La presente investigación tiene sus inicios cuando el señor RIGOBERTO RAMÍREZ T., padre natural de la menor ESTEFANY RAMÍREZ TUÑÓN, de once (11) años de edad, se presenta ante la Policía Técnica Judicial, Agencia de Arraiján, con la intención de interponer una denuncia contra José Angel Hinestroza por haber abusado sexualmente de su hija.

El señor José Angel Hinestroza, contra quien se presentó la denuncia, es el concubino de la madre de la menor Estefany Ramírez Tuñón, el cual vive en el hogar con la niña.

Consta de fojas 12 a 14 del expediente la declaración de la menor ESTEFANY RAMÍREZ TUÑÓN, corroborando lo señalado por su padre.

Posteriormente, declara ESTEFANY RAMÍREZ TUÑÓN y manifiesta que todo lo anteriormente expresado era falso y añade además, que quien venía abusando de ella hacía algún tiempo era su propio padre RIGOBERTO RAMÍREZ.

En tal sentido, se observa de fojas 71 a 73 del expediente principal, que la orden de detención preventiva contra el señor RIGOBERTO RAMÍREZ TUÑÓN fue decretada por la Personería Municipal del Distrito de Arraiján, mediante Resolución de 27 de agosto de 1999.

Consta además, de fojas 106 a 110, la Resolución de 8 de octubre de 1999, emitida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, en la que se señala, según el funcionario demandado que "El motivo por el cual se ordenó la detención preventiva de RIGOBERTO RAMÍREZ TUÑÓN, tiene como base la declaración de ESTAFAY GENESIS RAMIREZ TUÑON y DAMARIS EDITH RAMIREZ TUÑON, quienes señalan directamente a RIGOBERTO RAMIREZ TUÑON, como la persona que cometiera el delito bajo investigación, además de los resultados médicos forenses ginecológicos, donde se determinó que las menores ESTEFANY y DAMARIS RAMIREZ TUÑON, se encuentran desfloradas de vieja data".

Al revisar los antecedentes que integran el presente caso de manera exhaustiva y minuciosa, este Tribunal de Hábeas Corpus se encuentra en condiciones de exponer los siguientes puntos:

En primer lugar, no se puede soslayar que aunque el hecho punible se encuentra debidamente acreditado, con el resultado del examen médico legal practicado a la niña ESTEFANY RAMÍREZ TUÑÓN, la vinculación del señor RIGOBERTO RAMÍREZ TUÑÓN, debe examinarse minuciosamente.

Por lo que, es importante destacar el hecho de que el señor RIGOBERTO RAMÍREZ TUÑÓN, padre de la menor y hoy detenido, fue quien puso en conocimiento a las autoridades de la situación y presentó la denuncia y quien acompañó a su hija a las diligencias ante Medicatura Forense (véanse fojas 3 y 4 del expediente principal).

Por otro lado, en la primera declaración de la menor ESTEFANY RAMÍREZ TUÑÓN, que consta de fojas 12 a 14 del expediente principal, detalla y explica cómo se dieron los hechos, corroborando lo señalado por su padre.

Conforme se desprende del expediente, la persona favorecida con esta acción, no vive con sus hijas, es policía y cumple sus funciones en el área

fronteriza.

Por otro lado, la propia madre de las menores, en su declaración, reconoce que el padre de las niñas cumple con sus obligaciones. En dicha declaración la madre de las niñas señala: "él se portaba como un papá responsable, cuando él se iba a trabajar al Darién, siempre llamaba, para preguntar por sus hijas y cuando regresaba lo primero que hacía era llamarme para decirme que las alistara que las iba a buscar" (fs. 33 del expediente principal).

Ahora bien, si bien es cierto que en el negocio sub-júdice existen algunos elementos que comprometen al sindicado con el ilícito que se investiga, a la fecha éstos elementos no ameritan la aplicación de la medida cautelar más grave de las contenidas en el artículo 2147-B del Código Judicial.

Las normas que desarrollan la libertad corporal y la doctrina constitucional señalan que la detención preventiva debe considerarse una medica cautelar excepcional, a ser utilizada cuando otras medidas cautelares resulten inadecuadas para cumplir el objetivo básico de garantizar la sujeción del investigado al proceso penal. Por otro lado, se debe proceder a sustituir la detención preventiva, por otra medida cautelar personal.

Finalmente, esta situación no debe entenderse como un pronunciamiento de este Tribunal de Hábeas Corpus que lo desvincule del delito que se imputa, quedando entonces sujeto al resultado del proceso penal que se el sigue, y sin perjuicio de que sea detenido preventivamente si incumple los derechos inherentes a las medidas que se en su defecto se le aplicarán.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Resolución de 7 de abril del 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, en el sentido de que se DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor RIGOBERTO RAMÍREZ TUÑÓN, pero la SUSTITUYE por las medidas cautelares de carácter personal que establecen los literales a y b del artículo 2147-B del Código Judicial, consistentes en la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial y la obligación de presentarse cada quince (15) días ante la autoridad donde se encuentre radicada la causa.

Notifíquese

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO PASTOR GODOY GUERRA CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Cristina Guerra ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor de Roberto Pastor Godoy Guerra y contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia quien, por medio del oficio No. 96-O.V. de 16 de marzo de 2000, informó lo siguiente:

"A) No ordenamos la detención preventiva del señor ROBERTO PASTOR GODOY GUERRA.

B) Reiteramos que no fue este Tribunal quien dispuso la detención del señor GODOY GUERRA. Ese acto dispositivo emanó del Ministerio Público durante la etapa de instrucción del sumario relacionado con el delito de homicido en perjuicio de CARLOS ANTONIO ROUSE LOZANO y ESTON AURELIO GUILES DELGADO.

C) A la fecha, el prenombrado ROBERTO PASTOR GODOY GUERRA se encuentra a órdenes de este tribunal jurisdicional, porque así lo dispuso la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial mediante oficio No. 2118 de fecha 30 de noviembre de 1998, por habernos remitido el sumario para la valoración legal correspondiente.

Respecto a lo anterior es bueno señalar que el proceso en mención ingresó a esta colegiatura el 4 de diciembre de 1998, se abrió causa criminal contra GODOY GUERRA y OTROS, el 21 de diciembre del mismo año; y en la actualidad el sumario se encuentra pendiente de fijar fecha de audiencia, ya que la etapa de lectura, tal como lo consigna el artículo 2346 del Código Judicial, culminó el 14 de los corrientes." (fs.4-5)

Por su parte, la señora Cristina Guerra, solicitó que se sustituya la detención preventiva por otra medida cautelar menos severa, toda vez que el señor Pastor Godoy se encuentra detenido en la sala 31 del Hospital Santo Tomás, pues esta siendo operado y necesita dos pintas de sangre por enfermedad de los riñones.

Sin embargo, el Pleno observa a foja 7 del cuaderno de habeas corpus el informe secretarial de 16 de marzo de 2000 que señala que con anterioridad se había presentado una acción de habeas corpus similar a favor de Roberto Pastor Godoy bajo la numeración No. 668-99. La referida causa constitucional fue resuelta por este Tribunal, mediante resolución de 24 de noviembre de 1999, declarándose legal la detención del señor Roberto Pastor Godoy, pues existen indicios suficientes que la vinculan con los hechos que se le imputan.

Es necesario señalar que el artículo 2595 del Código Judicial establece el principio de la relatividad de la cosa juzgada en materia de habeas corpus:

"Artículo 2595. Quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento de un mandato de Habeas Corpus, no podrá ser detenido nuevamente por los mismos hechos o motivos, salvo que se presenten nuevos elementos probatorios que así lo ameriten."

Esta Corporación ha señalado en distintas ocasiones que es viable revisar el proceso de habeas corpus que ha finalizado con una sentencia declarativa de la detención de un imputado, siempre y cuando se invoquen nuevos elementos probatorios que ameriten modificar la situación procesal del detenido.

En el presente caso, el Pleno observa que no se han presentado nuevas pruebas que modifiquen el status del detenido, lo que conduce a que esta nueva acción de habeas corpus carezca de mérito suficiente para justificar un nuevo examen de la situación del detenido, por lo que debe mantenerse la medida cautelar aplicada.

Por otra parte, el Pleno considera que no puede accederse a la solicitud de sustitución de la detención preventiva por otra medida cautelar, toda vez que el Registro de admisión y egreso del Hospital Santo Tomás (fs.20-27) indica que el señor Godoy estuvo hospitalizado desde el día 28 de febrero del 2000 al 13 de marzo de 2000 y que el diagnostico final es obstrucción de vías urinarias altas mejorado, por lo que se colige que el mismo no se encuentra en grave estado de

salud.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de la cual es objeto el señor Roberto Pastor Godoy, NIEGA la sustitución de la detención preventiva por otra medida cautelar y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PERERIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ESCOBAR CASTRO CONTRA EL FISCAL PRIMERO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL CON SEDE EN CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación, en grado de apelación, la Resolución de 18 de mayo del 2000, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, dentro de la acción de Hábeas Corpus promovida por el Licenciado UZZIEL MORÁN TORIBIO, de la firma forense KOURUKLIS, MORAN Y ASOCIADOS, en representación de CARLOS ALBERTO ESCOBAR CASTRO y en contra del FISCAL PRIMERO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia funda su decisión en que concurren los presupuestos básicos exigidos por las normas de procedimiento, justificando la medida cautelar cuestionada refiriéndose a los siguientes puntos:

> "1. La conducta reprochable consiste en el apoderamiento arbitrario de dinero ajeno, utilizando un arma filo cortante para lograr que la víctima tolerara el despojo de sus bienes, por consiguiente el hecho consiste en el delito de robo, tipificado en el Capítulo II, Título IV, Libro II del Código Penal.
>
> 2. Aun cuando el imputado CARLOS ALBERTO ESCOBAR CASTRO, niega los cargos formulados en su contra, bajo el supuesto de que para la fecha y hora de los hechos había estado tomando cervezas en un bar, conversó con un lavador de autos y después fue sorprendido por un taxista que le amenazaba, en su contra constan:
>
> > 2.1. Los testimonios de los señores José Isaías Cornejo (fs. 30-33) y Erick Augusto Velázquez Pérez (fs. 33-34), quienes concuerdan en que persiguieron al imputado inmediatamente después de ocurridos los hechos y lo mantuvieron acorralado hasta que llegó la policía.
> >
> > 2.2. La señora Lastenia Edith Díaz (fs. 10-12), es la trabajadora de la Fonda Don Frank a quien despojaron del dinero de propiedad del establecimiento comercial citado, ubicado en Calle Santa Rita de La Chorrera, quien dice que ese día se trasladó a la Policía Nacional de La Chorrera y vio al procesado en el momento que lo

habían aprehendido, por tanto pudo identificarlo, lo cual no está viciado porque fue una situación normal ocurrido el mismo día de los hechos.

3. Tanto la preexistencia y propiedad del dinero objeto del delito como el hecho punible quedaron comprobados con la prueba documental visible a foja 9, el informe médico forense sobre las lesiones ocasionadas a la señora Lastenia Edith Díaz (fs. 15) y los testimonios valorados anteriormente.

4. Luego de examinar las piezas probatorias, debemos concluir que han concurrido los presupuestos básicos exigidos por las normas de procedimiento, para sustentar la medida cautelar personal cuestionada, porque el proceso es conducido por autoridad competente; fue dictada tanto la diligencia para disponer la declaración indagatoria como la detención preventiva, debidamente razonadas; el procesado es asistido por un abogado defensor; el delito imputado tiene pena mínima no menor de dos años de prisión y consta declaraciones de testigos hábiles contra el procesado.

5. Ahora bien, el señor demandante invoca asuntos que deben dilucidarse durante las fases respectivas del proceso penal correspondiente, porque un Juicio Especial Constitucional de Hábeas Corpus tiene la finalidad de valorar las piezas probatorias, para establecer si fueron cumplidas las formalidades legales para decretar la detención preventiva cuestionada, pues todo lo referente a la posible responsabilidad penal y culpabilidad del imputado, rebasen el radio de acción de tal proceso constitucional" (fs. 13-18).

En vista de tales hechos circunstanciales, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial falló en contra del Hábeas Corpus presentado por la firma forense KOURUKLIS, MORAN Y ASOCIADOS y Declara Legal la detención Preventiva del señor CARLOS ALBERTO ESCOBAR CASTRO, vinculado con el Delito contra el Patrimonio (Robo), filiándose a la responsabilidad de la Fiscalía Primera del Tercer Circuito Judicial de Panamá.

LA PARTE APELANTE

Considera el apelante los siguientes puntos:

1. Señala que en cuanto a los elementos de prueba en contra de su patrocinado carecen de fundamento legal.

2. Expone el apelante que en relación a las deposiciones de los taxistas que participaron en la aprehensión de su poderdante, los mismos no narran el tiempo transcurrido desde el acto inicial de la persecusión al presunto asaltante, y el momento de la aprehensión de su cliente por parte de la Policía Nacional. Señala que tampoco les consta que el sujeto aprehendido por ellos, hubiese salido corriendo del restaurante objeto del asalto, simplemente narra el primero de ellos, que tomó por donde le habían indicado que corrió el asaltante.

3. Agrega que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, resolver la acción de hábeas corpus sólo tomó en cuenta los testimonios en contra del procesado, más no así las tres deposiciones juramentadas, que ubican a su representado en un lugar distante y distinto del sitio de donde se dieron los hechos, el día y la hora en que ocurrieron los mismos.

4. Ha quedado demostrado que el ilícito se cometió al alrededor de las tres y media de la madrugada, en el Restaurante Frank, ubicado en

Calle Santa Rita de La Chorrera, y que una hora después fue aprehendida una persona a la que se pretende vincular con el mismo.

5. Termina el apelante solicitando se revoque la Providencia que ordenó la detención preventiva de su representado, proferida por la Fiscalía Primera del Circuito de La Chorrera, el 5 de abril del 2000; y en su defecto, beneficiar al imputado con una medida cautelar de carácter personal distinta a la detención preventiva, específicamente las consagradas en el artículo 2147-B de la Ley 3 de 1991, acápites a y b, por no reunirse los presupuestos establecidos en el numeral 3 del artículo 2159 del Código Judicial, y en virtud al principio In dubio Pro Reo, Favor Libertaris y favor Rei, consagrado en el artículo 1972 del Código Judicial, y ordenar su inmediata libertad.

La Acción de Hábeas Corpus procura reparar las lesiones ocasionadas a través de privaciones de libertad que resultan ilegales por haberse proferido con incumplimiento de los artículos 21, 22 y 23 de la Constitución, así como por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Tomando como base estas normas de derecho, al Tribunal de Hábeas Corpus le corresponde entrar a decidir sobre la legalidad o no de la privación de libertad del imputado; por lo que, luego de haber hecho un estudio relativo a la Acción de Hábeas Corpus en grado de apelación interpuesta a favor del señor CARLOS ALBERTO ESCOBAR CASTRO contra la Resolución del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, se ha podido observar que en ningún momento se ha visto afectado el debido proceso para la declaración de la medida cautelar de detención preventiva que se interpuso contra CARLOS ALBERTO ESCOBAR CASTRO,

Ahora bien, consta en el expediente los testimonios de los señores JOSÉ ISAÍAS CORNEJO CAJAR y ERICK AUGUSTO VELÁSQUEZ PÉREZ (fs. 30-34), quienes concuerdan en que persiguieron al imputado inmediatamente después de ocurridos los hechos y lo mantuvieron acorralado hasta que llegó la Policía.

Por otro lado, consta de fojas 10-12 del expediente la declaración de la señora LASTENIA EDITH DÍAZ, que es la trabajadora de la Fonda Don Frank, a quien despojaron del dinero, en la que se señala que ese mismo día se trasladó a la Policía Nacional de La Chorrera y vio al imputado en el momento que lo habían aprehendido, y lo pudo identificar.

Ha sido cuestionado el valor de los testimonios que incriminan al señor CARLOS ALBERTO ESCOBAR CASTRO, sin embargo, sobre este hecho se ha pronunciado anteriormente la Corte Suprema de Justicia, que de conformidad con las normas procesales vigentes, basta que se haya señalado de forma individual por una persona bajo la gravedad de juramento y testigo presencial de los hechos imputados, para que se sustente la medida cautelar de privación de libertad.

Se entiende entonces que, al existir una declaración acusatoria que haga peso en contra de la actuación de una persona a un hecho ilícito, se está en presencia de una prueba testimonial y en el presente caso recae sobre la persona de CARLOS ALBERTO ESCOBAR CASTRO, como es el señalamiento que le hizo la señora LASTENIA EDITH DÍAZ, de ser la persona que la amenazó, agredió y robo el dinero de la "Fonda Frank", además, los testimonios de ERIC AUGUSTO VELÁSQUEZ PÉREZ y JOSÉ ISAÍAS CORNEJO CAJAR.

Por las razones expuestas, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 18 de mayo del 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que Declara Legal la detención preventiva del Señor CARLOS ALBERTO ESCOBAR CASTRO y, DISPONE que el detenido sea puesto a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO RAÚL JARAMILLO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia la Acción de Hábeas Corpus a favor de FRANCISCO RAÚL JARAMILLO y en contra del DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de hábeas corpus contra la autoridad demandada quien, mediante Oficio A.L. 0441-00, de 19 de junio del 2000, rindió el informe correspondiente, en el que señaló que el prenombrado FRANCISCO RAÚL JARAMILLO, se mantiene bajo su custodia, no obstante el mismo fue puesto a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República mediante Oficio No. 291-AID-200 de 15 de junio del 2000.

Por lo tanto, se procedió a librar mandamiento de hábeas corpus contra la Fiscalía Auxiliar de la República, quien mediante Oficio No. 7669, de 20 de junio del 2000, remitió el informe meritado, en el que da cuenta de lo siguiente en su parte pertinente:

> "c) El señor FRANCISCO RAÚL JARAMILLO no se encuentra ni a nuestra ordenes ni bajo nuestra custodia ya que mediante el oficio No. 7496 de 15 de junio de 2000, fue enviado a la Directora del Sistema Penitenciario (Corrección), para que sea filiado, recluido y puesto a ordenes de la Fiscalía Octava del Primer Circuito Judicial de Panamá." (Fs. 13).

En virtud de que el señor FRANCISCO RAÚL JARAMILLO se encuentra a órdenes de la Fiscalía Octava de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para conocer de la presente acción de hábeas corpus, toda vez que el numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial establece que los Tribunales Superiores del Distrito Judicial son competentes para conocer de la acción de hábeas corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia, lo cual se aplica a la presente acción constitucional; por lo tanto, procede declinar el conocimiento en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE del conocimiento de la acción de hábeas corpus presentada a favor de FRANCISCO RAÚL JARAMILLO, y DECLINA su conocimiento en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, para que se le dé el trámite que la Ley establece.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NURIA NATEZ SANTIMATEO E ISMAEL BONILLA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE DROGA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licenciado HUMBERTO MOSQUERA BETHANCOURT, a favor de NURIA ROSALBA NATES SANTIMATEO E ISMAEL BONILLA RODRÍGUEZ y contra el FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

El proponente de esta acción solicita se declare ilegal la detención preventiva aplicada a sus representados debido a que la misma fue ordenada sin que existan los presupuestos necesarios y legales, además porque en el expediente penal no hay constancia de que los beneficiarios de esta acción se dediquen a la venta de sustancias ilícitas y la cantidad de droga que fue incautada es escasa. (Fs. 1)

Acogido el recurso se libró mandamiento contra la autoridad demandada, Licenciado PATRICIO CANDANEDO, quien señaló mediante Oficio N° FD2-T07-2070-00 de 26 de mayo de 2000, que el Despacho a su cargo ordenó la detención preventiva de los señores ISMAEL BONILLA RODRÍGUEZ Y NURIA ROSALBA NATES SANTIMATEO, mediante resolución calendada 12 de abril de 2000, consultable a fojas 24-25 del expediente penal; que los fundamentos de hecho lo constituyen la diligencia de allanamiento efectuada en la casa N° 27 B-63, donde los agentes de la Policía fueron recibidos por la señora Dayra Elena Santos Meneses, quien manifestó que en dicha casa °había droga y que la misma se vendía para poder comer. Igualmente se encontraban los ciudadanos BONILLA RODRÍGUEZ Y NATES SANTIMATEO, quienes voluntariamente y respectivamente entregaron ocho (8) fragmentos de crack y trece (13) fragmentos del mismo material nocivo, además de la suma de diez balboas con cincuenta centésimos. (B/.10.50) lo que se presumió fueran para la venta de sustancias ilícitas. Así también la declaración de los prenombrados, quienes señalaron que las sustancias incautadas eran destinadas únicamente para su consumo personal, por lo que no se dedican a la venta de drogas.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el funcionario demandado señaló que la conducta investigada conlleva una pena mínima que sobrepasa los dos años de prisión, por lo que es aplicable el artículo 2148 del Código Judicial de Panamá.

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el expediente penal remitido por el Ministerio Público, en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada a NURIA ROSALBA NATES SANTIMATEO e ISMAEL BONILLA RODRÍGUEZ se han dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva, o si por el contrario la misma se ajusta a las exigencias legales correspondientes.

Al revisar las constancias procesales se constata que los prenombrados fueron detenidos el día 12 de abril de 2000, como consecuencia de diligencia de allanamiento practicada a la casa N° 27 B-63, ubicada en calle segunda, Monte Oscuro, por la Fiscalía Auxiliar de la República a solicitud de la Dirección de investigación e información policial (D. I. I. P.).

En esta diligencia se incautó la suma de diez balboas con cincuenta

centavos (B/.10.50), en billetes de a uno y monedas de veinticinco centésimos (0.25) y veintiún (21) fragmentos de una sustancia sólida de color crema que fue presumida como droga (piedra o crack).

A la sustancia ilícita se le practicó la correspondiente Prueba de Campo, dando resultado positivo a la droga conocida como Cocaína o Piedra. (Fs. 10, antecedente).

No obstante, la Corte solicitó al Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, el análisis de la sustancia incautada, confirmándose que era la droga conocida como Cocaína (Crack), con un peso total de 2.63 gramos. (Fs. 14, cuadernillo H. C.), cantidad que supera, con creces, la dosis mínima de consumo que establece la tabla posológica del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público..

Recibida la declaración indagatoria de los sindicados, los mismos no han negado su vinculación con el hecho punible, señalando a su vez que si bien son consumidores de la sustancia ilícita encontrada en posesión, no se dedican a la venta. (Fs. 15-23, antecedente)

No obstante, el día 12 de abril de 2000, la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con drogas ordenó la detención preventiva de los señores ISMAEL BONILLA RODRÍGUEZ Y NURIA ROSALBA NATES SANTIMATEO, por considerar que existían los méritos suficientes para ello, al estar involucrados ambos sindicados al delito de venta de sustancias ilícitas, que de acuerdo a nuestro Código Penal es sancionado con pena superior a los dos años de prisión, cumpliéndose así el requisito exigido en los artículos 2148 y 2159, numeral 1 del Código Judicial.

Por otro lado, para ordenar la detención también se mencionan los elementos probatorios que determinan la comisión del hecho punible, es decir, la droga y el dinero aprehendido así como la vinculación de los prenombrados, entre los que se encuentran el informe policial rendido por los agentes captores, la diligencia de allanamiento, la declaración de la señora Dayra Elena Santos Meneses, quien señaló que la casa allanada se vendía droga para poder comer, aunado a la declaración indagatorias de los sindicados en la que admiten la propiedad de la droga, todo lo cual indica que se da cumplimiento a los numerales 2 y 3 del Código Judicial.

Frente a esta realidad procesal, el Tribunal de Hábeas Corpus considera justificada la detención preventiva ordenada por la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la medida de detención preventiva aplicada a los ciudadanos ISMAEL BONILLA RODRÍGUEZ Y NURIA ROSALBA NATES SANTIMATEO y, en consecuencia DISPONE que los detenidos sean puesto nuevamente a órdenes de la FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PLUBIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VANESSA ROQUERO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL

DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

El licenciado Jorge Goméz a presentado acción de habeas corpus a favor de Vanessa Roquero Lund, quien se encuentra privada de su libertad en el Centro Femenino de Rehabilitación y contra el Director de Migración y Naturalización (f. 1).

El activador procesal, solicita se ordene la inmediata libertad de Vanessa Roquero, toda vez que "...no ha violado ninguna disposición penal ni administrativa en nuestro país, ..."(Cfr. f. 3).

De otra parte, señala que, la Fiscalía Tercera ordenó la detención de Vanessa Roquero, por supuestamente estar involucrada en un delito, no obstante "... el Fiscal Tercero, dejó en libertad a nuestra defendida por no tener ninguna relación con el ilícito ..." (Cfr. f. 2)

Por acogida la presente acción constitucional se libró el respectivo mandamiento de habeas corpus, el cual fue contestado por la autoridad acusada, mediante nota DNMYN/609/00, del 7 de junio de 2000, y recibida en la Secretaría General de la Corte, el 16 de junio del año que decurre.

La autoridad acusada manifiesta que "...no ordeno la detención de Vanessa Roquero, la misma fue remitida a este Despacho, por el Centro Femenino de Rehabilitación; posteriormente esta Dirección ordena su detención por orden escrita ..." (f. 8).

Por otro lado, señala que "... este Despacho mediante Resolución motivada ordena su Deportación por motivos de seguridad y orden público ..." (f. 8). Esta resolución fue objeto de recurso de reconsideración con apelación en subsidio (f. 8).

Agrega que, el recurso de reconsideración fue confirmado, por lo que el expediente fue remitido al Ministerio de Gobierno y Justicia a fin de que sea resuelto el recurso de apelación (f. 8).

En vista de que esta Corporación de Justicia, no contaba con elementos suficientes, para resolver esta acción constitucional se dispuso solicitar copia del expediente seguido a Vanessa Roquero (f. 9), el cual fue contestado mediante nota 655-DNMYN-00, de 22 de junio de 2000, de la Dirección Nacional de Migración y recibido en la Secretaria General, el 27 de junio de 2000, visible a fojas 10 a 23.

DECISION DE LA CORTE

Procede la Corte a determinar si la medida cautelar de carácter personal aplicada cumple efectivamente con los requisitos que al efecto establecen la Constitución y la ley.

De conformidad con las constancias procesales, la orden de detención contra Vanessa Roquero Lund fue decretada mediante Detención Número 0476-SI-DNMYN del 8 de mayo de 2000, la medida cautelar se fundamenta en razones de Seguridad y Orden Público en el territorio nacional (f. 13).

Como elemento de prueba allegado a las sumarias se tiene que "... Vanessa Roquero Lund fue imputada por supuesto delito contra la Fe Pública, obteniendo la libertad el 4 de mayo de 2000 ..." (f. 2|).

De otra parte, tal y como señala la Resolución Número 2392 DNMYN del 11 de

mayo del año que decurre, el Director de Migración y Naturalización: "...

CONSIDERANDO

Que, a órdenes de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia, se encuentra la ciudadana VANESA ROQUERO LUND, natural de México,...arribó al territorio nacional el 6 de marzo de 2000.

Que, la mencionada ciudadana de nacionalidad mexicana, fue remitida mediante Nota # 204 S.J. del 5 de mayo de 2000, por el Centro Femenino de Rehabilitación.

Que, la prenombrada ciudadana de nacionalidad mexicana, fue sindicada por delito contra la fe pública.

Que, este Despacho considera que las acciones de la mencionada señora van en contra de las disposiciones migratorias vigentes.

Que, el artículo 36 del Decreto Ley No. 16 del 30 de junio de 1960, establece lo siguiente:

Artículo 36: "El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo, a cualquier extranjero así como expulsar del territorio nacional a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en el siempre que ello sea necesario o conveniente por razones de seguridad, de salubridad o de orden público."

Que, el artículo 37 Literal f del Decreto Ley 16 del 30 de junio de 1960, establece lo siguiente:

Artículo 37:"Queda prohibida la inmigración al país de los extranjeros que se encuentren en cualquiera de las condiciones que se pasan a enumerar:

F) en general todas las personas de antecedentes penales, tales como los prófugos y los condenados o sindicados por delitos comunes; y los que hubieren sido deportados de la República de Panamá."...
...

RESUELVE:

PRIMERO:DEPORTAR del territorio nacional a la ciudadana VANESA ROQUERO LUND, de nacionalidad mexicana, por razones de SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO...".

Como quiera, que la actuación de las autoridades de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización se encuentra ajustada a derecho, corresponde declarar su legalidad.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL, la orden de detención y deportación, impuesta a Vanesa Roquero Lund, proferidas, por el Director Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia y en consecuencia, ORDENA, que la detenida sea puesta nuevamente a ordenes de ese despacho..

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) JORG FEDERICO LEE (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRACESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VALERIO DEL CARMEN VARGAS SAAVEDRA CONTRA EL FISCAL QUINTO DE CIRCUITO DE PANAMA, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema, en grado de apelación, el expediente contentivo de la acción de habeas corpus propuesta, a favor de VALERIO DEL CARMEN VARGAS SAAVEDRA, contra el Fiscal Quinto de Circuito de Panamá, por considerar que la privación de libertad girada contra el nombrado señor, es ilegal.

LA RESOLUCION APELADA

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, al conocer en primera instancia de la acción propuesta, decidió mediante Resolución de 5 de junio del año que decurre, declarar legal la detención preventiva que sufre el señor VARGAS SAAVEDRA en razón que, a juicio de esa Corporación, del análisis del sumario se pudo constatar que el encartado se encuentra vinculado al delito contra el patrimonio, denunciado por Angel Mendoza Domínguez.

FUNDAMENTO DE LA ALZADA

El proponente del recurso de apelación, sostiene que la detención de VALERIO DEL CARMEN VARGAS SAAVEDRA está fundada única y exclusivamente en la descripción de la vestimenta dada por el denunciante.

El recurrente argumenta que, para que la detención preventiva pueda tener lugar, es necesario que existan varios indicios de los cuales derive una presunción, en la cual pueda descansar la más gravosa de las medidas cautelares, y que sólo debe ser aplicada cuando el resto de las medidas cautelares resulten ineficaces.

Indica finalmente la parte afectada que la Resolución del Tribunal Superior no refuta las consideraciones de la defensa, sino que mantiene la privación de libertad con apoyo únicamente en el señalamiento directo del denunciante.

ANTECEDENTES DEL CASO

Según se desprende de la extensa narrativa de hechos contenida en el cuaderno sumarial, la detención preventiva de VALERIO DEL CARMEN VARGAS SAAVEDRA tiene lugar en razón de que, viernes 31 de diciembre de 1999 el señor Angel Mendoza Domínguez se apersonó a la Policía Técnica Judicial (PTJ) para denunciar el robo de un taxi Toyota Tercel, tipo sedan, de color blanco, matrícula 8T-13520 y 222884 del año 1999, número de motor 5E1383713 y número de chasis EL530387406, perpetrado el día anterior a las 10:20 de la noche en el Sector de Mañanitas. Al explicar como se verificó el ilícito, indicó que cinco sujetos le solicitaron que los llevara a la entrada de Mañanitas, a lo que accedió. Manifestó que, al llegar al lugar de la carrera, uno de los cuatro sujetos, que se habían sentado en la parte de atrás, le amenazó con un arma detrás de la oreja derecha, lo bajaron del carro, lo tiraron en una zanja, le pegaron y le robaron su cartera con sus documentos de identificación, más B/.22.00. Que a raíz de esto, le explicó a una unidades de policía, en la entrada de Mañanitas lo sucedido y que poco después llegó un patrulla que inició un operativo por medio del cual se recuperó el

automóvil y se capturó por separado a los ciudadanos Arturo Gallardo Rosales, José Del Carmen Campos, Dony Omar Grajales, y VALERIO DEL CARMEN VARGAS quienes fueron aprehendidos por el conductor del auto.

DECISION DEL TRIBUNAL AD-QUEM

Una vez expuestos los argumentos de la parte afectada, procede el Tribunal al análisis de la controversia, manifestando lo siguiente:

En el presente caso es innegable el hecho de que la detención en sus aspectos formales ha sido dispuesta de acuerdo a lo consignado en el artículo 22 de la Constitución Política. Sin embargo, es de relevancia destacar que para la Fiscalía Auxiliar el criterio determinante para la orden de detención lo constituyó el hecho de que el delito investigado implicaba una conducta peligrosa, sancionada por la ley con una pena de prisión mínima superior a los dos (2) años. Este planteamiento surge de los siguientes señalamientos (ver foja 68 y 69):

> "Por su lado VALERIO DEL CARMEN VARGAS indica la forma que fuera detenido junto a su amigo DONY, además que indica de igual manera que fueron detenidos al ir a buscar más cerveza, y también manifiesta que es inocente de lo que se acusa, además infiere que tiene varios testigos que pueden manifestar donde se encontraba y que no estaba en el lugar de los hechos, también cita que fuera reconocido por un taxista estando en la policía nacional que está mintiendo según él.
> .....
>
> Es del criterio de esta Agencia que nos encontramos frente a un delito tipificado, normado y por ende sancionado dentro del Código penal patrio en su Libro Segundo (II), Título Cuarto (IV), Capítulo Segundo (II), que versa sobre los delitos CONTRA EL PATRIMONIO, toda vez que los autores del ilícito fueran reconocidos por el ofendido que lo manifestara en las declaraciones, al igual que son sujetos de peligrosidad que actuando en conjunto amedrentaron psicológicamente a su víctima con el uso de un arma de fuego, además que lo golpearon según las declaraciones del ofendido, aunado a esto se encuentra acreditada la vinculación de los encartados y este tipo de ilícitos establecen una sanción mínima mayor a los dos años de prisión".

La transcripción del criterio del Agente de Instrucción, carece, en opinión del Pleno, de los elementos vinculantes entre el delito y la persona de VALERIO DEL CARMEN VARGAS SAAVEDRA, pues no se señalan las razones de peso que le obligan a justificar la detención. Esto lo decimos en razón de que, si bien es cierto el denunciante incluyó al señor VARGAS como parte del grupo de personas detenidas aquella noche, a la cual se le atribuía la presunta comisión del robo del taxi, no es menos cierto que la identificación tuvo su sustento fundamental en la aparente vestimenta que llevaba al momento del robo uno de los partícipes, es decir, suéter de rayas celeste y blancas y no en descripciones físicas, tal como se evidencia en las declaraciones ofrecidas por el señor Angel Mendoza Domínguez (foja 65, 66 y 103 de los antecedentes). Obsérvese que el denunciante asegura de que sólo vio dos como estaban vestidos, pues le taparon la cara con su propio suéter. A juicio de esta Corporación, estas aserciones están revestidas de imprecisiones que debilitan notablemente los señalamientos en contra del joven VARGAS SAAVEDRA, pues ha sido involucrado únicamente por la vestimenta que llevaba el día de su detención. Tanto es así que a VARGAS como a su amigo Dony los detuvieron porque ambos tenían suéter de rayas (ver foja 51 del expediente).

Como queda dicho, el señalamiento de la víctima en las circunstancias que ofrece el presente caso no cuenta con la exigible solidez probatoria para sustentar por sí sola la privación de libertad del ciudadano Vargas Saavedra. Esta consideración se funda en los siguientes hechos, que ponen de manifiesto la fragilidad de la imputación que hizo la víctima en relación con la persona cuyo

favor se ha promovido este Habeas Corpus:

a) El hecho punible ocurrió, según el denunciante, en horas de la noche del día 30 de diciembre de 1999 (10:20 p. m.). Esta circunstancia de por sí dificulta, como es obvio advertirlo, la visibilidad y reconocimiento de los hechos.

b) Según el relato de la víctima, ésta fue encañonada por la espalda, con un objeto frío que él asume que era un arma de fuego. Esta circunstancia naturalmente hace pensar que la víctima del robo experimentó un gran nerviosismo, afectándose notoriamente su estado de ánimo para reconocer con precisión lo que acontecia.

c) La víctima, conforme a sus explicaciones, fue golpeada y tapada con su sweater por parte de los asaltantes, lo cual viene a corroborar, que no se dieron las circunstancias más favorables para permitir un reconocimiento pleno y fidedigno de las personas que perpetraron el ilícito.

d) Al momento de practicarse la detención del señor Vargas Saavedra este se encontraba en un lugar localizado a veinticinco minutos del sitio donde se encontraba el auto robado (ver fojas 135 del sumario).

e) Dentro de los detenidos, que vestían sweater con rayas, se encontraba una persona de nombre José Del Carmen Campos a la cual aparentemente se le encontró un casette de propiedad de la víctima del delito. Cabe destacar que el señor Campos fue aprehendido a poca distancia del lugar donde se recupero el vehículo robado (Ver fojas 4, 5 y 9 del expediente).

Otra circunstancia que confirma las ambigüedades que rodean la detención del señor VARGAS, es que, en ampliación de la declaración rendida por una de las unidades de policía que procedieron a la búsqueda y posterior aprehensión de los presuntos asaltantes, Oscar Camaño Oliveros, se consignó que, el día de los hechos una ciudadana del sector de Los Pinos les comunicó vía telefónica que, cinco sujetos sospechosos estaban desmantelando un taxi, a lo que se apersonaron al lugar. Prosiguió en su declaración el agente de policía que, al buscar cerca del área él logró capturar a quince minutos (15) del lugar donde estaba el automóvil robado, a tres sujetos sospechosos. Los capturados, en principio fueron, un sujeto cuyo nombre no se dijo en la declaración, Gallardo y José del Carmen, este último quien tenía un cassette, y estaba vestido con un suéter de rayas blancas con negro o azul. Además dijo el agente de policía que dos sujetos, que estaban con Gallardo, se dieron a la fuga, y ambos vestían suéter blanco (ver foja 134 del expediente).

Otros elementos que desvirtúa la imputación del señor Mendoza Domínguez, en contra de la persona del encartado es que, tanto las declaraciones de VARGAS SAAVEDRA, y la de sus testigos coinciden, en el hecho de que al momento del robo (alrededor de las 10:20 de la noche, foja 2) él se encontraba en su casa celebrando que había sido liquidado por la empresa donde laboraba, y estaba compartiendo y bebiendo cerveza con algunas amistades, Josesito y Dony (ver foja 59 y 60 del expediente).

Los testigos que acreditaron, en tiempo y lugar, lo argüido por el detenido, proponente de este habeas corpus, son Yasnira Oriet De Los Santos de Ossa (foja 185); Gladys Esther Saavedra Hernández (madre del detenido, de foja 204 a 206); Modesto Chiari Timamá (foja 216); Ayleen Geneva Mancilla Artolas (ver foja 225); y Hermelinda Sánchez Atencio (foja 230). Veamos algunas declaraciones de relevancia que confirma la versión ofrecida por VALERIO DEL CARMEN VARGAS SAAVEDRA:

(Yasnira Oriet De Los Santos de Ossa)

..."yo lo vi el día 30 toda la tarde porque hablamos a las 10:00 de la noche sobre respecto a que yo había matado un puerco para hacer

unos tamales y el estaba del otro lado de la cerca, diciéndome que desde las 4:30 de la mañana yo estaba parada y no iba a llegar al 31 de lo cansada que estaba, y yo lo veía cada momento pasar para su baño que tienen a fuera (sic) de su casa, ya que en la parte de atrás de mi casa está el fogón donde yo cocino mis comidas, y como un cuarto para las once volvió nuevamente a molestarme, que a que hora yo me iba a costar y después hoy (sic) cuando lo llamo una vecina llamada ZUNI que vive al lado de ellos"...

(Hermelinda Sánchez Atencio)

"Señor Fiscal ese día solo lo vi una vez, eran aproximadamente las 10:00 de la noche, el llegó a la cerca que colinda con la cerca de la casa de mi yerna, VALERIO conversó con Yasmira, acerca de que quería unos tamales, fue una conversación muy corta y se fue adentro de su casa"

(Modesto Chiari Timamá)

"Señor Fiscal yo me encontraba en Tocumen Nuevo Belén en la casa de VALERIO VARGAS, ese día tanto VALERIO como JOSESITO estaban lavándome mi auto ya que este último trabajaba en un lavaautos y siempre me lava el carro, ese día VALERIO celebraba que lo había liquidado y él quería regalarme a mi cuarenta balboas (B/.40.00) y como yo lo veía tomando le dije que me los diera mañana, ya que no quería que la mamá dijera que yo me aproveché de que estaba tomando, de allí me quedé como hasta las 11:00 de la noche que fue cuando me fui y también estaba la Señora JAZMIRA OSSA, haciendo unos tamales, que el pasaba para el baño y le decía que cuando estarían los tamales"...

(Ayleen Geneva Mancilla Artolas)

..."Yo me quedé sola en la parada, en lo que estaba allí en la parada, como entre las 10:15 y las 10:30 p.m. del mismo 30 de diciembre vi cuando venía bajando Dony y Valerio así (sic) la tienda del Chino Alberto a comprar unas cervezas, en un cartucho plástico, y la tienda Alberto estaba cerrada ...

Señor Fiscal, DONY tenía un gorrito crema un suéter de rayas verticales rojo con azul, un pantalón jean azul y VALERIO tenía un pantalón largo jean, un suéter azul celeste o blaco y andaba en chancletas".

Como corolario de lo anterior, es evidente que el señor VALERIO DEL CARMEN VARGAS, no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, pues se ha atestiguado que alrededor de las 10:00 de la noche el imputado se encontraba en su casa y en sus inmediaciones. El robo denunciado se verificó a las 10:20 de la noche aproximadamente y el recurrente fue detenido a las 10:30 de la noche como se desprende de la información que reposa en el documento denominado Filiación de Detenidos (ver foja 37 de las sumarias), y en atención a ello entre el robo y la aprehensión sólo existe un lapso de 10 minutos, lo que hace virtualmente difícil que el detenido estuviera presente al momento del ilícito.

Relacionadas todas las circunstancias relevantes que forman parte de la investigación tramitada por el Ministerio Público, y que han sido examinadas de manera pormenorizada, esta Superioridad Judicial estima que en dicha instrucción sumarial no existen hasta el momento mayores evidencias testimoniales, documentales, ni de otra índole, que acrediten de manera comprometedora, contundente e inequívoca la participación del señor VALERIO DEL CARMEN VARGAS SAAVEDRA. Aunado a lo anterior es dable destacar que el precitado no tiene antecedentes policivos, ni penales (ver foja 96 del expediente), y la propia empresa en la cual laboraba VARGAS, Compañía Panameña de Aceites, S. A. certificó que el mismo demostró

honradez, puntualidad, responsabilidad y capacidad en las labores a él asignadas (ver foja 187).

Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley REVOCAN la Resolución de 5 de junio del 2000 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y en su lugar DECLARAN QUE ES ILEGAL la detención mantenida contra VALERIO DEL CARMEN VARGAS SAAVEDRA con cédula de identidad personal N° 8-467-211 por el Fiscal Quinto de Circuito de Panamá.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) JORGE FEDERICO LEE
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DEYCA INDIRA CARRERA GONZALEZ CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado GERARDO OROCU JIMENEZ, actuando en nombre y representación de DEYCA INDIRA CARRERA GONZALEZ, ha presentado acción de habeas corpus contra el Segundo Tribunal de Justicia, por considerar que la detención que sufre la prenombrada es ilegal.

FUNDAMENTO DEL RECURRENTE

De acuerdo a lo expresado por el recurrente en su libelo, la señora DEYCA INDIRA CARRERA fue condenada a pena de 40 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, mediante sentencia fechada 7 de marzo de 1999, emitida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal, del Segundo Circuito Judicial de Panamá, con sede en San Miguelito. Esta sentencia fue apelada y sustentada, remitiéndose el expediente al Segundo Tribunal, sin que a la fecha (un año y tres meses después) se haya resuelto el mismo.

Al respecto indica, que la señora CARRERA GONZALEZ se encuentra privada de su libertad corporal, desde el 12 de noviembre de 1997 y que no se ha podido beneficiar a través de una solicitud de libertad condicional debido a la lentitud del Segundo Tribunal para resolver sobre el proceso en cuestión.

En estas circunstancias, el recurrente invoca el artículo 2148-A del Código Judicial, el cual expresa que la detención preventiva será revocada por el Juez, sin más trámites, de oficio o a petición de parte, cuando se exceda el mínimo de la pena que indica la Ley por el delito que se le imputa, de conformidad con las constancias procesales. Considera a su vez, que en estos casos la detención preventiva será sustituida por otra medida cautelar de carácter personal, tal como lo señala el artículo 2147B del Código Judicial.

Agrega además el accionante, que la señora DEYCA CARRERA en la audiencia ordinaria se declaró confesa y arrepentida. Que su actuación fue bajo coacción y amenaza de su esposo, quien portaba un arma de fuego y la obligo a ejecutar el ilícito, que desconocía los hechos y el móvil del delito cometido.

Concluye el recurrente solicitando la inmediata libertad de la señora DEYCA CARRERA, ya que ha cumplido más de las dos terceras partes de la pena que indica la Ley por el delito que se le imputa.

MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS

Librado el mandamiento de habeas corpus respectivo, el mismo fue contestado por la autoridad demandada mediante Oficio No. 182-A. C. de 23 de junio de 2000, visible a fojas 6 y 7 del libelo, en el que se informa que ese Despacho no ha ordenado la detención de la señora CARRERA. Esta medida cautelar personal fue dispuesta por la señora Fiscal Primera del Segundo Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, con sede en San Miguelito el 26 de noviembre de 1997 por haber sido vinculada la justiciable a un robo a mano armada junto con el señor CARLOS ARTURO LUZCANDO, en perjuicio del señor MIGUEL ANTONIO CAMARENA MENESES.

Señala a su vez, que este proceso ingresó al Segundo Tribunal Superior de Justicia en razón de la alzada propuesta por su Defensa Técnica contra la sentencia de 7 de marzo de 1999, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de lo Penal del Segundo Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, con sede en San Miguelito. Por lo que actualmente, existe un proyecto en circulación que está bajo la lectura y discusión de los miembros de la Sala, para emitir la resolución que demanda la ley de segundo grado.

ANTECEDENTES

De las constancias procesales se observa que la señora DEYKA INDIRA CARRERA GONZALEZ y CARLOS ARTURO LUZCANDO fueron apre- hendidos el 25 de noviembre de 1997,como consecuencia de la denuncia suscrita por MIGUEL CAMARENA en relación al robo a mano armada de que fuera víctima.

Seguidamente, la Fiscalía Primera de Segundo Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, con Sede en San Miguelito ordenó la detención preventiva de la señora DEYKA INDIRA CARRERA GONZALEZ, fundamentándose en la existencia de elementos vinculantes al delito de Robo a Mano armada en perjuicio de la señora CAMARENA MENESES, el 25 de noviembre de 1997 (F. 34).

Consta además, que el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Segundo Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, San Miguelito, mediante la Sentencia de 7 de marzo de 1999 declaró responsable del delito de Robo Agravado en grado de consumación, a DEYCA INDIRA CARRERA GONZALEZ, junto al otro procesado y la condena a la pena de cuarenta (40) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas.

La referida sentencia condenatoria fue apelada por la detenida y sustentada el 17 de mayo de 1999. De acuerdo a lo manifestado por el Segundo Tribunal de Justicia, actualmente se encuentra en discusión el proyecto que resuelve la apelación presentada.

DECISION DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

El fundamento de esta acción, de acuerdo al recurrente se encuentra en el artículo 2148-A del Código Judicial, que a la letra dice:

> "ARTICULO 2148-A. La detención preventiva será revocada por el juez sin más trámites, de oficio o a petición de parte, cuando se exceda el mínimo de la pena que señala la ley por el delito que se le imputa, de conformidad con las constancias procesales. En estos casos, la detención preventiva será sustituida por otra medida cautelar personal de las señaladas en el artículo 2147-B del Código Judicial.
>
> Las resoluciones que dicte el Organo Judicial con el objeto de cumplir lo dispuesto en este artículo, no admitirán recurso alguno."

Con relación a la norma recién transcrita, destaca el Pleno que la misma procede para aquellos casos en que corresponde establecer, provisionalmente, el tipo penal presuntamente infringido a fin de determinar si el detenido ha cumplido el mínimo de la pena que podría imponersele de ser encontrado culpable.

En este sentido tenemos, que en la situación de la señora DEYCA INDIRA CARRERA GONZALEZ, no se dan las condiciones a las cuales hace referencia el artículo 2148-A en comento, debido a que ha sido declarada culpable del delito de Robo Agravado en grado de consumación mediante la Sentencia de 7 de marzo de 1999, no obtante que la misma se encuentra en espera de pronunciamiento por parte del Segundo Tribunal Superior, en razón de un recurso de apelación.

Conforme a las constancias procesales la detención preventiva de la señora CARRERA GONZALEZ fue decretada el 25 de noviembre de 1997, tal como se aprecia a foja 34 de las sumarias. Se observa además, que la pena que le fue atribuida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Segundo Circuito Judicial es de cuarenta (40) meses de prisión. Por tanto, se evidencia que la imputada no ha completado aún el término de dicha sanción.

De acuerdo a las circunstancias descritas, no procede la aplicación del artículo 2148-A del Código Judicial al caso in examine, ya que la detención de DEYCA CARRERA es el resultado de sentencia condenatoria en su contra, tal como lo hemos expresado.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de DEYCA INDIRA CARRERA GONZALEZ y ORDENA que la detenida sea puesta nuevamente a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) JORGE FEDERICO LEE
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONIO CERRUD MONTENEGRO CONTRA LA FISCALÍA DELEGADA ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS DE HERRERA Y LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor ANTONIO CERRUD MONTENEGRO, detenido en la Cárcel Pública de Los Santos, a órdenes del Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos, por la presunta vinculación a delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA, relacionado con drogas, ha interpuesto en su propio nombre y representación, acción de hábeas corpus para que declare ilegal su detención.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de hábeas corpus contra la autoridad demandada, quien por medio de oficio No. 613 de 23 de junio del 2000, informó lo siguiente:

> "A. Si, es cierto que ordenamos mediante Resolución calendada 19 de junio del año 2,000, consultable de folios 56 a 59 del cuaderno Penal la detención preventiva del señor ANTONIO CERRUD MONTENEGRO.

B. Los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la limitación temporal de la libertad del señor ANTONIO CERRUD MONTENEGRO fueron las diversas informaciones que por parte de la Subdirección de Información e Investigación Policial de la Zona de Policía de Los Santos (Subdiip), se mantenían con relación a éste por Venta de Drogas.

En base de ello tenemos que la Subdiip de Los Santos, con oficio fechado 16 de los corrientes dirigido al Licenciado HECTOR ACEVEDO JAEN, quien para esa fecha estaba Encargado del Despacho, le peticionó una autorización judicial para llevar a cabo una diligencia de Compra Vigilada de Drogas al señor ANTONIO CERRUD MONTENEGRO (A) TOÑO YUCA y adjuntó a la misma cierta información que se manejaba sobre las actividades ilícitas de venta de drogas a las que CERRUD se venía dedicando en el área de la ciudad de Las Tablas.

La Fiscalía en la Resolución visible de folios 14 y 15 del proceso dispuso llevar a delante esta Operación y designó en ese momento los billetes que debían ser utilizados en la misma que era la suma de vente balboas (B/.20.00) (ver fojas 16 y 17), así como se asignó al señor GABRIEL DE GRACIA, miembro de la Policía Nacional, para que actuara como Agente Encubierta e interviniera en la referida diligencia con un Informante de la Policía que denominaron por seguridad el ZAR.

Tal cual lo demuestra el Informe de folios 19 y 20 del sumario, el señor CERRUD MONTENEGRO (A) TOÑO YUCA, mantuvo varios contactos con el Agente DE GRACIA, hasta que efectivamente en una transacción detallada por éste en el citado informe se verificó el traspaso donde él obtuvo del señor CERRUD un (1) sobre plástico transparente con un polvo blanco que se presumía fuese droga y le pagó por ello a CERRUD, la cantidad de quince balboas (B/.15.00) de los que la Fiscalía había autorizado previamente para ese menester.

Luego de ello, como lo expresan los Informes y el Acta de Allanamiento y Registro de fojas 21 a 28 y 33 a 40, se detuvo al señor CERRUD, quien mantenía en su poder los quince balboas (B/.15.00) de los veinte (B/.20.00) que este Despacho había designado para el referido Operativo.

La prueba de campo de folios 42, se efectuó a la sustancia objeto de investigación y que era producto de la compra de drogas, verificándose que la misma era positiva para la sustancia estupefaciente conocida como cocaína.

De acuerdo a lo expresado, consideró el suscrito que la actividad de venta de drogas estaba prima facie corroborada, por lo cual, posterior a la indagatoria de CERRUD MONTENEGRO, se decidió decretarle su detención preventiva, ya que su participación en el acto contrario al orden penal es por el momento inminente, siendo este una actividad ilícita que sobrepasa los dos (2) años de prisión y atenta Contra la Salud Pública, por lo cual, consideramos que se encontraban reunidos los presupuestos contemplados en los artículos 2147 y 2148 del Código Judicial, reformado este último por la Ley 42 de 27 de agosto de 1999, para decretar la detención preventiva del mismo, ya que, en nuestro concepto en estas actuaciones existe la posibilidad que se siga atentando contra la salud de las personas.

C. El señor ANTONIO CERRUD (A) TOÑO YUCA, se encuentra detenido a nuestra órdenes en la Cárcel Pública de Los Santos, pero, desde este momento se pone a órdenes de esa Superioridad para lo que sea de lugar.” (fs. 10-12).

Pasa el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a resolver la Acción de Hábeas Corpus, previas las siguientes consideraciones.

Se impone entonces determinar si la medida cautelar de carácter personal que sufre ANTONIO CERRUD MONTENEGRO (A) TOÑO YUCA, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

El presente proceso penal tiene sus inicios en sendos informes obtenidos de fuentes de entero crédito allegados a la Sub-Dirección de Información e Investigación Policial (SUB-DIIP), de la Zona de Policía de la Provincia de Los Santos, en los que se señalan que el señor ANTONIO CERRUD MONTENEGRO se estaba dedicando a la venta de sustancias ilícitas en el área de la ciudad de Las Tablas. Por lo que, la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos, mediante Resolución de 16 de junio del 2000, autoriza un Operativo de Compra Vigilada de Drogas al señor ANTONIO CERRUD MONTENEGRO. En esa diligencia se designa al Señor Gabriel de Gracia, miembro de la Policía Nacional, como agente encubierto para que participe en dicha diligencia. Por otro lado, se designó la suma de veinte balboas (B/.20.00), desglosados en cinco billetes de a uno con el folio J79566876R, J53522928M, H2117391K, K39134004L. H65158607H, y tres (3) billetes de a cinco con el folio B83218469B, L69990464G y L67248683G. (fs. 14-15).

Consta de fojas 19 a 20 del expediente principal, el informe del Agente DE GRACIA, quien fue el que participó como agente encubierto en la operación de compra de droga el día 17 de junio del 2000, quien describe los detalles y resultado de la operación y en donde señala que mantuvo varios contactos con el señor CERRUD MONTENEGRO, hasta que efectivamente en una transacción detallada por éste en dicho informe, se verificó el traspaso donde él obtuvo del señor CERRUD un (1) sobre plástico transparente con un polvo blanco que se presumía droga y procedió a entregarle la cantidad de quince balboas (B/.15.00), que le habían sido autorizados previamente para esa diligencia por la Fiscalía.

También consta de fojas 21 a 28 y de fojas 33 a 40, los informes y el Acta de Allanamiento y Registro al Señor CERRUD MONTENEGRO, en el momento que se detuvo, y en el que se señala que el señor CERRUD MONTENEGRO, mantenía en su poder los quince balboas (B/.15.00) que habían sido designados para el mencionado operativo.

Realizada la prueba de campo correspondientes por el Laboratorio a la sustancia producto de la compra vigilada, resultó ser positiva para la determinación de la droga conocida como COCAÍNA, según se certifica a fojas 42 del expediente.

Consta además de fojas 49 a 55, la declaración indagatoria rendida por el señor ANTONIO CERRUD MONTENEGRO, en la que niega todos los cargos hechos en su contra por los agentes encubiertos, indicando además, como él había adquirido el dinero que le fue encontrado al momento de su aprehensión.

Así pues, la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos, expidió el 19 de junio del 2000, una Resolución motivada en la que ordena la detención preventiva del señor ANTONIO CERRUD MONTENEGRO, por considerar que la actividad de venta de drogas estaba corroborada con el sólo hecho de habérsele encontrado en su poder el dinero autorizado por la Fiscalía para realizar el Operativo de Compra Controlada de Drogas, así como haber obtenido el producto de dicha Operación. Además de que sus descargos en la indagatoria carecieron de argumento.

Le corresponde entonces al Pleno, determinar si la orden de detención cumple con los requisitos formales que establecen la Constitución y las Leyes, es decir, que emane de autoridad competente, que contenga fundamento de hecho y de derecho, que se trate de un delito con pena mínima de dos años o que haya flagrancia, que esté comprobada la comisión del hecho punible y que exista una vinculación del sujeto con el ilícito.

En el caso en estudio, observa esta Corporación que la orden de detención contra el señor ANTONIO CERRUD MONTENEGRO, cumple con las formalidades legales a que se hace referencia, además que las pruebas incorporadas al sumario se han acopiado resguardando sus garantías constitucionales y procesales, por lo que al existir suficientes elementos vinculantes con el ilícito Contra la Salud Pública, procede mantener la detención preventiva del señor ANTONIO CERRUD MONTENEGRO.

En mérito de lo anterior, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor ANTONIO CERRUD MONTENEGRO (A) TOÑO YUCA, y por lo tanto, DISPONE que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) JORGE FEDERICO LEE
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN EDUARDO MCRAE GONZÁLEZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus verbal, interpuesta por Isaías Rivera Villamonte a favor de Eduardo Mc Rae González, contra el Director de la Policía Nacional (f. 13).

Por acogida la iniciativa constitucional se libró mandamiento de habeas corpus, el cual fue contestado por la autoridad demandada, mediante nota AL-2080-00 del 6 de julio del 2000, en la que indica que "... No es cierto que haya ordenado la detención del ciudadano Juan Eduardo McRae González, ni por escrito ni verbalmente ..." (Cfr. f. 17).

Agrega la autoridad demandada que McRae González "... fue aprendido (sic) el día 30 de junio del año que decurre, debido a que la sección de captura de la Policía Técnica Judicial se hacia constar orden pendiente de captura emitida por la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial, razón por la cual se traslado (sic) al señor McRae a la referida agencia Investigativa ..." (Cfr. f. 18).

Por acreditado el hecho de que el beneficiario de esta acción constitucional se encuentra a órdenes de la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial, concluye el Pleno de la Corte Suprema, que carece de competencia, para conocer en primera instancia de esta acción de habeas corpus en virtud del artículo 2602 del Código Judicial que establece que los Tribunales Superiores de Distrito Judicial conocen en primer grado, del proceso constitucional de habeas corpus "por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia".

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE del conocimiento de la presente acción constitucional y lo DECLINA ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Envíese.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRACESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE HÉCTOR ARIEL CEDEÑO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, presentó la Licenciada Magaly Acosta de Vergara acción de habeas corpus a favor de HÉCTOR ARIEL CEDEÑO, contra el Director de la Policía Técnica Judicial. (f. 1-3).

Librado el mandamiento de habeas corpus, el Director de la Policía Técnica Judicial, Licenciado Emilio De León Lokee, rindió su informe de conducta mediante oficio No. A.L.0479-00 de 26 de junio de 2000, en los siguientes términos:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del adolescente HÉCTOR ARIEL CEDEÑO.
>
> 2. No tiene razón de ser sobre la base del punto anterior.
>
> 3. No tenemos a nuestras órdenes, ni bajo custodia al prenombrado adolescente HÉCTOR ARIEL CEDEÑO". (f. 6).

De lo que se deja transcrito, claramente se aprecia que la persona en cuyo favor se interpuso la presente acción constitucional no se encuentra privada de su libertad, razón por la cual no se justifica proseguir con la tramitación del presente habeas corpus.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE DEL PROCEDIMIENTO de la acción de habeas corpus interpuesta por el Licenciada Magaly Acosta de Vergara a favor de HÉCTOR ARIEL CEDEÑO, contra el Director de la Policía Técnica Judicial, y en consecuencia DISPONE EL ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JORGE FEDERICO LEE
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE RENTERÍA GRANADOS CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Rafael Rodríguez en representación de LUIS ENRIQUE RENTERÍA GRANADOS ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor y contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

En su demanda de habeas corpus, alega la parte actora que la detención de RENTERÍA GRANADOS es ilegal por razones de fondo y forma, toda vez que "el auto que decreta su libertad indica que se dieron pruebas ilícitas dentro del sumario y que los contra indicios y contra pruebas han dejado determinado que no existe méritos para mantener su detención". Agrega que el mencionado auto se dictó en efecto devolutivo o diferido, mas no en efecto suspensivo; razón por la cual nunca se debió suspender la orden de libertad.

Acogido el presente negocio se libró el mandamiento de habeas corpus correspondiente al funcionario demandado, quien en el término de la Ley rindió el informe de conducta correspondiente, mediante Oficio N° 230-S.F. de 28 de junio de 2000, en los siguientes términos:

> "1. No ordenamos la detención preventiva del recurrente, la misma fue decretada durante la fase preparatoria o de instrucción sumarial y el día 24 de marzo de 2000, en horas de la tarde, al finalizar la audiencia plenaria, el Lcdo. Alexis Ríos Samudio, suplente especial del Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, concedió la libertad provisional a los señores JAIME MIGUEL DONATOS Y LUIS RENTERÍA GRANADOS, sin ofrecer motivación alguna, lo cual fue impugnado en el acto de audiencia por el señor Fiscal Segundo Especial en Delitos Relacionados con Drogas, Lcdo. Patricio Elías Candanedo M.
>
> 2. Sustentado el recurso de apelación, ingresó a la Sala integrada por los Magistrados Wilfredo Sáenz F., Andrés A. Almendral C. y Elvia M. Batista S., el día 7 de junio de 299, es un expediente de tres tomos, fue elaborado el proyecto el 9 de junio del presente año y dictada la Resolución el día 20 de junio de 2000, por medio de la cual revoca la orden de libertad provisional de los señores JAIME MIGUEL DONATO Y LUIS RENTERÍA GRANADOS, porque tratándose de un delito contra la salud pública relacionado con drogas, al reemplazar la medida cautelar personal de detención preventiva por otra, debía someterlo a consulta al Supeiror, tal como lo establece el artículo 23 de la Resolución Ejecutiva N° 101 de 1994, dictada por la Asamblea Legislativa pra compendiar las Leyes 23 de 1986 y 13 de 1994, además en esta causa no han ocurrido las excepciones contempladas en el artículo 2417 del Código Judicial, subrogado por el artículo 2 de la Ley 43 de 1997, que permite conceder la libertad cuando el procesado hubiese cumplido en detención preventiva el tiempo correspondiente a la pena de prisión impuesta en la sentencia condenatoria o en los casos de sentencia absolutoria, con la salvedad de que a los imputados por delitos contra la salud pública relacionados con drogas debe aplicarse otra medida cautelar personal que garantice la presencia del imputado en el juicio.
>
> 3. El señor LUIS ENRIQUE RENTERÍA GRANADOS, está filiado a órdenes del Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de la provincia de Panamá y, no remitimos el expediente contentivo del proceso en referencia, porque ha sido devuelto al Tribunal de la Instancia, a través de la valija de correspondencia, mediante oficio No. 1756-S de 26 de junio de 2000.
> ..."

Al estudiar el presente negocio jurídico esta Superioridad observa que,

LUIS ENRIQUE RENTENRÍA GRANADOS, mediante audiencia preliminar celebrada el 16 de noviembre de 1999, fue llamado a juicio por presunto infractor por delito contra la salud pública relacionado con drogas (f. 13).

Posteriormente, el Juez Suplente Especial, quien presidió la audiencia que definía la fase plenaria, revocó la orden de detención preventiva decretada contra RENTERÍA GRANADOS y ordenó su libertad provisional considerando que "luego de evacuadas las pruebas testimoniales", la realidad procesal del imputado había variado sustancialmente. Contra esta resolución, el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas interpuso recurso de apelación y al respecto el Segundo Tribunal Superior señaló lo siguiente:

> "...
> 2. ... tenemos que el problema surge con motivo del reemplazo de una medida cautelar personal de detención preventiva por la libertad provisional, en un proceso en el que a los imputados les han formulado cargos por delitos contra la salud pública relacionado con drogas.
> ...
> 4. Con relación a los delitos contra la salud pública relacionados con drogas, el artículo 23 de la Resolución Ejecutiva N° 101 de 1994, dictada por la Asamblea Legislativa para compendiar las leyes 23 de 1986 y 13 de 1994, exige someter en grado de consulta al Superior, cuando es reemplazada la medida cautelar personal de detención preventiva por otra, es decir la libertad provisonal, por consiguiente en este proceso el señor Juez debió someter a consulta la misma y supender los efectos de ésta, además esa es una norma especial y posterior al artículo 2411 del Código Judicial, subrogado por el artículo 72 de la Ley 3 de 1991.
>
> 5. También consideramos oportuno explicar que las medidas cautelares permiten el recurso de apelación en el efecto diferido, según lo previsto en el artículo 2147-B, último párrafo del Código Judicial y, ese efecto suspende su aplicabilidad hasta que el Superior decida (artículo 1123 ordinal 3 del Código Judicial), por tanto no es admisible la tesis de que la decisión tomada es inapelable, porque incluso debió someterse a consulta y el acta tiene carácter de resolución porque recoge un pronunciamiento juridiccional.
>
> 6. Es admisible la tesis del recurrente en lo que respecta a la motivación de la decisión tomada, pues el Juez debió sustentar, esto significa explicar con el análisis de las pruebas las causas o razones para llegar a esa decisión tal como lo prevé el artículo 976, segundo párrafo del Código Judicial.

Esta Corporación de Justicia debe señalar que la orden de libertad provisional a favor de RENTERÍA GRANADOS, fue dictada al margen de la Ley tal como lo expresa el Segundo Tribunal Superior. Esto es así, porque el Juez Suplente del Juzgado Segundo de Circuito Judicial de Panamá revocó la medida cautelar de detención preventiva decretada contra RENTERÍA GRANADOS mediante Resolución no motivada, que debió ser consultada al Superior jerárquico, antes de ejecutar la resolución, contrariando lo estipulado en el artículo 23 de la Resolución Ejecutiva N° 101 de 1994, que compendia las Leyes 23 de 1986 y 13 de 1994 (por medio de las cuales se reforman, modifican y adicionan artículos del Código Penal y del Código Judicial y se adoptan otras disposiciones especiales sobre delitos relacionados con drogas, para su prevención y rehabilitación) y, cuyo tenor literal es el siguiente:

> "Artículo 23. Cuando se proceda por delitos relacionados con drogas, las medidas cautelares serán aplicadas por el tribunal competente, a excepción de la contenida en el literal e) del artículo 2147B del Código Judicial. Estas medidas serán remitidas en grado de consulta al superior."

Tomando en consideración lo expuesto y que el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo fechado 20 de junio de 2000, fue otorgado en efecto diferido y suspendió la orden de libertad provisional otorgada por el Juez Suplente del Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá tal como lo señalara el Segundo Tribunal Superior, a juicio del Pleno de la Corte Suprema de Justicia lo procedente es declarar legal la revocatoria de la orden de libertad provisional decretada a favor de LUIS RENTERÍA GRANADOS.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL lo actuado por el Segundo Tribunal Superior.

Notifíquese y Cúmplase

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAVIER LUIS JACKSON CONTRA EL FISCAL SEXTO DE CIRCUITO DE PANAMA. APELACION. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FEDERICO LEE. PANAMA, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La resolución de 19 de junio de 2000, expedida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en la acción constitucional de habeas corpus propuesta a favor del señor JAVIER LUIS JACKSON, contra el Fiscal Sexto del Primer Distrito Judicial, es recurrida en apelación.

La resolución apelada declara legal la detención preventiva del señor JAVIER L. JACKSON, decretada por la Fiscalía Sexta del Primer Distrito Judicial, por considerar que en el proceso adelantado en su contra aparecía acreditada la existencia del hecho punible, así como la relación material del sindicado con el ilícito, cuya comisión se le imputa.

Por su lado la representación judicial del beneficiado con la acción constitucional que se promueve, no comparte la resolución recurrida por estimar, que no basta los señalamientos del denunciante para acreditar el delito investigado y la participación del detenido. Además, alega la inexistencia del delito imputado al detenido, sustentado en la ampliación de las declaraciones de los miembros de la Fuerza Pública que participaron en el acto de detención de los implicados en el ilícito.

El Pleno advierte que la acción constitucional bajo examen hace relación a la supuesta comisión del delito de secuestro, en perjuicio del señor WILMINGTON ORTIZ quien suscribe la denuncia, visible a fojas 1-3 del sumario instruido. En dicha denuncia, relata el señor ORTIZ haber sido detenido, junto a un amigo suyo de nombre CARLOS, por unas personas que viajaban en un carro, al que los subieron y los llevaron a una casa en donde los amarraron y los golpearon. Posteriormente, lo sacan de la casa y lo suben a un vehículo color negro, que era conducido por una persona de tez morena. Que al llegar a la altura de la localidad conocida como Veinticuatro (24) de diciembre, donde hay una garita de policía, èl empieza a forcejar con la persona morena el arma, saliéndose una detonación que alerta a unos policías que estaban cerca.

Como consecuencia de lo anterior, manifiesta el agente policial, se detuvo a la persona que conducía el vehículo en el que, supuestamente, era transportado el denunciante, que resultó ser el señor JAVIER LUIS JACKSON MAC LEAN.

A foja 13 del expediente aparece el informe del Cabo 2°, IGNACIO CONCEPCION, de la Policía Metropolitana, Area E, Tocumen, quien participó en la captura del detenido junto a otras unidades policiales. En su informe manifiesta haberse percatado de dos sujetos, uno de tez blanca y otro de tez morena, que estaban a un costado de un vehículo azul forcejando y que al acercarse, el de tez morena se dio a la fuga, pudiendo luego capturarlo. Que, el sujeto de tez clara les manifestó que el de tez morena le quería robar, primeramente, y posteriormente dijo que le querían secuestrar. En el vehículo señalado, se encontró armas, chalecos anti balas y otros con la iniciales del DIIP y cinta adhesiva.

Por otro lado, también informa el agente policial que el denunciante los alerta acerca de la participación de otros sujetos en el acto delictivo, dos damas y un hombre, y que los mismos usaron varios vehículos en la perpretación del hecho, entre ellos, uno marca Chevrolet, Blazer, color negro, matrícula N° 182416. En operativo llevado a cabo por la policía del área, para dar con el paradero de los otros involucrados, señalados por el denunciante, según consta en el informe policial de foja 12, se logra localizar el vehículo arriba especificado, el cual estaba siendo conducido por la señora MERILYN DAMARIS RODRIGUEZ, persona esta que fuera identificada por el denunciante como una de las participantes en el ilícito. Además se indica en el informe policial señalado, que la prenombrada MERILYN RODRIGUEZ, al preguntársele sobre la propiedad del vehículo, manifestó que el mismo le pertenecía a su concubino, JOSE JACKSON al que estaba esperando.

Además advierte esta Superioridad que, en la diligencia (f.8) llevada a cabo por agentes del DIIP de Tocumen, en el área de Pacora, en la residencia a la cual según el denunciante, WILMINGTON ORTIZ, fue llevado por los presuntos secuestradores, se hallaron instrumentos posiblemente utilizados para perpetrar el hecho, esto es, una soga, cinta adhesiva, alambres eléctricos que, de acuerdo al denunciante fueron empleados por los secuestradores presuntos, para infringirle castigo con corriente eléctrica.

A foja 29 del expediente rinde declaración el Cabo II de la Policía de Tocumen, MELQUIADES ANTONIO PEREZ F., quien participó en la detención del señor JAVIER JACKSON. Coincide con el Cabo I IGNACIO CONCEPCION, en cuanto a los hechos que dieron lugar a la detención del prenombrado JACKSON.

No obstante que los involucrados en el ilícito, cuya investigación se adelanta, han negado los hechos que se le imputan, considera este Pleno que de los elementos probatorios que se han dejado examinados no sólo se desprende la existencia del delito imputado, sino también indicios graves de responsabilidad en contra del detenido. En este sentido, conviene advertir que el artículo 2147-A del Código Judicial autoriza la aplicación de medidas cautelares, y la detención preventiva es una de ellas, cuando existan graves indicios de responsabilidad en contra del afectado, por lo que se encuentra justificada la detención preventiva ordenada contra el señor JAVIER LUIS JACKSON y, en consecuencia, debe confirmarse la resolución impugnada.

Por todo lo expuesto la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 19 de junio de 2000, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en la acción de habeas corpus propuesta a favor del señor JAVIER LUIS JACKSON M., contra el Fiscal Sexto del Primer Circuito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) JORGE FEDERICO LEE

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARMANDO LÓPEZ MARTÍNEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ROLANDO MARCOS-HERMOSO CORDICH, defensor de oficio, interpone acción de habeas corpus a favor de ARMANDO LÓPEZ MARQUINEZ y contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

EL ACCIONANTE

Manifiesta el defensor de oficio, que el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas hace una errónea concepción sobre el actuar de su representado, señor ARMANDO LÓPEZ MARQUINEZ, toda vez que confunde la simple posesión de drogas con la tenencia de drogas con ánimo de venta o traspaso.

Señala lo anterior, debido a que la orden de detención de LÓPEZ MARQUINEZ, se fundamentó en una diligencia de allanamiento, en donde se le incautó al prenombrado, fragmentos de sustancia color cremosa que se presume sea droga. Por otra parte, queda consignado en acta de allanamiento, que su patrocinado al ver las unidades policivas, arrojó un cartucho al techo de una de las barracas, que al ser revisado se encontró droga.

Agrega el licenciado MARCOS-HERMOSO, que a pesar de lo anterior, el acta de allanamiento se contrapone con la declaración de GENEROSO ROSERO TORRES, miembro de la Fuerza Pública, y quien afirma, que en efecto, observó al prenombrado LÓPEZ MARQUINEZ tirar al techo del inmueble un cartucho de plástico, pero que el mismo no contenía sustancias ilícitas; sin embargo indica, que la droga fue encontrada en un matorral cercano a las barracas allanadas, lo que demuestra que su representado no tiene que ver nada con esta droga, por tanto, no se puede ubicar como poseedor agravado de sustancias ilícitas.

Por lo expuesto solicita, se declare ilegal la detención preventiva que sufre el señor ARMANDO LÓPEZ MARQUINEZ, y en consecuencia se le otorgue su inmediata libertad. (fs. 1-3)

SUSTANCIACIÓN

Por medio de resolución de nueve (9) de junio de 2000, se libra mandamiento contra la autoridad demandada, quien a través de Oficio FD01 T02-2319 de 12 de junio de 2000, señaló que ciertamente, ordenaron la detención preventiva de JESÚS ARMANDO LÓPEZ MARQUINEZ, mediante resolución fechada 5 de abril de 2000.

Los hechos que motivaron a la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas a tomar la decisión aludida, ocurren cuando efectivos de la Policía Nacional llevaron a cabo un operativo de profilaxis social en compañía de la Corregidora de Parque Lefevre, y en donde lograron observar al señor LÓPEZ MARQUINEZ, cuando arrojó al techo de la vivienda (barraca 2729) un cartucho que al ser verificado resultó contener droga. Luego se llevó a cabo la diligencia de allanamiento en el cuarto del sindicado LÓPEZ MARQUINEZ, lográndose encontrar cierta cantidad de sustancia ilícita, dinero en efectivo y pequeños cartuchos plásticos, entre otras cosas.

Por otra parte indica, que a pesar que el señor GENEROSO ROSERO TORRES, miembro de la Fuerza Pública, manifiesta, que los cartuchos que el prenombrado LÓPEZ MARQUINEZ lanzó al techo no contenían sustancia ilícita, existe un Acta de Allanamiento en donde la señora Corregidora de Parque Lefevre describe "el hecho de que el hoy imputado fue observado en los momentos en que lanzó un objeto al techo de la barraca y allí se logró encontrar droga ilícita". (fs. 9-12)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

La autoridad demandada nos remite las sumarias seguidas al señor JESÚS ARMANDO LÓPEZ MARQUINEZ, sindicado por Delito Contra La Salud Pública (Droga), constantes de 45 fojas útiles (copias autenticadas).

Ahora bien, nos corresponde como Tribunal de habeas corpus, examinar la situación procesal del prenombrado LÓPEZ MARQUINEZ, a fin de verificar si la detención preventiva decretada en su contra, se ajusta a los parámetros establecidos en nuestras normas constitucionales y legales.

La presente encuesta penal se inicia el día 30 de marzo, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, cuando unidades de la Policía Nacional en operativo de profilaxis social en el Corregimiento de Parque Lefevre, observan a la altura de Calle 17, en la Barraca 2729, al sindicado JESÚS ARMANDO LÓPEZ MARQUINEZ con dos cartuchos en las manos, y éste al percatarse de la acción policial, arroja uno de los cartuchos (color blanco) al techo de la barraca y luego se introduce en el inmueble. Dicho cartucho fue verificado, encontrándose en su interior una sustancia sólida en forma de galleta envuelta en papel aluminio, la cual se fragmento en catorce (14) pedazos, y que se presume sea droga (Crack o Piedra).

Inmediatamente, las unidades policiales en asocio con la corregidora de Parque Lefevre, YOANNY PRESTAN DE DELGADO, procedieron a efectuar el allanamiento en la Barraca 2729, cuarto # 10, propiedad del señor LÓPEZ MARQUINEZ, en donde lograron encontrar en una de las gavetas de la cómoda, un (1) cartucho pequeño de color rojo con rayas blancas que contenía siete (7) fragmentos pequeños de una sustancia sólida de color blanco que se presume sea droga, varios cartuchos pequeños con un pedazo de masking tape que se encontraban dentro de un cartucho del super 99, y la cantidad de cincuenta y un balboas (B/. 51.00) en distintas denominaciones. (fs. 1-6)

En Diligencia de Prueba de Campo (f. 19), las sustancias incautadas dieron resultados positivos para la determinación de droga (Piedra o Crack), en la cantidad de 53.55 g. (f. 41)

JESÚS ARMANDO LÓPEZ MARQUINEZ (fs. 24-27), señala que la droga encontrada en su habitación es para su consumo, pero la que estaba en techo de la barraca no le pertenece. Con respecto al dinero señala, que es producto de su trabajo como vendedor de oro enchapado.

Por último, GENEROSO ROSERO TORRES (fs. 34-36), agente de Policía que participara en el operativo policial, no se ratifica del informe de novedad fechado 30 de marzo de 2000 (f. 6), debido a que señala, que el secretario al momento de redactar el informe comete un error, consistente en que la droga en forma de galleta que estaba envuelta en papel aluminio, no la encontró en el techo de la barraca, sino "en un herbazal un poco distante de la barraca, no la encontré por donde salió corriendo el sujeto, estaba como a diez metros de la barraca" (f. 36).

De las pruebas anteriormente señaladas, debemos advertir, que existen una serie de contradicciones, de las cuales se desprenden ciertas dudas en cuanto a la decisión que debe tomarse en la presente acción constitucional, y que pasamos a desarrollar. Veamos.

En primer lugar, se observa, que el testimonio rendido por el agente GENEROSO ROSERO se contradice con lo expuesto en el Acta de Diligencia de

Allanamiento (f. 5) y el Informe de Novedad (f. 6), toda vez que dicho agente no se ratifica del informe mencionado, por cuanto que señala, que la droga no fue encontrada en el techo de la barraca 2729, sino en un matorral cercano a dicho inmueble.

Por otra parte, hay que indicar, que en el informe de novedad se señala, que al momento de allanar el cuarto # 10 de la Barraca 2729, se incautaron, además de la droga y billetes en diferentes denominaciones, "gran cantidad de cartuchos pequeños plásticos y un pedazo de masking tape de color chocolate los cuales tienen un olor, que se presume sea droga" (f. 6). Esto último, no es mencionado en el Acta de diligencia de allanamiento, lo que genera incertidumbre respecto al material incautado.

Por último, a foja 18 se hace la salvedad de que la droga encontrada fuera del inmueble se fragmentó en catorce (14) pedazos de diferentes tamaños, color cremoso, y la ubicada dentro de la habitación, se fragmentó en siete (7) pedazos de diferentes tamaños, color blanco, los cuales al realizarse la prueba de campo arrojaron resultados positivos para la determinación de droga conocida como piedra o crack.

Sin embargo, al realizarse la prueba de peso de droga (f.41), se evaluaron estas dos sustancias en conjunto, dando como resultado un peso total de 53.55 gramos, lo cual crea nuevamente cierta duda, por cuanto que no se tiene certeza de la cantidad de droga encontrada dentro de la barraca 2729 y la cantidad de droga encontrada fuera de dicho inmueble.

Lo anterior es de suma importancia, debido a que para adoptar una medida restrictiva de libertad en estos casos, se requiere, determinar la cantidad de drogas incautadas; para así poder ubicar la conducta del actor, en uno u otro de los supuestos de posesión de droga señalados en el artículo 260 del Código Penal, es decir, posesión ilícita de droga en su modalidad simple, que conlleva pena de 1 a 3 años de prisión y por tanto no admite detención preventiva; o por el contrario, si se trata de posesión ilícita de droga agravada, la pena es de 5 a 10 años de prisión.

Las contradicciones que hemos resaltado en líneas precedentes, causan serias dudas en cuanto a la imputación que se le hace a LÓPEZ MARQUINEZ, lo que trae como consecuencia la necesidad de aplicar el principio in dubio pro reo; el cual nos indica que en caso de duda debe favorecerse al imputado.

Esta duda a que nos referimos, como bien señala JUAN CARLOS URAZÁN BAUTISTA, debe estar "estructurada, fundamentada, razonada; no aparece simplemente porque se afirme sin respaldo que hay duda. La duda debe demostrarse y ello se consigue al constatar que no existen los elementos de convicción que conduzcan a establecer el presupuesto probatorio de la decisión respectiva." (Las pruebas Penales, Editorial Leyer, pág. 14.)

En virtud de lo anterior, y dado que las contradicciones planteadas son de tal envergadura que nos impiden deducir graves indicios contra el procesado JESÚS ARMANDO LÓPEZ MARQUINEZ, el Pleno considera procedente declarar la ilegalidad de dicha medida de privación de libertad.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención de JESÚS ARMANDO LÓPEZ MARQUINEZ, y en consecuencia ordena sea puesto en inmediata libertad de no tener otra causa pendiente en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.

(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN A. ARJONA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE PATRICIA CLARCK MATTEW Y DADYERI MARCUCCI GARCIA CONTRA LA FISCALIA DELEGADA DE DROGAS DE LA PROVINCIA DE COCLE Y VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor ABRAHAM TINOCO presentó acción de Habeas Corpus a favor de PATRICIA CLARCK MATTEW y DADYERI MARCUCCI GARCIA contra la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Coclé y Veraguas.

Librado el mandamiento de habeas corpus, la funcionaria de instrucción informó que ordenó la detención de las favorecidas con esta acción, pero que actualmente las mismas se encuentran a órdenes del Juzgado Primero de Circuito Penal, de Coclé, desde el día 10 de julio de 2000, autoridad que solicitó el cuaderno penal para resolver medida cautelar a favor de las afectadas.

Debido a la circunstancia expresada por la Fiscal Delegada, en el sentido que las sindicadas no se encuentran bajo sus órdenes, el Pleno de la Corte carece de competencia para conocer esta acción, por lo que debe declinar el conocimiento de la causa al Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente, en atención a lo normado por el artículo 2602 del Código Judicial.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA de esta acción de habeas corpus, interpuesta a favor de PATRICIA CLARCK MATTEW y DADYERI MARCUCCI GARCIA, al Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FABOR DE ANGEL CACERES ABADIA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado RENALDO MILWOOD ha interpuesto acción de Habeas Corpus a favor de ANGEL CACERES ABADIA contra el FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA DE PANAMA.

Librado el mandamiento de habeas corpus, al encontrarse el expediente en

el despacho del sustanciador para resolver, el proponente de esta acción, en su condición de defensor técnico de ANGEL CACERES ABADIA, presentó escrito con la finalidad de desistir de la acción de habeas corpus, cuyo tenor es el siguiente:

> "Yo, RENALDO A. MILWOOD, de generales conocidas en autos; acudo ante vuestro despacho, en calidad de defensor del joven ANGEL CACERES ABADIA, también de generales descritas en autos; a manifestar que DESISTO del Recurso de Habeas Corpus.
>
> Atentamente,
>
> Derecho: Artículo 1073 del Código Judicial
> Panamá, 18 de julio de 2000
>
> (fdo) LCDO. RENALDO A. MILWOOD
> Abogado-Litigante"

Debido a que la ley permite el desistimiento de la demanda (artículo 1073 del Código Judicial), la Corte debe acceder a lo solicitado en el presente caso.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACCEDE AL DESISTIMIENTO de la acción de habeas corpus presentada por el licenciado RENALDO A. MILWOOD a favor de ANGEL CACERES ABADIA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDILDA ALEMÁN QUIRÓS CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Magaly Acosta de Vergara ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de EDILDA ALEMÁN QUIROZ y contra el Fiscal Primero en Delitos Relacionados con Drogas.

FUNDAMENTO DE LA ACCIONANTE

La licenciada Acosta de Vergara solicita que atendiendo a un juicio crítico y valorativo se decrete ilegal la detención preventiva que padece su representada Edilma Alemán Quiroz y se proceda a su sustitución por una medida cautelar menos represiva y grave como las contenidas en los literales a,b,c, y d del artículo 2147-F del Código Judicial.

Como fundamento a su solicitud, expone que su representada se encuentra detenida preventivamente desde el 1 de junio de 2000 como consecuencia de un allanamiento a una residencia ubicada en el sector del Realengo, corregimiento de Pedregal, luego que se realizara una compra controlada de estupefacientes, para la cual se utilizaron cuatro billetes de un balboa con los cuales se realizó la supuesta compra venta de dos sustancias sólidas de color crema que se presume

fuera cocaína, y la incautación de un pequeño envoltorio de supuesta hierba seca que se presume fuera marihuana, y una bolsa donde se recuperaron algunos de los billetes previamente marcados.

Afirma que su representada no guarda vinculación con ese hecho, dado que en el momento de su detención no se le ocupó sustancia ilícita alguna en su persona ni el dinero marcado, el cual fue encontrado en la persona de Alexis Méndez, tal como consta en el acta de diligencia de allanamiento. Así como que también se acredita en autos que su representada no reside en la casa allanada sino en el área de San Joaquín Multi 47 y que se encontraba presente en el exterior de la casa objeto del allanamiento ya que pretendía cobrarle a su tío Luis Quiróz (a) "Telefon" la suma de B/:15.00 que éste debía entregarle en concepto de un "Susu" o Ahorro que entre varias personas periódicamente realizaban.

Agrega que su representada no registra antecedentes penales, tiene un domicilio fijo en la República de Panamá, es madre de tres menores niñas, una de los cuales tiene un año de edad y es amamantada por su madre, aunado a que esta menor fue intervenida quirúrgicamente el 17 de octubre de 1999 en el estómago por una Invaginación Intestinal y se le realizó una Laparoctomia Exploratoria más una reducción manual del intestino y se le dio salida el 20 de octubre del mismo año, trayendo como consecuencia que dependa a su corta edad de la leche materna que su madre periódicamente le proporciona. Sin embargo su alimentación se ha visto afectada ante la detención que su madre mantiene a órdenes de la agencia instructora.

Finalmente indica que el artículo 2147-D del Código Judicial prohíbe taxativamente que una imputada que se encuentre amamantando a su prole se encuentre sometida a una medida cautelar tan grave como la detención preventiva, previendo la posibilidad de que pueda desempeñar su roll de madre y alimentar a su prole mediante la aplicación de una medida cautelar menos severa (fs.3-4).

FUNDAMENTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

El licenciado Rosendo Miranda, Fiscal Primero Especial en Delitos Relacionados con Drogas, al contestar el mandamiento de Habeas Corpus, manifestó que sí ordenó detención preventiva de la señora Edilda Gabriela Alemán Quiroz mediante resolución de 2 de junio de 2000 y el fundamento de hecho que tuvo para ello lo resumimos de la siguiente manera:

Mediante diligencia de allanamiento efectuada el 1 de junio de este año fueron detenidos la señora Edilda Gabriela Alemán Quiroz y Eliecer. Tal diligencia obedeció a que las unidades policiales mantenían información de que en el Corregimiento de Pedregal, sector Realengo, calle principal, casa sin número, Edilda Quiroz, Luis Quiroz, Marianel Quiroz, Alex, Kely y una menor de edad, hija de Edilda Quiroz, se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas, y por ello presentaron a ese despacho, los informes de seguimiento y vigilancia efectuados en el lugar, donde detallan el modus operandi que utilizaban.

Previo a la diligencia de allanamiento la agencia instructora autorizó la realización de una compra controlada de sustancias ilícitas, para lo cual se utilizaron cuatro billetes de un balboa, los cuales fueron previamente fotocopiados y autenticados por este despacho.

Afirma la autoridad acusada, que con ese dinero se logró comprar dos (2) sustancias sólidas, color crema, las cuales se presumió eran droga y que la fuente manifestó que la venta la efectuó una mujer que vestía un pantalón negro pescador y un suéter color chocolate, quien estaba acompañada de un sujeto al cual le entregó el dinero.

Al llegar al inmueble en la parte de afuera se encontraba la señora Quiroz Alemán, quien coincidía con la vestimenta que describió la fuente o comprador; y que en ese momento salió de la casa el señor Méndez, quien mantenía un maletín

en su poder, y al ser revisado, encontraron tres de los billetes utilizados en la compra simulada.

Se refiere también a las declaraciones indagatorias rendidas por la señora Alemán Quiroz y el señor Méndez. La primera niega los cargos en su contra, y afirma que no vive en el inmueble allanado, que no entró a dicha residencia y que vestía un pantalón licra negro y un suéter crema. En tanto el segundo, señaló que la hierba seca encontrada en la casa era para consumirla, y que desde los 12 años de edad se dedica a consumir cocaína y marihuana; negó la propiedad del dinero que según el acta de allanamiento se encontró en su poder, así como lo dicho por la unidades del Departamento Anti-Drogas, en relación a los informes de vigilancia y seguimiento efectuados con anterioridad a la diligencia judicial.

Como fundamento de derecho, el licenciado Miranda señala los artículos 2148 y 2159 del Código judicial (fs.8-12).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Luego de examinar las copias autenticadas del expediente principal, se advierte que la orden de detención preventiva ha sido decretada por autoridad competente, Fiscal Primero Especial en Delitos Relacionados con Drogas, mediante diligencia en la cual se expresó que se está en presencia de un delito contra la Salud Pública relacionado con Droga.

Además también se constata que la orden de detención emitida mediante resolución de 2 de junio de 2000, esta motivada y en ella el funcionario acusado mencionó los elementos probatorios existentes en la investigación contra la señora Edilda Gabriela Alemán Quiroz, tales como: los informes de inteligencia y vigilancia (fs.3-12) en los cuales se señala a la señora Edilda Quiroz como una de las personas involucradas en el ilícito investigado. Todo lo cual motivó la compra simulada de estupefacientes (f.15), de la cual el informante identificó a la señora Alemán Quiroz como la persona que le vendió la droga adquirida con los billetes marcados; la Diligencia de Allanamiento (fs.17-19-20-21); los resultados positivos de la evidencia incautada (f.28). Señaló también que al ser indagada la señora Alemán Quiroz no aceptó los cargos en su contra, por consiguiente, este Tribunal de Habeas Corpus concluye que la detención de la señora Alemán Quiroz es legal.

Debemos reproducir el contenido del artículo 2148 del Código Judicial que dispone lo siguiente:

> "Artículo 2148: Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años y exista prueba que acredite el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona contra si mismo, se decretará su detención preventiva.
>
> Si el imputado fuere una persona con discapacidad, el funcionario, además tomará las precauciones necesarias para salvaguardar su integridad personal".

Adecuando lo normado en la citada norma al caso bajo examen, se tiene que si bien se está ante un delito cuya pena mínima es superior a los dos años, que existe prueba que acredite el hecho punible y la vinculación de la señora Alemán Quiroz a través de los medios probatorios ya indicados; no se está ante la posibilidad que la señora Alemán Quiroz se de a la fuga, desatienda el proceso, destruya pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona, o contra si misma.

Por otro lado, la señora Edilda Gabriela Alemán tiene una hija de nombre Kaislin Lisbeth Bendiburg Alemán y según el Certificado de Nacimiento expedido

por el Tribunal Electoral de Panamá, nació el 12 de marzo de 1999 (f.1 del cuadernillo). La accionante sostiene que esta menor es amamantada por su representante.

A objeto de verificar tal afirmación mediante oficio SGP-1235-00 de 16 de junio de este año, se solicitó al Dr. Carlos Humberto Mas, Director del instituto de Medicina Legal , que se le practicara una evaluación médica a la señora Edilma Alemán Quiróz a objeto de determinar si está amamantando (f.15 del cuadernillo).

En respuesta recibida en la Secretaría de esta Corte Suprema el 29 de junio por medio de Oficio No. PTE-006-15399, el Dr. Jaime E. Arias Moreno, Médico Forense Patologo, al referirse al examen médico legal practicado a la señora Alemán Quiroz manifestó lo siguiente:

"Edad: 27 años.

Refiere que esta amamantando a una niña de 1 año y tres meses que ahora se le congestionan los pechos y le da fiebre. Dejó de amamantar desde hace tres días. Mamas turgentes, sin eritema, ni color, con abundante salida de material lacteos por ambos pezones".

Como se aprecia en el informe transcrito, ciertamente la imputada se encuentra amamantando a su prole, por lo que de conformidad con lo normado en el artículo 2147-D del Código Judicial, constituye una circunstancia que impide se decrete la detención preventiva, salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia.

Por tanto, respetando lo ordenado por la mencionada norma procedimental, nada impide que se sustituya por un período de seis (6) meses, la detención preventiva impuesta a la señora Alemán Quiroz por otra medida cautelar menos severa a objeto que la menor Kaislin sea amamantada adecuadamente, lo que sería imposible de estar su madre detenida en prisión.

Se hace la salvedad a la señora Alemán Quiroz que de conformidad con el artículo 2147-E del Código Judicial, si infringe los deberes inherentes a las medidas cautelares que se le impongan, el juez o funcionario de instrucción podrá decretar su sustitución o acumulación por otras más graves.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva dictada contra EDILDA GABRIELA ALEMÁN QUIROZ; y LA SUSTITUYE SÓLO POR EL TERMINO DE SEIS (6) MESES, por las medidas cautelares personales que establecen los literales a, b, y c del artículo 2147-B del Código Judicial, consistentes en la prohibición de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial, la obligación de residir dentro de la jurisdicción del Distrito de Panamá donde tiene su residencia, y el deber de presentarse cada quince días ante la autoridad que tramita la causa.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN A. ARJONA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFONSO PRECIADO TORO, CONTRA LA JUEZ PRIMERA

DE CIRCUITO PENAL DE COLON, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El doctor NORBERTO REY CASTILLO PEREA, actuando en nombre y representación de ALFONSO PRECIADO TORO interpuso acción de Hábeas Corpus a favor de su representado y en contra de la Juez Primera de Circuito Penal de Colón, la que al ser resuelta por el Segundo Tribunal Superior de Justicia consideró, que la detención era legal, decisión que fue apelada, por lo que entra el Pleno de esta Corporación de Justicia a revisar la actuación atacada.

ANTECEDENTES:

El ciudadano ALFONSO PRECIADO TORO se encuentra privado de su libertad desde el pasado 25 de mayo del presente año, cuando fue detenido por agentes de la Policía Técnica Judicial en su lugar de trabajo.

De acuerdo a las constancias procesales, el señor PRECIADO TORO se encuentra involucrado en la presunta comisión de delitos CONTRA LA SALUD PUBLICA (Tráfico Internacional de Drogas).

La presente investigación data del primero (1o.) de diciembre de 1987, cuando miembros del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) efectuaron algunos allanamientos en la Zona Libre de Colón, y en una vivienda ubicada en Chilibre, detectando 9,093.7 gramos de Cocaína (ver folios 252 - 253). A raíz de este hallazgo resultaron involucrados los ciudadanos RAUL MARURI, JULIO CHIFUNDO JIMENEZ, ALFONSO PRECIADO TORO, HERNANDO ENRIQUE LÓPEZ EGEA, JAIME MARCELINO OSORIO OSSA, HORTZ HERMANN GLATZ, JOSÉ GOMEZ Y ALVARO ESCOBAR GOMEZ (fojas 338-345).

Así el ente jurisdiccional emitió auto de llamamiento a juicio a través de resolución de 24 de noviembre de 1988 (folios 338-345), y se ha señalado fecha de audiencia ordinaria para el día 17 de julio del 2000.

FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN APELADA

El Segundo Tribunal Superior de Justicia al revisar el proceso consideró que la privación de libertad del ciudadano PRECIADO TORO es LEGAL porque el delito por el cual se le investiga (Libro II, Título VII, Capítulo V del Código Penal) tiene una sanción que oscila ente 8 a 15 años de prisión.

Agrego aquél Tribunal Colegiado a foja 13 del cuadernillo que:

> "2.- Contrario a lo sostenido por el demandante, existe resolución motivada para sustentar la detención preventiva del señor ALFONSO PRECIADO TORO, nos referimos al auto de enjuiciamiento dictado por el Juzgado Primero de Circuito de Colón, Ramo penal, que en su parte resolutiva hace referencia a la misma (fs.345), el cual fue impugnado por el abogado defensor del señor PRECIADO TORO, entre otros, y el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, confirmó su enjuiciamiento y detención preventiva por medio de resolución dictada el 6 de noviembre de 1989 visible de fojas 393 - 399.
>
> 3.- Dentro de otro contexto tenemos que el señor ALFONSO PRECIADO TORO ha sido debidamente identificado en el auto de proceder con respecto a sus generales, es decir nacionalidad, número de cédula de identidad personal, fecha de nacimiento, oficio, nombre de los padre, lugar de residencia, número de la casa y de teléfono para aquella época.

4.- Ahora bien, el delito imputado permite aplicar la medida cautelar personal de detención preventiva, porque la pena mínima contemplada en la norma penal supuestamente transgredida, no es menor de dos años de prisión; es un delito inexcarcelable; el imputado PRECIADO TORO no ha guardado detención preventiva durante un período de tiempo que corresponda a la sanción mínima de las norma penal aplicable, porque fue aprehendido recientemente; el proceso es conducido por autoridad competente; está representado por un abogado defensor; no ha concurrido ningún vicio de nulidad, ni constan indicios de prescripción de la acción penal, por tanto no le han violado la garantía del debido proceso.

5.- Siendo ello así, debemos declarar la detención preventiva cuestionada y todo lo referente a la responsabilidad penal y culpabilidad de los procesados será debatido durante las fases del proceso penal respectivo, porque tales aspectos rebasan el radio de acción de un Juicio especial Constitucional de Hábeas Corpus."

CONSIDERACIÓN DEL RECURRENTE

El recurrente se encuentra disconforme de la decisión proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia porque no existe en el proceso orden de detención preventiva en contra de su representado. Llega a esta conclusión porque a fojas 318 del sumario el Procurador General de la Nación de aquella época (Licenciado CARLOS AUGUSTO VILLALAZ) dictó detención preventiva contra los señores JAIME MARCELINO OSORIO OSSA, HORST HERMANN GLAZT, JOSÉ GOMEZ y ALVARO ESCOBAR GOMEZ. El juzgador de instancia al proferir el auto de llamamiento a juicio a fojas 345 se limita a señalar que "mantiene la detención decretada contra los enjuiciados" y el Segundo Tribunal Superior de Justicia al revisar el auto de proceder contra PRECIADO TORO se limitó a confirmarlo (ver folio 393-399), por lo que no existe una providencia de privación de libertad que decrete la detención preventiva de su representado.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Revisado el cuadernillo de Hábeas Corpus, así como los antecedentes que le acompañan, observa el Pleno que esta investigación se inició el primero de diciembre de 1987, (fojas 1), el auto de llamamiento a juicio contra los encartados fue proferido el 24 de noviembre de 1988 (fojas 338), la defensa técnica del procesado PRECIADO TORO interpuso recurso de Apelación el 10 de julio de 1989,(folios 384-386) que fue resuelto por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el día 6 de noviembre de 1989 (fojas 393-399); pero no es hasta el 27 de marzo de 2000, que se señala fecha de audiencia ordinaria, por lo que existe una mora en el impulso procesal de este expediente de diez años, situación totalmente irregular en cualesquiera proceso y aun más en éste, en el que el tipo de delito y la pena a imponer, de resultar culpables sus autores y/o participes, conlleva como mínimo 8 años de prisión, por lo que es necesario hacer un llamado de atención al ad-quo sobre el particular.

Por otra parte, en cuanto a lo señalado por el recurrente, es cierto, que la providencia de detención que reposa en el sumario (fojas 318) no contiene a ALFONSO PRECIADO TORO y aunque fue llamado a juicio, la parte final de la referida resolución (foja 345) mantiene las detención preventivas dictadas por el representante del Ministerio Público y PRECIADO TORO no se encontraba en el listado de los detenidos preventivamente. Aunado a lo anterior, se observa, que no existe otra providencia que de manera expresa ordene la detención preventiva de ALFONSO PRECIADO TORO.

Sobre el particular es necesario reiterar que el Hábeas Corpus tiene por naturaleza salvaguardar la integridad física y la libertad corporal de todo individuo que es detenido fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la Ley, para ello se utiliza como fundamento las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 21, 22 y 23, así como las normas

procesales penales contenidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

A partir de estas precisiones legales, el Pleno observa que el procesado fue aprehendido en su lugar de trabajo, diez años después de las primeras investigaciones en las que participó y rindió su versión de los hechos, por lo que si se hubiera proferido orden de detención contra él por parte del Procurador General de la Nación la lógica sugiere que el mismo habría sido detenido desde un inicio.

Finalmente contrario a las aseveraciones del Segundo Tribunal Superior de Justicia en cuanto a que el auto de enjuiciamiento en su parte resolutiva (foja 345) hace referencia a la detención preventiva de PRECIADO, ello no se constata en dicha resolución.

La orden de detención preventiva debe estar contenida en una resolución judicial y conlleva el cumplimiento de una serie de requisitos formales, tales como: el hecho imputado, los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible y los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena.

En la presente causa, no ha sido emitida una orden de detención preventiva en contra de ALFONSO PRECIADO TORO, en los términos y con el rigor que señalan los artículos 21, 22 y 23 de la Constitución Política de la República de Panamá, así como las normas procesales contenidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo que procede revocar la decisión proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y declarar ilegal la detención preventiva del procesado PRECIADO TORO.

El Pleno debe observar, que la presente declaratoria de ilegalidad, se emite por virtud de razones de forma y no de fondo, ya que, la pretermisión judicial que vicia de ilegal la detención del imputado, estriba en la ausencia de una orden tal cual, como hemos expresado, se consagra en los artículos 21, 22 y 23 de nuestra Carta Magna, además de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, violandose en consecuencia las garantías y derechos constitucionales del imputado en lo que concierne a su libertad personal.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia de 9 de junio de 2000 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y DECLARA ILEGAL la privación de libertad de ALFONSO PRECIADO TORO, por lo que ORDENA SU INMEDIATA LIBERTAD, de no mediar otra causa en su contra.

Notifiquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ADAN ARNULFO ARJONA L.

Con todo respeto y consideración deseo manifestar que lamento disentir del criterio respaldado por la mayoría, por las siguientes razones:

1. El detenido ALFONSO PRECIADO TORO se encuentra en la actualidad procesado por su presunta vinculación con la comisión del delito de tráfico internacional de drogas, tal como se desprende del Auto de Enjuiciamiento

expedido por el Juzgado Primero de Circuito de Colón, Ramo Penal, de fecha 24 de noviembre de 1988 (Véanse fojas 338 a 345 de los antecedentes). El referido Auto de Proceder fue confirmado por el Segundo Tribunal Superior mediante Resolución de 6 de noviembre de 1989 (Véanse fojas 393 a 399 de los antecedentes).

2. La razón que sirve de soporte a la declaratoria de ilegalidad de la detención consiste en señalar que contra el mencionado ciudadano no se expidió una orden de detención que cumpliera con los requisitos formales de indicar, entre otros datos, el hecho imputado y los elementos probatorios que militan en el proceso en contra de la persona afectada con la privación de libertad.

A mi modo de ver, esa interpretación resulta extremadamente formalista, ya que, como se indicó, en el presente caso, el señor PRECIADO TORO ha sido llamado a responder en el proceso penal mediante la expedición de Auto de Enjuiciamiento que se encuentra debidamente ejecutoriado. En esa Resolución de Enjuiciamiento se detalla el delito por el cual se procesa al señor PRECIADO TORO junto a los demás co-imputados, y se señala en relación con éste, que a juicio de los juzgadores de instancia, existen indicios que comprometen seriamente al señor PRECIADO TORO en el referido ilícito, habida cuenta de que él aparentemente envío un Telex, como empleado de la empresa Transportadora de Carga, solicitando un manejo especial y prioritario al embarque de electrodomésticos que tenía como destino la Isla de Curazao y en el que se descubrieron 1,500 kilos de cocaína al arribar a ese lugar.

En mi concepto, la información antes indicada ofrece la formalidad y garantía razonable para que el señor PRECIADO TORO tome conocimiento del motivo específico que justificó su detención. A lo anterior, hay que tener en cuenta que en el Auto de Enjuiciamiento el Tribunal de la causa sí ordenó la detención del mencionado ciudadano al establecer textualmente "Se mantiene la orden detención decretada contra los enjuiciados" (Véase 345 de los antecedentes).

En estas condiciones, considero que las garantías constitucionales y legales del señor PRECIADO TORO se han respetado sustancialmente, y sólo queda por dilucidar, en la etapa procesal correspondiente, su definitiva responsabilidad en el ilícito al cual se le vincula.

Con apoyo en lo señalado, estimo que existen atendibles exigencias procesales para mantener en este caso la legalidad de la detención, pese a que pudieran haberse incurrido en algunas pretermisiones rituales, que en últimas no revisten la trascendencia y gravedad que la decisión de mayoría señala, puesto que el señor PRECIADO TORO está llamado a juicio y cuenta con las oportunidades de defensa que la Constitución y la Ley le reconocen a todo imputado.

Por los motivos expresados, respetuosamente SALVO MI VOTO.

Fecha ut supra.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS SINGARES CAMPBELL CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense PADILLA Y ASOCIADOS, ha formulado ante esta Corporación de Justicia, acción de habeas corpus preventivo a favor de CARLOS SINGARES

CAMPBELL y contra el señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

Acogida la acción constitucional, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra el funcionario demandado, mediante providencia de 26 de junio de 2000, recibiendo en esta misma fecha, la Secretaria General de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el informe requerido al señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, que se reproduce a continuación:

"Honorable Magistrado:

En tiempo oportuno me dirijo a usted, respetuosamente, a fin de dar respuesta al mandamiento de Habeas Corpus Preventivo, librado por esa Corporación de Justicia, dentro de la acción de Habeas Corpus, presentada en contra del suscrito, a favor del señor CARLOS SINGARES:

a) Este despacho sí ordenó el arresto por ocho (8) días del señor CARLOS SINGARES, mediante Resolución No.005-2000 del 22 de junio de 2000.

La razón que motivó la Sanción de arresto impuesta al señor CARLOS SINGARES, fue el hecho de que en la edición del Diario El Siglo, del día 22 de junio del presente año, salió publicada una titular de primera plana, cuyo director es el citado señor SINGARES, la cual titula "Prominentes políticos y funcionarios públicos vinculados a la prostitución infantil... EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN... "BUSCA PLACER CON MENORES DE EDAD"... Afirma el abogado Sidney Sitton, quien se ratifica en sus acusaciones contra José Antonio Sossa. P.2"... y señala que el Lic. Sidney Sittón fue sancionado con seis (6) días de cárcel por el Procurador Sossa, en atención a sus denuncias.

En vista de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el numeral 1, artículo 386 del Código Judicial, se emitió la Resolución No.005-2000 del 22 de junio del presente año, por la cual se sancionaba al señor CARLOS SINGARES con ocho (8) días de arresto.

Consideramos propicia la ocasión para señalar que nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, en varias ocasiones se ha pronunciado en relación al tema de la facultad que otorga el citado artículo 386 del Código Judicial, a los agentes del Ministerio Público, para sancionar a quienes le falten el debido respeto, en este sentido, un ejemplo claro lo encontramos en el pronunciamiento de nuestra Máxima Corporación de Justicia, dentro de la Acción de Habeas Corpus, interpuesta en favor del señor JAIME PADILLA BELIZ contra la Procuradora de la Administración, quien le había impuesto una sanción de arresto por haberle faltado el respeto. Similar situación resguarda al Órgano Judicial, tal que se aplicó una sanción al Lic. Rodrigo Miranda. Copia de ambas decisiones se adjuntan.

b) Este despacho no tiene bajo su custodia, ni bajo sus órdenes al señor CARLOS SINGARES, ya que la orden de arresto emitida en su contra, no se ha hecho efectiva, pues al señor CARLOS SINGARSE no se le ha podido ubicar, y el mismo se encuentra actualmente evadiendo la responsabilidad que le atañe, por haber difamado e irrespetado al suscrito.

Adjuntamos copia autenticada de la Resolución No.005-2000 de 22 de junio del presente año, por la cual se sanciona con ocho (8) días de arresto al señor CARLOS SINGARES y copia simple de la página del diario EL SIGLO, del día 22 de junio de 2000, en la que fue publicada la noticia que motivó la sanción por irrespeto.

Del honorable magistrado con toda consideración,

(FDO.)
Lic. José Antonio Sossa Rodríguez
Procurador General de la Nación." (Fs.29-30)

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

El accionante denomina los "hechos y consideraciones", en los cuales basa su petición, así:

1. Para que el señor Procurador pueda ampararse en la facultad conferida en el artículo 386 del Código Judicial, el mismo deberá estar en ejercicio de sus funciones o que la ofensa o falta, provenga de un acto inherente a las funciones que el mismo ejerce. Estima, como primer supuesto, que el periodista SINGARES estuviere presente en la Procuraduría y lo hubiera ofendido de palabra o acción.

2. Y, como segundo supuesto, se refiere a que el accionante hubiere irrespetado al señor Procurador, a través de sus escritos en el Diario El Siglo, por efecto de un caso que se ventilare ante dicho despacho o en cualquier otra dependencia del Ministerio Público.

Argumenta, además, el accionante que la noticia aparecida en el diario El Siglo, se refiere a una denuncia ratificada por el licenciado SIDNEY SITTON y transcrita por Carlos Singares, y que la misma hace alusión a la persona del señor Procurador en el ejercicio de sus "actividades sociales, íntimas y privadas" (f.3), y, de acuerdo al criterio del demandante, nada tienen que ver con las funciones como Procurador General de la Nación.

En el hecho segundo advierte que, de haberse lesionado al señor Procurador en su peculio moral, éste debió utilizar los mecanismos de querella por injuria contra el licenciado SITTON y contra el señor SINGARES, de conformidad con lo previsto en los artículos 172 y 173 del Código Penal.

Por último, señala que se ha violentado el artículo 2566, numeral 1 del Código Judicial, dado que se ha mermado las garantías procesales del señor SINGARES, al pretender la privación de su libertad personal, con la aplicación de una norma que no puede ser utilizada por el señor Procurador, ya que la conducta del señor SINGARES así como la publicación de la noticia en el diario antes mencionado, no se lo permiten. En consecuencia, estima que la orden de arresto emitida por el señor Procurador es ilegal. debido a que no se ajusta al debido proceso, por las razones antes anotadas.

DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El tribunal de habeas corpus, al analizar los hechos y alegaciones que sirven de fundamento a la acción motivo de estudio, así como del informe rendido por la autoridad demandada, y las pruebas aportadas con dicho informe, pasa a resolver, previas las consideraciones que siguen.

Aprecia el PLENO que la resolución No.005-2000 de 22 de junio de 2000, emitida por el señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, por la cual se sanciona con ocho (8) días de arresto al SEÑOR CARLOS SINGARES, se encuentra motivada y la misma se hace en uso de las facultades que le otorga el artículo 386 del Código Judicial. En la referida resolución se hace un recuento exhaustivo de las actuaciones del Director del diario El Siglo, contra el representante del Ministerio Público. Consideramos prudente reproducir dicha resolución.

"RESOLUCIÓN No.005-2000
(22 de junio de 2000)

"Por la cual se sanciona con ocho (8) días de arresto al SEÑOR CARLOS SINGARES"

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

1. **Que esta Procuraduría General de la Nación, sancionó al Periodista Carlos Singares, mediante Resolución No.003-2000 del 24 de mayo del presente año, por haber irrespetado al suscrito Procurador General de la Nación.**

2. **Que mediante Resolución No.004-2000 del 30 de mayo de 2000, se deja sin efecto la sanción que se impusiera al Periodista Carlos Singares.**

3. **Que a partir de tal fecha el Diario El Siglo ha continuado su campaña de irrespeto contra el Ministerio Público y específicamente contra su titular, el suscrito Procurador General de la Nación.**

4. **Que el día 22 de junio de 2000, el Periodista Carlos Singares, suscribe noticia titulada: "Prominentes políticos y funcionarios públicos vinculados a la prostitución infantil. EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN... "BUSCA PLACER CON MENORES DE EDAD". Afirma el abogado Sidney Sitton, quien se ratifica en sus acusaciones contra José Antonio Sosas. P.2" y señala que el Lic. Sidney Sittón fue sancionado con seis (6) días de cárcel por el Procurador Sossa, en atención a sus denuncias.**

5. **Que el Lic. Sidney Sittón, fue sancionado por el Fiscal 2do. Del Primer Circuito Judicial por irrespeto a su autoridad, con cinco (5) días de arresto.**

6. **Que el Lic. Sidney Sittón, jamás ha sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación, por ninguna de sus afirmaciones irrespetuosas. La única iniciativa procesal que se ha esgrimido contra el Lic. Sidney Sittón, fue una Querella por calumnia e injuria que fue presentada en su contra, ya que en el momento del arresto que se le hizo por el Fiscal 2do. de Circuito y como consecuencia de ello, el Lic. Sittón lanzó dos (2) años atrás las mismas acusaciones calumniosas que hoy aparecen en la portada del Diario El Siglo del 22 de los corrientes.**

7. **Que la Querella fue presentada el día 23 de enero de 1998, en la Fiscalía Auxiliar, hace casi dos años y medio (2 1/2). El Lic. Sittón no quiso declarar a pesar de que fue citado en dos (2) ocasiones. El Fiscal del caso solicitó el llamamiento a juicio, y se encuentra pendiente de audiencia preliminar en el Juzgado 8vo. De Circuito de Panamá.**

8. **La Audiencia Preliminar en la Querella que fue presentada contra el Lic. Sidney Sittón, ha sido pospuesta por la defensa de éste, en nueve (9) ocasiones. El Lic. Sittón, ha evitado hasta el presente, procesalmente enfrentar la misma. La conducta procesal del Lic. Sittón en este y otros procesos que participa, dan cuenta de su baja calidad humana y de la credibilidad que tienen las afirmaciones dañinas que hace libremente y que después no quiere enfrentar.**

9. **Que el Periodista Carlos Singares es el responsable de**

la publicación del 22 de junio de 2000, como Director del Diario El Siglo, portada y artículo de la página 2, siendo reincidente en incurrir en grave irrespeto al Ministerio Público, sus altas autoridades y específicamente contra el suscrito, Procurador General de la Nación.

10. Que la Corte Suprema de Justicia en Pleno, decidió el 17 de noviembre de 1997, dentro de la Acción de Habeas Corpus preventivo, interpuesto a favor de Jaime Padilla Béliz, contra la Procuradora de la Administración, lo siguiente: "Precisadas las razones que fundamentan y justifican la imposición de la sanción en este caso, consideramos obligante reiterar los conceptos vertidos por esta Corporación Judicial".

"ticia (sic). Ello sería a todas luces contrario a la libertad de expresión que esta Corte Suprema de Justicia ha defendido y fortalecido en muchos fallos. A lo que el señor Procurador General de la Nación como cualquier otro servidor público con mando y jurisdicción tiene derecho, es a sancionar, sin juicio previo, no ya la crítica, cualquiera que fuese la intensidad con que se plantee sino el irrespeto, el ultraje, el trato grosero innecesariamente utilizado en el cuestionamiento al que inevitablemente estamos sometidos todos los servidores públicos". (el subrayado es nuestro)"

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Sancionar con ocho (8) días de arresto al señor CARLOS SINGARES, Director del Diario EL SIGLO, por haber irrespetado al suscrito Procurador General de la Nación.

ARTICULO SEGUNDO: Oficiar el contenido de esta Resolución, a la autoridad de Policía correspondiente, para que se haga cumplir la misma.

Fundamento de Derecho: numeral 1 del artículo 386 del Código Judicial.

Notifiquese y Cumplase.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de junio de dos mil (2000)." (Fs.7-8)

Observa el PLENO que el argumento medular del proponente de la acción constitucional radica en que no se ha atacado la investidura del señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, sino, más bien, por la supuesta conducta de su vida privada.

Dicha interpretación resulta a todas luces inaceptable y así lo ha mantenido la Corte Suprema en las sentencias de 19 de agosto de 1994, Registro Judicial Agosto 1994, pág. y del 17 de noviembre de 1997, Registro Judicial Noviembre 1997, pág.63, en el sentido de que;

"Esta Corporación Judicial ya ha tenido oportunidad de recalcar que la facultad que la ley y la Constitución otorgan a los agentes del Ministerio Público para sancionar con multas y arrestos a las personas que desobedezcan sus órdenes o las faltas del debido respeto, no se limita a los actos de irrespeto que se cometan en el momento en que desempeña las funciones inherentes a su cargo. Por el contrario, está claro en el artículo 386 y en el artículo 33 de la Constitución Nacional, que dicha facultad se extiende a los actos de irrespeto que se cometan con motivo del desempeño de las funciones

inherentes al cargo".

Salta a la vista que no cabe el desdoblamiento que se desprende de la exposición del accionante, en el caso del ejercicio de altos cargos, entre funciones relacionadas con los deberes inherentes al cargo, dependiendo de si se está desempeñando como tal o se actúa como persona particular, ya que los servidores judiciales deben comportarse en su desempeño y en su vida particular en forma tal que estén fuera de todo reproche o censura (artículo 440, n° 6). De donde se desprende que la actuación de todo servidor público no puede calibrarse desde la perspectiva de si se encontraba actuando en el ejercicio de sus facultades que se desprenden del cargo o, por el contrario, su actuación se encontraba en la esfera de lo particular.

Desde otra perspectiva, es evidente que el fundamento del artículo 386 del Código Judicial, en el cual se fundó la resolución lesiva al honor y a la dignidad del alto servidor judicial es una norma de protección al cargo, de tal forma que se tutele cualquier lesión grave que lo afecte institucional y socialmente, por razón de su importancia en la vida institucional del país. Dicha protección no tendría sentido, de otra parte, si la censura contra el alto funcionario público se llevase a cabo, que no es el caso, fuera de sus horas de trabajo o, en general, cuando actúa como persona particular.

Por otra parte, la publicación aparecida en el diario "El Siglo", de fecha 22 de junio de 2000, y que fuere aportada con el informe, es lesiva al derecho al honor y lesivo a la reputación del alto servidor judicial, dada la incidencia que tienen los medios publicitarios ante la opinión pública, y la noticia, evidentemente, va dirigida al licenciado José Antonio Sossa, en atención al cargo que éste desempeña (véase foja 9). Más aún, en la motivación de la resolución por la cual se sancionó al periodista SINGARES, salta a la vista que la persona señalada por éste, es decir, el licenciado SIDNEY SITTON, tiene querellas y acusaciones por calumnia e injuria pendientes de resolver. Además de ello, que dicha querella fue formulada desde hace más de dos años y medio. Significa, pues, que la publicación realizada en el diario tantas veces mencionado, es responsabilidad del señor SINGARES, como director del diario El Siglo. Se desprende también de la motivación de la resolución impugnada, la reiteración del señor CARLOS SINGARES en incurrir en grave irrespeto contra altos funcionarios del Ministerio Público, así como también contra la figura del señor PROCURADOR DE LA NACIÓN.

Es importante reiterar que la facultad conferida por la Ley y la Constitución de la República a los agentes del Ministerio Público para sancionar con multas y arrestos a las personas que desobedezcan sus órdenes o les falten el debido respeto, no se limita a los actos de irrespeto que cometan en el momento en que desempeña las funciones inherentes a su cargo. Por el contrario, "está claro en el artículo 386 y en el artículo 33 de la Constitución Nacional que dicha facultad se extiende a los actos de irrespeto que se comenten con motivo del desempeño de sus funciones inherentes al cargo". (sentencia de 19 de agosto de 1994, R.J., Agosto 1994, y sentencia de 17 de noviembre de 1997, R.J., noviembre 1997, págs.61-64).

Por otra parte, el daño gravísimo ocasionado al señor Procurador ha lesionado el derecho al honor y a su dignidad. Doctrinalmente, en el contexto del derecho fundamental a la libre expresión de las ideas y opiniones, se ha mantenido el alcance de este derecho y los actos que le lesionan, en el sentido de que:

"...

> Nuevamente afloran las diferencias entre los derechos consagrados en el art. 20 CE al abordar el papel a desempeñar por la veracidad, pues, mientras los hechos sobre los que se informa serán ciertos cuando se correspondan con la realidad, en el plano de la libertad de expresión no podemos aplicar este criterio, como quiera que las opiniones son puramente subjetivas, responden a criterios personales. Aunque tengan una base fáctica, no se puede negar que

> una misma realidad puede ser percibida y valorada de las más diversas formas, según el talante de cada persona. Lo único que ocurre es que la expresión de las propias opiniones ha de hacerse, no dentro del límite la veracidad que no le es aplicable, pero si dentro del respeto a los demás. Se actúa con desconocimiento hacia este último cuando se incurre en el insulto, o cuando se lesiona gratuitamente el honor de una persona. Así el TS reconoció en su Sentencia de 25 de junio de 1990 que "la libertad de expresión, por consistir en formulación de opiniones, juicios o creencias personales que no aspiran a sentar hecho o a afirmar datos objetivos tiene como límite la ausencia de expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias, sin relación con las ideas u opiniones que se expresan y que resultan innecesarias para la exposición de las mismas".
>
> ("DERECHO A LA INTIMIDAD", ANA LAURA CABEZUELO ARENAS, Tirant Monografías 96, Tirant lo blanch, Valencia, 1998, págs.134-135)

Para el Pleno constituye una evidencia que no requiere comprobación, que el ejercicio de altos cargos en el engranaje estatal, deja a quienes lo ejercen abiertos a la crítica con respecto a sus actuaciones, que pueden llegar a constituir ácidas críticas a su quehacer gubernamental, y siempre que estén dentro del principio de proporcionalidad de medios a fines, tal crítica pública es lícita. No obstante, toda crítica, por duros que puedan ser sus términos tienen un límite infranqueable en el derecho al honor y a la dignidad del servidor judicial de que trate, acarrea la reacción sancionadora del ordenamiento jurídico, de forma particular cuando la información ofensiva está dirigida al alto funcionario con ocasión de las delicadas funciones que la ley le asigna. Es de advertir que para el Pleno es evidente que la noticia representa un agravio inadmisible para el cargo que ostenta el Procurador General de la Nación, y que fue formulado con ocasión de las delicadas funciones adscritas al alto cargo, que es la hipótesis normativa consagrada en el artículo 386 del Código Judicial. Del texto de la información ofensiva se desprende sin la menor duda que el destinatario era el actual Procurador General de la Nación.

La reacción del ordenamiento antes dicha estriba en una sanción pecuniaria o pérdida temporal de la libertad (arresto), a aquéllas personas que, so pretexto de ensayar una crítica a la actuación de un alto servidor público, como lo es el caso del Procurador General de la Nación, instituido por el artículo 386 del Código Judicial, cuando, como ha ocurrido en la presente circunstancia, la crítica ensayada al alto servidor público ha superado la finalidad de crítica social o institucional, para insertarse en una gruesa lesión a la dignidad y honor del servidor público.

La potestad sancionadora que tal disposición inviste al Procurador General de la Nación, tiene su sustento constitucional en el artículo 33 de la Ley Fundamental, que constituye, como ha señalado la Corte (sentencias de 23 de mayo de 1991 y de 3 de mayo de 1994), una excepción en materia penal sancionadora al principio de que toda sanción debe venir impuesta como consecuencia de un proceso público con todas las garantías, y al cargo que ocupa..

Encuentra el PLENO justificadas razones de hecho y derecho, para la imposición de la sanción contra el director del diario El Siglo, SEÑOR CARLOS SINGARES que ha proferido el señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la sanción de arresto por ocho (8) días impuesta por el señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN contra CARLOS SINGARES.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERICK ANTONIO LUM RUIZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado VICTOR OROBIO ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus a favor de ERICK ANTONIO LUM RUIZ, contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la privación de libertad que sufre, es ilegal.

Una vez acogida la acción se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el cual fue contestado por la autoridad demandada mediante oficio No. FD02-T02-2623 de 11 de julio de los corrientes. El Fiscal Especial de Drogas ha manifestado en dicho informe, que la medida cautelar personal fue dispuesta por ese despacho mediante providencia razonada de 26 de mayo de 2000, por la presunta vinculación que tiene el señor LUM RUIZ en la comisión de un delito contra la salud pública, relacionado con drogas.

I. ARGUMENTOS DEL ACCIONANTE

El proponente de la acción de habeas corpus considera que la privación de libertad del señor LUM es ilegal, toda vez que las piezas procesales contenidas en el sumario permiten vislumbrar que el delito que podría imputarse a ERICK LUM es el de posesión simple de sustancias ilícitas, hecho punible que no tiene aparejada pena mínima de prisión superior a los dos años, como exige el artículo 2148 del Código Judicial para los fines de decretar la detención preventiva.

El recurrente manifiesta además, que no consta en el sumario el resultado del examen practicado por el Laboratorio Especializado de Drogas de la Policía Técnica Judicial a la sustancia presuntamente incautada en poder del señor LUM RUIZ, pericia que arrojará resultados definitivos sobre la naturaleza y peso de dicha sustancia.

Finalmente señala, que al rendir indagatoria el imputado se confiesa adicto al consumo de cocaína y marihuana desde hace varios años, circunstancia que debió ser tomada en cuenta por la autoridad instructora, como indicativa del posible destino de las sustancias, cual sería en este caso el consumo personal y no la venta o traspaso ilegal.

II. FUNDAMENTO DE LA DETENCION PREVENTIVA

La encuesta penal que mantiene privado de libertad al señor ERICK ANTONIO LUM RUIZ se origina a raíz de un operativo realizado el 24 de mayo del 2000 por unidades de la Policía Nacional del Area "A" de Santa Marta, en el Distrito Especial de San Miguelito, quienes en su ronda de patrullaje detectaron a un sujeto en "actitud sospechosa".

Por tratarse de un sector en que regularmente se practica la venta y consumo de drogas, se procedió a retener al ciudadano en cuestión, identificado como ERICK ANTONIO LUM RUIZ, a fin de efectuarle una revisión corporal, a partir

de la cual se encontró, en el bolsillo delantero derecho de su pantalón, una cajetilla de fósforos que en su interior contenía veinticinco (25) trozos de una sustancia sólida de color cremoso que se presumió droga (cocaína-crack).

En su bolsillo izquierdo fue encontrado dinero fraccionado (B/.30.50) en numerosos billetes de baja denominación, cuya procedencia no ha quedado claramente deslindada. El dinero se encontraba desglosado de la siguiente manera: diecinueve billetes de un balboa; un billete de cinco balboas y seis balboas con cincuenta centavos, en monedas de diferentes denominaciones. (fs. 2-4 del sumario)

El sujeto aprehendido fue trasladado a las instalaciones policiales, y una muestra de la sustancia fue sometida a prueba de campo, la que resultó positiva para la determinación de sustancia ilícita: Cocaína (f.5).

En los rigores de la indagatoria (fs.11-13), el señor LUM RUIZ negó la tenencia de las sustancias ilícitas, pero manifestó que fue anteriormente encarcelado por el delito de posesión agravada de drogas, y que es adicto al consumo de cocaína y marihuana.

Como elementos probatorios se allegaron al expediente, los fragmentos de sustancia presuntamente ilícita, así como las declaraciones hasta ahora rendidas por algunos de los miembros de la Policía Nacional que participaron en la aprehensión del señor LUM.

Así, a la fecha en que se promovió la presente acción de habeas corpus, habían rendido declaración jurada los Cabos ANDREVE, CORDOBA y FRUTO (fs.23-29), quienes han declarado que el sujeto ERICK LUM fue retenido por su actitud sospechosa; que se encontraba visiblemente nervioso e inquieto al momento de la requisa corporal; que moradores del area lo han identificado como dedicado a la venta de drogas, y que pese a haberlo negado en su indagatoria, fue encontrada en su poder, la cajetilla contentiva de los 25 fragmentos de sustancia ilícita, así como el dinero ampliamente fraccionado.

Se advierte sin embargo, que por lo incipiente de la instrucción sumarial, aún no ha sido adjuntado el resultado del examen de rigor que en estos casos realiza el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, a fin de concretar los aspectos cualitativos y cuantitativos de la sustancia incautada.

III. DECISION DEL TRIBUNAL

Una vez ponderados los argumentos de la parte actora, a la luz de las constancias procesales contenidas en la instrucción sumarial, esta Superioridad ha de externar lo siguiente:

La vinculación subjetiva del imputado con el hecho investigado, ha quedado acreditada en el sumario a través de diferentes elementos de convicción, como lo es el informe rendido por los agentes captores, que han señalado haber incautado en poder del prenombrado LUM RUIZ, veinticinco fragmentos de una sustancia que según la prueba de campo efectuada, se reputa ilícita. Existen además, innegables indicios de presencia y oportunidad que apuntan hacia la participación del encartado en el hecho criminoso.

Al rendir indagatoria, el sindicado niega los hechos que se le imputan. Sin embargo, obran en el expediente las declaraciones juradas signadas por los miembros de la Policía Nacional que participaron en la aprehensión del ciudadano ERICK LUM, versiones policiales éstas que de manera detallada y coincidentes en modo, tiempo y lugar, ratifican el señalamiento directo contra el prenombrado, como la persona que mantenía en una de sus prendas de vestir, la sustancia antes mencionada.

El Tribunal de Habeas Corpus advierte además, que el señor LUM RUIZ posee

antecedentes penales (f. 32), y que hasta fecha reciente se mantuvo cumpliendo sentencia condenatoria de 30 meses de prisión, por haber sido declarado responsable de la comisión de otro ilícito penal relacionado con drogas, tipificado en el artículo 260 párrafo segundo del Código Penal.

En lo que concierne a la comprobación objetiva del hecho investigado, este Tribunal conceptúa que si bien nos encontramos en una fase temprana del proceso investigativo, en que no se ha incorporado al sumario el examen pericial sobre la cantidad y especie de la sustancia analizada, la forma en que ésta y el dinero incautado se encontraban presentados y fraccionados, constituyen "indicios desfavorables" que permiten -en esta etapa incipiente de la investigación sumarial-, deducir que el destino de la sustancia es el traspaso a cualquier título para consumo ilegal.

Esta posición ha sido mantenida en forma reiterada por la Corte, incluso en algunos casos en que la cantidad de sustancia ilícita no alcanzaba siquiera la cantidad de un (1) gramo. (cfr. sentencia de 30 de septiembre de 1994)

No descartamos que en el transcurso de la investigación surjan otros elementos que hagan variar la situación procesal del encartado. Sin embargo, en este momento consta que la medida cautelar fue ordenada mediante diligencia razonada, por autoridad competente, y en consonancia con los elementos probatorios que hasta la fecha pesan contra ERICK LUM RUIZ, razón por la cual se concluye que la medida privativa de libertad, goza de legitimidad formal.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de ERICK LUM RUIZ.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE CRISTIAN RAMÍREZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JOSE T. VASQUEZ G. ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus a favor del señor CRISTIAN RAMIREZ de nacionalidad dominicana, contra el Director Nacional de Migración y Naturalización, por considerar que la privación de libertad que sufre es ilegal y deje sin efecto su orden de deportación.

Una vez acogida la acción, fue librado mandamiento de habeas corpus en fecha de 3 de julio de 2000, mismo que fuere contestado por el funcionario acusado mediante Nota N DNMYN/692/00 fechada 6 de julio de 2000, recibida en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el día 10 de julio de 2000.

Mediante dicha comunicación se informó a esta Superioridad, que si bien es cierto se había dispuesto la detención preventiva del señor CRISTIAN RAMIREZ, quien se encontraba ilegal en el territorio Nacional, este fue deportado del

territorio nacional mediante Resolución N 3090 del 19 de junio de 2000, que se adjunta a folio 16 y 17 del expediente, y salió hacia su país de origen el día 2 de julio de 2000, en el vuelo 111 de COPA AIRLINES, a las 7:40 de la noche.

Como se colige de lo antes expuesto, en la actualidad, la persona en cuyo favor se ha promovido el presente habeas corpus ya no se encuentra privada de su libertad corporal, por lo que no tiene objeto continuar con este procedimiento.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EL CESE DE PROCEDIMIENTO en el presente negocio y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MONTICELLO NARCISO FRANCIS GONZALEZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Señor MONTICELLO FRANCIS CHEVANES presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus a favor de su hijo MONTICELLO NARCISO FRANCIS GONZALEZ, contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Recibida la acción, se libró el mandamiento respectivo a la autoridad demandada, quien informó a través de Nota No. A.L.0518 de 4 de julio del 2000 que el señor FRANCIS GONZALEZ se encontraba a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República.

Enderezado el mandamiento contra la citada agencia del Ministerio Público, el Fiscal Auxiliar contesta el libramiento mediante Oficio No.8179 de 5 de julio del 2000, en el que explica las razones que condujeron a la detención preventiva del señor MONTICELLO FRANCIS, quien se encuentra presuntamente implicado en un robo a mano armada perpetrado en un establecimiento comercial.

Encontrándose el expediente de marras en el despacho de la Magistrada Sustanciadora, a fin de resolver el mérito del negocio, el proponente de la acción de habeas corpus ha desistido de la misma, en escrito recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema el día 10 de julio del 2000, que se añade al legajo.

Como quiera que "toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso puede desistir expresa o tácitamente" conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, esta Superioridad considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de Habeas Corpus, presentada por a favor de MONTICELLO NARCISO FRANCIS GONZALEZ.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RODOLFO CAMAÑO CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de acción de habeas corpus interpuesta por Judith Camaño Rodríguez, a favor de Rodolfo Camaño y contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Agrega la activadora judicial que Rodolfo Camaño se encuentra detenido ilegalmente en la celda preventiva del Ministerio Público, ubicada en el Sótano del Edificio Avesa, antiguo INTEL (f. 1. cuaderno de habeas corpus).

Por acogida la iniciativa constitucional se libró el mandamiento de habeas corpus, el que fue contestado por la autoridad demandada mediante Oficio FD-O-2966-00 del 11 de junio (sic) de 2000 (fs. 4-5 cuaderno de habeas corpus).

El funcionario de instrucción acepta haber ordenado la detención de Rodolfo Camaño, mediante resolución de 29 de junio del 2000 y detalla los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la medida restrictiva de libertad.

DECISION DE LA CORTE

Corresponde determinar en este momento si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en concordancia con lo normado por el artículo 21 de la Constitución Nacional.

De conformidad con la diligencia que ordena la detención preventiva de Camaño, la medida se fundamenta en la supuesta comisión de delito contra la salud pública, el cual lleva aparejada pena mínima superior a los dos años (vid. f. 22 cuaderno de antecedentes).

En cuanto a los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible, consta la diligencia de prueba de campo (vid. f. 7 cuaderno de habeas corpus) y el informe del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas el cual señala que "...veinticinco (25) pedazos de carrizos plásticos transparentes, resultaron positivos para la determinación de COCAINA con un peso equivalente a 4.00 gramos..." (Cfr. f. 12 cuaderno de habeas corpus).

En las sumarias constan como elemento de prueba contra el sindicado, el informe de la SUB-DIIP del Area G de Alcalde Díaz, los cuales recibieron una llamada telefónica informando que en el Sector de Santa Rita, vía principal, se encontraba un joven vestido de pantalón azul y suéter de color crema el cual estaba supuestamente vendiendo droga. Al dirigirse al lugar visualizaron al sujeto con las características refereridas, "...quien mantenía en su mano derecha un envoltorio plástico de color negro que al abrirlo mantenía Veintisiete (27) pedazos de carrisos (sic) plásticos transparentes que en su interior contiene un polvo blanco el cual se presume sea droga en la misma mano en forma de sortija un billete de B/.5.00 serie L67501738G, el mismo responde al nombre de RODOLFO

CAMAÑO..." (Cfr. f. 2 cuaderno de antecedentes).

Al recibir indagatoria Rodolfo Camaño negó los cargos y argumentó que se dirigía a hacer un mandado a la tienda cuando llegó la policía y lo arrestó (Cfr. f. 17 antecedentes).

Observa la Corte que la cantidad de cocaína encontrada (4.00 gramos) sobrepasa la dosís mínima de consumo que establece el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, lo que hace suponer que no se trata de un caso de posesión para consumo.

Así las cosas, se tiene que la orden de detención preventiva, dictada mediante resolución razonada de 29 de junio del 2000, cumple plenamente con lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo que corresponde resolver de conformidad.

Por las anteriores razones el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención decretada contra Rodolfo Camaño y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FABRAGA ZARAK (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRACESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARMEN MARLENIS MARTINEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada TERESA IBAÑEZ, Defensora de Oficio, acude ante esta Corporación de Justicia con el objeto de interponer acción de habeas corpus a favor de la señora CARMEN MARLENIS MARTÍNEZ, contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

LA ACCIÓN

Señala la recurrente, que el día 16 de mayo de 2000, la Corregidora de Juan Díaz, efectuó un allanamiento en San Cristóbal, Casa # 223, con el fin de localizar al señor RAFAEL ERNESTO ALLEN MARTÍNEZ, quien mantiene denuncia, por la supuesta comisión de delito de robo. Al efectuarse dicha diligencia, se logró encontrar entre otras personas, a su representada, CARMEN MARLENIS MARTÍNEZ, con un cartuchito que contenía cincuenta y un (51) sustancias cuadradas, color cremoso que se presume sea droga.

Igualmente manifiesta la Defensora de Oficio, que a pesar que su defendida confiesa que la droga le pertenece, la orden de detención preventiva dictada en su contra debe ser declarada ilegal, toda vez que se fundamentó en una diligencia de allanamiento que infringió el procedimiento legal, por cuanto que no fue emitida por autoridad competente, no estableció hora ni dirección precisa, al

igual que tampoco contiene un fin específico ni motivación alguna.

Por los motivos expresados solicita, se declare ilegal ladetención preventiva que sufre CARMEN MARLENIS MARTÍNEZ y en consecuencia se le otorgue su inmediata libertad. (fs. 3)

SUSTANCIACIÓN

Mediante providencia de 26 de junio de 2000, se libra mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada, quien mediante Oficio No. FD1-T-07-2564-2000 de 28 de junio de 2000, manifiesta, que la detención de CARMEN MARLENIS HAUGHTON MARTÍNEZ, fue decretada por ese despacho a través de providencia fechada 18 de mayo de 2000.

Como fundamentos de hecho el funcionario de instrucción señaló:

> "... Al momento de la llegada de las unidades de policía a la residencia, una de las unidades se percata que la ciudadana que respondió al nombre de CARMEN MARLENIS HAUGHTON MARTÍNEZ, salió corriendo hacia uno de los cuartos de la residencia y arrojó en el zinc de la casa un bulto, el cual al ser verificado, se trataba de una bolsa de plástico de color blanco y el mismo en su interior mantenía un cartucho de plástico transparente que al ser verificado contenía 51 sustancias sólidas de color cremoso, el cual se presume sea droga o crack. Al continuar con la revisión del inmueble se encontró en poder de la joven HAUGHTON, la suma de sesenta y siete dólares con ochenta y cinco centavos. Rinde declaración indagatoria la ciudadana HAUGHTON MARTÍNEZ, quien manifestó que efectivamente ella lanzó la sustancia en el zinc, tal y como lo señalan los captores, , y que la idea de esa droga era venderla, toda vez que tenía problemas económicos." (f. 6)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, nos remite el antecedente contentivo de 37 fojas útiles (copias autenticadas), del proceso seguido a CARMEN MARLENIS HAUGHTON MARTÍNEZ, por la supuesta comisión de un delito Contra La Salud Pública.

La presente encuesta penal tiene su origen el día 16 de mayo de 2000, aproximadamente a las 8:30 a.m., cuando unidades de la Policía Nacional en asocio con la Corregidora de Juan Díaz, llevaron a cabo un allanamiento en el Corregimiento de Juan Díaz, Barriada San Cristóbal, Vía Principal, Casa # 2-23, con la finalidad de encontrar al ciudadano RAFAEL ERNESTO ALLEN MARTÍNEZ, quien está vinculado por la supuesta comisión de un delito de Robo a Mano Armada.

Al momento de efectuarse el allanamiento, las unidades policivas, además de encontrar al señor ALLEN MARTÍNEZ, lograron visualizar a la señora CARMEN MARLENE HAUGHTON MARTÍNEZ, cuando "tiró un bulto blanco, arriba del techo de una de las recámaras de la vivienda que al ser recuperado por loas agentes del Sub-DIIP, el mismo se trataba de un cartuchito transparente que en su interior contenía 51 (cincuenta y un) sustancias cuadradas color cremoso" (f. 6), que al realizarse la prueba de campo arrojaron resultados positivos para la determinación de droga (piedra o crack) (f.11).

Además, se logró encontrar dentro de la recámara de la señora HAUGHTON MARTÍNEZ, una cartera de mano, color negro con rayas chocolates, marca COSSA BELLA COLLECTION, con la suma de sesenta y siete dólares con ochenta y cinco centésimos (B/.67.85) desglosados en billetes y monedas de diferentes denominaciones.

La imputada HAUGHTON MARTÍNEZ, en su indagatoria visible de fojas 17-24, señaló, que la droga la tenía con el propósito de venderla, y la cual se la había

dado un piedrero con el que compartiría las ganancias.

Si bien la recurrente no ataca directamente los elementos probatorios que vinculan a su patrocinada con el delito que se investiga, sino que su acción va dirigida contra una orden de allanamiento alegando que infringió el procedimiento legal; no obstante, el Pleno consideró necesario hacer un examen de las constancias procesales obrantes en autos, y de las cuales se infirió que contra la sindicada HAUGHTON MARTÍNEZ, existen suficientes indicios que la ligan a este hecho punible, más aún cuando ella confiesa, que la droga incautada estaba destinada para su venta.

Como bien señalamos en líneas anteriores, la recurrente presenta su disconformidad en cuanto a que la orden de allanamiento, no fue decretada por autoridad competente, no estableció hora ni dirección precisa, no contiene un fin específico ni motivación alguna para la cual se realizó tal diligencia.

Respecto a ello, debemos manifestar, que si bien el artículo 2185 y siguientes del Código Judicial, indican que son los funcionarios de instrucción las autoridades competentes para llevar a cabo este tipo de acciones, es decir decretar allanamientos, no menos cierto es, que los Decretos No. 5 de 3 de enero de 1934 y No. 39 de 16 de junio de 1939, le otorgan igualmente esa facultad a los funcionarios de policía, entre estos, los corregidores.

En este sentido, debemos hacer alusión a la resolución de ocho (8) de mayo de 2000, en donde el Pleno de esta Corporación de Justicia expresó:

> "... si bien nuestro Código de Procedimiento Penal, regula el allanamiento, específicamente en los artículos 2185 a 2200, señalando, que son los funcionarios de instrucción los que tienen la facultad de decretar este tipo de diligencias, el Pleno observa, que existen los Decretos No. 5 de 3 de enero 1934 y No. 39 de 16 de junio de 1939, que reglamentan el procedimiento que deben seguir las autoridades policiales en los casos de allanamientos, y se indica, que el mismo debe ser ordenado por funcionario competente, estableciéndose esa facultad a los corregidores, entre otros."

Por otra parte, en cuanto al señalamiento que hace la licenciada IBAÑEZ, en el sentido que la orden de allanamiento no contiene hora, ni el lugar preciso del allanamiento, el Pleno discrepa con la peticionaria, toda vez que la orden visible a foja 4, aparece fechada 16 de mayo de 2000, e indica que el lugar a allanar era la casa sin número ubicada en el sector de San Cristóbal, Corregimiento de Juan Díaz. Además, cabe señalar, que esta diligencia estaba encaminada a encontrar al ciudadano RAFAEL ALLEN MARTÍNEZ, quien supuestamente estaba vinculado por un Robo a Mano Armada, según consta en solicitud remitida por la Sub-D.I.I.P. de Juan Díaz a la Corregidora de Juan Díaz (foja 3 del antecedente).

En consecuencia, debemos indicar, que si bien la señora CARMEN MARLENIS HAUGHTON MARTÍNEZ, no era objeto directo de la diligencia de allanamiento, la misma fue encontrada escondiendo en el techo de su recámara un cartuchito que contenía droga; y luego se declara confesa de tal hecho, señalando, que dichas sustancias ilícitas estaban destinadas para su venta.

Es pertinente señalar que si bien el hallazgo de la droga en posesión de la prenombrada HAUGHTON MARTÍNEZ, como bien señalamos en líneas anteriores, no era el objeto directo de la diligencia de allanamiento, y que el mismo se produce por casualidad, ello no convierte la diligencia en ilegal, por cuanto que tal como está contemplado en el artículo 2192 del Código Judicial, nos encontramos frente a la figura del hallazgo casual.

El artículo 2192 del Código Judicial señala al respecto lo siguiente:

"Si del allanamiento resultare, casualmente, el descubrimiento de un

delito que no haya sido objeto directo del reconocimiento, se procederá a levantar el acta correspondiente, siempre que el delito sea de aquellos en que se procede de oficio."

No obstante, consideramos procedente advertir a las autoridades de Policía, quienes constantemente se ven envueltas en estas situaciones, que deben ser más rigurosas en la observancia de las formalidades que nuestras normas y la jurisprudencia han establecido para la formulación de las órdenes de allanamiento; las cuales exponemos a continuación.

La orden de allanamiento debe contener:

a.- Fecha y hora del allanamiento;
b.- Domicilio cuyo allanamiento se autoriza;
c.- Motivación en la que conste la posible comisión de un hecho ilícito;
d.- Indicios que vinculen al sujeto (s) con el domicilio; y
e.- Razones por la que se considera que la diligencia puede ser útil a la investigación, es decir, debe contener un fin específico.

Esta observación la formulamos, por cuanto que en la medida que estos presupuestos se verifiquen, además de asegurar el cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales de las personas que son sujetas a éstas diligencias de allanamiento, serán menos los recursos que por esta situación se presenten.

Dada las consideraciones presentadas, el Pleno de esta Corporación de Justicia, concluye, que la orden de detención preventiva emitida contra CARMEN MARLENIS HAUGHTON MARTÍNEZ, debe mantenerse, toda vez que cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA, PLENO, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva impuesta a CARMEN MARLENE HAUGHTON MARTÍNEZ, y en consecuencia ORDENA, sea puesta nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARITZA DE GRACIA OVALLE CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JOSE RAMIRO FONSECA P., ha presentado acción de habeas corpus a favor de MARITZA DE GRACIA OVALLE, contra la orden de detención expedida por el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Repartida la acción constitucional, ordenó el sustanciador librar

mandamiento contra la autoridad acusada para que en el término de Ley, procediera a darle contestación. Mediante Oficio FD02-2620 de 11 de julio remitió a esta Superioridad el informe solicitado, en los términos que se dejan transcritos:

> "Por medio del presente oficio me permito comunicarle que las sumarias seguidas en contra de MARITZA DE GRACIA OVALLE fueron remitidas al JUZGADO DECIMO TERCERO de lo Penal deL Primer Circuito Judicial de Panamá, EN TURNO, para su calificación legal, mediante Vista Fiscal 280, fechada 27 de junio de 2000.
>
> Actualmente la interna MARITZA DE GRACIA OVALLE se encuentra a órdenes del citado tribunal, mediante oficio número del 1087, enviado a la Dirección del Centro Femenino de Rehabilitación."(f.7)

De lo expuesto se advierte que la prenombrada MARITZA DE GRACIA O., se encuentra a órdenes del Juzgado Décimo Tercero de lo Penal del Primer Circuito Judicial, autoridad con jurisdicción en una provincia, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2602 del Código Judicial, debe esta Superioridad declinar la competencia para conocer el presente negocio ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y, en consecuencia dispone remitirle, sin dilación, la acción para que continúe su tramitación.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLINA el conocimiento de la acción de habeas corpus propuesta a favor de MARITZA DE GRACIA OVALLE, contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AZAEL FUENTES BETHANCOURTH CONTRA EL FISCAL ESPECIAL SUPERIOR. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia se recibe manuscrito del señor AZAEL ANTONIO FUENTES BETHANCOURT, quien se encuentra detenido en el Centro Penitenciario La Joya y ha interpuesto en su propio nombre acción de Habeas Corpus contra el Fiscal Especial Superior.

EL ACCIONANTE

El señor AZAEL ANTONIO FUENTES BETHANCOURT se declara inocente de los cargos que le quieren imputar el Fiscal Superior Especial, en compañía de los funcionario del Departamento de Información e Investigación Criminal (D.I.I.P) (F.1 del cuadernillo de habeas corpus)

Manifiesta el accionante que al momento de su aprehensión no existía orden de detención preventiva en su contra y el 11 de febrero de 2000 se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, la cual considera fue

amañada porque el director de la D.I.I.P llevó unas personas para que lo conocieran antes de realizar la diligencia; se trataba de JESSICA FLORES y ORIEL CANDANEDO testigos presenciales del delito. (F.3)

Finalmente, el señor FUENTES BETHANCOURT explica que los testigos ORIEL CANDANEDO y JESSICA FLORES mienten deliberadamente al vincularlo con el robo del Banco General. (Fs.4-11)

LA AUTORIDAD DEMANDADA

El Fiscal Especial Superior, Licdo. CRISTÓBAL ARBOLEDA ALFARO, al contestar el mandamiento de Habeas Corpus, manifestó que sí ordenó la detención de AZAEL A. FUENTES B., mediante providencia debidamente fundamentada, fechada 14 de febrero de 2000.

Expresa el Agente de Instrucción que entre las razones de hecho que se tuvieron en cuenta para decretar la detención del señor FUENTES BETHANCOURT se tiene un reconocimiento en rueda de detenidos, realizado el 11 de febrero del año en curso, actuando como reconocedor el señor ORIEL CANDANEDO empleado de la sucursal bancaria asaltada, diligencia que fue dispuesta tomando en consideración lo manifestado por el señor JORGE GUZMÁN ZAMORANO, coautor del ilícito, quien señaló que una de las personas que lo acompañó a cometer el hecho punible fue AZAEL ANTONIO FUENTES BETHANCOURT.

Agrega el Fiscal que debe tenerse en cuenta que al momento en que se verificó el reconocimiento en rueda de detenidos el señor FUENTES BETHANCOURT no tenía la condición formal de sindicado y a efectos procesales era un sospechoso, por lo que evidentemente no tenía que ser necesariamente representado por un letrado, como éste alega en su afán de enervar las pruebas de cargo.

De igual manera, el Fiscal indica que se práctico un reconocimiento fotográfico, en el cual la joven JESSICA FLORES, quien es empleada de la sucursal bancaria asaltada, actúo como reconocedora e identificó a FUENTES BETHANCOURT como uno de los autores del ilícito.

El Funcionario del Ministerio Público indica que las evidencias allegadas al cuaderno penal permiten determinar que la conducta criminal atribuida al señor FUENTES BETHANCOURT está tipificada como robo agravado, regulado en el Título IV, Capítulo II, Libro II del Código Penal, el cual prevé una pena mínima de 5 años de prisión.

Finalmente, señala el Fiscal que también sirvió como fundamento jurídico para la medida cuestionada por la vía de Habeas Corpus, lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial. (Fs.14-18)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo de instrucción remitido por el Ministerio Público, en vías de determinar si la detención que sufre AZAEL ANTONIO FUENTES BETHANCOURT es o no contraria a los casos que señala la Constitución Política y la Ley.

El 7 de diciembre de 1999, aproximadamente a las 2:30 p.m., en el Banco General de Chanis, Vía Cincuentenario, se presentó un sujeto en calidad de cliente, portaba un arma de fuego y burló al guardia de seguridad. Luego se dio una interrupción de las líneas telefónicas y entraron violentamente otros cinco individuos con revólver en mano, inmovilizaron a todos los presentes en el local, incluyendo dos guardias de seguridad.

Los asaltantes sustrajeron dinero en efectivo de la bóveda y las cajas de atención al público, sumando un total aproximado de doscientos cuarenta y cuatro mil balboas (B/.244.000.00). (Fs.1-2 del expediente principal)

En relación a las pruebas que vinculan al señor FUENTES BETHANCOURT con el hecho punible, se tiene un informe de entrevista calendado 21 de diciembre de 1999, realizado por el Agente 18393 SIMÓN BOLÍVAR SÁNCHEZ SAAVEDRA, del Departamento de Investigaciones del D.I.I.P., en el que manifiesta que JORGE ERNESTO GUZMÁN ZAMORANO le informó que participó en el robo al Banco General con otros cinco sujetos, a saber EDWIN ALEXIS MARTÍNEZ BADILLO (A) "Mole", AZAEL FUENTES (A) "Galeno", MARCOS ANTONIO JACKSON HINESTROZA (A) "Chombo", JORGE y otro sujeto que dijo desconocer. (Fs.240-241)

Posteriormente, el Agente SÁNCHEZ SAAVEDRA rindió declaración jurada en la que afirma y ratifica el contenido de la entrevista realizada a GUZMÁN ZAMORANO e indica que no se ejerció ningún tipo de coacción sobre el detenido, lo que éste dijo fue porque quiso colaborar con la investigación en ese momento. (Fs.887-889)

No obstante, JOSÉ ERNESTO GUZMÁN ZAMORANO rindió declaración indagatoria en la que negó haber participado en el robo al Banco General y manifestó que no conocía a AZAEL FUENTES (A) "GALENO". Se le leyó el informe de entrevista y dijo desconocer la información descrita. (Fs.368-371)

Mediante Oficio #124/DIIP/INV/00, calendado 11 de febrero de 2000, el Director del D.I.I.P., Comisionado BOLÍVAR CASTILLO, remite al señor AZAEL ANTONIO FUENTES BETHANCOURT al Fiscal Superior Especial y señala que aquel fue aprehendido el día 10 de febrero del año en curso, mediante Operativo de Profilaxis Social. Agrega que el mencionado, se encuentra supuestamente involucrado, en las investigaciones seguidas en el Caso de Robo a mano armada al Banco General de Chanis, ocurrido el 07 de diciembre de 1999".(F.749)

El 11 de febrero de 2000 se lleva a cabo diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos en las instalaciones de la Dirección de Investigación e Información Policial (D.I.I.P.), actuando como reconocedor el señor ORIEL CANDANEDO, quien es empleado del Banco General y estuvo presente al momento de la comisión del ilícito, e identificó a AZAEL ANTONIO FUENTES BETHANCOURT como uno de los que se presentó a robar el banco el día 7 de diciembre de 1999. (F.753)

El Agente de Instrucción ordenó que se le tomará declaración indagatoria a AZAEL ANTONIO FUENTES BETHANCOURT, pero éste, al momento de hacer sus descargos, se acogió al artículo 25 de la Constitución Nacional y dijo que no deseaba declarar en ese momento. (Fs.760-761)

Posteriormente, FUENTES BETHANCOURT amplió su declaración indagatoria y manifestó que es inocente de todos los cargos que se le imputan, pues el día de los hechos se encontraba trabajando en casa de su hermano JUAN FUENTES en el taller de mecánica y también se encontraba DONATO GÓMEZ que es albañil y le estaba haciendo un trabajo a su hermano; estuvo allí desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. aproximadamente y esas personas pueden corroborar su versión. (F.1111)

Consta en la encuesta penal que el 1 de marzo del año en curso JESSICA FLORES, empleada del Banco General de Chanis y testigo presencial del robo, en diligencia de Reconocimiento Fotográfico en Carpeta, identificó a AZAEL ANTONIO FUENTES BETHANCOURT como uno de los involucrados en el ilícito. (Fs.870-871)

De las constancias procesales se advierte que nos encontramos ante la comisión de un delito contra el patrimonio, que por el momento se ubica en la figura del robo agravado, tipificado en el artículo 186 del Código Penal, cuya sanción es superior a los dos años de prisión, toda vez que se utilizaron armas de fuego para la comisión del hecho punible.

En cuanto a la vinculación subjetiva del imputado FUENTES BETHANCOURT, surge de los reconocimientos en rueda de detenidos y reconocimiento fotográfico en carpeta, realizados por ORIEL CANDANEDO y JESSICA FLORES respectivamente, quienes son testigos presenciales de los hechos.

En cuanto a la orden de detención preventiva decretada contra AZAEL ANTONIO FUENTES BETHANCOURT, se tiene que fue emitida por la autoridad competente, Fiscal Superior Especial, mediante providencia en la que expresó el hecho imputado, los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible y los que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordenó. (Fs.762-764)

Por lo anterior, el Pleno concluye que la orden de detención preventiva cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA LEGAL la detención preventiva que pesa contra AZAEL ANTONIO FUENTES BETHANCOURT y DISPONE que sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Superior Especial.

Notifíquese,

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YUKLANN LYLY LEDEZMA DE RAMOS CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Mgter Eliécer A. Perez Sánchez ha interpuesto acción de hábeas corpus a favor de la señora YUKLAN LILY LEDEZMA DE RAMOS y contra el Fiscal Segundo de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

FUNDAMENTO DEL ACCIONANTE

Manifiesta el letrado que la señora Yuklan Lily Ledezma de Ramos se encuentra privada de su libertad corporal en unas de las celdas del Centro de Rehabilitación Femenino, a ordenes del señor Fiscal Segundo de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, toda vez que así lo impuso al ordenar la detención Preventiva mediante resolución de 2 de junio de 2000.

Explica que el motivo de la detención obedece a que el 24 de mayo del presente año, el señor Leonel Alexis Ledezma Rojas, llegó a la Electrónica NG, ubicada en la Vía Panamericana, Mañanitas, propiedad de su patrocinada Yuklan Lily Ledezma, quien es su hermana, y le solicitó que hiciera el favor de guardarle una bolsa azul (maletincito), y que un miembro de la Policía Nacional como él, pasaría a recogerlo el día siguiente.

Indica que la señora Ledezma adujo al rendir indagatoria que le preguntó a su hermano qué contenía el maletincito y le respondió azúcar y café, incluso le sacó una bolsita de azúcar que estaba cerrada; que el otro paquete olía a café. Incluso su hermano le pidió una tarjetita de presentación para entregársela al amigo o compañero de trabajo quien pasaría a recogerla. Por lo que de buena fe, ella accedió sin sospechar nada irregular pues se trata de su hermano y no podía imaginarse que contenía nada ilícito ya que su hermano es miembro de la

Policía Nacional.

Señala que al día siguiente aproximadamente a las dos y media llegó un muchacho que le enseño la tarjetita de presentación de su local, y ella le preguntó quien lo había mandado, contestándole que Ledezma, por lo que le entregó el maletincito y se retiró como a los cinco minutos, luego llegó la policía e hizo el allanamiento, no encontrando nada ilícito en el local. Pero que para sorpresa de su patrocinada el contenido de el maletín según la Policía era sustancia ilícita, y al someterse a prueba de campo resultó sr cocaína, lo que motivo la aprehensión y conducción tanto del señor Leonel Alexis Ledezma como de su patrocinada a la Fiscalía de Droga.

Sostiene el accionante que al rendir declaración indagatoria la señora Yuklan Lily Ledezma quien negó tener conocimiento del contenido de la bolsita. Y cuya declaración, en su opinión, es clara y con toda logicidad puede deducirse que actuó de buena fe al guardarle el maletincito a su hermano, lo que indica es una conducta atipica.

Señala por otra parte, que el Informe de Novedad del Agente Emilio Trejos y su declaración jurada (fs.64-48), a todas luces desvincula del ilícito investigado a su patrocinada Yuklan Lily Ledezma.

Manifiesta que consta en autos que la señora Yuklan Lily Ledezma de Ramos es dueña del establecimiento Comercial denominado NG, lo cual indica que es una persona trabajadora; al igual que los allanamientos realizados a dicho establecimiento en el cual no se ha encontrado ni un ápices de ilicitud.

De conformidad con lo señalado, sostiene el accionante que la detención de la señora Ledezma de Ramos es ilegal, puesto que no existen elementos fehacientes que le vinculen con el hecho que se le imputa y que justifique la detención preventiva de la cual es objeto su patrocinada, por lo que solicita se declare ilegal su detención (fs.1-7).

FUNDAMENTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

En respuesta de la providencia de 7 de julio de 2000, el licenciado Patricio Elías Candanedo, Fiscal Segundo Especial en Delitos Relacionados con Drogas, al dar respuesta al libramiento de hábeas corpus en su contra, informa que si ordenó la detención de la señora Yuklan Lily Ledezma de Ramos de conformidad con los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. Explica como fundamento de hecho lo siguiente:

> "YUKLAN LILY LEDEZMA DE RAMOS, fue detenida el pasado veinticinco (25) del año dos mil (2000), mediante diligencia de allanamiento realizado por este despacho, en asocio con unidades del departamento de Información e Investigación Policial, de la Policía Nacional.
>
> La diligencia judicial se realiza luego que recibieran información de que el ciudadano ALEXIS LEDEZMA, quien prestaba servicio en el Centro Penal La Joya le solicita a otro compañero suyo, el Agente Emilio Trejos, que se trasladara a la Electrónica NG, propiedad de Yuklan Ledezma, con la finalidad de que retirara una sustancia ilícita, por lo que le pagó la suma de veinte balboas (B/.20.00).
>
> Luego de realizar las coordinaciones correspondientes, se traslada la unidad policial a retirar dicho maletín. En tanto, un funcionario de este despacho y de unidades del D.I.I:P. se mantenían dos dentro del local comercial verificando si en efecto se efectúa la entrega. Luego de entregar una tarjeta de presentación de YUKLAN LEDEZMA (ELECTRÓNICA NG), ésta entrega al Agente Trejos, un maletín, el cual mantenía en su interior dos (2) paquetes de azúcar de una libra cada uno, dentro del cual encontró un sobre de plástico transparente con polvo blanco, presumible COCAÍNA y un envoltorio de

papel periódico forrado con cinta adhesiva con cierta cantidad de hierba seca, presumible MARIHUANA.

LEONEL ALEXIS LEDEZMA ROJAS, rinde declaración indagatoria (fs.40-45), en donde niega los cargos en su contra. Dice que lo ocurrido es mentira, que su detención se debe a que el D.I.I.P. planearon su detención porque creen lo que les dicen los internos y que a él en una ocasión se le perdió la llave de su locker. Dice que la sustancia ilícita motivo de esta investigación no es de su propiedad.

YUKLAN LILY LEDEZMA NG DE RAMOS, rinde declaración indagatoria (fs.46-52), manifestando que su hermano LEONEL LEDEZMA, había dejado el maletín donde se encontró la sustancia ilícita, informándole que el día siguiente un compañero suyo iría a la Electrónica a retirarlo, dice que olió el contenido del maletín y sintió olor a café. Su hermano colocó el maletín sobre unos televisores dañados. El día siguiente, efectivamente, se presentó el Agente Trejos, mostrándole la tarjeta de presentación que su hermano le había pedido por lo que le entregó el maletín.

Pasados cinco minutos después llegaron las unidades policiales a efectuar la diligencia de allanamiento. Agrega que era la primera vez que su hermano dejaba bolsas en su local comercial y que ella desconocía que dentro de la misma había sustancia ilícita.

El agente EMILIANO TREJOS GOMEZ, rinde declaración jurada (fs.64-68), en la que afirma y ratifica el Informe de Novedad, de fojas 2-3. En su declaración narra con detalles los hechos ocurridos el día de la detención de YUKLAN LEDEZMA, dice que al llegar al lugar e identificarse, ésta procedió a buscar el maletín contentivo de la sustancia ilícita y se lo entregó. Narra de igual forma todo lo ocurrido en el centro penal, previo a su traslado a Electrónica NG.

Igualmente, rinde declaración jurada el Teniente URRACA DE LA HOZ CASTRO (fs.84-88), quien estaba encargado del Operativo, que dio como resultado la detención de YUKLAN LEDEZMA. Agrega que mantenía información de que un interno le iba a entregar a Leonel Ledezma la suma de cien dólares para que le llevara una sustancia ilícita al penal y que él mantiene en su oficina, fotocopia delos billetes que le iba a entregar el interno a Ledezma.

La Cabo CARMEN MARÍA BOCANEGRA RUÍZ y el Sub-teniente HÉCTOR LUIS RIVERA GONZÁLEZ, de servicio en el Departamento Anti-Drogas del D.I.I.P, rinde declaración jurada, visibles a fojas 89-91 y 92-94, respectivamente. Bocanegra manifiesta haber estado dentro del establecimiento al momento en que YUKLAN LEDEZMA entrega el maletín de manos al Agente Trejos, en tanto el Sub- Teniente Rivera dice que al interrogar a YUKLAN LEDEZMA, ésta les manifestó que el maletín lo había dejado su hermano Leonel Ledezma.

Así también, rindió declaración jurada el Cabo Segundo RAMIRO ANTONIO MORENO MADRID (fs.95-98), en donde reitera lo dicho por el Agente Emiliano Trejos. En este mismo sentido rinde declaración jurada el Capitán FERNANDO ENRIQUE CEDEÑO MORENO (fs.101-102)". (fs.10-14 del cuadernillo).

ANÁLISIS DEL PLENO

Luego de examinar las copias del expediente principal, se advierte que el hecho punible investigado está relacionado con el traspaso de droga para introducirla a un centro carcelario, cuya pena mínima es superior a los dos años de prisión; que la orden de detención preventiva contra la señora Yuklan Ledezma

NG de Ramos fue emitida por la autoridad competente, en este caso por el Fiscal Segundo Especial en delitos Relacionados con Drogas, licenciado Patricio Elías Candanedo.

Ahora bien, en cuanto al fundamento de hecho que tuvo el funcionario acusado para ordenar la detención de la señora Yuklan Lily Ledezma de Ramos, este Pleno observa que el departamento Anti-drogas de la Policía Nacional tenía conocimiento para el 25 de mayo de este año que en el Centro Penitenciario La Joya, operaba una organización criminal dedicada a la distribución de sustancia ilícita, en la cual se señalaba como uno de los cabecillas al Cabo Leonel Ledezma, el cual abordó a un agente policial Emilio Trejos para que con una tarjeta de presentación de la Electrónica NG, con el nombre de Yuklan Ledezma NG fuese a dicho lugar, ubicado en el cruce de la entrada de Mañanitas de Tocumen, donde la hermana del señor Ledezma le iba a entregar una bolsa de azúcar contentiva de sustancias ilícita (fs.1-2).

En consecuencia, ese mismo día se autorizó y llevó a cabo una operación encubierta con el objeto de capturar a las personas que despliegan tal actividad delictiva (fs.9-10).

De la Operación Encubierta da cuenta el Informe de Novedad suscrito por la Cabo Carmen Bocanegra y el cabo Jheovannie Williams, quienes explican que entraron al local y solicitaron a la joven que atiende que les confeccionara una cotización para comprar un equipo de sonido, momento que entró la unidad encubierta y de inmediato la joven dejó de atenderlos y le preguntó al policía que deseaba y éste le dice que venía a buscar una encomienda, la joven le preguntó "Quien te mandó mi hermano negro el que trabaja en la Joya", al contestarle afirmativamente, la joven entró a la parte trasera del local y luego salió con una bolsa pequeña color azul y se la entregó al Policía.

Luego indica que el licenciado Vitilio Barrera dio la orden para allanar el local ya que efectivamente dentro de la bolsa en varias libras de azúcar encontraron cierta cantidad de sustancia ilícitas, pero en el lugar allanado no se encontró nada ilícito (fs.14-15). A fojas 16 consta la orden de allanamiento suscrita por el Fiscal Patricio Candanedo.

Por su parte el Secretario Judicial, Vitilio Barrera Flores, en Informe Secretarial dirigido al Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, señala que la mencionada operación dio resultado positivo en la incautación de un bulto de considerable tamaño, contentivo de polvo blanco que se presume sea cocaína y otro bulto de regular tamaño, contentivo de hierba seca que se presume sea marihuana, y que ambos tenía como objeto ser introducidos para ser comercializados en los pabellones de detenidos del Centro Penitenciario la Joya por el custodio de servicio, Cabo Leonel Ledezma, quien dejó la droga a su hermana Yuklan Ledezma NG en la Electrónica NG; también explica lo acontecido en Operación Encubierta (fs.22-23).

Lo acontecido en la operación encubierta fue relatado en declaración jurada por Emiliano Trejos Gómez, quien actuó como agente encubierto (fs.64-68) y por Carmen María Bocanegra quien estuvo presente al momento de la entrega del maletín contentivo de sustancia ilícita (fs.89-91).

Por su parte, al ser indagada Yuklan Lili Ledezma NG de Ramos, señala que el maletín se lo entregó su hermano Leonel Ledezma para que se lo entregara a un compañero suyo que iría a la electrónica a retirarlo; que al oler el contenido del maletín sintió olor a café (fs.46-52).

En tanto su hermano, Leonel Alexis Ledezma Rojas al rendir declaración indagatoria sostiene que es falso tales acusaciones y que todo fue planeado por el D.I.I.P. para detenerlo porque creen lo que dicen los detenidos (fs.40-45).

También se tiene las declaraciones del Teniente Urraca De La Hoz Castro (fs.84-88); el Sub-Teniente Héctor Luis Rivera González (fs.92-94) y el Cabo

segundo Ramiro Antonio Moreno Madrid (fs.95-98).

Luego entonces, de los fundamentos de hecho que tuvo la autoridad demandada para decretar la detención preventiva contra la señora Ledezma de Ramos, se advierte que existen graves indicios que la vinculan con el ilícito investigado, por lo que se cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra la señora YUKLAN LILY LEDEZMA NG DE RAMOS, mediante resolución de 25 de mayo de 2000 y DISPONE que la detenida sea puesta de inmediato a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO NELSON CARREYÓ EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ LEONIDAS JOVEL CONTRA SENTENCIA DE 18 DE ENERO DE 1999, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de acción de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Nelson Carreyó, en representación de José Leonidas Jovel, contra la sentencia de 18 de enero de 1999, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, por considerar que se infringen los artículos 32, 70 y 73 de la Carta Fundamental.

HISTORIA DEL CASO

El presente negocio tiene su génesis en el despido de José Leonidas Jovel, ocurrido el 18 de mayo de 1993, el cual fue notificado por el primer oficial de la Moto Nave Colon Trader (f. 47 cuaderno de inconstitucionalidad).

Contra el precitado despido José Leonidas Jovel y otros, presentaron demanda, por despido injustificado ante el Juez de Trabajo de la Primera Sección en Turno, el 9 de junio de 1993 (f. 23 antecedentes), la cual iba dirigida en contra de la motonave Colon Trader, Marine Sale and Services LTD, Worldwide Crewing Services Inc, Specialiced Bunkering Services Inc y a Yenil Corporation Inc (f. 17 antecedentes).

La Junta de Conciliación y Decisión No. 7, profirió el auto PJ-7 del 28 de abril de 1994, ordenando la corrección de la demanda en base al artículo 13 de

la Ley 7 de febrero de 1975, el cual establece que no procede la acumulación de procesos, cuando se reclama reintegro o indemnización por despido injustificado, por lo que ordenó desacumular el proceso y presentarlos separadamente (Cfr. f. 26 antecedentes).

La parte actora presentó demanda corregida el 7 de junio de 1994, en contra de las motonave Morgan Trader, Marine Sales and Services Ltd, Worldwide Crewing Services Inc, Specialized Bunkering, Yenil Corporation, (f. 1-5 antecedentes), posteriormente presentó nueva demanda corregida el 18 de agosto de 1994, con las mismas partes (f. 7-11 antecedentes).

La Junta de Conciliación y Decisión No. 7 mediante el auto PJ-7 del 26 de agosto de 1994, acogió el reclamo de indemnización por despido injustificado, propuesto por el trabajador y declinó el resto en concepto de gastos de repatriación y hospedaje a los Juzgados Seccionales de Trabajo (f. 14 cuaderno de antecedentes).

El apoderado judicial de José Leonidas Jovel presentó nuevamente demanda corregida el 25 de octubre de 1994 en la cual incluía a Henrry Pino, administrador de la motonave Colon Trader (f. 42-46 antecedentes), posteriormente presentó otra demanda corregida el 10 de julio de 1995.

Siendo finalmente dirigida la demanda, solidariamente, el 2 de septiembre de 1996, contra Marine Sales and Services Ltd., Worldwid Crewing Services Inc., Specialized Bunkering Services Inc., Yenil Corporation Inc., y Corporación Vanux, S. A. (creada el 8 de julio de 1994). Nelsón Padilla, con fundamento en el criterio que todas las personas jurídicas mencionadas forman una unidad económica (f. 47 cuaderno de inconstitucionalidad).

La Junta de Conciliación y Decisión al resolver el reclamo de despido injustificado expresa que ... "la demandada aportó al proceso la carta de despido, prueba E-1 aparece que el trabajador se negó a recibirla y firman dos personas pero estas no comparecieron ante el Tribunal, no reconocieron el contenido ni la firma del documento ..." (f. 11 cuaderno de inconstitucionalidad)

De otra parte, estimó la Junta de Conciliación que de acuerdo al artículo 214 del Código de Trabajo, el empleador debe notificar previamente por escrito al trabajador la fecha y causa o causas del despido, pero "... la demandada no demostró en el proceso haber notificado al trabajador... por lo que queda en estado de indefensión ..." (f. 11 cuaderno de inconstitucionalidad).

En consecuencia la Junta de Conciliación y Decisión No. 5 declaró injustificado el despido de José Leonidas Jovel y condenó a motonave Colon Trader, Marine Sales and Services Ltd, Worldwide Crewing Services Inc, Specialiced Bunkering Services Inc, Yenil Corporation, Corporación Vanux, S. A. a pagarle la indemnización y absolvió a Nelson Padilla del reclamo incoado (Cfr. f. 12 cuaderno de inconstitucionalidad).

DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO

El Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 18 de enero de 1999, modificó la resolución PJ-5, en el sentido de declarar prescrita la acción, para demandar a la empresa Corporación Vanux S. A. y Nelson Padilla, confirmando, el despido injustificado de José Leonidas Jovel y condenando únicamente a la empresa Worldwide Crewing Services Inc.

El Ad-Quem, argumentó que el artículo 221 del Código de Trabajo "... establece que el reclamo de la indemnización por despido injustificado y demás prestaciones derivadas de la terminación de la relación de trabajo prescribe al año, contado a partir de la fecha de la separación ..." (Cfr. f. 4 del cuaderno de inconstitucionalidad).

Agrega que, "... si el trabajador fue despedido el 24 de mayo de 1993, no

todas las empresas que aparecen demandadas en la actualidad, fueron demandadas en ese momento, por lo que debemos concluir que la acción para demandar por razón del despido injustificado había prescrito para todas aquellas empresas y personas que fueron demandadas con posterioridad al 25 de mayo de 1995 ..." (Cfr. f. 5 cuaderno de inconstitucionalidad). En consecuencia como la empresa Corporación Vanus, S. A. (sic) y el señor Nelson Padilla, fueron incluidos como demandados el 10 de julio de 1995, la acción en contra de ellos se encontraba prescrita ..." (f. 5).

Por otro lado señala el Tribunal Superior que en el acto de la audiencia "... la empresa Worldwide Crewing Services, Inc, aportó al proceso la carta de despido, con la anotación de que el trabajador se negó a recibirla ..." (f. 6 cuaderno de inconstitucionalidad). Adicionalmente se aportó el contrato de trabajo en idioma inglés suscrito por la compañía en mención, advierte el Tribunal que este contrato debió ser acompañado con su traducción, por lo que "... el A-quo debió ordenar que el mismo fuera traducido al español conforme lo dispone el artículo 780 del Código de Trabajo o recibir la traducción del mismo tal como se lo solicitaba al apoderado de la parte demandada al presentar la prueba ..." (f. 7 cuaderno de inconstitucionalidad).

De allí que el Tribunal Superior de Trabajo concluya que José Leonidas Jovel laboraba para la Worldwide Crewing Service Inc, y que "... no se ha establecido que la empresas demandadas formen una unidad económica, para efectos de su responsabilidad solidaria y ... adicionalmente para que estas empresas respondan solidariamente se requiere que utilicen simultánea e indistintamente los servicios del trabajador conforme al artículo 96 Código de Trabajo ... (f. 7)

DISPOSICION INFRINGIDA Y CONCEPTO DE LA INFRACCION:

Como viene visto, el demandante estima como infringidos los artículos 32, 70 y 73 de la norma fundamental.

El mencionado artículo 32 señala:

> "Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una de vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

Estima el demandante que este precepto constitucional ha sido infringido en concepto de violación directa, por omisión, toda vez que el Tribunal Superior de Trabajo, desconoció el derecho del trabajador de corregir la demanda conforme al artículo 559 del Código de Trabajo.

El artículo 70 de la Constitución Nacional es del tenor siguiente:

> "Ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las formalidades que establezca la ley. Esta señalará las causas justas para el despido, sus excepciones especiales y la indemnización correspondiente."

Señala el recurrente que esta norma ha sido infringida en forma directa por omisión, ya que es la ley la que determina las causas justas de despido sus excepciones especiales y la indemnización correspondiente, por un lado la ley señala cuando se interrumpe la prescripción y el Tribunal Superior de Trabajo señala otro.

Igualmente señala, el activador procesal, que se ha violado el artículo 73 de la Constitución Nacional que preceptúa:

> "Todas las controversias que originen las relaciones entre el capital y el trabajo, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo que se ejercerá de conformidad con lo dispuesto por la ley".

Advierte el recurrente, que la Ley laboral señala una cosa y el Tribunal Superior, establece otra, toda vez que el artículo 12 numeral 7 y el artículo 573 señalan expresamente que la interposición de la demanda interrumpe la prescripción, inclusive respecto a los demás deudores del trabajador (f. 53 cuaderno de inconstitucionalidad).

OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

De conformidad con el procedimiento vigente sobre la materia, correspondió correr la consulta en traslado a la Procuraduría de la Administración, quien, luego de confrontar la norma legal impugnada con el texto constitucional, emitió concepto mediante Vista Fiscal No. 372 del 4 de agosto de 1999, visible a fojas 58-64 del cuaderno de inconstitucionalidad.

Sostiene que, en su opinión, no es viable la acción de inconstitucionalidad, toda vez que no se ha producido el agotamiento de los recursos legales procedentes contra la sentencia de 18 de enero de 1999.

Sostiene que "... el representante judicial de José Jovel, pretende someter a la esfera de la constitucionalidad aspectos propios del ámbito legal, los cuales debieron dirimirse, oportunamente, a través de mecanismos legales, previamente establecidos en la legislación laboral ..." (vid. f. 61).

Por otro lado, no es posible que ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se pretenda revisar la legalidad del poder que le fue conferido al representante legal, el tiempo para corregir la demanda y la interrupción de la prescripción, aspectos que requieren la revisión del expediente, lo cual es posible en el Tribunal de Casación Laboral, Sala Tercera, de la Corte Suprema de Justicia ..." (f. 63).

Es por estas razones que concluye la Procuraduría que no es viable la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el recurrente, contra la sentencia impugnada, ya que no se han agotado los recursos legales procedentes contra el acto.

FASE DE ALEGATOS

Oportunamente, el recurrente hizo uso del derecho a presentar los alegatos con la finalidad de que se declare inconstitucional la sentencia impugnada.

Reitera que, la resolución atacada infringe el artículo 32, 70 y 73 de la Constitución Nacional, toda vez que el Tribunal Superior al confirmar la sentencia de la Junta en cuanto al despido de José Leonidas Jovel, condenando solamente a la empresa WORLDWIDE CREWING SERVICIES INC (vid. f. 74 cuaderno de inconstitucionalidad).

Finalmente, sostiene el recurrente que la Procuraduría de la Administración expresa, que le recurso de inconstitucionalidad no es viable, toda vez que la acción podía ser examinada ante el Tribunal de Casación Laboral, "... lo cual era imposible en el presente caso por tratarse de un negocio originado en las Juntas de Conciliación y Decisión cuyas resoluciones no son susceptibles del mencionado recurso, tal y como se desprende del parágrafo del artículo 8 de la Ley No. 1 de 1986, según la cual las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Trabajo para resolver los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones de las Juntas de Conciliación y Decisión, tienen carácter definitivo, no admiten ulterior recurso y producen el efecto de cosa juzgada ..." (Cfr. f. 76 cuaderno de inconstitucionalidad).

OPINION DE LA CORTE

Esta Superioridad al examinar por una parte, la resolución judicial impugnada, así como la opinión vertida por la Procuradora de la Administración, manifiesta como cuestión preliminar, que se debe entrar a decidir el fondo de

esta acción constitucional, toda vez que tal como se desprende de los antecedentes que reposan en autos, contra el acto impugnado ya se han agotado los recursos que la ley le permite, al tenor del artículo 8 del la Ley No. 1 de 1986 que establece que las sentencias proferidas en el Tribunal Superior de Trabajo en segunda instancia, producen el efecto de cosa juzgada siendo la acción de inconstitucionalidad el recurso permitido (Cfr. Sentencia del Pleno de 19 de noviembre de 1999).

Sin embargo, en el examen de los hechos que fundamentan la presente acción constitucional, comparte el Pleno, las observaciones vertidas por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que el accionante pretende convertir esta jurisdicción constitucional en una tercera instancia laboral al solicitar virtualmente a la Corte, revisar aspectos legales como son la prescripción y la forma de interpretación de normas laborales, previamente revisadas en dos instancias laborales. (Cfr. sentencia del Pleno del 19 de noviembre de 1999).

De otra parte, el activador, señala que el Tribunal Superior de Trabajo declaró injustificado el despido del trabajador, "... pero absolvió a las empresas que eran solventes, condenando en cambio a las insolventes, por lo que los derechos del trabajador quedaron sin protección por parte del Ad-Quem ..." (f. 48 cuaderno de inconstitucionalidad).

La Corte ha manifestado que "... el enjuiciamiento de los elementos que militan en los autos que componen el proceso laboral al cual accede la presente acción de inconstitucionalidad, nos permite recordar y reflexionar, en base a precedentes sentados por la Honorable Corte Suprema de Justicia, que el hecho de que una resolución dentro de un proceso laboral no beneficie las pretensiones del trabajador no quiere decir que esto sea inconstitucional ..." (Cfr. sentencia del Pleno de 20 de agosto de 1997).

En cuanto a la vulneración del artículo 70 y 73 de la Carta Fundamental, pretende al actor que el Pleno examine lo referente a la interpretación llevada a cabo por el Tribunal Superior de Trabajo respecto a la prescripción de la demanda y la unidad económica de las empresas, invocada por el trabajador, lo cual no es posible, toda vez que de hacerlo se convertiría la Corte Suprema en una tercera instancia, en un tribunal que estaría valorando hechos o pruebas de los cuales ya han conocido dos tribunales competentes distintos, dentro de un proceso laboral determinado (Cfr. sentencia del Pleno 20 de agosto de 1997).

En consecuencia, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el licenciado Nelson Carreyó, apoderado especial de José Leonidas Jovel.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABRAGA ZARAK (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRACESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA FÁTIMA DE LA GUARDIA CONTRA LA FRASE "HABER CUMPLIDO TREINTA AÑOS DE EDAD", CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 84, 122 Y 152 DE LA LEY N° 29 DE 25 DE OCTUBRE DE 1984, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Fátima De La Guardia, actuando en su propio nombre y representación, solicita al Pleno de la Corte Suprema de Justicia se declare la inconstitucionalidad de la frase "haber cumplido treinta años de edad", contenida en los artículos 84, 122 y 152 de la Ley N° 29 de 25 de octubre de 1984, mediante la cual se aprobó el Código Judicial.

Cumplidos los trámites señalados en los artículos 2554 y siguientes del Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de resolver, a lo que se procede de acuerdo con las siguientes consideraciones.

EL ACTO ACUSADO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Tal como viene dicho, en la demanda se acusa de inconstitucional la frase "haber cumplido treinta años de edad", contenida en los artículos 84, 122 y 152 de la Ley N° 29 de 25 de octubre de 1984, normas cuyo contenido, en el mismo orden, son de siguiente tenor:

> "Artículo 84. Para ser Secretario General o Subsecretario General de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser panameño por nacimiento, ser graduado en Derecho, haber cumplido treinta años de edad, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos y cumplir con los requisitos necesarios para ejercer el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial.
>
> Para ser Secretario de Sala se requiere ser panameño por nacimiento, estar en pleno de goce de sus derechos civiles y políticos, ser graduado en Derecho, haber cumplido treinta años de edad y tener certificado de idoneidad para ejercer la abogacía en todos los Tribunales de la República, expedido por la Corte Suprema de Justicia. En este último caso se requiere, además, haberla ejercido durante tres años por lo menos, o desempeñado por igual tiempo los cargos de Secretario u Oficial Mayor de alguno de los Tribunales Superiores o Agencias del Ministerio Público.
>
> Para ser Secretario Administrativo de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser panameño, haber cumplido treinta años de edad y poseer título universitario en Administración Pública, en Finanzas, Economía o en Administración de Empresas..."
>
> "Artículo 122. Para ser Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia se requiere ser panameño por nacimiento, haber cumplido treinta años de edad; estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos; ser graduado en derecho y tener Diploma debidamente inscrito en el Ministerio de Educación o en la oficina que la Ley señale para este efecto..."
>
> "Artículo 152. Para ser Juez de Circuito se requiere ser panameño, por nacimiento; haber cumplido treinta años de edad; estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; tener diploma de Derecho debidamente inscrito en el Ministerio de Educación o en la oficina que la Ley señale para este efecto; y poseer Certificado de Idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de la abogacía..."

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS

En opinión de la licenciada Fátima De La Guardia, la frase "haber cumplido treinta años de edad", contenida en los preceptos transcritos viola los artículos 19, 40, 60, 75, 125, 126 y 127 de la Constitución Política, los cuales establecen lo siguiente:

"Artículo 19. No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

"Artículo 40. Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias.

No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes.

"Artículo 60. El trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa.

"Artículo 75. Los derechos y garantías establecidos en este Capítulo serán considerados como mínimos a favor de los trabajadores.

"Artículo 125. Son ciudadanos de la República todos los panameños mayores de diez y ocho años, sin distinción de sexo.

"Artículo 126. Los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción, se reservan a los ciudadanos panameños.

"Artículo 127. El ejercicio de los derechos ciudadanos se suspende:

1. Por causa expresada en el artículo 13 de esta Constitución.

2. Por pena conforme a la Ley.

EL CONCEPTO DE LA INFRACCION

La accionante expone básicamente que la frase "haber cumplido treinta años de edad" es inconstitucional porque "establece una discriminación en perjuicio de los abogados, que por razón de la fecha en que ocurrió su nacimiento son menores de treinta años de edad, y un fuero o privilegio a favor de los profesionales del derecho, cuyo nacimiento ocurrió en una fecha anterior", situación que a su juicio, limita y reprime la libertad al ejercicio de la profesión (f. 3). En base a este razonamiento, la demandante expone los siguientes conceptos de infracción constitucional:

1. Se infringe el artículo 19, de manera directa por omisión, puesto que se establece "un requisito discriminatorio por razón del nacimiento en perjuicio de quienes no han cumplido treinta años de edad".

2. Se vulnera el artículo 40, de forma directa por omisión, ya que se "restringe la libertad ya adquirida de ejercer la abogacía ... a pesar de que la edad, no obedece ni a la idoneidad, ni a la moralidad, ni a la previsión y seguridades sociales, ni a la colegiación, ni a la salud pública, ni a la sindicación, ni a las cotizaciones obligatorias" (fs. 18-19).

3. Se violan los artículos 60 y 75, toda vez que se "restringe, limita, impide y prohibe el pleno o cabal ejercicio de la profesión por razón de la edad, a los profesionales del derecho, es decir, a quienes la Ley a declarados idóneos para ejercer la abogacía, de ejercer su profesión en el sector público".

4. Se infringen los artículos 125, 126 y 127, puesto que se "impide a los ciudadanos panameños menores de treinta años de edad, ocupar los cargos públicos de Secretario General o Subsecretario General de la Corte Suprema de Justicia, Secretario de la Sala; Magistrado de los Tribunales Superiores de Justicia; y

Juez de Circuito, cuando la Constitución reserva a todos los ciudadanos panameños, es decir, a los panameños mayores de diez y ocho años, la capacidad de ejercer cargos públicos en la República de Panamá" (fs. 26-27).

OPINION DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION

Al emitir concepto mediante Vista N° 551 del 19 de noviembre de 1999, la Procuradora de la Administración concluye que no procede la declaratoria de inconstitucionalidad solicitada, toda vez que la frase "haber cumplido los treinta años de edad" no conculca los artículos 19, 40, 60, 75, 125, 126 y 127 y ningún otro precepto constitucional. La representante del Ministerio Público explicó, básicamente, que la frase censurada de inconstitucional "no establece un fuero o privilegio de carácter personal, ya que la edad de 30 años ... es un requisito legal, que se impone en atención a la necesidad de contar con un profesional idóneo y con mayor experiencia laboral a la que pueda poseer una persona de 18 años" y que "el requisito de la edad, se establece como una ficción jurídica encaminada a fijar parámetros mínimos que establezcan la idoneidad de quien ha desempeñarse en estos importantes cargos dentro de la Administración de Justicia" (fs. 38 y 39).

DECISION DE LA CORTE

Cumplidos los trámites procesales sin que se hubieren presentado argumentos por escrito, pasa esta Corporación de Justicia a conocer el fondo de este negocio constitucional.

Como viene visto, se aduce como infringido el artículo 19 de la Carta Fundamental. Con relación a este precepto constitucional, resulta oportuno advertir que esta Superioridad ha sostenido reiteradamente que, al prohibir esta disposición los fueros y privilegios, se refiere a aquellos de carácter "personal", es decir, a los que establecen distinciones entre personas que se encuentran en las mismas condiciones o circunstancias. En esa dirección, se puede consultar la resolución judicial calendada 11 de enero de 1991, proferida por el Pleno de esta Corporación de Justicia, en la que se manifestó que:

> "El transcrito artículo sólo prohibe los fueros y privilegios cuando son personales, es decir, concedidos a título personal. De ahí que si la Ley confiere ciertos fueros o privilegios a determinada categoría de ciudadanos, o de servidores públicos o de trabajadores, dichos fueros o privilegios no son inconstitucionales porque no han sido otorgados en atención a las personas en sí, sino a la condición o status que tienen." (Registro Judicial, enero de 1991, pág.16).

De lo anterior se colige que la frase "haber cumplido los treinta años de edad", exigida para poder desempeñar los cargos de Secretario General, Subsecretario General, Secretario de Sala y Secretario Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado de los Tribunales Superiores de Justicia y Juez de Circuito, de ninguna manera constituye una circunstancia que desmejora la condición de una persona natural o grupo de personas, frente a otras que se encuentran en las mismas condiciones objetivas. Sencillamente la frase objetada consiste en un requerimiento legal, adicional a otras exigencias, cuyo propósito es el de que, profesionales idóneos con mayor experiencia laboral y académica, ocupen determinadas posiciones importantes dentro del Organo Judicial; de manera que, dada la complejidad y responsabilidad que conlleva el cargo judicial, sea el individuo más capaz y de mayor práctica, el que pretenda desempeñarlos. No es, por ende, un privilegio de donde se derive el concepto de discriminación, ya sea por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

En cuanto al artículo 40 constitucional invocado como infringido, se trata de un precepto que garantiza la libertad de ejercer cualquier profesión. La doctrina jurisprudencial ha sostenido que este texto constitucional "Reconoce la libertad para escoger la profesión que se desea ejercer, derecho a estudiar esa profesión, derecho a obtener el diploma o título, derecho a llenar los requisitos

legales para su ejercicio y el derecho a ejercerla" (Registro Judicial, abril de 1998, pág.130). A juicio de la Corte, la frase "haber cumplido treinta años de edad", no está gravando el ejercicio de una profesión liberal, como la de abogado, ni tampoco es un mecanismo que impida el ejercicio de esta profesión. Por el contrario, dicha frase constituye un requisito más, entre los que se encuentran: a) ser panameño por nacimiento, b) ser graduado en derecho, c) estar en pleno goce de los derechos civiles o políticos y d) haber ejercido la profesión durante cinco años; los que deben valorarse conjuntamente, para lograr acreditar la idoneidad, experiencia profesional y académica de aquel funcionario que aspira ocupar determinadas posiciones en la administración de justicia. No es una limitante para ejercer la profesión, sino la que permite acreditar la experiencia del servidor público que, como bien lo menciona la representante del Ministerio Público, sólo se adquiere con el devenir de los años. Por lo tanto, debe descartarse el cargo fundado en el artículo en cuestión.

De otra parte, también procede desestimar la infracción de los artículos 60 y 75 de nuestra Carta Política, pues jurisprudencialmente se ha establecido que ambas normas tienen carácter programático. En realidad son disposiciones que establecen la orientación de algunas de las funciones del Estado, como las referentes al deber de promover políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y garantizar los derechos de los trabajadores, que de ningún modo pueden ser infringidas por la frase censurada.

Por último, en la demanda también se invocan como infringidos los artículos 125, 126 y 127 de nuestra Constitución, que versan sobre el concepto de ciudadanía. El Pleno de la Corte ya se ha pronunciado sobre la interpretación conjunta de estas disposiciones constitucionales, de las que ha manifestado, aluden básicamente a que todos los ciudadanos panameños tenemos igual derecho a ser elegidos para cargos públicos, siempre y cuando se reúnan las condiciones exigidas en la Ley y la Constitución Política (Cfr. Sentencia del Pleno de la Corte de 16 de marzo de 1995, publicada en el Registro Judicial de marzo de 1995, pág. 129).

Como quiera que la frase "haber cumplido treinta años de edad", tachada de inconstitucional, constituye precisamente una condición contemplada en la Ley para ocupar determinado cargo público, se descarta la infracción de las mencionadas normas constitucionales.

Por las consideraciones que anteceden, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la frase "haber cumplido treinta años de edad", contenida en los artículos 84, 122 y 152 de la Ley N° 29 de 25 de octubre de 1984, mediante la cual se aprobó el Código Judicial, por cuanto no infringe los artículos 19, 40, 60, 75, 125, 126 y 127 ni ninguno otro de la Constitución Nacional.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RIOS MOLINAR CONTRA EL ARTÍCULO 1399 DEL CÓDIGO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE POLICÍA PROMOVIDO POR EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL CONTRA OCUPANTES DE LA FINCA 6069, FOLIO 552, TOMO 653, UBICADA EN SAN ANTONIO, PROVINCIA DE SANTIAGO. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓN RODRÍGUEZ. PANAMÁ, SEIS

(6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDUARDO RIOS MOLINAR, actuando, según afirma, en representación de los ocupantes de la Finca 6069, introdujo una Advertencia de Inconstitucionalidad contra el artículo 1399 del Código Judicial, dado que, a su juicio, conculca el artículo 32 de la Constitución Nacional.

Dicha Advertencia la incluyó dentro del escrito contentivo del alegato presentado ante el Corregidor de Policía del Corregimiento de Santiago, quien conoce del proceso administrativo de lanzamiento por intruso instaurado por el Banco Hipotecario Nacional contra los ocupantes de la Finca 6069, razón por la cual el Corregidor de Santiago remitió la Advertencia a esta Corporación. (fs.1-4)

Procede esta Superioridad al estudio de la Advertencia propuesta, para determinar si cumple con los requisitos de presentación establecidos por la ley y por la jurisprudencia.

En primer lugar, se observa que la Advertencia de Inconstitucionalidad de la que se conoce se ha formulado dentro del escrito contentivo del alegato presentado ante la Corregiduría de Santiago y no en un escrito aparte, lo que es contrario a las exigencias de orden legal y a la jurisprudencia sentada por el Pleno.

En el fallo de 24 de octubre de 1996 la Corte dejó sentado:

> "Cabe indicar que en reiteradas oportunidades esta Superioridad ha señalado que las Advertencias de Inconstitucionalidad deben cumplir con los mismos requisitos que se exigen a las demandas de inconstitucionalidad, previstos en los artículos 2551 del Código Judicial, tal como se constata en la copiosa jurisprudencia de la Corte en esta materia, entre los cuales son consultables las sentencias de 23 de noviembre de 1990; 26 de febrero de 1993; 20 de mayo de 1994)."

Aunado a lo anterior, el Pleno de la Corte se percata de que la norma impugnada ha sido objeto de revisión íntegra y, por tanto, de pronunciamiento previo, por parte de esta Corporación Judicial a través de la sentencia de 10 de diciembre de 1993 en cuya parte resolutiva señaló lo siguiente:

> "En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 1399 del Código Judicial". (La Corte Subraya).

Lo indicado impide efectuar una nueva revisión de la norma acusada de inconstitucional, puesto que como lo señalan el artículo 203 de la Constitución Nacional y el artículo 2564 del Código Judicial, las decisiones emitidas por el Pleno de esta Corporación son finales, definitivas y obligatorias.

En consecuencia, no le es dable a este Alto Tribunal proceder a la admisión de la presente Advertencia de Inconstitucionalidad con fundamento en las consideraciones mencionadas.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Advertencia de Inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado EDUARDO RIOS MOLINAR contra el artículo 1399 del Código Judicial.

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTO POR EL LICDO. BORIS E. BARRIOS G. CONTRA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY No.1 DE 5 DE ENERO DE 1988, SOBRE CALUMNIA E INJURIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Pendiente de decisión se encuentra demanda de inconstitucionalidad presentada por el licenciado BORIS E. BARRIOS G. con el objeto de que se declare inconstitucional el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley No. 1 de 5 de enero de 1988, que reformó el artículo 180 del Código Penal.

La norma acusada es del tenor siguiente:

"Artículo 10. El artículo 180 del Código Penal queda así:

Artículo 180. Para proceder en los delitos contra el honor, se requiere querella de la parte ofendida, acompañada de la prueba sumaria de su relato.

En los casos de querella presentada por el Presidente de la República, Vicepresidentes de la República, Entidades Descentralizadas, Legisladores, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral, Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración, Contralor General de la República, Subcontralor General de la República, Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa, Miembros del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa y Embajadores acreditados en Panamá, bastará con la comunicación escrita del ofendido de que comparezca ante el funcionario de instrucción".

La norma constitucional que el recurrente considera infringida es el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es del tenor siguiente:

"Artículo 19: No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas".

En su extenso análisis filosófico sobre el concepto de la igualdad, el actor manifiesta que la norma acusada infringe dicha garantía fundamental consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, ya que ésta "se traduce en la preposición negativa de todo fuero o privilegio derivados de circunstancias y atributos originarios emanados de la propia personalidad humana particular, tales como la raza, nacimiento, posición económica, sexo, religión, idea o posición política, etc.".

Agregó además que "lo que revela importancia es que la garantía específica de igualdad contenida en el artículo 19 constitucional es la prohibición de existencia de "FUEROS", y esta idea corresponderá a la acepción que implique que

denote una circunstancia anti-igualitaria. Consecuencialmente, el término "FUERO" en el artículo 19 constitucional significa todo privilegio o prerrogativa de cualquier especie y contenido otorgado a persona alguna, ya sea natural o jurídica".

Una vez admitida la demanda de inconstitucionalidad se corrió traslado del asunto al Procurador General de la Nación quien mediante la vista correspondiente, manifestó su opinión en los siguientes términos:

> "A nuestro juicio, el planteamiento que esgrime la parte recurrente, tal como puede apreciarse en su escrito, no es el más acertado, ya que con la expedición de la referida ley, no se persigue crear un fuero o privilegio en favor de tal o cual persona o funcionario público de alta jerarquía, toda vez que a ciertos funcionarios por razón de la función que ejercen, la ley les permite una distinción especial lo que no significa un fuero o privilegio personal.
>
> Nuestra Corte Suprema de Justicia, ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este tema en múltiples ocasiones, por lo que nos permitimos señalar el siguiente pronunciamiento:
>
> En virtud de sentencia de 17 de abril de 1985, ese ente jurisdiccional supremo, manifestó el siguiente criterio:
>
> 'Al concretar ahora el análisis de la interpretación del artículo que se comenta, resulta evidente que dicho precepto no sólo prohíbe los fueros o privilegios personales, sino además la discriminación por razón de raza, nacimiento, sexo, religión o ideas políticas. Pero a pesar de que dicha norma contiene esas prohibiciones, la interpretación dominante hasta ahora ha sido la de que la primera de ellas, o sea, los fueros o privilegios personales, son aquellos que se fundan en la raza, el nacimiento, la clase social, el sexo, la religión o las ideas políticas, restringiendo o limitando todo el artículo a la existencia de esas circunstancias...' (lo subrayado es nuestro).
>
> Como vemos, nuestro más alto tribunal de justicia ha considerado que para que existan fueros y privilegios, estos deben estar fundamentados por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.
>
> Y es que la referida disposición constitucional, conforme se lleva dicho, tan solo prohíbe los fueros o privilegios personales y los distingos a que se contrae la misma, por lo que ésta no consagra derechos subjetivos susceptibles de ser vulnerados por el párrafo segundo del artículo 1ro. de la ley 1 de 5 de enero de 1988, tachado de inconstitucional, descartándose, en consecuencia, su vulneración".

Agregó el Señor Procurador la cita de la sentencia de 10 de septiembre de 1986 de esta Corporación en la cual se mantiene el criterio expresado y concluyó solicitando que se declare que el párrafo segundo del artículo 10 de la ley N 1 de 5 de enero de 1988, por el cual se modificó el artículo 180 del Código Penal no vulnera el artículo 19 de la Constitución Nacional.

Cumplidos todos los trámites procesales inherentes al presente recurso de inconstitucionalidad se encuentra el negocio pendiente de decisión, para lo cual se adelantan las siguientes consideraciones.

La presente demanda de inconstitucionalidad se propone, como se deja expresado, contra el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley N 1 de 5 de enero de 1988 por el cual se modificó el artículo 180 del Código Penal, que se refiere a la comunicación escrita que pueden dar ciertos funcionarios públicos respecto

a la comisión de los delitos de calumnia e injuria y que basta para proceder en dichos delitos.

Por su parte, el artículo 19 de nuestra Carta Magna prohíbe la institución de fueros o privilegios personales o discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo o ideas políticas y como bien lo señala el Señor Procurador, en reiterada jurisprudencia esta Corte se ha referido al sentido y alcance de esta disposición, manifestando que la misma se refiere al establecimiento de fueros o privilegios sólo cuando éstos se refieran a las circunstancias taxativamente señaladas en dicho artículo. Este criterio aparece claramente embozado en este fallo de dos (2) de enero de 1985:

> "Obsérvese que la norma constitucional habla de que debe tratarse de fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza (es decir por razón de casta o calidad de origen); nacimiento (o sea, por razón del lugar o sitio donde tiene uno su principio); clase social (es decir, por razón de posición económica); sexo (es decir, por razón de condición orgánica que distingue al hombre de la mujer); religión (es decir, por razón de creencias o dogmas acerca de la divinidad); e ideas políticas (o sea, por razón de filiación o simpatía por alguna agrupación política o por profesar determinada doctrina política)".

El segundo párrafo del artículo 180 del Código Penal establece una regulación diferente en cuanto a los requisitos necesarios para iniciar un proceso por los delitos de calumnia e injuria, según la calidad de la persona ofendida: si se trata de un particular se requiere querella acompañada de la prueba sumaria del relato, mientras tratándose de los funcionarios públicos indicados bastará con una comunicación escrita.

Esta distinción obedece a consideraciones de carácter práctico, pues como es sabido, los servidores públicos mencionados en el artículo impugnado, por la propia naturaleza de sus funciones son víctimas constantemente de críticas y señalamientos, que en ocasiones podrían figurar como hechos punibles como la calumnia o la injuria; de modo que con la eximente señalada en el segundo párrafo del artículo 180 del Código Penal se benefician estos funcionarios, a quienes -por razón de volumen de sus responsabilidades y funciones públicas- se les dificulta concurrir ante el agente de instrucción y recabar prueba sumaria de su relato cuando consideren que han sido calumniados o injuriados.

El concepto de la igualdad, tal como señalara el demandante, tiene que ver con la equivalencia de condiciones en que se deben encontrar los sujetos que se encuentran en una determinada situación; es decir, que todas las personas que pertenezcan a una determinada condición particular deben tener la posibilidad de adquirir los mismos derechos y contraer las mismas obligaciones.

De lo anterior se deriva que los cargos de inconstitucionalidad formulados al segundo párrafo del artículo 180 del Código Penal respecto a la creación de un fuero o privilegio a favor de los funcionarios que dicho artículo enumera, carecen de fundamento, toda vez que la condición jurídica en que se encuentran dichos servidores públicos es distinta de la condición jurídica de los particulares.

La palabra fuero que además de privilegio significa legislación especial para determinado territorio o para un grupo de personas, puede aplicarse en el sentido constitucional a cualquier disposición o grupo de disposiciones que tiendan a conceder una situación ventajosa o de exclusión a favor de una o un número plural de personas que las haga acreedores a un tratamiento especial y discriminatorio frente al resto de los ciudadanos.

La prohibición del fuero se relaciona íntimamente con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 20 del Estatuto Político.

Ello no significa tampoco que el Estado no pueda legislar en forma especial si se dan circunstancias especiales. Entre los múltiples ejemplos que ofrece nuestro derecho público y civil tenemos por ejemplo las leyes especiales para menores, el derecho laboral, los privilegios del Presidente de la República, etc., en los que dadas ciertas calidades en las personas se establece un régimen para ellos distinto al que rige para la generalidad. En síntesis, el principio fundamental es el siguiente:

En igualdad de circunstancias debe regir una ley igual. Tal principio se recoge en la máxima latina 'ubi principio eadem ratio, eadem iuris dispositivo.". (Sentencia de Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 14 de julio de 1980).

Ante la tesis jurisprudencial esgrimida, debe el Pleno concluir que el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley N 1 de 5 de enero de 1988, que reformó el artículo 180 del Código Penal, no vulnera el contenido del artículo 19 ni ningún otro de la Constitución Nacional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley N . 1 de 5 de enero de 1988, que reformó el artículo 180 del Código Penal.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LIC. JOSÉ MARÍA LEZCANO, EN REPRESENTACIÓN DE ALFONSO URRIOLA CONTRA EL AUTO NO. 202, DE 2 DE AGOSTO DE 1999, DICTADO POR EL JUEZ MUNICIPAL DE BOQUETE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado JOSÉ MARÍA LEZCANO, actuando en nombre y representación del señor ALFONSO URRIOLA, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el Auto No. 202, de 2 de agosto de 1999, dictado por el Juzgado Municipal del Distrito de Boquete dentro del Incidente de Indemnización de daños y perjuicios promovido por CARLOS IVÁN SANTAMARÍA SANJUR contra ALFONSO URRIOLA y la sociedad GANADERA GUERRA, S. A.

1. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO

En el presente proceso constitucional, la pretensión que se formula consiste en una petición dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que se declare que es inconstitucional el auto arriba mencionado.

Señala el demandante que las órdenes contenidas en el mencionado auto son violatorias del artículo 32 de la Constitución Nacional, que dice:

> "ARTÍCULO 32. Inexistencia de las autoridades y cosa Juzgada. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

El Auto No. 202 de 2 de agosto de 1999, es del tenor siguiente:

"Este Tribunal de justicia por vía del Auto No. 120 de 18 de mayo de 1999, admitió dentro del presente Incidente de Indemnización de Daños y Perjuicios promovido por CARLOS IVAN SANTAMARÍA SANJUR contra ALFONSO URRIOLA Y LA SOCIEDAD GANADERA GUERRA, S. A., las pruebas documentales, testimoniales y periciales que fueron oportunamente aducidas por las partes concediendo el término de ocho -8- días para la práctica de las mismas.

La antes referida resolución fue notificada personalmente a las partes mediante Tribunal comisionado, en este particular caso, el Juzgado Municipal del Distrito de David, Ramo de Lo Penal.

Ahora bien, advierte el Juzgador que la comisión deligenciada fue recibida en la Secretaría del Tribunal del conocimiento el día 16 de julio de 1999, fecha para la cual ya había precluído el término concedido para practicar las respectivas pruebas, si tomamos en cuenta que la última notificación correspondió a la apoderada judicial del incidentista, la cual se practicó el día 24 de junio de 1999.

Resulta evidente pues que las causas que impidieron la práctica de las pruebas admitidas en el término respectivo, no son imputables a las partes que intervienen en esta incidencia. De ahí que estime el Juzgador procedente ordenar de oficio la práctica de las mismas con base en el Artículo 782 del Código Judicial.

De consiguiente, el suscrito JUEZ MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BOQUETE, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS de oficio de las pruebas documentales, testimoniales y periciales que fueron acogidas mediante el Auto No. 120 de 18 de mayo de 1999.

PRUEBAS TESTIMONIALES:

Se fija el siguiente horario para que los testigos aducidos presten declaración:

1. ANTONIO RÍOS, el día cinco -5- de agosto de mil novecientos noventa y nueve -1999-, a las nueve -9:00- de la mañana.

2. GABRIEL AYALA, el cinco -5- de agosto de mil novecientos noventa y nueve -1999-, a las diez -10:00- de la mañana.

3. CARLOS IVAN SANTAMARÍA SANJUR, el día cinco -5- de agosto de mil novecientos noventa y nueve -1999-a las once -11:00- de la mañana.

4. IMELDA BARCENAS DE SANTAMARÍA, el día cinco -5- de agosto de mil novecientos noventa y nueve -1999-a las dos -2:00- de la tarde.

5. JUAN CARLOS SANTAMARÍA BARCENAS, el día cinco -5- de agosto de mil novecientos noventa y nueve -1999-, a las tres -3:00- de la tarde.

6. ANA MURIEL SANTAMARÍA BARCENAS, el día cinco -5- de agosto de mil novecientos noventa y nueve -1999-a las cuatro -4:00 de la tarde.

PRUEBAS PERICIALES:

Se fija el viernes seis -6- de agosto de mil novecientos noventa y nueve -1999-, a las once -11:00- de la mañana, para la práctica de las pruebas periciales pedidas, siendo las personas objeto de la

prueba CARLOS IVAN SANTAMARÍA SANJUR, IMELDA BARCENAS DE SANTAMARÍA, JUAN CARLOS SANTAMARÍA BARCENAS, Y ANA MURIEL SANTAMARÍA BARCENAS.

Téngase como Peritos por la parte demandada al Psicólogo JORGE ANTONIO BARRAZA CABALLERO y al DR. JOSÉ A. HERRERA VARGAS.

Designe el actor el Perito que lo ha de representar en esta diligencia.

Se tiene como Perito por parte del Tribunal a la Licenciada Yaritza de Esquivel

PRUEBA DE INFORME:

Solicítese al Departamento de Registro de Propiedad Vehicular de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia, Certificación en relación al nombre del propietario del vehículo Ford, placa No. 785378, para el día 19 de julio de 1999; el nombre del actual propietario, así como Certificación si la Sociedad Ganadera Guerra, S. A. traspasó dicho vehículo a otra persona, y en caso afirmativo, en que fecha y el nombre de la persona a la cual fue traspasado el indicado automotor.

Gírese el oficio respectivo.
(Fs. 1-4).

El demandante considera que el auto impugnado ha transgredido el debido proceso, toda vez que al ordenar de oficio la práctica de pruebas con base en el artículo 782 del Código Judicial, altera el principio de imparcialidad porque se le niega a la contraparte la oportunidad de contradecir tal decisión.

II. CRITERIO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El señor Procurador General de la Nación emitió concepto mediante Vista No. 26 de 3 de septiembre de 1999.

Sostiene dicho funcionario que el auto emitido por el Señor Juez Municipal no es inconstitucional.

III. CONSIDERACIONES DEL PLENO

La Corte pasa a decidir el fondo de la pretensión formulada en la demanda, una vez vencida la fase de alegatos, sin que ningún interesado hubiese presentado escrito alguno dentro del término previsto en el Artículo 2555 del Código Judicial.

Se observa que la demanda de inconstitucionalidad en estudio surge dentro de un incidente de daños y perjuicios promovido por CARLOS IVAN SANTAMARÍA SANJUR contra ALFONSO URRIOLA y LA SOCIEDAD GANADERA GUERRA, S. A.

El auto demandado de inconstitucionalidad fue dictado por el Juez Municipal del Distrito de Boquete, fundamentándose en el artículo 782 del Código Judicial, en donde se decreta la práctica de pruebas de oficio

Mediante Auto No. 120 de 18 de mayo de 1999, el señor Juez Municipal del Distrito de Boquete admitió las pruebas documentales, testimoniales y periciales que fueron oportunamente aducidas por las partes dentro del proceso arriba mencionado. Dicha resolución fue notificada personalmente a las partes mediante Tribunal comisionado, en este caso, al Juzgado Municipal del Distrito de David, Ramo de lo Penal. Una vez realizada las notificaciones respectivas, la diligencia fue recibida en la Secretaría del Tribunal de conocimiento cuando ya había precluído el término concedido para la práctica de las respectivas pruebas. Por lo tanto, el señor Juez Municipal de Boquete, procedió a ordenar de oficio la

práctica de las mismas, con fundamento en el artículo 782 del Código Judicial, mediante Auto No. 202, de 2 de agosto de 1999, por considerar que las causas que impidieron la práctica de dichas pruebas no era imputable a las partes que intervienen en el proceso.

El artículo 782 del Código Judicial señala:

"Además de las pruebas pedidas y sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones de este Código, el Juez de primera instancia debe ordenar, en el expediente principal y en cualquier incidencia que surja, en el período probatorio o en el momento de fallar, la práctica de todas aquellas que estime procedentes para verificar las afirmaciones de las partes y el de segunda practicará aquellas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos en el proceso.

La resolución que se dicte es irrecurrible y si se tratare de la declaración de testigos en ella expresará el Juez las razones por las cuales tuvo conocimiento de la posibilidad de dicho testimonio.

La respectiva diligencia se practicará previa notificación a las partes para que concurran a la diligencia si así lo estiman conveniente.
....."

Esta disposición es clara al otorgar al Juez la facultad de solicitar, ya sea en el período probatorio o en el momento de fallar, la práctica de todas aquellas pruebas que estime procedentes para verificar las afirmaciones de las partes. En conclusión, se le ha conferido al juez la oportunidad de obtener pruebas, dentro del proceso, para esclarecer, en la forma más completa, todos los aspectos relacionados con el punto en controversia.

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la garantía constitucional del debido proceso contiene tres derechos fundamentales: el de ser juzgado por autoridad competente, el de no ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva y disciplinaria, y el de ser juzgado conforme a los trámites legales.

Por otro lado, como bien lo ha señalado la doctrina nacional: "la garantía constitucional del debido proceso es "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos". (HOYOS, ARTURO. El Debido Proceso. Editorial Temis, S. A. 1996. Santa Fe de Bogotá, Colombia. Pág. 54).

Cabe determinar entonces, frente a la censura hecha por el demandante, si el auto emitido por el señor Juez, con base en el artículo 782 del Código Judicial, se enmarca dentro de los requerimientos legales debidamente establecidos.

Así pues, el Pleno de esta Corporación considera que se no se ha producido la violación de la garantía procesal del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución Nacional, por cuanto que, ambas partes tuvieron la oportunidad de aportar las pruebas que considerasen necesarias dentro del proceso y además, de tachar las aducidas por la parte contraria en su momento procesal.

Además, el auto atacado de inconstitucional fue expedido por el Juez de la causa, conforme lo establecen las normas procesales correspondientes,

específicamente con fundamento en el artículo 782 del Código Judicial, el cual le permite al Juez la práctica de todas aquellas pruebas que estime procedentes para verificar las afirmaciones de las partes,

De lo antes expuesto esta Superioridad colige, que el auto objeto de impugnación no viola el debido proceso, toda vez que fue dictado en atención a los trámites procesales que detalla el Código Judicial para tales efectos.

Por lo tanto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el Auto No. 202 de 2 de agosto de 1999, proferido por el Juez Municipal del Distrito de Boquete, dentro del Incidente de Indemnización de Daños y Perjuicios promovido por CARLOS IVAN SANTAMARÍA SANJUR contra ALFONSO URRIOLA y LA SOCIEDAD GANADERA GUERRA, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR CARLOS EUGENIO CARRILLO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 29 DE JUNIO DE 1999, EMITIDA POR EL JUZGADO TERCERO DE CIRCUITO PENAL DE LA PROVINCIA DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra la resolución judicial de 29 de junio de 1999, proferida por el Juzgado Tercero de Circuito de Colón, Ramo Penal, con sede en el Corregimiento de Cristóbal.

En este momento procesal, corresponde decidir sobre la admisibilidad de la demanda, de conformidad con lo que establecen los artículos 2551 y 654 del Código Judicial, consagratorios de los presupuestos procesales que debe reunir el libelo de inconstitucionalidad para que la acción pueda ser acogida, así como con los establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia.

En esa labor, se comprueba que el demandante ha presentado los hechos que fundamentan la iniciativa; ha transcrito literalmente la resolución judicial que acusa de inconstitucionalidad y ha indicado las disposiciones constitucionales que estima infringidas y el concepto de la violación, lo que demuestra que, desde un punto de vista estrictamente formal, la acción cumple con los requisitos previstos en el artículo 2551 del Código Judicial.

No obstante lo anterior, la Corte debe resaltar que el accionante no cumple con la formalidad de presentar constancia, sobre el agotamiento de los medios para enervar la medida jurisdiccional que ahora censura. En efecto, se aprecia que el demandante alega que "propuso un incidente de nulidad, el cual fue negado mediante auto No. 28 de 30 de noviembre de 1999 ... y confirmado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante resolución de 4 de abril de 2000" y que por esa razón "la vía para impugnar dicho acto está agotada" (f. 3). Sin embargo, la Corte advierte, en primer lugar, que con el libelo no se aporta ningún elemento probatorio que acredite que, ciertamente, interpuso tales iniciativas

procesales y que las mismas fueron resueltas; y en segundo lugar, se conoce, de acuerdo al propio demandante, que los medios de impugnación se presentaron "En contra de la realización del acto de audiencia realizada el 27 de agosto de 2000" (f. 3), y no contra el acto jurisdiccional tachado de inconstitucional, que es la resolución judicial de 29 de junio de 1999, mediante la cual el Juzgado Tercero de Circuito de Colón, Ramo Penal, con sede en el Corregimiento de Cristóbal, designa un defensor de oficio al sumariado Roger Suannes Stanislas y fija para el 4 de agosto de 1999, la fecha para la celebración de la audiencia preliminar.

El criterio del agotamiento de la vía ha sido sostenido en jurisprudencia diversa del Pleno de la Corte, como lo confirma la sentencia de 22 de septiembre de 1995, en la que manifestó:

> "Se pone de relieve que el Pleno de la Corte actúa como Organismo de Derecho Público, garante de la Constitución y no como Tribunal de Justicia, por lo que previamente a la proposición de la demanda de inconstitucionalidad deben agotarse todos los medios de impugnación que conceda el ordenamiento jurídico en defensa de los derechos de quienes consideren que han sido afectados por una decisión determinada.
>
> Este criterio ha sido sostenido con uniformidad por la jurisprudencia de esta Corporación, aseverando que solamente procede la demanda de inconstitucionalidad cuando se hayan agotado todos los recursos y acciones que permitan anular el acto cuya declaratoria de inconstitucionalidad se pretende (v.g. Sentencias de 27 de febrero de 1956, 12 de mayo de 1993 y 10 de diciembre de 1993)". (Registro Judicial, septiembre de 1995, pág.135).

Por otra parte, un examen detenido del libelo y de las piezas probatorias que lo acompañan, permite inferir que la pretensión del demandante carece de asidero jurídico. Como viene visto, el licenciado Carrillo Gomila censura por inconstitucional, la resolución judicial de 29 de junio de 1999, mediante la cual se designa un defensor de oficio al sindicado Roger Suannes Stanislas y fija para el 4 de agosto de 1999, la fecha de celebración de la audiencia preliminar. Sin embargo, tal como se desprende del informe secretarial visible a foja 13, dicha resolución no surtió sus efectos, toda vez que la audiencia preliminar fijada para esa fecha se suspendió. Es así, como el Juzgado Tercero de Circuito de Colón, Ramo Penal, con sede en el Corregimiento de Cristóbal, emite otra providencia calendada 4 de agosto de 1999, que fija para el 27 de agosto de 1999, la nueva fecha de realización de la audiencia preliminar; resolución judicial que sí le fue notificada al licenciado Carrillo Gomila, tal como se deduce de foja 13 reverso. Esto demuestra que el argumento central del demandante, de que se violó el debido proceso porque "el Tribunal desconoció la defensa del imputado sin causa legal establecida" (f. 5), constituye un argumento meramente subjetivo carente de respaldo jurídico; sobre todo, cuando se lee el acta de audiencia preliminar visible a foja 20, en la cual se deja constancia que el día programado para realizar el acto oral "el licenciado Carlos Eugenio Carrillo comunicó vía telefónica que se encontraba indispuesto y que iba a enviar certificado de incapacidad vía fax; se esperó a que lo enviara, sin embargo, se cumplió la hora judicial y no se recibió". Entonces, lejos de perpetrarse un atentado contra el debido proceso legal, lo que sucedió fue que el licenciado Carrillo Gomila, sin causa justificada, dejó de asistir al acto de audiencia preliminar; situación que pretende remediar con la interposición de la presente demanda de inconstitucionalidad, lo que resulta inadmisible.

Esta Superioridad ha sostenido que "los procesos constitucionales son de naturaleza extraordinaria, y las acciones que les dan origen deben interponerse cuando los actos, de índole objetiva o subjetiva expedidos por la autoridad, vulneran de manera clara u ostensible la Constitución Política. Se actúa con temeridad cuando se recurre a las Instituciones de Garantía, no porque exista una real contradicción entre una norma fundamental y la legal o reglamentaria o el

acto acusado, sino como un medio dilatorio utilizado con la intención de entorpecer la recta administración de justicia". (Registro Judicial, agosto de 1996, pág. 132).

Por las consideraciones expuestas, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, contra la resolución judicial de 29 de junio de 1999, proferida por el Juzgado Tercero de Circuito de Colón, Ramo Penal, con sede en el Corregimiento de Cristóbal.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. NELSON CARREYO, EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD MERCEDES BAY CORPORATION, CONTRA LA RESOLUCION DE 23 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado NELSON CARREYO actuando en virtud de poder conferido por la SOCIEDAD MERCEDES BAY CORPORATION, promovió ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución de 23 de marzo de 1998 emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial.

I. EL ACTO ACUSADO

La resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, visible a fojas 1-3 del legajo contentivo del proceso constitucional, declara desierto un recurso de apelación presentado por el licenciado CARREYO contra el Auto Civil No. 107-C de 18 de abril de 1997 expedido por el Juez de Circuito De Bocas del Toro, que negaba la apertura de una sucesión intestada y ordenaba el archivo del expediente.

Según se desprende de la resolución judicial acusada de inconstitucional, al ser notificado del auto que negaba la apertura de la Sucesión, el licenciado CARREYO inmediatamente anunció y sustentó la alzada en el mismo escrito.

No obstante, y conforme a los parámetros previstos en el artículo 1122 del Código Judicial, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial como superior jerárquico encargado de conocer de la apelación, le concedió al apelante el término de tres días para sustentar la alzada y tres días para que el opositor hiciera valer sus objeciones, término que transcurrió sin que ninguna de las partes presentara escrito alguno, razón por la cual se procedió a declarar desierta la apelación, según lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 1122 ibíd.

El razonamiento esgrimido por el Tribunal Ad-quem para negarle validez y eficacia a la apelación sustentada en el acto de notificación de la resolución de primera instancia, se transcribe de seguido:

> "De la norma transcrita se difiere en sus dos últimos párrafos que solamente en casos de apelaciones interpuestas en contra de sentencias donde no se anuncian pruebas, puede sustentarse el recurso impetrado en el mismo escrito en que se anuncia, no siendo lo mismo para las impugnaciones en contra de autos civiles.
>
> En el presente caso, la disconformidad del recurrente recae sobre un auto civil, la cual debió ser sustentada dentro del término de tres días concedido por esta colegiatura y no en el mismo escrito en que anunció apelación, puesto que así lo establece el artículo anteriormente citado.
>
> Así las cosas, el tribunal concluye que al no sustentarse la alzada en debida forma, lo procedente es declarara (sic) desierto el recurso promovido en contra del Auto Civil N°107-C..." (el destacado es de la Corte)

II. NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE ADUCEN INFRINGIDAS

Señala el accionante que la resolución judicial parcialmente transcrita ut supra, es violatoria de los artículos 32, 198, y 212 numerales 1 y 2 de la Constitución Política, transgresiones que explica de la siguiente manera:

En cuanto al artículo 32 de la Constitución que recoge el principio del debido proceso legal, el postulante plantea que en el proceso de alzada surtido en el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que terminó con la declaratoria de desierto, no se cumplió el debido trámite legal toda vez que dicha resolución asevera que "por no haberse sustentado la apelación en el término establecido en el artículo 1122 debía declararse desierta". En concepto del demandante, la apelación fue promovida y sustentada en el término que establece el artículo 1122 del Código Judicial, que en su último párrafo preceptúa:

> "El apelante, si así lo desea, puede sustentar el recurso en el mismo escrito que lo promueve"

En este contexto, la parte actora sostiene que a consecuencia de la falta al debido proceso legal antes comentada, han resultado lesionados los artículos 198 y 212 numerales 1° y 2° de la Constitución Nacional, que respectivamente consagran las características que debe tener la administración de justicia: expedita, ininterrumpida y gratuita (Art. 198); que las leyes procesales que se aprueben estarán inspiradas en el principio de simplificación de trámites, economía procesal y ausencia de formalismos (Art. 212 num. 1), y que tendrán por objeto el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial (Art. 212 num.2).

Sobre el particular resalta que no se le dio expedita tramitación a la sustentación de la alzada presentada en el acto de notificación del auto apelado, sustentación que debió tenerse como buena, en seguimiento de los principios de economía procesal, y en vías de reconocer el derecho substancial del apelante a que fuese revisada en segunda instancia, la solicitud de apertura de una sucesión.

III. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

Conforme al trámite establecido para este tipo de procesos, se corrió traslado a la Procuraduría de la Administración para que emitiese criterio legal en relación a los planteamientos del impugnante.

En su Vista Fiscal No.569 de 2 de diciembre de 1999 visible a fojas 17-33 del legajo, la señora Procuradora de la Administración solicitó a esta Máxima Corporación de Justicia que se acceda a la pretensión del demandante, toda vez que en su concepto la resolución impugnada viola el debido proceso legal.

La representante del Ministerio Público arriba a tal conclusión, luego de examinar el texto del artículo 1122 del Código Judicial, interpretando que si bien la resolución dictada en primera instancia era un auto, que por tanto requería la sustentación del recurso, en cuanto al momento en que podía sustentarse dicha alzada le era perfectamente aplicable el párrafo final del artículo 1122 que señala que "el apelante puede sustentar el recurso en el mismo escrito que lo promueve".

IV. DECISION DE LA CORTE

La demanda presentada fue admitida, toda vez que cumplía con las formalidades legales previstas en el artículo 2551 del Código Judicial. No obstante, una vez cumplidas las etapas correspondientes y al avocarnos a la solución de fondo de esta iniciativa procesal, el Pleno advierte que la pretensión constitucional no puede recibir decisión de mérito, por las razones siguientes:

Consta en autos el acto jurisdiccional impugnado, expedido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial dentro de un proceso sucesorio (fs.1-3). No consta sin embargo, que el recurrente al notificarse de dicho acto, hubiese atacado la resolución judicial a través del recurso de Reconsideración, mecanismo perfectamente viable para la revisión de resoluciones de esta naturaleza, conforme lo prevé el artículo 1114 del Código Judicial, por tratarse de una resolución proveniente de un Tribunal Colegiado que contiene declaraciones nuevas no discutidas por las partes.

Al efecto debemos indicar, que jurisprudencia constitucional reiterada viene insistiendo en la imperatividad del agotamiento de los medios de impugnación, sean ordinarios o extraordinarios que la ley ha previsto para enervar actos jurisdiccionales, sea previo o con preferencia sobre la vía constitucional, tal como se colige, entre otras, de las resoluciones calendadas 16 de mayo de 1996; 22 de septiembre de 1995; 12 de mayo de 1993 y 10 de diciembre de 1993.

Para mayor ilustración reproducimos la parte pertinente de la resolución de 12 de mayo de 1993, en que la Corte resaltaba:

> "Estas razones impiden darle curso legal a la demanda presentada, toda vez que en estos procesos la Corte Suprema no actúa como Tribunal de Justicia, sino como un Organismo de Derecho Público, y como garante de la integridad de la Constitución. En este orden de ideas, el libelo no sólo debe presentarse en debida forma y en consonancia con los requisitos formales que la ley prevé, sino también debe la demanda estar dirigida contra un acto o resolución que vulnere de manera directa y flagrante nuestra Carta Magna, y constatarse el agotamiento de los medios de impugnación respectivos, antes de acudir a este máximo Tribunal de Justicia". (Subrayado es nuestro).

Como se desprende de lo transcrito, cualquier medio de impugnación eficaz para impedir la ejecución o anular el acto acusado debe ser utilizado con prioridad o preferencia a la acción de inconstitucionalidad, puesto que ésta sólo debe interponerse contra actos ejecutoriados, definitivos, y que no puedan impugnarse por otros medios (principio de definitividad o subsidiaridad), y no en los casos en que existiendo las vías procesales idóneas, comunes o especiales, el afectado obvie su utilización.

De otra parte advertimos, que el proceso sucesorio iniciado por el licenciado CARREYO es un proceso no contencioso, por lo que nada imposibilita que sea nuevamente presentada la solicitud de apertura de la sucesión intestada, toda vez que en estos procesos no se produce res iudicata. Ello pone de manifiesto, que el acto que estaba acusado de inconstitucional tampoco entrañaba la extincióno afectación de la pretensión substancial de fondo del interesado, o causa de pedir de la empresa MERCEDES BAY CORPORATION.

Lo expuesto nos conduce a negarle viabilidad a la acción interpuesta, al constatarse que no cumple a cabalidad con los presupuestos que esta Superioridad viene exigiendo en materia de control constitucional.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de inconstitucionalidad presentada por el licenciado NELSON CARREYO contra la Resolución de 23 de marzo de 1998 emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial.

Notifiquese y Publiquese en la Gaceta Oficial

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ R. (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO CARLOS E,. CARRILLO GOMILA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 25 DE AGOSTO DE 1997, PROFERIDA POR EL JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SALOMÓN HOMSANY ABADI. MAGISTRADO PONENTE: CESAR PEREIRA BURGOS. CONTRAPROYECTO: MAG. ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila contra la resolución de 25 de agosto de 1997 proferida por el Juzgado Cuarto de Circuito Penal dentro del proceso seguido a Salomón Homsany Abadi y otros, por considerarla violatoria de los artículos 22 y 32 de la Norma Fundamental.

HECHOS DE LA DEMANDA

De conformidad con lo que sostiene el demandante, el 9 de julio de 1997, el Juzgado Cuarto de Circuito Penal del Primer CircuIto Judicial de Panamá resolvió expedir el reglamento aplicable a la audiencia seguida contra Rafael Arosemena Alvarado, Marcela Homsany Abadi, Ezra Homsany Abadi y Salomón Homsany Abadi, por el delito genérico de Peculado.

Con fundamento en el precitado reglamento de audiencia, el 25 de agosto de 1997, el juzgador asignó defensores de oficio dentro del proceso penal seguido a Salomón Homsany Abadi desatendiendo el hecho que los imputados habían designado abogados particulares para llevar a cabo su representación (vid. f. 5).

Según afirma el recurrente, la resolución en cuestión no fue debidamente notificada a la defensa técnica de los sindicados, ya que se expidió un informe secretarial al que se le otorgó igual valor que a una notificación, vulnerando así el debido proceso legal (f. 9).

Agrega el actor que "... aplicando un sistema de notificación diferente a los señalados por nuestras normas vigentes, se constituyeron nuevos apoderados, infringiendo de esta forma las garantías constitucionales de los encartados al limitarle el derecho de nombrar a su propio defensor ..." (f. 10).

LA RESOLUCION CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE DEMANDA

La resolución atacada se encuentra visible a foja 12, 711 del Tomo XXVI de los antecedentes, y es del tenor siguiente:

"JUZGADO CUARTO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. Panamá, Veinticinco (25) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).

Toda vez, que según consta en informes secretariales y escritos presentados por la defensa de los procesados, que la audiencia dentro del proceso seguido a SALOMON HOMSANY ABADI, EZRA HOMSANY ABADI, MARCELA HOMSANY ABADI Y RAFAEL AROSEMENA ALVARADO, se reanudaría hoy veinticinco (25) de agosto de 1997 a las (9:00) de la mañana; además de estar notificados del reglamento de audiencias que establece que el Instituto de Defensoría de Oficios (sic) mantendrá a disposición del Tribunal a dos (2) defensores de oficios (sic) y en vista de que los defensores particulares, LCDO. RUBEN MONCADA LUNA, LICDO. RAFAEL RODRIGUEZ, LCDO. SIDNEY SITTON y el DR. RENATO PEREIRA, no se han presentado para reanudar la audiencia, es por lo que se DISPONE designar a la LCDA. CARMEN LUISA DE STAGNARO como Defensora de Oficio de Rafael Arosemena Alvardo, y a la (sic) LCDO. DANILO MONTENEGRO como Defensor de Oficio de Salomón Homsany Abadi, Ezra Homsany Abadi, Marcela Homsany Abadi; ambos miembros de la Defensoría de Oficio, para que continúen con la representación de los procesados. (Subraya la Corte).

Los defensores particulares designados por los procesados pueden asumir la defensa en cualquier etapa procesal.

Concurra (sic) los distinguidos profesionales del derecho a jurar el cargo y a cumplirlo bien. Cúmplase.

EL JUEZ:

LCDO. SILVERIO RODRIGUEZ H.,

LCDO. JOSE A. OSORIO C.,
SECRETARIO".

DISPOSICIONES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCION

Como viene visto, el demandante estima como infringido los artículos 22 y 32 del Estatuto Supremo.

El mencionado artículo 32 de la Constitución señala:

"Nadie podrá ser juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria".

El artículo 22 es del tenor siguiente:

"Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.

Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales. La ley reglamentará esta materia".

OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 2554 del Código Judicial, la demanda fue corrida en traslado al Ministerio Público, correspondiéndole a la Procuradora General de la Nación Encargada emitir concepto; deber que cumplió mediante Vista Fiscal N° 1 de 12 de febrero de 1999, visible a fojas 20 a 39 del expediente.

La representante del Ministerio Público no comparte la pretensión del demandante, ya que considera que el acto atacado no desconoce el derecho de defensa de las partes ni mucho menos infringe el debido proceso legal.

Sostiene que, a su criterio, "... los abogados particulares, alejándose e incumpliendo con los deberes inherentes al cargo aceptado y jurado, dejaron de participar en el proceso sin ninguna excusa legal, a pesar de habérsele permitido incorporarse al proceso en cualquiera de sus etapas ..." (f. 38).

Manifiesta finalmente que, en su opinión, "... las partes fueron debidamente notificadas de la celebración de la audiencia, del reglamento de audiencia y que se les garantizó el derecho de defensa a los procesados con el nombramiento de los defensores de oficio ..." (f. 39), por lo que solicita se deniegue la petición contenida en la demanda de inconstitucionalidad.

ALEGATOS ESCRITOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2555 del Código Judicial, una vez devuelto el expediente por la Procuraduría General de la Nación se fijó en lista el negocio por el término de 10 días, contados a partir de la última publicación del edicto correspondiente en un diario de circulación nacional, para que todos los interesados presentaran argumentos por escrito.

Dentro del término de ley, hicieron uso de tal derecho además del demandante, los licenciados Tomás A. Cruz, Jaime Choy García, Ricardo Lezcano y José Gabriel Cachafeiro, quienes coinciden en solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de la resolución atacada.

Los letrados manifiestan que la resolución impugnada, al designar defensores de oficio frente a la incapacidad de los defensores técnicos, vulnera el artículo 22 de la Constitución, que consagra el derecho de los imputados a ser representados por el profesional de su predilección, dejándolo en estado de indefensión (Cfr. fs. 48, 51).

Por otro lado, estiman que al dar cumplimiento a lo dispuesto por la citada resolución, sin que se notificara a ninguno de los defensores técnicos y al darle a un informe secretarial el valor de una notificación se infringe el procedimiento de notificaciones establecido en el Código Judicial, vulnerando así el artículo 32 de la Constitución, el artículo 2d de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14, apéndice 3d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Nacionales Unidas (f. 53).

DECISION DE LA CORTE

Una vez expuestos los planteamientos que preceden, corresponde a esta Corporación entrar al análisis de los cargos de inconstitucionalidad formulados, actividad ésta que pasa a cumplir seguidamente.

El Pleno de la Corte ha examinado cuidadosamente el mérito de todos y cada uno de los señalamientos invocados por el proponente de la acción de inconstitucionalidad, y luego de este ponderado análisis ha llegado a la conclusión de que la Resolución Judicial atacada reúne las exigencias necesarias para considerarla en conformidad con la Constitución Nacional.

Las razones que sustentan la conclusión antes expresada, comprenden motivos

de carácter procesal y sustantivo, que deben ser expuestos en forma separada, como se proceden a detallar a continuación:

I. RAZONES DE CARACTER PROCESAL

El estudio de la demanda de inconstitucionalidad que dió origen al presente proceso, ha dado como resultado la ubicación de un conjunto de motivos de naturaleza procesal que impiden el reconocimiento de la pretensión ejercitada por el demandante. Estos motivos de carácter procesal son, a juicio de la Corte, los siguientes:

a. Medio de impugnación inidóneo:

El proponente de esta acción de inconstitucionalidad está invocando inconformidades con una medida de trámite adoptada dentro de un proceso penal, que, en opinión del afectado, supone la violación de la garantía constitucional del debido proceso. En relación con esto, la Corte estima necesario advertir que los presuntivos agravios que se plantean son propios de un amparo de garantías constitucionales y no de una demanda de inconstitucionalidad.

Sobre el particular, el Pleno de esta Corporación ha establecido de manera reiterada que "...el proceso de constitucionalidad no tiene como objetivo el ser una instancia revisora última de las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales, entre otras, toda vez que es un proceso encaminado a mantener la supremacía de la Constitución (...) no es, ha dicho este Pleno, la vía idónea para, a modo de un mecanismo de impugnación dentro del proceso de que se trate, discutir los errores de valoración de los Tribunales, ni para corregir una interpretación defectuosa de la ley, caso de haberse producido (Vgr. Sentencia de 21 de diciembre de 1998, Pleno CSJ)".

En el caso bajo examen el actor pretende que el Pleno a través de una demanda de inconstitucionalidad enjuicie la juridicidad de una medida adoptada en el curso del proceso penal con la finalidad de que se reanudara el día 25 de agosto de 1997 la audiencia que se venía celebrando dos días antes, esto es, el día 23 del mismo mes y año (Veáse foja 12).

De la explicación que expone el recurrente, se deduce claramente que, la controversia que pretende suscitar, representa una discusión meramente legalista de carácter particular y concreto que tendría su escenario idóneo en el marco de un amparo de garantías y no en una demanda de inconstitucionalidad como la que nos ocupa.

b. Ausencia de soporte probatorio en las afirmaciones deldemandante:

Otro elemento que resulta importante destacar en el presente caso consiste en que las afirmaciones cardinales sobre las que descansa la petición de inconstitucionalidad carecen de respaldo probatorio en el expediente. En este sentido, el promotor de la acción planteó en su demanda los siguientes señalamientos específicos:

1) Que el Juzgado de la causa supuestamente no emitió providencia alguna para señalar el día de la reanudación de la audiencia el 25 de agosto de 1997; y

2) Que presuntamente no se notificó a los defensores la Resolución que fijaba la fecha de reanudación de la mencionada audiencia (Veáse foja 9 del expediente).

Las dos afirmaciones que se dejan transcritas no tienen ningún sustento probatorio pues el demandante no acompañó prueba que las acredite, amén de que de las constancias de autos emerge una realidad exactamente contraria a la que señala el demandante. El Pleno ha establecido en numerosos precedentes que en los procesos de constitucionalidad la prueba debe estar preconstituída, significando

con ello que quien demanda tiene la carga de aportar el apoyo probatorio de sus aseveraciones. (Cfr. Sentencia de 4 de julio de 1994, Sentencia de 21 de diciembre de 1998, Pleno CSJ)

Esta Corporación conceptúa que, aún en el plano de la legalidad, la tesis de la supuesta falta de notificación de la reanudación de la audiencia carece de apoyo puesto que según el artículo 2304 del Código Judicial las comunicaciones que haga el Juez a las partes "durante la audiencia tienen el valor de notificación personal" por lo que no se necesitaba expedir una Resolución sobre la reanudación. En este expediente la Procuraduría General de la Nación al emitir su Vista destacó que la audiencia se inició el día 18 de agosto, y continuó durante toda la semana hasta el 22 de agosto, quedando su continuación para el lunes 25 de agosto de 1997 (Veáse foja 34 del expediente). Ello revela que si el 25 de agosto sólo tenía que continuarse una audiencia que venía desarrollándose desde hace varios días antes con la participación de los defensores, no era necesario dictar una Resolución y notificarla para su continuación ya que ellos conocían de tal circunstancia. Es más, los informes secretariales que militan a foja 1, 2, 3 y 4 de este expediente ponen de manifiesto que los defensores se comunicaron telefónicamente con el Tribunal y estaban enterados de que la audiencia se reanudaría ese 25 de agosto de 1997 a las 9:00 a. m. A manera de ejemplo conviene transcribir algunos de los mencionados informes secretariales:

-"Señor Juez:

Hago de su conocimiento que siendo las 8:50 de la mañana del día de hoy (25) de agosto de 1997, se comunicó a este despacho el Licdo. Sitton Ureta y se le informó que la audiencia se reanuda a las (9:00) de la mañana". (Cfr. foja 3)

-"Señor Juez:

Hago de su conocimiento que siendo las 8:45 de la mañana del día de hoy veinticinco (25) de agosto de 1997, se comunicó a este despacho el Dr. Renato Pereira, defensor de Rafael Arosemena y se le informó que la audiencia se reanudaría a las nueve (9:00) de la mañana del día de hoy". (Cfr. foja 2).

Del análisis expresado esta alta Corporación Judicial estima que existen un conjunto de razones de carácter estrictamente procesal que por sí solas cierran toda posibilidad de éxito a la pretensión de inconstitucionalidad ensayada.

II. INEXISTENCIA DE LAS VIOLACIONES ALEGADAS:

En adición a las razones procesales expuestas con anterioridad, el Pleno considera que una somera apreciación de los hechos que rodean la cuestión controvertida, pone de manifiesto lo siguiente:

a) La medida atacada no representó una sustitución arbitraria de la defensa técnica de los imputados, porque los defensores estaban ejerciendo su papel en los actos procesales anteriores a la continuación de la audiencia iniciada desde el 18 de agosto de 1997, además de que consta en autos el conocimiento de éstos de que la audiencia se reanudaría el 25 de agosto de ese año.

b) El expediente, por la circunstancia arriba señalada, no indica que el Tribunal de la causa le estuviera privando al imputado Salomon Homsany Abadi su derecho a escoger su defensor, ya que este último estaba enterado de la reanudación de la audiencia y bien pudo hacerse presente en la misma para evitar que su defendido quedara representado por un Defensor de Oficio, posibilidad ésta que se contempló expresamente en la Resolución Judicial impugnada cuando se específico que "los Defensores Particulares designados por los procesados pueden asumir la defensa en cualquier etapa procesal" (Cfr. foja 5 del expediente).

La Corte conceptúa en este contexto que no puede soslayarse el hecho que la medida adoptada por el Tribunal de la causa estuvo dirigida a evitar la inte-

rrupción de una audiencia que, según la Ley, una vez iniciada debe continuar "durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su conclusión" (Artículo 2268 C.J.). Resulta igualmente interesante destacar la observación que hace a foja 34 el Procurador General de la Nación en relación con este caso: "La audiencia ordinaria fue programada,luego de seis intentos de celebración infructuosa, ante las multiples excusas presentadas por los abogados particulares y su no comparecencia, para el día 18 de agosto de 1997. Todas las partes fueron notificadas tanto de la providencia que señalaba la fecha de la audiencia como de la Resolución que aprobaba el Reglamento de audiencia".

En ese escenario todo parece indicar que la medida atacada simplemente evitaba la interrupción de un acto de seguimiento de un trámite procesal ya iniciado con participación de los defensores, y que por una llamativa ausencia de todos ellos, iba a dar como resultado la dilación de este delicado proceso en el que se persigue determinar la posible responsabilidad penal de los imputados en una serie de hechos que aparentemente afectaron el patrimonio del Banco Nacional de Panamá por varios millones de balboas.

En definitiva, la Corte, luego de un ponderado y prolijo examen de la cuestión controvertida, arriba a la conclusión de que en el presente caso existen un elenco de motivos de carácter procesal y sustantivo que obligan a desestimar la pretendida inconstitucionalidad de la Resolución de fecha 25 de agosto de 1997 proferida por el Juzgado Cuarto del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

En mérito de los razonamientos que anteceden, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la Resolución de 25 de agosto de 1997, dictada por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso penal seguido a SALOMON HOMSANY ABADI, EZRA HOMSANY ABADI, MARCELA HOMSANY ABADI y RAFAEL AROSEMENA ALVARADO.

Notifiquese y Publiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) JORGE FEDERICO LEE
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) JOSE A. TROYANO
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO
DE LOS MAGISTRADOS CESAR PEREIRA BURGOS Y JOSE A. TROYANO.

La mayoría de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, han decidido rechazar la acción de inconstitucionalidad formulada, por el letrado Carlos Carrillo Gomila, contra la resolución de 25 de agosto de 1997, emitida por el Juzgado Cuarto de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso seguido a Salomón Homsany y otros, por el supuesto delito de peculado.

El meollo del problema, consiste en dilucidar si procedía aplicar un Reglamento de Audiencia expedido por el Juez de la causa, según el cual se establecieron parámetros procesales previstos por la Ley y, en consecuencia, determinar si la reanudación de la audiencia suspendida el 23 de junio de 1997 y reanudada el 25 del mismo mes, siguió los fundamentos legales, porque el nombramiento ex oficio de los defensores de los imputados, quienes ya tenían letrados escogidos por ellos, fue la consecuencia de ese Reglamento.

El Reglamento de audiencia mencionado, fue emitido por el tribunal de primera instancia para este caso específico, ignorando uno de los principios

generales del Derecho, según los cuales es necesario y conveniente que las normas legales de los procesos sean generales e iguales en todos los casos. La convicción de que allí reside uno de los puntos claves del debido proceso contemplado por la Constitución Nacional, es una de las razones que explican este salvamento.

Con fundamento en el Reglamento mencionado, el juzgador asignó defensores de oficio, desatendiendo el hecho que los imputados habían nombrado abogados particulares, para que llevaran su representación, en uso de los derechos que reconoce la Constitución Nacional (Cfr. folio 5). Según afirma el recurrente, la resolución no fue debidamente notificada a la defensa técnica de los sindicados, porque se otorgó a un informe secretarial, igual valor que una notificación según la Ley, vulnerando así el debido proceso (f. 9). Asimismo, agrega el actor que "aplicando un sistema de notificación diferentes a los señalados por nuestras normas vigentes, se constituyeron nuevos apoderados, infringiéndose de esta forma las garantías constitucionales de los encartados, al limitarse el derecho de utilizar los servicios de sus propios defensores" (f. 10).

El artículo 32 de la Constitución Nacional señala que:

> "Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria".

Por otro lado, el artículo 22 de la misma excerta legal, es del tenor siguiente:

> "Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.
>
> Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento,a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales. La ley reglamentará esta materia".

La lectura de las constancias procesales y el análisis de la normativa aplicable al caso, nos lleva a considerar que la resolución sometida a control constitucional, desconoce el derecho de defensa de los imputados.

En particular y por cuanto se refiere al artículo 22 de la Constitución, se desconoce el derecho del imputado a ser juzgado "en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas, para su defensa y se vulnera el derecho a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales", escogido libremente por él. Contrariamente a lo expuesto por el Ministerio Público en la Vista Fiscal, el contenido de derecho a la defensa no se agota asignando al imputado un abogado para que lo asista en las diligencias procesales, sino que comprende, sobre todo, el derecho del imputado a escoger libremente el profesional que lo representará, permitiéndose únicamente el nombramiento de abogados de oficio, en los casos previstos por la Ley (Cfr. Artículo 2043 y siguientes del Código Judicial).

Sobre este particular, se ha pronunciado esta Corporación, cuando expresó:

> "... Forma, desde luego, parte de la garantía que ocupa al Pleno, el derecho a ser asistido y defendido por letrado de su elección y si careciese de medios económicos para atender el costo de los servicios brindados, a que el Estado le designe defensor de oficio, de tal suerte que le esté asegurado, en todo momento, la asistencia profesional que le defienda de los cargos que le formula la acusación..." (Sentencia de 15 de abril de 1999. El destacado es de la

Corte).

De igual modo, se requiere para la realización del derecho de defensa, que el abogado designado se encuentre en condiciones de realizar una defensa real y efectiva de los derechos de su representado. En este sentido la Corte ha adoptado la opinión del tratadista colombiano Alberto Suárez Sánchez, quien expresa:

> "... El derecho de defensa penal en un Estado democrático es el que corresponde a todo imputado, como sujeto procesal y titular de derechos fundamentales constitucionales, mediante la asistencia técnica de un abogado defensor, con capacidad para oponerse efectivamente a la pretensión penal..."(vid. Sentencia de 15 de abril de 1999).

En el caso bajo examen, no parece haberse concedido a los imputados la garantía de una defensa letrada efectiva, toda vez que se trata de un proceso cuyos antecedentes ocupan 28 tomos y superan los 14 mil folios, de modo que era imposible para los defensores de oficio designados, preparar instantánea y adecuadamente, la defensa de los imputados.

Es importante recordar que, mediante fallos del Pleno fechados el 8 de noviembre de 1990 y 19 de marzo de 1991, se integró el artículo 8 de la Convención Americana de Derecho Humanos al bloque de constitucionalidad. Tal cual expresa el doctor Arturo Hoyos dicha norma forma parte del artículo 32 de la Constitución Nacional, extendiendo la protección procesal a otros aspectos no provistos por éste (Cfr. Hoyos Arturo "El Debido Proceso" Editorial Temis" Bogotá 1998, página 91).

El referido artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos expresa en su numeral 2, literales c y d:

> "...Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
> ...
> c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios para la preparación de su defensa;
> ...
> d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
> ..."

Según las constancias procesales, se infiere que, al proferir la resolución de 25 de agosto de 1997, el Juzgador desconoció a los imputados el derecho a las garantías establecidas en la excerta citada, lo cual significa violación del artículo 32 de la Constitución Nacional.

Observamos con preocupación, que el Juzgador fundamentó el nombramiento de defensores de oficio en un reglamento de audiencias proferido por él mismo el 9 de julio de 1997, visible a foja 12,684 de los antecedentes (Cfr. f. 12,711), establecido en su numeral 5 que dice:

> "... Para evitar la posposición de la audiencia el Presidente de la audiencia mantendrá a disposición del Tribunal no menos de dos (2) abogados del Instituto de Defensoría de Oficio, a fin de reemplazar a cualquier defensor de los imputados que para cualquier razón no concurra a la audiencia entonces el defensor de oficio asumirá la representación del imputado ejecutando como una medida de garantizar sus derechos y la vista oral continuará ..." (Antecedentes, f. 12,685).

Profundiza nuestra preocupación, que se amplíe esta costumbre, con base en un fallo de esta alta Corporación, como parecen indicarlo otros pronunciamientos judiciales, entre los cuales citamos una resolución dictada por el Juez Noveno del Circuito de Panamá, a pesar del certificado presentado por el abogado Miguel Antonio Bernal y la inclusión en el proyecto de reformas judiciales, actualmente en estudio de otra norma se mantiene el mismo criterio.

En cuanto a la fuerza de las medidas constitucionales de protección a los procesados, nos parece importante señalar que no deben ser alegadas en tiempo limitado, ya que el Juez de la causa debe advertirlas en cualquier momento y los afectados tienen el derecho a aducirlas en cualquier tiempo. Se trata en este caso preciso, de un criterio que pone los derechos del imputado por encima de las consideraciones de celeridad en los juicios, toda vez que de nada serviría una justicia aparentemente rápida, si desconoce los derechos humanos contemplados en la Constitución.

Comprendemos la preocupación por la utilización extrema de argucias para impedir la fluidez del juicio, pero la responsabilidad no puede recaer sobre los imputados, sino sobre los letrados, de manera que, la Ley deberá fortalecer las sanciones contra los letrados que jueguen con la recta aplicación de la justicia.

Por las consideraciones anteriores, respetuosamente, salvamos el voto.

Panamá, veinte (20) de julio de 2000.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. RICARDO LANDERO EN REPRESENTACION DEL H. L OLMEDO GUILLEN CONTRA EL ARTICULO 30 DE LA LEY N 28 DEL 20 DE JUNIO DE 1995 "POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA UNIVERSALIZACION DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LA PRODUCCION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Ricardo Landero presentó ante el Pleno de la Corte Suprema, en nombre y representación del Honorable Legislador OLMEDO GUILLÉN, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 de la Ley N° 28 de 20 de junio de 1995, "POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LA PRODUCCION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", publicada en la Gaceta Oficial N° 22.810 de junio de 1995, por violar los artículos 160, 153 numeral 17 y 18, de la Constitución Nacional.

De los hechos que fundan la demanda, resaltan que casi al finalizar la sesión del día 5 de junio de 1995, atinente al segundo debate, el entonces Secretario General de la Asamblea Legislativa, Licdo. Erasmo Pinilla C., leyó una propuesta de los H. L. Carlos Alvarado, César Sanjur, Bernabé Pérez y Jorge Díaz, para fusionar los artículos 22 y 24 del Proyecto de Ley N° 62 -que devino en el artículo 30 la Ley 28 de 1995-; dicha propuesta estaba respaldada por el H. L. Olmedo Guillén, pero que la H. L. Balbina Herrera Araúz lo declaró "fuera de orden", y afirmó que ".. es exclusivamente, un artículo que se plantea de las derogaciones".

Que la H. L. Balbina Herrera Araúz sometió la propuesta a votación, siendo aprobada por 42 votos a favor, y 12 en contra, y adoptándose con dicha fusión, -de los artículos 22 y 24- un nuevo artículo al proyecto de ley original.

Que el poderdante de esta demanda solicitó la discusión del nuevo artículo, pero que la Presidenta de la Asamblea, Ing. Balbina Herrera lo declaró "fuera de orden", pese a que el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa le otorga la potestad de pedir discusión, ni se le permitió presentar su defensa, a consecuencia del llamamiento al orden que hizo la Legisladora Herrera. Dicho artículo fue aprobado en segundo debate, pese a la protesta del H. L. Guillén, y de violaciones -según él- al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

Que el Proyecto de Ley N° 62 fue aprobado en tercer debate el 13 de junio de 1995, convirtiéndose en la Ley N° 28 de 20 de junio de 1995, tras ser sancionada por el Órgano Ejecutivo, y publicada en la Gaceta Oficial N° 22.810 del jueves 22 de junio de 1995.

En cuanto a las normas constitucionales que estimó infringidas, así como el concepto de la infracción, consideró el Licdo. Ricardo Landero que el artículo 160 de la Constitución Nacional -establece que ningún proyecto será Ley de la República si no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa en tres debates en días distintos, y sancionado por el Órgano Ejecutivo en la forma dispuesta por la Constitución- fue violado por el artículo 30 de la ley en comento, por cuanto el proyecto de ley N° 62 no fue aprobado en segundo debate conforme al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, y que según el numeral 17 de su artículo 153, compete a esa Institución dictar su régimen interno.

Señala el actor en su hipótesis, que esta Colegiatura ha sostenido que el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa integra el "bloque de la constitucionalidad", según dejó expuesto en sentencia de 16 de octubre de 1991, en la que señaló que si una ley es aprobada por la Asamblea en violación del procedimiento que prevé ese reglamento, la misma puede ser declarada inconstitucional, por el vicio de forma.

Por lo tanto, a juicio del demandante, el artículo 160 constitucional fue violado porque no se siguió el procedimiento para la aprobación de leyes, previsto en varios artículos del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, en segundo debate.

Para demostrarlo, citó el actor los artículos 112, 117, 143 y 144 de la Ley N° 49 de 4 de diciembre de 1984, reformado por la Ley N° 7 de 27 de mayo de 1992.

El artículo 112 -los proyectos que contengan artículos reformatorios, aditivos o derogatorios de otras leyes, o que el proyecto tuviera esa finalidad, deberá contener un artículo final que lo señale expresamente, así como las normas que se modifican, subrogan, reforman o adicionan-, es un artículo "meramente formal" por lo que, si en un proyecto de ley no existe un artículo en el que expresamente se derogue una ley, mal puede dicho artículo hacer referencia a esa derogatoria.

Considera también el actor que la técnica legislativa de fusionar 2 artículos que contengan disposiciones de reforma, modificación subrogación o adición es procedente, pero que no lo es la negativa de la Presidenta de la Asamblea, de discutir ese nuevo artículo que los fusionó.

El procedimiento correcto era proponer el artículo, discutirlo y proponerlo a votación.

Conceptuó el H. L. Guillén -a través de su apoderado legal- que el artículo presuntamente transgresor hay que contemplarlo en conjunto con otras normas atinentes, de la ley a la que pertenece.

En ese sentido, los artículos 117 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa -ninguna proposición podrá ser sometida a votación sin que se haya discutido previamente-, el artículo 143 -propuesta una modificación, el Secretario la leerá y el Presidente la someterá a discusión-, y el artículo 144

-si nadie toma la palabra respecto a la modificación propuesta, el Presidente cerrará la discusión previo anuncio, y la someterá a votación-, se complementan para establecer cuatro -4- etapas de debate, siendo ellas, la presentación de la proposición, su lectura por el Secretario, su discusión y la votación; todo ello -según el actor- con la intención de garantizar un procedimiento "transparente" de y de cara al pueblo, en la formación de las leyes.

También se violó -a juicio del demandante- el párrafo 1° del artículo 162 del Reglamento Interno -en la discusión de cada tema los legisladores tendrán término de treinta minutos para cada intervención, con la única limitación de mantenerse en el tema en discusión, y guardando el orden y respeto a los colegas- fue infringido, pues al no permitirse la discusión, ni el proponente de este negocio ni ningún otro Legislador pudo hacer uso de la palabra por el establecido término de treinta -30- minutos, ni pudo utilizar los tres -3- minutos de derecho a réplica -según lo norma el artículo 174- por haber sido declarado fuera de orden al pedir la discusión de la fusión de los artículos 22 y 24 del Proyecto en comento, infringiendo con todo esto, el principio del debido proceso.

En otro sentido, considera el H. L. Guillén que también se violó el artículo 18 de la Constitución -responsabilidad de los particulares ante la autoridad por infracción de la Constitución y la Ley, y de los servidores públicos por esas causas, y por abuso u omisión de sus funciones- al omitir normas en el ejercicio de sus funciones al no permitirse la discusión del artículo 30 de la Ley N° 28 de 1995, según lo dispone el Reglamente Interno.

Admitida la demanda, se corrió traslado al Ministerio Público por el término de diez -10- días, correspondiéndole el turno para conocer el caso al Procurador General de la Nación, quien vertió su opinión mediante la Vista N° 40 de 26 de septiembre de 1995.

Inició su exposición el Procurador, haciendo algunos comentarios en torno a la doctrina del bloque constitucional.

Hizo alusión al fallo de 16 de octubre de 1991, mediante el cual, el Pleno incluyó ciertas normas del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, como integrantes del bloque constitucional, así como el extracto de un señalamiento que sobre el particular, realizó el Magistrado Arturo Hoyos, en su obra "La Interpretación Constitucional".

En cuanto a la presunta infracción del articulo 160 constitucional, el Jefe del Ministerio Público dijo discrepar del criterio del accionante constitucional, porque el artículo 30 de la Ley N° 28 de 1995 responde a un mandato expreso que contiene el Reglamento Interno de la Asamblea, "y no admite discusión", y que está contenido en el artículo 112 de dicho Reglamentación; la misma consiste en que todo proyecto de ley que contenga artículos que reformen, subroguen, adicionen o deroguen otra u otras leyes, debe contener un artículo final que así lo indique, y que "Este imperativo no admite discusión".

En cuanto a la supuesta violación del artículo 18 de la Carta Fundamental, consideró el Opinador que la Corte ha sostenido que esta norma no puede ser objeto de violación, dada su naturaleza programática y declarativa, por no contener derechos o garantías individuales o sociales susceptibles de ser violadas.

Por ello, concluyó el representante del Ministerio Público que el artículo 30 de la Ley N° 28 de 1995, no conculca los artículos 160, ni el 18, ni ningún otro de la Constitución Nacional.

Según el entender del Funcionario, la norma tampoco violó el numeral 17 del artículo 153 constitucional, cuyo análisis soslayó.

Devuelto el expediente, se fijó en lista por el término de diez -10- días contados a partir de la última publicación de los Edictos, para que los

interesados presentaran sus argumentos sobre el mismo, término que no fue aprovechado.

Por lo tanto, agotadas las formalidades legales establecidas en el desarrollo de este proceso constitucional, se avoca el Pleno a decidir el fondo de la impugnación, no sin antes verter las siguientes consideraciones.

De todo lo expuesto por el demandante constitucional, la esencia de la impugnación estriba en el incumplimiento de las normas que, sobre el segundo debate para la formación de las leyes, establece el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, atinente a la aprobación del artículo 30 de la Ley N° 28 de 20 de junio de 1995.

Dicho acto involucra la presunta infracción de los artículos 160 -aprobación de las leyes en tres debates-, 153 numeral 17 -función de la Asamblea Legislativa de dictar el Reglamento Orgánico de su régimen interno-, y el 18 -responsabilidad de los funcionarios públicos ante la autoridad por infracción de la Constitución o de la Ley, y por extralimitación en sus funciones u omisión en las mismas- de la Carta Fundamental.

Pero además, consideró el actor que en virtud de la doctrina del bloque constitucional establecida por el Pleno de la Corte -conjunto de normas con jerarquía constitucional que emplea la Corte Suprema para emitir juicio sobre la constitucionalidad de leyes y actos sujetos a control judicial de la Corte-, las normas del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, en lo atinente a la función legislativa, constituyen parte integrante del bloque constitucional, según lo expuso el Pleno en la sentencia de 16 de octubre de 1991, que resolvió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el H. L. Leo González contra la Asamblea Legislativa.

Dicha sentencia declaró que si una ley es aprobada por la Asamblea Legislativa en violación del procedimiento previsto en ese Reglamento, dicha excerta puede ser declarada inconstitucional por el vicio de forma que presenta la ley así aprobada.

En este orden de cosas, el impugnante también consideró infringidos los artículos 112, 117, 143 y 144 de la Ley N° 49 de 4 de diciembre de 1984, reformada por la Ley N° 7 de 27 de mayo de 1992.

En primer lugar, y para lograr un mejor desarrollo del análisis a efectuar, estudiaremos la presunta violación del artículo 153, numeral 17 de la Constitución.

Esta norma -que sólo fue invocada por el demandante y no fue examinada por el Procurador- es del siguiente tenor:

> "ARTICULO 153: La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Legislativa y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
> .....
> 17. Dictar el Reglamento Orgánico de su régimen interno." (Subraya de la Corte)

La norma transcrita revela con claridad meridiana como una de las funciones de la Asamblea, reglamentar su régimen interno, que incluye el procedimiento de formación de leyes.

No es susceptible de violación esta norma, toda vez que, lo que se debate en este negocio es el incumplimiento del procedimiento ya establecido para la formación -en este caso- del artículo 30 la Ley N° 28 de 1995, y no la dictación o establecimiento de su régimen interno, a través del Reglamento Orgánico de la

misma, que es la facultad que establece la norma.

Es decir, la violación denunciada no se refiere a ningún impedimento o irregularidad en el establecimiento del Reglamento Orgánico que rige el régimen interno de la Asamblea sino que dicho régimen está establecido y en uso desde 1984, incluidas las reformas sufridas en 1997.

Por lo tanto, no prospera la pretensión del actor, en cuanto a la violación de esta norma.

En otro orden de cosas, la presunta violación del artículo 18 Constitucional -responsabilidad de los particulares por infracción de la Constitución y la Ley, y de los funcionarios públicos por lo mismo y por incumplimiento o extralimitación en sus funciones- por parte del artículo impugnado, no es susceptible de ser infringido, toda vez que la vasta jurisprudencia de esta Colegiatura ha establecido y sostenido que esta norma es de naturaleza programática, porque expone un principio general y no contiene derechos subjetivos susceptibles de ser transgredidos.

Además, la norma no ha sido relacionada con otra del mismo rango, que sí contenga ese tipo de derecho; por lo tanto, no prospera la pretensión.

En cuanto a la violación del artículo 160 de la Constitución, es necesario transcribir la norma, cuyo tenor es el siguiente:

> "ARTICULO 160: Ningún proyecto será Ley de la República si no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa en tres debates, en días distintos y sancionado por el Ejecutivo en la forma que dispone esta Constitución.
>
> Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se le da en la Comisión de que trata el artículo anterior.
>
> Un proyecto de Ley puede pasar a segundo debate cuando la mayoría de la Asamblea Legislativa, a solicitud de uno de sus miembros, revocare el dictamen de la Comisión y diere su aprobación al proyecto". (Subraya de la Corte).

Esta norma constitucional, que establece los tres debates para la expedición de las leyes, constituye la premisa principal del análisis; consideró el H. L. GUILLÉN que no se cumplió con el procedimiento establecido para el segundo debate de dicha norma, incumpliéndose en consecuencia, el segundo de los tres debates establecidos por el artículo 160.

Empero, considera esta Colegiatura que no le asiste la razón al demandante, porque lo que el artículo 160 Constitucional exige, es que todas las leyes formales tienen que haber sido aprobadas en tres debates, y la ley de marras fue aprobada en 3 debates; ello es independiente de cómo se aprobaron los debates, que es lo que impugna el H. L. GUILLÉN.

Para fundar la violación del artículo 160, el actor invocó el artículo 112 del citado reglamento, que a la letra dice:

> "Artículo 112: Cuando el proyecto presentado contuviere artículos reformatorios subrogatorios, aditivos, o derogatorios de alguna otra ley o leyes, o el mismo proyecto en general tuviere tal objeto, deberá contener un artículo final en que tal cosa se indique, con expresión clara de las disposiciones que se modifican, subrogan, reforman o adicionan".

Consideró el H. L. GUILLÉN que la técnica legislativa de fusionar dos artículos con el mismo contenido de reforma, modificación, subrogación o adición es procedente, cosa que no ocurre con la negativa por parte de la H. L.

Presidenta de la Asamblea, de discutir dicha fusión -de los artículos 22 y 24 del proyecto en el 30 de la ley-, lo que constituye la esencia de la impugnación.

La lectura del artículo 112 del Reglamento transcrito, revela -a juicio del Pleno- que los proyectos de ley que contengan artículos reformatorios, subrogatorios, aditivos o derogatorios de otras o la propia ley, deben contener un artículo que lo señale expresamente.

Luego entonces, la norma no se expresa sobre el proceso de discusión de este tipo de artículo, sino que el mismo debe estar contenido en el proyecto de ley, en un artículo específico; por tanto, no puede ser violada esta norma, conforme ha sido incluida al bloque de la constitucionalidad.

Por otro lado, el demandante esgrimió también la violación de los artículos 117, 143, 144 y 162 del Reglamento de marras, que delinean el procedimiento de discusión.

Estas normas son del siguiente tenor:

> "Artículo 117: Ninguna proposición podrá ser sometida a votación sin que previamente haya sido discutida.
>
> Artículo 143: Propuesta una modificación, el Secretario la leerá y el Presidente la someterá a discusión.
>
> Artículo 144: Cuando nadie tomare la palabra sobre la modificación propuesta, el Presidente, después de anunciarlo, cerrará la discusión y la someterá a votación".
>
> Artículo 162: En cada tema participarán todos los Legisladores que así lo deseen, por un tiempo máximo de treinta (30) minutos en cada intervención, sin más restricciones que la de mantenerse dentro del tema que se discute y procurando guardar el orden y respeto hacia sus colegas".

Como hemos señalado, estas normas están adscritas al bloque constitucional, en virtud de la jurisprudencia de la Corte, razón por la que nos avocamos a analizar su presunta transgresión.

Analizando detenidamente el problema a la luz de los artículos transcritos, considera la Corte que si declara inconstitucional el artículo 30 de la Ley 28 de 1995, estaría incumpliendo el artículo 112 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, que como ya observamos, establece la obligatoriedad de que los proyectos de ley contengan un artículo final, de esta naturaleza.

Entonces, estaríamos violando el mandato de éste artículo que ha sido incluido en el bloque de constitucionalidad por la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia, lo cual resultaría anacrónico, máxime que lo que se refuta como inconstitucional no es la norma en sí, sino la violación del mecanismo con el que se aprobó la misma, es decir, la violación de los artículos 117, 143, 144 y 162 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

El Pleno tiene que advertir que nos encontramos en materia constitucional, frente a una situación especial, sui-generis, consistente en que de acuerdo a lo planteado, la existencia jurídica de una norma legal (art. 30 de la Ley 28 de 20 de junio de 1995) depende de la finalidad perseguida ajustada a la constitución aunque ello involucre el sacrificio de normas de tan alto rango, incluyendo las consideradas como del bloque de constitucionalidad.

La situación especial anterior nos compele a recurrir a los principios que gobiernan la interpretación constitucional como vía a la realización de las finalidades que la normativa superior señala, y entre estos principios al de "Unidad Constitucional", principio que en ocasión anterior ya ha sido acogido por

la Corte.

Sobre el tema, es oportuno traer a colación el comentario que esbozó el Magistrado Arturo Hoyos en su obra "LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL", quien al referirse al "Principio de Unidad de la Constitución", dijo lo siguiente:

> "Este principio es una consecuencia de la aplicación del método sistemático de interpretación jurídica al plano constitucional. La norma constitucional no debe interpretarse en forma aislada, sino que debe verse su sentido considerándola dentro del conjunto constitucional". (HOYOS, Arturo, "LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL", Edit. TEMIS, S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1993, págs. 23-24.)

A punto seguido, el autor citó un fallo de este Pleno, de 5 de abril de 1990, que declaró inconstitucionales diversas normas que permitían al Órgano Ejecutivo nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo.

El extracto correspondiente de dicha decisión, reveló lo siguiente:

> "... Mas, sin embargo, ni esta norma ni cualesquiera otras de la 'ley de leyes', debe interpretarse aisladamente, toda vez que, de lo contrario, a juicio de la Corte, se caería en el riesgo de apreciar el verdadero sentido orgánico de la Constitución, guiándose por el aspecto de su articulado, prescindiendo, así, de los preceptos que conforman su unidad, en cuanto a los principios y temas que la Carta Fundamental postula.
> .....
>
> Esta interpretación, aislada y restrictiva, sin establecer la necesaria concordancia entre los preceptos constitucionales, con olvido de la unidad de la Constitución, impide conocer el verdadero sentido y la finalidad real del estatuto fundamental de la República, como ha ocurrido en el caso de las normas legales acusadas por los demandantes.
>
> A propósito de este criterio de interpretación basado en la unidad orgánica de la Constitución (que la Corte comparte) el tratadista KONRAD HESSE) citado por el Doctor Arturo Hoyos, ha dicho que:
>
> '...la relación e interdependencia existente entre los distintos elementos de la Constitución obligan a no contemplar en ningún caso sólo la norma aisladamente sino siempre además en el conjunto en el que debe ser situada; todas las normas constitucionales han de ser interpretadas de tal manera que eviten contradicciones con otras normas constitucionales. La única solución del problema coherente con este principio es la que se encuentra en consonancia con las decisiones básicas de la Constitución y evite su limitación unilateral"

Este criterio es reiterado y complementado por el autor Linares Quintana, citado por el Dr. César Quintero en la obra "INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL", y que sobre las reglas de interpretación constitucional, dice:

> "d) La Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes..."
>
> e) Ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema." (QUINTERO, César, INTERPRETACION CONSTITUCIONAL, Editorial Mizrachi & Pujol, S.A., Panamá, 1ª Edición, 1999, págs. 36-37)

Es decir, que por deber interpretarse la Constitución como un todo, armónico, no puede considerarse ninguna de sus normas de manera aislada, porque afecta dicho principio de unidad; en consecuencia, cuando están en pugna entre sí, normas constitucionales, deberá preferirse la interpretación que armonice, y no la que enfrente las normas de dicha jerarquía.

También se refirió a este aspecto, el Licdo. Rafael Murgas Torraza en su obra, "DEFENSA DE LA CONSTITUCION", donde en la páginas 59 y 60, al referirse a los principios de interpretación constitucional, señala:

> "La Constitución no puede ser interpretada aisladamente. El método exegético de estudio del derecho constitucional, tan usual en Hispanoamérica, ha quedado en desuso para darle paso al estudio sistemático de interpretación constitucional. Lo que se impone es la interpretación concatenada de las normas y no su examen aislado. El peso de los valores superiores del constitucionalismo, las cláusulas pétreas en nuestro medio, imponen el principio de unidad de la Constitución. ....
>
> Madison se refirió al principio de unidad de la Constitución señalando en El Federalista que:
>
> 'Existen dos reglas de interpretación, dictadas por la razón y fundadas en la razón. Una es que cada parte del texto debe, de ser posible, redactarse de forma que persiga un mismo fin. La otra es que, cuando diversas partes del texto no pueden ser vistas en forma coincidente, la menos importante debe ceder a la parte más importante; el medio debe ser sacrificado al fin, más que el fin a los medios.'
>
> Es evidente que nuestro máximo tribunal de justicia acoge el principio de unidad de la Constitución; principio que es denominado también como el de concordancia práctica. Puede que eventualmente, en el examen de los derechos fundamentales, se establezcan prioridades porque surgen conflictos." (MURGAS TORRAZA, Rafael, "DEFENSA DE LA CONSTITUCION", Impresos Modernos, S.A., Panamá, 2000, págs. 59-60.)

Además de confirmar el punto anterior, la segunda razón que esbozó el prócer Madison, citado por el Licdo. Murgas Torraza, es que cuando las normas constitucionales no coinciden, la norma menos importante debe ceder a la más importante, el fin debe ceder a los medios.

En el presente caso, la norma impugnada, artículo 30 de la Ley 28 de 20 de junio de 1995, no es una norma que por su contenido intrínseco sea inconstitucional; lo denunciado como tal, es el procedimiento por el cual se aprobó.

Si la Corte declarara inconstitucional el artículo 30, entonces la Ley 28 devendría también inconstitucional, al carecer de la norma que aglutinara los artículos que reforma, subroga, adiciona de otras leyes, tal cual lo exige el artículo 112 del Reglamento Interno de la Asamblea, que forma parte del bloque constitucional.

Entonces, por cuanto la norma impugnada no es en sí, inconstitucional, la presunta violación a los artículos 117, 143, 144 y 162 del Reglamento Interno de la Asamblea deben considerarse menos graves, en este caso, que la presunta violación al artículo 112 íbidem, porque aquellos se refieren a los medios -procedimiento de aprobación de la norma-, mientras que éste -exige que toda ley debe contener la expresión de las normas que adiciona, modifica o revoca de esa u otras leyes- se refiere al fin, y aquel debe ceder ante el fin, que es -en este caso- el contenido del artículo 112 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

Por otra parte, el Pleno considera que para los efectos de la importancia práctica, no tendría razón de ser la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 28 de 20 de junio de 1995 por la presunta violación de los artículos 117, 143, 144 y 162 del Reglamento Interno de la Asamblea, por cuanto que la referida disposición legal demandada como inconstitucional, no hace más que contener la derogación, adición y modificación expresa de otras disposiciones legales y como es sabido, en nuestra legislación también existe la derogación, adición y modificación tácita de las leyes. Es decir, que aunque las normas legales a que se refiere el citado artículo 30 de la Ley 28, no fueran expresamente adicionados, modificados o derogados por mandato del propio artículo, estas adiciones, modificaciones o derogaciones operarían tácitamente, de puro derecho, por mandato del artículo 36 del Código Civil, que regula las formas expresa o tácita en que en nuestro país una norma legal puede quedar derogada o insubsistente, al ser modificada, adicionada por otra posterior, al indicar lo siguiente:

> "Artículo 36. Estimase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería."

De acuerdo al artículo transcrito, una norma se considera insubsistente, es decir, sin valor sin vigencia, nula, cuando ésta es incompatible con otra dictada con posterioridad, cuyo contenido la sustituye íntegramente, o porque la modifica o adiciona, o simplemente la hace desaparecer del mundo jurídico, sin indicación o declaración expresa de tal insubsistencia, lo que se conoce como derogatoria, adición o modificación tácita, fenómeno jurídico este de carácter formal que en nada afecta la validez legal ni constitucional de la nueva norma.

Por lo tanto, en el presente caso, no puede esta Corporación de Justicia declarar la violación de los artículos 117, 143, 144 y 162 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, adscritos al bloque de constitucionalidad, por lo que no prospera la pretensión.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 30 de la Ley N° 28 de 20 de junio de 1995, "Por la cual se adoptan Medidas para la Universalización de los Incentivos Tributarios a la Producción y se Dictan otras Disposiciones".

Cópiese, Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. ALEXIS HERRERA EN CONTRA DE LA FRASE "PREVIO CONCEPTO FAVORABLE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA", CONTENIDA EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 20 DE 15 DE MAYO DE 1995, COMO EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 6° DEL DECRETO NO. 31 DE 5 DE FEBRERO DE 1996. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ALEXIS HERRERA promovió ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, demanda de inconstitucionalidad contra la frase "previo concepto favorable de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa", contenida en el artículo 4° de la Ley 20 de 15 de mayo de 1995, y en el párrafo primero del artículo 6° del Decreto No. 31 de 5 de febrero de 1996.

La Ley 20 de 15 de mayo de 1995 creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, mientras que el Decreto Ejecutivo No. 31 de 5 de febrero de 1996 reglamentó la mencionada Ley. En ambas excertas legales se incluyó la frase censurada de inconstitucional, a saber:

Artículo 4° de la Ley 20 de 15 de mayo de 1995:

"En la reglamentación a que se refiere el artículo anterior, se establecerá que el Organo Ejecutivo, previo concepto favorable de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, informará al fiduciario, con ciento ochenta (180) días de anticipación, sobre los requerimientos de fondos que se incorporarán en el Presupuesto General del Estado para ser invertidos en obras de desarrollo e interés social.

Esta reglamentación deberá dictarse dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley" (La Corte resalta la parte impugnada)

Artículo 6° del Decreto No. 31 de 5 de febrero de 1996.
"El Organo Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación y Política Económica, previo concepto favorable de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, informará al fiduciario, con ciento ochenta (180) días de anticipación sobre los requerimientos de recursos provenientes del Fondo que serán incorporados al Presupuesto General del Estado para ser invertidos en obras de desarrollo e interés social" (La Corte resalta la parte impugnada)

A juicio de la parte actora, la referida frase infringía los artículos 179 párrafo 7° y 157 párrafo 2 de la Constitución Política, toda vez que constituía una intromisión por parte del Organo Legislativo en materia potestativa del Ejecutivo.

Ello, según el demandante, en virtud de que la facul-tad de formular el Presupuesto General del Estado para cada año fiscal está reservada por disposición constitucional al Organo Ejecutivo sin que el Organo Legislativo, ni ninguna de las Comisiones de la Asamblea Legislativa pudiese tener participación en su formulación, encontrándose su intervención limitada a la etapa en que el Proyecto de Ley de Presupuesto es sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa.

Conforme al trámite establecido para este tipo de procesos, se corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación para que emitiese criterio legal en relación a los planteamientos del impugnante, lo que se cumplió mediante Vista Fiscal No.12 de 14 de mayo de 1999 visible a fojas 8-12 del legajo.

Una vez cumplidos los trámites correspondientes, el proceso constitucional fue colocado en estado de decidir.

II. EXAMEN DEL TRIBUNAL

Al avocarnos a resolver el negocio planteado, el Pleno advierte que la Ley 20 de 15 de mayo de 1995 ha sido reformada por la Ley 22 de 27 de junio de 2000 "Que modifica la Ley 20 de 1995 que crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, y Dicta otras disposiciones" (Publicada en la Gaceta Oficial N°24,084 de 28 de junio de 2000).

Por ende, corresponde a la Corte determinar si la nueva Ley ha modificado los textos censurados por el recurrente, en vías de precisar si subsiste la causa constitucional.

a) El artículo 4 de la Ley 20 de 1995 a la luz de la Ley 22 de 2000.

La Ley 22 de 2000 en su artículo 17, establece de manera explícita que dicha Ley modifica, entre otros, el artículo 4 de la Ley 20 de 15 de mayo de 1995, y deroga cualquier otra disposición que le sea contraria.

En este contexto, el examen legislativo de rigor revela, efectivamente, que el artículo 4 de la Ley 20 de 1995 ha sido sustancialmente modificado por la Ley 22 de 2000 en lo atinente a la forma de requerir desembolsos del Fondo Fiduciario, toda vez que el artículo 14 de la nueva Ley ibídem ha establecido que el Organo Ejecutivo sólo debe informar a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa sobre los requerimientos de desembolsos que se hagan al fiduciario.

Palmariamente se desprende, que la exigencia censurada de inconstitucional, en el sentido de que el Ejecutivo debía contar con el concepto favorable previo de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa para los requerimientos de fondos que se hicieren al fiduciario, ha dejado de existir.

b) El artículo 6 del Decreto No. 31 de 5 de febrero de 1996

En lo atinente al artículo 6° del Decreto No. 31 de 5 de febrero de 1996, texto reglamentario que reproducía literalmente la exigencia contenida en el artículo 4 de la Ley 20 de 1995, hemos de manifestar que al perder éste su vigencia, la misma suerte sigue su reglamentación, sin perjuicio de que la propia Ley 22 de 2000 en su artículo 17, ha derogado expresamente cualquier disposición que le sea contraria.

Por tanto, esta Máxima Corporación Judicial conceptúa que el artículo 6 del texto reglamentario ha sido derogado.

Observamos además, que se le ha asignado a la Junta Asesora del Fondo Fiduciario la función de elaborar y proponer al Organo Ejecutivo, a través del fideicomitente, la reglamentación de la Ley 22 de 2000 (cfr. Art. 8 numeral 2° de la Ley 22 de 2000).

III. DECISION DE LA CORTE

Por lo expresado se concluye, que la Corte no puede emitir en este caso un pronunciamiento de mérito, al constatarse que por causas exógenas al proceso, se ha producido la pérdida del objeto litigioso sobre el que habría de recaer la decisión jurisdiccional. Ello, en virtud de que las normas censuradas de inconstitucionales han desaparecido del mundo jurídico, por efecto de su modificación y derogación respectiva.

Se produce en consecuencia, la extinción de la pretensión constitucional por obsolescencia procesal, y así ha de declararlo esta Superioridad.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SE HA PRODUCIDO EL FENOMENO JURIDICO DE SUSTRACCION DE MATERIA, razón por la que ordena el archivo del expediente.

Notifiquese y Publiquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LCDA. MONICA GONZALEZ SAGEL CONTRA EL ARTICULO 2204 DEL CODIGO JUDICIAL (PROCESO PENAL SEGUIDO A DIAMANTIS PAPADIMITRIU, ROBERTO DELGADO HERRERA Y OTROS, POR LOS DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA, CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro del proceso penal que se adelanta en el Juzgado Octavo de Circuito de Panamá contra DIAMANTIS PAPADIMITRIU, ROBERTO DELGADO HERRERA Y OTROS por la presenta comisión de los delitos de Falsedad Documental, Hurto y Asociación Ilícita para Delinquir, la Licenciada Mónica González Sagel, representante legal de éste último, advirtió ante el Pleno de la Corte Suprema, la inconstitucionalidad del artículo 2204 del Código Judicial, adicionado por el artículo 14 de la Ley N° 39 de 26 de agosto de 1999, por ser violatorio del artículo 22 de la Constitución Nacional.

El hecho primero, establece que en el Juzgado Octavo de Circuito Penal de Panamá, se encuentra en etapa de calificación legal el proceso penal señalado.

El hecho segundo estriba en que el artículo 2204 del Código Judicial, reformado por el artículo 14 de la Ley N° 39 de 26 de agosto de 1999, es inconstitucional por infringir las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional.

En cuanto al concepto de la infracción, señaló la actora que el artículo 22 Constitucional fue violado de manera directa por omisión, toda vez que consagra el derecho a todo imputado de un delito, de ser juzgado en juicio público -por tanto en audiencia- que le asegure todas las garantías para su defensa; por lo que, al otorgársele al Juez la facultad de resolver nulidades procesales y la ampliación del sumario sin permitirle al sumariado plantear su postura mediante la inmediación del Juez que caracteriza una audiencia pública, "se está pretermitiendo su garantía constitucional de ser oído en juicio público, que le haya asegurado las garantías para su defensa."

Admitida la advertencia, se corrió traslado al Ministerio Público, correspondiéndole el turno para conocer el caso a la Procuradora de la Administración, quien emitió su opinión en la Vista N° 44 de 3 de febrero de 2000, en los siguientes términos.

En primer lugar, conceptuó la Funcionaria Opinadora que el objeto de la advertencia son los numerales 4° y 5° del artículo 2204 del Código Judicial, y que se refiere a que el Juzgador puede decidir sin necesidad de audiencia preliminar, las nulidades procesales, y la decisión de ampliar el sumario, pero vertió su opinión de todos los numerales de dicha norma.

Señaló que el artículo 22 Constitucional establece tres garantías fundamentales atinentes a los procesos penales: el principio de presunción de inocencia de los imputados en la comisión de un delito, el derecho a ser informado, al momento de su detención, de las razones de la misma y de sus derechos constitucionales y legales, y su derecho a la defensa técnica, o sea a la asesoría de un abogado en todas las diligencias policiales y judiciales.

Expuso la Procuraduría de la Administración, que el artículo en comento fue modificado finalmente por el artículo 14 de la Ley 39 e 1999, que estableció 5

resoluciones que el Juez puede emitir sin necesidad de celebrar audiencia preliminar para ello -para dictar sobreseimiento definitivo cuando no hay imputado, cuando procede dictar sobreseimiento provisional, para emitir auto de declinatoria de competencia o para plantear conflicto de competencia, para dilucidar nulidades procesales, y para ordenar la ampliación sumarial-.

Opinó la Funcionaria Colaboradora que el artículo 2204 actual del Código Judicial no viola el artículo 22 de la Constitución, porque la no celebración de la audiencia preliminar en los 5 supuestos establecidos por la norma impugnada, no impiden que el detenido sea enterado de sus derechos constitucionales y legales al ser detenido; tampoco le impide ser asesorado por un abogado en las diligencias policiales y judiciales, ni de celebrar la audiencia preliminar luego de resulto el conflicto de competencia o cuando el a-quo asuma el conocimiento del caso declinado, ni luego que se diluciden las nulidades procesales o luego de ampliado el sumario.

En cuanto a la potestad del Juez de solucionar nulidades procesales sin necesidad de audiencia preliminar, ello redunda a corto plazo, en beneficio del imputado -según la Vista-, porque se obviaría el trámite de fijar fecha, notificar y celebrar audiencia preliminar, sin perjuicio de que ésta se suspenda o no se realice por alguna causa justificada.

Además, el derecho de defensa y de recurrir contra tal decisión es asegurado por el artículo 1116, numeral 5° del Código Judicial -es apelable el auto que resuelve nulidades procesales-, que se aplica supletoriamente en base al artículo 2431 de la misma excerta.

Sobre el numeral 5° que establece que no es necesaria la celebración de la audiencia cuando el Juez va a ordenar la ampliación del sumario, consideró la representante del Ministerio Público que constituye una medida de celeridad del proceso, economía de recursos, tiempo y trabajo judicial.

Ello es así, por cuanto el ordenar la ampliación del sumario -para calificar adecuadamente su decisión-, no requiere la presencia física de las partes ni esperar 45 días hasta la audiencia preliminar para decretar la ampliación.

También considera la señora Procuradora que la no celebración de la audiencia preliminar para la ampliación del sumario, no viola el principio de inmediación o el derecho de defensa del imputado, ya que el Juez ha debido examinar con anterioridad las constancias procesales, y sin necesidad de escuchar al inculpado puede decretar la mencionada medida.

Los artículos 2222 y 2207-C del Código Judicial disponen que la resolución que ordena la ampliación del sumario es de estricto cumplimiento por parte del Ministerio Público, e irrecurrible; la primera norma dice que, cuando la investigación no estuviere completa, el Tribunal "dispondrá lo conducente al perfeccionamiento del sumario"; mientras que el artículo 2207-C señala que la ampliación "deberá cumplirse" dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del expediente.

En adición a lo anterior, opinó la Procuradora de la Administración que la emisión del auto que ordena la ampliación del sumario, no supone la no celebración de la audiencia preliminar luego de dicha ampliación, o se hayan decretado las nulidades procesales.

En fin, a los 5 numerales del artículo impugnado, contienen mecanismos que desarrollan o cumplen a su vez, lo normado por los numerales 1°, 10 y 11 del artículo 199 íbidem, que señala como deberes de los Magistrados y Jueces, en términos generales, tomar las medidas tendientes a lograr la mayor celeridad de los procesos, sanear los procesos y evitar las nulidades procesales.

Por lo tanto, no advirtió el Ministerio Público, ninguna infracción al

artículo 22 Constitucional.

Luego de devuelto el expediente, se fijó en lista por el término de diez (10) días contados a partir de la última publicación de los Edictos en un diario de la localidad, para que los interesados presentaran sus argumentos sobre el caso, razón por la que, cumplidas todas las formalidades procesales atinentes a esta tipo de negocio, la advertencia se encuentra en situación de ser dilucidada.

Pese a que el negocio cumplió con las ritualidades procesales que caracterizan este tipo de tramitación, advierte el Pleno que no puede analizar el fondo del asunto, por cuanto que la norma advertida de inconstitucional, no es una norma de cuyo cumplimiento dependa el resultado del proceso.

En efecto, la jurisprudencia de esta Superioridad ha dictaminado que no es cualquier norma la que puede ser advertida de inconstitucionalidad, sino que debe ser una norma aplicable y no aplicada al caso, y cuyo cumplimiento decida la causa; en este sentido, pueden consultarse los fallos de 30 de diciembre de 1996 y 15 de diciembre de 1998.

Por lo tanto, no otra hay alternativa sino declarar no viable la advertencia.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la advertencia de inconstitucionalidad promovida por la Licda. Mónica González Sagel contra los numerales 4 y 5 del artículo 2204 del Código Judicial.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DIAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA DE ABOGADOS ICAZA,GONZALEZ, RUIZ & ALEMAN EN REPRESENTACION DE ARTURO MULLER EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y EN CONTRA DEL AUTO NO. 2302 DISCTADO EL 26 DE AGOSTO DE 1994, POR EL JUZGADO TERCERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Firma de Abogados ICAZA, GONZÁLEZ-RUÍZ & ALEMÁN, actuando en representación de ARTURO MULLER, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la Compañía Internacional de Seguro, S. A., ha presentado ante el Pleno de esta Superioridad, Demanda de Inconstitucionalidad contra el Auto N° 2302 del 26 de agosto de 1994, dictado por el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía.

La demanda fue admitida, toda vez que cumplía con las formalidades legales exigidas por el artículo 2551 del Código Judicial y se le corrió en traslado al Procurador de la Administración, por el término de diez (10) días, quien cumplió con dicho trámite mediante Vista N° 468 del 25 de octubre de 1994.

Devuelto el negocio constitucional a la Secretaría General de la Corte, se

llevó a cabo la publicación del edicto que notificaba la concesión del término de diez (10) días para que los interesados presentaran argumentos por escrito sobre el caso, siendo utilizado oportunamente dicho término por el propio demandante, quien presentó su alegato de conclusión, reiterando los planteamientos vertidos en su demanda.

Para resolver sobre la pretensión anunciada, el Pleno debe analizar los argumentos en que se funda la demanda y confrontarlos con la norma constitucional supuestamente infringida, por lo que es imprescindible reproducir algunas de las consideraciones expuestas por el demandante.

La declaratoria de inconstitucionalidad solicitada por el demandante, en el caso que nos ocupa, según la demanda se funda en la violación del artículo 32 de la Constitución Política, alegando doce motivos en los cuales el recurrente hace una relación sobre la actuación del Juez Tercero de Circuito de lo Civil de Panamá dentro del Proceso ordinario de mayor cuantía, instaurado por la Caja de Ahorros en contra de la Compañía Internacional de Seguro, S. A..

Los mencionados motivos se pueden resumir así:

El actor alega que la demandada Compañía Internacional de Seguros, S. A., solicitó al Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil la corrección de la demanda, solicitud esta que fue concedida, ya que mediante Auto N° 1514 del 31 de mayo de 1994 se ordena la corrección de la demanda por el término de cinco (5) días contados, a partir de la notificación de dicho Auto.

El actor alega igualmente que la parte demandante en vez de presentar la demanda corregida en el término que se le señaló con fundamento en el artículo 675 inciso 1 del Código Judicial, procedió a interponer un supuesto recurso de reconsideración en contra del Auto N° 1514, el cual era totalmente improcedente, porque dicha resolución ya estaba ejecutoriada según lo establecido en el artículo 982 inciso 2 del Código Judicial y por ende era irrecurrible.

Arguye el actor que en base a lo anterior, la parte demandada, es decir, la Compañía Internacional de Seguros, S. A., solicitó al Juzgado que se archivara la demanda y se tuviera como no presentada, sin producir efecto jurídico alguno. Sin embargo, el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, al resolver el supuesto recurso de reconsideración dicta el Auto N° 2302 del 26 de agosto de 1994, por medio del cual niega el mencionado recurso al igual que desestima la solicitud de que se archive la demanda, aduciendo que el término de cinco (5) días para presentar la demanda corregida comenzaba a contarse, no a partir de la notificación del Auto N° 1514, sino a partir de la notificación del Auto N° 2302, ya que con el recurso de reconsideración se suspendían los efectos de la resolución recurrida.

En cuanto al concepto de violación, el actor considera que el Auto impugnado infringe de manera directa por omisión el artículo 32 de la Constitución Política de la República al desconocer el principio del debido proceso legal que consagra dicha norma, en el sentido de que debió haberle imprimido al proceso en estudio el trámite de archivar la demanda, considerándola como no presentada negándole todo efecto jurídico por no haber presentado la demandante la corrección en el término perentorio que le señaló el auto irrecurrible que ordenó la corrección de la demanda, porque -a juicio del actor- la suspensión de una resolución recurrida sólo se produce cuando ella es legalmente recurrible, pero no cuando es irrecurrible, pues está ya ejecutoriada o en firme.

Por otro lado advierte el actor que el término de cinco (5) días para corregir la demanda debía comenzar a contarse a partir de la notificación del Auto N° 1514 del 31 de mayo de 1994 y no a partir de la notificación del Auto 2302 del 26 de agosto de 1994.

Al corrérsele traslado al Procurador de la Administración, de la presente

demanda de inconstitucionalidad, el mismo expresó mediante Vista N° 468 del 25 de octubre de 1994 que en su opinión el acto impugnado es preparatorio y no definitivo, porque si bien en la resolución de 26 de agosto de 1994 se ordena corregir la demanda, la misma ni siquiera ha sido admitida en este caso, por lo que mal podría la Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de una resolución dictada dentro de un proceso que aún no ha nacido a la vida jurídica y en el que todavía no se ha constituido la litis.

El alto funcionario del Ministerio Público también argumentó que de acuerdo al artículo 675 del Código Judicial, la desatención de la orden de corrección de la demanda produce tan sólo el efecto que ésta se tendrá por no interpuesta, de manera que puede presentarse una nueva demanda sobre los mismos hechos en cualquier momento, siendo por tanto a su juicio, inocua la declaratoria de inconstitucionalidad. El Procurador de la Administración sostiene, entre otros razonamientos, que los yerros en que pudiera haber incurrido el Juez al aplicar el derecho o al apreciar el caudal probatorio allegado al proceso puede conducir a una resolución injusta o ilegal, pero no da lugar a considerarla inconstitucional.

Por otro lado, el agente colaborador de la instancia concuerda con el criterio externado por el actor, en lo que se refiere a la actuación errónea del Juez y señala que si se emite una resolución ordenando la corrección de la demanda, ésta debe ser de cumplimiento inmediato, por lo que resulta, entonces, improcedente que el Juzgador haya concedido otros cinco (5) días a la parte demandante para que corrigiera la demanda.

Finalmente, concluye el Procurador de la Administración que esta Alta Corporación debe inhibirse en el caso subjúdice, ya que el acto acusado de inconstitucionalidad es de carácter preparatorio, es decir no tiene la calidad de acto principal y mucho menos definitivo, de allí que no sea viable con el texto constitucional.

Luego de haber expuesto y analizado los argumentos del demandante, y el concepto vertido por el Procurador de la Administración, esta Superioridad considera que pese a que la presente demanda inicialmente fue admitida, la misma debe ser declarada no viable en atención a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, observa el Pleno que la iniciativa constitucional se encuentra dirigida contra una resolución que como bien apunta el alto funcionario del Ministerio Público, no tiene la calidad de acto principal ni mucho menos definitivo, ya que la orden de corrección de la demanda, nos indica que ni siquiera se ha admitido la misma, por tanto, se trata de una resolución dictada dentro de un proceso que no ha nacido a la vida jurídica.

No obstante, esta Alta Corporación de Justicia sí quiere dejar sentado el hecho de que si bien el cargo que se le atribuye al acto impugnado no tiene rango constitucional, a nivel de legalidad considera que sí se ha producido una actuación errónea por parte del Juzgador dentro del proceso que nos ocupa, consistente en haber concedido a la parte demandante el término adicional de cinco (5) días para corregir la demanda, situación ésta que resulta improcedente, puesto que no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico.

De modo pues que, cuando dentro de un proceso una de las partes se sienta afectada por alguna actuación del Juez que considere errónea, tendrá la oportunidad de advertirla, para que sea subsanada o enmendada dentro del mismo proceso y no por la vía constitucional.

En segundo lugar, si bien la ley no lo señala, la Corte en innumerables fallos ha expresado que el carácter extraordinario de esta acción constitucional determina el que proceda, cuando se hayan agotado todos los medios por los que se pueda anular el acto cuya inconstitucionalidad se solicite, y en este caso dicho requisito no se ha cumplido.

Es así, que la acción de inconstitucionalidad no constituye un medio de impugnación más dentro de un proceso, sino que se trata de una acción autónoma que le da vida a un proceso nuevo e independiente, razón por la cual sólo debe interponerse contra actos definitivos y ejecutoriados.

Además, el Pleno de la Corte ha señalado en sentencia de 21 de diciembre de 1998, que "el proceso de constitucionalidad no tiene como objetivo el ser una instancia revisora última de las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales, entre otras, toda vez que es un proceso encaminado a mantener la supremacía de la Constitución, cuerpo normativo que constituye la cúspide del ordenamiento jurídico erradicando del mismo aquellos actos, de naturaleza individual o reglamentaria, que violen alguno de los derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución, u otros preceptos de la misma. No es, ha dicho este Pleno, la vía idónea para, a modo de un mecanismo de impugnación dentro del proceso de que se trate, discutir los errores de valoración de los tribunales, ni para corregir una interpretación defectuosa de la ley, en caso de haberse producido."

En cuanto a la violación del debido proceso, el Pleno de la Corte también ha señalado que la misma ocurre cuando se desconocen o pretermiten trámites esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes, situación ésta que no ha ocurrido en el caso subjúdice.

De modo pues que, esta Corporación de Justicia considera que el acto impugnado no ha vulnerado la garantía constitucional alegada.

Finalmente, ante las consideraciones anotadas, lo pertinente es negarle viabilidad a la acción de inconstitucionalidad y a ello procede este Tribunal.

Por consiguiente, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la demanda de inconstitucionalidad presentada por la firma de abogados ICAZA, GONZÁLEZ-RUÍZ & ALEMÁN, en representación de la COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A, contra el Auto N° 2302 del 26 de agosto de 1994, dictado por el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial.

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. SIDNEY SITON URETA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS KAM FONG YU, CONTRA LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO ELECTORAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Licdo. SIDNEY SITTON URETA en nombre y representación de LUIS KAM FONG YUE y ESTRELLA YU DE BUITRAGO, y posteriormente por el Licdo. LEOPOLDO CASTILLO GARCÍA en su propio nombre y en representación de DANIEL ERNESTO ARIAS MARTÍNEZ, JOSÉ DEL CARMEN SERRACIN ACOSTA, y ZENON

GONZÁLEZ. Como quiera que las mismas son contra las frases contempladas en el primero, segundo y tercer párrafo del ordinal 4 del artículo 282 del Código Electoral, se ordenó la acumulación de las mismas tal como lo ordena la ley para que sean resueltas en una misma sentencia.

Los demandantes consideran que las frases contenidas en los párrafos primero, segundo y tercero del ordinal 4 del artículo 282 del Código Electoral vulneran los artículos 141, 144, 145, 129 de la Constitución Nacional, que a la letra preceptúan lo siguiente:

> ARTÍCULO 141. La Asamblea Legislativa se compondrá de los Legisladores que resulten elegidos en cada Circuito Electoral, de conformidad con las bases siguientes:
>
> 1. Cada Provincia y la Comarca de San Blas se dividirán en Circuitos Electorales.
>
> 2. La Provincia de Darién y la Comarca de San Blas tendrán dos Circuitos Electorales cada una, y en éstos se elegirá un Legislador por cada Circuito Electoral.
>
> 3. Los actuales Distritos Administrativos que, según el último Censo Nacional de Población, excedan de cuarenta mil habitantes, formarán un Circuito Electoral cada uno y en tales circuitos se elegirá un Legislador por cada treinta mil habitantes y uno más por residuo que no baje de diez mil. El Distrito de Panamá se dividirá a su vez en cuatro Circuitos Electorales, de conformidad con el Numeral cinco de este Artículo y según lo disponga la ley. En los Circuitos Electorales en que se deben elegir dos o más Legisladores, la elección se hará conforme al sistema de representación proporcional que establezca la ley.
>
> 4. Excepto la Provincia de Darién, la Comarca de San Blas y los Distritos Administrativos actuales a que se refiere el Numeral tres anterior, en cada Provincia habrá tantos Circuitos Electorales cuantos correspondan a razón de uno por cada treinta mil habitantes y uno más por residuo que no baje de diez mil, según el último Censo Nacional de Población, previa deducción de la población que corresponde a los actuales Distritos Administrativos de que trata el numeral tres. En cada uno de dichos Circuitos Electorales se elegirá un Legislador.
>
> 5. Cada Circuito Electoral tendrá un máximo de cuarenta mil habitantes y un mínimo de veinte habitantes, pero la ley podrá crear Circuitos Electorales que excedan el máximo o reduzcan el mínimo anteriores, para tomar en cuenta las divisiones políticas actuales, la proximidad territorial, la concentración de la población indígena, los lazos de vecindad, las vías de comunicación y los factores históricos y culturales, como criterios básicos para el agrupamiento de la población en Circuitos Electorales.
>
> 6. Los partidos políticos que hubieren alcanzado el número de votos exigidos para subsistir como tales, y que no hayan logrado la elección de un Legislador en algún Circuito Electoral, tienen derecho a que se les adjudique un escaño de Legislador. La adjudicación se hará en favor del candidato que hubiere obtenido mayor número de votos para legislador, dentro de su partido.
>
> 7. Únicamente los partidos políticos podrán postular candidatos para Legislador.
>
> A cada Legislador corresponde dos suplentes, elegidos de igual modo y el mismo día que aquél, los cuales lo reemplazaran en su faltas,

según el orden de su elección.

Después de la primera elección de Legisladores de que trata el presente Artículo, la ley podrá establecer, para la conformación de los Circuitos Electorales, pautas distintas a las contendidas en esta disposición, pero tomando en cuenta, como punto de partida, para la estructuración de los Circuitos Electorales, la división política administrativa actual de Distritos.

ARTÍCULO 144. Los Legisladores actuarán en interés de la Nación y representan en la Asamblea Legislativa a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito Electoral.

ARTÍCULO 145. Los partidos políticos podrán revocar el mandato de los Legisladores principales o suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos y formalidades:

1. Las causales de revocatoria y el procedimiento aplicable deberán estar previstos en los Estatutos del Partido.

2. Las causales deberán referirse a violaciones graves de los Estatutos y de la plataforma ideológica, política o programática del partido y haber sido aprobadas mediante resolución dictada por el Tribunal Electoral con anterioridad de la fecha de postulación.

3. El afectado tendrá derecho, dentro de su partido, a ser oído y a defenderse en dos instancias.

4. La decisión del Partido en que se adopte la revocatoria del mandato estará sujeta a recurso del cual conocerá privativamente el Tribunal Electoral y que tendrá efecto suspensivo.

Los partidos políticos también podrán revocar el mandato de los legisladores principales y suplentes que hayan renunciado expresamente y por escrito de su partido.

ARTÍCULO 129. El sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. El voto es libre, igual, universal, secreto y directo.

Con relación al artículo 141, los demandantes expresan que el mismo fue violado de manera directa y por omisión, puesto que en ningún momento se da una autorización al Legislador para que se aparte del sistema de representación proporcional que se encuentra establecido en la Constitución Nacional, en cambio se ha introducido un sistema mixto de adjudicación por mayoría y representación proporcional en los circuitos plurinominales, lo cual va contra lo preceptuado constitucionalmente.

Al referirse a la violación del artículo 144, los demandantes concuerdan en señalar que se desconoce los votos emitidos otorgados a los partidos, sustiyéndolos a favor por las preferencias que los electores hayan tenido hacia los candidatos dentro del voto válido a los partidos, olvidándose que los Legisladores representan a su partido.

Con relación al artículo 145, los demandantes manifiestan que el mismo es violado de forma directa y por omisión, pues esta norma Constitucional establece la revocatoria de mandato, situación que es violentada por las expresiones o frases contenidas en el numeral 4 del artículo 282 del Código Electoral y señalan:

"Las construcciones sintácticas de los tres párrafos del numeral 4 del artículo 282 del Código Electoral, violan directamente el artículo 145 de la Constitución Política que establece que los partidos políticos podrán revocar el mandato de los legisladores

principales o suplentes que hayan postulado, al establecer que las curules se adjudicaran a los candidatos. La norma constitucional preceptúa que la curul la obtiene el partido, por ello se le reconoce al partido en determinadas condiciones la facultad de revocar el mandato".

Finalmente, estiman que el artículo 129 de nuestra Carta Magna ha sido vulnerado, expresando que:

"Del mismo se infieren que las curules en la última ronda o segundo residuo electoral del mecanismo del cuociente electoral no se adjudican proporcionalmente a los partidos de acuerdo a los constantes de votos válidos que están directa y exactamente relacionados con el número de votantes que emitieron validamente sus votos, sino también como base de factores aleatorios como los son los variables votos preferencias que emiten los electores a favor de los candidatos dentro del solo voto válido al partido".

Admitida la presente demanda, y corrido el traslado respectivo al Procurador General de la Nación, Licenciado José Antonio Sossa, quien mediante Vistas N° 39 y 40, (fs. 56-75 y 395-413 respectivamente), solicita se declare la constitucionalidad de los párrafos o frases contempladas en el numeral 4 del artículo 282 del Código Electoral, pues a su juicio no violan la Constitución Nacional. En ambas Vistas se expresan señalamientos similares estableciéndose lo siguiente:

Con relación al artículo 141 "se concluye que en la disputa por los residuos, los votos, no se les resta a los partidos porque los mismos no compiten. Lo que se produce es un competición entre los candidatos con independencia a qué partido pertenezcan, obteniendo la curul, el candidato que más votos haya recibido, logrando de esta manera una competencia abierta entre candidatos y no entre partidos, con lo que se logra la representación proporcional". Más aun la Constitución Nacional remite a la ley electoral en los casos de representación proporcional, lo cual se desarrolla en el artículo 282 la cual es producto del consenso de las fuerzas políticas del país. (fs. 70)

Sobre el artículo 144, se establece que "el mismo no resulta infringido por las reglas implementadas para la adjudicación de curules en circuitos plurinominales, ya que los mismos garantizan el sistema de representación proporcional que ha desarrollado el legislador para la asignación de curules legislativas, pues dicha formula es producto del concierto con todas las fuerzas políticas del país".

En cuanto el artículo 145, se determinó que "no resulta infringida, ya que el mecanismo adoptado para el escogimiento de los legisladores, establecido en el artículo 282 del Código Electoral para los circuitos plurinominales no incide en la potestad de los partidos de cesar el mandato de los miembros de la Asamblea Legislativa, adscritas a determinados colectivos políticos".

Finalmente sobre el artículo 129 se emitió concepto señalándose que "Tampoco resulta infringida esta norma constitucional, pues resulta claro que el sufragio es igual para todos, y que el método utilizado en los circuitos plurinominales lo que hace es garantizar la representación proporcional que establece el artículo 141 de la Constitución Política y se desarrolla el artículo 282 del Código Electoral".

Publicados los edictos correspondientes, y vencido el término para que alegaran los demandantes o quien tuviera interés en hacerlo, los demandantes

presentaron escritos en los que básicamente repiten lo expuesto en sus respectivas demandas.

Cumplidos con todos los trámites procesales inherentes al presente recurso, se encuentra el negocio pendiente de decisión, para lo cual se adelantan las siguientes consideraciones.

La presente acción se propone, como se ha visto, contra las expresiones o frases contenidas en los tres párrafos del numeral 4 del articulo 282 del Código Electoral, que establece el sistema de representación proporcional aplicable para la adjudicación de las curules a Legislador dentro de los circuitos electorales plurinominales, y que transcribimos a continuación:

> Artículo 282. Cuando se trate de circuitos electorales que elijan a dos o más Legisladores, las Juntas de Escrutinio de Circuito Electoral proclamarán a los candidatos electos de conformidad con las siguientes reglas:
>
> 1- ...
> 2- ...
> 3- ...
> 4- Si aún quedaran puestos por llenar, se adjudicarán a los candidatos más votados, una vez aplicado el cuociente y medio cuociente.
>
> Para la adjudicación del puesto por residuo, se contarán todos los votos obtenidos por cada candidato en todas las listas en que hayan sido postulado. Pero, en todo caso, la curul se asignará al partido que le haya aportado la mayor cantidad de votos al candidato.
>
> Si ningún partido alcanzare ni medio cuociente, serán elegidos los candidatos que más votos hayan obtenido, sumándose los votos que hayan obtenido en todas las boletas o listas de candidatos en que aparecieren.

A juicio del Pleno de la Corte, la infracción del citado artículo 141 no se ha producido, pues esta norma constitucional preceptúa que será una ley la que establezca el sistema de representación proporcional que se utilizará para la adjudicación de las curules dentro de los circuitos plurinominales, no refiriéndose la norma constitucional al tipo o clase de sistema a seguir, dejando que sea la ley la que desarrolle el mismo, tal como lo ha establecido el Código Electoral en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 282.

Observa el Pleno, que el artículo 282 del Código Electoral, prevé la forma en que se adjudicarán las curules dentro de los circuitos electorales en donde deben ser escogidos varios legisladores. Así, en un primer momento se obtendrán las curules a través del cuociente electoral, el cual surge del total de votos válidos emitidos dentro del circuito dividido entre la cantidad de curules por designar dentro del circuito electoral; en segundo término a través del medio cuociente electoral; y por último, en caso de que quede por designar alguna curul, la misma se hará por residuo a favor de los candidatos más votados, pero en todo caso se hace la salvedad que la curul se otorgará al partido que más votos le haya otorgado al candidato.

Por otra parte, es importante destacar que la Corte Suprema, mediante fallo de 22 de noviembre de 1995, en el cual se resolvió acerca de la constitucionalidad de la Resolución del 27 de Febrero de 1994, emitida por el Tribunal Electoral, hace mención del artículo 260 del Código Electoral cuya redacción corresponde actualmente en gran parte al artículo 282 del cuerpo jurídico antes mencionado, y en donde se hace referencia al sistema de representación proporcional utilizado para la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales:

> "No es cierto, pues que la resolución impugnada infrinja la norma antes transcrita, ni tampoco resulta cierto que se le debe otorgar la segunda curul al segundo partido más votado por el concepto de representación proporcional, pues, como hemos visto, conforme a las reglas del artículo 260 del Código Electoral, no puede ser aplicado el concepto de representación popular y se deben entonces adjuntar las curules a los legisladores que hayan obtenido mayor cantidad de votos. La norma que se alega infringida contempla la regla a seguir para la adjudicación de las curules a través de la representación proporcional y la primera es si se obtiene el cuociente y, continúa hasta el caso en que no se ha logrado obtener ningún legislador según los pasos que se indican en los numerales 1, 2, y 3 del artículo 260 del Código Electoral, y si su aplicación no arroja resultados prácticos en el caso concreto, entonces las curules deben ser adjudicadas a quienes hayan sacado más votos, según lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 260, que desarrolla el artículo 141 constitucional".

En la demanda también se cita como violado el artículo 144 de la Constitución Política, norma que entre otras cosas establece que los Legisladores representan en la Asamblea Legislativa a sus respectivos partidos políticos, sin embargo, no vemos dentro de la demanda de inconstitucionalidad fundamento alguno que nos lleve a señalar que ha sido violentado el contenido del artículo 144 de nuestra Carta Magna, toda vez que el ordinal atacado de inconstitucional en ningún momento se aparta de lo establecido constitucionalmente y que vemos reiterado dentro del párrafo segundo del ordinal 4 del artículo 282 cuando señala "Pero, en todo caso, la curul se asignará al partido que le haya aportado la mayor cantidad de votos al candidato", perteneciéndole la curul al partido que le otorgó la mayor cantidad de votos al candidato.

En cuanto al artículo 145, considera esta Superioridad, que el mismo no ha sido violado ya que el numeral 4 del artículo 282 preceptúa el sistema de representación proporcional aplicable para la elección de los Legisladores, y en ningún momento limita o impide la aplicación de la revocatoria de mandato que poseen los partidos políticos, ya que la misma es una prerrogativa que puede o no ser utilizada por los partidos políticos, como claramente lo establece la norma constitucional, no señalándose restricción o prohibición alguna a dicha facultad.

Por último, en cuanto a la violación del artículo 129 de nuestra Constitución, en opinión del Pleno de la Corte, no le asiste razón a los demandantes, ya que en ningún momento las expresiones o frases contenidas en el numeral atacado de inconstitucional establecen una desigualdad entre los electores pues cada voto de los mismos tiene el mismo valor, lo que no ocurriría en el caso que se permitiese que el voto de un grupo determinado de personas se le atribuyese un mayor valor que a los otros electores; situación que no se da en este caso, pues el voto, tal como lo señala la norma constitucional acusada, es libre e igual.

Por las razones antes señaladas, el Pleno estima que las frases o expresiones contenidas en el numeral 4 del artículo 282 del Código Electoral no vulneran los artículos 141, 144, 145 y 129 de nuestra Constitución Nacional ni ningún otro, por lo que deben ser declaradas constitucionales.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES las frases contenidas en los párrafos primero, segundo y tercero del numeral 4 del artículo 282 del Código Electoral.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES

(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

QUERELLA CRIMINAL PRESENTADA POR LOS SEÑORES APOLONIO ACOSTA MACK Y CARLOS BELMO GRAHAM CONTRA EL SR. JOSE JOAQUIN VALLARINO, MINISTRO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Proveniente del Ministerio Público, ha ingresado, para su calificación al Pleno de la Corte, la querella criminal presentada por los señores APOLONIO ACOSTA MACK y CARLOS BELMO GRAHAM contra el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, señor José Joaquin Vallarino, por los delitos de calumnia e injuria.

FUNDAMENTO DE LA QUERRELLA

"PRIMERO: APOLONIO ACOSTA MACK, fue nombrado y tomó posesión como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISION No. 9, CON SEDE EN COLÓN, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL, el día 1 de octubre de 1994.

SEGUNDO: CARLOS BELMO GRAHAM, fue nombrado y tomó posesión como INSPECTOR DE TRABAJO EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISION No. 9 CON SEDE EN COLÓN, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL, el día 24 de agosto de 1978, llegando hasta el cargo de SECRETARIO JUDICIAL.

TERCERO: El día 6 de Enero del 2000, luego de 21 años, cuatro meses y trece días de servicio, al señor CARLOS BELMO GRAHAM, se le declaró insubsistente su nombramiento, en el cargo de SECRETARIO JUDICIAL, agradeciédole inclusive los servicios prestados a la Institución, todo ello mediante la Nota No. 6-OIRH-99, DE 6 DE ENERO DE 2000.

CUARTO: El día 13 de Enero del 2000, al señor APOLONIO ACOSTA MACK, se le declaró insubsistente su nombramiento, en el cargo de PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISION No.9 (COLON), agradeciéndole inclusive los servicios prestados a la Institución, todo ello mediante la Nota No. 5-OIRH-99, DE 6 DE ENERO DE 2000.

QUINTO: Hasta el presente los dos únicos funcionarios destituídos de la Junta de Conciliación y Decisión No. 9, en Colón que dicho sea de paso es la única que existe en Colón, somos los que suscribimos la querella.

SEXTO: Durante los días 17 y 18 de Enero del 2000, en las distintas emisiones de los noticieros de la Televisora Nacional (Canal 2) y Telemetro (Canal 13), así como en RPC (Canal 4) el día 19 de Enero, se transmitieron declaraciones brindadas por el señor JOSE JOAQUIN VALLARINO, Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, en donde el mismo señalaba que las destituciones hechas en la Junta de Conciliación en Colón, se producían porque los funcionarios estaban

coimiando en la Junta de Conciliación.

SEPTIMO: En la emisora LA VOZ DEL TROPICO, de la Provincia de Colón, del día 18 de enero de 2000, en la emisión de las se volvieron a repetir las declaraciones del señor Ministro de Trabajo, en torno a las supuestas causas de destitución de los funcionarios de la Junta de Conciliación que proponemos esta querella.

OCTAVO: El día 18 de Enero del 2000, en la edición del Diario Siglo, en su página 8, se reproducen declaraciones atribuídas al señor MINISTRO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL SEÑOR JOSE JOAQUIN VALLARINO, en las que dicho funcionario señala: `...en ese sentido que la semana pasada en la provincia de Colón, tuvo que destituir a funcionarios que estaban coimiando en la Junta de Conciliación.

NOVENO: Que estas afirmaciones del Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral suponen una clara afirmación en nuestra contra, pues hasta la fecha los únicos funcionarios destituídos en la Junta No. 9, somos los suscriptores de esta querrella y no fuimos destituídos por coimeros.

DECIMO: Que las afirmaciones del Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, implican indilgarnos la comisión de delitos contemplados en el Capítulo III, Título X, Libro II del Código Penal, sobre Corrupción de Servidores Públicos lo que constituye el delito de CALUMNIA pues se nos indilga la comisión de un hecho punible que en manera alguna hemos perpetrado, amén de que las citadas declaraciones implican la comisión del delito de INJURIA, pues lesiona nuestro honor, decoro y buen nombre".

Mediante Resolución de 17 de marzo de 2000, la Procuradora General de la Nación, Encargada le dio entrada formal para trámite a la querella criminal propuesta por APOLONIO ACOSTA MACK y CARLOS BELMO GRAHAM por el supuesto delito contra el honor (calumnia e injuria).

CRITERIO DEL MINISTERIO PUBLICO

Mediante Vista N°11 de 26 de abril de 2000 el Procurador General de la Nación opinó que la querella por calumnia e injuria debía ser archivada con un sobreseimiento definitivo, por carecer de pruebas que la sustentaran. En este sentido manifestó que, en los delitos de calumnia e injuria, por su misma naturaleza estructural de la acción antijurídica, era necesario que las imputaciones se hicieran a una persona determinada, es decir, a alguien en concreto, señalándose por su nombre para que pudiera ser distinguido en la comunidad en donde vive.

Prosigue comentando el Alto Funcionario del Ministerio Público que, por ello no pueden servir para la comprobación del delito bajo estudio, las declaraciones, manifestaciones o alusiones impersonales, ya que la norma exige que la difamación o la injuria sean personificadas e individualizadas. Adiciona que, de lo contrario daría lugar a aquellos que subjetivamente crean sentirse aludidos por declaraciones de funcionarios o personas particulares, en cuyo contenido no se observe ninguna referencia personal.

También considera el Procurador que, si bien es cierto el señor Ministro de Trabajo hizo declaraciones a los medios de comunicación, ha quedado en evidencias que las mismas son indeterminadas e impersonales puesto que en ningún momento se refirió a los querellantes ACOSTA MACK y BELMO GRAHAM.

Para finalizar señaló el Funcionario de Instrucción, que el artículo 180 del Código Penal dispone que para proceder en los delitos contra el honor, es necesario que la querrella esté acompañada de la prueba sumaria que compruebe el delito de calumnia e injuria, acción ésta que no desplegaron los presuntos

ofendidos.

Encontrándose la querella en este estado, los Magistrados del Pleno de la Corte Suprema proceden a la calificar la querella incoada.

CALIFICACION DEL PLENO

De acuerdo a las constancias procesales que obran en el expediente sumarial contentivo de la querella formulada por APOLONIO ACOSTA MACK y CARLOS BELMO GRAHAM contra el Ministro de Tabajo y Desarrollo Laboral, este Tribunal Colegiado coincide con las apreciaciones vertidas por el Procurador General de la Nación en su Vista N°11 de 26 de abril de 2000.

Lo anterior obedece a que la Legislación Penal y el Código Judicial, hacen especial énfasis en que los delitos contra el honor y las denuncias de los funcionarios públicos deben ser acreditadas por prueba sumaria, la cual tiene que ser acompañada con el libelo al momento de su presentación ante el Ministerio Público. En este sentido, el artículo 180 del Código Penal en concordancia con el artículo 2471 del Código Judicial, prevén la circunstancia probatoria anotada en líneas anteriores bajo estos términos:

> "Artículo 180. Para proceder en los delitos contra el honor, se requiere querella de la parte ofendida, acompañada por la prueba sumaria de su relato"

> "Artículo 2471. El que promueva acusación por delito o denuncia de la clase que se refiere el artículo 2468, deberá acompañar la prueba sumaria de su relato. En caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, se ordenará su archivo. Para efectos de este artículo se entiende por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuído"

En atención al concepto de prueba sumaria, el Pleno de la Corte ha resaltado que es la prueba preconstituída que debe acompañar la acusación, y en este caso, la querella (ver Resolución de 29 de diciembre de 1992).

Efectivamente los señores APOLONIO ACOSTA MACK y CARLOS BELMO GRAHAM al momento de presentar su querella ante el Ministerio Público, lo hicieron adjuntando un ejemplar del periódico El Siglo de 18 de enero de 2000, y en la cual puede observarse a foja 12 reverso, las declaraciones del señor Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, José Joaquín Vallarino, que en su parte pertinente dice:

> "El Titular de la cartera de Trabajo y Bienestar social manifestó en ese sentido que la semana pasada en la Provincia de Colón, tuvo que destituir a funcionarios que estaban coimiando en la junta de conciliación"

Como puede apreciarse, en ningún momento el Ministro de Trabajo al referirse a los "funcionarios coimeros", hizo alusión expresa o directa a persona o personas determinadas, ni los virtualmente afectados han demostrado que en esas afirmaciones del Ministro de Trabajo, llevaban la intención de injuriarlos.

Es importante traer a colación lo que la doctrina más autorizada ha destacado en los casos de los delitos contra el honor. En lo relativo a la calumnia afirma que "la imputación debe ser de hechos concretos y ha de recaer sobre persona determinada o determinable" (MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. Undécima Edición, revisada y puesta al día conforme al Código Penal de 1985. tirant lo blanch. Valencia 1996. Pág.242.).

En el caso de la injuria "es necesario que se tenga conciencia del carácter injurioso de la acción o expresión y voluntad, pese a ello, de realizarla. Esta voluntad se puede entender como una intención específica de injuriar, el llamado

`animus iniuriandi . No basta, pues, con que la expresión sea objetivamente injuriosa y el sujeto lo sepa, sino que se requiere un ánimo especial de injuriar" (Subrayado es del Pleno) (op.cit. Pág. 248).

Las declaraciones expresadas por el Jefe de la Cartera de Trabajo, al citado medio de comunicación social, no constituyen, a juicio de esta Corporación, prueba suficiente y vinculante para atribuírle a este Funcionario la comisión de delitos que por sus caraterísticas propias, no se han configurado.

No podemos acoger el criterio de los querellantes, en el sentido de que el señor Ministro de Trabajo al hacer mención que despidió funcionarios de la Junta de Conciliación de Colón por coimeros, y que fueron ellos los únicos que fueron despedidos, pues esta última circunstancia no fue acreditada por los interesados. Esto obviamente desvirtúa las apreciaciones de los señores ACOSTA MACK y BELMO GRAHA en cuanto al ánimo del Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de irrogarles perjuicios en su honor y de atribuírles la comisión de delitos cuando ejercían funciones públicas.

En conclusión, esta Superioridad reitera que no existen mérito suficiente para atribuirle la comisión del delito contra el honor al Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral en perjuicio de APOLONIO ACOSTA MACK y CARLOS BELMO GRAHAM.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEEN DEFINITIVAMENTE y de MANERA OBJETIVA e IMPERSONAL las sumarias iniciadas con motivo de la querrella formulada por APOLONIO ACOSTA MACK y CARLOS BELMO GRAHAM contra el señor Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral por delitos de calumnia e injuria.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO

En vista de que discrepo con la resolución que antecede, en la cual se emite un sobreseimiento definitivo de manera objetiva e impersonal de las sumarias iniciadas con motivo de la querella formulada por APOLONIO ACOSTA MACK y CARLOS BELMO GRAHAM, contra el señor Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral por los delitos de calumnia e injuria, he debido salvar mi voto, con fundamento en las consideraciones que a continuación detallo.

A diferencia del criterio expuesto por el señor Procurador General de la Nación, la cual es compartida por la mayoría de mis colegas en ésta resolución, pienso que los querellantes cumplieron con la formalidad de acompañar la prueba pre constituida del hecho que motiva su querella, al adjuntar un ejemplar del diario de circulación nacional en la cual se reproducen las declaraciones vertidas por el querellado.

En lo que concierne a dichas declaraciones, considero que siendo que los señores Acosta y Belmo coinciden con haber sido destituídos de la Junta de Conciliación y Decisión de Colón, luego de un número plural de años de servicios, resulta obvio que es a éstos funcionarios y todos aquellos que resultaron destituídos de dicha entidad del Ministerio de Trabajo, para la fecha y en el contexto expuesto por el respetado señor Ministro de Trabajo, a los cuales se alude en las citadas declaraciones.

Tal es así, por cuanto que aún cuando los señores Apolonio Acosta y Carlos Belmo no fueron mensionados con sus nombres propios, reitero que habiendo sido destituídos de sus funciones como funcionarios de la única Junta de Conciliación y Decisión del Ministerio de Trabajo que opera en la provincia de Colón, con el mayor respeto, estimo que no es ni real ni objetivo imaginar que la afirmaciones del señor Ministro apuntaban a personas distintas, o fueron vertidas en abstracto.

Mi afirmación encuentra sustento en la misma cita que se resalta en la resolución que motiva mi salvamento de voto, por cuanto que al expresar el autor Francisco Muñoz Conde que "la imputación debe ser de hechos concretos" (para el caso que nos ocupa, "coimear"), "y ha de recaer sobre persona determinada o determinable", la circunstancia de ser los funcionarios de la Junta de Conciliación de la provincia de Colón que resultaron destituídos, les convierte en personas claramente determinables, en el contexto de las expresiones del querellado.

Y, finalmente sobre este aspecto, estimo que si en sus declaraciones el señor Ministro de Trabajo afirma que la razón o causa de la destitución de los funcionarios de la Junta de Conciliación y Decisión de Colón obedeció a que los mismos eran "coimeros", (término que en la comprensión vernacular de nuestro medio dice relación con una forma de corrupción), en éste caso ciertamente se podría estar afectando el honor de los sujetos que coinciden con ser los destituídos, cuya identidad es perfectamente determinable.

En lo que concierne a la vinculación subjetiva del querellado con los hechos que se le imputan, soy del criterio que la prueba sumaria adjuntada con el libelo de la querella satisface a plenitud dicho requisito. En ésta misma línea de análisis, estimo que la determinación de cual era la intención del funcionario, al proferir tales declaraciones, es materia que corresponde al análisis de fondo una vez se entre en la etapa plenaria, agotada la etapa de calificación de la querella presentada, en virtud del ejercicio de su derecho de interponer acciones de ésta naturaleza, por parte de los señores Acosta y Belmo, siendo que los mismos han expresado que se sienten aludidos y por ende afectados en su honra por las declaraciones del señor José Joaquín Vallarino, en su condición de Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

De tal suerte que por la especial naturaleza de los delitos de calumnia e injuria, considero que la valoración de la voluntad del Ministro, al emitir tales declaraciones, es materia que habría que determinar una vez examinado en el fondo el proceso, y evaluadas las pruebas en las cuales ha debido sustentar sus afirmaciones.

En consecuencia, en la presente acción, es decir, la querella interpuesta por los señores APOLONIO ACOSTA y CARLOS BELMO, contra el señor José Joaquín Vallarino, en su calidad de Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, por los delitos de calumnia e injuria, estimo que se cumplen los requisitos esenciales establecidos en las normas para su procedencia, y en virtud de ello, discrepo con el sobreseimiento definitivo de manera objetiva e impersonal de la causa, tal como se resuelve en el proceso que nos ocupa. No obstante, como quiera que esta no es una opinión compartida por la mayoría de mis colegas, con el mayor respeto, SALVO EL VOTO.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD, FORMULADA POR LA LICENCIADA ALMA L. CORTÉS CONTRA EL TÍTULO I Y X DE LA LEY 23 DE 15 DE JULIO DE 1997, POR EL CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO DE MARRAKECH, CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE PANAMÁ A DICHO ACUERDO JUNTO CON SUS ANEXOS

Y LISTA DE COMPROMISOS, SE ADECUA LA LEGISLACIÓN INTERNA A LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado José A. Troyano ha presentado solicitud para que se le declare impedido y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la Demanda de Inconstitucionalidad formulada por la Licenciada Alma L. Cortés contra el Título I y X de la Ley 23 de 15 de julio de 1997, por el cual se aprueba el Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, el Protocolo de Adhesión de Panamá a dicho acuerdo junto con sus anexos y lista de compromisos, se adecua la legislación interna a la normativa internacional y se dictan otras disposiciones.

El Magistrado José A.Troyano sustenta su petición en los siguientes términos:

> "... participé en el Equipo Negociador por la República de Panamá para alcanzar esos Acuerdos, negociaciones que fueron celebradas en Ginebra, Suiza; además firmé la Ley N°23 de 15 de julio de 1997, como Ministro de Comercio e Industrias, Encargado, que fue publicada en la Gaceta Oficial 23,340 de 26 de julio de 1997".

En este sentido, el peticionista fundamenta su solicitud en el numeral 2 del artículo 2562 del Código Judicial, que a la letra dice:

> "Artículo 2562. Son causales de impedimento:
>
> 1. ...
> 2. Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición".

Quienes suscriben, habiendo corroborado la veracidad de las afirmaciones expuestas por el Magistrado José A. Troyano, consideran que ha quedado plenamente demostrada la existencia de la referida causal de impedimento, lo cual constituye suficiente motivo para acceder a la presente solicitud.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por el Licdo. José A. Troyano, en su condición de Magistrado de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del Código Judicial se designa al suplente respectivo para reemplazar al Magistrado impedido.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PERERIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA PROMOVIDA POR CHICAGO OIL COMPANY CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARITIMO DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE

JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a este Pleno la queja promovida, mediante apoderado judicial, por CHIGAGO OIL COMPANY propietaria de la barcaza Oil Barge Vin D510254 Enlightned Energy, contra el Juez del Tribunal Marítimo de Panamá, por las actuaciones dentro del proceso Naviera Keypana, S. A. -vs- Barcaza Oil Barge Vin D510254 Enlightned Energy.

FUNDAMENTO DE LA QUEJA

La empresa quejosa expuso que Naviera Keypana, S. A. el 30 de abril de 1999 promovió ante el Tribunal Marítimo de Panamá un proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado contra la Barcaza Oil Barge Vin D510254 Enlightned Energy por la suma de cuarenta y siete mil setecientos dólares (US $47,700.00), por la presunta falta de pago de servicio de remolque. Señala que dicha barcaza fue secuestrada el mismo día.

Indica el recurrente que el 21 de mayo se presentó un incidente de incompetencia, que fue contestado por Naviera Keypana, S. A. el 25 de ese mismo mes y año. Además indica el quejoso que igualmente se presentó un incidente de nulidad por suplantación de la persona del demandante, este último contestado el 11 de junio de 1999. Que la contestación de la demanda fue presentada el 7 de junio de ese mismo año.

Afirma la parte afectada, que el 17 de agosto de 1999 se celebró la audiencia en la que el Juez quiso conocer en primer lugar el incidente de incompetencia, el cual fue declarado no probado. Que en este mismo acto de audiencia la parte demandada anunció recurso de apelación, con base en el artículo 488, ordinal 3 de la Ley de Procedimiento Marítimo y en el acto el Juez la aceptó concediéndola inmediatamente en el efecto suspensivo, y se ordenó de seguido la suspensión del proceso, lo que a su vez trajo como consecuencia que el juzgador no conociera del incidente de nulidad por suplantación de la persona.

Para finalizar expone la parte quejosa que, a pesar de que la apelación fue decretada oralmente en efecto suspensivo, en forma inexplicable e ilegal, el Tribunal Marítimo de Panamá, mediante Auto 145 de veinticuatro (30) sic marzo de 2000 resuelve conceder la alzada contra el Auto de 17 de agosto de 1999, en el efecto devolutivo, supuestamente haciendo caso omiso al artículo 488, numeral 3 de la Ley 8 de 1982.

ACTUACION DEL PLENO

Mediante Resolución de 13 de abril de 2000, el Magistrado Sustanciador, en apego a lo establecido en el artículo 287 del Código Judicial, ordenó llamar a la parte actora para que, bajo juramento se ratificara de los cargos contra el funcionario acusado. En este orden de ideas, el 14 de abril del año que decurre, el señor Samuel Israel Representante Legal de CHICAGO OIL COMPANY, S. A., se ratificó en la queja propuesta.

Posteriormente, por medio de la Resolución de 24 de abril del mismo año, el Magistrado Ponente le corrió traslado de la queja al licenciado Calixto Malcom para que contestara en el término de cinco días.

CONTESTACION DEL JUEZ MARÍTIMO

El Juez Marítimo dando cumplimiento a la solicitud del Pleno, contestó la queja formulada en su contra, mediante Nota de 3 de mayo de 2000 (ver de foja 37 a la 42). Básicamente expuso el juzgador lo siguiente:

"Las transcripciones de las audiencias, cuando hay sentencia, se dividen en dos partes: a)Todo lo acontecido al Juez, a las partes y las pruebas y alegatos rendidos; y b) la sentencia. Y esto es así, porque esta decisión requiere ser afinada, para evitar redundancia y para ordenar las citas y disposiciones legales invocadas por el Juzgador, de tal manera que sea un documento más prolijo en el léxico jurídico para una mejor comprensión de las partes y de la alzada, ante una eventual apelación. Esto último no atenta contra la correcta administración de justicia; recordando que al fin y al cabo ante los estrados se llega a una decisión o fallo, que el (Tribunal no podrá alterar), que se materializa en la sentencia, como expresión escrita de la determinación oral del Juez de lo ventilado en la audiencia.

.....

...Pero, por más interés que siempre hemos tenido en salvaguardar los legítimos intereses de las partes, jamás, en ningún momento le hicimos promesa alguna, ni le sugerimos especie de acuerdo o arreglo a la contraparte.

.....

Este Tribunal, luego de un análisis que se puede apreciar en la resolución respectiva, decidió que era apelable en el efecto devolutivo. Esto significa que no paraliza los actos procesales y administrativos del Tribunal puesto que se retiene la competencia para seguir conociendo del proceso mientras pende la apelación en la alzada; sobre todo si el Tribunal llegase a detectar que las partes que se valen del recurso, actúan, como hemos expresado en la respuesta al Hecho A de la Queja, manifiestamente dilatoria.

.....

Este Juzgador desea manifestar que en presente litigio se persigue una suma de dinero y no un bien u objeto específico, como sería el caso de una disputa por la titularidad de una nave. Por esa razón si el bien secuestrado, que está concebido para garantizar una acreencia privilegiada, se encuentra en condiciones de perder su valor, por el transcurso del tiempo y las condiciones de falta de mantenimiento de la misma, el Tribunal deberá ordenar la venta, previa recomendación de los peritos correspondientes y del Alguacil, para que la suma de dinero producto del remate constituya una garantía sustitutiva del bien que se está deteriorando.

Por tanto, este Juzgador no ha cometido absolutamente ninguna irregularidad o desatino por el hecho de ordenar una venta judicial, mientras pende una apelación en el efecto devolutivo";(Subrayado es del Pleno)

En estas condiciones, el Pleno de la Corte Suprema procede al análisis de la queja con el fin de darle la debida calificación legal, lo que pasa a realizar seguidamente:

DECISION DEL PLENO

Como se colige de toda la actuación procesal, la controversia planteada estriba fundamentalmente en que el Representante Legal de la empresa CHIGAGO OIL COMPANY propietaria de la barcaza Oil Barge Vin D510254 Enlightned Energy, considera que el Juez Marítimo ha llevado a cabo actuaciones, dentro del proceso de crédito marítimo privilegiado, no acordes con la Ley, causándole presuntos perjuicios económicos y morales.

Dicho proceder se enmarca esencialmente en que, supuestamente el Juez Marítimo al conocer de un incidente de falta de competencia y negarlo, por medio del Auto 145 de 30 de marzo de 2000, concedió el recurso de apelación propuesto por la empresa quejosa, en el efecto devolutivo, cuando a juicio del recurrente, el artículo 488, ordinal 3 de la Ley de Procedimiento Marítimo establece que la alzada debe surtirse en efecto suspensivo.

El análisis de los cargos que expone la empresa que ha promovido la queja, revela que, en esencia, la controversia disciplinaria se centra en la interpretación de la normativa legal respecto al punto específico del efecto en que debió concederse la apelación del Auto No. 145 de 30 de marzo de 2000, proferido por el Juez Marítimo en un proceso que se adelanta ante ese despacho.

Para la empresa quejosa el Recurso de Apelación debió concederse en el efecto suspensivo, en tanto que, para el servidor judicial acusado, dicho recurso debió otorgarse en efecto devolutivo. De lo indicado, se deduce a las claras que en este proceso disciplinario se pretende trasladar una temática jurídica cuyo escenario procesal idóneo lo constituye el denominado Recurso de Hecho.

Atendiendo a esta realidad, es evidente que, la determinación del efecto en que debió concederse un recurso de apelación correspondería, en todo caso, al examen que debe realizar la Sala Primera de lo Civil de esta Corporación, que representa la instancia judicial superior al Juez Marítimo. En esta línea de pensamiento, el Pleno no puede dejar de tomar en consideración para los efectos de esta queja, el pronunciamiento que sobre este tema particular dejó sentada la Sala Primera de lo Civil a través de la Resolución de 7 de junio del año en curso, mediante la cual se decidió, precisamente, el Recurso de Hecho que se promovió contra la Resolución 145 de 30 de marzo de 2000, proferida por el Juez Marítimo.

La Sala Primera de lo Civil al analizar el tema concreto del efecto en que debió concederse el Recurso de Apelación propuesto, formuló una serie de consideraciones jurídicas que por su pertinencia resulta conveniente transcribir a continuación:

> "La Sala estima que lo que realmente propuso MONCADA & MONCADA, así como lo negado por el juez, es un incidente de declinatoria de competencia, el cual necesariamente tiene que ser resuelto acudiendo al trámite que contempla el Código Judicial de los artículos 702 a 708, ya que el trámite procesal de los conflictos de competencia no se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Marítimo.
> .....
> En el presente caso, esa es la norma aplicable, no el artículo 488, ordinal, ni el artículo 144 del CPM, disposiciones que se refieren a los incidentes de nulidad, materia muy distinta al tema que ahora estamos ventilando que, como queda dicho, consiste en un incidente de declinatoria de competencia.
> .....
> No estamos tampoco frente a un caso de competencia improrrogable, por lo cual se debe, en seguimiento de lo que nos dice el artículo 706 del Código Judicial, conceder la apelación sin suspender la tramitación del proceso; de allí que el recurso de apelación, según el artículo citado prescribe, también ha de concederse en el efecto devolutivo.
>
> Por último, cabe señalar que no es la primera vez que la Sala conoce de un recurso de apelación interpuesto contra resoluciones que niegan un incidente de declinatoria de competencia o un incidente de incompetencia, como erróneamente también han sido llamados. Esos recursos han sido concedidos en el pasado en el efecto devolutivo, como lo confirma el precedente representado por el proceso seguido por SEGUNDO MERO VELEZ contra MN EL REY (fs. 136-149 del expediente)".

Tal como se infiere de lo expresado, la discrepancia de criterios respecto al efecto en que debió concederse el Recurso de Apelación obedeció fundamentalmente a la naturaleza jurídica de la incidencia procesal que promovió la empresa quejosa en el proceso marítimo en la que ella figura como parte. Esta controversia de opiniones fue zanjada, como queda dicho, por la Sala Primera de lo Civil en la decisión antes mencionada, razón por la cual, sí este era el

objeto medular de la queja planteada, no le corresponde al Pleno de esta Corporación entrar a revisar por la vía disciplinaria los criterios que ha fijado la instancia judicial competente para ello.

Las consideraciones expresadas cobran en este caso mayor relevancia, por cuanto que, la tesitura de los señalamientos que la empresa quejosa formula al servidor judicial acusado guardan directa y estrecha relación con aspectos que pertenecen al terreno de la interpretación de las disposiciones legales, que, en principio y salvo que existan pruebas muy elocuentes de su total y manifiesta carencia de fundamento, no constituye una materia susceptible de ser enjuiciada en el marco de un procedimiento disciplinario. La exactitud, corrección o incorrección de una determinada interpretación de un precepto legal sólo puede ser revisada mediante la interposición de los recursos ordinarios que en su oportunidad promueva todo aquel que se estime agraviado en sus intereses. Interpretar en qué efecto debe concederse una apelación, cuando no existe un panorama normativo claro que lo determine, es una actividad que de suyo no puede dar asidero a la interposición de una sanción disciplinaria porque justamente la dilucidación del sentido y alcance de una norma jurídica es materia propia del arbitrio judicial.

Los señalamientos precedentes son enteramente aplicables al caso en cuestión, ya que, el reparo que se formula al servidor judicial acusado, versa sobre el controversial tema del efecto en que debió concederse la apelación del Auto 145 de 30 de marzo de 2000, materia que, como se indicó, fue objeto de un detenido análisis por la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema.

Por lo que toca a los demás señalamientos secundarios que expone la empresa quejosa, el Pleno debe destacar que, dichos cargos no cuentan con el respaldo probatorio idóneo para darlos por acreditados, motivo por el cual los mismos deben ser desestimados.

En mérito de las consideraciones que anteceden, los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGAN LA QUEJA presentada por CHIGAGO OIL COMPANY propietaria de la barcaza Oil Barge Vin D510254 Enlightned Energy, mediante apoderado judicial, contra el Juez del Tribunal Marítimo de Panamá, por las actuaciones dentro del proceso Naviera Keypana, S. A. -vs- Barcaza Oil Barge Vin D510254 Enlightned Energy.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) JORGE FEDERICO LEE
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMIREZ Y ALEMAN, EN REPRESENTACION DE GENETIC INSTITUTE INC., CONTRA LA FRASE "HASTA TRES DIAS ANTES DE LA AUDIENCIA", CONTENIDA EN EL ARTICULO 187 DE LA LEY 35 DE 10 DE MAYO DE 1996, POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Honorable Magistrado ADÁN ARNULFO ARJONA solicitó al Pleno de la Corte

Suprema, que le declare impedido para conocer la presente advertencia de inconstitucionalidad promovida por la firma forense Alfaro, Ferrer, Ramírez y Alemán, contra la frase "hasta tres días antes de la audiencia", contenida en el artículo 187 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial.

En dicha manifestación de impedimento, el Magistrado ARJONA señaló que:

> "En virtud de lo expresado, respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que integran el Pleno, me separen del conocimiento del presente recurso, en razón de que, pese a que ya no formo parte de la citada firma de abogados, pues me separé desde el pasado 30 de diciembre de 1999, considero que esta circunstancia puede configurar un posible motivo de impedimento a tenor de lo que establece el numeral 3 del artículo 2562 del Código Judicial, ..."

Advierte el Pleno que la circunstancia manifestada por el Magistrado ARJONA configura la causal de impedimento establecida en el numeral 3° del artículo 2562 del Código Judicial, que a la letra dice:

> "Artículo 2562: son causales de impedimentos:
> ...
>
> 3. Tener el magistrado, su cónyuge o cualquier pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo d afinidad interés en la decisión del caso". (Subraya de la Corte).

Advierte el Pleno que la circunstancia manifestada por el Magistrado ARJONA configura la causal de impedimento que invoca, esto es, el numeral 3° del artículo 2562 del Código Judicial, consistente en el interés que puede tener el Juez o Magistrado en el caso, por haber formado parte de la firma adviertente.

Por lo tanto, procede esta Colegiatura a declarar legal dicho impedimento, en base al citado artículo 2562, numeral 3, del Código Judicial.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado ADÁN ARNULFO ARJONA; en consecuencia, LO SEPARA del conocimiento del caso, y DISPONE que se llame a su suplente, para que le reemplace en el conocimiento del negocio.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) JORGE FEDERICO LEE
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN SEGUIDAS CONTRA EL DR. ARTURO ULISES VALLARINO BARTUANO, POR LE SUPUESTO DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO CULPOSO) EN PERJUICIO DE PEDRO AÑINO AGRAZAL.IMPEDIMENTO PRESENTADO POR EL MAGISTRADO ARTURO HOYOS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El magistrado Arturo Hoyos ha solicitado al Pleno de la Corte Suprema, se le separe del conocimiento de las sumarias en averiguación seguidas contra el Dr. Arturo Ulises Vallarino Bartuano, por el supuesto delito contra la vida e integridad personal (homicidio culposo) en perjuicio de Pedro Añino Agrazal.

Manifiesta el magistrado Hoyos que se encuentra impedido para conocer de esta causa, toda vez que "... en la actualidad tengo pendiente una acusación particular interpuesta por el doctor Arturo Vallarino en mi contra ante la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa ...".

Advierte el magistrado Hoyos que, "... mediante auto de 30 de junio de 2000, el Pleno de la Corte declaró legal el impedimento manifestado por la Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera por la misma causal que cito ...".

Por lo que fundamenta su solicitud, en el numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial. El precepto en referencia señala que es causal de impedimento: "tener alguna de las partes proceso, denuncia o acusación pendiente o haberlo tenido dentro de los dos años anteriores, contra el Juez o Magistrado, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos."

Se advierte claramente que, con vista a lo dispuesto por el citado precepto, resulta fundado el impedimento que se impetra, por lo que se procede a resolver de conformidad.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el magistrado Arturo Hoyos y en consecuencia, DISPONE llamar a su suplente personal, Dr. Jorge Fábrega Ponce, para que integre el tribunal accidental.

Notifíquese.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FABRAGA ZARAK (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DIAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON C. DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. DARÍO E. CARRILLO G., EN REPRESENTACIÓN DE BALDOMIR KRISAJ KREGAR Y EDITH CALVERA, CONTRA EL JUEZ OCTAVO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada GRACIELA J. DIXON C, ha solicitado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se le declare impedida y, en consecuencia, se le separe del conocimiento del Amparo de Garantías Constitucionales formulado por el Lic. DARÍO E. CARRILLO G., en representación de BALDOMIR KRISAJ KREGAR y EDITH CALVERA contra el Juez Octavo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La Magistrada DIXON fundamenta en los siguientes términos lo medular de su impedimento:

"Manifiesto lo anterior debido que el apoderado de la parte demandante, licenciado DARÍO E. CARRILLO G, nos ha efectuado diligencias tendientes a concretizar la enajenación de un bien inmueble. En consecuencia, debe declararme impedida, por cuanto que subsisten relaciones jurídicas que podrían verse afectadas por la decisión que se adopte en la presente demanda, según lo preceptuado en el artículo 749 numeral 13 del Código Judicial:

"Art. 749.Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
...

13. Estar vinculado el Juez o Magistrado con una de las partes por relaciones jurídicas susceptibles de ser afectadas por la decisión;"

El Pleno observa que el artículo aludido por la Magistrada DIXON no pertenece a las normas especiales de impedimento que se establecen en el artículo 2619 del Código Judicial para las acciones de Amparo de Garantías Constitucionales que dispone que: "Los magistrados y jueces que conozcan de esta clase de asunto se manifestarán impedidos cuando sean parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de algunas de las partes o de sus apoderados o hayan participado en la expedición del acto".

Con respecto a la situación fáctica de la presente manifestación de impedimento, estima el Pleno que la misma no es procedente, ya que no se ajusta a las causales que, para esta clase de acción, establece taxativamente el Código Judicial; por lo tanto, procede negar lo pedido.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por la Magistrada GRACIELA J. DIXON C., para actuar en la presente Acción de Amparo de Garantías Constitucionales formulado por el Lic. DARÍO E. CARRILLO G., en representación de BALDOMIR KRISAJ KREGAR y EDITH CALVERA contra el Juez Octavo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

JULIO DE 2000

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO

APELACION INTERPUESTA POR TUNA PACIFICO, S. A. CONTRA LA SENTENCIA No.10 DE 17 DE ABRIL DE 1998 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE JOSE A. OSTIZ & LUIS M. OSTIZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta Sala de lo Civil, la Resolución No.10, de fecha 17 de abril de 1998, expedida por el Tribunal Marítimo de Panamá, dentro del proceso ordinario marítimo que le siguen los señores JOSE ANTONIO OSTIZ y LUIS MARIA OSTIZ a la sociedad TUNA PACIFICO S, C.A.

Cumplidas las reglas de reparto, la apelación interpuesta se encuentra en estado de decidir y a ello se procede, conforme lo prevé el artículo 483 del Código de Procedimiento Marítimo.

RESEÑA DE LOS ANTECEDENTES

Los autos de la presente litis, dan cuenta que los señores JOSE ANTONIO OSTIZ y LUIS MARIA OSTIZ, promovieron proceso ordinario contra TUNA PACIFICO S, C.A., sociedad venezolana, por la cuantía de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL BALBOAS (B/.238.000.00), que se les adeuda "en concepto de servicios de reparación y mantenimiento de la motonave PACIFICO S." (f.1).

El fundamento fáctico de la demanda establece que:

> **"Primero: La sociedad demandada TUNA PACIFICO S, C.A. es una sociedad venezolana, con generales de inscripción indicadas.**
>
> **Segundo: La sociedad demandada TUNA PACIFICO S, C.A. es propietaria de la M/N Pacífico S.**
>
> **Tercero: El Tribunal Marítimo de Panamá es competente, por tratarse de créditos marítimos que se ejecutan en Panamá, con base en los artículos 164, numeral 2 y 17 numeral 2 de la Ley 8 de 1982.**
>
> **Cuarto: Nuestros poderdantes, en sus condiciones de Ingenieros, Inspectores y Técnicos de Mantenimiento, prestaron servicios de inspección, mantenimiento y reparaciones navales necesarias a la motonave Pacífico S, propiedad de la demandada, desde el 1° de mayo de 1988, hasta el 31 de diciembre de 1991. Y en el caso de Luis María Ostiz, solamente, hasta septiembre de 1992. No obstante a principios del año 1990 dejaron de pagarseles (sic) los servicios a los hermanos Ostiz, motivo de esta demanda.**
>
> **Quinto: Mediante escritura pública número 10.148 de 30 de diciembre de 1991, de la Notaría Primera de Circuito, la sociedad demandada reconoció las deudas y créditos antes descritos, demandados por nuestros representados, por una suma total de US$380.000.00 ya que incluía servicios prestados a otra nave, y establecieron arreglo de pago incumplido.**
>
> **Sexto: Los trabajos que realizaron nuestros poderdantes a la motonave Pacífico S eran ordenados por el armador y en el caso de las reparaciones hechas durante el año 1992 incluso por el Capitán, según consta en la bitácora de dicha nave". (f.3-4)**

Dentro de libelo de demanda, la parte demandante, con la finalidad de

adscribirse a la competencia del Tribunal Marítimo de Panamá, solicitó secuestro de la M/N PACIFICO S, de propiedad de TUNA PACIFICO S, C.A., hasta la concurrencia de la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL BALBOAS (B/.238.000.00), tal como consta a foja 2 y 3 del expediente. Dentro de las pruebas aportadas en dicha acción, se encuentran:

1. Declaración jurada del señor José María Ibarlucea, Jefe de Máquina de la M/N Pacífico S.

2. Escritura Pública N°10.148, de 30 de diciembre de 1991, por la cual la señora Carmelina de Natoli en su calidad de Vice-Presidente de ATUN, C.A. hace una declaración sobre reconocimiento de deuda y arreglo de pago, a favor de los señores LUIS MARIA OSTIZ LARRINAGA y JOSE ANTONIO OSTIZ LARRINAGA.

3. Carta firmada en original enviada por fax, del 21 de junio de 1991, dirigida a J.R. REPARZ PEE A MENDIZABAL VALERIC INC., S. A., por la cual CARMELINA DE NATOLI informa sobre las deudas en Panamá de los barcos y oficina "dejando constancia que a dicha fecha ya se reconocía deuda a los hermanos Ostiz, quienes pedían adelanto de CIEN MIL DOLARES". (f.4)

El Tribunal Marítimo, mediante Auto de 22 de diciembre de 1992 (fs.61-52), al decretar la acción cautelar, tomó en consideración las pruebas indicadas por el petente, para demostrar la legitimidad de su pretensión.

Observa la Sala a foja 52 el escrito del licenciado HIPOLITO MARTINEZ, solicitando la fijación de la caución para actuar como gestor oficioso en el proceso incoado contra TUNA PACIFICO S, C.A. De igual forma, se aprecia a foja 54 el escrito del gestor oficioso, en el cual acepta la jurisdicción panameña en dicho proceso. Consignada la fianza, advierte al tribunal en escrito visible a foja 59-60, que dicho despacho no ha adquirido la competencia prevista en el numeral 2 del artículo 164 de la citada excerta legal, debido a que el secuestro fue decretado sin haberse aprehendido la nave.

Por su parte, el apoderado judicial de los demandantes aportó al tribunal constancia expedida por los Correos Nacionales que guarda relación con el envío de la resolución y demanda por correo certificado a TUNA PACIFIC S, C.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 400 de la Ley 8° de 1982, y con el cual se da cumplimiento a la resolución de 22 de diciembre de 1992, dictada por el Tribunal Marítimo de Panamá (f.63).

Mediante Auto de 7 de enero de 1993, el Tribunal de Panamá autorizó la movilización, bajo secuestro, de la M/N PACIFIC S, desde el fondeadero de Isla de Taboga al Puerto de Balboa, bajo la responsabilidad de la AGENCIA DE ICAZA, S. A., con la finalidad de suministrar a la motonave, agua y provisiones (f.69). Se señala en dicho auto, además, que el custodio por parte del tribunal permanece en todo momento a bordo de la nave; así como también, ordena que el Aguacil de ese Despacho, tome las medidas que el caso requiere.

El 30 de marzo de 1993, el Tribunal Marítimo ordenó el levantamiento del secuestro que pesa sobre la M/N PACIFIC S, en virtud de la consignación realizada por el gestor oficioso, mediante certificado de garantía N°6B-161/93 del Banco de Bilbao Vizcaya Panamá, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.290.265.00) a favor del tribunal.

Con motivo de la reiteración por parte del gestor oficioso, en cuanto a la ejecución del secuestro, sin tener competencia dicho tribunal, por lo que solicita la nulidad del mismo y devolución de la fianza, en virtud de que se había notificado de la demanda y en consecuencia, haberse sometido oficiosamente a la jurisdicción del tribunal. Tal solicitud fue denegada mediante Auto de 26 de agosto de 1994 en el cual se "ORDENA que el término de treinta (30) días calendarios improrrogables, contados a partir de la notificación de la presente

resolución, al gestor oficioso presente poder del demandado ratificando su gestión en este proceso, de lo contrario, quedará insubsistente su gestión oficiosa la cual debe estar ceñida en la Ley" (f.110).

Al ser apelada dicha resolución, la posición de la Sala, entre otras cosas, fue la de considerar que el hecho de que el gestor oficioso hubiere aceptado la jurisdicción panameña en el negocio que nos ocupa, ello no equivale a la presencia de la sociedad demandada, lo que hace imprescindible la acción in rem contra la M/N PACIFIC S, propiedad de la demandada, a objeto de someterse a la jurisdicción del Tribunal Marítimo de Panamá, con fundamento al ordinal 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Marítimo.

En cuanto a la figura del Gestor Oficioso, la Sala estimó que para el ejercicio del mismo, se requiere:

> "1. Que la parte a favor de quien se ejerce puede sufrir graves perjuicios por la falta de actuación.
>
> 2. Que se consigne caución a satisfacción del Juez de la causa,
>
> 3. Que se presente ratificación de la parte representada de lo actuado por el gestor oficioso dentro del término establecido" (f.135).

En consecuencia, esta Superioridad CONFIRMO la resolución apelada.

Por su parte, el Tribunal Marítimo, atendiendo solicitud posterior del gestor oficioso, accedió a la prórroga para presentación de poder y de igual forma DECLARA INSUBSISTENTE al gestor oficioso de la demanda.

En la audiencia preliminar obrante de fojas 164 a 167, el juzgador se refirió al poder general para pleitos que otorgare la empresa TUPASCA a la firma forense CARREIRA PITTI PC, ABOGADOS, quien a su vez lo sustituyera a la firma forense MONCADA & MONCADA, ratificando también la actuación del gestor oficioso. Para tal efecto, el juzgador estimó necesario que para el bastanteo del poder se requería la presentación de un documento formal de Venezuela donde se especifique que las sociedades TUNA PACIFICO S, C,A. y TUPASCA son la misma sociedad, o por el contrario, se trate de dos sociedades distintas, concediendo un plazo de treinta (30) días calendarios para aclarar dicho punto. Antes del vencimiento de éste, la firma forense MONCADA & MONCADA presentó al tribunal documentación que acredita que las siglas TUPASCA corresponde a TUNA PACIFICO S, C.A., cuyos documentos en fotocopia forman parte del proceso que se ventila en dicho Tribunal Marítimo. (f.173)

En virtud de lo anterior, el juzgador accedió a la solicitud de devolución de fianza incoada por el licenciado HIPOLITO MARTINEZ y se tiene como apoderado principal a la firma forense CARREIRA PITTI PC, ABOGADOS y como sustituto a la firma forense MONCADA & MONCADA (f.189).

La audiencia ordinaria se verificó el 30 de marzo de 1998 (fs. 244-281) y cuya transcripción se aprecia de fojas 283 a 336 del expediente principal.

SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO

El juzgador estima que dada la naturaleza del trabajo efectuado por los demandantes, como ingenieros de puerto, los mismos prestaban sus servicios donde se les requiriera con motivo del mantenimiento y reparación de la nave. Que, además, dicha prestación está dentro del marco del Derecho Comercial, así como también en el ámbito laboral. En tal sentido, considera el juzgador que en el presente caso y conforme al derecho sustantivo aplicable, en primer lugar, sería la legislación laboral, en segundo lugar, la legislación comercial por la prestación de servicios de los demandantes a la nave y, por último, el Derecho Civil, todos de la legislación venezolana.

En cuanto a la relación laboral se basó el juzgador en la Escritura Pública Notarial, obrante a foja 10 del expediente, por la cual CARMELINA GENTILE DE NATOLI manifiesta adeudar a los demandantes la suma de B/.380.000.00, por haber laborado como ingenieros de puertos para las naves "PACIFICO N" y "PACIFICO S". Además expresa que en el acto de la audiencia, se señaló que la señora NATOLI actuaba como representante y Vice-Presidente de dichas sociedades (fs.270). Consideró también el juzgador que existe similitud entre los nombres de las naves para la cual laboraron los demandantes, y las mismas guardan relación con las empresas TUNA PACIFICO E y TUNA PACIFICO S, deduciendo que ambas naves estaban amparadas por dichas empresas. En el ámbito comercial, consideró el juzgador que en los medios probatorios pueden utilizarse por las partes, la costumbre, los usos y la práctica marítima. En tal sentido, hace relación a la nota obrante a foja 15 del expediente referente a deudas que mantiene el barco en Panamá, específicamente la señalada en el punto b) que dice:

> "(b): Señores OSTIZ requieren un abono de CIEN MIL DOLARES (US$100.000.00), y el resto poco a poco".

Expresa el juzgador que existen indicios de la relación de los demandantes con la demandada y que en el procedimiento marítimo se admiten documentos, pruebas prima facie, así como pruebas en contrario, y se puede secuestrar, inclusive con pruebas indiciarias. Por tanto, se menciona a continuación (fs. 344-345), el documento firmado por el Aguacil del Tribunal Marítimo en el que se autoriza a los señores OSTIZ abordar la M/N PACIFICO "S", para realizar trabajos en la misma, lo que constituye un indicio que dichos señores estaban vinculados con la nave, como así lo expresara la representante legal de la nave, Se mencionan también los trabajos realizados en los puertos por los demandantes, obrantes de fojas 33 a 41.

En cuanto al período que aparece laborado por los demandantes, el juzgador se refiere a una carta de fecha 31 de enero de 1991, por la cual el ingeniero de puerto (INAKI OSTIZ) de la M/N "PACIFICO S" remite un listado sobre las averías de la nave a MARTINELLI, PORSENNA & PATRONE. Indica también el juzgador que, de acuerdo a documento aportado al proceso, la sociedad TUNA PACIFICO S se constituyó en 1990 y que, aparentemente los demandantes estaban laborando desde el año 1988, tal como lo indicara la Vice-Presidente y representante legal de la sociedad, señora CARMELINE GENTILE quien a su vez, "tiene un Poder General amplio para administrar, enajenar, hacer actos de disposición, actuar como verdadera dueña" (f.347).

Adicional a lo anterior, expresa el juzgador que tanto la legislación venezolana como la panameña, presume que aquella persona que representa a un empresa obliga a su propietario, citando al respecto los artículos 51 y 54 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela, que a la letra dice:

> "ARTICULO 51: Los directores, gerentes, administrativos, jefes de relaciones industriales, jefes de personal, capitanes de buques o aereonaves, liquidadores y depositarios y demás personas que ejerzan funciones de dirección y administración, se considerarán representantes del patrono aunque no tengan mandato expreso y obligarán a su representado para todos los fines derivados de la relación de trabajo".
>
> "ARTICULO 54: A los efectos de esta Ley se entiende por intermediario la persona que en nombre propio y en beneficio de otra utilice los servicios de uno o más trabajadores.
>
> El intermediario será responsable de las obligaciones que a favor de esos trabajadores se derivan de la Ley y de los contratos; y el beneficiario responderá además, solidariamente con el intermediario, cuando le hubiere autorizado expresamente para ello o recibiere la obra ejecutada. Los trabajadores contratados por intermediarios disfrutarán de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que

correspondan a los trabajadores contratados directamente por el patrono beneficiario".

Concluye el juzgador que la señora GENTILE actuó como operadora, y en representación de los propietarios es ella la que contrata los servicios, por lo que compromete o grava subsidiariamente a los propietarios de la nave, y "no tiene que tratarse de un gravamen in rem, es un gravamen in-personam de la persona esa que ha de reputarse su dueño, y esas obligaciones van a recaer sobre el verdadero propietario, la Sociedad TUNA PACIFICO, S., C.A." (f.348).

Por consiguiente, el juzgador primario, en resolución de 17 de abril de 1998 (fs.337-349) reconoce los trabajos realizados a bordo de la M/N PACIFICO S, de propiedad al momento de la demanda, de la empresa TUNA PACIFICO S., C.A.. Este fallo fue complementado, mediante resolución de 12 de octubre de 1999 (f.350), por la cual "CONDENA a la demandada TUNA PACIFICO S.C.A. al pago de la suma de DOSCIENTOS TREINTA OCHO MIL DOLARES (US$238.000.00), los cuales están divididos en la siguiente forma: JOSE ANTONIO OSTIZ, la suma de CIENTO NOVENTA MIL DOLARES (US$190.000.00) en concepto de servicio de reparación y mantenimiento de la M/N PACIFICO S, durante los años 1990 y 1991, más la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL DOLARES (US$48,000.00) a LUIS MARIA OSTIZ por los mismos servicios prestados durante los meses de enero a septiembre de 1992..." (f.350).

ESCRITO DE APELACION DE LA FIRMA FORENSE MONCADA & MONCADA

La firma forense MONCADA Y MONCADA, sustentó, en tiempo oportuno, recurso de apelación contra el fallo impugnado, resumiendo su escrito en tres puntos:

"1. El Juez evaluó indebidamente la (sic) pruebas obrante (sic) en el proceso otorgándole su validez a pesar de habérsele señalado los defectos de la (sic) mismas violando las disposiciones contenidas en los artículos 204, 205, 206, 310, 311 y 314 del Código de Procedimiento Marítimo.

2. Que mediante la interpretación errónea del reconocimiento de deuda el Juez condenó a nuestra representada procurando decir que la señora CARMELINA GENTILE DE NATOLI hablaba también a título de la sociedad demandada.

3. Que el Juez no podía rasgar el velo corporativo de la sociedad so pretexto de la existencia de unidad económica por cuanto que la misma no había sido alegada con la demanda y no se había demandado a las otras sociedades presuntamente involucradas". (fs. 351-352).

En cuanto al primer punto se ataca la resolución de la siguiente manera:

La declaración jurada extrajuicio rendida por JOSÉ MARÍA IBARLUCEA (f.6-9), debió ser ratificada en el proceso y tal omisión infringió los artículos 204 y 206 del Código de Procedimiento Marítimo.

Que pese haberse objetado los documentos privados aportados al proceso, visibles de fojas 15 a 22; el juzgador le dió valor probatorio a los mismos, infringiendo los artículos 310, 311 y 314 de la citada excerta legal. Además, no se hizo comparecer a la señora CARMELINA GENTILE DE NATOLI para el reconocimiento de tales documentos, citando también como violados los artículos 315, 316 y 317 de la legislación marítima.

El punto 2 referente a la deuda reconocida por la señora CARMELINA GENTILE DE NATOLI, indica que ésta representaba a las sociedades venezolanas ATUN, S. A. y TUNA PACIFICO E, S. A. y no en representación de TUNA PACIFICO S, C.A. que es una sociedad distinta.

Muestra la opositora disconformidad con el criterio del juzgador, en cuanta

que no se está en presencia de un proceso laboral, cuyas pruebas deberán interpretarse a favor del trabajador, y que en el presente caso se está aplicando el Código de Procedimiento Marítimo. Además, que no se aportó el derecho extranjero y no existe la presunción legal del trabajador.

Por último señala que el juzgador permitió que se introdujera un nuevo elemento por parte de la demandante, que es la unidad económica, la cual no fue aducida ni mucho menos probada.

OPOSICION A LA APELACION

Advierte el opositor que, originalmente los señores LUIS MARIA y JOSE ANTONIO OSTIZ LARRINAGA, demandaron por incumplimiento laboral a varias aeronaves para las cuales laboraron en calidad de Ingenieros, Inspectores y Técnicos de Mantenimiento, tales como "PACIFICO C", "PACIFICO N" y "PACIFICO S", ante el Tribunal Marítimo de Panamá. En virtud del apremio, posteriormente la demanda fue reorientada contra la propietaria de dicha nave, a saber: TUNA PACIFICO S. C.A., sociedad venezolana, en base al derecho laboral venezolano y, por lo tanto, con fundamento al derecho sustantivo aplicable.

Estima el opositor que no se puede cuestionar la valoración probatoria ejercida por el juzgador. Señala que las reclamaciones laborales confrontan dificultad por tácticas dilatorias y por la creación de diferentes personas jurídicas e intermediarias, por tanto, las legislaciones laborales latinoamericanas han elaborado el concepto de "empleador" o patrón, apartándose de la forma tradicional más restringidos de personas jurídicas o sociedades anónimas. Con respecto a ello, indica el opositor que el nombre de CARMELINA GENTILE DE NATOLI aparece en muchos expedientes que han sido resueltos en el Tribunal Marítimo, como en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Por ello, mantiene la validez otorgada por el juzgador a la escritura pública notarial obrante a foja 10 del expediente, en el reconocimiento de la deuda por parte de la representente legal de la parte demandada.

Reconoce el opositor que, si bien algunas de las pruebas documentales aportadas al proceso no constituyen plena prueba, de conformidad con la Ley 8 de 1982, no es menos cierto que en la legislación marítima tales documentos constituyen serios indicios que, unidos a las otras pruebas y con fundamento a la sana crítica del juzgador, haya concluído correctamente en condenar a la empresa naviera.

POSICION DE LA CORTE

Es evidente que la censura del apelante, es sobre las pruebas reconocidas por el juzgador y que originó la condena de su representada. Como ha mantenido la Corte Suprema de Justicia, esta Sala está limitada a conocer de las apelaciones contra resoluciones dictadas por el Juez Marítimo, únicamente sobre cuestiones de derecho, tal como lo prevé el artículo 483 del Código de Procedimiento Marítimo.

Por las razones apuntadas, esta Sala se abstendrá de pronunciarse sobre aspectos fácticos, y centrará su decisión en los aspectos de derecho sustancial analizando algunas pruebas que inciden en el derecho sustancial.

En primer lugar, las partes convinieron que la legislación aplicable era la legislación venezolana (f.261). Como lo indicáramos con anterioridad, el juzgador de instancia, determinó que la acción incoada debía ser in personam contra la sociedad contratante de los servicios de los ingenieros de puertos, quienes prestaban servicio a favor de las naves de propiedad de la demandada.

La aplicación legal dada por el juzgador a la prestación de servicios de los demandantes a favor de la empresa demandada, fue enmarcada dentro del derecho comercial, así como del derecho laboral y la legislación venezolana, que "no

desampara nunca a una persona que presta su servicio a otra" (f.337), teniendo como fundamento fáctico que son las normas sustantivas las que otorgan derechos e imponen obligaciones, citando al respecto el artículo 212 de la Constitución Nacional. Así las cosas, el juzgador tomó en cuenta la escritura obrante a foja 10 del expediente, por la cual se protocolizó la declaración de la señora CARMELINA GENTILE DE NATOLI en donde reconocía la deuda que tenía TUNA PACIFICO S, C.A. a favor de los demandantes.

Además, la facultad que tenía la referida señora para el reconocimiento de la deuda, quedó claramente plasmado en el acta de la audiencia y, como es sabido, es en ésta donde se da la mediación directa del juzgador con las partes en conflicto. Con respecto a ello, señaló el señor Juez que la escritura a foja 47 dice:

> "Otorgar Poder General de Representación, Administración y Disposición a la Vice-Presidente CARMELINA GENTILE DE NATOLI, para que a nombre de la Compañía TUNA PACIFICO S. C.A., realice y lleve a cabo en el Exterior, todos los actos de representación, administración y disposición, sobre el objeto social de bienes de la Compañía TUNA PACIFICO S. C.A." (f.339).

En la Escritura notarial en que se otorga poder a la señora NATOLI, advierte el tribunal que la referida señora declara:

> "Que los señores laboraron y prestaron servicio a las naves "PACIFICO N" y
>
> "PACIFICO S" en trabajo de mantenimiento, y reparación de dicha nave, y para dichas sociedades desde el primero (1ro.) de mayo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), hasta la presente". (f.339).

Si bien la constitución de la sociedad TUNA PACIFICO S. C.A. se dió en el año 1990, tal como lo acreditó la demandada en los documentos aportados de fojas 168 a 187, no es menos cierto que en la actividad marítima es usual la transferencia de las acciones y venta de una sociedad a otra, y sobre todo, ésta en especial, en la que se destaca que los propietarios de la misma son la familia NATOLI, como así se aprecia en las fojas antes anotadas. Por lo que se desestima la disconformidad de la apelante con el reconocimiento de la deuda desde 1988, por la persona que ostentaba la representación de la demandada. Además, la escritura de reconocimiento de deuda era de 1991.

Por otra parte, advierte la Sala que la suma perseguida por los demandantes, corresponden al período de 1990 y de enero a septiembre de 1992, y el reconocimiento de la deuda se hizo el 30 de diciembre de 1991.

Las otras infracciones señaladas por la apelante, artículos 310, 311 y 314 del Código de Procedimiento Marítimo, guardan relación con la apreciación que tuvo el juzgador sobre los documentos privados aportados en el proceso, que fueron objetados por la demandada y que, evidentemente no fueron reconocidos en el acto de la audiencia por la persona que lo firmó.

Con respecto a lo anterior, observa la Sala que el juzgador expresó razonadamente el examen de los documentos aportados, dándole el mérito que le correspondía a cada uno de ellos, de conformidad con la sana crítica. Vale la pena destacar, entre ellos, las pruebas indiciarias "prima facie" aportadas dentro de la acción in rem decretada por el Juzgado Marítimo, sobre las cuales nos referimos con anterioridad. La flexibilidad del proceso marítimo hace posible la admisión de pruebas indiciarias, las que se rigen por las denominadas reglas de la sana crítica que son las reglas de la lógica, y las reglas de la experiencia del juzgador, y es lo que precisamente se ha originado en el caso en estudio, en el cual, por una parte, se dió el reconocimiento de la deuda por la representante legal de la sociedad TUNA PACIFICO S. C.A. Se tomó en cuenta también la declaración jurada del jefe de máquina de la M/N PACIFICO S., quien

era la persona que daba visto bueno y el del armador para la compra de las piezas o repuestos que eran solicitadas por los demandantes, para la ejecución de los trabajos requeridos para el funcionamiento de la nave en los puertos. (f.6-7). Inclusive, se tomó en cuenta la autorización dada por el señor BOLIVAR IGUALAS, Aguacil del Tribunal Marítimo, en ese entonces, para que los señores OSTIZ pudieren abordar la nave de propiedad de la demandada, a fin de que realizaran trabajos a favor de la misma (f.345)

Estima la Sala que, si bien las pruebas deberán ser apreciadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas por la ley, tales pruebas admiten contradictorio, pero, en el caso en estudio no han sido desvirtuadas las mismas por la parte demandada dentro del proceso.

En cuanto al reconocimiento de la "unidad económica" alegada por la apelante, considera la Sala, que la misma no ha sido planteada por el juzgador, por el contrario, lo que ha prevalecido es la notoriedad de los casos que en ese despacho se ha tramitado contra diferentes empresas y cuyos nombres guardan mucha similitud (PACIFICO C; PACIFICO N., etc), (f.258), en las que figura la señora NATOLI como operadora de las empresas, y, en tal sentido, las acciones por ella ejecutadas, comprometen a los propietarios de las mismas. Pero, salta a la vista que a lo largo del proceso, únicamente se siguió la pretensión contra TUNA PACIFICO S. C.A., aclarando la firma forense MONCADA & MONCADA, inclusive, que la sociedad TUPASCA, S. A. corresponde al mismo nombre de TUNA PACIFICO S. C.A. (f.168).

Pese a las consideraciones antes anotadas, y de las cuales surge la existencia de una obligación por parte de la empresa venezolana TUNA PACIFICO S. C.A., a favor de los demandantes, es menester dejar claro que únicamente deberán prosperar las que se relacionan directamente con dicha empresa demandada. Así tenemos que la declaración jurada rendida por la señora CARMELINA GENTILE DE NATOLI, de fecha 30 de diciembre de 1991, se reconoce deuda a favor de LUIS MARIA OSTIZ LARRINAGA y JOSE MARIA OSTIZ LARRINAGA por la suma de CIENTO NOVENTA MIL DOLARES ($190.000.00), a cada uno de ellos (veáse foja 11 vuelta).

Del libelo de demanda se desprende que los demandantes, persiguen la suma global de CIENTO NOVENTA MIL BALBOAS ($190.000.00) que se les adeuda desde el mes de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1991 (f.2), lo que presume que ambos recibieron abonos a las respectivas obligaciones reconocidas, de las cuales quedó un saldo a favor de cada uno de ellos, en la suma de NOVENTA Y CINCO MIL DOLARES ($95.000.00).

Con respecto a la condena de la suma de CUARENTA Y OCHO MIL BALBOAS ($48.000.00), perseguida por LUIS MARIA OSTIZ, en concepto de servicios prestados del mes de enero a septiembre de 1992, la misma no se ha acreditado a lo largo del proceso, por tanto, no puede pronunciarse la Sala sobre la misma, ya que no consta en el expediente reconocimiento de dicha deuda, así como tampoco documentación que acredite la existencia de la supuesta deuda.

Esta Corporación de Justicia hace un llamado de atención a la firma forense MONCADA & MONCADA, en cuanto a que debe abstenerse de expresiones injuriosas e indecorosas, contra el Honorable Señor Juez Marítimo, tal como lo plasma en el escrito mediante el cual formula la apelación. Esta advertencia tiene fundamento en el artículo 215, numeral 3 del Código Judicial, so pena de incurrir en acciones de que trata el artículo 186 de este Código. En consecuencia, señala en concepto de MULTA la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00) que deberá consignar la recurrente a favor del TESORO NACIONAL.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia N°10, de 17 de abril de 1998, completada por el Auto N°457, de 12 de octubre de 1999, y, en su lugar, CONDENA a la empresa TUNA PACIFICO S.C.A. al pago de la suma de NOVENTA Y CINCO MIL DOLARES (B/.95,000.00) a favor de JOSE ANTONIO OSTIZ LARRINAGA; y la suma de NOVENTA Y CINCO MIL DOLARES ($95.000.00) a favor de LUIS

MARIA OSTIZ LARRINAGA, correspondiente a los servicios prestados desde el mes de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1991.

SE CONDENA a la parte demandada a pagar la suma de DIECINUEVE MIL DOLARES ($19.000.00), en concepto de costas por el trabajo en derecho. Los gastos del proceso e intereses legales, deberán ser calculados por Secretaría oportunamente.

SE SANCIONA a la firma forense MONCADA & MONCADA a pagar, en concepto de multa, la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00) que deberá consignar a favor del TESORO NACIONAL.

Notifiquese y Devuelvase.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN INTERPUESTA POR LA M/N BARCELONA I CONTRA LA SENTENCIA N°2 DE 17 DE FEBRERO DE 2000 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE DILUPA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La representación judicial de MN BARCELONA I ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal Marítimo en el proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado que la empresa DILUPA, S. A. le sigue; resolución proferida el 17 de febrero de 2000 ordenando el pago de B/11,955.00, más los intereses, costas y gastos del proceso.

La sentencia se dictó en aplicación de los trámites del proceso abreviado, luego de celebrarse la audiencia especial prevista para estos casos.

La resolución que se impugna en segunda instancia destaca que no consta en el expediente que la parte demandada presentase escrito de oposición al procedimiento abreviado peticionado por la contraparte, de lo que se desprende la presunción de que no existe controversia, quedando el tribunal en condiciones de dictar el fallo de acuerdo a las constancias procesales, conforme viene establecido por el artículo 540 del Código de Procedimiento Marítimo.

En cuanto al reconocimiento del crédito marítimo privilegiado que se reclama en esta causa, el juez a-quo destacó que obra para acreditarlo la factura distinguida con el N°3420 de 7 de noviembre de 1999 donde se especifica y se describe la mercancía despachada al buque BARCELONA I, material consistente en 35 toneladas métricas de combustible, por un total de B/11,955.00. La factura consta en original y contiene el sello de recibido por parte de la nave.

Se hace notar en la sentencia que la parte demandada fue incapaz de desvirtuar el contenido de esta prueba, limitándose a manifestar sus dudas acerca de la veracidad de su contenido, objeciones éstas que carecen de eficacia para descreditarla. Sostiene el juez que no existen motivos para rechazar la autenticidad del documento, el cual ni fue objetado ni fue contradicho por otras pruebas, por lo que tiene la certeza de que el combustible fue recibido a bordo, hecho que se considera probado.

Acerca de las objeciones formuladas por la parte demandada sobre la veracidad de la cantidad de combustible despachado, el juzgador anota que a fojas 65 del expediente reposa el fax con el membrete de la empresa DYNAMIC EXPRESS

NAVIGATION, S. A., propietaria de la MN BARCELONA I, en donde el representante de esa sociedad, RAFAEL RIVAS, dejó dicho, entre otras cosas lo que sigue:

> "....
> No dudamos que la factura sea correcta puesto que al barco se le sirvió combustible, pero no entendemos cómo no se han puesto en contacto con nuestro representante legal de la empresa, señor Resa, y le han presentado la factura para el cobro, firmada legalmente por el capitán del buque, que se supone que es la persona que recibió el combustible".
> (fs. 142)

El extremo se estima corroborado, además, por lo que declaró el señor JOSEPH HARRIS, segundo Jefe de Máquinas del buque, quien claramente manifestó haber sido testigo de que el bunker fue recibido por la nave.

Si bien el juez reconoce que esa declaración no es categórica en cuanto a la cantidad de bunker despachado, en la sentencia también se resalta que otras pruebas de autos se encargan de establecer que, en efecto, la cantidad de combustible entregado fue de 35 toneladas métricas. Es el caso del documento en que la empresa WATER BIRD SHIPPING, encargada de transportar el combustible certifica que el día 7 de noviembre de 1999, entregó 35 toneladas métricas de gas oil a la MN BARCELONA I, cuando ésta se encontraba fondeada en el Puerto de Coco Solo, Norte, Colón (ver. fs. 126), y la del certificado expedido por el Coordinador de la Torre de Control de la Autoridad Marítima de Panamá, Ingeniero Gil Valdés, en donde se hace constar que ese mismo día -7 de noviembre de 1999- le fueron suministradas 35 toneladas métricas de diesel a la motonave demandada por intermedio del remolcador Santamaría de la Compañía Naviera Chagres, empresa que prestó el servicio por encargo de la parte demandante en este proceso.

En la sustentación de la alzada el apelante comienza formulando contra el fallo el cargo de que se dictó pretermitiendo la notificación que debió hacérsele a la parte demandada de la petición de proceso abreviado solicitado por la parte actora, como se establece en el artículo 538 del Código de Procedimiento Marítimo. La omisión, a su juicio, es causa de nulidad del fallo, de acuerdo con el artículo 137 de la Ley Marítima que estatuye que la parte que no haya sido legalmente notificada o emplazada puede pedir que se declare la nulidad de lo actuado. Afirma que en el procedimiento abreviado se le exige a la peticionaria que cumpla con el trámite de dar traslado de su petición, requisito que nunca fue cumplido por el demandante, por lo que es pertinente declarar, en esta fase del proceso, la nulidad de la actuación y la nulidad de la sentencia.

Como es sabido, el Código de Procedimiento Marítimo prevé que los actos procesales solo podrán anularse por causas establecidas taxativamente en la ley, debiendo el juez rechazar de plano cualquier solicitud en ese sentido que no se fundamente en una de tales causales (art. 118).

Aclarado lo anterior, tenemos que la notificación a la que se refiere el artículo 538 no es de aquellas que el Código de Procedimiento Marítimo considera, en caso de que se hubiese omitido, como una de las causas de nulidad comunes a todos los juicios y que aparecen enumeradas en el artículo 119 ibídem. No entra, por tanto, en la categoría de las nulidades insubsanables que dan lugar por sí solas a la nulidad de lo actuado. La notificación a la que se refiere el artículo 538 se debe entender, entonces, comprendida entre las llamadas subsanables o convalidables y frente a las cuales se aplica lo que dispone el código en su artículo 133.

> "ARTICULO 133: Tratándose de vicio subsanable, no podrá pedir la declaratoria de nulidad del proceso quien haya hecho alguna gestión en él con posterioridad al vicio invocado, sin formular oportuna reclamación".

En este caso, la parte demandada compareció y participó en la audiencia

especial en que se conoció de la petición formulada sin que en el desarrollo de ese evento hiciese manifestación alguna relacionada con la supuesta irregularidad procesal cometida que ahora esgrime en la apelación. Por consiguiente, si es que hubo algún vicio, esa gestión posterior se encargó de subsanarlo.

Sin embargo, resulta conveniente aclararle al recurrente que, contrario a lo que él sostiene en su alegato, no es a la parte demandante ni a quien haga la petición de procedimiento abreviado a quien le corresponde hacer la notificación a la que se refiere el artículo 538 del Código de Procedimiento Marítimo. Esa notificación sólo puede hacerla el director del proceso, o sea, el tribunal; y en este caso, como lo demuestran las constancias procesales, el tribunal cumplió con esa obligación. A foja 121 del expediente se encuentra la resolución del Tribunal Marítimo de 18 de enero del año 2000 en que se fija el 17 de febrero de ese año, a las 10:00a.m., como la fecha y la hora en que ha de celebrarse el acto de audiencia donde se decidiría la solicitud de sentencia mediante proceso abreviado. Esta resolución le fue notificada debidamente, mediante edicto, a la representación judicial de la parte demandada el día 20 de enero de 2000 (ver foja 122).

La notificación podía hacerse por edicto porque no es de aquellas que deben hacerse personalmente (art. 399 del CPM).

También resulta pertinente destacar que la notificación de la fecha de audiencia y, por ende, la de su petición, le fue hecha a la parte demandada mucho antes de los 10 días a los que el artículo 538 se refieren. De esa suerte, el que la parte demandada se haya privado de contestar la petición de proceso abreviado es asunto que sólo a ella le incumbe y por lo cual tiene que asumir las consecuencias.

Sobre la materia de fondo debatida en el proceso, tal como se dejó expuesto al examinar los argumentos en que se sustenta la sentencia apelada, las pruebas que acreditan la existencia y la exigibilidad de la acción in rem ejercida contra la MN BARCELONA I son contundentes y categóricas. Si a ello se suma la total ausencia de pruebas que desvirtúen las aportadas por la parte demandante, no hay más posibilidad que desechar la pretensión del recurrente.

La apelación interpuesta contra la cuantía en que se fijaron las costas de primera instancia hay que descartarla por encontrarse las fijadas dentro del margen permitido por la ley.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia de 17 de febrero de 2000, dictada por el Tribunal Marítimo en el proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado que DILUPA, S. A. le sigue a la M/N BARCELONA I.

Las costas de segunda instancia se fijan en la suma de MIL BALBOAS (B/1,000.00).

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala de lo Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACION INTERPUESTA POR ABASTECEDORA TEXTIL, S. A. CONTRA LA SENTENCIA No.35 DEL 5 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A WICO, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma INGRAM, ORILLAC, CARLES Y GUARDIA, en su condición de apoderados principales de ABASTECEDORA TEXTIL, S. A. y la Licenciada IRIA I. BARRANCOS D., en su condición de apoderada sustituta, han interpuesto Recurso de Apelación contra la Sentencia N°35 de 5 de octubre de 1999, proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá, dentro del Proceso Ordinario Marítimo propuesto por ABASTECEDORA TEXTIL, S. A. contra WICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A.

El Tribunal Marítimo mediante resolución de 18 de febrero del 2000 (fs.727), admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

ABASTECEDORA TEXTIL, S. A. presentó demanda ante el Tribunal Marítimo de Panamá contra WICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. para que fuere condenada a pagarle la suma de US$100,000.00 en concepto de pago del siniestro pactado en el contrato de seguro N°20970392/67 del 9 de septiembre de 1997, más la indemnización por daños y perjuicios, costas, gastos e intereses, debido a que dicha compañía declinó la cobertura del reclamo originado.

En los hechos de la demanda se expresa que las partes suscribieron una póliza abierta de transporte de carga marítima identificada con el número 209700392/67 de 9 de septiembre de 1997, en que contrató un seguro de "BODEGA A BODEGA", que tiene precisamente una cobertura "Contra todo riesgo de Bodega a Bodega", que aseguraba la mercancía transportada a bordo de la M/N "SANTOS" en el Contenedor N° KNLU332660-3, desde la República de Panamá a Santos, Brasil a través de la empresa transportista P&O Nedlloyd, Santos. Esta mercancía arribó al Puerto de Santos, Brasil, el día 20 de septiembre de 1997, pero durante el transporte a la bodega de los consignatarios, el camión que transportaba el contenedor fue asaltado el día 13 de noviembre de 1997.

Por su parte, la demandada, niega los hechos y opone como defensa fundamental la contenida en la carta mediante la cual declinó el reclamo; carta que fue aportada por la demandante y que aparece a fojas 129-130 del expediente, de la que resultan destacables los siguientes párrafos:

> "Basado en los documentos proporcionados, observamos que existe una exagerada disparidad entre la factura de la mercancía que se emitió en Panamá y la factura declarada en el Brasil. Con esta acción el asegurado además de afectar los derechos de subrogación, violó la obligación de máxima buena fe que tiene el asegurado con el asegurador. La violación de los intereses quedó evidenciada con el monto de indemnización total que pagó el transportista responsable al asegurador/consignatario en el Brasil.
>
> Por lo arriba señalado, el asegurado consignatario, infringió la cláusula N°16 del Contrato de Seguro, específicamente el punto 16.2:
>
> "Con respecto a cualquier pérdida recuperable bajo la presente, el asegurado, sus empleados y agentes están en el deber de 16.2 garantizar que se encuentren debidamente protegidos y ejercidos todos los derechos en contra de transportadores depositarios u otras terceras partes y los aseguradores, en adición de cualquier pérdida recuperable bajo la presente reembolsarán al asegurado cualesquiera gastos apropiada y razonablemente en cumplimiento de estos deberes"
>
> Por todo lo anterior nos vemos en la penosa obligación de negar el reclamo presentado".

La parte demandada, entre los argumentos fundamentales de su defensa, señala que la póliza celebrada con la demandante ABASTECEDORA TEXTIL S. A. era una póliza de seguros flotante y no una póliza de seguros abierta de transporte,

en la cual se convienen por adelantado las condiciones del seguro para los transportes que enviará o recibirá el asegurado, el cual deberá comunicar caso por caso al asegurador para su aplicación al contrato de seguro, el cual fue suscrito y pactado de antemano entre las partes, cosa que no ocurre con la póliza abierta de transporte.

Señala el Tribunal Marítimo que, al interpretar el presente seguro de transporte de carga que se hace de conformidad con la póliza que se contrató por las partes involucradas en este proceso, es decir, la N°209700392/97, de fecha 9 de septiembre de 1997, no cabe la duda de que el embarcador (asegurado) es ABATEX, de Zona Libre de Colón y el consignatario es DURVAL MOURA de Santos.

También expresa el Juez Marítimo que el Certificado de Seguro de Carga (20-01), que consta a fojas 380, indica que cubre un contenedor sellado KNLU332660-3, con el sello que se menciona N°1215900, que dice tener las siglas CTU Contain y contiene, se dice, noventa y ocho cartones con textiles, así como se evidencia que el Certificado de Seguro tiene la característica de la flotabilidad de la póliza que dice:

> EN EL VIAJE DESDE HASTA POR MEDIO MARÍTIMO
> ZONA LIBRE DE COLON, SANTOS SANTOS VC. 7218
> R.P. BRASIL (A PARTIR DE:
> 07.09.97"

Acota el Tribunal Marítimo que a fojas 210 del presente proceso se observa el conocimiento de embarque, debidamente traducido al idioma español a folios 211-232, que dice: "notificar a la parte"; o sea que según el conocimiento de embarque, no se le va a entregar directamente a la persona, sino que se va a notificar para que la persona la venga a recibir o, de alguna manera, envíe a otra persona. Pero se le notifica, lo que significa que no necesariamente la persona se encuentra ahí, o dicho de otra forma, el lugar donde se está entregando la mercadería no necesariamente es un domicilio.

Sigue señalando la sentencia proferida por el Juez Marítimo que este conocimiento de embarque puede utilizarse tanto para transporte multimodal como para transporte de puerto a puerto; pero por las casillas que se han llenado, si éste fuese de transporte multimodal, o sea que este mismo transporte hiciese responsable al transportista marítimo, también la casilla que dice lugar de entrega hubiese sido llenada y hubieran puesto patio de contenedor en el lugar de entrega.

El A Quo puso su atención en el hecho de que el seguro de transporte expiró porque convergió una de las causales contempladas en el artículo 8.1 y siguientes de las reglas del Instituto de Londres para carga marítima (A) que, según el mismo certificado de seguro, invoca para carga marítima de bodega a bodega, compartiendo así plenamente la opinión del perito de la parte demandada.

Cumplidos los trámites procesales correspondientes, el Juez Marítimo dictó sentencia (véase fojas 688-705) en los siguientes términos:

> "EXONERA a la COMPAÑÍA ASEGURADORA de la responsabilidad por el contrato de seguro de la mercadería sobre el cual versa esta controversia y, por lo tanto, ABSUELVE a la parte demandada y CONDENA a los demandantes al pago de las costas por el trabajo en derecho y los gastos del proceso correspondientes. Como dijéremos, en lo que respecta a las costas, por el trabajo en derecho, como en la audiencia preliminar se reconoció el hecho de que se habían recibido veintidós mil balboas (US$22,000) en concepto de indemnización por el transporte terrestre del bien asegurado, a la

cuantía de los demandados aquí hay que deducirle esa cantidad, que son setenta y ocho mil balboas; entonces, sobre esa base es que fijamos las costas por el trabajo en derecho que son ocho mil novecientos sesenta y cinco balboas (B/.8,965.00)".

Contra esta decisión se ha interpuesto el recurso de apelación (fs. 708-723) que la Sala procede a resolver, previas las siguientes consideraciones.

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR
ABASTECEDORA TEXTIL, S. A.

Veamos, en síntesis, los cargos que el demandante apelante hace contra la sentencia dictada por el Tribunal Marítimo.

Empieza el recurrente haciendo un recuento de los hechos del proceso, para luego ocuparse del fundamento de la declinatoria previa al proceso, alegado por la demanda. Hace notar, según la demandante-apelante que, la ocurrencia de mala fe por parte de la Aseguradora, ya que inicialmente ésta rehusó honrar el pago reclamado por ABATEX, S. A., amparado en la causal 16.2 de la cláusula N°16 del Contrato de Seguro.

También señala el apelante que es importante indicar que, además de que el acto de un tercero no puede perjudicar el derecho del asegurado, es innegable que el derecho subrogatorio de la compañía aseguradora no podía verse afectado con la tan resonada doble facturación, ya que la disparidad entre el valor de la compra y el valor declarado eran prueba irrefutable del valor real de la mercancía, para que por dicho monto la Aseguradora pueda repetir el pago.

Manifiesta la censura que el Juez Marítimo convergió con el criterio antes expuesto, desestimando la mencionada excepción, único aspecto no censurado de su decisión; sin embargo, el Tribunal A Quo declaró probada la Excepción de Inexistencia de la Obligación alegada durante la Audiencia Ordinaria, la que medularmente consistía en que la cobertura de la Póliza terminaba en el Puerto de descarga, más no en la bodega o almacén final.

Expresa la recurrente que es incuestionable que el demandado al contestar la demanda, o en sus alegatos, o mediante los recursos ordinarios, puede proponer las excepciones que a bien tenga.

Continúa señalando que la negativa de la empresa aseguradora WICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. en honrar el pago de la póliza amparado en una causal distinta a la alegada en juicio, constituye un claro indicio de su mala fe.

Y añade que la empresa aseguradora era consciente que la cobertura abarcaba la travesía terrestre hasta la bodega del consignatario, puesto que de haberse considerado lo alegado en la audiencia ordinaria (falta de cobertura), en ello se hubiese amparado el rechazo al pago, pues lo primero que se analiza de un reclamo es precisamente si el siniestro está o no cubierto por la póliza y su vigencia.

Manifiesta la recurrente que el Tribunal Marítimo, no sólo desconoció la cobertura, sino que, al absolver a la demandada, la condena al pago de considerables costas, pese a haber demandado en virtud de que el rechazo del pago por parte de la Aseguradora se basó única y exclusivamente en una causal que a la postre fue desestimada por dicho Juzgador, lo cual le daba luces de la buena

fe habida de la actora.

Se queja el apelante de que el Juez Marítimo, no tomó en cuenta las más fundamentales reglas de interpretación de los contratos, ya que las disposiciones "posteriores y especiales" privan sobre las "anteriores y generales", sobretodo que el Certificado de Seguro es expedido por la Compañía Aseguradora de manera unilateral, de suerte tal, que ante disposiciones oscuras, ambiguas o contradictorias, debe prevalecer el interés del asegurado, si no median limitaciones a sus derechos, las cuales deben ser aceptadas por escrito (ya sea en la Póliza, un Endoso en el Certificado), de forma clara y concisa, lo cual no ha ocurrido en el presente caso.

Argumenta, entonces, que retomando y resumiendo lo expuesto por el perito, señor Dante Di Liberto en su obra Manual de Seguros de Transporte Marítimo, tenemos que cuando tenga aplicación la Cláusula del Instituto de Londres para Cargamentos "A" (1.1.82) de Bodega a Bodega, tal como en el caso que nos ocupa, según dispone el Certificado de Seguro para Transporte de Carga, la cobertura "inicia durante el transporte interior de la mercancía hacia el Puerto de Embarque, carga, travesía marítima y descarga en el Puerto de Destino, continúa durante su descarga y transporte al lugar interior de destino, hasta su entrega en la Bodega del Consignatario".

Concluye el recurrente señalando que de no existir cobertura más allá de la descarga en el Puerto de Destino, los sesenta (60) días incorporados en la Cláusula del Instituto de Londres (en su punto 8.1.3) no tendría sentido o razón de ser, según los acertados razonamientos del perito Dante Di Liberto, y la Cobertura consignada en el Certificado de Seguro, el cual impone la aplicación de la Cláusula del Instituto de Londres (de Bodega a Bodega), viene a constituir la intención misma de los contratantes, la cual es claramente acorde con la costumbre y el uso marítimo internacional.

OPOSICIÓN DE LA APELACIÓN

La firma forense CARREIRA PITTI, P.C. ABOGADOS, en su condición de apoderada judicial de WICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A., se opone al recurso de apelación (véase fojas 740-758) en base a las consideraciones señaladas a continuación:

Advierte el opositor que el Certificado de Seguro de Transporte de Carga (20-01) es la prueba fundamental de toda esta controversia, señalando que es falso, como pretende sugerir la parte recurrente en su escrito de apelación, que dicho Certificado de Seguro establezca en alguna parte de su texto que la mercancía contenida en el Contenedor N°KNLU-332660-3 estaba cubierto por la cobertura de la Póliza N°209700392/67 desde la Zona Libre de Colón hasta la bodega de los consignatarios ubicada en el Estado de Bahía, Brasil, luego de su desembarco en el Puerto de Santos.

Señala el opositor que coinciden plenamente con el señor Juez A-quo en el sentido de que el texto de la prueba "Certificado de Seguro de Transporte de Carga N° (20-01)" establece de manera clara, precisa y categórica que este Certificado cubría: "el viaje desde Z.L. de Colón, Colón, R.P. hasta Santos, Brasil, por medio marítimo, Santos V.7218 (a partir de 07.09.97) B/L o AWB# p/ notificar".

Los abogados opositores expresan que la opinión del Señor Juez Marítimo de Panamá y la del perito, quien es un reconocido autor de Derecho de Seguros, Dr. Dante Di Liberto, encajan perfectamente en el sentido literal de las cláusulas del Certificado de Seguro N°(20-01) al ser claras, por no permitir dudas ni

ambigüedades en señalar que el seguro cubría riesgos por medio marítimos, a bordo de la nave M/N SANTOS V.7218 y hasta la localidad de Santos, Brasil.

Sigue argumentando la firma de abogados opositora al escrito de apelación que, por el bien de una discusión se argumenta, como en efecto se ha hecho por parte del recurrente, que el término Bodega a Bodega, ofrece algún tipo de confusión, sólo basta con seguir leyendo el clausulado del Certificado de Seguro de Transporte de Carga (20-01) y leer en el último párrafo lo que literalmente transcribieron en su momento oportuno:

> "Véase adjunto instrucciones importantes que hay que seguir en los casos de averías. Comisario de avería en SANTOS, BRAZIL: Inspect Santos, Consultoria e Peritagens Ltd. Ave. Conselheiro Nebias #452. Encruzifada 11045-000, Santos S.P. (P.O. Box 952) Tel. (55) 132-345246 / 352250. Fax 352250. Telex: 131309-131998 INSP. BR. Después de horas de oficina: 222665 / 328475. O llamar a WICO COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. al 263-7944 fax: 269-4211 en Panamá y al 441-6516 en Colón".

Argumenta el opositor, que no cabe la menor duda que la intención de los contratantes era la de otorgar cobertura hasta el puerto de SANTOS, BRASIL; y ello es así porque la compañía de inspectores/ajustadores (surveyors) de averías que se nombra en el Certificado de Seguro de Transporte (20-01) es una empresa denominada Inspect Santos, Consultoria e Peritagens, ubicada precisamente en Santos, Brazil. De manera que de ocurrir algún siniestro, el asegurado tenía la obligación de llamar a esta compañía para que ellos realizaran el ajuste y la inspección de averías.

Otro fundamento de la oposición es el hecho que de acuerdo a las constancias procesales existen tres (3) nombres diferentes para el supuesto mismo consignatario de la mercadería. El Certificado de Seguro de Transporte (20-01) aparece como consignatario "DURVAL MOURA SANTOS"; en el Conocimiento de Embarque Marítimo, identificado con el número MZXNN773 de la transportista P&O Nedlloyd, el consignatario es "DURVAL MOURA Av. Senhor dos passos, 835 Feira de Santana / Bahía"; y en el Conocimiento de Transporte Terrestre de Carga N°015959, emitido por Transportes Rodríguez & Anchieta Ltda de fecha 13 de noviembre de 1997, el consignatario es DURVAL NEPOMUCENO DE MOURA & FILOS, Ltda, cuya dirección es en Victoria de Conquista, Bahía.

De lo anterior, el opositor concluye que en el expediente se acreditan tres nombres y direcciones de consignatarios, lo que lleva a suponer diferentes compañías.

Finalmente expresa el opositor que existió mala fe en este proceso de parte de la demandante, quien a sabiendas de haber recibido la suma de US.$22,500.00 de parte del consignatario de la carga, el día 18 de septiembre de 1998, interpuso demanda en contra de la aseguradora WICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A., así como expresar que el Juez a-quo actuó de manera benevolente al imponer las costas regulares del 10% de la cuantía demandada en este caso.

POSICIÓN DE LA SALA

El reclamo está fundamentado en un Contrato (Póliza) de Seguro de Transporte Marítimo de Carga, Póliza Flotante, contrato que corresponde a la póliza N°209700392/97, suscrito entre ABASTECEDORA TEXTIL, S. A. (Demandante-apelante) y WICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. (Demandada) y que amparaba todo riesgo de bodega a bodega. Dicho reclamo obedece, entonces, a la pérdida de

mercancía que sufrió el asegurado-demandante el día 13 de noviembre de 1997en Sao Paulo, Brasil, por motivo de un asalto, ocurrido después que la mercancía había sido desembarcada de la M/N SANTOS en el Muelle del Puerto de Santos, procedente de Panamá, y depositada en un Almacén General de Depósito.

La compañía de seguros declinó el reclamo mediante carta enviada a la asegurada (fs.129-130), señalando que ésta infringió la cláusula N°16 del Contrato de Seguro, específicamente el punto 16.2 que señala:

> "Garantizar que se encuentren debidamente protegidos y ejercidos todos los derechos en contra de transportadores, depositarios u otras terceras partes y los aseguradores, en adición de cualquier pérdida recuperable bajo la presente reembolsarán al asegurado cualesquiera gastos en que incurra apropiada y razonablemente en cumplimiento de estos deberes".

No hay controversia entre las partes en cuanto a los hechos que ocasionaron la pérdida, circunstancia que fue suficientemente aclarada por el Tribunal Marítimo en su fallo.

El cargo que concretamente formula la parte demandante -asegurada- a dicho fallo radica en un reclamo, fundado en los términos contractuales de una Póliza de Seguro Marítimo, la cual se regirá por la legislación invocada por los contratantes, que es el estatuto de las Cláusulas del Instituto de Londres para el Cargamento de Mercaderías de Mar, en que debe determinarse si la cobertura del seguro iba más allá del puerto de descarga de Santos, Brasil, hasta el patio de contenedores de las bodegas del consignatario, aunado a que se trata de un contrato que establece que su cobertura es de "Bodega a Bodega".

Para resolver, la Sala considera necesario traer a colación lo establecido en el artículo 483 de la Ley 8va de 1982, el cual reza: "En el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia sólo proceden discutirse asuntos de derecho, los hechos no podrán ser objeto de discusión en la segunda instancia". Si bien en algunas ocasiones la Sala se ha adentrado a referirse a la prueba aportada en los asuntos para la comprobación de hechos, ello ha sido motivado porque la apreciación de la prueba ha tenido incidencia importante en la norma sustantiva. Así, en sentencias de 4 de junio de 1993; 9 de marzo de 1998 y 6 de mayo de 1999, la Corte indicó que la Sala, como tribunal de segunda instancia puede revisar las causas marítimas en donde emergen errores en la labor de comprobación de los hechos realizados por el inferior cuando ellos "...sean evidentes y siempre que dichos cargos tengan como consecuencia inmediata el desconocimiento de los derechos sustantivos que la ley establezca en beneficio de alguna de las partes" (Sentencia de 4 de junio de 1993).

El conocimiento de embarque que reposa a fojas 210 del expediente marítimo, trata de un formulario con el membrete de la empresa P&O Nedlloyd, en carácter de transportista, con la modalidad de que, además de ser puerto a puerto, se trata de un transporte combinado o intermodal. Es decir, es un formulario que se utiliza para ambas modalidades de transporte, por lo que no esclarece el tipo de transporte, si la cobertura era de Puerto a Puerto o de Bodega a Bodega.

Por otro lado, hay que examinar la naturaleza del tipo de póliza. Puesto en la necesidad de discurrir acerca de cuál viene a ser el criterio aplicable para la interpretación más apropiada de este contrato de seguro, denominado "Póliza Flotante de Transporte Marítimo de Carga", se precisa que el antecedente de estas pólizas es el derecho inglés y, se destaca la importancia de la circunstancia de que esta póliza haya sido redactada conforme a las cláusulas

utilizadas por el Instituto de Aseguradores de Londres, dentro de las reformas del Instituto para Cargamentos (A) de 1° de enero de 1982, que se analizará más adelante.

A continuación se efectúa una transcripción sobre el conocimiento de embarque (fs.210).

BILL OF LADING FOR COMBINED TRANSPORT SHIPMENT OR PORT TO PORT SHIPMENT

<table>
<tr><td colspan="2">Shipper
ABASTECEDORA TEXTIL, S.A.
ZONA LIBRE DE COLON
TEL. 441-0093</td><td colspan="2">B/L No.
Page 1
MZXNN773
210</td></tr>
<tr><td colspan="2">Consignee or Order
DURVAL MOURA
AV. SENHOR DOS PASSOS, 835
FEIRAA DE SANTA/BAHIA
TEL.(075) 623-0590</td><td colspan="2">Incorporated in The Netherlands as
P&O Nedlloyd B.V.
Boompjes 40-3011 XB Rotterdam</td></tr>
<tr><td colspan="2">Notify Party/address "It is agreed that no responsibility shall attach to the Carrier or his Agents for failure to notify (see clause 20 on the reverse)"
DURVAL MOURA
AV. SENHOR DOS PASSOS, 835
FEIRA DE SANTANA/BAHIA
TEL.(075) 623-0590</td><td colspan="2">Place of Receipt (Applicable only when this document is used as a Combined Transport Bill of Lading)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ocean Vessel
SANTOS 7218</td><td colspan="2" rowspan="2">Place of Delivery (Applicable only when this document is used as a Combined Transport Bill of Lading)</td></tr>
<tr><td></td><td>Port of Loading
PORT MANZANILLO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Port of Dischange
SANTOS</td><td colspan="2">SANTOS
CY</td></tr>
<tr><td>Marks and Nos; Container Nos.

NO MARKS
KNLU 332660-3 20DC</td><td>Number and Kind of Packages; description of Goods

1 x 20DC CONTAINER(S)
S.T.C. 98
CARTON (S)
TEXTILES

Loaded/shipped on board SANTOS from POR MANZANILLO on 09/07/97

SHIPPERS STOW, LOAD AND COUNT
SHIPPED ON BOARD
SAID TO WEIGHT</td><td>Gross Weight (Kg)

8.009</td><td>Measurement (cbm)

30,000</td></tr>
<tr><td>Total No. of Containers/packages received by the Carrier

1 CONTAINER(S)</td><td>Movement

FCL/FCL</td><td colspan="2">RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number of quanty of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entiled *Total No. of Containers/Packages received by the Carrier* for Carriage subject to all the terms hereof (INCLUDING THE TERMS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS OF THE CARRIERS APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading must be rurrendered, duly endorsed, in exchange for the Goods. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.</td></tr>
</table>

Freight and Charges NET ALL-IN FREIGHT 2300.00 C USD 2300.00 PP TOTAL USD 2300.00		Place and Date of Issue PANAMA 09/07/97
Freight payable at SANTOS	Number of Original Bills of Lading 3/THREE	IN WITNESS of the contract herein contained the number of originals stated opposite have been issued, one of which being accomplished the other(s) to be void. For P&O Nedlloyd B.V. As Carrier INCHCAPE SHIPPING SERVICE NON NEGOTIABLE COPY

Lo primero que se analiza de un reclamo es si el siniestro que lo constituye está o no cubierto por la Póliza y su vigencia; por lo que no cabe duda de que la disconformidad con la resolución apelada se basa en que el Juzgador no tomó en cuenta que se trataba de un contrato multimodal, a efecto de establecer la responsabilidad de la naviera en el transporte terrestre de la carga contratada, aunado a ello a que el Certificado de Seguro de Transporte de Carga (20-01) visible a foja 7 expresa que la cobertura de este seguro cubre todo riesgo según Cláusula del Instituto de Londres para carga marítima "A" (1.1.82) de BODEGA A BODEGA.

Siguiendo estrictamente la interpretación de la Cláusula del Instituto de Londres para Carga Marítima "A" (1.1.82) de Bodega a Bodega", y que se encuentra plasmado en el Certificado de Seguro, excluye la posibilidad de que el seguro termine al momento de llegar la carga al Puerto de Destino, es decir, que debe terminar en el Almacén del Consignatario, que se encontraba en Bahía.

De lo anterior se colige que la empresa demandada (Aseguradora) tenía conocimiento y certeza que el reclamo presentado encuadraba en la cobertura de la póliza, toda vez que el conocimiento de embarque señala que había que notificar al Consignatario Durval Moura, Av. Senhor Dos Passos, 835, Feira De Santana, Bahia, a pesar de no haberse llenado las casillas correspondientes, como lo consideró el Juzgador de la instancia. Salta a la vista que desde el momento que la mercancía salió de los depósitos de la empresa ABATEX, S. A. en Zona Libre de Colón, República de Panamá, dicha carga quedó bajo la cobertura de la póliza contratada con la Aseguradora WICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A., conforme a la póliza suscrita por ambos contratantes. Además observa la Sala que la pérdida de la mercancía ocurrida durante su transporte terrestre hacia su almacén final, tuvo lugar a los 54 días, luego de su arribo al Puerto de Destino, encontrándose dentro del límite previsto en la cobertura, es decir, los 60 días.

Observa la Sala que el Certificado de Seguro de Transporte de Carga N° (20-01) establece que se cubre el viaje desde Zona Libre de Colón, Colón República de Panamá hasta Santos, Brasil, por medio marítimo, Santos V.7218 (a partir de 07.09.97) B/L o AWB# p/ notificar".

De otra parte, se observa en la solicitud de certificados de seguro individuales en la póliza de seguro, que ambos documentos se referían a una cobertura que terminaba en Santos (véase fojas 198 y 380). No obstante, aparece el consignatario DOURVAL MOURA que tiene su sede en Bahía, como ya se ha indicado.

La legislación aplicable, como lo señaló la Sentencia recurrida es la legislación de Inglaterra y dentro de ésta, las cláusulas del Instituto de Londres para la carga marítima de bodega a bodega, cuerpo normativo que la Sala pasa a reproducir, de su importancia en el presente conflicto:

"Cláusula del Instituto de Londres para Carga
Marítima "A" (1.1.82) de Bodega a Bodega"

8. Duración.

8.1 Este seguro toma efecto desde el momento en que las mercancías dejan el almacén o sitio de almacenaje en el lugar mencionado en la presente para el comienzo del tránsito, continúa durante el curso ordinario del mismo y finaliza ya sea:

8.1.1 A la entrega en el almacén de los Consignatarios u otro almacén final o lugar de almacenaje, o en el destino mencionado en la presente;

8.1.2 A la entrega en cualquier otro almacén o lugar de almacenaje, ya sea anterior al o en el destino mencionado en la presente que el asegurado decida utilizar, bien:

8.1.2.1 Para almacenaje que no sea en el curso ordinario del tránsito o;

8.1.2.2. Para asignación o distribución, o;

8.1.3 A la expiración de 60 días después de finalizar la descarga de las mercancías por la presente aseguradas;"

(Lo resaltado es de la Sala)

En el certificado de seguro resulta dudoso que la intención de ambos contratantes en el Contrato de Seguro fuese asegurar de Bodega a Bodega la mercancía, específicamente hasta la bodega del consignatario en Santos, Brasil. La buena fe de las partes y la obligación ubicada en cobertura del asegurador derivadas del contrato de seguro es precaver de riesgos la mercancía asegurada hasta su destino final expresado en la póliza de seguros, por una parte, y de sufrir un siniestro la misma en el trayecto ya expresado en la póliza de seguros, así como indemnizar al asegurado por la pérdida sufrida, que se encontraba asegurada.

Así tenemos que la compañía aseguradora declinó o rechazó el reclamo por parte del asegurado, toda vez que el consignatario en Brasil proporcionó a las autoridades de aduanas de ese país una factura falsa para efectos de pagar menos impuestos de importación por la mercancía importada de Panamá y contenida en el Contenedor N°KNLU332660-3, infringiéndose, según la aseguradora, la cláusula 16.2 del Contrato de Seguros. La cláusula 16.2 es del siguiente tenor:

"Con respecto a cualquier pérdida recuperable bajo la presente, el asegurado, sus empleados y agente, están en el deber de:

16.2 Garantizar que se encuentren debidamente protegidos y todos los derechos en contra de los transportadores, depositarios u otras terceras partes y los aseguradores, en adición de cualquier pérdida recuperable bajo la presente, reembolsarán al asegurado cualesquiera gastos en que incurra apropiada y razonablemente en cumplimiento de estos deberes."

Aquí la Sala se encuentra en la debatida cuestión de la cuantía del crédito que se recibe, por razón de la subrogación.

Con el pago realizado por la empresa aseguradora, ésta se subroga de la totalidad del crédito que ostentaba el asegurado. De allí a que, con independencia del monto pagado, éste, el asegurador, se subroga en la totalidad del crédito, por lo que la posición del asegurador, como subrogado, no queda afectado, pues, éste, adquiere la totalidad del crédito del asegurado frente al tercero.

Sin embargo el acto de un tercero no puede perjudicar el derecho de subrogación del asegurado, por la razón expresada.

En este sentido, el autor LUIS DIEZ PICAZO manifiesta que:

> "Se ha cuestionado cuál es la cuantía de la obligación tras la subrogación, lo que exige averiguar si la subrogación atribuye al subrogado la totalidad del crédito o solamente un crédito por la cuantía efectivamente satisfecha por el subrogado al acreedor. Este último punto de vista, defendido por F. SANCHO REBULLIDA y G. GARCÍA CANTERO, aduce en su favor que la subrogación no es una operación especulativa, sino una manifestación del favor debitoris y que debe ser así entendida con arreglo a los principios generales del Derecho. Sin embargo, la tesis es, en nuestra opinión, extraordinariamente dudosa, pues trata de forzar la letra del art. 1,212, que ordena una plena transferencia del crédito al subrogado, mientras que lo que preconizan quienes defienden la limitación de la cuantía, en lugar de una verdadera subrogación, es una pura acción de reembolso. Por otra parte, puede señalarse, que, aunque la subrogación no sea operación especulativa, no es tampoco manifestación del favor debitoris. Más bien lo es del favor creditoris, pues se trata de favorecer al acreedor que ha pagado, a través del otorgamiento al solvens del mismo crédito que el pagador poseía."
>
> (LUIS DIEZ PICAZO, "FUNDAMENTOS DE ERECHO CIVIL PATRIMONIAL II -LAS RELACIONES OBLIGATORIAS-", 4ta Ed., Editorial Civitas, Madrid, 1993, p. 832)

Siendo así, la cesión de crédito opera sobre la totalidad del crédito de lo que se ha pagado y no el de un crédito, por lo que se ha afectado el crédito contra terceros por la facturación, ya que el derecho que tenía la empresa remitente era que se le pagaran los riesgos del costo total de la mercancía cuyo precio se fijó en OCHENTA MIL BALBOAS (US$80,000.00).

De la lectura de las cláusulas del Instituto para Cargamentos (A) visible a fojas 241 de la póliza original, se deduce que la duración del seguro (8.1.1) continúa a la entrega en el almacén de los consignatarios u otro almacén final o lugar de almacenaje en el destino mencionado en la presente.

Se aprecia que tanto el Certificado de Seguro, como el Conocimiento de Embarque señala que el destino es hasta Santos, Brasil, sin especificar que se trate de bodega a bodega. Tampoco dice que es el puerto, sólo menciona la ciudad, por lo que la mercancía se perdió después que llegó a Santos. Consta, por otra parte, el nombre de un consignatario, con domicilio en Bahía, a quien había que notificar la llegada de la mercancía transportada, sin que se ofrezcan mayores explicaciones, con respecto a la finalidad de dicho aviso o comunicación.

La experiencia le indica a la Sala que en los conocimientos de embarque, en carácter de transporte intermodal o multimodal o combinado, deberá constar en casilla que indique el lugar de entrega, y al no existir en este caso, deberá considerarse el puerto de descarga, que es Santos, Brasil, que en este caso específico no se encuentran llenas. Llama también la atención a esta Sala que la Póliza de Seguros demuestra efectivamente que la intención de ambas partes era cubrir todo riesgo que sufriera un contenedor sellado identificado con el número KNLU332660-3, durante su transporte desde la Bodega ubicada en Zona Libre de Colón hasta la bodega de los consignatarios. Es decir: tanto en el conocimiento de embarque como en la póliza se encontraba pactado un transporte de bodega a bodega, pero no se especifica su dirección, sino que se menciona el nombre del consignatario de la mercancía, que tiene su domicilio el Bahía, Brasil.

Para la Sala es evidente que el contrato de seguro, los documentos del mismo, y también el certificado de conocimiento de embarque, dejan en tela de

duda cuál fue la intención de los contratantes, si circunscribir el transporte hasta Santos, dejando la mercancía en un Almacén General de Depósito, o si la mercancía, en forma consistente con las reglas de derecho inglés, cubría hasta el Estado de Bahía, en Brasil, que es la ubicación de los consignatarios en todos los documentos contractuales relevantes. Esta confusión y el peso de la misma ha de recaer, evidentemente, en la parte que ocasionó la oscuridad, que no es otra que la Compañía de Seguros, por lo que la oscuridad, de ninguna manera, puede desfavorecer al asegurado, que normalmente no toma parte en la redacción de los contratos de seguro, por ser estos contratos de adhesión, y la oscuridad que en ellos se aprecia ha de imputarse a la empresa aseguradora redactora de los documentos contractuales, en beneficio del asegurado (Código civil, art. 1139 y artículo 64 de la Ley N° 29, de 1° de febrero de 1996) .

Esta regla de interpretación contractual que existe en nuestro Código civil y en la mayoría de las legislaciones del mundo, ha sido planteada con todo rigor por el Tribunal Supremo de España. En sentencia de 10 de mayo de 1989:

> "Las pólizas de seguros se presentan prerredactadas y salvo los matices y especiales condiciones que puedan insertarse, al asegurado se le reserva una posición más bien pasiva y no de pleno interviniente en su confección vinculante, en cuanto se adhiere y no realmente gestiona, por lo que de esta manera queda obligado a lo que le viene impuesto y que acepta en cuanto firma la póliza. Su voluntad se manifiesta más bien adhesiva que decisiva plena y deliberante. la unilateralidad aflora con predominio a la necesaria bilateralidad que com principio general se consagra en los arts.1254 y 1255 de CC. Una jurisprudencia progresiva y en la línea del momento histórico presente (art. 3 del CC.), impone la necesidad de que en la interpretación de esta clase de contratos se marque en la decidida dirección de evitar abusos que puedan derivarse de dinámica y efectividad de los mismos a la ahora de su cumplimiento por las aseguradoras, lo que encuentra amparo legal en el art.3 de la Ley de Contrato de Seguro, al disponer que las Condiciones Generales se redactarán en forma clara y precisa, destacándose de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, las que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los mismos. Por ello la doctrina de esta Sala ha venido proclamando que en materia de dicha especial forma de contratación, los problemas interpretativos han de optarse por la más favorable al asegurado, teniéndose en cuenta la totalidad del clausurado conforme a los arts. 1281 y 1285 del CC, sin olvido del elemento intencional, ... y demás circunstancias de estimable consideración interpretativa y así lo expresa y prevé el art.2 de la Ley de Contrato de Seguro, en relación al 1288 y 1289 del Código de Leyes Civiles. (STS 27 de noviembre 1991 {RJ 1991, 8496}). En parecidos términos las SSTS 31 de diciembre d e1996 (RJ 1996, 9394), 30 de diciembre 1996 (RJ 1996, 9512), 31 de enero 1990 (RJ 1990, 29), 3 febrero 1989 (RJ 1989, 659), 12 de diciembre 1988 (RJ 1988, 9429), 22 febrero 1985 (RJ 1985, 742)."
>
> (Código Civil, 4a. Edición, Editorial Aranzadi, 1997, p.1723)

Por otro lado, es importante determinar si la mercancía había sido sustraída después que la mercancía llegó al depósito de Santos. En este sentido la Sala observa de acuerdo al Informe de la Policía de Sao Paulo, Brasil N°698/98 visible a foja 120 y su reverso, traducido al idioma español por Intérprete Público Autorizado (véase fojas 259-261) no existen testigos del supuesto robo de la mercancía, pero la denunciante IRENE ARIAS DUARTE manifestó a la Delegación de Policía 4ª D.P. de SB do Campo/SP de la Policía Civil de Sao Paulo que el día 13 de noviembre de 1997 a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) fue sorprendida por dos elementos extraños, los cuales bajo amenaza, la obligaron a dejar el volante del camión y agacharse en el piso de éste, después colocaron a la víctima en otro camión donde iniciaron otro viaje y fue dejada en la Estrada

Velha.

De acuerdo al Reportaje de Inspección de Lloyd`s (Survey Report), Reporte N°LAG-278S/97 (véase fojas 121-128 y 270-276), la carga amparada por el certificado de seguro N°209700392/67 llegó al Puerto de Santos, Brasil el día 20 de septiembre de 1997 y permaneció en el Puerto por 45 días en el Almacén General de Depósito RODRIMAR, de donde salió transportada por TRANSPORTES RODRÍGUEZ Y ANCHIETA, LTDA., dando, por tanto, cumplimiento a la normativa inglesa que ha sido transcrita y enfatizada.

Siendo así, existen dudas de que el punto controvertido del presente caso fue si la cobertura del seguro incluye la fase de transporte de la mercadería, más allá del patio de contenedores en Santos, Brasil, es decir, hasta Bahía. Sin embargo, se obtiene de la Audiencia Preliminar celebrada de que, la demandante aceptó la existencia de la póliza de seguros y que recibió un pago del consignatario en el mes de mayo de 1998 por la suma de US$22,000.00 (véase foja 488-489 y 101-102).

De las consideraciones que se han hecho, es evidente que el derecho de subrogación, que no tiene su límite en la suma pagada, sino en la totalidad del crédito, no podía verse perjudicado por la diferencia de valores, siendo así que la pérdida sufrida por el asegurado debe ser reembolsada por la empresa aseguradora, en cumplimiento del contrato de seguro pactado.

Es evidente que la empresa asegurada recibió de la consignataria, como valor de la mercancía sustraída y asegurada, la suma de VEINTIDOS MIL BALBOAS (B/.22,000.00), por lo que el interés asegurado le fue cubierto a la asegurada, si bien no por la seguradora ni por la totalidad de la suma asegurada.

Por la razón apuntada, la Sala debe revocar la sentencia recurrida, y declarar responsable a la compañía aseguradora WICO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. por razón de las pérdidas objeto del contrato de seguro, que viene a ser B/.80,138.29 (véase fojas 16, 198 y 451), excluyendo las sumas que haya recibido el asegurado de terceras personas, es decir VEINTIDOS MIL BALBOAS (B/.22,000.00) (véase fojas 488-491), pues de lo contrario la asegurada estaría cobrando dos veces por el valor de la suma asegurada, lo que constituiría un enriquecimiento no justificado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la Sentencia N°35 de 5 de octubre de 1999, dictada por el Tribunal Marítimo de Panamá y, en su lugar, CONDENA a la empresa WICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A., a pagar la suma total de CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES BALBOAS CON VEINTINUEVE CENTÉSIMOS (B/.58,183.29), más los intereses y gastos del proceso que serán calculados por la Secretaría del Tribunal Marítimo.

Las costas por trabajo en derecho en las dos instancias se establecen en la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

JULIETA DE LEÓN Y MARITZA DE LEÓN DE GONZÁLEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO QUE LE SIGUE SAMUEL HUMBERTO GONZÁLEZ.

MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema decidió admitir el recurso extraordinario de casación interpuesto por la firma forense RAÚL CÁRDENAS y ASOCIADOS, apoderada judicial de las señoras JULIETA DE LEÓN y MARITZA DE LEÓN DE GONZÁLEZ, contra la resolución de 16 de noviembre de 1999 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial dentro del proceso de deslinde y amojonamiento seguido por las recurrentes contra SAMUEL HUMBERTO GONZÁLEZ.

Una vez agotados los términos de alegatos, aprovechado únicamente por la representación judicial del opositor al recurso, se encuentra el recurso en estado de resolver, por lo que a ello se procede, previas las siguientes consideraciones:

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

Se trata de un proceso no contencioso de deslinde y amojonamiento promovido por los apoderados judiciales de las señoras JULIETA DE LEÓN y MARITZA DE LEÓN DE GONZÁLEZ en contra del señor SAMUEL HUMBERTO GONZÁLEZ VARGAS. En la demanda se solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones:

> "PRIMERO: La Parte Demandante es dueña de la finca No.4834, inscrita al tomo 671, folio 26, Sección de la Propiedad del Registro Público, Provincia de Los Santos, y la inscripción de su título se encuentra actualmente vigente, tal como se acredita con la certificación del Registro Público que se acompaña.
>
> SEGUNDO: Que sobre la finca No. 4930, inscrita a folio 410 del tomo 671, Sección de la Propiedad del Registro Público, Provincia de Los Santos, y en gran parte fuera de ella, se ha puesto cerca que invade en gran parte la finca de mi poderdante.
>
> TERCERO: Que el plano y la inscripción de la finca en el Registro Público, de La Parte Demandante, son anteriores a los de La Parte Demandada.
>
> CUARTO: Que la invasión descrita anteriormente sobre el predio de mi poderdante le causa graves perjuicios, razón por la cual ahora se solicita el presente proceso para que se coloquen los hitos o mojones en los lugares indicados para marcarse la correspondiente línea divisoria entre ambos predios.
>
> QUINTO: Que la finca No. 4930, Folio 410, Tomo 671, Provincia de Los Santos, pertenece al demandado SAMUEL HUMBERTO GONZÁLEZ VARGAS".

Cabe observar que mediante auto No. 246, de siete de mayo de 1997, se decretó la acumulación de los procesos de deslinde y amojonamiento interpuestos por las señoras JULIETA DE LEÓN, MARITZA DE LEÓN DE GONZÁLEZ y LETICIA VILLARREAL en contra de SAMUEL GONZÁLEZ.

Después de surtido el trámite procesal correspondiente, el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos dictó la resolución de 20 de marzo de 1998 en la cual se decide "no establecer la línea divisoria solicitada por la parte actora".

Apelada la resolución por las partes, el proceso ingresó al Tribunal Superior donde el Magistrado Sustanciador basado en la facultad probatoria oficial ordena la práctica de prueba pericial a fin de recabar mayor información ante la deficiencia de prueba. En este sentido, se designó un perito topógrafo

para determinar el deslinde y amojonamiento. Evacuada la prueba, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial mediante fallo de 16 de noviembre de 1999, "...ORDENA se marque la línea divisoria de las fincas 4834 y 4835 de acuerdo al plano de replanteo realizado por el Técnico Topógrafo MANUEL ALBERTO ULLOA visible a fojas 158..."

Es, entonces, contra esta última resolución dictada en segunda instancia que se presenta el recurso de casación.

CONTENIDO DEL RECURSO

El recurso de casación ha sido interpuesto en la forma y se alegó como única causal "Carencia de competencia improrrogable en el tribunal sentenciador," la cual se fundamenta en tres motivos, los cuales únicamente le hacen un cargo de injuricidad a la sentencia de segunda instancia y que podemos resumir en los siguientes términos: el Tribunal Superior erró al indicarle al juzgador primario donde debe trazar la línea divisoria, puesto que el competente para determinarla, según lo establece el Código Judicial, es el juez de primera instancia; motivo por el cual se ha desnaturalizado el proceso de deslinde y amojonamiento.

Según el parecer de las casacionistas, el cargo de injuricidad desarrollado en los motivos que fundamentan la causal conducen a la infracción de los artículos 1494, 1496 y 1498 del Código Judicial.

LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

Según se desprende de lo anotado en líneas que preceden, el recurso extraordinario de casación, en la forma, se endereza contra la resolución de 16 de noviembre de 1999 proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, la cual revocó la sentencia apelada y ordenó se marcara la línea divisoria de las fincas 4834 y 4835 de acuerdo al plano de replanteo realizado por el Técnico Topógrafo MANUEL ALBERTO ULLOA, visible a fojas 158 del presente expediente.

Así las cosas, resulta prudente transcribir lo medular del fallo. Dice así:

> "...Esta Colegiatura después de un estudio de lo actuado debe señalar que en autos ha quedado plenamente demostrado que las fincas 4834 y 4835 miden 600 metros cada una pero que su superficie se encuentra afectada por el cambio en el eje de la calle 12 de octubre, con lo cual parte su superficie ha quedado cubierta por el asfalto de la calle situación ésta, establecida mediante peritaje.
>
> La pericia fue realizado por el Técnico Topógrafo MANUEL ALBERTO ULLOA con licencia TT-74-18, el cual fue designado por la parte actora RAUL CÁRDENAS Y ASOCIADOS en común acuerdo con la parte demandada BERRIOS Y BERRIOS, que luego de rendir su informe correspondiente el perito el mismo fue repreguntado por el Doctor HECTOR CÁRDENAS en representación de la parte actora y el perito se ratifica en lo rendido en su informe donde certifica que las fincas 4834 y 4835, son lotes de 600 metros cada una, pero que fueron afectadas o disminuidas en su cálida por el eje de la calle 12 de octubre. A esta pericia se le concede el valor correspondiente por los principios científicos en que se funda y por la competencia del perito y por su concordancia con la pericia ofrecida por los peritos PRÍMOLA y VERGARA quienes destacan que no existe traslape entre las fincas involucradas.
>
> Ante esta situación este Tribunal Superior debe ordenar se marque la línea divisoria establecida en el plano esquemático de replanteo de las fincas 4930,4834 y 4835 confeccionado por el perito MANUEL ALBERTO ULLOA al rendir el informe de la diligencia ordenada por esta Superioridad...".

CRITERIO DE LA SALA

Nos encontramos dentro de un proceso de deslinde y amojonamiento en el cual las demandantes persiguen que se coloquen los hitos o mojones en los lugares indicados y pueda marcarse la correspondiente línea divisoria que debe separar el predio de su propiedad del predio de la demandada.

Observamos que el juez de instancia no accedió a las pretensiones de la actora, lo cual motivó que la decisión fuere apelada. El recurso de apelación revistió la modalidad de ser en conjunto, o sea, que ambas partes lo proponen. La demandante en cuanto a lo principal y la otra parte, en cuanto a costas y gastos.

Las apelaciones interpuestas por los licenciados Raúl A. Cárdenas y Julio Berríos fueron concedidas en el efecto suspensivo por el Juez Primero del Circuito de Los Santos.

El casacionista alega que el tribunal ad-quem erró al indicarle al juez primario donde trazar la línea divisoria, pasando por encima de la competencia establecida por el Código Judicial que faculta privativamente al juez primario de establecer la misma.

La causal invocada "POR CARENCIA DE COMPETENCIA IMPRORROGABLE EN EL TRIBUNAL SENTENCIADOR" (artículo 1155, numeral 4 del Código Judicial), para algunos procesalistas se encuentra subsumida dentro de la segunda causal (POR HABER SIDO DICTADA LA RESOLUCIÓN POR UN TRIBUNAL INCOMPETENTE).

La competencia, concebida como la facultad de administrar justicia en determinadas causas, es un concepto jurídico de naturaleza eminentemente procesal y es el límite de la jurisdicción. La jurisdicción es la facultad de administrar justicia, y la competencia, fija los límites dentro de los cuales el juez puede ejercer aquella facultad. Se trata de un presupuesto de la relación procesal. Nuestro código concibe la incompetencia como un impedimento procesal.

Como regla general, los sistemas procesales admiten el doble grado de competencia. Se habla en estos casos de competencia funcional. La apelación es consecuencia del principio de la doble instancia. Es un control de la actividad subjetiva y falible -anota el profesor Jorge Fábrega Ponce- de los funcionarios jurisdiccionales.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la decisión dictada por el juez de primera instancia y la revoque o reforme. Constituye el medio que permite a los litigantes llevar ante el tribunal de segundo grado una resolución considerada injusta, para que la modifique o revoque según el caso. La apelación de la sentencia se concede en el efecto suspensivo (artículo 1124 del Código Judicial). Al concederse la apelación en el efecto señalado, el superior aprehende el conocimiento del proceso y es competente para examinar la resolución apelada con la limitante de la "reformatio in pejus".

La apelación interpuesta en el presente proceso está limitada, en cuanto al contenido de su pronunciamiento, a lo desfavorable al apelante de lo principal. El sentenciador de segundo grado no puede modificar lo decidido por el juzgador a-quo en lo que aprovecha o beneficie a los actores, así lo señala expresamente el artículo 1133 de la citada ley. En este punto, cabe recordar que nuestro ordenamiento jurídico permite el "ius novarum", es decir, la apelación es renovadora, no controladora como sucede en materia marítima, pero, a pesar de ello existen ciertas limitaciones.

La apelación concedida en el efecto suspensivo suspende la competencia del juzgador primario desde que se ejecutoría la resolución en que se otorgue. Por otro lado, un efecto de la sentencia es que extingue la obligación de fallar, ya que la misma (obligación) se cumple con la expedición de la resolución.

Una conclusión se impone aquí, el juzgador inferior nada puede hacer de nuevo en la causa. La competencia del tribunal a-quo se encuentra suspendida hasta que se dicte el de obedecimiento a lo resuelto por el superior, por razón del efecto suspensivo en que concedió la apelación. El Tribunal Superior es el competente para conocer de la resolución apelada; y, como consecuencia de ello, la sentencia que dicte puede ser confirmatoria, revocatoria o reformatoria de la de primera instancia.

En el caso que nos ocupa, ya la Sala lo ha señalado, se revocó la sentencia apelada, por ende, el Tribunal Superior se convierte en tribunal de instancia y su fallo contiene las soluciones requeridas por la demanda.

La solución a la controversia planteada, según el sentenciador de segundo grado, es que marque la línea divisoria de las fincas 4834 y 4835 de acuerdo al plano de replanteo realizado por el Técnico Topógrafo Manuel Alberto Ulloa. Para arribar a dicha conclusión, ante la deficiencia de prueba, se puso en movimiento el mecanismo de la denominada prueba de oficio, facultad-deber contemplada en el artículo 1270 del Código Judicial. La prueba de oficio tiene como finalidad verificar las afirmaciones de las partes.

En procesos como el que nos ocupa, huérfanos de prueba, para que se obtenga el fin de interés público del proceso, se hace necesario que el juez disponga de las facultades probatorias que nuestro ordenamiento jurídico le otorga para el esclarecimiento de los hechos que las partes afirman. Existe un interés público en lograr que todo proceso culmine con una decisión jurídica, justa y acertada.

Al abordar el tema sobre el concepto moderno del proceso, el procesalista colombiano Hernando Devis Echandía afirma "...El fin del proceso no es resolverle al particular su problema y mucho menos en la forma favorable que pretende, sino, por el contrario, hacer que el orden jurídico se realice a cabalidad en las casos concretos, de acuerdo con la ley, la moral, los principios generales del derecho, la equidad y la realidad de los hechos...". (DEVIS ECHANDIA, HERNANDO, Estudios de Derecho Procesal, Editorial ABC-Bogotá, 1992, Tomo II, pág. 446).

En razón de todo lo expuesto, resulta obvio que no se ha producido la causal de forma alegada por las casacionistas en vista que el fallo fue dictado conforme a derecho. La competencia del Tribunal Superior para conocer del proceso fue adquirida por razón del recurso de apelación que propuso la parte demandante. De allí, pues, que el cargo de ilegalidad que le endilga a la resolución atacada no prospera.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 16 de noviembre de 1999 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial dentro del proceso de deslinde y amojonamiento propuesto por JULIETA DE LEÓN y MARITZA DE LEÓN DE GONZÁLEZ contra SAMUEL HUMBERTO GONZÁLEZ.

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria Judicial Sala de lo Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ARGELIS CECILIA NELSON PHILLIPS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE JUAN BAUTISTA SAMANIEGO BATISTA. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado JUAN B. ACOSTA BOTELLO, actuando en nombre y representación de ARGELIS CECILIA NELSON PHILLIPS, ha interpuesto recurso de casación contra la resolución de 1 de febrero de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de divorcio presentado por el señor JUAN BAUTISTA SAMANIEGO.

Ingresado el negocio a la Secretaría de la Sala Civil de la Corte y cumplidas las reglas de reparto, se fijó el negocio en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso.

Por tratarse de un proceso de familia se le corrió traslado del negocio al Ministerio Público por el término de tres (3) días, a objeto de que emitiera concepto sobre la admisibilidad del recurso. Así, la Procuraduría General de la Nación emitió la Vista No. 11 de 15 de junio de 2000, que corre de fojas 209 a 213 de este expediente.

Vencido el término anterior, esta Sala de la Corte debe decidir acerca de la admisibilidad del recurso, previa su confrontación con los presupuestos establecidos por el artículo 1165 en concordancia con el artículo 1160, ambos del Código Judicial.

Esta Corporación observa que la resolución impugnada es de aquellas contra las cuales la ley concede este recurso y que el recurso ha sido formalizado dentro del término legal.

En el escrito de formalización del recurso, visible de fojas 199 a 202, el recurrente invoca como única causal de forma: "Por haberse abstenido el Juez de conocer asunto de su competencia", la cual se encuentra consagrada en el numeral 6° del artículo 1155 del Código Judicial. En este mismo apartado el recurrente señala que la sentencia de 1° de febrero de 2000 confirma o ratifica la sentencia de 28 de mayo de 1999 expedida por el Juzgado de Familia que disuelve el vínculo matrimonial, pese a que el Juez se abstuvo de conocer un asunto de su competencia, como lo es la guarda y crianza y el régimen de visitas de los menores en contravención con lo dispuesto en el artículo 218 del Código de la Familia.

La Sala advierte que el recurso presenta las deficiencias que a continuación se detallan:

Los apartados del recurso no se han elaborado respetando la debida separación de cada uno de ellos. En el apartado correspondiente a la causal alegada se ha incluido el cargo de injuricidad que debe expresarse en el apartado correspondiente a los motivos del recurso.

En cuanto a la supuesta violación alegada, la aducida no es una injuricidad que se pueda alegar a través de causales de forma. Lo sostenido por el recurrente es que el juez desconoció un mandato que no permitía la disolución del vínculo matrimonial sin que se hubiese resuelto lo concerniente a la guarda y crianza y régimen de visita de los menores. No cabe sostener entonces, que el juez se haya abstenido de conocer un asunto de su competencia; en todo caso, lo que pudo haber ocurrido es que el juez haya fallado desconociendo lo dispuesto en el artículo 218 del Código de la Familia. Si eso es así, se estaría ante una irregularidad que pudiese ser motivo para emplear una causal de fondo, no de forma como lo hace el recurrente.

En el apartado correspondiente a la citación y explicación de las normas vulneradas, el recurrente cita como disposición infringida el artículo 218 del Código de la Familia, el cual no es congruente con la causal de forma invocada, sino con una causal de casación en el fondo. Además, incurre el casacionista en el error de transcribir, en este apartado, parte de los fallos de primera y segunda instancia, lo cual es contrario a la técnica con que debe ser presentado el recurso extraordinario de casación.

En vista de las consideraciones expuestas, la Sala encuentra que existe incongruencia entre la causal y los motivos alegados así como incongruencia entre éstos y la explicación de las normas infringidas, lo que hace ininteligible el recurso, por lo que debe declararse inadmisible.

Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por ARGELIS CECILIA NELSON PHILLIPS, mediante apoderado judicial, contra la resolución de primero (1) de febrero de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de divorcio interpuesto por JUAN BAUTISTA SAMANIEGO.

Cópiese y Notifíquese,

(fdo.) PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IVONNE FABREGA DE SUCRE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE LE SIGUE A DELSA LORENA FABREGA DE DOWELL, LUMY FABREGA DE ARIAS E INES MARIA FABREGA. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma MOLINO Y MOLINO, ABOGADOS, en su condición de apoderada judicial de la señora IVONNE FABREGA DE SUCRE, interpuso recurso de casación contra la sentencia de fecha 24 de marzo de 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso sumario de rendición de cuentas presentado contra DELSA LORENA FABREGA DE DOWELL, LUMY FABREGA DE ARIAS E INES MARIA FABREGA.

Cumplidas las reglas del reparto, el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, lo que fue debidamente aprovechado por ambas partes tal como se observa en el escrito de oposición de fojas 287 a 291 y en el alegato para que se admita el recurso de fojas 292 a 296 del expediente.

Luego de realizar el examen de rigor, la Sala considera que se cumple a cabalidad con las exigencias que establece el artículo 1165 del Código procesal, es decir:

1) La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la Ley;
2) El recurso ha sido interpuesto en tiempo;3) El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160; y,
4) La causal expresada es de las señaladas por la Ley.

Por lo que se deja expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación en el proceso sumario de rendición de cuentas presentado por IVONNE FABREGA DE SUCRE contra DELSA LORENA FABREGA DE DOWELL, LUMY FABREGA DE ARIAS E INES MARIA FABREGA.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ

(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BUDGET RENT A CAR DE PANAMA, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FRANKLIN VEGA PARALTA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El apoderado judicial de BUDGET RENT A CAR DE PANAMA, S. A. interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 25 de marzo de 1998, dentro del proceso ordinario que le sigue la sociedad recurrente al señor FRANKLIN VEGA PERALTA.

El recurso fue admitido por esta corporación judicial y se encuentra pendiente de decisión, a lo cual se procede, previas las siguientes consideraciones en torno a los antecedentes procesales del negocio.

BUDGET RENT A CAR DE PANAMA, S. A. (en adelante BUDGET) interpuso demanda ordinaria ante el Juzgado Segundo del Circuito de Veraguas, Ramo Civil, con el objeto de que el señor FRANKLIN VEGA PERALTA fuera condenado al pago de la suma de doce mil trescientos setenta y dos balboas con cincuenta y nueve centavos (B/12,372.59), como indemnización por los daños y perjuicios que le ocasionó el demandado, como único responsable de la colisión y pérdida total del vehículo propiedad de BUDGET, marca Toyota Corolla, color azul, Placa N 027805, año 1995.

Una vez cumplidos los trámites correspondientes, el Juzgado Segundo dictó la Sentencia N 41 de 7 de mayo de 1997, en la que niega la condena en dinero solicitada por BUDGET.

Inconforme con esa decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en la resolución fechada 25 de marzo de 1998, la cual "... REFORMA la sentencia número 41 del 7 de mayo de 1997, proferida por el Juzgado Segundo del Circuito de Veraguas, Ramo Civil, en el sentido de que no existe ausencia de legitimación para accionar por parte del demandante y la CONFIRMA en todo lo demás.-" (F. 133)

Es contra esta última resolución que se ha interpuesto recurso de casación en el fondo, en el cual se invoca como única causal la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido en la parte resolutiva de la sentencia impugnada.

En los motivos que le sirven de fundamento el recurrente sostiene que el fallo impugnado no les otorgó el valor que les corresponde, de acuerdo con la ley, a los siguientes documentos que constan en el expediente: 1) Parte Policivo N 49511 (f. 45 y reverso); 2) Ratificación del citado Parte Policivo (fs. 54-56); 3) Diligencia de inspección ocular, peritaje y avalúo de daños (fs. 46-51); 4) Vista Fiscal N 20 de la Personería Municipal de Santiago, fechada 19 de enero de 1996 (fs. 60-62); y, 5) Auto N 27, dictado por el Juzgado Segundo Municipal del Distrito de Santiago, el 30 de enero de 1996 (f. 63 y reverso).

Igualmente, alega que no se valoraron correctamente los testimonios rendidos por los señores YESSICA JAMILETH NUÑEZ (fs. 66-67); ERNESTO ESCALA SANCHEZ (fs. 74-75); y, CELESTINO NICOLAS ORTIZ (fs. 78-79).

La parte recurrente considera que estas pruebas demuestran tanto los daños que le ocasionó el señor FRANKLIN VEGA PERALTA al vehículo propiedad de la sociedad demandante, como la responsabilidad del mismo de indemnizarlos, razón

por la cual estima que como consecuencia de la errónea valoración de las citadas pruebas el Tribunal Superior violó los artículos 849, 779, 838, 823, 967 y 770 del Código Judicial y los artículos 1644 y 991 del Código Civil.

Por su parte, el Tribunal Superior en el fallo impugnado, concluyó lo siguiente:

> "Ahora bien, pese a lo anterior, si bien se ha comprobado en el proceso que el actuar del demandado estuvo investido de culpa o negligencia, es cierto tal como lo ha expuesto el a-quo, que la parte demandante no ha probado hasta el momento los daños sufridos por el vehículo de su propiedad al momento del accidente, ni mucho menos la cuantía de los mismos; por tanto al existir ausencia de prueba sobre este aspecto no cabe lugar a la indemnización de daños y perjuicios que alega el demandante en los hechos de la demanda.-" (F. 132) (Enfasis de la Sala)

De la sentencia parcialmente transcrita se colige que el Tribunal Superior concluyó que la parte demandante había probado la culpa o negligencia del señor **FRANKLIN VEGA PERALTA**, pero no así el daño ni su cuantía.

En estas circunstancias, procede la Sala a analizar cada una de las pruebas que se señalan fueron erróneamente valoradas por el fallo impugnado, con el objeto de determinar si las mismas comprueban la existencia de los daños y perjuicios que reclama la recurrente.

1) Informe de tránsito N 49511, fechado 18 de septiembre de 1995 (f. 45 y reverso): En este documento se hace una descripción del lugar, fecha y clase de accidente y también del vehículo involucrado en el mismo. Igualmente, se incluye el nombre de las personas que resultaron lesionadas en el mismo y la versión de los hechos de acuerdo con el conductor. No obstante, la Sala estima que si bien se trata de un documento público debidamente autenticado, el mismo sólo es idóneo para probar la ocurrencia de la colisión pero no constituye prueba de la existencia y magnitud de los daños que la sociedad demandante alega le fueron ocasionados al vehículo de su propiedad.

2) Declaración jurada rendida por el señor **LUIS ANTONIO DE LEON CALDERON** (fs. 54-56): Se trata del testimonio aportado por el Agente de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en el cual se ratifica del informe analizado anteriormente. Esta declaración tampoco aporta ningún elemento de convicción en cuanto a los daños reclamados por la recurrente.

3) Diligencia de inspección ocular, peritaje y avalúo de daños (fs. 46-51): Esta inspección fue realizada por la Personera Municipal del Distrito de Santiago, dentro de las sumarias seguidas contra el señor **FRANKLIN VEGA PERALTA**, por el delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio del señor Félix Francisco Solanilla, quien resultó lesionado en la colisión que se discute en el presente proceso.

La Sala estima que como acertadamente señaló el Tribunal Superior en la sentencia atacada, este informe no puede tomarse en cuenta en este proceso, toda vez que la parte demandada no tuvo representación en su práctica, tal como lo disponen los artículos 779 y 784 del Código Judicial, que a la letra dicen:

> "ARTICULO 779. Siempre que se pida como prueba el reconocimiento de una cosa por peritos, el cotejo de firma u otras diligencias semejantes, la parte a quien pueda afectar esa prueba tiene derecho de presenciar su práctica, y debe ser previamente citada; pero, si no concurre, no se suspenderá su diligencia.
>
> ARTICULO 784. Las pruebas practicadas en un proceso seguido en el país, podrán aportarse en copia a otro proceso, en el que se apreciarán siempre que la prueba en el primer proceso se haya

practicado con audiencia de la parte contra quien se aduce y haya precluído la oportunidad para impugnarla."

Sobre este tema, denominado de pruebas trasladadas, es importante citar el criterio del Doctor JORGE FABREGA:

"La tendencia de la jurisprudencia, y del foro, es considerar que si un medio probatorio está reglamentado en el Código, y no se han observado las reglas pertinentes, dicha prueba carece, en esas circunstancias, de todo valor probatorio y la opinión dominante es que el dictamen pericial rendido dentro de un proceso penal, sin intervención ni contradicción de quien es parte en juicio civil, carece de pleno valor probatorio en este último juicio, porque no reúne todas las condiciones y requisitos que la ley exige en materia civil para su producción adecuada." ("Medios de Prueba", Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1998, pág. 393) (Enfasis de la Sala)

"Por ello, no tendría valor prueba de sumarias, en que el opositor no tuvo oportunidad de impugnarla. Es interesante el siguiente fallo de la Corte Suprema de México:

"Los dictámenes periciales rendidos en la averiguación penal carecen de todo valor en el proceso civil como prueba pericial, por cuanto a la parte contra quien se propone no tuvo ocasión de nombrar perito de su parte, ni el juez pudo haber designado en su caso el perito tercero en discordia, como lo establece el estatuto regulador de esta probanza. Es decir, si se le diera valor de prueba pericial a esos dictámenes, se produciría indefensión procesal". Amparo directo 7754/66.-Roberto Acuña.-2 de octubre de 1967, -5 votos-ponente: ERNESTO SOLÍS LÓPEZ."

("Teoría General de la Prueba", Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Santa Fe de Bogotá, 1997, pág. 279)

4) Vista Fiscal N 20, fechada 19 de enero de 1996, emitida por la Personería Municipal del Distrito de Santiago (fs. 60-62): En ella se hace la calificación legal de las sumarias seguidas al señor FRANKLIN VEGA PERALTA, por el delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio del señor Félix Francisco Solanilla, solicitando al Juez de la causa, el sobreseimiento definitivo del primero.

Si bien este documento es prueba de que ocurrió el accidente de tránsito que dio origen a la presente reclamación y también del hecho de que el señor Solanilla resultó lesionado en el mismo, no es relevante para la comprobación de la existencia de los daños alegados por BUDGET.

5) Auto N 27, dictado por el Juzgado Segundo Municipal del Distrito de Santiago el 30 de enero de 1996 (f. 63 y reverso): En esta resolución se da por terminado y se ordena el archivo del proceso penal seguido al señor FRANKLIN VEGA PERALTA, en vista de que el señor Solanilla desistió de su pretensión.

Al igual que la prueba anterior, este documento tampoco tiene ninguna injerencia en cuanto a la determinación de los perjuicios reclamados en este proceso.

6) Declaraciones juradas rendidas por YESSICA JAMILETH NUÑEZ ARCIA (fs. 66-67); ERNESTO ESCALA SANCHEZ (fs. 74-75); y, CELESTINO NICOLAS ORTIZ LONDOÑO (fs. 78-79): Al revisar el contenido de estas declaraciones, se ha podido constatar que los tres testigos se refieren al valor que cada uno de ellos considera tenía el vehículo propiedad de BUDGET, antes de la colisión y después de ella.

La Sala estima que estas pruebas no son idóneas para el establecimiento de los daños reclamados, ya que estas personas declararon en calidad de testigos y no de peritos, que es a quienes, en todo caso, les hubiera correspondido dictaminar si se habían producido los alegados daños y perjuicios y, de ser así, el monto de los mismos, en atención a lo dispuesto en el artículo 953 del Código Judicial, que señala lo siguiente:

> "ARTICULO 953. Para conocer, apreciar o evaluar algún dato o hecho de influencia en el proceso, de carácter científico, técnico, artístico o práctico, que no pertenezca a la experiencia común ni a la formación específica exigida al Juez, se oirá el concepto de peritos."

Se han analizado todas las pruebas que la parte recurrente indica en sus motivos como erróneamente valoradas por el fallo impugnado y, luego de ese estudio, la Sala estima que el Tribunal Superior no incurrió en la causal alegada ni, por tanto, en la violación de las disposiciones legales que se citan en el recurso, razón por la cual no procede casar la sentencia de segunda instancia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 25 de marzo de 1998, dentro del proceso ordinario instaurado por BUDGET RENT A CAR DE PANAMA, S. A. contra el señor FRANKLIN VEGA PERALTA.

Las costas de casación se fijan en la suma de doscientos balboas (B/200.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ELIA ALZAMORA VDA. DE MARTINEZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CAJA DE AHORROS Y GRACIELA DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Morgan & Morgan, en su condición de apoderada especial de la señora ELIA ALZAMORA VIUDA DE MARTINEZ, interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 16 de febrero de 1998, dentro del proceso ordinario que le sigue a CAJA DE AHORROS y GRACIELA DE HERRERA.

Dicho recurso fue admitido por esta corporación judicial y en esta oportunidad debe ser resuelto en el fondo, tarea que se emprende luego de las siguientes consideraciones.

La señora ELIA ALZAMORA VIUDA DE MARTINEZ interpuso demanda ordinaria que le correspondió al Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, con el objeto de que la CAJA DE AHORROS y la señora GRACIELA DE HERRERA, fueran condenadas solidariamente "... a pagar o reembolsar a la demandante la suma de B/.2,563.88 que ella mantenía en la Caja de Ahorros, más los intereses generados por ese depósito, los daños y perjuicios que le han causado, incluyendo el daño moral, según se pruebe en juicio, y las costas y gastos del proceso." (F. 4)

Una vez surtida la tramitación correspondiente, el Juzgado Cuarto dictó Sentencia N 23 fechada 22 de febrero de 1996, en la que declara probada la excepción de extinción de la obligación presentada por la CAJA DE AHORROS y condena a la señora GRACIELA ALEMAN DE HERRERA al pago de la suma demandada en concepto de capital, más las costas y gastos del proceso.

Inconforme con esta decisión, la parte actora presentó recurso de apelación que fue resuelto por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia fechada 16 de febrero de 1998, la cual "... MODIFICA la Sentencia No. 23 de fecha 22 de febrero de 1996, dictada por el Juzgado Cuarto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, tan solo en el sentido de dejar DECLARADO que es la excepción de pago que se le reconoce a la CAJA DE AHORROS, CONFIRMANDO dicha resolución judicial en todo lo demás". (F. 127).

Contra esta última resolución se ha presentado recurso de casación en el fondo, el cual consta de dos causales que se analizarán con la debida separación que exige la ley.

La primera causal consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de aplicación indebida, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Los motivos que le sirven de sustento son los siguientes:

> "MOTIVOS: 1. La señora ELIA ALZAMORA DE MARTINEZ, portadora de la cédula N 8-37-181, quien es la misma persona identificada como ELIA G.A. DE MARTINEZ en el documento visible a foja 62 del expediente, como lo constata la numeración que allí se da de la misma cédula, era cuenta-habiente de la Caja de Ahorros, en cuenta de ahorros bajo la modalidad "o", número 01-76644-6 que tenía con Luis Manuel Martínez, cuenta cuyo saldo al 20 de noviembre de 1989 era de B/.2,563.88.
>
> 2. Está probado en el proceso, entre otros medios por la aceptación de ambas demandadas, que la demandante entregó a una funcionaria de la Caja de Ahorros, en este caso la señora Graciela de Herrera, la libreta de la cuenta mencionada, junto con una volantes (sic) de las que se utilizan para retiro de fondos, a efecto de obtener el pago de los mismos por mediación de la funcionaria mencionada.
>
> 3. Erróneamente, el fallo recurrido ha sostenido que la entrega del dinero a la funcionaria de la Caja de Ahorros, Graciela de Herrera, constituye buen pago de la deuda hecho al acreedor, en este caso la señora viuda de Martínez.
>
> 4. Al sostener el criterio erróneo que sintéticamente se deja expresado, el fallo recurrido desconoce que la entrega del dinero a un EMPLEADO de la propia deudora, como lo era la señora Graciela de Herrera, no constituye pago hecho al acreedor.
>
> 5. Al fundar su decisión en semejante criterio jurídicamente equivocado el Tribunal Superior ha infringido con su fallo normas sustantivas de derecho relativas al pago como medio de extinguir las obligaciones, aplicando la ley a un supuesto distinto del contemplado en ésta." (Fs. 150-151)

Como consecuencia de los cargos planteados en los motivos anteriormente transcritos, la parte estima que el fallo de segundo grado aplicó indebidamente el artículo 1043 del Código Civil, que a la letra dice:

> "Artículo 1043. Las obligaciones se extinguen: por el pago o cumplimiento; por la pérdida de la cosa debida; por la condonación de la deuda; por la confusión de los derechos de acreedores y

deudores; por la compensación; por la novación".

En primer lugar, es preciso aclarar que cuando se invoca la causal de aplicación indebida, al igual que la de violación directa o interpretación errónea, se parte del principio de que el recurrente está de acuerdo con la actitud que asumió el fallo en cuanto a los hechos de la controversia. Consecuentemente, en el presente caso se deben considerar los hechos tal y como los dio por probados el Tribunal Superior, a saber:

1) Que la demandante recurrente trajo a los autos prueba fehaciente del contrato de depósito bancario que da información acerca de la fuente de la obligación que reclama de la CAJA DE AHORROS.

2) Que dicha obligación quedó extinguida por el pago que la CAJA DE AHORROS le hizo a la señora GRACIELA DE HERRERA los días 23 y 30 de octubre de 1989, mediante retiros debidamente autorizados por la recurrente, señora ELIA ALZAMORA VIUDA DE MARTINEZ.

Ahora bien, partiendo de estos hechos, la Sala observa que la recurrente en casación alega que la sentencia impugnada aplicó indebidamente el artículo 1043 del Código Civil al considerar que la obligación de la entidad bancaria se había extinguido por pago, desconociendo que la entrega del dinero a un "EMPLEADO de la propia deudora, como lo era la señora Graciela de Herrera, no constituye pago hecho al acreedor". (F. 151)

No obstante, se advierte que tanto la juzgadora de primera instancia como el Tribunal Superior en el fallo que se impugna en casación, concluyeron que se había extinguido la obligación de CAJA DE AHORROS, teniendo como fundamento la cláusula quinta del contrato de cuenta corriente de ahorro aportado al proceso por la propia demandante, la cual expresa lo siguiente:

> "QUINTO: Todo retiro de dinero deberá ser hecho por el depositante personalmente o en virtud de orden escrita en los formularios que suministrará la CAJA DE AHORROS a solicitud del interesado y mediante presentación de la Libreta de Ahorros correspondiente. El depositante no tendrá derecho a girar cheques o letras contra esta cuenta. La CAJA DE AHORROS procurará evitar cualquier fraude contra los depositantes; sin embargo, cualquier pago hecho a cualquier persona que presente esta libreta será un pago bueno y válido y relevará a la CAJA DE AHORROS de toda responsabilidad para con el depositante o su representante por la suma así pagada, a menos que la CAJA DE AHORROS haya sido previamente notificada por escrito por el depositante de que la libreta se ha perdido, ha sido robada o no se encuentra en poder de ésta". (F. 1) (Enfasis de la Sala)

En el caso que nos ocupa se observa que la señora GRACIELA DE HERRERA tenía en su poder la libreta de la señora ELIA ALZAMORA VIUDA DE MARTINEZ con conocimiento de ésta, como ella misma lo reconoce en el hecho segundo del libelo de demanda y que, además, estaba debidamente autorizada para realizar los retiros de dinero según se desprende de las volantes de retiro fechadas 23 y 30 de noviembre de 1989, consultables a fojas 63 y 64 del expediente, firmadas por la demandante recurrente.

En estas circunstancias, no puede considerarse que la señora GRACIELA DE HERRERA estuviese actuando en su condición de "empleada" de la deudora CAJA DE AHORROS como alega la demandante en su recurso, sino que lo hizo en virtud de la autorización escrita que le otorgara la dueña de la cuenta de ahorros, en cumplimiento de los dispuesto en la cláusula quinta de dicho contrato.

Consecuentemente, la Sala concluye que el Tribunal Superior no aplicó indebidamente el artículo 1043 del Código Civil, cuando consideró que la obligación de CAJA DE AHORROS se había extinguido por el pago realizado a la señora GRACIELA DE HERRERA, razón por la cual se descarta la primera causal.

La segunda causal que se invoca consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Los motivos que la fundamentan expresan lo siguiente:

> "MOTIVOS: 1. Como ya quedó dicho, la señora ELIA ALZAMORA DE MARTINEZ, que es la misma persona identificada como ELIA G.A. DE MARTINEZ, con cédula 8-37-181, era cuenta-habiente, junto con LUIS MANUEL MARTINEZ, de la cuenta modalidad "o" número 01-7664-6, de la Caja de Ahorros, con saldo al 20 de noviembre de 1989 de B/.2,563.88.
>
> 2. Está también probado en el proceso que la señora Elia de Martínez entregó la libreta de la cuenta de ahorros mencionada, junto con volantes de retiro de fondos, a la empleada de la Caja de Ahorros, señora Graciela de Herrera, para hacer cobros de sus fondos.
>
> 3. La sentencia recurrida sostiene que la entrega del dinero por parte de la Caja de Ahorros a su propia empleada, la señora Graciela de Herrera, constituye pago al acreedor, lo cual no es cierto porque la señora de Herrera en ningún momento durante la transacción dejó de ser funcionaria o empleada de la Caja de Ahorros para convertirse en agente de la demandante, con independencia de la función pública que desempeñaba.
>
> 4. El fallo recurrido desconoce erróneamente que la entrega de dinero a un empleado o agente del propio deudor no constituye pago a favor de la persona a cuyo favor estaba constituida la obligación.
>
> 5. También desconoce el fallo que la señora Graciela de Herrera, por ser empleada o funcionaria de la Caja de Ahorros, no era "otra" persona autorizada por la acreedora para recibir el pago en su nombre, sino tan sólo una empleada o funcionaria más de la propia institución, cuya tenencia del dinero no constituye pago a la derecho habiente.
>
> 6. Al atribuir la calidad de pago de la obligación al acto de entrega de dinero a una empleada de la deudora, el Tribunal desconoció e infringió en consecuencia la disposición sustantiva que señala a quién puede hacerse entrega y pago de la cosa adeudada, que no son otras que la propia acreedora u "otra" persona facultada por ésta para recibir dicho pago". (Fs. 152-153).

La recurrente sostiene que la sentencia impugnada incurrió en la causal invocada al concluir que la entrega del dinero de la cuenta de ahorros de la señora ELIA ALZAMORA VIUDA DE MARTINEZ a la señora GRACIELA DE HERRERA, quien era funcionaria de la CAJA DE AHORROS, constituye pago de la cosa adeudada, sin tomar en cuenta que la entrega de dinero a un empleado del deudor no puede considerarse como pago a la persona a cuyo favor estaba constituida la obligación.

Como consecuencia de lo anterior, alega que el Tribunal Superior violó directamente por omisión el artículo 1049 del Código Civil que prescribe lo siguiente:

> "Artículo 1049. El pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirlo en su nombre".
> (Subraya la Sala)

Como ya se señaló al analizar la primera causal del presente recurso de casación y como expresamente lo manifiesta la propia recurrente en el motivo segundo de esta causal, la señora ELIA ALZAMORA DE MARTINEZ "entregó la libreta

de la cuenta de ahorros mencionada, junto con volantes de retiro de fondos, a la empleada de la Caja de Ahorros, señora Graciela de Herrera, para hacer cobro de sus fondos." (F. 152)

Consecuentemente, como acertadamente señala el fallo impugnado, debe concluirse que la señora GRACIELA DE HERRERA se encontraba debidamente autorizada para retirar el dinero de la cuenta perteneciente a la recurrente y, en esas circunstancias, no tiene ninguna relevancia el hecho de que la señora DE HERRERA fuese funcionaria de CAJA DE AHORROS, pues no actuó en nombre de ella.

Por tanto, la Sala considera que el Tribunal Superior no incurrió en violación directa del artículo 1049 del Código Civil, puesto que el pago de la obligación se le hizo a "otra persona autorizada para recibirlo en su nombre", como prescribe la citada disposición legal.

No habiendo otros cargos que considerar, se descarta también esta segunda causal.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 16 de febrero de 1998, dentro del proceso ordinario instaurado por la señora ELIA ALZAMORA VIUDA DE MARTINEZ contra CAJA DE AHORROS y GRACIELA DE HERRERA.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO LOS GOBELINOS Y VIRGINIA CLARE DE GONZALEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LES SIGUE INVERSIONES ULISES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO, en su condición de apoderada especial de ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO LOS GOBELINOS, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 2 de marzo de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso que le sigue INVERSIONES ULISES, S.A. a su representada.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que únicamente aprovechó el recurrente, como consta de fojas 287 a 289.

La Sala procede a determinar si el recurso cumple con los requisitos que establecen las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil para su admisibilidad.

Al examinar el escrito contentivo del recurso, visible de fojas 277 a 279, se observa que el mismo no se ajusta a la técnica propia de este medio de impugnación, por las siguientes razones:

Si bien la causal única de fondo invocada ha sido determinada conforme a los términos que establece el artículo 1154 del Código Judicial ("INFRACCION DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO, POR CONCEPTO DE ERROR DE DERECHO EN CUANTO A LA

APRECIACION DE LA PRUEBA, ..."), los motivos no contienen el obligante cargo de injuridicidad contra la sentencia de segunda instancia, requerido en cada uno de ellos, para efectos de este apartado del recurso. Veamos el contenido de los mismos:

> "PRIMERO: La Asamblea General de Propietarios del Condominio Los Gobelinos, celebró una reunión extraordinaria el día 22 de julio de 1993, la cual estuvo presidida por IRMA GONZALEZ DE MARTINIS en su condición de presidenta ad hoc y así consta en las pruebas presentadas.
>
> SEGUNDO: La Asamblea General de Propietarios del Condominio Los Gobelinos, celebró una reunión extraordinaria el día 26 de julio de 1993, la cual estuvo presidida por IRMA GONZALEZ DE MARTINIS en su condición de presidenta ad hoc y así consta en las pruebas presentadas.
>
> TERCERO: El Primer Tribunal Superior señala en su resolución que actuó como presidente JULIO MARTINIS y que este no estaba facultado para presidir dichas reuniones.
>
> CUARTO: Las actas están firmadas por la señora IRMA GONZALEZ DE MARTINIS en su condición de presidente ad hoc, es decir ésta era secretaria de la Junta Directiva y al momento de que se dio la vacante del presidente y del Vicepresidente, ésta podía actuar ya que el Reglamento de Copropiedad que estaba vigente a la fecha de la celebración de las asambleas, permitía que la secretaria ejerciera el cargo de presidenta o actuara en ausencia de los titulares.
>
> QUINTO: Se acusa a la sentencia recurrida de que llegó a una conclusión errónea de valoración de las pruebas, ya que conforme al reglamento de copropiedad permitía que la demandada actuará o designará un presidente en la ausencia del titular.
>
> b) DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EXPLICACION DE CÓMO LO HAN SIDO:
>
> La resolución recurrida violó los artículos 42 y 43 del Reglamento de Copropiedad del Condominio Los Gobelinos, normas que se encontraban vigentes a la fecha de la celebración de las asambleas de propietarios, toda vez que la ley 13 de 1993, estableció el término de un año a partir de la promulgación de dicha ley para que se ajustaran los reglamentos de copropiedad existentes a ese momento.
> ...
> ...
>
> (Fojas 278 a 279)

Como se puede apreciar, esos dos apartados del recurso han sido desarrollados en forma de alegatos, ya que plantean hechos acaecidos en el proceso de acuerdo a las apreciaciones del recurrente. Únicamente en el quinto motivo se dice que la sentencia llegó a una conclusión errónea debido a la valoración de las pruebas, sin embargo, no menciona cuáles pruebas fueron indebidamente apreciadas, sino que concluye señalando que el reglamento de copropiedad permitía que la demandada actuara o designara un presidente. De manera que ni siquiera este motivo establece un cargo debidamente estructurado en relación a la causal.

En el apartado dedicado a la cita de las disposiciones legales infringidas y a la explicación de cómo lo han sido, en primer lugar, no se invoca la norma probatoria violada, en este caso la norma que establece el valor de la prueba. Y, en segundo lugar, solamente se mencionan como violados los artículos 42 y 43 del Reglamento de Copropiedad del Condominio debido a que fueron interpretados

en forma errónea por la sentencia recurrida. Dicho concepto de infracción no es congruente con la causal probatoria invocada sino con otra de las causales de fondo que establece la ley (la de violación directa).

Por las consideraciones expuestas, el recurso resulta ininteligible por lo que la Sala necesariamente debe declararlo inadmisible.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO LOS GOBELINOS y VIRGINIA CLARE contra la Resolución de 2 de marzo de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior dentro del proceso sumario instaurado por INVERSIONES ULISES, S.A.

La costas de casación se fijan en la suma de CIEN BALBOAS (B/.100.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) JORGE FEDERICO LEE

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria de la Sala de lo Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EMMA PORCEL DE TEJEIRA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE JAVIER TEJEIRA MUÑOZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DICISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada RUFINA LAMBRAÑO S., en su condición de apoderada judicial de EMMA PORCELL DE TEJEIRA, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 28 de enero de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Familia.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las parte alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que utilizaron ambos al presentar los escritos que corren de fojas 914 a 922 (opositor) y 923 a 928 (recurrente).

Posteriormente, se corrió traslado del recurso al Ministerio Público, que emitió la Vista visible a fojas 232 conceptuando que el recurso de casación debía ser declarado admisible.

Esta Corporación procede al examen del recurso de casación conforme a los presupuestos que establece el artículo 1165 y concordantes del Código Judicial.

En este caso se cumple con tres requisitos contenidos en la norma previamente citada, que son: la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley; el recurso ha sido interpuesto en tiempo; y, las causales expresadas son de las señaladas por la ley. Sin embargo, no resulta satisfecho a cabalidad el relativo a las exigencias que debe reunir el escrito por medio del cual se interpone el recurso. Veamos:

En el escrito de casación, que corre de fojas 899 a 905, se invocan dos causales de fondo que son: I- "INFRACCION DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO POR CONCEPTO DE VIOLACION DIRECTA DE LA NORMA DE DERECHO" y II- "INFRACCION DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO POR CONCEPTO DE ERROR DE HECHO EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LA PRUEBA".

El error se observa en el tercer apartado de ambas causales, es decir el

relativo a la citación de las normas de derecho infringidas y la explicación de cómo lo han sido, ya que en ambas causales se cita una misma norma sustantiva, el artículo 223 del Código de Familia. Como es sabido, esta situación resulta improcedente puesto que la causal de violación directa se produce independientemente de toda cuestión de hecho, ya que el tribunal de casación debe tener como hechos los reconocidos en la sentencia. Por tanto, no se puede considerar que se desconoció el derecho consagrado en la norma con independencia de toda cuestión probatoria y a la vez estimar que se violó la misma norma como consecuencia de un error probatorio. Por tanto, para efectos de la aludida norma, el recurrente debe utilizar una de las dos causales.

Aunado a lo expuesto, en la explicación de cómo se infringió la segunda norma sustantiva citada dentro de la causal probatoria, no queda suficientemente claro que dicha violación obedezca al error hecho en cuanto a la existencia de las pruebas que se aduce en los motivos, de manera que el casacionista debe enmendar tal explicación porque tiende a confundirse con la violación directa de la norma.

Así las cosas, la Sala considera que deben corregirse los errores señalados, de manera que cada causal guarde una perfecta congruencia con las normas de derecho que la fundamenta.

Consecuentemente, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCION del recurso de casación interpuesto por EMMA PORCELL DE TEJEIRA contra la Sentencia de 28 de enero de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Familia dentro del Proceso de Divorcio que le sigue a JAVIER TEJEIRA MUÑOZ.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) JORGE FEDERICO LEE

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala de lo Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

NATASHA SUCRE RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ADMINSTRACION MODERNA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Sucre, Arias, Castro & Reyes, apoderada judicial de la señora NATASHA SUCRE, interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 31 de enero de 2000, dentro del proceso ordinario instaurado por la recurrente contra ADMINISTRACION MODERNA, S. A.

Encontrándose el recurso pendiente de decidir sobre su admisibilidad, la sociedad ADMINISTRACION MODERNA, S. A., por intermedio de su representante legal presentó escrito con el objeto de "... revocar a todos los apoderados judiciales (ya sea por poderes otorgados y por poderes sustituidos) de la sociedad que represento y, asimismo, a fin de otorgar nuevamente Poder Especial a LÓPEZ, MORALES & CHIARI (MAAT ASESORES)", "... para que comparezcan en nombre y representación de la sociedad ADMINISTRACION MODERNA, S. A. en el proceso civil enunciado en el margen del presente poder, en calidad de apoderados judiciales". (F. 213)

Luego de haberse puesto en conocimiento de las partes los términos del poder conferido a la firma de abogados López, Morales & Chiari (MAAT Asesores),

el apoderado judicial sustituido, Licenciado Gasparino Fuentes Troestch, interpuso incidente de nulidad de lo actuado a partir del mencionado poder, el cual es consultable a fojas 216-217.

No obstante, la Sala advierte que la presentación de dicho incidente en esta etapa del proceso es manifiestamente improcedente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1176 del Código Judicial, el cual prescribe que durante la sustanciación del recurso de casación, "no se admitirá más incidente que el de recusación".

En estas circunstancias, el incidente de nulidad propuesto por el Licenciado Gasparino Fuentes Troestch debe ser rechazado de plano.

Por otra parte, se observa que la firma forense SUCRE, ARIAS, CASTRO & REYES, representada personalmente por el Licenciado Ernesto B. Arias y la firma de abogados LOPEZ, MORALES & CHIARI (MAAT ASESORES), representada personalmente por el Licenciado Hernando Chiari, actuando en nombre y representación de la demandante y de la demandada respectivamente, han presentado escrito de transacción que contiene las siguientes declaraciones y cláusulas:

> "Declaran LAS PARTES su legítimo deseo de dar por concluido el presente proceso, por lo que han procedido a suscribir la presente transacción conforme los siguientes términos:
>
> PRIMERO: Declara LA DEMANDADA que reconoce deberle a LA DEMANDANTE la suma única, total y definitiva de B/.135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS) con motivo de la administración de la finca 21867, inscrita al Tomo 517, Folio 414 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público, que fuera propiedad de LA DEMANDANTE, así como por todos los intereses, costas y gastos judiciales que se hayan producido con motivo del presente proceso.
>
> SEGUNDO: Acuerdan las partes que, con el fin de dar por terminado el reclamo que dio origen a este proceso, por este medio convienen en que LA DEMANDANTE reciba como pago total y definitivo de esta obligación la totalidad de los bienes secuestrados de LA DEMANDADA, que sean de su propiedad.
>
> TERCERO: LA DEMANDANTE acepta el pago en la forma en que se detalla en la cláusula anterior y conviene con LA DEMANDADA en poner fin al presente proceso.
>
> CUARTO: LA DEMANDADA exime de toda responsabilidad presente y futura a LA DEMANDANTE por razón de las medidas cautelares ordenadas en este proceso y por el proceso mismo y desisten de cualquier acción judicial o extrajudicial, excepción o incidente que pueda presentarse. De igual forma declaran las partes que no tienen ningún reclamo más que hacerse en virtud de la reconvención solicitada por LA DEMANDADA en contra de LA DEMANDANTE y aceptan dar por concluida dicha reconvención sin obligación para ninguna de las partes.
>
> QUINTO: LA DEMANDANTE y LA DEMANDADA aceptan la presente transacción y se obligan a cumplir la misma en los términos y condiciones contenidos en el presente documento y solicitan a los Honorables Magistrados, lo siguiente:
>
> 1.- Se apruebe la presente transacción en todos sus términos.
>
> 2.- Que la Augusta Sala, o quienes correspondan, expidan los oficios necesarios a fin de cancelar las distintas medidas cautelares que existan en el proceso.
>
> 3.- Se ordene la devolución de la garantía consignada en este

proceso.

4.- Se ordene el archivo del expediente". (Fs. 219-220)

El Código Judicial contempla la transacción como uno de los medios excepcionales de terminación del proceso. Específicamente el artículo 1068 señala que en cualquier estado del proceso, inclusive durante el trámite del recurso de casación y dentro de las condiciones establecidas por el Código Civil, podrán las partes transigir la litis.

Como requisitos para que surta sus efectos en el proceso establece, en primer lugar, que se acompañe a la solicitud el documento que la contenga o que se haga constar en memorial dirigido al Juez que conoce de dicho proceso. En segundo lugar, exige que el escrito sea presentado personalmente o, en su defecto, que la firma de las partes haya sido autenticada ante Juez o ante Notario.

El análisis de los documentos aportados al proceso pone de manifiesto que las partes han cumplido con los requisitos necesarios para aprobar la presente transacción, ya que la firma de los apoderados judiciales de ambas partes fueron debidamente autenticadas por el Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá y dichos apoderados se encuentran expresamente facultados para transigir, como se desprende de los poderes otorgados por la demandante y la demandada, los cuales son consultables a fojas 1 del cuadernillo del secuestro y 213 del expediente principal, respectivamente.

Consecuentemente, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de nulidad propuesto por el Licenciado Gasparino Fuentes Troestch; APRUEBA LA TRANSACCION celebrada por las partes en el proceso ordinario instaurado por NATASHA SUCRE contra ADMINISTRACION MODERNA, S. A.; DECLARA TERMINADO EL PROCESO y, en consecuencia, ORDENA al Juzgado Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil:

1) El levantamiento de las medidas cautelares que existan dentro del presente proceso;

2) La cancelación y consiguiente devolución de la garantía consignada en el proceso; y,

3) El archivo del expediente.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TOYOTA RENT-A CAR PANAMA, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO INTERPUESTO POR ALBERTO TORRES CONTRA EDUARDO ATENCIO Y TOYOTA RENT-A CAR PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala, mediante auto de fecha 14 de julio de 1999, declaró admisible el recurso de casación interpuesto por TOYOTA RENT-A CAR PANAMA, S. A. dentro del proceso ordinario propuesto por el señor ALBERTO TORRES contra la sociedad

recurrente y el señor EDUARDO ATENCIO.

El recurso se interpone contra la resolución de 28 de mayo de 1998, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia que REFORMA el auto N 952 de 12 de mayo de 1997 proferido por el Juez Sexto de Circuito de lo Civil y en su lugar FIJA en la suma de B/.5,297.75, el monto de la condena que solidariamente deben pagar los demandados, monto éste que había sido fijado por el a-quo en la suma de B/.6,489.61. Igualmente, el Tribunal Superior condena a los demandados al pago de las costas que señala en B/.1,309.55.

Agotada la etapa de admisibilidad del recurso y concluido el término de alegatos sin que hubiese sido aprovechado por ninguna de las partes, se procede a dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

El señor ALBERTO TORRES, mediante apoderado judicial, interpuso demanda ordinaria en contra del señor EDUARDO ATENCIO RIOS y la empresa TOYOTA RENT-A CAR PANAMA, S. A., a fin de que previo los trámites del proceso ordinario fueran condenados a pagarle solidariamente la suma de B/.13,000.00 que le adeudan en concepto de capital, más las costas, gastos e intereses, por los daños que sufrió el vehículo de su propiedad como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 21 de noviembre de 1993.

Agotadas las etapas procesales le correspondió al Juez Sexto del Circuito de lo Civil desatar la litis mediante la Sentencia N 54 de 4 de julio de 1995, en la que resolvió condenar en abstracto a los demandados a pagar solidariamente al señor ALBERTO TORRES, "la suma de que resulte de la aplicación del procedimiento que consagra el artículo 983 del Código Judicial", para lo cual se dejó establecido las siguientes bases:

> "a) Costo de las piezas o refracciones indispensables para la reparación de un vehículo Chevrolet, 1987, Blazers 4x4, en cuanto a la defensa trasera, farol trasero, izquierdo, guardafango trasero izquierdo, tapa del maletero, vidrio lateral trasero izquierdo, vidrio trasero roto, y posibles daños mecánicos;
>
> b) Costo de la mano de obra indispensable para la reparación de los daños que se describen en el punto anterior;
>
> c) Las costas de que trata el artículo 1057 del Código Judicial, a cargo de la parte demandada, se tasará al aplicar el porcentaje que establece la tarifa de honorarios profesionales al monto que deduzca la condena ilíquida establecida en los puntos a) y b) de esta resolución". (Fs.88).

Contra la resolución anterior, tanto la parte actora como también uno de los demandados, la empresa TOYOTA RENT-A CAR PANAMA, S. A., interpusieron recurso de apelación que fue resuelto por el Primer Tribunal Superior mediante resolución fechada 29 de diciembre de 1995 en la que se resolvió CONFIRMAR en todas sus partes la resolución N 54 de 4 de julio de 1995, dictada por el Juez Sexto del Circuito de lo Civil.

Ejecutoriada la sentencia y de acuerdo a lo prescrito por el artículo 983 del Código Judicial por contener la sentencia una condena en abstracto, la parte actora presentó para la aprobación del Juzgador, la liquidación de los daños causados al automóvil de su propiedad, la cual fijó en la suma de B/.6,489.61, (fs. 122), liquidación ésta que fue objetada por la demandada TOYOTA RENT-A CAR PANAMA, S. A. por considerarla "desproporcionalmente excedida de los reales valores que conllevaría la reparación de daños causados, ..." (Fs. 130), situación que lleva de acuerdo a lo reglado para estos casos, a la presentación y práctica de pruebas, fase esta de la que participaron ambas partes al proponer pruebas documentales, periciales y de informes (fs. 137).

Evacuadas las pruebas, procede el Juez Sexto del Circuito de lo Civil, mediante auto N 952 de fecha 12 de mayo de 1997, a aprobar la liquidación motivada presentada por la parte actora que fija en la suma de B/.6,489.61, el monto de la condena que solidariamente deben pagar los demandados, condenándolos además, al pago de la suma de B/.1,547.92 en concepto de costas en favor del actor.

Nuevamente la demandada TOYOTA RENT-A CAR PANAMA, S. A., hace uso del recurso de apelación que interpone contra la resolución N 952, antes referida, recurso que como quedó dicho al inicio de esta sentencia, fue resuelto por el Primer Tribunal Superior de Justicia mediante Resolución de fecha 28 de mayo de 1998, en la que se decide reformar el auto N 952 de 12 de mayo de 1997 dictado por el Juez Sexto del Circuito de lo Civil, en el sentido de fijar en la suma de B/.5,297.75 el monto de la condena que solidariamente deben pagar los demandados EDUARDO ATENCIO y TOYOTA RENT-A CAR, PANAMA, S. A.

Es en contra de la resolución de fecha 28 de mayo de 1998, dictada por el Tribunal ad-quem que TOYOTA RENT-A CAR, PANAMA, S. A. interpone el recurso de casación que la Sala pasa a resolver de inmediato.

CONTENIDO DEL RECURSO

Se trata de un recurso de casación en el fondo en el que se invoca como causal única "Infracción de la ley sustantiva por concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada".

La causal viene sustentada en cinco motivos que se transcriben seguidamente:

> "PRIMERO: La resolución incurre en error al fundarse en el informe del perito del tribunal (fs.172) para establecer el costo de la mano de obra por reparaciones al automóvil del demandante; dejando de apreciar que dicho informe incluyó en la estimación de costos, los rubros de amortiguador, hoja madre del muelle, tapicería, cuarto del panel, línea de freno, abolladura de capota, posibles daños mecánicos, cerebro electrónico neutralizado, motor trancado, asientos y alfombras deteriorados, los cuales no eran materia de la prueba pericial, cuyos puntos precisos estaban limitados al valor de enderezamiento y pintura del guardafango trasero izquierdo, costo de la instalación de defensa trasera, farol trasero izquierdo, vidrio lateral izquierdo, tapa y vidrio del maletero, y a establecer si el guardafango trasero izquierdo de dicho automóvil admitía enderezamiento y pintura o si, contrariamente, debía ser reemplazado por uno nuevo (fs.136, 137 y 149).
>
> SEGUNDO: La resolución impugnada incurrió en yerro al admitir en el informe del perito del tribunal (fs. 172) la estimación de costos por posibles daños mecánicos, dejando de apreciar que tales rubros son ajenos a la competencia del perito, quien en la Diligencia de Toma de Posesión (fs. 159) y en su informe expresó ser chapistero.
>
> TERCERO: La resolución impugnada incurrió en yerro al desestimar la prueba pericial de los peritos de la parte demandada, JUVENAL GOMEZ y JOSE TORRES, por no haber incluido en su Informe sobre costos de mano de obra, lo referente a posibles daños mecánicos al automóvil del demandante; dejando de apreciar que, contrariamente, el Informe de estos peritos se ciñió (sic) a los extremos o puntos precisos sobre los cuales versaba la experticia, que nada contenía en lo referente a posibles daños mecánicos al automóvil del demandante (fs. 136, 137 y 149), erradamente apreciados por la resolución impugnada.

> CUARTO: La resolución impugnada valora erradamente el renglón de posibles daños mecánicos ocurridos al automóvil del demandante, contenido en el Informe del perito del tribunal, al considerar que el derecho a la reparación de posibles daños mecánicos fue reconocido en la sentencia de 4 de julio de 1995 (fs. 88); pero deja de apreciar que aun cuando tal derecho fue reconocido en abstracto, no fue objeto de ninguna de las pruebas promovidas por las partes - ni por el tribunal - que condujera a la demostración de tales daños ni a su eventual valoración líquida.
>
> QUINTO: La resolución impugnada incurre en apreciación errónea de la prueba pericial, en lo referente a las interrogaciones que sobre daños mecánicos al automóvil del demandante formuló el juzgador de primera instancia a los peritos, y a las respuestas dadas por éstos sobre ese mismo tema en el acto de entrega del Informe Pericial (fs. 169); reconociéndole erradamente eficacia probatoria, toda vez que el punto sobre posibles daños mecánicos nunca fue objeto de la prueba pericial, ni siquiera después que el tribunal la adoptó como prueba de oficio; debiendo las pruebas de oficio sujetarse a las reglas establecidas para cada medio probatorio, siendo esta apreciación causa fundamental por la cual se fijó a cargo de mi representada la obligación de pagar costos por daños mecánicos a favor del demandante". (Fs. 237-238).

El impugnante expone como disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo fueron, los artículos 967, 783 y 770 del Código Judicial y el artículo 1644 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA

De lo expuesto por el casacionista se desprende que el cargo de injuricidad que se le imputa al fallo impugnado consiste en haber dado valor al informe pericial rendido por el perito del Tribunal y que corre a fojas 172 del expediente, por cuanto dicha pericia, para establecer el costo de mano de obra para reparar el automóvil del demandante, incluyó algunos costos de reparaciones de daños que no estaban incluidos o no eran materia de la prueba pericial solicitada y acogida por el Tribunal (fs. 136, 137 y 149).

Indica, por otra parte, que el perito designado por el Tribunal cuyo informe consta a fojas 172, no debió ser valorado en la resolución impugnada por cuanto que el perito siendo chapistero (f. 159), en su informe realizó estimación de costos por posibles daños mecánicos, materia esta que no era de su competencia.

Resulta aclaratorio transcribir lo pertinente del auto impugnado en relación con el error que según el recurrente se cometió por el ad-quem. En este sentido se pronunció el fallo:

> "Tomando en consideración, que ya se determinó el costo de las piezas o refracciones indispensables para la reparación del vehículo antes mencionado (punto a)), corresponde ahora determinar el costo de la mano de obra para llevar a cabo dicha reparación, la cual se estimará en base al informe pericial rendido por el perito del Tribunal, ya que en este no sólo se incluye la instalación, arreglo y pintura del carro, sino también la reparación de los posibles daños mecánicos existentes, conforme lo estableció la sentencia de cuatro (4) de julio de 1995 (ver f. 88), a diferencia del rendido por los peritos de la parte demandada, que no incluyen o especifican dentro del costo de su mano de obra, dicho aspecto." (Fs. 203 -204)

De lo expuesto es necesario resaltar lo siguiente sobre el juicio de valor estimado por el ad-quem:

1)- El Tribunal Superior tomó en consideración, para estimar el costo de la mano de obra, los daños materiales y mecánicos que fueron establecidos en la sentencia de 4 de julio de 1995 como base para la liquidación;

2)- Que el Tribunal Superior tomó en consideración y evaluó, además, el informe rendido por los peritos de la parte demandada, el cual consideró poco abarcador para el fin buscado ya que sólo como ejemplo, este peritaje excluyó lo relativo al valor de daños mecánicos sufridos por el automóvil y que fueron incluidos en la sentencia en abstracto como base para la liquidación final.

Es decir, es factible apreciar que el Tribunal Superior conjugó las pruebas, periciales en este caso, valorándolas de acuerdo al principio de la sana crítica y de manera racional y lógica sujetándose a los daños que sufrió el vehículo de acuerdo a la sentencia dictada en abstracto y lo expuesto por los peritos, estimación llevada a cabo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 967 del Código Judicial, que es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 967. La fuerza del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso."

Con respecto a la falta de capacidad o competencia del perito del Tribunal, señor ARIEL SINGH, para dictaminar costos por reparaciones mecánicas, siendo que su profesión es la de chapistero, observa la Sala que tanto éste, como los peritos de la parte recurrente, son chapisteros de profesión, todos con más de 18 años de dedicarse a su profesión, lo que indica que sus informes y respuestas dadas están fundamentadas en la experiencia adquirida.

Es en base a esta experiencia que los tres peritos son coincidentes en el hecho indiscutible y lógico de los daños mecánicos y otros deterioros que sufre un automóvil que se mantiene por uno o dos años parado, sin uso ni mantenimiento (fs. 168-169), ello sin necesidad de ser mecánicos de profesión y refiriéndose de manera especial a daños mecánicos que denominan "motor trancado" por no estar el vehículo en funcionamiento y que para su determinación no se requiere de mayor especialidad.

Sobre este tipo de daño mecánico lógico fue que el perito del Tribunal estimó su costo de mano de obra, pero incluido dentro del costo total de mano de obra por todas las reparaciones, las mecánicas.

Es de considerar además, como lo mencionáramos anteriormente, que a pesar de que la condena en abstracto (fs. 88), hizo referencia a que se tomará como base para la liquidación los "posibles daños mecánicos", la parte recurrente al solicitar el peritaje excluyó del mismo este rubro señalado en la sentencia, limitando con ello la actividad de sus peritos, limitación ésta que fue suplida por el perito del Tribunal.

Considera la Sala, por lo señalado, que no prosperan los cargos de injuricidad señalados por el recurrente en los dos primeros motivos de su recurso.

En el resto de los motivos, el casacionista cuestiona la valoración que dio el Tribunal Superior a las pruebas periciales e interrogatorio efectuado por el Tribunal Superior a los peritos, en cuanto estas pruebas estaban dirigidas a establecer los posibles daños mecánicos ocurridos al automóvil del demandante y el costo de mano de obra de los mismos, cuando este punto nunca fue el objeto de la prueba pericial solicitada por el recurrente.

La Sala reitera, por considerarlo de importancia ya que tiene que ver directamente con la satisfacción del derecho reclamado y con lo decidido mediante

sentencia ejecutoriada (f. 88), que el punto relativo a los daños mecánicos y el derecho a su resarcimiento fue reconocido judicialmente y su estimación y liquidación fue solicitada por la parte actora de acuerdo al procedimiento que indica el artículo 983 del Código Judicial.

Si bien la parte demandada-recurrente, al presentar como prueba el peritaje no incluyó los daños mecánicos y el costo de la mano de obra para su reparación, la Sala observa que al momento de admitirse las pruebas de la casacionista, lo que se hizo mediante resolución de fecha 17 de septiembre de 1996 (fs. 137), la prueba pericial se admitió concretizando, tal como lo faculta el artículo 955 del Código Judicial, los puntos sobre los cuales debería recaer el peritaje, y dentro de estos puntos, además de los solicitados por el proponente de la prueba, el Juez a-quo incluyó los puntos "descritos también en la sentencia N 54 de 4 de julio de 1995 (fs. 88) proferida por este Tribunal, ..." (fs. 137).

Por lo anterior la Sala no concuerda con lo expuesto por el recurrente cuando afirma que el punto relativo a los daños mecánicos y su costo de reparación a que se refieren los peritos y en especial el perito designado por el Tribunal y sobre el cual fueron interrogados al momento de presentar su peritaje, no constituía un tema que debería ser objeto de la pericia pues como quedó claro, este tema quedó incluido dentro de los puntos que debía versar el dictamen de los peritos, por disponerlo el Juzgador con fundamento al artículo 955 antes citado.

Por esa misma razón, es decir toda vez que la prueba pericial admitida debía abarcar también el aspecto mecánico, de su práctica y presentación de informes, el a-quo "a manera de receptar mayores elementos de causa y convicción, procedió a interrogar a los peritos ..." (Fs. 168), interrogatorio que entre otros aspectos, incluyó los mecánicos, produciéndose de esta manera la prueba que complementada con otras, fue debidamente valorada por el Tribunal Superior quien le otorgó eficacia probatoria por haber sido, como hemos indicado reiteradamente, una prueba legalmente producida y acorde con el mandato expreso contenido en la sentencia de 4 de julio de 1995 que condenó en abstracto y a considerar como base para la liquidación, entre otros, los posibles daños mecánicos sufridos por el automóvil del demandante, razón por la cual no se ha producido el error de derecho en relación con la prueba.

En vista de lo anterior considera la Sala que no se ha dado la infracción de las disposiciones legales citadas por el casacionista por lo que no existen méritos para casar la resolución impugnada.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Resolución de fecha 28 de mayo de 1998, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario interpuesto por el señor ALBERTO TORRES contra EDUARDO ATENCIO y TOYOTA RENT-A CAR PANAMA, S. A.

Las obligantes costas a cargo de la recurrente se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INVERSIONES Y PROYECTO MARBELLA, S. A., CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A. y COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE GUILA LALO DE COHEN, MORRIS COHEN Y DAYANA ANA COHEN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL

(2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la sentencia de segunda instancia proferida el 22 de febrero de 2000 por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, por la cual se adiciona y modifica la sentencia No.49, de 3 de julio de 1997, dictada por el JUZGADO TERCERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, la firma de abogados SOLIS, ENDARA, DELGADO Y GUERRA, en representación del demandante, interpuso recurso de casación en el fondo y, en representación de la demandada, la firma de abogados RUBIO, ALVAREZ, SOLIS Y ABREGO, interpuso recurso de casación en el fondo.

Repartido el negocio, se mandó a fijar en lista por el término de seis (6) días para que en los tres primeros la parte opositora presentase su alegato de oposición a la admisibilidad del recurso y dentro de los tres restantes, el recurrente replicase.

Vencido el término de alegatos, el cual fue aprovechado por ambas partes, visible a fojas 1135-1142, procede la Sala a resolver respecto a la admisibilidad de los recursos de casación, conforme lo establecido en los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial.

La resolución y la cuantía se enmarcan dentro de lo establecido por la ley para la concesión del recurso. Además, los recurrentes formalizaron sus respectivos escritos de casación en tiempo. Se avoca, ahora la Sala a examinar por separado cada recurso, atendiendo al orden en que aparecen ubicados en el expediente.

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA
FIRMA SOLIS, ENDARA, DELGADO Y GUERRA

El recurso de casación se interpuso en el fondo. La única causal que se alega es: "infracción de normas sustantivas de derecho, por el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada". La causal se encuentra invocada correctamente.

Se establecen diez (10) motivos. En cuanto a los motivos y a las normas de derecho consideradas infringidas, aprecia la Sala que contienen, de manera general, los requisitos exigidos por la ley.

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA
FIRMA RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO

El recurrente invoca una sola causal: "infracción de normas de derecho sustantivas de derecho, por el concepto de interpretación errónea de la norma de derecho, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". La causal está invocada correctamente y de acuerdo a lo exigido por nuestro Código Judicial. En cuanto a los motivos que sirven de fundamento a la causal invocada, aprecia la Sala que los mismos se refieren a que se dio la exoneración de condena en costas al demandante. En reiterados fallos la Corte ha sostenido que las costas no son recurribles en casación, en virtud de que las mismas son accesorias al proceso; y, por consiguiente, no puede producir una infracción capaz de influir en lo dispositivo de la resolución recurrida (sentencia de 9 de julio de 1997).

En el presente recurso extraordinario se dan los presupuestos para la declaratoria de inadmisibilidad, tal como lo pauta el artículo 1167 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación, en el fondo, interpuesto por SOLIS, ENDARA y DELGADO, y DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, interpuesto por la firma RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO.

Las obligantes costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JORGE LUIS DE PUY GARCIA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA, SUCESIÓN DE ANDRÉS FERNANDO DE PUY FARRUGIA Ó SUCESORES DE ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado ALVARO MUÑOZ FUENTES, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante,JORGE LUIS DE PUY GARCIA, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 28 de abril de 2000, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial dentro del proceso ordinario seguido contra ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que no fue utilizado por sus respectivos apoderados.

La Sala procede al examen del recurso de conformidad con los requisitos que establece los artículos 1165, 1160 y concordantes del Código Judicial.

En este caso se ha podido apreciar que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley; que el recurso ha sido interpuesto en tiempo oportuno; sin embargo, el escrito de formalización presenta algunas deficiencias que a continuación se pasan a detallar.

De fojas 299 a 306 consta el escrito de casación, en el cual se invocan dos causales de fondo. La primera es la "Infracción de normas sustantivas de derecho por el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". Esta causal ha sido fundamentada en tres motivos que son congruentes con la misma. Sin embargo, en el apartado destinado a la citación y explicación de las normas de derecho infringidas se citan dos disposiciones que no son cónsonas con esta causal, sino con la de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que son los artículos 888 y 967 del Código Judicial (Cfr.fs.302). Salvo esta deficiencia, las demás normas invocadas guardan la debida congruencia con la causal.

La segunda causal es la "Infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". Tanto los motivos como la normas de derecho que fundamentan esta causal, han sido debidamente desarrollados y estructurados.

Por tanto, el recurrente debe corregir el defecto que se le ha señalado al contenido de la primera causal para que la misma pueda se acogida.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCION de la primera causal y ADMITE la segunda causal, invocadas en el recurso de casación propuesto por JORGE LUIS DE PUY GARCIA contra la Sentencia de 28 de abril de 2000, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en el proceso ordinario que le sigue a ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA, sucesión de ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA ó sucesores de ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JULIO CESAR MORALES LINCK RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE SUCESIÓN TESTADA DE JULIO CESAR MORALES SAENZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El abogado DIENER VINDA, apoderado especial del señor JULIO CESAR MORALES LINCK, ha promovido ante la Sala recurso de casación para impugnar la resolución de 28 de enero de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, por la cual se confirmó el auto de 16 de abril de 1999 proferido por el Juzgado Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso de sucesión testada de JULIO CESAR MORALES SAENZ (q.e.p.d.) convertido en contencioso. La resolución confirmatoria niega la solicitud de practicar inventario y avalúo adicional de bienes formulada por el apoderado judicial del legatario JULIO CESAR MORALES LINCK y ordena la continuación del trámite de este juicio.

Surtidos los trámites previos que la ley dispone en estos casos, debe la Sala proceder al estudio y solución del recurso presentado ante esta Superioridad.

La causal invocada en casación es la de infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En los motivos del recurso, el recurrente denuncia el desconocimiento del derecho que tiene su representado para solicitar la práctica de inventario y avalúo adicional dentro del proceso de sucesión, dando lugar a que se hayan dejado de incluir determinados bienes del causante dentro del caudal de la sucesión en perjuicio de los herederos y los legatarios del decujus. Se expresa que la resolución impugnada conculcó el derecho del recurrente, en su condición de legatario, para reclamar bienes dejados por el testador, cuya existencia ha sido desconocida y sobre los cuales afirma tener derechos, ya que los mismos componen la herencia y deben, en consecuencia, ser trasmitidos a las personas llamadas por el testador en su declaración de última voluntad. De acuerdo con la censura, la resolución lesionó el ordenamiento jurídico cuando desconoció el derecho que tiene JULIO CESAR MORALES LINCK, en su condición de legatario y de hijo del causante, para pedir que el juez de la causa practique y agote todas las diligencias necesarias para determinar la existencia de otros bienes que puedan incrementar el caudal hereditario, y ser distribuidos conforme a la voluntad del causante.

Se citan como normas violadas por la resolución atacada las siguientes:

Del Código Judicial los artículos 1579, 1572 y 1532.

La primera de esas disposiciones se dice infringida por no haberse aceptado la petición formulada por uno de los interesados en que se llevase a cabo un inventario adicional, petición que fue formulada porque no se incluyeron en el primer inventario y avalúo practicados bienes pertenecientes al causante.

La segunda norma, donde se indica que deben incluirse en el activo de la sucesión los bienes y derechos que bajo juramento denuncie el tenedor o cualquiera de los herederos, fue infringida al dejarse de aplicar, impidiendo la oportunidad e incorporar los bienes adicionales denunciados por el legatario, dejando así abierta la oportunidad de que los mismos se disipen o se pierdan en manos de terceras personas ajenas al testamento y al parentesco del testador.

El artículo 1532, que establece que los bienes pertenecientes a una sucesión podrán ser reclamados por los herederos, se considera violado por desconocerse el derecho del legatario solicitante del inventario adicional que lo habilita para reclamar los bienes pertenecientes a su padre, de manera que sean incluidos en el acervo herencial para su adjudicación en el momento procesal respectivo.

Del Código Civil se citan como infringidos los artículos 628, 662 y 841.

El artículo 628 consagra, en términos generales, el derecho de los herederos a suceder, a título universal o singular, los activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta. En este caso la infracción radica en no habérsele reconocido al legatario el derecho a solicitar un inventario adicional, impidiéndole, por lo tanto, reclamar haberes pertenecientes a la sucesión de su padre, en razón de que determinados bienes del difunto no podrán pasar a formar parte de la herencia a causa de la resolución impugnada.

El artículo 662 consagra el derecho de los hijos y sus descendientes a suceder a sus padres y el 841 el derecho del legatario de adquirir los legados puros y simples a la muerte del testador. La primera disposición se dice violada directamente por no haberse reconocido el derecho que tiene el recurrente como hijo del causante a sucederle en la herencia "y que se le adjudiquen los bienes denunciados". La otra disposición se habría violado porque el Tribunal Superior consideró que el legatario no se encuentra legitimado para solicitar el inventario y el avalúo adicional.

Para situar adecuadamente en qué consiste la verdadera controversia que debe dilucidar la Sala, es ante todo necesario identificar con precisión cuál es el contenido de la petición formulada por el recurrente que fue negada y cuya descripción no aparece claramente expresada en ninguno de los apartados del recurso de casación propuesto por la censura.

Al examinar los autos del proceso, la Sala se percata de que la solicitud formulada por el recurrente consistió en que se inventariasen y avaluasen nuevos bienes como parte del caudal hereditario, basándose para ello en lo dispuesto en el artículo 1579 del Código Judicial. En esa petición del legatario JULIO CESAR MORALES LINCK, los bienes y derechos denunciados, con el propósito de someterlos al inventario y avalúo adicional, consisten en la indemnización derivada de una póliza de seguro de vida emitida por la Compañía Metropolitana de Seguros de Vida, S. A. a favor del causante, JULIO CESAR MORALES SAENZ, y cuya beneficiaria en un 100% es la señora MIRIAM VEGA DE MORALES, esposa del decujus, por una parte; y, por la otra, el importe de las costas legales u honorarios profesionales que, por la prestación de servicios legales, el Banco General, S. A. supuestamente le adeudaría a JULIO CESAR MORALES SAENZ.

Conforme a las constancias de autos, la Compañía Metropolitana de Seguros de Vida, S. A. le canceló a la beneficiaria de la póliza la totalidad de la

indemnización pactada, o sea la suma de B/20,000.00; pago, sin lugar a dudas, bien hecho, a la luz del artículo 1054 del Código de Comercio que dispone que el seguro contratado en favor de persona distinta del asegurado corresponde exclusivamente al beneficiario, por lo cual la Sala comparte el criterio expresado en el auto dictado por el Juez a-quo que negó la solicitud de practicar el inventario y avalúo adicional, sobre la base de que la indemnización percibida por la heredera declarada MIRIAM VEGA DE MORALES, en razón de la póliza de seguro contratada por el causante, no tiene porqué ser incluida como activo de la masa herencial; opinión de la que participa también el Tribunal Superior a través del auto atacado en casación.

Respecto al otro bien denunciado por el legatario -los honorarios profesionales-, se incorporó al proceso la nota N°97 (225-01) 262 (fs.162) por medio de la cual el Banco General, S. A. informó al juez de la causa que "esta Institución efectuó pago en concepto de honorarios profesionales (costas) por manejo del Juicio Ejecutivo Hipotecario interpuesto por BANCO GENERAL, S. A. contra PASHITORE CORPORATION, HIKARU UNO DE GRACIA Y ANTONIO UNO, a la firma de abogados denominada BUFETE MORALES SAENZ y no a la persona del Dr. JULIO CESAR MORALES SAENZ".

Como se aprecia, existe plena corroboración de que los bienes y derechos que el recurrente pretende incorporar al caudal de la herencia de JULIO CESAR MORALES SAENZ no son parte del patrimonio del decujus; hecho que, a los efectos de calificar la legitimidad de la resolución atacada en casación, es determinante y debe considerarse por encima del criterio, obviamente formalista en este caso concreto, que se ampara en el derecho del legatario JULIO CESAR MORALES LINCK para solicitar la práctica de un inventario y avalúo adicional. En este caso, con independencia de ese derecho del legatario, tiene mucho más relevancia el que no sea cierto que los bienes denunciados, que se piden inventariar y avaluar en una segunda diligencia, pertenezcan o formen parte del activo o del pasivo del causante, tal como está debidamente comprobado en autos. El derecho que tienen los herederos, sean estos a título universal o a título singular (legatario), a que se les conceda la práctica de una segunda diligencia de inventario y avalúo ha de estar sujeto y sometido a la condición de que, en efecto, los derechos y bienes de que se trate sean en realidad del causante. La lógica, la razón y el más elemental sentido común rechazan que se pueda acceder a una petición que, como en este caso, presumiblemente sólo es resultado de un capricho, del afán de dilatar la pronta culminación del proceso o, en el mejor de los casos, producto de la imaginación de quien la solicita.

Por las razones apuntadas no encuentra la Sala que la resolución censurada haya incurrido en violación directa de las disposiciones legales que se han denunciado como infringidas por el fallo.

En consideración a lo anotado, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la resolución de 28 de enero de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, por la cual se confirmó el auto de 16 de abril de 1999 proferido por el Juzgado Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso de sucesión testada de JULIO CESAR MORALES SAENZ (q.e.p.d.)

Se fijan las costas de casación en la suma de CUATROCIENTOS BALBOAS SOLAMENTE (B/400.00).

Copiese y Notifiquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CHILE HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED RECURRE EN CASACIÓN EN LAS MEDIDAS CONSERVATORIAS O DE PROTECCIÓN EN GENERAL PRESENTADAS CONTRA LAITH TRADING AND CONTRACTING COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En la medida cautelar de conservación y protección propuesta dentro del Proceso Ordinario seguido por CHILE HOLDINGS (CAYMAN) contra LAITH TRADING AND CONTRACTING COMPANY LIMITED, actualmente en estado de resolver recurso de casación, los apoderados de ambas partes han presentado solicitud de suspensión del proceso.

Como observamos en el presente proceso la firma forense ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, en representación de la parte demandante, y SUCRE, ARIAS, CASTRO & REYES, como apoderados de la parte demandada, respectivamente, solicitaron por cuarta vez la suspensión del proceso por el plazo de tres meses, contados a partir del 11 de julio de 2,000.

La Sala estima que es viable la suspensión del proceso solicitada en este caso, pues se ajusta a lo normado por el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dice:

> **"ARTICULO 486: Las partes podrán solicitar, de común acuerdo, cuantas veces y por el tiempo que tengan a bien, la suspensión del proceso, siempre que no exceda de tres meses, y sin perjuicio de los derechos de aquellas personas que conforme a las leyes, tengan y puedan tener interés en el proceso o a quien pueda perjudicar la suspensión de él, cuyo consentimiento se requerirá para la suspensión."**

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACCEDE A LA SOLICITUD DE SUSPENSION DEL PROCESO instaurado por CHILE HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED contra LAITH TRADING AND CONTRACTING COMPANY LTD., por el término de tres meses contados a partir del 11 de julio de 2,000.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RHONE DEVELOPMENT, S. A. RECURRE EN CASACION EN LA MEDIDA CONSERVATORIA O DE PROTECCION QUE LE SIGUE A BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro de la solicitud de medida conservatoria o de protección interpuesta por RHONE DEVELOPMENT, S. A. contra BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION y OTROS, la apoderada judicial de la parte demandante presentó recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 7 de octubre de 1997.

Encontrándose el negocio suspendido por razón de solicitud presentada por

los apoderados judiciales de ambas partes, se presentó escrito ante la Secretaría de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el que piden que se decrete la suspensión por un período de tres meses más, contados a partir del 11 de julio de 2000.

En relación con esta petición, el artículo 486 del Código Judicial establece la posibilidad de que las partes soliciten, de común acuerdo, cuantas veces y por el tiempo que tengan a bien, la suspensión del proceso, siempre que no exceda de tres meses.

En vista de que el presente caso cumple con lo dispuesto en la citada disposición legal, se debe acceder a lo pedido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA SUSPENSION del presente negocio por el término de tres (3) meses, contados a partir del día once (11) de julio de 2000.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HOTELERA EL PANAMA, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE RICARDO A. LANDERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia procede a decidir los méritos del recurso de casación en la forma interpuesto por la apoderada judicial de HOTELERA EL PANAMA, S. A., contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 13 de abril de 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por RICARDO A. LANDERO M. contra la sociedad recurrente.

Dicho proceso se inició con la presentación de la demanda ordinaria por parte del señor RICARDO LANDERO ante el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, con el objeto de que HOTELERA EL PANAMA, S. A. fuera condenada al pago de la suma de B/101,000.00, más los intereses, costas y gastos del proceso.

Cumplidos los trámites procesales correspondientes, el Juzgado Tercero dictó la Sentencia N 15 de 5 de febrero de 1999 que "... DECLARA PROBADA LA PRETENSION del demandante del presente proceso ordinario, Lic. RICARDO A. LANDERO M., en consecuencia, CONDENA a la demandada HOTELERA EL PANAMA, S. A. a pagar la suma de CIENTO UN MIL BALBOAS ($101,000.00) en concepto de capital, más las costas que en cuanto al trabajo en derecho se calculan en VEINTE MIL DOSCIENTOS ($20,200.00).

DECLARA NO PROBADAS las excepciones de petición de antes de tiempo y de litispendencia, alegadas por la demandada." (F. 357 y reverso)

Contra dicha decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación y el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la resolución que se ataca en casación, "... SE INHIBE DE CONOCER LA APELACIÓN ensayada por la parte demandada en contra de la sentencia N 15 del cinco (5) de febrero de 1999 proferida dentro del Proceso Ordinario propuesto por RICARDO LANDERO M. contra HOTELERA EL PANAMA,

S. A. en virtud de lo dispuesto en el artículo 1066 del Código Judicial y en consecuencia ORDENA DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen." (Fs. 373-374)

El recurso de casación presentado por la representación judicial de la demandada consta de una sola causal de forma: "Por haberse abstenido el Juez de conocer asunto de su competencia", la cual se encuentra consagrada en el numeral 6 del artículo 1155 del Código Judicial.

Los motivos que le sirven de fundamento expresan lo siguiente:

> "PRIMERO: Los demandados HOTELERA EL PANAMA, S.A. interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia No. 15 de 5 de febrero de 1999, dictada por el Juzgado Tercero de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial.
>
> SEGUNDO: El Primer Tribunal Superior de Justicia, a petición del demandante se inhibió de conocer la apelación, sustentado para ello que no teníamos derecho a ser oídos en el proceso en virtud de que la resolución que nos condenaba en costas estaba ejecutoriada y en consecuencia ordena devolver el expediente al tribunal de origen.
>
> TERCERO: El Primer Tribunal al inhibirse de conocer el recurso interpuesto se abstuvo de conocer un asunto de su competencia, toda vez que se ha establecido que "los actos no se anularán si la parte contraria ha gestionado en el proceso sin reclamar por el hecho de que se le haya oído."
>
> CUARTO: El demandante gestionó notificaciones sin presentar su objeción a las actuaciones de los demandados.
>
> QUINTO: Nuestro recurso de apelación fue conocido notificado (sic) sin que el demandante presentara ninguna objeción y por ello las actuaciones son validadas cuando la contraparte no se ha opuesto a ellas". (Fs. 395)

Como consecuencia de los cargos planteados en los motivos transcritos la recurrente alega la violación de los artículos 1116 y 1066 del Código Judicial.

Por su parte, el Tribunal Superior en la resolución impugnada consideró que debía inhibirse de conocer la apelación interpuesta por la recurrente, en vista de que al momento en que dicho recurso fue anunciado, la recurrente no podía ser oída en el proceso por encontrarse morosa en el pago de las costas impuestas mediante resolución dictada por ese mismo Tribunal el 22 de diciembre de 1998, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1066 del Código Judicial que a la letra dice:

> "ARTICULO 1066. La parte condenada en costas no será oída en el proceso una vez ejecutoriada la resolución que las imponga. No obstante sus actos en el proceso no se anularán si la parte contraria ha gestionado en el proceso sin reclamar por el hecho de que se le haya oído. Si subsiste la morosidad, no será oída a partir del momento en que reclame la parte favorecida."

La recurrente sostiene que el Tribunal Superior infringió la disposición legal anteriormente transcrita, puesto que el recurso de apelación anunciado por ella fue concedido sin que el demandante presentara ninguna objeción, quedando convalidada la interposición de dicho recurso por la falta de oposición del mismo.

No obstante, al revisar las constancias procesales la Sala ha podido determinar que, como acertadamente concluyó la resolución impugnada, HOTELERA EL PANAMA, S. A. no podía ser oída al momento en que interpuso recurso de apelación contra la Sentencia N 15, dictada por el Juzgado Tercero del Primer Circuito

Judicial de Panamá, Ramo Civil.

Así, se observa que las costas a las que nos referimos fueron impuestas por el Primer Tribunal Superior de Justicia en resolución fechada 22 de diciembre de 1998, la cual es consultable a fojas 116 a 120. Dicha resolución fue debidamente notificada y quedó ejecutoriada el 30 de diciembre de 1998. (F. 121 y reverso)

El 18 de enero de 1999, el Licenciado RICARDO LANDERO presentó escrito solicitando que la demandada recurrente no fuera oída en el proceso, por no haber consignado las costas a las que hicimos referencia anteriormente. Dicha solicitud fue atendida por el Juez Tercero, mediante resolución fechada 20 de enero de 1999 en la que "... ORDENA que la parte demandada Hotelera El Panamá, S. A. no sea oída dentro del presente proceso ordinario interpuesto por Ricardo A. Landero M., hasta tanto consigne las costas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia." (F. 339) Esta resolución fue notificada mediante Edicto N 86 de 22 de enero de 1999.

Sin embargo, no fue hasta el 18 de febrero de 1999 que la sociedad recurrente consignó dichas costas, como se desprende de la Diligencia de Consignación N 40 realizada ante el Juzgado Tercero, la cual es consultable a foja 360.

Consecuentemente, no se trata de que el Tribunal Superior anuló una actuación que había sido convalidada por la falta de reclamación oportuna del demandante como alega la recurrente, puesto que el 9 de febrero de 1999, cuando la apoderada judicial de HOTELERA EL PANAMA, S. A. se notificó de la Sentencia N 15 fechada 5 de febrero de 1999 y apeló de la misma (f. 357, reverso), dicha sociedad no podía ser oída en el proceso por haberlo así dispuesto el Juzgado Tercero en la resolución de 20 de enero de 1999 a la que nos referimos anteriormente.

Por tanto, el Tribunal Superior debía inhibirse, como lo hizo, de conocer del recurso de apelación que fue interpuesto por la demandada recurrente dentro del período de tiempo en que no podía ser oída; período que comprende desde el momento en que el demandante reclamó la morosidad (18 de enero de 1999), hasta la fecha en que dichas costas fueron consignadas (18 de febrero de 1999), al tenor de lo dispuesto en el artículo 1066 del Código Judicial.

Por último, es preciso señalar que de acuerdo con lo que señala el artículo 1117 del Código Judicial, la parte agraviada "tiene derecho de apelar en el acto de notificación o dentro de los tres días siguientes a la notificación, si fuera sentencia", como ocurre en el presente caso. Por consiguiente, en la fecha en que la recurrente consignó las costas ya había transcurrido el término que tenía para apelar de la Sentencia N 15 de 5 de febrero de 1999, puesto que dicha decisión quedó ejecutoriada para la recurrente el 12 de febrero de 1999, tal como lo dispone el artículo 982 del Código Judicial que prescribe lo siguiente:

> "ARTICULO 982. Las resoluciones judiciales se ejecutorían por el solo transcurso del tiempo.
>
> Una resolución queda ejecutoriada o firme cuando no admite dentro del mismo proceso ningún recurso, ya porque no proceda o porque no haya sido interpuesto dentro del término legal.
> ....."
> (Enfasis de la Sala)

En estas circunstancias, la Sala estima que el Tribunal Superior no incurrió en la causal de forma alegada ni en la violación de los artículos 1116 y 1066 del Código Judicial.

Por las razones anteriormente expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia

el 13 de abril de 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por el señor RICARDO A. LANDERO M. contra HOTELERA EL PANAMA, S. A.

Las costas del recurso se fijan en la suma de trescientos balboas (B/300.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MAYA CHANDRU NATHANI RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante Auto de 10 de abril del 2000, esta Sala declaró admisible el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Licenciado EMETERIO MILLER RAMÍREZ, en representación de MAYA CHANDRU NATHANI, dentro del proceso ordinario que ésta interpusiera contra ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A.

El recurso se interpuso contra la Sentencia de fecha 9 de noviembre de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, la cual confirma la Sentencia N°39, del 31 de mayo de 1999, proferida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Agotada la fase de admisibilidad del recurso, y precluído el término de alegatos de tres días para cada parte, siendo aprovechado por los mismos, esta Superioridad procede a dictar la sentencia de mérito, no sin antes verter las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

La historia del caso consiste en que la señora Maya Chandru Nathani interpuso por medio de su apoderado judicial demanda ordinaria de mayor cuantía contra la Aseguradora Unión, S. A., a fin de que mediante Sentencia que haga tránsito de cosa juzgada, se formulen las siguientes declaraciones:

> "a. Que entre MAYA CHANDRU NATHANI (asegurada) y ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A. (aseguradora), celebraron un contrato de seguro con relación al automóvil Toyota Four Runner, año 1995, capacidad 5 pasajeros, motor 22R-3932275, y chasis RN130-0014953. Donde la cobertura de dicho contrato comprendía los riesgos (sic) de "B" R-C, daños a la propiedad ajena con un monto de US$15,000.00, "E" Colisión o Vuelco con un monto de US$24.950.00.
>
> b. Que los hechos que constituyen la cobertura amparada por el contrato de seguro han ocurrido, por lo que la ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A., en su condición de aseguradora debe pagar a la señora MAYA CHANDRU NATHANI, la suma de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES (US$39.950.00), en concepto de indemnización por haberse producido los riesgos (sic) cubiertos por seguro contratado.
>
> c. Que a la fecha, ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A., no ha cumplido con el pago de indemnización a la señora MAYA CHANDRU NATHANI, por la

ocurrencia de los riesgos cubiertos en el contrato de seguro contratado, por lo cual la compañía ASEGURADORA ha incumplido el contrato firmado con nuestra representada, por lo que debe pagar a esta la suma de CIEN MIL DOLARES (US$100.000.00), en concepto de indemnización por incumplimiento del contrato de seguro contratado con la señora MAYA CHANDRU NATHANI. Suma a la que puede ser condenada nuestra representada en el proceso ordinario presentado por OSCAR EDUARDO LASSO ALTAMIRANDA, en su contra.

d. Que la sociedad ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A., debe pagar a la señora MAYA CHANDRU NATHANI, los gastos y costas de este proceso ordinario."

La demandada, ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A., luego de recibir traslado de la demanda, se opuso a las pretensiones de la parte actora manifestando, entre otras cosas, que en la demanda no se dicen cuáles fueron los hechos que se han dado, como riesgos cubiertos en el contrato de seguro contratado. No se dice en la demanda que el conductor del vehículo asegurado era el joven RAVI NATHANI, así como tampoco se dice, según la demandada, que al momento después de la colisión, en el Servicio de Urgencias del Hospital Santo Tomás, al joven RAVI NATHANI le fue diagnosticado "etilismo", en otras palabras, ingestión de bebidas alcohólicas.

Finalmente, la demandada expresó en su escrito de contestación de la demanda que, de conformidad con el literal G, sobre Riesgos No cubiertos, cláusula 15, Capítulo III, de la póliza aceptada por ambas partes, se estableció que esta no cubre los riesgos cuando el vehículo asegurado se encuentra "conducido por personas que se encuentren bajo los efectos alcohólicos o drogas alucinantes".

El Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó la Sentencia N°39, de 31 de mayo de 1999, en la que decidió no acceder a hacer las declaraciones de condena solicitadas por la parte demandante dentro del juicio ordinario de mayor cuantía interpuesto por MAYA CHANDRU NATHANI contra ASEGURADORA, LA UNIÓN, S. A., en virtud de que las pruebas que obran en el proceso en mención se relacionan con el proceso penal que se le siguió contra RAVI CHANDRU NATHANI por razón de las lesiones que causó a CÉSAR E. LASSO en el aludido accidente; y las del Juicio Ordinario Civil que el prenombrado lesionado le interpuso. Además, manifestó el Tribunal de primera instancia en su fallo que, como el artículo 976 del Código Civil establece que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre la partes contratantes y deben cumplirse al tenor de las mismas, no le quedó más que aceptar la falta de responsabilidad civil por parte de la empresa aseguradora, ya que se acordó que el riesgo que se produjo no estaría cubierto, si el conductor del vehículo hubiera, como ocurrió, ingerido bebida alcohólica.

Esa decisión fue apelada por la parte actora, por lo que el Primer Tribunal Superior de Justicia mediante Resolución de 9 de noviembre de 1999, impugnada en casación, no reconoce la excepción de prescripción alegada por la parte demandada, y, confirma la sentencia de primera instancia. (véase fojas 618-626), en el sentido de que el demandante no aportó ninguna prueba dirigida a desvirtuar el contenido del Registro de Urgencias del Hospital Santo Tomás en el cual el doctor Herminio Rodríguez dejó consignado como uno de los diagnósticos del señor Ravi Nathani: "etilismo", vocablo que indica ingestión de bebidas alcohólicas.

CONTENIDO DEL RECURSO

Se trata de un recurso de casación en el fondo, del cual fueron admitidas las dos primeras causales. La primera, "infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia" y, la segunda, "infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en la parte

dispositiva de la resolución recurrida" Seguidamente pasa la Sala al examen de las distintas causales invocadas con la debida separación y, consecuentemente, al estudio de la cuestión de legalidad planteada en cada una de ellas.

PRIMERA CAUSAL:

La primera causal de fondo consiste en "infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia."

Dicha causal se funda en cinco motivos, que a continuación se reproducen:

> "PRIMERO: El Tribunal Superior, cometió el error jurídico de no tomar en cuenta una serie de pruebas documentales que están visibles a fojas 15, 63, 64, 66, 67, 68, 75, 76, 77 a 79, 80 a 89, 92 a 98, 99, 100, 101 a 197, 198 a 228 y 383 a 395, cuando se trata de pruebas que fueron admitidas en el proceso, por lo tanto, se violó la ley en perjuicio de nuestra representada.
>
> SEGUNDO: El Tribunal Superior, cometió el error jurídico de no tomar en cuenta la prueba de Inspección Judicial, practicada a los archivos del Cuarto de Urgencias del Hospital Santo Tomás, y en especial sobre el Registro de Urgencias N°2766 de 16 de septiembre de 1995, que está visible a fojas 423, 424, 452, 453 y 454, en condiciones en que se trata de una prueba aportada en el proceso, por lo cual se cometió una clara violación a la ley.
>
> TERCERO: El Tribunal Superior, cometió el error jurídico de no tomar en cuenta la Inspección Judicial practicada en la CLÍNICA HOSPITAL AMÉRICA, la cual está visible a fojas 437, 438, 439, 440, 441, 442, 442-A, 443 y 444, lo cual constituye una clara violación a la ley.
>
> CUARTO: El Tribunal Superior, cometió el error jurídico de no tomar en cuenta la prueba testimonial que está visible a fojas 431, 431-A, 432, 433 y 432 del expediente, cuando se trata de una prueba practicada en el proceso, por lo que se violó la ley.
>
> QUINTO: Como consecuencia que el Tribunal no tomó en cuenta las pruebas a que se hace alusión en los motivos anteriores, no pudo determinar de que con dichos medios probatorios se demostraba la veracidad de los hechos que sustentan la pretensión, y por esa vía viola la ley que consagra dichos medios probatorios y la ley sustancial que sirve de fundamento jurídico a la pretensión".

En adición, el recurrente cita como disposiciones legales infringidas y explica cómo lo han sido, los artículos 769, 819, 941, 894, 976 y 986 del Código Judicial.

CRITERIO DE LA SALA EN LA PRIMERA CAUSAL

De acuerdo al casacionista, el cargo de injuridicidad que le atribuye a la sentencia consiste en que la misma no tomó en cuenta un número muy crecido de pruebas documentales, inspecciones judiciales y testimoniales que fueron admitidas y practicadas en el proceso, lo cual impidió que el Juzgador de Segunda Instancia pudiera apreciar la veracidad de la pretensión promovida por la parte demandante.

La Sala considera necesario exponer, en síntesis, los argumentos utilizados por el Tribunal Superior en la sentencia impugnada que lo llevaron a concluir que la parte demandada comprobó la eximente del riesgo asegurado, contenida en el último párrafo del aparte g) de la Cláusula 15 de las Condiciones Generales del Seguro de Automóvil expedido por la compañía aseguradora demandada.

El Tribunal Superior hace un recuento de los escritos de apelación y oposición a la sentencia de primera instancia, en que el recurrente-demandante alega que no se pudo comprobar a través de un medio científico que el conductor del vehículo RAVI NATHANI se encontraba bajo los efectos del alcohol, pues únicamente se cuenta con la nota firmada por el doctor Víctor Him, Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Santo Tomás "que según él en el expediente firmado por el Dr. Herminio Rodríguez, aparece como cuarto diagnóstico clínico etilismo..."

En cambio, la demandada manifestó su oposición al recurso de apelación en el hecho de que el rechazo de la aseguradora se encuentra justificado, toda vez que al momento en que RAVI NATHANI llega al Hospital Santo Tomás, se le diagnosticó "etilismo" y ello se comprueba con el expediente del Registro de Urgencias N°2766 de 16 de septiembre de 1995 (fs. 382, 423-424, 452-454), con su renuncia del señor Ravi Nathani a la medicatura forense, tal como consta a un lado del parte policivo visible a foja 66, con las declaraciones del señor OSCAR LASSO dentro del proceso penal y con los documentos públicos y certificaciones que se expidieron sobre este caso.

El opositor también señaló el contenido de las declaraciones que rindiera el Inspector de Tránsito JOSÉ PRUDENCIO HORTAS quien laboró el parte policivo, destacando que éste último no pudo siquiera observar al señor NATHANI para determinar si se encontraba o no bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

En otro aspecto, la sentencia impugnada señaló en su parte motiva que, para que el tribunal u órgano jurisdiccional reconozca algún derecho o pretensión, se hace necesario probar los hechos que sirven de fundamento a la misma, tal y como indica el artículo 773 del Código Judicial que se refiere a la carga de la prueba, por lo que, según la sentencia del Tribunal Superior, al demandante, haciendo uso de los medios probatorios a su alcance, le corresponde demostrar la verdad de sus afirmaciones y la realidad de sus hechos, a fin de que el Juzgador al momento de decidir lo haga basándose en dichas pruebas.

Expresó finalmente la sentencia recurrida que, el demandante no aportó ninguna prueba dirigida a desvirtuar el contenido del Registro de Urgencias del Hospital Santo Tomás en el cual el Doctor Herminio Rodríguez dejó consignado como uno de los diagnósticos del señor RAVI NATHANI: "etilismo", vocablo que indica la ingestión de bebidas alcohólicas. Tampoco acreditó la existencia de los daños causados al vehículo y que supuestamente debía indemnizar la aseguradora.

Haciendo una valoración de las pruebas principales de la Sentencia impugnada en cada una de las causales, y confrontándolas con las pruebas que han sido supuestamente ignoradas por el Tribunal, tenemos lo siguiente:

Los cargos de injuridicidad contenidos en el primer motivo consisten en que el Primer Tribunal Superior de Justicia, por error jurídico de no tomar en cuenta una serie de pruebas documentales, violó la ley en perjuicio de la demandante.

De lo anterior, la Sala considera censurable la valoración de las pruebas documentales visibles a fojas 15, 63, 64, 66, 67, 68, 75, 76, 77 a 79, 80 a 89, 92 a 98, 99, 100, 101 a 197, 198 a 228 y 383 a 395, toda vez que la Sentencia del Tribunal Superior debe ser el resultado de un estudio en conjunto de todas las pruebas que conforman el proceso. Sin embargo, la Sala al estudiar minuciosamente cada una de ellas, advierte que las pruebas que constan a fojas 63 y 64, referentes a las certificaciones del neurocirujano Dr. Félix Sánchez Peña, ambas de fechas 21 de diciembre de 1995, en las que se señalan que han atendido al señor RAVI NATHANI el 16 de septiembre de 1995 a consecuencia de accidente automovilístico el cual recibiera traumatismo cráneo encefálico con pérdida del conocimiento (fs. 63) y que no había en el cuadro clínico, evidencias físicas de que el mismo se encontraba bajo los efectos del alcohol. Independientemente de que por su cuadro clínico y condición neurológica de llegada es imposible desde el punto de vista físico o clínico poder determinar esto (fs.64), no se tomaron en cuenta por el Tribunal Superior, ya que la sentencia se limitó a señalar como

prueba el Registro de Urgencias del Hospital Santo Tomás en el cual el Doctor Herminio Rodríguez dejó consignado como uno de los diagnósticos del señor Ravi Nathani: "etilismo". (véase foja 48).

De lo anterior, el Tribunal Superior expresó que el demandante no aportó ninguna prueba dirigida a desvirtuar el contenido de lo manifestado, considerando esta Superioridad que las pruebas visibles a fojas 63 y 64 no fueron tomadas en cuenta por el A-Quo, por lo que se ha probado esta injuridicidad, afectando así la Sentencia por no haberse tomado en cuenta al momento de la decisión.

Sobre la injuridicidad señalada en el primer motivo, con respecto a la prueba visible a foja 66 (Parte Policivo), en el hecho de que no se tomó en cuenta, la Sala advierte que no comparte este criterio con el casacionista, ya que en diligencia de prueba testimonial de JOSÉ PRUDENCIO HORTAS OSPINO (fs. 327-430), Agente de Tránsito quien confeccionó el formato de tránsito N°75970, de 16 de septiembre de 1995, en el accidente vehicular en la que estaba involucrado el conductor RAVI NATHANI, se contradice cuando manifiesta que: "cuando yo llegué al lugar del accidente no estaba ahí, en el hospital fue que lo vi cuando estaba en la camilla, estaba inconsciente, no hablaba ni nada y después de ahí se lo llevaron a otro hospital". Es decir, el Juzgador en su momento le dio el valor probatorio que tiene de acuerdo a la sana crítica, por lo que sí tomó en cuenta esta prueba, simplemente que la desvirtuó por la contradicción del agente de tránsito. Por lo tanto esta injuridicidad no se considera probada.

En cuanto a las pruebas documentales visibles a fojas 67, 68, 75 a 89, 92 a 100, que se refieren al proceso penal seguido a RAVI NATHANI en la Personería Quinta Municipal del Distrito de Panamá, por el delito contra la vida e integridad personal, en virtud de denuncia presentada por el señor OSCAR LASSO, el cual culmina con el Auto Vario N°76, de 15 de abril de 1997, del Juzgado Segundo Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, en que OSCAR LASSO desistió de la pretensión punitiva, toda vez que se les resarció los daños y perjuicios causados producto del accidente (fs. 99), no considera la Sala que se ha dado la injuridicidad de este cargo, ya que con las mismas no varían la decisión del Tribunal Superior. Igual suerte corre con las pruebas documentales que constan a fojas 101 a 197 que se refieren a la Acción de Secuestro tramitada en el Juzgado Segundo del Circuito de Panamá, Ramo Civil; las pruebas visibles a fojas 198 a 228 del proceso ordinario civil; y las pruebas visibles a fojas 383 a 395 que se refiere a recibos de pago por servicios médicos del Hospital Santo Tomás, Clínica Hospital América, contrato de fianza y sus respectivos recibos de pago en concepto de alquiler de fianza y factura de compraventa del automóvil Toyota Four Runner en Auto Motores Barriga, ya que todas estas pruebas no afectan la decisión del a-quo.

El cargo de injuridicidad contenido en el segundo motivo consiste en que el Tribunal Superior no tomó en cuenta la prueba de Inspección Judicial practicada a los archivos del Cuarto de Urgencias del Hospital Santo Tomás, y en especial sobre el Registro de Urgencias N°2766 de 16 de septiembre de 1995, que está visible a fojas 423, 424, 452, 453 y 454.

La Sala al estudiar las pruebas señaladas por el casacionista como no tomadas en cuenta por la sentencia del Primer Tribunal Superior, advierte igualmente las consideraciones expresadas en el criterio esbozado con las pruebas presentada en el primer motivo de esta primera causal, toda vez que no se hizo ningún señalamiento en la Sentencia con respecto a la prueba de Inspección Judicial a los archivos del Cuarto de Urgencias del Hospital Santo Tomás, específicamente el Registro de Urgencias (fs.382), el cual el perito OSVALDO HERNÁNDEZ manifestó que en dicho registro médico no se señala en ningún momento que al señor Ravi Nathani se le realizó prueba alguna para determinar el grado de alcoholemia ni de Laboratorio en general, y que tal como se observa a foja 382, el señor Nathani tenía una halitosis etílica, que según el perito HERNÁNDEZ, en sus 40 años de experiencia como laboratorista, y con experiencia en el campo de pruebas de alcoholemia en sangre y en saliva, la halitosis etílica no es índice para determinar el grado de alcoholemia o intoxicación alcohólica de una

persona (fs. 452-453).

El cargo de injuridicidad contenido en el tercer motivo consiste en que el Tribunal Superior cometió el error jurídico de no tomar en cuenta la Inspección Judicial practicada en la Clínica Hospital América, la cual está visible a fojas 437 a 444, constituyéndose en una clara violación de la ley.

Esta Superioridad al estudiar esta prueba considera que no le asiste razón al casacionista, ya que como se dijo anteriormente, el Juzgador tomó en cuenta las pruebas en su conjunto utilizando la sana crítica, por lo que estas no le dicen nada al respecto sobre el supuesto estado de: bajo efectos del alcohol, simplemente dice que no se le practicó prueba de laboratorio alguno al señor Ravi Nathani.

El cargo de injuridicidad contenido en el cuarto motivo consiste en que el Tribunal Superior no tomó en cuenta la prueba testimonial que está visible a fojas 431 a 433 del expediente.

Es del criterio esta Sala de la Corte que la referida prueba no se tomó en cuenta, toda vez que de la misma se desprende que el Dr. Félix Sánchez Peña al realizar una evaluación físico clínica desde el punto de vista neurológico al señor Ravi Nathani era imposible determinar si estaba o no bajo los efectos del alcohol, y en cuanto a la prueba de sangre, atendiendo a las normas ético profesional, el paciente debe dar su consentimiento para ser sometido a cualquier tipo de prueba invasiva, en este caso extracción de sangre, además de que el paciente estaba en estado de inconsciencia, por lo que no iba a poder ser realizada. Por tanto, si se hubiera tomado en cuenta esta prueba, la decisión del A Quo hubiera sido otra, ya que es claro que no se ha determinado científicamente que el señor Ravi Nathani estaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

La Sala estima, en el fondo, que al no probarse por un medio científico que el señor RAVI NATHANI se encontraba en el momento del accidente bajo los efectos del alcohol, tal como se desprende de las pruebas documentales que no fueron tomadas en cuenta por el Juzgador visibles a fojas 63 y 64, referentes a las certificaciones del neurocirujano Dr. Félix Sánchez Peña, ambas de fechas 21 de diciembre de 1995, en las que se señalan que han atendido al señor RAVI NATHANI el 16 de septiembre de 1995 a consecuencia de accidente automovilístico el cual recibiera traumatismo cráneo encefálico con pérdida del conocimiento (fs. 63) y que no había en el cuadro clínico, evidencias físicas de que el mismo se encontraba bajo los efectos del alcohol. Independientemente de que por su cuadro clínico y condición neurológica de llegada es imposible desde el punto de vista físico o clínico poder determinar esto (fs.64), y no simplemente con una halitosis etílica (aliento alcohólico) (véase fs. 382) o un cuadro diagnóstico clínico de etilismo que aparece sobre el Registro de Urgencias N°2766 del señor Ravi Natahani, en el expediente firmado por el Dr. Herminio Rodríguez (fs.48), la compañía aseguradora debe cubrir el riesgo de la póliza que mantenía vigente al momento del accidente la señora MAYA CHANDRU NATHANI con la Aseguradora La Unión, S. A., toda vez que el Capítulo III (Riesgos No Cubiertos) de dicha Póliza de Automóvil, Cláusula 15, punto g), establece claramente que la Compañía no cubre lo siguiente: cuando el vehículo se encuentra conducido por personas que se encuentren bajo los efectos alcohólicos o drogas alucinantes; cosa que no se ha comprobado científicamente al no existir una prueba de laboratorio que determine el supuesto grado de alcohol de RAVI NATHANI en la sangre, saliva o medida científica en el aliento.

Por dicha razón, estima la Sala que se encuentra probada la causal analizada, por lo que, previa casación de la sentencia recurrida, procede dictar la sentencia de reemplazo, absteniéndose la Sala de considerar la segunda causal de fondo, conforme lo dispone el artículo 1180 del Código Judicial.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En relación con la primera declaración que pretende el actor en la demanda, la Sala observa claramente a fojas 38 a 45 y a foja 49, que entre MAYA CHANDRU MAYANI (asegurada) y ASEGURADORA LA UNIÓN. S. A. (aseguradora), celebraron un contrato de seguro con relación al automóvil Toyota Four Runner, año 1995, capacidad 5 pasajeros, motor 22R-3932575, y chasis RN130-0014953, en la que la cobertura de dicho contrato comprendía los riesgos de "B" R-C., daños a la propiedad ajena con un monto de US$15,000.00, "E" Colisión o Vuelco con un monto de US$24,950.00. Dicha póliza es numerada N°070 01 45061994 con fecha de emisión 18 de octubre de 1994.

Respecto a la segunda pretensión, es decir, que los hechos que constituyen la cobertura amparada por el contrato de seguro han ocurrido; esta Superioridad señala que el riesgo de "B" R-C., daños a la propiedad ajena, se ha acreditado con el Parte Policivo N°75870 de 16 de septiembre de 1995 visible a foja 66 y vuelta en la que la versión del Inspector del Tránsito expresó: "El vehículo #1 salió de la Calle de los Periodistas hacia la Vía Bolívar y en el centro de la vía se fue al paño contrario perdiendo el control colisionando su parte frontal contra la pared de Kiener y atropellando al peatón que pasaba en ese momento"; la declaración rendida por el señor RAYMUNDO CEDEÑO FLORES, auditor interno de la compañía Kiener, cuando manifiesta que "el señor CHANDRU colisionó contra nuestro local en la Vía Simón Bolívar, abriendo un hueco de dos metros de alto por dos metros y medio de ancho (véase foja 70); la declaración del propio conductor del vehículo que se accidentó el día 15 de septiembre de 1995, señor RAVI CHANDRU NATHANI, cuando expresa que: "Estaba saliendo por el Lung Fung de Transístmica, yendo rumbo a tomar la calle de la Panamotor, una vez allí, yo estaba en la vía principal, las luces del semáforo no servían, era tarde en horas de la madrugada, en ese instante yo veo que un señor se lanza a la calle a cruzar, pero que se tiró de un brinco, yo también actué a la defensiva y giro a la izquierda , mi carro es un Four Runner (sic) , es grande y de llantas anchas y una vez al girar a la izquierda, las llantas delanteras se subieron a la acera, que es alta, perdí el control del carro, seguí recto hasta un punto, y giré a la izquierda, fue cuando me di con el muro del Supermercado Polikiener" (fs. 72) y, finalmente, copia de las fotografías de los daños sufridos al local Kiener en el proceso ordinario civil que le instaurara Oscar Lasso a Ravi Chandru Natahani y Maya Chandru Nathani (véase fojas 201 a 211).

En cuanto a los hechos que constituyen la cobertura amparada por el contrato de seguro suscrito por MAYA CHANDRU NATHANI y ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A., en el riesgo de "E", colisión o vuelco, el mismo se ha acreditado con las pruebas mencionadas en el párrafo que precede, así como la visible a fojas 461 y 462 en la que el informe pericial solicitado por la parte actora, presentada por el señor JORGE GUERRA, establece que los daños sufridos por el vehículo en cuestión como consecuencia del accidente de tránsito fue pérdida total, y que al momento del accidente el vehículo tenía un valor de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA BALBOAS (B/.22,460.00).

Siendo así, ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A., en su condición de aseguradora debe indemnizar los riegos cubiertos.

La tercera declaración que pretende la parte demandante (MAYA CHANDRU NATHANI) que se haga es, que ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A. debe pagarle la suma de CIEN MIL DÓLARES (US$100,000.00) en concepto de indemnización por incumplimiento del contrato de seguro, en virtud de que no ha cumplido con el pago de indemnización por la ocurrencia de los riesgos cubiertos. Suma ésta a la que puede ser condenada MAYA CHANDRU NATHANI en el proceso ordinario incoado en su contra por OSCAR EDUARDO LASSO ALTAMIRANDA.

Como corolario de lo anterior, advierte la Sala, que la existencia de la responsabilidad civil por parte de MAYA CHANDRU NATHANI o RAVI NATHANI en el proceso ordinario civil instaurado en el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Civil del Primer Distrito Judicial, se dio mediante una transacción suscrita con la parte demandante, OSCAR LASSO, y avalada por el Tribunal mediante Auto N°1156, de 13 de junio de 1996, (véase fojas 186-187), en la que los demandados aceptan

su responsabilidad por las lesiones físicas ocasionadas al demandante, producto del manejo negligente y culpable del demandado Ravi Chandru Nathani y se comprometen a reparar el daño ocasionado mediante el pago de la suma de DIECISIETE MIL BALBOAS (B/.17,000.00) más los gastos ocasionados por el Informe Pericial rendido por los galenos Julio Berguido y la Dra. Isabel María González Mendieta hasta la suma máxima de B/.250.00 cada uno.

En la encuesta civil que hoy nos ocupa, si bien es cierto el artículo 459 del Código Judicial, dispone que, "La persona que pretenda hacer efectivo algún derecho o pretensión, que se declare su existencia o que se declare la inexistencia de una relación jurídica que le concierna o afecte, puede pedirlo ante los tribunales en la forma prescrita en este Código"; también es cierto que, para que el tribunal u órgano jurisdiccional reconozca ese derecho o pretensión, se hace necesario probar los hechos que le sirven de fundamento a la misma, tal y como lo reza el artículo 773 del cuerpo de normas citado que, dice:

> "Artículo 773: Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto hecho de las normas que les son favorables..."

"La carga de la prueba, consiste en una regla que le crea a la partes una autorresponsabilidad, para que acrediten los hechos que le sirven de supuesto a las normas jurídicas cuya aplicación reclamen y que, además, le indica al Juez cómo debe fallar cuando no aparecen probados tales hechos. (PARRA QUIJANO, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Ediciones Librería del Profesional, 4ª edición, Colombia, 1994, pág. 47).

Precisamente por lo anterior, es que al demandante con sus pruebas, le corresponde demostrar la verdad de sus afirmaciones y la realidad de sus hechos, a fin de que el Juzgador al momento de decidir, lo haga basándose en dichas pruebas, y a la empresa aseguradora la exclusión contractual en la cual se apoya.

Sin perjuicio de lo anterior, para la Sala es incuestionable que la carga de la prueba le corresponde a la parte que pudiese sufrir un perjuicio procesal con su omisión. Desde el punto de vista del Derecho de Seguros, a la parte demandante (reclamante) le corresponde probar la existencia del daño, su autor, el criterio de imputabilidad de éste (dolo o culpa) y que existe una relación de causalidad entre estos extremos. No obstante, le corresponde a la empresa aseguradora comprobar la existencia de la exclusión que pretende en apoyo a incumplir, con justa causa, su obligación contractual, extremo probatorio a cargo de la empresa aseguradora, que no ha sido, en apreciación de la Sala como ya se ha dicho, acreditada por la empresa aseguradora, a quien le corresponde realizarlo.

En la presente encuesta el daño ha sido acreditado, lo mismo los daños personales que los daños materiales, como ya ha quedado expuesto; no obstante, adolece de prueba la magnitud de los daños que ha experimentado la parte demandante. En vista de estas consideraciones, es evidente que la compañía aseguradora, como consecuencia del contrato de seguro con la parte demandante, que la ligaba, debió resarcir el daño asegurado y, además, la correspondiente indemnización derivada del incumplimiento contractual, a título de culpa. Al no haberlo hecho de esa manera, es evidente que la sentencia ha de complementarse con una liquidación en abstracto, con fundamento en el artículo 983 del Código Judicial.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 9 de noviembre de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el Proceso Ordinario propuesto por MAYA CHANDRU NATHANI contra ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A., y actuando como Tribunal de instancia, dicta la sentencia de reemplazo, por la cual declara:

PRIMERO: Que entre MAYA CHANDRU NATHANI (asegurada) y ASEGURADORA LA UNIÓN, S.

A. (aseguradora), celebraron un contrato de seguro con relación al automóvil Toyota Four Runner, Año 1995, capacidad 5 pasajeros, motor 22R-3932575, y chasis RN130-0014953, donde la cobertura de dicho contrato comprendía los riesgos de "B" R-C., daños a la propiedad ajena con un monto de QUINCE MIL DÓLARES (US$15,000.00), "E" Colisión o Vuelco con un monto de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES (US$24,950.00).

SEGUNDO: Que los hechos que constituyen la cobertura amparada por el contrato de seguro han ocurrido, por lo que la ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A., en su condición de aseguradora debe pagar a la señora MAYA CHANDRU NATHANI, la suma de VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA DÓLARES (US$22, 460.00), en concepto de indemnización por haberse producido los riesgos cubiertos por seguro contratado, que constituye el valor residual del vehículo según peritos.

TERCERO: CONDENA a la compañía ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A., sociedad anónima inscrita bajo ficha 37517, rollo 2023, imagen 2, de la Sección de Personas Mercantil del Registro Público a pagar a la señora MAYA CHANDRU NATHANI con cédula de identidad personal N°E-8-43757 la suma en concepto de indemnización por incumplimiento del contrato de seguro, que resulte como consecuencia de la liquidación que se realice, para lo que deberá tomar en cuenta los daños materiales causados, tanto en concepto de lucro cesante como de daño emergente, con fundamento en el artículo 983 del Código Judicial.

Las costas de ambas instancias, se fijan en la suma de SEIS MIL BALBOAS (B/.6,000.00). Liquídense los gastos del proceso a que contraen los numerales 3 y 4 del artículo 1055 del Código Judicial por Secretaría.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUIS FELIPE ESTENOZ HERRERA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Licenciada SELENIA ISABEL CANTO DE RUIZ, apoderada judicial de LUIS FELIPE ESTENOZ, interpuso recurso de casación en el fondo contra la Sentencia de 9 de agosto de 1999 proferida por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de divorcio propuesto por LUIS FELIPE ESTENOZ contra FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA.

En vista de que mediante resolución de 1° de marzo del 2000, esta Sala declaró admisible el recurso de casación en el fondo propuesto por LUIS FELIPE ESTENOZ, mediante apoderada judicial, así como concluido el término de alegatos que fue aprovechado por el demandante, el demandado y la Vista del representante del Ministerio Público, se procede a decidir los méritos del mismo, previas las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES

El proceso de divorcio se inició ante el Juzgado Primero de Circuito Civil del Segundo Circuito Judicial de Panamá, con sede en San Miguelito, por el señor LUIS FELIPE ESTENOZ HERRERA, para que con fundamento en la causal contenida en el artículo 212, numeral 6 del Código de la Familia, es decir, el abandono

absoluto de los deberes de esposa, se decretare la disolución del vínculo matrimonial existente entre él y la señora FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA.

Una vez cumplidos los trámites correspondientes, se celebró la audiencia oral el 18 de mayo de 1998 y el 3 de diciembre de ese mismo año, la Juez Primera de Circuito Civil del Segundo Circuito Judicial de Panamá, dictó la Sentencia N°479,de 3 de diciembre de 1998, que declaró disuelto el matrimonio celebrado entre LUIS FELIPE ESTENOZ HERRERA y FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA. (véase fojas 113-117).

Esa decisión fue apelada por la demandada y por la representante del Ministerio Público, por lo que el Tribunal Superior de Familia mediante Resolución de 9 de agosto de 1999, la cual es impugnada en casación, revocó la sentencia de primera instancia. (véase fojas 141-154).

El señor Procurador de la Nación señaló en su Vista Fiscal N°10,de 6 de junio de 2000 (fs.220-232) que al no haberse acreditado el yerro probatorio, no se produce la vulneración de la norma sustantiva, es decir, el artículo 212, numeral 6 del Código de Familia, pues, sabido es que cuando se aleguen causales probatorias, las disposiciones de carácter sustantivo se vulneran como consecuencia de la infracción de las normas adjetivas, situación que no se presenta en el proceso de marras, por lo que solicita a esta Sala Civil que no se case la sentencia de 9 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal Superior de Familia.

CONTENIDO DEL RECURSO

El recurso de casación es en el fondo, en el que fueron admitidas dos causales, consistente la primera en "error de hecho sobre la existencia de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", y, la segunda en "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". Seguidamente pasa la Sala al examen de las distintas causales invocadas con la debida separación y, consecuentemente, al estudio de la cuestión de legalidad planteada en cada una de ellas.

PRIMERA CAUSAL:

La primera causal de fondo consiste en "error de hecho sobre la existencia de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida",

Dicha causal fue sustentada en cinco motivos, que a continuación se transcriben:

> "PRIMER MOTIVO: La sentencia impugnada del Tribunal Superior de Familia viola la Ley al no haber visto la prueba que obra a folio 83 del expediente, pedida por el DEMANDANTE, y que consiste en un Oficio N° S.G. 2717-98 de 7 de julio de 1998 de la Dirección de Migración y Naturalización, sobre Informe (Negativo) de entradas y salidas de FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA con Pasaporte N°C074557, prueba ésta de gran importancia cuyo desconocimiento ha influido en lo dispositivo del fallo.
>
> SEGUNDO MOTIVO: La sentencia impugnada del Tribunal Superior de Familia viola Ley, por cuanto a folio 150 del expediente, refiere haber revisado el Reporte Migratorio de LA DEMANDADA que obra a folios 92 al 106 de dicho expediente, solamente a pesar que dicho Reporte adicionaba el Reporte obrante a folio 83.
>
> TERCER MOTIVO: La sentencia impugnada del Tribunal Superior de la Familia viola la Ley, por cuanto al no haber visto este Tribunal la prueba que obra a folio 83 del expediente, no la mencionó en dicha

Sentencia, precisamente, porque no confrontó este folio y el folio 70 a la vez, con los folios 91 a 106, de los cuales se observa que FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA tenía y tiene dos (2) Pasaportes distintos.

CUARTO MOTIVO: La Sentencia impugnada del Tribunal Superior de Familia viola Ley cuando dice a folio 153 del expediente que no hay pruebas de un abandono absoluto los deberes de esposa, ya que esta DEMANDADA tiene un Pasaporte N°C074557 con el que se casó y no viaja (ver folios 4, 70 y 83), y otro Pasaporte N°07455, con el que sí ha viajado tres (3) veces de diciembre de 1996 a junio de 1997.

QUINTO MOTIVO: La Sentencia impugnada del Tribunal Superior de Familia viola la Ley, toda vez que con el Pasaporte N° C 074557 LA DEMANDADA se casó, y no viajaba según la prueba que obra a folio 83 que no vio dicha sentencia, pero tan pronto esta extranjera cónyuge Inmigrante solicita su Visa de Casada con Panameño, tres (3) veces se ausenta del país con otro Pasaporte (folio 91, 105 y 106).”

En adición, la recurrente cita como disposiciones legales infringidas y explica cómo lo han sido, los artículos 769 y 823 del Código Judicial; y el artículo 212, numeral 6 del Código de la Familia.

CRITERIO DE LA SALA EN LA PRIMERA CAUSAL

De acuerdo a la casacionista, el cargo de injuridicidad que le atribuye a la sentencia consiste en que la misma no vio una serie de pruebas documentales, cuyo desconocimiento ha influido en lo dispositivo del fallo.

La Sala considera necesario exponer, en síntesis, los argumentos utilizados por el Tribunal Superior en la sentencia impugnada que lo llevaron a concluir que no existe la causal de abandono absoluto de FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA de sus deberes de esposa.

El Tribunal Superior de Familia hace un recuento de los escritos de apelación, tanto de la Fiscal Segunda Especializada en Asuntos de Familia y el menor y la parte demandada, a la sentencia de primera instancia, en que la Fiscal apelante alega, entre cosas, que las partes han demostrado su voluntad de no reconciliarse y por tanto, se mantiene el deseo de divorciarse, además de que no se ha demostrado la causal invocada; puesto que los testigos del demandante afirman que él desayuna, almuerza y cena fuera de la casa y que en las ocasiones en que han visitado la casa no han visto a la demandada. Sin embargo, no les consta si la demandad está enferma o no; tampoco les consta si continúa viviendo en esa residencia. Entonces, según la representante del Ministerio Público, se tienen dos versiones encontradas.

En su oportunidad, la representante legal de la demandada, FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA, manifestó que coincide con la Fiscal, considerando que la parte actora no logró probar la causal invocada, ya que se estableció en el proceso que su representada no abandonó sus deberes de esposa, sino que está sufriendo quebrantos de salud, y esta condición puede ser confirmada por el Dr. Luis Fernando Pitty, médico especialista que atiende a la señora GARCÍA, en la Caja de Seguro Social (fs. 123-125).

En otro aspecto, la sentencia impugnada señaló en su parte motiva que, los testigos presentados en el proceso no han podido apreciar directamente la situación conyugal, sólo conocen que el actor ha venido realizando algunas tareas fuera del hogar (lavar, planchar, desayunar y almorzar), y consideran que esto se debe a que su esposa FRANCISCA GARCÍA, no cumple con sus deberes de esposa.

Sigue señalando la sentencia recurrida que, en realidad no les consta que la demandada se niegue a colaborar con las tareas domésticas, o que rehúsa el cumplimiento de sus obligaciones, ya que no han estado presentes cuando la pareja

ha discutido.

Dejar de lavar, cocinar o planchar, no demuestran por sí solo un abandono absoluto de los deberes de esposa, dado que estas tareas jamás han sido exclusivas de las mujeres, y no hay certeza de que FRANCISCA SOCORRO GARCÍA ha dejado de hacerlas en forma intencional o maliciosa.

Por otro lado, señala la sentencia del Tribunal Superior de Familia, que hay pruebas en el expediente (reporte migratorio, foja 92-106) que señalan las veces que la señora GARCÍA ha salido del país, rumbo a su país natal (Nicaragua), pues su permanencia en Panamá, estuvo amparada con una visa de turista hasta que se le concedió la visa de inmigrante casada con panameño.

Expresó finalmente la sentencia recurrida que, no es lo mismo abandono y separación aunque sea bajo un mismo techo, ya que para comprobar la causal de abandono, se hace indispensable que se acredite, en forma fehaciente, que la demandada de manera voluntaria abandonó sus deberes de esposa. Abandono implica descuido, desatención y amparo de los deberes que le corresponden y según nuestra legislación, el mismo debe darse de forma absoluta.

Los testimonios no aportan elementos de juicio que pueden interpretarse o valorarse para corroborar el abandono invocado por la parte actora, pues sólo hablan de la no convivencia de los esposos, las constantes ausencias de la demandada del domicilio conyugal y la realización de las tareas domésticas por parte del señor ESTENOZ.

Haciendo una valoración de las pruebas principales de la Sentencia impugnada en cada una de las causales, y confrontándola con cada una de las pruebas que han sido supuestamente ignoradas por el Tribunal, tenemos lo siguiente:

Sobre el cargo de injuridicidad contenido en el primer motivo consistente en que el Tribunal Superior de Familia, al no haber apreciado la prueba que obra a folio 83 del expediente, es decir, el Oficio N°S.G. 2717-98, de 7 de julio de 1998 de la Dirección de Migración y Naturalización, sobre Informe (Negativo) de entradas y salidas de FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA, ha influido en lo dispositivo del fallo, la Sala advierte que no comparte este criterio con la casacionista, ya que la Sentencia del ad-quem es el resultado de un estudio de cada una de las pruebas que conforman el proceso, señalando la Sala que a foja 91 del expediente consta el Oficio N°SG/3555, de 31 de agosto de 1998, de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, en la cual consta las entradas y salidas de la señora GARCÍA con destino a Nicaragua, vía transporte terrestre.

El cargo de injuridicidad contenido en el segundo motivo consiste en que el Tribunal Superior de Familia violó la ley, por cuanto a folio 150 del expediente, refiere haber revisado el Reporte Migratorio de la demandada que obra a folios 92 a 106, a pesar que dicho reporte adicionaba el visible a folio 83.

La Sala al estudiar dicha prueba señalada por la casacionista como no tomada en cuenta por la sentencia del Tribunal Superior de Familia, advierte igualmente las consideraciones expresadas en el criterio esbozado con la prueba presentada en el primer motivo de esta primera causal, es decir, que fueron estudiadas cada una utilizando el principio de la Sana Crítica, dándosele el valor que corresponde, por lo que el presente cargo de injuridicidad corresponde a la causal de error de derecho sobre la apreciación de la prueba.

Como es obvio, y así lo ha declarado de manera consistente esta Sala, la causal de error de derecho en la existencia de la prueba exige, como requisito sine qua non, que una prueba validamente incorporada por una parte en el proceso, no haya sido tomada en cuenta por el sustanciador de segundo grado, y que dicha prueba desconocida por el juzgador haya incidido en la decisión de la sentencia recurrida.

El cargo de injuridicidad contenido en el tercer motivo consiste en que el Tribunal ad-quem viola la ley, por cuanto al no haber visto este Tribunal la prueba que obra a folio 83 del expediente, confrontándolo con el folio 70 a la vez, con los folios 91 a 106, no observó que FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA tenía y tiene dos Pasaportes distintos.

Esta Superioridad al analizar exhaustivamente esta prueba, ya reiterada por la casacionista en los dos primeros motivos de esta causal, considera que no le asiste razón, ya que como se dijo anteriormente, el Juzgador tomó el cuenta las pruebas, cada una, de manera independiente, utilizando la sana crítica, por lo que estas no acreditaron la causal de abandono alegada por el señor LUIS FELIPE ESTENOZ.

El cargo de injuridicidad contenido en el cuarto motivo consiste en que la Sentencia impugnada viola la ley cuando dice a folio 153 que no hay pruebas de un abandono absoluto de esposa, ya que la demandada tiene un Pasaporte N°C074557 con el que se casó y no viaja (véase fojas 4, 70 y 83) y otro Pasaporte N°07455 con el que sí ha viajado tres veces, de diciembre de 1996 a junio de 1997.

Es del criterio esta Sala de la Corte que la presente prueba no constituye por sí sola la acreditación de la causal de abandono aducida en el libelo contentivo de la demanda, tal como se expresó en el motivo anterior, toda vez que el hecho de que la demandada haya salido del país con dos pasaportes diferentes con destino a Nicaragua, lugar de origen, no demuestra de que haya abandonado con carácter absoluto los deberes de esposa. Lo que le corresponde a esta Sala decidir es, en este recurso de casación, es el tema relativo a si, de conformidad con el derecho sustantivo, existen las pruebas fehacientes que demuestren que la señora GARCÍA abandonó o no sus deberes de esposa durante el tiempo requerido por ley, cosa que, para que el órgano jurisdiccional reconozca ese derecho o pretensión, se hace necesario probar los hechos que le sirven de fundamento a la misma, tal y como lo reza el artículo 773 del Código Judicial, que señala que "Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorables".

Precisamente por lo anterior, es que al demandante con sus pruebas, le corresponde demostrar la verdad de sus afirmaciones y la realidad de sus hechos, a fin de que el Juzgador al momento de decidir, lo haga basándose en dichas pruebas.

El quinto y último motivo consiste en que la Sentencia del Tribunal Superior de Familia viola la ley, toda vez que con el Pasaporte N°C 074557 la demandada se casó, y no viaja según la prueba que obra a folio 83 que no apreció dicha sentencia, pero tan pronto esta extranjera cónyuge Inmigrante solicita su Visa de Casada con Panameño, tres veces se ausenta del país con otro Pasaporte (fs. 91, 105 y 106).

Es del criterio esta Sala, reiterando todo el análisis esbozado en los motivos analizados que preceden, que el hecho de contar la demandada con dos Pasaportes, el N°C074557 y el N°07455, éste último con el que ha viajada tres veces desde diciembre de 1996 a junio de 1997 no acreditan con certeza la causal de abandono absoluto de los deberes de esposa de la señora FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA.

Por tanto, esta Sala tiene el criterio de que no se ha probado la injuridicidad de este cargo.

SEGUNDA CAUSAL:

La segunda causal en el fondo del recurso, consiste en "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Dicha causal se sustenta en tres motivos, que a continuación se

transcriben:

> "PRIMER MOTIVO: La Sentencia impugnada del Tribunal Superior de Familia viola la Ley al apreciar de forma errónea y restarle valor probatorio, a los testimonios de JULIO CHEPOTE, a folios 54 y 55, GUSTAVO ALVARADO, a folios 57 y 58 y MARÍA ALGUERO DE AIZPÚ, a folios 60 y 61, que convergen en el abandono absoluto de los deberes de esposa de LA DEMANDADA.
>
> SEGUNDO MOTIVO: La Sentencia impugnada del Tribunal Superior de Familia (a folio 150), viola la Ley al apreciar de forma errónea, y otorgarle un valor probatorio que no tiene, al Reporte Migratorio de LA DEMANDADA que obra a folios 91 a 106, por cuanto dicha cónyuge tuvo Status de Turista y dejó este Status por otros mejores, por ejemplo, Status de Solicitante de Visa de Inmigrante en Calidad de Casada con Panameño.
>
> TERCER MOTIVO: La Sentencia impugnada del Tribunal Superior de Familia, viola la Ley, con la valoración probatoria que hace al principio de folio 150 del expediente, porque LA DEMANDADA dejó de ser turista desde que solicitó cambio de Status a Inmigrante en Calidad de Casada con Panameño, y en consecuencia, la parte dispositiva del fallo recogió este equívoco a inicios del folio 153, al desconocer que la nicaragüense GARCÍA, sí incumplió absolutamente sus deberes de esposa, sin justificación, porque su frecuencia de viaje es inaceptable".

La casacionista cita como disposiciones legales infringidas y explica cómo lo han sido, los artículos 904 y 880 del Código Judicial; numeral 6 del artículo 212 del Código de Familia.

CRITERIO DE LA SALA EN LA SEGUNDA CAUSAL

De acuerdo a la recurrente, el cargo de injuridicidad que le atribuye a la sentencia consiste en que el Tribunal de Segunda Instancia incurre en error de derecho en la apreciación de la prueba, toda vez que al apreciar de forma errónea y restarle valor probatorio a los testimonios de JULIO CHEPOTE (fs.54 Y 55), GUSTAVO ALVARADO (fs. 57 y 58) y MARÍA ALGUERO DE AIZPÚ (fs. 60 y 61); al Reporte Migratorio de la demandada (fs. 91-106) y la valoración probatoria que hace al principio de folio 150 del expediente, condujo al Tribunal a desconocer que la nicaragüense GARCÍA, sí incumplió absolutamente sus deberes de esposa, sin justificación, porque su frecuencia de viaje es inaceptable.

Advierte la Sala que los cargos de injuridicidad contenidos en los motivos, se determinan de la siguiente manera:

El primer motivo consiste en que la Sentencia impugnada del Tribunal Superior de Familia al restarle valor probatorio a los testimonios de JULIO CHEPOTE, GUSTAVO ALVARADO y MARÍA ALGUERO DE AIZPÚ, visibles a fojas 54-55, 57-58 y 60-61, respectivamente, convergen en el abandono de los deberes de esposa de la demandada.

De la atenta lectura de la resolución impugnada, se observa que el Tribunal ad-quem, valoró todas las pruebas testimoniales independientemente.

Sucede con renovada frecuencia que los hechos de un proceso no alcancen a ser verificados con el auxilio de un solo medio de prueba, es decir que las certezas obtenidas en un juicio no puedan extraerse a partir de cada una de las pruebas aisladamente practicadas. En esos casos el Juzgador estará conminando a basar su decisión en el análisis de conjunto que lógica y racionalmente esté en capacidad de realizar, considerando integralmente todos los elementos probatorios incorporados al proceso. No son pocas las veces que la certeza de un hecho que se averigua se consigue a partir de la ayuda de varios elementos o medios

probatorios que, si se consideran por separado, carecerían cada uno de ellos de la fuerza probatoria requerida para establecer la verdad en relación con aquello que se ventila en el juicio.

Estima la Sala que en el caso subjúdice los defectos que le endilga el casacionista es que se le restó valor a unas pruebas testimoniales. Sin embargo, haciendo eco de lo planteado en el párrafo anterior, el Tribunal A-Quem al manifestar, entre otras cosas, que los testigos no han podido apreciar directamente la situación conyugal, sólo conocen que la partes no conviven juntos, que la demandada se ausenta del domicilio conyugal y que el señor LUIS FELIPE ESTENOZ realiza una serie de tareas domésticas, no significa que exista un abandono absoluto de los deberes de esposa de la señora GARCÍA, así como no hay certeza, que la demandada ha dejado de hacer sus deberes de esposa en forma intencional o maliciosa.

El segundo y tercer motivo se complementan en un mismo cargo de injuridicidad consistente en que el Tribunal Superior de Familia (a folio 150) al apreciar de forma errónea, que el Reporte Migratorio de la demandada que obra a folios 91 a 106, por cuanto dicha cónyuge tuvo Status de Turista y dejó este Status por otros mejores, por otros, Status de Solicitante de Visa de Inmigrante en Calidad de Casada con Panameño, viola la ley.

Lo anterior, considera la Sala, no constituye un cargo de injuridicidad, por lo que se desestima este motivo.

La Sala no discute que puede asistirle razón al impugnante cuando denuncia los defectos y limitaciones de que adolecen cada una de las pruebas practicadas en este juicio, pero asimismo desea llamar la atención sobre el hecho de cada una de esas pruebas, absolutamente independientes por su naturaleza y por su origen, conducen a una misma conclusión, sin que pueda decirse que haya mediado ninguna artificialidad capaz de forzar las inferencias que naturalmente emanan de la mismas. La simple asociación y convergencia de las pruebas practicadas en este juicio le permiten al juzgador llegar a la certeza de la existencia del hecho medular que se debate en este proceso. Tanto en las declaraciones de los testigos como en las pruebas documentales no se encuentra presente la figura del abandono absoluto de los deberes de esposa de la señora FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA para con su señor esposo LUIS FELIPE ESTENOZ.

De allí que la Sala comparta por completo la postura del Tribunal Superior cuando al fallar analizó con suma claridad la fuerza probatoria de los medios allegados al expediente. Por tanto, este cargo de injuridicidad no se considera probado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 9 de agosto de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Familia, dentro del recurso de casación, en el fondo, interpuesto por LUIS FELIPE ESTENOZ HERRERA.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Ad-hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO FEDPA, S. A. Y EDILBERTO B. ESQUIVEL MOLTO RECURREN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN EN QUE SE DEMANDA PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA EN EL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR BANCO FEDPA, S. A. CONTRA EDILBERTO B. ESQUIVEL MOLTO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la sentencia de segunda instancia proferida en fecha cuatro (4) de febrero del dos mil (2000) por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro de la excepción de inexistencia de la obligación presentada por la parte demandada en el proceso ejecutivo incoado por BANCO FEDPA, S. A. contra EDILBERTO B. ESQUIVEL MOLTO, interpuso el licenciado PEDRO MORENO CÉSPEDES en representación de la demandante recurso de casación en el fondo y, en representación del demandado, el Licenciado VIRGILIO E. VÁSQUEZ PINTO, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.

Transcurrido el término que se le concedió a las partes para que expresaran sus puntos de vista acerca de la admisibilidad de los recursos, sin que fuere aprovechado, corresponde a la Sala decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución y la cuantía se enmarcan dentro de lo establecido por la ley para la concesión del recurso. Además, los recurrentes formalizaron sus respectivos escritos de casación en tiempo. Se avoca ahora la Sala a examinar por separado cada recurso, atendiendo al orden en que aparecen ubicados en el expediente.

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL
LCDO. PEDRO MORENO CÉSPEDES

El recurso de casación propuesto por el licenciado Pedro Moreno Céspedes , en representación de BANCO FEDPA, S. A. es en el fondo y aparece visible a fojas 351 a 353. En el mismo se invoca la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por "error de hecho sobre la existencia de la prueba y de derecho en cuanto a la apreciación de la misma", que ha influido substancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida, comprendida en el artículo 1154 del Código Judicial.

La Sala advierte que en este recurso se han dado los siguientes defectos:

En primer lugar, el recurrente alega dos causales, de manera conjunta, lo cual es improcedente, ya que cada causal debidamente individualizada debe ser expuesta, en forma separada de los motivos y de la infracción normativa, según jurisprudencia de la Corte, fundamentado en lo dispuesto en el artículo 1160 del Código Judicial.

En segundo lugar, ninguno de los tres motivos contiene un cargo de injuricidad. La Sala observa que todos los apartados elaborados por el impugnador están encaminados a criticar la labor del juzgador.

Y en tercer lugar, el recurso no señala en la citación de las normas infringidas, la disposición de carácter sustantivo con carácter de tal.

Por las razones expuestas, resulta a todas luces improcedente el recurso, y, por lo tanto, no debe ser admitida.

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL
LCDO. VIRGILIO E. VÁSQUEZ PINTO

El recurso de casación propuesto por el Licenciado VIRGILIO VÁSQUEZ, en representación de EDILBERTO ESQUIVEL se interpuso en la forma y en el fondo y aparece visible a fojas 356 a 361.

En la casación en la forma invoca como única causal "Por no estar la Sentencia en consonancia con las excepciones del demandado porque se omite fallar

sobre algunas de las excepciones alegadas".

Establece cuatro motivos. En los mismos alude el recurrente al hecho de que cómo el tribunal inferior no se pronunció dentro del proceso seguido por BANCO FEDPA, S. A. contra EDILBERTO BOLÍVAR ESQUIVEL MOLTO en la excepción de inexistencia de la obligación, respecto a la solicitud de "temeridad de la Demanda Ejecutiva y se Oficie al Ministerio Público a objeto de determinar quién incurrió en el delito de falsedad de documento privado", ha faltado al principio de congruencia en que debe fundarse toda resolución que decide una causa.

En dicho motivo aparece claramente expresado el cargo de injuridicidad contra la resolución que se censura, el cual guarda relación con la causal que se invoca.

La norma de derecho alegadamente violada se encuentra especificada y debidamente explicado el concepto de infracción del mismo. Por esto considera la Sala que, respecto a esta causal, se dan los requisitos y formalidades de ley para su admisión.

En cuanto a la casación en el fondo, el recurrente invoca como única causal, el "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba".

En términos generales, en los tres motivos que expone el casacionista lo que le imputa a la sentencia de segunda instancia es, el no haberle conferido valor probatorio a la contestación de la demandante del hecho tercero de la excepción de inexistencia de la obligación interpuesta por el demandado excepcionante.

Con referencia a la norma de derecho infringida, y la explicación de cómo ha sido violado dicho artículo, la Sala observa que el recurrente señala como infringido el artículo 769 del Código Judicial, lo que no es congruente con la causal invocada, ya que la norma antes mencionada no establece regulaciones sobre valoración de pruebas, sino en cuanto a la existencia de las mismas, fundamentando así, una causal no alegada por el recurrente. Estos errores deben ser subsanados mediante escrito de corrección.

Por tanto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en el fondo propuesto por el Licenciado PEDRO MORENO CÉSPEDES contra la resolución de cuatro (4) de febrero de 2000, pronunciada por el Primer Tribunal Superior de Justicia; DECLARA ADMISIBLE la causal de forma del recurso de casación presentado por el Licenciado VIRGILIO VÁSQUEZ; y ORDENA LA CORRECCIÓN en la causal de fondo, para lo que le concede el término de cinco días, tal como lo establece el artículo 1166 del Código Judicial.

Las obligantes costas a cargo del primer recurrente se fija en DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MAXIMINO MEJÍA ORTEGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE EL FARO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado MAXIMINO MEJÍA ORTEGA, interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 25 de abril de 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que le sigue EL FARO, S. A.

Transcurrido el término que se le concedió a las partes para que dejaran oír sus puntos de vista acerca de la admisibilidad del recurso, sin que fuere aprovechado, corresponde a la Sala decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución y la cuantía se enmarcan dentro de lo establecido por la ley para la concesión del recurso. Además, en cuanto a la exigencia establecida en el artículo 1165 del Código Judicial, en relación con el artículo 1159 de ese cuerpo de leyes, en materia de interposición oportuna del recurso, esto es, por el término improrrogable de diez (10) días, se observa que el mismo se formalizó en tiempo.

Se presentan tres causales de casación en el fondo, la primera de ellas es: "infracción de norma sustantiva de derecho por concepto de aplicación indebida de la misma". Observa la Sala que dicha causal aparece recogida como tal, en el artículo 1154 del Código Judicial. Los motivos que sustentan la causal son cinco y en ellos aparece expuesto, grosso modo, el vicio de ilegalidad que se formula contra la sentencia impugnada. La Sala considera que los mismos reúnen, de manera general, los requisitos establecidos en la ley.

La segunda causal de fondo invocada es: "infracción de norma sustantiva de derecho por concepto de violación de la misma". Esta causal se encuentra invocada correctamente. Las normas sustantivas de derecho infringidas, también aparecen indicadas con la respectiva explicación de la infracción; por lo que respecto de esta causal opera su admisibilidad.

La tercera causal de fondo invocada es: "infracción de norma sustantiva por error de hecho en cuanto a la apreciación de la prueba". Dicha causal se enuncia conforme lo dispuesto en el artículo 1154 supra citado. Los motivos que sustenta la causal son dos. Se refiere a ellos, el recurrente, en el primer motivo, de que la sentencia desconoció un conjunto de pruebas, señalando las mismas. Sin embargo, en el segundo motivo de esta causal, expresa el casacionista que la sentencia impugnada pasó por alto la valoración de los documentos aprobados como prueba, recayendo este motivo en otra causal que no es la invocada.

No obstante lo anterior, advierte la Sala que los motivos han sido expuestos en forma de cargo de injuricidad contra la sentencia que se impugna y en consecuencia con la causal que se invoca; además se cita y explica de forma adecuada la disposición infringida, por lo que considera la Sala, debe admitirse la causal examinada.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por MAXIMINO MEJÍA ORTEGA.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BIENVENIDA DOMINGUEZ DE GONZALEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO DE NULIDAD DE INSCRIPCIÓN QUE LE SIGUE A BENJAMIN BETESH Y GANAGRO,

S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense AROSEMENA Y AROSEMENA, como apoderada judicial de BIENVENIDA DOMINGUEZ GOMEZ o BIENVENIDA DOMINGUEZ DE GONZALEZ, ha interpuesto recurso de casación contra la resolución de 4 de mayo de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso ordinario de nulidad de inscripción en el Registro Público seguido contra BENJAMIN BETESH y GANAGRO, S. A.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que fue aprovechado por sus apoderados, como consta a fojas 397 a 401 y 402 a 407 (oposición a la admisión) y a fojas 408 a 417 (alegato a favor de la admisión).

Seguidamente, la Corte procede al examen del recurso para determinar si cumple o no con los presupuestos que establecen los artículos 1148, 1149, 1165, 1160 y concordantes del Código de Procedimiento Civil.

Si bien la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley y el recurso ha sido interpuesto en tiempo, en el escrito de formalización podemos apreciar algunos defectos que a continuación se pasan a detallar:

La primera causal de fondo es "Infracción de Normas Sustantivas de Derecho, por error de Hecho sobre la existencia de la prueba, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Se establecen tres motivos como fundamento de esta causal. Sin embargo, al revisar el contenido de los dos primeros motivos, que son los que establecen cargos probatorios, se evidencia que atañen a la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba y no a la invocada. Veamos el contenido textual de los mismos:

> "..... .....
>
> PRIMERO: A fs. 363 (página 15 de la sentencia) el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA dio por acreditado que la inscripción del Título de la demandante fue cancelada en virtud de una sentencia judicial que declaró nulo el contrato de compraventa celebrado entre Saturnina Barahona de González y Joaquín González Barahona", no obstante que tal conclusión del Ad-Quem no está acreditada ni aparece en la parte resolutiva de la Sentencia de fecha 3 de diciembre de 1971, dictada por el JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DE PANAMA (fs.104) y confirmada por la Sentencia de fecha 12 de julio de 1973 (fs.106) dictada por la SALA CIVIL de la CORTE SUPREMA. Al dar por acreditado un hecho que no existe ni consta ni se dio, el Ad-Quem incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo cual influyó en lo dispositivo del fallo recurrido.
>
> SEGUNDO: El PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA también ignoró la prueba referente al hecho de que, a la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de la SALA PRIMERA de la CORTE -12 de julio de 1973- (fs.106), ya hacía tiempo que la señora BIENVENIDA DOMINGUEZ GOMEZ o BIENVENIDA DOMINGUEZ DE GONZALEZ había adquirido por compra la Finca No.39,783 y que dicha venta estaba inscrita en el Registro Público desde el 20 de octubre de 1972 (fs.16), antes de que quedara ejecutoriada la sentencia de la CORTE, la cual no fue

impedida ni suspendida judicialmente mientras duró el proceso. Por tanto el Ad-Quem incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo cual influyó en lo dispositivo de la resolución recurrida.
.....
.....".
(fs- 377 a 378)

Como se observa, en el primer motivo se cuestiona la conclusión a la que llegó el Tribunal Superior después de malvalorar dos sentencias. Aduce que el Tribunal Superior llegó a la conclusión inexacta de que la cancelación de la inscripción del título de la demandante fue acreditada por medio de la sentencia judicial de 3 de diciembre de 1971 y la sentencia de la Corte Suprema de 12 de julio de 1973. De estos señalamientos no puede entenderse otra cosa que el cargo consiste en que las mencionadas sentencias no fueron debidamente apreciadas.

En el segundo motivo no se identifica con precisión cuál es el medio de prueba supuestamente ignorado por el Tribunal; porque, aunque inicialmente parece que se refiere a un hecho que se desprende de la sentencia de la Corte de 12 de julio de 1973 (de fojas 106), a esta misma sentencia se alude en el primer motivo como si hubiese sido considerada pero mal apreciada en su contenido. También se hace referencia al hecho de no haberse estimado la fecha de inscripción de la venta, que aparece a fojas 16, lo cual incrementa y acentúa la confusión acerca del cargo de injuricidad que se alega.

El cuestionamiento de la censura sería pertinente en relación con la otra causal probatoria (la de error de derecho en la apreciación de la prueba). Esa contradicción se nota, por ejemplo, cuando se cita como infringido el artículo 769 del Código Judicial (norma propia de la causal de error de hecho), argumentándose que el Tribunal lo infringió porque desconoció el verdadero contenido de los fallos mencionados. (Cfr.fs.378-379).

Al referirse al concepto de infracción de la siguiente disposición citada, o sea el artículo 1212 del Código Judicial, no se establece ningún tipo de violación relativa a un cargo probatorio o concerniente a lo que dicen los motivos, pues se formula una especie de alegato para concluir que, en un momento dado, el juez no cumplió con aplicar el contenido de la norma. (fs.380-381).

El concepto de infracción de las normas sustantivas siguientes (artículos 1761, 1753,1762,1767 del Código Civil), en algunos casos parece referirse al cargo incongruente a que se refieren los motivos, y, en otros, a cargos que no guardan relación con ninguna infracción probatoria.

La segunda causal de fondo es la "Infracción de Normas Sustantivas de Derecho, por Violación Directa de la Ley Sustantiva, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida".

El fundamento de esta causal se expresa en tres motivos que dicen lo siguiente:

"...
...
PRIMERO: La Sentencia dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, al desconocer los derechos que le asisten a BIENVENIDA DOMINGUEZ DE GONZALEZ por haber adquirido a título de compra la Finca No.39,783, que fue inscrita en el Registro Público y al señalar que no existe nulidad de la inscripción de las ventas realizadas por SATURNINA BARAHONA DE GONZALEZ a favor de GANAGRO, S. A. y de ésta a BENJAMIN BETESH, no aplicó las disposiciones del Código Civil que protegen los derechos de los terceros adquirientes que no participaron en el acto o contrato. Si el Ad-Quem hubiera aplicado las normas del Código Civil que protegen los derechos de los terceros adquirientes que no participaron en el acto, la

conclusión de la sentencia recurrida hubiera sido contraria a la arribada.

SEGUNDO: La no aplicación por parte del A Quem de las disposiciones del Código Civil referentes a la nulidad de los actos de transmisión de la propiedad, realizados en perjuicio de terceros, cuyos derechos así como la venta constaban en el Registro Público, constituyó en lo dispositivo de la Resolución recurrida.

TERCERO: La no aplicación por parte del PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de las disposiciones del Código Civil referentes a la nulidad de los actos de transmisión de la propiedad realizados en perjuicio de nuestra representada, quien es tercero, cuyos derechos constaban en el Registro Público, constituye causal de violación Directa de la Ley Sustantiva, la cual influyó en lo dispositivo de la Resolución recurrida.
...
...".
(384 a 385)

Del primer motivo se colige que el cargo, sobre la falta de aplicación de disposiciones del Código Civil que protegen los derechos de los terceros adquirentes, se deriva de otros cargos sobre situaciones de hecho que se le atribuyen al fallo de segunda instancia.

En los motivos segundo y tercero se le formula idéntica acusación al tribunal, es decir, que no aplicó las normas del Código Civil referentes a la nulidad de actos de trasmisión de la propiedad realizados en perjuicio de terceros.

La primera norma sustantiva citada como violada (art.1152 del Código Civil), no guarda relación con el contenido de los motivos, pues esta disposición se refiere a la prescripción de las acciones, materia que ni siquiera se menciona en el segundo apartado del recurso.

De la infracción que se atribuye a las otras normas (artículos 1159, 1761, 1762 del Código Civil), no surge con claridad la causal invocada, pues lo sostenido por el casacionista es que la violación de esas normas deriva de situaciones de hecho que no fueron debidamente apreciadas por el ad-quem: efectos de la nulidad ante terceros poseedores de una cosa (1159); títulos sujetos a inscripción, no inscritos y el efecto de esto frente a terceros (1761); y, efectos de la inscripción de actos o contratos nulos o anulables conforme a la ley (1762). Las dos últimas normas también son citadas en la primera causal que se basa en cuestionamientos de orden probatorio.

Como es sabido, la causal de violación directa se produce cuando se deja de aplicar un texto legal claro que ha debido aplicarse (por omisión), o bien, cuando dicho texto se aplica desconociendo un derecho en él consagrado en forma perfectamente clara (por comisión); en ambos casos, con independencia de toda cuestión probatoria. Así, aún cuando el recurrente sostiene en esta causal que el Tribunal Superior dejó de aplicar las normas del Código Civil que protegen los derechos de terceros adquirientes que no hayan participado en el acto o contrato, no se llega a especificar en ninguno de sus apartados en dónde radica la injuricidad que se le atribuye al fallo. Cuando se hace uso de esta causal (la de violación directa) el recurrente tiene la obligación de expresar con claridad en qué medida o en qué forma la sentencia atacada ha desconocido, de manera directa, los derechos sustantivos que se aseguran vulnerados. La mera enunciación no basta; pues expresado el cargo en términos abstractos no se posibilita la inteligencia del recurso por parte de la Sala.

Lamentablemente la Sala arriba a la conclusión de que las deficiencias del recurso en cuanto a la estructuración de las dos causales lo tornan ininteligible.

Consecuentemente, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por BIENVENIDA DOMINGUEZ GOMEZ o BIENVENIDA DOMINGUEZ DE GONZALEZ contra la resolución de 4 de mayo de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso ordinario seguido contra BENJAMIN BETESH Y GANAGRO, S. A.

Las obligantes costas se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARLOS RIZCALLA O CARLOS RENE RIZCALLA TESTA RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE IDONEIDAD DEL TÍTULO PRESENTADOPOR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR RAPID FACTORING, S. A. CONTRA CARLOS RIZCALLA O CARLOS RENE RIZACALLA TESTA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Carrera y Asociados, apoderada judicial del señor CARLOS RENE RIZCALLA TESTA, interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 6 de noviembre de 1998, que resolvió en segunda instancia la excepción de falta de idoneidad de título propuesta por el recurrente, dentro del proceso ejecutivo que le sigue RAPID-FACTORING, S. A.

El recurso fue admitido por esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y se encuentra pendiente de decidir en el fondo, tarea que se emprende luego de un breve recuento sobre sus antecedentes procesales.

La sociedad RAPID-FACTORING, S. A. interpuso demanda ejecutiva ante el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, contra el señor CARLOS RENE RIZCALLA TESTA, por la suma de B/90,180.00 en concepto de capital, más las costas, gastos e intereses, presentando como recaudo ejecutivo el documento consultable a foja 4 del expediente principal.

Mediante Auto N 286 de 7 de febrero de 1996 el Juzgado Cuarto libró mandamiento de pago por la suma reclamada y posteriormente dictó el Auto N 707 fechado 10 de abril de 1996, en el que elevó a embargo el secuestro que había decretado por medio de Auto N 699 de 9 de abril de 1996, a favor de la sociedad ejecutante y contra el señor RIZCALLA TESTA.

Por su parte, el ejecutado interpuso excepción de falta de idoneidad del título que fue negada por el Juzgado Cuarto, mediante Sentencia N 114 de 16 de octubre de 1997.

El señor RIZCALLA TESTA apeló de esa decisión, la cual fue confirmada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en la sentencia fechada 6 de noviembre de 1998, que ahora se impugna en casación.

El recurso es en el fondo y se invoca como única causal la infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Los motivos que la fundamentan expresan lo siguiente:

"PRIMERO: RAPID FACTORING, S.A., promovió proceso ejecutivo contra nuestro representado y a tal efecto aportó como recaudo ejecutivo un contrato de cesión de crédito, un documento de fianza solidaria y un pagaré. Dentro del tiempo oportuno el ejecutado introdujo la excepción de falta de idoneidad del título ejecutivo y el Primer Tribunal de Justicia, en la sentencia recurrida, estimó que de los tres documentos el que presentaba mérito ejecutivo era el pagaré y por tal motivo confirmó la sentencia No. 14 de 16 de octubre de 1997 proferida por el Juez Cuarto del Circuito Ramo Civil que había denegado la excepción propuesta. Al fallar así el Primer Tribunal Superior de Justicia no tuvo presente las disposiciones legales que regulan los documentos negociables, que de haberlas tomado en cuenta y aplicarlas al presente caso, habría fallado en forma distinta a como lo hizo en el fallo recurrido.

SEGUNDO: El pagaré presentado como recaudo ejecutivo es un pagaré al descuento, desglosado en una serie de letras, en el que se estipuló que la mora en el pago de una letra producirá la morosidad del total adeudado. El pretendido título ejecutivo consistente en el pagaré, sin las letras de cambio, está incompleto, lo que le quita el carácter de negociable a este documento y por ello el Primer Tribunal Superior de Justicia al no aplicar las normas que regulan esta materia violó la Ley.

TERCERO: Al no exigir el Tribunal al ejecutante las letras morosas, no se cumple con el requisito de la suma cierta que exige la ley de documentos negociables y al ignorar el Tribunal este requerimiento en lugar de cumplir la Ley, la violó.

CUARTO: El aludido pagaré está extendido por la suma de B/.140,076.07 y la demanda ejecutiva fue presentada por la suma de B/.90,180.00, lo cual quiere decir que el ejecutado pagó parte de la obligación, y el Tribunal Superior debió exigir al ejecutante que complementara el pretendido título ejecutivo con las letras no pagadas, pero al omitir el Tribunal esta exigencia, el pagaré presentado carece del requisito de la suma cierta, lo que le quita el carácter de negociable, por lo que el Tribunal debió tener en cuenta este elemento indispensable y al no hacerlo violó la Ley." (Fs. 68-69)

Como consecuencia de los cargos expuestos en los motivos anteriormente transcritos, la parte recurrente alega que el Tribunal Superior violó los artículos 1 y 2 de la Ley 52 de 1917 y el numeral 11 del artículo 1639 del Código de Comercio.

La Sala observa que los argumentos planteados por el recurrente en esta causal de violación directa se reducen a los siguientes puntos:

1) Que el pagaré presentado como título ejecutivo está incompleto, puesto que se trata de un "pagaré al descuento" y no se aportaron las letras de cambio que lo complementan, lo que le quita el carácter de negociable a dicho documento.

2) Que en vista de que el Tribunal Superior no le exigió al ejecutante la presentación de las letras morosas, no se ha cumplido con el requisito de la suma cierta que prescribe la Ley 52 de 1917 para los documentos negociables, ya que el pagaré presentado como recaudo ejecutivo está extendido por la suma de B/140,076.07, mientras que la demanda fue interpuesta por la suma de B/90,180.00, de lo cual se desprende que el ejecutado pagó parte de la obligación.

No obstante, la Sala advierte igualmente que la sentencia impugnada no se pronunció con respecto a estos puntos, en vista de que los mismos no fueron

materia de debate durante la primera y segunda instancia del proceso, como se desprende de los hechos que le sirvieron de fundamento a la presente excepción y también al escrito de sustentación de la apelación, los cuales se referían a lo siguiente: 1) Que el señor CARLOS RENE RIZCALLA TESTA suscribió el Pagaré N 225 fechado 31 de mayo de 1994 y una fianza solidaria en una doble condición: como representante legal de la sociedad G. C. SUMINISTROS, S. A. y como codeudor en su propio nombre; 2) Pero, que en vista de que el representante legal de la citada sociedad anónima es una persona distinta al ejecutado, ambos documentos están irregularmente extendidos toda vez que contienen una declaración falsa; y, 3) Que al estar irregularmente constituida la obligación de la deudora principal, es inexistente la obligación accesoria de fianza, toda vez que ésta no puede existir sin la validez de la obligación principal. (Fs. 2-3 y 28-30)

Sobre estos mismos hechos se pronunció el Tribunal Superior, cuando al referirse a la validez del título ejecutivo, concluyó lo siguiente:

> "Ante lo expresado, el Pagaré No.000000025 (ver foja 4 del expediente principal) demuestra la existencia de una obligación líquida y de carácter exigible a favor de RAPID FACTORING, S.A., a la cual están obligados a responder G.C. SUMINISTROS, S.A. y el señor CARLOS RIZCAYA de manera solidaria. Por tanto, es el criterio del Tribunal que ante la claridad consignada en dicha (sic) documento negociable, respecto de la obligación pecuniaria a la cual el señor CARLOS RIZCAYA debe responder personalmente en calidad de co-deudor solidario de la sociedad G.C. SUMINISTROS, S.A., carece de relevancia jurídica la censura impetrada por el apelante referente a si éste no es o si era el Representante legal de dicha sociedad al momento de suscribir dicha obligación.
>
> De lo expresado se colige, que RAPID FACTORING, S.A. podía exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los deudores solidarios, y en el evento de que lo hubiese hecho contra G.C. SUMINISTROS, S.A., es que cobraría importancia jurídica el debate respecto de si el señor CARLOS RIZCAYA tenía la facultad para contraer obligaciones en nombre de la referida sociedad, no así en el caso sub júdice donde el ejecutado es él, pero en su calidad de co-deudor solidario, estatus del cual no existe ninguna duda, máxime cuando la firma fue reconocida ante Notario Público y nunca ha sido objetada por el propio suscribiente." (Fs. 42-43)

De lo anteriormente expuesto se colige que el recurrente intenta hacer valer en casación argumentos de hecho que no fueron objeto de la controversia en primera y segunda instancia, situación que guarda relación con lo que se conoce como la doctrina de los "medios nuevos".

En relación con esta materia, el Doctor JORGE FABREGA P. en su obra "Casación" (Imprenta Varitec, S. A., Panamá, 1995) señala lo siguiente:

> "Bajo la influencia de la doctrina francesa, la Corte ha reconocido la doctrina de los "medios nuevos" y que aparece sintetizada así:
>
> El fallo de segunda instancia cierra la cognición y por ello una parte no puede, al estructurar el recurso, introducir nuevas cuestiones, nuevos detalles.
>
> "La Corte tiene resuelto que para que una cuestión cualquiera pueda ser impugnada, como motivo de casación es indispensable que haya sido materia del debate, en la primera y en la segunda instancia, porque no es dable atribuirle errores en la aplicación del derecho a un Tribunal, en relación con puntos que no estuvieron sometidos a su consideración (Casación, 3 de mayo de 1938. R.J. N 5, pág. 456, T. IV.) (S. 3 de octubre de 1957, Julio Lawrence Adler y Robert Worsley vs. Antonio de León)".

...

El Código Judicial consagra la regla de los medios nuevos, salvo que se trata de cuestiones de orden público que el Juez debe reconocer (art. 1156). Se hace depender de la naturaleza de pretensión impugnativa que constituye el recurso de casación.
...

Respecto a la jurisprudencia colombiana, H. Morales (Técnica de Casación) ha escrito:

"Casos de medios nuevos:

Son varias las sentencias en las cuales la Corte ha declarado inadmisibles los cargos en casación, por tratarse de medios nuevos: las de julio 30 de 1912 (XXI, 360), agosto 1 de 1932 (XL, 430) y abril 28 de 1934 (XL, 298) expresan que el extremo o hecho de la prescripción no incoada en las instancias, es medio nuevo en casación; la de noviembre de 1932(XLI, 14) rechaza el planteamiento de la nulidad de un contrato por motivo diferente al presentado en el juicio; la de octubre 18 de 1935(XLIII, 731) repudia el extremo de invalidez de una hijuela por falta de formalidades, no atacada en el juicio por este respecto; la de diciembre 15 de 1936(XLIV, 687) considera que plantear la nulidad de la prueba del matrimonio, cuando no fue atacada en el proceso, es medio nuevo; la de octubre 23 de 1939 (XLVIII, 727) rechaza la alegación de nulidad de una cesión de derechos litigiosos, no formulada en instancia; la de julio 6 de 1945 (LIX, 137) niega la casación apoyada en el planteamiento de ser nulas las partidas de estado civil, por no haber sido objetadas antes; la de febrero 9 de 1953 (LXXIV, 27) repudia el ataque a las declaraciones por medio de las cuales se puso por escrito un testamento verbal, por no haber sido planteado en instancia; la de agosto 17 de 1953 (LXXXV, 237) declara inadmisibles los reparos contra una partición, no introducidos durante el juicio; la de diciembre 11 de 1954 (LXXX, 237) niega el cargo por envolver un extremo no incluido en la demanda de indemnización de perjuicios, etc"." (Págs. 54-56) (Enfasis de la Sala)

De lo anteriormente expuesto se puede colegir que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional y extranjera, al igual que nuestro propio Código Judicial, consideran que no es posible reclamar mediante el recurso de casación, nuevas cuestiones o detalles que no hayan sido sometidos a la consideración de los juzgadores de primera y segunda instancia.

No obstante, el artículo 1156 del Código Judicial dispone como excepción a este principio, que podrán ser objeto de casación en el fondo aquellas cuestiones que aunque sean medios nuevos, "el Juez está en la obligación de decidir".

Por su parte, el Profesor JORGE FABREGA P. en la obra ya citada, señala que en Francia no se reconocen como medios nuevos, los siguientes casos:

"No se consideran medios nuevos, entre otros: 1 Los medios que implícitamente surgen en las instancias; 2 Los medios nuevos examinados por el fallo impugnado; 3 Los medios de orden público; 5 Los medios que ni el demandante ni el demandado estaban en la posibilidad de invocar en apelación. (Véase Boré, op. cit. N 2540). 6 Lo que la doctrina francesa denomina 'la pérdida de fundamento jurídico' por motivo de un hecho que es posterior, como la expedición de una ley nueva aplicable a la situación de autos, durante el trámite de casación, que incide -- especialmente, normas de orden público, retroactivas." (Op. Cit. Págs. 55-56)

En el caso que nos ocupa, como ya se ha señalado anteriormente, el recurrente ataca la validez del documento presentado como recaudo ejecutivo por razones distintas a las que fundamentaron la presente excepción de falta de idoneidad del título, argumento que, a juicio de la Sala, no encaja en ninguna de las excepciones antes señaladas ni constituye, por ninguna otra razón, materia sobre la cual tenga la obligación de decidir, por lo que debe concluir que se trata de un medio nuevo y, como tal, no debe ser examinado en casación.

Por otra parte, antes de finalizar la Sala quiere señalar también que resulta claro que el Tribunal Superior no incurrió en la violación directa de ninguna de las disposiciones legales citadas por el recurrente, razón por la cual concluye que tampoco existen méritos para casar el fallo impugnado por la causal invocada.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 6 de noviembre de 1998, dentro de la excepción de falta de idoneidad del título presentada por la parte demandada, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la sociedad RAPID FACTORING, S. A. contra el señor CARLOS RENE RIZCALLA TESTA.

Las costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de trescientos balboas (B/300.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADRIÁN E. CASTILLERO LANGE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MARTA NEMESIA CASTILLERO Y LOS SUCESORES DE MANUELA CASTILLERO PIMENTEL Y LIBRADA CASTILLERO PIMENTEL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense MORENO y FÁBREGA, apoderada judicial del señor ADRIÁN E. CASTILLERO LANGE, ha interpuesto recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el 25 de enero de 2,000, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía propuesto por ADRIÁN E. CASTILLERO LANGE contra la señora MARTA NEMESIA CASTILLERO, los sucesores de la señora MANUELA CASTILLERO PIMENTEL (Q.E.P.D.) y los sucesores de la señora LIBRADA CASTILLERO PIMENTEL (Q.E.P.D.).

En esta oportunidad procesal corresponde a la Sala decidir si el recurso es admisible, atendiendo para ello los requisitos contemplados en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

Al examinar las constancias procesales, se observa que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, toda vez que se trata de una sentencia de segunda instancia proferida por un Tribunal Superior de Justicia dentro de un proceso de conocimiento y el recurso ha sido interpuesto en tiempo y por persona hábil.

En lo atinente al escrito de formalización, la representación judicial de la señora MARTA NEMESIA CASTILLERO PIMENTEL, GABRIEL LUCINO CASTILLERO PIMENTEL

y ADRIANO CASTILLERO PIMENTEL solicita se niegue la admisión del recurso de casación, toda vez que, según dice, "...los motivos que sirven de fundamento a la causal trata de alegaciones propias de un alegato de instancia, ya que en ninguno de ellos señala con precisión el cargo de antijuridicidad que se le formula a la sentencia impugnada..."

En primer lugar, el casacionista indica que el recurso de casación es en el fondo, invocando la causal única de fondo en los siguientes conceptos: a) Violación directa de la norma de derecho; b) Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba; y, c) Error de hecho sobre la existencia de la prueba. Se observa un estricto apego a lo señalado en el artículo 1154 del Código Judicial.

En el aparte correspondiente a los motivos que se establecen como fundamento de la primera causal de fondo ("Infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de violación directa de la norma de derecho"), que constan de fojas 761 a 764, cabe observar que han sido desarrollados en forma de alegatos, repitiendo las mismas consideraciones, lo cual no es propio de la técnica de casación, puesto que cada uno de ellos deben limitar su contenido al cargo de injuridicidad que se formula contra la sentencia de segunda instancia, a fin de que la Sala pueda examinar cada cargo en forma independiente y sin dificultad, cuando deba adentrarse al estudio de fondo para dictar la decisión final.

Por tanto, los motivos que fundamentan esta causal deben corregirse, de manera que se formulen en términos concretos, reflejando cada uno el cargo de injuridicidad que sirva de apoyo a la causal.

En el siguiente apartado del recurso, relativo a la cita y explicación de las normas sustantivas que se estiman vulneradas, también se observan algunos defectos, que son:

En el concepto de infracción de la primera norma que se cita, o sea el artículo 854 del Código Civil, se expone una situación, con la que no está conforme el casacionista, pero la misma no se refiere a la violación por parte de la sentencia del contenido textual de la norma (Cfr.fs.764).

Esta misma circunstancia se aprecia en la explicación de la supuesta infracción de los artículos 986 y 989 del Código Civil, pues en estos se exponen hechos pero no se especifica cómo el fallo de segunda instancia violó las respectivas normas. (Cfr. fs.766 a 767).

Cabe recordar que la violación directa se produce cuando una disposición clara y explícita deja de ser aplicada al caso pertinente (por omisión) o cuando se aplica desconociendo un derecho en ella consagrado en forma perfectamente clara (por comisión), con independencia de toda cuestión probatoria.

En este caso el recurrente debe procurar que exista relación entre el tenor de la norma y el cargo que se atribuye a la sentencia por la infracción del mismo, ya que no es procedente citar un precepto y establecer como concepto situaciones que no se refieran claramente a su vulneración.

Por tanto, en los casos aludidos o bien se eliminan las normas citadas (por no haber sido violadas) o se corrige el concepto de infracción, a fin de que en el mismo se exprese la forma en que la sentencia desconoció el texto de la misma o dejó de aplicarla a un caso que le rige, sin incluir otras consideraciones que confundan al tribunal de casación.

En los conceptos probatorios invocados por el recurrente los motivos que le sirven de fundamento a cada uno de ellos han sido planteados correctamente y son congruentes con dichos conceptos.

Finalmente respecto a las causales probatorias, a juicio de la Sala, la

citación de las normas de derecho que se consideran infringidas por el sentenciador de segundo grado, al igual que la explicación de cómo lo han sido, resultan adecuadas, luego de un primer examen formal.

Por tanto, esta Sala considera procedente ordenar la corrección de la primera causal y acceder a la admisión de la segunda y tercera, por cuanto estas últimas satisfacen los requisitos exigidos por la ley.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCION de la primera causal y DECLARA ADMISIBLE la segunda y tercera, invocadas en el Recurso de casación, en el fondo, interpuesto por ADRIÁN E. CASTILLERO LANGE, mediante apoderado judicial, contra la sentencia de 25 de enero de 2,000 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese,

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO

Secretario de la Sala Civil-Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CLINICAS Y HOSPITALES, S. A. (CENTRO MEDICO PAITILLA, S. A.), SONIA PORTILLO H., XIOMARA R. DE ROVIRA, RAMON CRESPO BERGES, ROBERTO ENRIQUE MALEK BOURDETT Y BRENDA VIDAL VALLADARES DE MALEK RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE ROBERTO ENRIQUE MALEK BOURDETT Y BRENDA VIDAL VALLADARES DE MALEK LE SIGUEN A CLINICAS Y HOSPITALES, S. A. (CENTRO MEDICO PAITILLA, S. A.) Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada FLOR M. CLARAMUNT, apoderada de los señores ROBERTO ENRIQUE MALEK y BRENDA VALLADARES DE MALEK, en su propio nombre y en representación de su hijo, ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES, dentro del proceso ordinario interpuesto contra CLINICAS Y HOSPITALES, S. A., representada por ALFARO, FERRER, RAMIREZ & ALEMAN; las Doctoras SONIA PORTILLO y XIOMARA M. DE ROVIRA, representadas por SHIRLEY & ASOCIADOS, y el Doctor RAMON CRESPO BERGES, representado por GALINDO, ARIAS & LOPEZ, han interpuesto sendos recursos de casación contra la sentencia de fecha 5 de agosto de 1998, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Agotados los trámites procesales inherentes al recurso de casación y resuelta su admisibilidad, se encuentra el negocio en estado de decidir, para lo que la Sala considera necesario realizar un resumen sucinto de los antecedentes del caso.

ANTECEDENTES

De acuerdo a las constancias del proceso, los señores ROBERTO ENRIQUE MALEK y BRENDA VALLADARES DE MALEK, actuando en sus propios nombres y en representación de su menor hijo ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES, el día 2 de octubre de 1990, presentaron ante el Juzgado de Turno, correspondiéndole luego de reparto al Juzgado Séptimo del Circuito, demanda ordinaria de mayor cuantía en contra de CLINICAS Y HOSPITALES, S. A.; y los Doctores RAMON CRESPO BERGES; SONIA PORTILLO H. y XIOMARA M. DE ROVIRA, a fin de que fuesen condenados a pagarle a los demandantes, la suma de B/.850,000.00 por razón de los daños y perjuicios materiales y morales, sufridos por ocasión de la negligencia médica en que

incurrieron los demandados en la proyectada operación de adenoides que debió efectuarse al menor Roberto Enrique Malek en el Centro Médico Paitilla.

De acuerdo a los demandantes, tanto el Hospital Centro Médico Paitilla como los Doctores Ramón Crespo Berges, Sonia Portillo y Xiomara Meneses de Rovira incurrieron en una actuación imprudente y negligente en el cumplimiento de sus obligaciones médicas y profesionales para con el menor Roberto Enrique Malek Valladares y esa actuación irresponsable produjo graves daños y perjuicios, materiales y morales, al menor y a sus padres.

Efectuado el traslado de la demanda la misma fue contestada por los demandados quienes negaron los hechos fundamentales de la reclamación impetrada.

Concluidas las fases pertinentes del proceso ordinario, correspondióle al Juez Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, dictar la sentencia N 26 de 15 de abril de 1996 (Tomo VIII, fs. 3870-3992), por la cual CONDENA de manera solidaria a CLINICAS Y HOSPITALES, S. A. (Centro Médico Paitilla); al doctor RAMON CRESPO BERGES; y a las doctoras SONIA PORTILLO H. y XIOMARA M. DE ROVIRA, a pagarle a los demandantes la suma de B/.21,592.68 en concepto de daños y perjuicios materiales y la suma de B/.200,000.00, en concepto de daños y perjuicios morales, así como también el pago de las costas que fueron fijadas en la suma de B/.22,159.68.

La referida sentencia fue apelada por todos los demandados y una vez surtidos los trámites procesales, el Primer Tribunal Superior de Justicia, previo un análisis del origen del proceso y de las argumentaciones de las partes, profirió la sentencia de fecha 5 de agosto de 1998 (fs. 4257-4303), mediante la cual REFORMA la sentencia N 26 de 15 de abril de 1996, dictada por el Juzgado Séptimo del Circuito de lo Civil en el sentido de variar la condena en concepto de daños y perjuicios morales, la cual redujo a la suma de B/.100.000.00, así como las costas de primera instancia que se fijaron en B/.18,409.26, declarando además, no probadas las excepciones de improcedencia en la reclamación y de caso fortuito que habían sido alegadas en segunda instancia.

Es contra esta sentencia que, tanto la parte demandante como los demandados individualmente, han interpuesto recurso de casación que la Sala se avoca a analizar de manera separada.

PARTE DEMANDADA

**RECURSO DE CASACION DE SONIA PORTILLO H.
Y XIOMARA DE ROVIRA**

El recurso de casación es en el fondo y se apoya en tres causales las cuales corresponde analizar separadamente y en el orden que han sido planteadas.

La primera causal consiste en "Infracción de normas sustantivas de Derecho, por Error de Hecho sobre la Existencia de la Prueba, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida (causal contemplada en el artículo 1154 del Código Judicial)", y se apoya en cinco motivos que reproducimos a continuación:

> "Primero: El Primer Tribunal Superior de Justicia en su resolución a fojas 4302 afirmó, sin que exista Contrato alguno, que "los daños que reclama la parte actora son por culpa o negligencia en la ejecución de un contrato..." Al arribar a esta conclusión, partiendo de un hecho que no existe ni consta en el proceso, el Ad-Quem incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo cual influyó en lo dispositivo de la resolución recurrida.
>
> Segundo: El Primer Tribunal Superior de Justicia equivocadamente sostiene a fojas 4302 que entre los padres del menor y las doctoras Xiomara de Rovira y Sonia Portillo se suscribió un Contrato, no

obstante que tal contrato no consta en el proceso. Sin embargo, ignoró completamente el documento que se lee de fs. 251 a 255 del expediente, que se refiere al Contrato de Servicios de Anestesiología y Reanimación suscrito entre Clínicas y Hospitales, S.A. (Centro Médico Paitilla) y la sociedad de Anestesiólogos, S.A., así como el documento que aparece de fs. 256-258, con membrete de la sociedad de Anestesiólogos, S.A., en el que aparecen nuestras representadas como miembros de dicha sociedad; y en donde queda demostrado que nuestras representadas sólo estaban subordinadas a la Sociedad de Anestesiólogos, S.A. que fue la que le prestó el servicio a los padres del menor al ser contactada (la sociedad) por el cirujano. Al no tomar estas pruebas documentales el Ad-Quem incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba.

Tercero: El Primer Tribunal Superior de Justicia pasó por alto, pues ignoró completamente, las pruebas documentales legalmente aportadas al proceso y que aparecen de fojas 251 a 258, donde consta que quien acordó prestarle sus servicios profesionales de Anestesiología al Hospital y a los padres del menor fue la sociedad Servicios de Anestesiología y Reanimación, S.A. (Que no fue demandada). Por tanto se incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba, influyendo esa causal en lo sustancial del pleito y

Cuarto: La sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia dio por probado, en contra de las doctoras Xiomara de Rovira y Sonia Portillo, la existencia de un daño moral causado tanto al niño Enrique Malek como a los padres demandantes, sin que en el expediente conste prueba alguna que demuestre que nuestras representadas le causaron daño moral a los tres demandantes. Por tanto el Ad-Quem incurrió en Error de hecho sobre la existencia de la prueba, la cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Quinto: Como consecuencia de ese error probatorio, de hecho, el Primer Tribunal Superior de Justicia aplicó indebidamente disposiciones del Código Civil referente a la responsabilidad civil contractual y al daño moral; en cambio no aplicó, debiendo hacerlo, las normas civiles referentes a la responsabilidad extracontractual y a la ausencia de responsabilidad de nuestras representadas." (Fs.4355-4357)

Según las casacionistas, la sentencia infringió el artículo 769 del Código Judicial y los artículos 1101, 986, 1644a y 1644 del Código Civil.

Señalan las casacionistas en esta primera causal, que el Tribunal Superior, sin que exista contrato alguno, dió por probada su existencia, incurriendo en error al reconocer un hecho que no existe ni consta en el proceso.

En otro sentido indican las recurrentes que la sentencia ignoró completamente el documento que consta a fojas 251 a 255 del expediente, que consiste en el Contrato de Servicios de Anestesiología suscrito entre Clínicas y Hospitales, S. A. (Centro Médico Paitilla) y la Sociedad de Anestesiólogos, S. A., así como el documento que corre a fojas 256 - 258 de la Sociedad de Anestesiólogos, S. A. en el que las recurrentes aparecen como miembros de dicha sociedad, demostrándose con ello que sólo a ella estaban subordinadas y que fue la Sociedad de Servicio de Anestesiología y Reanimación, S. A. la que acordó prestar el servicio a los padres del menor y al Hospital, según consta de fojas 251 a 258, documentos éstos que no fueron tomados en cuenta incurriéndose por ello en error de hecho sobre la existencia de la prueba.

La causal invocada, tal como lo ha manifestado la Sala en anteriores ocasiones, se da cuando el juzgador ignora una prueba que existe en el expediente válidamente aportada, o por el contrario, cuando reconoce como existente una

prueba que no consta en el proceso, situaciones éstas que después de ser analizadas y ponderadas, no se presentan en la sentencia recurrida, la cual, según en ella misma se expresa reiteradamente, constituye un aval o confirmación en lo medular, de la sentencia de primera instancia.

Traemos esto último a colación por cuanto se advierte que la sentencia de primera instancia reconoció la existencia de un contrato consensual, por un lado, entre el médico cirujano que intervino y los padres del menor, y por otro lado, entre las anestesiólogas y los padres del menor, quedando de relieve y probado un acuerdo de voluntades, no escrito, con los profesionales mencionados, relación ésta de la que nace el contrato al cual hace referencia la sentencia recurrida del Tribunal Superior.

Para mayor claridad, transcribimos una de las reflexiones que sobre este aspecto de la contratación expuso la sentencia de primera instancia:

> "Recordemos que conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente, las obligaciones nacen de la Ley, los contratos, cuasicontratos y los actos y omisiones ilícitas en que intervenga cualquier genero de culpa o negligencia, según predica el artículo 974 del Código Civil. Luego entonces, si para el caso que nos ocupa se ha podido constatar que entre el pariente afectado y el médico cirujano hubo una contratación de servicio médico, cuyo objeto era practicar una cirugía electiva de adenoides, misma que por su propia naturaleza suponía la necesidad de unas instalaciones hospitalarias y la asistencia del servicio de anestesiología, que de paso quedó convenido iba a ser el Hospital Paitilla, quien a su vez ofreció el servicio de anestesia a través de la Sociedad de Anestesiología, S.A., resulta evidente que nació la obligación para las personas que intervinieron directa e indirectamente en ese acto, pues que además quedó demostrado que los sanitarios actuaron de manera imprudente". (Subrayas nuestras) (fs.3983-3984)

Es por lo anterior, entre otras cosas, que el Primer Tribunal hace mención de la existencia de un contrato y su ejecución, al indicar, que:

> "De otro lado, tampoco se puede alegar que la presente reclamación era improcedente por cuanto primero tenía que procederse por la vía penal y obtenerse una sentencia penal condenatoria, dado que la parte actora no está reclamando daños y perjuicios por la comisión de un delito. Los daños que reclama la parte actora son por culpa o negligencia en la ejecución de un contrato y no existe norma alguna que obligue a obtener previamente una sentencia penal en estos casos." (F.4,302)

En cuanto a la documentación que consta de fojas 251 a 258, según el recurrente fueron ignoradas completamente por el Tribunal ya que en ellos consta la relación contractual entre Clínicas y Hospitales, S. A. y la Sociedad de Anestesiólogos, S. A. con lo que se demuestra que las demandadas Xiomara de Rovira y Sonia Portillo eran subordinadas de esta sociedad que fue la que contrató la prestación del servicio a los padres del menor, agregando además, que esta sociedad no fue demandada.

En efecto, de las pruebas antes mencionadas se desprende que quien contrata con Clínicas y Hospitales, S. A. la prestación del servicio de anestesiología es la Sociedad de Anestesiólogos, S. A., quien a su vez ejecutó el servicio para los padres del menor a través de las anestesiólogas Xiomara de Rovira y Sonia Portillo a quienes el Tribunal Superior, al igual que el Tribunal de Primera Instancia, consideraron directamente responsables de los perjuicios causados a los demandantes y ello, contrario a la opinión del recurrente, previo análisis y valoración de las pruebas existentes en el proceso, incluyendo la que alega no fueron tomadas en cuenta, lo que es infundado pues, repetimos, el Tribunal de Primera Instancia valoró estas pruebas que fueron luego consideradas por el ad-

quem, como pasamos a ver.

Con respecto a la relación contractual, dijo el Tribunal de Primera Instancia:

> "...,porque fue el mismo hospital Paitilla quien contrató los servicios de anestesiología con la Sociedad de Anestesiólogos, S.A., misma que aunque sus miembros son sujetos llamados a responder por sus propios actos, no puede desconocerse que de las relaciones contractuales que dicha sociedad suscribe nacen obligaciones que deben cumplirse al amparo de la Ley, máxime en este caso que el Hospital Paitilla únicamente permite que puedan dar anestesia a los pacientes en ese centro médico, los miembros de la Sociedad de Anestesiólogos, S.A.
> .....
>
> ...Luego entonces, si para el caso que nos ocupa se ha podido constatar que entre el paciente afectado y el médico cirujano hubo una contratación de servicios médicos, cuyo objeto era practicar una cirugía electiva de adenoides, misma que por su propia naturaleza suponía la necesidad de unas instalaciones hospitalarias y la asistencia del servicio de anestesiología, que de paso quedó convenido iba a ser el Hospital Paitilla, quien a su vez ofreció el servicio de anestesia a través de la Sociedad de Anestesiólogos, S.A., resulta evidente que nació la obligación para las personas que intervinieron directa e indirectamente en este caso, pues que además quedó demostrado que los sanitarios actuaron de manera imprudente." (Fs.3982-3984)

Sobre este aspecto y la actuación negligente de los médicos demandados y basándose en lo dicho y valoración del Tribunal inferior, el Primer Tribunal Superior se manifestó en la sentencia recurrida, así:

> "Al respecto, el Tribunal se manifiesta de acuerdo con la razón en que se apoya el Juez de la instancia inferior para declarar la negligencia de los Doctores RAMON CRESPO BERGES, XIOMARA M. DE ROVIRA y SONIA PORTILLO, pues, luego de revisar el material probatorio que fue tomado en consideración en este sentido... actuaron de forma negligente..."
>
> "Acreditada la negligencia médica de los doctores RAMON CRESPO BERGES, XIOMARA M. DE ROVIRA, y SONIA PORTILLO, se impone, en base al precepto del artículo 986 del Código Judicial (sic) la condena de dichos demandados a pagar los daños y perjuicios derivados de tal accionar negligente..." (Fs. 4297-4298).

Para la Sala es claro que estamos en el presente caso frente a responsabilidades directas e indirectas de las que se debe responder. Las primeras a no dudarlo, corresponden a quienes ejecutaron directamente los hechos negligentes que causaron el daño, es decir, a las doctoras DE ROVIRA y PORTILLO y las segundas, esto es, las indirectas, corresponden a las personas a nombre de quienes actuaron, es decir, a la Sociedad de Anestesiólogos, S. A. siempre y cuando se pruebe en el proceso el grado de responsabilidad en que incurrió.

Pero es del caso, que en el presente proceso la persona jurídica antes referida ni siquiera fue demandada, por lo que mal podría la sentencia referirse a ella. No obstante, el hecho de que la demanda no se haya incoado en contra de esta sociedad, ello no implica que las demandadas DE ROVIRA y SONIA PORTILLO, demostrada su responsabilidad directa y negligente, no puedan ser condenadas a pagar los daños y perjuicios que causaron, tal como lo dispone el artículo 986 del Código Civil, que dice:

> "Artículo 986. Quedan sujetos a la indemnización de los daños y

perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas."

Luego entonces, en apreciación de la Sala, el Tribunal Superior sí tomó en cuenta y valoró las pruebas relativas a la contratación de los servicios de anestesiología suscritos por Clínicas y Hospitales con Sociedad de Anestesiólogos, S. A. que consta a fojas 251 a 255 ya que fue precisamente esta prueba la que dio origen a la participación directa de las anestesiólogas demandadas.

Hacemos alusión a esta norma que en nuestra opinión fue aplicada correctamente en la sentencia, contrario a la opinión del recurrente quien alega además, que se omitió la aplicación del artículo 1644 relativo a la responsabilidad extracontractual cuando en concepto de la Sala esta norma no es de aplicación ya que si bien las anestesiólogas, a título personal, no suscribieron ningún contrato con los demandantes, la intervención que desplegaron antes y durante la operación fue con conocimiento de los demandantes pues la intervención de ellos era imprescindible y dicha intervención causó daños de los cuales deben responder de acuerdo al Tribunal Superior, y ello es así pues se generó una responsabilidad contractual que deriva del contrato consensual celebrado verbalmente, que en el caso de los profesionales de la medicina, por la propia naturaleza de las obligaciones que encierra, siempre subyace aunque no exista un contrato escrito entre el médico y el paciente.

La existencia del referido contrato médico quedó claramente expuesto en la sentencia del Juez a-quo, sentencia que como ya quedó expresado fue avalada por el fallo del Tribunal Superior, que la Sala comparte cuando la primera de las sentencias, respecto al punto debatido, aclara la situación de la relación contractual indicando:

"...aprecia el Juzgado que no es necesario hacer mucho esfuerzo para percatarse de que, efectivamente, dentro del caso in examine medió el consentimiento de los padres del menor Malek. Basta consultar las referencias probatorias y demás antecedentes consignados en este expediente, para advertir que el paciente fue entrevistado por el cirujano y con motivo de esas consultas previas, las partes acordaron que era conveniente practicarle una operación de adenoides al paciente y así fue programada consensualmente para el día 13 de octubre de 1989, fecha ésta en que comparecieron al Salón de Operaciones del Centro Médico Paitilla, el equipo médico y el paciente Malek, precisamente, para practicar la cirugía a éste último, de modo pues que al darse ese consenso de voluntades, donde los padres de manera voluntaria llevaron al paciente al lugar convenido es porque estaban de acuerdo en que el niño fuera operado y por ende, hay que entender que dieron el consentimiento tácito, no sólo para que los médicos practicaran la cirugía programada, sino que también quedaron facultado para administrar anestesia y cualquier procedimiento que estimaran necesario.

Luego entonces, no hay duda de que si el paciente fue ingresado al Salón de Operaciones del Centro Médico Paitilla, el día 13 de octubre de 1989, para ser sometido a una operación de adenoides es porque los padres estaban de acuerdo en que ese acto se diera y por tanto, surge claro que los médicos obtuvieron el consentimiento de los padres para practicar la operación, administrar anestesia y demás procedimientos complementarios." (Fs. 3949-3950)

Ahora, para los efectos de la responsabilidad médica, independientemente de si es contractual o extracontractual, hay que tener presente que si se incurre en ella, siempre subsiste la obligación de reparar el daño causado.

Sobre esta dualidad de la responsabilidad médica el Doctor en Derecho de

la Universidad Pontificia Bolivariana, Profesor SERGIO YEPES RESTREPO, nos señala lo siguiente:

> "En lo que al ejercicio de la medicina se refiere, podemos señalar que la regla general es que se aplique la responsabilidad civil contractual, ya que lo más normal es que la prestación de un servicio médico particular está precedido de la celebración de un contrato. Sin embargo, se dan otras hipótesis frecuentes en que no existiendo vínculo obligacional, se lleve a cabo la prestación de estos servicios, ya sea que se trate de un paciente inconsciente, ya sea que el médico intervenga unilateralmente, o cuando el contrato adolece de algún vicio jurídico que afecte su validez. Igualmente aún existiendo contrato, puede ejercerse la acción personal extracontractual por parte de los herederos cuando el paciente fallece.
>
> De todas maneras podemos afirmar que la actividad del médico debe realizarse (exista o no contrato), de acuerdo a unas directrices comprendidas en las normas ético-médicas y en las técnicas señaladas por la práctica médica y, por esta razón, sus deberes y obligaciones son los mismos, tanto en el plano contractual como en el extracontractual.
>
> Sería ilógico sostener que el médico pudiera obrar negligentemente y con descuido por el hecho de no haber celebrado un contrato para la prestación de sus servicios, por el contrario su conducta debe estar en todo momento adecuada a las normas éticas que caracterizan su profesión y a los deberes que le impone su actividad médica" (La Responsabilidad Civil Médica. Biblioteca Jurídica Diké, Colombia, 1999, págs. 51-52).

En el presente caso, de acuerdo al material probatorio, la participación de las doctoras anestesiólogas no fue un acto unilateral ya que su participación fue consecuencia del servicio solicitado a la clínica por los padres del menor; de manera que tanto aquéllas como éstos, tenían conocimiento de los servicios de anestesiología que se requerían en la operación, es decir, como suele ocurrir en las relaciones contractuales, se generó una obligación preestablecida entre las anestesiólogas y los demandantes, obligación de la que al ser incumplida o cumplida negligentemente causando daños, surge la obligación de indemnizarlos.

Lo anterior, a no dudarlo, excluye la posibilidad, como pretenden las recurrentes, de enmarcar dentro de la responsabilidad extracontractual la obligación que se originó entre los demandantes y las anestesiólogas como consecuencia de su conducta negligente ya que este tipo de responsabilidad, contrario a lo explicado en líneas anteriores, "se fundamenta en la existencia de un daño con independencia de cualquier relación jurídica antecedente entre las partes de la relación obligacional subsiguiente a los perjuicios ..." (Luis Pascual Estevill. "Derecho de Daños", Editorial Bosch, Barcelona, 1995, pág. 122).

El principio jurídico anterior sobre responsabilidad extracontractual es explicado por el Abogado panameño, Profesor de Derecho, Doctor Alexander Valencia Moreno, en su obra "La Responsabilidad Jurídica del Médico y el Seguro de Responsabilidad Médica", de la siguiente manera:

> "En otras ocasiones como meridianamente apunta YZQUIERDO TOLSADA, la obligación de resarcir surge entre personas que no se encontraban vinculadas por una relación previa. Dicho de una manera deliberadamente poco técnica, las partes se conocen a través de un hecho dañoso, en la llamada responsabilidad extracontractual o delictual, verbigracia, el médico que de urgencia atiende a un paciente y no le hace la prueba pre-anestésica antes de hacer la cirugía.

En este tipo de responsabilidad el acreedor -que es la persona que sufre el daño- no está previamente determinada...
...

A primera vista la diferencia recae en la relación, en la primera una relación propia, en la segunda un daño sin relación..." (VALENCIA, pág. 48).

En atención a lo antes dicho, respaldado por la doctrina y nuestra legislación, aplicada al presente proceso, tenemos que:

1) Las partes, es decir, el menor y sus padres y las demandadas no se conocieron a través del hecho dañoso. Está probado que previa a la operación, las anestesiólogas conocieron al menor al hacerle, de manera no adecuada, y de manera negligente, una evaluación pre-anestésica, de acuerdo a los informes periciales que militan a foja 895 (Tomo II) del cuaderno de pruebas de la parte demandante. Igualmente, de acuerdo a las declaraciones rendidas por la señora Malek (fs. 1371-1393), ella conocía a la Doctora Portillo antes de iniciarse la operación;

2) La persona del paciente, es decir, el menor Malek, estaba previamente determinado y no fue atendido de urgencia. Todo lo contrario, la intervención quirúrgica estaba programada y las anestesiólogas, paciente y sus representantes legales tenían conocimiento previo del servicio médico solicitado y del servicio médico a prestar y a quién.

Sobre este hecho de relevante importancia en la determinación de si se dio o no un acuerdo de voluntades entre las anestesiólogas y los padres del menor sobre la participación y su aceptación en la operación, es importante traer a colación las manifestaciones provenientes de las propias demandadas en las declaraciones rendidas y al contestar la demanda, veamos:

DECLARACION DE LA DRA. XIOMARA DE ROVIRA:

"Conocí al paciente ROBERTO MALEK VALLADARES el 13 de octubre de 1989, ya que fui llamada del salón de operaciones del Centro Médico Paitilla para colaborar en la asistencia del paciente". (F. 1628)

DECLARACION DE LA DRA. SONIA PORTILLO:

"Conocí al paciente ROBERTO MALKE (sic) VALLADARES el día 13 de octubre de 1989, en el pasillo de entrada del salón de operaciones específicamente. El niño se encontraba en compañía de sus padres y yo me dirigí hacia ellos con la cuadrícula y me presenté como la anestesióloga que atendería al paciente." (Subrayado por la Sala) (F. 1666)
...
Como indiqué al inicio de este interrogatorio, ejecuté una evaluación al entrevistar a los padres del paciente en el pasillo de entrada del salón de operaciones". (F. 1681)
...
"La evaluación en los pacientes ambulatorios se hace de manera verbal con el paciente o con los padres del paciente si es menor. Esto lo hacemos constar en la hoja de registro de anestesia...

Esta evaluación se realiza antes de ingresar al paciente al cuarto de operaciones ya sea en el pasillo de entrada o en área de preparación del paciente". (F. 1682).

CONTESTACION DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA POR PARTE DE LAS DRAS. ROVIRA Y PORTILLO (FS. 26-33) TOMO I.

"DECIMO: ...sobre la acusación de que no se realizó evaluación pre-anestésica por el Centro Médico Paitilla al ingreso del paciente el

> 13 de octubre de 1989, también se rechaza por no ser cierto; sobre la afirmación de que el paciente fue llevado al salón de operaciones sin evaluación pre-anestésica, también se rechaza por no ser cierto, pues dicho examen se realizó.
>
> DECIMOPRIMERO: (sic) Es falso y por tanto, se niega. Los padres aprobaron plena y conscientemente la operación y la administración de la anestesia en la forma en que se hizo." (Subraya la Sala)
>
> RAZONES EN QUE LAS DEMANDADAS DRAS. ROVIRA Y PORTILLO FUNDAMENTAN SU OPOSICION A LA DEMANDA. (Fs. 30-31)
>
> "TERCERO: Al ingresar el niño MALEK al hospital, conducido por sus padres para su operación, se le hizo, tanto por el doctor RAMON CRESPO como por, y especialmente, la doctora SONIA PORTILLO H., una amplia evaluación pre-anestésica. El resultado del examen pre-anestésico consta en el historial clínico del niño en la hoja denominada Registro de Anestesia. (Ver foja 210)
>
> CUARTO: Además de ello, la doctora SONIA PORTILLO H. personalmente conversó con la madre del niño antes del traslado del menor al quirófano y le preguntó concretamente a la madre sobre las reacciones del niño a los medicamentos; si había cumplido con las horas de ayuno; si constaba entre sus antecedentes padecimientos de alergias o asma bronquial, contestando la madre categóricamente de manera negativa a todas las preguntas formuladas.
>
> QUINTO: ...constituye prueba fehaciente de que los padres, que son representantes legales del menor, no sólo tenían pleno conocimiento de la operación y de la forma en que se efectuaría, sino que dieron también su pleno consentimiento para la operación, administración de anestesia y otros procedimientos." (Subraya la Sala).

En adición a lo anterior, a fojas 439 del Tomo I del expediente, consta la manifestación del Dr. Ramón Crespo, uno de los demandados, manifestación realizada en la diligencia de Inspección y reconstrucción de los hechos en la que también estuvieron presentes las doctoras ROVIRA y PORTILLO, y en la que se da cuenta del conocimiento que tuvo del paciente a quien le prestaría sus servicios. En este sentido manifestó el Dr. Crespo, lo siguiente:

> "...el niño llegó al salón de operaciones, es más, desde que el niño llegó al hospital, porque llegaron tarde los familiares a la hora que se le había puesto, yo entré con el niño al salón de operaciones, en todo ese proceso le dije a la Dra. PORTILLO de quién se trataba y le di una historia breve de quién y qué eran los antecedentes que me había dado el familiar de este niño, así que eso quedó, yo le comenté a ella esos hechos..."

Luego entonces bajo estos parámetros, la Sala tiene que descartar que los daños ocasionados surgieron de una responsabilidad extracontractual, sino todo lo contrario.

Por otra parte, también señala el casacionista en esta causal que la sentencia del Primer Tribunal Superior dio por probada la existencia de un daño moral causado tanto al menor como a sus padres, sin que en el expediente conste ninguna prueba de que las demandadas causaron daño moral a los demandantes.

A todo lo largo de la sentencia recurrida, respaldada por las constancias procesales, quedó demostrada la negligencia con que actuaron todos los médicos demandados que intervinieron en la operación, de donde surge la responsabilidad solidaria de reparar el daño causado.

De allí que la Sala se muestra de acuerdo cuando en la sentencia se indica

que:

> "El derecho de los demandantes a ser indemnizados por los demandados, debe aclararse, en nada se afecta (referencia que se hace a los medios de defensa ejercido en esta segunda instancia por la apoderada judicial de las doctoras SONIA PORTILLO y XIOMARA M. DE ROVIRA), pues, de un lado, no se puede alegar, como lo hace la firma forense SHIRLEY & DIAZ, que se haya configurado en la causa que nos ocupa las excepciones de improcedencia en la reclamación y de caso fortuito, por cuanto que ha quedado plenamente demostrado en autos que la situación acaecida al menor ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES no se debió a un evento de naturaleza fortuita, sino al accionar negligente de los médicos tratantes de dicho menor, o sea, de los doctores SONIA PORTILLO, XIOMARA M. DE ROVIRA y RAMON CRESPO BERGES." (Fs.4301-4302)

Establecido lo anterior como premisa, es lógico entonces que surja la responsabilidad solidaria por los daños causados por todos los demandados, daños éstos que incluyen el daño moral.

El Tribunal Superior, de acuerdo a la sentencia recurrida, consideró procedente la condena efectuada por el inferior en concepto de daño moral, no obstante consideró igualmente prudente ajustar la cuantía de los mismos, reduciendo tales daños de B/.200,000.00 a B/.100.000.00, reducción que según se resalta en la sentencia, "se hace, tomando en consideración que las reacciones de las personas son impredecibles, que las obligaciones de los médicos son de medio y no de resultado y, además, por razón de que el menor ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES ha experimentado una recuperación sustancial". (F. 4302)

Observamos que el Tribunal Superior consideró procedente la condena decretada por el Juez a-quo en contra de los demandados, de pagar los daños y perjuicios, (f. 4298), lo que incluye los daños morales reclamados por los demandantes, que de acuerdo a la sentencia de primera instancia, "corresponden a los que se han configurado por la afectación de los sentimientos del paciente y sus padres, durante los momentos críticos en que experimentaron episodios de dolor, tristeza, angustia, depresión, ansiedad, etc". (f. 3889)

Con respecto a la acreditación de los daños morales, la sentencia de primera instancia manifiesta que los mismos quedaron acreditados "a través de la opinión de peritos, informes y demás documentos que recogen información valiosa indicadora de que el paciente y sus padres atravesaron por momentos verdaderamente críticos, cuando se enteraron que el paciente había presentado paro cardíaco-respiratorio, ... Fueron momentos verdaderamente críticos que causaron serios daños y afectación al paciente y sus padres". (f. 3972)

A tales efectos, a fojas 1371-1393 consta además la declaración de los señores Roberto Malek y Brenda de Malek, declaración en la que se aprecia la incertidumbre, preocupación e intranquilidad familiar en la que se vieron envueltos los demandantes y su hijo por razón de los resultados de la operación a que éste fue sometido y en la que se le originó el daño causado, daños que quedó plenamente demostrado tal cual consta, entre otros, en la documentación que milita a fojas 154, 156, 2356, 2373 a 2391, y el informe de peritos que consta de fojas 985 a 987 del expediente.

Si bien algunos autores consideran que habiéndose demostrado el daño material causado en la víctima, no se requiere probar el daño moral, para otros, en cambio, el daño moral no se presume y su reconocimiento requiere por lo menos prueba de indicios, que en el caso sub-júdice, lo constituyen los suficientes elementos probatorios con que se acreditó el daño causado a la víctima (el menor), así como la relación de parentesco de esta con los demandantes lo que hace concluir a la Sala, la existencia de afectación crítica en la que se vieron subsumidos, hechos éstos que en cualquier forma producen en el responsable del daño moral la obligación de repararlo, obligación ésta que tiene fundamento en

el artículo 1644a del Código Civil.

La situación anterior es expuesta también por el juzgador de primera instancia, cuando al referirse al daño moral, explica su punto de vista así:

> "La sola incertidumbre y sensación de miedo que produce al paciente y sus padres el riesgo de perder la vida por la misma situación crítica que se vivió, constituye prueba demostrativa de la existencia de daños morales indemnizables, que son perjuicios de carácter extrapatrimonial, hace muchas veces creer que son de imposible evaluación económica, pero que no por ello dejan de existir. En nuestro caso queda claro que la existencia y demostración de los daños ha sido verificado a través de las pruebas contenidas en el expediente, está claro que el paciente sufrió alteraciones y afectaciones en los sistemas de su cuerpo, mismas que le disminuyeron sus facultades de comportamiento, existe daños y perjuicios acreditados." (Fs. 3964-3965)

Sobre este tema resulta ilustrativo los comentarios que ROBERTO BREBBIA, Profesor de la Universidad Nacional del Litoral, Argentino, nos presenta respecto a la prueba de la existencia del daño moral y las personas legitimadas para reclamarlo y en este sentido nos indica:

> "Tratándose de los daños morales, en cambio, la prueba de su existencia surge de la sola demostración de la existencia de la conculcación de alguno de los derechos subjetivos que integran el patrimonio moral de un sujeto..." ("El Daño Moral. R.BREBBIA, Editorial ORBIR, Argentina, Pág. 250).
>
> ".....diremos ahora que sólo pueden considerarse damnificados morales aquéllas personas unidas por una vinculación de parentesco con la víctima inmediata, lazo jurídico este que protege los sentimientos de afección de los integrantes de la familia" (Idem, pág.243).
>
> ".....El sustrato del daño moral ocasionado por una lesión recibida en la seguridad personal, en la salud e integridad física, consiste en el dolor físico o moral, la angustia, el miedo, en fin, en el sufrimiento, acarreados a la víctima por el hecho dañoso." (Idem, pág.292)

Por lo expuesto, en apreciación de la Sala, no se da el error de hecho sobre la existencia de la prueba que alega el recurrente por cuanto que se considera que en el proceso, como quedó expuesto, existen los elementos probatorios e indicios que demuestran la existencia del daño moral causado tanto al menor Enrique Malek como a sus padres, daño que como es lógico, es imputable a quién o quiénes incurrieron en culpa o negligencia en la prestación del servicio médico, conclusión ésta a la que llegó el Tribunal Superior al analizar las pruebas y los indicios y no limitándose únicamente a la culpa presunta, pues el demandante introdujo una serie de indicios que llevaron al Tribunal a concluir lo que en la doctrina se denomina "Culpa Virtual" y que para esta Sala su constatación no exime al demandante de la carga de probarla aunque sea a través de la incorporación de indicios, tal como lo sostuvo en fallo reciente, en el que al respecto dejó sentado lo siguiente:

> "La noción de culpa virtual 'no elimina el principio de la culpa probada a cargo del demandante y tampoco admite que se pueda partir de meras presunciones para establecer la responsabilidad del médico. Siempre hará falta que el demandante demuestre o incorpore al proceso una serie de graves indicios (mismos que habría que confrontar con lo que nos diga el resto de las pruebas allegadas a los autos), a partir de los cuales el juez no tenga más remedio que concluir por inferencia lógica que el daño es imputable a la culpa

de quien se encargó de la prestación del servicio, quien a su vez, durante el desarrollo del proceso, ha tenido la oportunidad de probar que empleó una práctica correcta para evitar los daños ocasionados." (JOSE M. TERAN y GLORIA DE TERAN -VS- BRITTANIA RODANICHE. SALA CIVIL, 25 de febrero de 2000)

En el proceso, la conducta negligente y culposa de los médicos demandados quedó probada en autos tal cual lo indica la sentencia del Tribunal Superior a fojas 4,297, después de avalar la ponderación realizada por el Juez a-quo al material probatorio incorporado y sobre el que estimó lo siguiente, estimación que también es compartida por la Sala:

"...que de las pruebas apreciadas y valoradas de cara a los hechos y las razones o motivos de la negativa de las personas demandadas, quedó acreditado de que aún cuando el paciente fue evaluado pre-anestésicamente antes de ser sometido a anestesia general y que hubo inicio del procedimiento de la programada cirugía de adenoides, lo cierto es que durante el momento en que se sucedieron los hechos, el equipo médico tratante manejó el criterio de que el paciente presentó paro cardíaco-respiratorio, pese a la complicación y cuadro crítico que se había presentado. Indudablemente, que esa decisión unilateral y espontánea de los galenos de decidir continuar el procedimiento, debe ser calificada de imprudente y negligente, ya que si el criterio que se manejaba en esos momentos y así lo dejaron consignado en la Historia Clínica y en sendas certificaciones que se expidieron días después del hecho, ratificando la impresión de que el paciente había presentado paro cardíaco-respiratorio, es evidente que se configuró una actuación imprudente, desde el mismo momento en que muy a pesar de la señal de alerta que mandaba el organismo del paciente respecto al rechazo de los gases anestésicos, los galenos insisten en suministrarle nuevamente gases anestésicos, aunque un tipo de gas anestésico diferente disque(sic) para protegerle el cerebro. La imprudencia y negligencia se dibuja mejor cuando, primero el paciente presenta reacción negativa a los gases anestésicos, los sanitarios actúan con prontitud y afortunadamente logran recuperarlo y estabilizarlo; pero bajo la impresión diagnóstica de que dicho paciente había presentado paro cardíaco-respiratorio y aún sabiendo que estaba ante una cirugía electiva y que además, aún no se había iniciado el corte y menos la extracción de los tejidos dañados, deciden continuar, pese a que lo prudente era suspender inmediatamente y no forzar la situación, como ocurrió que después de un segundo intento, el paciente presentó bradicardia marcada y cambios en los patrones de respiración nuevamente, con la consiguiente secuela de daños y perjuicios que, probablemente se hubiese evitado de no haberse persistido en continuar. De hecho la cirugía nunca se llegó a realizar, pues que hubo necesariamente que suspenderla, pero esta vez frente a una serie de secuelas que se manifiestan como son los daños y perjuicios sufridos en el organismo y salud misma del paciente, donde además corrió peligro su propia vida, sumada también la afectación de índole moral por la que atravesaron el paciente y sus padres, circunstancias éstas que bien se hubiese podido evitar si el equipo médico actúa con prudencia y se abstiene de seguir desde la primera reacción que presentó el paciente.

Luego entonces, esa conducta imprudente y negligente fue la causa generadora de los daños y perjuicios materiales y morales que sufrió el paciente y sus padres, los cuales se manifiestan en deterioro de la salud con afectación directa de ciertos órganos del cuerpo, lo mismo que también quedaron afectados los sentimientos de dolor, tristeza, desesperación, depresión, ansiedad, temor y otros traumas de origen moral, que tienen una aceptación legal de apreciación económica. Es decir, que las pruebas apreciadas y valoradas de cara

a los hechos y demás razones explicativas de la negativa de los demandados, generan clara impresión de que el equipo médico actúo con imprudencia y negligencia, conducta esa que generó daños y perjuicios materiales y morales para el paciente y sus padres." (Fs.3974-3976)

Después de analizados los elementos a que hace referencia la primera causal del recurso de casación en el fondo, se concluye que la misma no se ha probado, así como tampoco la violación a los artículos alegados.

La segunda causal consiste en la "Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida".

Las recurrentes utilizan cuatro motivos para fundamentarla y en ellos se refieren a la prescripción de la acción para reclamar indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, excepción que fue alegada y no aprobada por el Tribunal Superior, así como también se refiere a la excepción de caso fortuito que igualmente no fue reconocida por el ad-quem, originándose, en virtud de ello, la infracción de los artículos 34d, 990 y 992 del Código Civil.

En el primero y segundo motivos se alega que la acción interpuesta contra las Doctoras Xiomara de Rovira y Sonia Portillo, al momento de presentarse la demanda (2 de octubre de 1990) y de su notificación a las demandadas (26 de octubre de 1990) y la fecha en que ocurrió el hecho y lo supo la agraviada (13 de octubre de 1989), la acción estaba prescrita por haber transcurrido en exceso el término de 1 año que es el que contempla nuestra legislación para reclamar daños y perjuicios cuando se trata de responsabilidad extracontractual.

No obstante, alega el recurrente, el Tribunal Superior desestimó la excepción previa consideración de que la reclamación formulada se origina de la ejecución de un contrato y no de responsabilidad extracontractual, dejando de aplicar la norma sustantiva relativa a esta última responsabilidad, y la norma civil relativa a la prescripción.

Al referirnos a la causal anterior ya la Sala dejó sentado que la obligación de las recurrentes, como anestesiólogas, frente a los demandantes, se originó inicialmente por cuanto que ésta venía inmersa en la contratación de los servicios hospitalarios convenida con el Hospital Paitilla, contratación que repetimos, ofrecía entre otros, los servicios de anestesiología, quedando demostrado en el proceso que éstos serían otorgados por la Sociedad de Anestesiólogos, S. A., a través de las anestesiólogas demandadas, de donde resulta evidente que la responsabilidad es contractual para las personas que intervinieron directa e indirectamente en el acto.

Pero además de ello, en el proceso existe, como ya lo analizamos con anterioridad, prueba suficiente de aceptación por las propias anestesiólogas de su participación en la operación y de la relación previa, que tuvieron con los padres del menor y con éste antes de la operación, lo que pone en evidencia que se dio un servicio de anestesiología y que el mismo fue consentido de manera directa por quien lo dio y por quien lo recibió. Así se desprende de las pruebas aportadas al proceso y que fueron presentadas como contrapruebas por las propias demandadas, y de los documentos que dan razón del servicio de anestesiología prestado al menor Malek que forman parte de la cuadrícula del mismo, visibles a fojas 151, 153, 154, 156, 1309, 1310, entre otras.

Aclarado lo anterior y partiendo del hecho de la existencia de una relación contractual entre las demandadas y los demandantes y retomando el tema de la prescripción alegada por las recurrentes, que según ellas fue indebidamente desestimada por el Tribunal Superior, la Sala coincide con el análisis del ad-quem por cuanto que el término de prescripción aplicable en el presente caso no corresponde al de las acciones por responsabilidad extracontractual, es decir de

áquellas que surgen de la culpa o negligencia de que trata el artículo 1644 del Código Civil y que exige recurrir primero a la vía penal y obtenerse una sentencia condenatoria, para luego, dentro de un año a partir de su ejecutoria, accionar por la vía civil, como sugieren las recurrentes.

En opinión de la Sala la acción se presentó dentro del término legal para interrumpir la prescripción de las acciones que se originan del incumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir dentro del término de siete años desde que ocurrió el hecho, término que señala el artículo 1701 del Código Civil, aplicable al presente caso dado que no existe señalado un término especial de prescripción, razón por la cual se reitera lo manifestado en la sentencia recurrida al indicar que "... tampoco se puede alegar que la presente reclamación era improcedente por cuanto primero tenía que procederse por la vía penal y obtenerse una sentencia penal condenatoria, dado que la parte actora no está reclamando daños y perjuicios por la comisión de un delito. Los daños y perjuicios que reclama la parte actora son por culpa o negligencia en la ejecución de un contrato ..." (Fs. 4,302).

En el tercer y cuarto motivo el recurrente hace alusión a que el Tribunal Superior tampoco aprobó la excepción de caso fortuito, negándose a aplicar las normas sustantivas civiles que la regulan.

Sostienen que durante el proceso operatorio se dieron hechos sobre la condición y reacción del menor que no se pudieron prever ni evitar y que pese a ello y de ser reconocidos por el ad-quem, no reconoció la excepción alegada.

Sobre los hechos relativos al caso fortuito la sentencia de primera instancia manifestó:

> "...si para el caso in examine ha quedado demostrado que se trata de un paciente menor de edad (niño de apenas 5 años) que fue llevado al Hospital Paitilla para ser sometido a cirugía electiva de adenoides, quien al recibir los gases anestésicos presentó reacciones y variaciones en los patrones de respiración, lo cual fue controlado rápidamente, pero que al mismo tiempo llevó a los galenos tratantes a la impresión diagnóstica presuntiva de que el paciente sufrió bradicardia marcada y paro cardíaco-respiratorio. Esta reacción y la consiguiente impresión de los galenos, ante las circunstancias de que primero, se intentaba practicar una cirugía electiva y segundo, se creía que el paciente había sufrido bradicardia marcada y paro cardíaco respiratorio, era de suponer que había un caso fortuito que aconsejaba la conveniencia de suspender todo intento de practicar la programada cirugía, algo delicado y grave para la salud e integridad del paciente se había hecho presente y por ende, lo prudente era suspender y no decidir en conjunto continuar, como de hecho confiesan los propios sanitarios que lo hicieron, lo cual produjo daños y perjuicios materiales y morales para el paciente y sus padres.
>
> No importa el ámbito de la responsabilidad civil en que intente enmarcarse la conducta de los sanitarios tratantes del paciente, lo fundamental es que el expediente recoge evidencias claras de que los médicos tratantes aplicaron gases anestésicos aún después que el paciente había sufrido bradicardia marcada y paro cardíaco-respiratorio, lo cual, configura un accionar imprudente generador de daños y perjuicios materiales y morales causados a la víctima y sus padres. Hay vinculación entre el accionar de los sanitarios que aplicaron nuevamente gases anestésicos al paciente después de la bradicardia marcada y el paro cardíaco-respiratorio que había sufrido los consiguientes daños y perjuicios materiales y morales causados." (Fs. 3980-3981)

El ad-quem al analizar este tema, dejó expuesto en la sentencia recurrida,

lo siguiente:

> "...se considera que, tal cual lo deja señalado el Juez A-Quo, estos últimos al decidir continuar con el procedimiento de cirugía, que era electivo, pese a que en el entendimiento de los mismos el paciente al serle inducidos los gases anestésicos había experimentando "bradicardia y paro cardíaco", actuaron de forma negligente, ya que, como también lo tiene afirmado el Sentenciador primero, ante tal eventualidad, y tomando en consideración, además, que se trataba de una cirugía electiva, el sano juicio aconsejaba suspender el procedimiento quirúrgico, o bien, consultar con los padres del menor sobre si debía o no seguirse el mismo (pues, no se puede dejar de lado, que la responsabilidad civil, en el caso que nos ocupa, es de naturaleza contractual, ya que ha quedado demostrado en autos que hubo entendimiento entre los padres del menor y el doctor RAMON CRESPO BERGES para que este último llevara a cabo la operación de adenoides en la CLINICA HOSPITAL PAITILLA)." (Fs. 4298)

De lo expuesto se desprende con claridad que una cosa fueron los hechos sobrevinientes al iniciarse la operación que podrían catalogarse de caso fortuito, como lo son que el menor experimentó "bradicardia y paro cardíaco", situación ésta si se quiere imprevista, y otra que a pesar de haberse dado estos hechos imprevistos e inevitables, aún así, y tratándose de una cirugía electiva, es decir que podía perfectamente suspenderse sin peligro para el menor, optaron los médicos continuar con la misma, causándole al paciente los daños que originaron la reclamación que nos ocupa y que no tienen que ver con evento de naturaleza fortuita, por lo que la Sala considera acertado el juicio de valor emitido por el Tribunal Superior en cuanto a la responsabilidad que le atañe a los demandados por cuanto que como bien lo indica el Autor y Profesor JAVIER TAMAYO JARAMILLO al tratar la fuerza mayor, pero aplicable también al caso fortuito en relación con la culpa del obligado, hace la siguiente distinción que la Sala igualmente comparte:

> "CULPA ADICIONAL PERO INDEPENDIENTE DEL FENOMENO. Normalmente se dice que, para que la fuerza mayor tenga poder liberatorio, debe no ser imputable a culpa del agente; sin embargo, no se hace una distinción que es importante, ya que, a veces, el fenómeno que constituye la fuerza mayor puede ser imprevisible e irresistible y no ser imputable a culpa del sujeto, pues ni en su causa ni en sus efectos hubo negligencia por parte suya; mas a la producción del daño puede concurrir otra culpa de aquel, independiente del fenómeno que se alega como fuerza mayor. En tales casos, el demandado tampoco podrá liberarse de su responsabilidad..... En este caso, será responsable aunque la fuerza mayor no le sea imputable ni en su causa ni en sus efectos; esto es lógico, ya que el daño le es imputable jurídicamente." (JAVIER TAMAYO JARAMILLO. "De la Responsabilidad Civil". Editorial Temis, Bogotá, págs. 336-337)

Por lo expuesto considera la Sala que no se ha producido la violación directa de normas sustantivas de derecho que alegan las recurrentes.

Como tercera causal las recurrentes invocan la "infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en la apreciación de la prueba, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida".

Esta causal la fundamentan en cinco motivos y señalan como infringidos los artículos 770 y 967 del Código Judicial y los artículos 986 y 34d del Código Civil.

En el primer motivo se señala que el Tribunal no apreció ni reconoció el valor de convicción que la ley le reconoce al informe y la conclusión de autorizados peritos expertos en anestesiología, Doctores Adrián Vásquez, Pedro

Santamaría, Abdiel Ovalle, Carmen Baez de Ulloa, Pedro González, Claude de López, Luis Núñez, Walter Valverde y otros, cuyas conclusiones ponen de manifiesto que el procedimiento de anestesiología empleado por las recurrentes fue el correcto, adecuado y en ningún momento negligente.

En el segundo, tercero y cuarto motivos, igual desconocimiento valorativo argumentan las recurrentes, se incurrió al no reconocerle valor de prueba a los informes periciales rendidos por los Doctores Carmen Baez, Sabatino Politis, César Pinilla, Moisés Cebedes, y la Doctora Isabel Morales, quienes concuerdan en que el niño no sufrió ningún daño cerebral; que el niño tiene antecedentes alérgicos y que al nacer fue víctima de sufrimiento fetal, situación que explica la predisposición del niño a la alergia y su poca resistencia a los medicamentos y falta de valoración a los dictámenes periciales relacionados con la condición de la madre durante el embarazo.

El análisis de las pruebas mencionadas pone de manifiesto que si bien el procedimiento de anestesiología utilizado fue el correcto y en ningún momento negligente y que el menor fue víctima de sufrimiento fetal al nacer, así como circunstancias relativas a los antecedentes clínicos de la madre durante el embarazo del menor, la Sala estima que estas opiniones como elementos de convicción quedan desvirtuadas y no tienen la fuerza suficiente para opacar otros medios de pruebas, e incluso las mismas que se estiman mal valoradas analizadas en toda su extensión y efectos y que el Tribunal tomó en consideración para arribar a su conclusión.

En este sentido, el Tribunal Superior realizó el siguiente análisis, tomando como referencia, además, el juicio valorativo del Juez a-quo:

> "Es importante anotar aquí, que el Juez A-quo deja aclarado "que ex profeso se dejó pendiente la calificación de la conducta de los médicos para ser calificada ahora en este punto", ya que dicha calificación como se recordará quedó sin definir cuando fue abordado el tema N 11 donde el Juez primario sólo hizo manifestación en torno al segundo aspecto del mismo, es decir, "que frente a la situación crítica que tuvo el paciente, el equipo médico actuó diligentemente y con buen criterio, aplicando las técnicas y tratamientos efectivos para superar y controlar las reacciones del organismo en el paciente".
>
> Ahora bien, antes de hacer el pronunciamiento sobre el tema en examen, el Juez de la instancia inferior considera necesario, igualmente, "recordar que la imprudencia es una conducta de manifestación positiva, consistente en la acción que realiza el sujeto en circunstancia en que debía abstenerse o que al realizarla, se aprecia que actuó de manera inadecuada, precipitada o prematura. La negligencia se manifiesta como una conducta omisiva, que contraviene las normas que imponen determinado comportamiento solícito, atento y sagaz, es decir, que actúa con negligencia el sujeto que no toma las debidas precauciones ante una circunstancia que la prudencia y el buen juicio sugieren ese accionar".
>
> Teniendo como norte la anterior premisa, el Juzgador de primer grado estima que, contrario a la actuación desplegada por los galenos frente a la crisis que experimentó el paciente al recibir la anestesia, existen claras referencias en el expediente de que la conducta de estos últimos al decidir "continuar con la cirugía" luego de que el menor ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES presentara bradicardia marcada y paro cardíaco-respiratorio "no fue la más adecuada".
>
> Es más, en palabras del Juez A-quo, tal decisión es considerada como una actuación "precipitada o prematura" por parte de los médicos tratantes del menor ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES, si se toma en

consideración la opinión de reputados especialistas que intervinieron en el peritaje N 1, los cuales, al dar respuesta a la primera pregunta del cuestionario, "contestaron de manera casi unánime, diciendo que se trata de una cirugía electiva, que no pone el (sic) peligro la vida del paciente si no se realiza".

Y es que, a juicio del Sentenciador del primer nivel jurisdiccional, la decisión que asumieron los demandados de continuar con el procedimiento podría haber tenido algún tipo de justificación en el supuesto de que el cirujano ya hubiese "comenzado su labor de corte y extracción de los tejidos y órganos afectados", pero no así cuando el imprevisto se presentó "antes de haber cortado los tejidos u órganos afectados, entonces la prudencia y el buen juicio aconseja la conveniencia de suspender el procedimiento".

Por todo lo anterior, el Juez de la primera instancia concluye este punto del debate suscitado entre las partes declarando, enfáticamente, "que se configuró una conducta imprudente de parte de los sanitarios cuando decidieron continuar el procedimiento. Es decir, que hubo imprudencia y negligencia de parte de los sanitarios cuando decidieron continuar el procedimiento, muy a pesar de que tenía la impresión diagnóstica de que el paciente había sufrido un paro cardíaco-respiratorio"." (Fs.4280-4282)

"Continuando con los puntos relevantes que se debaten en la presente encuesta, tenemos que la definición del tercero de ellos es resaltado como sumamente importante, de allí que se haga necesario, en el concepto del Juez A-quo, escudriñar el amplio y complejo caudal probatorio traído por las partes del proceso a propósito de establecer sí(sic) el menor ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES al serle suministrado los gases anestésicos presentó paro cardíaco respiratorio como lo alegan los demandantes, o bien, como lo señalan los demandados en sus respectivos escritos de contestación, "simplemente, lo que el paciente presentó fue una bradicardia marcada o reflejo vagal".

La primera información que a juicio del Juez A-quo se da sobre este tercer punto de discusión la trae la certificación o nota informativa suscrita por "las propias anestesiólogas que participaron del acaecimiento, mismas que ahora figuran como personas demandadas" (ver fojas 156-158 y también fojas 256-258), pues, luego de revisar el contenido de los referidos documentos privados, advierte que tales demandadas "confesaron expresamente que el menor Malek, una vez canalizada la vena "... presenta bradicardia marcada..." y en párrafo separado declaran que, "A las 6:17 a.m. el paciente presenta paro-cardíaco respiratorio...", lo cual demuestra que el paciente sufrió primero, los rigores de la bradicardia marcada y poco después, paro cardíaco-respiratorio".

Se ha de agregar que, en palabras del Juez de la primera instancia, no sólo las Doctoras anestesiólogas que atendieron al menor ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES el día 13 de octubre de 1989 dejan confesado lo anterior, sino que, igualmente existe prueba en el expediente de que el otro demandado que estuvo presente como médico cirujano del menor en cuestión, o sea, el Doctor RAMON CRESPO BERGES también hizo lo propio, cuando en nota informativa o certificación que milita a fojas 259-260 dejó señalado que "...posterior a la intubación presentó bradicardia y paro cardíaco...", confesión ésta que fue hecha de manera consciente, reflexiva, espontánea y razonada, casi ocho (8) días después de ocurrido el acaecimiento, esto es, el día 22 de octubre de 1989".

Fuera de los documentos privados de los que se ha hecho mérito, en

los que se repite, a criterio del Juez A-quo, los médicos demandados reconocen o confiesan que el menor ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES al ser inducido a anestesia general "presentó bradicardia marcada y paro cardíaco", se cuentan otros elementos probatorios de la misma naturaleza que dan similar información, entre los que menciona: el documento privado de fojas 261-262 suscrito por los Doctores FRANCISCO BRAVO y KATHYA FERGUSON G., la nota o certificación de fojas 41 que aparece firmada por el Doctor CESAR PINILLA CH. y la nota informativa del Doctor JAVIER E. DE LEON, cuya lectura es legible a fojas 264 del expediente.

Ahora bien, resulta necesario señalar, que el Juez del conocimiento en la solución del punto tercero en estudio no se limitó a apreciar los comentados elementos probatorios que lo llevaron a la convicción de que el menor hijo de los demandantes "presentó bradicardia y paro cardíaco" al serle suministrados los gases anestésicos, sino que, también su enjuiciamiento valorativo abarcó otros medios de pruebas y contrapruebas destinados a demostrar lo contrario, advirtiendo el Tribunal, en este sentido, que el Juez A-quo presta especial atención al informe pericial que rindiera en su momento la Doctora CARMEN BAES DE ULLOA, quien de manera enfática deja consignado al dar respuesta a pregunta que le fuera formulada "que bajo ninguna circunstancia el paciente presentó paro cardíaco respiratorio".

En torno a dicho informe pericial, el Juez del grado inferior, reconociendo, como cuestión previa, "que ciertamente viene basado en reglas y principios científicos que orientan la especialidad o tema sobre el que se opina", lo tilda, a renglón seguido, de incongruente, pues a su entender, el dictamen en cuestión "no se ajusta a la realidad consignada en la Historia Clínica y otras pruebas aportadas a este expediente, desde que las mismas anestesiólogas y el cirujano tratantes del paciente han dejado consignado por escrito que la inducción a la anestesia se inició a las 8:15 a.m. y a las 8:17 a.m. el mismo presenta paro cardíaco-respiratorio", razón por la cual considera, "que la opinión emitida por la perito no genera convicción suficiente para desvirtuar lo consignado en las pruebas hasta ahora apreciadas y valoradas".

Es importante anotar, por último, en relación al punto de discusión en estudio, que el Juez de la causa hace mención de que los galenos demandados en declaraciones que posteriormente rindieron en el expediente (ver fojas 941-978, fojas 1626-1645 y fojas 1664-1689) "se han retractado de varias anotaciones que hicieran en esos documentos y no sólo eso, hoy día confiesan que las notas o certificaciones informativas que a la sazón extendieron no reflejan la realidad de lo que ocurrió", esfuerzo éste que, por lo demás, a su juicio resultó del todo fallido. Esto es así, ya que en el concepto del Juez A-quo, las declaraciones comentadas de ninguna manera pueden "cambiar una realidad que quedó consignada por escrito, equivocada o no, esa fue la impresión diagnóstica que se tuvo y aún cuando en gracia de discusión se aceptara que ese diagnóstico no fue correcto, ello no cambia para nada lo que se vivió al momento en que se suscitaron los hechos base de esta controversia judicial. Hemos anunciado en esta misma sentencia que con motivo de destacar posibles errores y omisiones consignados en las anotaciones hechas por escrito, pueden surgir miles de explicaciones, pero tales explicaciones parecen vanas, pues la Historia Clínica y varios documentos que conforman este expediente, indican que la impresión diagnóstica que tuvieron los médicos tratantes fue que el paciente presentó paro cardíaco-respiratorio". (fs.4271-4274)

Finalmente, la Sala es de opinión que los peritajes y dictámenes fueron

apreciados por el Tribunal Superior en sí mismos y en relación con el resto de las demás pruebas aportadas al proceso, dando como resultado, a manera de conclusión, que lo medular para determinar la responsabilidad no es el haberse probado que el procedimiento de anestesiología utilizado por las demandadas fue el correcto y que al menor lo rodearon algunos antecedentes clínicos no comunes desde su nacimiento, sino que lo verdaderamente importante e influyente para el caso, fue la determinación negligente e imprudente que tomaron las demandadas frente a la situación crítica que sobrevino al paciente al momento de iniciarse la operación de continuar con la misma a pesar de la reacción que presentó y del contenido de su historial clínico y el de sus padres.

Por todo lo expuesto, la Sala estima que no se ha producido el error de derecho en las mencionadas pruebas y se desestima la causal invocada.

RECURSO DE CASACION DEL DOCTOR
RAMON CRESPO BERGES

El recurso de casación es en el fondo y se invoca como causal única la "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Se señalan como infringidos, los artículos 770, 872, 873, 884, 889, 891, 904, 945 y 967 del Código Judicial y los artículos 986, 988, 989, 990, 992, 1644 y 1644-A, del Código Civil.

Tanto la causal única invocada, así como la alegada infracción a disposiciones legales adjetivas y sustantivas, la sustenta el recurrente en veinticuatro motivos, que en lo medular se refieren a los siguientes aspectos:

1) Que el Tribunal Superior valoró indebidamente una serie de testimonios que daban fe de que en ningún momento el menor Malek sufrió paro cardiaco ni hubo paro respiratorio al momento de iniciarse la intervención.

2) Que el Tribunal Superior no valoró debidamente el informe relativo a la inspección judicial y reconstrucción de los hechos que demuestran que el menor no sufrió paro cardiaco; que lo ocurrido al menor fue una bradicardia lo que no indica que había que suspender el procedimiento, lo que descarta la conducta negligente o imprudente de los médicos demandados.

3) Que el Tribunal Superior tampoco valoró como debía la historia clínica del menor, ya que manifestó que la misma acredita que el paciente sufrió un paro cardiaco-respiratorio, cuando ello no es así porque en el formulario de salida N 45509 consta que el diagnóstico fue "Hipersensibilidad a la anestesia" (F. 153).

4) Que el Tribunal Superior no valoró como ordena la ley, una serie de informes periciales de médicos y especialistas que demuestran que el menor no sufrió paro cardiovascular, que no hubo falta ni negligencia, que lo ocurrido fue una bradicardia, es decir una disminución de la frecuencia cardíaca.

5) Que tampoco se valoró correctamente los dictámenes periciales sobre la inspección corporal al paciente y que demostraron que el menor no es un impedido físico ni mental, ni que sus capacidades han sido disminuidas y que en fin, los errores probatorios cometidos por el Tribunal Superior, lo llevaron a violar las normas legales, influyendo en lo dispositivo del fallo recurrido.

En primer lugar la Sala observa que al analizar el recurso de casación anterior, propuesto por las demandadas, Doctoras De Rovira y Portillo, se refirió a la causal probatoria de error de derecho en la apreciación de la prueba y en esa oportunidad, se analizaron las mismas pruebas que ahora se tildan de indebidamente valoradas, por lo que sin entrar en mayores detalles, se reitera lo manifestado por la Sala al tratar el mismo tema en el que se dejó sentada la

correcta valoración que, bajo la sana crítica, realizó el Tribunal Superior al analizar algunas de las pruebas a las que ahora hace mención el recurrente, en conjunción con otras pruebas aportadas al proceso y que determinaron la negligencia con que actuaron, no sólo el Dr. RAMON CRESPO, sino también las Doctoras De Rovira y Portillo.

Es importante insistir que de acuerdo a la sentencia de primera y segunda instancia, para los efectos de la negligencia y culpabilidad de los daños causados, no se suma a las reacciones que tuvo el menor al aplicarse la anestesia que le produjo "bradicardia y paro cardíaco", sino la decisión de los galenos de continuar con el procedimiento de cirugía pese a las reacciones que experimentó el menor, conclusión a la que llegó el ad-quem "luego de revisar el material probatorio que fue tomado en consideración en este sentido, en el que debe recordarse, quedan incluidos, el historial clínico del menor ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES y las certificaciones expedidas por los propios galenos ..." (Fs. 4297-4298).

Por otra parte, en cuanto a los daños que sufrió el menor hay que aclarar que el Tribunal Superior reconoce "que el menor ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES ha experimentado una recuperación sustancial" (f. 4302), pero ello no implica que hubo ausencia de daño que debe ser indemnizado, razón por la cual el Juez ad-quem avala, de manera expresa, la decisión del Juez de primera instancia al proferir condena en contra de las demandadas ...", condena que tuvo su sustento en el análisis valorativo de las pruebas que en base a la sana crítica lo hizo concluir de la siguiente manera:

> "...se tiene que la Historia Clínica recoge información valiosa indicadora de que el paciente presentó hipersensibilidad anestésicos, (sic) que desencadenó a una situación y condición muy delicada para la salud e integridad física del paciente, justamente durante los días inmediatamente posteriores a que sucedieron los hechos, pues que hay referencias probatorias indicadores(sic) de que el paciente atravesó por estado comatoso de aproximadamente ocho (8) minutos y posteriormente hubo de ser tratados(sic) y mantenido varios días en cuidados intensivos, lo cual para esa época mostraba la condición general de una persona incapacitada con apariencia de impedido físico; pero que gracias a los intensos tratamientos de terapia ocupacional a que fuera sometido, afortunadamente, hoy puede decirse con gran optimismo que esa condición ha mejorado muchísimo. Entonces hay que reconocer que actualmente el paciente no es un impedido físico y ello se entiende así, pero tampoco puede desconocerse que el paciente sufrió serias afectaciones físicas, que además manifestó en afectaciones morales, no sólo para él, sino que también afectó a sus padres, debido a la actuación imprudente de los médicos configurada cuando decidieron continuar después que el paciente había presentado bradicardia marcada y paro cardíaco-respiratorio, muy a pesar de que se trataba de practicar una cirugía electiva, que a propósito no había avanzado más allá de la fase inicial de inducción a la anestesia." (Fs.3986-3988)

Sobre estas pruebas, en especial sobre la prueba de la existencia de los daños evidentes que experimentó el menor, el juzgador de instancia recogió las impresiones que a continuación se transcriben:

> "Comenzamos por recordar que en puntos anteriores de esta sentencia han quedado consignados fragmentos de expresiones y frases dadas por especialistas, que examinaron el paciente, justamente, cuando atravesaba por los momentos más críticos en donde se reflejaban con mayor colorido y vivencia real, no sólo las reacciones que presentó el paciente, sino que además quedaron consignados(sic) algunas evidencias de las sintomatologías. En efecto, pueden consultarse de documentos firmados y reconocidos por los doctores Francisco Bravo y Kathya Fergunson G., mismo que milita a fojas 261-262 de este

expediente, expresiones y frases como que, el niño estaba "...inconsciente, pupilas madriáticas (había recibido atropina), ritmo cardíaco normal, respiración superficial y pulmones con escasos estertores gruesos..." Relacionado aún más con los resultados que se produjeron con motivo de los acaecimientos suscitados el día 13 de octubre de 1989, aparece expresado lo que sigue:

"Debido a las críticas condiciones del niño se decidió trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos para su mejor manejo...

De los estudios de gabinete solicitado, el electroencefalograma fue reportado moderadamente anormal, por alteraciones bioeléctricas difusas consistentes en ondas lentas".

También aparece consultable a fojas 263 de este expediente, las impresiones que ofreció el Dr. César Pinilla Ch., Neurocirujano, quien después de haber sido llamado para que examinara y evaluara el paciente, dejó consignado por escrito lo siguiente:

"...había pupilas dilatadas, signos de descerebración, clonus, babinski bilateral lo cual indicada un endema cerebral severo...

...el niño permaneció en coma por varias horas.

Su recuperación fue adecuada y, gradualmente fue mejorando, de tal forma, que sólo presentaba en los días subsiguientes una lesión de tallo cerebral isquémica...."

De igual manera está consultable a fojas 264 de este expediente, la certificación que emitió y firmó el doctor Javier E. De León, Fisiatra, mismo que además de ofrecer información indicadora de que el paciente fue tratado en el Centro de Rehabilitación para Impedidos (CRI), manifiesta lo siguiente:

"... Hubo endema(sic) cerebral, con encefalopatía hipóxico importante... presentaba fallas en tronco encefálico, sin control de tronco (caída hacia la derecha), sin equilibrio de pie, e hopotonía(sic) de miembros inferiores y ligeramente aumentado en miembros superiores. Se encontraba disfásico, indiferentes al miedo y los objetos sin agarre espontáneo y 100% dependiente en las actividades de la vida diaria".

Todas la anteriores y otras más que hay consignada(sic) a lo largo de este voluminoso expediente, constituyen verdaderas referencias probatorias indicadoras de que el paciente quedó severamente afectado como consecuencia de la conducta imprudente y negligente de los sanitarios, cuando después que el paciente presentó bradicardia marcada y paro cardíaco-respiratorio, le aplican maniobras de resucitación y esperan que se normalice y deciden todos en conjunto continuar el procedimiento. Además, las imágenes proyectadas a través de las cintas de video casetes aportadas como pruebas en este proceso, generan una impresión clara de que el paciente quedó severamente afectado en su apariencia física, pues uno de los videos casetes muestra la imagen y el comportamiento de un niño sano, con actividad normal, desplazamiento y reacciones naturales y congruentes con las de un niño propio de la edad y el otro video cassette,(sic) que proyecta imágenes del niño tomadas días después del acaecimiento de 13 de octubre de 1989, donde puede apreciarse un comportamiento distinto, pues no actuaron con independencia, tiene que ser ayudado, está como distraído, pese a que está siendo estimulado, se muestra indiferente a los requerimientos.

> Todavía más, existen referencias probatorias indicadoras de que el paciente permaneció casi por ocho (8) minutos en estado comatoso y además, fue trasladado del Salón de Operaciones directamente hasta la Unidad de Cuidados Intensivos, precisamente, porque presentaba una situación bastante delicada. Esa misma condición que mostraba el paciente pocos minutos después de la actuación de los médicos, muestra la causa inicial generadora de los daños y perjuicios materiales y morales que posteriormente sobrevino tanto al paciente como a sus padres, quienes con motivo de la situación crítica que vivían en esos momentos, es de suponer que se vieron afectados. Es decir, que después de ponderar en su justa dimensión todas las pruebas que hay incorporadas en este voluminoso expediente, aún bajo una visión de consenso general acerca de todas ellas, el Juzgado aprecia que las mismas generan convicción clara de que el paciente y por ende sus padres, sufrieron graves daños y perjuicios materiales y morales como consecuencia de la actuación imprudente y negligente de los sanitarios cuando decidieron continuar el procedimiento y administraron nuevamente gases anestésicos, después que el paciente había presentado paro cardíaco-respiratorio.
>
> Las pruebas apreciadas y valoradas generan impresión clara de que el paciente quedó lesionado en ciertos órganos (cerebro) que le alteraron el funcionamiento normal de los distintos sistemas que integran el cuerpo humano y además, también quedó afectado en su aspecto psíquico. Hay muestras y evidencias objetivas de las perturbaciones y trastocamiento funcional que sufrió el paciente como consecuencia del acaecimiento suscitado el día 13 de octubre de 1989, pues que no hay duda de que el paciente quedó afectado física y psíquicamente y por ende, también sus padres en el aspecto moral. La existencia y demostración de los daños y perjuicios materiales y morales sufridos es incuestionable, hay pruebas palpables de que se produjeron lesiones y perturbaciones al paciente y por ende, también los padres atravesaron por momentos difíciles que afectaron sus sentimientos.” (Fs.3960-3964)

Como se indicara anteriormente, no obstante que las condiciones de salud del menor mejoraron, no puede por ello desconocerse que a raíz de la operación el menor fue afectado tal cual lo informa el Doctor ROBERTO BENDAÑA (f. 1704) al rendir dictamen sobre la Inspección Corporal que realizó y en el que indica:

> “Después del insulto hipóxico isquémico cerebral sufrido durante la inducción anestésica para una cirugía electiva de adenoides el paciente sufrió una regresión psico-motora severa y prolongada que gradualmente fue mejorando con una terapia física, ocupacional y fonoaudióloga agresiva y la dedicación religiosa de sus padres...
>
> ...
>
> Con respecto a la salud neurológica y psicológica hacemos las siguientes aclaraciones: El niño Roberto Malek de 8 años y nueve meses de edad, diestro, sufrió un insulto severo del sistema nervioso central a la edad de 5 años con una encefalopatía severa, anóxica-isquémica secundaria o paro cardiorespiratorio durante la inducción anestésica para una cirugía electiva de las adenoides.
>
> El paciente estuvo en coma por más de 8 horas (sic) seguido de un estado de confusión que duró entre 4 y 6 semanas y una regresión psicomotora de más de 4 años..
>
> La salud física del menor MALEK VALLADARES (en la actualidad) es aceptable.....”

La Sala se ha tomado el trabajo de analizar las pruebas a que se hace

referencia en las partes del fallo transcritas y que sirvieron de base a la sentencia del Tribunal Superior y no tiene más que colegir que los supuestos errores que el recurrente le atribuye a las pruebas que se estiman mal valoradas, no tienen fuerza suficiente para desvirtuar las conclusiones a las que se llegó y por tanto se estima que el juzgador de segunda instancia no incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, ya que fueron valoradas de acuerdo a la sana crítica, ni incurrió tampoco en la violación de los artículos citados por el recurrente, situación que conlleva a desestimar la causal probatoria invocada.

RECURSO DE CASACION DE
CLINICAS Y HOSPITALES, S. A.

El recurso interpuesto es en el fondo y se invocan dos causales.

La primera causal invocada es la de "Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa".

La recurrente fundamenta esta causal en cinco motivos que pasamos a transcribir:

> "PRIMERO: Con infracción del precepto legal sustantivo que establece que los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus causahabientes, la sentencia atacada erróneamente condena a CLINICAS Y HOSPITALES, S.A. por el cumplimiento de obligaciones que en ningún momento asumió, desconociendo que las prestaciones de naturaleza médica estaban a cargo exclusivo de los doctores RAMON CRESPO BERGES, SONIA PORTILLO y XIOMARA DE ROVIRA, pues habían sido contratados para estos efectos por los padres del menor ROBERTO ENRIQUE MALEK para la práctica de una cirugía de adenoides.
>
> SEGUNDO: La sentencia impugnada responsabilizó a CLINICAS Y HOSPITALES, S.A. por los actos médicos ejecutados por los profesionales independientes, doctores RAMON CRESPO, SONIA PORTILLO Y XIOMARA DE ROVIRA, infringiendo así la regla legal que estatuye que las obligaciones que nacen de los contratos sólo tienen fuerza de ley entre las partes que lo han suscrito y deben cumplirse a tenor de los mismos.
>
> TERCERO: Para condenar a CLINICAS Y HOSPITALES, S.A. por los cargos que formulan los demandantes, la sentencia censurada sostuvo, erróneamente, que existía una presunta responsabilidad solidaria por las situaciones médicas que ejecutaron los profesionales de la medicina RAMON CRESPO BERGES, SONIA PORTILLO y XIOMARA DE ROVIRA, respecto a su paciente ROBERTO ENRIQUE MALEK, con lo cual se violó el canon legal sustantivo que preceptúa que la concurrencia de dos o más deudores no implica que cada uno de éstos debe prestar íntegramente las cosas objeto de la misma, pues para que ésto tenga lugar, es necesario que el carácter solidario de la obligación esté expresamente determinado.
>
> CUARTO: Con desconocimiento del principio legal que dispone que en las obligaciones solidarias el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente, la sentencia recurrida, por error, atribuyó una responsabilidad solidaria a CLINICAS Y HOSPITALES, S.A. por las actuaciones profesionales que ejecutaron los médicos RAMON CRESPO BERGES, SONIA PORTILLO y XIOMARA DE ROVIRA en relación con su paciente ROBERTO ENRIQUE MALEK, pese a que entre esa entidad y los citados facultativos no existían vínculos obligacionales de solidaridad.
>
> QUINTO: Las anteriores infracciones incidieron sustancialmente en la

parte dispositiva de la sentencia impugnada."
(Fs.4451-4452)

En el apartado correspondiente a las disposiciones legales infringidas, el casacionista cita los artículos 976, 1108, 1024 y 1031 del Código Civil.

En los motivos primero y segundo la recurrente sostiene que la sentencia atacada responsabilizó a CLINICAS Y HOSPITALES, S. A. por los actos médicos ejecutados por profesionales independientes, cuando ella en ningún momento asumió obligaciones de prestar atención médica a los demandantes quienes contrataron directamente con los doctores para la práctica de una cirugía de adenoides, infringiéndose así la regla legal de que las obligaciones que nacen de los contratos sólo tienen fuerza de ley entre las partes.

En relación con este punto, la sentencia recurrida estimó (f. 4298) que acreditada la negligencia y la obligación de pagar los daños causados por los Doctores RAMON CRESPO BERGES, XIOMARA DE ROVIRA y SONIA PORTILLO, esta obligación y consecuente condena es "extensiva, de igual forma, al establecimiento hospitalario donde fue internado el menor ENRIQUE MALEK VALLADARES, o sea, CLINICAS Y HOSPITALES, S. A. ..." y fundamenta su criterio en autores conocedores del tema, citando especialmente los siguientes comentarios:

> "Fuera del tema de la responsabilidad de los médicos que intervienen en una operación, está el aspecto de la responsabilidad de la Clínica u hospital donde se practica o intenta llevar a cabo la intervención quirúrgica.
>
> En cuanto a la responsabilidad de los hospitales y clínicas por los daños a los pacientes, con independencia de la que corresponde a los médicos, cirujanos o anestesiólogos, contractual o extracontractual, individual o colectiva, se ha llegado a la conclusión de que, los hospitales y las clínicas en caso de daño culposos(sic) al paciente en operaciones quirúrgicas también resultan responsables y con la obligación de responder por los daños.
>
> Así, por ejemplo se ha sostenido:
>
> "...la responsabilidad del hospital se funda en una obligación de garantía de la conducta de los dependientes o subordinados en la ejecución de la prestación o porque el deudor es responsable siempre por las diligencias de las personas o persona mediante la cual se debe realizar la prestación. La obligación de prestar asistencia médica, lleva implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general y accesoria para el paciente".
>
> (ACHAVAL ALFREDO "LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MEDICO". Buenos Aires, 1983, pág. 226)
>
> c) Dice ARTURO YUNGANO, doctor en Derecho y Médico legista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires:
>
> "Los deberes de los organismos intermedios son de naturaleza contractual y se corresponden con la naturaleza de la obligación médica de acuerdo con las circunstancias del paciente, tiempo y lugar, por lo cual éste dispone de los medios legales para exigir el cumplimiento de las prestaciones que debe brindar la institución, no sólo en cuanto a la asistencia, sino en lo que se refiere al cuidado, vigilancia y control de todo su personal - dependiente o no - y de los instrumentos que se utilicen.
>
> Con respecto a las instituciones intervinientes, si ellas contratan directamente con el paciente tendrá una responsabilidad original...

La responsabilidad de los organismos intermedios cubre también - contractualmente - los actos de sus dependientes auxiliares y los hechos causados con las cosas o por actos de los médicos que se desempeñan en aquéllos con relación de dependencia o sin ella.

.....para que se ponga en juego todo el aparato de responsabilidad es menester que exista falta médica o el incumplimiento de los deberes profesionales.

Sea cual fuere el criterio que se adopte con respecto al fundamento de la responsabilidad de los organismos intermedios: contractual puro; aplicación de la teoría del riesgo; responsabilidad por el hecho de otro; seguridad implícita y accesoria en toda clase de contrato y, en especial, en el de asistencia médica, lo cierto es que la responsabilidad es indubitable - claro está -, como se ha dicho si existe falta médica - y debe funcionar de modo solidario entre todos los obligados que directa o indirectamente han tenido intervención en el control de asistencia médica". (ARTURO RICARDO YUNGANO. "RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS MEDICOS". ED. UNIVERSIDAD, Buenos Aires, 1986, págs. 129 y 130)

d) En la citada obra de YUNGANO, se profundiza sobre el tema de la responsabilidad civil de los hospitales y clínicas en los siguientes términos que nos permitimos reproducir para mejor comprensión de este importante aspecto sobre la materia que nos ocupa:

"RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA MEDICA":

De acuerdo con el concepto que se ha formulado sobre el contrato de asistencia médica la responsabilidad de los establecimientos de tal naturaleza participa de los elementos ya apuntados: obligación preexistente, falta médica, daño, determinismo causal e imputabilidad del médico interviniente cualquiera se (sic) la relación entre éste y la institución o sea que la responsabilidad de la entidad prestataria del servicio médico corresponde al incumplimiento de una obligación contractual, ya se trate de establecimientos públicos o privados, gratuitos o pagos e idéntica responsabilidad, cabe, por ejemplo, al sindicato que es propietario de un sanatorio que brinda los servicios a sus afiliados. Ya se han estudiado las distintas teorías que justifican dicha responsabilidad, sea que el establecimiento haya contratado directamente con el paciente o no y en cuanto al criterio para juzgar tal responsabilidad por los actos de sus dependientes o de sus concurrentes; pero la responsabilidad de los establecimientos asistenciales juega siempre, como consecuencia de un incumplimiento médico demostrados(sic). Y para ello debe atenderse a los presupuesto(sic) del art. 512 que enuncia el concepto de culpa y las pautas para su valoración. En síntesis, y más allá de los distintos criterios que procuran determinar la naturaleza de la responsabilidad de tales establecimientos, puede afirmarse que la misma se fundamenta sobre una obligación de garantía de la conducta de los dependientes, subordinados o sustitutos en la ejecución de la prestación o del hecho de la persona que emplea en el cumplimiento de su obligación, existiendo además, una obligación de seguridad implícita en asistencia médica por medio de los profesionales de su cuerpo médico respondiendo a la entidad por los daños ocasionados por el médico por imprudencia o falta de diligencia que el caso requería.

Así se ha sostenido que si el médico elegido por la clínica incurre en incumplimiento de sus deberes inherentes a la profesión, tal omisión compromete la responsabilidad contractual de aquella, pues para la institución importa, a su vez, el incumplimiento de la

obligación primordial asumida en el contrato.

...ha sostenido que la responsabilidad contractual del hospital nace del incumplimiento de las obligaciones contraídas frente al paciente y a su familia, cuando aquéllos aceptan la internación para su atención médica (9 de abril de 1981). A su vez, la responsabilidad del sanatorio se origina en la culpa obligacional y se extiende al comportamiento del personal auxiliar que colabora en la clínica, sea por el incumplimiento también de fuente contractual de suministran(sic) servicios que otorguen seguridad al paciente sea porque la institución -sanatorio, mutual, etc.- responde de la diligencia de la persona mediante la cual satisface la prestación prometida; y no hay inconveniente en calificar al médico como "dependiente jurídico" de la institución, aunque falte la dependencia técnica o económica (25 de junio de 1981)." (Obra citada págs. 140 y 141)". (4299-4301)

La sentencia de primera instancia cuyo análisis y juicio valorativo, reiteramos, es avalado por el Tribunal Superior, hace recaer responsabilidad y obligaciones en Clínicas y Hospitales, S. A., en virtud de que esta persona jurídica fue quien prestó los servicios hospitalarios que fueron utilizados por el menor y al que los padres tuvieron anuentes a ser recibidos dichos servicios, incluyendo los servicios de anestesiología y otros, propios de la actividad médica.

Por ello, la Sala comparte el análisis realizado en la sentencia de primera instancia respecto a la responsabilidad de la demandada, cuando indica que "Clínicas y Hospitales, S. A. está obligada a responder de los actos imprudentes en que incurrieron los sanitarios el día 13 de octubre de 1989, desde que por una parte ofrecen el servicio de anestesia a través de una sociedad que contrata con ellos y de otra parte, Clínicas y Hospitales, S. A. tiene la potestad de ofrecer las instalaciones y demás facilidades hospitales (sic) a un grupo de médicos escogidos y seleccionados por su prestigio, de modo que no cualquier sanitario tiene acceso a las instalaciones de ese Hospital, únicamente pueden usarlas los médicos que la administración ha reconocido y aprobado".

A no dudarlo, Clínicas y Hospitales, S. A. hizo uso de esa facultad de manera tácita dentro del servicio hospitalario que prestó a los demandantes y lo jurídico es que responda junto con los que de manera negligente causaron el daño ya que la intervención de estos últimos, realizada en el hospital o centro médico en cuestión tuvo lugar gracias a la permisión de Clínicas y Hospitales, S. A. que permite la participación de ellos en sus instalaciones hospitalarias, que dicho sea de paso, cobró los servicios hospitalarios que prestó, como son los medicamentos, enfermeras, anestesiología, etc., (f. 151-144) circunstancias éstas que sin lugar a equívocos, ponen de relieve la existencia de la relación contractual entre las partes y la responsabilidad que recae en Clínicas y Hospitales, S. A. en virtud de la culpa "in elijendo" e "in vigilando" que tiene que asumir con respecto a los Doctores que intervinieron y que es la demandada quien los escoge y permite ejercer la medicina en sus instalaciones, lo que incluye no sólo al cuerpo de anestesiólogos, sino también al cirujano.

Es más, aún si estuviésemos frente a la ausencia de relación contractual entre el paciente (o sus representantes) y Clínicas y Hospitales, S. A., y que la relación existe sólo entre los primeros y el médico cirujano, no puede dejar de considerarse que la clínica obtiene un lucro con la prestación de los servicios que brinda el médico, lo que hace razonable que cargue con las consecuencias de la culpa en que pueda incurrir este profesional.

Sobre esta obligación que asumen los centros hospitalarios, para la mayoría de los autores y entendidos en materia de responsabilidad médica, se traduce en una responsabilidad directa, tal como nos explica el abogado Salvadoreño ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ en su monografía titulada "Responsabilidad en el ejercicio profesional: a propósito de la denominada malpraxis médica.", en la que indica

lo siguiente:

> "Y es que independientemente de la responsabilidad directa del médico frente a su paciente por las culpas en que incurra en su intervención profesional, existe también una responsabilidad directa de la entidad asistencial que se ha obligado a dar asistencia médica al paciente ya sea onerosa, mediante el pago de servicio o de cuota en el caso de seguros de salud u obras sociales públicas o privadas, ya sea gratuita en establecimientos hospitalarios. Esa obligación de prestar asistencia médica lleva implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general y accesoria en ciertos contratos que requieren la preservación de las personas de los contratantes contra los daños que puedan originarse en la ejecución del contrato" (fuente: correo electrónico. http:llwww.uv.es/ ripj/3salva.htm).

Por otra parte, también subsiste para Clínicas y Hospitales, S. A., aunque sea por hechos de otras personas, como los anestesiólogos que intervinieron, la obligación de seguridad por la cual debe responder al menor y sus padres.

En cuanto a esta obligación de seguridad que recae en los centros hospitalarios, que a diferencia de la responsabilidad del médico, es una obligación de resultado y no de medio, el tratadista JAVIER TAMAYO, citado por SERGIO YEPES RESTREPO, en su obra La Responsabilidad Civil Médica, nos indica lo siguiente:

> "Esa obligación es, en principio, de resultado, en relación con los daños que sufre el paciente que no ha desempeñado ningún papel activo en la producción del perjuicio, como cuando un tercero o cualquier objeto del hospital lesionan al paciente; pero es de medio en relación con los daños que éste sufra cuando ha desempeñado un papel activo en la producción del hecho, como cuando el enfermo, al levantarse, sufre una fractura. En este último caso, la víctima deberá probar alguna falla en el instrumental o una defectuosa información suministrada por el hospital."

Continúa manifestando el Doctor en Derecho, SERGIO YEPES, que:

> "Nuestra posición con relación a la obligación de seguridad es que ésta es de naturaleza del contrato de hospitalización, y por ello los daños que se causen al paciente dentro de sus instalaciones y con ocasión de su estadía allí, conllevan la responsabilidad de la clínica cuando éstos son causados sin culpa de la víctima.
>
> La institución hospitalaria tiene una obligación de seguridad en cuanto a la eficacia de los servicios asistenciales e instrumentales, por lo que 'si la entidad asistencial se ha obligado a proporcionar asistencia médica por medio de profesionales de su cuerpo médico, no sólo es responsable de que el servicio se preste sino también de que se preste en condiciones, en cuanto a la intervención del profesional y servicios auxiliares, que el paciente no sufra daño por deficiencia en la prestación prometida; en esto consiste, precisamente, la obligación de seguridad." (La Responsabilidad Civil Médica. Biblioteca Jurídica Diké, 1999, págs. 87-88)

Repetimos, en el presente caso, los servicios hospitalarios que prestó Clínicas y Hospitales, S. A., incluían el servicio de anestesiología que fue proporcionado, de acuerdo a las pruebas, de manera negligente por las demandadas Doctoras Anestesiólogas Xiomara de Rovira y Sonia Portillo y por el Doctor Ramón Crespo Berges que fue quien ordenó e intervino en la operación quirúrgica del paciente, utilizando para ello las instalaciones y servicios hospitalarios de Clínicas y Hospitales, S. A.

La participación de estos médicos no excluyó lo que la doctrina denomina la responsabilidad de seguridad que es colateral a la responsabilidad directa que tiene el centro hospitalario de prestar los servicios y que consiste en el deber de garantizar al paciente, ya como obligación de resultado, las prevenciones y cuidados destinados a evitar accidentes o minimizar los riesgos propios que acechan a quienes por tener la salud quebrantada confían en esos centros de salud, al que como en el caso presente fue remitido y recibido para ser operado el menor MALEK.

En los motivos tercero al quinto la recurrente esgrime como infracciones de la sentencia, el hecho de que en la misma se sostiene erróneamente la existencia presunta de una responsabilidad solidaria entre todos los demandados, siendo que de acuerdo a la ley, la concurrencia de dos o más deudores no implica que cada uno de ellos deba responder por la totalidad de la obligación, ya que es necesario que el carácter solidario de la obligación esté expresamente determinado.

Indica la recurrente que se le está atribuyendo responsabilidad solidaria pese a que entre ella y las facultativas demandadas, no existían vínculos obligacionales de solidaridad.

Veamos lo que con respecto a este punto dejó sentado a fojas 4300 - 4301, la sentencia recurrida:

> "Acreditada la negligencia médica de los doctores RAMON CRESPO BERGES, XIOMARA M. DE ROVIRA Y SONIA PORTILLO, se impone, en base al precepto del artículo 986 del Código Judicial, la condena de dichos demandados a pagar los daños y perjuicios derivados de tal accionar negligente, condena ésta que se hace extensiva, de igual forma, al establecimiento hospitalario donde fue internado el menor ENRIQUE MALEK VALLADARES, o sea, CLINICAS Y HOSPITALES, S.A., pues si bien, en la parte motiva de la sentencia venida en apelación no se dan las razones para justificar la condena de dicho centro hospitalario, el Tribunal hace suyo el planteamiento que sobre este tema trae la apoderada judicial de los demandantes en el escrito de oposición a los recursos de apelación bajo estudio que, para ilustración se transcribe a continuación:
>
> ".....
> Sea cual fuese el criterio que se adopte con respecto al fundamento de la responsabilidad de los organismos intermedios: contractual puro; aplicación de la teoría del riesgo; responsabilidad por el hecho de otro; seguridad implícita y accesoria en toda clase de contrato y, en especial, en el de asistencia médica, lo cierto es que la responsabilidad es indubitable-claro está-, como se ha dicho si existe falta médica-y debe funcionar de modo solidario entre todos los obligados que directa o indirectamente han tenido intervención en el control de asistencia médica" (ARTURO RICARDO YUNCANO. "RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS MEDICOS". ED. UNIVERSIDAD, Buenos Aires, 1986, págs. 129 y 130)."

Por su parte, la sentencia de primera instancia, que sirve de sustento al fallo recurrido, con respecto a la obligación solidaria que abarca a Clínicas y Hospitales, indicó:

> "Aún cuando la representación forense de Clínicas y Hospitales, S.A. sostiene, primero que dicha persona no ha incurrido en ninguna conducta o acto que le sea imputable y frente al cual tenga que responsabilizarse, tampoco sea(sic) demostrado que la Sociedad Anestesiólogos, S.A. incurrió en conducta negligente, de modo que apreciada esa realidad al amparo del ordenamiento jurídico vigente estima que no hay configurada responsabilidad para el Hospital Paitilla; pero lo cierto es que, contrario a este planteamiento, el

> Juzgado ha convenido en que Clínicas y Hospitales, S.A. debe responder indirectamente y de manera solidaria con los sanitarios por los daños y perjuicios materiales y morales que se causaron al paciente y sus padres. Ciertamente el Hospital Paitilla no contrató directamente con el paciente, pero indirecta y tácitamente contrató con él y sus padres desde que, primero ofreció las instalaciones y demás facilidades hospitalarias y segundo, porque fue el mismo Hospital Paitilla quien contrató los servicios de anestesiología con la Sociedad de Anestesiólogos, S.A., misma que aunque sus miembros son sujetos llamados a responder por sus propios actos, no puede desconocerse que de las relaciones contractuales que dicha sociedad suscribe nacen obligaciones que deben cumplirse al amparo de la Ley, máxime en este caso que el Hospital Paitilla únicamente permite que puedan dar anestesia a los pacientes en ese centro médico, los miembros de la Sociedad de Anestesiólogos, S.A." (F.3882)

En el presente caso, en el acto operatorio en el que se produjo el hecho, intervinieron varios profesionales de la medicina, como son, el médico cirujano y las anestesistas, utilizándose implementos, medicamentos e instalaciones de un centro hospitalario de propiedad de Clínicas y Hospitales, S. A., y de dicha intervención, por la actuación negligente de quienes intervinieron, resultó un daño al paciente, daño que tiene que ser indemnizado por todos los que de manera directa o indirecta intervinieron o participaron en la producción del hecho, y siendo todos profesionales de la medicina tenían la posibilidad de notar el riesgo que ofrecía el paciente y la reacción dañosa que podía sobrevenirle sobre la cual en lugar de adoptar las precauciones necesarias, optaron conjuntamente por continuar con el acto operatorio y el procedimiento de inducción de gases anestésicos en un paciente que acababa de sufrir una bradicardia y paro cardíaco-respiratorio, lo que le produjo daños en la salud. Bajo tales circunstancias, lo lógico es que el juzgador, establecido como ha quedado el nexo causal y el daño, establezca también una responsabilidad colectiva de todos. Lo cierto es que el acto se produjo con la participación de todos; esto es, médico cirujano, anestesiólogas y en un centro hospitalario y la realización del acto trajo consecuencias dañosas a varias personas, consecuencias por las que han de responder de manera solidaria desde el momento en que se trata de un solo acto dañoso en el que concurrieron varias personas en su producción, personas en las que, como indicáramos anteriormente, existen vínculos obligacionales entre ellas que generan responsabilidad frente a los que de ellos requirieron servicios médicos.

Sobre esta responsabilidad conjunta que recae en los profesionales de la medicina que intervinieron hay pruebas suficientes en el expediente y, en especial, se cuenta con la propia certificación firmada por las demandadas, Dras. SONIA PORTILLO y XIOMARA DE ROVIRA, en la que aceptan la decisión de continuar, conjuntamente con el cirujano, con la operación que resultó con hechos dañosos al paciente, certificación en la que de manera expresa dejan constancia de lo siguiente:

"...

> Se solicitó urgentemente la presencia de un cardiólogo quien opina, al examinarlo, que el paciente había recuperado su ritmo cardíaco a FC-160X1: se le administra además Bicarbonato, y decide esperar a que recupere espontáneamente. Al recuperar sus movimientos y frecuencia respiratoria y cardica, (sic) se decide, en conjunto con el cirujano, continuar con la cirugía." (F. 256) (Enfasis de la Sala)

Esta participación en conjunto da origen a lo que en la doctrina se conoce como la teoría de la responsabilidad colectiva que se tiene como subsidiaria de la responsabilidad individual y que "conduce a que el juez condene a todos los integrantes del grupo que produjo el resultado dañoso, por la imposibilidad de demostrar cuál de ellos fue el que produjo el daño, siempre y cuando se haya probado que éste fue causado por el grupo mismo." (SERGIO YEPES RESTREPO. "La

Responsabilidad Civil Médica". Colombia, 1999, pág. 71)

El citado autor fundamenta la justificación de esta teoría en la equidad, previa la comprobación del daño causado y su origen, es decir el nexo causal y explica:

> "Por ello la equidad impone que en caso de que un grupo en el curso de una acción colectiva cause daño a alguien, sin que sea posible establecer con certeza el autor del perjuicio, se deba considerar responsable a todos los participantes de la acción.
> ...
> El doctrinante Jorge Bustamante Alsino, después de analizar la responsabilidad colectiva, señala que esta teoría es perfectamente aplicable al trabajo médico en equipo. Este autor considera que si un paciente sufre un menoscabo en el cuerpo o en la salud por causa de la indebida aplicación de un equipo médico, surge la responsabilidad colectiva de todos los integrantes si no es posible identificar al autor del daño..." (ob. Cit. Pág. 71-72).

Determinada la responsabilidad colectiva existente entre los demandados, queda por determinar si ésta a la vez es de carácter solidario como lo sostiene la sentencia recurrida y que según el casacionista, tal solidaridad es atribuida erróneamente a Clínicas y Hospitales, S. A. por cuanto no existe vínculo obligacional entre los deudores ni el carácter solidario fue expresamente determinado.

En líneas anteriores hicimos referencia a la participación que tuvo cada uno de los demandados quienes tuvieron en común a un mismo acreedor (el paciente y sus padres) y quienes en equipo participaron en un mismo hecho en el que conjuntamente actuaron de manera negligente ocasionando los daños y perjuicios que son reclamados en este proceso.

Para los efectos de la solidaridad, la Sala no puede pasar por alto, en primer lugar, la participación y responsabilidad colectiva de los demandados y en segundo lugar, que ésta es ejercitada en un acto médico, por profesionales de la medicina, en un salón de operaciones en el que se pone en juego la vida de una persona, razón suficiente para que el menor descuido o negligencia sea visto, tratado y juzgado con interés especial, sin que esto sea considerado como apreciación a-priori ni adversa, sino para resaltar el hecho de que es la salud y el ser humano, como interés general, lo que se debe anteponer ante cualquier otro interés.

Es por ello que en el caso específico de la solidaridad, si bien ella es admitida sin reservas por la doctrina y la mayoría de las legislaciones, como la nuestra, en la responsabilidad extracontractual o aquiliana sin necesidad de determinación expresa, no se puede desconocer que fuera de este tipo de responsabilidad también existe la necesidad de salvaguardar el interés general cuando se dan ciertas circunstancias como por ejemplo, que varios sujetos están relacionados, aunque por diversos contratos, con un mismo acreedor a quien de manera conjunta causan un daño que proviene del mismo hecho, como puede ocurrir en las intervenciones médicas que se realizan en equipo o colectivamente y no es posible deslindar la medida en que han contribuido al daño que en conjunto causaron.

Lo anterior nos lleva a que si bien desde el punto de vista contractual la solidaridad no tiene cabida ya que el artículo 1024 del Código Civil excluye expresamente esta posibilidad, salvo que la obligación así lo determine expresamente, en el caso bajo estudio es claro que se dió la circunstancia anotada anteriormente, ya que concurrieron varios deudores que aunque adquirieron la obligación separada e indirectamente, por la naturaleza de la obligación misma, la forma en que la llevaron a cabo y la culpa o negligencia en que incurrieron al operar al menor MALEK, es de resaltar que todos convergieron en un mismo y sólo acto, y todos estaban relacionados con el mismo paciente, aunque

repetimos, por diversos contratos.

Ante tales circunstancias, la Sala tiene necesariamente que colegir que los demandados lesionaron el específico deber de cuidado que la profesión médica les exige en relación con el riesgo que la actividad conlleva por tratarse, repetimos, de la salud y la vida de una persona y si en la actividad que desplegaron se demostró que actuaron conjuntamente, sin la posibilidad de deslindar el grado de responsabilidad entre ellos, lo correcto es que los demandados respondan solidariamente. Esta situación, como es lógico, permite a los demandantes dirigirse contra cualquiera o todos los obligados, a pesar de que tratándose de responsabilidad contractual el artículo 1024 del Código excluye la presunción de solidaridad. En el caso bajo estudio habría que admitirla por la naturaleza de la relación contractual, las circunstancias especiales antes explicadas en que se causó el daño y el interés jurídico a tutelar, aunque la voluntad de las partes no lo hayan manifestado así expresamente.

La anterior posición de la Sala viene fundamentada en que hoy día existe una tendencia marcada a atenuar la rigurosa aplicación del artículo 1024 del Código Civil en lo que se refiere a dejar determinada expresamente la solidaridad en las obligaciones contractuales, si es que las responsabilidades que de ellas surgen son de naturaleza y características especiales e indeterminables por la plurabilidad de sujetos pasivos de la obligación reclamada, siendo que lo correcto y buen juicio aconseja es que el perjudicado pueda reclamar íntegramente la obligación a uno o todos los responsables, como si se tratare de una obligación solidaria.

Sobre este particular nos permitimos transcribir a continuación pronunciamientos del Tribunal Superior de España, respecto a la aplicación e interpretación del artículo 1137 del Código Civil de ese país, cuyo contenido es idéntico al artículo 1024 del nuestro:

> "....Si bien el artículo 1137 del Código Civil dice que la solidaridad procede cuando la obligación expresamente la establezca, la jurisprudencia actual reiterada y muy numerosa, no exige con rigor e imperatividad el pacto expreso de solidaridad, habiéndose de esta manera dado una interpretación correctora al precepto citado, para alcanzar y estimar la concurrencia de solidaridad tácita pasiva, admitiéndose su existencia cuando del contexto de las obligaciones contraídas se infiera su concurrencia, conforme a lo que declara en su inicio el artículo civil 1138, por quedar patente la comunidad jurídica con los objetivos que los recurrentes pretendieron al celebrar el contrato. Resulta suficiente que aparezca evidenciada la voluntad de los contratantes de haberse obligado <in solidum> (Sentencias de 26 julio de 1989 [RJ 1989, 5780], 11 octubre 1989 [RJ 1989, 6906]. 29 abril y 19 diciembre 1991 [RJ 1991, 3066 y 9409] y 26 enero 1994 [RJ 1994, 445], entre otras muy numerosas y con referencia expresa a los contratos de arrendamiento de obras, Sentencias de 7 octubre 1982 [RJ 1982, 5546] y 7 enero 1984 [RJ 1984, 340]). (STS 17 octubre 1996 [RJ 1996, 7115]). En parecidos términos STS 1 marzo 1996 (RJ 1996, 1988)." (Pág. 1356 Código Civil Español)
>
> ...
>
> "Una manera consolidada y pacífica la doctrina de esta Sala (SS. 11 de febrero 1927; 23 junio 1956 [RJ 1956, 2721]; 5 mayo 1961 [RJ 1961, 2310]; 30 marzo 1973 [RJ 1973, 1131]; 7 enero y 7 abril 1984 [RJ 1984, 340]; 26 junio 1989 [RJ 1989, 4785] Y 11 OCTUBRE 1989 [RJ 1989, 6906]), en la que se viene sustentando la tesis de que el art. 1137 del Código Civil, ha merecido una interpretación correctora de dicha drástica y rigurosa normativa en orden a exigir una expresa manifestación en favor de la solidaridad precisando una explícita constatación en favor de la solidaridad, admitiendo también su

existencia cuando las características de la obligación permiten deducir la voluntad de los interesados de crear una <obligatio> generadora de responsabilidad solidaria y de modo especial cuando se trata de facilitar y estimular la garantía de las demás partes contratantes. (STS 26 enero 1994 [RJ 1994, 445]).” (Pág. 1357 Código Civil Español)

...

“La jurisprudencia viene atenuando el rigor del último párrafo del citado precepto, bastando que aparezca de modo evidente la voluntad de los contratantes de haberse obligado <in solidum> o resulte dicha solidaridad de la propia naturaleza de lo pactado -así SSTS 12 noviembre 1955 (RJ 1956, 205), 2 MARZO 1981 (RJ 1981, 879), 14 febrero, 15 marzo y 7 octubre 1982 (RJ 1982, 1377 y 5546,) 7 y 30 abril 1983 (RJ 1983, 2104 y 2200), 26 abril 1985 (RJ 1985, 1991), 20 octubre 1986 (RJ 1986, 5943), 27 mayo 1987, etc.-. (STS 26 julio 1989 [RJ 1989, 5780]). En igual sentido las SSTS 19 julio 1989 (RJ 1989, 5761) y 13 febrero 1989 (RJ 1989, 832).” (Pág. 1357 Código Civil Español)

“...Que en materia de responsabilidad y muy especialmente cuando su causa originadora se encuentra en esos complejísimos establecimientos asistenciales dirigidos a la atención sanitaria de cada vez más amplios grupos de población, para inquirir cuál pueda ser la de alguno o varios de sus miembros, se hace preciso acudir a una interpretación no sólo lógica sino también sociológica de los preceptos reguladores de dicha institución, sin olvidar el soporte de la *aequitas* aquí siempre conveniente; y en todo momento, con la atención puesta en la realidad social de nuestro tiempo, como tiene declarado reiteradamente esta Sala, con objeto de lograr que en estos casos la aplicación del Derecho constituya el medio más idóneo para el restablecimiento del orden perturbado.” (Responsabilidad Civil Por Actos Médicos, Problemas de Prueba, Ricardo de Angel Yagüez, pág. 44) (Sentencia del Tribunal Supremo de España de 16 de diciembre de 1987).

A no dudarlo, es incuestionable que en términos generales no se pueda hablar de solidaridad y responsabilidad contractual sin que tal solidaridad haya sido expresamente acordada (en materia civil), pero como quedó expuesto, por razones jurídicas y de equidad sociológica como bien lo puntualiza la sentencia de fecha 16 de diciembre de 1987 del Tribunal Supremo de España contenida en la última de las citas transcritas líneas antes, se dan excepciones que en la doctrina han ocasionado un sinnúmero de discusiones en pro y en contra, lo que ha dado surgimiento a la responsabilidad “in solidum” en la que cada uno de los obligados lo está “por el total, sobre todo cuando, cometido el hecho perjudicial por varias personas, no es posible distinguir entre ellas la parte de cada una en la perpetración del hecho, o en sus consecuencias perjudiciales. Lógico y jurídico es que, en casos tales, cada una de ellas sea obligada a repararlo, como si ella sola lo hubiese cometido.” (DE GASPERI, LUIS. “Tratado de Derecho Civil”. II Tomo, 1964, pág. 410)

Así, se sostiene que mientras que la obligación solidaria nace de la ley, como en el caso de la responsabilidad extracontractual o por voluntad de las partes, caso de responsabilidad contractual, la obligación “in solidum”, “por el contrario, tiene lugar independientemente de toda disposición de la Ley. Nace por la fuerza misma de las cosas, impuesta por la necesidad de situaciones, cuando, en efecto, de esas situaciones surge una obligación en la que varias personas deben el todo.” (Idem. pág. 411)

De acuerdo a la doctrina y dado que en las obligaciones “in solidum” el perjudicado puede demandar por el todo a cualquiera de los deudores “sin que

rijan los efectos propios de las obligaciones solidarias; se alude así a una solidaridad imperfecta, porque no lo es en rigor en su sentido estricto. .... Desde el punto de vista práctico y de la efectividad de la satisfacción a la víctima, sus efectos son similares a los de la solidaridad plena o perfecta. Es decir, la responsabilidad incide indistintamente y por el todo sobre ambos" (Idem. IV Tomo, págs. 329-330).

Según el autor y profesor en Derecho Civil, JAVIER TAMAYO JARAMILLO, ya citado en este fallo, en el Derecho Colombiano, al igual que en nuestra legislación, la solidaridad recibe distinto tratamiento según se trata de obligaciones civiles o mercantiles y tratándose de obligación civil contractual, la solidaridad debe ser convenida entre las partes contratantes. Pero indica el autor, que tratándose de dos o más deudores de prestaciones independientes que al ejecutarse en forma conjunta causan un daño al acreedor, "cada uno de los deudores, individualmente considerado, es responsable de la totalidad de los daños sufridos por el acreedor ... En tales circunstancias, por un mecanismo que analizaremos más adelante, dicho acreedor podrá cobrar la totalidad a todos y cada uno de los deudores contractuales, acudiendo a lo que denominaremos obligaciones al todo. En el fondo se cumple la misma finalidad principal de la solidaridad, cual es la de permitir a la víctima reclamar la totalidad de la indemnización a todos o a cualquiera de los deudores". (JAVIER TAMAYO JARAMILLO. "De la Responsabilidad Civil". Tomo I. Temis, Colombia, 1999, págs. 44-45)

Esta "obligación al todo" es a la que nos referimos líneas anteriores al hacer referencia a las obligaciones "in solidum" pero que el autor las asimila, estas últimas, a las solidarias, para evitar confusiones y diferenciarlas de las "obligaciones al todo", justificando la existencia de éstas de la siguiente manera:

> "...si la solidaridad en materia civil tiene que ser establecida por la ley, por el testamento o la convención, la práctica muestra sin embargo una serie de casos en los que, sin existir solidaridad, cada uno de los deudores o de los responsables del daño debe pagar la totalidad de la indemnización como si sólo él hubiera causado el daño...
> .....
> Se ha creado así una figura de carácter pretoriano que la jurisprudencia y la doctrina francesa han denominado obligación 'in solidum', pero que nosotros preferimos denominarla 'obligación al todo', ya que nuestro artículo 1568 del Código Civil identifica los vocablos 'obligación solidaria' o in solidum..., diremos que en Colombia existen, de un lado, las obligaciones solidarias o in solidum (C.C. art. 1568) y, del otro, las obligaciones al todo.
>
> En la práctica, ambas obligaciones permiten a la víctima reclamar <u>la totalidad de la indemnización a todos o a cada uno de los responsables</u>, en la medida que, desde el punto de vista de la causalidad, cada uno de los responsables, causó la totalidad del daño" (subraya la Sala) (Idem. Págs. 45-46).

En el presente caso, como quedó dicho, se demostró la responsabilidad conjunta o colectiva de los demandados quienes, como lo decidió la sentencia recurrida, deben responder al todo de manera conjunta o separada como si fueran solidarios en los términos expuestos en el artículo 1024 en concordancia con el 1031, ambos del Código Civil, ya que, como también quedó expuesto, no se determinó el grado de responsabilidad de cada uno de los demandados, ni el eximente de culpa individual de alguno de ellos, sino por el contrario, quedó demostrada la actuación conjunta y negligente en la actividad que todos desplegaron y que causaron los daños a la salud de un paciente que reclama su indemnización.

Para la Sala lo antes expuesto tiene su razón de ser por cuanto que en este tipo de obligaciones lo que ocurre es que tanto los médicos intervinientes, así

como el centro hospitalario, llevan implícito en sus obligaciones al prestar el servicio, el deber de cuidado en relación con un mismo objeto y riesgo, deber de cuidado que al ser lesionado sin la posibilidad de deslindar la medida en que cada uno de los demandados ha contribuido al daño, lo justo es que los perjudicados puedan dirigirse contra uno o todos los obligados por la totalidad de la indemnización que corresponda.

Concluye la Sala, por las razones que se han dejado expuestas, que las violaciones a los artículos citados por la recurrente no se producen, por lo que se desestima el vicio de ilegalidad formulado en el recurso de casación que se examina.

La segunda causal invocada por la demandada CLINICAS Y HOSPITALES, S. A. consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la sentencia recurrida.

Los motivos que le sirven de fundamento son del tenor siguiente:

PRIMERO: Sin que los demandantes hubieran demostrado la presencia de actos de negligencia médica y vínculo de causalidad entre la condición de salud del paciente ROBERTO ENRIQUE MALEK y la actuación profesional de los doctores RAMON CRESPO BERGES, SONIA PORTILLO y XIOMARA DE ROVIRA, que son presupuestos de hecho de las normas en la que se funda la demanda, la sentencia recurrida erróneamente condena a CLINICAS Y HOSPITALES, S.A. sosteniendo que estaban probadas conductas culposas de los citados médicos y que por ello se justificaba imponer a todos los demandados una condena solidaria.

SEGUNDO: La sentencia impugnada, al atribuir a CLINICAS Y HOSPITALES, S.A. una responsabilidad solidaria en el reclamo que los demandantes plantean a los Dres. RAMON CRESPO BERGES, SONIA PORTILLO y XIOMARA DE ROVIRA, no apreció, como lo ordena la ley, la competencia y experiencia de los especialistas y el fundamento de las categóricas conclusiones que ellos expusieron respecto a la inexistencia de actos de negligencia médica y ausencia de nexo causal entre la conducta de los referidos galenos y la condición que experimentó el paciente ROBERTO ENRIQUE MALEK, tal como quedaron plasmadas en los dictámenes periciales que a continuación se precisan: (a) Dictamen rendido por los Doctores Mario Julio Garibaldo, Adriana Velásquez, Carmen Báez de Ulloa, Carmen Crespo y Pedro Santamaría, que milita a fojas 1032 a 1036 del Tomo II del expediente; (b) Dictamen rendido por los Doctores Marco López, Walter Valverde, Claude de López, Carmen Báez de Ulloa, Jorge Sinclair, Pedro González, Adriana Velásquez y Luis Núñez, que figuran a fojas 2918 a 2929 del Tomo VI del expediente; (c)Dictamen rendido por los Doctores Abdiel Ovalle y Adriana Velásquez, que militan a fojas 2057 a 2063 del Tomo IV del expediente; (d) Dictamen rendido por los Dres. Pedro González y Luis Núñez que militan a fojas 1395 a 1399 del Tomo III del expediente; (e) Dictamen rendido por los Doctores Adriana Velásquez y Pedro Santamaría que militan a fojas 565 a 581 del Tomo I del expediente. (f) Dictamen rendido por los Dres. Adriana Velásquez y Pedro Santamaría que figuran a fojas 649 a 656 del Tomo I del expediente. (g) Dictamen rendido por los Dres. Adriana Velásquez y Pedro Santamaría que milita a foja 643 a 648 del Tomo I del expediente.

TERCERO: La sentencia impugnada atribuyó, por error, a CLINICAS Y HOSPITALES, S.A. una responsabilidad solidaria que no tiene por las actuaciones profesionales que ejecutaron los médicos RAMON CRESPO BERGES, SONIA PORTILLO y XIOMARA DE ROVIRA respecto de su paciente ROBERTO ENRIQUE MALEK, siendo que en el expediente estaba acreditada la existencia de la empresa SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS, S.A. y de

que ésta, por sus relaciones contractuales con las Doctoras Portillo y Rovira, era la encargada de prestar el servicio de anestesiología al referido paciente MALEK, con lo cual no apreció la fuerza probatoria de documentos públicos (foja 1493 del Tomo III del expediente) y privados (fojas 251 a 255 y fojas 256 a 258 del Tomo I del expediente) que demuestran que la ausencia de vínculos obligacionales que justificaran una condena solidaria entre ellos.

CUARTO: La sentencia censurada condenó solidariamente a CLINICAS Y HOSPITALES, S.A. en el reclamo que plantean los demandantes, a pesar de que éstos no demostraron, como lo exige la ley, que los profesionales de la medicina RAMON CRESPO BERGES, SONIA PORTILLO y XIOMARA DE ROVIRA eran dependientes o subordinados de nuestra representada en una forma que dicha entidad era responsable por las actuaciones médicas desplegadas por dichos facultativos en relación con su paciente ROBERTO ENRIQUE MALEK V.

QUINTO: La sentencia recurrida condenó a CLINICAS Y HOSPITALES, S.A. al pago de la exhorbitante (sic) suma de CIEN MIL BALBOAS (B/100,000.00) en concepto de daño moral, sin que se tomara en consideración los parámetros legales preestablecidos para la tasación del daño moral, infringiendo con ello el precepto jurídico sustantivo que consagra un conjunto de factores que deben ser evaluados al determinar el monto de una indemnización por ese concepto (grado de responsabilidad, situación económica de la víctima, circunstancia del caso, etc.).

SEXTO: Las anteriores infracciones incidieron sustancialmente en la parte dispositiva de la sentencia recurrida." (Fs. 4456-4458)

Como consecuencia de los cargos que se señalan en los motivos anteriormente transcritos, la parte recurrente alega la violación de los artículos 773, inciso primero; 967, 823, inciso primero; y 845, inciso primero, todos del Código Judicial y los artículos 986; 989, inciso primero; 990, 992, inciso primero; 1100; 1644; 1645, incisos primero y cuarto; y 1644a, inciso quinto, todos del Código Civil.

En primer lugar, la parte recurrente sostiene que la sentencia de segunda instancia, al atribuirle a CLINICAS Y HOSPITALES, S. A. una responsabilidad solidaria en el presente caso, no apreció los informes periciales que se analizarán a continuación, de los cuales, en su opinión, se debió concluir que no existieron actos de negligencia médica ni nexo causal entre la conducta de los Doctores RAMON CRESPO BERGES, XIOMARA DE ROVIRA y SONIA PORTILLO y la condición que experimentó el paciente ROBERTO ENRIQUE MALEK.

La Sala debe referirse, entonces, a cada una de las pruebas mencionadas en el motivo segundo.

1) Dictamen rendido por los Doctores MARIO JULIO GARIBALDO, ADRIANA VELASQUEZ, CARMEN BAEZ DE ULLOA, CARMEN CRESPO y PEDRO SANTAMARIA (fs. 1032-1036, Tomo II): Este peritaje tomó como base lo observado en la diligencia de reconstrucción que tuvo lugar el 15 de julio de 1993, en el quirófano N 4 del Centro Médico Paitilla, lugar donde sucedieron los hechos relativos a la controversia.

En este informe los peritos llegaron a las siguientes conclusiones:

a) Que el procedimiento de inducción de la anestesia, así como las labores de monitoreo, intubación y demás, se desarrollaron en forma adecuada y responsable, acordes con las prácticas usualmente observadas en estos casos.

b) Los procedimientos terapéuticos, de reanimación y los cuidados y tratamientos que se le dispensaron al paciente MALEK, fueron prudentes y

adecuados a la condición que presentó.

c) La situación por la que atravesó el paciente MALEK no guardó ninguna relación de causa-efecto con la actuación, cuidados y atenciones médicas que le brindaron los Doctores Sonia Portillo, Xiomara de Rovira y Ramón Crespo Berges.

Considera la Sala que de acuerdo con el artículo 967 del Código Judicial, este dictamen pericial no constituye prueba de que los citados doctores no hayan incurrido en negligencia, puesto que aún aceptando que la reacción sufrida por el paciente MALEK fuera impredecible como alegan, luego de haber ocurrido la primera manifestación de la misma y tratándose de una cirugía electiva que aún no se había iniciado, lo prudente hubiera sido posponer la misma hasta que se hicieran estudios más profundos sobre dicha reacción y no continuar con dicho procedimiento.

2) Dictamen pericial rendido por los Doctores MARCO LOPEZ, WALTER VALVERDE, CLAUDE DE LOPEZ, CARMEN BAEZ DE ULLOA, JORGE SINCLAIR, PEDRO GONZALEZ, ADRIANA VELASQUEZ y LUIS NUÑEZ (fs. 2918-2929, Tomo VI): En este dictamen los peritos señalan que la reacción que presentó el paciente MALEK se debió a los medicamentos de anestesia la que, por su naturaleza, era impredecible, aclarando también que el cuadro neurológico final que presentó fue producto de un edema cerebral que no fue consecuencia de un paro cardíaco.

Concluyen manifestando que, en su opinión, "... el procedimiento de reanimación y los recursos médicos, terapéuticos y de monitoreo que recibió el paciente ROBERTO E. MALEK el 13 de octubre de 1989 fueron adecuados y prudentes, por lo que de ninguna manera puede considerársele irresponsable, negligente o de mal juicio". (Fs. 2922-2923)

Esta corporación de justicia estima que este peritaje tampoco exime de responsabilidad a los doctores demandados, puesto que se refiere a los procedimientos de reanimación que recibió el paciente luego de experimentar cada una de las dos reacciones; pero no justifica por qué se prosiguió con la intervención quirúrgica, luego de que el menor sufriera la primera de ellas.

3) Dictamen rendido por los Doctores PEDRO GONZALEZ y LUIS NUÑEZ (fs. 2057-2063, Tomo IV): En esta prueba los peritos describen el proceso de administración de anestesia que recibió el paciente MALEK, aclarando que el mismo fue sometido a una evaluación pre-anestésica "correcta y adecuada"; concluyendo que consideran que "... las acciones médicas que se adoptaron ante las condiciones que presentaba el paciente MALEK VALLADARES sí fueron adecuadas y prudentes". (F. 2062)

La Sala estima que este peritaje tampoco aporta ningún elemento nuevo de convicción en cuanto a la conducta de los profesionales de la medicina demandados en este proceso.

4) Dictamen rendido por los Doctores PEDRO GONZALEZ y LUIS NUÑEZ (fs. 1395-1399, Tomo III): Se trata de un informe pericial en el que se hace una explicación de cada una de las clases de evaluación pre-anestésica que se practican.

Además, se señala que cuando el paciente MALEK ingresó al Centro Médico Paitilla, la evaluación pre-anestésica para los pacientes ambulatorios como él, "... la practicaba el anestesiólogo correspondiente antes del ingreso del paciente para la cirugía, utilizando a este respecto la modalidad de una evaluación preanestésica (sic) verbal, desarrollada por una entrevista entre el médico y el paciente".

La Sala advierte que este dictamen no contribuye a dilucidar el punto controvertido, es decir, la existencia o no de negligencia en la actuación de los médicos demandados.

5) Dictamen rendido por los Doctores ADRIANA VELASQUEZ y PEDRO SANTAMARIA (fs. 565-581, Tomo I): En este informe los peritos explican lo que es un paciente ambulatorio y señalan que la cirugía que se le iba a practicar al menor MALEK es considerada como cirugía electiva y no de urgencia.

Continúan manifestando que si bien al menor MALEK se le realizó una evaluación pre-anestésica, no se utilizó el formulario con el que cuenta el Centro Médico Paitilla con ese propósito.

Indican también que a dicho paciente "... no se le llegó a dar una anestesia total para provocar en él un nivel de analgesia que permitiera realizar la proyectada cirugía, porque el evento se presentó inmediatamente después de la intubación sin llegar a alcanzar el plano de anestesia quirúrgica". (Fs. 573-574)

Concluyen diciendo que si el menor MALEK, "... hubiera presentado paro cardíaco, la rápida respuesta y breve duración del evento así como la estabilización de sus signos vitales junto con la evaluación de un especialista, hacía factible la continuación del procedimiento". (F. 279)

Este informe tampoco contribuye a determinar la inexistencia de negligencia médica y ausencia de nexo causal entre la conducta de los médicos demandados y la condición que experimentó el paciente MALEK. Más bien parece reconocer que el mismo sufrió un paro cardíaco pero que, debido a su rápida recuperación, se resolvió continuar con la cirugía; lo cual, en opinión de la Sala, y como también concluyeron los juzgadores de primera y segunda instancia, constituye un acto imprudente, luego de la reacción que acababa de padecer el menor.

6) Dictamen pericial rendido por los Doctores ADRIANA VELASQUEZ y PEDRO SANTAMARIA (fs. 649-656, Tomo I): En esta experticia se definen las distintas clases de pacientes, las de cirugía y también se incluyen las definiciones de otros términos médicos relacionados con este procedimiento.

En relación con el paciente MALEK los peritos manifestaron lo siguiente:

a) Que "... observó recuperación del evento antes de los cinco minutos que establece como promedio de recuperación, según la prueba de Collins, Esto es, signos vitales estables y ausencia de signos neurológicos". (F. 655)

b) Que, de acuerdo con esos resultados, sí podía continuarse con una cirugía electiva como la que requería el menor MALEK.

c) Que el paciente MALEK padeció coma medicamentoso de tipo reversible.

La Corte estima que la opinión de los peritos de que podía continuarse con la cirugía luego de que el menor sufriera la primera reacción a la anestesia, tratándose de un procedimiento quirúrgico electivo y no de urgencia, no es suficiente para demostrar que los Doctores RAMON CRESPO, XIOMARA DE ROVIRA y SONIA PORTILLO no actuaron negligentemente.

7) Dictamen pericial rendido por los Doctores ADRIANA VELASQUEZ y PEDRO SANTAMARIA (fs. 643-648): Los peritos en este informe indican lo siguiente: a) Que era necesaria la utilización de anestesia general en el paciente MALEK; b) Que no todas las personas reaccionan igual a los medicamentos anestésicos; c) Que el paciente MALEK se encontraba bien intubado; d) Que se le dio la dosificación apropiada de las drogas anestésicas; y, e) Que el paciente MALEK se encontraba adecuadamente ventilado durante la administración de la anestesia general.

Esta corporación de justicia observa que las conclusiones de este peritaje son bastante generales, razón por la cual no influyen directamente en el punto controvertido.

Una vez analizados todos los informes periciales atacados por la parte recurrente, la Sala concluye que el Tribunal Superior no incurrió en error de

derecho en cuanto a su apreciación, razón por la cual descarta este primer cargo.

Como segundo punto se plantea en el motivo tercero que la sentencia impugnada le atribuyó erradamente una responsabilidad solidaria a la sociedad recurrente, a pesar de que en el expediente estaba acreditada que la SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS, S. A., de la cual forman parte las Doctoras XIOMARA DE ROVIRA y SONIA PORTILLO, era la encargada de prestar el servicio de anestesiología al paciente MALEK y no CLINICAS Y HOSPITALES, S. A.

Como causa de este error, la parte recurrente alega que el Tribunal Superior no apreció la fuerza probatoria de los documentos consultables a foja 1493 (Tomo III) y a fojas 251-255 y 256-258 (Tomo I).

El documento que aparece a foja 1493 del expediente es una certificación de la SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS, S. A., expedida por el Registro Público. Como puede observarse, esta prueba documental no es relevante para el punto en controversia, puesto que en ella únicamente se establece la existencia de dicha sociedad y quiénes son sus directores y dignatarios.

En segundo lugar, el recurrente afirma que la sentencia de segunda instancia no le dio valor probatorio al documento consultable de fojas 251 a 256 del expediente, el cual consiste en un contrato denominado "Servicios de Anestesiología y Reanimación", suscrito entre CLINICAS Y HOSPITALES, S. A. y SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS, S. A.

La parte recurrente sostiene que este documento es prueba de que la encargada de prestar el servicio de anestesiología al menor MALEK, era esta sociedad de anestesiólogos y no CLINICAS Y HOSPITALES, S. A., razón por la cual no se debió condenar solidariamente a esta última.

En primer lugar, es preciso señalar que ya la Sala dejó aclarado el punto correspondiente a la responsabilidad solidaria que le cabe a CLINICAS Y HOSPITALES, S. A., cuando analizó la primera causal de este recurso.

Además, cabe agregar que el contenido de dicho documento revela lo siguiente:

a) Que el objeto del contrato "es la prestación de servicios profesionales en el ramo de la anestesiología y la reanimación, en beneficio de los pacientes del Centro Médico Paitilla". (F. 251)

b) Que la Sociedad de Anestesiólogos, S. A. es la encargada de administrar el Departamento de Anestesiología del Centro Médico Paitilla y que será este último el encargado de designar al Anestesiólogo Jefe.

c) Que la Sociedad de Anestesiólogos debe mantener permanentemente servicio de anestesia en el Centro Médico Paitilla.

d) Que dicha sociedad tiene la obligación de cumplir "todos los reglamentos, normas y procedimientos del Centro Médico Paitilla". (F. 252)

e) Que CLINICAS Y HOSPITALES, S. A. es la encargada de mantener el personal no médico necesario para el funcionamiento del Departamento de Anestesiología.

f) Que CLINICAS Y HOSPITALES, S. A., por intermedio del Centro Médico Paitilla, cobrará a los pacientes que reciban servicios del Departamento de Anestesiología de acuerdo a la tarifa establecida por la primera.

De todo lo anteriormente expuesto se colige la estrecha relación existente entre la Sociedad de Anestesiólogos, S. A. y CLINICAS Y HOSPITALES, S. A., lo que constituye un claro indicio de la responsabilidad que le corresponde a esta última por los actos negligentes en que incurran los médicos anestesiólogos que presten sus servicios en el Centro Médico Paitilla, como sucedió en el caso que

nos ocupa.

Por último, el recurrente se refiere al documento visible a fojas 256-258. Se trata de una certificación expedida a solicitud de los familiares del menor MALEK, por las Doctoras SONIA PORTILLO y XIOMARA DE ROVIRA, en un papel membretado de la Sociedad de Anestesiólogos, S. A.

En relación con esta prueba se debe indicar que la misma ya fue analizada cuando se resolvió la causal primera del recurso de casación interpuesto por las Doctoras SONIA PORTILLO y XIOMARA DE ROVIRA, razón por la cual no es necesario un nuevo análisis de la misma.

Ahora bien, como último cargo la parte recurrente señala en el motivo quinto que la sentencia impugnada incurrió en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, cuando condenó a la suma de cien mil balboas en concepto de daño moral, sin tomar en consideración los parámetros legales preestablecidos para su tasación en el inciso quinto del artículo 1644a del Código Civil.

Dicha disposición legal expresa lo siguiente:

"Artículo 1644a. ...

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso."

Por su parte, la resolución impugnada al referirse a este punto, manifestó lo siguiente:

"Ahora bien, no obstante que, por las razones que se han dejado anotadas, esta Superioridad avala la decisión del Juez de primera instancia al proferir condena en contra de los demandados, se considera necesario reformar la sentencia apelada a fin de ajustar el monto del daño moral (pues, en el caso de los B/.21,592.68 asignados por dicha resolución judicial en concepto de daños y perjuicios materiales, la suma en cuestión se compadece con el contenido de la prueba documental visible a fojas 1000-1016 del expediente), señalando el mismo en la suma de B/.100,000.00.

Tal ajuste, agrega el Tribunal, se hace tomando en consideración que las reacciones de las personas son impredecibles, que las obligaciones de los médicos son de medio y no de resultado y, además, por razón de que el menor ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES ha experimentado una recuperación sustancial." (F. 4302)

De lo anteriormente transcrito se colige que el Tribunal Superior, ciñéndose a lo indicado en la citada norma, la cual no establece fórmulas matemáticas sino que deja a discreción del juzgador tasar el daño moral de acuerdo a los principios de la sana crítica, resaltó los elementos que tomó en consideración para fijar el monto de la indemnización que deberían pagar los demandados a los demandantes, determinación ésta que realizó, repetimos, en base a la facultad discrecional que la ley le otorga.

No obstante, la Sala estima que si bien la víctima y sus padres vivieron momentos de angustia y desesperación que afectó sus sentimientos y alteró su vida familiar, afectación ésta que debe ser indemnizada, no se puede perder de vista que estos momentos fueron mitigados, como bien lo indica la sentencia recurrida, con la recuperación de su salud que experimentó el menor ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES.

Para la estimación del daño moral o extrapatrimonial la Sala no puede

desconocer ciertos elementos que son inherentes al mismo, ni tampoco puede desconocer que sus causas y objetivos son completamente distintos al daño patrimonial. Así, por ejemplo, con respecto al daño moral que es el que nos interesa en estos momentos, ZANNONI, autor argentino, nos explica lo siguiente:

> "... Pero, a su vez, también es justo que la reparación del agravio o daño moral esté en relación con la magnitud del perjuicio, del dolor o afección cuyo menoscabo, lesión o ataque se repara.
>
> ... Cada juez, en cada caso concreto, teniendo en consideración las circunstancias del hecho, la conducta del agente, la situación existencial, individual y social, de la víctima o damnificados, etc., condena a la reparación equitativamente (lo que no significa arbitrariamente, o en ausencia de normas jurídicas, o en base a sus puros sentimientos como erróneamente se cree); es decir, procurando que la condena realice la justicia conmutativa." (EDUARDO A. ZANNONI. "El daño en la Responsabilidad Civil". Astrea, Argentina. 1993, págs. 352-353).

Esta facultad que la ley (art. 1644a del Código Civil) ha puesto en manos del juzgador ya ha sido reconocida anteriormente por esta corporación de justicia, en los términos que se transcriben a continuación:

> "En tercer lugar el recurrente objeta el monto del daño moral al que fue condenado, indicando,.., que el juez marítimo no tomó en cuenta los parámetros que establece el artículo 1644a del Código Civil para la cuantificación de esta clase de daño.
>
> El citado artículo indica que para la reparación del daño moral el juez debe tomar en cuenta, "los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso"; lo que significa que el monto de la indemnización dependerá, en gran medida, del buen juicio del juzgador, quien, en consecuencia, deberá velar porque no se produzca un enriquecimiento ilícito a favor de la víctima, pero sin olvidar sus sufrimientos y angustias". (Sentencia de 14 de septiembre de 1999, PROCESO MARITIMO MANUEL A. MUÑOZ -VS- ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S.A.) (Enfasis de la Sala)

En vista de lo anteriormente señalado, la Sala considera que le asiste razón a la parte recurrente cuando alega que el Tribunal Superior incurrió en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, al fijar el monto del daño moral en cien mil balboas (B/.100,000.00), suma que al no haber sido establecida por los demandantes, resulta bastante elevada tomando en consideración los parámetros que establece el artículo 1644a del Código Civil.

Por tanto, habiéndose comprobado la causal invocada en cuanto a este punto y la consecuente violación de los artículos 773 del Código Judicial y 1644a del Código Civil, se debe casar la sentencia de segunda instancia y, la Corte, convertida en tribunal de instancia como lo establece el artículo 1180 del Código Judicial, debe reformar la de primera instancia únicamente en cuanto al monto de la indemnización del daño moral, el cual se fija en la suma de cincuenta mil balboas (B/50,000.00), principalmente porque de acuerdo a las constancias procesales, apreciadas bajo el principio de la sana crítica, ha quedado demostrado que el menor MALEK se ha recuperado sustancialmente, es decir, que no sufrió un daño de carácter permanente; y que la reacción inicial experimentada por el menor y que produjo la acción negligente de los demandados, constituyó un hecho impredecible.

Por las mismas consideraciones anteriores, antes de concluir la Sala debe señalar que no entrará a resolver el fondo del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por cuanto que lo objetado en este recurso es la cuantía del daño moral, la cual, según su concepto, debía ser la que estableció el juzgador

de primera instancia, es decir, la suma de B/.200,000.00.

Como se puede observar, este tema ya fue analizado por la Sala al estudiar la causal que ocupa su atención en estos momentos, lo que la exime de la necesidad de tener que dictar un nuevo pronunciamiento.

Por las razones anteriormente expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 5 de agosto de 1998; y, convertida en tribunal de instancia, REFORMA la Sentencia N 26, dictada por el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el 15 de abril de 1996, de manera que su parte resolutiva lea así:

CONDENA DE MANERA SOLIDARIA a CLINICAS Y HOSPITALES, S. A. (Centro Médico Paitilla), Sociedad inscrita al tomo 539, folio 153, asiento 116,071, Sección de Personas Mercantil del Registro Público, Persona Jurídica cuyo representante legal es el señor RODRIGO A. MORENO T., varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N 6- 15-631, vecino de esta ciudad; al DR. RAMON CRESPO BERGES, varón, mayor de edad, panameño, con cédula de identidad personal N 8-194-586,médico, vecino de esta ciudad; a la DRA. SONIA PORTILLO H., mujer, mayor de edad, panameña, con cédula de identidad personal N 8-207-1503, médico, vecina de esta ciudad y a la DRA. XIOMARA M. DE ROVIRA, mujer, mayor de edad, panameña, con cédula de identidad personal N 8-111-654, médico, vecina de esta ciudad a pagarle a los señores ROBERTO ENRIQUE MALEK, varón, panameño, casado, mayor de edad, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal N 2-80-986 y BRENDA VALLADARES DE MALEK, mujer, nicaragüense, casada, mayor de edad, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal N E-8-48330, quienes actuaron en nombre propio y en representación de su menor hijo ROBERTO ENRIQUE MALEK VALLADARES, las siguientes sumas de dinero:

a) La suma de VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS BALBOAS CON SESENTA Y OCHO CENTESIMOS (B/.21,592.68), en concepto de daños y perjuicios materiales; y

b) La suma de CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.50,000.00), en concepto de daños y perjuicios morales.

SE CONDENA a los demandados a pagar a los actores, la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO BALBOAS CON NOVENTA CENTESIMOS (B/.12,238.90) en concepto de costas, de conformidad con los artículos 1055 num. 1 y 2 y 1057 del Código Judicial, más los gastos del proceso los cuales serán liquidados a través de la Secretaría.

Por ejecutoriada esta resolución y cumplido todos los actos complementarios para su ejecución, se ordena el archivo del expediente, previa anotación de su salida en el Libro respectivo.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARÍA LUISA BRAVO ZÚÑIGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A SUCESIÓN TESTADA Y/O INTESTADA DE LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO Y LOS HEREDEROS DECLARADOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado EDWIN ALBERTO MEDINA, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de nueve (9) de noviembre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se revoca la Sentencia N°28 de 20 de mayo de 1998, dictada por el Juez Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

Transcurrido el término que se le concedió a las partes para que dejaran oír sus puntos de vista acerca de la admisibilidad del recurso, siendo aprovechado por ambas partes, corresponde a la Sala decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución y la cuantía se enmarcan dentro de lo establecido por la ley para la concesión del recurso. Además, en cuanto a la exigencia establecida en el artículo 1165 del Código Judicial, en relación con el artículo 1159 de ese cuerpo de leyes, en materia de interposición oportuna del recurso, esto es, por el término improrrogable de diez (10) días, se observa que el mismo se formalizó en tiempo.

Se presenta una causal única de casación en el fondo, la cual es: "infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de violación directa, la cual ha influido sustancialmente en la parte dispositiva del fallo recurrido". Observa la Sala que dicha causal aparece recogida como tal, en el artículo 1154 del Código Judicial. Los motivos que sustentan la causal son seis y los mismos están redactados en forma argumentativa y con alegaciones. El recurrente debe recordar que en los motivos solamente deben expresar el cargo de injuricidad contra la sentencia de segunda instancia. El cargo de injuricidad no es más que una violación legal que se imputa a la sentencia recurrida presentado de manera concreta y específica, además es necesario que haya influido en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Además, el casacionista comete el error de citar en los motivos disposiciones legales, lo que no es propio de la estructura de este recurso, pues en el mejor de los casos deben plantearse en las disposiciones legales infringidas.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación en el fondo, interpuesto por el licenciado EDWIN ALBERTO MEDINA, para lo cual concede el término de cinco (5) días establecidos en el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FEDERICO DAVIS RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE LE SIGUE A LA SOCIEDAD CENTRAL DE GRANOS DE COCLE, S. A. (CEGRACO, S. A.). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados, RUIZ & GARCIA, apoderado judicial del señor FEDERICO DAVIS, ha intepuesto recurso de casación en el fondo contra la resolución de dos (2) de marzo de 2000, expedida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito

Judicial, en el proceso ordinario que el recurrente le sigue a CENTRAL DE GRANOS DE COCLE, S. A., (CEGRACO, S. A.).

El recurso fue admitido, por lo que se confirió a las partes el término para alegatos de fondo. Vencido dicho término, procede la Sala a decidir el recurso, previo a lo cual se dejan expuesto los antecedentes fácticos del mismo.

ANTECEDENTES

Consta en autos que el proceso dentro del cual se recurre fue instaurado por el señor FEDERICO DAVIS, quien alega que la sociedad anónima CENTRAL DE GRANOS DE COCLE, parte demandada, le produjo daños sobre un cultivo de arroz de su propiedad de 36 hectáreas, ubicado en la localidad del Guayabo, Corregimiento de El Rincón, distrito de Santa María, como consecuencia del uso o empleo por parte de la demandada de un herbicida denominado Oxifluorfen, que fue vertido en las aguas de la Ciénega que denomina La Macana, de la cual manifiesta la demandada obtenía el agua para regar su cultivo de arroz.

La parte demandada contestó, oponiéndose a la pretensión y a los hechos de la demanda y, a la vez excepciona cosa juzgada y prescripción de la acción.

Cumplidas las etapas procesales inherentes a este tipo de proceso, procedió el juzgador de la instancia a proferir la decisión del caso, mediante sentencia N° 47 D.C. de 15 de junio de 1999, en la que se declara probada la excepción de cosa juzgada y de prescripción.

Contra la resolución anterior anunció la parte demandante recurso de apelación y pruebas en segunda instancia, la cual fue surtida ante el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, el cual mediante resolución de 2 de marzo de 2000 resolvió reformar el fallo impugnado, declarando no probada la excepción de cosa juzgada declarada por el a-quo, pero confirma el fallo recurrido en cuanto al reconocimiento de la prescripción de la acción invocada por la parte demandada.

La resolución anterior, es la que es objeto del recurso de casación que ocupa la atención de la Sala y a cuya decisión se procede.

RECURSO DE CASACIÓN
Y DECISIÓN DE LA SALA

El recurso de casación que se resuelve, como se indicó, es en el fondo, y se invoca de la causal de fondo Infracción de normas sustantivas de derecho, el concepto, error de hecho sobre la existencia de la prueba."

Los motivos en los que se sustentan la causal invocada son dos, los cuales se dejan transcritos para ilustración de la Sala:

> "PRIMERO: La resolución fechada el día dos (2) de marzo de dos mil (2000), emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual se confirma la Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos, de fecha veintiocho (15) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), violó de forma directa el contenido de las pruebas Documentales, que constan en las fojas N° 97, 98, 99, 457 y 458 del proceso que nos ocupa, al no haberlas considerado, ni siquiera tomarlas en cuenta, al ignorarlas o no haber hecho alusión las mismas.
>
> SEGUNDO: La resolución recurrida al no haber hecho alusión o haber tomado en consideración o haber ignorado las pruebas que constan en las fojas N° 97, 98, 99, 457 y 458, las cuales se describen en el motivo anterior, desde luego que incurrió en error de hecho en cuanto a la existencia de las pruebas aludidas." (f.525)

De conformidad con lo expuesto en los motivos, el vicio de ilegalidad que le atribuye la parte recurrente al ad-quem, consiste en haber omitido valorar las pruebas de foja 97-99, consistente en una resolución del Instituto Nacional de Recurso Naturales Renovables, mediante el cual se declina ante el Ministerio Público y el Ministerio de Salud, la competencia para conocer del caso de la contaminación de las aguas de la ciénega "Las Macanas" en El Rincón de Santa María, Distrito de Santa María, Provincia de Herrera. Las otras pruebas a la que hace alusión el casacionista en los motivos del recurso, es la recogida en la foja 457 y 459, consistentes en certificaciones expedidas por la Fiscalía del Circuito de Herrera y el Juzgado Segundo del Circuito de herrera, Ramo Penal, respectivamente. En la primera, se hace constar que en ese despacho se instruye sumarias en averiguación, contra el supuesto delito contra la Seguridad Colectiva, en perjuicio de la Dirección Nacional del Ambiente, denunciada el 30 de septiembre de 1998 y, en la segunda, que el expediente contentivo de las sumarias en averiguación antes mencionadas, se encuentra en ese despacho para resolver recurso de apelación interpuesto dentro del incidente de controversia interpuesto contra el personero municipal del distrito de Santa María.

Por no valorar el ad-quem las pruebas arriba indicadas, considera el casacionista, llegó a la conclusión errónea de que en el presente caso había operado la prescripción de la acción, infringiendo con ello las normas contenidas en los artículos 769 del Código Judicial y 1706 del Código Civil.

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en la decisión que se impugna consideró, como se ha dejado señalado, que la oportunidad del demandante de ejercer la acción civil contra la sociedad demandada, había prescrito por haber transcurrido más de un año, término que establece la ley ordinaria para la prescripción de la acción para reclamar responsabilidad extracontractual, desde que el demandante tuvo conocimiento del hecho del cual se deriva la misma y la interposición de la demanda respectiva. En los términos que se dejan transcrito lo expuso el ad-quem:

> "En lo concerniente a la excepción de prescripción anunciada por la parte demandada, en su alegato de conclusión, el artículo 1706 del Código Civil, tiene previsto que la acción para reclamar indemnización derivada de responsabilidad extracontractual, prescribe en el término de un año, contado a partir de que lo supo el agraviado.
>
> Luego de un breve análisis de lo actuado, permite colegir que ha transcurrido en exceso el término de que habla la citada disposición. Según las constancias, el demandante se manifestó acerca del problema en febrero de 1995, presentando esta demanda en contra de la empresa GRANOS DE COCLE, S. A., hasta el 16 de julio de 1997, por lo que resulta imperativo el reconocimiento de la prescripción de la acción." (f.518-519)

Toda vez que la objeción que se formula en el presente recurso hace relación al término de prescripción de la acción civil ejercida por el demandante, por razón de los daños causados por la sociedad demandada, conviene precisar como cuestión previa el momento u oportunidad en que prescriben dichas acciones. En tal sentido, el artículo 1706 del Código Civil, norma citada como infringida por el recurrente dispone:

> "Artículo 1706. La acción civil para reclamar indemnización por calumnia o injuria o para exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el Artículo 1644 del Código Civil, prescribe en el término de un (1) año, a partir de que lo supo el agraviado.
>
> Si se iniciare oportunamente acción penal o administrativa por los hechos previstos en el inciso anterior, la prescripción de la acción civil se contará a partir de la ejecutoria de la sentencia penal o

de la resolución administrativa, según fuere el caso.

Para el reconocimiento de la pretensión civil, en ningún caso es indispensable la intervención de la jurisdicción penal."

La norma comentada, como se advierte, contempla el plazo prescriptorio para exigir la responsabilidad civil que deviene, exclusivamente, de delito contra el honor y por las obligaciones derivadas de culpa o negligencia de que trata el artículo 1644 del mismo cuerpo de leyes, que es el supuesto que encierra el caso que nos ocupa. La norma establece el término de un año para presentar la acción civil respectiva.

En cuanto al momento a partir del cual debe computarse el término prescriptorio, el mismo dependerá de que se haya o no iniciado oportunamente acción penal o administrativa por los hechos previstos en el párrafo primero de la norma comentada. Cuando no se hubiere iniciado acción penal o administrativa, primer supuesto que contempla la norma comentada, el término empezará a contarse desde el momento en que lo supo el agraviado; en caso contrario, que es el segundo supuesto, a partir de la ejecutoria de la sentencia penal o resolución administrativa, según fuere el caso.

Como se advierte del contenido de la resolución impugnada, el ad-quem toma como referencia para computar el inicio del término de prescripción de la acción civil ensayada por el recurrente, el momento en que el demandante tiene conocimiento del hecho que le afecta, es decir, febrero de 1995; no obstante, advierte la Corte de las pruebas indicadas por el recurrente como desconocidas, que en el presente caso el demandante había iniciado acción administrativa ante la Dirección General del Instituto Nacional de Recurso Naturales Renovables, la cual declinó su competencia ante el Ministerio Público y el Ministerio de Salud (f. 97-98); así como también, ante el Ministerio Público, el 30 de septiembre de 1998, según consta en la prueba de foja 457, la cual al 21 de julio de 1999, según lo hace constar el Juzgado Segundo de Circuito de Herrera a foja 458, se encontraba pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto en el incidente de controversia promovido contra el Personero Municipal del distrito de Santa María en dicho proceso penal.

De lo que viene expuesto se concluye, que el juzgador ad-quem no valoró las pruebas examinadas, que indican la existencia de un proceso penal en trámite, por lo que la prescripción de la acción civil en el presente caso, debe computarse a partir de la ejecutoria de la sentencia penal respectiva y no desde el momento en que el afectado tuvo conocimiento del hecho que sirve de base a su pretensión, como erróneamente lo consideró el ad-quem.

En virtud de lo anterior, considera la Sala que en el presente caso se ha producido el vicio de ilegalidad denunciado por la parte recurrente, toda vez que el juzgador dejó de valorar las pruebas especificada por la parte casacionista en los motivos, por lo que corresponde a esta Superioridad, actuando en consecuencia, casar la sentencia recurrida.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la Repúblico y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de dos (2) de marzo de 2000, expedida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en el proceso ordinario que FEDERICO DAVIS, mediante apoderado judicial, le sigue a CENTRAL DE GRANOS DE COCLE, S. A.; y, actuando como tribunal de instancia, previa revocatoria de la sentencia de primera instancia DECLARA no probadas las excepciones de prescripción de la acción y de cosa juzgada invocada por la demandada en el proceso dentro del cual se recurre.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO

Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO DECIMOSEXTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA Y EL JUZGADO OCTAVO DE CIRCUITO, RAMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMA EN EL PROCESO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR INCOADO POR GILBERTO VILLARREAL CONTRA MILLENNIUM TECHNOLOGY CORP. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento de esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil y el Juzgado Decimosexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en relación con la demanda de protección al consumidor interpuesta por el señor GILBERTO VILLARREAL contra la sociedad MILLENIUM TECHNOLOGY CORP.

En atención a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 93 del Código Judicial, el negocio fue remitido a esta corporación de justicia mediante Auto N 866 de 25 de mayo de 2000, dictado por el Juzgado Decimosexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

Al analizar las constancias procesales se advierte que el señor GILBERTO VILLARREAL, por intermedio de la firma forense Galindo, Arias & López, presentó demanda de protección al consumidor por vicio oculto contra la sociedad MILLENIUM TECHNOLOGY CORP. ante el Juzgado Octavo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, quien, mediante Auto N 302 fechado 2 de marzo de 2000, se abstuvo de conocer la presente demanda y ordenó la remisión del expediente al Juzgado del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, Ramo Civil, en turno, para que aprehendiera su conocimiento por razones de competencia.

La Juez Octava consideró que debía inhibirse de conocer la presente demanda, en vista de que el demandante no tenía la condición de consumidor, razón por la cual dicha controversia "... está fuera del ámbito de aplicación de la Ley 29 de 1ro. de febrero de 1996, siendo del criterio que la pretensión debe ser sometida a la consideración de la justicia ordinaria". (F. 32)

Por su parte, al recibir el expediente el Juzgado Decimosexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil dictó Auto N 866 fechado 25 de mayo de 2000, en el que discrepa de la decisión proferida por la Juez Octava, puesto que considera que el señor VILLARREAL sí tiene la condición de consumidor, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 y 29, numeral 2 de la Ley N 29 de 1996, razón por la cual concluye que "... la pretensión de la presente demanda y los hechos nos indican que se trata de una controversia entre un consumidor y un proveedor, por lo que se confirma la competencia de los Juzgados creados por la Ley No. 29 de 1996, la cual es privativa y exclusiva, conforme al artículo 141 numeral 2 lex cit, impidiendo que se pueda dar una prórroga de competencia a la jurisdicción ordinaria". (F. 39)

Planteados los argumentos de ambas juzgadoras, procede la Sala a resolver el conflicto surgido entre ellas.

De acuerdo con el libelo de demanda consultable de fojas 2 a 8, la sociedad demandada MILLENIUM TECHNOLOGY CORP. le vendió al señor GILBERTO VILLARREAL una computadora con sus respectivos accesorios, una impresora y un regulador de

voltaje, por la suma de B/2727.90. No obstante, al momento de la entrega e instalación del mencionado equipo, el mismo presentó desperfectos que no pudieron ser subsanados y que han impedido que el señor VILLARREAL pueda hacer uso de dichos bienes; razón por la cual solicita la devolución de la suma pagada, más los daños y perjuicios que le ha causado, los cuales fijó en B/3000.00.

Ahora bien, para resolver el presente conflicto de competencia debemos referirnos a la Ley N 29 de 1996, "Por la cual se dictan normas sobre la defensa de la competencia y se adoptan otras medidas", específicamente a los artículos 28 y 29, numeral 2 que a la letra dicen:

> "Artículo 28. Beneficiarios. Son beneficiarios de las normas de este título, todos los consumidores de bienes y servicios finales, y quedan obligados a su cumplimiento todos los proveedores.
>
> Los contratos o transacciones, para la compra de bienes muebles destinados al consumidor, y la prestación de servicios profesionales o técnicos, se sujetarán a las disposiciones de este título.
>
> Artículo 29. Definiciones. Para efectos de este título, los siguientes términos se entenderán así:
>
> 1. ...
> 2. Consumidor. Persona natural o jurídica que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier naturaleza.
> ...".
> (Enfasis de la Sala)

De las disposiciones anteriormente transcritas se colige que para los efectos de la Ley N 29 de 1996, consumidor es la persona natural o jurídica que adquiera de un proveedor bienes o servicios finales, es decir, que dicha definición también toma en consideración el destino de los bienes o servicios adquiridos, especificando que debe tratarse únicamente de bienes o servicios finales, esto es, que no vuelvan al mercado.

Esta misma condición sobre el destino final de los bienes se desprende del artículo 36 de la citada ley, cuando al referirse a la garantía sobre venta de bienes prescribe lo siguiente:

> "Artículo 36. Garantía de bienes. En todo contrato u operación de venta de bienes muebles nuevos, destinados para el uso personal o para el hogar, tales como artefactos electrodomésticos, mobiliarios, automóviles y otros, se entiende implícita la obligación de garantizar al comprador el funcionamiento normal y acorde con el fin para el cual son fabricados. Esta obligación será exigible siempre que, por defecto del producto o por causa imputable al fabricante, importador y proveedor, dichos bienes no funcionen adecuadamente.
> ...".
> (Enfasis de la Sala)

Ahora bien, de los hechos que le sirven de fundamento a la presente demanda se puede concluir que el señor VILLARREAL no adquirió el equipo de computadora para su uso personal, sino para integrarlo al proceso de comercialización, tal como se desprende del hecho decimoquinto en el que se manifiesta lo siguiente:

> "DECIMO QUINTO: el señor GILBERTO VILLARREAL se obligó mediante el contrato de préstamo N 07-19110028289 de 22 de enero de 1999 con el Banco General, a comprar los bienes y con el producto del trabajo que llevare acabo (sic) en la misma, sumado a otros ingresos poder pagar dicho prestamos (sic), más los intereses que generase dicho préstamo." (F. 5) (Enfasis de la Sala)

Igualmente se puede concluir de la carta fechada 17 de marzo de 1999

dirigida a la sociedad demandada, suscrita por el señor GILBERTO VILLARREAL y aportada por él como prueba al proceso, en la que manifiesta lo siguiente:

> "En el día de hoy de nada me sirvió la excusa que ofrecí a mi cliente por no tener lista las declaraciones ya que me dijo que no me preocupara que él iba a conseguir a otra persona que le pudiera hacer la declaraciones (sic) a tiempo." (F. 14)

De lo anteriormente expuesto se puede colegir que el señor VILLARREAL no puede ser considerado como consumidor en los términos que define la Ley N 29 de 1996, puesto que al adquirir el bien lo hizo con el propósito de utilizarlo en el desarrollo de una actividad profesional y no para su uso personal o familiar; razón por la cual la presente controversia se encuentra excluida del ámbito de aplicación de dicha ley, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 141 de la misma.

Por último, es preciso señalar que en relación con este punto, esta corporación de justicia ya tuvo oportunidad de pronunciarse en resolución fechada 26 de mayo de 2000, en la que manifestó lo siguiente:

> "En este caso en particular, de las constancias procesales se desprende que la parte actora compró el vehículo Mitsubishi, modelo Canter, año 1999, tipo volquete, no para su uso personal o familiar, sino para emplearlo en el desarrollo de actividades empresariales (transporte de materiales de construcción como parte de la empresa CONSTRUCCIONES R.R. RUIZ -ver fs. 22), a tal punto que, habiendo sufrido el vehículo desperfectos mecánicos, tuvo que alquilar otro camión para hacerle frente a sus compromisos profesionales.
>
> Todo indica que el demandante al adquirir el vehículo lo introdujo al mercado, integrándolo al proceso productivo, razón por la que no puede considerársele como consumidor de un bien final, conforme se define en la Ley 29 de 1996. El bien adquirido, al ser utilizado en el desarrollo de una actividad profesional, fue introducido en un proceso económico, pues se dedicó a satisfacer una necesidad empresarial y, desde ese punto de vista, no puede afirmarse que se le haya destinado al uso personal o familiar dentro del entorno social inmediato del comprador.
>
> Según lo establece el numeral 2 del artículo 141 de la Ley 29 de 1 de febrero de 1996, los tribunales especiales de la competencia que en ella se crean, conocerán exclusiva y privativamente de las causas en materia de protección al consumidor. Como hemos visto, no es esa la condición en que se encuentra la parte demandante en este proceso, o sea que el demandante no es un consumidor; realidad que nos obliga a llegar a la conclusión de que el Juzgado Octavo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, no es el competente para conocer de la demanda presentada."
>
> (Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá y el Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá en el proceso de protección a los derechos del consumidor incoado por RICAUTER RENE RUIZ MIRANDA contra MOTORES DE LA GUARDIA, S.A.)

Por todas las consideraciones anteriores, la Sala concluye que el presente negocio es competencia de la jurisdicción ordinaria civil y, en consecuencia, debe remitirse al Juzgado Decimosexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil para que conozca del mismo.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FIJA LA COMPETENCIA del proceso

de protección al consumidor interpuesto por el señor GILBERTO VILLARREAL contra la sociedad MILLENIUM TECHNOLOGY CORP., en el Juzgado Decimosexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA (fdo.) PUBLIO MUÑOZ R.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

CALIFICACION DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JOSE A. TROYANO DENTRO DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LOS LICENCIADOS ELIGIO ANDERSON ALLEN Y DARIO E. CARRILLO CONTRA EL AUTO DE 4 DE OCTUBRE DE 1999 DICTADO POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA E ILEGITIMIDAD PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO (RECONVENCIÓN) INCOADO POR ISAAC DAVID MIZRACHI Y PROTECCIONES DE ULTRAMAR, S. A. CONTRA JOSUE LEVY LEVY, RUBEN LEVY LEVY y DOV BINDER. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Magistrado JOSE A. TROYANO ha solicitado a la Sala Primera de la Corte Suprema se le declare impedido y, en consecuencia se le separe del conocimiento del recurso de apelación presentado por los licenciados ELIGIO ANDERSON ALLEN y DARIO E. CARRILLO G., contra el auto de 4 de octubre de 1999, dictado por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL en el incidente de nulidad por falta de competencia e ilegitimidad presentado por la parte demandada dentro del proceso ordinario (reconvención) incoado por ISAAC DAVID MIZRACHI y PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S. A. contra JOSUE LEVY LEVY, RUBEN LEVY LEVY y DOV BINDER.

El magistrado TROYANO fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "Dicha manifestación obedece a que anteriormente, me declaré impedido para conocer el recurso de hecho contra la resolución de 21 de diciembre de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del mismo proceso; aquel impedimento se basó en lo normado por el numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial, ya que se publicó en los periódicos de la localidad que el Licenciado Carrillo Gomila interpuso una denuncia en mi contra, ante la Asamblea Legislativa, configurando la causal aducida; dicho impedimento fue declarado legal por esta Sala, mediante resolución IMP014-2000 de 16 de marzo de 2000.
>
> Como quiera que la resolución apelada se refiere al mismo proceso, considero que se mantiene vigente la aducida causal de impedimento para conocer el resto del caso, razón por la que solicito nuevamente que se declara la legalidad del mismo."

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento presentado por el Magistrado JOSE A. TROYANO para conocer del recurso de apelación interpuesto por los licenciados ELIGIO ANDERSON ALLEY y DARIO E. CARRILLO G., contra el auto de 4 de octubre de 1999, lo separa del conocimiento

del mismo y DISPONE llamar al Magistrado de la Sala Segunda, de lo Penal, que le corresponda, de acuerdo al orden alfabético respectivo.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JOSÉ A. TROYANO DENTRO DEL RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 31 DE MAYO DE 2000, DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL PROPUESTO POR INVERSIONES FÁTIMA, S. A., CONTRA PROYECTOS URBANÍSTICOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Magistrado JOSÉ A. TROYANO ha solicitado a la Sala Primera de la Corte Suprema se le declare impedido y, en consecuencia, se le separe del conocimiento del recurso de hecho formulado por el licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del 31 de mayo de 2000, dentro del proceso arbitral promovido por INVERSIONES FATIMA, S. A., contra PROYECTOS URBANISTICOS, S. A.

El Magistrado TROYANO fundamenta su impedimento en el hecho siguiente:

"...
Hago esta petición en vista de que se publicó en los periódicos de la localidad, que el Licenciado DARIO CARRILLO GOMILA interpuso una denuncia en mi contra ante la Asamblea Legislativa; por lo que estimo que dicha situación que estimo configura la causal de impedimento establecida en el numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial. ..."

La circunstancia alegada por el Magistrado TROYANO, tiene amparo jurídico como causal de impedimento, por lo tanto, se procede acceder a lo pedido.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento presentado por el Magistrado JOSÉ A. TROYANO para conocer del recurso de hecho interpuesto por INVERSIONES FATIMA, S. A., mediante apoderado judicial, contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 31 de mayo de 2000, lo separa del conocimiento del mismo y DISPONE llamar al Magistrado de la Sala Segunda, de lo Penal, que le corresponda, de acuerdo al orden alfabético respectivo.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JOSÉ A. TROYANO DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN EN LAS ACCIONES DE SECUESTRO QUE LE SIGUE ORISTELA FASANO SALAZAR. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE

DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Magistrado JOSÉ A. TROYANO ha solicitado a la Sala Primera de la Corte Suprema se le declare impedido y, en consecuencia se le separe del conocimiento del recurso de casación formulado por el licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del 17 de mayo de 2000, dentro de la acción de secuestro propuesta por la señora ORISTELA FASANO SALAZAR contra la sociedad recurrente.

El Magistrado TROYANO fundamenta su impedimento en el hecho siguiente:

"...
Hago esta petición en vista de que se publicó en los periódicos de la localidad, que el Licenciado DARIO CARRILLO GOMILA ha interpuesto una denuncia en mi contra ante la Asamblea Legislativa; por lo que estimo que dicha situación que considero configura la causal de impedimento contenida en el numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial ..."

La circunstancia alegada por el Magistrado TROYANO, tiene amparo jurídico como causal de impedimento, por lo tanto, se procede acceder a lo pedido.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento presentado por el Magistrado JOSÉ A. TROYANO para conocer del recurso de casación interpuesto por INVERSIONES XENIA, S. A., mediante apoderado judicial, contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 17 de mayo de 2000, lo separa del conocimiento del mismo y DISPONE llamar al Magistrado de la Sala Segunda, de lo Penal, que le corresponda, de acuerdo al orden alfabético respectivo.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

EL LICENCIADO VICTOR VERGARA ZAMBRANO RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 24 DE ABRIL DE 2000 DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE REMATE DE CREDITOS POR PRETERMISION DEL PROCEDIMIENTO E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION EN EL PROCESO INTERPUESTO POR DOVEY MARINE, S. A. CONTRA BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado VICTOR VERGARA ZAMBRANO, apoderada judicial del DOVEY MARINE, S. A. recurre de hecho contra la resolución de 24 de abril de 2000, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el incidente de nulidad de remate de créditos por pretermisión del procedimiento e inexistencia de la obligación en el proceso interpuesto por la recurrente contra el BANCO AGROINDUSTRIAL Y

COMERCIAL DE PANAMA, S. A..

El recurso fue repartido y se encuentra para resolver admisibilidad, a lo que procede la Sala, de conformidad con lo que pautan las normas procesales para tales efectos. Al respecto el artículo 1141 del Código Judicial, establece entre los requisitos para la admisión del recurso de hecho, que la resolución que se impugna sea recurrible.

Mediante la resolución de 24 de abril de 2000 que se impugna, denegó el ad-quem la concesión del término para la formalización del recurso de casación anunciado por la parte recurrente contra la resolución de 5 de abril de 2000 expedida en segundo instancia, por no ser la resolución que se impugna susceptible de recurso de casación.

El apoderado legal de la recurrente, por su parte, objeta la decisión del Tribunal, por considerar que la resolución de 5 de abril de 2000, que rechaza el incidente de nulidad de remate de créditos por pretermisión del procedimiento e inexistencia de la obligación interpuesto por la recurrente, admite recurso de casación en contra, por ser una resolución que le pone término a la pretensión de DOVEY MARINE, S. A. e imposibilita la continuación de su pretensión, por no ser la recurrente parte principal en el proceso.

No comparte la Sala el argumento de la parte recurrente, por estimar que el auto que resuelve el incidente no pone término al proceso ni extingue o entraña la extinción de la pretensión, así como tampoco imposibilita la tramitación del proceso, sino que se limita a negar la nulidad formulada mediante el incidente tantas veces referido. Al respecto, en jurisprudencia que cita la parte opuesta al recurso, tuvo la Sala ocasión de señalar:

> "el auto que nos ocupa no es un auto que le pone término al proceso o que extingue o entraña la extinción de la pretensión o imposibilita la continuación del proceso, como sostiene el recurrente de hecho, puesto que se trata de una resolución que decide un incidente relacionado con la cesión de créditos dentro de un proceso de liquidación de una institución bancaria y no de un auto que le pone fin a dicha liquidación o a los créditos a los que se refiere."

Como se ha dejado expuesto, el auto que decide un incidente de nulidad de remate de créditos, como el que se intenta recurrir, no es de las resoluciones indicadas en el artículo 1149 del Código Judicial, que por demás, dispone de manera taxativa las resoluciones recurribles en casación.

De otra parte, de lo expresamente pautado en el artículo 701 del Código Judicial se advierte claramente que las resoluciones que resuelven incidentes sólo admiten recurso de apelación en contra, por lo que no cabe interponer contra las mismas recurso extraordinario de casación. La norma en comento textualmente dispone:

> "Artículo 701. En los incidentes sólo habrá lugar al recurso de apelación, que procederá respecto de la resolución que los decide o las que impiden su tramitación. Tales resoluciones admiten el recurso de apelación en los casos en que lo admita la sentencia que se dicte en el expediente principal."

En virtud de lo anterior, concluye la Sala, que el recurso de hecho que se presenta no resulta viable, por no ser la resolución que se pretende recurrir en casación objeto de recurso de casación, de ahí que deba esta Superioridad, actuando en consecuencia, inadmitir el recurso de hecho formulado.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de hecho presentado por DOVEY MARINE, S. A., mediante apoderado judicial,

dentro del incidente de nulidad de remate de créditos por pretermisión del procedimiento e inexistencia de la obligación, en el proceso interpuesto por la recurrente contra BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA, S. A..

Las costas obligatorias a cargo de la parte recurrente se fijan en SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) PUBLIO MUÑOZ (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1999 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL INCIDENTE DE NULIDAD, POR FALTA DE COMPETENCIA E ILEGITIMIDAD EN EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO POR LOS LICENCIADO ELIGIO ANDERSON ALLEN Y DARIO E. CARRILLO G. CONTRA EL AUTO DEL 4 DE OCTUBRE DE 1999, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR ISAAC DAVID MIZRACHI Y PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S. A. CONTRA JOSUE LEVY LEVY, RUBEN LEVY LEVY Y DOV BINDER. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA, actuando en nombre y representación de los señores JOSUE LEVY LEVY y RUBEN LEVY LEVY, ha interpuesto RECURSO DE HECHO contra la resolución de 21 de diciembre de 1999, mediante la cual el Primer Tribunal Superior no concede el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 4 de octubre de 1999, dictado por ese Tribunal declarando no probado el incidente de nulidad por falta de competencia e ilegitimidad de personería dentro del proceso ordinario con reconvención propuesto por ISAAC DAVID MIZRACHI y PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S. A., contra JOSUE LEVY LEVY, RUBEN LEVY LEVY y DOV BINDER.

Esta Sala de la Corte debe decidir, en primer término, si admite el recurso de hecho interpuesto, en atención al cumplimiento de los presupuestos que establece el artículo 1141 del Código de Procedimiento Civil, es decir: 1. Que la respectiva resolución sea recurrible; 2. Que el recurso haya sido interpuesto oportunamente y el Tribunal lo haya negado expresa o tácitamente; 3. Que las copias acompañadas con el escrito revelen que fueron pedidas y retiradas en el Tribunal conforme lo establece la ley y, con las mismas, el interesado haya ocurrido ante esta Corporación de Justicia en la debida oportunidad.

El recurrente solicita a través del presente recurso de hecho que esta Sala ordene al Primer Tribunal Superior de Justicia conceder el recurso de apelación anunciado contra la resolución aludida con base en que la misma podía ser apelada en virtud de los dispuesto en el ordinal 1 del artículo 94 del Código Judicial y en los ordinales 3,5 y 6 del artículo 1116 del Código Judicial. Considera que la negativa del Tribunal Superior a la apelación no está fundamentada en disposición legal sino en precedentes que resolvieron situaciones distintas.

En vista de que lo cuestionado se refiere al recurso de apelación y atendiendo a lo dispuesto por la ley que atribuye a esta Sala de la Corte, en una sola instancia, el conocimiento de los recursos de hecho contra las resoluciones de los Tribunales Superiores (art.93,núm.2 C.J.) y que permite la utilización de dicho medio de impugnación, no sólo contra resoluciones que niegan la concesión de la casación, sino también contra las que niegan la concesión del recurso de apelación (arts.1137 en concordancia con el artículo1121 del C.J.), se procede,

entonces, a determinar si la respectiva resolución es recurrible en apelación.

El artículo 1116 del Código Judicial señala lo siguiente:

"Artículo 1116: El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la decisión dictada por el juez de primera instancia y la revoque o reforme.

Son apelables, además de las sentencias, las siguientes resoluciones dictadas en primera instancia:
1...
2...
3. El auto que rechace la demanda, que resuelva sobre la representación de las partes y la intervención de sus sucesores o terceros;
4...
5. El auto que resuelva sobre nulidades procesales o que imposibilite la tramitación de la instancia o del proceso o que entrañe la extinción de la instancia, del proceso o de la pretensión;

6. El auto que decida un incidente,..."
(El subrayado es de la Sala).

La Sala observa que el auto contra el cual se ha propuesto el recurso de hecho fue dictado, el 21 de diciembre de 1999, por los magistrados Nelson H. Ruiz y Eva Cal del Primer Tribunal Superior, en Sala Plena. Su copia consta de fojas 24 a 28 del expediente y en el se resuelve "no conceder el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 4 de octubre de 1999, mediante el cual se declaró no probado el incidente de falta de competencia e ilegitimidad de personería", dentro del proceso ordinario de mayor cuantía con llamamiento de terceros y reconvención propuesto por ISAAC DAVID MIZRACHI y PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S. A., contra JOSUE LEVY LEVY, RUBEN LEVY LEVY y DOV BINDER.

Al confrontar el auto de 4 de octubre de 1999 con lo que dispone el artículo 1132 del Código Judicial, de acuerdo con el cual sólo serán apelables las providencias y autos que dicta un Magistrado en un Tribunal Colegiado ante el resto de la Sala, encuéntrase que el referido auto fue dictado por la Sala Completa, según lo exige el artículo 137 del Código Judicial y el último párrafo del artículo 140 del citado código. Por tanto, se observa que "no hay resto de la Sala ante quien surtir la apelación". De allí que la Sala comparta el criterio expresado por el Tribunal Superior al negar la concesión del recurso de apelación, pues en este caso la resolución ha de entenderse dictada por la Sala Completa y no por un solo Magistrado.

Así mismo, en cuanto al aspecto alegado por el recurrente de que el de 4 de octubre de 1999 es un auto dictado en primera instancia y que es apelable ante la Sala Primera de la Corte, por las razones establecidas en el ordinal 1 del artículo 94 del Código Judicial que señala que la Sala Primera de la Corte conoce en segunda instancia de los negocios civiles de que conocen en primera instancia los Tribunales de Distrito Judicial en los cuales haya lugar a consulta o apelación de autos y sentencias (los ordinales 3,5 y 6 del artículo 1116 del Código Judicial),la Sala observa que nos encontramos frente a un auto que decide un incidente que fue presentado ante el Tribunal Superior mientras conocía de una apelación promovida por los apoderados judiciales contra el auto No.752 de 28 de febrero de 1996 dictado por el Juzgado Tercero de Circuito Civil y en el que se negó la solicitud de llamamiento al proceso a ABRAHAM MIZRACHI, SELLY DE MIZRACHI, YOLANDA MADURO DE MIZRACHI y la sociedad DESARROLLO DE VIZCAYA, S. A., como litisconsortes de ISAAC DAVID MIZRACHI y PROYECCIONES DE ULTRAMAR en calidad de demandados-reconvenidos en la demanda de reconvención presentada por JOSUE Y RUBEN LEVY LEVY. Lo anterior significa que, como el Tribunal Superior se encontraba conociendo el negocio civil en segunda instancia cuando dictó el referido auto de 4 de febrero de 1999, la Sala Civil de la Corte no puede conocer

en segunda instancia de una apelación contra ese auto, pues no le compete en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 94 del Código Judicial.

En reiterada jurisprudencia esta Sala de la Corte ha señalado lo siguiente:

> "El recurso de hecho es viable contra resoluciones que hayan negado un recurso de apelación cuando este quepa. No obstante, excluye a la competencia de la Corte Suprema, el conocimiento del recurso de hecho contra resoluciones del Tribunal Superior dentro de un proceso dentro del cual éste no actuaba como tribunal de primera instancia, con la única excepción de aquellas resoluciones del Tribunal Superior que niegan la admisión del recurso de casación, hipótesis ésta que no es la que ocupa a la Sala en este proceso" (Fallo de 5 de marzo de 1996,R.J.p.234).

Así, al resultar improcedente el recurso de apelación contra la resolución que decidió el incidente de falta de competencia e ilegitimidad de personería, tampoco es viable el recurso de hecho propuesto ante esta Sala contra la resolución de 21 de diciembre de 1999 dictada por el Tribunal Superior donde negó la apelación, dictada dentro del proceso ordinario de mayor cuantía con reconvención propuesto por ISAAC DAVID MIZRACHI y PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S. A. contra JOSUE LEVY LEVY, RUBEN LEVY LEVY y DOV BINDER, por considerar que la respectiva resolución no es apelable por no haber sido dictada por un tribunal de primera instancia.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de hecho propuesto por el licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA en nombre y representación de los señores JOSUE LEVY LEVY y RUBEN LEVY LEVY.

Las obligantes costas se fijan en la suma de setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Notifíquese y Cumplase

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) JORGE FEDERICO LEE
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala de lo Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL LICENCIADO GABRIEL LAWSON RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 29 DE MAYO DE 2,000 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE PERSONERIA EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR RAMIRESZ HOLLDING CORP.CONTRA PABLO ESPINOSA URRUTIA Y DESTELLOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado GABRIEL LAWSON, actuando en su condición de apoderado judicial del señor PABLO NICANOR ESPINOSA URRUTIA, ha interpuesto recurso de hecho contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 29 de mayo de 2000, dentro del proceso ordinario instaurado por RAMIREZ HOLDING CORPORATION contra el recurrente y DESTELLO, S. A.

La resolución que se recurre de hecho negó el término para la formalización del recurso de casación anunciado por la parte demandada, contra el auto proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 4 de mayo de 2000, la cual decidió en segunda instancia un incidente de nulidad promovido por la parte recurrente.

Luego de revisar las constancias procesales la Sala advierte que el presente recurso reúne los requisitos formales que exige el artículo 1141 del Código Judicial, por lo que ahora debe determinar si la resolución contra la cual se anunció el recurso de casación es susceptible de impugnación mediante ese recurso extraordinario.

El Primer Tribunal Superior consideró que debía negarse el término para formalizar el recurso de casación, en vista de que la resolución proferida por ese mismo tribunal el 4 de mayo de 2000 no es, por su naturaleza, recurrible a través de dicho recurso, toda vez que no se enmarca en ninguno de los presupuestos que enumera taxativamente el artículo 1149 del Código Judicial.

Por su parte, el recurrente de hecho sostiene que la citada resolución sí es recurrible en casación, "... dado que a través de la misma se niega o extingue la pretensión de nulidad ejercida a través del incidente de nulidad por falta de personería" (f. 2), es decir, que a su juicio, el auto fechado 4 de mayo de 2000 corresponde al supuesto consagrado en el ordinal 2 del artículo 1149 del Código Judicial.

Ahora bien, al analizar el contenido del auto que se intenta recurrir en casación, esta corporación judicial observa que el mismo confirma el Auto N 3972 de 21 de diciembre de 1999, proferido por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el cual, a su vez, declaró no probado el incidente de nulidad por falta de personería que interpuso la parte que recurre de hecho.

No obstante, si bien dicha resolución le pone fin al incidente de nulidad, no constituye un auto que le pone término al proceso o que extingue o entraña la extinción de la pretensión o imposibilita la continuación del proceso, como alega la parte recurrente. Tampoco corresponde a ninguna de las otras resoluciones de segunda instancia contra las cuales tiene lugar el recurso de casación y que se enumeran taxativamente en el resto de los ordinales que conforman el artículo 1149 del Código Judicial.

En estas circunstancias, la Sala debe concluir, como ya lo ha hecho en decisiones anteriores, que una resolución que niega un incidente de nulidad como sucede en el caso que nos ocupa, no es, por su naturaleza, un auto susceptible de impugnación a través del recurso de casación. (Cfr. Resolución de 3 de abril de 2000, que decidió recurso de hecho interpuesto por AGROINDUSTRIAL LOPEZ ORTEGA, S. A. contra el auto proferido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 25 de noviembre de 1999, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la señora ESTELA HERRERA BARRIA contra la sociedad recurrente y CAMILO LOPEZ CIGARRISTA y RAQUEL ORTEGA DE LOPEZ; y, Resolución de 25 de mayo de 2000, que resolvió recurso de hecho promovido por DOVEY MARINE, S. A. contra el auto proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 23 de marzo de 2000, dentro del proceso de liquidación de BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA (BANAICO), S. A.)

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de hecho interpuesto por el Licenciado GABRIEL LAWSON, en representación del señor PABLO NICANOR ESPINOSA URRUTIA, contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 29 de mayo de 2000, dentro del proceso ordinario propuesto por RAMIREZ HOLDING CORPORATION contra el recurrente y DESTELLO, S. A.

Se condena en costas a la parte recurrente, las cuales se fijan en la suma de setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

JULIETA DE LEON Y MARITZA DE LEON DE GONZALEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO QUE LE SIGUE SAMUEL HUMBERTO GONZALEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el proceso sumario especial de Deslinde y Amojonamiento que JULIETA DE LEON y MARITZA DE LEON DE GONZALEZ le siguen a SAMUEL HUMBERTO GONZALEZ, esta Sala de la Corte emitió sentencia de 4 de julio de 2000, respecto a la cual el apoderado del demandado solicita sea reformada.

En el escrito de solicitud de reforma que corre a fojas 222 de este expediente se expresa lo siguiente:

> **"HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CIVIL:**
>
> **En el negocio indicado al margen superior del presente escrito, solicitamos se reforme o adicione vuestra sentencia del 4 de julio del 2000, con el objeto de incluir la correspondiente condena en costas al tenor del artículo 1058 del Código Judicial y tomando como base la cuantía del negocio como la tarifa de honorarios profesionales vigente.**
> **DERECHO: Artículo 986, 987 y 1058 del Código Judicial.**
> ...
> ...".
> **(FS 222)**

Como se indica en el citado escrito, en la sentencia de 4 de julio de 2000 dictada por esta Corporación, la cual declaró que "NO CASA la sentencia de 16 de noviembre de 1999 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial dentro del proceso de deslinde y amojonamiento ...." (fs.220), no se impusieron costas. En este sentido, de acuerdo al artículo 1058 del Código Judicial habrá lugar a las mismas "cuando se interponga un recurso por una sola de las partes y la resolución respectiva sea substancialmente mantenida o confirmada".

Por tanto, la Sala procede a la imperativa imposición de costas.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia de 4 de julio de 2000, en el sentido de adicionar la condena en costas por la suma de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) JORGE FEDERICO LEE
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

JULIO DE 2000

AUTO APELADO

AUTO APELADO EN PROCESO QUE SE LE SIGUE A HIPOLITO ARCO PEÑA Y ALDO FLACO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE FELIX MONTENEGRO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, ha presentado recurso de apelación contra la resolución de 24 de noviembre de 1999, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso seguido a HIPOLITO SARCO PEÑA, DARIO FLACO o ISIDRO FLACO y ALDO FLACO por delito Contra la Vida y la integridad personal en perjuicio de FELIX MONTENEGRO.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

Manifiesta la recurrente su disconformidad con la resolución del tribunal de primer grado, por el análisis efectuado a los elementos probatorios, de los cuales se desprenden graves indicios en contra de los imputados. Anota como relevantes las declaraciones de Félix Montenegro Hernández, Helicia Hernández González, Carmen Medina Reyes, Víctor José Díaz Pereira y Prospero Santamaría; y que de acuerdo a la jurisprudencia ello es suficiente para abrirles causa penal por el delito que se les endilga.

OPINION DE LA DEFENSA

La defensora de Oficio del imputado HIPOLITO SARCO PEÑA, licenciada Mireya Rodríguez Monteza, al sustentar su oposición al recurso presentado, es del criterio que los indicios graves que existen contra su patrocinado vinculandolo al hecho punible, como lo son las declaraciones de su padre, madre y tío constituyen testimonios sospechosos y que la declaración vertida por el señor Díaz Pereira carece de fuerza probatoria por ser de oídas. Por ello, considera la letrada que debe confirmarse el auto impugnado.

El licenciado Ernesto Muñoz Gamboa, defensor de oficio del sindicado ISIMO FLACO BERRUGATE, en su memorial de oposición señala que no existen elementos probatorios idóneos que vinculen a su representado y que los indicios considerados por la vindicta pública son sospechosos a la luz de la normativa procesal. Solicita se mantenga la decisión proferida por el tribunal de primera instancia.

Al oponerse a la pretensión de la Fiscalía, el licenciado Luis Carlos Arosemena, defensor de oficio de ALDO FLACO BERRUGATE, expone que no existe una sola declaración de las múltiples declaraciones recabadas que vincule a su defendido al hecho delictivo, salvo el testimonio de Prospero Santamaría, el cual es sospechoso. Basado en ello, solicita se confirme en todas sus partes la resolución atacada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Esta colegiatura entra a analizar el medio de impugnación, en base a los puntos de la resolución a los cuales se refiere la recurrente, tal como lo impone el artículo 2428 del Código Judicial.

El negocio penal permite determinar que en la mañana del día 26 de octubre de 1997, agentes de la Policía Nacional, informaron a la Personería del Distrito de Pinogana, Provincia de Darién, la existencia en las márgenes del río Tuira de un cádaver para que fuera levantado y reconocido.

En la diligencia de reconocimiento de dicho cadáver presentaba parte de su vestimenta rasgada con un corte horizontal desde la vena yugular hasta el ombligo y con las vísceras fuera del abdomen donde se observaba un orificio de bala justo al lado derecho del ombligo; en la parte dorsal, se advierte una herida con arma blanca (machete) en la nuca que le cercenó la cabeza. No se encontró en el mismo objeto alguno de valor o documento de identidad. Es importante considerar parte de lo consignado de fojas 3 a 4 del expediente, donde se expone lo siguiente:

> "...debido al estado de descomposición del cadaver (sic) se ordenó la inhumación del cadaver (sic) en el Cementerio de Pinogana, con el apoyo de la Corregiduría de Pinogana y la Policía de ese Corregimiento, debido al alto grado de descomposición del cadaver (sic) y que no contamos con las bolsas para meter los cadaveres (sic). y el Médico forense de La Palma no cuenta con el combustible para trasladarse hasta donde se encuentra el cadaver (sic)." (fs. 3-4)

Margarita Ríos Domico, vecina del occiso manifestó haber conversado con el occiso el día 23 de octubre de 1997, antes que le prestara a su hijo Ramiro Ramos para que lo llevará en una balsa al otro lado del río. Que el mismo le indicó que iría a buscar una ropa y regresaría para ir a casa de su padre. Que desde el día 23 de octubre al día 26 de octubre no vio a nadie cruzar para los lados de la casa del occiso y que ella era la más cercana vecina del mismo (fs. 16-17).

El niño Ramiro Ramos Domicó rinde declaración confirmando lo expuesto por su madre Margarita Ríos y expresa que no vio a nadie al dejar al señor Félix Montenegro hijo (occiso) al otro lado del río ni volvió a ver al occiso después de dicho día (fs. 22-23).

Los padres del difunto rinden sendas declaraciones juradas en las cuales manifestaron que sospechaban de los señores "Chaparro" e Hipólito, los cuales vivían anteriormente abajo de la finca de éste (fs. 26-28 y 31-33).

La señora Carmen Medina Reyes señala que en el pueblo se rumoraba que Hipólito y su hijastro "Chaparro" habían matado a Félix Montenegro (hijo) (fs. 36-37).

Quintero Chocho Conquista afirmó desconocer que existiera enemistad entre los señores Hipólito Sarco y Aldo Flaco (a) "Chaparro" con el difunto Félix Montenegro, que en el area de las fincas de estos, el pueblo tenía conocimiento pasaban personas armadas con destino a Común y río Chico (fs. 42-43).

En su declaración jurada Doyana Conquista Peña coincide con el señor Chocho Conquista en señalar que por el lugar de autos andan sujetos armados (fs. 44-45).

Erino Membora Carpio, Presidente del Congreso local indicó que el día 23 de octubre de 1997 vio personas extrañas provenientes de la cabecera de Yape que iban bajando y avisó al teniente de servicio en Vista Alegre (fs. 46-47).

HIPOLITO SARCO PEÑA al ser requerido para declaración indagatoria negó la comisión del ilícito endilgado y manifestó que el día 23 de octubre andaba con su señora y dos niñitos (fs. 53-54).

Héctor Hernández González al declarar mencionó que los señores Hipólito Sarco y Aldo Flaco (a) "Chaparro" tenían diferencias con su difunto sobrino por la mujer de "Chaparro" (fs. 62-63).

ALDO FLACO BERUGATE en su declaración indagatoria negó tener diferencias con el occiso Montenegro y tener arma de fuego alguna (fs. 99-100).

Rinde declaración indagatoria DARIO FLACO BERRUGATE expresando no haber cometido el delito y afirmando que él se encontraba en su casa de la cual no salió (fs. 153-154).

De fojas 172 a 177 consta Protocolo de Necropsia del occiso Montenegro en la que el médico forense de la provincia de Darién Dr. Juan Rosales establece como causas de la muerte: "a). Paro cardiorrespiratorio (sic) y b). Traumatismo por Arma Blanca en Región Cervical." y a foja 294 certificado de defunción de Félix Montenegro acreditando la existencia del hecho punible.

Inicialmente, de haberse presentado el médico forense así como los detectives de la Policía Técnica Judicial al lugar de autos a fin de llevar a cabo la autopsia, la recolección de indicios y la diligencia de inspección judicial, hubiera permitido aclarar una serie de dudas en cuanto a la fecha exacta del homicidio, la forma como se perpetró y los presuntos autores o partícipes.

El delito de homicidio requiere de una acción rápida por parte de las autoridades investigadoras, una vez consumado el mismo; en el hecho que nos ocupa, acaecido en un sitio donde la falta de instrumentos de trabajo y servicios urbanos es notoria y las condiciones del clima impiden salvaguardar las huellas del delito, era necesario que el Ministerio Público desplegará todos los esfuerzos tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

Existen múltiples declaraciones de personas que dejan serias dudas sobre la participación de los sindicados, las cuales sumadas a las declaraciones de personas vinculadas a la víctima contribuyen a reforzar las mismas por basarse en suposiciones, excepto la de Prospero Santamaría quien incluso se sometió a una diligencia de careo con uno de los imputados (fs. 256-258).

Pese a que claramente se ha demostrado la existencia del hecho punible, no deja de ser cierto que en aquellos días en la región de autos se verificaba un toque de queda impuesta por las autoridades a los lugareños debido a la movilización de insurgentes colombianos.

Las anteriores consideraciones nos llevan a concluir que procede la confirmación del auto impugnado, por haberse verificado el supuesto del numeral 2 del artículo 2211 del Código Judicial.

En mérito de lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 24 de noviembre de 1999 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

AUTO APELADO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CARLOS MANUEL LEDEZMA GUTIÉRREZ, OLIVARREN ONASSIS Y WILSON OMAR MOSQUERA MENA, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECINUEVE (19 DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de 12 de octubre de 1998, el Segundo Tribunal Superior de Justicia ABRIÓ CAUSA CRIMINAL contra WILSON OMAR MOSQUERA MENA (a) "CHOMBERA" como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II y por el Capítulo I, Título I, Libro II en relación con el

Título II, Capítulo VI del Libro I, todos del Código Penal, es decir, por los delitos genéricos de Homicidio en perjuicio de Gabriel Saúl Córdoba Achito y por el de Homicidio Tentado en perjuicio de Ornasis Olivarren; y prohijó la orden de detención dispuesta en su contra por el fiscal de la instancia. Y SOBRESEYÓ DEFINITIVAMENTE a ORNASIS OLIVARREN y a CARLOS MANUEL LEDEZMA GUTIÉRREZ, por su presunta vinculación con el homicidio de Córdoba Achito (fs. 427-433).

El auto mixto en comento, fue apelado al momento de notificarse por el imputado Wilson Omar Mosquera Mena y su abogado defensor (f.vt.433). Correspondió sustentar la alzada al licenciado Gabriel Elías Fernández, miembro del Instituto de Defensoría de Oficio al ser designado como su defensor (f.472). Al concederse en el efecto suspensivo el recurso apelado, pasamos a examinar las objeciones planteadas por el apelante.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Fernández afirma que en el expediente no hay pruebas ni testigos que señalen que el señor Mosquera Mena sea la persona que cometiera el ilícito por el cual fue encausado,por lo que solicita a esta Sala, de conformidad con lo estipulado en el artículo 2222 del Código Judicial, se corrija el auto apelado en el sentido de emitir un sobreseimiento definitivo a favor de su patrocinado.

Como fundamento a su petición, se refiere al contenido de la resolución de 7 de abril de este año, mediante la cual el Pleno de esta Corte Suprema al resolver acción de habeas corpus presentada a favor de Wilson Omar Mosquera Mena, declaró ilegal su detención preventiva.

En ese sentido señala que ante los reiterados señalamientos del señor Wilson Omar Mosquera Mena de que él no es "Chombera", que fue quien cometió los ilícitos investigados, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia consideró indispensable ordenar, mediante providencia dictada el 1 de marzo de 2,000, la práctica de una diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos con la presencia de los señores Wilson Omar Mosquera Mena con cédula 8-353-673 y Walson Mosquera Mosquera con cédula 5-18-284.

Tales diligencias se efectuaron los días 15 y 22 de marzo y comparecieron los testigos Gisela Yasmin Andrade, Arturo González Muñoz, Cecilia Díaz Gutiérrez y Andrés Eloy Váldez Alain, quienes no reconocieron en la fila de detenidos a su representado.

Indica que el Pleno de la Corte manifestó que las otras cuatro personas citadas en el auto de enjuiciamiento, tampoco han identificado en sus declaraciones a Wilson Omar Mosquera Mena, como el hombre que disparó en perjuicio de Gabriel Saúl Córdoba Achito y Ornasis Olivarren, supuestamente alías "Chombera". Y que de las pruebas practicadas, no ha podido determinarse quién es la persona con el alias o sobrenombre de "Chombera", por lo que su detención no cumple con la exigencia del artículo 2147-A del Código Judicial que se refiere a la vinculación del investigado con los hechos que se le imputan.

Señala así el apelante que no se ha cumplido con los requisitos del artículo 2222 del Código Judicial, dado que no se ha identificado claramente el nombre completo del infractor de las normas penales, sino tan sólo su alias o sobrenombre, por lo que no ha podido ser atribuido, por las pruebas que obran en autos, a su patrocinado, ni en los reconocimientos en rueda de detenidos es notificado.

Finalmente comparte el criterio vertido por el Pleno de la Corte cuando manifiesta que la duda o falta de certeza en la identificación positiva del señor Wilson Omar Mosquera, surge no sólo de la identificación negativa que hicieron los testigos que participaron en la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, sino otra serie de pruebas que fueron presentadas por el propio Mosquera Mena, en el incidente de nulidad; en el mismo una testigo, prima del

occiso señala la dirección del sujeto apodado "Chombera", la cual no coincide con la de su representado como tampoco el nombre de su cónyuge y que al realizarse la diligencia de allanamiento se comprueba lo afirmado (fs.492-497).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

En respuesta al traslado, el licenciado Juan Antonio Tejada, hijo, Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, primeramente señala que frente al último pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de 7 de abril de 2,000 en la cual declara ilegal al detención de Wilson Omar Mosquera Mena (luego de declarar en dos ocasiones legal la detención del mismo), difícilmente puede sustentar la solicitud que hiciera de llamamiento a juicio ante el segundo tribunal Superior de Justicia; dado que para la detección preventiva priva la consideración de indicios graves de responsabilidad contra el encartado, los cuales también son requisitos necesarios para solicitar el llamamiento a juicio.

Sin embargo, termina reiterando la solicitud de enjuiciamiento porque estima que los elementos acopiados sí han demostrado la identidad de quien se encuentra gravemente vinculado a la muerte de Córdoba Achito y de las lesiones causadas a Ornasis Olivarren; acto que acontece como consecuencia de la sustracción de una supuesta droga propiedad del hoy occiso.

Manifiesta el señor Fiscal que Wilson Omar Mosquera Mena fue detenido en fecha posterior a la resolución que lo llama a juicio y al ser notificado interpuso el recurso de apelación.

Posteriormente a solicitud de esa agencia del Ministerio Público, se practicaron Reconocimientos en Rueda de Detenidos, en las cuales los testigos del caso: Andrés Eloy Váldez Alain, Cecilio Díaz Gutiérrez, Arturo González y Gisela Yasmín Andrade no reconocieron al señor Wilson Omar Mosquera Mena como la persona o sujeto conocido como "Chombera", quien es sindicado como autor del hecho de sangre investigado. Al respecto señala que desconoce si efectivamente no pudieron identificar al sujeto o si en este caso, como en otros que están abajo su responsabilidad factores exógenos incidieron en el ánimo de los testigos; lo que resulta una dura realidad más vigente cada día.

Se refiere a que la testigo Gisela Andrade Garces, averiguó que el nombre de la persona que ella identifica con el apodo de Chombera es Wilson Mosquera.

Respecto a Wilson Mosquera consta certificación del Director de la Cárcel Modelo en el sentido que ingreso a ese Centro Penal el 17 de septiembre de 1993 por el delito de robo; que el 5 de mayo de 1994 fue trasladado al Renacer y el 3 de junio siguiente fue trasladado a la Joya; posteriormente fueron informados que Mosquera (a) Chombera había salido en libertad por orden del Juzgado Segundo de San Miguelito y que su dirección es el Valle de San Isidro casa N° A-23.

También se refiere el señor Fiscal a lo declarado por el testigo Andrés Eloy Váldez Alain, quien afirma que la persona que disparó fue "un muchacho que conozco como Wilson pero todos le dicen Chombera"; así como también dijo que había escuchado que Chombera tenía una cuenta con la ley y estaba preso.

De tales declaraciones, concluyó la representación fiscal, que el sujeto apodado "Chombera" a quien conocía y se refería el testigo Váldez Alain, no era otro que Wilson Omar Mosquera Mena, igualmente que el señalado por la testigo Gisela Yasmin Andrade Garcés (fs.584-589).

FUNDAMENTO DE LA SALA

Corresponde a esta Sala examinar los puntos objetados en la resolución apelada, los cuales se centran específicamente en el hecho que no hay certeza en cuanto a la vinculación del señor Wilson Omar Mosquera Mena, con los delitos que se le endilgan.

El Tribunal Superior como basamento a su decisión de abrir causa criminal contra Wilson Omar Mosquera Mena (a) "Chombera" como presunto responsable del homicidio del señor Córdoba Achito y la Tentativa de Homicidio en perjuicio de Ornasis Olivarren, señaló en resolución de 12 de octubre de 1998 lo siguiente:

> "Ahora bien, en cuanto a la presunta responsabilidad o vinculación, la misma recae en la persona del sindicado WILSON OMAR MOSQUERA MENA (A) "CHOMBERA", toda vez que los declarantes CARMEN EDITH CARRASQUILLA (fs.14-17), GISELA YASMIN ANDRADE GARCES (fs.20-24,96-99 y 108), ARTURO GONZÁLEZ MUÑOZ (fs.105-108), ALFONSO AGRAZAL VALENZUELA (fs.112-113), LUIS ALBERTO YIRALDO ORTIZ (FS.158-160), CECILIO DÍAZ GUTIÉRREZ (fs.169-171), ALCIBIADEZ LÓPEZ MORENO (fs.172-174) y ANDRÉS ELOY VALDÉS ALAIN (fs.248-251), convienen sin dubitación alguna en que fue éste quien disparó mortalmente contra CÓRDOBA ACHITO y además hirió a ORNASIS OLIVARREN (fs.297-300) con el claro propósito de suprimir la vida de éste, toda vez que si bien la lesión no puso en peligro la vida, la ubicación de la herida (cabeza) conduce a discernir que ese era su manifiesto ánimo, comportamiento por el cual también habrá de responder" (fs.431).

Ahora bien, al examinar cada una de las declaraciones vertidas por los ochos testigos mencionados en el párrafo transcrito, llama poderosamente la atención que el Tribunal A-Quo afirme que aquellos convienen sin dubitación alguna que Wilson Mosquera Mena (a) "Chombera" disparó mortalmente contra Córdoba Achito y además hirió a Ornasis Olivarren, cuando esa no es la realidad. Veamos.

> -Carmen Edith Carrasquilla Medina afirmó que escuchó un disparó y al ver hacia atrás vio caer a Córdoba Achito; que según rumores un sujeto que le dicen Chombera fue quien disparó (f.16).
>
> -Gisela Jazmín Andrade Garces afirmó el 3 de marzo de 1995 que no vio a la persona que disparó y en toda la declaración no se menciona el sujeto apodado "Chombera" (fs.20-24); luego al ampliar su declaración el 18 de agosto siguiente, quien menciona al sujeto apodado Chombera fue el agente fiscal al cuestionarle si era cierto que ella se retiró del baile y regresó con Nene y un tal Chombera, lo cual niega e incluso dice no conocer a éste último. Y reitera que no llegó a ver a la persona que disparó (fs.96-99). Luego en el mes de septiembre reitera que no conoce a Chombera cuyo nombre es Wilson Mosquera y que no lo puede describir (f.118).
>
> -Arturo González Muñoz declaró el 12 de septiembre de 1995, casi siete meses después de los hechos y afirmó que fue "Chombera" quien disparó contra Gabriel Córdoba Achito y Ornasis Olivarren (fs.106-108).
>
> -Alfonso Agrazal Valenzuela afirma no saber nada sobre los hechos investigados y no se menciona en toda la declaración al sujeto apodado "Chombera" (fs.112-113).
>
> -Luis Alberto Yiraldo Ortiz señala que estaba bailando cuando escuchó dos disparos y luego vio herido a Gabriel Córdoba al igual que otro sujeto; y que se rumora que no fue Nene quien mató a Córdoba Achito pero no se sabe quien fue. Se advierte que en toda la declaración no se menciona al tal "Chombera" (fs.158-160).
>
> -Cecilio Díaz Gutiérrez indica que estaba bailando cuando escuchó dos disparos, y no vio quien fue el sujeto que disparó. Se le pregunta si conoce a una persona cuyo apodo es "Chombera" y contesta que Nene tiene un amigo que le llaman así y lo describe. (fs.169-171).
>
> -Alcibiades López Moreno también dice que estaba en el baile cuando

escuchó los disparos y para nada menciona al tal "Chombera" (fs.172-174).

-Andrés Eloy Valdés Alain declara exactamente dos años después de ocurridos los hechos. Afirma que vio cuando un muchacho que conoce como Wilson pero que todos le dicen "Chombera" realizó dos disparos y le dio a Gabriel Córdoba y a otro. Finaliza diciendo que si llega a recordar algo importante o si llega a ver a Chombera, no dudara dos veces en ir a declarar, porque quiere que se haga justicia y pague el verdadero asesino de su amigo Gabriel Córdoba (fs.249-251).

Como bien se advierte, de las ocho personas cuyas declaraciones sirvieron de basamento al Segundo Tribunal Superior para emitir un auto encausatorio contra Mosquera Mena, sólo dos personas señalan a un tal "Chombera" como la persona que realizó los hechos punibles investigados, sin precisar que se trate del imputado Wilson Mosquera Mena.

Estimamos que debemos mencionar otras declaraciones tales como la de los también involucrado Ornasis Olivarren y Carlos Manuel Ledezma Gutiérrez (a) Nene. El primero resultó herido la madrugada del 28 de febrero de 1995, pero cuyas lesiones no pusieron en peligro su vida (ver.f.310), afirma que no sabe quien el disparó a él y a Córdoba Achito (fs.41-45 y 215-217). El segundo afirma que no fue él quien disparó contra Córdoba Achito sino un sujeto moreno a quien no conoce (fs. 75-77 y 211-214).

Por su parte Yamileth Murillo Urrutia afirma que estaba a diez metros aproximadamente cuando Nene le disparó a su primo Córdoba Achito (fs.10-13).

Ahora bien, posterior a la emisión del auto objeto de apelación, fue aprehendido Wilson Omar Mosquera Mena (fs.434-436), y en consecuencia presentó acción de habeas corpus.

La Corte Suprema de Justicia por medio de resolución de 22 de diciembre de 1999 declaró legal su detención (fs.466-469). Pero señaló que correspondía al Segundo Tribunal Superior al resolver el incidente de nulidad promovido por la defensa del procesado determinar la verdadera identidad de éste, previo la diligencia de reconocimiento ordenada (fs.476-478).

Nuevamente a la Corte Suprema de Justicia le correspondió decidir sobre la legalidad o ilegalidad de la detención del señor Mosquera Mena.

Así en resolución de 7 de abril de 2000, de la cual consta en el expediente principal copia autenticada, explica que ante los señalamientos del señor Wilson Omar Mosquera Mena de que él no es "Chombera" de quien se dice cometió el ilícito, el Pleno consideró indispensable ordenar mediante providencia de 1 de marzo de 2,000 la celebración de una audiencia para la práctica de una diligencia en rueda de detenidos con la presencia de los señores Wilson Omar Mosquera Mena con cédula de identidad personal 8-353-673 y Walson Mosquera Mosquera con cédula de identidad personal 5-18-284, toda vez que el Magistrado Sustanciador del Segundo Tribunal resolvió el 11 de febrero de 2000 declarar no probado el incidente de nulidad, al no lograr practicar la diligencia.

También fueron citados los testigos que declararon que un sujeto llamado "Chombera" fue quien disparó contra Córdoba Achito y Ornasis Olivarren.

El resultado de la mencionada diligencia fue el siguiente:

"Gisela Yasmín Andrade indico: "No conozco a ninguna persona, solamente de lo que pasó en el homicidio conocía al que me salió con un revólver en el baile, pero no al que mató. No lo conozco de persona a Chombera, solamente me dijeron el nombre "(f.44).

Cecilio Díaz Gutiérrez señaló: "Aparentemente ahí no está, no está

Chombera, ahí no está Chombera".

La audiencia fue suspendida y reanudada el 22 de marzo de 2000, porque fue necesario la conducción de los dos testigos restantes que se habían negado a concurrir.

Andrés E. Váldes Alain observó a los detenidos en la fila y dijo: "No ahí no está, lo que yo vi fue que el occiso y otro llevaban a otro por la camisa y lo tenían acostado en una alcantarilla y el occiso decía matalo, luego salió otro de una vereda y le disparó a los dos que tenían agarrado al de la cuneta y cayeron. Yo vi esa persona de espalda, era morena y todos decían que era Chombera; al que tenían en el piso era a Nene, del cual no sé su nombre. Cuando yo fui a la Fiscalía declaré voluntariamente, pues una persona estaba presa. Yo no quería que se me mal interpretara, yo declare lo que la gente decía, que había sido Chombera, pero lo vi fue de espalda...no lo conozco han pasado 5 años, el nombre que yo di era lo que la gente decía; la verdad no recuerdo al que disparó pues lo vi de lado, era morenito, de tamaño regular, fornido, por el tiempo que ha pasado no lo puedo reconocer (fs.56 y 57).

Arturo González Muñoz manifestó que él no conocía a Chombera, "nunca lo he visto, cuando yo fui a declarar ya había declarado una muchacha que se llama ICELA, ella fue la que dijo que fue CHOMBERA, yo vi al que disparó encapuchado, yo no lo conozco a él, la gente dice que fue CHOMBERA, yo vi a un hombre con arma y suéter con capucha, de rayas el suéter. Yo estaba a un lado de la bodega, se formó un problema, y vi cuando un man venía bajando la loma y disparó, a esta persona no lo conozco, yo dije que fue CHOMBERA ya que el Fiscal me estaba diciendo lo que pasaba, le decía que no conocía a CHOMBERA que era un man moreno alto encapuchado, creo que tenía el arma en la mano derecha, nunca he visto a CHOMBERA hasta ese día." (fs.57- y 58)" (Ver fs.484-486).

Por otra parte el fallo agrega:

"... que la duda o falta de certeza en la identificación positiva del señor Wilson Omar Mosquera surge, no sólo de la identificación negativa que hicieron los testigos que participaron en la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, sino de otra serie de pruebas que fueron presentadas por el propio Mosquera Mena en el incidente de nulidad. Una testigo, Yamileth Murillo Urrutia, prima del occiso, señaló en su declaración jurada que "Chombera" vive en Cocobolo, ela parte de atrás en la barriada Mano de Piedra Durán y en el incidente de nulidad se presentan copias autenticadas de un informe de comisión y de un allanamiento (fs.48 y 49 del cuadernillo del incidente de nulidad) que forman parte de las investigaciones que la Fiscalía Segunda Superior adelantó en el homicidio de Roberto Cuesta Rivas alias "Jamer", en los que se hace constar que los presuntos homicidas son Domingo Salas Rengifo alias "Mingo" y Wilson Mosquera Alias "Chombera", éste último con residencia en Cerro Cocobolo. En el allanamiento se determinó que allí vivía su esposa de nombre Juana Morales, y al concluir el proceso, se encontró a Walson Mposquera Mosquera, con cédula 5-18-284, culpable de homicidio en perjuicio de Roberto Cuesta Rivas. El detenido Wilson Omar Mosquera Mena reside en El Valle de San Isidro, casa N° A-23 y su esposa se llama Eduvigis Mosquera, tal como se observa otra falta de identificación entre los hechos y las pruebas necesarias para vincular, hasta esta etapa del proceso, a Wilson Omar Mosquera Mena con los delitos endilgados en el auto de llamamiento a juicio" (fs. 489-490).

Motivado por lo expuesto, el fallo de 7 de abril de 2,000 declaró ilegal

la detención del señor Wilson Omar Mosquera Mena.

Siendo este el panorama procesal que presenta el caso bajo examen, estimamos que le cabe razón al apelante el auto encausatorio contra su defendido debe reformarse y dictarse a su favor un sobreseimiento provisional.

Sin embargo queremos llamar la atención al Segundo Tribunal en el sentido que toda decisión debe estar motivada en hechos ciertos debidamente acreditados en el expediente y no en afirmaciones totalmente ajenas a la realidad procesal.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, REFORMA el auto apelado SÓLO en el sentido de SOBRESEER PROVISIONALMENTE a WILSON OMAR MOSQUERA MENA, de generales conocidas en autos por los delitos por los cuales se ordenó su indagatoria, de conformidad con lo normado en el artículo 2211 numeral 2° del Código Judicial.

Notifíquese y Archívese,

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SINDICADO POR TENTATIVA DE HOMICIDIO Y POSESIÓN ILÍCITA DE ARMAS DE FUEGO EN PERJUICIO DE ERIC BUITRAGO. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en grado de apelación, se recibe en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el auto de 16 de septiembre de 1998, por el cual se abre causa criminal por la vía en que interviene el jurado de conciencia en contra de EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, por considerarlo presunto infractor de disposiciones legales contenidas en el Título I, Capítulo I, del Libro II del Código Penal, en concordancia con el Título II, Capítulo VI, del Libro I del mismo cuerpo legal; es decir por el delito genérico de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de ERIC ENRIQUE BUITRAGO y de las disposiciones legales contenidas en el artículo 2 de la Ley 53 del 12 de diciembre de 1995, es decir por el delito de posesión ilícita de arma de fuego.

El Licdo. DANILO MONTENEGRO A., Abogado Defensor de Oficio, al momento de ser notificada del citado auto indicó que apelaba la decisión e interpuso el recurso en tiempo oportuno, el cual fue concedido en el efecto suspensivo.

Al corrérsele traslado del escrito de apelación a la Fiscal Segunda Superior, Licda. GEOMARA GUERRA DE JONES, ésta presentó escrito de objeciones al recurso impetrado por la defensa técnica.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El Licdo. DANILO MONTENEGRO A. señala los puntos en que basa su pretensión, advirtiendo que no procede el encausamiento penal contra su patrocinado, toda vez que éste no disparó el arma, sino que la utilizó solamente para amedrentar al presunto ofendido por razones de diferencias personales.

Seguidamente, el letrado manifiesta que EDUARDO GONZÁLEZ no llegó a realizar actos idóneos con la finalidad de atentar contra la vida del presunto ofendido, conclusión a la que llega tras analizar el informe suscrito por IGNACIO RUÍZ, miembro de la Policía Nacional; las declaraciones juradas de ERIC BUITRAGO, DANIEL TUÑÓN, RIGOBERTO RODRÍGUEZ CONTRERAS, ARIEL ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RICARDO ANDRÉS TUÑÓN FLORES JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ BERROCAL y ANTONIO HERNÁNDEZ MELGAR, así como la evaluación psiquiátrica forense del procesado y el peritaje de Balística Forense. (Fs.308-311)

Considera el apelante que al certificar los peritos de Balística Forense que el arma no es apta para producir disparos, estamos frente a lo que la doctrina denomina delito imposible, toda vez que con dicha arma jamás se habría podido producir la muerte de ERIC BUITAGRO. (f.312)

El recurrente concluye señalando que se debe revocar el llamamiento a juicio por tentativa de homicidio y declinar la actuación a la esfera jurisdiccional que corresponde para que se dilucide lo referente al otro delito imputado a su patrocinado que es la posesión ilícita de arma de fuego. (F.313)

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Luego de referirse a los planteamientos del recurrente, la Fiscal Segunda Superior expresó que el sindicado EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ sí llevó a cabo actos idóneos para la comisión del ilícito, que por causas ajenas a su voluntad, como fue que el arma de fuego no detonó, no se consumó el delito de homicidio, lo que se infiere de la declaración jurada de IGNACIO RUÍZ, miembro de la Policía Nacional, así como los testimonios de RICARDO A. TUÑÓN FLORES y JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ. (F.318)

La Funcionaria del Ministerio Público explica que no es aplicable en este caso la teoría del delito imposible, pues nuestra legislación no lo contempla, pero sí el iter criminis el cual se cumplió en su fase de intención, preparación, ejecución de los actos pero no se dio el resultado, por lo que se concretó el delito de homicidio en grado de tentativa, y por ello solicita que se mantenga el auto calificativo apelado. (F.319)

FUNDAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL A-QUO

El Segundo Tribunal Superior, luego de analizar las pruebas allegadas al cuaderno penal, señaló que se reúnen los elementos indispensables para abrir causa criminal contra EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ:

> "En relación al homicidio en grado de tentativa, el elemento objetivo se prueba con el informe policial y su posterior ratificación, mediante la cual se hace referencia a lo acontecido el día de marras. La vinculación del imputado se prueba con las deposiciones del afectado ERIC BUITRAGO, DANIEL TUÑÓN, RIGOBERTO RODRÍGUEZ y JOSÉ GONZÁLEZ quienes señalaron que el investigado apuntaba con arma de fuego a BUITRAGO incluso se afirma que intentó disparar, pero el proyectil no detonó. Estas deposiciones sumadas a lo señalado por el Departamento de Balística Forense, en el sentido de que el arma no era apta para producir disparos, nos hace concluir que por imperfecciones del arma de fuego fue que no se produjo el hecho fatal; además los agentes policiales tuvieron que efectuar un disparo al aire para persuadir al investigado para que no concluyera su intención, razones éstas que nos hacen concluir que estamos frente a una tentativa de homicidio.
>
> El investigado GONZÁLEZ ha sido imputado también por Posesión Ilícita de Armas, reuniéndose de igual forma los elementos para encausarlos por tal delito, ya que él aceptó estar en posesión del arma de fuego que a la postre resultó tener la serie limada".(F.260)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Consta en las sumarias que el 16 de marzo de 1997, en horas de la madrugada, EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ fue sorprendido por agentes policiales cuando encañonaba con un arma de fuego a ERIC ENRIQUE BUITRAGO, hecho ocurrido en el Sector de La Riviera, Corregimiento de Pedregal.

Se advierte que el punto medular de la controversia que nos ocupa es el hecho que se le imputa al señor EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ: el homicidio en grado de tentativa, que a criterio del recurrente no se configura.

Por tanto, entramos al examen de los elementos probatorios allegados al cuaderno penal, a efectos de determinar si le asiste la razón al apelante.

El Sargento IGNACIO RUÍZ, agente de la Policía Nacional, expresa que cuando vieron a GONZÁLEZ GONZÁLEZ que tenía encañonado a BUITRAGO, procedieron a su retención ya que pretendía ejecutarlo, le dieron la voz de alto para que soltara el arma y no ofreció resistencia, tirando el arma al suelo. (F.2)

Lo anterior es afirmado y ratificado por el Sargento RUÍZ en declaración jurada que reposa de foja 4 a 5 de la encuesta penal, en la que agrega que GONZÁLEZ GONZÁLEZ le manifestó que el ciudadano BUITRAGO lo tenía cabreado y por tal motivo lo iba a eliminar.

Por su parte, el señor ERIC BUITRAGO declaró que el día del incidente estaba en compañía de sus amigos "Nelo", RICARDO y JORGE, sentado en un banco que está antes de llegar a su casa, cuando vio un panel colegial gris, el cual pasó dos veces y le dijeron "se salvaron". El carro se fue con dirección a la casa de "Nuno" (EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ); luego vino "Nuno" con otra persona, y le dijo a BUITRAGO que si él era hombre porque no le hacía nada ahora, fue cuando GONZÁLEZ GONZÁLEZ sacó el arma y en ese momento llegó la patrulla de Turismo. (F.72)

Se le cuestionó al declarante si tenía alguna rencilla con EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y manifestó que a éste le habían robado un televisor y que pensaba que él (BUITRAGO) tenía algo que ver en el robo. (F.73)

En ampliación de declaración jurada, ERIC BUITRAGO manifestó que no había acusado a EDUARDO para evitar problemas y que quisiera que lo sucedido quedará así y que no lo llamen para ese caso. (Fs.123-124)

DANIEL ANOTNIO TUÑÓN FLORES indica que se encontraba conversando con BUITRAGO y otros amigos cuando llegó EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, comenzó a intercambiar palabras con aquel y luego sacó a relucir un arma de fuego, se formó una empujadera y llegó el patrulla. Explica que un primo de GONZÁLEZ GONZÁLEZ le quitó el arma, de allí que no puede decir si éste la accionó. (Fs.86-87)

En declaración jurada que consta de foja 90 a 91, RICARDO ANDRÉS TUÑÓN FLORES manifiesta que EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ le apuntó a ERIC BUITRAGO y quiso dispararle pero la bala no salió, se le encasquilló, ahí fue donde el primo le quitó el arma.

Por su parte, el testigo JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ BERROCAL expresó que EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ llegó con su primo, insultó a ERIC BUITRAGO y le sacó un revólver con el que le apuntó en dirección al pecho; ERIC se levantó y le dijo a EDUARDO que nada más creía en Dios, que lo matara si se atrevía, si eso era lo que él quería. Mientras tanto, EDUARDO seguía encañonando a ERIC con dirección al pecho, sonando el gatillo, del arma haciendo "clic" y en ese momento llegó el patrulla. (Fs.139-140)

Señala GONZÁLEZ BERROCAL que previo al incidente, había pasado un busito en el que viajaba EDUARDO con su primo y otros acompañantes, y que uno de los pasajeros les gritó "VAMOS A SOLTARLES BALA". De igual manera, expresa que

EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ percutó el arma una sola vez, ya que en esos instantes llegaba el patrulla y el primo le quitó el arma. (Fs.140 y 142)

ARIEL ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, primo de EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, refiere que llegó al lugar de los hechos y EDUARDO tenía el arma en la mano, parecía que le estaba reclamando algo a ERIC y en ese momento llegó el patrulla, dandola voz de alto y haciendo un disparo al aire. (F.185)

De otro lado, consta en el expediente el Peritaje de Balística Forense practicado al arma de fuego que portaba EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en el que se dictaminó lo siguiente:

> "CONCLUSIÓN: EL ARMA INCRIMINADA PRESENTA SU SERIE OBLITERADA.
> SUS MECANISMOS EXTERNOS E INTERNOS PRESENTAN DESPERFECTOS.
> NO ES APTA PARA PRODUCIR DISPAROS.
> SE OBTUVO LA SERIE V72431, DE LA VAQUETA DEL CILINDRO.
> NO SE ENCUENTRA REGISTRADA.
> NO SE LOGRÓ ESTABLECER SI PRESENTA CASO PENDIENTE O DENUNCIA ALGUNA". (F.269)

Por su parte, EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ manifestó en declaración indagatoria que nunca le pasó por su mente privarle la vida a BUITRAGO sino que quiso amenazarlo para ver si no seguía metiéndose con él.

Agrega que no llevaba la idea de disparar el arma, ni accionó el gatillo; no acostumbra a portar armas de fuego y desconoce su manejo, pues el arma que tenía se la encontró en un bus el 13 de mayo; no sabía que tenía balas, ni cuántas, ya que la guardó y solo la sacó hasta el día del incidente para sugestionar a ERIC BUITRAGO, pues se recordó de los problemas que habían tenido. (Fs.167-169)

Ahora bien, en la doctrina se ha señalado que objetivamente, en la tentativa debe existir "peligro de lesión" al bien jurídico, y ese es en la práctica el "resultado" en la tentativa: si no existe el peligro de daño al bien jurídico, tampoco existe tentativa".(Orlando Gómez López, El Homicidio, Tomo I, Editorial Temis, S. A., Santa Fe de Bogotá, 1993. p.151)

Teniendo en cuenta el criterio doctrinal frente a las pruebas examinadas, se tiene que no existió un peligro de daño corporal en la persona de ERIC BUITRAGO, pues EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ le apuntó con un arma de fuego que no era idónea para producir disparos, mucho menos para producir un peligro de vida.

En ese orden de ideas, el jurista Francisco Muñoz Conde refiere que hay casos dudosos en torno al homicidio como es el hecho de apuntar con el arma de fuego, el cargarla, el sacarla de la funda, etc; de allí que, en la tentativa lo decisivo es atender a la descripción de la acción en el tipo legal, pues no existe acto ejecutivo alguno en los ejemplos citados "cosa distinta es que muchos de estos hechos puedan ser castigados como amenazas, o por tenencia ilícita de armas".(Cfr. Derecho Penal Parte Especial, XIª Edición, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996. pp.41-42)

Si bien la conducta de EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ es reprochable, la Sala estima que no existen suficientes elementos que permitan subsumir su actuar dentro del tipo penal por el cual fue llamado a responder en causa criminal, ni en ninguno de los otros delitos que conforman el Capítulo I del Libro II del Código Penal, es decir, los delitos contra la vida y la integridad personal, pues se desconoce cuál era la intención de GONZÁLEZ GONZÁLEZ, es decir, el animus necandi o animus laedendi, por lo que en base al principio de favorabilidad al reo, se procede a decretar un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal.

No obstante, esta Colegiatura coincide con el Tribunal de primera instancia en que se encuentra acreditado el delito de posesión ilícita de arma de fuego y la vinculación del imputado, por lo que se declina la competencia de este hecho

punible a la esfera circuital.

Por lo antes expuesto, esta Sala accede a la pretensión del apelante.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República REVOCA el auto de 16 de septiembre de 1998, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial y DISPONE:

-SOBRESEER DEFINITIVAMENTE a EDUARDO GONZÁLEZ GONZALEZ, de generales que constan en autos, del cargo por presunto infractor de disposiciones legales contenidas en el Título I, Capítulo I, del Libro II del Código Penal, en concordancia con el Título II, Capítulo VI, del Libro I del mismo cuerpo legal; es decir por el delito genérico de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de ERIC BUITRAGO; y

-DECLINA COMPETENCIA en el delito de posesión ilícita de arma de fuego, ante el Juzgado Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá en turno.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE SOBRESEIMIENTO APELADO

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA FISCAL SEGUNDA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ CONTRA LA RESOLUCIÓN PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR, QUE SOBRESEE DEFINITIVAMENTE A PETER ANTHONY BYRNE DEL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE MAXIM CONROY. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema del recurso de apelación presentado por la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, contra auto de 24 de febrero de 2000, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante el cual, entre otras consideraciones, sobresee de manera definitiva a Peter Anthony Byrne de la comisión del delito de homicidio doloso en perjuicio de Maxim James Conroy.

Según se desprende del libelo de apelación, la funcionaria de instrucción no comparte la decisión del a-quo de declarar la inimputabilidad de Byrne ajustado a un trastorno psicótico paranoide agudo. En tal sentido, advierte que existen contradicciones en los dictámenes y en las declaraciones efectuadas por los médicos psiquiatras. En tal sentido, señala que el informe visible a fojas 654-666, y su correspondiente ratificación a fojas 732-740 realizada por los doctores Elaine Bressan, José Angel Calderón y Alejandro Pérez Méndez, señalan que el imputado sufrió una modalidad de trastorno mental transitorio que se conoce como trastorno psicótico paranoide agudo, de origen tóxico o tensional. (f.889, t. i). A su juicio, ese padecimiento no es psicótico, pues no altera la memoria, la vigilia, ni la estructura del pensamiento (fs. 891-892. t. i).

Otra contradicción que advierte la recurrente consiste en que los

trastornos paranoides se caracterizan porque pueden mantenerse por una semana o permanece por el resto de la vida, en casos crónicos, mientras que el trastorno mental transitorio es visible por su "temporalidad breve y fugaz del periodo de inconciencia, de incapacidad de distinción entre el bien y el mal de quien lo padece " (f. 893-894, t. i). Reitera que la conducta de Byrne no califica en un trastorno mental transitorio, ya que no tuvo una pérdida total de la conciencia o de la voluntad. En tal sentido, la declaración de Yira Flores Naylor revela que el imputado "era dueño de sus actos con inteligencia, pues tuvo suficiente capacidad para iniciar acciones encaminadas a eludir la responsabilidad del homicidio cometido" (f. 898, t. ii).

Con todo lo anterior, la recurrente expresa que "Es difícil entender en donde radica la inimputabilidad del procesado, si su padecimiento no afectó la estructura del pensamiento".

Considera entonces que el procesado padece de una personalidad paranoide, la cual es "una forma de comportarse de sentir y de expresarse del individuo, pero que no afecta su razonamiento, capacidad mental, y por ende su voluntad, que lo hace distinguir entre el bien y el mal; que no es ni debe ser considerada como causal o prerrogativa compatible con el contenido de los artículos 24 y 25 del Código penal. No debemos confundir entonces, la ira, celos, agresividad, violencia, que el individuo no trata de controlar con una afectación mental" (f. 902, t. ii).

Concluye la Fiscal Superior de Distrito Judicial con la solicitud de que sea revocada la resolución impugnada y en su lugar se ordene comparecer a juicio a Peter Anthony Byrne por ser infractor de las disposiciones contenidas en el Libro II, Título I del Código Penal o , de ser posible se ordene un nuevo examen que determine con certeza si Byrnes sufrió alguna patología o afectación mental al momento de causarle la muerte a Conroy (f. 903, t. ii).

Vistos los argumentos de la recurrente se pasa a examinar el cuaderno penal, a los efectos de decidir el recurso dentro de los parámetros que prevé el artículo 2428 del Código Judicial.

Las sumarias dan cuenta que la noche del 28 de julio de 1999, Peter Anthony Byrne llegó a la ciudad de Panamá procedente de los Estados Unidos, y se hospedó en la residencia de su amigo Maxim James Conroy, ubicada en el apartamento 20-A del Edificio Zafiro, localizado en el sector de Paitilla. La noche del 30 de julio, se inició una discusión entre Byrne y Conroy; durante el altercado, Byrne tomó un cuchillo y le infirió varias heridas punzo-cortantes a Conroy que le causaron la muerte. Una vez que efectuó el hecho criminoso, Byrne se bañó, se cambió de ropas e intentó salir del edificio, pero fue aprehendido en la entrada principal por personal de seguridad privada y miembros de la fuerza pública. El protocolo de necropsia reveló que la víctima presentaba once heridas punzo cortantes, dos heridas punzantes, dos heridas cortantes y una herida contusa en la cabeza. Concluye el informe médico que la muerte de Conroy se produjo por choque hemorrágico y por las múltiples heridas punzocortantes en cuello y tórax (f. 197. t. i)

La imputabilidad, que es un elemento de la noción de culpabilidad, supone la capacidad para conocer y valorar el deber de respetar la norma y de dirigir su conducta conforme a dicho conocimiento. Consiste en el "conjunto de condiciones psíquicas mínimas, necesarias, que desde el punto de vista subjetivo, determinan en el hombre la abstracta posibilidad de que en delito le pueda ser atribuido, con el fin de aplicarle las consiguientes sanciones penales; es decir, la imputabilidad penal fija los presupuestos psíquicos, que determinan la abstracta aptitud del hombre para ser autor de un delito y sufrir las consecuencias jurídico-penales inherentes al mismo" (ROMERO SOTO. Psicología Judicial y Psiquiatría Forense . Segunda Edición. Ediciones Librería Del Profesional. Bogotá. 1982. pág. 290).

La inimputabilidad es la faz negativa de la imputabilidad, hace desaparecer

la capacidad de culpabilidad del sujeto activo del delito, y ocasiona que a este no se le pueda atribuir un hecho típico y antijurídico.

La legislación sustantiva vigente reconoce, entre otras, el trastorno mental como causal de inimputabilidad. La resolución atacada declaró inimputable a Byrne, luego de atender las declaraciones de los psiquiatras forenses Elaine Bressan, José A. Calderón y de Alejandro Pérez, quienes coincidieron en manifestar que la conducta del imputado se adecuaba a un trastorno psicótico paranoide agudo, trastorno mental que, según su criterio, se ubica en el artículo 24 del Código Penal (cf. f. 739-740. t. ii).

La Corte considera que en autos no se encuentra comprobado fehacientemente el alegado trastorno mental. En tal sentido, mediante nota de 20 de agosto de 1999, los psiquiatras Bressan, Calderón y Pérez, dictaminaron que "las evaluaciones practicadas hasta el día lunes 16 de agosto del año que decurre, por este equipo, no revelan que el señor PETER ANTHONY BYRNE presente ninguna condición patológica que requiera en forma urgente o indispensable de su atención intrahospitalaria o de otras condiciones especiales" (f. 278, t. i). Pero en otro informe médico, fechado 27 de octubre de 1999 (cf. 654-655, t. i), aseveraron que Byrne "presentó un cuadro compatible con trastorno psicótico paranoide agudo, probablemente de origen tóxico o tensional" (cf. 654-655, t. I).

Como puede apreciarse, el primer informe de evaluación psiquiátrica dictaminó que Byrne no padecía de alguna patología. Dos meses después, los tres médicos forenses emitieron otro informe en el cual opinaron que el imputado presentaba un cuadro psicótico paranoide agudo. Ese cambio de postura que se aprecia en el informe de 27 de octubre de 1999, no ha sido explicado por los psiquiatras forenses.

Otro contrasentido que debe advertirse consiste en que no se ha establecido con claridad cual fue la etiología del alegado padecimiento de Byrne. En ese orden de ideas, los médicos afirman que con vista de que "el análisis practicado en orina no tiene suficiente duración como para detectar las sustancias que pudiesen haber causado ..." el cuadro psicótico paranoide agudo, "nos vemos en la obligación sugerir que se busquen estos residuos en algún tejido donde puedan perdurar por varios meses ... el posible resultado negativo de esta prueba solo descarta el origen tóxico y no otros orígenes como el factor tensional emocional" (f. 737, t. ii). En los términos en que está formulada esa idea, podemos entender que ante el hecho de que la prueba de orina no se realizó de manera oportuna, presumieron un "posible resultado negativo", por lo que solamente quedaba examinar si la patología tenía origen tensional. En otras palabras, ese dictamen, estableció una determinada patología por exclusión: si no se pudo recabar la prueba para comprobar una causa orgánica, entonces, debe ser funcional. Resulta difícil comprender que con esas ambigüedades pueda determinarse cual fue el factor que desencadenó el alegado cuadro psicótico paranoide agudo.

Las confusiones también se extienden al dictamen efectuado por Luis Ernesto Rodríguez, psicológo Forense del Instituto de Medicina Legal, cuando plantea que Peter Byrne evidenciaba "Rasgos de personalidad paranoide" (cf. 601-602. t. ii). En ese aspecto, tampoco hay concenso sobre ese diagnóstico, toda vez que el Doctor Julio Berguido, medico psiquiatra designado por la defensa técnica, señaló que el imputado "no presenta trastorno de personalidad ... la no existencia de alteraciones de conducta de inicio a temprana edad y de persistencia a lo largo de la mayor parte de la vida ... no se puede hablar que en el coexiste un trastorno de la personalid ad" (f. 684, t. i). Al confrontar nuevamente el dictamen psiquiátrico del Dr. Berguido, esta vez con las declaraciones efectuadas por los médicos forenses Pérez y Calderón, se aprecia otra contradicción. El primero plantea que Byrne "no poseía inteligencias para conocer o discernir sus actos y además no disponía de la voluntad para actuar libremente" (f. 688. t. i). Sin embargo, los psiquiatras forenses afirman que "El trastorno psicótico es un desorden en el pensamiento y no en la inteligencia ... dirige todos sus actos con toda su capacidad intelectual para organizar y prever su defensa" (f. 810. t. ii).

Todos los contrastes anotados nos lleva al convencimiento de que en autos no se encuentra acreditada la inimputabilidad de Peter Anthony Byrne. Y ante la deficiencia de la prueba allegada al cuaderno penal, lo que corresponde es presumir la imputabilidad del procesado, salvo prueba en contrario, tal como lo prevé el último párrafo del artículo 23 del Código Penal.

Atendida la condición de imputable de Peter Byrne, el cuaderno penal da cuenta que el delito de homicidio se acredita con la diligencia de reconocimiento y levantamiento del cadaver (fs. 2-3. t. i) el protocolo de necropsia (fs. 190-197. t. i) y el certificado de defunción de Maxim James Conroy (f. 825. t. i). En relación con la vinculación del imputado tenemos la declaración de Yira Argelis Flores Naylor (f. 23 t. i), de James Ellery Woolford Correa (f. 30. t. i) de Saturnino Flores Guardado (f. 18. t. i), de cuyas declaraciones puede establecerse con claridad que la noche del 30 de julio de 1999, Peter Byrne era la única persona que se encontraba en el apartamento de Conroy, le profirió varias heridas mortales con un cuchillo, y que tras ese hecho intentó evadir su responsabilidad, ya que fue aprehendido en el momento en que se disponía a salir del edificio. Cabe resaltar que mediante providencia de 3 de agosto de 1999, el funcionario de instrucción dispuso recibirle declaración indagatoria a Byrne (fs. 70-71), la cual fue practicada el 16 de septiembre de 1999 ante la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, y en la cual fue asistido por su apoderada judicial y un interprete, en cumplimiento con el procedimiento legal para la efectiva defensa del imputado. (Cf. 397-410. t. i).

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la resolución de 24 de febrero del 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y en su lugar, ABRE CAUSA CRIMINAL contra Peter Anthony Byrne, varón, nacido en Irlanda el 26 de marzo de 1966, soltero, pasaporte N° 402409, hijo de James Byrne y Josephine Byrne, de profesión Ingeniero Mecánico, como presunto infractor de las normas legales contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, es decir, por el delito genérico de homicidio doloso cometido en perjuicio de Maxim James Conroy.

Se ordena la inmediata detención preventiva del imputado Byrne.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE LUIS ENRIQUE SEMPERO CÓRDOBA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, CINCO (5) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La defensa técnica de Luis Enrique Sempero Córdoba ha presentado recurso de casación contra la sentencia de 12 de enero de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual confirma la pena de 40 meses de prisión y B/15,000.00 balboas de multa, como responsable del delito de reproducción, modificación y distribución de películas o videogramas en su modalidad simple.

A los efectos de decidir sobre su admisibilidad, se observa que el libelo fundamenta una causal de casación en el fondo que se refiere al caso en que la sentencia atacada impone una sanción que no corresponde a la calificación aceptada respecto al delito, causal que está consagrada en el numeral 12 del artículo 2434 del Código Judicial. Esa causal es apoyada por un motivo, el cual plantea que el Tribunal Superior le impuso "erróneamente" a Sempero Córdoba la pena de 40 meses de prisión, cuando el intervalo establecido en la ley penal corre de 30 días a 18 meses de prisión (f. 3047). La Corte tiene serias dudas de que el argumento en cuestión, constituya un cargo de injuridicidad que sea idóneo para activar todo el procedimiento de casación penal en el fondo. A juicio de la Sala, el motivo que se expone surge porque el recurrente hace una explicación parcial, incompleta sobre la manera en que el ad-quem confirmó la dosificación impuesta por el a-quo.

Una simple lectura a la sentencia atacada y a la resolución proferida por el juez de primera instancia revela que Sempero Córdoba, con un solo acto, vulneró los artículos 121 y 122 de la ley No. 15 de 8 de agosto de 1994, los cuales estipulan penas para los infractores de los derechos de autor. Pero como quiera que las reglas del concurso ideal establece que al sancionado se le impone la pena más grave de las infracciones legales que resultó ser responsable, la pena imponible le fue fijada con base en el artículo 122, cuya penalidad corre de 2 a 4 años de prisión.

No es necesario admitir esta iniciativa procesal para luego expresar que el motivo comentado carece de un verdadero agravio a la parte afectada o que la sentencia atacada fue emitida con observancia de la ley, cuando, como se ha visto, resulta claro que la pena de 40 meses de prisión provino de la penalidad estipulada en el artículo 122.

Estas apreciaciones revelan que el recurrente pretende ocupar a la Sala con un recurso extraordinario sin trascendencia, significación o con verdaderos cargos de injuridicidad contra la sentencia atacada.

En cuanto al requisito concerniente a las disposiciones legales infringidas, considera la Sala que es confusa la explicación con la cual se sustenta la violación del artículo 122 de la ley 15 de 8 de agosto de 1994 (f. 3048). Comienza con el argumento de que la conducta de Sempero Córdoba no se adecua al tipo que prevé esa norma legal, y concluye con que el Tribunal Superior aplicó de manera errónea la sanción estipulada en esta. Finalmente, la Corte considera que si el recurrente afirma que su defendido debió ser sancionado con base a la pena que establece el artículo 121 de la ley 15 de 8 de agosto de 1994 (3049), entonces, el concepto más apropiado era el de violación directa por omisión, ya que ello supone que el Tribunal Superior no aplicó una norma legal que contiene la sanción correcta para su patrocinado.

La Corte es del criterio que el motivo y las disposiciones legales no sustentan de manera apropiada la causal que invoca, por lo que es del caso proceder a su no admisión.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación contra la sentencia de 12 de enero de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual confirma la pena de 40 meses de prisión y B/15,000.00 balboas de multa fijada a Luis Enrique Sempero Córdoba, como responsable del delito de reproducción, modificación y distribución de películas o videogramas en su modalidad simple.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES

CON SALVAMENTO DE VOTO

(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

SALVAMENTO DE VOTO
MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON C.

Ante la resolución apoyada por la mayoría de los Magistrados que integran la Sala Penal de este cuerpo colegiado, mediante la cual se decide no admitir el recurso de casación penal en el fondo propuesto por la defensa técnica de Luis Enrique Sémpero Córdoba, contra la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, me veo forzada a salvar el voto, en vista que disiento con lo que se resuelve, fundada en las siguientes consideraciones:

1. La manera como se sustenta la no admisión del recurso, a mi parecer, y con el mayor respeto, resulta incorrecta, pues se incursiona en análisis que son propios del examen de fondo del recurso, y no de la etapa de admisión, la cual por mandato procesal debe limitarse a establecer si se cumple con las formalidades contenidas en los artículos 2434 o 2435, 2438 y 2443, del Código Judicial.

2. Más aún, para explicar en qué consisten y de qué manera se sustentan las dudas respecto a los señalamientos que hace el recurrente a título de cargos de injuridicidad, la resolución se adentra a examinar la sentencia atacada y la resolución del juez de primera instancia, para calificar la conducta del imputado y más aún para concluir que la pena que se le impuso fue fijada con arreglo a la ley penal.

3. Lo señalado en el punto anterior, resulta a mi juicio una incursión en aspectos que no corresponden a la etapa en que la Sala debe pronunciarse sobre la admisibilidad o no del recurso, lo cual debe hacerse con apego a las disposiciones procesales ya citadas. Por otra parte, y más gravemente aún, constituye un método de abreviación procesal que no está permitido, sobre todo, cuando se califica como "sin trascendencia y significación" el recurso extraordinario interpuesto por el defensor.

4. Me veo compelida a consignar, una vez más, éstos señalamientos a la resolución que motiva mi salvamento de voto, por cuanto que tanto en éste caso, en el cual una persona ha sido condenada a pagar una pena de 40 meses de privación de su libertad personal, así como en cualquier otro proceso que sea susceptible del recurso de casación penal, estimo que la Sala debe respetar las reglas procesales para la admisión de los recursos de casación.

5. Finalmente, mi disensión también se produce en cuanto a las consideraciones contenidas en la resolución en torno a las disposiciones legales infringidas, ya que estimo que han sido adecuadamente formuladas, por lo que procede la admisión del recurso.

Como quiera que, tal cual expresé al inicio, no existe unanimidad de criterios en la Sala respecto de la admisión del presente recurso de casación, inclinándose la mayoría en el sentido que se expresa la resolución, con el mayor respeto, SALVO MI VOTO.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO EN EL PROCESO PENAL QUE SE LE SIGUE A SILVINA PAUL, MONIQUE MONROSIER Y ALEXIS PIERRE JEANTY, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de recurso extraordinario de casación interpuesto por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Droga Arturo González Baso, contra la sentencia fechada 6 de diciembre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, la cual reformó la sentencia de 9 de marzo de 1999, emitida por el Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido que condenó a Alexis Pierre Jeanty a seis años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período una vez cumplida la pena principal y absolvió a Monique Monrosier y a Silvina Paul, por la comisión del delito de tráfico internacional de drogas.

En esta oportunidad corresponde examinar el escrito de formalización del recurso de casación, con la finalidad de comprobar si cumple con los requisitos para su admisibilidad.

El casacionista invoca dos causales de casación en el fondo: error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Ambas causales se encuentran consagradas en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

La primera causal invocada, está sustentada con cinco motivos. En ellos, básicamente el casacionista manifiesta que el tribunal de la causa no valoró las declaraciones contradictorias de Alexis Pierre Jeanty, Silvina Paul y de Monique Monrosier (fs. 583-585). Como se observa, estos argumentos van dirigidos a demostrar que el ad-quem no valoró las declaraciones de los imputados, cuando el propio tribunal al dictar la sentencia se basó, precisamente, en las declaraciones indagatorias de los sindicados, tal como consta a fojas 550 a 556 del expediente.

En cuanto al requisito de las disposiciones legales infringidas, se señalan como vulnerados los artículos 908, 896, 904 del Código Judicial y el artículo 255 del Código Penal (fs. 586-588). El primero, porque dejó de aplicarse ante las contradicciones de los imputados. La segunda norma, a juicio del casacionista fue violada, ya que los sindicados tenían interés en el proceso. Con respecto a la tercera norma, porque el tribunal no valoró el testimonio de Silvina Paul, y la cuarta norma ya que el ad-quem al no valorar el acervo probatorio obrante en el expediente no aplicó dicha norma a Paul y Monrosier.

Nótese que el recurrente lejos de probar el concepto de la infracción de las normas citadas, lo que realiza son alegaciones del caso tendientes en demostrar el supuesto error en el que incurrió el tribunal al momento de dictar la sentencia y olvida explicar jurídicamente de qué manera fueron violadas esas normas, sobre todo cuando ya se manifestó que el tribunal si valoró las declaraciones de los imputados.

La segunda causal invocada, error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, está debidamente sustentada con un solo motivo (fs. 588). Igualmente, se encuentran las disposiciones legales infringidas que le sirven de sustento a la causal invocada, señalando como normas vulneradas los artículos 904 del Código Judicial y el artículo 255 del Código Penal.

Tras analizado el recurso de casación interpuesto, es necesario destacar que la iniciativa procesal únicamente debe ser admitida en lo concerniente a la segunda causal, toda vez que la primera de ellas adolece de defectos en cuanto a los motivos y disposiciones legales infringidas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación presentado por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Droga Arturo González Baso, contra la sentencia de 6 de

diciembre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, sólo en cuanto a la segunda causal invocada y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la Nación, por el término de ley.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
CON SALVAMENTO DE VOTO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO
MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON C.

Ante la resolución apoyada por la mayoría de los Magistrados que integran la Sala de lo Penal de este cuerpo colegiado, mediante la cual se decide admitir el recurso de Casación Penal en el fondo, en lo atinente a la segunda causal que fuera propuesto por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Droga contra la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá en el proceso seguido a MONIQUE MONROSIER y SILVINA PAUL, por el delito de Trafico Internacional de drogas, me veo forzada a salvar el voto, en vista que disiento en parte con lo que se resuelve.

Si bien convengo que se admita el recurso en cuanto a la segunda causal, considero que igualmente la primera causal cumple con los requerimientos procesales establecidos para la interposición de éste tipo de recursos.

Así tras leer el escrito de formalización del recurso de Casación presentado por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, encuentro que tanto los motivos como las disposiciones legales infringidas han sido adecuadamente formuladas, por lo cumplen con lo dispuesto en las normas de procedimiento penal para la Casación en el Fondo.

Como quiere que, no existe unanimidad de criterios en la Sala respecto a la admisión del presente recurso de Casación, inclinándose la mayoría en el sentido que se expresa la resolución, con el mayor respeto, SALVO MI VOTO.

FECHA: UT SUPRA.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A ALFREDO NAVARRO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL, COMETIDO EN PERJUICIO DEL MENOR JUAN RICARDO MEDINA AMAYA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, ONCE (11) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Silvio Guerra Morales, apoderado judicial de Alfredo Navarro ha presentado recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 12 de enero de 2000, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. Esta medida jurisdiccional confirma la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Primero de Circuito Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, que condenó a Alfredo Navarro a cumplir la pena de 42 meses de prisión, por ser responsable del delito de violación carnal cometido en perjuicio del menor Juan

Ricardo Medina Amaya.

Vencido el término de lista que dispone el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala Penal determinar si el recurso extraordinario propuesto, cumple con los requisitos para su admisibilidad, establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Con tal finalidad, se aprecia que el casacionista fundamenta su recurso en la causal de "Error de Hecho en cuanto a la existencia de la prueba", contenida en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial. La causal invocada viene sustentada en 8 motivos, sin que ninguno de ellos tengan la eficacia de demostrar que el juzgador ad-quem incurrió en una infracción de la ley. En efecto, se observa que el defensor técnico se refiere a diversas piezas probatorias y a diversas circunstancias especiales que, según él, inciden en el status procesal de su defendido; sin embargo, omite precisar, con claridad y coherencia, cuáles fueron los elementos probatorios que, en concreto, no fueron valorados por el juzgador de segunda instancia y de qué manera esto influyó en lo dispositivo del fallo, como es el propósito de la causal alegada.

Los defectos en el aparte de los motivos, se acentúan cuando se comprueba que algunos elementos de juicio que el recurrente menciona no fueron valorados por la resolución judicial impugnada, como los testimonios de Antonio Enrique Oses Castillo, Sebastián Pérez Gutiérrez y Félix Lutrell, en realidad sí fueron considerados por el Tribunal Superior para definir la situación jurídica del imputado (véase fojas 517 a 519).

Con relación a la sección de las disposiciones legales infringidas, también se observan defectos que deben ser resaltados. Así, vemos que el casacionista cita la infracción de los artículos 769, 2058 literales a) y b), 2071 numerales 1 y 2, 2127, 2247, 2257 y 2259 Del Código Judicial (f. 543); sin embargo, omite cumplir con los requisitos legales de transcribir las disposiciones y explicar el concepto de infracción, entre los que se encuentran: la violación directa, por omisión o por comisión, la indebida aplicación y la interpretación errónea.

De igual manera, se advierte que el recurrente omite señalar la norma sustantiva penal que resultó vulnerada por el error alegado, como debe ser por tratarse de un recurso de casación en el fondo.

Como quiera que el libelo examinado carece de coherencia, tanto lógica como jurídica, y presenta defectos insubsanables, resulta inadmisible el recurso que se pretende formalizar.

Por las consideraciones expuestas, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado Silvio Guerra Morales, defensor técnico de Alfredo Navarro, contra la sentencia de 12 de enero de 2000, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES

(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE ENRIQUE YAU YAU, CONDENADO COMO AUTOR DEL DELITO DE INJURIA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DOCE (12) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de recurso extraordinario de casación en el fondo propuesto por el licenciado Silvio Guerra, apoderado judicial de Enrique Yau Yau, contra la sentencia calendada 4 de febrero de 2000, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual se confirmó la sentencia fechada 19 de agosto de 1999, proferida por el Juzgado Primero de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido que condenó a Enrique Yau Yau a la pena de doce meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período una vez cumplida la pena principal, como responsable del delito de injuria cometido en perjuicio de El Expreso, S. A., y Kuo Tu Wei.

Corresponde en esta etapa procesal examinar el escrito de casación interpuesto, con el objeto de verificar si cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo establecen los artículos 2434 y 2443 del Código Judicial.

Observa la Corte, que si bien el recurso de casación fue interpuesto en tiempo oportuno, contra una decisión de segunda instancia emitida por un Tribunal Superior de Justicia, el delito por el cual se recurre tiene una penalidad inferior a los dos años de prisión, tanto en su forma simple como en su forma agravada. Por lo tanto, esa situación imposibilita realizar un examen al libelo presentado, toda vez que no es susceptible del recurso extraordinario de casación, ya que incumple con uno de los requisitos que establece el primer párrafo del artículo 2434 del Código Judicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso extraordianrio de casación presentado por la defensa técnica de Enrique Yau Yau, contra la sentencia de 4 de febrero de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SANTIAGO BEJERANO BEJERANO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licdo. ROUMEL G. SALERNO C., abogado defensor de oficio de SANTIAGO BEJERANO BEJERANO, anunció y formalizó recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el 22 de noviembre de 1999, en la que se confirma el fallo emitido por el Juzgado Sexto del Circuito Judicial de Chiriquí, Tercer Distrito Judicial, en que se condena a su poderdante a la pena de sesenta meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo período de la pena principal, por la comisión el delito contra el pudor y la libertad sexual.

Vencido el término de lista para que las partes interesadas tuvieran conocimiento del ingreso de este negocio a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, corresponde en este momento procesal, determinar si el medio de impugnación propuesto se adecúa a las exigencias externas e internas

que establece la ley en esta materia.

Primeramente, se observa que el escrito está dirigido al Presidente de la Sala de lo Penal, conforme a lo preceptuado en el artículo 102 del Código Judicial; el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, por la persona facultada legalmente para hacerlo y contra sentencia de segunda instancia, emitida en un proceso penal por delito cuya pena es superior a dos años de prisión.

En cuanto a la concurrencia de las exigencias normativas que establece el artículo 2443 del Código Judicial, se puede apreciar que la historia concisa del caso el recurrente hace una relación sucinta y objetiva de los hechos que dieron lugar al fallo condenatorio.

Por otro lado, advierte esta corporación de justicia que la causal que fundamenta el recurso es el "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustantiva penal", consagrada en el numeral 1, artículo 2434 del Código Judicial.

La causal invocada es sustentada por dos motivos, que a pesar de estar debidamente individualizados, al leer su contenido se infiere que el segundo motivo es una continuación de la idea expuesta en el primer motivo. La jurisprudencia de la Corte ha sentado el criterio que los motivos deben ser redactados en forma breve, precisa y concisa, incluyendo en cada uno el vicio de injuridicidad que se le endilga a la resolución del Tribunal A-quem, requisito que no se cumple en el libelo en examen.

Con relación a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, se tiene que el recurrente enuncia y transcribe el artículo 2074 del Código Judicial, indicando que el concepto de infracción es la "violación directa", el cual desarrolla a renglón seguido.

Sobre el particular, se debe señalar que la violación directa de la ley puede darse en dos sentidos: 1. Violación directa por omisión; y 2. Violación directa por comisión. Dicho concepto debe ser desarrollado en armónica relación con los motivos y la causal aducida, y comoquiera que el recurrente no ha especificado en que forma se dio la transgresión de la norma ello no permite examinar estos tres aspectos en su conjunto.

Seguidamente, el casacionista cita y transcribe en forma íntegra el texto del artículo 2122 del Código Judicial, explicando y desarrollando el concepto de infracción que, a su criterio, es la violación directa por omisión.

No obstante, se debe indicar que cuando se invocan causales probatorias, las normas adjetivas que se citen como infringidas deben ser de aquellas que establecen parámetros de valoración de prueba. Así las cosas, se advierte que el artículo 2122 se encuentra en el Título II, Capítulo III del Libro Tercero del Código Judicial, que contiene disposiciones legales que establecen cómo se debe llevar a cabo la investigación de los delincuentes, por lo que resulta improcedente hacer referencia a estas normas si se ha aducido una causal probatoria.

Finalmente, yerra el abogado al no citar y transcribir la norma sustantiva que se considera violada a consecuencia de la infracción de las normas adjetivas, requisito de la esencia del recurso.

Las fallas advertidas en la formalización de este recurso exceden de las de tipo formal subsanables, pues inciden en aspectos de fondo sobre la viabilidad de este recurso.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado en el proceso penal seguido a SANTIAGO BEJERANO BEJERANO por delito contra el pudor y la libertad sexual.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARCOS ALVARADO PRADA MEDINA SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Por cumplido el período de lista de que trata el artículo 2443 del Código Judicial, en los casos de recursos extraordinarios de casación en materia penal, la secretaría de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha pasado el expediente contentivo del juicio seguido a MARCOS ALVARO PRADA MEDINA, quien fue condenado a sesenta y cuatro (64) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, como autor del delito de tráfico internacional de drogas consumado, pena que fue confirmada mediante sentencia N° 9-S.I. de 24 de enero de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

El recurso fue presentado por persona hábil, promovido dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal, contra una resolución que en efecto admite este tipo de recurso extraordinario y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

Corresponde en este momento procesal analizar el contenido del libelo, a fin de comprobar si reúne los requisitos formales que preceptúa el artículo 2443 del Código Judicial.

El Licdo. MAURO OCTAVIO PÉREZ CITTADINI, abogado defensor del señor PRADA MEDINA, dirige el libelo de casación al Magistrado Presidente de esta Sala de la Corte, observando el tenor del artículo 102 del Código Judicial.

Seguidamente, el casacionista desarrolla el epígrafe de la historia concisa, en el que se narra la génesis de los hechos que dieron lugar al proceso, pero se incurre en varios desaciertos, toda vez que se transcribe el contenido de la declaración indagatoria, declaraciones juradas e Informe de Novedad. No obstante, se plantea el cargo de injuridicidad que obra contra la sentencia de segunda instancia dictada por el A-quem.

El letrado fundamenta el recurso en una sola causal que es "error de derecho al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal", establecida en el numeral 8 del artículo 2434 del Código Judicial.

Como se observa, el casacionista se refiere al precitado numeral 8 sin tener en cuenta que la Corte ha manifestado en distintos fallos que es necesario desglosar las causales que se encuentran reproducidas en esta norma, invocando aquella que se adecue al caso en concreto, pues este numeral se refiere al:

a) Error de derecho al admitir los hechos constitutivos de

circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal;

d) Error de derecho al calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad penal. (Ver Fallos de 30 de mayo de 1997 y 28 de abril de 2000)

Seguidamente, de conformidad con la estructura del recurso, el letrado enuncia cuatro motivos que sustentan la causal. No obstante, cabe destacar que la jurisprudencia uniforme de esta Sala ha sostenido que es necesario que los motivos se relacionen con la causal seleccionada por el recurrente, pero como en el negocio en examen el casacionista no ha precisado cuál es la causal que fundamenta el recurso, dicho error no permite que el Tribunal de Casación entre a hacer algún tipo de análisis sobre los hechos presentados.

Por otra parte, el recurrente considera que las disposiciones legales infringidas son los artículo 884 y 905 del Código Judicial, normas cuyo texto transcribe en forma íntegra, considerándolas infringidas en concepto de violación directa por omisión. A consecuencia de la violación de las normas adjetivas, el recurrente estima que ha sido infringido el artículo 66 del Código Penal y el artículo 28 de la Ley 13 de 1994, indicando que fueron transgredidos en concepto de violación directa por omisión. Los conceptos de infracción son desarrollados a renglón seguido de cada norma.

Como quiera que el error advertido en el recurso de casación interpuesto a favor de MARCOS ALVARO PRADA MEDINA recae sobre un requisito esencial del recurso resulta improcedente su admisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuestos por la defensa técnica de MARCOS ALVARO PRADA MEDINA.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ANTONIO OSORIO ABREGO, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Reingresa el expediente del proceso penal seguido a favor de ANTONIO OSORIO ABREGO, sancionado por delito contra la fe pública, que contiene el auto de 22 de junio de 2000, mediante el cual esta Sala dispuso no admitir el recurso extraordinario de revisión presentado a favor del procesado. (Fs.719-727).

La Doctora AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, apoderada judicial del señor OSORIO ABREGO, presentó escrito de solicitud de aclaración. (Fs.728-730)

FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD

La jurista manifiesta que el Capítulo II del Título VIII del Libro III del Código Judicial señala dos fases del proceso al que se somete el recurso de

revisión: su admisibilidad "in limine", de carácter formal, con base en el artículo 2459 del Código Judicial y luego desarrollo del contradictorio, práctica de prueba, inmediación y alegatos que concluye con el examen de fondo de las causales y de las pruebas que las sustentan. (Fs.728-729)

Seguidamente, indica que la inadmisibiliad "in limine" solo ocurre por inobservancia de los requisitos señalados por el artículo 2459 del Código Judicial. Agrega que un examen de fondo sobre la causal y las pruebas, antes del contradictorio, es un acto "per saltum" en perjuicio del derecho del sentenciado a demostrar y sustentar el medio impugnativo presentado.

Continúa la recurrente manifestando lo siguiente:

> "QUINTO: El Tribunal Adelantó su fallo sin escuchar a las partes en la fase de inmediación.
>
> SEXTO: El concepto de sentencia ejecutoriada en materia procesal es equivalente a sentencia en firme y a resolución que hace tránsito a cosa juzgada. La determinación de la confirmación o ratificación de una sentencia en segunda instancia, es válida para determinar la competencia en los casos de amparos de garantías, no así en la revisión que es de competencia privativa de la Corte, aun en los casos de sentencias expedidas por Juzgados Municipales.
>
> SOLICITUD: Con el debido respeto le pedimos al Tribunal que nos aclare cómo se inadmite una revisión después de hacer un examen unilateral, de fondo, sobre las pruebas y causal invocadas, pero no practicadas y sustentadas en alegatos por escrito, omitiendo el contradictorio, la publicidad y la inmediación que el sistema procesal garantista otorga a los ciudadanos".(Fs.729-730)

FUNDAMENTO DE LA SALA

Se advierte que la presente solicitud de aclaración interpuesta por el Doctora AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, se dirige de manera específica a indagar sobre el fundamento de la decisión emitida en el auto de 22 de junio de 2000.

Como fundamento legal de su solicitud, la distinguida jurista invocó, entre otras normas, el artículo 986 del Código Judicial, que establece lo siguiente:

> "La sentencia no puede revocarse ni reformarse por el Juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, puede completarse, modificarse o aclararse, de oficio, dentro de los tres días siguientes a su notificación o a solicitud de parte hecha dentro del mismo término.
>
> También puede el Juez que dictó una sentencia aclarar las frases obscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los términos fijados en la primera parte de este artículo.
>
> Toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, en que se haya incurrido , en su parte resolutiva, en un error pura y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, es corregible y reformable en cualquier tiempo por el juez respectivo, de oficio o a solicitud de parte, pero sólo en cuanto al error cometido".

Como bien se observa, el contenido de la precitada excerta legal determina que la aclaración y corrección de decisiones judiciales se centra en la parte resolutiva de las mismas.

En ese sentido, el Pleno de esta Corte Suprema de Justicia mediante

resolución de 22 de junio de 1992 al referirse a la citada norma ha manifestado:

> "La aclaración de sentencia no es otra instancia en que puedan debatirse las motivaciones de la Resolución, o las razones por las cuales se negaron las pretensiones del demandante, puesto que no es ésta la naturaleza jurídica de la institución".

Por otra parte, la Sala en reiterados fallos ha sostenido que el artículo 986 del Código Judicial "es claro en cuanto al sentido y alcance de las aclaraciones y correcciones de las resoluciones judiciales, cuando señala que la aclaración de frases oscuras o de doble sentido susceptibles de aclaración, deben corresponder a la parte resolutiva". (Ver fallos de septiembre 18 de 1990, mayo de 1997, 15 de octubre de 1998, 30 de agosto de 1999).

Comoquiera que la presente solicitud de aclaración está dirigida específicamente a cuestionar el fundamento de la decisión emitida en el auto de 22 de junio de 2000, y no a su parte resolutiva, se hace improcedente lo peticionado por la recurrente.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DESESTIMA LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN impetrada en este caso.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA LA SENTENCIA 29 DE DICIEMBRE DE 1999, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUE ABSOLVIÓ A RICAURTER VARGAS, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de recurso extraordinario de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia fechada 29 de diciembre de 1999, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, la cual confirmó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, que absolvió a Ricaurter Virgilio Vargas Lee, por la supuesta comisión de delito contra la salud pública relacionado con drogas.

Corresponde en esta oportunidad examinar el libelo de formalización del recurso de casación, a fin de comprobar si cumple con los requisitos para su admisibilidad, a lo que procede.

Se observa que la iniciativa procesal fue interpuesta contra una decisión de segunda instancia, emitida por un Tribunal Superior y por un delito que conlleva una pena superior a los dos años de prisión, por lo que se cumple con los requisitos que plantea el artículo 2434 del Código Judicial.

Por otro lado, el casacionista expone la historia concisa del caso e invoca

como única causal de casación en el fondo, el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, contemplada en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial. Dicha causal, viene con un sólo motivo que le sirve de fundamento. Aunado a ello, se cuenta con las disposiciones legales infringidas que le sirven de sustento a la causal invocada. Con vista de que esta Superioridad encuentra fundados los requisitos para la formalización del recurso de casación, resulta procedente acceder a su admisibilidad.

Por las consideraciones anteriores, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia calendada 29 de diciembre de 1999, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la Nación por el término de ley.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA INTERPUESTO A FAVOR DE CARLOS IVAN AYALA SHEFFER SANCIONADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL EN PERJUICIO DE MITALIA GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL 2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Fiscal de Circuito Judicial de Panamá, Area de Ancón, ha propuesto recurso de casación en la forma contra resolución de 1 de julio de 1999 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Esta decisión jurisdiccional confirma la resolución de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo de Circuito Penal de Panamá, la cual declara la nulidad de lo actuado en el proceso a partir del llamamiento a juicio, ordena la reposición del proceso a partir de la foja 903 del expediente y remite lo actuado para ante el Juzgado de Circuito de lo Penal en turno del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, en el negocio criminal que se le sigue a CARLOS IVAN AYALA SHEFFER y otros por delito Contra el Pudor y la libertad sexual en perjuicio de Mitalia Gómez.

Vencido el término de lista que dispone el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala determinar si el libelo de formalización del recurso cumple con los requisitos que nuestro ordenamiento jurídico exige para su admisión.

Se aprecia que la historia concisa del caso relata en forma subjetiva y extraña a este apartado del recurso, un resumen de la denuncia, de actos sumariales y jurisdiccionales y su posición frente al proceso. La misma solamente debe contar con los hechos más relevantes, que permitan advertir los cargos de injuridicidad al tribunal de casación . Por otro lado, se citan folios en los cuales se encuentran los elementos probatorios referidos a los hechos relatados sin ajustarse a lo dispuesto por el numeral 3 literal a del artículo 2443 del Código Judicial (Ver Registro Judicial de Junio de 1999, p.342).

Además, se observa que la recurrente esgrime como causal única de casación, la causal "Haber incurrido en equivocación relativa..." al "...lugar donde se cometió el hecho..." contenida en el numeral 5 del artículo 2437 del Código Judicial.

Dicha causal la basa en tres motivos, en los cuales en el primer motivo

anota: "...ha aplicado desacertadamente la Ley N°1 del 14 de enero de 1991..." y transcribe textualmente el artículo 3 de dicha ley. En el segundo y tercer motivo en forma congruente anota en que consiste el probable cargo de injuridicidad.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, la recurrente sostiene la violación directa por omisión del artículo 1968 del Código Judicial, el cual se refiere a las garantías del debido proceso.

Subraya la violación directa del artículo 1999 del Código Judicial, en la cual al explicar en que consiste la violación, cuestiona la valoración dada a un documento público, lo que podría servir de motivo a una causal de naturaleza probatoria como la de error de derecho en la valoración de la prueba, más no como explicación de la violación a la norma mencionada.

En la última disposición citada considera vulnerado el parágrafo de la Ley N°1 de 14 de enero de 1991, en concepto de violación directa por omisión, indicando que se ha considerado un punto geográfico perteneciente a una jurisdicción, el cual es ajeno a la misma de acuerdo a las disposiciones del Tratado del Canal de Panamá. Sobre esto, la Corte llama la atención en el sentido de que no es posible aducir la infracción de una norma legal y referirse en su explicación a otra norma como lo es un tratado. La doctrina patria expone: "..cuando el casacionista explica el concepto de infracción de una norma jurídica, se encuentra impedido para referirse al mismo tiempo a otra disposición legal, pues podría crear confusiones al resolver el recurso." (RODRIGUEZ MUÑOZ, Omar Cadul. "El Recurso de Casación Penal, en la obra Acciones y Recursos Extraordinarios, Manual Teórico-Práctico, Edit. Mizrachi & Pujol, Primera edición, Panamá, 1999, p.193.)

Concluido el examen del libelo, toda vez que no se ajusta a los presupuestos legales, jurisprudenciales y en atención a que carece de un planteamiento lógico y bien estructurado procede denegar su admisibilidad.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en la forma presentado por la Fiscal de Circuito de Ancón, contra la resolución de 1° de julio de 1999 expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso seguido a CARLOS IVAN AYALA SHEFFER y OTROS por delito Contra el Pudor y la Libertad sexual en perjuicio de Mitalia Gómez.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A BELEN ITZEL JUSTAVINO Y OTRO, SINDICADOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado JOSE I. CABALLERO, en su condición de apoderado judicial de BELEN ITZEL JUSTAVINO, ha interpuesto recurso de casación penal contra la sentencia expedida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que confirmó la de primera instancia en donde se condenó a su representada a la pena de cuarenta (40) meses de prisión como autora del delito de hurto.

Vencido el término de lista que establece el artículo 2443 del Código

Judicial, corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad del recurso.

A tal efecto, prima facie se advierte que la iniciativa procesal se dirige a los Honorables señores Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en contravención de lo que establece el artículo 102 del Código Judicial, según el cual, el libelo bajo examen debe dirigirse al Magistrado Presidente de esta Sala.

Por otro lado, omite especificar si el recurso de casación presentado es en el fondo o en la forma.

Con relación a los requisitos que establece el numeral 3 del artículo 2443 ibídem, se observa que el escrito presentado no contiene los requisitos estructurales exigidos los cuales son los siguientes:

A. Historia concisa del caso.
b. La causal o causales que se invocan.
c. Especificar los motivos, disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido.

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado de manera uniforme, que en la estructura del recurso, a continuación de la historia concisa del caso deben enunciarse las causales que se invocan, cada una seguida de los motivos que la fundamentan y de las disposiciones legales que se estiman infringidas, con el correspondiente concepto de infracción. En el caso bajo examen, la Corte observa que el censor ha presentado un escrito propio de un recurso de instancia ordinaria, con alegatos y apreciaciones subjetivas, todo lo cual contradice la técnica de este tipo de recurso extraordinario. No presenta cada uno de los epígrafes de manera autónoma y separada como ha quedado sentado en reiterada jurisprudencia de esta Sala.

El recurrente narra cada uno de los momentos procesales en forma detallada, señalando las resoluciones que se iban dictando; hace gran énfasis en el fallo de primera instancia y manifiesta apreciaciones subjetivas, todo lo cual es ajeno a lo que en casación sería la historia concisa del caso.

A pesar de que no separó la sección de causales y motivos, la denominación utilizada para presentar las causales es a todas luces incorrecta y confusa porque no se sabe cuando termina la causal y empieza el motivo ya que no hay autonomía entre ambos epígrafes. En primer lugar habla de un "ERROR DE DERECHO en que ha incurrido el Juez Ad quem, al darle valor legal al audito realizado por los Auditores Internos y Vicepresidentes del CONSEJO DE VIGILANCIA ...", causal inexistente y continua expresando opiniones de tipo personal; luego agrega como causal el ordinal 11 del artículo 2434, sin siquiera transcribirlo y posteriormente manifiesta apreciaciones de carácter subjetivas.

Finalmente el epígrafe de las disposiciones legales que estima infringida y el concepto en que lo han sido es una sección también autónoma en donde se debe, en forma individual, citar y transcribir las normas que se consideran violentadas y posteriormente explicar en que concepto fueron infringidas: en forma directa por omisión o comisión, por indebida aplicación o por interpretación errónea, nada de lo cual ha hecho el recurrente. En ese mismo sentido, cuando se trata de causales probatorias, además de citar, transcribir y explicar el concepto de la infracción de las normas procesales o de carácter adjetivas, se debe citar, transcribir y explicar en que concepto fue violada la norma penal sustantiva la cual fue infringida de manera indirecta a consecuencia de la violación de las normas adjetivas. El recurrente omitió señalar la norma sustantiva penal supuestamente violentada.

En este contexto, resulta notorio que el libelo presentado es manifiestamente ininteligible, porque no se ha individualizado adecuadamente a cual de las causales invocadas sirven de fundamento los motivos aducidos y las disposiciones legales cuya infracción se acusa. El censor ha señalado todo de

corrido, sin títulos que separen cada una de las secciones.

Los defectos anotados conducen a la Sala a declarar inadmisible el recurso sub júdice.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXÓN
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JULIO M. MEDINA LANKER, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce de la admisibilidad del Recurso de Casación en el fondo, interpuesto por el Licdo. CONRADO ABEL CASTILLO en calidad de apoderado judicial de JULIO MANUEL MEDINA LANKER, contra la sentencia de 17 de enero de 2000, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, revocó la sentencia de primera instancia y declara penalmente responsable al procesado y lo condena a la pena de tres (3) años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas y conducir vehículos a motor por igual término de duración de la pena principal, una vez cumplida esta, como autor del Delito de Homicidio y Lesiones Culposas en perjuicio del menor ROGELIO DUHAMEL CASTILLO.

Corresponde en esta oportunidad verificar si el recurso cumple con todos los requisitos enunciados en el artículo 2443 del Código Judicial, a efecto de determinar lo relacionado con su admisibilidad.

En ese sentido, se observa que el recurrente cumple con lo estipulado en el artículo 102 del Código Judicial, toda vez que el escrito de casación fue dirigido al Magistrado Presidente de la Sala de lo Penal.

De otro lado, el escrito fue interpuesto en término, por persona hábil y la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales concede la ley, toda vez que se trata una sentencia de segunda instancia emitida por un Tribunal Superior. Por último, se advierte que el proceso penal es por delito cuya pena es superior a dos años de prisión.

No obstante lo anterior, la Sala advierte que el recurso en si, no ha sido desarrollado conforme lo establecido por la legislación vigente y la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia.

La historia concisa fue presentada en un relato sucinto pero la redacción es confusa y no se desprende el cargo de injuridicidad que se le atribuye al fallo que se pretende impugnar.

A continuación, indica el recurrente que "la sentencia impugnada resulta infractora de la ley sustancial penal, en concepto de violación de la Ley", causal contenida en el ordinal 1 del artículo 2434 del Código Judicial

Cabe señalar que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, la correcta denominación de la causal invocada por el casacionista es "Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en concepto de violación directa".

La causal se fundamenta en un motivo único, observándose que ha sido redactado a manera de alegato y citando normas adjetivas y subjetivas, contrario a la técnica casacionista elaborada por la jurisprudencia de la Corte donde se ha reiterado que en esta sección no corresponde hacer mención de las normas transgredidas, sino que ello debe hacerse en la sección de las disposiciones legales infringidas en donde se debe indicar igualmente el concepto de transgresión.(Sentencia de 27 de febrero de 1997)

Ahora bien, con relación al epígrafe de las disposiciones legales infringidas, se advierte que el recurrente señala que han sido violados los artículos 12, 14 y 16 de la Ley 18 de 1997, indicando que el concepto de infracción es la violación directa por omisión, transcribiendo seguidamente el contenido de las normas en su totalidad, indicando y desarrollando el concepto de infracción que es la violación directa por omisión.

Otras excertas legales que el casacionista estima infringidas son los artículos 19 y 20 del Código Penal, que a su criterio fueron violadas en forma directa por omisión, explicando a continuación en qué consiste la infracción.

Por último, el recurrente cita el artículo 774 del Código Judicial, indica el concepto de infracción, luego transcribe el texto de la misma.

Es importante destacar que al aducir una causal de fondo debe indicarse primeramente cuáles son las normas adjetivas que han sido infringidas y luego hacer referencia a las normas sustantivas que, a consecuencia de la transgresión de las primeras, resulten violadas.

Luego de los señalamientos adelantados que detallan los múltiples errores en que ha incurrido el recurrente, la Sala concluye que el libelo de casación no cumple con los requisitos del artículo 2443, numeral 3, literales a y c, y numeral 4 del Código Judicial, por lo que no procede admitir el recurso.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Segunda de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por la el Licdo. CONRADO ABEL CASTILLO a favor de JULIO MANUEL MEDINA LANKER.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOSÉ MANUEL LEE ALVARADO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, (DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licdo. JULIO LEAL interpuso recurso de casación en nombre y representación de la compañía de COMPUTACIÓN MONRENCA PANAMÁ, S. A., contra el

auto de 11 de enero de 2000, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que confirmó la resolución de 8 de octubre de 1999 emitida por el Juzgado Décimo Segundo de Circuito, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en que se sobreseyó definitivamente a BORIS ANTONIO VÁSQUEZ GONZÁLEZ de los cargos como presunto responsable del delito de estafa en perjuicio de la sociedad anónima COMPUTACIÓN MONRENCA PANAMÁ, S. A.

Vencido el término de lista, a fin de que las partes tuvieran conocimiento del ingreso del caso al Tribunal de Casación, corresponde ahora examinar el escrito mediante el cual se formaliza este medio de impugnación extraordinario, para los fines de resolver su admisibilidad, al tenor de lo previsto por el artículo 2443 del Código Judicial.

El recurso fue presentado por persona hábil, promovido dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal, contra una resolución que efectivamente admite este tipo de recurso extraordinario y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

Con relación a la historia concisa, se aprecia que el casacionista hace una relación breve y concreta de los hechos de la cual surgen los cargos de injuridicidad que se le formulan a la sentencia.

La causal invocada por el recurrente es la contenida en el numeral 5, Artículo 2435 del Código Judicial: "Error de derecho en la apreciación de la prueba, si esta se funda en documentos o actos auténticos que constan en el proceso", la cual se produce cuando el juzgador le niega el valor probatorio que la ley reconoce a la prueba que se fundamenta en documentos o actos auténticos que constan en el proceso, o cuando le confiere un valor distinto.

En cuanto a los motivos, la jurisprudencia patria ha señalado que deben ser desarrollados en forma tal que cada uno contenga, de manera independiente, un cargo de injuridicidad y además, deben ser formulados en forma precisa, clara y concreta, en congruencia con la causal invocada.

Aunado a ello, se ha indicado que cuando se aduce la causal del numeral 5 del artículo 2435 citada "en los motivos que se presentan para apoyar la causal, el recurrente debe identificar cuáles son los documentos o actos auténticos que constan en el proceso, cuya valoración se objeta y en qué consiste el valor que le otorga la ley a dichos elementos, con indicación de la forma en que el juzgador lo ha desconocido"(Fallo de 6 de enero de 1999).

Ahora bien, el casacionista ha formulado cinco motivos que sustentan la causal en comento, en los cuales se alude a la valoración errónea de pruebas testimoniales, no así de documentos o actos auténticos. Además, se advierte que el tercer y quinto motivo fueron redactados a manera de alegato de instancia.

Por tanto al no contener los motivos cargos de injuridicidad concretos contra el auto impugnado y cónsonos con la causal aducida, se inobserva el contenido del numeral 3, literal C, artículo 2443 del Código Judicial.

Por último, en la sección de las disposiciones que se estiman conculcadas el actor esgrime la violación de los artículos 904, 2144,2115, 2222, Código Judicial; como normas sustantivas infringidas, se cita el artículo 1503 del Código Civil y el artículo 193 del Código Penal. Las excertas legales fueron transcritas en forma íntegra, con expresión del concepto de la infracción y explicando cómo se ha producido.

Sin embargo, se debe señalar que las disposiciones que se estiman infringidas deben estar en armónica relación con los motivos y la causal aducida, y, toda vez que los artículos 2115 y 2222 del citado cuerpo de normas no establecen criterios de valoración de prueba, se concluye que no guardan relación con la causal contenida en el numeral 5 del artículo 2435 del Código Judicial, de allí que resulta inadecuada la invocación de aquellas normas.

Como quiera que los errores advertidos recaen en aspectos de la esencia del recurso de casación, como son los motivos y las disposiciones legales infringidas, así como el concepto de infracción, se procede a desestimar la pretensión del recurrente.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto contra el auto de 11 de enero de 2000, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO A FAVOR DE GASPAR DUNKKLEY NAVARRO EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE ELSA MARÍA REINA DE TAPIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Licenciada Yanela Romero de Pimentel, Defensora de Oficio del sindicado GASPAR DUNKKLEY NAVARRO, ha presentado recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 25 de enero de 2000 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, la cual revoca la resolución N°12 de 19 de octubre de 1999 expedida por el Juzgado Segundo de Circuito Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá; declarándolo responsable del delito de Apropiación indebida en perjuicio de Elsa María Reina de Tapia.

De conformidad con la legislación positiva pasamos a examinar si el libelo se ajusta a los presupuestos requeridos para su tramitación en esta instancia extraordinaria.

Al confrontar la historia concisa del caso, se observa que no se hace un relato breve de los aspectos fundamentales del proceso, se detalla parte de lo manifestado por la querellante y se introducen apreciaciones respecto a la no actuación del Ministerio Público a saber: "...pese a que el señor DUNKKLEY brindara al Ministerio Público, no se hizo ninguna diligencia para investigar al sujeto descrito..." entre otras.

Sobre ello, debemos señalar que en este punto no se deben referir elementos probatorios del proceso que beneficien al sindicado, toda vez que en los motivos y en las disposiciones legales infringidas se pueden anotar los aspectos favorables que emanan de los mismos (Cfr. Registro Judicial Junio 1999, p. 349).

Se invoca como primera causal la de "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, implica infracción a la Ley sustancial."

La causal debió precisarse como: Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica infracción de la ley sustancial penal. Ello en virtud de que la causal debe estar precisada claramente, si ha influido en la sentencia y si ha habido infracción a la ley sustancial penal.

Los motivos en los que se apoya la misma se redactan sin que se desprenda cargo de injuridicidad alguno, pues, los mismos deben evidenciar: que no se consideró un elemento probatorio incorporado al proceso, anotando la foja en que se encuentra; que se afirmó que un elemento probatorio no existe y se encuentra en el expediente, anotando la foja de el; o que se le da valor a algún elemento probatorio no existente en el proceso.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas se advierte que se cita el artículo 2111 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, el cual refiere las diligencias que podría efectuar el funcionario de instrucción si lo estima necesario al investigar delitos, pero no acredita como dicha violación se produce concretamente para dar sustento a la causal.

Se señala el artículo 2135 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión, que establece la forma como se llevará a cabo la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos más no guarda relación con la causal invocada.

Aduce el artículo 972 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión, relativo a la valoración de los indicios y no precisa como dicha norma incide en la concurrencia de la causal invocada.

Indica la violación directa por omisión del artículo 973 del Código Judicial.

Como norma sustantiva infringida anota el artículo 194 del Código Penal, contentivo de la conducta reprochable de apropiación indebida.

La causal examinada será rechazada por no ajustarse a los requisitos exigidos por el artículo 2443 del nuestro ordenamiento procesal penal.

Al apreciar la segunda causal encontramos que se cita el numeral 10 del artículo 2434 del Código Judicial. De dicha norma se infieren dos causales que debían citarse por separado así: Cuando se incurra en indebida aplicación de la ley sustancial, al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias agravantes de responsabilidad criminal;

Cuando se incurra en indebida aplicación de la ley sustancial, al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal.

Existe una falta de precisión en cuanto a cual de las dos causales que presenta la norma en el numeral 10 era la invocada por la recurrente para sustentar su recurso o si eran ambas.

De los motivos desarrollados no se infiere cargo de injuridicidad, que permita indicarnos a cual de las dos causales respaldan al expresarse en forma subjetiva: "...aún sin que se haya determinado que el señor GASPAR DUNKKLEY sea el autor de dicho daño patrimonial."; "...se aplica a mi representado una circunstancia agravante en atención al daño causado..." y "...pese a que mi representado se acogió al proceso abreviado, no se le aplicó la atenuante específica que confiere la ley...."

Si eran ambas causales, cada una debió exponerse con sus respectivos motivos y las disposiciones legales que se estiman infringidas individualmente, para dejar claro al tribunal de casación lo que se pretende lograr.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que procede rechazar la iniciativa incoada por alejarse de la técnica casacionista.

En mérito de lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE EL RECURSO DE CASACION presentado dentro del proceso seguido

a GASPAR DUNKKLEY NAVARRO por delito de Apropiación indebida en perjuicio de Elsa María Reina de Tapia.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA LICDA. MIRIAM JAÉN DE SALINAS EN REPRESENTACIÓN DE RAMON GAITAN SOLIS POR LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMA, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante providencia calendada 11 de abril de 2000, este despacho sustanciador ordenó que el libelo de formalización del recurso de casación presentado por la Licenciada Miriam Jaén de Salinas, Defensora de Oficio del sindicado RAMON GAITAN SOLIS, permaneciera en la Secretaría de la Sala por el término de cinco días, a fin de que se efectuara su corrección en el término indicado. En tiempo oportuno la casacionista presentó el libelo de corrección, por lo que corresponde ahora decidir sobre la admisibilidad de esta iniciativa procesal.

Se comprueba que el recurso de casación ha sido propuesto contra resolución dictada por un Tribunal Superior de Distrito Judicial, dentro de un proceso por delito cuya pena excede los dos años de prisión. Estas comprobaciones permiten advertir que el recurso se ajusta a lo previsto por el artículo 2434 del Código Judicial.

En cuanto a los requisitos que enumera el artículo 2443 de la excerta antes mencionada, se comprueba que la resolución es de las susceptibles de ser impugnada por esta vía y que el recurso fue interpuesto oportunamente. Igualmente, se expone con claridad la historia concisa del caso, la causal invocada con su respectivo motivo y las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido.

Como quiera, entonces, que este recurso cumple con las formalidades de nuestro ordenamiento procesal, resulta admisible el mismo.

Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado por la licenciada Miriam Jaén de Salinas, Defensora de Oficio de RAMON GAITAN SOLIS, contra la sentencia de 15 de octubre de 1999 expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso que se le sigue por delito de Hurto de automóvil en perjuicio de Gaspar Enrique Cortéz; y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la Nación por el término de ley.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE HORTENCIO GALLARDO, SINDICADO POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA

BURGOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La firma forense Villalaz y Asociados, en su condición de defensora técnica de Hortencio Gallardo Ríos, ha interpuesto recurso de casación en el fondo contra la sentencia calendada 30 de agosto de 1999, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial. Esta decisión jurisdiccional, reforma la sentencia de primera instancia en el sentido de condenar a Gallardo a la pena de 5 años de prisión, como responsable del delito de tráfico internacional de drogas.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

El 11 de septiembre de 1998, miembros de la Policía Nacional, ubicados en poblado de Río Sereno, Distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí, detuvieron el vehículo de Hortencio Gallardo Rios, el cual transportaba 20 bolsas plásticas, que contenían 611 kilogramos de marihuana.

Al rendir indagatoria, Gallardo expresó que fue contratado para transportar los bultos; que ignoraba el contenido de esos bultos, toda vez que el camión fue cargado de noche y no conocía a las personas que realizaron ese trabajo.

Una vez instruido el sumario, el juzgador abrió causa criminal contra el imputado. Mediante sentencia de 3 de junio de 1999, el tribunal de la causa condenó a Gallardo a la pena de 32 meses de prisión, luego de considerar que su conducta se adecuaba al párrafo 1 de artículo 255 del Código Penal y que concurrían las circunstancias modificadoras de la responsabilidad que establecen los numerales 4 y 5 del artículo 66 del Código Penal. La sentencia fue apelada por el agente del Ministerio Público, pues no estaba conforme con el quantum de la pena y porque no se configuraba la atenuante de la confesión espontánea y oportuna. Mediante sentencia de 30 de agosto de 1999, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial desestimo la atenuante de la confesión e impuso a Gallardo la pena de 5 años de prisión.

CAUSALES INVOCADAS

La casación es en el fondo y se fundamenta en dos causales a saber: cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en la extensión de la pena aplicable y cuando la sanción impuesta no corresponda a las circunstancias que modifiquen su responsabilidad (num 3 y 12, art. 2434 C. J).

PRIMERA CAUSAL

MOTIVOS

Son cinco los motivos en que se fundamenta la causal, de cuyas consideraciones se infiere los siguiente:

En el primer motivo, la casacionista argumenta que el Tribunal Superior califica que Hortencio Gallardo Ríos como responsable del delito que consagra el artículo 255 del Código Penal.

En el segundo motivo, el recurrente sostiene que Gallardo es un agricultor que, con la ayuda de su pick-up, se dedica al transporte mercancías y productos agrícolas.

En el tercer motivo, plantea que la acción de transportar bultos de Volcán hasta Alto Quiel en Río sereno se calificó como intento de tráfico internacional, pese que ese recorrido fue dentro del país.

En el cuarto motivo la recurrente sostiene que "introducir o intentar sacar" son los verbos rectores que consagran las acciones idóneas para consumar el tipo penal.

En el quinto motivo plantea que Gallardo no introdujo ni intentó sacar en tráfico internacional los bultos que transportó desde Volcán hasta Alto Quiel en Río Sereno.

El sexto motivo señala que la sentencia atacada incurre en error de derecho porque se efectuó un transporte dentro del territorio nacional (f. 211).

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

A esos efectos el recurrente cita dos artículos del Código Penal. En primer lugar, alega que el artículo 255 del Código Penal ha sido infringido por indebida aplicación, dado que la conducta del imputado consistió en transportar los bultos dentro del territorio nacional, es decir, entre el sector de Río Chiriquí ubicado en Volcán y el poblado de Alto Quiel en Río Sereno (f. 212).

Otra disposición que la recurrente considera vulnerada es el numeral 4 del artículo 257 del Código Penal en concepto de violación directa por omisión, por considerar que su defendido aceptó transportar los bultos en su vehículo dentro del territorio nacional (f. 213) .

SEGUNDA CAUSAL

La segunda causal de casación también es en el fondo y se refiere al caso en que la sanción impuesta por la sentencia atacada no corresponda a las circunstancias que modifiquen su responsabilidad, causal que está consagrada en el numeral 12 del artículo 2434 del Código Judicial.

La recurrente apoya la causal en cuestión con cinco motivos. En el primero de ellos plantea que Gallardo se declaró confeso y arrepentido del delito cometido desde que fue aprehendido el 11 de septiembre de 1998 por unidades de la Policía Nacional en el área de Río Sereno hasta el 21 de mayo de 1999, fecha de la celebración de la audiencia ordinaria. En el segundo motivo manifiesta que su defendido se sometió a la revisión de las unidades de policía ubicadas en Río Sereno porque confiaba que transportaba mercancía lícita. En el tercer motivo, la recurrente señala que durante las sumarias su defendido no alteró la versión de los hechos. El cuarto motivo destaca que el imputado Gallardo no es adicto a las drogas y carece de antecedentes penales y policivos. En el quinto y último motivo, la casacionista afirma que pese a que su representado no conocía el contenido de la carga, aceptó su responsabilidad por cuanto que no examinó la mercancía que le habían entregado.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

En esta segunda causal, la recurrente advierte la infracción del numeral 5 del artículo 66 del Código penal en concepto de interpretación errada de la ley, toda vez que Gallardo aceptó que transportaba una mercancía hacia el poblado de Alto Quiel, Río Sereno. Al momento de ser aprehendido por las unidades de policía, no opuso resistencia, ni intentó evadir el retén o deshacerse de la carga. Por esa razón, agrega la casacionista, de una confesión con características particulares, pues fue espontánea, sin presiones, y que ocurrió en el momento en que fue retenido por las autoridades. En consecuencia, estima que la negación de la atenuante comentada, vulnera la norma penal, razón por la que solicita se case la sentencia recurrida de acuerdo a la segunda causal.

OPINION DEL MINISTERIO PUBLICO

A propósito de la primera causal, el Procurador General de la Nación considera que los cuatro primeros motivos se refieren a hechos que constan en el expediente, por lo que no contienen cargos de injuridicidad.

El representante del Ministerio Público manifiesta que el quinto y sexto motivo plantea hechos no debatidos en la segunda instancia. En tal sentido, afirma que si la calificación del delito no era el tema a resolver por razón de la apelación, sino el reconocimiento de la confesión del imputado, es del criterio que la resolución de segunda instancia no resulta injuridica.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, el Procurador plantea que el artículo 255 del Código Penal no resulta vulnerado, ya que la conducta del sumariado se adecua al supuesto de intentar sacar la droga del territorio nacional. De la misma manera estima que no se infringido el artículo 257 del Código penal, toda vez que la droga estaba preparada para su venta y consumo.

Con relación a la segunda causal, el Procurador General de la Nación advierte que la recurrente "debió seleccionar otra causal que permitiera entrar a determinar si en el caso presente concurre o no la atenuante de la confesión de parte del señor HORTENCIO GALLARDO" (f. 242).

También desestima la infracción del numeral 5 del articulo 65 del Código Penal, toda vez que la policía lo aprehendió porque fue sorprendido infraganti, "con lo que se acredita que no acudió voluntariamente a las autoridades a ponerlos en conocimiento de la comisión del delito, ni tampoco su aparición se dio de manera oportuna en el sentido que con el hallazgo de la droga , el procesado no tenía otra alternativa que aceptar la responsabilidad sobre el material ilícito encontrado" (f. 245).

Tras analizar las dos causales invocadas por la casacionista, el Procurador General de la Nación es del criterio que la resolución atacada se ajusta a derecho, por lo que solicita no casarla (f. 246).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Primera causal

a) Motivos:

La Corte desestima los argumentos que la casacionista expone en el primer y segundo motivo, toda vez que no encuentra cargos de injuridicidad que se refieran a que la sentencia atacada efectuó una errada calificación del delito. Como quiera que el tercero, cuarto, quinto y sexto motivo están íntimamente relacionados, es del caso analizarlos en conjunto. De manera atinada, el Procurador General de la Nación hace la observación de que la resolución atacada solamente se pronunció sobre la disconformidad que tenía el representante del Ministerio Público en lo concerniente al reconocimiento de la confesión espontánea y oportuna. Es decir, la sentencia impugnada solamente se refirió al tema del reconocimiento o no de la atenuante común en cuestión y no sobre la calificación del delito. Lo anterior implica que la defensa técnica estuvo conforme con el delito con el que el sumariado fue condenado. Por esa razón, el Tribunal Superior en ningún momento efectuó algún ejercicio probatorio relacionado con la calificación del delito. En síntesis, participa la Sala de la opinión del Procurador General de la Nación en el sentido de que la sentencia atacada no resulta injuridica, toda vez que no es posible afirmar error de derecho en la calificación del delito cuando la sentencia atacada no entró a considerar pruebas que devino en un razonamiento equivocado sobre la calificación delictiva que correspondía al imputado.

b) Disposiciones legales infringidas:

La Corte desestima la infracción del artículo 255 y el numeral 4 del artículo 257 del Código penal, por cuanto que, como se dijo en la parte concerniente a los motivos, en los términos en que estaba formulada la alzada, no le correspondía atender la aplicación de esas normas legales.

Por todo lo anterior, la Sala es del criterio que no prospera la primera

causal invocada por la casacionista.

Segunda causal

a) Motivos:

La Sala debe adelantar que los cinco motivos contienen argumentos que sustentan la aplicación de la circunstancia atenuante de la confesión espontánea y oportuna. Siendo asi, corresponde resolver esos motivos en una sola cuerda. En esa dirección, resulta necesario atender algunas declaraciones allegadas al cuaderno penal. Se observa la declaración indagatoria de Hortencio Gallardo Ríos quien relata que un sujeto que se encontraba en un vehiculo color negro le preguntó si podía llevarle "una mercancía desde el Río Chiriquí en Volcán hasta Alto Quiel ... que me iba a pagar tres mil dólares ... en la noche viajé hasta el río Chiriquí.. Allí había un camión cuando me iba a bajar me dijeron que no lo hiciera ... entonces yo le di la vuelta al carro y lo puse vagón con vagón, cuando ya ellos cargaron me dijeron dale que allá está el carro esperándote y te paga ... luego seguí hasta llegar al retén o garita.. Donde me detuvieron. El guardia me preguntó que llevaba allí yo le dije que era una mercancía porque era lo que me habían dicho que iba a cargar.. Me dijeron que manejara hasta el cuartel ... mientras me encontraba en la celda escuché que dijeron que eso podía ser marihuana, yo nunca pensé que lo que iba a cargar era eso" (f. 22). Por su parte, Carlos Ariel Rangel, miembro de la Fuerza Pública que se encontraba en el retén ubicado en la vía que conduce de Río Sereno a Volcán la noche del 11 de septiembre de 1998, explicó que cuando el vehículo que conducía Gallardo llegó al retén, "se le observó una mercancía sospechosa, unos bultos cubiertos con una lona en el vagón del vehículo, levantamos la lona y pudimos ver ... unos bultos en bolsas plásticas negras, interrogamos al conductor y manifestó que la mercancía era arroz, entonces decidimos conducir el vehículo al Cuartel de Río Sereno ... procedimos a abrir dos bolsas de esas ... se verificó uno de los paquetes y el mismo contenía una hierba compacta, la cual se presume sea marihuana ..." (F. 26). Cabe anotar que Erick Alberto Veces López (fs. 28-29), Irving Guillermo Castillo González (fs. 30-31), miembros de la Policía Nacional que también participaron en el operativo de registro, coincide con el relato de Rangel (cf. 28-29).

Aún cuando la versión de Gallardo converge con las declaraciones de los miembros de la Fuerza Pública en lo que concierne a los hechos ocurridos en el retén y en el cuartel de Río Sereno, la Corte considera que el imputado efectuó una confesión cualificada, por considerar que en todo momento afirmó que desconocía el contenido de la carga que transportaba.

b) Disposiciones legales infringidas:

Siendo que el argumento que sustenta la infracción del numeral 5 del artículo 66 del Código Penal es el mismo que expone en los motivos, considera la Sala la recurrente ha no demostrado que la sentencia del Tribunal Superior incurre en el vicio que prevé el numeral 12 del artículo 2434 del Código Judicial, por lo que es del caso no casar la resolución atacada.

Por las anteriores consideraciones LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia calendada 30 de agosto de 1999, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) JOSE M. FAUNDES (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO A FAVOR DE JORGE L. NELSON AYALA EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ECO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Teresa Ibañez, defensora de oficio de Jorge Luis Nelson Ayala, ha presentado recurso de casación en el fondo contra sentencia de 6 de julio de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. Esta resolución confirma la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Décimotercero Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de condenar a Nelson Ayala a la pena de 72 meses de prisión, por ser responsable del delito de robo agravado en perjuicio de Distribuidora de Producto Eco, S. A.

En este momento procesal, pasamos a examinar el libelo de formalización, a efecto de comprobar si cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 2434 y 2443 del Código Judicial.

Se comprueba que el recurso de casación ha sido propuesto contra decisión jurisdiccional que le pone término al proceso, dictada por un Tribunal Superior de Distrito Judicial en segunda instancia, con una pena superior a los dos años de prisión. Esto permite establecer que se ajusta a lo normado por el artículo 24334 del Código Judicial.

Respecto a los requisitos que enumera el artículo 2443 del Código Judicial, la resolución es susceptible de ser impugnada por esta vía extraordinaria y fue presentado el recurso en tiempo oportuno. Igualmente, la recurrente expone en forma clara la historia concisa del caso, la causal invocada, los motivos que la respaldan y las disposiciones legales infringidas, todo lo cual indica que se dan las formalidades requeridas para su admisibilidad.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo incoado por la licenciada Teresa Ibañez actuando en nombre y representación de Jorge Luis Nelson Ayala, Y CORRE TRASLADO al Procurador General de la Nación con fundamento en el artículo 2445 del Código Judicial para que emita concepto.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO PRESENTADO A FAVOR DE WILFREDO VARGAS JAÉN, EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE MAXIMINO RODRÍGUEZ AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia conoce de la admisión del recurso de casación en el fondo presentado por el licenciado Luis A. Palacios B. actuando en nombre y representación de Wilfredo Vargas Jaén, contra la sentencia 9 de diciembre de 1999 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del

Primer Distrito Judicial de Panamá, que a su vez confirma la resolución de N°50 de 22 de julio de 1999 proferida por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá que condenó al procesado a la pena de un (1) año de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por la comisión del delito de lesiones personales.

Cumplido el término en lista, procede examinar el recurso de casación incoado, para efectos de determinar si cumple con los requisitos que establece la ley para su admisibilidad.

Se observa que fue presentado oportunamente, por persona legítima, contra una resolución que efectivamente admite este tipo de recurso extraordinario ya que el delito por el cual se sanciona al sindicado es susceptible de una pena de prisión de dos o más años. Igualmente, se aprecia que el casacionista dirige adecuadamente el presente memorial al presidente de esta Sala, tal como expresamente exige el artículo 102 del Código Judicial.

Seguidamente se aprecia que la historia concisa del caso ha sido redactada destacando los aspectos medulares del proceso.

A continuación el casacionista invoca la causal de "ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA QUE A (SIC) INFLUIDO EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO Y QUE IMPLICA VIOLACION DE LA LEY SUSTANCIAL PENAL." (f. 182)., la cual se basa en seis motivos, de ellos el cuarto motivo carece de la indicación de las fojas donde se encuentran los testimonios mal valorados; el quinto motivo complementa al cuarto; y el sexto y último motivo tampoco contiene el número de las fojas donde se encuentran los elementos no evaluados (Ver. R. Judicial Octubre 1994, p.262, R. Judicial Febrero 1997, p.176 y R. Judicial Junio 1997, p. 276). Estos últimos deberán ser enmendados.

Posteriormente, en el renglón de disposiciones legales infringidas señala las normas adjetivas y sustantivas y el concepto en que lo han sido.

Toda vez que solamente se advierte un yerro en el presente libelo procede ordenar la corrección del mismo.

En virtud de lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por el suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, ORDENA LA CORRECCION del recurso de casación en el fondo presentado por el licenciado Luis A. Palacios B. actuando en nombre y representación de Wilfredo Vargas Jaén en lo concerniente a los motivos de acuerdo a lo explicado en la parte motiva de esta resolución, y DISPONE con fundamento en el artículo 2444 que el expediente permanezca en Secretaría por el término de cinco (5) días, con la finalidad que el interesado efectúe las correcciones del caso.

Notifíquese,

(fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDILBERTO DEL CID DUEÑAS SINDICADO POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado MARIO CONCEPCION ha presentado recurso de Casación en el Fondo contra la sentencia de 31 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal

Superior del Tercer Distrito Judicial, en la que se reformó la sentencia No. 3 de 12 de enero de 1999 emitida por el Juzgado Sexto del Circuito de Chiriquí, Ramo Penal y se condena a EDILBERTO DEL CID DUEÑAS por la comisión de delitos Contra la Administración Pública, a la pena de dos años, siete meses, quince días de prisión; a cien días multa equivalente a dos mil quinientos dólares,(B/2,500.00) e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Considera el casacionista que el fallo proferido en la segunda instancia contiene errores de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que influyó en lo dispositivo del fallo, constituyendo esta causal la razón de ser del recurso de Casación.

HISTORIA CONCISA:

Los hechos que originan la sentencia condenatoria de EDILBERTO DEL CID DUEÑAS guardan relación con el informe de auditoria elaborado por la Contraloría General de la República en la que se investigaba la procedencia de un tractor marca Ford 6600, color azul; una chapeadora de hierbas y un vehículo marca Jeep Wagooner, placa 2-3830 correspondiente al año 1990.

En la auditoría no se estableció la supuesta propiedad de los bienes descritos en el párrafo anterior, se concluyó que el tractor debía considerarse como propiedad pública porque había sido dado en préstamo por el ex-mayor LUIS CÓRDOBA al procesado DEL CID DUEÑAS; con respecto al pick up militar la investigación debía trasladarse a las autoridades correspondientes y no se determinó nada con respecto a la chapeadora de hierba.

El procesado EDILBERTO DEL CID DUEÑAS manifestó en su declaración indagatoria que el tractor con su arado le fue entregado por el ex-mayor LUIS CÓRDOBA en calidad de préstamo, que la chapeadora se la compró a DENZIL BERNAL, mientras que el pick up militar se lo compró a RUBEN VERGARA.

El procesado DEL CID DUEÑAS fue llamado a juicio por la presunta comisión de delitos Contra la Administración Pública (Peculado), pero por carecer de la condición de funcionario público fue absuelto por el Ad-Quo, sentencia que fue reformada por el Ad-Quem, ya que fue condenado por el referido delito.

CAUSAL INVOCADA:

El casacionista sustenta el presente recurso de Casación en el Fondo en una causal de carácter probatoria, a saber:

"Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la ley sustancial" (Artículo 2434, numeral 1 del Código Judicial).

MOTIVOS:

Son cuatro los motivos en los cuales se apoya la citada causal:

PRIMERO: Expresa el recurrente que la segunda instancia valoró de manera contraria a derecho el informe de auditoria No. 45-91-OAICE y sus anexos elaborados por la Contraloría General de la República (fojas 3 y siguientes, 190-191 y 643), al concluir que de dichos informes se infería que los bienes objeto de investigación eran propiedad del Estado, pese a que los auditores JOSÉ ATENCIO y RUBEN OBREGON (fojas 23, 190-191, 294 y siguientes) no pudieron concluir el origen público de dichos bienes.

SEGUNDO: Estima el casacionista que la segunda instancia apreció de manera contraria a derecho el testimonio del procesado EDILBERTO DEL CID (fojas 356 y sgtes.)al considerar probada la propiedad del Estado sobre los bienes investigados.

TERCERO: Considera el licenciado MARIO CONCEPCION que el Ad-Quem apreció contrario a derecho los documentos que acreditan la propiedad del Jeep Wagooner, a saber los recibos de pago (fojas 78-79) y el recibo de la placa (fojas 80-82) proferidos por la Tesorería de Antón, al concluir que el registro municipal no era valido y que dichos bienes eran propiedad del Estado.

CUARTO: Finalmente indicó el casacionista, que el fallo de segunda instancia valoró incorrectamente la Nota No.12-92-AR-CH con sus anexos (fojas 190-191) que acreditaba que el tractor le fue comprado a TOMAS CHAVEZ, y por tanto no pertenece al Estado, pese a ello EDILBERTO DEL CID fue condenado por el delito de Peculado.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCION

El casacionista indica que fueron vulnerados los artículos 770, 904, 905, 908, 967, 2073, 2144, 822 y 823 del Código Judicial; 1377 del Código Administrativo; así como los artículos 38 y 322 del Código Penal.

Con relación a las normas adjetivas, expresa el casacionista que los artículos 770, 2073, 2144 del Código Judicial fueron infringidos de manera directa por comisión; los artículos 904, 905, 908, 967, 822 823, también del Código Judicial fueron vulnerados de manera directa por omisión, así como el artículo 1377 del Código Administrativo.

Con relación a las normas sustantivas indicó, que los artículos 38 y 322 del Código Penal fueron transgredidos en concepto de indebida aplicación. Con respecto al artículo 38 indicó que su representado fue sancionado por el delito de Peculado como autor sin haber realizado la conducta descrita en el hecho punible. Y con relación al artículo 322 expresó que EDILBERTO DEL CID DUEÑAS no reúne las cualidades que exige el tipo penal de Peculado para ser sancionado, por lo que las normas fueron aplicadas indebidamente.

OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

De acuerdo al criterio de la licenciada MERCEDES ARAUZ DE GRIMALDO, Procuradora General de la Nación, Suplente Encargada, la sentencia de 31 de agosto de 1999 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial no debe ser casada.

Con relación a los motivos indicó, que no contienen cargos de injuridicidad y expresó que el origen público del tractor de color azul (Ford 250) fue acreditado a través de la declaración del imputado, DEL CID DUEÑAS quien manifestó que el ex mayor LUIS A. CÓRDOBA cuando fungía como jefe de la Quinta Zona Militar de las Fuerzas de Defensa se lo prestó y que no lo devolvió porque CÓRDOBA no se lo pidió.

Con relación al vehículo Ford 6600, motor T5, serie D5-NN-60151 indicó la representante del Ministerio Público, que del informe de auditoría se indica que ese tipo de vehículos eran utilizados por las Fuerzas de Defensa por lo que surgen indicios con relación a la procedencia estatal de ese bien mueble.

Agregó igualmente que en el proceso se acreditó la inscripción fraudulenta que se hizo del vehículo, agregando la Procuradora Suplente, que la sentencia impugnada no estimó los testimonios de los auditores JOSÉ ATENCIO y RUBEN OBREGON por lo que no existe congruencia entre los cargos de injuridicidad y la causal aducida.

Con relación a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción indico la licenciada ARAUZ DE GRIMALDO que no se produjo la vulneración de los artículos 770, 904, 905, 908, 967, 2073, 2144, 822 y 823 del Código Judicial, así como el 1377 del Código Administrativo porque las pruebas fueron estimadas por el juzgador de segunda instancia cumpliendo las exigencias procedimentales contenidas en el texto legal y siguiendo los criterios de

valoración contenidos en la Sana Crítica, por lo que al no materializarse la infracción de las normas adjetivas, no se produjo la vulneración de las normas sustantivas, artículos 38 y 322 del Código Penal.

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

Antes de proceder a efectuar el análisis de fondo del recurso de Casación Penal interpuesto por el licenciado MARIO CONCEPCION es procedente establecer el marco teórico de la causal aducida por el recurrente.

La causal aducida cobra vigencia cuando se objeta la valoración o calificación que se hace de las pruebas, la que resulta incompatible con la ley que la regula. La jurisprudencia ha indicado de manera reiterada que el error en la apreciación de la prueba debe ser manifiesto o "protuberante", de tal suerte que de no haberse cometido, el fallo sería distinto.

En tal sentido y por considerar que se relacionan entre sí, este tribunal analizará en conjunto lo esbozado en los motivos primero, segundo y cuarto del recurso, ya que se refieren a la conclusión asumida por la segunda instancia, cuando indicó en la sentencia impugnada, que a través del contenido del informe de Auditoría No.45-91-OAIE elaborado por la Contraloría General de la República se acreditaba la propiedad y preexistencia del tractor marca Ford 6600, motor T5, serie D5-NN 6015J, al igual que con la declaración del señor EDILBERTO DEL CID.

Al cotejar lo afirmado por el recurrente con la sentencia de 31 de agosto de 1999, la Sala observa que a folios 641 el Ad-Quem razonó de la siguiente manera:

> "El señor Edilberto Del Cid Dueñas admite en su declaración que el ex mayor Luis A. Córdoba le entregó en calidad de préstamo, un tractor de color azul, Ford 250 para que fuera utilizado en su finca, con pleno conocimiento de que el mismo pertenecía a las extintas Fuerzas de Defensa.
>
> Si el tractor era propiedad de las extintas Fuerzas de Defensa no se justifica el hecho de que el ex mayor Córdoba, le haya prestado el tractor a Del Cid en calidad de tal."
>
> Posteriormente a folio 643 agregó el Ad-Quem que:
>
> "Por lo anterior, se tiene que el día 3 de octubre de 1990 se efectuó diligencia de allanamiento en la residencia del señor Ernesto Fullop, encontrándose en el patio de la referida casa un tractor de color azul, marca Ford 6600, motor T5, número de serie D5-NN-6015J, el cual se manifiesta que era de propiedad de Edilberto del Cid Dueñas.
>
> Mediante el informe de auditoría realizado por auditores de la contraloría (sic) se determinó que tanto el tractor cautelado como el vehículo tipo militar que mantiene en su poder Del Cid Dueñas, son bienes que utilizaban las extintas Fuerzas de Defensa".

De la transcripción pertinente de la sentencia impugnada, la Sala observa que ciertamente el Ad-Quem concluyó que el tractor marca Ford 6600 de color azul, motor T5, serie D5-NN 6015J pertenecía a las Fuerzas de Defensa por los señalamientos del propio procesado cuando manifestó que el bien se lo prestó Luis A. Córdoba, así como por el resultado de las investigaciones efectuadas por los peritos de la Contraloría General de la República.

Al confrontar la Sala, lo expresado en la sentencia de segunda instancia con el referido informe, se observa que efectivamente, a pesar de no constar en él, el comprobante del bien por parte de las Fuerzas de Defensa, los peritos indicaron a foja 5 que el señor Edilberto Del Cid Dueñas, ex mayor jubilado de

las ex-Fuerzas de Defensa, recibió en calidad de préstamo del señor Luis A. Córdoba dicho equipo, cuando también era mayor y jefe de la Quinta Zona Militar en la Provincia de Chiriquí y éste jamás le solicitó su devolución.

Ahora bien la Sala debe analizar el documento de fojas 190-191 suscrito por el auditor regional de Chiriqui RIGOBERTO MARTÍNEZ, en el que se describen los datos del tractor vendido por la compañía A. J. ALFARO al señor Tomás Chávez.

En tal sentido se observa que la misiva en cuestión indica que el tractor Ford 6,006, serie B-308624, modelo FA-214C, unidad 7D15-B, motor 152658-7D07 fue vendido a Tomás Chávez, pero por haber fallecido no pudieron ubicar a los familiares para verificar, si se efectuó algún tipo de transacción con EDILBERTO DEL CID DUEÑAS.

Sin embargo, la Sala observa que la numeración del bien contenido en la citada misiva no coincide con la del tractor Ford registrado en la diligencia de allanamiento.

En consecuencia no tiene cabida la afirmación del casacionista cuando indica que el Ad-Quem valoró el informe de auditoría de manera contraria a derecho, ya que la segunda instancia se refirió al tractor que se describe en el informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República y es el mismo encontrado en la diligencia de allanamiento efectuada en el patio de la residencia del señor ERNESTO FULLOP.

La información contenida en la nota visible a fojas 190-191 del proceso, no fue valorada en la sentencia que se revisa en virtud de presente recurso de Casación porque la descripción del tractor Ford que se describe allí como vendido a TOMAS CHAVEZ por la empresa A. J. ALFARO no corresponde al bien investigado por la Contraloría General de la República.

En consecuencia, se concluye que el casacionista no logró acreditar los cargos de injuridicidad endilgados a la sentencia a través de los motivos primero, segundo y cuarto de su libelo.

Con respecto al tercer motivo, el recurrente indica que el cargo de injuridicidad radica en que la segunda instancia valoró de manera contraria a derecho los documentos expedidos por la Tesorería de Antón (recibos de pago y placa) del pick up Jeep Wagooner porque indicó que ese bien era del Estado y por ende no era válida la referida documentación.

Al confrontar la sentencia con los señalamientos indicados por el casacionista, la Sala observa a foja 642 que la segunda instancia emitió las siguientes consideraciones:

> "En cuanto al vehiculo militar, el señor Del Cid Dueñas manifiesta que el mismo le fue vendido por Rubén Elías Vergara y que éste anteriormente lo había adquirido de Osvaldo del Rosario Cruz; hecho que perdió todo valor probatorio con la declaración indagatoria de Rubén Elías Vergara en donde manifiesta que el traspaso del vehículo fue efectuado de manera fraudulenta toda vez que la venta del vehículo nunca se dio ya que Del Cid Dueñas le solicitó ayuda para poder inscribir el vehículo que supuestamente era una chatarra, a lo que él accedió involucrando al señor Del Rosario De La Cruz, sin tener conocimiento de que el mismo era un bien propiedad del Estado.
>
> Habida consideración de que el vehículo no pertenecía a las personas antes indicadas, el traspaso efectuado en la Tesorería de Antón no se considera válido".

Como se aprecia, la sentencia de segunda instancia se apoyó en las declaraciones de RUBEN ELIAS VERGARA para desvirtuar la propiedad de EDILBERTO DEL CID DUEÑAS sobre el vehículo militar ("pick up" Jeep Wagooner), toda vez que

en dicha declaración RUBEN ELIAS VERGARA tacha de fraudulento el traspaso que se hiciera del vehículo a favor de DEL CID.

En consecuencia la Sala no determina de qué forma el casacionista indica que por valorarse inadecuadamente los documentos emitidos por la Tesorería de Antón no se estableció la propiedad del bien mueble por parte de EDILBERTO DEL CID DUEÑAS, si como hemos dicho, al revisar el análisis jurídico de la segunda instancia se observa que no valoró las pruebas documentales a las que se refiere el recurrente en este tercer motivo, razón por la cual la Sala concluye que tampoco se acreditó en este motivo el cargo de injuridicidad aducido.

Es oportuno indicar, retomando los conceptos que definen la causal probatoria aducida por el casacionista, que resulta indispensable que la prueba haya sido valorada, estimada o considerada por el Ad-Quem para que proceda el error de derecho en la apreciación de la prueba, ya que cuando la prueba no ha sido atendida por el juzgador, la causal que debe aducirse es la de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba.

Concluye indicando la Sala, que en esta sección del recurso, el casacionista no acreditó los cargos de injuridicidad endilgados a la sentencia de 31 de agosto de 1999.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, al referirse al artículo 770 del Código Judicial, manifiesta el recurrente que fue vulnerado en concepto de violación directa por comisión porque la segunda instancia omitió la solemnidad documental que establece la ley para acreditar la propiedad de los vehículos en la República de Panamá.

Expresó el recurrente que el Ad-Quem "Al considerar la documentación de la Tesorería de Antón y los documentos de propiedad registrada ..., el fallo objeto del presente recurso la consideró no válida y le dio un valor distinto al establecido por la solemnidad legal, violando el artículo precitado".

La Sala observa que la infracción de la norma se produce cuando la sentencia atacada aplica la disposición que regula la situación contemplada en el proceso, pero lo hace de manera incompleta.

En reiterada jurisprudencia se ha indicado lo siguiente:

> "Como se aprecia, estos planteamientos se refieren, exclusivamente, a que la sentencia impugnada ignoró pautas legales que regulan el procedimiento. Si esta es la intención del recurrente, debió alegar el concepto de violación directa por omisión, porque a su juicio tales normas no fueron consideradas o aplicadas por el tribunal ad-quem, y no el de violación directa por comisión, que sobreviene cuando "habiéndose aplicado la disposición que regula la situación planteada en el proceso se desconoce un derecho claramente reconocido en ella, es decir, que se aplica la norma incompleta"" (Registro Judicial de mayo de 1997).

A partir de estas consideraciones se concluye, que el recurrente se equivoca al aducir la vulneración del artículo 770 del Código Judicial en concepto de violación directa por comisión, toda vez que dicha norma no fue considerada por la segunda instancia al proferir su fallo condenatorio, por cuanto que la sentencia no se ocupa de valorar los documentos proferidos por la Tesorería de Antón, es decir, los recibos de pago y placa del Jeep Wagooner.

Concluye el Tribunal de Casación indicando que no se ha infringido el artículo 770 del Código Judicial en concepto de violación directa por comisión, como expone el casacionista.

En cuanto al artículo 904 del Código Judicial indica el recurrente que fue vulnerado en forma directa por omisión porque a través de los testimonios de

OSVALDO DEL ROSARIO y RUBEN ELIAS VERGARA, así como del careo de ambos, el Ad-Quem consideró acreditada la propiedad del Estado con respecto al Jeep Wagooner y no valoró las pruebas documentales proferidas por la Tesorería de Antón en la que se indicaba que EDILBERTO DEL CID DUEÑAS era el legítimo propietario de ese bien mueble, por lo que, a criterio del casacionista ante la existencia de la prueba documental se disminuía el valor probatorio de la prueba testimonial.

El artículo 904, como se ha señalado en reiteradas oportunidades establece los lineamientos a seguir por el juzgador al considerar las prueba, señalando en este ejercicio mental que la estimación probatoria debe apegarse a la Sana Crítica.

La Sana Critica es el sistema de valoración que sigue nuestro país y se fundamenta en la experiencia, la lógica y la psicología que debe aplicar el juzgador al valorar las pruebas en conjunto, de modo que cuando se emita la sentencia ésta refleje el universo probatorio que existe en el proceso y del cual el juzgador hace uso para determinar la verdad real y material de los hechos así como el grado de culpabilidad del procesado.

El recurrente sostiene que la sentencia valora en demasía las pruebas testimoniales de los participes en la inscripción del Jeep Wagooner en la Tesorería de Antón, mas no así los documentos proferidos por el referido ente estatal que le asigna la propiedad del mismo al procesado.

Sin embargo, la Sala observa que la segunda instancia utilizó los parámetros de valoración contenidos en el artículo 904 del Código Judicial, lo cual se constata a través de varios elementos, tales como la apreciación que se hizo de la ampliación de indagatoria, debidamente ratificada de RUBEN ELIAS VERGARA quien explicó que la inscripción en la Tesorería de Antón era fraudulenta y lo hizo a pedido del procesado EDILBERTO DEL CID DUEÑAS, involucrando para ello a OSVALDO DEL ROSARIO CRUZ, quien suministró los documentos que se presentarían para la inscripción del vehículo.

De hecho, RUBEN ELIAS VERGARA es precisamente la persona que, supuestamente, había vendido el vehículo en cuestión al imputado y es quien se retracta de su actuación manifestando que los registros de traspaso eran fraudulentos, agregando que él fue quien involucró a OSVALDO DEL ROSARIO CRUZ para efectuar la operación. A juicio de este Tribunal de Casación correspondía al juzgador valorar dicho testimonio conforme a los lineamientos que señala el procedimiento penal para ello.

En consecuencia, la Sala estima que el Ad-Quem apreció las pruebas conforme a los parámetros establecidos en el artículo 904 del Código Judicial, lo cual lleva a este Tribunal Colegiado a concluir que tampoco ha sido vulnerada esta norma procedimental.

Con relación al artículo 905, expresa el recurrente que fue vulnerado e forma directa por omisión porque se consideró que el testimonio de DENZIL BERNAL no era prueba suficiente para acreditar la propiedad de la chapeadora de hierbas.

La violación directa por omisión se produce cuando el caso concreto reclama la aplicación de la norma y ésta no es aplicada por el juzgador.

En esta oportunidad luego de revisar la sentencia de 31 de agosto de 1999, la Sala observa que el testimonio de DENZIL BERNAL no fue considerado por el Ad-Quem en su fallo, por lo que mal puede reclamarse la aplicación del artículo 905 del Código Judicial, lo cual conlleva que dicha norma no pudo ser vulnerada en concepto de violación directa por omisión. En consecuencia, no procede la infracción aducida.

Otra norma adjetiva que indica el recurrente fue vulnerada en forma directa por omisión es el artículo 908 del Código Judicial, fundamentándose en el hecho que la segunda instancia valoró el testimonio de RUBEN ELIAS VERGARA sin aplicar

la norma invocada, ya que dicho testigo se contradijo notablemente en sus distintas declaraciones. Es decir VERGARA indicó en sus primeras deposiciones que le había comprado el Jeep Wagooner a OSVALDO DEL ROSARIO y lo había vendido a EDILBERTO DEL CID DUEÑAS, pero posteriormente se retracta de lo afirmado e indica que actuó de esa forma a solicitud de DEL CID DUEÑAS.

Como bien indica el casacionista, RUBEN ELIAS VERGARA ofreció distintas versiones con respecto a la propiedad del bien inscrito en la Tesorería de Antón, no obstante, la Sala estima que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial aplicó en su justa medida el artículo 908 del Código Judicial, ya que la concordancia de los testimonios de VERGARA y DEL ROSARIO se afianzó con la incorporación al proceso de la ampliación de declaración indagatoria y ratificación de cargos que hiciera RUBEN ELIAS VERGARA contra DEL CID DUEÑAS, (fojas 403-405)que reafirman la conclusión avocada por el Tribunal de Segunda Instancia en su fallo.

En consecuencia la Sala es del criterio, que tampoco se ha configurado la vulneración del artículo 908 del Código Judicial en forma directa por omisión.

Otra norma adjetiva que indica el casacionista fue vulnerada de manera directa por comisión es el artículo 967 del Código Judicial. Sustenta la infracción en que los peritos de la Contraloría General de la República que realizaron el audito al ratificarse del informe a folios 294-296 no pudieron establecer que los bienes investigados fueran propiedad estatal, sin embargo, al valorar el peritaje, la segunda instancia estimó lo contrario.

El artículo 967 indica que:

> "La fuerza del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o la disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el procesado"

Al revisar la sentencia impugnada, la Sala observa que la segunda instancia dedujo que los bienes investigados eran propiedad del Estado, del contenido del Informe de Auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, ya que los auditores indicaron en las fojas 5 y 6 que esos bienes los utilizaba la acción cívica de las extintas Fuerzas de Defensa y que para el caso del tractor por su procedencia debía considerarse propiedad del Estado.

Así, el Ad-Quem concluyó que los bienes eran propiedad estatal apoyándose en el peritaje elaborado por la Contraloría General de la República y el testimonio del procesado EDILBERTO DEL CID DUEÑAS, quien en su declaración indagatoria manifestó que el tractor se lo había prestado el ex-mayor LUIS A. CÓRDOBA. Con relación al vehículo militar Jeep Wagooner la segunda instancia estimó que también era propiedad estatal porque OSVALDO DEL ROSARIO CRUZ Y RUBEN ELIAS VERGARA indicaron que la venta efectuada era fraudulenta al igual que el traspaso del bien realizado en la Tesorería de Antón.

En consecuencia observa la Sala que el peritaje elaborado por la Contraloría General de la República es sólo un elemento dentro del contexto probatorio de la causa, los que analizados en conjunto permiten establecer la responsabilidad del procesado.

El texto del artículo 967 ordena que el juzgador considere las pruebas contentivas en el expediente para determinar el valor del dictamen de los peritos. La estimación probatoria efectuada por la segunda instancia se ajusta a lo dispuesto en el artículo 967, por lo que la Sala concluye que dicha disposición tampoco ha sido vulnerado en concepto de violación directa por comisión.

Otra norma indicada como transgredida en forma directa por comisión es el artículo 2073 del Código Judicial. Expresa el casacionista que "... el juzgador violó el principio legal invocado al sentenciar, basado en el concepto de plena prueba de la existencia de la propiedad del Estado de los bienes objeto del sumario," toda vez que los peritos de la Contraloría General de la República no certificaron la propiedad de los bienes investigados por parte del Estado.

El artículo 2073 del Código Judicial expresa que:

> "El hecho punible se comprueba con el examen que se haga, por facultativos o peritos de las personas, huellas, documentos, rastros o señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo hecho o con indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la convicción del Juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la moral o al orden público."

Al revisar la sentencia venida en Casación, este Tribunal Colegiado observa que el Ad-Quem dedujo del informe de la Contraloría General de la República que los bienes eran estatales, precisamente por la aseveración contenida en la foja 5 del peritaje, en el que los señores auditores JOSÉ ATENCIO y RUBEN OBREGON manifestaron que los bienes investigados eran utilizados por la acción cívica de las extintas fuerzas de defensa.

El Ad-Quem concluyó de la forma arriba indicada, luego de considerar la declaración indagatoria del procesado EDILBERTO DEL CID DUEÑAS, quien manifestó que el tractor se lo había prestado el ex mayor LUIS A. CORDOBA; así como por los testimonios de RUBEN VERGARA y OSVALDO DEL ROSARIO, quienes señalaron que la inscripción del Jeep Wagooner en la Tesorería de Antón fue fraudulenta.

Al verificar la Sala el contenido de la nota No.12-92-AR-CH visible a foja 190 del proceso se constata que la empresa A. J. ALFARO vendió a una persona de nombre TOMAS CHAVEZ un tractor Ford No. 6,006 de serie: B-308624, modelo FA-214C, unidad 7D15-B, motor 152658-7D07, pero como la persona falleció la Contraloría General de la República no pudo corroborar si se dio alguna operación de enajenación con el procesado EDILBERTO DEL CID DUEÑAS.

No obstante la Sala observa que la numeración del bien vendido a TOMAS CHAVEZ descrita en el párrafo anterior no coincide con la numeración del tractor Ford encontrado en la diligencia de allanamiento realizada en la residencia del señor ERNESTO FULLOP, visible a fojas 126-128 del sumario.

Por otra parte, es importante resaltar en cuanto al artículo 2073 del Código Judicial, que esta disposición se limita a enunciar las pruebas que sirven para acreditar el hecho punible y la vinculación del procesado, siempre que dichos medios de prueba no estén expresamente prohibidos por la ley, violen derechos humanos o sean contrarios a la moral y al orden público.

Es por ello que, mediante sentencia de 21 de enero de 1998 este Tribunal Colegiado se pronunció en los siguientes términos:

> "Entre las disposiciones legales infringidas, el casacionista aduce la infracción del artículo 2073 del Código Judicial, el cual, a juicio de esta Sala, debe ser eliminado por cuanto que es una norma que enumera los medios de prueba, pero no es una disposición que regula o establece criterios sobre el valor de la prueba, por el contrario, es un postulado meramente enunciativo".

En consecuencia, sobre la acusada vulneración, la Sala concluye que el articulo 2073 del Código Judicial tampoco fue vulnerado de manera directa por comisión por la sentencia de 31 de agosto de 1999.

Otra disposición que indica el recurrente fue violada por comisión, es el artículo 2144 del Código Judicial ya que el Tribunal Ad-Quem consideró no válida la documentación emanada de la Tesorería de Antón, y concedió pleno valor probatorio a los testimonios de RUBEN ELIAS VERGARA y OSVALDO DEL ROSARIO DE LA CRUZ contraviniendo el principio de la Sana Crítica frente a testigos cuyas deposiciones debieron ser valoradas por remisión.

El artículo 2144 del Código Judicial determina las pautas que debe seguir el administrador de justicia al valorar un testimonio e indica que debe hacerlo conforme a las reglas de la Sana Crítica contenidas en el Libro II de este Código.

Siendo la situación de esta norma similar a la anteriormente analizada, se reiteran los criterios proferidos por la Sala con respecto al artículo 904 del Código Judicial en el sentido, que las reglas de la Sana Crítica constituyen un sistema de valoración que se apega a la experiencia, la lógica y la psicología que debe utilizar el juzgador al valorar las pruebas dentro de un proceso, lo que significa que la sentencia que profiera deberá reflejar el universo probatorio existente en el proceso.

En consecuencia la Sala concluye que tampoco ha sido transgredido el artículo 2144 del Código Judicial.

Por relacionarse de manera directa, la Sala atenderá de manera conjunta el concepto de la infracción de los artículos 822 y 823 del Código Judicial, relativa al valor probatorio de los documentos públicos, ya que de acuerdo al casacionista ambas normas fueron lesionadas en concepto de violación directa por omisión.

Sobre el particular la Sala observa que el recurrente manifiesta su inconformidad en el hecho que no se acreditó científicamente en el expediente, la falsedad de la documentación emanada de la Tesorería de Antón, pese a ello la segunda instancia desconoció el sentido literal de esas normas adjetivas.

Al analizar el fallo de 31 de agosto de 1999, este Tribunal Colegiado observa que la segunda instancia no se ocupó de valorar la documentación proferida por la Tesorería de Antón, por lo que mal se puede aducir que existe una vulneración directa por omisión, si ésta se produce cuando las normas no son consideradas o aplicadas en el fallo, aunque la sentencia se ocupe de atender la situación planteada. En esta oportunidad, el fallo no consideró las pruebas aludidas por lo que mal se puede invocar la violación directa por omisión de estas disposiciones jurídicas.

Siendo ello así la Sala estima que no han sido transgredidos los artículos 822 y 823 del Código Judicial.

Del Código Administrativo, expresa el casacionista que fue transgredido de manera directa por omisión el artículo 1377, que regula lo relativo a los registros vehículares de los medios de transporte, para transitar en el territorio nacional.

Sobre esta disposición de carácter administrativa, la Sala reitera los criterios señalados a propósito de los artículos 822 y 823 del Código Judicial, ya que si la situación fáctica no fue planteada en la sentencia, mal se puede exigir la aplicación de la norma e indicar que ha sido vulnerada en concepto de violación directa por omisión. Se concluye entonces que el recurrente tampoco ha logrado acreditar la infracción del artículo 1377 del Código Administrativo.

Con respecto a las normas sustantivas, se señalan como infringidos los artículos 38 y 322 del Código Penal, relativos a la autoría y al delito de Peculado.

Como quiera que este Tribunal de Casación ha vertido profusa jurisprudencia

sobre la forma en que se produce la transgresión de las causales de naturaleza probatoria en los recursos de Casación en el Fondo, en el sentido que la vulneración de la norma sustantiva penal sólo se produce cuando ha tenido lugar la infracción de la norma adjetiva, siendo que esto último no ha ocurrido, no se configura la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo, ya que la vulneración se produce de manera indirecta (Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 20/2/97. Registro Judicial de Febrero de 1997, pág. 167).

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia recurrida por el licenciado MARIO CONCEPCION.

Notifiquese,

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS A FAVOR DE VICTORIANO MINOTA ANGULO Y DE JUAN CARLOS PAREDES, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de recursos extraordinarios de casación en el fondo propuestos por la firma forense Villalaz y Asociados, en nombre y representación de Victoriano Minotta Angulo; por el licenciado Javier Antonio Quintero Rivera, apoderado judicial de Juan Carlos Paredes Barría, y por el licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, defensor técnico de Luis Amarildo Barbosa Lamos, contra la sentencia fechada 20 de septiembre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial con sede en Chiriquí, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia emitida por el Juzgado Sexto de lo Penal del Circuito Judicial de Chiriquí, en el sentido de que condenó a Victoriano Minotta Angulo, Luis Amarildo Barbosa Lamos y a Juan Carlos Paredes Ibarra a la pena de noventa (90) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funiones públicas por igual período que la pena principal, como responsables del delito de tráfico internacional de drogas.

En este momento procesal le corresponde a la Sala examinar los recursos de casación presentados, con el objeto de pronunciarse sobre sus admisiones, a lo que procede.

A) Recurso de casación interpuesto a favor de Victoriano Minotta Angulo (fs. 1531-1540).

El casacionista invoca dos causales de casación en el fondo: error de derecho en la apreciación de la prueba y cuando se haya cometido error de derecho, al determinar la participación y correspondiente responsabilidad del imputado, en los hechos que la sentencia de por aprobados. Estas causales se encuentran consagradas en los numerales 1 y 11 respectivamente, del artículo 2434 del Código Judicial.

La primera causal expuesta, está fundamentada con cinco motivos, en los

cuales básicamente se hace un relato de cómo el ad-quem llegó al convencimiento de que la conducta de Minotta encuadraba dentro de la figura de coautor de tráfico internacional de drogas (fs. 1533-1534). Estos planteamientos carecen de cargos de injuricidad, ya que no se sustenta de qué forma el tribunal valoró erradamente las pruebas incorporadas al expediente que conllevaron a la condena de su patrocinado.

Con respecto a las disposiciones legales infringidas (fs. 1534-1536), se observa que el recurrente plantea como normas violadas los artículos 972, 973 del Código Judicial y el 255 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, toda vez "que la estadía de los guatemaltecos en el Hotel Costa del Sol, sólo coincidió con la presencia de Minotta el 18 de febrero", situación que llevó al juzgador de segunda instancia a no aplicar los principios de la sana crítica y, en consecuencia, aplicar una sanción que no correspondía. Nótese que estos razonamientos no van dirigidos a demostrar el concepto de la infracción que se alega, incurriendo en el mismo vicio que los motivos. Ello es así, por cuanto que no se explican los fundamentos por los cuales se produce la infracción de las normas alegadas.

En cuanto a la segunda causal, está sustentada con seis motivos. El casacionista censura en esta oportunidad que el ad-quem dio por probado el delito de tráfico internacional de drogas, en virtud de los señalamientos que realizaron Anselmo Arias Recinos y Julián Aníbal Rustrián Méndez, y que a su defendido se le vinculó con el hecho punible por un registro de llamadas efectuadas a la unidad de Beeper 8197, de la compañía Mobil Phone y haberle encontrado en su posesión 1.95 gramos de marihuana (f. 1537).

Advierte la Corte, que cuando se invoca esta causal lo que se busca es determinar el grado de participación criminal del imputado en la comisión del delito y no procurar la absolución del mismo. Así vemos que los motivos que utiliza el casacionista no se compadecen con la causal invocada, por cuanto que lo que pretende es sembrar una duda de si en realidad hubo un delito, y que si lo hubo su patrocinado es inocente, en consecuencia, estos argumentos también carecen de cargos de injuricidad.

En lo concerniente a las disposiciones legales infringidas, sólamente se señalan dos normas como vulneradas, los artículos 38 y 255 del Código Penal, en concepto de violación directa por comisión, toda vez que el tribunal tipificó la conducta de Minotta, sin serlo, como coautor y por lo tanto, sancionarlo por el delito de tráfico internacional de drogas. Observa la Corte, que si la disconformidad del recurrente radica en que su defendido no es coautor del delito, entonces el concepto de la infracción utilizado no es el mas apropiado para sustentar la causal invocada sino otro, el cual debió ser el de indebida aplicación, ya que es la que contempla el supuesto de hecho de que una norma se aplicó a una situación no regulado por ella. Así las cosas, esta Superioridad considera que los defectos advertidos en los motivos y disposiciones legales infringidas de ambas causales invocadas, carecen de coherencia lógica y jurídica para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto a favor de Victoriano Minotta Angulo.

B) Recurso de casación presentado a favor de Juan Carlos Paredes Barría (fs. 1556-1562).

Este recurso viene sustentado con una sola causal de casación en el fondo, error de derecho en la apreciación de la prueba, consagrada en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

Dicha causal es sustentada oportunamente con tres motivos. En ellos, la defensa técnica de Paredes alega que el ad-quem al valorar el informe policial que consta a foja 82 del expediente, suscrito por el detective Ricardo Gutiérrez de la Policía Técnica Judicial, así como la declaración indagatoria de Ovidio Arias Recinos, cometió "error de derecho en su apreciación, porque deriva indicios para vincular al procesado JUAN CARLOS PAREDES con el ilícito" (f.

1558).

Al analizar estos planteamientos, vemos que el casacionista indica que sólamente fueron dos los medios de prueba que el tribunal consideró para confirmar la sentencia de primera instancia, con respecto a su patrocinado. Sin embargo, no es cierto lo que señala el recurrente, toda vez que el tribunal no se basó exclusivamente en las pruebas que manifiesta el casacionista para decidir la situación procesal de Paredes, sino que también valoró otros elementos probatorios según constan en el cuaderno penal (fs. 1498-1500). En consecuencia, no es necesario admitir en estos momentos el presente recurso, para luego decir que los motivos carecen de cargos de injuricidad o que la resolución atacada fue dictada con apego a la ley.

En las disposiciones legales infringidas, cita como normas vulneradas los artículos 907, 972, 2112 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión y el 255 del Código Penal, por indebida aplicación. La defensa técnica de Paredes insiste en considerar que el tribunal infringió las normas en comento porque sólo valoró los dos medios de pruebas señalados anteriormente y, por consiguiente, la imposición de una pena a su defendido. No obstante, ya se manifestó que el tribunal si valoró otros elementos probatorios que dieron como resultado graves indicios de responsabilidad criminal en contra de Paredes, los cuales fueron confirmados al momento de imitir un fallo condenatorio. Estos defectos advertidos no permiten admitir el recurso extraordinario de casación presentado a favor de Juan Carlos Paredes Barría.

C) Recurso de casación interpuesto a favor de Luis Amarildo Barbosa Lamos (fs. 1572-1584).

Corresponde examinar en esta oportunidad el recurso de casación presentado a favor de Barbosa que, para tal efecto, está sustentado con una causal de casación en el fondo: error de derecho en la apreciación de la prueba, contemplada en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

Dicha causal es sustentada con cinco motivos, en donde básicamente se expresa que el tribunal de la causa no valoró, de acuerdo a la ley, las declaraciones indagatorias de Victoriano Minotta Angulo, Juan Carlos Paredes Ibarra y la de su defendido Luis Amarildo Barbosa Lamos. Aunado a ello, agrega el recurrente, el tribunal tampoco consideró que Barbosa estaba casado con una panameña con la cual tiene una hija, además que desarrollaba actividades comerciales en nuestro país. Por último, manifiesta el casacionista que los señalamientos que realizan Ovidio Arias Recinos y Gladys Reyes Restrepo, en ningún momento incriminan a su patrocinado (fs. 1574-1575).

Con respecto a esta causal, la Corte ha manifestado que "el error en la valoración de elementos probatorios debe ser de tal envergadura que si el juzgador no lo hubiese cometido, la resolución impugnada habría tenido una parte dispositiva distinta" (Sentencia de 25 de junio de 1999). Los motivos que ahora nos ocupan contienen apreciaciones subjetivas carentes de cargos de injuricidad que, aún tomándolos en cuenta no permiten variar lo esencial de la resolución judicial impugnada. Aunado a ello, no podemos decir que el ad-quem realizó una mala valoración del acervo probatorio, cuando explica claramente los hechos que dieron como resultado la participación criminal de Barbosa en la comisión del hecho punible (fs. 1494-1497).

Por último, se expresan como infringidos los artículos 770, 904, 969, 970, 2144, todos del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión, y los artículos 255 y 39 del Código Penal, por indebida aplicación. Los dos primeros motivos están íntimamente relacionados y se refieren al hecho de que si bien el tribunal valoró los medios de prueba existentes en el expediente, lo hizo contrario a la "sana crítica, razonabilidad y experiencia", toda vez que Ovidio Arias Recinos, Julio Rustrian Méndez y Gladys Reyes de Restrepo manifestaron que no conocían a nuestro patrocinado, por lo que no existía ningún señalamiento que lo vinculara con la comisión del ilícito, además Barbosa era un comerciante y

tenía su familia en Panamá (fs. 1576-1577). Indica la Corte, que no se aprecia en qué se basa el casacionista para indicar que el juzgador de segunda instancia no valoró las pruebas de acuerdo a la experiencia común y la sana crítica y al mismo tiempo manifestar que sí las apreció. No basta con que los implicados en un delito manifiesten que determinadas personas no están involucradas en la comisión del hecho punible, tales afirmaciones deben estar comprobadas fehacientemente en el expediente. Por otro lado, ya se expresó en líneas anteriores que las pruebas que señala el recurrente fueron consideradas por el tribuanl al momento de fallar.

La tercera y cuarta norma que se estiman vulneradas se sustentan en el hecho de que no existen, como lo expresara el tribunal, indicios contra Barbosa. Ello es así, ya que lo único que utilizó el ad-quem para condenar a nuestro patrocinado fue la amistad que este mantenía con Paredes y Minotta, que Barbosa había sido investigado por delitos relacionados con droga anteriormente y la existencia de una unidad de beeper, que en su conjunto en nada vinculan al beneficiario del presente recurso (fs. 1577-1580). Debemos recordar que los indicios son hechos ciertos que indican o revelan la existencia de otros que en su conjunto pueden llevar al juzgador a tener serios motivos de credibilidad contra el imputado, los cuales en su momento deberán ser probados en el proceso. En esta oportunidad, el casacionista lo que hace es afirmar a esta Superioridad parte de los indicios que llevaron al ad-quem a confirmar una decisión de primera instancia, que fueron demostrados durante la tramitación del proceso.

Finalmente la defensa técnica de Barbosa señala en las últimas disposiciones legales estimadas infringidas que no existen, dentro del cuaderno penal, ningún testimonio que incrimine a Barbosa, pese a ello el tribunal sancionó indebidamente a Barbosa como coautor del delito de tráfico internacional de drogas (fs. 1581-1583). Lo cierto es que ya se indicó que la participación criminal de Barbosa fue demostrada a lo largo del proceso, por lo que aceptar este razonamiento sería contradecir lo anteriomente expuesto.

En vista de que los recursos extraordinarios de casación interpuestos a favor de Victoriano Minotta Angulo, Juan Carlos Paredes Barría y Luis Amarildo Barbosa Lamos adolecen de defectos, tanto en el requisito concerniente a los motivos como a las disposiciones legales infringidas, es inevitable concluir que los presentes recursos no pueden ser admitidos, por incumplir los requisitos que para tales efectos establece la ley.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, NO ADMITE los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de 20 de septiembre de 1999, emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A PLÁCIDO A. CAMPINES PINO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZALEZ R. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término establecido por el artículo 2443 del Código Judicial

para que las partes interesadas tuvieran conocimiento de la llegada del proceso penal seguido a XIOMARA OSORIO, por delito contra la salud pública, en virtud del recurso de casación interpuesto por la representante de su defensa, corresponde, corresponde decidir la admisibilidad del medio de impugnación presentado, a lo que se procede con base en las siguientes consideraciones.

El recurso fue presentado por persona hábil, promovido dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal, contra resolución emitida por un Tribunal Superior en segunda instancia, el cual admite este tipo de recurso extraordinario y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

En cuanto a la historia concisa del caso, la jurista hace una breve relación de los hechos, en forma clara y objetiva, en el que se advierte el vicio de injuridicidad que se le imputa a la sentencia recurrida.

La casacionista invoca como causal única del recurso la contenida en el numeral 8, artículo 2434 del Código Judicial: "cuando se comete error de derecho al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal".

Es oportuno señalar que la Corte en reiterada jurisprudencia ha indicado que el numeral 8 consagra cuatro causales, de allí que se debe invocar aquella que se adecúe al caso en concreto.(Cfr. Fallos de 30 de mayo de 1997; 8 de febrero, 28 de abril y 14 de julio de 2000). En el libelo in examine se han invocado dos causales:

a) Error de derecho al admitir los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal;

d) Error de derecho al calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad penal.

Seguidamente, de conformidad con la estructura del recurso, la defensa técnica enuncia un motivo único. No obstante, la jurisprudencia uniforme de esta Sala ha sostenido que es necesario que los motivos se relacionen con la causal seleccionada por el recurrente, pero en este caso la casacionista no ha precisado cuál es la causal que fundamenta el recurso, error que no permite que el Tribunal de Casación entre a hacer algún tipo de análisis sobre los hechos presentados.

En otro orden de cosas, se tiene que la casacionista indica que las disposiciones legales infringidas son el artículo 66 del Código Penal y 69 Código Civil, y en una sección aparte transcribe en forma íntegra los textos de las normas, con expresión del concepto de la infracción y explicando cómo se ha producido.

Cabe destacar que el artículo 2443 del Código Judicial es explícito al señalar en el literal c del numeral 3, que el escrito de casación debe reunir como uno de sus requisitos que "se especifiquen las disposiciones legales infringidas y el concepto que lo han sido", lo que constituye una sección del recurso.

Como quiera que los errores anotados no permiten que el Tribunal de casación entre a examinar la sentencia objeto de censura a través de este medio extraordinario de impugnación, ello hace improcedente su admisión.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto a favor de XIOMARA OSORIO.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SE ORDENA LA CORRECCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA LICENCIADA MIRIAM H. JAÉN DE SALINAS, A FAVOR DE ARIEL ACEVEDO, Y CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE OCTUBRE DE 1999, EMITIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO E. GONZALEZ R. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada MIRIAM H. JAÉN DE SALINAS, defensora de oficio del señor ARIEL ACEVEDO, acude ante este Tribunal de Casación con el propósito de interponer formal recurso extraordinario de casación penal en el fondo, contra la sentencia calendada 27 de octubre de 1999, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que revocó la de primera instancia y en su defecto condenó a su representado a la pena de 30 meses de prisión, por el delito de lesiones personales.

Una vez cumplido el término de lista que establece el artículo 2443 del Código Judicial, la Sala procede al examen del recurso, a efectos de decidir sobre su admisibilidad.

En primer lugar observamos, que el libelo del recurso fue presentado por apoderado legal, contra una sentencia de segunda instancia proferida por un Tribunal Superior, y por delito cuya penalidad supera los dos años de prisión, conforme lo estipula el artículo 2434 del Código Judicial.

Por otra parte, el recurrente cumple con lo normado en el artículo 102 del Código Judicial, en el sentido de dirigir el escrito de formalización de la casación al Magistrado Presidente de la Sala Penal.

En cuanto a la historia concisa, se observa, que la abogada casacionista hace alusión a ciertos elementos probatorios, como declaraciones y experticias médico-legales, lo cual es contrario a lo exigido por la técnica casacionista, que requiere, que la historia concisa sea redactada de forma concreta y sucinta, relatando aquellos hechos que dieron origen al proceso.

Igualmente, la recurrente aduce como única causal el "Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la ley sustancial penal y ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado" (f. 255), que es sustentada en un solo motivo, y del cual se desprende el cargo de injuridicidad que se ataca contra la resolución impugnada.

En cuanto a la sección de las disposiciones legales infringidas se aducen los artículos 970 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión, y 136 del Código Penal en concepto de indebida aplicación. De ellos se observa, fueron transcritos correctamente y explicados de manera coherente con el motivo y la causal aducida.

Dadas estas consideraciones, se concluye, que debido a que en el presente recurso extraordinario, se evidencia un solo defecto, que es en cuanto a la historia concisa del caso; procede ordenar la corrección del escrito, en el sentido de que dicha sección debe ser estructurada de una forma sucinta y breve de los hechos que dieron origen al proceso, y del cual se puedan desprender cargos de injuridicidad contra la resolución impugnada.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por el suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA la corrección del presente recurso de casación interpuesto por la licenciada MIRIAM H. JAÉN DE SALINAS, y DISPONE mantener el negocio en Secretaría por el término de cinco (5) días hábiles de conformidad a lo establecido en el artículo 2444 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROBERTO E. GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARIA PIEDAD URIBE MARIN, SINDICADA POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Concluida la audiencia oral programada en presente caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2449 del Código Judicial, corresponde a la Sala Segunda de lo Penal, decidir sobre el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa de MARIA PIEDAD URIBE MARIN, procesada por delito contra la Salud Pública.

LOS HECHOS

El 20 de enero de 1997, en la Coordinación de Servicios Administrativos de la Oficina de la Autoridad del Aeropuerto Internacional de Tocumen, se detectó una carga que en su interior tenía oculta en un doble fondo, una sustancia pastosa que resultó ser cocaína. Se puso en conocimiento a la Policía Técnica Judicial quien llevó a cabo diligencias tendientes a ubicar a la persona propietaria de dicha mercancía y el 21 de enero de 1997, en las instalaciones de la empresa Express Courier y Cargo, se detuvo a la señora MARIA PIEDAD URIBE MARIN quien fue quien había llevado la mercancía para su embarque. Realizadas las diligencias necesarias se remitió el sumario al tribunal competente el cual, luego de llevarse a cabo el proceso abreviado, condenó a MARIA PIEDAD URIBE MARIN a la pena de 90 meses de prisión como autora del delito de Tráfico Internacional de Drogas. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación y el Segundo Tribunal confirma la sentencia de primera instancia, la cual según la casacionista, incurre en un error al calificar la participación criminal de la imputada.

CAUSAL INVOCADA

La casacionista señaló como causal de fondo la prevista en el numeral 11 del artículo 2434 del Código Judicial que dice: "Cuando se haya cometido error de derecho, al determinar la participación y correspondiente responsabilidad del imputado, en los hechos que la sentencia de por probados".

La causal esta fundamentada en un sólo motivo. Según la casacionista, El tribunal ad quem en el fallo impugnado, comete un error al calificar la participación delictiva de la procesada como autora del delito de tráfico internacional de drogas, porque en su declaración, la señora MARIA PIEDAD URIBE MARIN, expuso que las mercancías en cuyo interior se encontró la sustancia ilícita incautada, le fueron entregadas por una pareja de extranjeros a quienes

describió en detalles para que las entregara en la compañía embarcadora Express Courier y Cargo, con destino a Holanda, "de donde resulta que su actuación se limitó a prestar un auxilio a los autores del delito y por tanto es errónea la calificación que de su participación delictiva hace el ad quem, siendo que su conducta se ubica en la complicidad secundaria y no en la autoría como señala el ad quem".

OPINION DE LA PROCURADURIA

La Procuradora General de la Nación, Suplente Encargada, solicita que al momento de resolver el presente recurso de casación, se haga no casando la sentencia de 19 de agosto de 1998, porque considera que la causal invocada, de acuerdo a lo planteado en el motivo que le sirve de sustento, no prospera. Afirma que este motivo adolece de errores técnicos que impiden entrar en el fondo del recurso de casación instaurado. Argumenta que el hecho de que "a través de la causal invocada lo que se va a debatir es el grado de participación criminal que el tribunal ha asignado, con respecto a uno de los participantes, sin entrar a cuestionar los hechos reconocidos en la sentencia y, como se puede apreciar en la resolución recurrida vía casación, en ésta se dejó probada 'plenamente', la participación de la imputada en su calidad de autora del hecho delictivo, al ser inaceptable, a juicio del ad quem, 'la excepción presentada en el sentido de que unos desconocidos le solicitaron que enviara una carga al exterior', máxime cuando la causal que se estudia, requiere que se esté ante un proceso que se haya condenado a más de una persona, en la medida en que la participación criminal se va a determinar en función de la actuación del autor, situación que no se produce en la presente causa, en la que la procesada lo es por su calidad de autora y única encausada".

ANALISIS DE LA SALA

La causal invocada, "cuando se haya cometido error de derecho, al determinar la participación y correspondiente responsabilidad del imputado, en los hechos que la sentencia de por probados", se refiere no a la autoría del hecho punible sino a la participación criminal. Partiendo de esta premisa, la jurisprudencia tiene establecido que cuando se invoca la causal bajo examen, el recurrente no objeta la evaluación probatoria de la causa, pues se presume que esta se ha hecho inobjetablemente, lo que se cuestiona es el criterio del juzgador, el cual ha incurrido en un vicio al determinar el grado de participación criminal (autor inmediato, autor mediato, instigador, cómplice primario, cómplice secundario) en que se ubica la acción del imputado.

Todo lo anotado nos indica que en un sentido lógico que cuando se invoca esta causal, es porque nos encontramos frente a un delito en el que se ven involucradas varias personas y que el tribunal comete un error de derecho al determinar la participación del procesado, es decir, que el juzgador comete un error de derecho al determinar la participación criminal del procesado en los hechos que la sentencia da por probados asignándole un grado de responsabilidad que no le corresponde.

Ahora bien, el juzgador de primera instancia condenó a la procesada MARIA PIEDAD URIBE MARIN a 90 meses de prisión como autora del delito de tráfico internacional de drogas (fojas 190-197), resolución que fue apelada por la defensa de la procesada porque consideró que no se habían practicado las pruebas que acreditaban que su defendida desconocía el contenido de la mercancía que estaba enviando y que por lo tanto actuó de buena fe sin saber que estaba cometiendo un delito (fojas 210-210).

El Segundo Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 2428 del Código Judicial que dice que "El recurso legalmente concedido atribuirá al Tribunal de alzada el conocimiento del proceso, sólo sobre los puntos de la resolución a que se refiera el recurrente", se pronunció con respecto a la disconformidad del apelante y procedió a confirmar la sentencia de primera instancia. (Lo subrayado es de la Sala). En este mismo sentido, se verifica que

en ningún momento, a lo largo del proceso, la defensa técnica cuestionó el grado de participación de su defendida con respecto a los hechos acreditados, aspecto que no fue impugnado al recurrirse la sentencia de primera instancia, por lo tanto, no fue un hecho sobre el que se pronunció el tribunal.

Al presentar un recurso de casación, de acuerdo a la causal que se invoque, los cargos de injuridicidad que se aduzcan, deben estar dirigidos a probar los vicios de ilegalidad en que incurrió el tribunal de segunda instancia, que son los puntos en los que en su oportunidad se pronunciará el tribunal de casación de acuerdo a lo establecido en el artículo 2434 del Código Judicial.

En el recurso bajo examen, la recurrente mal puede impugnar a través de este recurso extraordinario el grado de participación y correspondiente responsabilidad de su defendida porque este aspecto no fue materia del conocimiento del juzgador de segunda instancia y en este momento procesal, sólo procede contra las decisiones de los Tribunales Superiores.

En fallo de 28 de julio de 1998, también citado por la Procuraduría de la Nación, esta Sala dijo:

> "... se observa que el casacionista carece de legitimidad para impugnar a través del recurso de casación sub júdice aspectos relacionados con la calificación del delito, porque se trata de cuestiones que no han sido materia del conocimiento del juzgador de segunda instancia y es sabido que este medio de impugnación extraordinario, en lo penal, sólo procede contra las decisiones de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial".

En el presente caso, el motivo aludido por la casacionista tiene por objeto desvirtuar la culpabilidad de la procesada MARIA PIEDAD URIBE MARIN como autora del delito de tráfico internacional de drogas, pero la sentencia de segunda instancia sólo acredita la culpabilidad y responsabilidad de una persona por lo que en estricto derecho no se puede dar la figura de la participación criminal que exige pluralidad de agentes.

Observa la Sala que no se ha acreditado la causal invocada, por lo considera que lo procedente es no casar la sentencia impugnada.

Por lo tanto, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE BYRON MENDOZA ARIAS, SINDICADO POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Magali Acosta de Vergara, ha formalizado recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 11 de agosto de 1999, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que confirma la pena de 64 meses de prisión impuesta a Harold Mendoza Arias por la comisión del delito de tráfico

internacional de drogas. En cumplimiento de la ritualidad procesal del recurso extraordinario de casación, se corrió traslado al Procurador General de la Nación para luego celebrarse la audiencia oral.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

De conformidad con la explicación que trae el libelo de formalización del recurso, el 28 de mayo de 1998, Byron Harold Mendoza, de nacionalidad guatemalteca, se encontraba en el aeropuerto de Tocumen en calidad de pasajero en tránsito, toda vez que se dirigía a la ciudad de San Pedro Sula, República de Honduras. Mientras se encontraba en la zona aeroportuaria, Mendoza le informa a funcionarios de Fiscalización Aduanera que había ingerido seis comprimidos de heroína, por lo que fue trasladado al Hospital Santo Tomás. Instruido el sumario y surtida la etapa del plenario, el juez de la causa condenó a Mendoza a la pena de 74 meses de prisión por el delito de tráfico internacional de drogas , sentencia que fue confirmada por la resolución de 11 de agosto de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual recurre en casación en el fondo.

CAUSALES INVOCADAS

La recurrente invoca dos causales en el fondo, por lo que el tribunal de casación debe examinar cada una de ellas con la debida separación, examinando sus motivos y las disposiciones legales que se dicen conculcadas, en cumplimiento del mandato del artículo 2450 del Código Judicial.

PRIMERA CAUSAL

La casacionista formula cargos a la sentencia con fundamento en la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, consagrada en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

MOTIVOS

Son tres los motivos en que se fundamenta la causal, con el siguiente tenor:

En el primer motivo se argumenta que el Tribunal Superior ignoró ponderar el oficio No. 87-16411 de 14 de julio de 1998, dictado por el Instituto de Medicina Legal (f. 93), el cual corrobora que Mendoza transportaba la droga para uso personal.

El segundo motivo consiste en que la sentencia atacada omitió la certificación medica emitida por el Doctor Max Marroquín Krings (f.105), y la correspondiente documentación que de autenticidad de esa certificación que es visible a fojas 106, 107 y 108. Esa certificación, plantea la recurrente,establece con claridad que su patrocinado presentaba un cuadro de consumo de drogas. A juicio, al no ponderarse esa prueba, el Tribunal Superior hubiese determinado que la droga que poseía el imputado era para su consumo personal.

En el tercer motivo, la recurrente acepta que su mandante introdujo la droga al territorio nacional, pero es del criterio que esa droga era para consumo personal. En síntesis, estima que las pruebas valoradas revelan que su patrocinado incurrió en el delito de trafico internacional de drogas, pero para consumo personal.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

A juicio de la recurrente, la sentencia del Segundo Tribunal Superior vulnera el artículo 864 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, por cuanto que la sentencia impugnada omitió valorar las pruebas que reposan a fojas 105, 106, 107 y 108 del expediente.

Estima también infringido por omisión el artículo 358 del Código Judicial, toda vez que la resolución atacada debió valorar el dictamen de evaluación psiquiátrica del Instituto de Medicina Legal efectuado al imputado.

Otra disposición que la recurrente advierte infringida es el artículo 770 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, ya que no valoró de acuerdo a la sana crítica las certificaciones medicas, pruebas psiquiátricas, porque, de haberlo hecho, habría concluido de que la droga que Mendoza poseía era para su consumo personal.

También se menciona como infringido el artículo 967 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, ya que el Tribunal Superior no ponderó, con arreglo a la sana crítica, el dictamen de evaluación psiquiátrica realizada al sumariado.

Finalmente, la recurrente plantea que el artículo 255 del Código Penal resultó infringido en concepto de violación directa por comisión, por cuanto que la conducta de Mendoza se adecua al último párrafo de la norma penal en cuestión.

SEGUNDA CAUSAL

Señala la casacionista que la sentencia impugnada incurre en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, causal que, está contenida en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial

MOTIVO ADUCIDO

La recurrente advierte un motivo como fundamento de la segunda causal invocada, en el cual expone que sí se desprende una confesión espontánea y oportuna en la declaración del imputado Mendoza (f. 184).

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Estima la casacionista que la sentencia impugnada vulnera, por omisión, el artículo 2122 del Código Judicial, por cuanto que la confesión de Mendoza debió ser atendida de manera favorable (f. 185).

Continua exponiendo la recurrente que el artículo 66 del Código Penal resultó infringido de manera directa por omisión, ya que no aplicó la atenuante concerniente a la confesión espontánea y oportuna (f. 186).

También plantea que la sentencia impugnada vulneró el artículo 69 del Código Penal por omisión, ya que de la declaración indagatoria de Mendoza se desprende que confesó de manera espontánea y oportuna (f. 186).

Por el anterior razonamiento, la casacionista es de criterio que debe ser casada la sentencia, por considerar que se han comprobado las dos causales o vicios de casación anunciados en el libelo. (f. 187).

OPINION DEL PROCURADOR

El Procurador General de la Nación, al referirse al primer motivo que sustenta la primera causal invocada, señala que no es creíble la versión del imputado. En tal sentido el jefe del Ministerio Público advierte que el imputado empieza manifestando que viajó a Colombia porque la droga era más barata que en Guatemala, para luego concluir con que llevaba la droga a Honduras porque ahí obtendría un trabajo, y no sabía si vendían heroína para su consumo. También advierte el Procurador General que pese a que no fue valorado el informe medico-legal del Instituto de Medicina Legal, el cual destaca que Mendoza presenta un cuadro de abuso de drogas, la manera en que éste transportaba la droga descalifica el hecho de que esa droga era para su consumo. (f. 204)

En cuanto al segundo motivo, plantea que pese a que el imputado acreditó

su condición de consumidor de drogas, no obliga a que se califique su conducta como un delito de simple tenencia (f. 206).

Finalmente, el jefe del Ministerio Público desestima el tercer motivo, ya que considera que no se advierte algún cargo específico (f. 207).

En lo concerniente a las disposiciones legales infringidas, el Procurador General de la Nación desestima la vulneración del artículo 864, 770 y 967 del Código Judicial con base en los argumentos expuestos al momento de resolver los motivos de la primara causal (fs. 207-208-209).

También descalifica la infracción del artículo 358 del Código Judicial, ya que la recurrente no explica en qué incidió la no valoración del examen psiquiátrico al que Mendoza fue sometido (f. 208).

Con base a que la recurrente no acreditó la violación de las normas adjetivas que consideraba infringidas, estima el Procurador de la Nación que tampoco resulta la vulneración del artículo 255 del Código Penal (f. 209).

Tras analizar el único motivo que apoya la segunda causal que invoca la casacionista, opina el Procurador General de la Nación que es la condición en que se encontraba el imputado lo que hace que Mendoza reconociera que llevaba droga, por lo que desaparece la espontaneidad y oportunidad en la declaración del imputado (f. 211).

También considera que no procede la alegada infracción del artículo 2122 del Código Judicial, ya que esa disposición legal no fija parámetros de valoración de la prueba (f. 212). De igual manera, no comparte que la sentencia atacada haya vulnerado el artículo 66 del Código penal, por cuanto que los medios probatorios existentes en el proceso no configuran la atenuante de la confesión de manera espontánea y oportuna (f. 213).

Finalmente, el Procurador General de la Nación considera que la sentencia impugnada no infringió el artículo 69 del Código Penal, por lo que la segunda causal tampoco ha sido comprobada. Por esa razón, recomienda que no sea casada la sentencia proferida por el Tribunal Superior (f. 214).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
PRIMERA CAUSAL

A. Motivos

Al examinar la sentencia atacada, se observa con claridad de que el tribunal Superior no ponderó el oficio No. 87-1641 de 14 de julio de 1998 y la certificación medica emitida por el doctor Max Marroquín, medico cirujano del Hospital Los Próceres de Guatemala (f. 105), al igual que la correspondiente documentación que le da autenticidad a esa certificación (fs. 106-108). No obstante, recuerda la Sala que esa omisión, por sí sola, no configura el vicio de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, ya que esas piezas deben ser confrontadas con otras allegadas al cuaderno penal. De ese ejercicio probatorio, obtendremos si la alegada omisión influyó en la decisión del Tribunal Superior. En tal sentido, pese a que el mencionado oficio del Instituto de Medicina Legal dictaminó que Mendoza presentaba un cuadro de "abuso de drogas (cocaína- heroína)" y que el certificado expedido por el medico guatemalteco reveló que el imputado era consumidor de drogas, lo cierto es que la heroína que transportaba dentro de su cuerpo no era una cantidad para consumo personal. En autos se encuentra el dictamen del Medico Forense General del Instituto de Medicina Legal, el cual establece que una dosis de heroína está limitada a 10 miligramos (f. 87). Si el dictamen de laboratorio medico de la Policía Técnica Judicial reveló que los 6 comprimidos que Mendoza expulsó tenían un peso total de 60.54 gramos (f. 85), no cabe duda que esos comprimidos no eran para consumo personal, ya que con esos gramos de heroína podían obtenerse una considerable cantidad de dosis de heroína. A lo anotado, se agregan las contradicciones

sustanciales que revela la declaración del imputado (cf. 88-92). En efecto, el sumariado, en primer término, señaló que viajó a Colombia porque en Guatemala "no hay y es más cara" la heroína (f. 89). Pero tras comprar la droga en la ciudad de Calí, no se dirigió nuevamente a Guatemala, sino a Honduras (cf. 90) porque ahí "tenía un contacto para un trabajo y como no sabía si venden heroína allá, la llevaba para mi consumo" (f. 90). En conclusión, la Corte es del criterio que el imputado no viajó a Colombia para garantizarse el abastecimiento de heroína; los hechos allegados al cuaderno penal revelan con claridad que estamos en presencia de un delito de tráfico internacional de drogas.

Para concluir con el requisito concerniente a los motivos, la Sala considera que el tercer motivo solamente es utilizado por la casacionista para reiterar la postura de que Mendoza fue aprehendo con una droga que era para su uso personal. No advierte alguna otra pieza probatoria que, a su juicio, fue omitida por el Tribunal Superior. Por eso la Corte comparte el criterio externado por el Procurador General de la Nación en el sentido de que el motivo en cuestión carece de cargo de injurídicidad.

B. Disposiciones legales infringidas:

Como viene expuesto en los motivos, La Sala reconoce que la resolución atacada no valoró los documentos que reposan a fojas 105 al 108 y el que es visible a foja 93, que es el dictamen psiquiátrico emitido por el Instituto de Medicina legal del Ministerio Público. Pero, como se ha visto, al ponderar esas piezas procesales con otras allegadas al cuaderno penal, no se llega a conclusión distinta que la proferida por el Tribunal Superior. Ello implica que la resolución impugnada en casación no infringió, en concepto de violación directa por omisión, los artículos 864, 358, 770, 967, todos del Código Judicial. Y esa situación trae como consecuencia que no se ha comprobado la infracción de la norma sustantiva alegada por la casacionista, cual es el artículo 255 del Código Penal, ya que los elementos de convicción omitidos por la resolución atacada no revelan la comisión del delito de tráfico internacional de drogas para uso personal.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
SEGUNDA CAUSAL

A. Motivo:

Para que pueda considerarse la atenuante de la confesión espontánea y oportuna, deben atenderse dos elementos: las circunstancias de la presentación del sujeto activo ante la autoridad y el estado de las investigaciones al momento de la confesión. En su declaración indagatoria, Mendoza señaló que cuando el avión hizo escala en el aeropuerto de Tocumen, "me vi bien mal ni siquiera comí, pedí algo de beber y no me lo quisieron dar, después cuando se hizo el trasbordo, pasé a comprar unas cosas en la zona y después volví a regresar al avión de allí se me llamó por mi nombre y yo como venía bien loco o drogado, yo salí entonces fue cuando me llevaron a un cuarto y yo como estaba drogado, no sabía qué responder ni qué decir, me desvistieron, me revisaron ... les confesé de que traía eso, que estaba drogado, que acaba de consumir, no les oculté nada a ellos ..." (f. 90). Como se aprecia, al momento de que se efectuaba el trasbordo de avión en el terminal aéreo de Tocumen, la salud del imputado había desmejorado, por ocasión de los comprimidos que transportaba dentro de su cuerpo. A juicio de la Corte, no se vislumbra que el imputado confesara de manera voluntaria, ya que admitió el hecho punible porque su vida estaba en peligro.

B. Disposiciones legales infringidas.

Sostiene el recurrente que la resolución atacada infringió el artículo 2122 del Código Judicial y el artículo 66 del Código Penal en concepto de violación directa por omisión, ya que su defendido confesó de manera espontánea y oportuna, y que "no existe elemento probatorio que indique lo contrario" (fs. 184-185). Sin embargo, estima la Sala que es la propia declaración del imputado la que

desvanece el reconocimiento de esa atenuante común, ya que de esta puede inferirse que fueron las autoridades del centro aeroportuario hicieron que se bajara del avión para proceder a su revisión. Fue en ese momento, es decir, cuando era interrogador por la autoridades, que resolvió expresar que transportaba los comprimidos de heroína.

Con vista de que la recurrente no ha comprobado la alegada confesión de su mandante, no es posible atender la infracción del artículo 69 del Código Penal, el cual prevé la operación matemática aplicable a la pena, en el caso en que se reconozca alguna de las circunstancias atenuantes consagradas en el artículo 66 del Código Penal.

Como quiera que no han prosperado el razonamiento anotado en el motivo y los preceptos alegados como infringidos, considera la Sala que no se ha comprobado el vicio que se alega contra la resolución atacada.

En razón de lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 11 de agosto de 1999, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que confirma la pena de 64 meses de prisión impuesta a Harold Mendoza Arias por la comisión del delito de tráfico internacional de drogas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACLARACIÓN DE SENTENCIA FORMULADA POR LA DEFENSA TÉCNICA DE DIOMAR ANTONIO POLO SOTO, SINDICADO POR DELITO DE HURTO CON ABUSO DE CONFIANZA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia de 2 de mayo de 2000, la Sala Segunda de la Corte Suprema no admitió el recurso de casación presentado contra la resolución de 13 de octubre de 1999, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que confirma la responsabilidad penal de Diomar Antonio Polo Soto por la comisión del delito de hurto con abuso de confianza, cometido en perjuicio del Banco General S. A.

Tras notificarse de la resolución que declaraba la no admisión del recurso de casación proferido por esta Corporación, la defensa técnica del sentenciado solicitó "aclaración" de la parte resolutiva, toda vez que señala que su mandante fue condenado a 32 meses de prisión, cuando la sentencia de 13 de octubre de 1999 resolvió condenarlo a 40 meses de prisión (cf. 205-207).

Al examinar la sentencia de 13 de octubre de 1999, dictada por el Segundo Tribunal Superior, puede observarse con claridad que Diomar Antonio Polo Soto fue condenado a 40 meses de prisión por el delito de hurto con abuso de confianza en detrimento del Banco General S. A (cf. 172).

La Corte no tiene reparos en corregir la parte resolutiva de la sentencia de 2 de mayo de 2000, toda vez que es un error de escritura que es autorizado por el último párrafo del artículo 986 del Código Judicial. En esecaso, la parte resolutiva de la sentencia de 2 de mayo de 2000, queda redactada esta manera:

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA SALA DE LO PENAL administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por la defensa técnica de Diomar Antonio Polo Soto contra la sentencia de 13 de octubre de 1999,proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que impone al sindicado la pena de 40 meses de prisión, como autor del delito de hurto con abuso de confianza cometido en perjuicio del Banco General S. A.
Notifíquese y devuélvase"

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley CORRIGE la parte resolutiva de la sentencia de 13 de octubre de 1999 proferida por esta Corporación, en los términos arriba indicados en la parte motiva de esta resolución, a petición de la defensa técnica de Diomar Antonio Polo Soto, sindicado por delito contra el patrimonio.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FERNANDO DÍAZ HERAZO (A) EDUARDO RÍOS SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD Y EL PUDOR SEXUAL. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Por cumplido el período de lista de que trata el artículo 2443 del Código Judicial, en los casos de recursos extraordinarios de casación en materia penal, la secretaría de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha pasado el expediente contentivo del juicio seguido a FERNANDO DÍAZ HERAZO (A) EDUARDO RÍOS en el que, previa revocatoria de la sentencia de primera instancia, fue condenado por el delito de violación, mediante sentencia de 4 de febrero de 2000, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, para que se resuelva sobre la admisibilidad del recurso.

El memorial está dirigido al Magistrado Presidente de la Sala Penal, de conformidad con el texto del artículo 102 del Código Judicial.

El recurso fue presentado por persona hábil, promovido dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal, contra una resolución que en efecto admite este tipo de recurso extraordinario y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

Corresponde en este momento procesal analizar la estructura y el contenido del presente recurso, a fin de comprobar si reúne los requisitos del artículo 2443 del Código Judicial.

En cuanto a la historia concisa del caso, el casacionista presenta una relación breve, objetiva y precisa que introduce al Tribunal de Casación al conocimiento de los hechos y fundamentos que originaron la resolución que se impugna con este recurso extraordinario.

En el escrito se enuncia dos causales. Primeramente, se aduce "por haber incurrido la sentencia en infracción de la Ley sustancial penal, por indebida

aplicación de ésta al caso juzgado", establecida en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

La causal invocada está sustentada en un solo motivo, en el que se incurre en el error de mencionar textos legales. No obstante se advierte el vicio de injuridicidad.

En relación a las disposiciones legales infringidas, el recurrente cita y transcribe en forma íntegra el texto del artículo 219 del Código Penal, norma que estima transgredida en concepto de indebida aplicación, y el artículo 216 de dicho Código, en concepto de violación directa por omisión, cumpliendo con la técnica propia de la presentación de la causal en examen.

En cuanto a la segunda causal invocada, se tiene que el recurrente indica que en la sentencia de segunda instancia se incurrió en "Error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal", contenida en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, la que es sustentada en dos motivos, los que pasamos a examinar.

En la redacción del primer motivo, se observa el vicio de injuridicidad que opera contra la sentencia que se pretende impugnar. No obstante, el recurrente introduce apreciaciones subjetivas a manera de alegato.

Con respecto al segundo motivo, se observa el cargo de injuridicidad contra el fallo recurrido, la prueba que se considera erróneamente apreciada, con indicación de la foja en que consta dicho medio probatorio.

Por otra parte, el casacionista desarrolla la sección de las disposiciones legales infringidas, citando los artículos 769 y 967 del Código Judicial e indica y desarrolla el concepto de la infracción a continuación de cada norma.

Cabe señalar que en jurisprudencia reiterada de la Corte se ha señalado que al invocar causales probatorias, las normas adjetivas que se estimen infringidas deben contener parámetros de valoración de prueba, requisito que no cumple el precitado artículo 769, pues ésta norma se limita a enunciar los medios de prueba admitidos en nuestra legislación, de allí que resulta inadecuada su invocación.

De otro lado, cuando se invocan causales de casación en el fondo es necesario indicar la disposición sustantiva violada a consecuencia de la transgresión de las normas adjetivas, requisito que incumple el recurrente.

Por lo anterior, la Sala estima procedente ordenar la corrección del libelo de casación solamente en lo atinente al motivo único que sustenta la primera causal y concluye que no procede la admisión de la segunda causal, dada la inobservancia de los requisitos establecidos en el artículo 2443 del Código Judicial y los desarrollados por la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, representada por el suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, con fundamento en el artículo 2444 del Código Judicial, ORDENA LA CORRECCIÓN recurso de casación en el fondo promovido por el Licdo. CARLOS M. HERRERA MORAN, de acuerdo con las indicaciones que se le hacen en los párrafos que motivan esta resolución; DISPONE que se mantenga el expediente en secretaría por el término de cinco (5) días a fin de que la parte interesada proceda a efectuar la corrección señalada, y NO ADMITE la segunda causal aducida.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROBERTO E. GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A YOLANDA YEPES Y ANDRÉS SING YEPES, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado MIGUEL ÁNGEL GABRIEL V., apoderado judicial del señor ANDRÉS SINGH YEPES, acude ante ésta Corporación de Justicia con el propósito de formalizar recurso extraordinario de casación en el fondo contra la sentencia de 2 de diciembre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la sentencia de 2 de junio de 1999, dictada por el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, que condenó al señor SINGH YEPES a la pena de 5 años de prisión, por el delito de Posesión Agravada de Drogas.

Cumplido el término establecido en el artículo 2443 del Código Judicial, se procede a examinar el recurso interpuesto a fin de decidir sobre su admisibilidad.

En tal sentido observamos, que el casacionista cumple con lo estipulado en el artículo 102 del Código Judicial, toda vez que el libelo de casación fue dirigido al magistrado presidente de la sala penal; al igual, la sentencia contra la cual se recurre en casación fue proferida por un tribunal superior en segunda instancia, y por un delito que contempla pena superior a los dos años de prisión.

En cuanto a la historia concisa del caso, observamos, que el letrado se limita a hacer apreciaciones subjetivas, es decir argumentaciones que más bien parecen ser alegatos, contrariando de esta manera, lo que exige la técnica casacionista, la cual requiere que la historia sea redactada de forma breve y sucinta, haciendo alusión a los hechos que dieron inicio al proceso, y que de ello se puedan desprender cargos de injuridicidad contra la resolución impugnada.

El recurrente invoca como primera causal el "ERROR DE HECHO EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LA PRUEBA LO QUE IMPLICA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL", contenida en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial. Dicha causal es sustenta por tres motivos, de los cuales se observa, que si bien han sido expuestos por separado, dan la impresión de ser uno solo, puesto que el segundo y tercer motivo, complementa el argumento esgrimido en el primero. A este respecto debemos señalar, que en reiterada jurisprudencia la Corte ha dejado sentado que cada causal invocada debe ir sustentada por cargos de injuridicidad contenidos en cada motivo por separado, lo cual requiere "que la redacción de los motivos apoyen y justifiquen la causal invocada, expresando con claridad la injuridicidad atribuida a la sentencia impugnada" (Resolución de 27 de octubre de 1998).

En cuanto a la sección de las disposiciones legales infringidas el casacionista aduce los artículos 30, 31 y 260 del Código Penal, todos en concepto de violación directa por comisión. Al respecto debemos señalar, que cuando se alega la causal "ERROR DE HECHO SOBRE LA EXISTENCIA DE LA PRUEBA", se deben citar normas que se relacionen con la prueba, es decir, disposiciones que contengan una temática de prueba, y posterior a ello, citar la norma sustantiva que se considera fue infringida como consecuencia de las anteriores (normas adjetivas).

Como podemos observar, el abogado casacionista comete el yerro de citar únicamente disposiciones del Código Penal, es decir normas sustantivas, que no se refieren a temas de prueba, y esto hace que este aparte del recurso carezca de validez jurídica.

La segunda causal alegada por el licenciado MIGUEL ÁNGEL GABRIEL V., es "ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, QUE IMPLICA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA", la cual se encuentra consagrada en el artículo 2434 numeral 1 del Código Judicial, y es sustentada en tres motivos.

No obstante, al entrar al examen de los motivos que sustentan la causal alegada, observamos, que el recurrente señala entre una de las pruebas que el Tribunal A-Quem le concedió eficacia probatoria, el testimonio de la señora YOLANDA YEPES DE SINGH (f. 168), que es igualmente citado en la causal anterior, lo cual trae como consecuencia que cuando se aluda una misma prueba en estas dos causales probatorias, error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y error de derecho en la apreciación de la prueba, dichas causales se excluyan entre si.

Al respecto la Sala Penal en fallo de 14 de abril de 1994, señaló lo siguiente:

> "En lo que se refiere a las causales, el recurrente invoca dos causales que, reiterada jurisprudencia de esta Sala a través de los años ha considerado excluyentes entre si; el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Si bien cada causal por separado hace mención de pruebas distintas, las dos causales coinciden al citar la misma prueba pericial que reposa en el expediente."
> (Registro Judicial, abril-1994, pág. 144)

En consecuencia, no se hace necesario entrar al exámen de la sección de las disposiciones legales y el concepto que se dicen infringidas.

Dado que los errores advertidos a lo largo del libelo presentado por el licenciado MIGUEL ÁNGEL GABRIEL V., incumplen con la estructura formalista que exige este recurso extraordinario (Art. 2443 del Código Judicial), procede declarar su inadmisibilidad.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación penal en el fondo, promovido por el licenciado MIGUEL ÁNGEL GABRIEL V. a favor de ANDRÉS SINGH YEPES, contra la sentencia de 2 de diciembre de 1999 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD PROMOVIDO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARTA GONZÁLEZ POR DELITO DE MALTRATO DE MENORES EN PERJUICIO DE VICTOR CHAVEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia conoce de la admisibilidad del recurso extraordinario de casación en la forma interpuesto por el Licdo. TOMÁXIMO OLIVERO GARCÍA FLORES, contra el Auto de 18 de octubre de 1999, mediante

el cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial confirmó la resolución N° 291 de 19 de agosto de 1999, emitida por el Juzgado Primero de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, en la que se deniega el incidente de nulidad dentro del proceso seguido a MARTA IMELDA GONZÁLEZ por delito de maltrato al menor cometido en perjuicio de VÍCTOR CHÁVEZ.

Antes de entrar al análisis del recurso, precisa hacer algunas anotaciones en cuanto a la naturaleza de las resoluciones que pueden impugnarse mediante este recurso extraordinario.

Las normas de procedimiento regulan lo concerniente al recurso de casación penal en el Capítulo I, Título VIII del Libro III del Código Judicial, y en la sección 1ª se sientan las bases legales que definen la naturaleza del recurso, preceptuando en los artículos 2434 y 2435 de la excerta legal las resoluciones susceptibles de este medio de impugnación:

> "Artículo 2434.En materia criminal habrá lugar al recurso de casación en el fondo, contra la sentencias definitivas de segunda instancia, dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por delitos que tengan señalada pena de prisión superior a los dos años..."

> "Artículo 2435.Contra los autos dictados en materia penal, que le pongan término al proceso mediante sobreseimiento definitivo o en que se decidan las excepciones de cosa juzgada, prescripción de la acción penal o de la pena o aplicación de amnistía o de indulto, habrá lugar al recurso de casación en el fondo..."

Como se observa, las normas transcritas se refieren al tipo de resoluciones susceptibles de casación en el fondo, pero el Código Judicial no contiene una norma que regule expresamente las resoluciones contra las cuales se puede interponer el recurso de casación en la forma.

No obstante, el artículo 2443 del Código Judicial establece los requisitos de forma del recurso de casación y señala taxativamente en el numeral primero que debe observarse "si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley", pues de no concurrir este requisito, la Corte se limitará simplemente a negar la admisión del recurso.

Ante esta situación, la Corte Suprema dentro de sus tendencias a establecer normas supletorias de las legales ha sostenido que, para dar paso a admitir las causales contenidas en el artículo 2437 del Código Judicial, referentes a la casación en la forma, la resolución debe ser de aquellas que enuncian los artículos 2434 y 2435, lo que ha sentado en los fallos de 14 de agosto de 1992, 19 de septiembre de 1997 y 14 de abril de 1999:

> "Cabe aplicar la interpretación analógica y deducir que la casación en la forma sólo podrá presentarse contra la misma categoría o clases de resoluciones judiciales que son susceptibles de revisión por casación en el fondo".

Y en resolución de 17 de marzo de 1999 se estableció lo siguiente:

> "la técnica legislativa que gobierna la expedición de la legislación a través de Códigos, elaborados en forma sistemática, sugiere no repetir, a propósito de un mismo instituto procesal, aspectos que aparecen previamente regulados en un mismo epígrafe del texto legal. Por esta razón, la expresión de las sentencias y autos susceptibles del recurso de casación, que se hace en los artículos 2434 y 2435 del Código Judicial, respectivamente es aplicable en lo concerniente a las causales de casación en el fondo, así como a las causales de casación en la forma establecidas en el mismo texto legal".(Registro

Judicial Marzo 1999, pp.365-366)

En el caso subjúdice, el casacionista solicita el examen de un auto de segunda instancia, proferido por un Tribunal Superior, el cual confirma la resolución de primera instancia que deniega el incidente por falta de competencia interpuesto por el apoderado judicial de la imputada.

Comoquiera que la resolución no es de aquellas que enuncia los citados artículos 2434 y 2435, la Sala rechaza por improcedente el recurso de casación en la forma presentado por el Licdo. GARCÍA FLORES, contra el Auto de 18 de octubre de 1999, proferido por el segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en la forma, promovido por la defensa técnica de MARTA IMELDA GONZÁLEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACIÓN INTERPUESTA A FAVOR DE JUAN DIONISIO TREJOS RUÍZ EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO DE LESIONES PERSONALES CON RESULTADO MUERTE EN PERJUICIO DE JESÚS FRANCISCO AGUILAR CHAVEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Darío Espinoza, defensor técnico de Juan Dionisio Trejo Ruíz, ha propuesto recurso de casación en el fondo contra resolución calendada 22 de octubre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial. La medida jurisdiccional atacada confirma la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal del Circuito Judicial de Chiriquí, que condena a Trejos Ruíz a la pena de 48 meses de prisión como responsable del delito de Lesiones personales con resultado muerte en perjuicio de Jesús Francisco Aguilar Chávez.

El examen del libelo de formalización del recurso, a los efectos de decidir sobre su admisibilidad, permite advertir que el casacionista en la historia concisa del caso no resume los aspectos relevantes del proceso, incurriendo en una narración subjetiva respecto a los hechos que motivaron el mismo (Ver Registro Judicial Septiembre 1998, p. 286; Registro Judicial Julio 1998, p. 355 y Marzo 1999, p.381).

Por otra parte, al determinar la primera causal manifiesta: "Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que implica infracción de la ley sustancial". Dicha causal no se ajusta a la jurisprudencia de esta Sala, la cual ha sostenido en reiteradas ocasiones que la causal debe estar debidamente establecida de acuerdo con la ley (Ver Registro Judicial Noviembre 1996, p. 169 y p. 183; Registro Judicial Marzo 1997, p.275).

Del numeral 1 del artículo 2434 se desprenden cinco causales a saber: a. Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en el concepto de

violación directa; b. Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en el concepto de una interpretación errada de la ley; c. Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en el concepto de indebida aplicación de ésta al caso juzgado; ch. Error de derecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal; y d. Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal.

Para apoyar la causal expone cinco motivos de los cuales los dos primeros guardan relación, mientras que de los tres últimos no se infiere claramente el cargo de injuridicidad de la sentencia atacada. Los motivos juegan un rol fundamental en todo recurso, dado que estos permitirán al tribunal de casación comprobar la existencia de vicios en la sentencia (Ver. Registro Judicial Febrero 1997 p. 171; Agosto 1998, p. 312 y Registro Judicial Julio 1999, p.364).

Al señalar las disposiciones legales infringidas, cita el artículo 770 del Código Judicial y no explica adecuadamente como se da la violación directa por omisión de dicho artículo; anota los artículos 884 y 904 de la misma excerta legal como violados directamente por omisión y el artículo 138 del Código Penal vulnerado en forma directa por comisión.

Enuncia la segunda causal "Cuando sancione un delito, no obstante existir alguna circunstancia eximente de responsabilidad." la cual va apoyada en cinco motivos, de los cuales no se infiere cargo alguno de injuridicidad, que la respalden ya que en estos se cuestiona la valoración dada por el Tribunal Superior al emitir apreciaciones como: "...no obstante, el Tribunal de Segunda Instancia, al tener por cierto la afirmación del Tribunal de Primera Instancia niega la légitima (sic) defensa;..." (f. 639); "...Que la negación de la légitima (sic) defensa del procesado, por parte del Tribunal Ad-quem, se debe primero a tener por cierto lo que afirma el Tribunal primario,..." (f.640); "...la sentencia atacada acepta algunos elementos de la figura eximente de responsabilidad y excluye otros sin justificación lógica y legal..." (f. 640); "...Que al negar la légitima (sic) defensa de Trejos Ruíz, como eximente de completa de responsabilidad penal, estando la misma claramente probada en el proceso,..." (f.640); y "...al no aplicar la sentencia recurrida, la pena establecida para la eximente incompleta de responsabilidad penal, reconocida por el propio tribunal..." (f. 640). Todos estos motivos, como se han planteado guardan relación con la causal de error de derecho en la valoración de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal.

Las disposiciones legales de carácter sustantivo que cita como infringidas el recurrente, al entrar en la explicación de la forma como resultaron violadas, sostiene: "...viola la norma transcrita por omisión..." (f.641) y "...viola la norma por omisión..." (f. 641) sin detallar si la violación es directa por omisión. La formalidad del recurso requiere precisión en cada apartado del libelo, al indicar la violación de una norma se puede anotar violación directa por omisión o por comisión, indebida aplicación o interpretación errónea.

Toda vez que el recurso de casación es un medio de impugnación formal, que requiere el cumplimiento de los presupuestos legales, y en el presente caso no se ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 2443 numeral 3 literales a, b, c, y 4 del Código Judicial, procede negar la admisión del mismo.

En mérito de lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por el Licenciado Carlos Darío Espinoza, dentro del proceso seguido a Juan Dionisio Trejos Ruíz por delito de Lesiones personales con resultado muerte en perjuicio de Jesús Francisco Aguilar Chávez.

Devuelvase y Notifiquese.

(fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTA A FAVOR DE PASTOR RÍOS GONZÁLEZ, EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Eliécer Chacón Arias, apoderado judicial de Pastor Ríos González, ha presentado recurso de casación en el fondo contra sentencia de 24 de noviembre de 1999 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se revoca la sentencia de 8 de septiembre de 1999, en el sentido de condenar a Ríos González a la pena de 6 años de prisión, como responsable de delito contra la salud pública.

Vencido el término establecido por el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala examinar el recurso planteado, a fin de determinar si cumple con los requisitos que nuestro ordenamiento procesal exige para su admisión.

Con tal propósito, se comprueba que la historia concisa del caso en forma clara se presenta en forma concisa y comprensible.

La primera causal "ERROR DE HECHO EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LA PRUEBA, QUE HA INFLUIDO EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO Y QUE IMPLICA INFRACCION DE LA LEY SUSTANTIVA." (f.266) Aquí no detalla la ley sustantiva que se infringió, debió haber indicado: "...la ley sustancial penal." Se apoya en tres motivos los cuales la respaldan. En cuanto a las disposiciones legales infringidas al explicar la infracción de la norma adjetiva, artículo 770 del Código Judicial señala que "Esta disposición se infringe por omisión..." (f. 268). Dicho concepto de infracción lo desconoce la Corte ya que una norma puede vulnerarse por: violación directa por comisión o por omisión, interpretación errónea o indebida aplicación (Ver. R. Judicial Marzo 1997, p. 272). En la infracción de la norma sustantiva señala que se verifica la indebida aplicación del artículo 260 del Código Penal.

Por otro lado, en cuanto a la segunda causal "ERROR DE DERECHO EN CUANTO A LA APRECIACION DE LA PRUEBA, QUE HA INFLUIDO EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO Y QUE IMPLICA INFRACCION DE LA LEY SUSTANTIVA." (f. 269) Se observa que el recurrente no anota que la ley sustantiva infringida es la ley penal (Cfr. R. Judicial, Noviembre 1996, p. 169). Apoya la causal en tres motivos, de los cuales no se advierte el cargo de injuridicidad que le endilga al fallo. En el primer motivo refiere que el tribunal ad-quem "valora de forma errada las declaraciones rendidas por ALBERTO JESSE COOPER (Fs. 49-52), JOSE ARTURO AGREGO SAAVEDRA (Fs.75-76), PEDRO KELVIN ROMERO BARRIOS (Fs. 83-85) y ENRIQUE JAVIER GONZALEZ SEVILLANO (Fs. 87-89) (f.269). La Sala debe resaltar que el Tribunal Superior si valoró a dichos testigos quienes coinciden en señalar la excesiva cantidad de droga hallada en el domicilio del sindicado (f. 252). En el segundo motivo, precisa claramente el vicio de injuridicidad. Finalmente, en el tercer motivo el recurrente cuestiona la valoración dada a los informes policiales y de vigilancia pero no concreta en qué consisten los elementos conceptuales que las hacen carecer de validez (f. 271) (Cfr. R. Judicial Julio 1996, p. 325). Al enumerar las disposiciones legales infringidas anota como disposición adjetiva el artículo 904 del Código Judicial "...ha sido infringida en concepto de omisión..." (f. 271). Nuevamente, introduce un concepto de infracción similar al expuesto en la causal anterior. Como norma sustantiva sostiene la indebida aplicación del artículo 260 del Código Penal.

En vista de que el recurrente no desarrolla adecuadamente las causales, indicando que ley sustancial se viola (Art. 2443 n.4. C.J.); no concreta en forma clara los motivos de la segunda causal (Art. 2443 n.3, lit. c C.J.) y al enunciar el concepto de infracción de las normas adjetivas vulneradas no los hace adecuadamente (Art. 2443 n.3, lit. c C.J.). se concluye que el libelo no se ajusta a lo preceptuado por el artículo 2443 del Código Judicial alejándose de la correcta técnica casacionista.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado por el licenciado Eliécer Narciso Chacón Arias, contra la sentencia de 24 de noviembre de 1999 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase,

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO A FAVOR DE YIMMI SERRANO EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE MIGUEL DE GRACIA ARMUELLES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Licenciada Beatriz Herrera Peña, Defensora de Oficio, siguiendo instrucciones de esta colegiatura, ha presentado libelo de casación a favor de YIMMI SERRANO a quien se le sigue proceso por delito Contra el Patrimonio en perjuicio de Miguel Degracia Armuelles contra la sentencia de 26 de julio de 1999 emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, que confirmó la sentencia N°37 de 21 de mayo de 1999 la cual le impuso la pena de cuarenta y ocho (48) meses de prisión y de dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período.

Pasamos a examinar el libelo de formalización, a los efectos de comprobar si satisface los requisitos de admisibilidad exigidos por los artículos 2434 y 2443 del Código Judicial.

Si bien es cierto, que el libelo se ajusta a lo preceptuado por el artículo 2434 del Código Judicial, razón fundamental por la que esta Colegiatura decidió designarle al imputado un Defensor de Oficio para que se encargara del manejo del negocio por la técnica que requiere el mismo. Se incumple una de las formalidades más importantes para que la Corte pueda entrar a examinarlo, ella es la contenida en el numeral 2 del artículo 2443 del Código Judicial "Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo;".

El examen del expediente nos permite observar que a través de la Secretaría de la Sala, se le hizo saber a la letrada Herrera Peña, su designación como Defensora del sindicado y de acuerdo a informe visible 158 firmado por el Secretario se lee lo siguiente: "Es mi deber informarle que el presente proceso fue recibido el día 24 de marzo de 2000, en el Despacho de la Defensora de Oficio, Licenciada BEATRIZ HERRERA, tal como consta a folio 195 del libro de mensajería de esta Colegiatura."

Llama la atención de la Corte, que el sello de notificación de la designación fue llenado por la defensora con fecha de 28 de abril de 2000 un mes

y cuatro días después que se le hizo entrega del negocio, contrariando lo indicado en el proveído de 22 de marzo que disponía un término de quince (15) días para la formalización del libelo.

Siguiendo estrictamente la normativa procesal en cuanto a los términos, el escrito de formalización la letrada Herrera lo presentó precluído el término para hacerlo, ya que si lo recibió el día 24 de marzo fecha en que debió notificarse, tenía hasta el día 13 de abril para presentarlo y no el día 30 de mayo como lo hizo. Dicha extemporaneidad acarrea la no admisibilidad del recurso.

Toda vez que la Defensora no cumplió con su deber dentro del término legal, le instamos a que actúe con más diligencia en el ejercicio de sus funciones ante esta Colegiatura, pues, somos conscientes del exceso de volumen de trabajo que maneja en la esfera circuital, pero ello no es óbice para que descuide la designaciones que le hacemos atendiendo a su capacidad y a lo ordenado por la ley (artículo 2442 del Código Judicial).

Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por la Defensora de Oficio, Licenciada Beatriz Herrera Peña a favor de YIMMI SERRANO sindicado por delito Contra el Patrimonio en perjuicio de Miguel Degracia Armuelles contra la sentencia de 26 de julio de 1999 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE MILTON EDEMIR ZAMBRANO CASTILLO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas Encargado, ha propuesto recurso de casación en el fondo contra resolución calendada 8 de octubre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. La medida jurisdiccional atacada confirma la sentencia dictada por el Juzgado Décimotercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, que absuelve a Milton Edemir Zambrano Castillo.

Procedemos a examinar el libelo de formalización del recurso, a efectos de determinar si se ajusta a los presupuestos legales para ser admitido.

De inmediato se advierte que la historia concisa del caso no se hizo anotando los elementos medulares del proceso, por el contrario, el recurrente se dedica a referir elementos probatorios determinados, alejándose de la técnica casacionista (Ver. R. Judicial Julio 1998, p.355; R. Judicial Abril 19998, p.244 y R. Judicial Julio 1999, p. 361).

En cuanto a la causal, la Corte observa que el recurrente invoca una causal de fondo "Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal, por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, y que ha influido en lo dispositivo de la sentencia recurrida." Dicha causal se enuncia en forma inapropiada contrariando la postura reiterada de la Corte al invocar cualquiera

de las cinco causales que contempla el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial. De dicha norma se desprenden las siguientes causales a saber: a. Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en el concepto de violación directa; b. Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en el concepto de una interpretación errada de la ley; c. Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en el concepto de indebida aplicación de ésta al caso juzgado;

ch. Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal; y d. Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal. (Ver Registro Judicial Diciembre 1994, p. 250; Registro Judicial Octubre 1996, p.307 y Registro Judicial Noviembre 1996, p. 182).

Dicha causal la apoya en dos motivos en los cuales no se enuncian concretos cargos de injuridicidad, pues en ellos, subjetivamente se cuestiona la valoración dada al caudal probatorio por el Tribunal Superior, esto aunado a que no esta bien delimitada la causal, conduce a los motivos a no evidenciar yerro en que haya incurrido dicho ente jurisdiccional (Ver Registro Judicial Octubre 1996, p.300; Registro Judicial Julio 1995, p. 249 y Registro Judicial Agosto 1998, p. 312).

En cuanto al requisito concerniente a las disposiciones legales infringidas, el recurrente afirma que la sentencia atacada vulnera en forma directa por omisión el artículo 904 del Código Judicial y el artículo 260 del código Penal, dichas infracciones pueden alegarse al invocar las causales de error de derecho en la valoración de la prueba o error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, no en el presente caso donde no consta claramente la causal.

Concluido el análisis del presente libelo, la Corte encuentra que no se cumplen a cabalidad los requisitos contenidos en el artículo 2443 numeral 3 literales a, b, c y literal 4, esto hace que el mismo carezca de coherencia lógico-jurídica y por consiguiente no pueda admitirse (Ver. Registro Judicial Marzo 1999, p. 381; Registro Judicial Abril 1999, p. 244 y Registro Judicial.

En virtud de lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas Encargado, contra la sentencia de 8 de octubre de 1999 que absuelve a Milton Edemir Zambrano Castillo.

Notifíquese y Devúelvase,

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARTIN AVECILLA SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Cumplidas las etapas de sustanciación y celebración de la audiencia oral, corresponde a la Sala decidir el fondo del recurso de casación presentado por la doctora Asunción Alonso de Montalvo, en su condición de defensora de oficio de

MARTIN AVECILLA, procesado por delito de Traspaso Ilícito de Drogas.

ANTECEDENTES

De acuerdo con las constancias procesales, el 23 de mayo de 1997 la Personería Municipal del Distrito de Soná, provincia de Veraguas, a petición de Agentes de la Organización Regional Anti-Droga de Coclé y Veraguas, autorizó la realización de una operación encubierta con el objeto de descubrir actividades ilícitas de compra y venta de drogas que, según información preliminar, eran llevadas a cabo por el ciudadano MARTIN AVECILLA. En ese orden se realizó una compraventa de drogas simulada, utilizando billetes de baja denominación previamente marcados, que fueron recibidos por el sindicado en el Bar La Estaca, entregando a cambio 3 envoltorios de marihuana, luego de lo cual se produjo su detención.

Durante la fase de instrucción sumarial, el imputado, al ser indagado, aceptó haber entregado la droga de marras al agente encubierto, no obstante sostiene que no la dio en venta sino como un obsequio porque sabía que este era consumidor.

La audiencia preliminar se efectuó el 3 de diciembre de 1997, con el resultado de que el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Circuito Judicial de Veraguas formuló cargos contra MARTIN AVECILLA, como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo V, Título VII del Libro II del Código Penal y al concluir la etapa plenaria, el a quo condenó al procesado a la pena de 54 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, como autor del delito de Traspaso Ilícito de Drogas. Contra esta decisión anunciaron y sustentaron sendos recursos de apelación, tanto el sentenciado como su apoderada judicial y el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, al decidir la alzada, reformó el fallo de primera instancia, para el sólo efecto de establecer que el delito cometido por el justiciable es el de venta de drogas y confirma la condena de MARTIN AVECILLA en lo demás.

LA CAUSAL INVOCADA

La única causal invocada por la recurrente corresponde al error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal.

Como sustento de la causal, la censora aduce un solo motivo, en el que señala como cargo de injuridicidad que el juez de segunda instancia otorgó valor probatorio a la diligencia de registro personal del imputado, su declaración indagatoria y a la declaración de los agentes de policía que participaron en su detención, sin considerar que tales elementos se derivan de un operación ilícita de compra simulada de drogas, que no fue autorizada por la }fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, la recurrente aduce la violación directa por omisión del artículo 55 de la Ley 23 de 1986, adicionado por el artículo 33 de la Ley 13 de 1994, así como la indebida aplicación del artículo 258 del Código Penal.

OPINION DE LA PROCURADURIA

El señor Procurador General de la Nación, al descorrer el traslado del recurso, mediante Vista N 64 de 18 de junio de 1999, sostiene que la causal invocada por la recurrente no ha sido acreditada. Según el representante del Ministerio Público, el cargo de injuridicidad que propone la censora en el único motivo aducido, sugiere la ilicitud de la operación de compra simulada de drogas sub júdice, empero, a su juicio, la casacionista no logra demostrar la concurrencia de los elementos que, de acuerdo con la ley y la doctrina jurisprudencial, califican como ilícito un medio probatorio.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, el señor Procurador considera que no se acredita la infracción del artículo 55 de la Ley 23 de 1986, porque la operación encubierta de compra simulada de drogas se registró al amparo de lo que estable el artículo 21-A de la Ley 13 de 1994.

Finalmente, se sostiene que no prospera el cargo de injuridicidad relativo al artículo 258 del Código Penal citado por la casacionista, porque la infracción de dicha norma sustantiva, a propósito de la causal probatoria invocada, opera como consecuencia de la vulneración de normas adjetivas relativas a la validez y eficacia de los medios probatorios, lo que a juicio del Procurador, no ocurre en el caso bajo examen. Desde esta perspectiva, se solicita que la sentencia recurrida no sea casada.

DECISION DE LA SALA

La única causal invocada por la recurrente es la de error de derecho en la apreciación de la prueba, que implica infracción de la ley sustancial, apoyada en un sólo motivo, referido a la modalidad que se genera cuando el juzgador otorga valor probatorio a un medio que ha sido producido con inobservancia de parámetros legales establecidos para esa finalidad. En ese orden, el cargo concreto de injuridicidad propuesto por la censora, se centra en la objeción de validez de las pruebas derivadas de la operación encubierta de marras, bajo la premisa que dicha acción fue llevada a cabo por el Personero Municipal del Distrito de Soná, lo cual, según sostiene, es ilegal, porque la facultad de realizar tales operaciones, compete exclusivamente a las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, conforme lo establece el artículo 55 de la Ley 23 de 1986, adicionado por el artículo 33 de la Ley 13 de 1994.

En este contexto, la Sala advierte que ciertamente la disposición citada establece entre las atribuciones de las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, "Instruir los sumarios y en general, ejercer la acción penal respecto de los delitos de su competencia". No obstante lo anterior, la Corte advierte que la disposición de la referencia no implica, en modo alguno, la interrupción de la competencia genérica que reconoce el artículo 346 del Código Judicial a los Agentes del Ministerio Público para la investigación de los delitos y la instrucción de los sumarios respectivos, ello si, siempre que se haga en el marco de la delegación de atribuciones que por motivos de utilidad práctica reconocidos en la ley, realicen los superiores jerárquicos a los agentes de instrucción subalternos, sin perjuicio de la reserva legal establecida a propósito de la competencia privativa para llevar a cabo cierto tipo de diligencias, (por ejemplo el artículo 27 del texto único de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986).

De otro lado, aun cuando no exista comisión del funcionario de instrucción especializado para la investigación de determinado delito, por la peculiares características del hecho punible, otros agentes del Ministerio Público, a prevención y siempre que sea necesario para evitar la prolongación del delito, pueden practicar diligencias sumariales (salvo que exista reserva legal), dando cuenta de lo actuado, en cuanto sea posible, al agente especializado designado por la ley, para la investigación del hecho punible. En adición a lo anterior, precisa indicar que al ejercer las atribuciones relativas a las investigaciones de un hecho punible, cualesquiera que sea el agente del Ministerio Público que lleve a cabo las mismas, debe sujetarse a las formalidades que al efecto establezca la ley.

Partiendo del contexto anterior, se observa que en el caso bajo examen la Personería Municipal del Distrito de Soná llevó a cabo una diligencia de compra simulada de drogas ilícitas, luego de tener conocimiento de que en el Bar La Estaca, de esa localidad, el ciudadano MARTIN AVECILLA se dedicaba a la venta de drogas ilícitas, lo cual fue corroborado, al encontrarse en su poder 2 billetes marcados con que el agente encubierto le había comprado 3 envoltorios de marihuana. La citada diligencia de compra simulada, como se destaca en autos, la realizó el Personero Municipal en circunstancias en que el Distrito de Soná no

operaba Agencia del Ministerio Público especializada en investigación de delitos relacionados con drogas y con el objeto de recabar la prueba del hecho punible, dada la necesidad de asegurar los elementos de juicio necesarios para la adecuada instrucción del sumario. Sumado a lo anterior, cabe destacar que la operación de compra simulada de drogas de la referencia se realizó en el marco de las formalidades que al efecto establece el artículo 21-A de la Ley 13 de 1994.

En orden a las consideraciones anteriores, la Sala concluye que la cuestionada diligencia de compra simulada de drogas efectuada por la Personería Municipal del Distrito de Soná no es ilegal y, por tanto, no prosperan los cargos de injuridicidad que atribuye la recurrente al fallo censurado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA el fallo impugnado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARTIN ORTEGA, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado ALCIBIADES CAJAR MOLINA, en su condición de abogado defensor de MARTIN ORTEGA, anunció y formalizó oportunamente recurso de casación contra la sentencia fechada 15 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial que confirma la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de Coclé, Ramo Penal.

Al revisar los folios correspondientes se advierte que el recurso de casación en estudio reúne los requisitos de oportunidad, legitimación activa y material, por tratarse de un negocio penal por delito cuya pena privativa de libertad es superior a los dos años. Sin embargo, se advierte que el recurrente dirige la impugnación a los "Honorables Magistrados de la Sala Segunda, de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia", situación que contraviene lo que establece el artículo 102 del Código Judicial, en el sentido de que el recurso de casación penal debe dirigirse al Magistrado Presidente de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, omite especificar si el recurso de casación es presentado en la forma o en el fondo.

Ahora bien, al examinar las exigencias legales sobre el contenido del recurso para poder determinar si puede ser admitido, observa la Sala que el recurrente ha cometido errores en su formalización, por lo que hacemos las siguientes consideraciones:

Historia concisa del caso: En primer lugar, no tituló esta sección de manera correcta, la tituló "vicio", lo cual no es correcto. En este acápite deben aparecer los puntos relevantes del negocio penal, lo cual no sucede en este caso ya que el recurrente a través de apreciaciones subjetivas presenta algunos hechos que rodearon el caso sin determinar puntos relevantes de la sentencia del ad quem. De estas líneas no se desprende la causal que va a invocar posteriormente.

En ese mismo sentido, con relación a la causal, pese a que fue invocada

correctamente, los motivos no son más que consideraciones subjetivas que denotan su disconformidad con las actuaciones, el procedimiento y la sentencia, pero no especifica de manera clara vicios que hacen que la sentencia sea injurídica. Los motivos deben servir de fundamento a cada causal que se invoque, anotando los hechos y aspectos que de manera armónica apoyan la causal; por ello en este escrito, los motivos no responden a las exigencias de la ley.

En las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, el recurrente transcribe las disposiciones y posteriormente manifiesta su discrepancia con la sentencia como si fuera un alegato de instancia, además de que al momento de exponer el concepto de la infracción lo hace de manera deficiente, olvidando que las normas pueden ser infringidas de manera directa por omisión o comisión, por indebida aplicación o por interpretación errónea, por lo que mal puede explicar el concepto en que cada precepto jurídico ha sido violentado, contradiciendo claramente las técnicas de casación.

Como se puede apreciar, el casacionista ha errado en varios puntos en la formalización del recurso, lo que hace que el mismo sea inadmisible.

Por lo tanto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación presentado por el licenciado ALCIBIADES CAJAR MOLINA en representación del señor MARTIN ORTEGA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

RECURSO DE APELACIÓN DEL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO PROMOVIDO POR EL DR. MANUEL GARCÍA ALMENGOR DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDUARDO BERBEY POR DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA COMETIDO EN PERJUICIO DE AIDELENA PEREIRA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación, ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cuadernillo contentivo del Incidente de previo y especial pronunciamiento presentado por el doctor Manuel García Almengor, dentro del proceso penal seguido a EDUARDO BERBEY, sindicado por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de la licenciada AIDELENA PEREIRA.

Mediante resolución de 12 de enero de 2000, el Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró improcedente el incidente propuesto, puesto que "... una vez ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio, los únicos temas objetos de discusión por vía del incidente de especial pronunciamiento son los relativos a la competencia del Tribunal, a la vigencia de la acción penal y a la legitimación para actuar de las partes. Siendo que el tema que se ha pretendido introducir por la vía incidental no resulta subsumible bajo ninguna de las tres situaciones enumeradas por el artículo 2274 del Código Judicial, el Tribunal no puede sino declarar improcedente la incidencia propuesta y ordenar el archivo del expediente.". (fs. 20-21).

En un extenso escrito sustentatorio del recurso que nos ocupa, el doctor García Almengor explica que su inconformidad radica en que "por imperativos legales los Incidentes requieren ESPECIAL DECISIÓN O PRONUNCIAMIENTO, lo que conlleva que el enunciado puesto al margen superior del escrito de la defensa bajo la rúbrica 'INCIDENTE DE ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO' está en un todo conforme con la ley procesal y que su rechazo por el A-Quo violentó la ley procedimental y el debido proceso". Por otra parte, el Doctor García Almengor alega que la detención preventiva que sufre su representado EDUARDO BERBEY es ilegal, por cuanto el mismo está sindicado por delito de lesiones.

Corrido el traslado del recurso al Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, dicho funcionario expresó su interés en que se confirme la resolución recurrida en los siguientes términos:

> "Tal y como lo señala el auto recurrido son específicas las materias sobre los cuales se puede interponer un incidente de esta naturaleza. La acción emprendida por el representante de la defensa técnica no se encuadra en ninguna de las estipulaciones consagradas en la norma transcrita, por lo cual consideramos que no es conducente la petición del Dr. García Almengor, reiterada en el recurso de apelación. Mal puede acogerse una solicitud y darle este tipo de trámite si la solicitud no versa sobre la materia para la cual ha sido destinada tal remedio procesal.
>
> Por otro lado un incidente no es el remedio procesal adecuado para solicitar la ilegalidad de una detención preventiva, que constituye una de las piezas procesales de este expediente que ha sido examinado en diversas ocasiones por el ente jurisdiccional, tanto por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, como por nuestra más alta Corporación de Justicia y no se le ha catalogado de ilegal." (fs.45-50).

En primer término, la Sala coincide con los planteamientos esbozados tanto por el Tribunal Superior como por el representante del Ministerio Público, en el sentido que el incidente propuesto por la defensa técnica del señor EDUARDO BERBEY, no se encuadra en ninguno de los numerales a que se refiere el artículo 2274 del Código Judicial, por lo cual resulta imposible revisar la situación planteada.

Por otro lado, y en cuanto a la alegada ilegalidad de la detención del señor BERBEY, es preciso recordarle al Doctor García Almengor, que esta Sala en fallo de 2 de julio de 1999, confirmó el auto de llamamiento a juicio dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia por delito de homicidio en grado de tentativa, y no como lo asevera la defensa técnica en su escrito, por delito de lesiones personales, por lo cual un incidente de previo y especial pronunciamiento no es la vía procesal adecuada para debatir acerca de la legalidad o ilegalidad de una detención preventiva.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 12 de enero de 2000, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró improcedente el incidente de previo y especial pronunciamiento interpuesto por el Dr. Manuel García Almengor.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD DE LO ACTUADO POR FALTA DE COMPETENCIA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDUARDO BERBEY POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE AIDELENA PEREIRA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

A fin de resolver, ingresó a esta Corporación de Justicia, recurso de apelación presentado dentro del incidente de nulidad de lo actuado por falta de competencia dentro del proceso seguido a EDUARDO HARMODIO BERBEY por delito de Homicidio en grado de tentativa en perjuicio de la licenciada AIDELENA PEREIRA VELIZ.

Se impugna la resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el día 12 de enero de 2000, la cual deniega el incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad de lo actuado por falta de competencia del tribunal de alzada y de los magistrados que conforman dicho tribunal y por pretermisiones legales que violan el debido proceso.

EL APELANTE

En el recurso presentado, el apoderado judicial del imputado BERBEY, Dr. Manuel Beloy García Almengor solicita que se revoque la resolución de primera instancia por las siguientes razones: no cumplirse el trámite para la apelación previsto por el artículo 2420 del Código Judicial (fs. 2-8); no sanearse la apelación por esta colegiatura conforme lo dispuesto por el artículo 2301 del Código Judicial (fs. 8-9); infringir esta colegiatura el artículo 2428 del Código Judicial (fs. 9-10); nulidad de la resolución de 2 de julio de 1999 dictada por esta colegiatura (fs.10-12); y la indebida conformación de esta colegiatura (fs. 10-14).

EL MINISTERIO PUBLICO

El representante del Ministerio Público, Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, al contestar el traslado del medio de impugnación interpuesto, respecto al primer punto relativo al trámite de la apelación precisó en parte lo siguiente: "Por otro lado si analizamos el escrito presentado por la Licda. OMAYRA GARCIA DE BERBEY, que consta a fojas 2614-3050, observamos que la misma denomina a este escrito "Recurso de Apelación impetrado en contra de la resolución fechada 28 de agosto de 1996", y de la lectura del extenso escrito presentado por la Licda. OMAYRA GARCIA DE BERBEY se advierte que esta sustentando un medio de impugnación en contra del auto de llamamiento a juicio." (fs. 57-58)

"El hecho de que exista un error en la resolución en que se concede el término para sustentar un recurso de apelación, no constituye nulidad de lo actuado tal como pretende la defensa técnica, ya que la situación planteada no encuadra en ninguna de las causales que taxativamente establecen los artículos 2297 y 2298 del Código Judicial, que contemplan un glosario de situaciones que son catalogadas como anómalas y constituyen causales de nulidad..." (foja 58).

Del segundo punto del recurso, referente al saneamiento de la apelación destaca que esta colegiatura no advirtió ninguna irregularidad que sea causa de nulidad del proceso (foja 59).

En el tercer punto referente a la infracción del artículo 2428 del Código Judicial; a la nulidad de la resolución de 2 de julio de 1999; y a la indebida conformación de esta colegiatura el señor Fiscal señala que: "...el Tribunal de Primera Instancia no le correspondería anular las decisiones que han emanado por parte de un Tribunal de Segunda Instancia, en virtud del principio de acatamiento la decisión emanada de un superior jerárquico, que consagra el artículo 2 del Código Judicial y de la irrecurribilidad de los fallos del Pleno de la Corte

Suprema de Justicia o de sus Salas que consagra el artículo 204 de la Constitución Nacional,..." (fojas 61-62).

POSICION DE LA SALA

Examinados los memoriales antes descritos pasa la Sala a pronunciarse sobre el medio de impugnación presentado.

En primer lugar, se advierte que la defensa técnica del sindicado BERBEY, activa el aparato jurisdiccional no sólo mediante el presente incidente de previo y especial pronunciamiento sino que anteriormente la Sala se pronunció, a través de auto de 6 de julio de 2000, respecto al recurso de apelación planteado contra una resolución expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en otro incidente de previo y especial pronunciamiento incoado para dejar sin efecto la detención preventiva que se mantiene contra su patrocinado.

La utilización de la vía incidental, básicamente la de previo y especial pronunciamiento, únicamente procede en virtud del artículo 2274 del Código Judicial, ejecutoriado el auto de enjuiciamiento y hasta la resolución que fija fecha de audiencia en los casos de: falta de competencia del tribunal; falta o agotamiento de la legitimación para actuar; extinción de la acción penal.

Lo anterior indica que los puntos del recurso planteado respecto al no cumplimiento del trámite para la apelación previsto por el artículo 2420 del Código Judicial y el no saneamiento de la apelación por esta colegiatura conforme lo dispuesto por el artículo 2301 de la misma excerta legal no serán analizados por no constituir cuestión de previo y especial pronunciamiento.

Atendiendo a ello, respecto a lo anotado por el apelante en cuanto a "INFRACCION DEL ARTICULO 2428 DEL CODIGO JUDICIAL", el cual dispone que el Tribunal de alzada adquiere la competencia concedido legalmente el recurso y sólo sobre los puntos a que se refiera el recurrente, la Corte no encuentra asidero para admitir esta disconformidad, ya que al conocer del negocio principal como tribunal de segunda instancia verificó si se incurría en alguna causal de nulidad.

En ese orden de ideas, llamamos la atención al Defensor para que recuerde que se constituye en un auxiliar de la jurisdicción y como tal está llamado a desempeñar su mandato apegado a lo preceptuado por el artículo 462 del Código Judicial de la siguiente manera: "Artículo 462. Las partes deben comportarse con lealtad y probidad durante el proceso y el Juez hará uso de sus facultades para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta e ineficaz del litigio o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley."

Sobre la nulidad de la resolución de 2 de julio de 1999, que dictó esta colegiatura actuando como tribunal de segunda instancia, no es atendible la reclamación formulada ya que la Sala se pronunció sobre el voluminoso recurso planteado por la Defensa Técnica de BERBEY apegada a la normativa vigente.

La cuestionada "INDEBIDA CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACION" a que alude el recurrente, tampoco es procedente en virtud que en autos constan claramente, las razones por las cuales los titulares de la Sala no podían entrar a conocer del negocio en segunda instancia. La no actuación del Honorable Magistrado Juan Antonio Tejada Mora obedeció a que él no era el suplente personal de la Honorable Magistrada Graciela J. Dixon C., toda vez que ya había un suplente especial designado de acuerdo al artículo 78 del Código Judicial. La actuación del Honorable Magistrado Rogelio Fábrega Zarak, atendió a que los magistrados de la Sala Tercera designados, solicitaron en su momento que se les separará del conocimiento del negocio por causales de impedimento que se declararon legales.

El incidente de previo y especial pronunciamiento presentado constituye un elemento que impide al tribunal administrar justicia en forma expedita e ininterrumpida, como anota el catedrático MUÑOZ POPE: "El Estado tiene la obligación de establecer la eventual responsabilidad penal del sujeto contra el cual se ejerce la pretensión penal dentro de un plazo razonable, de modo que se establezca la misma dentro del menor tiempo posible. Un proceso sin dilaciones indebidas es esencial en el Estado de Derecho,..." (MUÑOZ POPE, Carlos E. Proceso debido y justicia penal, Primera edición, Ediciones Panamá Viejo, Panamá, 1999, p. 43).

Los tribunales de justicia deben acatar las formalidades legales, pero no constituirse en entes excesivamente ritualistas en virtud de las reclamaciones de los defensores porque se apartarían del fin del proceso penal, este peligro lo advierte el profesor costarricense Fernando CRUZ CASTRO al indicar lo siguiente: "La visión del proceso como un instrumento que asegura la vigencia de los derechos y garantías individuales no es compatible con el tradicional procedimentalismo; el cumplimiento de las formalidades no puede convertirse en un fin en sí mismo..." (CRUZ CASTRO, Fernando.La Nulidad por la Nulidad, la Justicia Pronta y Cumplida y la Vigencia del Formalismo Procesal, Escuela Judicial, Corte Suprema de Justicia, San José, 1994, p.9).

Toda vez que no se acredita lo peticionado con el recurso presentado procede mantener la resolución adoptada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución venida en grado de apelación del Segundo Tribunal Superior de Justicia, proferida el 12 de enero de 2000 del Incidente de previo y especial pronunciamiento en el proceso seguido EDUARDO HARMODIO BERBEY por delito de Tentativa de Homicidio en perjuicio de AIDELENA PEREIRA.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

RECURSO DE HECHO PRESENTADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE SAYURI HERRERA, SINDICADA POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Rubén Dario Remón Pérez, en calidad de defensor técnico de Sayuri Herrera Matos, ha presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recurso de hecho contra la resolución calendada 13 de junio de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, que rechazó por improcedente el recurso de apelación anunciado por el apoderado judicial de Herrera, contra el auto de 5 de junio de 2000 proferido por el mismo tribunal.

Básicamente, el recurrente solicita que se admita el recurso de apelación presentado contra al auto de 5 de junio de 2000, emitido por el Segundo Tribunal Superior en grado de consulta, ya que por virtud del artículo 2147-B del Código Judicial, esas decisiones son apelables (fs. 127-131).

Conocidos los argumentos del apelante, la Sala pasa a decidir la alzada, sólo sobre los aspectos objetados, de conformidad con el artículo 2428 del Código Judicial.

El tribunal, al momento de decidir sobre la procedencia del recurso de apelación anunciado por la defensa técnica de Herrera, señaló que "de acuerdo a las normas de procedimiento, el recurso de apelación se dirige contra las decisiones adoptadas por el juzgador competente para conocer el sumario, en este caso la Juez Primera de San Miguelito". Aunado a ello, el ad-quem manifestó que "las medidas cautelares serán aplicadas por el tribunal competente y deben remitirse al superior, en grado de consulta ..., así las cosas, no procede la apelación contra la decisión adoptada por este tribunal superior" (f. 120).

A propósito de la consulta debemos señalar que la misma fue introducida en los casos de delitos relacionados con droga, mediante el artículo 23 del la Ley No. 13 de 27 de julio de 1994, por la cual se reformó, modificó y adicionó algunos artículos a la Ley No. 23 de 30 de diciembre de 1986. La consulta es el mecanismo procesal a través del cual el juzgador de primera instancia remite el expediente en trámite al superior jerárquico, a fin de que revise la decisión tomada y se pronuncie sobre la juricidad de la resolución emitida. Es del caso señalar que, en esta etapa de consulta el superior puede, si hay mérito a ello, revocar la decisión del a-quo y, en consecuencia, adoptar otra resolución, ya que entra a conocer en su totalidad el fallo adoptado por el inferior. No opera entonces el principio de la reformatio in pejus, que rige en el recurso de apelación.

Cabe anotar que, en el caso que nos ocupa, la Juez Primera de San Miguelito actuó como juzgadora de primera instancia y el Segundo Tribunal Superior conoció del proceso como juzgador de segunda instancia, en acatamiento a lo que establece el artículo 129 del Código Judicial.

Con el anterior razonamiento, la Corte disiente de los argumentos que expone el recurrente y comparte la decisión adoptada por el Segundo Tribunal Superior, en el sentido de que no es recurrible en apelación el auto emitido por un tribunal superior cuando conoce la causa en grado de consulta. Admitir la tesis del recurrente sería convertir a la Corte en una tercera instancia.

Así las cosas resulta improcedente la solicitud del recurrente de hecho, ya que carece de asidero legal. En consecuencia, no es posible acceder a la admisibilidad del recurso presentado, por lo que deberá hacer uso de otros mecanismos procesales para hacer valer los derechos de su defendida.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de hecho presentado por la defensa técnica de Sayuri Herrera Matos contra el auto calendado 13 de junio de 2000, emitido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá que rechazó por improcedente el recurso de apelación presentado contra el auto de 5 de junio de 2000, proferido por el mismo tribunal.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JORGE ENRIQUE VADILLO PAZ, SANCIONADO POR

DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El día 19 de mayo del año en curso, se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Penal de esta Alta Corporación de Justicia, un escrito del señor JORGE ENRIQUE VADILLO PAZ, en donde solicita la revisión de la sentencia N° 40 de primero de septiembre de 1993, por la cual el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Penal, del Segundo Circuito Judicial de Panamá, lo condenó a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de elección popular por Delito Contra el Patrimonio.

Mediante providencia de 23 de mayo de 2000, se corrió traslado del negocio al Licdo. FERNANDO LEVY, Abogado Defensor de Oficio, a quien se le asignó la representación del recurrente para que lo asistiera en la correcta formalización del recurso, de registrarse causal legal que lo fundamentara (F.3)

El Licdo. LEVY remitió a este Despacho sustanciador el escrito de revisión indicando que el señor JORGE ENRIQUE VADILLO PAZ, manifiesta no haber sido la persona que cometiera el hecho punible investigado, es más, señala no haber sido la persona que cumplió la sanción que se impusiera , sino que fue su hermano CATALINO VADILLO PAZ (q.e.p.d.), fue quien perpetró los hechos denunciados y quien cumpliera la pena impuesta, y que lo acontecido en el presente caso es que éste último al momento de ser investigado, para tratar de evadir su responsabilidad en el hecho, se cambió el nombre y utilizó el de su hermano.

Recientemente cuando el señor JORGE ENRIQUE VADILLO PAZ, solicita su record policivo en la Policía Técnica Judicial es que se percata de lo acontecido y por tal motivo recurre a fin de que se revise la sentencia dictada por el Juzgado Segundo del Segundo Circuito Judicial de Panamá.

Ante lo expuesto por el recurrente, manifiesta el defensor de oficio que el caso que nos ocupa no encuadra en las causales de revisión que establece el artículo 2458 del Código Judicial, por lo que no procede en derecho el reclamo formulado por el señor VADILLO PAZ, y que la sentencia recurrida puede ser objeto de otro recurso como el de nulidad ante la primera instancia.(Fs.6-7)

Con base en lo anterior, esta Sala concluye que, a pesar de que la solicitud tiene su fundamento en una sentencia ejecutoriada, condición exigida para interponer este medio de impugnación, la misma no cumple con los demás requisitos enunciados en el artículo 2458 del Código Judicial, toda vez que no encuentra asidero legal en ninguno de los numerales de la precitada norma. Aunado a lo anterior, esta no es la vía idónea para examinar el reclamo del proponente, por lo que se rechaza de plano la revisión solicitada por el señor VADILLO PAZ.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA la solicitud de revisión presentada por el señor JORGE ENRIQUE VADILLO PAZ.

Notifiquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO A FAVOR DE VICTOR MANUEL GARCIA SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE EN PERJUICIO DE LUIS ENRIQUE FILLIPS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce esta Sala Penal del recurso de revisión formulado por el licenciado Edwin Swaby en representación de Victor Manuel García dentro del proceso por el cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia lo condenó a 20 años de prisión por el delito de homicidio en detrimento de Luis Enrique Phillips, sentencia que fue reformada por esta Sala y le disminuye la condena a 12 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de 2 años.

Como quiera que se trata de iniciativa procesal sujeta al cumplimiento de estrictas formalidades legales, se aprecia que la defensa técnica en su solicitud de revisión invoca como única causual el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial y en base a ello solicita la revisión de la sentencia de 30 de septiembre de 1998 proferida por Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, pues a su juicio su representado en virtud del articulado citado, merece la aplicación de una condena menos rigurosa por la aplicación de una disposición penal menos severa.

Sostiene el apoderado judicial que constituye un hecho nuevo la sentencia condenatoria proferida por la Sala Penal que reforma a su vez la sentencia de 2 de julio de 1997, dado que en ambas sentencias no se aplican los criterios valorativos contemplados en los artículos 56 y 57 del Código Penal y que a pesar que la resolución proferida por esta Sala señala que debía ser considerado el artículo 56 del Código Penal, se procedió sólo a aplicar una disminución en la pena. Sin embargo, esta disminución estipula la pena máxima de 12 años de acuerdo al artículo 131 del Código Penal que contempla el homicidio en su forma simple de ejecución.

La defensa técnica procede a desglosar lo que a su juicio debió ser la aplicación del artículo 56 del Código Penal, citando aspectos que debieron ser tomados en cuenta al momento de valorar la pena a imponer, tales como declaraciones, la confesión de Víctor Manuel García, las lesiones que sufriera el mismo procesado, las circunstancias en que se dieron los hechos y demás condiciones personales del sujeto activo que pudieron haber influido en la comisión del delito, lo que debió dar lugar a la aplicación de una disposición penal (Artículo 66) menos severa, por lo que la defensa no desestima la posibilidad que pueda mediante la revisión, imponerse una condena menor a su patrocinado.

La Sala procede al análisis de la revisión que se solicita. En tal empeño se observa que el defensor técnico fundamenta su recurso en una sola causal que corresponde al Artículo 2458, numeral 5 que indica que: "Habrá lugar a la revisión contra las sentencias ejecutoriadas cualesquiera que sean los tribunales que las hubieren dictado, en los casos siguientes: ...

> **5. Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que por sí mismos o combinados con las pruebas anteiores puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa ...".**

No obstante la Sala advierte que los razonamientos que sirven de apoyo al recurso no guardan relación con la causal invocada pues como se aprecia esta causal trata la posibilidad de absolver o imponer una sanción menos rigurosa al procesado, siempre y cuando se descubran nuevos hechos que justifiquen una de esas medidas y el recurrente no sumnistra en su libelo información concreta sobre la existencia de algún nuevo hecho.

El recurrente se limita a solicitar que con base a la resolución proferida por esta Sala que reformó la sentencia condenatoria, disminuyendo en ocho años la pena de sanción impuesta a su patrocinado, se proceda nuevamente a una valoración de elementos y criterios contemplados y analizados con anterioridad en el recurso de apelación, tratando de esta forma de convertir este recurso en una tercera instancia, pues se pretende con ello que la Corte revise los criterios puestos en práctica por el juzgador de instancia, pretensión que no corresponde al objeto del recurso de revisión.

Se observa que el memorial de revisión no acompaña ninguna prueba que pueda ser aducida como el descubrimiento de un nuevo hecho que fundamente el recurso, de conformidad con la exigencia del artículo 2459 del Código Judicial. Se concluye pues que el libelo de revisión no cumple con las formalidades que exige nuestro ordenamiento jurídico lo que hace improcedente esta iniciativa procesal.

Esta Sala ha manifestado que el recurso de revisión "como un medio de impugnación de carácter extraordinario, da lugar a que se examinen las sentencias ya ejecutoriadas, cualesquiera que sean los Tribunales que las hubiesen dictado, cuando se logre demostrar que existen nuevos elementos, con idoneidad probatoria suficiente, que permitan modificar la situación jurídica del sentenciado y se demuestra, con toda claridad, que los elementos probatorios son falsos o la sentencia se haya dictado con base a documentos o pruebas secretas inexistentes en el proceso" (Resolución de marzo 23 de 1992).

La señalamientos planteados por defensa técnica sobre la aplicación de una pena menos rigurosa fueron objeto del recurso oportuno que en su momento tuvo lugar y no debe pretender utilizar esta vía extraordinaria para sustentar una situación que no reviste la calidad de nuevo hecho, pues fue advertida y contemplada dentro de la apelación conocida por esta Sala que al emitir la resolución de 30 de septiembre de 1998, que reforma la sentencia condenatoria, tomó como base los argumentos que hoy pretende nuevamente hacer valer el apelante y manifesta lo siguiente:
"... Sobre este particular, la Sala advierte que tales ciscunstancias no se encuentran contepladas expresamente en el listado de atenuantes comunes, sino que ese reconocimiento se encuentra inscrito en el ámbito de la discrecionalidad del juez para la determinación de la pena líquida a imponer, dentro de los presupuestos de la punición que para cada conducta ilícita establece el artículo 56 del Código Penal". Ante los expresado a líneas anteriores queda desvirtuado el argumento de la defensa en este sentido.

Analizados los hechos referentes a la encuesta penal, se estima que la vía por la cual se pretende modificar el curso de la sentencia no es viable, dado que la causal quinta del artículo 2458 del Código Judicial que se pretende invocar y que hace procedente el recurso de Revisión, no se presenta en el proceso examinado.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por el licenciado EDWIN SWABY, en representación de VICTOR MANUEL GARCIA en contra de la sentencia de segunda instancia de 30 de septiembre de 1998 proferida por esta Sala.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO A FAVOR DE EDUARDO VILLARREAL GARCÍA, SINDICADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS.

PANAMA, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de solicitud que hizo llegar Eduardo Enrique Villarreal García para que se revise la sentencia No. 40 de 19 de abril de 1999, emitida por el Juzgado Segundo de lo Penal del Segundo Circuito Judicial de Panamá, que lo condenó a la pena de 72 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período que la pena principal, por la comisión del delito de violación carnal.

Como quiera que esta iniciativa procesal requiere ser formalizada por un profesional del derecho, el 12 de junio de 2000 el magistrado sustanciador designó a la defensora de oficio, licenciada Otilda de Valderrama, para que asumiera la representación del condenado "y le asista en cuanto a la correcta formalización del recurso, y si se registra causal legal que lo fundamente" (fs. 4).

La defensa oficiosa de Villarreal al presentar el recurso de revisión manifestó que, luego de un examen a los elementos probatorios obrantes en el cuaderno penal "podemos concluir que el recurso de Revisión solicitado por el señor Eduardo Villarreal García, en Derecho no procede" (f. 10).

Así las cosas, esta Superioridad estima que lo que corresponde es desestimar la solicitud del medio de impugnación extraordinario, ya que el mismo está condicionado al cumplimiento de los requisitos que establecen los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA la solicitud de revisión que, en su propio nombre, formuló Eduardo Enrique Villarreal García y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO A FAVOR DE SEVERINO SOSA PEÑA, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTISIETE DE JULIO (27) DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce esta colegiatura recurso de revisión incoado por el Licenciado Fernando Levy, Defensor de Oficio del Segundo Circuito Judicial de Panamá, a favor de SEVERINO SOSA PEÑA sancionado por delito Contra la Salud Pública.

La iniciativa se dirige a que se ordene la revisión de la sentencia de 21 de diciembre de 1999 expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Procede en este momento verificar si se dan los presupuestos legales para admitir el recurso extraordinario presentado.

En primer lugar se advierte que el recurrente no aporta copia autenticada

de la sentencia impugnada y constancia de que dicha resolución se encuentre ejecutoriada (Artículo 2458 del Código Judicial).

Por otra parte, se basa en la causal 3 del artículo antes indicado que faculta para decretar la revisión "Cuando alguno esté cumpliendo condena y se demuestre que es falso algún testimonio, peritaje, documento o prueba de cualquier otra clase y estos elementos probatorios fuesen de tal naturaleza que sin ellos no hubiere base suficiente para establecer el carácter del delito y fijar la extensión de la condena;"

Dicha causal en reiteradas ocasiones, la Corte ha indicado que procede si previamente un tribunal competente ha declarado la falsedad del documento que se arguye de espúreo (Ver Registro Judicial, Diciembre, 1992, p. 17; Registro Judicial, Marzo 1995, Pp.215-216; Registro Judicial Febrero 1997, Pp. 188-189; Registro Judicial, Marzo, 1999, p.394.).

Lo anterior supone que se requiere copia autenticada de la sentencia debidamente ejecutoriada donde consta que se ha declarado la falsedad de la prueba que se tilda de espúrea, en el presente caso, la diligencia de allanamiento (Artículo 2459 del Código Judicial).

En los fundamentos de hecho y de derecho el recurrente realiza un resumen del proceso cuestionando la decisión del Segundo Tribunal Superior.

Toda vez que no se cumplen los presupuestos del artículo 2458 y 2459 del Código Judicial procede denegar el remedio procesal propuesto.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado a favor de SEVERINO SOSSA PEÑA sancionado por delito Contra la Salud Pública.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FRANCISCO ELÍAS ATENCIO FLORES, SANCIONADO POR UN DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO E. GONZÁLEZ R. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licdo. RAÚL ALFREDO SEJAS QUINTERO, en su calidad de abogado defensor de FRANCISCO ELÍAS ATENCIO FLORES, sentenciado por un Delito Contra el Pudor y la Libertad Sexual a cinco (5) años de prisión, interpuso recurso de revisión de la sentencia N° 80 emitida el 18 de octubre de 1999 por el Juzgado Décimo Cuarto de Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

En esta etapa procesal, corresponde a la Sala entrar a examinar el escrito de revisión, con el propósito de verificar si el recurrente ha dado debido cumplimiento a los requerimientos normativos contenidos en el Código Judicial.

Primeramente, se observa que el escrito fue dirigido los Honorables Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contrario a lo dispuesto en el artículo 102 del Código Judicial, el cual señala que los escritos deben dirigirse al Magistrado Presidente de la Sala.

En cuanto a la estructura del recurso, el libelo indica cuál es la sentencia cuya revisión se demanda; el Tribunal que la expidió; el delito que dio motivo a la resolución, la clase de sanción que se impuso y los fundamentos de hecho.

Respecto al fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, el letrado invoca el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial, el cual señala que habrá lugar al recurso de revisión cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que por sí mismos o combinados con las Pruebas anteriores puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa.

Finalmente, el recurrente aportó la prueba de los hechos fundamentales que sustentan la pretensión.

En consecuencia, la Sala considera que el memorial presentado por el revisionista cumple con los requisitos exigidos en los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial, por lo que procede su admisión.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la Corte Suprema, Sala Segunda de lo Penal, representada en Sala Unitaria por el Suscrito Magistrado Sustanciador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de revisión y lo abre a pruebas por el término de treinta (30) días, para aducir y practicar aquellas que sean pertinentes, tal como lo establece el artículo 2460 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROBERTO E. GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

SENTENCIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOHNNY ALEXIS RODRIGUEZ RAMOS Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, ONCE (11) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, Licda. GEOMARA GUERRA DE JONES, interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia de 22 de febrero de 2000, por la cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial absolvió a JHONY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS y ANAYANSI ACUÑA de MOLINA de los cargos formulados en el auto de 22 de junio de 1998, dictado por dicho Tribunal, como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I del Libro Segundo del Código Penal, es decir, por el Delito Genérico de Homicidio cometido en perjuicio de BALTAZAR BALLESTEROS VEGA.

Se corrió traslado del escrito a los Defensores de Oficio de los procesados JHONY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS y ANAYANSI ACUÑA de MOLINA DE MOLINA, Licda. MIREYA RODRÍGUEZ MONTEZA y Licdo. ERNESTO MUÑOZ GAMBOA respectivamente, quienes en tiempo oportuno presentaron escrito de oposición a la apelación.

Surtido los trámites procesales, el recurso fue admitido y concedido en el efecto suspensivo, por tanto, corresponde en esta etapa procesal entrar al examen

de las pretensiones.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

La Fiscal Segunda Superior manifiesta que discrepa del criterio esbozado por el Tribunal Superior que fundamenta la absolución de los procesados por la causal de la legítima defensa que según señala, asiste al procesado JOHNY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS, y que consecuentemente, desestima el móvil que vinculaba a ANAYANSI ACUÑA de MOLINA DE MOLINA con el hecho criminal en estudio. (F.417)

La recurrente cita el artículo 21 del Código Penal, norma que contiene los requisitos que deben concurrir para que se configure la legítima defensa, y luego expone fragmentos de fallos de esta Corte que tratan sobre esa figura jurídico penal, concluyendo que en el caso bajo estudio no se cumple con los presupuestos de la legítima defensa, lo que infiere de lo señalado por LUIS BARRÍA y CARLOS JESÚS BELLO MELGAR, testigos presenciales del hecho.(F.420-421)

La Fiscal sostiene que ha quedado demostrado a lo largo de toda la investigación sumarial el interés evidente de RODRÍGUEZ RAMOS en quitarle la vida a BALLESTEROS RAMOS ya que se colige que lo había planeado por que el hoy occiso tenía problemas de droga con la imputada ANAYANSI ACUÑA de MOLINA. (F.422)

Indica la Agente del Ministerio Público que del estudio del proceso se desprende claramente que la causa de muerte de BALLESTEROS VEGA no fue su conducta agresiva, sino que el móvil del homicidio se debió a la rendición de cuentas de mercancía (droga) por la que debía responder a ANAYANSI ACUÑA de MOLINA, lo que se desprende de la declaración de BIENVENIDO VALDELAMAR VEGA quien era hermano del finado. (F.422)

La recurrente cuestiona no solamente la absolución de los procesados y la impunidad del delito de homicidio, sino también que el Tribunal A-quo reconoce cuál fue el móvil del delito al señalar en la sentencia impugnada que "no cabe duda que de acuerdo con la información vertida en el expediente resulta probable que la discusión que eventualmente generó el resultado mortal ahora en estudio, pudo haber tenido sus orígenes en una empresa al margen de la ley...", de allí que estima que es incomprensible que el Tribunal Superior haya considerado que en la conducta de RODRÍGUEZ RAMOS existía la justificación de legítima defensa.(F.424)

Finalmente, la Fiscal sostiene que los elementos probatorios llevan a la conclusión lógica que ANAYANSI ACUÑA de MOLINA ordenó matar a BALTAZAR BALLESTEROS VEGA (A) "LUCKY", por haber faltado a las reglas de la actividad de droga a la que se dedicaban, y en consecuencia se destaca la premeditación como circunstancia agravada del homicidio en comento. (F.424)

OPOSICIÓN DE LA APELACIÓN

El Licdo. ERENESTO MUÑOZ GAMBOA, abogado defensor de oficio de ANAYANSI ACUÑA de MOLINA, expresa que comparte el criterio esbozado por el Tribunal Superior toda vez que de las piezas procesales allegadas al cuaderno penal se colige que JHONY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS actúo en legítima defensa, ya que el hoy occiso lo agredió con un machete, versión que es corroborada por CARLOS JESÚS BELLO MELGAR y LUIS BARRÍA NÚÑEZ quienes son testigos presenciales del hecho.

Por lo anterior, concluye que mal podría considerarse que su patrocinada envió al señor RODRÍGUEZ RAMOS para que matara a "LUCKY" (finado), ya que el hecho fue producto de la agresión por parte del hoy occiso en contra del primero, por lo que no hubo dolo en su actuar y menos complicidad por parte de su patrocinada. (F.427)

Manifiesta la defensa técnica de ACUÑA de MOLINA que los señalamientos que se le hacen a la procesada son realizados por testigos sospechosos: el hermano del hoy occiso quien tiene interés en el proceso y el señor MARIO ENRIQUE

GONZÁLEZ TEJADA quien tiene una enemistad manifiesta con la prenombrada debido a que ambos estuvieron involucrados supuestamente en un caso contra la salud pública.(F.428)

Indica el defensor de oficio que no se acreditó en la etapa procesal correspondiente que el móvil del homicidio era la rendición de cuentas de droga o la venta de drogas ilícitas como señala la Fiscalía, por lo que solicita que se confirme la sentencia recurrida. (F.428)

Por su parte, la Licda. MIREYA RODRÍGUEZ MONTEZA, quien es abogada defensora de oficio de JHONY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS, solicita que se confirme la sentencia objeto de impugnación, pues el testigo LUIS BARRÍA NÚÑEZ señaló en su declaración jurada que RODRÍGUEZ RAMOS en varias ocasiones le manifestó al hoy occiso que soltara el machete tratando así de repeler la agresión de la cual era objeto, versión que es reiterada por CARLOS JESÚS BELLO. (Fs.429-430)

La defensora de oficio indica que la Fiscalía en diversas ocasiones señaló que no estaba acreditada la legítima defensa de su patrocinado, pero en ningún momento señaló que, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, RODRÍGUEZ RAMOS presentaba múltiples escoriaciones y contusiones producto de la pelea que sostuvo con el hoy occiso. (F.430)

Sostiene que las declaraciones de FELIX ENRIQUE BALLESTEROS y BIENVENIDO VALDELAMAR VEGA, quienes eran hermanos del finado, tienen interés directo en la consecución de una sentencia condenatoria y el artículo 896 del Código Judicial los sitúa como testigos sospechosos, por lo que estima que no puede darsele valor a estas declaraciones.(F.430)

Concluye la abogada señalando que los hechos expuestos demuestran que su patrocinado fue objeto de una agresión por parte del hoy occiso y antes de efectuar el disparo en legítima defensa, en varias ocasiones le dijo a BALLESTEROS VEGA que soltara el machete tratando de evitar la agresión y calmar a quien lo agredía. (F.431)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Luego de exponer los criterios de las partes, se procede a hacer una evaluación de las circunstancias fácticas del hecho, a fin de resolver con relación a los puntos impugnados, dando cumplimiento al contenido del artículo 2428 del Código Judicial.

El día 3 de julio de 1997, frente a la Casa N° 31, ubicada en el sector de Villa Luchín, comunidad de La Siesta, Corregimiento de Tocumen, Distrito de Panamá, se produjo la muerte violenta de BALTAZAR BALLESTEROS VEGA a consecuencia de choque hemorrágico, secundario a herida por proyectil de arma de fuego (F.223), que le infiriera JHONY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS.

Así las cosas, JHONY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS y ANAYANSI ACUÑA de MOLINA fueron llamados a juicio como presuntos responsables del delito genérico de homicidio en perjuicio de BALLESTEROS VEGA y fueron absueltos de los cargos, toda vez que el Segundo Tribunal Superior concluyó que la actuación del prenombrado encuadra en la legítima defensa, tal como se observa en la resolución que se pretende reformar:

> "No cabe duda que de acuerdo con la información vertida en el expediente resulta probable que la discusión que eventualmente generó el resultado mortal ahora en estudio, pudo haber tenido sus orígenes en una empresa al margen de la ley, aunado al hecho adicional de que la posesión de un arma de fuego en la persona de JOHNY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS no ha resultado debidamente esclarecida en el expediente, pero lo anterior no desacredita el hecho cierto de que el ahora difunto al calor de lo que era hasta el momento un intercambio verbal se retiró momentáneamente del teatro de los

acontecimientos para regresar armado con un machete y desoyó las advertencias iniciales de RODRÍGUEZ RAMOS, antes de que éste disparase.(Fs.407-408)

Ahora bien, son dos las ideas centrales que se plasman en el recurso presentado por la Fiscal Segunda Superior: en primer lugar, considera que no se ha configurado la legítima defensa sino que estamos ante un homicidio doloso agravado. En segundo lugar, sostiene que el grado de participación de JHONY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS es el de autor material y en el caso de ANAYANSI ACUÑA de MOLINA, su actuación la ubica como instigadora. Al analizar las pruebas que reposan en la encuesta penal para cada circunstancia tenemos lo siguiente:

BIENVENIDO VALDELAMAR VEGA, quien era hermano del hoy occiso, manifestó en declaración jurada que el día en que se suscitaron los hechos, iba caminando por el sector de El Progreso, Corregimiento de Tocumen, y ANAYANSI lo llamó, le dijo que su hermano "LUCKY" había roto las reglas y que ella iba a perder su mercancía y que él (declarante) sabía como ella cobraba lo de ella. Agrega que al lado de ANAYANSI se encontraba un sujeto que conoce por el nombre de JHONNY a quien vio que portaba un revólver grande, negro de cacha chocolate el cual tenía puesto en su cintura, en la parte delantera de la pretina.(F.14)

Expresa que ANAYANSI le dijo que tenía a "LUCKY" viviendo en su casa y éste le hacía la segunda de la venta de droga, pero que se le había volteado con un "caleto", refiriéndose a la droga. (F.14)

Señala VALDELAMAR VEGA que le comentó lo sucedido a su otro hermano FELIX ENRIQUE BALLESTEROS VEGA, lo que éste corrobora a foja 11 del cuaderno penal.

Igualmente, observa la Sala que VALDELAMAR VEGA puso en conocimiento a las autoridades de policía de lo que le había dicho ACUÑA de MOLINA y que la había visto en compañía de RODRÍGUEZ RAMOS quien estaba armado, lo que motivó que los agentes del orden público fueran a buscar a los presuntos responsables del hecho.

Así, el Cabo 1° TOMÁS CAMARGO, en declaración jurada rendida ante el Jefe de la División de Homicidios de la Policía Técnica Judicial, manifestó que al recibir el reporte de los incidentes se dirigió a Villa Luchín en compañía del Cabo 1° CARLOS CHÁVEZ, el Cabo II EDWIN VIQUES, y los agentes GILBERTO ATENCIO y JAIME SPARKS.

Con la información suministrada por el señor VALDELAMAR VEGA, los Agentes procedieron a hacer un operativo y localizaron a ANAYANSI ACUÑA de MOLINA en el sector de Brisas del Río, la aprehendieron, y ésta les informó que JOHNNY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS se había dirigido hacia el sector de la barriada 24 de Diciembre, logrando las autoridades ubicar el paradero de este sujeto quien se ocultaba en casa de MARÍA LIZBETH GABRIEL (Léase HORACIA GABRIEL GONZÁLEZ), donde también vive la señora ANAYANSI ACUÑA de MOLINA.

Refiere el Cabo CAMARGO que RODRÍGUEZ RAMOS intento darse a la fuga, mostrando resistencia al momento de la detención y negó que había matado a "LUCKY", señalando que "CHITO fue quien le disparó al hoy occiso. (Fs.18-20;39-41)

Consta en el cuaderno penal el informe de novedad suscrito por el Sargento II MANUEL RAMOS, quien señala que RODRÍGUEZ RAMOS de manera voluntaria le manifestó que a cambio de alguna ayuda diría la verdad, señalando que procedió en compañía del menor CARLOS BELLO MELGAR (A) "CHITO" a la casa de "LUCKY", ya que este mantenía una cuenta pendiente con él y al llegar al lugar "LUCKY" salió con un machete y trató de agredirlo por lo que le propinó cinco disparos, en defensa propia. (F.21)

El Sargento II MANUEL RAMOS suscribió otro informe de novedad en el que indicó que aproximadamente a las 13:00 horas del 4 de julio de 1997, en compañía del Cabo 1° JORGE SÁNCHEZ, el Cabo II PEDRO CUBILLA y la Agente GLENDA CHEPOTE,

se dirigió a la casa de ANAYANSI ACUÑA de MOLINA donde se entrevistó con VIELKA HORACIA GABRIEL GONZÁLEZ (Léase HORACIA GABRIEL GONZÁLEZ (A) "VIELKA"), a quien le solicitó ayuda para esclarecer el hecho punible y ésta de manera voluntaria manifestó que sabía donde se encontraba el arma de fuego que presuntamente había utilizado JOHNNY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS para ultimar a BALLESTEROS VEGA, indicando que estaba enterrada en la orilla de una quebrada que está detrás de la residencia de la señora ACUÑA de MOLINA. El arma encontrada es un revólver calibre 38 marca Taurus, serie N° 1G181558, sin municiones y sin permiso.(F.22)

Otro miembro de la Policía Nacional que participó en las investigaciones preliminares del caso en examen es el Agente RICARDO RISCO VARGAS, quien indicó en declaración jurada que realizó entrevistas a varios de los implicados y, por medio de la entrevista sostenida con el menor CARLOS BELLO MELGAR (A) "CHITO" y al señor MARIO ENRIQUE GONZÁLEZ TEJADA, se pudo establecer que el arma que fue utilizado para matar al joven BALLESTEROS era de propiedad de ANAYANSI, pues el señor GONZÁLEZ alegaba que el día de los hechos ésta fue a su casa para que él le guardara unas armas.(F.42)

De igual manera, RISCO VARGAS señala que entrevistó a RODRÍGUEZ RAMOS quien aceptó haber matado a BALLESTEROS VEGA, ya que tenía una riña vieja con éste porque le había robado y también dijo que ANAYANSI le había puesto el arma en la mano. (F.43)

LUIS BARRÍA NÚÑEZ, testigo presencial del hecho, manifestó en declaración jurada que se encontraba en Villa Luchín en la casa de un inválido que se llama CARLOS, en compañía de éste, MANUEL y ALBERTO. Estaban viendo la televisión cuando llegaron JHONNY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS y CARLOS JESÚS BELLO MELGAR (A) "CHITO" preguntando por "LUCKY" y les contestaron que no estaba ahí.

Continúa señalando que JHONNY y "CHITO" se fueron; luego vio que éstos se toparon con "LUCKY" y los tres se regresaron a la casa de CARLOS; entonces, "LUCKY" entró y sacó un machete, JHONNY le preguntó qué iba a hacer con el machete pero éste no le dijo nada, motivo por el cual JHONNY sacó el revólver y le dijo a "LUCKY" que soltara el machete, pero éste no lo soltó y fue hacia donde estaba JHONNY quien comenzó a disparar y después se fue corriendo con "CHITO" por una loma y se escuchó otro disparo que JHONNY le hizo a "CHITO" porque éste cogió por otro camino. (F.138)

Se le preguntó al declarante si en algún momento BALLESTEROS VEGA tuvo la intención de agredir o agredió a JHONNY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS a lo que respondió BARRÍA NÚÑEZ que el hoy finado salió con el machete para caminar con JHONNY y "CHITO", no vio que intentara o agrediera a alguno de los dos.(F.138)

HORACIA GABRIEL GONZÁLEZ (A) "VIELKA", en su declaración jurada explicó que es hermana de crianza de ANAYANSI ACUÑA de MOLINA con quien vive actualmente. Indicó que vio a "CHITO" en actitud sospechosa, ella se ocultó y observó cuando éste guardaba algo en la tierra, se imaginó que era el arma de fuego y por eso le dijo a la P.T.J. donde se encontraba dicha arma. (Fs.144-145)

MARIO ENRIQUE GONZÁLEZ TEJADA, vecino de ANAYANSI ACUÑA de MOLINA, señaló que aproximadamente a las 9:00 p.m. salió de su casa a buscar un tanque de agua y ésta lo llamó y le dijo "VECINO ME PUEDE GUARDAR ESTO" y le mostró dos armas de fuego. Él le contestó que no se las podía guardar porque no sabía de donde provenían esas armas de fuego. (F.147)

Manifiesta el declarante que al día siguiente de los hechos los Agentes de Policía fueron a su casa para hacer un allanamiento y buscar el arma pero él les explicó lo ocurrido con ANAYANSI. (F.148)

Por su parte, CARLOS JESÚS BELLO MELGAR (A) "CHITO", quien era menor de edad en ese entonces, explicó que se encontraba en una tienda en Villa Luchín, cuando vio venir a JHONNY y éste le preguntó si sabía donde vivía un inválido que le llaman "PRE". Él lo llevó a la casa de CARLOS y allí JHONNY preguntó por

"LUCKY" y le dijeron que no se encontraba.

BELLO MELGAR indica que se iba a retirar del lugar, pero JHONNY le dijo que lo esperara, por lo que se quedó afuera de la casa. En eso venía "LUCKY" y JHONNY le preguntó que a dónde estaban sus piedras, empezaron a discutir y "LUCKY" entró a la casa del inválido y sacó el machete; JHONNY le dijo que soltara el machete y como "LUCKY" no lo hizo, aquel sacó un revólver calibre 38 y le hizo cinco disparos. El testigo manifiesta que salió corriendo y JHONNY venía detrás de él, pero como tomó por otro camino, JHONNY le soltó un disparo. (F.237)

En cuanto al revólver calibre 38 Spl, serie N° IG19158, marca TAURUS y el proyectil extraído al hoy occiso, fueron sometidos a peritaje en la Sección de Balística Forense del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, concluyendo que el proyectil fue disparado por dicha arma de fuego. (Fs.205-207)

Por otro lado, se tiene que JOHNNY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS manifestó en declaración indagatoria que el día de los hechos, a eso de las 7:30 p.m., se encontraba en compañía de "CHITO" en Villa Luchín, estaban consumiendo marihuana, de repente "CHITO" le dijo mira donde viene "LUCKY" entonces él (RODRÍGUEZ RAMOS) fue a reclamarle porque le había robado un reloj el domingo anterior.

Expresa el indagado que BALLESTEROS VEGA entró a una casa y salió con un machete, le tiró a dar en la cara. En ese instante "CHITO" le pasó un arma de fuego, calibre 38, con la cual apuntó a "LUCKY" y le dijo que bajara el machete; entonces el hoy occiso le tiró un machetazo y le dijo que tenía que matarlo sino él lo iba a matar, fue donde le disparó en una ocasión y "CHITO" le quitó el revólver y comenzó a dispararle a "LUCKY", luego salieron corriendo. (F.61)

De otro lado, ANAYANSI ACUÑA de MOLINA negó su vinculación con el hecho punible. (Fs.131-135)

Ahora bien, el Tribunal de primera instancia concluyó que en el caso subjúdice RODRÍGUEZ RAMOS actúo legítima defensa porque a criterio del A-quo- es un hecho cierto que el hoy finado al calor de lo que era hasta el momento un intercambio verbal se retiró momentáneamente, regresó armado con un machete y desoyó las advertencias iniciales de RODRÍGUEZ RAMOS, antes de que éste disparara.

Además, el Tribunal Superior señaló que, si bien en el auto encausatorio se descartó la legítima defensa por la inexistencia de proporcionalidad en el despliegue de acciones violentas por parte del acusado y el exceso de defensa que se evidenciaba con la autopsia que reveló que el finado presentaba varios impactos de bala, dicha afirmación no era exacta. Pues, la información vertida en el protocolo de necropsia indica que solamente una bala impactó en la anatomía del hoy occiso, produciendo tres orificios: uno de entrada y salida al tórax, y el tercero de entrada en el antebrazo. (Fs.407-408)

La Sala estima que el A-quo no señaló un fundamento sólido que establezca si la conducta se adecúa o no a lo preceptuado por el Artículo 21 del Código Penal, que estatuye los presupuestos de la legítima defensa:

> Artículo 21: No comete delito quien obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los siguientes requisitos:
>
> 1. Agresión injusta, actual o inminente del que resulte afectado por el hecho;
>
> 2. Medio racional para impedir o repeler la agresión;
>
> 3. Imposibilidad de evitarla o eludirla de otra manera;

4. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende."

A criterio de esta Corporación de Justicia, la situación descrita en la presente causa criminal no se adecúa a los parámetros establecidos en el artículo citado. Veamos.

En la doctrina se ha señalado que en cuanto a la actualidad o inminencia de la agresión, "debe entenderse el ataque que está apunto de consumarse o dura todavía, pero no el que apenas se vislumbra como probable o el que ya se ha consumado. No es posible aceptar como actual la agresión futura, ni justificar ante ella reacción defensiva porque el presunto agredido podría evitarla de otro modo;..." (Alfonso Reyes de Echandía, Obras Completas, Antijuridicidad, Volumen I, Editorial Temis, Santafé de Bogotá, 1998. p.168) (Lo resaltado es nuestro)

El autor español Francisco Muñoz Conde explica que "debe darse una efectiva puesta en peligro de bienes jurídicos defendibles, que con la agresión estén en verdadero riesgo inminente de ser lesionados."(Teoría General del Delito, 2ª edición, Editorial Temis, Santa Fé de Bogotá, 1998.p.78) (Lo resaltado es nuestro).

Al analizar las pruebas que reposan en las sumarias frente a los criterios expuesto, se infiere que no hubo una agresión inminente que pusiera en peligro la vida del procesado: los testigos presenciales LUIS BARRÍA NÚÑEZ y CARLOS JESÚS BELLO MELGAR son contestes al señalar que BALLESTEROS VEGA salió con un machete al encuentro de RODRÍGUEZ RAMOS; sin embargo, no refieren que su actitud haya sido la de atacar o agredir al procesado, sino que este salió al encuentro de RODRÍGUEZ RAMOS y éste le reiteró varias veces que soltara el machete, pero el hoy occiso no hizo gesto alguno y no le dijo nada, y RODRÍGUEZ RAMOS comenzó a disparar a su supuesto agresor.

Respecto al medio racional para impedir o repeler la agresión, la imposibilidad de evitarla o eludirla de otra manera, y la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, se debe señalar que estos requisitos no se cumplen porque el procesado fue en busca de BALLESTEROS VEGA para reclamarle por unas sustancias ilícitas, estaba armado con un revólver y si bien era el único medio que tenía para defenderse, ante una agresión inexistente como en el caso que nos ocupa, no opera la excepción de legítima defensa.

Por otra parte, llama la atención que el Tribunal Superior haya considerado que por haber sido un solo proyectil el que impactó y causó la muerte de BALLESTEROS VEGA, ello descarta la intención de causar un daño mayor que el necesario para neutralizar la supuesta agresión de la que iba a ser objeto el procesado, pues los testigos presenciales así como las unidades de policía que entrevistaron a RODRÍGUEZ RAMOS, indican que éste hizo cinco disparos de seguido contra el hoy occiso, lo que evidencia la intención de causarle la muerte a BALLESTEROS VEGA.

INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA

La Sala considera que los elementos probatorios demuestran que el hecho cometido en perjuicio de BALLESTEROS VEGA encuadra en el artículo 132, numeral 2, del Código Penal, es decir, el delito de homicidio doloso agravado por premeditación cuya sanción oscila entre los 12 y 20 años de prisión, y , de acuerdo a nuestra jurisprudencia, se compone de los siguientes elementos: "la existencia de una deliberación previa a la comisión del ilícito, elaboración fría de un plan para llevar a cabo la acción, escoger el lugar y circunstancias de tiempo y modo en que se ha de desarrollar el hecho punible y consecuentemente la previsión de todo riesgo que conlleva una empresa criminal.(Fallo de 2 de julio de 1997. R.J. julio de 1997, p.270)

Lo anterior se desprende de la declaración jurada de BIENVENIDO VALDELAMAR VEGA, quien señala que los procesados ACUÑA de MOLINA y RODRÍGUEZ RAMOS, horas antes del lamentable incidente, estaban buscando a su hermano: ACUÑA de MOLINA

le manifestó que BALLESTEROS VEGA había roto las reglas y que ella iba a cobrar por la mercancía que había perdido, mientras que RODRÍGUEZ RAMOS portaba un arma de fuego.

Por otra parte, se evidencia que RODRÍGUEZ RAMOS escogió el lugar y la hora para la comisión del hecho, pues el testigo BELLO MELGAR manifiesta que aquél fue a buscar a BALLESTEROS VEGA a Villa Luchín en horas de la noche.

Finalmente, el arma utilizada en la comisión del hecho punible fue ocultada y las autoridades dieron con su ubicación por la información suministrada por HORACIA GABRIEL GONZÁLEZ, quien vive en la casa de ANAYANSI ACUÑA de MOLINA, que está próxima al lugar donde se encontraba el arma.

En cuanto al grado de participación del procesado JHONNY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS, la Sala considera que su actuar ilícito lo ubica como autor material del hecho punible, toda vez que fue quien infirió la herida a BALLESTEROS VEGA.

Con relación a la participación de ANAYANSI ACUÑA de MOLINA, si bien la Fiscal Segunda Superior estima que debe ser sancionada como instigadora, no existen elementos de prueba que acrediten plenamente que ésta determinó intencionalmente a RODRÍGUEZ RAMOS para que ejecutara el hecho punible.

No obstante, se advierte que ACUÑA de MOLINA fue la persona que le facilitó el arma de fuego a RODRÍGUEZ RAMOS, lo que señala el Agente RICARDO RISCO VARGAS, en declaración jurada (Fs.42-43); y horas después del incidente, le solicita a MARIO ENRIQUE GONZÁLEZ TEJADA que le guarde el arma.

Con base en lo anterior, la Sala estima que la conducta desarrollada por ANAYANSI ACUÑA de MOLINA se ubica en el artículo 39 del Código Penal, es decir, como cómplice primario que "es aquel que tome parte en la realización del hecho punible o preste al autor o autores un auxilio sin el cual el hecho no habría podido cometerse", puesto que le proporcionó el arma de fuego a RODRÍGUEZ RAMOS con la cual ultimó a BALLESTEROS VEGA.

Como quiera que el intervalo penal del homicidio doloso agravado oscila entre los 12 a 20 años de prisión, se procede a fijar la pena base a cumplir por los procesados en 15 años de prisión y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período.

De las piezas procesales no se evidencia la concurrencia de circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley REVOCA la sentencia de 22 de febrero de 2000, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y CONDENA a JHONY ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS y ANAYANSI ACUÑA de MOLINA a la pena principal de 15 años de prisión como autor y cómplice primario respectivamente, del Delito de Homicidio Doloso Agravado en perjuicio de BALTAZAR BALLESTEROS VEGA, y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GONZALO GONZÁLEZ

QUIRÓZ Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO), Y EL PATRIMONIO, ETC. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia de 27 de marzo de 2000, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial ABSOLVIÓ a JOSÉ DAMIÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ de los cargos formulados en su contra; IMPUSO a GONZÁLO GONZÁLEZ QUIROZ la pena de SETENTA Y DOS (72) MESES DE PRISIÓN, por haber sido declarado culpable por el jurado de conciencia de los delitos de homicidio hurto en perjuicio de Ovidio Quintero Atencio; y DECLARÓ TERMINADA la causa penal seguida a MANUEL APARICIO RUÍZ por los delitos de homicidio y hurto en perjuicio de Ovidio Quintero Atencio, por haber sido absuelto por el Jurado de Conciencia (fs.1344-1357 vt).

El fallo en comento fue apelado al momento de notificarse el Fiscal Segundo Superior, licenciado Fernando Fabián Gutiérrez P. y por el licenciado Carlos Darío Espinoza, abogado defensor del procesado Gonzálo González Quiroz, quienes en tiempo oportuno presentaron los escritos respectivos; por lo que se concedió en el efecto suspensivo el recuso interpuesto.

DISCONFORMIDAD DE LOS APELANTES

El representante del Ministerio Público, licenciado Fernando Fabián Gutiérrez P., solicita que la sentencia apelada sea revocada y que José Damián González González sea declarado culpable y condenado en calidad de autor material delos delitos de homicidio y robo agravados en perjuicio de Ovidio Quintero Atencio; y que Gonzálo González Quiróz, sea condenado además, por el delito de robo agravado en calidad de cómplice primario.

Afirma que al valorar los elementos de prueba aportados al proceso, los señores Magistrados además de caer en apreciaciones subjetivas, desestimaron la realidad de los hechos ocurridos, a consecuencia de los cuales perdió la vida de manera violenta Ovidio Quintero.

En ese sentido sostiene que desde el inicio de la encuesta penal se menciona a Gonzálo González como participe de los delitos investigados, tal como se desprende de los testimonios de María Isabel Mójica (fs.26-28), Armando Antonio Araúz Jurado, Corregidor del área (fs.50-53), Ovidio Mójica (fs. 67-68), Viviana Adriana Gómez González (fs.102-106), José Luis Caballero González, María De Los Angeles Quintero, la declaración indagatoria de Alexis Alexander Castillo Quiel (fs.243-246) y Abdiel Alexis Díaz (fs.288-290).

Señala también, que no hay contradicción entre lo manifestado por Gonzalo González y el Protocolo de Necropsia, por cuanto se desprende que el interfecto Quintero Atencio presentaba varias lesiones en su anatomía; y que de igual forma y singular importancia es la declaración del doctor Julio Armando Moltó Ordóñez (fs.877-878).

Advierte que si bien el imputado Gonzálo González se retracta de los cargos formulados contra José Damián González Quiróz, en sus indagatorias rendidas el 9 y 21 de febrero de 1997 (fs.165-171 y 291-296), en la diligencia de careo celebrada el 3 de marzo de 1997 (fs.334-336) persiste en mantener los cargos contra José Damián González.

En opinión del señor Fiscal, los señores Magistrados acogieron como una verdad absoluta el argumento de Gonzálo González de haber sido golpeado por miembros de la Policía Técnica Judicial, y no hicieron mención de las distintas diligencias y pericias desplegadas por el Ministerio Público para aclarar estas afirmaciones; todo lo cual determinó que la supuesta lesión ocasionada a Gonzalo González no coincidía con ninguno de los detalles narrados por éste, aduciendo

haber sido guindado de las manos con las esposas que utilizan los miembros de la Policía Técnica Judicial.

Por otra parte indica que la víctima tenía en su poder chances y billetes de lotería premiados, sin embargo es Gonzalo González quien inicialmente introduce este elemento al sumario, lo que posteriormente fue corroborado por amigos y parientes, acreditándose no sólo la propiedad y preexistencia de los chances y billetes sino también del dinero en efectivo que tenía esta persona en su poder.

De conformidad con estas consideraciones estima que se desprende como verdad absoluta que José Damián González es autor material del homicidio y del robo en perjuicio de Ovidio Quintero Atencio.

En lo que se refiere a la pena impuesta por Gonzalo González Quiróz, advierte que el Tribunal desechó los cargos que por delito contra el Patrimonio se formularon contra éste, y por los cuales el jurado de conciencia lo declaró culpable (fs.1169-1176 y 1321), cuando no tiene aplicación la norma contenida en el artículo 63 del Código Penal, toda vez que sus actuaciones se realizaron en tres momentos diferentes.

Sostiene que no fue en el momento del robo donde fue lesionado de muerte Ovidio Quintero, como lo afirman los señores Magistrados, sino posteriormente y con premeditación. Por tanto, Gonzalo González también debe ser condenado por el delito de robo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 186 del Código Penal; y en calidad de cómplice primario, toda vez que de las pruebas aportadas, es quien aparece como la persona que facilitó la cizalla, con la cual los miembros de la banda penetran al local de Ovidio Quintero, prestando tal auxilio sin el cual el hecho no podría haberse consumado (fs.1360-1366).

Por su parte, el licenciado Carlos Dario Espinoza, defensa técnica del procesado Gonzalo González Quiroz, señala que el Tribunal Superior calificó la actuación de su defendido González Quiroz como cómplice secundario, condenándolo a la pena de 72 meses de prisión, produciendose con ello, ausencia total de justicia, toda vez que los autores materiales han quedado absueltos y quien menos participó y cooperó con la justicia, resultó el único condenado.

Indica que se ha condenado a un cómplice sin autor material del delito, y que si el Tribunal no encontró pruebas suficientes para arribar a la convicción de culpabilidad de José Damián González, procesado en derecho, por lo menos debió prestar atención a las consecuencias injustas del fallo, para una persona que en principio fue quien dio luces a la investigación, confesando su participación en el robo y no en un homicidio; y quien deberá permanecer tres años más en prisión, cuando los autores a quienes él descubrió se encuentran en libertad. Situación que considera injusta, por lo que espera se haga justicia.

Por otra parte señala que su cliente nombró a las personas que a la postre fueron detenidas, vinculadas al hecho de sangre, dando además detalles del hecho, lo que le permitió que fueran enjuiciados con base a lo informado por el hoy condenado, por lo que el Tribunal Superior debió aplicar al máximo el beneficio contemplado en el artículo 2112 del Código Judicial, es decir, una rebaja hasta la mitad de la pena (fs.1368-1372).

HECHOS

Se refiere el presente proceso penal a la muerte del señor Ovidio Quintero Atencio el 13 de enero de 1997 luego que fuera sometido a una intervención neuroquirúrgica debido a un trauma cráneo facial que recibió en horas de la madrugada del 9 de ese mes al sorprender a la persona o personas que penetraron en la tienda de su propiedad a hurtar.

Vinculados a esos actos reprochables fueron encausados penalmente Gonzalo González Quiróz, Manuel Aparicio Ruíz y José Damián González González. Respecto

a los cargos de homicidio y hurto, el 11 de enero de 2000, un jurado de conciencia declaró culpable al primero e inocente al segundo; en tanto, el último renunció a su derecho de ser juzgado por un jurado de conciencia, por lo que al Tribunal en Derecho le correspondió examinar su situación, y en ese sentido lo declaró inocente.

FUNDAMENTO DE LA SALA

Corresponde examinar el fallo apelado sólo en los puntos objeto de disconformidad por parte de los recurrentes, tal como lo ordena el artículo 2428 del Código Judicial.

Con respecto al procesado José Damián González González, quien se acogió a un juicio en derecho, el Tribunal A-Quo al examinar las pruebas existentes se refirió a la declaración indagatoria rendida por Gonzalo González Quiroz el 9 de febrero de 1997 en la que hace cargos con respecto al señor González González y otros, de los cuales seguidamente se afirma y ratifica.

Narra González Quiroz que dos sujetos colombianos y un sujeto apodado "Satán" se introdujeron a la tienda del señor Ovidio Quintero y que mientras los dos colombianos cortaban el candado con una cizalla, Damián quien estaba cerca vio salir de su casa al hoy occiso, cuando se acercó lo golpeó por el área de la sien con una piedra redonda como de cinco libras que agarró del piso.

Señala que él (declarante) estaba a la orilla de la carretera vigilando y al ver eso se asustó y se escondió en una alcantarilla desde donde vio cuando Damián le registró los bolsillos del pantalón al señor Quintero, quien había caído al piso, y le sacó dinero en efectivo y billetes de lotería. Luego los sujetos huyeron y vio cuando el señor Quintero se levantó, tomó la bicicleta y salió a perseguirlos; momento que aprovecho para salir e irse a su casa a dormir. Afirma que hasta ese día de la declaración no los ha vuelto a ver y que por vigilar le iban a pagar la suma de cincuenta balboas (fs.165-171 y 172).

El 21 de febrero de ese año, al ampliar su declaración indagatoria de la cual se afirma y ratifica (fs. 291-296 y 301), González Quiroz señaló que las personas que había participado en el hurto a la tienda era Manuel Aparicio, Damián y Satanás; y que no participó ningún colombiano.

Agrega que desde su escondite, que estaba como a veinticinco metros del kiosco, vio cuando el señor Quintero regresó, dejó la bicicleta en el patio y fue a llamar a su hija; que en esos momentos Damián, Manuel Aparicio y Satanás se devolvieron y se metieron por el lado de la escuela y cuando el señor Quintero se acostó en la hamaca, los tres le cayeron a golpes. Presume que éstos regresaron porque el señor Quintero pudo haber reconocido a uno de ellos, ya que cuando se cortó el candado se habían quitado el pasamontañas.

Agrega que al día siguiente el señor Alexis Castillo le dijo que había prestado la cizalla a Manuel Aparicio, por lo que si le habían dado dinero lo dividiera con él.

El fallo apelado también se refirió a las diligencias de careo entre el imputado González Quiróz y los señores Alexis Castillo (a) "Puri" (fs. 334-336) y José Damián González (fs.368-371), indicando que en ambas el imputado González Quiroz se retracta de lo declarado aduciendo que había sido golpeado y presionado por miembros de la Policía Técnica Judicial.

Ahora bien, advierte esta Sala que el Tribunal A-Quo realizó el siguiente análisis intelectivo de las pruebas:

Indicó que el testimonio de González Quiroz por sí sólo de conformidad con lo establecido en los artículos 905 y 908 del Código Judicial no constituye plena prueba, dado que en tales declaraciones se observan evidentes contradicciones, porque primero señaló que además de Damián y Satanás, habían dos colombianos y

luego indicó que no eran colombianos sino Satanás, Damián y Manuel Aparicio.

También examinó la versión de González Quiroz y la cotejó con lo manifestado por la hija del ofendido en el sentido que había poca visibilidad, concluyendo que no es creíble que una persona a una distancia de veinticinco metros aproximadamente pueda distinguir objetos como chances o billetes de lotería.

Otro aspecto de la declaración de González Quiroz que estimó el Tribunal A-Quo contradictoria e incoherente es la versión de que sus compañeros regresaron porque presumían que el señor los había reconocido y que entre los tres golpearon al señor Quintero cuando estaba en la hamaca.

Al respecto el fallo señala que no existe concordancia entre las lesiones descritas en el protocolo de necropsia y las que presuntamente le pudieron haber ocasionado tres hombres al señor Quintero en su anatomía; y que de ser cierta la versión del testigo González Quiróz que los autores se habían quitado el pasamontañas, el señor Quintero los hubiera reconocido, por ser los acusados moradores del lugar, y así lo hubiera informado a su hija cuando le dijo a ésta que lo habían golpeado.

Por otra parte, el Tribunal A-Quo se refiere a situaciones observadas en el proceso que denominó "irregularidades respecto a la actuación de la Policía Técnica Judicial en la investigación del acusado González Quiróz".

En ese sentido detalla lo siguientes hechos:

-Que el sábado 8 de febrero de 1997 a las 3:30 de la tarde aproximadamente fue conducido a las instalaciones de la Policía Técnica Judicial, Sub-Agencia de Bugaba el señor González Quiroz para investigación; no obstante de acuerdo a las versiones de los detectives Cubillas B., Torres V. y Abdiel Torres fue conducido a las instalaciones en David y no Bugaba.

-Que González Quiroz permaneció detenido sin ordenes para ello de una autoridad competente y sin haber sido sorprendido en flagrancia hasta el domingo 9 de febrero a las 3:15 de la tarde cuando rinde indagatoria ante el despacho del personero en Boquerón.

-Que el acusado González Quiróz detenido preventivamente a órdenes del señor Personero, era trasladado sin ordenes de éste, a la Policía Técnica Judicial para investigaciones a petición de los detectives Cubillas, Martín Torres y Abdiel Torres (f.490).

Al respecto advierte el Tribunal A-Quo que las salidas, de acuerdo con ese informe, se daban en horas de la tarde, retornando al detenido en horas de la noche.

-Que el 13 de febrero la inspectora de la Policía Técnica Judicial Sub-Agencia de Bugaba solicitó autorización para que el detenido Gonzalo González los ayudara a ubicar al sujeto apodado "Satanás".

-Que consta que los detectives Cubillas, Martín Torres y Abdiel Torres realizaron una diligencia de reconocimiento a las 8:00 de la noche el 12 de febrero de 1997 con el detenido González Quiróz (fs. 206-207), y a raíz del resultado obtenido el señor Personero instructor fundamentó una resolución para ordenar la libertad de una persona que estaba siendo investigada (f.218).

Luego del análisis esbozado, el Tribunal Superior llegó a la siguiente conclusión:

> "...para concluir este Tribunal observa que siendo el señalamiento de Gonzalo González la única prueba que milita contra el procesado Damián González, el cual por ser contradictorio no permite que sea

valorado como plena prueba, y por ende existe duda, (sic) lo cual es resuelta en favor del procesado (in dubio pro reo), esta colegiatura debe expedir un fallo absolutorio a su favor" (f.1353).

Ahora bien, esta Sala luego de examinar las pruebas que sirvieron de fundamento al Tribunal de Primera Instancia para emitir un veredicto absolutorio en cuanto al procesado José Damián González González, considera que las alegaciones hechas por el señor Fiscal Gutiérrez, en calidad de apelante, no se ajustan totalmente a la realidad. Veamos.

Si bien es cierto como lo señaló el licenciado Gutiérrez, que en la diligencia de careo celebrada el 3 de marzo de 1997 González Quiróz persiste en mantener los cargos contra José Damián González González (fs.334-336); no menos cierto es, que en la diligencia de careo realizada el 14 de marzo de ese mismo año, entre los imputados González Quiróz y González González, el primero es categórico al señalar que no se afirma ni se ratifica de su declaración indagatoria ni de la ampliación de la misma, porque le fue inducida por el agente Cubilla de la P.T.J., quien incluso lo golpeó (fs.368-371).

En cuanto a las lesiones presentadas en el cuerpo del occiso, no le cabe razón al apelante cuando afirma que no hay contradicción entre lo manifestado por González Quiroz y el protocolo de necropsia.

Recordemos que González Quiróz afirma que después del golpe que se le propinara al señor Quintero con una piedra por el área de la sien, éste montó una bicicleta para perseguir a sus agresores, regresó, llamó a su hija, y luego se fue a acostar en la hamaca, momento que aprovecharon Damián, Manuel y Satanás y "le cayeron a golpes".

Ahora bien, las lesiones a que se refiere el apelante y que están consignadas en el protocolo de necropsia son compatibles con la lesión que según el imputado Gonzalo González Quiróz recibió el señor Quintero (ver fs. 18-19 y vistas fotográficas 445-448); y de las cuales la Dra. Luz Silvera, quien hizo una revisión al expediente clínico del señor Quintero, consignó mediante Oficio N° 97-5-H, que el diagnóstico de ingreso fue Trauma Cráneo Encefálico, corroborado posteriormente con el diagnóstico post-operatorio. Lo cual llevó a la conclusión que las lesiones fueron producidas con objeto: Contundente (fs.64-65).

Finalmente cabe señalar, que contrario a la afirmación del señor Fiscal, el Tribunal de Primera Instancia no tomó como verdad absoluta la versión de González Quiróz que miembros de la P.T.J. lo habían golpeado, toda vez que en su análisis se refirió a irregularidades en la actuación de la Policía Técnica Judicial en la investigación del acusado Gonzalo González (fs.1351-1353), excluyendo el aspecto de los golpes que éste afirma recibió por miembros de la Policía Técnica Judicial.

Sin embargo, cabe destacar, que el señor Fiscal afirma que las distintas diligencias y pericias desplegadas por el Ministerio Público determinaron que la supuesta lesión ocasionada al señor González Quiróz no coincidía con ninguno de los detalles que narró.

A este respecto, la Dra. Luz Silvera, quien le había practicado un examen médico legal al señor González Quiróz (fs.427); al participar en la Diligencia de Reconstrucción de los hechos donde González Quiróz explica como fue golpeado (fs.914-934), al ser cuestionada por el licenciado Carlos Dario Espinoza sobre tales lesiones, su respuesta deja la posibilidad que las mismas se hubiesen ocasionado de esa manera, siendo que en principio fue categórica al señalar que no (ver desde 928-933).

Por lo expuesto y analizado, estima esta Sala que el fallo absolutorio con respecto al señor José Damián González González, debe mantenerse.

En cuanto a la situación del procesado Gonzalo González Quiróz, en primer

lugar se advierte que un jurado de conciencia lo declaró Culpable de "haberle causado la muerte al señor Ovidio Quintero Atencio" (f.1320); y Culpable "del delito contra el patrimonio cometido en perjuicio del señor Ovidio Quintero Atencio".

Correspondió al Tribunal Superior imponer la sanción penal correspondiente al procesado González Quiróz, y al respecto señaló lo siguiente:

> "TERCERO: Para la individualización judicial de la pena, se toma en consideración los siguientes aspectos, Gonzalo González es cómplice secundario del referido delito conforme al artículo 40 del Código Penal, ya que su actuación fue la de colaborar con la vigilancia mientras los demás sujetos cometían el ilícito. Tomando en consideración que el delito investigado es el de homicidio agravado previsto en el artículo 132 numeral 5 del Código Penal, ya que la acción original consistió en hurtar en el kiosco del occiso, pero al ser sorprendidos por éste lo golpearon, y estas lesiones le causaron la muerte. Es decir que, no se puede aplicar el delito de homicidio y el de hurto a la vez, porque el delito de homicidio agravado subsume el otro delito para que no se sancione dos veces el mismo hecho.
> ...
> Señalado el grado de participación del procesado y la norma violentada con su actuación, nos corresponde determinar la pena a aplicar por tratarse de un cómplice secundario, así tenemos que la disposición penal infringida contempla sanción de prisión de doce (12) a veinte (20) años, ahora bien de acuerdo al artículo 61 del Código Penal se le debe sancionar con pena no menor de la mitad del mínimo, ni mayor de la mitad del máximo lo que nos da un nuevo tramo de pena sobre el que operar de seis (6) a diez (10) años.
>
> Al no tener la intención de haber ocasionado un daño como el que se produjo, pues los planes iniciales eran el hurto del kiosco, y no ocasionar la muerte del señor Ovidio Quintero Atencio, ya que no llevaban armas consigo; es decir, no previeron la situación que se les presentó, por la preparación del delito en grupo y el papel que le correspondió desempeñar (vigilante) y por el valor del bien jurídico protegido (la vida) se le sanciona en 72 meses de prisión" (fs.1354-1356).

Respecto a la situación jurídico penal del procesado González Quiróz plasmada en el fallo, tanto el Fiscal Superior como su abogado defensor impugnaron la decisión adoptada. El primero, al considerar que se está ante los delitos homicidio agravado por premeditación y el delito de robo; y que González Quiróz es cómplice primario en tales acciones delictivas. En tanto, el segundo estima injusto el fallo, al indicar que su defendido aceptó su participación en el hurto, nombrando a las personas que también fueron detenidas y enjuiciadas y no se le reconoció el beneficio contemplado en el artículo 2112 del Código Judicial, el cual se debió aplicar al máximo.

Llama la atención a esta Sala, que el Tribunal Superior considere como cierta la versión del procesado González Quiróz en el sentido que su participación en el hurto de la tienda fue de "vigilante", cuando tal versión le mereció duda al examinar la situación jurídico penal del señor José Damián González González.

En ese sentido, refiriéndose a lo manifestado por González Quiróz, el Tribunal A-Quo consideró "que no hay credibilidad, pues resulta sorprendente que una persona a una distancia de 25 metros en horas de la madrugada (3:00 a 4: aproximadamente) (f.39) pueda distinguir objetos como chances o billetes de lotería" (f.1350).

También sorprende que el Tribunal Superior afirme que la actuación de

González Quiróz "fue la de colaborar con la vigilancia mientras los demás sujetos cometían el ilícito" (f. 1354), admitiendo en esta oportunidad que fueron varios los que realizaron la conducta punible.

A este respecto, importante es indicar que "las resoluciones judiciales que contengan contradicciones internas, arbitrariedades, errores lógicos o lagunas, que la conviertan en manifestaciones irrazonables, aun teniéndolas aparentemente, se entenderán carentes de motivación y por tanto vulnerarán el derecho a un proceso debido" (Principios Procesales y Debido Proceso. Módulo Instruccional. Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial. pág. 148. Panamá. 1998.).

Ahora bien, algo que ciertamente se ha comprobado es que el occiso tenía en los bolsillos chances y billetes de la lotería que habían sido premiados, así lo afirman sus hijas María De Los Angeles Quintero (fs.305-306) y Gabriela Quintero (fs.313-315), en declaraciones rendidas el 24 y 25 de febrero 1997, respectivamente. De modo tal, que el procesado González Quiroz quien declaró el 9 de febrero ese año, no miente al afirmar que señor Quintero tenía en los bolsillos billetes o chances de lotería.

Por otra parte, no debemos olvidar, que el Jurado de Conciencia, dada la forma en que le fue formulada la pregunta, estimó que González Quiróz era el culpable tanto del homicidio como del delito de hurto (ver fs.1320-1321). Contrario a esa decisión, el Tribunal Superior, calificó el grado de participación del procesado González Quiróz de Cómplice Secundario.

Esta Sala mediante fallo de 30 de junio de 1999, manifestó que "para que exista el cómplice primario es necesaria la existencia de un autor, pues como señala el penalista colombiano Fernando Velásquez Velásquez, en la participación criminal existe "el principio de la accesoriedad, pues son impensables la instigación y la complicidad con vida propia e independiente aunque desde luego, la autoría puede existir por sí misma sin contar con la participación;... (Derecho Penal Parte general, 2ª Edición, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 1995. p.574)".

Siendo así, estimamos que la conducta de González Quiróz no se adecua a las características del Cómplice Secundario como lo determinó el Tribunal A-Quo ni de Cómplice Primario, como sugiere el señor Fiscal; sino que es la de autor del homicidio agravado "Para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible aún cuando éste último no se realice", contemplado en el artículo 132 numeral 5, cuya pena es de 12 a veinte años de prisión.

En cuanto a la solicitud del reconocimiento de una rebaja de pena de conformidad con lo normado en el artículo 2112 del Código Judicial a que se refiere la defensa, se advierte que mediante Ley 39 de 26 de agosto de 1999 se eliminó tal reconocimiento, no obstante estaba vigente al momento de la comisión del homicidio por el cual fue condenado el señor González Quiróz.

El mencionado reconocimiento contemplado en el artículo 2112 del Código Judicial en su último párrafo disponía:

> "El funcionario de instrucción podrá advertir al imputado que, si revela la identidad de los autores, cómplices o encubridores, siempre y cuando aporte indicios suficientes para el enjuiciamiento de éstos, tendrá derecho a una rebaja de hasta la mitad de la pena, a criterio del Juez, según la naturaleza del delito".

Como bien se observa, tal beneficio está contemplado en el Código Judicial pero su contenido es también sustantivo, toda vez, que incide como circunstancia atenuante en la aplicación de la pena y aunque una nueva ley a derogado tal beneficio, de conformidad con el contenido del artículo 13 del Código Penal que dispone que "si con posterioridad a la comisión del hecho punible se promulgaré una nueva ley, y no se hubiere decidido definitivamente el caso, se aplicará al procesado la ley más favorable", estamos ante un supuesto de ultraactividad por

lo que estamos obligados a aplicar la ley más favorable.

Ahora bien del contenido del artículo 2112 del Código Judicial se colige que "no es una facultad del juzgador conceder o negar la rebaja de hasta la mitad de la pena, sino un derecho que tiene el imputado que ha cooperado con la Administración de Justicia al brindar los nombres de los sujetos que en su compañía cometieron el ilícito al igual que los indicios que permitan procesarlos". (Sala Penal. 30 de Junio de 1999).

Finalmente, la normativa en comento, condiciona tal derecho de rebaja de pena, a que los indicios suministrados por el imputado sean suficientes que permitan el enjuiciamiento de aquellas personas que en su compañía realizaron el hecho punible investigado ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores.

Esto se debe entender de manera favorable, en el sentido que no es necesario que tales sujetos mencionados por el imputado sean necesariamente condenados sino solamente enjuiciados, situación que acontece con respecto a José Damián González González y Manuel Aparicio Ruíz, quienes fueron enjuiciados y aunque no fueron condenados, el procesado Gonzalo González Quiroz debe reconocersele tal derecho.

Luego entonces, corresponde efectuar la dosificación de la pena al procesado Gonzalo Quiroz González y de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 56 del Código Penal, se parte de 18 años de prisión. No se advierten circunstancias agravantes, pero se le reconoce como atenuante el hecho de haber revelado los nombres de dos personas con suficientes indicios para ser enjuiciados tal como lo dispone el artículo 2112 del Código Judicial, por lo que se le rebaja una sexta parte siendo la pena líquida a imponer quince años de prisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia de 27 de marzo de 2000, SOLAMENTE en el sentido de:

-CONDENAR a GONZALO GONZÁLEZ QUIRÓZ, de generales conocidas en autos, como autor del homicidio agravado en perjuicio de Ovidio Quintero Atencio, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN e igual período de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas;

-y CONFIRMA el Fallo Absolutorio con respecto a JOSÉ DAMIÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDWIN LINARES VARGAS POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE RUBEN OSES SARMIENTO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema, recurso de apelación presentado

por la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, contra la sentencia de 14 de enero de 2000 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que impone al ciudadano EDWIN LINARES VARGAS la pena de siete (7) años de prisión, en virtud de la declaratoria de culpabilidad como responsable del delito de homicidio en perjuicio de Rubén Oses Sarmiento emitida por el jurado de conciencia.

ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

Sostiene la recurrente que la sentencia impugnada es contradictoria por evidenciarse en autos la forma como el procesado causó la muerte del ofendido, la cual es incongruente con la pena impuesta y no es proporcional al bien jurídico tutelado.

Añade que no se analizaron en todo su contexto los elementos expuestos en el fallo y que debe agravarse la pena fijada de acuerdo al numeral 3 del artículo 66 del Código Penal el cual no se consideró al fijar la misma.

EL OPOSITOR

La Defensa Técnica del imputado se opone al recurso impetrado por la Vindicta Pública, en atención a que su patrocinado es delincuente primario, es confeso, no actuó con dolo eventual, probablemente no tuvo la intención de causar la muerte y participó en una riña donde fue atacado.

ANALISIS DE LA CORTE

El presente negocio penal tiene su génesis en la diligencia de reconocimiento y levantamiento del cadáver de Rubén Oses Sarmiento, quien falleció el día 21 de octubre de 1995 a consecuencias de golpes propinados en el cráneo en las últimas horas de la noche del 20 de octubre de 1995 en la calle séptima de del barrio de Villa Cecilia, corregimiento de Pedregal por dos sujetos.

El protocolo de necropsia acreditó que la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico (foja 80).

Realizadas las investigaciones de rigor, se vinculó al ilícito a EDWIN LINARES VARGAS a quien se le tomó declaración indagatoria en la cual negó que había peleado con el difunto (fs. 116-118).

Luis Alberto López Ramírez señala que el día de autos su esposa lo levantó por gritos que se daban en la parte exterior de su residencia y: "al salir observe una cantidad numerosa de vecinos y a el Sujeto (sic) EDWIN Golpeando (sic) al occiso sin que nadie interviniera." (f.39).

Aporta su testimonio Adelina Perry Persen indicando que en la fecha de autos observó a dos sujetos atacando al occiso así: "ví (sic) cuando EDWIN Y CHUPA estaban golpeando en el lote de la familía (sic) LOPEZ a este señor ..." (f. 43).

El análisis a una roca de color grisáceo y distinguida como la evidencia 4 resultó positiva para la presencia de sangre humana (f. 47-48).

Raúl Rodríguez Zambrano en su declaración relató haber visto al imputado EDWIN golpear al ofendido así: "luego ví (sic) cuando el sujeto que le llaman EDWIN venía de su casa de ponerce (sic) unas botas y luego subio (sic) a la casa del señor Lucho y empezo (sic) a golpear a el hombre de puños y patadas pero el hombre nunca se defendio (sic) ..."(f.57).

En declaración jurada Raúl Rodríguez Tejada, testigo de los hechos indicó: "En ese momento venía EDWIN llegando y le desía (sic) ROBAME AHORA y le pegó una trompada y agarró una piedra del piso y lo golpeo (sic) en la cabeza y el

muchacho se fue callendo (sic) y EDWIN lo agarro (sic) a patadas, es decir, cuando el señor se calló (sic), trato (sic) de no caerse y EDWIN se le fue detrás (sic) y lo agarró doblando la esquina de la casa y agarró a la persona a patadas y CHANO Y YO agarramos a EDWIN..." (f. 60).

En la diligencia de inspección ocular y de reconstrucción de los hechos, los testigos Luis A. López, Raúl Rodríguez y Adelina Perry se mantienen en sus deposiciones destacando que el imputado agredia a la víctima la cual no oponía resistencia (fs. 197-201).

Al acto de audiencia ante jurado de conciencia comparece el patólogo forense, doctor José Vicente Pachar Lucio quien fue interrogado por los sujetos del proceso y explicó que las lesiones sufridas por el occiso eran de naturaleza mortal (f. 311)

Conforme al artículo 2428 del Código Judicial procedemos a referirnos a los puntos cuestionados por la representante del Ministerio Público.

En autos consta que el imputado propinaba en forma contínua con sus manos y piernas golpes tanto a la anatomía del ofendido como a su cabeza; que utilizó una roca (f. 60) y botas (f. 57) y que se detuvo al ser separado del ofendido por unos testigos. Esto lo corrobora el protocolo de necropsia al indicar en su parte final: "El cuerpo presenta múltiples lesiones traumáticas causadas con un objeto contundente. Las lesiones se distribuyen predominantemente en la cabeza y la muerte ocurrió por el severo trauma al encéfalo, siendo el edema pulmonar agudo secundario al mismo."

Igualmente, consta que el día de autos al momento de ser agredido el occiso portaba un maletín negro de cuero con artículos utilizados para el peinado y maquillaje de damas (f.70); lo que aunado a la declaración de Edilma Sarmiento de De Vandas evidencia que el ofendido se dedicaba a la profesión de estilista.

Llama la atención de la Corte que el Tribunal "A-QUO" al imponer la pena, no valoró como en otras ocasiones la gravedad del hecho punible y la forma empleada por el imputado, valiéndose de su fuerza, de la colaboración con la que contó y de la nula resistencia que opuso la víctima, conducta que podía también enmarcarse en el tipo penal agravado de homicidio fútil.

En virtud del principio de la "reformatio in pejus" y del artículo 2428 del Código Judicial no puede la Corte agravar la conducta trasladándola del tipo penal de homicidio simple al tipo penal de homicidio agravado.

Pese a que al fijar la pena el Segundo Tribunal Superior de Justicia tomó su decisión apegado a los límites previstos en el artículo 56 del Código Penal y discrecionalmente fijó la pena en siete (7) años de prisión y tres (3) años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, es pertinente agravar la pena de prisión, con base en el numeral 3 del artículo 67 del Código Penal, por la forma continua como el imputado profirió golpes al ofendido.

La Corte coincide con la recurrente en el sentido de que se puede variar la dosificación, atendiendo a que el agente se valió del auxilio con que contó para actuar con ensañamiento, infligiendo sufrimientos innecesarios a la víctima dada la no resistencia del mismo al ataque. Sobre esto la doctrina colombiana anota: "La sevicia o ensañamiento moral y físico, consiste en cometer el homicidio ocasionando padecimientos innecesarios a la víctima, en obrar con crueldad ejecutando actos de barbarie que irroguen sufrimiento o dolor a la víctima." (GOMEZ LOPEZ, Orlando. El Homicidio, Tomo I,Primera edición, Edit. Temis, Bogotá, 1993, p.431.

La Corte considera que la agente de instrucción, debió emplear todos los mecanismos legales previstos para citar a todos los testigos que presenciaron los hechos el día de autos; no es posible que algunos testigos manifestaran nombres y sobrenombres de sujetos que les consta lo sucedido, más sin embargo, por el

temor a sufrir represalias de los agresores no se localizaron para obligarlos a cooperar con la investigación.

La única manera de modificar la actitud de las personas que se niegan a colaborar con la administración de justicia, es que las autoridades se valgan de los mecanismos coercitivos previstos en la ley, esto permitirá que la comunidad se atreva a cambiar los valores éticos y morales imperantes donde prevalece la falta de solidaridad y respeto por la autoridad.

Se procede a fijar la pena del sindicado LINARES VARGAS, partiendo de que yace acreditado el hecho punible y su autoría; la importancia de la lesión causada golpes a la cabeza que produjeron la pérdida de la vida del ofendido; la forma como lo perpetró profiriendo múltiples golpes, valiéndose de la oscuridad de la noche, en un terreno baldío inicialmente y frente al muro de una residencia posteriormente; sin motivos claros; la conducta reiterada simultánea y posterior inferir golpes a la víctima sin cesar en su ataque hasta que los vecinos lo apartaron de esta; y el valor del bien jurídico más preciado que posee la humanidad y que tiene relevancia constitucional como lo es la vida.

Partiendo de los siete (7) años de prisión sin considerar atenuante alguna y aumentándola conforme al numeral 3 del artículo 67 y 70 del Código Penal "Obrar con ensañamiento;", en una tercera parte, quedando la misma en una pena líquida de nueve (9) años y cuatro meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas se mantiene.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad, REFORMA la sentencia de 14 de enero de 2000 en sentido de imponer a EDWIN LINARES VARGAS la pena de NUEVE (9) AÑOS y CUATRO (4) MESES DE PRISION por el delito de Homicidio simple y la CONFIRMA en lo demás.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACION INTERPUESTA A FAVOR DE ANGEL DNVER SAMUDIO, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALBERTO CUESTA ESPINOZA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresa solicitud de Fianza de Excarcelación interpuesta a favor de ANGEL DENVER SAMUDIO SALAZAR, quien se encuentra sindicado por el supuesto delito de homicidio cometido en perjuicio de ALBERTO CUESTA ESPINOZA.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia en auto motivado de 17 de marzo de 2000 denegó la libertad caucionada solicitada. El 26 de abril del mismo año se concedió la apelación interpuesta en el efecto diferido, ordenándose remitir el proceso a la Sala de lo Penal de esta Honorable Corporación de Justicia, donde fue recibido y repartido el 9 de mayo del año en curso.

Mediante Informe Secretarial fechado 30 de noviembre de 1999, se notifica al señor Fiscal Auxiliar de la República que el señor ALBERTO CUESTA falleció el

día 22 de noviembre de 1999, y "dado que los hechos investigados evidencian actos anteriores atentativos, contra la vida del hoy occiso" dispone enviar lo actuado a la Policía Técnica Judicial (División de Homicidios) para que sea agregado al expediente seguido por el homicidio en referencia. (Fojas 163 y 164). A fojas 166 el detective II Patricio Hawthorne y el Detective I Rubén Martínez, rinden un informe en el que ponen de conocimiento a las autoridades competentes que "el ciudadano ALBERTO CUESTA ESPINOZA, con C.I.P. 8-716-2496, hoy occiso manifesto (sic) en vida que los ciudadanos PABLO ANTONIO MURES alias PAPA PIO, ANGEL SAMUDIO alias KILIN, ERNESTO MARCEL alias CHIVATA, habían intentado ultimarlo a tiros en donde lo lesionaron en varias partes de su cuerpo". Agregan que "Posteriormente para la fecha del día 22 de noviembre ultimaron a tiros a este ciudadano ALBERTO CUESTA ESPINOZA, unos sujetos con arma de fuego, por tal motivo se abjunta (sic) a la presente el expediente del homicidio del hoy occiso ALBERTO CUESTA ESPINOZA, ...".

Debido al informe que antecede, el Fiscal Auxiliar comisiona al Secretario de Despacho para que en funciones de "Agente Especial" proceda a trasladarse al lugar, realizar una diligencia de reconocimiento y levantamiento del cadáver, coordine el traslado del cuerpo al lugar correspondiente, comunique al Instituto de Medicina Legal para que realice la autopsia y tome las declaraciones necesarias para asegurar las pruebas, etc...

A fojas 181 rinde declaración jurada SHANIDA DEL CARMEN CANDANEDO LOGAN, esposa del hoy occiso, la que afirma que como a las 11:30 de la noche se encontraba parada en la esquina de la Calle 29 que es donde vive con una muchacha que le dicen Mamita, con la mamá de Manguito (Alberto Cuesta) que venía a traerle una comida y,

> "en ése momento venia (sic) un carro Tercel, de color verde que pasó frente a donde estaba Manguito sentado y despues (sic) se devolvió de reversa hacia atras (sic), entonces cuando el carro venía hacia atras (sic) Manguito se levantó, luego el carro para frente a Manguito y entonces ví (sic) cuando se baja de ése carro por la puerta izquierda PERRY y por la otra puerta derecha se baja BURREL y KILIN que estaba sentado en la puerta del pasajero de adelante empezó a disparar tambien (sic) estaban disparando PERY y BURREL y MOYO quien se quedó dentro del carro porque estaba manejando no disparó, entonces en esos momentos Manguito se cayó de frente al suelo y empecé a gritar y a llorar, ...".

Más adelante agrega que Kilin portaba un arma de fuego color cromada. A fojas 195 del expediente la señora SHANIDA DEL CARMEN CANDANEDO en la Diligencia de Reconocimiento fotográfico reconoce a ANGEL DENVER SAMUDIO SALAZAR alias KILIN.

A fojas 199 el doctor José Vicente Pachar, certifica que la muerte de ALBERTO CUESTA ESPINOZA se debió a una herida perforante por proyectil por arma de fuego en el tórax.

La primera investigación se inicia con la denuncia presentada por el señor DIEGO GARCIA MELENDEZ el día 25 de octubre de 1999 en el Centro de Denuncias de la Policía Técnica Judicial, mediante la cual el denunciante pone en conocimiento los hechos ocurridos el día 23 de octubre de 1999, en la que señala que:

> "... el día sábado 23 de octubre del corriente año a eso de las (02:45 a. m.) me encontraba a bordo del patrulla número 841, en compañía de el (sic) Cabo VALDIVIESO, y a bordo también estaba una menor de edad de nombre BRENDA LOPEZ, la cual íbamos a trasladar a la Policía de Menores, pero cuando íbamos a la altura de el (sic) semáforo de que (sic) esta al frente de la P.T.J. de Ancón, y escuchamos aproximadamente nueve disparos y uno de los últimos impacto la puerta derecha del patrulla, por lo que di la orden al Cabo de meter el patrulla en los estacionamientos de la PTJ, del

> lado de la Fiscalía, por seguridad de la Menor, pero pudimos visualizar de donde venían los disparos y era de dentro del (sic) una Camioneta Mitsubhishi (sic), Nativa, color roja, con franjas doradas, luego procedimos a radiar lo sucedido, y el Mitsubishi Nativa, emprendió la fuga hacia los lados de San Miguel ..., los sujetos que se encontraban dentro del vehículo responden al nombre de PABLO ANTONIO MURES LOAIZA, alias PAPA PIO, ANGEL SAMUDIO, RICARDO MORALES, ERNESTO MARCEL REBELLO..."

La instrucción sumarial revela que estamos frente a dos eventos. En el primero se habla de una Mitsubishi Nativa color roja y los implicados en este caso son PABLO MURES LOAIZA (PAPA PIO), ANGEL DENVER SAMUDIO SALAZAR (KILIN), RICARDO MORALES y ERNESTO MARCEL REBELLO, en esta ocasión el afectado queda lesionado, pero no muere. En el segundo evento se habla de un Toyota Tercel color verde y los señalados en esta vez son LORENZO SILVANO CARRASQUILLA (PERRY), HARMODIO BELIS BALLESTEROS (MOYO) y ANGEL DENVER SAMUDIO SALAZAR (KILIN) y en este hecho el afectado si muere.

Cabe señalar que en ambas ocasiones se repite el nombre de ANGEL DENVER SAMUDIO SALAZAR, alias (KILIN), el cual es señalado directamente por la esposa del occiso.

En el escrito de apelación el abogado defensor pareciera no darse cuenta de que se trata de otro evento en el cual su representado fue señalado como la persona que ultimó al señor ALBERTO CUESTA.

El licenciado recurrente, cita fallos de la Sala de lo Penal con respecto a las solicitudes de fianza a favor de MURES LOAIZA y MARCEL REVELLO, las cuales fueron resueltas de manera favorable, fueron concedidas porque se trataba de delito de homicidio en grado de tentativa, pero en este caso estamos frente a otro momento con otro resultado; se trata de delito de homicidio porque en autos esta comprobada la muerte de ALBERTO CUESTA y uno de los señalados como autor del delito de homicidio es su representado ANGEL DENVER SAMUDIO SALAZAR.

La Corte ha sostenido en innumerables ocasiones que en las decisiones relativas a fianza de excarcelación no es viable incursionar en análisis relativo a la culpabilidad que pudiese caberle al sujeto sometido a investigación. Sin embargo, resulta necesario que el Tribunal de la causa o el ad-quem, según sea el caso, califique provisionalmente el sumario a fin de determinar si el hecho punible de que se trata admite la concesión del derecho de libertad corporal caucionada. En ese sentido el tribunal determinó "que la conducta asta ahora investigada, se puede calificar provisionalmente, a efectos de resolver la solicitud de fianza, como Homicidio doloso agravado,...". Agrega que "Conforme al derecho excarcelatorio patrio, los imputados con delitos que la ley penal sanciona como pena mínima de cinco años de prisión no pueden gozar de dicho beneficio, al tenor del artículo 2181 del Código Judicial".

La Sala comparte plenamente los argumentos expuestos por el Tribunal de la causa en la resolución impugnada. Ciertamente en el caso sub-júdice concurren los presupuesto requeridos para sustentar la detención preventiva decretada contra ANGEL DENVER SAMUDIO SALAZAR, puesto que lo vinculan con la muerte de ALBERTO CUESTA ESPINOZA, cuyo deceso aparece indiscutiblemente demostrado en autos a través de los medios probatorios pertinentes, tales como la diligencia de inspección ocular, reconocimiento de un cadáver (fojas 171 y reverso), el Informe de Necropsia de la División de Delitos contra la vida y la Integridad Personal de la Policía Técnica Judicial (fojas 199), y con las declaraciones de la esposa del occiso (fojas 181-186) que dan fe del lamentable acontecimiento.

El delito de homicidio doloso tiene previsto como pena mínima de cinco (5) años de prisión. Ello, de conformidad con el artículo 2181 del Código Judicial, que establece entre otras cosas, que los delitos sancionados por la Ley Penal con pena mínima de cinco (5) años de prisión están excluídos del derecho de excarcelación, justifica la decisión expedida por el Tribunal Superior del Tercer

Distrito Judicial, al denegar la solicitud interpuesta en la resolución recurrida.

Por tal razón, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes el auto de 17 de marzo de 2000, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUSTITUCIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR A FAVOR DE EDGAR YOVANI VILLAREAL DE LEÓN, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE AGAPITO NÚÑEZ CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Micaela Morales Miranda, defensora de oficio de Edgar Jovany Villareal De León, formalizó recurso de apelación contra el auto calendado 13 de abril de 2000, proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, mediante el cual denegó la solicitud de reemplazar la detención preventiva por otra medida cuatelar formulada a favor de su defendido, sindicado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Agapito Núñez Castillo.

Del libelo de apelación se desprende que la recurrente solicita que se sustituya la detención preventiva por otra medida cautelar, toda vez que su patrocinado es analfabeta y epiléptico, por lo que no se le puede brindar la atención médica que necesita, además no existe el peligro de que su defendido intente evadir la justicia penal (fs. 20-22).

Conocidos los argumentos de la apelante, la sala pasa a decidir la alzada, sólo sobre los aspectos objetados en el escrito de apelación, de conformidad con el artículo 2428 del Código Judicial.

El tribunal de la causa, al momento de tomar su decisión, se basó en el hecho de que no se cumple con el presupuesto del artículo 2147-D del Código Judicial, toda vez que los exámenes médicos practicados a Villarreal por la forense Silvia de Blandel revelaron "que el imputado no se encuentra en grave estado de salud, que no le permita continuar recluído (sic) en el centro penitenciario" (f. 13). El a-quo también manifestó que existen graves indicios de responsabilidad penal (fomus boni iuris), que vinculan a Villarreal en la comisión del delito, por lo que existe "el peligro de fuga del imputado" o periculum in mora (fs. 10-16).

La Corte disiente de los argumentos que expone la recurrente y comparte la decisión adoptada por el a-quo, ya que en autos no se encuentra acreditado que la enfermedad que padece Villarreal sea de gravedad que le imposibilite continuar en el centro penitenciario, sobre todo, cuando todavía se encuentra en la etapa de calificación el sumario instruido por la muerte de Agapito Núñez Castillo y en el cual está presuntamente involucrado Villarreal.

Aunado a lo anterior, La Corte en reciente pronunciamiento señaló "que entre las finalidades de las medidas cautelares está la de asegurar la recepción de la prueba, garantizar el desarrollo del proceso y la comparecencia del imputado al mismo, para lograr una aplicación efectiva del ius puniendi, si es de mérito" (Sentencia de 3 de mayo de 2000). En el caso que nos ocupa, la detención preventiva resultó ser la medida cautelar mas adecuada a imponer al posible autor del delito de homicidio, precisamente para asegurar su comparecencia al proceso. Así las cosas, no es posible reemplazar la detención preventiva por otra medida cautelar, siempre que no se incorporen al expediente nuevos elementos de convicción que permitan variar la situación procesal de Villarreal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto fechado 13 de abril de 2000, mediante el cual el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá denegó la solicitud de reemplazar de detención preventiva por otra medida cautelar a favor de Edgar Jovany Villarreal De León, sindicado por la supuesta comisión del delito de homicidio cometido en detrimento de Agapito Núñez Castillo.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE PETER BYRNE, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE MAXIM CONROY. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de recurso de apelación contra la resolución de 29 de junio de 2000, dictado por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, medio de impugnación que presentara la defensa técnica de Peter Anthony Byrne, sindicado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Maxim Conroy.

Básicamente, la recurrente solicita que se modifique la medida cautelar impuesta por el a-quo, en el sentido que le concedan a su patrocinado permanezca recluido en el apartamento N° 20, Torre Ebelle I, ubicada en la Urbanización Marbella de la ciudad de Panamá (f. 29, cuaderno de medida cautelar).

La resolución atacada determinó mantener la medida cautelar de internamiento hospitalario impuesta al imputado durante la instrucción sumarial, toda vez que "presenta un trastorno mental que ante cualquier situación que lo altere puede provocar crisis ..." (F. 23. Cuaderno de medida cautelar).

Es necesario advertir que por ocasión del recurso de apelación presentado por la funcionaria de instrucción contra el auto proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que sobreseía definitivamente a Byrne, esta Sala Penal de la Corte Suprema , mediante sentencia de 27 de julio de 2000, revocó esa decisión y abrió causa criminal contra Byrne, por cuanto que, entre otras consideraciones, consideró que es imputable del hecho que se le incrimina, y en esa misma resolución, la Sala Penal resolvió ordenar la inmediata detención preventiva de Byrne.

Por lo expuesto, la Corte es del criterio que carece de objeto dirimir una sustitución de medida cautelar distinta a la detención preventiva, ya que, mediante resolución fundada, esta Superioridad decidió la detención preventiva de Byrne.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DEJA SIN EFECTO la resolución de 29 de junio de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y ORDENA el cumplimiento de la medida cautelar consistente en la detención preventiva de Peter Anthony Byrne.

Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN EN VIRTUD DE DENUNCIA PENAL INTERPUESTA POR ROBERTO GARCÍA ALONSO, POR LA COMISIÓN DE HECHOS ARBITRARIOS EN LOS QUE ESTÁ PRESUNTAMENTE INVOLUCRADO ALEJANDRO MONCADA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su mérito legal, el Procurador General de la Nación ha enviado a la Sala Penal de la Corte Suprema las sumarias iniciadas en virtud de denuncia penal interpuesta por Roberto García Alonso, para que se investige la presunta comisión de hechos arbitrarios cometidos por funcionarios de la Policía Técnica Judicial y en los que está presuntamente involucrado Alejandro Moncada Carvajal.

Mediante vista fiscal No. 37 de 9 de junio de 2000, el Procurador solicitó a esta Corporación de Justicia que "como es un hecho público y notorio que el Licenciado Moncada ya no ocupa la posición de Director de esa entidad investigativa, por haber sido destituido del cargo mediante decreto No. 695-2000 del 25 de abril del año en curso" ..., "la competencia para conocer del sumario sub júdice varía sustancialmente, por cuanto ya no le corresponde a vuestra Sala pronunciarse sobre el fondo de los hechos imputados, sino a los Tribunales del Circuito de Panamá" (f. 373).

En efecto, resulta ser un hecho público y notorio que Alejandro Moncada no es Director de la Policía Técnica Judicial, por lo que la Sala Penal carece de competencia para resolver el presente negocio penal. En consecuencia, lo procedente es acceder a la solicitud del Procurador General de la Nación, en el sentido de inhibirse del conocimiento del proceso y remitirlo a los jueces de circuito del Distrito de Panamá.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE de conocer el presente proceso penal y DECLINA el conocimiento del mismo al Juzgado de Circuito del Distrito de Panamá en turno.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL

JULIO DE 2000

CONTENCIOSO DE INTERPRETACIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS ALBERTO PALACIOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL ALCANCE Y SENTIDO DEL ACTO CONTENIDO EN EL OFICIO Q-166 DE 1° DE DICIEMBRE DE 1999, SUSCRITO POR LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE LA SEÑORA MIRLO ERIKA GUERRA LONDOÑO. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Luis Alberto Palacios, ha interpuesto demanda contencioso de interpretación prejudicial, en representación de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para que la Sala se pronuncie sobre el alcance y sentido del acto contenido en el Oficio Q-166 de 1 de diciembre de 1999, suscrito por la Procuradora de la Administración, por el cual se solicita el pago del Décimo Tercer Mes de la señora MIRLO ERIKA GUERRA LONDOÑO.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los presupuestos procesales necesarios para que pueda ser admitida.

Observa esta Corporación de Justicia, que la demanda incoada, no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 11 del artículo 98 del Código Judicial que a la letra dice:

> **"Artículo 98. A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por acto, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan, o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionario públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.**
>
> **En consecuencia la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de administrativa de lo siguiente:**
> **...**
> **11. De la interpretación prejudicial acerca del alcance y sentido de los actos administrativos cuando la autoridad judicial encargada de decidir un proceso o la administrativa encargada de su ejecución, lo solicite de oficio antes de resolver el fondo del negocio o de ejecutar el acto según corresponda." (El resaltado del Ponente)**

El recurrente pretende que la Sala Tercera se pronuncie acerca del sentido y alcance de una mera opinión como es el Oficio Q-166 de 1° de diciembre de 1999, suscrito por la Procuradora de la Administración, cuando dicho acto no constituye un acto administrativo.

En importante aclarar, que el oficio supra citado constituye una simple opinión de la Procuradora, en atención a su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consignada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial. En tanto que, el acto administrativo es "La manifestación unilateral de la voluntad administrativa, a través de cualquier rama del poder público, o de los particulares, que tiene por finalidad crear, modificar o extinguir una situación jurídica". (PENAGOS, Gustavo; El Acto Administrativo; quinta edición; Ediciones Librería del Profesional; 1992)

El artículo 98, en su numeral 11 establece claramente, que la demanda contencioso administrativa de interpretación procede contra actos administrativos.

Los presupuesto procesales del Contencioso de Interpretación son:

1. Debe tratarse de un acto administrativo que requiere interpretación y acompañarlo con la demanda.

2. Sólo están legitimados activamente para solicitar la interpretación prejudicial del acto administrativo, la autoridad judicial encargada de decidir un proceso en la que debe aplicar dicho acto administrativo o la autoridad administrativa encargada de la ejecución del acto administrativo.

3. La solicitud debe tener como objetivo la determinación del alcance y el sentido de un acto administrativo.

5. Debe tratarse de un acto administrativo confuso, oscuro o de dudosa interpretación, ya sea para decidir el caso judicial o para ejecutar el acto administrativo.

En atención al defecto arriba señalado, no queda otra alternativa que negarle curso legal a la presente demanda.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de interpretación prejudicial promovida por el Licdo. Luis Alberto Palacios, en representación de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PETICION DE PRONUNCIAMIENTO, INTERPUESTO POR LA LCDA. LARISSA LANDAU, EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA VIABILIDAD JURÍDICA DEL CONTRATO N°98-93 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y EL ARQUITECTO GUILLERMO RODRIGUEZ, PARA LA INSPECCIÓN DE LA ADICIÓN Y REFORMAS DE LOS EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y BIBLIOTECA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CERCA DE CICLÓN PARA EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Lcda. Larissa Landau, actuando en representación de la Contraloría General de la República, ha presentado petición de pronunciamiento, a fin de que la Sala se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del Contrato N°98-23 celebrado entre la Universidad de Panamá y el Arquitecto GUILLERMO RODRIGUEZ, para la Inspección de la Adición y Reformas de los Edificios de Administración y Biblioteca, Suministro e Instalación de la Cerca de Ciclón para el Centro Regional Universitario de Los Santos.

La solicitud de pronunciamiento de la procedencia del refrendo del contrato, según quien recurre, obedece a que el contratista labora como Profesor en la Universidad de Panamá a tiempo parcial y está contratando sus servicios profesionales con la misma entidad, contraviniendo lo establecido en el Artículo 304 de la Constitución Nacional y el artículo 174 de la Ley de Presupuesto para el año 1998, que en su texto expresan:

Constitución Nacional:

"Artículo 304: Los servidores públicos no podrán celebrar por sí mismos o por interpuestas personas, contratos con la entidad u organismo en que trabajan cuando éstos sean lucrativos y de carácter ajeno al servicio que prestan."

Ley N°44 de 24 de diciembre de 1997:

"Artículo 174: Honorarios. Se podrá cargar a esta partida la contratación de funcionarios públicos, cuando éstos obtengan licencia sin sueldo en la institución donde laboran y los servicios sean prestados a una institución distinta a la que concede la licencia."

La acción incoda fue admitida en providencia de 20 de mayo de 1999, y mediante la misma se le corrió traslado al Rector de la Universidad de Panamá y la Procuradora de la Administración.

I. Contestación de la Universidad de Panamá y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

La Universidad de Panamá, a través de su apoderado legal especial, el Lcdo. Virgilio Vásquez Pinto, contestó la petición de pronunciamiento sobre la viabilidad de un acto administrativo de la Universidad de Panamá. Sostiene el Lcdo. Vásquez Pinto, que el señor Guillermo Rodríguez labora como Profesor en la Universidad de Panamá a tiempo parcial y también señala que la celebración del contrato no contraviene el artículo 304 de la Constitución Nacional, toda vez que no es un contrato lucrativo que es el que produce utilidad o ganancia, sino que se trata de un contrato de servicios profesionales del cual se obtienen honorarios profesionales. En cuanto a la violación que se alega al artículo 174 de la Ley de Presupuesto, se argumenta que no se refiere al asunto controvertido, porque trata de la prohibición de nombrar personal interno; a su juicio, el que se refiere al tema es el artículo 175, pero no es aplicable al caso que nos ocupa. Según el Lcdo. Vásquez Pinto, el artículo 175 es inaplicable al contrato de servicios profesionales y lo que se debe aplicar es la regla de aplicación e interpretación de la Ley, contenida en el artículo 12 del Código Civil, según el cual cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se preferirá aquélla. Finalmente aclara que el artículo 174 cuando se refiere a "funcionarios públicos" se refiere a los de tiempo completo y no a los profesores de tiempo parcial como lo es el profesor Guillermo Rodríguez.

Mediante la Vista Fiscal N° 397 de 26 de agosto de 1999, la Procuradora de la Administración emitió concepto con relación a la acción impetreda. A criterio de la Procuradora de la Administración, el Contrato N° 98-23, por el cual la Universidad de Panamá conviene celebrar contrato de Servicios Profesionales con el Arquitecto Guillermo Rodríguez para que efectuara la inspección completa de la obra en la construcción denominada: Adición y Reformas a los Edificios de Administración y Biblioteca, Suministro e Instalación de Cerca de Ciclón para el Centro Regional de Los Santos", no es lucrativo, dado que no genera una utilidad o ganancia producto de una inversión monetaria y, por otro lado, la labor de inspección que allí se contempla, sí está vinculada con la actividad docente que brinda el Arquitecto Guillermo Rodríguez. A ello añade que el señor Rodríguez, es profesor de tiempo parcial en el Centro Regional Universitario de Los Santos, y a su criterio tiene la prerrogativa enunciada en el numeral 1 y 7 del artículo 845 del Código Administrativo, consistente en que los empleados públicos y administrativos podrán ser nombrados profesores en los establecimientos de instrucción pública y de igual modo puede un individuo desempeñar dos o más, siempre que no haya inconveniente en la acumulación de funciones, respectivamente.

II. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala procede a pronunciarse con respecto a la solicitud formulada.

Como se expuso en líneas precedentes, el caso que ocupa a esta Sala consiste en una petición de pronunciamiento de la procedencia del refrendo del Contrato N°98-23 que remite la Universidad de Panamá para su refrendo en la Contraloría General, dado que el contratista labora como Profesor de la Universidad de Panamá a tiempo parcial y está contratando sus servicios profesionales con la misma entidad, contraviniendo lo establecido en el artículo 304 de la Constitución Nacional y el artículo 174 de la Ley de Presupuesto para el año 1998.

En cuanto al artículo 304 de la Constitución Nacional, advierte la Sala que prohíbe de manera expresa la posibilidad de que un servidor público celebre contratos con la institución donde prestan servicios, pero para que ello se configure según lo allí expuesto, se requiere que el contrato tenga un fin lucrativo y sea de carácter ajeno al servicio que presta. La conjunción "y" prevista en la norma sugiere de la convergencia de ambos supuestos.

A juicio de la Sala ninguno de los supuestos señalados en la disposición constitucional en referencia, se aprecia en el contrato celebrado entre la Universidad de Panamá y el profesor Guillermo Rodríguez. Tal como lo plantea la Procuradora de la Administración, el Contrato N°98-23, no es lucrativo puesto que no genera ganancia alguna. El Diccionario Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, define lucrativo como "capaz de producir utilidad material", también define utilidad como el "provecho material" (Osorio Manuel, Editorial Eliasta, 23, edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de la Cueva, Argentina, 1996, págs. 588 y 1006).

Es evidente, en razón de lo antes anotado, que no estamos ante un contrato lucrativo puesto que el lucro es el provecho que se saca de una cosa, usualmente de una inversión monetaria. Estamos en efecto, ante un contrato de servicios profesionales, que por lo general requiere de conocimientos o destreza en el ejercicio de una profesión, y como contraprestación de los servicios prestados, se perciben honorarios profesionales.

En cuanto a la prohibición que se impone a los funcionarios públicos de celebrar contratos con la entidad u organismo en que trabajan cuando sean de carácter ajeno al servicio que prestan también prevista en el artículo 304 de la Constitución Nacional, la Sala es del criterio que no es el caso del señor Guillermo Rodríguez, toda vez que a foja 20 del expediente se incorpora copia de la certificación expedida por la Directora de Personal de la Universidad de Panamá, en la que hace constar que el profesor Rodríguez labora en el C.R.U. de Azuero como T.P., y, de igual manera consta a foja 26, que es profesor a tiempo parcial en la Escuela de Arquitectura, por lo que es evidente que el contrato de inspección de obra ya enunciada, no es de carácter ajeno al servicio que presta. Se desestiman estos cargos.

Finalmente, con respecto a la violación que a juicio de quien recurre se produce al artículo 174 de la Ley N°44 de 24 de diciembre de 1997, por la cual se dicta la Ley de Presupuesto General para la Vigencia Fiscal de 1998, a juicio de la Sala es claro que hace referencia a los funcionarios públicos de tiempo completo, y el profesor Guillermo Rodríguez, como se dejó anotado en líneas precedentes, es un funcionario eventual que imparte doce horas semanales de enseñanza en el Centro Regional Universitario de Los Santos, por tanto puede contratar sus servicios profesionales con la entidad que trabaja en los términos ya señalados. No procede este último cargo.

Es clara entonces, a criterio de la Sala, la viabilidad del Contrato N°98-23, por tanto procede el refrendo del mismo por parte de la Contraloría General.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA VIABLE el Refrendo del Contrato N°98-23 celebrado entre la Universidad de Panamá y el profesor GUILLERMO RODRIGUEZ, para la inspección de la adición y reformas de los edificios de administración y Biblioteca, suministro

e instalación de la cerca de ciclón para el Centro Regional Universitario de Los Santos.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PETICION DE INTERPRETACION Y APRECIACION DE VALIDEZ, INTERPUESTA POR EL LCDO. JORGE AGUILERA EN REPRESENTACIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE PREJUDICIALMENTE SOBRE EL CONTENIDO DEL NUMERAL 48 DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO MUNICIPAL N°136 DE 19 DE AGOSTO DE 1996 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N°23, 135 DE 2 DE OCTUBRE DE 1996, SOBRE EL RÉGIMEN MUNICIPAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Jorge Aguilera, actuando en representación del Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, ha presentado petición de interpretación y apreciación de validez, a fin de que la Sala se pronuncie prejudicialmente sobre el contenido del numeral 48 del Artículo Segundo del Acuerdo Municipal N°136 de 29 de agosto de 1996 publicado en la Gaceta Oficial N° 23,135 de 2 de octubre de 1996, sobre Régimen Municipal.

La solicitud de interpretación y apreciación de validez de la referida norma del Acuerdo 136 se basa en los siguientes hechos:

> PRIMERO: Según el artículo 38 de la Ley 106 de octubre de 1973, los Consejos Municipales dictarán sus disposiciones por medio de Acuerdos las cuales serán de forzoso cumplimiento en el Distrito respectivo.
>
> SEGUNDO: El artículo 75 en su numeral 5 establece que son gravables por los Municipios los negocios de aparatos de juegos mecánicos o electrónicos permitidos y de venta automática de productos.
>
> TERCERO: El Acuerdo 136 de 1996 en su Artículo Segundo numeral 48 desarrollada (sic) esta actividad de aparatos de Juegos Electrónicos y Similares (Renta 1125-4800) estableciendo dentro de esta renta entran los Pin-Ball, atari, video juego, o cualquier o tipo de juego electrónico y similar.
>
> CUARTO: Existen contribuyente (sic) que realizan dichas actividades comerciales y solicitan la exoneración del pago de impuesto basándose que pagan en la Junta de Control de Juegos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, por la explotación de máquinas las cuales son las denominadas tipo B y C en la resolución N° 028 de 18 de diciembre de 1995.
>
> QUINTO: La resolución N°028 establece en su artículo 2 que la explotación, operación, importación, ensamble y manufactura de toda máquina o aparato, manual, mecánicoelectrónico o electrónico, que accionado por fichas, monedas "toquen", papel moneda etc... ejecute juegos de azar de cualquier naturaleza o descripción que produzcan o den como resultado final al usurario la pérdida o ganancia de dinero, quedan bajo el control, supervisión y autorización previa de

la Junta de Control de Juegos.

A su vez el artículo 6 establece que se entiende como una máquina o aparato de juego de azar, cualquier unidad mecanismo o sistema estructuralmente construido o integrado por piezas mecánicas, manuales o electrónicas con el cual, gracias a la inserción de una ficha, toquen, moneda o papel moneda, etc...pueda activarse o sea puesta en funcionamiento, la ejecución o realización de un juego de azar o de cualquier índole inminentemente aleatorio, con la finalidad de producir un resultado final que implique para el usuario la pérdida o la ganancia de dinero.

Por otro lado el artículo 8 define lo que se entiende por las máquinas de tipo B y C.

Tipo B: Son aquellas máquinas que sólo registran los créditos a favor del usuario, por medio de dispositivos visuales, electrónicos, electromecánicas o magnéticos que indican la cantidad de dinero o premio ganado en un boleto generado por la máquina o que registra la acumulación o reducción de créditos a través del empleo de elementos magnéticos (tarjetas) o eletromagnéticos, que servirán en cualquiera de estos casos par (sic) su redención en la caja del establecimiento operador. Estas máquinas podrán tener una apuesta máxima de B/.3.00 por golpe o jugada total y su premio mayor no será superior a B/.5,000.00.

Tipo C: Son aquellas máquinas o aparatos con características y funcionamiento similares a los descritos para las máquinas tipo "B" pero cuya apuesta máxima no podrá ser superior a B/.1.00 por golpe o jugada total y cuyo premio mayor no será superior a B./200.00."

Quien recurre expone como consideraciones del caso, que la Tesorería Municipal del Municipio de Panamá, con base jurídica en la Ley N° 106 de 1973 y en el Acuerdo Municipal N°136 de 1996, que son de mayor fuerza legal que una Resolución, les cobra como impuesto a los contribuyentes que se dedican o ejercen la actividad comercial enmarcada en el numeral 48, del Artículo Segundo del mencionado acuerdo, por cada máquina instalada una suma x. Las máquinas a las cuales el Municipio de Panamá les cobra un impuesto son las denominadas tipo B y C, mismas que la Junta de Control de Juegos les cobra por explotación.

Ante lo expuesto, el Lcdo. Aguilera opina que si bien es cierto que la Ley 106 de 1973 establece en su artículo 79, la prohibición de gravar con impuesto, derechos y tasa municipales las cosas, objetos y servicios ya gravados por la Nación, no es menos cierto que esta norma establece que lo que ha sido previamente gravado por la Nación no podrá ser gravado por los Municipios, pero en el caso que nos ocupa, el impuesto gravado por parte del Municipio a los contribuyentes que se dedican a esa actividad es anterior, por lo que la referida norma no puede ser aplicada.

La solicitud de interpretación e interpretación de validez fue admitida mediante providencia de primero de diciembre de 1998, y se hizo traslado de la misma al Presidente del Consejo Municipal de Panamá y a la Procuradora de la Administración.

I. Contestación de la petición de interpretación y apreciación de validez presentada por el Presidente del Consejo Municipal de Panamá y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

En Nota N° CMPP/250/98 de 22 de diciembre de 1998, el Presidente del Consejo Municipal de Panamá, contestó la petición de interpretación y apreciación de validez presentada por el Lcdo. Jorge Aguilera en representación del Lcdo. Jorge Sáenz, Tesorero Municipal contra el numeral 48 del artículo 2 del Acuerdo N°136 de 29 de agosto de 1996. El Presidente del Consejo Municipal de Panamá

señala que no observa ningún impedimento para que el Tesorero Municipal aplique el contenido de la norma cuestionada a aquellas empresas que se dediquen a la actividad descrita en el numeral 48 del artículo 2 del Acuerdo 136 de 29 de agosto de 1996, toda vez que la aplicación del tributo municipal que se genera por la actividad allí descrita, es distinta a la aplicación del derecho que cobra la Junta de Control de Juegos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista Fiscal N°174 de 26 de abril de 1999, expresa que por mandato constitucional, la explotación de los juegos de suerte y azar, así como aquellas actividades que originen apuestas, sólo podrán ser efectuadas por el Estado y de conformidad con el artículo 1043 del Código Fiscal, ello será por conducto de la Junta de Control de Juegos, la cual funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda y Tesoro, integrado al actual Ministerio de Economía y Finanzas.

Según la Procuradora de la Administración, de conformidad con la legislación de orden nacional y las disposiciones jurídicas de carácter municipal, no debe confundirse el derecho que percibe la Junta de Control de Juegos para la explotación de los aparatos electrónicos, lo cual tiene incidencia directa sobre las máquinas y las operaciones que esas máquinas realiza, con el impuesto y/o contribución que percibe la Administración Municipal que recae sobre las actividades que ejercen los negocios que comercian o lucran con las máquinas electrónicas y las máquinas de ventas automáticas.

II. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites de la Ley, la pasa a resolver el asunto sometido a su consideración.

Se trata de una petición de interpretación y apreciación de validez a fin de que la Sala se pronuncie prejudicialmente sobre el contenido del numeral 49 del artículo segundo del Acuerdo Municipal N°136 de 29 de agosto de 1996, publicado en la Gaceta Oficial N° 23.135 de 2 de octubre de 1996, sobre Régimen Muncipal, y es del tenor siguiente:

> "ARTICULO SEGUNDO: Modificarse el Artículo Segundo del Acuerdo N° 124 de 9 de noviembre de 1993, el que quedará redactado de la siguiente forma:
> ...
> 48. APARATOS DE JUEGOS ELECTRONICOS Y SIMILARES (Renta 1125-48-00)
>
> a) Pin-Ball, atari, video juego o cualquier otro tipo de juegos electrónicos y similares pagarán por mes o fracción de mes B/.20.00 por cada máquina.

b) Caballitos o aparatos para niños, pagarán por mes o fracción de mes B/.5.00 por cada aparato instalado."

Quien recurre sostiene que las máquinas a las cuales el Municipio de Panamá les cobra un impuesto, son las denominadas tipo B y C, mismas que la Junta de Control de Juego les cobra por el derecho de explotación. Según su opinión, la situación planteada no se ajusta a lo previsto en el artículo 79 de la Ley 106 de 1973, que prohíbe gravar con impuesto, derechos y tasas municipales, lo que ya ha sido gravado por la Nación, toda vez que la norma claramente prevé "lo que ha sido gravado previamente", y en este caso el impuesto gravado por parte del Municipio a los contribuyentes que se dedican a esa actividad es anterior.

Antes de adentrarnos a conocer el asunto sometido a la consideración de esta Sala, es oportuno señalar que le asiste la razón a la Procuradora de la Administración cuando señala que la pretensión de apreciación de validez presentada por el Tesorero Municipal, no le es factible proponerla ya que carece de legitimación de conformidad con las disposiciones legales vigentes al momento en que se presentó la demanda. Ello es así, porque de conformidad a lo previsto

en el artículo 98 numeral 12 del Código Judicial, la Sala Tercera está facultada para conocer prejudicialmente sobre la validez de los actos administrativos que deberán servir de base a una decisión jurisdiccional, por consulta que al efecto formule la autoridad encargada de administrar justicia, y el Tesorero Municipal, evidentemente no es una autoridad encargada de administrar justicia. Por ello, la Sala sólo entra al conocimiento del proceso contencioso administrativo de interpretación, que según el numeral 11 de la misma disposición legal, tiene como objeto un pronunciamiento acerca del sentido y alcance de un acto administrativo, cuando la autoridad judicial encargada de decidir un proceso o la administrativa encargada de su ejecución, lo solicite de oficio antes de resolver el fondo del negocio o ejecutar el acto.

Luego del análisis de la petición impetrada dentro del proceso que nos ocupa, la Sala advierte que la aplicación del tributo municipal previsto en el numeral 48 del artículo Segundo del Acuerdo Municipal N°136 de 29 de agosto de 1996, es distinta a la aplicación del derecho que cobra la Junta de Control de Juegos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, a través de la Resolución N°028 de 18 de diciembre de 1995, toda vez que los hechos generadores son de distinta naturaleza.

Es cierto que por mandato constitucional, es al Estado a quien le corresponde la explotación de los juegos de suerte y azar y todas aquellas actividades que originen apuestas, y, ello es por conducto de la Junta de Control de Juegos, en forma directa o a través de terceros, tal como lo prevé el el Decreto Ley N°2 de 10 de febrero de 1998, "por medio del cual se reestructura la Junta de Control de Juegos, se le asignan funciones y se dictan otras disposiciones"(G.0.N°23,484 de 17 de febrero de 1998. También es igualmente cierto, que en virtud del ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida a la Junta de Control de Juegos, existe regulación que desarrolla esta materia, y entre ellas figura la Resolución N° N°028 de 18 de diciembre de 1995, "por la cual se expide un nuevo Reglamento para la operación de las máquinas electrónicas accionadas por monedas, papel moneda, fichas, tokens o sistema de crédito" (G.O. 22,948 de 10 de enero de 1996). No obstante, contrario a la inquietud del recurrente, del estudio de la resolución en referencia, claramente se aprecia que se trata de un pago del derecho que cobra el Estado, por "la operación" de cada máquina, hecho relacionado con la explotación de las mismas (Art. 17), y no se trata de un pago en razón de las actividades de esa naturaleza que ejercen ciertos negocios que lucran con las máquinas electrónicas y las máquinas de ventas automáticas de productos. El artículo 19 de la mencionada Resolución N°028, obliga a las empresas propietarias de las máquinas Tipo "B" y "C" antes descritas, a mantener un registro o tarjetario donde conste el movimiento "operacional" de cada máquina y el mismo podrá ser revisado, consultado o supervisado por la Junta de Control de Juegos.

Por otro lado, al adentrarse la Sala a la efera jurídica de carácter municipal relacionada con la actividad de suerte y azar, advierte que no debe perderse de vista que el fundamento legal para la expedición del Acuerdo N°136 de 29 de agosto de 1996, que establece un impuesto para los contribuyentes que ejercen la actividad comercial o lucrativa enmarcada en el numeral 48, del artículo segundo, relativo a los aparatos de juegos electrónicos y similares, identificados con la Renta N°1125-48-00, descansa en lo previsto en el artículo 75 numeral 3 de la Ley 106 de 1973, contenido en el Capítulo III, sobre "Los Impuestos y Contribuciones". En efecto, un lectura de la mencionada disposición legal, refleja claramente que permite gravar con impuestos y contribuciones los negocios de "aparatos de juegos mecánicos o electrónicos permitidos y de venta automática de productos".

La Tesorería Municipal, con fundamento en el artículo 75 numeral 3 de la Ley N°106 de 1973 y el numeral 48 del artículo segundo del Acuerdo N°136 de 1996, está facultada, para aforar a los contribuyentes que realizan la actividad de aparatos de juegos electrónicos y similares (Renta 1125-48-00).

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte

Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA prejudicialmente que el contenido del numeral 48 del artículo segundo del Acuerdo Municipal N°136 de 29 de agosto de 1996, es conforme con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 75 de la Ley 106 de 1973, y por lo tanto, el Tesorero Municipal deberá aplicar dicho tributo mientras que se mantengan en vigencia la disposición municipal y la legal antes mencionadas.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ELIZABETH MORENO TOROK EN REPRESENTACIÓN DE CARMEN DE VERGARA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 029 DE 7 DE FEBRERO DE 2000, SUSCRITA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada Elizabeth Moreno Torok en nombre y representación de CARMEN DE VERGARA, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución Administrativa N° 029 de 7 de febrero de 2000, suscrita por el Administrador General de la Región Interoceánica, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, para determinar si la misma cumple con los requisitos de procedibilidad que exige la ley, para que pueda se admitida.

Advierte, el suscrito que la presente demanda adolece de un defecto que impide darle curso legal a la misma.

Observa esta Superioridad que el actor no agotó la vía gubernativa, esto es así, ya que en la parte resolutiva de la Resolución 210-00 de 16 de mayo de 2000, por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración con apelación en subsidio (fs. 6 y 7), además de confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa N° 029 de 7 de febrero de 2000, le anuncia a la parte demandante que cuenta con el recurso de apelación, advirtiéndole que dispone de cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, para sustentar la alzada ante la Junta Directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica.

Como se ha podido colegir de la documentación que milita en el expediente, la parte interesada no prueba haber hecho uso del derecho de interponer el recurso de apelación, lo que se traduce a que no se agotó de manera efectiva la vía gubernativa, requisito indispensable para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, a tenor de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dice:

> "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo contencioso administrativo es necesario que se haya agotado la vía

> gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o de han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación."(Lo subrayado es nuestro)

La finalidad que persigue el agotamiento de la vía gubernativa, es darle a la Administración la oportunidad de corregir o enmendar sus propios errores, es decir, su objetivo es que la propia Administración Pública pueda revocar el acto administrativo que afecte al administrado o le cause perjuicios.

En atención a la deficiencia indicada, quien sustancia no tiene otra alternativa que negarle curso legal a la demanda instaurada, en atención a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que dice:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción."

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por la Licenciada Elizabeth Moreno Torok en representación de CARMEN DE VERGARA.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA BARRANCOS Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE HENRY PINO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ORDEN CONTENIDA EN LA NOTA DE 10 DE MARZO DEL 2000, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE OPERACIONES MARÍTIMAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Barrancos y Asociados, actuando en nombre y representación de HENRY PINO, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la orden contenida en la nota de 10 de marzo del 2000, emitida por el Director de Operaciones Marítimas de la Autoridad del Canal de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

Observa quien suscribe que el acto impugnado lo constituye la Nota de 10 de marzo de 2000, emitida por el Director de Operaciones Marítimas de la Autoridad del Canal de Panamá, mediante la cual se prescinde de los servicios prestados por el capitán Henry Pino como Práctico del Canal de Panamá basado en el hecho de que las jubilaciones proyectadas para fin del año 1999 no se llevaron a cabo.

El Magistrado considera que la presente demanda es inadmisible por las razones que se explican a continuación. Tal como lo dispone el artículo 81 de la

Ley 19 de 11 de junio de 1997 (Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá), la Autoridad está sujeta a un régimen laboral especial, por lo que a los funcionarios, a los trabajadores de confianza, a los trabajadores y a las organizaciones sindicales de la Autoridad, no les serán aplicables las disposiciones del Código de Trabajo y del Código Administrativo, sino las disposiciones de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, los reglamentos y las convenciones colectivas. En este sentido cabe señalar que la Ley Orgánica prevé el procedimiento para la tramitación de quejas establecida en la convención colectiva, como la vía adecuada para resolver reclamos de tipo laboral. Por lo tanto, el recurrente no debió, mediante una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, efectuar este tipo de reclamos por no ser la vía adecuada, sino de que debió recurrir al procedimiento para la reclamación de quejas para el reclamo de su pretensión.

Vale destacar que el arbitraje constituye la última instancia administrativa de la controversia laboral, según establece el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, y que sólo podrán ser recurridos ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, los laudos arbitrales dentro del término de 30 días hábiles, contado desde la notificación del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la citada ley.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Barrancos y Asociados, actuando en nombre y representación de HENRY PINO, para que se declare nulo, por ilegal, el contenido de la nota de 10 de marzo del 2000, emitida por el Director de Operaciones Marítimas de la Autoridad del Canal de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, EN REPRESENTACIÓN DE BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN DRP N° 93-98 DE 4 DE MARZO DE 1998 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Icaza, González-Ruíz & Alemán, actuando en representación de BANK OF CREDIT COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal la Resolución DRP N° 93-98 de 4 de marzo de 1998, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado se resuelve ordenar la cautelación y consecuente puesta fuera de comercio y a disposición de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, de los fondos depositados en el Banco Nacional de Panamá a nombre del Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. Panamá (BCCI-Panamá), cuenta N°231-04, Depósitos a Plazo de Bancos Locales, hasta la concurrencia de siete millones seiscientos tres mil seiscientos seis balboas con treinta y cuatro centésimos (B/7,603,606.34).

Ante el recurso de reconsideración presentado contra la Resolución N°93-98 de 4 de marzo de 1998, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial confirma su decisión con la Resolución DRPN°298-98 de 16 de julio de 1998, que es visible de fojas 7 a 12 del expediente.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente en petición para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal, la Resolución N° 93-98 de 4 de marzo de 1998, expedida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, se destaca que la resolución demandada se dictó partiendo de la falsa premisa de que el Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd, Panamá, había incurrido en irregularidades, a través de su Gerente General, Amjad Awan, con respecto a supuestos depósitos efectuados en el Banco por el señor Manuel Antonio Noriega, "quien utilizó indebidamente los fondos del Estado panameño para beneficio propio", cuando en la realidad los fondos cautelados pertenecen a Bank of Credit and Commerce (Overseas) Ltd., de Gran Caimán. Ello, a criterio de quien recurre, hace totalmente improcedente la cautelación decretada sobre esos fondos.

También se afirma que a la fecha de la presentación del recurso de reconsideración, el 26 de mayo de 1998, no se había ordenado el inicio de los trámites para demandar y establecer la responsabilidad patrimonial que pudiera caberle a esa entidad bancaria, por lo que había transcurrido con creces el término legal de seis (6) días, desde la fecha del acto demandado, para haberse procedido a formalizar la demanda o a formular los cargos en contra de la persona que es objeto de una medida precautoria.

Como disposiciones legales que se invocan como infringidas, figuran los artículos 8 y 4 inciso 2do. del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990, y el numeral 1° del artículo 537 del Código Judicial, que en su texto expresan:

> "ARTICULO 8: Si los Magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial consideraren que hay razones fundadas para ello, dictarán resolución motivada en donde dejarán constancia de la misma y ordenarán el inicio del trámite para determinar y establecer esa responsabilidad. Esta resolución debe cumplir además con los requisitos exigidos para el Informe de antecedentes."
>
> "ARTICULO 4: Desde el momento en que se iniciare el procedimiento indicado, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial está facultada para tomar, en cualquier tiempo y cuando a su juicio hubiere motivos para temer que se hagan ilusorias las pretensiones del Estado, todas las medidas precautorias que estime convenientes, sobretodo o parte del sujeto llamado a responder patrimonialmente. También puede ser objeto de las acciones precautorias, todos aquellos bienes que aunque no figuren como parte del patrimonio del sujeto, respecto de ellos existan indicios de los cuales se deduzca que tales bienes proviene directa o indirectamente de bienes o valores indebidamente sustraidos del patrimonio del Estado. Las personas distintas del sujeto llamado a responder patrimonialmente que resulten afectadas por la medidas precautorias mencionadas, pueden hacerse parte en el procedimiento señalado, a fin de que tengan oportunidad de hacer valer los derechos legítimos que pudiesen alegar, si ese fuere el caso. Igualmente, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial los puede considerar como sujetos llamados a responder patrimonialmente dentro del procedimiento que se indica en los artículos 2 y 3 anteriores.
>
> Con las limitaciones y salvedades que se han indicado en lo que resulten aplicables, se seguirán las reglas del Código Judicial."

> "ARTICULO 537: También se levantará el secuestro si, a partir del día en que se llevó a cabo el depósito de la cosa secuestrada, o del momento en que entró en Diario del Registro Público, si fuere inmueble o mueble susceptible de inscripción o desde que se comunicó la orden de retención al depositario si fuere suma de dinero, en los siguientes casos:
>
> 1. Cuando el demandante no presentare su demanda, dentro de los seis días siguientes a la fecha arriba expresada; o,..."

El artículo 8 del Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990, según la firma Icaza, González-Ruíz & Alemán, se violó de manera directa por omisión, pues, ordena de manera imperativa que los Magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, si consideran que hay razones fundadas para ello, dicten una Resolución motivada, dejando constancia de las razones y ordenando el inicio del trámite para delimitar y establecer la supuesta responsabilidad que puede caber a la persona que es objeto de una medida precautoria, y en este caso, los Magistrados pasaron por alto esa formalidad.

En cuanto al inciso 2° del artículo 4 del Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990, opina quien recurre que se violó de manera directa por omisión, puesto que ordena de manera imperativa que en materia de medidas precautorias se sigan las reglas del Código Judicial, cuyas reglas relacionadas con dichas medidas no han sido aplicadas.

Finalmente, se afirma que el numeral 1 del artículo 537 del Código Judicial, se violó de manera directa por omisión, toda vez que se dejó aplicar en este caso, al haber transcurrido con creces el plazo de seis días que dicha disposición establece como término para que dentro del mismo, se proceda a formalizar la demanda o a formular los cargos en contra de una persona que ha sido objeto de una medida precautoria y, en caso contrario, ordena que se levante dicha medida. En el caso bajo examen, según la parte actora transcurrió con creces ese plazo.

II. <u>El informe explicativo de conducta expedido por el Magistrado Sustanciador de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial</u>.

En Oficio N°1334-DRP-98-C-50 de 5 de octubre de 1998, el Magistrado Sustanciador de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, rindió el respectivo informe explicativo de conducta que es visible de fojas 27 a 36 del expediente.

En el informe se señala que el Contralor General de la República ordenó a la Dirección de Auditoría General, a través de la Resolución N°176-95 de 15 de junio de 1995, la elaboración de un Informe de Auditoría relacionado con la apertura en Panamá o en el extranjero, de cuentas bancarias en las que aparecieran como titulares o con derecho a firma los señores Manuel Antonio Noriega, Felicidad Siero de Noriega, Lorena del Carmen Noriega Sieiro de Noriega, Sandra Iberia Noriega Sieiro y Thais Nefertiti Noriega Sieiro, así como la sociedad Lorsantha, S. A..

Iniciadas las investigaciones, según el informe, los funcionarios encargados solicitaron a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, con fundamento en lo previsto en el artículo 11 del Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990, la adopción de medidas precautorias sobre los bienes que pudieran tener Manuel Antonio Noriega y el Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. (BCCI-Panamá). En atención a la solicitud formulada, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, expidió la Resolución DRPN°93-98 de 4 de marzo de 1998, por la cual se ordenó la cautelación y consecuente puesta fuera de comercio y disposición de ese Tribunal, de los fondos depositados en el Banco Nacional de Panamá a nombre del Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. Panamá, (BCCI-Panamá), cuenta N°231-04, Depósitos a Plazo de Bancos Locales, hasta la concurrencia de siete millones seiscientos tres mil seis balboas con treinta y cuatro centésimos

(B/.7,603,606.34).

La medida adoptada por el Tribunal, fue debidamente comunicada al Gerente General del Banco Nacional de Panamá, mediante Oficio N°252-DRP-C-50 de 5 de marzo de 1998; al Juez Cuarto de Circuito de Panamá, Ramo Civil, Juez de la causa en el Proceso de Liquidación Forzosa del Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd., mediante el Oficio DRPN°254-C-50 de 9 de marzo de 1998; y al Liquidador Judicial del Bank of Credit and Commerce International (Overseas), Ltd., mediante el Oficio DRPNª263-C-50 de 10 de marzo de 1998.

También se señala que el 26 de mayo de 1998, la firma forense Icaza, Gonzaléz-Ruíz & Alemán, como apoderados especiales del Liquidador Oficial del Bank of Credit and Commerce International(Overseas) Ltd., promovió recurso de reconsideración contra la Resolución DRP N°93-98, basados en que los fondos cautelados no pertenecen al Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. Panamá (BCCI-Panamá), sino que son del Bank of Credit adn Commerce International (Overseas) Ltd. (Gran Caiman). También en el recurso presentado se sostuvo que hasta ese momento se había dictado la resolución ordenando el inicio de trámites para demandar y establecer la responsabilidad que pudiera caberle a su representada. Mediante Resolución DRPN°298-98 de 16 de julio de 1998, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial resolvió confirmar la Resolución DRPN°93-98 de 4 de marzo de 1998 y sostuvo que el recurrente no comprobó que los fondos que fueron cautelados son de su propiedad y además que no consta en el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en el cual se verificó el proceso de Liquidación Forzosa de esa entidad bancaria, que existieran depósitos de capital constituidos por parte del Bank of Credit and Commmerce International de Gran Caiman. Con respecto a la expedición de la Resolución de Reparos, que se refiere el artículo 8 del Decreto de Gabinete N° 36 de 1990, se aclara que en ese decreto se expresa por un lado, que se seguirán las normas del Código Judicial en lo que respecta a las medidas cautelares con ciertas salvedades y limitaciones, y por el otro lado, permite que en la etapa de investigación, en miras de proteger los intereses del Estado, solicite a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial la adopción de medidas cautelares sobre el patrimonio de las personas involucradas o sobre bienes respecto de los cuales existían indicios que provienen del Estado. Finalmente, se sostiene que las reglas del Código Judicial, en cuanto a medidas cautelares se refiere, serán aplicables en la jurisdicción patrimonial siempre que no contradigan las normas especiales previstas por la legislación vigente en esa materia, por lo que no puede aplicarse para el caso en estudio, lo referente al término de seis (6) días para la presentación de la demanda o la elaboración de la Resolución de Reparos.

III. La Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

Mediante la Vista Fiscal N° 499 de 14 de diciembre de 1998 que es visible de fojas 37 a 48 del expediente, la Procuradora de la Administración emitió concepto en relación con la demanda contencioso administrativa presentada contra la Resolución N° DRPN°93-98 de 4 de marzo de 1998, expedida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

La Procuradora de la Administración se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. A su juicio, las disposiciones jurídicas dispuestas en el Código Judicial, en materia de medidas cautelares, se aplican únicamente en el evento que el Decreto de Gabinete N° 36, específicamente su artículo 4, no disponga otra cosa. De ese modo advierte, con respecto a esa disposición, que no exige la preexistencia del Informe de Antecedentes o de la Resolución que determine la responsabilidad del sujeto o de los sujetos que se consideren responsables de la lesión patrimonial al Estado, y, sólo exige la existencia de indicios para la adopción de medidas cautelares; tiene, pues, rango de Ley de carácter especial por lo que su aplicación es preferente a aquello que está contenido en el Código de Procedimiento.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámite legales y frente al problema planteado, procede la Sala a resolver la presente controversia.

El acto demandado es la Resolución DRP N°93-98 de 4 de marzo de 1998, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, mediante la cual se resuelve ordenar la cautelación y consecuente puesta fuera de comercio y disposición de ese Tribunal, de los fondos depositados en el Banco Nacional de Panamá a nombre del Bank of Credit and Commerce International (Overseas), Ltd. Panamá (BCCI-Panamá), cuenta N°231-04, Depósitos a Plazo de Bancos Locales, hasta la concurrencia de siete millones seiscientos tres mil seiscientos seis balboas con treinta y cuatro centésimos (B/.7,603,606.34). Entre las consideraciones formuladas para la expedición del acto en mención, figura que mediante Memorando N° 333-98-DAG-DEAE de 4 de febrero de 1998, la Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República, solicitó a ese Tribunal la adopción de medidas cautelares sobre los bienes que pudiesen tener Manuel Antonio Noriega y el Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. Panamá (BCCI-Panamá), una vez fue iniciada la investigación sobre el uso de fondos provenientes del Estado (Fuerzas de Defensa y Ministerio de la Presidencia), depositados en cuentas bancarias de las personas antes mencionadas, durante el período del 19 de enero de 1982 al 31 de diciembre de 1988. Se destaca que la investigación determinó que en las irregularidades están vinculados Manuel Antonio Noriega, quien utilizó los fondos del Estado panameño para beneficio propio, y el Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd., Panamá (BCCI-Panamá), institución bancaria que participó directamente en la irregularidad, a través de su Gerente General, señor Amjad Awan.

Ante lo hechos derivados de la investigación, y en razón de lo previsto en el artículo 11 del Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990, que permite a ese Tribunal la adopción de cualquier medida cautelar, se procedió a ordenar la cautelación y consecuente puesta fuera de comercio y a disposición de ese Tribunal, de los fondos depositados en el Banco Nacional de Panamá a nombre del Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. Panamá, a raíz de la intervención a esa entidad bancaria decretada por el Juzgado Cuarto del Circuito, Ramo Civil.

Para resolver es oportuno señalar que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial se creo en la Contraloría General de la República, mediante el Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990, con jurisdicción en todo el territorio nacional, para la defensa de los legítimos intereses de la República. Para ello, según la parte motiva del Decreto en mención, se adoptan instrumentos legales, para que sin menoscabo de los derechos de defensa de los afectados, se proceda a determinar la responsabilidad patrimonial de todos aquellos que indebidamente se beneficiaron o permitieron el beneficio de terceros, con la disposición indebida de fondos, bienes y valores públicos, en detrimento del patrimonio del Estado. El artículo 2 del Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero 1990, además de facultar a los Magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial para decidir mediante resolución, previo cumplimiento del procedimiento establecido, sobre la responsabilidad patrimonial que frente al Estado recae sobre las personas, también las califica y expresamente las enuncia como es el caso de aquellas personas que les corresponde el manejo de bienes o fondos públicos por su función de fiscalización; por tener acceso a bienes o fondos públicos; por aprovecharse indebidamente de ellos en beneficio propio o de un tercero; por haber recibido salarios o emolumentos públicos, sin haber prestado el servicio al Estado; por ser beneficiarios de pagos realizados por medio de fondos públicos y por haber adquirido títulos valores del Estado de modo indebido. En cuanto el procedimiento a seguir, se advierte que se inicia con un examen, auditoría e investigación por parte de la Contraloría General, luego de lo cual se preparará un Informe de Antecedentes que se presentará conjuntamente con las evidencias, ante la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a fin de que se proceda para lo que hubiere lugar. Según el artículo 4 del Decreto de Gabinete N°36, ello es sin perjuicio que desde el momento que se inicia el procedimiento por parte de la Contraloría General de la República, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial pueda tomar medidas precautorias, a

fin de que no se hagan ilusorias las pretensiones del Estado.

Ante el marco de referencia expuesto, la Sala advierte que en el presente caso la medida que tomó la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, como ya se expuso, tiene fundamento en la solicitud que efectuó la Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República a través del Memorandum N° 333-98-DAG-DEAE de 4 de febrero de 1998, que es visible de fojas 1470 a 1471 del expediente administrativo, como consecuencia de la investigación de los fondos provenientes del Estado (Fuerza de Defensa y Ministerio de la Presidencia) depositados en cuentas bancarias a nombre de Manuel Antonio Noriega en el Credit and Commerce International (BCCI) en Panamá y Londres, durante el período del 19 de enero de 1982 al 31 de diciembre de 1988. Según ese documento, en la revisión y análisis del período examinado, se determinó que: 1) las cuentas bancarias del General Manuel Antonio Noriega en el BCCI-Londres fueron acreditadas desde el BCCI-Panamá, por la suma de B/17,507,164.91 donde se incluyen fondos del Estado; 2) se determinó que la institución llamada Fuerzas de Defensa, realizó contratos de préstamo con el BCCI-Gran Caimán, dos de los cuales no fueron registrados en las cuentas manejadas por esa institución. Sin embargo, fueron canceladas por las Fuerzas de Defensa. Esas dos situaciones, según las investigaciones, ocasionaron una lesión patrimonial al Estado panameño por la suma de B/.7,603,606.34.

Al analizar las violaciones alegadas y los argumentos que las sustentan, la Sala concluye que no le asiste la razón a la firma recurrente, pues, al examinar el artículo 4 del Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990, no sólo se advierte que se faculta a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a tomar medidas precautorias, aun desde el momento que se inician las investigaciones a fin de que las pretensiones del Estado no se hagan ilusorias, sino que igualmente prevé, para que ello se configure, que basta con la existencia de "indicios" de los que se deduzcan que los bienes provienen directa o indirectamente del Estado, cuando se trate de bienes que no figuren como parte del patrimonio del sujeto, como sucede en este caso. En tal evento, la norma es diáfana al contemplar que para ello se seguirán las reglas del Código Judicial, siempre que sean cónsonas con las limitaciones y salvedades que allí se indican y en lo que resulten aplicables. Es claro entonces, que el Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990, contrario a lo expuesto por el recurrente, se aplicará preferentemente cuando se trate de medidas precautorias.

La parte demandante argumenta en el libelo contentivo de la demanda, que se pasa por alto la formalidad prevista en el artículo 8° del Decreto de Gabinete N°36 de 1990, que requiere se dicte una resolución motivada en donde se dejará constancia de la misma y ordenará el inicio del trámite para determinar y establecer esa responsabilidad. No obstante, para los efectos de las medidas cautelares y de conformidad a lo antes planteado, el artículo 4 del Decreto de Gabinete N°36, no exige la preexistencia de resolución alguna que determine la responsabilidad del sujeto o de los sujetos que se consideren responsables de la lesión patrimonial, ni exige la preexistencia del informe de antencedentes, basta con que, como se dejó anotado en líneas precedentes, en los casos de bienes que no figuren como patrimonio del sujeto, existan indicios que los mismos fueron sustraidos indebidamente del patrimonio del Estado, lo que en el caso de Manuel Antonio Noriega está acreditado . Se desestiman estos cargos.

Con relación a la violación que se alega al artículo 537 numeral 1 del Código Judicial, la Sala desestima los argumentos que sustentan su violación, puesto que, tal como lo expone la Procuradora de la Administración, la disposición en referencia corresponde al Libro II, Título II, sobre Medidas Cautelares, y, en cuanto a la aplicación de las mismas, el artículo 521 expresamente dispone que será sin perjuicio de lo dispuesto para casos especiales. El Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990, como ya se indicó, es una Ley especial, que contempla regulaciones en materia de medidas precautorias, por tanto se aplicará de manera preferente a lo que disponga el Código Judicial.

No obstante, debe quedar claro que una vez iniciado el procedimiento de

conformidad con los casos que preceptúa el artículo 3° del Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990, y luego de preparado el Informe de Antecedentes por quienes realizaron la investigación acompañado con las evidencias, es que los Magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial proceden a emitir una resolución motivada que da inicio al trámite para determinar y establecer la responsabilidad del sujeto o los sujetos responsables de la lesión patrimonial, pero ello es al margen de cualquier medida cautelar practicada desde el inicio de la investigación. Por tanto, no prospera este último cargo.

Finalmente, no se demuestra en este proceso, que los fondos que a juicio del demandante, fueron indebidamente cautelados, pertenecen al Bank of Credit and Commerce (Overseas) Ltd. Gran Caimán.

Por las razones expuestas, lo Sala procede a declarar que no es ilegal el acto demandado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° DRPN°93-98 de 4 de marzo de 1998, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, como tampoco lo es su acto confirmatorio.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. RAÚL MALDONADO LEARY, EN REPRESENTACIÓN DE ZUNILDA CAJIGA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DRH-591-97 DE 14 DE AGOSTO DE 1997, EXPEDIDA POR LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Raúl Maldonado Leary, actuando en representación de ZUNILDA CAJIGA SERRACIN, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Nota N° DRH-591-97 de 14 de agosto de 1997, expedida por la Jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado se destituye a ZUNILDA CAJIGA, del cargo que ocupaba en el Ministerio de Desarrollo Agroopecuario, en base a la reorganización administrativa efectuada, como parte de la política de profesionalización del cargo de servidores públicos de dicho Ministerio.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal la Nota DRH-591 de 14 de agosto de 1997, la cual destituye del cargo a la señora Zunilda Cajiga, que fue suscrita por la Jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, siguiendo instrucciones del Ministro del ramo. También se solicita se declare la nulidad de la Nota N° DRH-715 de 30 de septiembre de 1997, que resuelve el recurso de reconsideración presentado que mantiene en todos sus efectos la Nota DRH-591 de

14 de agosto de 1997, y del Resuelto N°ALP116-ADM-97 de 18 de diciembre de 1997, que confirma el mismo acto. Finalmente, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se solicita el reintegro de su representada, y el pago de los salarios no percibidos del 14 de agosto de 1997, hasta la fecha que se decrete su reintegro.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, se destaca que la causal de destitución aplicada, no se encuentra regulada en el Reglamento Disciplinario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Capítulo X al XIX del Resuelto N°190-AP de 9 de febrero de 1976, por el cual se crea y reglamenta la Administración y Disciplina del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, así como tampoco en la Ley N°22 de 1961, por la cual se dictan disposiciones para la prestación de servicios de Ciencias Agrícolas. También se señala que la nota de despido omitió dejar establecido los recursos a los que tenía derecho recurrir, presentando claras deficiencias de fondo y forma.

En cuanto al Resuelto N° ALP116-ADM-97 de 18 de diciembre de 1997, expedido por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, plantea que vierte algunas consideraciones que permiten entrever aún más claramente las deficiencias del proceso de despido, pues, primero destituyó, luego de ser suspendida y traslada a la Región 7, Chepo y, posteriormente acopió las pruebas que justifican su decisión. Ello explica, en su opinión, la inconsistencia entre la Nota DRH-591-97 de 14 de agosto de 1997 en la que se destituye a su representada, y el Resuelto N°ALP116-ADM97 que la confirma, en la medida que la primera justifica el acto por reorganización administrativa y la segunda, pese a que confirma, lo basa en que la prestación del servicio no se prestaba. En ese sentido manifiesta que, aún y cuando fuera sancionable a su representada la falta de prestación servicio de acuerdo a "las funciones de su cargo", una sanción hubiese sido lo correcto y no tres, de conformidad a lo previsto en el artículo 1 del Capítulo XIII del Reglamento Disciplinario del MIDA.

En cuanto a las disposiciones legales alegadas como infringidas, figuran el artículo 10 de la Ley N°12 de 30 de enero de 1961; el artículo II del Capítulo XIV del Reglamento Disciplinario del Resuelto N°190-AP de 9 de febrero de 1976, por el cual se crea y reglamenta la Administración y Disciplina del Ministerio de Desarrollo Agropecuario; el artículo 29 de la Ley 135 de 1943; el artículo IX del Capítulo XIII del Reglamento Disciplinario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que en su texto expresan:

> "ARTICULO 10: Los profesionales idóneos al servicio del Estado podrán ser destituidos por razones de incompetencia física, moral o técnica. En cada caso particular el Consejo Técnico Nacional de Agricultura hará las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de los cargos, oyendo a las partes. El Consejo Técnico Nacional de Agricultura decidirá y solicitará lo conducente al Organo Ejecutivo si se hubiere cometido infracción al presente artículo de esta Ley."
>
> "ARTICULO II: La renuncia o destitución del funcionario deberá ser comunicada por la parte correspondiente, por escrito y por conducto regular 15 días de anticipación a la fecha de su efectividad."
>
> "ARTICULO 29: Las resoluciones que ponen término a un negocio o situación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al interesado o a su representante o apoderado dentro de los cinco días siguientes a su expedición, debiendo expresarse los recursos que por vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deban interponerse, todo bajo responsabilidad del funcionario correspondiente."
>
> ARTICULO IX: Se consideran faltas graves:
>
> 1. Haber sido encontrado substrayendo objetos que pertenecen a un

compañero o son propiedad del Ministerio.

2.Dedicarse a actividades denigrantes al buen nombre del Ministerio.

3. Prestarse al soborno o la dádiva, menoscabando en esa forma el prestigio del Ministerio.

4. Dedicarse a transacciones ilícitas.

5. Tratar de abusar el pudo de una dama.

6. Ser adicto al licor y no dar muestra de regeneración.

7. Manifestar en forma despectiva e incorrecta sus deseos de no querer pertenecer más al Ministerio.

8. Falta a su servicio constantemente.

9. Cometer abandono del cargo al faltar 72 horas consecutivas a sus labores regulares o al lugar que fuere trasladado; sin causa justificada.

10. No presentarse al lugar donde fue trasladado sin que se constituya en abandono del cargo.

11. Golpear salvajemente a un compañero teniendo éste que ser recluido en un hospital.

12. Demostrar entre compañeros y Superiores, ser una persona de alto índice de peligrosidad.

13. Valerse del anónimo, con el fin de desacreditar u ofender al compañero superior.

14. Invitar a pelear o amenazar a un superior.

15. Agitar el agiotismo entre el personal.

16. Vender, empeñar o donar prendas de equipo de propiedad del Estado.

Las faltas a que se refiere en el IX, serán sancionadas con:

a- Multas severas.
b- Suspensión del cargo.
c- Destitución."

Argumenta el recurrente, que el artículo 10 de la Ley N°12 de 30 de enero de 1961, se violó de manera directa por omisión, pues, sólo establece tres causales específicas para destituir a profesional idóneo de las Ciencias Agrícolas, las cuales son: incompetencia física, moral o técnica, por lo que el acto demandado debió ceñirse a estas tres causales de derecho. La causal alegada es de naturaleza no imputable a las partes y está sometido a otros trámites.

El Capítulo II del Capítulo XIV del Reglamento Disciplinario del Resuelto N°190-AP de 9 de febrero de 1976, a criterio del apoderado judicial de la parte actora, se violó de manera directa por omisión, pues, se comunicó lo nota de destitución por vía telex a la Región N°7 Chepo, lo que no es el conducto regular de destitución. A ello añade, que la comunicación de destitución a los menos debió ser comunicada con quince días de anticipación, y la nota se recibió mediante correspondencia el 18 de agosto de 1997.

El artículo 29 de la Ley 135 de 1943, en opinión del recurrente se violó

de manera directa por omisión, porque en el acto que se demanda se omite expresar la causal de hecho y derecho que debió sustentar la destitución, y de la misma forma omite expresar los recursos que proceden y el término en dentro del cual deben interponerse.

Finalmente, con relación a la violación que alega al artículo IX del Capítulo XIII del Reglamento Disciplinario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario del Resuelto N°190-AP de 9 de febrero de 1976, afirma el apoderado del demandante que se violó de manera directa, por cuanto que la causal invocada, es decir, reorganización administrativa, no se encuentra consagrada en esa norma disciplinaria.

II. El informe explicativo de conducta expedido por la Jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

La Jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, rindió el respectivo informe explicativo de conducta, en el que señala que la Lcda. Zunilda Cajiga ocupaba la Jefatura de Asuntos Internacionales de la Dirección de Cooperación Internacional, y, que según un informe presentado por la Jefa del Departamento, se demostró que la prestación del servicio que ejercía de acuerdo a las funciones de su cargo no lo ejecutaba, con la intensidad, responsabilidad, prontitud, cuidado y eficiencia que fueran compatibles con sus fuerzas, aptitudes, preparación y destreza, en el tiempo y lugar estipulado, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes. También afirma que el Ministro de Desarrollo Agropecuario remitió mediante la Nota N°DM-1846-97 fechada el 25 de septiembre de 1997, al Consejo Técnico Nacional de Agricultura todo lo concerniente a las medidas administrativas sobre el despido de la Lic. Zunilda Cajiga. La Jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario puntualiza su informe, con que la frase "sólo" contenida en el artículo 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961, argumentado por la recurrente, fue declarada inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 28 de septiembre de 1984.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 210 de 8 de junio de 1998, visible de fojas 36 a 45 del expediente, se opone a los criterios expuestos por la recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. Señala la Procuradora de la Administración que ante la inconstitucionalidad de frase "solo" contenida en el artículo 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961, no se excluyen otras causales comunes de destitución surgida de los deberes que la Constitución expresamente instituye como garantía mínima para el ejercicio eficiente de la función pública. En este caso, la Lcda. Cajiga Serracín, no fue destituida por razones de incompetencia física, moral o técnica como expresamente plantea la norma, sino porque en el Departamento dentro del cual ejercía funciones de jefatura, no existía organización, coordinación, y/o comunicación en el trabajo, así como tampoco se daba seguimiento a los convenios que se formalizaban en el Ministerio. Ello a su juicio, demuestra negligencia, no incompetencia, en el ejercicio de sus importante labores.

También señala la Procuradora de la Administración, que conforme a lo previsto en el artículo 1007 del Código Judicial, en este caso hubo notificación personal, pues, la recurrente interpuso sus escritos de reconsideración con apelación en subsidio. Finalmente expresa la Procuradora de la Administración, que la omisión de la Administración de no expresar en el acto que se demanda los recursos que había a lugar, es decir, el de reconsideración y apelación en subsidio, se subsanó al resolverse éstos en Nota DRH-715 de 30 de septiembre de 1997, y el Resuelto ALP-ADM-97 de 18 de diciembre de 1997.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a continuación a examinar las infracciones que la parte demandante imputa al acto cuya declaratoria de nulidad

demanda.

En el acto demandado, la Sala observa que se destituye a la Lcda. Zunilda Cajiga, del cargo que ocupaba en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en base a la reorganización administrativa efectuada en ese Ministerio, como parte de la política de profesionalización del cargo de servidores públicos. La parte actora por su lado, argumenta que a un profesional idóneo de las Ciencias Agrícolas, de conformidad a lo previsto 10 de la Ley 12 de 30 de enero de 1961, "sólo" puede ser destituido por incompetencia física, moral o técnica, situación que no se observa en este caso. También argumenta que su representada no fue debidamente notificada, y que en el acto demandado se omitió expresar la causal de hecho y de derecho que debió sustentar la destitución.

En cuanto al artículo 10 de la Ley N°22 de 1961, vale destacar que, tal como lo plantea la Jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en su informe explicativo de conducta, la palabra "solo" contenida en esa disposición legal, fue declarada inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 28 de septiembre de 1984, puesto que limita las causas de destitución o despido de los servidores públicos y excluye otras causales comunes de destitución surgidas de los deberes que la Constitución expresamente instituye como garantía mínima para el ejercicio eficiente de la función encomendada. Siendo ello así, no coincide la Sala con lo que plantea el apoderado judicial de la parte demandante, en cuanto a que las causas de destitución de un profesional idóneo de las Ciencias Agrícolas sólo debe ceñirse a las causas que expresa la norma, es decir, por incompetecia física, moral o técnica.

A ello se añade que en varias ocasiones el artículo 10 de la Ley 22 de 1961, ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala Tercera en el sentido de que no puede una Ley, que regula el ejercicio de profesión ajena a la función pública, otorgar estabilidad a un funcionario que no haya ingresado por concurso de méritos (Véase Sentencia de 30 de agosto de 1999). Es, pues, la Ley de Carrera Administrativa preferente y especial en materia de estabilidad tal como se desprende de los artículos 297 y 300 de la Constitución Nacional que instituyen las carreras en los servidores públicos conforme al principio de sistema de méritos. Siendo ello así, la Sala advierte que en el expediente no se demuestra que la señora ZUNLIDA CAJIGA hubiese participado en concurso de mérito alguno para optar por el cargo como Jefa de Asuntos Internacionales de la Dirección de Cooperación Internacional. Por tanto, no prospera este cargo.

En cuanto a la violación del artículo 29 de la Ley 135 de 1943, la Sala disiente con lo planteado por la parte actora, dado que la disposición en mención, no establece que las resoluciones que ponen término a una actuación administrativa de carácter nacional, deban expresar la causal de hecho y de derecho que las motiva. En cuanto a que en el acto demandado se omite expresar los recursos que proceden y el término dentro del cual deban interponerse, la Sala advierte que la parte actora interpuso en tiempo oportuno recurso de reconsideración, y de ese modo agotó la vía gubernativa. Se desestima este cargo.

Finalmente, con relación a la violación que se invoca a los artículos II del Capítulo XIV y IX del Capítulo XIII del Reglamento Disciplinario, la Sala de igual manera ha expresado en múltiples fallos que ninguna norma de inferior jerarquía a la Ley, por ejemplo como un Reglamento, puede otorgar estabilidad a un funcionario público, de conformidad con los artículos 297 y 300 de la Constitución Nacional, que reserva a la Ley, el desarrollo de la Carrera Administrativa para garantizar a los servidores públicos un sistema de nombramiento, suspensión, traslado, destitución, cesantía. Se desestiman estos cargo.

Por lo expuesto, lo procedente, es, pues, declarar que no es ilegal el acto demandado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte

Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Nota DRH-591-97 de 14 de agosto de 1997, expedida por la Jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALEJANDRO PÉREZ, ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE IRMA ROSA CASTILLO DE QUINTERO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°1421-97 DNP DE 3 DE ABRIL DE 1997, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Alejandro Pérez, actuando en representación de IRMA ROSA CASTILLO DE QUINTERO, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Resolución N°1421/97 DNP de 3 de abril de 1997, expedida por la Directora General de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado se resuelve remover de su cargo definitivamente a la funcionaria IRMA CASTILLO DE QUINTERO, como Trabajadora Social de la Caja de Seguro Social en la Agencia de Puerto Armuelles.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal, la Resolución N°1421-97 DNP de 3 de abril de 1997, expedida por la Directora General de la Caja de Seguro Social, como también sus actos confirmatorios contenidos en la Resolución N°2138-97-DNP de 15 de mayo de 1997 expedida por la Directora General de la Caja de Seguro Social y la Resolución N° 15,431-97-J-D de 27 de noviembre de 1997 expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se solicita que se ordene el reintegro de su representada al cargo que ocupaba y se le paguen los salarios dejados de percibir desde el 3 de abril de 1997 hasta que se deje sin efecto el acto impugnado. También solicita el pago de dos (2) meses de vacaciones que se le adeudan y el pago de ciento cuarenta y un días (141) de salarios caídos no pagados desde el 6 de febrero hasta el 26 de junio de 1996.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, el representante de la parte actora alega que IRMA ROSA DE CASTILLO fue nombrada el 24 de abril de 1992 como trabajadora manual con funciones de cajera en la Caja de Seguro Social de Puerto Armuelles. Con la Resolución N°0940-96 DNP de 25 de enero de 1996 firmada por la Subdirectora General de la Caja de Seguro Social, la señora Irma Rosa de Castillo fue destituida, mas fue reintegrada mediante Resolución N°6249-96DNP de 21 de junio de 1996, luego de la reconsideración del acto antes mencionado, a partir del 27 de junio del mismo año. En relación a ello, también se señala que mediante nota de 11 de septiembre de 1996, su poderdante envió reclamo de los cientos cuarenta y un (141) días de salarios caídos desde el 6 de febrero de 1996 al 27 de junio de 1996, y se negó por falta de presupuesto. Luego de ocho (8) meses, mediante Resolución N°1421-97DNP de 3 de abril de 1997, la señora de Castillo fue removida de su cargo, y, a su juicio, su poderdante cumple

en exceso los cinco años de estabilidad laboral, luego de contados los días de vacaciones y los ciento cuarenta y un días transcurridos antes de su reintegro.

Como disposiciones legales violadas figuran los artículos 28-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, el artículo 769 del Código Administrativo y el artículo 134 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994 que expresan lo que sigue:

> "ARTICULO 28-A: Los funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social con cinco (5) años de servicios continuos e ininterrumpidos que trabajen a tiempo completo al servicio de la institución gozarán de estabilidad en sus cargos y no podrán ser removidos o suspendidos sin que medie causa justificada."
>
> "Articulo 796: Todo empleado público nacional provincial, o municipal, así como también el obrero que trabaje en obras públicas, y en general todo servidor público aunque no sea nombrado por Decreto, tiene derecho, después de once meses continuados de servicio, a treinta días de descanso con sueldo, siempre que durante aquel tiempo no haya tenido arriba de treinta días de licencia por enfermedad o por cualquier otra causa.
>
> El empleado público, nacional, provincial o municipal que después de once meses continuados de servicio fuere separado de su puesto, por renuncia o remoción, sin haber hecho uso del mes descanso a que se refiere este artículo, tendrá derecho a que se le reconozca y pague el mes de sueldo, que corresponda al descanso, siempre que su separación del cargo no obedezca a la comisión de alguna falta grave en el ejercicio de su empleo."
>
> "ARTICULO 134: El servidor público reintegrado tendrá derecho a los salarios dejados de percibir desde su separación del cargo o desde su destitución y hasta el momento en que se haga efectivo su reintegro, y deberá ocupar el mismo cargo salvo que éste acepte otro análogo en jerarquía, funciones y remuneración."
>
> "ARTICULO 134: El servidor público reintegrado tendrá derecho a los salarios dejados de percibir desde su separación del cargo o desde su destitución y hasta el momento en que se haga efectivo su reintegro, y deberá ocupar el mismo cargo salvo que éste acepte otro análogo en jerarquía, funciones y remuneración."

Afirma el representante de la parte actora, que el acto demandado violó de manera directa el artículo 28-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, pues, desconoce el derecho que tienen todos los funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social a gozar de estabilidad en su cargo y a no ser removido sin que medie causa justificada. A su juicio, la señora Irma Castillo de Quintero gozaba de estabilidad laboral, pues, no se le computaron, para los efectos del tiempo, las vacaciones a que tenía derecho y los ciento cuarenta y un (141) días de separación no imputables a ella. En relación a lo expuesto afirma que el reglamento interno de personal de la Caja de Seguro Social, sólo habla de la suspensión del cómputo de servicio, en el artículo 35, para efectos de vacaciones, por lo que siguiendo el principio de estricta legalidad, no contempla causas de suspensión para el concepto de estabilidad laboral. También señala que la Resolución 6249-96 DNP de 21 de julio de 1996, dejó sin efecto la destitución del cargo de la cual fue objeto IRMA CASTILLO, "por lo que la destitución fue declarada nula y los actos nulos producen en materia administrativa los mismos efectos como si nunca hubieren existido por lo que teóricamente si no hubo destitución no hubo separación del cargo.

El artículo 496 del Código Administrativo a criterio del apoderado del demandante, se violó dado que se omitió su aplicación al desconocerse los dos meses de vacaciones que le corresponden a su representada.

Finalmente, el artículo 134 de la Ley N°9 de 20 de junio de 1994, en opinión del recurrente se violó de manera directa por omisión o falta de aplicación, pues, su representada tiene derecho al pago de los salarios caídos que peticionó mediante nota de 11 de septiembre de 1996, y que no fue atendida por falta presupuestaria.

II. El informe explicativo de conducta expedido por la Directora General de la Caja de Seguro Social y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

En nota fechada el 2 de abril de 1998, la Directora General de la Caja de Seguro Social, rindió el respectivo informe explicativo de conducta en el cual expresa que contrario a lo que señala el apoderado legal del demandante, el artículo 28-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, consagra el derecho que tienen todos los funcionarios administrativos de la Institución de gozar de estabilidad en su cargo y a no ser removido sin que medie una causa justificada, por lo que dichos funcionarios deben tener un mínimo de cinco (5) años de servicios continuos e ininterrumpidos para gozar del beneficio de estabilidad laboral y, en el caso bajo examen, luego de hecho el análisis del tiempo laborado por la señora IRMA CASTILLO DE QUINTERO, se concluyó que no laboró durante el período exigido por la Ley para alcanzar la estabilidad laboral, por tanto la Administración puede discrecionalmente proceder a removerla de su cargo. Por otro lado, afirma que la Caja de Seguro Social no está obligada por Ley a pagar salarios caídos o dejados de percibir por la funcionaria IRMA CASTILLO DE QUINTERO, porque precisamente la Ley Orgánica no prevé de manera taxativa el desembolso de dinero en ese concepto.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 227 de 18 de junio de 1998, que es visible de fojas 41 a 48 del expediente, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. A su criterio, las constancias procesales evidencian que la señora Irma Castillo, no se encontraba amparada por la estabilidad a que se refiere el artículo 28-A de la Ley 14 de 1954, precisamente por no haber completado los cinco años de servicio continuos e ininterrumpidos en esa Institución de Seguridad Social. Por otro expresa, que no consta en el expediente que la señora Castillo de Quintero hubiere solicitado ante la Caja de Seguro Social, el pago de las vacaciones adeudadas ni que se les hubiere negado las mismas.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, y luego del análisis de las normas invocadas como infringidas y los argumentos que la sustentan, la Sala procede a resolver la presente controversia.

Como se anotó en líneas precedentes, mediante el acto demandado se resolvió remover de su cargo definitivamente a la señora IRMA CASTILLO DE QUINTERO, quien laboraba como Trabajadora Manual de la Caja de Seguro Social, en la Agencia de Puerto Armuelles. En esa oportunidad se estimó que la funcionaria no había alcanzado el derecho de estabilidad laboral configurada en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Por su parte, quien recurre alega que si al momento de la destitución de su representada se le hubiesen computado las vacaciones a que tenía derecho y los ciento cuarenta y un (141) días de separación no imputables a ella, hubiere gozado en exceso de la estabilidad laboral que consagra el artículo 28-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

No coincide la Sala con los planteamientos expuestos por la parte actora para sustentar las violaciones alegadas. Ello es así por cuanto que no se demuestra en el expediente que la demandante al momento de ser destituida contase con cinco años de servicios continuos e ininterrumpidos trabajados a tiempo completo al servicio de la institución, como requiere el artículo 28-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro, a fin de reclamar el derecho a la estabilidad en el cargo y no ser removidos o suspendidos sin que medie causa justificada. Contrario a lo expuesto por el recurrente, de ningún modo, para los efectos del

cómputo del tiempo de que trata el mencionado artículo 28-A, se podrá tomar en cuenta el período de vacaciones no resueltas, ya que este es un derecho adquirido, que de no disfrutarse, se procederá a su pago al término de la relación laboral de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Reglamento Interno de Personal. Consta en autos que la demandante laboró en la Caja de Seguro Social desde el 24 de abril de 1992 hasta el 3 de abril de 1997, período que no alcanzó los cinco años requeridos, aunque se computara, como alega el representante de la parte actora, el lapso de 141 días que no laboró después de ser destituida y luego restituida al dejar sin efecto la medida adoptada, por la de 10 días de suspensión sin derecho a sueldo. Siendo ello así, su condición como funcionaria pública es de libre nombramiento y remoción que depende directamente de la voluntad de la autoridad nominadora.

En cuanto a la violación del artículo 796 del Código Administrativo, no consta en el expediente que la demandante hubiese solicitado formalmente sus vacaciones, y, en cuanto a la Nota SAA-0420-96 de 22 de octubre de 1996 visible de foja 145 del expediente administrativo, ella hace alusión a la no viabilidad de la solicitud de cambio a la I etapa de la posición que ocupaba, al no contar la misma con la partida presupuestaria, mas no hace alusión a que se hubiese negado el derecho a vacaciones vencidas como hace ver la demandante. No obstante, se aprecia en los documentos relacionados con el "Historial de Empleados" que se incorpora al expediente administrativo, que debe accederse al pago de vacaciones vencidas y no resueltas, según lo previsto en el artículo 31 del Reglamento Interno de Personal, pues, sólo fueron concedidas en el año 1993, 1994 y 1995, las vacaciones correspondientes a los años 1992, 1993 y 1994, por tanto corresponde que se le concedan el pago de las vacaciones correspondientes al período laborado de los años 1995 y 1996.

Finalmente, con relación a la violación que se aduce al artículo 134 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, la Sala advierte que esta disposición no es aplicable al caso bajo examen, toda vez que la Caja de Seguro Social no se encuentra incorporada al Régimen de la Carrera Administrativa, por tanto no procede el cargo formulado.

Por lo expuesto, lo procedente es, pues, no acceder a las pretensiones formuladas, salvo el pago de las vacaciones correspondientes al período laborado en los años 1995 y 1996.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 1421-97 DNP de 3 de abril de 1997, expedida por la Directora General de la Caja de Seguro Social, como tampoco lo son sus actos confirmatorios. SE ORDENA el pago de las vacaciones vencidas correspondientes a los años 1995 y 1996.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINSTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDISON ERNESTO ACEVEDO EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO JUAN MUÑOZ PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 99-010-D DE 2 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante su Vista N° 329 fechada 27 de junio de 2000, la señora Procuradora de la Administración, licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que la declare impedida para conocer del proceso iniciado con la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Edison Ernesto Acevedo, en nombre y representación de PEDRO JUAN MUÑOZ, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 99-010-D de 2 de diciembre de 1999, dictada por el Rector de la Universidad de Panamá.

La señora Procuradora de la Administración manifiesta que mediante Consulta N° 025 de 27 de enero de 1999, emitió opinión jurídica sobre "¿A quién correspondería aplicar forzosamente la Ley 61 de 20 de agosto de 1998, cesando en sus funciones a los servidores públicos que tengan 75 años de edad?", por lo que está impedida para conocer de este negocio, según lo prevé la parte final del numeral 5, del artículo 749 del Código Judicial y el numeral 4, del artículo 348 del mismo Código.

Las normas aludidas son del tenor siguiente:

"Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.
Son causales de impedimento:
1...
5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo".

"Artículo 388: Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre ipedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces".

Por lo antes expuestos, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento manifestado por la licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, Procuradora de la Administración y, en consecuencia, la separa del conocimiento de la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción promovida por el licenciado Edison Ernesto Acevedo, en nombre y representación de PEDRO JUAN MUÑOZ, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 99-010-D de 2 de diciembre de 1999, dictada por el Rector de la Universidad de Panamá y DISPONE llamar a su suplente para que conozca del presente negocio.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GERARDO SIMEÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE OSVALDO ARTEMIO RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA NO. DP-DOPA-6115, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de los Magistrados que integran esta Sala, del recurso interpuesto por el licenciado Gerardo Simeón, en representación de Osvaldo Artemio Rodríguez, contra el auto de 11 de mayo del 2000, dictado por el Magistrado Sustanciador que decidió no admitir la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la Nota No.DP-DOPA-6115, fechada el día 30 de septiembre de 1999. La resolución que rechaza la demanda se fundamentó en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, y esencialmente en las siguientes consideraciones:

> "Observa quien suscribe que la demanda es inadmisible, toda vez que la parte actora en el apartado de lo que se demanda solicita que se declare nula, por ilegal, la Nota DP-DOPA-6115 de 30 de septiembre de 1999, expedida por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación, aduciéndolo como acto principal, en vez del Decreto Ejecutivo No. 207 de 30 de octubre de 1999. Este último documento para los efectos de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción constituye el acto principal, pues el mismo contiene la decisión de destitución del señor Osvaldo Artemio Rodríguez del cargo de Planificador I de la Dirección Nacional de Enseñanza (con funciones de Jefe en el Departamento de Evaluación Integral) y no la Nota No. DP-DOPA-6115 de 30 de septiembre de 1999, dado que la misma sólo representa la notificación de dicha decisión dictada por la autoridad administrativa" (Ver fojas 33-34).

Por su parte, el apoderado judicial del apelante explica las razones del recurso bajo examen al afirmar que la Resolución del Magistrado Sustanciador obvió situaciones ilegales producidas desde el momento de la destitución ilegal de su patrocinado, situaciones que se mantuvieron más allá del momento en que se emitió el Decreto No. 207, de 30 de octubre de 1999, que intenta enmendar el agravio a la Ley y al derecho al trabajo de su mandante (Cfr. foja 31).

Al reseñar las ilegalidades que argumenta, expresa que en la Nota censurada no consta el fundamento jurídico en que se basa, lo cual viola los artículos 128 y 133 de la Ley 47 de 1946, tal como ha quedado después de sus modificaciones; que a la comunicación de destitución de su poderdante no se acompañó, adjuntó o mostró el decreto que lo destituía de su cargo; que en el recurso de apelación promovido en la esfera administrativa por el señor Osvaldo Rodríguez éste advirtió a las autoridades del Ministerio de Educación la omisión de los trámites legales para su remoción ("investigación por indisciplina o falta alguna", o sanción "por falta administrativa").

El apoderado judicial del demandante afirma que su representado no pudo interponer recurso alguno contra el Decreto 207, de 30 de octubre de 1999, porque éste fue dictado 30 días después de que se le comunicó su destitución, "...fecha en la cual se le obligó a recoger todas sus pertenencias del Ministerio y se le negó toda información, fotocopia y acceso a los documentos relacionados con su destitución. Ante tal situación, el único recurso que le quedo (sic), a mi representado fue recurrir contra la nota medidante la cual se le destituyó, toda vez que el Decreto No. 207 fue confeccionado 30 días después de la comunicación de la destitución" (fojas 32-33).

La señora Procuradora de la Administración contestó el traslado del escrito de apelación, oponiéndose al recurso, mediante Vista Fiscal No. 312, de 20 de junio del 2000, porque el acto administrativo que se impugna no "... constituye el acto final, definitivo y obligatorio", según el artúculo 42 de la Ley 135 de 1943. (Cfr. foja 34).

Expuestas las anteriores piezas procesales para la congnición de la alzada, los Magistrados que suscriben pasan a resolver la misma. Es oportuno transcribir

parte del texto medular de la nota dirigida al demandante y que el mismo censura ante esta jurisdicción de lo contencioso:

> "Por instrucciones del Despacho Superior, informamos a usted que debe cesar de su cargo a partir del 1o. de octubre de 1999.
> Se le dan las gracias por los servicios prestados.
> ...
> ...
> ...".

Este Tribunal de apelación estima que la Nota objeto de impugnación es una simple gestión de comunicación que si bien afecta al señor Osvaldo Rodríguez, no constituye el acto definitivo o firme que causa estado, por lo que incumple uno de los requisitos principales de procedibilidad ordenados por la Ley.

Las Leyes vigentes que desarrollan el régimen contencioso administrativo son claras al establecer los requisitos que deben reunir los actos de la Administración impugnables ante la esfera de lo contencioso administrativo. Así, el artículo 42 de la Ley 135 de 1943 preceptúa lo que de seguido se transcribe:

> "Artículo 42: Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencia de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación".

Sobre el particular, la Sala en diversas resoluciones ha dicho que tratándose de demandas de plena jurisdicción, en las que además de la petición de nulidad del acto administrativo es de su esencia que se impetre el resarcimiento de daños o perjuicios por lesión ocasionada a los derechos subjetivos del actor por el acto administrativo ilegal. Éste, para poder ser demandado, debe constituir el acto que cause estado, es decir, definitivo pues contra el mismo no cabe remedio procesal de impugnación alguno en la esfera administrativa, ya sea porque hayan sido decididos, o bien tratándose de providencias de trámite que hayan resuelto de manera directa o indirecta el asunto poniéndole término o imposibilitan su prosecución en la mencionada esfera.

En consecuencia, lo que procede es desestimar el recurso examinado y mantener en todas sus partes la resolución del Magistrado Sustanciador de la Sala, fechada el 11 de mayo último.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley MANTIENEN EN TODAS SUS PARTES la Resolución fechada el 11 de mayo del 2000, emitida por el Magistrado Sustanciador, a través de la cual se decidió NO ADMITIR la demanda de plena jurisdicción interpuesta por el señor Osvaldo Artemio Rodríguez, mediante apoderado judicial, para que se declare nula, por ilegal, la Nota No. DP-DOPA-6115, de 30 de septiembre de 1999, expedida por el Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, PROMOVIDA POR EL LICENCIADO JOSÉ PÍO CASTILLERO EN REPRESENTACIÓN DE DIOMILA D. DE HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 220 DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, ONCE (11) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, mediante Vista Fiscal N° 221 de 17 de mayo de 2000, ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la Providencia fechada 12 de abril de 2000, mediante la cual la Magistrada Sustanciadora ADMITIO la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el Licenciado José Pío Castillerola en representación de DIOLMILA D. DE HERRERA, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 220 de 3 de diciembre de 1999, dictado por la Presidenta de la República por conducto del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración considera, que la presente demanda no cumple con uno de los requisitos indispensables para la admisión de la demanda contencioso administrativa, y así manifiesta en su apelación:

> **"En efecto, el defecto formal que se advierte en la presente Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, es que en la copia autenticada del acto impugnado que se ha aportado con el libelo de la demanda, no existe constancia de su notificación a la señora Diomila D. de Herrera o a su apoderado judicial."**

De la alzada interpuesta, la parte actora presentó sus objeciones a dicho recurso en los siguientes términos:

> **"...Si bien el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 se refiere a la necesidad de aportar la copia del acto acusado y la constancia de su publicación, notificación o ejecución, ello tiene como objeto conocer si el actor ha agotado la vía gubernativa, antes de recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa, y si la demanda esta presentada dentro de los términos legales señalados al efecto."**

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, proceden a externar las siguientes consideraciones en torno a la apelación planteada.

Tal como lo indica la Procuradora, ha sido jurisprudencia reiterada de la Sala Tercera que si no se presentan las copias autenticadas con el sello de notificación, resulta imposible que este Tribunal verifique si la demanda ha sido interpuesta en tiempo oportuno. Así, se observa en el presente negocio, que efectivamente no consta la notificación a la parte actora del acto original impugnado. Sin embargo, compartimos la opinión del actor, cuando indica que este requisito tiene como objetivo comprobar la oportunidad de presentación de la demanda contencioso administrativa. En este sentido, el término de caducidad, que es de dos (2) meses, a que hace referencia el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, se computa a partir de la notificación del acto impugnado, con lo cual, previo agotamiento de la vía gubernativa, se le permite al actor acudir en demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

Es a partir de la fecha de notificación del acto que decide de forma definitiva la actuación administrativa, que se cuenta el término hábil para determinar si la demanda fue presentada oportunamente ante esta Superioridad.

En el caso subjúdice, el acto que resolvió definitivamente la actuación

administrativa es la Resolución de 23 de marzo de 2000, que decidió el recurso de reconsideración, visible a fojas 23 a 25 del expediente.

Por lo antes expuesto, el resto de los Magistrados considera pertinente señalar que si bien es cierto el recurrente omitió aportar al momento de presentar su demanda el sello de notificación del acto original impugnado, en el presente caso dicha omisión es irrelevante en virtud de las claras evidencias del expediente que demuestran que la demanda fue interpuesta en tiempo.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Providencia de 12 de abril de 2000, que ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el LiceNCIADO José Pío Castillero en representación de DIOMILA D. DE HERRERA.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERIC SANTAMARÍA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JAVIER TORRES VARGAS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 034-2000, FECHADA EL 3 DE ABRIL DEL 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE AMBIENTE, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eric Santamaría, en nombre y representación de Javier Torres Vargas, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa No. 034-2000, de 3 de abril del 2000, emitida por el Administrador General la Autoridad Nacional del Ambiente, acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Por medio del acto administrativo acusado se decidió, entre otras cosas, dejar sin efecto el nombramiento del señor Javier Torres Vargas, portador de la cédula de identidad personal No. 8-194-829, seguro social No. 83-3906, del cargo de evaluador de proyectos, cargo No. 0057081, empleado No. 10355 y sueldo mensual de B/. 700.00.

La Magistrada Sustanciadora procede a evaluar el escrito de demanda para determinar si cumple con los requisitos que establece la Ley 135 de 1943 modificada por la 33 de 1946, y las normas aplicables del Código Judicial.

De la revisión señalada se concluye que la presente demanda no debe ser admitida por las siguientes razones:

El actor aporta copia simple del acto administratativo confirmatorio, o sea, de la Resolución No. 0115-2000, de 18 de abril del 2000, suscrita por el Administrador General de la entidad oficial demandada, mediante la cual se mantiene en todas su partes el acto originario.

El artículo 820 del Código Judicial es claro al preceptuar las formas como deben ser aportados a los autos los documentos originales y las copias o

reproducciones de los mismos. Veamos:

> "Artículo 820: Los documentos se aportarán al proceso en originales o en copias, de conformidad con lo dispuesto en este Código. Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción mecánica, química o por cualquier otro medio científico. Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la ley disponga otra cosa". (Destaca la Sala).

El documento que reposa a fojas 3 de los autos -Resolución Administrativa No. 0115-2000, de 18 de abril del 2000-, no cumple con el requisito de autenticación que ordena la norma legal copiada ut supra.

El segundo defecto de forma de que adolece la demanda bajo examen consiste en que el actor, a fojas 26, aduce la violación de los artículos 5 y 198, último inciso, de la Ley 9 de 1994, que regula la carrera administrativa; sin embargo, al explicar los pretendidos conceptos en que tales disposiciones han sido transgredidas por el acto acusado de ilegal, lo hace de manera conjunta, sin la debida separación entre uno y otro concepto de violación, a pesar que afirma que el conculcamiento de esas dos disposiciones legales se produjo de manera directa por comisión.

Es oportuno recalcar al respecto que en las demandas contencioso administrativas, el actor ha de hacer la debida separación entre los conceptos de infracción explicados de modo razonado y claro, que corresponden precisamente a los motivos de ilegalidad que prevé la Ley 135 de 1943, en su artículo 26, y las normas legales o reglamentarias que invoca como transgredidas.

Como el actor ha omitido en su demanda el cumplimiento de dos presupuestos formales descritos expresamente en la Ley, lo que procede es no darle curso a la misma, según el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, y a ello se aboca la Magistrada que suscribe.

En mérito de lo expuesto, la Magistrada Ponente, en nombre y representación del Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el señor Javier Torres Vargas, mediante apoderado judicial, contra la Resolución Administrativa No.034-2000, de 3 de abril del 2000, dictada por la Autoridad Nacional del Ambiente, acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE NIDIA DE RIVADENEIRA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 070-2000(D), DE 15 DE ENERO DE 2000, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de la

señora Nidia Rivadeneira, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la Resolución No.070-2000(D), de 14 de enero de 2000, emitida por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

Por medio del acto administrativo acusado se dispuso la destitución de la señora Nidia Rivadeneira, portadora de la cédula de identidad personal No. 9-97-980 y seguro social No. 073-7392, quien ejercía funciones de jefa de cajeras. Este acto fue confirmado mediante Resolución No.150-2000, fechada el 25 de enero del 2000, de la Gerencia General, y la No.5-9, de 10 de abril del 2000, proferida por la Junta Directiva de la entidad oficial acusada.

La Magistrada Sustanciadora procede a revisar la demanda para establecer si cumple con los requisitos que prevén las leyes de lo contenioso administrativo y las disposiciones aplicables contenidas en el Código Judicial.

Se observa de este análisis preliminar que el demandante hace una petición especial a la Sala consistente en que ésta ordene la obtención de los actos administrativos acusados en copias auténticas con constancia de su notificación, según se lee a fojas 18, porque hasta ahora pese a haberlo pedido ante la autoridad administrativa no ha obtenido "resultados positivos".

Para probar su gestión, el demandante aporta un escrito (a foja 11) en el que solicita a la autoridad administrativa copias autenticadas y constancia de notificación de los actos administrativos demandados; sin embargo, a juicio de la Magistrada Ponente la referida nota no prueba que se haya tramitado en forma debida la consecución de dichos documentos, porque el referido petitorio no tiene sello de recibido por la oficina o funcionario público responsable, sólo consta en su extremo superior derecho una firma ilegible y un impreso mecánico con hora y fecha en que aparentemente fue presentado y recibido el mismo.

El artículo 44 de la Ley 135 de 1943 preceptúa al respecto lo siguiente:

> "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos" (Destaca la Sala).

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 faculta al Magistrado Ponente para que, antes de admitir la demanda, obtenga de la entidad pública demandada copia auténtica del acto administrativo acusado con constancia de su notificación; y el artículo 820 del Código Judicial es expreso al establecer la forma como deben ser aportados los documentos al proceso, entre éstos las copias, las cuales deben estar debidamente autenticadas por el funcionario competente.

Empero, la Sala recalca que el administrado no ha aportado prueba de que haya gestionado en debida forma ante la instancia administrativa los documentos en mención, de allí que lo procedente es no darle curso a la acción revisada, conforme lo prevé el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, actuando en representación de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administratibva de plena jurisdicción interpuesta por la señora Nidia Rivadeneira, mediante apoderado judicial, contra la Resolución No. 070-2000(D), fechada el 14 de enero del 2000, emitida por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JERÓNIMO MEJÍA EN REPRESENTACIÓN DE BALBANEDA MEJÍA DE PÉREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN C.F.C. N° 3532 DEL 24 DE DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA COMISIÓN DE FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licencido Jerónimo Mejía, en representación de Balbaneda Mejía de Pérez, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución C.F.C. N°3532 de 24 de diciembre de 1999, dictada por la Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales y para que se haga otras declaraciones.

A foja 16 del expediente, en el escrito de la demanda presentada, el demandante explica a la Magistrada Sustanciadora que mediante el memorial de 28 de abril de 2000, recibido por la autoridad demandada el 5 de mayo de 2000, le solicitó que certificara si había sido decidido el recurso de reconsideración y apelación en subsidio y que certificara el estado del proceso, petición que según afirma, no le fue contestada. Dicha solicitud consta a foja 10 del expediente y tiene el sello de recibido de la Secretaría General de la Caja de Seguro Social.

El ordinal 3° del artículo 36 de la Ley 135 de 1943 preceptúa que se considerará agotada la vía gubernativa, por silencio administrativo, cuando transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semiautónoma, siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, cuando no ha sido publicado o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación. De acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Sala el petente debe probar que gestionó la obtención de dicha copia o certificación.

Con fundamento en las normas citadas y ante la falta de respuesta del funcionario demandado a la petición hecha por el apoderado de la parte actora, que consta a fojas 10 del expediente, se dispone solicitar a la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servicios Públicos de la Caja de Seguro Social la certificación requerida por el demandante en cuanto a si ha sido resuelto o no el recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto contra la Resolución N° 3532 de 24 de diciembre de 1999, y si fueron resueltos, que expida y envíe copia debidamente autenticadas de las resoluciones respectivas con la constancia de su notificación o publicación.

En consecuencia, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Jerónimo Mejía en representación de BALBANEDA MEJÍA DE PÉREZ, DISPONE solicitar por Secretaría a la Comisión de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos de la Caja de Seguro Social: que, en el término de cinco (5) días, certifique si ha sido o no resuelto el recurso de reconsideración con apelación en subsidio promovido por la recurrente contra la Resolución N° 3532 de 24 de diciembre de 1999 y envíe a la Sala dicha certificación. Si el recurso de reconsideración con apelación en subsidio ha sido resuelto, que expida y envíe

copia autenticada del acto mediante el cual se resolvió o resolvieron los recursos y las constancia de su notificaciones o publicaciones.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IRENE ÁBREGO, EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO ROBERTO BARRAZA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL ACTA DE PROCLAMACIÓN DEL RECTOR ELECTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNOLÓGICA DE PANAMÁ, INGENIERO HÉCTOR MONTEMAYOR, PARA EL PERÍODO 1998-2003, EMITIDA POR EL GRAN JURADO DE ELECCIONES DE DICHA UNIVERSIDAD Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Irene Abrego, en representación del ingeniero Roberto Barraza, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal, el Acta de proclamación del ingeniero Héctor Montemayor como Rector Electo de la Universidad Tecnológica de Panamá para el período 1998-2003, emitida por el Gran Jurado de Elecciones de dicha Universidad y para que se haga otras declaraciones.

I. LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO EN QUE SUPUESTAMENTE LO HAN SIDO

En opinión del demandante, el Gran Jurado de Elección de la Universidad Tecnológica de Panamá violó el literal a) del artículo 35 de la Ley N° 17 de 1984, modificado por el artículo 3 de la Ley N° 57 del 26 de julio de 1997, que establece lo siguiente:

> "Artículo 35. Los períodos de las principales autoridades universitarias serán los siguientes:
>
> a. El Rector será electo por cinco (5) años, no reelegibles para el período inmediatamente posterior al cual se eligió.
> b. ..."

La licenciada Abrego estima que la proclamación del ingeniero Héctor Montemayor como Rector Electo de la Universidad Tecnológica de Panamá para el período 1998-2003 violó el precepto transcrito, por los siguientes motivos:

1. De acuerdo con el precepto transcrito, la reelección inmediata de dicho funcionario está expresamente prohibida y, de haber sido posible la participación del ingeniero Montemayor en las elecciones de Rector, el Reglamento de Elección así lo habría contemplado;

2. La inflexión verbal "será", que emplea el literal "a" del citado artículo 35 para referirse al período del cargo de Rector, no indica futuro, sino que alude a una prohibición expresa en torno a la no reelección de las autoridades universitarias en períodos inmediatamente posteriores. En el caso del ingeniero Montemayor, él fue electo para el período comprendido entre el 3 de febrero de 1993 al 3 de febrero de 1998 y de acuerdo con la Ley N° 17 de 1984, podía reelegirse; pero con la entrada en vigencia de la Ley N° 57 de julio de 1996, ello no es posible por haberse prohibido la reelección para el cargo de

Rector.

3. El concepto de "reelegibilidad inmediata" del cargo de Rector desapareció del marco jurídico de la Universidad Tecnológica de Panamá mucho antes de las últimas elecciones en las que participó el ingeniero Montemayor (en 1998), primero, por razón de lo dispuesto en el transcrito artículo 35; segundo, porque el artículo 18 de la Ley N° 57 de 1996, derogó cualquier disposición contraria al texto de dicha Ley y tercero, porque el artículo 19 del mismo cuerpo legal, dispuso la entrada en vigencia de esa Ley a partir de su promulgación, esto es, a partir del 30 de julio de 1996 (G.O. N° 23,090, pág. 1).

4. Considerar que el ingeniero Montemayor podía reelegirse, sería darle efectos "ultractivos" al literal a) del artículo 35 de la Ley N° 17 de 1984 que, antes de ser modificado por el artículo 3 de la Ley N° 57 de 1996, sí permitía la reelección inmediata del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá;

5. Al ingeniero Montemayor le son aplicables las disposiciones de la Ley N° 57 de 1996, tal como se les ha aplicado a los Decanos y Vicedecanos, que fueron elegidos con el criterio de la "no reelección inmediata", prevista en el literal "c" del artículo 3 de la Ley N° 57 de 1996. Dicha Ley también se aplicó en el proceso de elección del Rector para el período 1998-2003, en lo relativo al voto directo, secreto y ponderado, contemplado en el artículo 7 del mismo cuerpo legal, tal como se advierte en el contenido de la propia Acta de Proclamación del Rector (Cfr. f. 13).

6. La argumentación que se ha formulado, en el sentido de que la Ley N° 57 de 1996 no le es aplicable al Ingeniero Montemayor porque fue electo antes de que la prohibición de la reelección inmediata estuviese vigente, carece de asidero jurídico, pues, ello significaría que el literal a) del artículo 35 de la Ley N° 17 de 1984 estaría vigente para el Ingeniero Montemayor hasta el 3 de febrero de 1998, fecha de toma de posesión del nuevo Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tal razonamiento, sin duda alguna, no puede ser correcto porque, como se ha dicho, la Ley N° 57 de 1996 está vigente para todos sus efectos desde el mes de julio de 1996.

La licenciada Abrego también estima violado el literal c) del artículo 25 del Reglamento de Elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá. Esta norma establece lo siguiente:

> "Artículo 55: Serán causales de impugnación de la elección a Rector, las siguientes: ...
>
> A ser presentadas ante el Gran Jurado:
> ...
> c. Los errores en el cómputo de votos o en la distribución de las ponderaciones;...

En opinión del apoderado judicial del actor, la infracción del precepto transcrito se dio porque el Gran Jurado de Elección de la Universidad Tecnológica de Panamá, al confeccionar el Acta Final que contiene los resultados de la elección del Rector, consideró los votos emitidos a favor del Ingeniero Héctor Montemayor, a pesar de tener pleno conocimiento de que la participación del mismo como candidato en el proceso electoral no era válida, puesto que la reelección le estaba prohibida.

II. OPINION DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración emitió concepto mediante Vista N° 163 del 28 de abril de 1998. Según la representante del Ministerio Público, la infracción del artículo 35 de la Ley N° 17 de 1984, modificado por el artículo 3 de la Ley N° 57 de 1996 no se ha dado, ya que esta norma surte sus efectos hacia el futuro, de manera que la admisión de éste en el proceso eleccionario de la Universidad Tecnológica de Panamá se dio conforme a una interpretación

adecuada del artículo 3 de la Ley N° 57 de 1996.

Según la señora Procuradora, "el literal a, del artículo 3 de la Ley 57 de 1996, contiene la inflexión verbal "será", motivo por el cual dicho mandato sólo es aplicable para los Rectores de la Universidad Tecnológica que sean elegidos con posterioridad a la vigencia de la Ley 57 de 1996, es decir, luego de que sea sancionada y promulgada en la Gaceta Oficial". Agrega, que al mencionado literal a) del artículo 3 de la citada Ley no se le puede atribuir retroactividad, toda vez que esta normativa rige para situaciones futuras, que se produzcan después de la entrada en vigencia de dicha norma, la cual está fijada por el artículo 19, a partir de su promulgación. Por ende, el literal a) ibídem, es una disposición que no tiene carácter de orden público o de interés social, por lo que no se puede aplicar a las personas y situaciones jurídicas ya constituidas al momento de su vigencia.

En cuanto a la alegada infracción del literal c) del artículo 25 del Reglamento de Elección del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, la Procuradora de la Administración sostiene que éste tampoco se ha infringido porque el Gran Jurado de Elecciones de ese centro de estudios superiores ponderó y computó adecuadamente los votos emitidos para la elección de Rector. Además, la participación del Ingeniero Montemayor en ese torneo es legal, hasta tanto la Sala Tercera decida lo contrario.

Por los anteriores razonamientos, la señora Procuradora pidió a la Sala Tercera que niegue las pretensiones del actor.

Cabe señalar, que mediante nota fechada 13 de marzo de 1997, el Presidente del Gran Jurado de Elecciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, rindió su informe de conducta (Cfr. fs. 38-39).

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA TERCERA

El problema jurídico sometido al análisis y decisión de la Sala consiste en determinar si la prohibición de reelección inmediata introducida por el artículo 3 de la Ley 57 de 26 de julio de 1996, que modificó el literal a) del artículo 35 de la Ley 17 de 1984,era o no aplicable al ingeniero Héctor Montemayor, en el momento en que éste se postuló como candidato a Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá para el período 1998-2003.

Para comprender mejor el problema planteado es preciso señalar, en primer lugar, que antes de las modificaciones introducidas en 1996 al precepto legal citado por la Ley 57, el Rector de la Universidad Tecnológica podía reelegirse para el período inmediatamente posterior y por una sola vez. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 17 de 1984, dicho funcionario era elegido por el Consejo General Universitario, cuerpo colegiado cuya integración está establecida en el artículo 11 de la misma Ley, en los siguientes términos:

> "ARTÍCULO 11: El Consejo General Universitario es el máximo órgano de gobierno y estará integrado de la siguiente forma:
>
> a. El Rector, quien lo presidirá;b. El Vice-Rector Académico, quien presidirá en ausencias temporales del Rector;
> c. El Vice-Rector de Investigación, Post-Grado y Extensión;
>
> ch.Los Decanos de las Facultades;
>
> d. El Coordinador General de los Centros Regionales;
>
> e. El Secretario General que actuará como Secretario del Consejo, con derecho a voz;
>
> f. El Director de Planificación Universitaria, con derecho a voz;
>
> g. El Director de Bienestar Estudiantil, con derecho a voz;

h. Dos (2) Representantes de Centros de Investigación, Post-Grado y Extensión;

i. Dos (2) representantes de los empleados administrativos;

j. Los Directores de Institutos y Centros de Investigación, Post-Grado y Extensión;

k. Los Directores de los Centros Regionales;

l. Un (1) profesor por cada uno de los Centros Regionales, elegidos entre ellos;

ll. Tres (3) profesores por cada una de las Facultades elegidos entre ellos;

m. Un (1) estudiante por cada uno de los Centros Regionales, elegidos entre ellos; y,

n. Dos (2) estudiantes por ada una de las Facultades, elegidos entre ellos;"

Con la expedición de la mencionada Ley 57 de 26 de julio de 1996, la situación planteada cambió radicalmente. Primero, porque el literal a) del artículo 35 de la Ley 17 de 1984, tal como quedó modificado, prohibió la reelección del Rector "para el período inmediatamente posterior al cual se le eligió". Segundo, porque el restringido e indirecto sistema de elección que imperaba hasta ese momento fue sustituido por un sistema verdaderamente democrático, caracterizado por la votación directa, secreta y ponderada de todos los estudiantes, profesores, investigadores y empleados administrativos. El artículo 36 de la Ley 17 de 1984, modificado por el artículo 4 de la Ley 57 ibídem, estableció el nuevo sistema de votación en los siguientes términos:

"Artículo 36. El Rector es el Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá y será elegido mediante votación directa, secreta y ponderada por estudiantes, profesores, investigadores y empleados administrativos.

La elección para el período normal se efectuará, como mínimo, dos meses antes de que termine el correspondiente período del Rector en ejercicio.
..."

Ahora bien, como quedó dicho antes, lo que procede determinar es si la prohibición de reelección aludida afectaba o no al ingeniero Montemayor para el momento en que éste se postuló como candidato a Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá para el período 1998-2003.

Lo primero que cabe expresar a este respecto, es que la frase "no reelegibles", inserta en el literal a) del artículo 35 de la Ley 17 de 1984, citada como fundamento medular de la pretensión del actor, no debe interpretarse aisladamente, sino de forma conjunta con el resto del precepto que la contiene, al igual que con los preceptos pertinentes de la Ley 17 de 1984. Incluso, cabría agregar, que dicha interpretación debe hacerse con arreglo al "principio de interpretación conforme a la Constitución Política", reconocido por reiterada jurisprudencia tanto de esta Sala como del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Al interpretar de forma integral el contenido del precepto citado, se observa que en el mismo se emplea la frase el "El Rector será electo...", lo cual, sin la menor duda, hace referencia a una futura elección del Rector de la Universidad Tecnológica, que en efecto se realizó en 1998 de acuerdo con el nuevo sistema de elección establecido por el artículo 4 de la Ley 57 de 1996, que modificó el artículo 36 de la Ley 17 de 1984. En esta elección participaron

estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo mediante votación directa y secreta, la cual fue ponderada de acuerdo con la tabla de porcentajes establecida en el artículo 9 de la Ley mencionada Ley 57.

Cabe agregar, que la flexión verbal "será" utilizada en el precepto bajo examen, implica que éste precepto surte efectos jurídicos hacia el futuro. Esta interpretación de la Sala es conforme con el artículo 43 de la Constitución Política, que consagra el conocido "principio de irretroactividad de las leyes". De acuerdo con este principio constitucional, las leyes, por regla general, surten efectos hacia el futuro, es decir, que se dictan para regular o normar situaciones jurídicas acaecidas después de su entrada en vigencia. Empero, excepcionalmente, pueden regular y afectar situaciones ocurridas antes de su promulgación, esto es, pueden tener efectos retroactivos, para lo cual deben cumplirse los presupuestos consignados en dicho precepto, es decir, debe tratarse de leyes o normas de orden público o de interés social y su carácter retroactivo debe estar expresamente previsto.

De todos estos razonamientos se desprende, entonces, que la prohibición de reelección consignada en el tantas veces citado literal a) del artículo 35 de la Ley 17 de 1984 (artículo 4 de la Ley 57 de 1996), sólo podía aplicarse a los Rectores elegidos después de la entrada en vigencia de la Ley.

En el caso objeto de examen, es un hecho notorio y público y así lo acepta la licenciada Ábrego en el hecho cuarto de su demanda (Cfr. f. 18), que el ingeniero Héctor Montemayor fue elegido por el Consejo General Universitario para ejercer el cargo de Rector durante el período comprendido entre febrero de 1993 a febrero de 1998. Es decir, que la elección de dicho funcionario no sólo se realizó antes de que entrara a regir la Ley 57 de 1996, sino que, además, se hizo en base a un sistema de votación totalmente distinto al que imperaba hasta ese momento. Siendo ello así, la conclusión lógica y jurídica es que la prohibición de reelección contenida en el literal a) del artículo 35 de la Ley 17 de 1984, modificado por el artículo 3 de la Ley 57 de 1996, no era aplicable al ingeniero Montemayor en el momento en que éste se postuló como candidato a Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá para el período 1998-2003.

Con relación al criterio esbozado por la Sala, el constitucionalista panameño César Quintero, al absolver consulta formulada por la Dirección de Asesoría Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, expresó en Nota de 2 de junio de 1997,lo siguiente:

> "He subrayado la flexión verbal "será", contenida en el nuevo artículo, a fin de reafirmar que éste, como es normal, rige para el futuro. Por tanto, sólo estarán sometidos a dicho precepto legal los Rectores de la Universidad Tecnológica elegidos después de la vigencia de la referida Ley 57 de 1996. Esta fue sancionada por el Ejecutivo el 26 de julio de 1996 y entró en vigencia luego de ser promulgada (Artículo 19 de la Ley 57 de 1996).
>
> A este respecto es preciso advertir que el actual Rector de la Universidad Tecnológica fue elegido en octubre de 1992 y tomó posesión del cargo en febrero de 1993. Es decir, varios años antes de que fuese dictada, sancionada y promulgada la Ley 57 del 26 de julio de 1996. Por tanto, no le pueden ser personalmente aplicadas las restricciones y modalidades electorales introducidas por la citada Ley 57 de 1996.
> ...
>
> Por todo lo expuesto, lo lógico y jurídico es deducir que el artículo de la comentada Ley reformatoria, según el cual el Rector de la Universidad Tecnológica no será reelegido para el período inmediatamente siguiente, sólo es aplicable a quien haya sido reelegido para el período inmediatamente siguiente, sólo es aplicable a quien aya sido elegido Rector de dicha Universidad a

> partir de la vigencia de la referida Ley 57 de 26 de julio de 1996. En consecuencia, el actual Rector de la Universidad Tecnológica puede ser candidato para el mismo cargo en las elecciones que se celebrarán en uno de los últimos meses el presente año; y, si resultare elegido, puede asimismo tomar posesión del cargo para el siguiente período, en febrero de 1998."
>
> (Cfr. Proceso contencioso-administrativo de nulidad, ELÍAS MENDOZA contra el acto de admisión de la postulación del ingeniero Héctor Montemayor como candidato a Rector de la Universidad Tecnológica para el período 1998-2003, Entrada 478-97 fs. 67-69).

Como corolario de todo lo expuesto, la Sala debe indicar que como al ingeniero Héctor Montemayor no le era aplicable la restricción establecida en el literal a)del artículo 35 de la Ley 17 de 1984, este podía participar válidamente como candidato a Rector de la Universidad de Panamá para el período 1998-2003. En consecuencia, su proclamación como Rector Electo de ese centro de estudios superiores para el período 1998-2003 es legal, por lo cual procede negar las pretensiones del demandante.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: QUE NO SON ILEGALES el Acta de proclamación del ingeniero Héctor Montemayor como Rector Electo de la Universidad Tecnológica de Panamá para el período 1998-2003, emitida por el Gran Jurado de Elecciones de dicha Universidad; el Acta Final que contiene el Resultado de dicha Elección ni los votos emitidos en dicha elección a favor del ingeniero Héctor Montemayor. SE NIEGA el resto de las declaraciones pedidas.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROBINSON BERNAL PERALTA, EN REPRESENTACIÓN DE SANTA ISABEL CORTEZ CORTEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTARTIVO CONTENIDO EN LA RESOLCUIÓN NO. D.N. 031-99 DE 2 DE MARZO DE 1999, PROFERIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Robinson Bernal Peralta, actuando en nombre y representación de SANTA ISABEL CORTEZ CORTEZ, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la resolución No. D.N. 031-99 de 2 de marzo de 1999, proferida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El licenciado Bernal solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. D.N. 031-99 de 2 de marzo de 1999, proferida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en los siguientes términos:

> "Solicito se suspenda provisionalmente los efectos de la Resolución No. D.N. 031-99 de 2 de marzo de 1999, confirmada en reconsideración

por la Resolución No. D.N.279-99 de 9 de agosto (sic) 1999, ambas emitidas por la Dirección Nacional de Reforma Agraria; y confirmada en Apelación por la Resolución N°022-RA-2000 de 24 de abril del 2000, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, mediante la cual se autoriza al señor MARCELINO GONZALEZ a que solicite la adjudicación del lote de terreno ubicado en la localidad 24 de Diciembre ubicada en el Corregimiento de Pacora, Distrito y Provincia de Panamá, constante de 0 Has. + 0.409.47 metros cuadrados.

La Reforma Agraria cumpliendo los trámites y términos de una solicitud de adjudicación en un período de tres meses, concede la propiedad para su respectiva inscripción en el Registro Público, de ser así, al fallarse de manera definitiva la presente DEMANDA, el señor MARCELINO GONZALEZ SAMANIEGO, tendrá debidamente inscrito el título de propiedad del lote en conflicto; ello tendrá como consecuencia, que de acogerse la ilegalidad recurrida, la señora SANTA ISABEL CORTEZ, en su condición de madre soltera, sin los recursos económicos suficientes para asumir los costos de un proceso, tenga que accionar contra el título inscrito sobre el lote que le disputa el padre de su única hija CLARISSA ITZEL GONZALEZ CORTEZ. Es por ello, su señoría que ruego que a momento de valorar la Resolución N°D.N.031-99 de 2 de marzo de 1999 expedida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria y la declaración de la señora Magnolia Cuesta de Mejía, que dan claridad que el señor GONZALEZ no solicitó a su nombre la Solicitud a su nombre la Solicitud de Adjudicación N°8-435-94 de 24 de octubre de 1994; así como las certificaciones del Registro Público que el Lote en disputa es tierra adquirida a título oneroso por el Estado, para resolver la demanda de vivienda de precarista que la ocupan, y certificación que hace contar que la señora CORTEZ no tiene tierra; pruebas en la cual basamos la presente solicitud, acceda a lo pedido."

A juicio de quienes suscriben el demandante no ha probado en forma específica los perjuicios que puede sufrir, ni que los mismos sean de difícil o imposible reparación, requisito indispensable según lo establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 y tal como lo ha reiterado esta Sala en jurisprudencia constante y reiterada en esta materia.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la petición de suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. D.N. 031-99 de 2 de marzo de 1999, proferida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ GONZÁLO MONCADA LUNA, EN REPRESENTACIÓN DE RALKA INVESTMENT CORP., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 20-97 D.D. DE 10 DE OCTUBRE DE 1997, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. José Gonzalo Moncada Luna, actuando en representación de RALKA INVESTMENT CORP., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Resolución N°20-97 D.D de 10 de octubre de 1997, dictada por el Director General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado se resuelve "ordenar que la totalidad de la Devolución del Depósito N°61605, correspondiente al Contrato N°6637 del 26 de junio de 1996 por la suma de NOVECIENTOS BALBOAS (B/.900.00) sea entregada a favor del Arrendatario, SR. JANSON FRANCE EDWARS, en relación al alquiler del apartamento N°14-B del Edificio Beverly Hills, ubicado en Calle Cartagena, Corregimiento de Bethania, cuya arrendadora es la señora Alicia Vargas".

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal, la Resolución N°20-97 D.D. de 10 de octubre de 1997, dictada por el Director General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda y, de igual modo se solicita que se declare la ilegalidad de la Resolución N°116-97, fechada el 23 de diciembre de 1997, por medio de la cual se confirma en todas sus partes la Resolución N° 20-97 D.D., que fue dictada por el Ministro de Vivienda. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se solicita que se ordene la entrega inmediata de la devolución del depósito al Arrendador o Representante Legal Alicia Vargas Salazar en relación al alquiler del departamento.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción se destaca que en el Anexo del Contrato de Arrendamiento N°6637, el arrendatario se comprometió a avisar por escrito al arrendador y, la Dirección General de Arrendamientos conceptúa erróneamente que "el silencio de la arrendadora", frente a las diligencias realizadas por el arrendatario, a fin de cumplir con los requisitos de Ley, es un indicio en su contra, ya que en ningún momento ha demostrado de manera evidente, que lo expresado por el ex-arrendatario no sea cierto, por cuanto lo declarado por los testigos confirman lo manifestado por el señor JANSON FRANCE EDWARS en su demanda.

Como disposiciones legales infringidas figuran el artículo 10 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973 y el artículo 1107 del Código Civil que en su texto expresan:

> "ARTICULO 10: El término de duración y el de prórroga del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles destinados para habitación será obligatorio para el arrendador y renunciable para el arrendatario en cualquier tiempo, sin otra obligación que la de dar al arrendador aviso previo escrito no menor de treinta (30) días calendarios precedentes a la desocupación de la vivienda arrendada.
>
> Cuando el arrendatario omita total o parcialmente el aviso previo de que trata este artículo, la Dirección General de Arrendamiento previa investigación y con audiencia del arrendador de la parte del depósito proporcional al número de días dejados de avisar o a la totalidad del depósito si el aviso se omitió completamente."
>
> "ARTICULO 1107: La validez y cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes".

Según el representante de la parte actora, el artículo 10 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, presupone "una obligación, una modalidad y un término". A su juicio, la notificación por parte del arrendatario no cumplió debidamente lo especificado en la norma, puesto que la notificación por parte del arrendatario al arrendador no se hizo en la forma y dentro del término contemplado en la norma. En cuanto a la omisión a la forma, sostiene que omitió el requisito fáctico y los sustituyó por la declaración de una testigo.

En cuanto al artículo 1107 del Código Civil, el representante de la parte actora es del criterio que se violó de manera directa por omisión, dado que se pasó por alto lo expuesto en la cláusula décima del contrato, donde se contempla la obligación del arrendatario de dar aviso previo por escrito, no menos treinta (30) días calendarios precedentes a la desocupación. Según el Lcdo. Mocanda Luna, la Dirección General de Arrendamientos y el Ministerio de Vivienda han hecho nugatoria la validez y cumplimiento del contrato, dejándolo al arbitrio del arrendatario.

II. El informe explicativo de conducta rendido por la Directora General de Arrendamientos y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

La Directora General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, en Nota N° 7100-469-98 de 24 de marzo de 1998, rindió el respectivo informe explicativo de conducta en el que destaca que ante esa Dirección se presentó el Lcdo. Roberto A. Cueto Cisneros, actuando en representación de JANSON FRANCE EDWARD, solicitud de devolución de depósito por la suma de novecientos balboas (B/.900.00) allí entregados, al registrar el contrato de arrendamiento N° 6637, según recibo N°61605 de 26 de junio de 1996 por el alquiler del apartamento N°14 del Edificio Beverly Hills, ubicado en Calle Cartagena, Corregimiento de Bethania. También señala que luego de acogida la solicitud, se dio traslado a la demandante RALKA INVESTMENT CORP., representada por ALICIA VARGAS SALAZAR, quien contestó en el término conferido por la Ley, a través de su Apoderado, José Antonio Henríquez. La Resolución N° 20-97 D.D. de 10 de octubre de 1997, se expidió luego de efectuar la audiencia correspondiente ante los apoderados de las partes. Contra la Resolución N°20-97 D.D., se interpuso en tiempo oportuno recurso de apelación, mismo que fue resuelto mediante la Resolución N° 116-97 de 23 de diciembre de 1997, en la que se confirma en todas sus partes la primera resolución.

Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista Fiscal N° 258-98 de 7 de julio de 1998, que es visible de fojas 34 a 40 del expediente, se opone a los criterios expuestos por la parte demandante, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. A su criterio, hubo mala fe por parte de la empresa arrendadora, ya que a sabiendas de la intención del arrendatario de desocupar el bien inmueble se negaron a notificarse en tiempo oportuno de la desocupación y luego proceder a la devolución del depósito al arrendatario. Señala la Procuradora de la Administración, que de las constancias procesales se aprecia que dilataron dicha notificación para afirma que el arrendatario no había cumplido con el plazo de treinta (30) días previos a la desocupación del inmueble y con ello negarle el derecho al depósito dado por razón del contrato de arrendamiento.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

El acto demandado es la Resolución N° 20-97 D.D. de 10 de octubre de 1997, dictada por el Director General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, en la que se resuelve ordenar que la totalidad de la devolución del depósito N°61605, correspondiente al Contrato N°6637 de 26 de junio de 1996 por la suma de novecientos balboas (B/.900.00) sea entregada a favor del Arrendatario, Sr. Janson France Edward, en relación al alquiler del apartamento N°14-B del Edificio Beverly Hills, ubicado en Calle Cartagena, Corregimiento de Bethania, cuya arrendadora es la señora Alicia Vargas. La parte actora demanda la nulidad del acto en referencia y para ello argumenta que la notificación de la desocupación del inmueble no se ajustó ni la forma ni al tiempo que contempla la Ley, razón por la que la Dirección General de Arrendamientos ha hecho nugatoria la validez y cumplimiento del contrato al dejarlo al arbitrio del arrendatario.

Para resolver es oportuno manifestar a manera de antecedente, que según consta en autos el señor Janson France Edward, de nacionalidad norteamericana, suscribió el 29 de junio de 1996., el Contrato de Arrendamiento N°6637 por un año

con la empresa Ralka Investment Corp., representada por la señora Alicia Vargas Salazar, sobre el Apartamento 14B, del Edificio Beverly Hills, ubicado en Calle Cartagena, Corregimiento de Bethania, con un canon de arrendamiento de B/.900.00 mensuales, pagaderos dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes (Ver foja 7). Igualmente en el expediente administrativo consta la solicitud de devolución de depósito, que por medio de su representante legal, el señor Janson Edward hiciera ante la Dirección General de Arrendamientos, y en la misma destaca que hizo ingentes esfuerzos para notificar a la representante del arrendador (Ralka Investment Corp), señora Alicia Vargas, y logró la notificación mucho tiempo después. Por su parte, el apoderado de RALKA INVESTMEMT CORP., se opuso a los criterios expuestos por el recurrente, y argumentó que el arrendatario no respetó la cláusula décima del contrato, al no avisar al arrendador con treinta (30) días de anticipación.

Una vez analizadas las normas invocadas como infringidas y los argumentos que la sustentan, conjuntamente con el resto de la documentación que reposa en el expediente, la Sala concluye que no le asiste la razón a la parte actora. Ello es así, puesto que a fojas 40 a 42 del expediente administrativo, figuran las declaraciones de Edubina Sima E., Administradora del Edificio Beverly Hills; María del Carmen de Amato, Gerente de la empresa Bienes Raíces Segubienes, empresa que contactó al señor France y Lydia C. de Fonseca, de Housing Referral Oficce, todos coincidentes en que el señor France intentó notificar la desocupación del inmueble a tiempo, pero el señor Moncada y su representada se negaron a notificarse oportunamente. Por ello, la Dirección General de Arrendamiento resolvió a través de la Resolución N° 20-97 D.D. de 10 de octubre de 1997, conceder la devolución del depósito, una vez se determinó que se cumplió con la entrega del departamento arrendado en condiciones óptimas, así como el pago de los alquileres de los meses vividos y el agotamiento de las diligencias para dar aviso previo a la arrendadora.

Ante lo expuesto y dado que el recurrente no logra desvirtuar las anteriores apreciaciones que fueron el fundamento para la expedición del acto que se demanda, lo procedente entonces es no acceder a las pretensiones formuladas en la demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 20-97 D.D. de 10 de octubre de 1997, dictada por el Director General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, como tampoco lo es su acto confirmatorio contenido en la Resolución N° 116-97 de 23 de diciembre de 1997, expedida por el Ministro de Vivienda.

Notifiquese y Cumplse.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. TEÓFANES LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ZACARIAS URRIOLA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°D.N.016 DE 26 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE LA REFORMA AGRARIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Teófanes López, actuando en representación de ZACARIAS URRIOLA,

ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal la Resolución N° D.N.016-96 de 26 de marzo de 1996, dictada por el Director Nacional de la Reforma Agraria, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto impugnado se resuelve:

"PRIMERO: Reconocer como en efecto reconoce derecho a favor de AMINTA RODRIGUEZ DE CASANOVA Y CARLOS RODRIGUEZ, respectivamente, sobre los predios N°1 y 2 ilustrado en el croquis N°9-846 cuyos linderos y superficie son los siguientes:

PREDIO N°1:
LINDEROS: NORTE: Antigua servidumbre de acceso a los predios N°1 y N°2 área ocupada por ZACARIAS URRIOLA fuera de la finca de su propiedad distinguida con el N° 812, Tomo 174, folio 84.

SUR: ZACARIAS URRIOLA.
ESTE: ZACARIAS URRIOLA, según plano 297, finca 812, tomo 174, folio 84.
OESTE: Río San Juan.
Superficie Planimetrada: 1 hectárea más 2,300 metros cuadrados.

PREDIO N°2:
LINDEROS:NORTE: Predio N°1 anteriormente descrito.
SUR: ZACARIAS URRIOLA.
ESTE:ZACARIAS URRIOLA según plano 297, finca 812, tomo 174, folio 84.
OESTE: Río San Juan.

SEGUNDO: Ordenar a AMINTA RODRIGUEZ DE CASANOVA y a CARLOS RODRIGUEZ que formalicen sus solicitudes de adjudicación sobre los respectivos predios.

TERCERO: Ordenar a ZACARIAS URRIOLA que formalice su solicitud de adjudicación sobre el terreno que ocupa fuera de la finca 812 de su propiedad.

CUARTO: Advertir a las partes que contra la presente Resolución proceden los Recursos Reconsideración y Apelación pero ante el Director Nacional de Reforma Agraria y el Ministro de Desarrollo Agropecuario, respectivamente, los cuales deberán interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación personal o de la fijación del Edicto si hubiere lugar a ello."

En cuanto a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el acto demandado, luego de practicada las diligencias necesarias, se expuso que los predios N°1 y N°2 que se encuentran en conflicto con ZACARIAS URRIOLA Y AMINTA RODRIGUEZ DE CASANOVA y CARLOS RODRIGUEZ, respectivamente, se encuentran fuera de la finca N°812 de propiedad de ZACARIAS URRIOLA, conforme aparece ilustrado en el croquis N°9-846. De igual manera se señala que estos predios fueron adquiridos por JUAN RODRIGUEZ, padre de AMINTA Y CARLOS RODRIGUEZ, mediante compra que efectuó a ANGEL MARIA CABALLERO y a ESTANISLAO TEJADA ROSALES, respectivamente; inicialmente el señor Juan Rodríguez ejerció la posesión y luego de su fallecimiento sus hijos. Finalmente se apunta que los predios N°1 y N°2 no están comprendidos dentro de la Finca N°812 de propiedad de ZACARIAS URRIOLA por tanto, son tierras estatales al igual que la porción que ocupa ZACARIAS URRIOLA que colinda con el lado norte del predio N°1.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal la Resolución N° D.N. 016-96 de 26 de marzo de 1996, dictada

por el Director Nacional de Reforma Agraria. Que es nula por ilegal la Resolución N°052-RA-97 de 16 de octubre de 1997, dictada por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, por medio de la cual este funcionario resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución N° D.N. 016-96 de 26 de marzo de 1996. Finalmente solicita que como consecuencia de las declaraciones anteriores, el señor Zacarías Urriola, por haberle trabajado y dado un uso social a la tierra, tiene derecho a que se le adjudique la porción de terreno que ocupa fuera de la Finca N° 812, inscrita al tomo 174, folio 84 de su propiedad.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción se destaca que el señor Zacarías Urriola es propietario de la finca distinguida con el N°812, inscrita al tomo 174, folio 84; pero además de ello ha venido ocupando y trabajando por más de 15 años dos globos de terreno colindantes, identificados por la Reforma Agraria como lote N° 1 y lote N°2. También se afirma que el señor Hugo Casanova, esposo de la señora Aminta Rodríguez, suscribió (no la interesada) una queja ante la Región N°2 de la Dirección Nacional de Reforma Agraria expresando que el señor Urriola levantó mesura en el lugar conocido como Llano Arriba e incluyó dentro de la misma un terreno que le pertenece a su esposa, la cual según el quejoso, tiene alrededor de 24 años de estar ocupando. La Administración de la Reforma Agraria, según lo expuesto, levantó un expediente y le dio trámite a dicha queja, incurriendo en irregularidades procesales debido a que sin que la señora Aminta Rodríguez hubiera suscrito la queja, la acogió y la tuvo como demandante y se incluyó a Carlos Rodríguez, quien se tuvo como parte actora sin haber presentado queja. No obstante, al rendir sus declaraciones, manifestaron que no tenían la posesión de estos terrenos por más de quince años, porque el señor Zacarías Urriola se apoderó de estos terrenos con violencia y, a ello añadieron que el terreno en disputa perteneció al señor Juan Tejada y Angel María Caballero quienes se lo vendieron a Juan Rodríguez, su padre, pero jamás presentaron prueba de ello. Otros testigos, según quien recurre, acordaron de forma precisa que dichos terrenos los ocupaba y trabajaba el señor Zacarias Urriola y, pese a ello la Dirección de Reforma Agraria dictó la Resolución N° D.N. 016-96 de 26 de marzo de 1996, mediante la cual se le reconoce a Aminta Rodríguez de Casanova y Carlos Rodríguez, derecho sobre los predios disputados.

Como disposiciones legales alegadas como infringidas, figuran los artículos 133, 134, 139, 79 del Código Agrario y los artículos 425, 431, 434 y 446 numeral 1 del Código Civil, que en su texto expresan:

CODIGO AGRARIO:

> "ARTICULO 133: Las oposiciones a las solicitudes de adjudicación pueden interponerse desde la presentación de la solicitud original hasta la fecha en que sea confirmada la adjudicación. Una vez presentada se suspenderá el curso de la solicitud y se remitirá el proceso al respectivo juez de Circuito de lo Civil o del Tribunal Superior de Justicia, según el caso, donde estuviere ubicado el terreno, para que sustancie la acción, la cual será tramitada de acuerdo con el procedimiento correspondiente al juicio ordinario."
>
> "ARTICULO 134: La oposición podrá hacerse únicamente por el interesado en persona, o por quien exhiba poder bastante suyo. El opositor será actor en el juicio a que dé lugar una oposición."
>
> "ARTICULO 139: A partir de la vigencia del presente Decreto Ley no se reconocerán derechos posesorios a quienes ocupen tierras estatales en cualquier forma sin que estas tierra cumplan su función social."
>
> "ARTICULO 79: Los terrenos adjudicados gratuitamente revertirán a la Comisión de Reforma Agraria si el adjudicatario, cinco (5) años después de la adjudicación, no mantiene la propiedad cumpliendo su función social, al tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de este Código."

"ARTICULO 425: La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso que llegue a adquirirse la herencia."

CODIGO CIVIL:

"ARTICULO 431: La posesión, como hecho, no puede reconocerse en dos personas distintas, fuera de los casos de indivisión. Si sugiere contienda sobre el hecho de la posesión, se considerará como mejor posesión, la que se funde en título legítimo; a falta de éste o en presencia de títulos iguales, la posesión más antigua; siendo de igual fecha, la actual, y si ambas fueren dudodosas, será puesta la cosa en depósito mientras se decide a quien pertenece."

"ARTICULO 434: El poseedor tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título, y no se le puede obligar a exhibirlo."

"ARTICULO 446: El poseedor puede perder la posesión:

1. Por abandono de la cosa."

El Lcdo. López afirma que el artículo 133 se violó en forma directa por omisión, puesto que pese a que existe controversia o disputa sobre los globos de terreno N°1 y 2, el Director de la Reforma Agraria en vez de suspender el proceso y remitir el expediente a un Juez de Circuito Civil, como lo plantea la norma, continuó con el proceso administrativo y decidió el caso en contra de su representado. También el artículo 134 del Código Agrario se violó, según el demandante, dado que se le dio trámite a una queja que no interpuso la señora Aminta Rodríguez de Casanova, sino su hermano. En cuanto al artículo 79 Y 139 del mismo cuerpo legal, se afirma que fueron violados directamente en la medida que se pasó por alto que su representado trabajó y ocupó la tierra por más de cinco años, por lo que dichos globos han venido cumpliendo la función social.

Con respecto a las disposiciones del Código Civil que se alegan como infringidas, el apoderado judicial de la parte actora medularmente sostiene no se acredita en el expediente que los Lotes N°1 y 2 fueron adquiridos por compra por el señor Juan Rodríguez, padre de Aminta y Carlos Rodríguez, ni que se hubiese efectuado juicio de sucesión, mas si consta que el señor Zacarías Urriola tiene título legítimo sobre el terreno debido a que es el actual poseedor desde hace más de quince años. También señala que los hermanos Rodríguez nunca ejercieron la posesión, por lo que abandonaron sus supuestos derechos.

II. <u>El informe explicativo de conducta expedido por el Director Nacional de Reforma Agraria y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración</u>.

En nota fechada 26 de marzo de 1998, el Director Nacional de Reforma Agraria expidió el respectivo informe explicativo de conducta en el que puso de manifiesto que luego de una investigación realizada dentro del proceso administrativo agrario, producto de la queja presentada contra Zacarías Urriola por los señores Aminta y Carlos Rodríguez, se estableció que los predios 1 y 2 se encontraban fuera de la Finca N°812 de propiedad de Zacarías Urriola, tal como quedó refrendado por el croquis N°9-846 elaborado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mismos que fueron adquiridos por Juan Rodríguez, padre de Aminta y Carlos Rodríguez, mediante compra efectuada a Angel María Caballero y a Estanislao Tejada Rosales. En cuanto a la posesión de esos terrenos, se expresa que originalmente la ejerció Juan Rodríguez y al fallecer sus hijos la continuaron. Estos predios, según el funcionario, no están dentro de la Finca N° 812 de propiedad de Zacarías Urriola, por tanto son tierras estatales, al igual que la porción que ocupa Zacarías Urriola que colinda con el lado Norte del predio N°1.

Finalmente se sostiene que las evidencias aportadas al proceso llevaron al

convencimiento que Aminta y Carlos Rodríguez tenían mejor derecho sobre los predios disputados con excepción de la porción que posee Zacarías Urriola contiguo al predio N°1 ubicada fuera de la Finca 812, propiedad de éste, razón por la que se expidió la Resolución N° D.N.016-96 de 26 de marzo de 1996.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 175 de 13 de marzo de 1998, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones.

A su criterio, del examen de los elementos de convicción que obran el expediente administrativo, se acredita plenamente que la resolución impugnada se dictó bajo la observancia de todos los parámetros legales, ya que los predios N°1 y N°2 en litigio, se encuentran fuera de la Finca B° 812 lo cual justifica la intervención en el conflicto de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, toda vez que los terrenos de los hermanos Rodríguez son tierras estatales cuya distribución y adjudicación le compete a dicho ente administrativo, a tenor de lo que disponen los artículos 95 y 220, numeral 6 del Código Agrario.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

Como se expuso en líneas precedentes, el acto que se demanda es la Resolución N° D.N. 016-96 de 26 de marzo de 1996, dictada por el Director Nacional de Reforma Agraria, en la que se resuelve reconocer derecho a favor de Aminta Rodríguez de Casanova y Carlos Rodríguez respectivamente, sobre los predios N° 1 y 2 cuyos linderos y especificaciones figuran en el croquis N° 9-846 que reposa a foja 66 del expediente administrativo. De igual manera se resuelve ordenar a Aminta Rodríguez de Casanova y a Carlos Rodríguez que formalicen sus solicitudes de adjudicación sobre los predios, así como también se le ordena a Zacarías Urriola que formalice su solicitud de adjudicación sobre el terreno que ocupa fuera de la finca N°812 de su propiedad.

La Resolución N° D.N. 016-96 de 26 de marzo de 1996, se expidió en ocasión de la solicitud formulada por el Lcdo. Miguel Batista, actuando como apoderado legal de Aminta Rodríguez de Casanova y Carlos Rodríguez, para que la Dirección Nacional de Reforma Agraria, por conducto de la Oficina Regional de Reforma Agraria de la Provincia de Veraguas, reconozca el derecho posesorio que asiste a sus representados sobre un globo de terreno de aproximadamente cuatro hectáreas, ubicado en el Paso de los Bustos, Distrito de Calobre, Provincia de Veraguas.

Al confrontar las violaciones alegadas y los argumentos que las sustentan con el acto que se demandada, la Sala estima que la razón no le asiste a la parte actora, puesto que luego de analizadas las piezas procesales que conforman el expediente se advierte que dicho acto es conforme a derecho.

En primer lugar, dentro del expediente figura documentación suficiente que demuestra que los predios N°1 y N°2 en litigio se encuentran fuera de la Finca N°812, propiedad del señor Zacarías Urriola, conforme aparece ilustrado en el plano N° 297 de mayo de 1917, como también en la copia de la foto aérea N° 2228 y en el croquis N°9-846 que figuran de fojas 114 a 116 del expediente administrativo. Ello demuestra entonces, sin lugar a dudas, que estos predios son tierras estatales cuya distribución y adjudicación le compete a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, tal como lo prevé los artículos 95 y 220 numeral 6 del Código Agrario.

Advierte la Sala que las normas del Código Agrario que se invocan como infringidas, aluden a las oposiciones de solicitudes de adjudicación y a la función social que deben cumplir estas tierras para que se reconozcan los derechos posesorios. A juicio de la Sala las violaciones que se alegan a estas disposiciones no se configuran, toda vez que no se demuestra en el expediente que

se hubiese presentado escrito alguno de oposición a la adjudicación presentado por el señor Urriola, acompañado de pruebas que en este caso sería la del título de propiedad de esas tierras; lo que aparece a foja 14 del expediente administrativo es un poder que el señor Zacarías Urriola le otorga al Lcdo.Humberto José Chang, para que lo represente en la controversia agraria que se tramita en contra de los señores Aminta y Carlos Rodríguez, en la Dirección Provincial de la Oficina de Reforma Agraria de la Región de Veraguas. Vale destacar que, por el contrario, según consta en autos los derechos de uso sobre estos predios fueron vendidos al señor Juan Rodríguez, padre de Aminta y Carlos Rodríguez, por los señores Angel María Caballero y Estanislao Tejada Rosales, cuyas declaraciones abiertas figuran a fojas 4 y 5 del expediente administrativo. Se desestiman estos cargos.

Por otro lado, y en cuanto a las violaciones que se aducen a las disposiciones del Código Civil antes citadas, la Sala advierte que según el estudio que llevó a cabo el Departamento de Catastro de la Dirección Nacional de Reforma Agraria que es visible de fojas 61 a 65 del expediente, se deja constancia que, en efecto, el señor Urriola hizo uso de los predios N°1 y 2 aproximadamente desde hace ocho (8) años y no en un lapso de quince (15) años como hace ver el demandante. Siendo ello así, no procede entonces alegar que el señor Zacarías Urriola tiene título legítimo de dominio sobre el terreno en disputa, toda vez que para que se configure la prescripción adquisitiva de dominio, es necesario que la posesión se realice en un lapso de quince años de forma pacífica e ininterrumpida. En cuanto a esto último, en el estudio efectuado por el Departamento de Catastro, se expuso que la utilización de esas tierras en ese lapso de tiempo fue de forma violenta, e incluso se corroboró que en esos predios existían vestigios de alambres de las cercas de los señores Aminta y Carlos Rodríguez. Por tanto, no prosperan estos cargos.

Finalmente, es importante señalar por un lado, que el demandante no demuestra de manera fehaciente que los señores Aminta y Carlos Rodríguez hubiesen abandonado esos predios y, por el otro lado, tampoco demuestra que se haya dado la posesión pacífica y de buena fe sobre esos predios.

En razón de lo antes expuesto, lo procedente es, pues, no acceder a las pretensiones formuladas en la demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° D.N. 016-96 de 26 de marzo de 1996, dictada por el Director Nacional de Reforma Agraria.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA PINZÓN, SANTOS & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE OLIVO AQUILES VANNUCHI, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°263-2000 DICTADA POR EL GERENTE GERERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Pinzón, Santos & Asociados, actuando en nombre y representación

de OLIVO AQUILES VANNUCHI, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 263-2000 de 15 de mayo de 2000, dictada por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional y para que se hagan otras declaraciones.

Al resolver la admisibilidad de la demanda, quien suscribe considera que la misma es inadmisible, ya que se observa que no se agotó la vía gubernativa. Esto es así, puesto que la propia Resolución No. 263-2000 de 15 de mayo de 2000, visible a foja 1 del expediente, señalaba que contra dicha resolución procedían los recursos de reconsideración ante el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional y el de Apelación ante la Junta Directiva de dicha Institución, los cuales no fueron utilizados por el actor. El agotamiento de la vía gubernativa es requisito esencial para ocurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa y se produce cuando se dan los supuestos contemplados en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si éstas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación."

En virtud de que la actora omitió el requisito mencionado su demanda no debe admitirse, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la Pinzón, Santos & Asociados, actuando en nombre y representación de OLIVO AQUILES VANNUCHI, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 263-2000 de 15 de mayo de 2000, dictada por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA CLAUDIA ELBA BÁRCENAS EN REPRESENTACIÓN DE MARIO LUIS BÁRCENAS PÉREZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 180 DE 30 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada Claudia Elba Bárcenas ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de MARIO LUIS BÁRCENAS PÉREZ, para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 180 de 30 de enero de 1996, dictada por el Ministro de Gobierno y Justicia, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a la revisión de la demanda incoada, en vías de determinar si el libelo ha cumplido con los presupuestos procesales para que se haga efectiva su admisión. De inmediato se advierte que la demanda adolece de defectos que impiden imprimirle el procedimiento legal correspondiente.

En primer lugar, se observa que el recurrente no aportó copia del acto impugnado (acto principal), o sea el Resuelto N°180 de 30 de enero de 1996, por medio del cual se ordenó la separación provisional del cargo de Inspector del Departamento de Migración y Naturalización. En este sentido, si bien es cierto, el actor aportó las copias autenticadas de los actos confirmatorios, es decir, el Resuelto N° 140-R-060 de 5 de mayo de 2000 y el Resuelto N° 427-R-138 de 17 de noviembre de 1999, las mismas no poseen constancia de su notificación.

En atención al defecto señalado, el Artículo 44 de la Ley 135 de 1943 indica lo siguiente:

> "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos."

Este Tribunal advierte que este requisito es imprescindible a efectos de poder determinar si la acción ha sido ejercida oportunamente, y que el no cumplimiento de esta formalidad da lugar al rechazo del libelo.

En segundo lugar, esta Superioridad advierte que en el libelo de demanda no se precisaron las causas o los motivos de ilegalidad del acto administrativo, requisito exigido por los artículo 28, numeral 4 y 16 de la Ley 33 de 1946, que a la letra disponen:

> "Artículo 28. Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contendrá:
> ...
> 4. La expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación." (Subrayado del Ponente)

> "Artículo 16. Los motivos de ilegalidad comprenden tanto la infracción literal de los preceptos legales como la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad que haya dictado el acto administrativo, o el quebrantamiento de las formalidades que deben cumplirse y la desviación de poder".

Es menester señalar que, en atención a las normas supra citadas, la finalidad que se persigue, es que el demandante exprese de manera clara y detallada los cargos concretos de ilegalida a fin de que este Tribunal pueda analizar el fondo de los mismos.

Frente a las deficiencias indicadas, quien sustancia no tiene otra alternativa que negarle curso legal a la demanda instaurada, en atención a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que dice:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción."

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por la Lcda. Claudia Elba Bárcenas en representación de MARIO LUIS BÁRCENAS PÉREZ.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO MARIN, EN REPRESENTACIÓN DE GUSTAVO NELSON COLLADO MILAN, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO. 28 DE 7 DE FEBRERO DE 2000, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado EDUARDO MARIN, actuando en representación de GUSTAVO NELSON COLLADO, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo No.28 de 7 de febrero de 2000, dictado por conducto del Ministro de Desarrollo Agropecuario, acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

La resolución administrativa impugnada declaró sin efecto, el nombramiento del señor GUSTAVO COLLADO del cargo que ejercía como Ingeniero Agrónomo en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

La Magistrada Sustanciadora procede a revisar el libelo incoado, en vías de determinar si cumple con los requisitos formales indispensables para su admisión, y en este punto se percata que la demanda adolece de un defecto que impide su curso legal.

En efecto, se observa que el acto administrativo cuya ilegalidad se acusa, no ha sido aportado al proceso en copia idónea, como lo exige el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 en concordancia con el artículo 820 del Código Judicial, toda vez que la copia que se adjunta a la demanda, visible a fojas 1-3, es una copia simple de otra copia que sí fue revestida de un sello de autenticidad, circunstancia que le resta calidad probatoria al documento.

El mismo defecto se advierte en toda la documentación que se adjunta a la demanda, incluyendo las copias que se aportan, tanto del recurso de reconsideración como de lo resuelto por la autoridad demandada agotando la vía gubernativa (fs. 5-10), tratándose siempre de copias fotostáticas simples, sin ningún sello de autenticidad.

Esta Superioridad ha sido constante y enfática al exigir, como requisito indispensable de admisión, que el libelo se acompañe con copias hábiles, tanto del acto acusado con las constancias de su notificación, como de los recursos interpuestos y las decisiones que agotan la vía gubernativa. Es mediante el cumplimiento de tales formalidades, que la Sala puede constatar si el recurso Contencioso Administrativo ha sido presentado dentro del término legal previsto en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

Es conveniente subrayar, que no consta de forma alguna que el recurrente hubiese gestionado ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario que se le compulsaran copias debidamente autenticadas de estos documentos, y que la entidad ministerial las hubiese negado. Tampoco solicitó a quien sustancia, que requiriese al ente demandado la remisión de tales documentos, como lo prevé el artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

En vista a lo anotado, nos vemos precisados a considerar que la demanda incoada no ha cumplido con los requisitos formales que posibilitan su admisión,

por lo que procede negarle curso legal al libelo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado EDUARDO MARIN en representación del señor GUSTAVO NELSON COLLADO.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SONIA ALMENGOR, EN REPRESENTACIÓN DE RICAURTER NOEL PITTI MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 80 DE 30 DE MARZO DE 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA (ARI), EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada SONIA ALMENGOR, actuando en representación de RICAURTER NOEL PITTI, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 080 de 30 de marzo de 2000 dictada por el Administrador General de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Por medio de la resolución administrativa impugnada se destituyó al señor RICAURTER PITTI del cargo que ejercía como Asistente Abogado II en la citada entidad gubernamental.

La Magistrada Sustanciadora procede a revisar el libelo, en vías de determinar si cumple con los requisitos formales indispensables para su admisión, y se percata que la demanda adolece de varios defectos que impiden su curso legal.

En efecto, observa en primer término, que el actor no ha evidenciado el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo como aduce ocurrió en este caso, toda vez que luego de sustentado el recurso de alzada ante la Junta Directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica el día 12 de mayo de 2000, acude ante la Sala Tercera sin aportar copia de la solicitud o certificación que debió requerir, del ente que conoció de la apelación, en el sen-tido de que no se había producido pronunciamiento alguno en relación al recurso administrativo presentado.

La Sala Tercera ha reiterado que el cumplimiento de aquella formalidad permite determinar, efectivamente, que se ha producido negativa tácita o silencio administrativo, agotándose la vía gubernativa.

Observamos por otra parte, que el libelo tampoco cumple adecuadamente con los requisitos formales contenidos en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, al no categorizar ni exponer ordenadamente, las menciones que ha de contener la demanda. Se omite por completo la designación del funcionario demandado, y la mención de la Procuradora de la Administración, quien actúa en este proceso como

defensora del acto acusado.

Finalmente advertimos, que el demandante no ha invo-cado de manera concreta, la violación de ninguna norma de rango legal en este caso. Si bien el legajo hace referencia a ciertas disposiciones legales, en ningún caso explica en qué concepto pudieron ser infringidos dichos textos, dentro de los que se incluye además una norma de rango constitucional como aplicable a solución de la controversia, lo que es totalmente improcedente en los procesos contencioso administrativos.

En vista de las deficiencias anotadas, lo procedente es negarle curso legal al libelo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la Licenciada SONIA ALMENGOR en representación del señor RICAURTER NOEL PITTI MORALES.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ICAZA, GONZALEZ-RUIZ Y ALEMAN, EN REPRESENTACIÓN DE DUWEST PANAMA S. A. (ANTES AGROQUIMICOS INTEGRADOS DE CENTROAMERICA S. A.), PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 210-1168 DEL 30 DE JULIO DE 1997, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado ALVARO ALEMAN de la firma forense ICAZA, GONZALEZ-RUIZ Y ALEMAN, actuando en representación de la empresa DUWEST PANAMA S. A. (antes AGROQUIMICAS INTEGRADAS DE CENTROAMERICA (Panamá) S. A., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 210-1168 de 30 de julio de 1997 dictada por el Director General de Ingresos, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La resolución administrativa impugnada declaró improcedente la solicitud de devolución del Depósito de Garantía No.33963 del 23 de junio de 1995, por la cantidad de B/.2,842.00 a nombre de la Compañía AGROQUIMICAS INTEGRADAS DE CENTROAMERICA (Panamá) S. A., al señalarse que el monto consignado en el Depósito correspondía a un recargo por la no presentación de la documentación de la mercancía al momento de su retiro.

I. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

A juicio de la parte actora, el acto administrativo en mención infringe los artículos 1; 2; 5 y 6 de la Ley 16 de 1979 "Por la cual se crea la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro"; el artículo 8 del Decreto de Gabinete No.30 de 22 de octubre de 1994 "Por el cual se establece el Sistema de Despacho de Mercaderías con Pago Garantizado"; los artículos 446 y 447 del Código Fiscal, y los artículos 752 y 756 del Código Administrativo.

En lo atinente a la presunta violación de las disposiciones contenidas en el Ley 16 de 1979, esta Superioridad se inhibe de su conocimiento, toda vez que el actor no sustenta los cargos endilgados, ni presenta el concepto en que se ha producido dicha infracción legal.

Las restantes violaciones debidamente sustentadas, se presentan de la siguiente manera:

a) La violación del artículo 8 del Decreto de Gabinete No.30 de 22 de octubre de 1994

El Decreto de Gabinete No. 30 de 1994 establece el Sistema de Despacho de Mercaderías con Pago Garantizado.

Su artículo octavo preceptúa:

> "Artículo 8. Cuando las disposiciones legales así lo exijan y al consignatario no le fuere posible presentar la factura consular o comercial o ambas facturas, debidamente juramentadas y certificadas por el respectivo Cónsul, se incluirá en el monto del Depósito de Garantía un recargo equivalente al 5% del valor aduanero gravable, sin que en ningún caso ese recargo pueda ser inferior a B/.20.00 (veinte balboas)"

La norma se dice violada en concepto de indebida aplicación, puesto que la mercancía retirada con el Depósito de Garantía era de "Libre importación", por lo que no existía valor aduanero gravable sobre el cual imponer el recargo.

b) la violación de los artículo 446 y 447 del Código Fiscal

Advierte la Sala, que estos artículos sufrieron sustanciales cambios introducidos por la Ley 36 de 1995, que incluso derogó el artículo 447 del Código Fiscal.

No obstante, aquella normativa se encontraba vigente al momento de la expedición del acto impugnado, por lo cual es procedente el examen de dichos cargos, en razón de la eficacia residual (ultraactividad) de que gozan.

El artículo 446 del Código Fiscal establecía básicamente, que toda mercadería que se enviara a la República de Panamá proveniente del extranjero, por conducto distinto del correo, debía presentar para su certificación al Cónsul de Panamá o quien lo subrogara en el puerto de embarque, los siguientes documentos: 1- factura comercial; 2-factura consular; 3-conocimiento de embarque; y 4-permiso respectivo en casos de importaciones restringidas.

Por su parte, el Parágrafo del artículo 447 ibídem establecía que las mercaderías que llegasen al país sin estar amparadas por los documentos de embarque a los que aludía el artículo 446, pagarían un recargo de 5% a/y (sic) sin que en ningún caso ese recargo pudiese ser inferior a B/.20.00 balboas.

El recurrente considera que ambas normas han resultado vulneradas en este caso, en primer término porque el artículo 446 sólo enuncia los documentos de embarque que deben acompañar las mercaderías, pero no constituye fundamento legal para negar la devolución de un Depósito de Garantía. Por su parte, el recargo a que hace referencia el artículo 447 del Código Fiscal debe entenderse, a juicio del actor, como recargo al impuesto de importación, por lo que si la mercadería es de libre importación el recargo resulta en cero.

c) La violación de los artículos 752 y 756 del Código Administrativo.

Las normas en cuestión establecen respectivamente, que las autoridades de la República han sido instituidas para proteger a los residentes en Panamá, en su vida honra y bienes, y que a los empleados nacionales no se le imponen deberes

sino por leyes, por reglamentos del Poder Ejecutivo y por órdenes de sus respectivos superiores.

Argumenta el demandante, que las normas comentadas han resultado transgredidas en forma directa, puesto que la negativa de devolver un Depósito de Garantía afecta el patrimonio de la empresa AGROQUIMICAS INTEGRADAS DE CENTROAMERICA (Panamá) S. A. (ahora DUWEST S. A.), patrimonio que las autoridades están obligadas a proteger.

También arguye, que conforme al artículo 756 del Código Administrativo, el Director General de Ingresos debió desconocer la Nota No.710-01-1523 DGA expedida por el Director General de Aduanas, en que señalaba que no correspondía la devolución del Depósito de Garantía, porque el monto consignado en dicho aval obedecía al recargo impuesto por no presentar la documentación necesaria al momento del retiro de la mercancía.

Finalmente se señala, que el acto administrativo en mención infringe el ordenamiento legal, toda vez que el Director General de Ingresos negó la devolución del depósito en base a la conversión de un "recargo" en "multa", cosa que no era procedente, en ausencia de una norma legal específica que permitiese tal actuación.

II. INFORME DE ACTUACION DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

De la demanda incoada se corrió traslado al Director General de Ingresos, funcionario que una vez reseñados los hechos fundamentales acaecidos en este caso, concluyó señalando que la Dirección a su cargo, al tramitar la solicitud de devolución del Depósito de Garantía constituido por COMPAÑIA AGROQUIMICAS INTEGRADAS DE CENTROAMERICA (PANAMA) S. A., detectó que el monto solicitado efectivamente correspondía a un recargo por la no presentación de documentos en tiempo oportuno, por lo que se procedió a depositar la suma consignada a favor del Tesoro Nacional, como lo contempla la Ley.

III. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No.282 de 22 de julio de 1998 visible a fojas 33-46 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la empresa demandante, por considerar que el acto impugnado no infringe el ordenamiento legal.

En relación a la supuesta improcedencia de aplicar un recargo por falta de documentos, en virtud de que la mercancía no estaba sujeta a impuesto de importación, la señora Procuradora de la Administración ha señalado los siguiente:

> "Yerra el actor en todas sus anteriores consideraciones, pues como meridianamente lo establece el artículo 447 del Código Fiscal, norma aplicable a la situación jurídica bajo estudio, las mercaderías que lleguen al país sin estar amparadas por los documentos de embarque de que trata el artículo 446 del mismo Código, pagarán un recargo de 5%.
>
> Si bien el artículo 2, literal d, del Decreto de Gabinete No. 30 de 22 de octubre de 1994, establece que pueden acogerse al Sistema de Despacho de Mercancías con pago garantizado las importaciones que adolezcan de alguno de los documentos de embarques; ni ésta, ni ninguna otra norma de ese Decreto de Gabinete modificó, derogó o subrogó, lo dispuesto en el artículo 447 del Código Fiscal.
>
> Por su parte, el artículo 8 del Decreto No.30 señala que cuando las disposiciones legales así lo exijan y al consignatario no le fuere posible presentar la factura consular o la comercial o ambas facturas debidamente juramentadas y certificadas por el respectivo

> Cónsul, se incluirá en el monto del Depósito de Garantía un recargo equivalente al 5% del valor aduanero gravable, sin que en ningún caso ese recargo pueda ser inferior a B/.20.00 (veinte balboas)
>
> El recargo por falta de documentos no es aplicable únicamente cuando se trate de mercaderías sujetas al impuesto de importación, pues a pesar de que el artículo 447 del Código Fiscal no señala en parágrafo pertinente sobre que (sic) valor ha de calcularse dicho recargo, el primer parágrafo de esta misma norma si (sic) dice que el recargo del 1% por falta de presentación de los documentos de que trata el artículo 446 al Cónsul, hasta ocho (8) días hábiles después de la fecha de expedición del conocimiento de embarque, se hará con base al valor de las mercaderías.
>
> Además, consta en el expediente administrativo la Declaración-Liquidación No.37773, de 21 de junio de 1995, mediante la cual la sociedad demandante, a través del Sistema de Despacho de Mercaderías con Pago Garantizado, retiró del recinto aduanero de Manzanillo 40 bultos de Kitasin (Fungicida para uso agrícola 48%). En dicha declaración, se observa en el punto 42, que esta mercancía fue gravada con B/.02 por cada bulto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 49 de 1946.....
>
> En consecuencia, queda sin peso el argumento de la actora, en el sentido de que el recargo que contempla los artículos 447 del Código Fiscal y 8 del Decreto de Gabinete No.30 de 1994, no les era aplicable, ya que la mercancía importada está calificada como de "Libre Importación", pues la importación de marras si (sic) estaba sujeta al pago de gravamen aduanero de dos centésimos de balboas (B/.02) por cada bulto introducido al país."

Finalmente, al examinar el argumento de la parte actora en el sentido de que la Dirección General de Ingresos convirtió un "recargo" en "multa", procedimiento no amparado por la Ley, la colaboradora de la instancia indicó lo siguiente:

> "...es claro que ésta [conversión] no se ha dado, pues como puede verificarse en el acto originario, la Resolución 201-1168 de 30 de julio de 1997, `el monto solicitado en el Depósito de garantía No.33963 de 23 de junio de 1995, corresponde a un recargo por la no presentación de documentación de la mercancía en el momento de retiro de la misma'..."

De esta forma se reitera que el acto administrativo impugnado no infringe el ordenamiento legal, y se solicita la denegación del derecho solicitado por la empresa demandante.

IV. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es necesario destacar de forma preliminar, que la resolución que niega la devolución del depósito no impone una "multa", como sugiere el recurrente, sino que alude en su parte motiva a la circunstancia de que la falta de presentación de documentos que amparen un importación, al momento de la entrada al país de una mercancía, origina un "recargo" que se aplica a manera de sanción.

La parte actora solicita que se declare nula, por ilegal, la negativa por parte de la Dirección General de Ingresos de devolver un Depósito de Garantía constituido por la empresa AGROQUIMICAS INTEGRADAS DE CENTROAMERICA, ahora denominada DUWEST PANAMA S.A y que en este proceso será identificada como DUWEST.

Al examinar la pretensión del demandante a la luz de las constancias procesales, y de la normativa aplicable a la materia debatida, esta Superioridad ha podido determinar lo siguiente:

El día 21 de junio de 1995 se procesó la entrada al país de 40 bultos del fungicida de uso agrícola Kitasin, cuyo consignatario era la empresa DUWEST. En el documento que obra a foja 60 del expediente, consta la Declaración Liquidación Unificada de Aduanas de esa fecha, en la que se dejaron consignados varios hechos de importancia para este proceso:

1- que la mercadería sería retirada mediante Depósito de Garantía.

2- que la mercancía estaba libre del pago de tarifa arancelaria, de impuesto de importación, y de impuesto de ITBM, pero que tenía un valor gravable de cincuenta y seis mil balboas (B/. 56,000.00)

3- en el renglón 48 de la Declaración se estableció claramente la imposición de un recargo que ascendía a B/. 2,800.00 por "falta de documentos", amparado en el artículo 447 del Código Fiscal vigente al momento de los hechos.

4- Los derechos aduaneros fueron calculados en un total de B/.2,842 balboas, mismos que fueron pagados por el consignatario DUWEST, a través de Depósito de Garantía No.33963 de 23 de junio de 1995. (f.58)

La empresa demandante ha reconocido que al momento del arribo de los 40 bultos de fungicida al recinto aduanero, no tenía a su haber los documentos que amparaban la importación, razón por la cual constituyeron el mencionado Depósito de Garantía a fin de retirar prontamente la mercadería, conforme a lo previsto en el Decreto de Gabinete No.30 de 1994.

La Sala ha de subrayar el hecho de que el depósito se consignó de acuerdo a la Declaración de 21 de junio de 1995 (f.60) por un total de B/.2,842.00, declaración que ya incluía el recargo por falta de documentos. Este recargo no fue objetado ni en ese momento, ni posteriormente por la empresa importadora, que por el contrario procedió a pagarlo íntegramente, demostrando su tácita conformidad con la liquidación que se confeccionó.

No es admisible siquiera en gracia de discusión, el argumento de que la Declaración de 21 de junio de 1995 fue aceptada en aquel momento porque la empresa esperaba la devolución del recargo una vez presentados los documentos que sustentaban la importación, toda vez que tanto en la vía gubernativa como ante la Sala Tercera de la Corte, el argumento central de la empresa no ha sido que corresponde la devolución del depósito una vez presentada la documentación que ampara la mercancía, sino que no procede ningún recargo cuando la mercancía está exenta del pago del impuesto de importación.

En otras palabras, es evidente que lo debatido en este proceso no es la procedencia de la devolución del Depósito de Garantía, sino la imposición del recargo en sí, asunto que no fue controvertido en el momento correspondiente, y que por ende, no puede esta Superioridad invalidar.

Lo anterior se refuerza cuando se constata, que la imposición del recargo no sólo emana de un acto administrativo independiente al impugnado, sino que además proviene de una autoridad administrativa distinta a la demandada en este negocio.

En conclusión, la Declaración-Liquidación que contiene el recargo por falta de documentos es un acto en firme, válido, ejecutado y cumplido tanto por la administración como por el administrado, sin que pueda pretenderse su desconocimiento en esta etapa, circunstancia que incide de manera directa sobre la pretensión de la parte actora de que le sea devuelta la suma consignada en el Depósito de Garantía, toda vez que gran parte de aquel total corresponde al recargo impuesto a manera de sanción, recargo que como hemos visto, goza de plena

validez.

En cuanto al cargo de ilegalidad presentado en relación al artículo 8 del Decreto de Gabinete No. 30 de 1994, hemos de aclarar que el "valor aduanero gravable" sobre el cual se impone recargo de 5% por falta de documentos, no es sinónimo de "Impuesto de Importación", como insinúa el demandante.

La Procuradora de la Administración de manera atinada señala a este respecto, que el impuesto de importación es sólo uno de los varios gravámenes que se aplican sobre las mercaderías que entran al país. Sobre los bienes importados también se aplicaban al momento de los hechos en junio de 1995, la Tasa de Costos Administrativos Consulares TCAC (Art. 486-A C.F.); el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles (Art. 1057-v Parágrafo 8 literal k) numeral 2° ibídem); el impuesto de dos centésimos de balboas por bulto introducido (Ley 49 de 1946) y el impuesto de Timbre (Título VIII del Cód. Fiscal)

El valor aduanero viene siempre determinado por el valor de las mercaderías, y sobre éste se impone el pago del impuesto de importación. No obstante, existen mercaderías que aunque posean un valor aduanero gravable, se eximen del pago de tarifa de arancelaria y del impuesto de importación por así disponerse en leyes arancelarias o especiales, como es el caso del Fungicida Kitasin (cfr. Art. 535 literal 7 del C.F. y Partida Arancelaria 38.082010)

Lo mismo ocurre con las mercancías que se encuentran sometidas a un régimen parcial o total de exoneración, (v.g. bienes de agentes diplomáticos; bienes utilizados en desarrollo de acciones pastorales, etc.), que aunque posean un valor aduanero, por disposición de Ley, se encuentran exoneradas del pago de impuesto de importación.

La Procuraduría de la Administración a este respecto también ha señalado, que si el artículo 447 en su párrafo primero establece un recargo de 1% sobre el valor de las mercancías para las empresas que en 8 días no presenten a los Cónsules las facturas necesarias para que éste expida certificación, el recargo de 5% por falta de documentos contemplado en el parágrafo de ese mismo artículo, se aplica similarmente sobre el valor de las mercaderías, aunque no se diga expresamente.

El asunto se aclara aún más, con la expedición del Decreto de Gabinete No.26 de 1° de Agosto de 1996 "Por el cual se dictan disposiciones concernientes al régimen de aduanas respecto al sistema de valoración de mercancías en las Aduanas", disposición que sin bien no es aplicable directamente a la controversia sub-júdice por ser un acto posterior a la fecha en que se realizó la Declaración Liquidación de Aduanas a DUWEST el 21 de junio de 1995, tiene una finalidad orientadora, al establecer expresamente que la base imponible para el cálculo del valor en aduanas de las mercancías importadas, será el valor de la transacción (compra en el exterior), más gastos de transporte, carga y seguro.

Descartamos en consecuencia, el cargo de violación endilgado al artículo 8 del Decreto de Gabinete No.30 de 1994.

En lo atinente a la infracción legal de los artículos 446 y 447 del Código Fiscal, la Sala ha de señalar que tal violación no se ha producido, por las siguientes razones:

El artículo 443 numeral 2 del Código Fiscal establece que las mercaderías legalmente importadas serán aquellas que al ser introducidas al país se encuentren amparadas por los documentos de embarque respectivos.

Dicha documentación se encuentra desglosada en el artículo 446 ibídem, tal como se encontraba vigente antes de su modificación por la Ley 36 de 1995. La norma en cuestión establece que toda mercadería que se envíe a la República de Panamá proveniente del extranjero, por conducto distinto del correo, debe presentar para su certificación al Cónsul de Panamá o quien lo subrogue en el

puerto de embarque, los siguientes documentos: 1- factura comercial; 2-factura consular; 3-conocimiento de embarque; y 4-permiso respectivo en casos de importaciones restringidas.

La falta de cumplimiento de dicho artículo viene sancionada en el parágrafo del artículo 447 del Código Fiscal, mismo que establecía que las mercaderías que llegasen al país sin estar amparadas por los documentos de embarque a los que aludía el artículo 446, antes listados, pagarían un recargo de 5% a/y (sic) sin que en ningún caso ese recargo pudiese ser inferior a B/.20.00 balboas.

Estas normas no han sido infringidas por la Dirección General de Ingresos, pues hemos visto que fue la Dirección General de Aduanas quien impuso el recargo por falta de documentos, recargo que impedía que se realizara la devolución de la totalidad del Depósito de Garantía.

Por las mismas razones ha de descartarse el cargo de violación que se imputa por parte de la Dirección General de Ingresos, al artículo 756 del Código Administrativo.

Hemos de manifestar no obstante, que sí procede la devolución de los cuarenta balboas que se aplicaron a la importación del fungicida "Kitasin" en concepto de la Tasa de Costos Administrativos Consulares prevista en el artículo 486-A del Código Fiscal y que consta en el renglón 47 de la Declaración Liquidación de 21 de junio de 1995, toda vez que conforme al artículo 497 ibídem, no se causaría derecho consular alguno cuando la tarifa del impuesto de importación indicara "LIBRE", como era este el caso. Al presentarse la documentación que respaldaba la importación, se procedió de eliminar ese cargo en la Declaración Liquidación de 26 de septiembre de 1995 (f.59), razón por la cual es procedente su devolución.

En estas condiciones, se acepta el cargo de violación del artículo 752 del Código Administrativo, pero sólo en lo que atañe a la obligación de la Dirección General de Ingresos de devolver el monto consignado por DUWEST en concepto de la Tasa de Costos Administrativos Consulares.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE NULA, POR ILEGAL, la Resolución No.201-1168 de 30 de julio de 1997, SOLO EN LO QUE RESPECTA A LA NEGATIVA DE DEVOLUCION DE LA SUMA CONSIGNADA POR AGROQUIMICAS INTEGRADAS DE CENTROAMERICA (PANAMA) EN CONCEPTO DE LA TASA DE COSTOS ADMINISTRATIVOS CONSULARES (TCAC). Se ORDENA en consecuencia, la devolución de la suma pagada por la demandante en este concepto, y SE NIEGAN LAS DEMAS DECLARACIONES SOLICITADAS POR LA DEMANDANTE.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VENUS CÁRDENAS, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR HUGO CUÉLLAR, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 2-98 D. G. DE 19 DE ENERO DE 1998, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Venus Cárdenas, en representación de señor HUGO CUÉLLAR, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°2-98 DG de 19 de enero de 1998, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Deportes (en adelante el INDE), los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

I. EL ACTO ACUSADO

A través de la aludida resolución, el funcionario demandado impuso al señor CUÉLLAR una sanción de cinco años de suspensión para participar de toda dirigencia deportiva, porque, sin la autorización del Estado panameño, acreditó la participación de una delegación deportiva en representación de la República de Panamá en los XIII Juegos Bolivarianos, con la utilización de los símbolos patrios, contraviniendo así lo dispuesto en el literal e) del artículo 82 de la Resolución N 11-97 J.D. de 29 de abril de 1997.

II. NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

A juicio de la licenciada Cárdenas, las resoluciones impugnadas violaron los artículos 7, 67, 68, 82 y 83 de la Resolución N° 11-97 J.D. de 29 de abril de 1997. Veamos el contenido de estas normas y el concepto de la infracción de cada una de ellas.

> ARTÍCULO 7: Las Federaciones u Organizaciones Deportivas Nacionales, Ligas Deportivas Provinciales, Distritoriales, de Corregimientos, de Clubes o equipos deportivos y demás organizaciones deportivas afiliadas, tendrán la obligación de acatar todas las normas que están establecidas en la Ley 16 de 3 de mayo de 1995, en la presente Resolución, sus reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones legales que emitan los organismos deportivos superiores, siguiendo el estricto orden jerárquico. El Instituto Nacional de Deportes será el encargado, en representación del Estado, de velar por su estricto cumplimiento."

De acuerdo con la apoderada judicial del actor, el precepto transcrito alude expresamente a "... organizaciones deportivas afiliadas", las cuales tienen la obligación de acatar todas las normas establecidas en la Ley 16 de 1995 y demás disposiciones legales y reglamentarias que emitan los organismos deportivos superiores. Sin embargo, el INDE violó por aplicación indebida el aludido precepto, pues, la Asociación Nacional de Bolos, de la cual es representante legal el señor CUÉLLAR, no es una organización afiliada debido a que no está reconocida por el INDE.

> "ARTÍCULO 67: El Comité Olímpico de Panamá es un organismo deportivo, sin fines de lucro, constituido como asociación civil dotada de personalidad jurídica reconocida por el Órgano Ejecutivo mediante Resolución 45 de 1970.
>
> El Comité Olímpico de Panamá se rige por su propio estatuto y reglamentos los cuales no podrán estar en contradicción con el ordenamiento jurídico de a República de Panamá.
>
> El Comité Olímpico de Panamá se rige por los principios y normas del Comité Olímpico Internacional plasmados en el documento denominado "CARTA OLÍMPICA"."

Estima la licenciada Cárdenas que el artículo 67 ibídem se violó en forma directa, por omisión, pues, de haberse aplicado, el INDE habría considerada válida la acreditación de los atletas panameños que participaron en los juegos deportivos regionales celebrados en Arequipa, Ecuador. Ello es así porque la

participación de la Asociación Nacional de Bolos, con la utilización de los símbolos patrios, contaba con la inscripción y el aval del Comité Olímpico de Panamá en la categoría de bolos, que está dentro de los programas oficiales del Comité Olímpico de Panamá.

> "ARTÍCULO 68: Para la participación de un atleta en los Juegos Olímpicos y Regionales, en representación de Panamá con derecho al uso de los símbolos patrios y al apoyo oficial del Estado por conducto del Instituto Nacional de Deportes, debe cumplir con los siguientes requisitos:
>
> a. Haber sido preseleccionado por el Comité Olímpico de Panamá en base a recomendaciones de las Federaciones u Organismos Deportivos Nacionales.
>
> b. Los atletas deben haber cumplido con el proceso de preparación físico, técnico y científico, programado con el Instituto Nacional de Deportes en los Centros de Alto Rendimiento y Medicina Deportiva, con tiempo suficiente de acuerdo a los parámetros de entrenamiento.
>
> c. El Comité Olímpico de Panamá y la Federación u Organismo Deportivo Nacional respectivo, seleccionarán entre los atletas aquellos considerados como más aptos para representar al país en el torneo correspondiente."

Considera la licenciada Cárdenas que los actos impugnados violaron el artículo 68 de la Resolución 11-97 J.D. de 1997, en forma directa, por omisión, a que de haber aplicado esta norma el INDE "hubiera llegado a la conclusión de que mi mandante acreditó algunas delegaciones deportivas ante juegos olímpicos, y regionales en representación de Panamá con derecho al uso de los símbolos patrios, por haber sido pre-seleccionados por el Comité Olímpico de Panamá , mediante la Asamblea Ordinaria General N° 04-97 de 11 de septiembre de 1997, al haber cumplido con los requisitos exigidos: preparación físico, técnica y científico, con tiempo suficiente de acuerdo a los parámetros de entrenamiento. Lo preceptuado por el artículo en comento ha sido violado de manera directa, porque se desconoce la facultad de representar, inscribir y avalar a los atletas e los Juegos Olímpicos y Regionales, que la ley ha reservado al Comité Olímpico de Panamá."

> ARTÍCULO 82: Son faltas deportivas:
>
> a. Las infracciones a la Ley 16 de 3 de mayo de 1995, la presente Resolución, su reglamentación y demás disposiciones que imparta el Instituto Nacional de Deportes.
>
> b. El incumplimiento al Estatuto y Reglamentación de las Organizaciones Deportivas Nacionales.
>
> c. Los actos que lesionen la disciplina y solidaridad deportiva.
>
> d. El comportamiento que atente contra el decoro y el normal desenvolvimiento de las actividades deportivas.
>
> e. El utilizar el nombre, Himno Nacional, Bandera y escudo de la República de Panamá al participar en eventos o certámenes deportivos internacionales, sin la debida autorización o aval del Estado panameño a través del Instituto Nacional de Deportes.
>
> f. Se constituirá en falta deportiva el ser sancionado por la comisión de delitos dolosos durante el período en que se esté en ejercicio de un cargo de una Junta Directiva.

g. Cualquier otra que señale el Código de Ética."

Señala la licenciada Cárdenas que el precepto transcrito se violó por aplicación indebida, porque si la Asociación Nacional de Bolos no está reconocida por el INDE, ni es una entidad afiliada al mismo, mal puede imputársele la comisión de faltas establecidas en su reglamento. En todo caso, la obligación de acatarlas está destinada a las federaciones, clubes, asociaciones y demás organizaciones deportivas afiladas. Además, la facultad de otorgar avales cuando se trate de delegaciones deportivas panameñas en juegos olímpicos y regionales que están dentro de los programas oficiales del Comité Olímpico Internacional, es competencia del Comité Olímpico de Panamá.

Finalmente, la licenciada Cárdenas también estima violado el artículo 83 de la Resolución N° 11-97 ibídem, el cual establece las sanciones que puede imponer el Director General del Instituto Nacional de Deportes por la comisión de las faltas mencionadas en el artículo 82, antes transcrito. Según la apoderada judicial del señor CUÉLLAR, éste no infringió ninguna de las disposiciones legales y reglamentarias que se mencionan en el citado artículo 82. Además, la sanción impuesta al señor CUÉLLAR mediante los actos impugnados, es incongruente con lo establecido en el artículo 83 que se cita como violado; no se compadece con su texto ni con su espíritu ya que el precitado no ha sido sancionado antes con amonestación verbal ni escrita, ni ha cometido falta deportiva alguna.

La licenciada Cárdenas estima, por otra parte, que las resoluciones impugnadas violaron los artículos 6, 7, 15 y 17 de la Ley N° 34 de 1949, cuyos textos establecen lo siguiente:

> "ARTÍCULO 6. Los símbolos de la Nación son: el himno, la bandera y el escudo de armas, adoptados por la Ley 34 de 1949."
>
> "ARTÍCULO 7. Es prohibido el uso de la Bandera Nacional a título de anuncio o propaganda comerciales y también por vía de ornamentación en cantinas, cabarets, clubes nocturnos, salas de bailes de especulación, de casas de diversiones públicas y otros establecimientos semejantes, en desfiles, marchas o paradas con propósitos de solicitar auxilio o ayuda monetaria de cualquier tipo, en disfraces, en vehículos de rueda de carácter comercial, en animales y en las marcas de fábrica y de comercio."
>
> "ARTÍCULO 15: ... Es prohibido el uso del Escudo en los mismos casos de que trata el artículo 7 de esta Ley."
>
> "ARTÍCULO 17: Es prohibido tocar el Himno Nacional: Como propaganda comercial o en conexión con ella; en cantinas, cabarets, clubes nocturnos, salas de bailes de especulación y en otros establecimientos semejantes."
>
> ARTÍCULO 18: Las infracciones a la presente Ley se castigarán con multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a doscientos balboas (B/.200.00) o arresto de diez (10) a sesenta (60) días y serán impuestas por el Alcalde del respectivo distrito."

Con relación a la primera norma transcrita, la licenciada Cárdenas afirma que su infracción se dio porque dentro de la reglamentación relativa a los símbolos patrios no existe ninguna disposición que señale que el uso de éstos está supeditado al INDE, ni que éste sea el entre encargado de regular su uso.

En cuanto a los artículos 7, 8 y 17, se afirma que estas normas establecen cuáles son las prohibiciones relativas al uso de los símbolos patrios, sin que se contemple en la Ley la prohibición de utilizarlos al participar en eventos o certámenes deportivos internacionales, sin la debida autorización o aval el Estado panameño, a través del INDE, razón por la cual éste no puede sancionar al señor HUGO CUÉLLAR por haber utilizado los símbolos patrios en los distintos

eventos olímpicos y regionales en que se h acreditado delegaciones de boliche, debidamente avaladas por el Comité Olímpico de Panamá, alegando falta deportiva.

Por último, el artículo 18 de la Ley 34 de 1949 se considera infringido porque, según la misma, es el Alcalde y no el Director General del INDE el funcionario competente para sancionar que incurra en algunas de las faltas que establecen los artículos 7, 15 y 17 de dicha Ley. Además, el aludido artículo 18, que es la Ley aplicable por ser la Ley especial en materia de uso de los símbolos patrios, contempla sanciones de multa o arresto, mas no así, la suspensión de dirigencias deportivas, ni la inhabilitación para ocupar cualquier cargo directivo en organizaciones deportivas. (Cfr. fs. 88-94).

III. EL INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA

El entonces Director General del INDE rindió informe de conducta mediante Nota N° 85-98 J.D. de 5 de agosto de 1998, de la cual pueden extraerse como aspectos medulares los siguientes:

1. El 7 de noviembre de 1997, la Comisión Nacional de Bolos pidió al INDE que investigará las razones por las cuales el señor HUGO CUÉLLAR constituyó una presunta "Asociación Nacional de Boliche", además de acreditar atletas en distintas competencias internacionales en nombre y representación de la República de Panamá, situación en la que incurrió reiteradamente desde 1995.

2. Realizadas las investigaciones y examinadas las pruebas, se concluyó que el proceder del señor CUÉLLAR es un abierto desafío e irrespeto a las normas deportivas y a sus autoridades, razón por la cual se le sancionó con la suspensión e inhabilitación durante cinco años para ejercer cargos directivos en organismos deportivos, por haber violado los artículos 68 y 69 de la Resolución N° 11-97 J. D., la cual regula el Deporte Competitivo y de Alto Rendimiento en nuestro país.

3. El Comité Olímpico de Panamá, quien supuestamente avaló la participación de los atletas acreditados por la Asociación Nacional de Bolos en competencias internacionales, no es un organismo representante del Estado panameño, sino representativo del Comité Olímpico Internacional, radicado y reconocido en nuestro país, con el fin de captar para las competencias que organiza este Comité, la participación de la República de Panamá. El INDE., por el contrario, sí es una extensión del Estado panameño, pues, de acuerdo con su Ley Orgánica, es el máximo organismo deportivo del país, está encargado de desarrollar la política que establezca el Órgano Ejecutivo en esta materia y tiene facultad para reglamentar y reconocer todas las asociaciones deportivas establecidas en el territorio nacional.

4. En adición a lo anterior, según el artículo 12 (numeral 12) de la Ley 16 de 1995, es el Director General del INDE quien está facultado para otorgar personería jurídica a las asociaciones deportivas sin excepción alguna. Por tanto, mal podía el señor CUÉLLAR fundamentar su pretensión en el hecho de que su "asociación" obtuvo el reconocimiento del Comité Olímpico de Panamá y, por ende, podía representar a nuestro país en competencias internacionales, utilizando los símbolos patrios.

5. El Comité Olímpico de Panamá es una asociación sin fines de lucro, sin competencia para otorgar personería jurídica o reconocimiento alguno a ninguna asociación deportiva que se establezca en el territorio nacional, mucho menos, decidir quién representa o n a Panamá en eventos deportivos internacionales, aun cuando alegue que se rige por los reglamentos del Comité Olímpico de Panamá, los cuales no priman sobre la legislación panameña.

6. La Junta Directiva del INDE, en uso de la facultad que le confiere el artículo 9 (numeral 1) de la Ley 16 de 1995, reconoció a la Comisión Nacional de Bolos como la asociación deportiva encargada de dirigir y reglamentar el deporte de los bolos a nivel nacional, por lo que sí existe un ente deportivo debidamente

constituido según las leyes panameñas (Cfr. fs. 101-106).

La señora Procuradora de la Administración, por su parte, contestó la demanda mediante Vista N° 370 de 24 de septiembre de 1998, en la cual pidió a la Sala Tercera que niegue las pretensiones del actor, porque los actos acusados no han infringido ninguna de las disposiciones que se citó como violadas.

Con relación al artículo 7 de la Resolución N° 11-97 J.D. de 29 de abril de 1997, señala que ésta no se ha dado, pues, no se puede realizar una actividad deportiva sin contar con el aval del INDE, que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 16de 1995, es la institución rectora en materia de deportes. Agrega, que la Asociación Panameña de Boliche, como organización que pretende representar al país en competencias internacionales y regionales debe estar afiliada a una organización debidamente reconocida por el Estado, tal como se desprende del artículo 9 de la citada Ley (Cfr. fs. 107-125).

IV. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Antes de pasar al examen de los aspectos esbozados por la apoderada judicial del actor al exponer los cargos de infracción, la Sala estima conveniente, a efectos de un mejor análisis de los mismos, ofrecer un breve panorama tanto de las principales disposiciones reguladoras del INDE, como de las concernientes a las organizaciones deportivas encargadas de dirigir y promover la práctica del deporte competitivo y de alto rendimiento en la República de Panamá.

A. En cuanto al organismo rector del deporte en Panamá:

Lo primero que cabe indicar a este respecto es que mediante Ley 16 de 3 de mayo de 1995 (G. O. N° 22.776 de 5 de mayo de 1995), el Instituto Nacional de Deportes (INDE), fue reorganizado como "una entidad de derecho público, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interno" (artículo 1). Según el artículo 2 del mismo cuerpo legal, corresponde al INDE, "como máximo organismo del deporte, la función primordial de orientar, fomentar, dirigir y coordinar las actividades deportivas en el territorio nacional".

Para cumplir con las atribuciones generales y otras más específicas establecidas en la Ley 16 (V. gr. en los artículos 4, 9 y 12) y en sus reglamentos, ésta estableció que la dirección y administración del INDE estarían a cargo de un Director General y de una Junta Directiva, a la que a su vez se le facultó para "Expedir los reglamentos para la aplicación" de dicha Ley. (artículo 9).

B. En cuanto a la regulación de las organizaciones deportivas en la República de Panamá:

En ejercicio de la potestad reglamentaria que le otorgó el artículo 9 de la Ley 16 de 1995, la Junta Directiva del INDE expidió la Resolución N° 11-97 J.D. de 29 de abril de 1997, "por la cual se reglamenta el deporte competitivo y de alto rendimiento en la República de Panamá" (G. O. N° 23,290 de 19 de mayo de 1997).

De acuerdo con el artículo 10 de esta Resolución, el deporte competitivo es el "conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo es lograr un nivel técnico calificado" y el deporte de alto rendimiento, se refiere a "la práctica del deporte dirigida por organizaciones y niveles superiores". Según el artículo 2, tanto el deporte competitivo como el de alto rendimiento deben regirse por organizaciones deportivas, de conformidad con el orden jerárquico que dicha norma establece. Veamos el texto de esta última norma:

> "ARTÍCULO 2: El Deporte Competitivo y de Alto Rendimiento, se regirá por organizaciones deportivas de conformidad con el siguiente orden jerárquico: Federaciones u Organizaciones Deportivas Nacionales,

> Ligas Deportivas Provinciales, Distritoriales, de Corregimientos y de Clubes o Equipos Deportivos". Estas entidades funcionarán y se desarrollarán bajo la supervisión, orientación y coordinación del Instituto Nacional de Deportes, conforme a lo establecido en la Ley 16 de 3 de mayo de 1995, en la presente Resolución, sus estatutos debidamente aprobados, reglamentos, resoluciones y normas técnico-administrativas que el Instituto Nacional de Deportes imparta.."

De igual modo, el artículo 7 de la citada Resolución preceptúa que las Federaciones y demás Organizaciones Deportivas afiliadas, mencionadas en el artículo 2 transcrito, "tendrán la obligación de acatar todas las normas establecidas en la Ley 16 de 3 de mayo de 1995, en la presente Resolución, sus reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones legales que emitan los organismos deportivos superiores, siguiendo el estricto orden jerárquico. El Instituto Nacional de Deportes será el encargado, en representación del Estado, de velar por su estricto cumplimiento".

En este orden de ideas, el artículo 12 de la Resolución in comento preceptúa que las Federaciones y demás Organizaciones Deportivas Nacionales "organizarán y fomentarán el deporte a su cargo, conforme a lo dispuesto en la política deportiva que establezca el Estado por conducto del Instituto Nacional de Deportes, a lo preceptuado en la presente resolución, su estatuto debidamente aprobado por el Instituto Nacional de Deportes, reglamentos, normas y resoluciones, así como a las normas técnicas que sobre la práctica y la competencia de su deporte establezca su respectiva Federación u Organización Internacional. Sólo podrá ser reconocida una Federación u Organización Deportiva Nacional por cada deporte."

Conforme al artículo 13 de la Resolución N° 11-97 D G ibídem, para constituir una Federación u Organización Deportiva Nacional "se requiere que existan Ligas Deportivas Provinciales, afiliadas legalmente y reconocidas por el Instituto Nacional de Deportes, con observación de lo dispuesto en la presente resolución, sus reglamentos y demás disposiciones, por lo menos en cinco (5) provincias". Excepcionalmente, el artículo 23 del mismo cuerpo reglamentario faculta al INDE para reconocer mediante resolución "a aquellos organismos deportivos nacionales que por razón de las características especiales del deporte que desarrollan, no cumplan con lo establecido en el Artículo 13 de la presente Resolución; siempre y cuando sus Juntas Directivas hayan sido escogidas libremente por sus afiliados, conforme a lo que establezca sus estatutos y la presente Resolución; por un período de dos (2) años."

Cabe señalar, que de acuerdo con el numeral 14 del artículo 4 de la Ley 16 de 1995, el INDE tiene entre sus atribuciones la de "Regular, aprobar y supervisar todo lo referente a los procesos electorales de las organizaciones deportivas nacionales, y dictar las respectivas resoluciones de reconocimiento". En concordancia con esta norma, el numeral 12 del artículo 12 de la misma excerta legal faculta al Director General del INDE para "Otorgar, de manera privativa, el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones deportivas."

Por último, es importante indicar que las materias reguladas por la Resolución N° 11-97 J.D. de 29 de abril de 1997, estaban reguladas íntegramente por el Decreto Ejecutivo N° 112 de 17 de junio de 1980, por el cual se reglamentó el Deporte Aficionado Post-Escolar en la República de Panamá. Sin embargo, este Decreto y sus modificaciones fueron derogados después de la entrada en vigencia de la Ley 16 de 1995, por medio del Decreto Ejecutivo N° 47 de 24 de marzo de 1997 (G. O. N° 23.258, de 3 de abril de 1997).

C. En cuanto al fondo del negocio:

Tal como ha podido advertirse, en el presente negocio la Sala debe pronunciarse sobre la legalidad de la sanción aplicada por INDE al señor HUGO CUÉLLAR. Según esta entidad, dicha sanción se aplicó porque el actor acreditó una delegación de atletas que participó y utilizó los símbolos patrios de la

República de Panamá en los XIII Juegos Bolivarianos sin contar con la autorización del Estado panameño.

En los hechos de la demanda la licenciada Cárdenas alega que el señor CUÉLLAR es Presidente de la Asociación Panameña de Boliche (APABOL); que esta organización está debidamente reconocida por el Comité Olímpico de Panamá (hecho 1°), mas no así por el INDE; que el boliche es un deporte de marca, que está dentro de los programas oficiales del Comité Olímpico Internacional; que la delegación deportiva acreditada por el señor CUÉLLAR contó con el aval del Comité Olímpico de Panamá (hecho 7°) y además, cumplió los requisitos de preparación física, técnica y científica. A pesar de ello, alega, el Director General del INDE sancionó a su representado, violando así las disposiciones legales y reglamentarias que se cita como infringidas.

La Sala discrepa de la opinión de la apoderada judicial del actor, pues, la llamada "Asociación Panameña de Bolos (APABOL) no es una organización deportiva afiliada, es decir, no está oficialmente reconocida por el INDE, que es la entidad rectora en materia de deporte competitivo y de alto rendimiento. Así lo reconoce y afirma la propia la licenciada Cárdenas cuando indica a foja 88 que el INDE violó el artículo 7 de la Resolución N° 11-97 J.D. de 29 de abril de 1997 por haberlo aplicado indebidamente a su mandante "ya que su Asociación (ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE BOLOS) no está reconocida por el INDE, por ende no afiliada, y la norma citada hace referencia a las federaciones u organizaciones, afiliadas".

Siendo la Asociación Panameña de Bolos una organización no reconocida oficialmente por el INDE, mal puede afirmarse que los atletas avalados por el Comité Olímpico de Panamá cumplieron los requisitos o condiciones que establece el artículo 68 ibídem (que se citó como violado), para participar en los XIII Juegos Bolivarianos en la categoría de boliche. Ello es así, porque de acuerdo con esta norma, para la participación de un atleta en los Juegos Olímpicos y Regionales, en representación de Panamá, con derecho al uso de los símbolos patrios y al apoyo de Estado (por conducto del INDE), es necesario, en primer lugar, que el atleta haya "sido preseleccionado por el Comité Olímpico de Panamá en base a recomendaciones de las Federaciones u Organismos Deportivos Nacionales", entendiéndose, obviamente, que tales Federaciones u Organismos Deportivos Nacionales han de estar debidamente reconocidos por el INDE, tal como se desprende de las normas comentadas anteriormente, especialmente, del artículo 2 de la Resolución 11-97 J.D. de 1997, que establece que "El Deporte Competitivo y de Alto Rendimiento se regirá por organizaciones deportivas de conformidad con el siguiente orden jerárquico: Federaciones u Organizaciones Deportivas Nacionales..." y del artículo 4 (numeral 14) de la Ley 16 de 1995, que establece como atribución del INDE la expedición de las respectivas resoluciones de reconocimiento de las organizaciones deportivas nacionales.

No comprende la Sala, cómo una organización deportiva no reconocida por el INDE puede acatar lo establecido en el literal b) del mismo artículo 68, cuando esta norma exige que los atletas cumplan con un proceso de preparación físico, técnico y científico, programado, precisamente, con el Instituto Nacional de Deportes en los Centros de Alto Rendimiento y Medicina Deportiva". Al respecto, basta señalar que el demandante no ha probado que los atletas avalados por el Comité Olímpico para participar en los XIII Juegos Bolivarianos, cumplieron el proceso de preparación programado con el INDE, como exige la norma, ni mucho menos que éste proceso se haya realizado en los Centros de Alto Rendimiento y Medicina Deportiva destinados a estos efectos por dicha entidad, toda vez que las firmas de las certificaciones que reposan a fojas 127, 129 y 131, dirigidas a probar el cumplimiento de este requisito, no fueron ratificadas por los médicos que supuestamente atendieron a los atletas inscritos en sesiones individuales y colectivas. Tampoco consta si tales médicos formaban o no parte del equipo médico del Centro de Medicina Deportiva del INDE.

Los razonamientos esbozados llevan a la Sala a afirmar que el aval otorgado por el Comité Olímpico de Panamá a los atletas de la categoría de boliche para

que éstos competieran en los XIII Juegos Bolivarianos, en modo alguno los autorizaba para participar en dicho evento deportivo porque, como se ha visto, el artículo 68 de la Resolución N° 11-97 J. D. de 29 de abril de 1997 establece expresamente cuáles son los requisitos que deben cumplir los atletas que aspiren a participar en competencias olímpicas y regionales.

Es pertinente indicar, que el aval del Comité Olímpico de Panamá al cual alude el demandante estaba expresamente establecido en el inciso segundo del artículo 55 y el literal c) del artículo 57 del Decreto Ejecutivo N° 112 de 17 de juno de 1980, en los siguientes términos:

> "ARTÍCULO 55. El Comité Olímpico de Panamá, velará por el cumplimiento de las normas que sobre la práctica del deporte aficionado señale el Comité Olímpico Internacional.
>
> Como representante del movimiento Olímpico, tendrá a su cargo impulsar y coordinar su desarrollo e igualmente representar, inscribir y avalar las delegaciones deportivas panameñas en los Juegos Olímpicos y Regionales que estén dentro de los programas oficiales del Comité Olímpico Internacional."
>
> "ARTÍCULO 57.- Son requisitos indispensables para la participación en eventos deportivos internacionales en representación de Panamá y con uso de los símbolos patrios, los siguientes:
> a)
> b)
> c) Obtener el aval del Comité Olímpico de Panamá o de la Federación Deportiva Nacional correspondiente según sea el caso.
> ..."

Fundaméntandose en los artículos 55 y 56 del Decreto N° 112 ibídem, la Sala Tercera, a través de la Sentencia de 2 de junio de 1998, declaró ilegales los actos administrativos mediante los cuales la Comisión Nacional de Bolos sancionó a las atletas Adela de Cardoze, Elia de Benet, Karen Holfer y a Nereida Mock, por faltas cometidas durante la vigencia de ese Decreto. En lo medular, la Sala sostuvo que, según esos preceptos, "la facultad de otorgar avales cuando se trate de delegaciones deportivas panameñas en juegos olímpicos y regionales que están dentro de los programas oficiales del Comité Olímpico Internacional, es competencia privativa del Comité Olímpico de Panamá". Sin embargo, los preceptos citados fueron derogados por el Decreto Ejecutivo N° 47 de 24 de marzo de 1997 y, posteriormente, los artículos 67 y 68 de la Resolución N° 11-97 J.D. de 29 de abril de 1997, al regular, aunque con ciertas diferencias, la misma materia que regulaban los dos preceptos derogados (55 y 56), no incluyeron lo relativo al "aval del Comité Olímpico" que necesitaban los atletas para participar en Juegos Olímpicos y Regionales.

Por otra parte, llama la atención de la Sala lo afirmado por la licenciada Cárdenas en el sentido de que, como la Asociación Panameña de Bolos es una organización deportiva no afiliada, no podía aplicársele a su representado la sanción de suspensión impuesta a través de las resoluciones impugnadas. A juicio de la Sala, este razonamiento es erróneo, primero, porque desconoce por completo que el deporte competitivo y de alto rendimiento en nuestro país debe regirse, precisamente, por organizaciones deportivas afiliadas o reconocidas por el INDE, las cuales están obligadas a acatar las disposiciones de la Ley 16 de 1995 y sus respectivas reglamentaciones, de conformidad con el primero de los preceptos que se citó como violado. De otro modo, bastaría omitir el reconocimiento de esta entidad oficial para burlar o desconocer las disposiciones legales y reglamentarias reguladoras del deporte en Panamá, lo cual, evidentemente, contrasta con los fines y propósitos que animaron la expedición de la Ley 16 de 1995 y su reglamentación.

Segundo, porque la falta de reconocimiento de la Asociación Panameña de Bolos por parte del INDE, lejos de suponer la inaplicabilidad de los preceptos

de la Resolución N° 11-97 J.D. ibídem, refleja una actuación al margen de la Ley, pues, aquel organismo deportivo, sin estar reconocido oficialmente, acreditó a varios atletas para que éstos participaran en los XIII Juegos Bolivarianos,

Debe indicar la Sala, asimismo, que el razonamiento de la licenciada Cárdenas resulta a todas luces contradictorio, pues, por un lado, afirma que las faltas deportivas establecidas en este Reglamento no son aplicables o imputables a la Asociación Panameña de Bolos por no ser éste un organismo deportivo afiliado y, por otro, alega que dicha Asociación cumplió los requisitos o condiciones establecidos en el artículo 68 de ese mismo Reglamento.

Por todo lo expuesto, la Sala arriba a la conclusión de que las resoluciones impugnadas no violaron los artículos 7, 67 , 68, 82 y 83 de la Resolución N° 11-97 J.D. de 29 de abril de 1997.

Como se indicó anteriormente, el demandante también considera violados los artículos 6, 7, 15, 17 y 18 de la Ley N° 34 de 1949. Con relación a la primera de estas normas, la Sala considera que no existe violación alguna, pues, la misma se limita simplemente a señalar cuáles son los símbolos patrios adoptados por la Ley 34 de 1949.

En cuanto a los artículos 7, 15 y 17, estas normas establecen una serie de prohibiciones relacionadas con el empleo de la bandera nacional, el escudo de armas y el himno nacional, respectivamente. El artículo 18, por su parte, alude a las sanciones aplicables a quienes infrinjan las disposiciones de la Ley 34 de 1949, entre ellas, las relativas al uso de los símbolos patrios. De la lectura de todos estos preceptos salta a la vista que los mismos no son aplicables en el presente caso, pues, el hecho sancionado por el Director General del INDE no guarda relación con ninguna de las prohibiciones que aquellas normas establecen, sino con la comisión de una "falta deportiva", que consiste no en el simple empleo de los símbolos patrios en certámenes o eventos internacionales, sino en la utilización de éstos "sin la debida autorización o aval del Estado panameño, a través del Instituto Nacional de Deportes". Siendo lo anterior así, correspondía al Director General del INDE aplicar la sanción de suspensión impuesta al señor HUGO CUÉLLAR, de conformidad con el artículo 82 de la Resolución N° 11-97 J.D., antes citada.

Por los razonamientos expuestos la Sala estima que las resoluciones acusadas de ilegal no violan los preceptos legales y reglamentarios que se citó como violados, por lo cual procede negar las pretensiones formuladas en la demanda.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES la Resolución N°2-98 DG de 19 de enero de 1998, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Deportes, ni los actos confirmatorios. Por tanto, NIEGA el resto de las declaraciones pedidas.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CRISTOBAL GARRIDO ROMERO EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL MEMORÁNDUM NO. 201-139 DE 15 DE MARZO DE 1997, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, LA RESOLUCIÓN NO. 217-01-118 DE 14 DE JULIO DE 1997, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE HERRERA, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA

PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado CRISTOBAL GARRIDO, actuando en su propio nombre y representación, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declaren nulos, por ilegales, los siguientes actos administrativos: el Memorándum No. 201-139 de 15 de marzo de 1997 expedido por el Director General de Ingresos, la Resolución No. 201-01-118 de 14 de julio de 1997 expedida por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Herrera, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

I. LOS ACTOS IMPUGNADOS

a) El Memorándum 201-139 de 15 de marzo de 1997.

Se trata de una comunicación girada por el Director General de Ingresos del entonces Ministerio de Hacienda y Tesoro a todos los Administradores Regionales de Ingresos de la República de Panamá, para informarles sobre la forma en que serían aplicadas las multas a los contribuyentes que presentaran en forma tardía sus declaraciones de renta para el período fiscal 1996, a saber:

hasta el 31 de marzo de 1997.....B/.10.00
desde el 1° de abril de 1997
persona natural.....B/.100.00
sin operaciones.....B/.100.00
personas jurídicas.....B/.500.00

b) La Resolución No. 210-01-118 de 14 de julio de 1997

Se trata de una resolución dictada por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Herrera, que aparentemente resuelve un recurso o petición presentada por el contribuyente CRISTOBAL GARRIDO, en relación a una multa de cien balboas que le fuera impuesta, por la presentación tardía de su declaración de renta del período fiscal 1996.

En atención al escrito presentado por el letrado, la Administración Regional de Ingresos ordenó una investigación a los libros de contabilidad y demás documentos del contribuyente, a fin de determinar si correspondía o no la multa impuesta.

Esta resolución fue apelada por el contribuyente ante la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos, instancia administrativa que mediante Resolución No. 205-066 de 26 de agosto de 1997 confirmó la actuación del Administrador Regional de Ingresos de Herrera.

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

El punto medular de la impugnación consiste en que a criterio del demandante, la Administración Regional de Ingresos no tenía facultades legales para ordenar la investigación a los libros de contabilidad del contribuyente GUSTAVO GARRIDO, ni para imponerle la sanción pecuniaria de multa por B/.100.00 por la tardía presentación de su declaración de renta del año 1996.

En este contexto, considera que los actos administrativos demandados infringen los artículos 753, 1213 y 1243 del Código Fiscal, el artículo 722 ordinal 8 del Código Judicial, y el artículo 10 de la Resolución No. 201-1916 de 10 de octubre de 1997.

Por la estrecha relación que guardan algunas de las normas que se dicen

infringidas, las reproducimos de la siguiente manera:

a) La violación de los artículos 753, 1213 y 1243 del Código Fiscal.

El artículo 753 del Código Fiscal prevé una sanción pecuniaria o multa, que va desde los diez hasta los mil balboas, para las personas naturales o jurídicas que presenten de manera tardía su declaración de renta.

El artículo 1213 ibídem, contenido dentro de las normas generales de procedimiento administrativo en materia fiscal, establece la facultad del funcionario o ente de primera instancia, para practicar las pruebas que estime convenientes a fin de resolver el asunto o reclamación. Por su parte, el artículo 1243 ibídem establece la forma en que quedan ejecutoriadas las resoluciones o actos administrativos de carácter fiscal: cuando no hay lugar a recurso o éstos no se utilicen en el término indicado.

Estas normas se dicen infringidas en el negocio sub-júdice, por cuanto la Administración Regional de Ingresos de Herrera dispuso por una parte, la sanción de B/. 100.00 de multa al contribuyente GARRIDO, pese a que las sanciones a imponer en estos casos van desde los diez balboas, y porque se ordenó como prueba una inspección a los libros del contribuyente, lo que no era necesario para establecer si procedía o no la multa.

Finalmente añade, que la negativa de la Administración de Ingresos de recibirle al señor GARRIDO su declaración de renta para el año 1996 es ilegal, toda vez que el acto de imposición de multa no se encuentra ejecutoriado.

b) la violación del artículo 10 de la Resolución 201-1916 de 10 de octubre de 1997.

Esta norma, en su parte pertinente, preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 10. La Dirección General de Ingresos le reconocerá el valor probatorio que el artículo 1214 del Código Fiscal en concordancia con el Código Judicial le atribuye al registro de ingresos y egresos como medio probatorio."

El recurrente considera que esta norma también ha resultado vulnerada, y aunque reconoce que el texto citado no se encontraba vigente al momento en que se expidieron las resoluciones demandadas, éste permite a los profesionales independientes llevar debidamente justificadas, todas las partidas de la declaración de renta.

c) La violación del artículo 722 numeral 8 del Código Judicial.

La norma establece como causal de nulidad común en todos los procesos, no abrir la causa a pruebas si se trata de un proceso de conocimiento, o no señalar audiencia en los casos que la ley lo exige.

Se aduce vulnerado, al señalarse que aunque se anunció en el proceso administrativo la práctica de una prueba, no se cumplió con todo el procedimiento en la etapa gubernativa, sancionando al contribuyente con el pago de multa, pese a que aún no se había practicado la prueba ordenada de oficio: el examen a los libros de contabilidad.

III. INFORME DE ACTUACION DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

De la demanda incoada se corrió traslado al Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Herrera, funcionario que una vez reseñados los hechos fundamentales acaecidos en este caso, ilustró a la Sala sobre las razones que llevaron a dictar los actos impugnados.

En dicho informe básicamente señala, que aquella Administración resolvió

ordenar una investigación a los libros de contabilidad y demás documentos del contribuyente CRISTOBAL GARRIDO ROMERO, a fin de determinar si correspondía o no la multa impuesta al contribuyente, comisionándose para tal fin al Departamento de Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos.

Manifiesta además que la Comisión de Apelaciones consideró, que la Administración Regional estaba plenamente facultada conforme a la ley, para ordenar las investigaciones fiscales a que hubiese lugar, lo que incluía el examen de los libros del contribuyente, confirmándose la actuación recurrida.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No.47 de 12 de febrero de 1998 visible a fojas 31-45 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión del demandante, por considerar que los actos impugnados no infringen el ordenamiento legal.

Al analizar los cargos de violación planteados, la colaboradora de la instancia destacó que la actuación de la Administración Regional de Ingresos de Herrera es conforme a derecho, por cuanto le asiste a tal entidad, la facultad de examinar los libros de contabilidad de los contribuyentes, máxime cuando tal examen tiene por finalidad, resolver una impugnación relacionada con sanción pecuniaria impuesta por la propia Administración de Ingresos.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

De manera preliminar hemos de señalar, que el Memorándum No. 201-139 de 15 de marzo de 1997 expedido por el Director General de Ingresos, que se constituye en uno de los actos administrativos demandados, no puede ser objeto de revisión por esta Superioridad a través de este proceso, toda vez que se trata de un acto de alcance general, dirigido a todos los Administradores Regionales de Ingresos de la República de Panamá, en el que se les giran instrucciones sobre la forma en que ha de proceder la administración tributaria a imponer sanciones de multa por mora en la presentación de las declaraciones de renta de los contribuyentes, para el período fiscal 1996.

No se trata pues, de un acto de carácter individual, que afecte de manera directa al recurrente, aunque tal instrucción hubiese servido de base para la aplicación concreta de una multa al contribuyente CRISTOBAL GARRIDO.

La Corte ha de inhibirse en consecuencia, de cualquier pronunciamiento a este respecto.

De otra parte es de subrayar, que el acto administrativo que supuestamente impone una multa al demandante, no ha sido objeto de impugnación ni consta en este proceso, siendo que si bien el actor señala "haber sido sancionado" o "querer ser sancionado" (cfr. fs. 3,4,6,8 entre otras) con multa de cien balboas por la tardía presentación de su declaración de renta para el período fiscal 1996, lo cierto es que todos los documentos que obran en autos son referencias indirectas a dicha sanción, sin que conste en medio documental alguno, como es lo procedente en estos casos.

Si la multa hubiese sido impuesta de manera verbal, también pudo el recurrente hacer constar su existencia, de la forma prevista en el artículo 48 de la Ley 135 de 1943.

Por ende, aunque las propias autoridades administrativas aluden a la referida multa de cien balboas, éste acto como tal no fue recurrido ante la Sala Tercera, razón por la cual tampoco puede este Tribunal pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de su imposición, como pretende el demandante.

Finalmente, la Sala sólo ha de conocer de los cargos de ilegalidad que se imputan a la Resolución No. 217-01-118 de 14 de julio de 1997 que ordena la revisión de los libros de contabilidad y demás registros del contribuyente GUSTAVO GARRIDO, y su acto confirmatorio.

En lo que atañe a la supuesta violación del artículo 10 de la Resolución 201-1916 de 10 de octubre de 1997 expedida por el Ministerio de Hacienda y Tesoro "Mediante la cual se instruye a las personas naturales y jurídicas que ejercen profesiones u oficios por cuenta propia con respecto a los requisitos que deben cumplirse en el Registro de Contabilidad Denominado Ingresos y Egresos", hemos de manifestar que tal como lo reconoce el propio demandante, este instrumento legal no había sido expedido al momento en que se producen los hechos que originan este proceso, y tampoco ha tenido aplicación dentro del mismo, razón por la cual ha de descartarse el cargo de ilegalidad.

En cuanto a la alegada violación del artículo 722 numeral 8 del Código Judicial, que establece como causal de nulidad común en todos los procesos, no abrir la causa a pruebas si se trata de un proceso de conocimiento, la Sala advierte que carece de fundamento la imputación señalada, en primer término porque se trata de una norma de aplicación supletoria en los procesos administrativos fiscales, regidos por el Libro VII del Código Fiscal "De los Procedimientos Administrativos en Materia Fiscal".

El Código Judicial también es de aplicación supletoria en los procesos contencioso administrativos, regidos de manera principal por la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946, por lo que las normas del Código Judicial sólo se aplican en aquello que no contravengan las leyes antes citadas.

Aún si en gracia de discusión aceptáramos que la norma citada por el recurrente tiene aplicación directa en este caso, observamos que los entes administrativos demandados han tratado precisamente de practicar las pruebas tendientes a dilucidar el asunto planteado por el actor. No obstante, ha sido el propio contribuyente quien obstaculiza el trámite probatorio, al presentar su acción contra el acto que decreta la práctica de una de las pruebas que será utilizadas por la administración para dilucidar el punto debatido.

Se descarta por lo anterior, el cargo propuesto en relación al artículo 722 del Código Judicial, y por las mismas razones el cargo de violación endilgado al artículo 1213 del Código Fiscal, toda vez que éste establece la facultad del funcionario o ente de primera instancia para practicar las pruebas que estime convenientes a fin de resolver el asunto o reclamación.

Finalmente, en lo relativo a la acusada violación de los artículos 753 y 1243 del Código Fiscal, la Corte ha de señalar lo siguiente:

El artículo 753 del Código Fiscal prevé la aplicación de una multa, que va desde los diez hasta los mil balboas, para las personas naturales o jurídicas que presenten de manera tardía su declaración de renta.

Por su parte, el artículo 1243 ibídem establece que las resoluciones o actos administrativos de carácter fiscal se ejecutorían cuando no hay lugar a recurso, o cuando éstos no se utilicen en el término indicado.

La parte actora ha señalado que la multa de cien balboas que se le impone vulnera estas dos normas, en primer término porque se pretende sancionar a un contribuyente que presentó tardíamente su declaración de renta, con multa automática de cien balboas, cuando el Código Fiscal establece que las multas van desde los diez balboas. Arguye además, que no ha querido recibirse la declaración de renta al contribuyente GARRIDO ROMERO por no haber pagado la multa impuesta, lo que viola el artículo 1243 del Código Fiscal, toda vez que las resoluciones administrativas no se han ejecutoriado, al quedar pendiente por resolver el recurso contencioso administrativo propuesto ante la Sala Tercera.

Este Tribunal ha de indicar al recurrente, que las normas legales invocadas serían revisables por esta Superioridad, si el acto demandado fuese en efecto, la imposición de multa por cien balboas al contribuyente GUSTAVO GARRIDO ROMERO.

Sin embargo, hemos adelantado en párrafos anteriores que el acto recurrido ante esta Sala, es la orden de practicar un examen a los libros de contabilidad y registros del contribuyente. Ello demuestra de manera palmaria, que cualquier pronunciamiento de este Corporación Judicial en relación a la imposición concreta de la multa, sería incongruente con la pretensión del libelo. Por ende, este Tribunal se ve precisado a negar los cargos propuestos por el demandante.

Consideramos oportuno concluir este examen, señalando que las Administraciones Regionales de Ingresos, así como la Dirección General de Ingresos, se encuentran legalmente facultadas para realizar las investigaciones que consideren necesarias, como parte de sus atribuciones fiscalizadoras de las rentas, derechos, impuestos y contribuciones fiscales, a tenor de lo previsto en el Decreto de Gabinete No. 109 de 7 de mayo de 1970.

Estas atribuciones le permiten la práctica de diligencias fiscalizadoras como la dispuesta a través de la Resolución No. 201-01-118 de 14 de julio de 1997, en el sentido de examinar los libros y registros de un contribuyente, máxime en este caso que tal diligencia tenía por finalidad, resolver una reclamación presentada por el propio contribuyente que se dice afectado, en razón de una multa impuesta.

En estas circunstancias, se concluye que la actuación demandada no infringe el ordenamiento legal, por lo que ha de negarse la pretensión invocada.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución No. 201-01-118 de 14 de julio de 1997 expedida por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Herrera, y NIEGA las demás declaraciones solicitadas por el recurrente.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RODRIGO SÁNCHEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CENTRO ELECTROMUEBLES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 730-96D.G., DE 24 DE MAYO DE 1996, Y LA RESOLUCIÓN DE 26 DE ABRIL DE 1999, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARICIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala del auto fechado el 12 de enero del 2000, dictado dentro de este proceso por el Magistrado Ponente, que decidió no admitir la demanda de plena jurisdicción interpuesta contra la Resolución No. 730-96D.G., fechada el 24 de mayo de 1996, y la Resolución de 26 de abril de 1999, ambas emitidas por la Dirección General de la Caja de Seguro Social.

El extracto medular de la resolución apelada expone las razones que

fundamentan la no admisión de la demanda en los siguientes términos:

> "El Magistrado Sustanciador observa que, contra la resolución No. 730-96D.G. de 24 de mayo de 1996, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social mediante la cual se condena a la recurrente a pagar la suma de dieciseis mil noventa y tres balboas con doce centésimos (B/. 16,093.12), en concepto de cuotas de Seguro Social, primas de riesgos profesionales y recargos de ley, caben los recursos de reconsideración ante la Dirección General y de apelación ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Como en el expediente no hay constancia de que la parte actora haya agotado la vía gubernativa, pues no hizo uso oportuno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 de la Ley 135 de 1943, se incumple con lo preceptuado en el artículo 42 de la citada Ley, lo cual causa la inadmisibilidad de la presente demanda" (fja 68).

El recurso de apelación contra el citado auto fue presentado por el licenciado Rodrigo Sánchez, quien actúa en nombre y reperesentación de la empresa Centro Electromuebles, S. A., sociedad representada legalmente por el señor Herminio López Gonzalez. Al sustentar su impugnación, dicho letrado argumenta que es la segunda de las resoluciones impugnadas, o sea, fechada el 26 de abril de 1999, la que pone término a la vía gunernativa. Agrega que existe una confusión porque una resolución similar con igual fecha fue dictada en el caso de Ero Muebles, S. A., para el cual propuso un recurso de plena jurisdicción que fue admitido y está en trámite en la Sala. (Cfr. foja 77).

Por su parte, la Procuraduría de la Administración, mediante Vista Fiscal No.250, de 26 de mayo de 2000, se opuso al recurso de apelación examinado, porque la demandante no agotó previamente la vía administrativa antes de acudir a la Sala Tercera, y aunque presentó recurso de revisión en esa esfera el día 12 de septiembre de 1999, con lo cual se daba por suficientemente enterada del contenido de la Resolución No.730-96 D.G. de 1996, no se puede obviar que dicho recurso es inexistente en la vía gubernativa, pues el artículo 20 de la Ley 33 de 1946 señala que por esa vía proceden los recursos de reconsideración, ante el funcionario de primera instancia, y el de apelación, ante el inmediato superior.

En este estado, el Tribunal Ad-quem pasa a resolver la alzada previas las siguientes consideraciones.

A juicio de la Sala, no existen fundamentos que hagan variar el criterio vertido en la decisión del Tribunal A-quo que resolvió no admitir la presente demanda. El actor omitió un presupuesto esencial exigido por las normas vigentes que regulan el régimen contencioso administrativo, para las demandas de plena jurisdicción, requisito que consiste en la prueba del agotamiento de la vía administrativa. Al respecto, el artículo 42 de la Ley 135 de 1943 preceptúa lo que a continuación se deja transcrito:

> "Artículo 42: Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39, y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación". (Destaca la Sala).

Como se observa, esta disposición está concebida en términos imperativos y no facultativos tanto para el administrado como la autoridad pública. El presupuesto de agotamiento de la vía administrativa es indispensable en las acciones de plena jurisdicción. En autos no consta que el administrado haya tratado de enervar los efectos de los actos administrativos que ahora impugna en esta vía contencioso administrativa, a través de los recursos ordinarios que para

la esfera administrativa prevé el régimen de lo contencioso, en el artículo 33, o sea, mediante los recursos de reconsideración y el de apelación.

A fojas 11, reposa un poder especial otorgado al licenciado Rodrigo Sánchez por el representante legal de la empresa demandante, para que interponga recurso de "Reconsideración y Apelación en Subsidio" contra la Resolución No. 730-96-D.G., de 24 de mayo de 1996; pero al formalizar el respectivo recurso, presenta un escrito de revisión para atacar el referido acto, medio de impugnación extraordinario que si bien está contemplado en algunas leyes especiales y reglamentos de procedimiento administrativo vigentes, no está previsto en el procedimiento administrativo que contempla la ley 135 de 1943, modificada por la 33 de 1946 (Cfr. foja 12 y ss).

Es por lo anterior que el resto de los Magistrados coincide con el criterio adoptado en el auto recurrido y la opinión jurídica emitida en su Vista por la Procuraduría de la Administración.

Cabe destacar que el apelante expresa que la resolución fechada el 26 de abril de 1999 (visible a fojas 3 y 4), emitida por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, es la que puso término a la vía administrativa; empero, si en gracia de discusión esta afirmación fuera tomada como válida, aquél no acudió a la Sala a impugnarla sino más de dos meses después de emitido dicho acto del cual se notificó el mismo día de su emisión, o sea, el 26 de abril de 1999.

En efecto, el recurrente interpuso su demanda de plena jurisdicción el día 20 de agosto de 1999, según se aprecia a fojas 66 de los autos, más de dos meses después de la notificación aludida, estando prescrita la acción privada respectiva, según lo dispone el artículo 42b de la Ley 135 de 1943.

En mérito de lo expuesto, la Sala considera que no tiene asidero jurídico a la apelación analizada, de allí que lo procedente es desestimar el recurso confirmando la resolución apelada.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución de 12 de enero del 2000 expedida por el Magistrado Ponente del presente negocio, que NIEGA la admisión de la demanda de plena jurisdicción interpuesta por la empresa Centro Electromuebles, S. A., por medio de apoderado judicial, contra la Resolución No. 730-96 D.G., de 24 de mayo de 1998, y la Resolución de 26 de abril de 1999, ambas emitidas por la Dirección General de la Caja de Seguro Social.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BASILIO CHONG, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SAÚL QUIRÓZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 222 DE 1° DE ABRIL DE 2000, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Basilio Chong, en representación del señor SAÚL QUIRÓZ, interpuso demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulos, por ilegales, el Resuelto N° 222 de 1° de abril de 2000, dictado por el Presidente de la Asamblea Legislativa y la negativa tácita por silencio administrativo en que este funcionario incurrió al no resolver el recurso de reconsideración impetrado contra dicho Resuelto.

En la parte final de su libelo el licenciado Chong pidió al Magistrado Sustanciador que, antes de admitir la demanda, solicite al Presidente de la Asamblea Legislativa copia autenticada del acto impugnado y del libelo del recurso de reconsideración.. Sin embargo, por razones de economía procesal, quien suscribe pasa a examinar la demanda para determinar si cumple con los requisitos legales para ser admitida.

En el presente negocio el apoderado judicial del actor alega agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo. Reiterada jurisprudencia de la Sala ha sostenido, con fundamento en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que para probar el silencio administrativo es necesario que el actor aporte una certificación en la que conste que el respectivo recurso no ha sido resuelto. En caso de que esa certificación le sea negada, debe aportar el escrito en el que la solicitó y, además, pedir al Magistrado Sustanciador que, antes de resolver sobre la admisión de la demanda, requiera del funcionario o entidad demandada la certificación previamente negada (Cfr. Auto de 17 de julio de 1998: Emilio Batista contra el Director General del IDAAN; Auto de 25 de marzo de 1998: Pedro Didier Torres contra el Personero del Distrito de Aguadulce).

En el caso bajo examen, sin embargo, el licenciado Chong aportó copia del libelo en el que pidió al Secretario General de la Asamblea Legislativa que le certificara si el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto acusado fue o no resuelto, no obstante, omitió pedir al Magistrado Sustanciador que requiriera dicha certificación al precitado funcionario, toda vez que la petición de certificación no fue contestada. En su lugar, lo que pide es copia autenticada del recurso de reconsideración que él mismo aporta.

Como el silencio administrativo alegado no ha sido probado, la demanda instaurada no puede admitirse, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Basilio Chong, en representación del señor SAÚL QUIRÓZ, para que se declare nulos, por ilegales, el Resuelto N° 222 de 1° de abril de 2000, dictado por el Presidente de la Asamblea Legislativa y la negativa tácita por silencio administrativo en que este funcionario incurrió al no resolver el recurso de reconsideración impetrado contra dicho Resuelto.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS R. AYALA EN REPRESENTACIÓN DE IVETH NAVAS DE CHIRU, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 022-2000 DE 3 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL AMBIENTE, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos R. Ayala ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, en representación de IVETH NAVAS DE CHIRU, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 022-2000 de 3 de abril de 2000, dictada por el Administrador General del Ambiente, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a la revisión del libelo incoado, a fin de determinar si el mismo cumple con los requisitos de procedibilidad que exige la ley, para que pueda ser admitida.

En primer término se observa que, el actor no aportó la copia auténtica del acto confirmatorio, es decir de la Resolución N° 0116-2000 de 24 de abril de 2000, con el sello de notificación.

En este sentido, a foja 7 del expediente, se desprende que el demandante mediante solicitud de certificación, requirió al Administrador General de la Autoridad Nacional del Ambiente, le remitiera copia autenticada del acto impugnado y del acto confirmatorio, ambos con constancias de notificación. Sin embargo, desafortunadamente, el actor al momento de presentar la solicitud de certificación en la demanda, no hizo referencia a la copia autenticada con constancia de notificación del acto confirmatorio, sino tan sólo del acto impugnado, el cual sí reposa en el expediente debidamente autenticado y notificado. (Ver fojas 1, 2 y 6 del expediente)

En atención a la deficiencia señalada, el artículo 44 de la Ley supra citada, expresa de manera clara que el actor deberá acompañar a la demanda con una copia del acto impugnado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos. No obstante, es indispensable acotar, que la jurisprudencia de esta Sala ha sido constante sobre la importancia de que, no sólo el acto impugnado, sino cualesquiera otros documentos de valor probatorio (en este caso el acto confirmatorio) estén debidamente autenticados y notificados.

Esta formalidad es necesaria a fin de que esta Corporación pueda verificar si la demanda bajo análisis fue interpuesta en tiempo oportuno, ya que es a partir de la fecha de notificación del acto que decide de forma definitiva la actuación administrativa, que se cuenta el término legal hábil para ello, tal como lo establece el artículo 42b de la Ley 135 de 1943.

Ante tales circunstancias, el suscrito conceptúa que la demanda propuesta no reúne las exigencias necesarias para su admisibilidad, por tanto, no queda otra alternativa que negarle la admisión a la misma, para dar cabal cumplimiento a lo que claramente estatuye el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dispone lo siguiente:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción."

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción promovida por el Licdo. Carlos R. Ayala en representación de IVETH NAVAS DE CHIRU.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS R. AYALA EN REPRESENTACIÓN DE EMELDA VISSUETTI, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 024-2000 DE 3 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL AMBIENTE, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos R. Ayala ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, en representación de EMELDA VISSUETTI, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 024-2000 de 3 de abril de 2000, dictada por el Administrador General del Ambiente, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a la revisión del libelo incoado, a fin de determinar si el mismo cumple con los requisitos de procedibilidad que exige la ley, para que pueda ser admitida.

En primer término se observa que, el actor no aportó la copia auténtica del acto confirmatorio, es decir de la Resolución N° 0125-2000 de 24 de abril de 2000, con el sello de notificación.

En este sentido, a foja 9 del expediente, se desprende que el demandante mediante solicitud de certificación, requirió al Administrador General de la Autoridad Nacional del Ambiente, le remitiera copia autenticada del acto impugnado y del acto confirmatorio, ambos con constancias de notificación. Sin embargo, desafortunadamente, el actor al momento de presentar la solicitud de certificación en la demanda, no hizo referencia a la copia autenticada con constancia de notificación del acto confirmatorio, sino tan sólo del acto impugnado, el cual sí reposa en el expediente debidamente autenticado y notificado. (Ver fojas 1, 2 y 3 del expediente)

En atención a la deficiencia señalada, el artículo 44 de la Ley supra citada, expresa de manera clara que el actor deberá acompañar a la demanda con una copia del acto impugnado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos. No obstante, es indispensable acotar, que la jurisprudencia de esta Sala ha sido constante sobre la importancia de que, no sólo el acto impugnado, sino cualesquiera otros documentos de valor probatorio (en este caso el acto confirmatorio) estén debidamente autenticados y notificados.

Esta formalidad es necesaria a fin de que esta Corporación pueda verificar si la demanda bajo análisis fue interpuesta en tiempo oportuno, ya que es a partir de la fecha de notificación del acto que decide de forma definitiva la actuación administrativa, que se cuenta el término legal hábil para ello, tal como lo establece el artículo 42b de la Ley 135 de 1943.

Ante tales circunstancias, el suscrito conceptúa que la demanda propuesta no reúne las exigencias necesarias para su admisibilidad, por tanto, no queda otra alternativa que negarle la admisión a la misma, para dar cabal cumplimiento a lo que claramente estatuye el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dispone lo siguiente:

> **"Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción."**

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción promovida por el Licdo. Carlos R. Ayala en representación de EMELDA VISSUETTI.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ DUTARY, EN REPRESENTACIÓN DE CLAUDIO CORONADO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 089-98 DE 14 DE AGOSTO DE 1998, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Dutary, en representación de CLAUDIO CORONADO, interpuso recurso de apelación contra la Resolución de 26 de junio de 2000, por medio del cual el Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción por él interpuesta, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 089-98 de 14 de agosto de 1998, expedida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria y para que se haga otras declaraciones.

Como el recurrente no sustentó su alzada a pesar de habérsele concedido el término legal respectivo, el resto de los Magistrados que integran la Sala, con fundamento en el artículo 1122 del Código Judicial, proceden a declarar desierto el recurso impetrado.

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Dutary, en representación de CLAUDIO CORONADO, contra la Resolución de 26 de junio de 2000, expedida por el Magistrado Sustanciador.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VICENTE ARCHIBOLD, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DGP/131/98 DE 1° DE JULIO DE 1998, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL FERROCARRIL DE PANAMÁ, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Vicente Archibold interpuso demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción en representación de DONALD MILLER, JUAN FERNÁNDEZ y otros, para que se declare nulas, por ilegales, la Nota N° DGP/131/98 de 1 de junio de 1998, expedida por el Director General del Ferrocarril de Panamá y la negativa tácita por silencio administrativo que se produjo al no resolver el respectivo recurso de reconsideración y para que se haga otras declaraciones.

Encontrándose el negocio en estado de resolver, los Magistrados que integran la Sala estiman necesario, con fundamento en el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, dictar un auto para mejor proveer a fin de requerir a la Autoridad Marítima de Panamá que informe detalladamente, qué prestaciones se pagaron a cada uno de los extrabajadores del Ferrocarril de Panamá que se mencionan en la parte resolutiva de este Auto, como consecuencia de la privatización de esta entidad, así como el monto cancelado a cada uno de ellos, según los parámetros establecidos por el Consejo Económico Nacional.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaría de la Sala se oficie al Administrador General de la Autoridad Marítima de Panamá para que informe detalladamente qué prestaciones se pagaron a los siguientes extrabajadores del Ferrocarril de Panamá como consecuencia de la privatización de esta entidad, al igual que el monto cancelado a cada uno de ellos: DONALD MILLER, JUAN FERNÁNDEZ, ROGELIO CUÉLLAR, GABRIEL NÚÑEZ, AGUSTÍN VILLARREAL, ALFONSO MUÑOZ, CARLOS CHERY, ENRIQUE CHARLES, LUIS GÓNDOLA, TRENIA CASTILLO, VILMA RÍOS DE ILLUECA, NIDIA CHIARI, DALYS JAÉN, MERLADO ARGÜELLES, HERVIN ARBOINE, VICENTE LOPOLITO, RODOLFO CAMPBELL, ITZELIS ORTEGA DE GONZÁLEZ, ERNEST REID, ANICASIO GÓNDOLA, CELSO MARTÍNEZ, PLÁCIDO TEJADA, JOSÉ ARAÚZ, BERNARDO CAMPOS, SATURNINO SÁNCHEZ, PEDRO GARRIDO, DANUBIO GONZÁLEZ, ROLANDO GAMBOA, JOSÉ GONZÁLEZ, CLARENCE GLASCOW, VÍCTOR GONZÁLEZ, RAQUEL GUTIÉRREZ, JORGE GRAY, FRANCISCO CATOGAN, GENARO GONZÁLEZ, DENIS GONZÁLEZ, FLORENCIO GUERRERO, VALENTINA HURTADO, ISIDRO HIDALGO, HIGINIO HERRERA, HERMENEGILDO HERRERA, GENE HOWARD, RAÚL IPIÑA, EDUARDO KENNEDY, DIANA LUQUE, CARLOS MEDINA, GILBERTO MENDOZA, RIGOBERTO MARÍN, ÁLVARO MARÍN, CALIXTO MORENO, FRANCISCO MUÑOZ, EUSEBIO MENDOZA, ARCADIO MACKAY, ADUARDO MORALES, DARÍO MONTERO, ANA MORENO, MANUEL MÁRQUEZ, ANASTACIO MELGAR, LUIS MILLER, DARÍO MORENO, HENRY MATTHEWS, JESÚS MORA, RICARDO MORENO, PEDRO MAGALLÓN, ALBERT MILLER, ROSENDO NAVARRO y EUNO TORRES.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. ALMA L. CORTÉS A., EN REPRESENTACIÓN DE IRVING ARIEL TORRES NIETO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO.2 DEL 7 DE FEBERO DE 2000, POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CUARENTENA AGROPECUARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO EL COBRO DE UNOS SERVICIOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, 3 TRES DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Alma L. Cortés A., actuando en nombre y representación de IRVING ARIEL TORRES NIETO, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo,

por ilegal, el Decreto Ejecutivo No. 2 del 7 de febrero de 2000, por el cual se autoriza a la Dirección Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Agropecuario el cobro por unos servicios.

La licenciada Cortés solicitó la suspensión provisional de los efectos del Decreto Ejecutivo No. 2 del 7 de febrero de 2000 en los siguientes términos:

> "Se solicita a los Honorables Magistrados, acceder a la solicitud de SUSPENSION PROVISIONAL de los efectos jurídicos, administrativos y Fiscales de la (sic) EL DECRETO EJECUTIVO No. 2 DEL 7 DE FEBRERO DE 2000 "POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCION EJECUTIVA DE CUARENTENA AGROPECUARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO EL COBRO POR UNOS SERVICIOS", DICTADO POR EL ORGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DEL RAMO, toda vez que las Autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, están exigiendo el cumplimiento a los particulares del pago de tarifas por la prestación de estos servicios zoosanitarios, siendo un cobro o tasa ilegal, y tal situación viola de forma flagrante las Leyes de la República vigente, siendo esta petición especial procedente y justa, en atención a los principios FUMUS BONI IURIS y PERICULUM IN MORA.
>
> De no atenderse esta solicitud especial, observándose la existencia o apariencia de un buen derecho y obviamente la provocación de perjuicios notoriamente graves en contra de los demandantes, por la imposición de tasas o derechos al margen de la Ley, quienes se verán afectados en su patrimonio, al tener que hacer efectivo el pago de esta obligación tributaria impuesta, cuya ilegalidad es ostensible y de difícil reparación patrimonial por parte del estado, a través de un crédito fiscal, que sería lo justo y pertinente, al igual que estamos ante la presencia y apariencia de un buen derecho que nos asiste."

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta a la Sala Tercera para suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, cuando, a su juicio, sea necesario para evitar un perjuicio "notoriamente grave". Esta medida cautelar tiene carácter provisional, motivo por el cual la Sala Tercera puede modificar la resolución judicial mediante la cual se decrete dicha medida siempre y cuando la Sala considere que existen razones suficientes para evitar aquella medida. En los procesos de nulidad, procede la suspensión del acto administrativo como medida cautelar para evitar no sólo perjuicios patrimoniales sino, sobre todo, cuando puede producirse una violación ostensible o manifiesta al ordenamiento jurídico.

Una vez analizados los argumentos esgrimidos por el demandante, la Sala considera que no le es posible acceder a la petición de suspensión provisional, puesto que las infracciones legales invocadas no aparecen como ostensibles, claras e incontrovertibles. Además, el recurrente no ha logrado demostrar los perjuicios graves e irreparables que causarían los efectos del acto impugnado.

Vale destacar que esta medida precautoria no debe considerarse un pronunciamiento adelantado de esta Sala en relación a la pretensión de fondo del recurrente, ya que sólo al resolverse la controversia se determinará la legalidad o ilegalidad del acto impugnado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de suspensión provisional de los efectos del Decreto Ejecutivo No. 2 del 7 de febrero de 2000.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS MOORE EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ACUERDOS NOS. 16 DE 14 DE ABRIL DE 1998, EL NO. 21 DE 16 DE JUNIO DE 1998, AMBOS EXPEDIDOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, (APROBACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ENTRE LA EMPRESA SUFI INTERNATIONAL (PANAMÁ) Y EL MUNICIPIO DE LA CHORRERA). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el Licenciado Carlos Moore en representación de PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, para que se declaren nulos por ilegales, los Acuerdos Nos. 16 de 14 de abril de 1998, el No. 21 de 16 de junio de 1998, ambos expedidos por el Consejo Municipal del Distrito de La Chorrera, (aprobación del Contrato de Concesión entre la Empresa SUFI INTERNATIONAL (PANAMÁ) y el MUNICIPIO DE LA CHORRERA).

La Procuradora de la Administración expresa que en su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consignada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, emitió criterio respecto de los hechos que generaron el Proceso Contencioso Administrativo actual, mediante la Consulta N° 113 de 30 de abril de 1998, visible a fojas 128 a 130 del expediente.

El solicitante fundamenta su pretensión en los artículos 749, numeral 5, 388 y 754 del Código Judicial, los cuales son del tenor siguiente:

> "Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.
>
> Son Causales de impedimentos:
> .....
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o por haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo.....
> (El Subrayado es nuestro)
>
> Artículo 388. Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces.
>
> Artículo 754. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho que constituya la causal".

A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera, las circunstancias presentadas hacen aplicables las normas transcritas referentes a las causales de impedimento, por lo que es dable acceder a la petición invocada en este caso.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, por lo tanto la separan del conocimiento del presente negocio, y ORDENAN designar al suplente que le corresponda para que conozca del asunto.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LOPEZ, EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METROOESTE S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDI NO. 142 DE 10 DE DICIEMBRE DE 1998, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense GALINDO, ARIAS Y LOPEZ, actuando en su calidad de apoderada legal de la EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METROOESTE S. A., presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de nulidad a fin de que se declarase nulo, por ilegal, el Acuerdo No. 142 de 10 de diciembre de 1998, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

El Acuerdo Municipal impugnado adicionó el numeral 104 al Acuerdo No.136 de 29 de agosto de 1996, "sobre la Renta de Empresas de Generación o Distribución de Energía Eléctrica", gravando con un impuesto municipal los ingresos brutos de las empresas que prestan este servicio público.

A juicio de la parte actora, el acto administrativo en mención infringía los artículos 17; 21, 74 y 79 de la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal, toda vez que el Acuerdo expedido creaba un tributo no contemplado en la Ley, y establecía una doble tributación para las empresas dedicadas a la distribución y generación de energía eléctrica.

Como cuestión preliminar, la parte actora solicitó a la Sala Tercera que se ordenara la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, petición que fue aceptada por esta Superioridad, cautelándose el Acuerdo Municipal demandado mediante auto de 27 de abril de 1999.

En dicha resolución judicial, este Tribunal consideró, prima facie, que las constancias procesales indicaban que el Ente Municipal había rebasado las atribuciones confe-ridas por la Ley 106 de 1973, al establecer un gravamen sobre las actividades lucrativas que realizaban las empresas de distribución de energía eléctrica, pese a que dichas actividades tenían un alcance extradistrital.

De igual forma se señaló que existía, en apariencia, la imposición de doble tributación sobre las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, que ya habían sido gravadas por el Estado con un impuesto sobre el servicio público que prestan.

De la demanda incoada se corrió traslado a la autoridad responsable del acto acusado, así como a la Procuradora de la Administración para que emitiese concepto legal en relación a los cargos de ilegalidad presentados.

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No. 247 de 4 de junio de 1999 solicitó a esta Superioridad que se accediera a la pretensión de los demandantes, manifestando que en su concepto, el Acuerdo Municipal impugnado resultaba efectivamente violatorio del ordenamiento legal.

DECISION DE LA SALA TERCERA

Una vez cumplidos todos los trámites procesales correspondientes, y encontrándose la Sala Tercera en estado de decidir sobre el mérito de la demanda, se percata que el proceso instaurado carece de materia justiciable, toda vez que el acto administrativo impugnado, esto es, el Acuerdo Municipal No. 142 de 10 de diciembre de 1998, expedido por el Concejo Municipal de Panamá, ha sido declarado inconsti-tucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia de 30 de diciembre de 1999. (Publicada en la Gaceta Oficial No.24,021 de 30 de marzo de 2000).

Como lo ha reiterado esta Corporación Judicial en un número plural de ocasiones, la declaratoria de incons-titucional produce la nulidad ex-nunc del acto examinado, y conlleva por ende, su desaparición del mundo jurídico.

La Sala debe en consecuencia, abstenerse de todo pronunciamiento de fondo en este negocio, siendo que por causas exógenas al proceso, se ha producido la pérdida del objeto litigioso sobre el que habría de recaer la decisión jurisdiccional, extinguiéndose la pretensión por obsoles-cencia procesal.

De consiguiente, la Sala Tercera Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SE HA PRODUCIDO EL FENOMENO JURIDICO DE SUSTRACCION DE MATERIA, razón por la que ordena el archivo del expediente.

Notifiquese y Publiquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUÍ, S. A. Y LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METROOESTE, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LAS PALABRAS 'ELÉCTRICIDAD' CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO PRIMERO, EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL PARÁGRAFO DEL CÓDIGO 11.25.35 DEL ARTÍCULO SEGUNDO, EN EL LITERAL D) DEL CÓDIGO 11.25.65 DEL ARTÍCULO TERCERO, LOS NUMERALES 1.1.1 Y 1.2 DEL PARÁGRAFO DEL CÓDIGO 11.25.35. DEL ARTÍCULO SEGUNDO, EL LITERAL "D.1" EL CÓDIGO 11.25.65 DEL ARTÍCULO TERCERO, DEL ACUERDO N° 19 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 1998, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARÚ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Galindo Arias y López, actuando en representación de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. y Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A., presentó demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulas, por ilegales las palabras "electricidad" contenidas: en el artículo primero; en el primer párrafo del parágrafo del código 11.25.35 del artículo segundo; en los numerales 1-, 1.1. y 1.2. del parágrafo del código 11.25.35. del artículo segundo; en el literal "d" del código 11.25.65 del artículo tercero, y en el literal "d.1" del código 11.25.65 del artículo tercero

del Acuerdo N° 19 de 1 de diciembre de 1998, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Barú.

El Acuerdo Municipal impugnado modifica el Acuerdo Municipal N° 7 de 14 de abril de 1993 y establece el impuesto de servicios de electricidad y de agua; actividad de plantas de electricidad y de agua; generadoras de electricidad, distribuidoras de electricidad y de agua y potabilizadora de agua; que deberán pagar al Tesoro Municipal las empresas dedicadas a estas actividades y que operen en el distrito de Barú.

Las empresas dedicadas a estas actividades en el Distrito de Barú, fueron gravadas con los impuestos establecidos en los Códigos 11.25.35 11.25.65 del régimen impositivo de este Municipio, tal como quedaron modificados por este Acuerdo N° 19 de 1998 ahora impugnado.

A juicio de la parte actora, el acto administrativo en mención infringía los artículos 17; 21 numeral 6, 74 y 79 de la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal, toda vez que el acuerdo expedido estaba gravando actividades con incidencia fiscal extradistrital, sin existir una ley formal que autorice al Municipio de Barú a imponer tal tributo.

La parte actora solicitó a la Sala Tercera la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, petición que fue resuelta favorablemente mediante el auto de 28 de abril de 1999.

En dicho auto la Sala Tercera señaló que ante la apariencia de un buen derecho a favor de las demandantes, procedía suspender el Acuerdo N° 19 de 1998.

Esta decisión es producto del examen preliminar del acto acusado y de las constancias procesales presentadas por las actoras, de las cuales surge un indicio de que el Ente Municipal ha rebasado la competencia contemplada por el citado artículo 74 de la Ley 106 de 1973, en virtud que la concesión administrativa que les fue otorgada para la distribución de energía eléctrica, sobrepasa los límites del Distrito de Barú y de la Provincia de Chiriquí. Además, a juicio de la Sala, el acto impugnado es aparentemente violatorio del numeral 6 del artículo 21 de la Ley 106 de 1973, según el cual los Concejos Municipales no pueden gravar con impuestos lo que ya fue gravado por la nación mediante ley, en este caso, por el artículo 5 de la Ley 26 de 1996 (fs. 240 a 244).

De la demanda incoada se corrió traslado a la autoridad responsable del acto acusado para que rindiera su informe de conducta y a la Procuradora de la Administración, para que emitiera su concepto legal.

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal N°402 de 18 de agosto de 1999, solicitó a esta Superioridad que accediera a la pretensión de los demandantes, manifestando que a su juicio, el Acuerdo Municipal impugnado resultaba efectivamente violatorio del ordenamiento legal.

DECISION DE LA SALA TERCERA

Cumplidos los trámites de ley y encontrándose el negocio en estado de resolver, la Sala Tercera se percata que el proceso instaurado carece de materia justiciable, toda vez que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante el fallo de 11 de noviembre de 1999, declaró: "QUE SON INCONSTITUCIONALES todas las palabras 'electricidad' contenidas en el Acuerdo N° 19 de 1 de diciembre de 1998, emitido por el Concejo Municipal de Barú". (Publicada en la Gaceta Oficial No.23,984 de 7 de febrero de 2000).

Como lo ha reiterado esta Corporación en un número plural de ocasiones, la declaratoria de inconstitucionalidad produce la nulidad ex-nunc del acto examinado, y por ende, su desaparición del mundo jurídico.

La Sala debe en consecuencia, abstenerse de todo pronunciamiento de fondo

en este negocio, siendo que por causas exógenas al proceso, se ha producido la pérdida del objeto litigioso sobre el que habría de recaer la decisión jurisdiccional, extinguiéndose la pretensión por obsolescencia procesal.

De consiguiente, la Sala Tercera Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SE HA PRODUCIDO EL FENÓMENO JURÍDICO DE SUSTRACCIÓN DE MATERIA, dentro de la demanda contencioso administrativa de nulidad presentada por la firma Galindo, Arias y López en representación de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. y Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A., para que se declare nulas, por ilegales las palabras "electricidad" contenidas: en el artículo primero; en el primer párrafo del parágrafo del código 11.25.35 del artículo segundo; en los numerales 1-, 1.1. y 1.2. del parágrafo del código 11.25.35. del artículo segundo; en el literal "d" del código 11.25.65 del artículo tercero, y en el literal "d.1" del código 11.25.65 del artículo tercero del Acuerdo N° 19 de 1 de diciembre de 1998, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Barú y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Publiquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA FIRMA DE ABOGADOS MORGAN Y MORGAN, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ELOY GRIMALDOS MÉNDEZ Y OTRO, HA INTERPUESTO DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 209-98, DE 19 DE OCTUBRE DE 1998, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

Dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la firma de abogados Morgan y Morgan, en nombre y representación de Eloy Grimaldos y otro, contra la Resolución No. 209-98, de 19 de octubre de 1998, emitida por el Ministerio de Vivienda, ha sido incoada una solicitud de inscripción en el Registro Público de la referida demanda de nulidad corregida, según se aprecia en escrito que corre de fojas 335 a la 338 de los autos.

La firma forense fundamenta su petición en una serie de hechos y consideraciones que pueden ser resumidos de la siguiente manera:

1. Que la demanda de nulidad contiene declaraciones que a su juicio constituyen "pretensiones reales" sobre los inmuebles 32,965 y 29,164, porque al pedir a la Sala que ordene la demolición de las obras derivadas de los permisos de construcción, que se basan en la resolución demandada del Ministerio de Vivienda sobre cambio de uso de suelo, se está ejerciendo una verdadera pretensión real; lo mismo ocurre con la petición de que se prohíba la concesión de permisos de ocupación, situación que a criterio del petente constituye una efectación o restricción para el derecho de dominio de los dueños de las citadas fincas.

2. Que el Código Judicial permite la inscripción provisional de la demanda en su artículo 1212, pero que si bien los demandantes no pretenden adquirir el dominio de las fincas antes identificadas, "sí pretenden que se afecten sobre ellas actos de disposición claramente definidos".

3. Que la solicitud de inscripción busca que se advierta a los futuros o eventuales adquirentes de los apartamentos y locales del Edifico The Milenium Tower que podrían ser afectados tomando en cuenta, entre otras, la petición de demolición de dicho edificio.

4. Que la petición es procedente en atención a los artículos 99 y 212 del Código Judicial, que no contradicen las disposiones de la Ley orgánica de lo contencoso administrativo, y está orientada a la protección de los promitentes o futuros adquirentes de bienes sujetos al régimen de propiedad horizontal.

La Sala al analizar los fundamentos de hecho y de derecho que expone el petente considera que no le asiste la razón al mismo, por lo que debe desestimar la referida solicitud de inscripción provisional de la demanda de nulidad corregida dentro del presente proceso de nulidad.

El artículo 1212 del Código Judicial establece las reglas generales aplicables en los procesos de conocimiento, entre las que permite al Juez que ordene la inscripción provisoria de una demanda en ese tipo de procesos. El numeral 3 de dicho artículo tiene el siguiente tenor literal.

> "Artículo 1212. Son comunes en los procesos de conocimiento, las siguientes disposiciones:
> ...
> ...
> 3. Tratándose de procesos que afecten bienes inmuebles o muebles susceptibles de registro, el Juez ordenará que, antes de correrse traslado al demandado, se inscriba provisionalmente la demanda. Procede la inscripción provisional de la demanda en el Registro Público, cuando el objeto de ésta sea el reconocimineto y el ejercicio de un derecho real sobre un inmueble o mueble susceptible de registro, siempre que el demandante no haya renunciado o no haya querido ejercer en el momento esta facultad. El Juez, por medio de un oficio, hará saber al Registrador lo siguiente: el nombre de las partes, la identidad del bien, su ubicación y linderos.
>
> Esta inscripción no pone el bien fuera del comercio, pero afectará a terceros adquirentes. No obstante, el Juez ordenará la cancelación de la inscripción provisional, si el demandante desistiera de esta medida o fuere vencido en primera instancia y no preste caución equivalente a la caución de secuestro que correspondería, dentro de los cinco días siguientes a la resolución dictada. Cuando la demanda se refiere sólo a parte o cuota parte de una finca, la inscripción provisional únicamente afectará a dicha parte o cuota parte;
> ...
> ...
> ..." (Destaca la Sala).

Es claro que en el presente caso estamos ante bienes inmuebles susceptibles por ende de registro en la entidad oficial destinada a ello; sin embargo, del texto del numeral transcrito no se desprende que la inscripción provisional de la demanda proceda ante demanda cuyo objeto no sea el "reconocimiento y el ejercicio de un derecho real", respecto de un determinado bien mueble o inmueble en disputa.

La norma en examen se refiere a demandas en procesos de conocimiento que pretendan el reconocimiento o el ejercicio de un derecho real, lo cual no es compatible en general con los procesos de nulidad que se ventilan ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala desea advertir que la solicitud analizada se aparta del fin primordial que implica la acción de nulidad, dentro del régimen contencioso administrativo vigente, cual es la tutela del ordenamiento legal objetivo, es decir, esta acción contenciosa tiene antes que la protección de derechos

subjetivos susceptibles de ser afectados, un propósito nomofiláctico; he allí una de las diferencias principales respecto de la demanda de plena jurisdicción, en la que el demandante además de la petición de nulidad del acto administrativo impetra el resarcimiento o restablecimiento del derecho subjetivo que considera se le ha violado.

En conclusión, este Tribunal estima que la solicitud de inscripción en el Registro Público de la presente demanda de nulidad no es procedente, por lo que debe denegarla.

Consecuentemente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (Contencioso Administrativo), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de inscripción provisional en el Registro Público de la demanda de nulidad corregida, hecha por el señor Eloy Grimaldos Méndez y Otro, a través de apoderado judicial, dentro del proceso de nulidad que promueve contra la Resolución No. 209-98, de 19 de octubre de 1998, emitida por el Ministerio de Vivienda.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. GABRIEL MARTÍNES, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO N°44 DE 4 DE MARZO DE 1998, DICTADO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Gabriel Martínez, actuando en su propio nombre y representación, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, con el objeto de que se declare nulo por ilegal, el Decreto N°44 de 4 de marzo de 1998, dictado por el Contralor General de la República.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente para que la Sala Tercera declare que es nulo por ilegal, el Decreto N°44 de 4 de marzo de 1998, dictado por el Contralor General de la República, por el cual se reglamenta la fianza aduanal a que se obligan los contribuyentes o ciudadanos del Estado cuando son emitidas por compañías aseguradoras. El Decreto N°44 de 4 de marzo de 1998 fue publicado en la Gaceta Oficial N° 23,511 de 30 de marzo de 1998.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción se destaca que:

> "PRIMERO: Mediante Decreto N°44 de 4 de marzo de 1998, el Contralor General de la República, reglamentó la fianza aduanal a que se obligan los contribuyente o ciudadanos del Estado, cuando son emitidas por compañías de seguros.
>
> SEGUNDO; Según se expresa en el primer considerando de dicho decreto, el mismo fue expedido con fundamento en el artículo 111 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995.
>
> TERCERO: Los parámetros y condiciones que el señor Contralor General

de la República, estableció mediante el Decreto 44 de 4 de marzo de 1998, son ilegales, toda vez que la Contraloría General de la República no tiene facultad legal para establecer, condiciones que deben cumplir las compañías de seguros al emitir fianzas aduanales a favor del Estado.

CUARTO: La aprobación y aceptación de fianzas aduanales expedidas por compañías de seguros a favor del Estado, sujetas al cumplimiento del Decreto N°44 de 4 de marzo de 1998, resulta ilegal, toda vez que la Contraloría General de la República no tiene facultad legal para establecer, condiciones que deben cumplir las compañías de seguros al emitir fianzas aduanales a favor del Estado.

QUINTO: El Decreto N°44 de 4 de marzo de 1998, es ilegal toda vez que está exigiendo a los contribuyentes del Estado, formalidades y requisitos no establecidos en la Ley.

SEPTIMO: El Decreto N°44 de 4 de marzo de 1998, que se impugna es ilegal, dado que el Contralor General de la República al establecer condiciones para la aceptación de fianzas aduanales a favor del Estado, se excedió de las facultades legales que tiene la Contraloría General de la República."

Como disposiciones legales alegadas como infringidas, figura el artículo 1 y 111 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, el artículo 2 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, que en su texto expresan:

"ARTICULO 1: Ambito de Aplicación.
La presente Ley se aplicará a las contrataciones que realicen el Estado, sus entidades autónomas o semiautónomas..."

"ARTICULO 111: Las fianzas habrán de constituirse en efectivo, títulos de crédito del Estado, en fianzas emitidas por compañías de seguros, o mediante garantías bancarias o en cheques librados o certificados,

Las compañías de seguros y los bancos a que se refiere este artículo, deben tener solvencia reconocida por la Superintendencia de Seguros o por la Comisión Bancaria Nacional según sea el caso.

Con tal finalidad dichas entidades remitirán anualmente, a la Contraloría General de la República, una lista de las compañías de seguros, indicando en cada caso, el monto de las obligaciones que pueden garantizar tales compañías de seguros o bancos.

La Contraloría General de la República queda facultada para rechazar cualquier fianza que no represente una adecuada garantía de cumplimiento del contrato, así como para exigir la sustitución de garantías otorgadas por bancos o compañías de seguros que no se encuentren en capacidad económica comprobada de garantizar dichas obligaciones contractuales, por otras otorgadas por compañías de seguros o bancos que tengan la capacidad.

Las fianzas emitidas por las compañías de seguros deben ser constituidas de acuerdo con el modelo, reglamentado mediante decreto, expedido por la Contraloría General de la República."

"ARTICULO 2....
Se excluye de acción de la Contraloría las organizaciones sindicales, las sociedades cooperativas y demás entidades, cuya vigilancia y control sean de competencia, de acuerdo con disposiciones legales especiales, a otros organismo oficiales."

Según el demandante, el acto impugnado al invocar como fundamento legal para su expedición el artículo 1 de la Ley 56 de 1995, se violó de manera directa, dado que las fianzas que las normas fiscales exigen a los contribuyentes del Estado, no se constituyen para garantizar propuestas formuladas al Estado en un acto de selección de contratista o para garantizar el cumplimiento y ejecución de un contrato celebrado con alguna entidad estatal.

En cuanto al artículo 111 de la Ley 56 de 1995, expresa el demandante que se violó directamente, puesto que de modo alguno faculta a la Contraloría General para establecer parámetros, límites y condiciones que deben cumplir las fianzas aduanales que son emitidas a favor del Estado por las compañías de seguros, toda vez que dicha norma hace clara referencia a las fianzas dirigidas a los proponentes de un acto público o contratistas del Estado.

Finalmente, con respecto al artículo 32 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, se afirma que se violó de manera directa, pues, al establecer a través del acto impugnado formalidades a las fianzas emitidas por las compañías de seguros, la Contraloría General de la República se sale de su radio de acción e invade el campo de competencia de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

II. El informe explicativo de conducta expedido por el Sub Contralor General de la República y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

Mediante Nota N°2264-Leg. de 23 de noviembre de 1998, el Subcontralor General de la República expidió el informe explicativo de conducta, que es visible de fojas 23 a 24 del expediente en los siguientes términos:

> "El Decreto N°44 de 4 de marzo de 1998 "por el cual se reglamenta la Fianza Aduanal a que se obligan los contribuyentes o ciudadanos del Estado cuando son emitidas por compañías aseguradoras", proferido por el Contralor General de la República, no persigue como lo afirma el actor, establecer o señalar condiciones a las compañías de seguros para la emisión de Fianzas Aduanales a favor del Estado.
>
> Antes bien, dicho Decreto procura, con fundamento en lo estatuido en el Artículo 51 de la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República, en relación con el numeral 7 del Artículo 11 de la misma excerta, establecer las medidas necesarias para asegurar la suficiencia de las fianzas que se constituyan para garantizar el cumplimiento de las obligaciones aduanales contraidas por los contribuyentes, a favor del Estado, de suerte que en caso de incumplimiento, la caución constituida mediante fianza emitida por compañía aseguradora, permita hacer efectivo el crédito a favor del Tesoro Nacional, según la actividad aduanera garantizaada.
>
> El Decreto N°44 de 4 de marzo de 1998, en modo alguno atribuye a la Contraloría General de la República, la función de fiscalizar, regular y controlar las operaciones comerciales y prácticas profesionales de las empresas o entidades que tengan por objeto realizar operaciones de seguros y de fianzas.
>
> Por el contrario, el propósito del referido Decreto es el de simplificar y facilitar, mediante la reglamentación y adopción de modelos de fianzas, el proceso de control de la suficiencia de las Fianzas Aduanales emitidas por compañías aseguradoras, constituidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones aduanales. Todo ello, con basamento en la facultad de control de las garantías, otorgada a la Contraloría General de la República, consignada en el Artículo 51 de la precitada Ley 32 de 1984.
>
> En otro orden de ideas, mal puede sostenerse que el Decreto N°44 de 4 de marzo de 1998 "invade el campo de competencia de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros", puesto que los textos de

> los modelos de fianza aprobados por el Artículo Noveno del citado Decreto N°44, fueron considerados y convenidos por una Comisión de Trabajo integrada por representantes autorizados, no sólo de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, sino también de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, de la Asociación Panameña de Aseguradores y de la Contraloría General de la República, tal como lo indica el precitado precepto.
>
> Luego, es lógico suponer que si los representantes autorizados de la Superintendencia de Seguro y Reaseguros estuvieron de acuerdo con el texto de los modelos de Fianzas Aduanales aprobados y reglamentados por el Decreto N° 44 de 4 de marzo de 1998, es porque dicha reglamentación no contraviene las facultades que en orden al control, autorización previa, fiscalización, supervisión, reglamentación y vigilancia de las entidades que tienen por objeto realizar operaciones de seguros y fianzas, le otorga la Ley 59 de 29 de julio de 1996 a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros."

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 11 de 12 de enero de 1999, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. La Procuradora de la Administración prohija lo aseverado por el Subcontralor General de la República, en el sentido de que el acto acusado no faculta a la Contraloría para fiscalizar, regular y controlar las operaciones comerciales y prácticas profesionales de las empresas o entidades que tengan por objeto realizar operaciones de seguros y de fianzas sino que busca simplificar y facilitar, mediante la reglamentación y adopción de modelos de fianzas, el proceso de control de la suficiencia de las Fianzas Aduanales emitidas por compañías aseguradoras, constituidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones aduanales.

III. Decisión de la Sala.

Como se ha expresado anteriormente, mediante el proceso contencioso administrativo incoado, se demanda la nulidad del Decreto N°44 de 4 de marzo de 1998, dictado por el Contralor General de la República, "por el cual se reglamenta la fianza aduanal a que se obligan los contribuyentes o ciudadanos del Estado cuando son emitidas por compañías aseguradoras". El Decreto N° 44 de 4 de marzo de 1998, fue publicado en la Gaceta Oficial N°23,511 de 30 de marzo de 1998. Medularmente se argumenta que la Contraloría General de la República no tiene facultad legal para establecer condiciones que deben cumplir las compañías de seguros al emitir fianzas aduanales a favor del Estado, ni establecer condiciones a las que este tipo de fianzas deben ajustarse.

Al confrontar el acto cuya nulidad se demanda con las normas invocadas como infringidas y los argumentos que las sustentan, la Sala es del criterio que la razón no le asiste a la parte actora por las razones que se pasan a exponer.

En primer lugar, no debe perderse de vista que la potestad reglamentaria con que cuenta la Contraloría no es objeto de discusión, puesto que sobre ello esta Corporación ha vertido pronunciamientos y claramente ha manisfestado que ello tiene fundamento en lo previsto en el artículo 276 numeral 2 y 6 de la Constitución Nacional, que dispone que la Contraloría General puede regular todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos a fin de que se realicen con corrección y según lo establecido en la Ley, y, además la faculta para establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que sean efectivos los créditos a favor de las entidades públicas, siempre que ello sea cónsono con los límites que se derivan tanto del principio constitucional de la reserva de la Ley como de la naturaleza de los reglamentos (Véase Sentencia de 8 de febrero de 1993). El desarrollo legislativo de esta disposición constitucional se aprecia en la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República, en cuya normativa se prevé como sus atribuciones, el de procurar la adopción de medidas necesarias para que se hagan efectivos los

créditos a favor de las entidades públicas y el pronunciarse sobre la suficiencia de las garantías que se constituyen para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con esas entidades.

Siendo ello así, la Contraloría General al expedir el Decreto N°44 de 4 de marzo de 1998, "por el cual se reglamenta la fianza aduanal a que se obligan los contribuyentes o ciudadanos del Estado cuando son emitidas por Compañias de Seguros", de ningún modo excede los límites de la potestad reglamentaria, pues, expresamente contempla que su expedición fue con el fin de aprobar los modelos de fianzas, ante la existencia en el Régimen Aduanero de una variedad de operaciones y servicios que son garantizados al Estado mediante las mismas y que son emitidas por las compañías aseguradoras. Es más, en su artículo noveno se hace la salvedad que los textos de modelos de fianzas fueron considerados y covenidos por la Comisión de Trabajo integrada por representantes autorizados de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, por la Asocación Panameña de Aseguradores y la Contraloría General de la República. Es claro entonces, que su finalidad no es, como hace ver el demadante, el de regular y controlar las operaciones comerciales y prácticas profesionales de las empresas o entidades que tengan por objeto realizar operaciones de seguros y de fianzas. Similar criterio expuso esta Sala en sentencia de 10 de mayo de 2000, expedida en ocasión de la demanda contencioso administrativa de nulidad presentada contra la Ayuda Memoria de 22 de septiembre de 1998, dictada por la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y la Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA).

Por lo expuesto, lo procedente es no acceder a la pretensión formulada en la demanda, toda vez que no se configuró la violación a los artículos 1 y 111 de la Ley 56 de 1995 y al artículo 2 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto N° 44 de 4 de marzo de 1998, expedido por el Contralor General de la República.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICDA. ALMA CORTÉS EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 117 DE 18 DE AGOSTO DE 1998, EXPEDIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Alma Cortés, actuando en su propio nombre y representación, interpuso demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 117 de 18 de agosto de 1998, expedida por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá. Admitida la demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración, y se requirió al funcionario demandado que rindiera un informe de conducta.

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

Mediante la Resolución N° 117 de 18 de agosto de 1999 el Consejo Municipal de Panamá resolvió ordenar al Tesorero Municipal que no pague la suma establecida en el Contrato de Servicios Profesionales N° 056-98 de 31 de julio de 1998, a favor del licenciado Dionisio Sánchez hasta que se haga la consulta pertinente.

II. DISPOSICIONES VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La licenciada Cortés estima que el acto impugnado infringe el numeral 5 del artículo 45 de la Ley 106 de 1973, la cual es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 45. Los Alcaldes tendrán las siguientes atribuciones:
> 1. ...
> 2. ...
> 3. ...
> 4. ...
> 5. Designar en calidad de colaboradores o auxiliares permanentes, a los especialistas que se requieran en cada una de las actividades de la administración municipal, cuando el Municipio contaré con recursos para ello".

Al respecto la parte actora manifestó lo siguiente:

> "Es manifiesta la violación de forma directa por omisión del contenido de la norma infrascrita por la Resolución N° 117 de 18 de agosto de 1998, la cual colisiona y pretende desconocer las facultades legales del alcalde, como una clara y abierta actuación enmarcada como "DESVIACIÓN DE PODER".
>
> Fundamenta esta concepción el hecho de que ya los mismos hechos o motivaciones de la referida e impugnada Resolución N° 117, fueron objeto de valoración jurídica por el Tribunal competente, que mediante auto calendado 13 de agosto de 1998 resolvió suspender los efectos jurídicos del Acuerdo Municipal N° 51 de 21 de abril de 1998, mismo que da base o soporte administrativo para dictar la Resolución, objeto del presente escrutinio jurídico.
>
> Como se observa... lo que persigue el Consejo Municipal de Panamá es sancionar, castigar, perjudicar al ciudadano DIONISIO SÁNCHEZ y a su vez mantener una posición de enfrentamiento con el Jefe de la Administración Municipal, la señora Alcaldesa Mayín Correa, en impedir el buen uso y aplicación de sus facultades legales en beneficio de la Alcaldía de Panamá, reforzando la Dirección de Auditoría Interna tan necesaria para la fiscalización y control de sus bienes.
>
> Por otro lado, el Consejo Municipal so pretexto de hacer consulta pertinente (y no indicar ante quien), ordena al Tesorero Municipal el no pago de la suma de dinero establecida en el Contrato de Servicios Profesionales N° 056-98 de 31 de julio de 1998, a favor del LICDO. DIONISIO SÁNCHEZ, desconociendo la autoridad, potestad y atribución de la señora Alcaldesa que le concede la Ley, subordinando la actuación de la misma, a un capricho del Consejo Municipal y ordenando al Tesorero Municipal que desconozca ese acto administrativo, de forma irresponsable y sin considerar los graves daños y perjuicios que surgirán por estas actuaciones apartadas del Derecho.

Por otro lado, estima la demandante que el acto impugnado infringe el contenido de los artículos 151, 152, 157, 166, 169, 170 y 172 de la Ley N° 44 de 24 de diciembre de 1997.

Al explicar el concepto de la infracción de dichas normas, la demandante indicó que:

"La Resolución N° 117 de 18 de agosto de 1998, viola de manera directa por omisión el contenido normativo de los Artículos 151, 152, 157, 166, 169, 170 y 172 de la Ley 44 del 24 de diciembre de 1997.

La ejecución presupuestaria es una función administrativa y ejecutiva, tal y como lo consagra la Ley 106 de 1973 de los Alcaldes.

En materia presupuestaria, rige para los Municipios el siguiente orden jurídico:

1. La Ley 106 de 1973, modificada por la ley 52 de 1984.

2. Las normas generales de administración presupuestaria del Estado, contenidas en la Ley 52 de 1984.

3. Las disposiciones del Código Fiscal, en cuestiones de Hacienda Municipal.-Artículo de la Ley 106 de 1973.

4. Acuerdo Municipal N° 216 de 26 de diciembre de 1995, contentivo del Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Panamá.

De conformidad con lo que establece la Ley General de Presupuesto del Estado, ya antes citada, la ejecución del presupuesto es el conjunto de decisiones operativas, administrativas, ejecutivas y financieras para la realización de los programas de los proyectos contemplados en el Presupuesto, por lo que el Consejo Municipal, al disponer y ordenar se suprima un cargo municipal, no solamente está vulnerando o incumpliendo dos Acuerdos Municipales anteriores, que regentan todo lo relativo a la materia presupuestaria y su ordenamiento administrativo de personal, sino que violentan por omisión disposiciones legales en materia presupuestaria contenidas en la Ley 44 de 24 de diciembre de 1997, que reglamentan todo lo relativo a la ejecución del presupuesto, los cambios en la estructura de puestos, las acciones de personal, contratación de personal contingente, situaciones éstas, que claramente previó el legislador al momento de aprobar el artículo 17, numeral 6 de la Ley 106 de 1973 al disponer que la facultad de crear o suprimir cargos municipales y determinar sus funciones, períodos, asignaciones y viáticos, será ejercida "de conformidad con lo que disponga la Constitución y las Leyes vigentes", que es precisa y únicamente en la fase o etapa de aprobación del Presupuesto de Rentas y Gastos Municipales, en la cual debe y puede ser ejercida esta atribución por el Consejo Municipal, y NO en ninguna otra circunstancia o momento, atendiendo al principio de aplicación en el tiempo y espacio de la Ley.

Expresado lo anterior, se observa sin mayor esfuerzo y análisis, que la Resolución N° 117 de 18 de agosto de 1998 viola la citada Ley presupuestaria de forma directa por omisión, crea un desequilibrio en los renglones de los ingresos estimados y los egresos autorizados, se produce de forma tácita y de hecho una destitución o despido, actuación o acto administrativo que debió ajustarse a un debido proceso, tal como lo dispone el Reglamento Interno de Personal de la Alcaldía de Panamá (artículos 106,107 y 108) en perjuicio del servidor que ocupaba dicho cargo, violándose sus derechos como tal" (Ver fojas 22 a 28).

III. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

El presidente del Consejo Municipal de Panamá rindió el informe de conducta requerido por esta Superioridad, mediante su Nota N° CMPP/076/99. En ella explicó

lo siguiente:

> "Se dice haber violado el numeral 5 del artículo 45 de la Ley 106 de 1973 con la emisión de la Resolución N° 117 de 18 de agosto de 1998, pues supuestamente se cercena la facultad de los alcaldes de designar a colaboradores o auxiliares para que le ayuden en su gestión administrativa.
>
> Nadie puede desconocer una facultad conferida a los alcaldes y establecida en la Ley, pero no menos cierto es el hecho que tampoco los alcaldes pueden desconocer la normativa administrativa vigente sobre contratación de personas bajo el renglón de Servicios Profesionales".

Sin embargo, opina el funcionario demandado que el contrato celebrado no es de servicios profesionales, porque los servicios que debe prestar son aquellos que por ley competen a los funcionarios permanentes.

En su informe el funcionario demandado transcribe, en lo pertinente el artículo 2° del contrato celebrado entre el demandante y la Alcaldía de Panamá, que dice así:

> "1. Prestar sus servicios en la Dirección de Auditoría Interna de la Alcaldía de Panamá y sus dependencias.
>
> 2. Responsabilidad develar por los intereses fundamentales de la Alcaldía, y prestar servicios de Asesoría constructiva con el propósito de mejorar y agilizar procedimientos de fiscalización interna y controles para asegurar que los bienes patrimoniales; y transacciones diarias de ingresos y egresos se registren correctamente y oportunamente, con la información fidedigna, a objeto de proteger la institución de fraudes, despilfarros o pérdidas.
>
> 3. Asesor en la planificación, orientación y supervisión de las labores de los auditores internos, con el objeto de velar por el oportuno y efectivo cumplimiento de las funciones asignadas a cada uno de ellos; en adición dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones contenidas en los informes emitidos por Auditoría Interna, hasta obtener una acción satisfactoria y correctiva por parte de las áreas afectadas.
>
> 4. Efectuar diagnóstico y recomendaciones al Despacho Superior sobre cualquiera de las áreas administrativas y operativas en el Municipio de Panamá.
>
> 5. Asesorar en la aplicación de los controles previos a las Órdenes de Compras, Planillas, Cuentas contra el Tesoro Municipal, Cajas Menudas y cualquiera otro documento que se tramite ante la Dirección de Auditoría Interna.
>
> 6. El contratista deberá realizar el trabajo que se le solicite de conformidad con las normas generales de auditoría interna que se exige en las Instituciones del Estado, según las reglamentaciones de la Contraloría General de la República, para lo cual debe coordinar con las direcciones de la Institución, y presentar un informe al despacho superior por conducto de la Secretaría General".

A continuación el funcionario demandado compara estas funciones con las que debe ejercer un funcionario del Municipio y llega a la conclusión de que las señaladas en los numerales 2 y 3 no son propias de un asesor, colaborador o auxiliar sino de un funcionario (Cfr. fojas 64 a 75 del expediente).

IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

El señor Procurador Suplente de la Administración, actuando en interés de la Ley, de conformidad con lo establecido en el numeral 1, del artículo 348 del Código Judicial, procedió a emitir su concepto en la presente causa, a través de su Vista Fiscal N° 505, de 20 de octubre de 1999, visible a fojas 86-96 del expediente.

En dicha vista consideró infringido el numeral 5, del artículo 45 de la Ley 106 de 1973, por cuanto el Consejo Municipal en la Resolución impugnada no previó que el Jefe de la Administración Municipal se encuentra legalmente facultado para nombrar y pagarle a los colaboradores que contrate para hacer actividades administrativas específicas, siempre que existan los recursos económicos necesarios para ello en el presupuesto municipal.

Por otra parte, señala que: "el Consejo Municipal en el considerando de la resolución acusada no justifica jurídicamente la orden impartida al Tesorero de no pagarle al licenciado Sánchez por los servicios profesionales prestados al Municipio, se fundamenta en criterios subjetivos y no indica la existencia de algún vicio que pueda producir la anulación del contrato administrativo".

Agrega que a su juicio, la conducta adoptada por el Concejo constituye una desviación de poder, porque a través del acto impugnado se ha tomado la atribución de ordenarle al Tesorero Municipal que no pague sus honorarios al señor Dionisio Sánchez, aún cuando la Ley 106 de 1973 no les confiere facultad para ello.

Finalmente, señaló el señor Procurador Suplente de la Administración, que no considera que se hayan infringido los artículos 151, 152, 157, 166, 169, 170 y 172 de la Ley 44 de 24 de diciembre de 1997, ya que las mismas no son aplicables a éste proceso, por cuanto que regulan la ejecución presupuestaria de la Administración Central y no de los Municipios.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La licenciada ALMA CORTÉS interpuso la presente demanda contencioso administrativa de nulidad con la finalidad de que esta Alta Corporación de Justicia declare nula por ilegal la Resolución N° 117 de 18 de agosto de 1998, dictada por el Consejo Municipal de Panamá, porque a su juicio dicho acto infringe el numeral 5 del artículo 45 de la Ley 106 de 1973, y los artículos 151, 152, 157, 166, 169, 170 y 172 de la Ley 44 del 24 de diciembre de 1997.

En su demanda la licenciada CORTÉS también solicitó a esta Corporación de Justicia que fuesen suspendidos provisionalmente los efectos jurídicos de la resolución impugnada.

La Sala se pronunció al respecto a través de auto de 18 de junio de 1999 mediante el cual se suspendieron provisionalmente los efectos de la misma (Ver fojas 33 y 34).

Ahora bien, de la lectura de las piezas que obran en el expediente, esta Superioridad ha concluido que en efecto se viola el artículo 45 de la Ley 106 de 1973, el cual establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 45. Los Alcaldes tendrán las siguientes atribuciones:
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
Designar en calidad de colaboradores o auxiliares permanentes, a los especialistas que se requieran en cada una de las actividades de la administración municipal, cuando el Municipio contaré con recursos para ello".

Esto es así porque dicho artículo faculta expresamente al jefe de la Alcaldía Municipal, a nombrar a aquellos colaboradores o auxiliares que se requieran, siempre que contare con los recursos para ello.

En el caso que nos ocupa, observa la Sala, que la ex-alcaldesa del Distrito de Panamá contrató al señor Dionisio Sánchez para que prestara sus servicios en la sección de auditoría interna de esa institución, atribuyendole funciones propias de quien ejerce un cargo de asesor, y contando además con los recursos suficientes para hacer dicho nombramiento.

En consecuencia, mal podía el Consejo Municipal del Distrito de Panamá ordenarle al Tesorero Municipal que no pagase sus honorarios al señor Sánchez sobre la base de que las funciones que le fueron asignadas no correspondían a un asesor sino a un jefe de auditoría interna, mucho menos cuando el contrato de servicios profesionales celebrado entre el prenombrado Dionisio Sánchez y la entonces alcaldesa Mayín Correa contaba con el refrendo de la Contraloría General de la República, tal como se observa a foja 4 del expediente.

Por otro lado, dado que se ha determinado que el acto impugnado es ilegal por las razones antes expuestas, esta Alta Corporación de Justicia considera que deben desestimarse los cargos de violación de los otros artículos citados como infringidos por la parte actora.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES ILEGAL la Resolución N° 117 de 18 de agosto de 1998, expedida por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

Notifíquese y Publiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDGAR ACOSTA, EN REPRESENTACIÓN DE LA REPRESENTANTE DEL CORREGIMIENTO DE RAMBALA, SEÑORA GRACIELA GUTIÉRREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 10 DE MAYO DE 2000, MEDIANTE LA QUE EL CONSEJO PROVINCIAL DE BOCAS DEL TORO CELEBRÓ ELECCIONES PARA ELEGIR LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2000 AL 31 DE AGOSTO DEL 2001. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Edgar Acosta, en nombre y representación de la señora Graciela Gutiérrez, Representante del Corregimiento de Rambala (Provincia de Bocas del Toro), ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nula, por ilegal, el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 10 de mayo de este año, mediante la que el Consejo Provincial de Bocas del Toro eligió la nueva Junta Directiva para el período del 1 de septiembre del 2000 al 31 de agosto del 2001.

La suscrita Magistrada Ponente pasa a revisar la demanda de nulidad identificada para determinar si ésta cumple con los requisitos de este tipo de acción que prevé la Ley 135 de 1943 y las normas del Código Judicial aplicables.

Considera la Magistrada Ponente que esta demanda no debe ser admintida, ya

que adolece de dos defectos que impiden darle curso, a saber:

El actor no aporta copia autenticada del acto administrativo que impugna, ni constancia que lo solicitó y le fue denegado, tal como lo prevé el artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

Sobre el requisito de copia autenticada, el artículo 820 del Código Judicial es expreso al establecer las formas como deben ser aportados al proceso los documentos; tratándose de copias éstas "deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original...", a tenor de la referida disposición.

El segundo defecto consiste en que el actor al exponer el concepto de infracción de la norma legal que a su juicio fue violada (Art. 4, numeral 11, del Reglamento Interno del Consejo Provincial) afirma que ésta operó por "extralimitación en el ejercicio de sus funciones", lo que no constituye un motivo de ilegalidad del acto administrativo, según el artículo 26 de la Ley 135 de 1943, cuya parte pertinente preceptúa:

> "Artículo 26. Los motivos de ilegalidad comprenden tanto la infracción literal de los preceptos legales como la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad que haya dictado el acto administrativo, o el quebrantamiento de las formalidades que deben cumplirse y la desviación de poder.
> ..."

De acuerdo al artículo 50 de la Ley 135 de 1943, la demanda que adolezca de los requisitos formales antes establecidos no deberá dársele curso, circunstancia que determina la inadmisibilidad de la misma.

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada Ponente, en representación de la Sala Tercera Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por la señora Graciela Gutiérrez, mediante apoderado judicial, contra el Acta de la sesión extraordinaria de 10 de mayo de 2000, del Consejo Provincial de Bocas del Toro, por medio de la cual se eligió una nueva Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de septiembre del 2000 y el 31 de agosto del 2001.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS RUBEN MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO NO. 12 DE 17 DE ABRIL DE 1991, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Carrillo Gomila, actuando en nombre y representación de LUIS RUBEN MORALES, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprma demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N°12 de 17 de abril de 1991, dictado por conducto del Ministro de Comercio e Industrias.

El licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila solicita en la parte final de la demanda que "SE ORDENE la suspensión de sus efectos."

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, el Pleno de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) está facultado por para suspender los efectos del acto impugnado "si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave". Procede la Sala a analizar la gravedad del perjuicio causado por el acto impugnado.

En el presente caso, el recurrente no logra probar el perjuicio notoriamente grave y de imposible reparación que le puede causar el acto impugnado. El demandante debió señalar minuciosamente en qué consiste el daño que puede ocasionar el acto impugnado y de qué manera dicho perjuicio es grave o de imposible reparación. Por estas razones estima la Sala que no debe acceder a la petición antes mencionada.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional del Decreto N°12 de 17 de abril de 1991, dictado por conducto del Ministro de Comercio e Industrias.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA L. CORTÉS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PROCESADORA MARPESCA, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA NO. DM-1069-2000 DE 29 DE MAYO DE 2000 DICTADA POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RELACIONADA CON LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS FITOZOOSANITARIAS DE IMPORTACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Alma L. Cortés, actuando en su condición de apoderada judicial de PROCESADORA MARPESCA, S. A., ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad con el propósito de que se declare nula, por ilegal, la Nota No. DM-1069-2000 de 29 de mayo de 2000, dictada por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, relacionada con las solicitudes de licencias FitoZoosanitarias de Importación.

En la parte final de su libelo, el recurrente solicita la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado. Sin embargo, por razones de economía procesal, la Sala procede a examinar la demanda con el objeto de determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos para su admisión.

Observa quien suscribe que la demanda es inadmisible por las razones que a continuación se exponen.

Mediante la expedición del acto recurrido, el Ministro de Desarrollo Agropecuario comunicó al señor Panagiotis Lymberópulos, en su condición de Representante Legal de PROCESADORA MARPERSCA, S. A., que la licencia que había solicitado para importar camarones congelados procedentes de Asia, no le podía ser concedida, debido a que los productos provenientes de dicha área geográfica estaban afectados por la enfermedad de la "Cabeza Amarilla", "Baculovirus

monodeom", entre otras.

Es evidente entonces, que el contenido de la Nota DM-1069-2000 de 29 de mayo del 2000 afecta única y exclusivamente a la PROCESADORA MARPESCA, S. A.; ya que es a esta sociedad a la que específicamente se le negó permiso o autorización para realizar determinada actividad comercial. Como vemos, se trata de un acto administrativo de carácter particular, individualizado que afecta directamente a una persona jurídica cierta y determinada; por lo cual la vía idónea para demandar la ilegalidad de la Nota DM-1069-2000 de 29 de mayo de 2000 dictada por el Ministro de Desarrollo Agropecuario era a mediante la interposición de un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción y no de nulidad como ha sido instaurado por el demandante.

Al respecto, resulta conveniente recordar que el artículo 14 de la Ley 33 de 1946, señala que en los procesos de plena jurisdicción podrán demandar "las personas afectadas por el acto y en los de nulidad "cualquier persona natural o jurídica", lo cual aclara aún más el caso que nos ocupa.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la Licenciada Alma L. Cortés en nombre y representación de PROCESADORA MARPESCA, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Nota No. DM-1069-2000 de 29 de mayo de 2000 dictada por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, relacionada con las solicitudes de licencias FitoZoosanitarias.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARCELINO JAÉN EN REPRESENTACIÓN DE SUSANA RICHA DE TORRIJOS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 99-028-D DE 2 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Licenciado Marcelino Jaén en representación de SUSANA RICHA DE TORRIJOS, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 99-028-D de 2 de diciembre de 1999, dictada por el Rector de la Universidad de Panamá, actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración expresa que en su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consignada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, emitió criterio respecto de los hechos que generaron el Proceso Contencioso Administrativo actual, mediante la Consulta N° 25 de 27 de enero de 1999, visible a fojas 70 a 74 del expediente.

El solicitante fundamenta su pretensión en los artículos 749, numeral 5,

388 y 754 del Código Judicial, los cuales son del tenor siguiente:

> "Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.
>
> Son Causales de impedimentos:
> .....
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o por haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo....."
> (El Subrayado es nuestro)
>
> Artículo 388. Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces.
>
> Artículo 754. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho que constituya la causal".

A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera, las circunstancias presentadas hacen aplicables las normas transcritas referentes a las causales de impedimento, por lo que es dable acceder a la petición invocada en este caso.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, por lo tanto la separan del conocimiento del presente negocio, y ORDENAN designar al suplente que le corresponda para que conozca del asunto.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA GARCÍA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE WIL ALFREDO GORDON, CONTRA LA SENTENCIA SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: WIL ALFREDO GORDON -VS- NAVPAN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Honorable Magistrado Adán Arnulfo Arjona L. ha manifestado impedimento para conocer del recurso de casación laboral interpuesto por la firma García y Asociados, en representación de WIL ALFREDO GORDON, contra la Sentencia de 12 de junio del 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: WIL ALFREDO GORDON-vs-NAVPAN, S. A.

El Magistrado Arjona fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

"Honorables Magistrados de la Sala Tercera(Casación Laboral):

Con fecha de 6 de julio de 2000, ingresó a mi despacho el recurso de Casación Laboral propuesto por la Firma García y Asociados, en representación de los WIL ALFREDO GORDON, contra la Sentencia sin número de fecha 12 de junio de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: WIL ALFREDO GORDON-vs-NAVPAN, S. A.

Es importante mencionar, que el representante judicial de la parte demanda, en este asunto de la Jurisdicción de Trabajo, es la firma forense Alfaro, Ferrer, Ramírez & Alemán.

En virtud de lo expresado, respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que integran el resto de la Sala, me separen del conocimiento del presente recurso, en razón de que, pese a que ya no formo parte de la citada firma de abogados pues me separé desde el pasado 30 de diciembre de 1999, considero que esta circunstancia puede configurar un posible motivo de impedimento a tenor de lo que establece el numeral 2 del artículo 647 del Código de Trabajo, que a la letra dispone:

"Artículo 647: Son causales de impedimento:
...
2. Tener interés directo o indirecto debidamente explicado en el proceso, el Juez o Magistrado, su cónyuge o algunos de sus parientes en los grados expresados en el ordinal anterior;" (El resaltado es nuestro)"

A juicio del resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, la causal de impedimento citada por el Magistrado Adán Arnulfo Arjona L., se adecua a lo establecido en el numeral 2 del artículo 647 del Código de Trabajo y es motivo suficiente para separarlo del conocimiento del presente negocio.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (contencioso-administrativa) de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por el MAGISTRADO ADAN ARNULFO ARJONA L., lo separan del conocimiento del negocio interpuesto y proceden a llamar al MAGISTRADO ROGELIO FABREGA Z., de la Sala Primera, para que integre la Sala.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

INCIDENTE INTERPUESTO POR LA FIRMA MONCADA & MONCADA EN REPRESENTACIÓN DE ANIBAL SANCHEZ GUARDIA, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA MONCADA Y MONCADA EN REPRESENTACIÓN DE ANÍBAL SÁNCHEZ GUARDIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 102-98 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1998, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE REFORMA AGRARIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Moncada & Moncada, actuando en su condición de apoderada judicial de ANIBAL SANCHEZ GUARDIA, ha promovido INCIDENTE DE OPOSICION a la intervención de PACIFICO RODRIGUEZ en el presente litigio.

El demandante sustenta la procedencia de esta petición aduciendo que el señor PACIFICO RODRIGUEZ no ha formalizado debidamente su participación, en calidad de tercero, en la causa administrativa que nos ocupa, situación que, de acuerdo al criterio del recurrente, se traduce en una violación al principio constitucional del debido proceso.

DECISION DE ESTA COLEGIATURA

La demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por el apoderado judicial de ANIBAL SANCHEZ, tiene como propósito obtener la declaratoria de ilegalidad de la Resolución No. 102-98 de 18 de septiembre de 1998, dictada por el Director Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario mediante la cual se resolvió, por un lado reconocer a favor de PACIFICO RODRIGUEZ derechos posesorios sobre un globo de terreno estatal ubicado en el Corregimiento de El Valle, Distrito de Antón; mientras, que por la otra parte, negó la solicitud de adjudicación que sobre el mismo predio había presentado ANIBAL SANCHEZ.

De lo resuelto por el acto administrativo recurrido, se deduce que el señor PACIFICO RODRIQUEZ es la única persona que podría verse afectada en el evento de que esta Superioridad accediera a las pretensiones del recurrente declarando la ilegalidad de la Resolución No. 102-98 de 18 de septiembre de 1998, expedida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria.

Esta situación se ajusta al supuesto contenido en el artículo 348, numeral 3 del Código Judicial que ordena llamar o traer al proceso a las personas susceptibles de sufrir algún perjuicio con motivo de la interposición de un demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. La norma en referencia es del tenor siguiente:

> "Artículo 348. Son atribuciones especiales del Procurador de la Administración:
> 1...
> 2...
> 3. Intervenir en interés de la Ley, en los procesos contencioso administrativos de plena jurisdicción en los que se impugnen resoluciones que hayan decidido procesos en vía gubernativa en los cuales haya habido controversia entre particulares por razón de sus propios intereses. En estos casos deberá darse audiencia a la contraparte de la que ha recurrido ante la Sala Tercera de la Corte;
> 4...
> 5...
> 6...
> 7...
> 8...
> 9...
> 10...
> 11...
> 12...
> 13..." (Lo resaltado es del Tribunal).

Tenemos entonces, que la intervención de PACIFICO RODRIGUEZ en los trámites de la presente causa administrativa obedece a un mandato claramente establecido en la ley procesal con el propósito de darle la oportunidad para aducir y probar sus descargos, y que no se trata, como ha sido afirmado por el actor, de una petición que aquél voluntariamente haya planteado, pero que no ha sido debidamente formalizada; situación que constituye causal suficiente para rechazar

el incidente de oposición bajo estudio.

No obstante, la Sala se percata que en el desarrollo de la presente contienda se ha configurado otra situación que tampoco permite reconocer el presente incidente.

El artículo 690 del Código Judicial literalmente dispone lo siguiente:

> "Artículo 690. Todo incidente que se origine de un hecho que acontezca durante el proceso deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva.
>
> Si en el proceso constare que el hecho ha llegado a conocimiento de la parte y ésta hubiere practicado con posterioridad una gestión, el incidente promovido después será rechazado de plano, salvo que se tratare de alguno de los vicios o circunstancias a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, caso en el cual se ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.
>
> También rechazará el Juez de plano el incidente que se refiere a puntos ya resueltos en otro o cuando se está tramitando otro por la misma causa o cuando, a pesar de fundamentarse con una distinta, éste haya podido alegarse en el interior." (Lo subrayado es del Tribunal)

De conformidad con lo establecido en la excerta legal transcrita, la gestión que el apoderado judicial del demandante debió realizar inmediatamente después del día 23 de junio de 2000 (ya que es en esta fecha cuando la firma Moncada & Moncada se notifica de la resolución que admitió la demanda incoada y que, por otra parte, ordenó correr traslado a PACIFICO RODRIGUEZ), fue promover el presente incidente de oposición.

Sin embargo, de fojas 157 a 160 del expediente judicial, reposa un escrito aportado por la parte actora referente a las pruebas documentales, testimoniales y periciales que en su debido momento harán valer. Dicho escrito fue presentado el día 30 de junio de 2000; mientras que el incidente de oposición es aportado el 5 de julio de 2000, situación que como vemos, se adecúa al supuesto contenido en el citado artículo 690, conforme al cual lo procedente es rechazar de plano el requerimiento del actor.

En mérito de los razonamientos expuestos, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO, el Incidente de Oposición a la intervención de PACIFICO RODRIGUEZ interpuesto por la firma Moncada & Moncada en su condición de apoderado judicial de ANIBAL SANCHEZ GUARDIA.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HUMBERTO MOSQUERA EN REPRESENTACIÓN DE PASTOR BATISTA MARCIAGA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ LE SIGUE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Humberto Mosquera, en representación del señor PASTOR BATISTA MARCIAGA, interpuso excepción de prescripción dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá.

La pretensión del actor se fundamenta, básicamente, en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: En el mes de agosto de 1991 por razones de índole económicas, mi representado se vio en la forzosa necesidad de cerrar las operaciones realizadas del establecimiento comercial denominado "Bodega los Amigos", con número de contribuyente Municipal 183-7143.
>
> SEGUNDO: Mi representado demuestra que dicho negocio dejó de operar desde el año 1991, tal como se detalla en las declaraciones de rentas adjuntas.
> ..." (Ver foja 28 del expediente judicial)

A juicio de la Sala, la presente excepción de prescripción debe rechazarse de plano por extemporánea. En efecto, tal como consta en la diligencia de notificación visible a foja 22 del expediente del proceso ejecutivo, el señor PASTOR BATISTA MARCIAGA fue notificado el día 21 de marzo de 2000 del Auto de Mandamiento de Pago fechado 15 de marzo de 2000 y no es sino, hasta el 24 de mayo de 2000 cuando interpone la presente excepción de prescripción de la acción.

De acuerdo con el artículo 1706 del Código Judicial, la referida excepción debió interponerse "dentro de los ocho días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo", por lo que resulta, a todas luces, extemporánea.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO POR EXTEMPORÁNEA la excepción de prescripción interpuesta por el licenciado Humberto Mosquera, en representación del señor PASTOR BATISTA MARCIAGA, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue a la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE CAUDCIDAD EXTRAORDINARIA DE LA INSTANCIA, INTERPUESTA POR EL LCDO. RICARDO ACOSTA INSTURAÍN, EN REPRESENTACION DE EUCLIDES FUENTES ARROYO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMA, CASA MATRIZ, LE SIGUE A GABRIEL ZEBALLOS Y EUCLIDES FUENTES ARROYO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ricardo Acosta Isturaín, actuando en nombre y representación de EUCLIDES FUENTES ARROYO, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema incidente de caducidad extraordinaria de la instancia dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el BANCO NACIONAL DE PANAMA, CASA MATRIZ, le sigue a GABRIEL ZEBALLOS y EUCLIDES FUENTES ARROYO.

Mediante auto de 4 de enero de 1999, la Sala admitió el incidente de caducidad extraordinaria de la instancia, le corrió traslado de la misma al Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá y a la Procuradora de la Administración.

El licenciado Isturaín sustentó el incidente de caducidad de la instancia de la siguiente forma:

> "PRIMERO: Que mediante Auto Ejecutivo No.316 de 12-10-98 se libró mandamiento de pago ejecutivo, dictado dentro del Proceso Ejecutivo por cobro coactivo interpuesto por el Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz contra GABRIEL ZEBALLOS y EUCLIDES FUENTES ARROYO.
>
> SEGUNDO: Que por Auto No. 1565 de fecha 22 de julio de 1991, fue decretado formal secuestro sobre cualesquiera sumas de dinero, valores, prendas, joyas, bonos y demás bienes depositados en los bancos de la localidad que aparecieran a nombre de los demandados.
>
> TERCERO: Que mediante Auto No.978 de 15 de junio de 1992, dictado por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, se elevó a la categoría de Embargo el Secuestro decretado mediante Resolución No.1565 de 22 de julio de 1991, sobre la cuenta No.50-0032222, perteneciente al señor EUCLIDES FUENTES ARROYO, la cual mantenía un saldo de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO BALBOAS CON 18/100 (B/.334.18)
>
> CUARTO: Que consta en el recibo No. 041201 declarado 24 de junio de 1992, el pago realizado al Banco Nacional de Panamá por la suma de B/.334.18 una vez ejecutado el embargo, el cual fue el último pago correspondiente a la obligación cuyo cumplimiento se exige.
>
> QUINTO: Que desde la fecha del último pago es decir, desde el 24 de junio de 1992 hasta la fecha de presentación de este escrito han transcurrido más de seis (6) años, hecho que demuestra que el proceso ha estado paralizado por más de tres años sin que hubiera mediado gestión escrito de parte al tenor de lo preceptuado en el artículo 1098 del Código Judicial." (f.2)

Por su parte, el apoderado judicial del Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá en su escrito de oposición manifestó lo siguiente:

> "PRIMERO: Mediante Poder y Excepción de Prescripción de 13 de marzo de 1998 y 27 de julio de 1998, presentado ante el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, por el Lic. Ricardo Acosta Isturaín, en representación de Euclides Fuentes Arroyo, solicitó se declarara prescrito el préstamo a nombre de Gabriel Zeballos y Euclides Fuentes Arroyo.
>
> SEGUNDO: Mediante Resolución fechada 16 de septiembre de 1998, los Honorables Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia "RECHAZA DE PLANO POR EXTEMPORANEA" la Excepción de Prescripción interpuesta por el licenciado Ricardo Acosta, en representación del señor EUCLIDES FUENTES, dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá.
>
> TERCERO: El Artículo 1098-A, del Código Judicial dice:
>
> "Dará lugar a caducidad extraordinaria la paralización del proceso por tres (3) años o más, sin que hubiera mediado gestión escrita de parte". (El subrayado es nuestro).
>
> Por lo antes expuesto, solicitamos a los Honorables Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema

de Justicia, negar la petición presentada por el Licenciado Ricardo Acosta Isturain, en representación del señor Euclides Fuentes Arroyo, dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMA, CASA MATRIZ a GABRIEL ZEBALLOS y OTRO.

Hacemos esta solicitud basándonos en el hecho de que tal como se establece en el Artículo 1098-A para dar lugar a la caducidad extraordinaria se requiere la paralización del proceso por tres (3) años y en el caso que nos ocupa esta condición no se cumple, ya que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución del 16 de septiembre de 1998, falla una Excepción de Prescripción interpuesta por el Incidentista.

Queda demostrado entonces, que dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMA, CASA MATRIZ a GABRIEL ZEBALLOS y EUCLIDES FUENTES se dan acciones judiciales que interrumpen lo que aquí se alega.

En este sentido, hacemos referencia a sentencia apelada emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, fechada 27 de febrero de 1991, dentro del Proceso ordinario propuesto por Concurso de Acreedores de Joyas Royal, S. A. contra Jarmo, S. A. (excepción de extinción de la Pretensión por Caducidad de la Instancia), donde queda establecido lo siguiente: que el término fijado por el Artículo 1089 del Código Judicial se interrumpe por cualquier gestión relacionada con el curso del expediente principal o el trámite de un incidente que influya en el curso del proceso."

La Procuradora de la Administración, por medio de la Vista N°156 de 7 de abril de 1999, solicita a la Sala que declare no probado el presente incidente de caducidad extraordinaria de la instancia, toda vez que "al examinar las piezas procesales aportadas al caso bajo estudio, se evidencia que no han transcurrido tres años sin que las partes involucradas en este proceso, realizaran alguna gestión ejecutiva, tal como lo exige el artículo 1098-A del Código Judicial".

Decisión de la Sala:

Evacuados los trámites legales, la Sala procede a resolver la presente controversia.

Reposa a foja 37 del expediente ejecutivo por cobro coactivo el auto de 9 de marzo de 1984 por medio del cual se libra mandamiento de pago contra Zeballos Gabriel Vega y Euclides Fuentes Arroyo a favor del Banco Nacional de Panamá por la suma de ocho mil seiscientos noventa y cuatro balboas con 27 centésimos (B/.8,694.27).

Mediante Auto No.798 de 15 de junio de 1992 (fs.102-103), dictado por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, se elevó a la categoría de Embargo el Secuestro decretado mediante Resolución No.1565 de 22 de julio de 1991, sobre la cuenta No.50-0032222, perteneciente al señor EUCLIDES FUENTES ARROYO, la cual mantenía un saldo de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO BALBOAS CON 18/100 (B/.334.18).

La Sala observa a foja 111 del expediente ejecutivo, el recibo No. 041201 declarado 24 de junio de 1992, en el que consta el pago realizado por Euclides Fuentes Arroyo al Banco Nacional de Panamá por la suma de trescientos treinta y cuatro balboas con dieciocho centésimos (B/.334.18).

Advierte la Sala que el licenciado Ricardo Acosta Insturaín presentó ante el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá el 5 de agosto de 1998, excepción de prescripción con el objeto de que se declarara prescrito el préstamo a nombre de Gabriel Zeballos y Euclides Fuentes Arroyo. Dicha excepción de prescripción fue rechazada de plano por extemporánea, por medio de la resolución

de 16 de septiembre de 1998.

Una vez efectuado un estudio del expediente, la Sala considera que la caducidad de la instancia se vio interrumpida al presentar el apoderado judicial del incidentista la excepción de prescripción ante el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, antes de que el ejecutado pidiera su declaración.

Al respecto cabe señalar que si bien el artículo 1098-A del Código Judicial preceptúa que la caducidad extraordinaria se produce por la paralización del proceso sin que hubiere mediado gestión escrita de parte, el artículo 1095 del mismo cuerpo legal establece que la caducidad no opera de pleno derecho y que para que no precluya la oportunidad de declararla, el juez debe hacerlo o la parte interesada debe solicitarlo, antes de que medie gestión o actuación posterior.

Por lo tanto, como el incidentista inició una gestión judicial antes de presentar la solicitud de declaratoria de la caducidad de la instancia, la misma no se ha producido.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADO el incidente de caducidad extraordinaria de la instancia interpuesto por el licenciado Ricardo Acosta Isturaín, actuando en nombre y representación de EUCLIDES FUENTES ARROYO, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el BANCO NACIONAL DE PANAMA, CASA MATRIZ, le sigue a GABRIEL ZEBALLOS y EUCLIDES FUENTES ARROYO.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GABRIEL LAWSON EN REPRESENTACIÓN DE JULIO ALCEDO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRTIVO.

VISTOS:

El licenciado Gabriel Lawson, actuando en representación de Julio Alcedo Velarde, interpuso recurso de apelación contra el auto N° 355 de 18 de mayo de 2000, mediante el cual el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, rechazó de plano el incidente de caducidad extraordinaria de la instancia presentado dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a Hacienda La Herradura, S. A. y a Julio Alcedo Velarde.

Al sustentar la apelación, el recurrente indicó que su disconformidad con el auto apelado radica en que el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá aplicó la cláusula de renuncia de trámites del proceso ejecutivo de un contrato de hipoteca que en la actualidad se encuentra cancelado, tal como se evidencia de fojas 160 a 179 y vuelta del expediente del proceso ejecutivo, donde consta inscrita la cancelación de dicho contrato.

Indicó además que la caducidad extraordinaria de la instancia se aplica a todo tipo de proceso, sin importar si en el mismo se ha renunciado o no a los trámites, con lo cual se persigue el archivo de todo proceso paralizado por más de tres años con el fin de descargar de trabajo a los tribunales (f. 5).

La apoderada del Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá solicitó que se mantenga en todas sus partes el auto apelado e indicó lo siguiente:

> "De conformidad con los artículos 1706 y 1768 del Código Judicial, el ejecutado puede proponer las excepciones que crea le favorezcan dentro de los ocho días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, y en caso de procesos ejecutivos hipotecarios, no se podrán proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción.
>
> En el presente caso, se observa que cuando el defensor de ausente se notificó del auto ejecutivo, no habían ocurrido los hechos en que se basa el incidente invocado, y que además, cuando el Licdo. Gabriel Lawson concurre al proceso, el día 14 de abril del 2000, se notifica del Auto N° 237 fecha 23 de marzo de 2000, mediante el cual se decretó embargo contra los bienes del señor JULIO CÉSAR ALCEDO VELARDE (fs. 203-204, 215).
>
> En la presente ejecución hipotecaria, en ninguna parte consta la cancelación del contrato de hipoteca, por el contrario, lo que se ordenó cancelar mediante resolución de adjudicación definitiva de fecha 17 de septiembre de 1985, fueron los gravámenes hipotecarios, no el contrato constitutivo de la obligación; en dicha resolución consta a foja 174 que la deuda no fue cancelada, se mantuvo el proceso abierto y se hicieron las reservas correspondientes en cuanto a los intereses para así evitar su extinción en base a lo normado en el artículo 995 del Código Civil." (fs. 7 y 8).

La señora Procuradora de la Administración, mediante su Vista Fiscal N° 323 de 26 de junio de 2000 (fs. 10 a 12), señaló que el recurso propuesto no procede en el proceso examinado, porque se trata de un proceso ejecutivo por cobro coactivo donde existe garantía hipotecaria, y a pesar de lo contemplado en el artículo 1806 del Código Judicial, en los procesos ejecutivos hipotecarios con renuncia de trámites como el presente, no se pueden proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción.

Al resolver el presente recurso de apelación, la Sala estudió el expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo seguido por el Banco Nacional de Panamá a Hacienda La Herradura, S. A. y al señor Julio Alcedo Velarde. En este se observa el auto que libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra los deudores (fs. 59 a 61 del expediente del proceso ejecutivo), Hacienda La Herradura, S. A., en calidad de deudora y Julio César Alcedo Velarde, en calidad de fiador solidario. Si bien nos encontramos ante un proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de domicilio y trámite de la sociedad Hacienda la Herradura (clausula décimo novena de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética N° 3936 de 28 de agosto de 1980, foja 30 del expediente del proceso ejecutivo), el señor Julio Alcedo Velarde, fiador solidario, sólo renunció al domicilio y no al trámite del proceso ejecutivo puesto que su garantía es personal y no hipotecaria (cláusula vigésimo segunda de la escritura referida, foja 31).

En el expediente del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo consta que fueron rematados y adjudicados al Banco Nacional de Panamá los bienes inmuebles que garantizaban la deuda por una suma menor al monto de ésta (fs. 136 a 142 del expediente del proceso ejecutivo), por ello el Juzgado Ejecutor sigue persiguiendo bienes del deudor y del fiador solidario, señor Julio Alcedo Velarde.

Tal como lo señala el artículo 1785 del Código Judicial, según el cual, puede acumularse ejecución hipotecaria o prendaria con ejecución común contra el deudor o fiador, o ambos, cuando además de las garantías reales, hubiere fianza personal, como en el caso del señor Alcedo Velarde.

Por tanto, son procedentes los recursos, excepciones e incidentes interpuestos por el señor Julio Alcedo Velarde, a quien se le sigue proceso ejecutivo como fiador personal de la obligación contraída por Hacienda La Herradura, S. A. y la Sala debe revocar el auto apelado y resolver el incidente de caducidad extraordinaria interpuesto por el apoderado especial del ejecutado.

En el presente incidente la parte actora invoca la caducidad extraordinaria de la instancia contemplada en el artículo 1098-A del Código Judicial, el cual establece lo siguiente:

> "Artículo 1098-A: Dará lugar a caducidad extraordinaria la paralización del proceso por tres (3) años o más, sin que hubiera mediado gestión escrita de parte. La resolución respectiva será notificada por edicto y no admitirá recurso, salvo el de reconsideración. Será obligación del secretario recibir escritos que, en cualquier etapa del proceso, presente la parte instando a la actuación.
>
> En los procesos en curso en que se haya producido la causal durante el año anterior, los interesados tendrán un término de tres (3) meses, contados a partir de la vigencia de esta ley, para presentar por escrito la gestión que impida que se decrete la caducidad.
>
> Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o correccional que corresponda."

Consta en el expediente del proceso ejecutivo que el 17 de septiembre de 1985, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá adjudicó definitivamente a dicha institución los bienes hipotecados rematados a Hacienda La Herradura, S. A. y la última gestión escrita después del remate y adjudicación definitiva fue el 26 de mayo de 1986, mediante la nota 86(4120-01)606 dirigida por el abogado de la División Jurídica del Banco Nacional de Panamá al Jefe del Departamento de Bienes Reposeídos, donde le informa acerca del avalúo de los bienes rematados y adjudicados, así como del saldo o diferencia en relación al total adeudado a dicha institución. Posteriormente se paralizó el proceso por más de tres años, y en octubre de 1999, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá reinicia las gestiones escritas para el cobro del saldo adeudado por Hacienda La Herradura, S. A. y Julio Alcedo Velarde, solicitando en noviembre de 1999 a la Sección de Cobros Judiciales y Cuentas de Reserva, certificación sobre el saldo adeudado (f. 191 del expediente ejecutivo).

A juicio de la Sala la declaratoria de caducidad de la instancia no procede, porque medió gestión escrita del Banco Nacional de Panamá ante la citada Sección de Cobros Judiciales y Cuentas de Reserva y otra serie de gestiones escritas que constan de fojas 191 a 214 del expediente ejecutivo (v.g. la de foja 203, auto de embargo N° 237 de 23 de marzo de 2000 de los bienes del señor Julio Alcedo Velarde) antes que el licenciado Gabriel Lawson presentara: el 25 de abril de 2000, su poder como apoderado especial del señor Alcedo Velarde; en fechas subsiguientes una serie de solicitudes, recursos e incidentes, y finalmente, el 2 de mayo de 2000, el incidente de caducidad extraordinaria que ahora se resuelve.

El artículo 1098-A del Código Judicial señala que la caducidad extraordinaria se produce por la paralización del proceso "sin que hubiere mediado gestión escrita de la parte", y el artículo 1095 idem preceptúa que la caducidad no opera de pleno derecho y que para que no precluya la oportunidad de declararla, el juez debe hacerlo o la parte interesada debe solicitarlo, antes de que medie gestión o actuación posterior.

La caducidad de la instancia no se ha producido porque el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá actuó en el proceso y dictó una serie de medidas para continuar el cobro de las sumas de dinero adeudadas, como lo es el auto de embargo N° 237 de 23 de marzo de 2000, y a su vez la parte actora antes de

presentar la solicitud de declaratoria de la caducidad de la instancia el 2 de mayo de 2000, hizo otras gestiones dentro del proceso.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADO EL INCIDENTE DE CADUCIDAD EXTRAORDINARIA DE LA INSTANCIA, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá le sigue a HACIENDA LA HERRADURA, S. A. y a JULIO ALCEDO VELARDE.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GABRIEL LAWSON EN REPRESENTACIÓN DE JULIO ALCEDO VELARDE, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, LE SIGUE A HACIENDA HERRADURA, S. A. Y JULIO ALCEDO VELARDE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Gabriel Lawson, actuando en nombre y representación de Julio Alcedo Velarde, interpuso recurso de apelación contra el auto N° 335 de 8 de mayo de 2000, mediante el cual el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá resolvió rechazar de plano el incidente de nulidad interpuesto dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo seguido por esta institución contra Hacienda La Herradura, S. A. y Julio César Alcedo Velarde.

El apoderado especial del recurrente sustanció su recurso de apelación indicando que el Juez Ejecutor aplica la cláusula de renuncia de trámites del proceso ejecutivo de un contrato de hipoteca sobre bienes inmuebles que en la actualidad se encuentra cancelado, tal como se constata a fojas 160 y 179 vuelta del expediente ejecutivo por cobro coactivo, y que tiene como consecuencia la cancelación de todas las cláusulas que forman parte del mismo (f. 6).

La representante del Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, se opuso al recurso de apelación interpuesto, señalando lo siguiente:

> "PRIMERO: El incidente de nulidad de lo actuado propuesto por el apoderado del señor JULIO ALCEDO VELARDE el día 27 de abril de 2000, se sustentaba en el supuesto hecho de que su cliente no había sido emplazado conforme a derecho, sin embargo, ahora en la sustentación de la apelación contra el auto N° 335 de 8 de mayo de 2000, invoca otras circunstancias totalmente ajenas a los fundamentos de derecho con que sustentó el incidente de nulidad.
>
> SEGUNDO: En la presente ejecución hipotecaria, en ninguna parte consta la cancelación del contrato de hipoteca, por el contrario, lo que se ordenó cancelar mediante resolución de adjudicación definitiva de fecha 17 de septiembre de 1985, fueron gravámenes hipotecarios, no el contrato constitutivo de la obligación; en dicha resolución consta a foja 174 que la deuda no fue cancelada, se mantuvo el proceso abierto y se hicieron las reservas correspondientes en cuanto a los intereses para así evitar su extinción en base a lo normado en el artículo 995 del Código Judicial." (f. 8)

La señora Procuradora de la Administración, también se opuso a las pretensiones del recurrente, por considerar que, según el artículo 1768 del Código Judicial, en el presente proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámites no proceden incidentes ni otra excepción que la de pago y prescripción (f. 11).

La Sala observa, que en el auto que libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra Hacienda La Herradura, S.A. y Julio César Alcedo Velarde (fs. 59 a 61 del expediente del proceso ejecutivo), la sociedad anónima citada ha sido demandada en su calidad de deudora y el señor Julio César Alcedo Velarde, lo fue en su calidad de fiador solidario. Si bien nos encontramos ante un proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de domicilio y trámite de la sociedad Hacienda la Herradura (clausula décimo novena de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética N° 3936 de 28 de agosto de 1980, foja 30 del expediente del proceso ejecutivo), el señor Julio Alcedo Velarde, sólo renunció al domicilio (cláusula vigésimo segunda de la escritura referida, foja 31) y no al trámite del proceso ejecutivo, porque él es garante fiador.

En el expediente del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo consta que fueron rematados y adjudicados al Banco Nacional de Panamá los bienes inmuebles que garantizaban la deuda por una suma menor al monto de ésta (fs. 136 a 142 del expediente del proceso ejecutivo), por ello el Juzgado Ejecutor sigue persiguiendo bienes del deudor y del fiador solidario, señor Julio Alcedo Velarde, tal como lo señala el artículo 1785 del Código Judicial, según el cual, puede acumularse ejecución hipotecaria o prendaria con ejecución común contra el deudor o fiador, o ambos, cuando además de las garantías reales, hubiere fianza personal, como en el caso del señor Alcedo Velarde.

Cuando se acumula ejecución hipotecaria o prendaria con una ejecución común, como lo indica el artículo 1785 del Código Judicial, en el auto ejecutivo debe hacerse "la separación del caso en relación a las garantías reales y la advertencia sobre los diferentes términos para proponer excepciones. Pero, cuando en la hipoteca se hubieren renunciado a los trámites del proceso ejecutivo", el Juez debe ordenar por separado la venta del inmueble o inmuebles con citación del dueño o dueños de los bienes hipotecados, a fin de que la ejecución común se tramite de acuerdo a las reglas establecidas en el Código Judicial para estos procesos (artículos 1638-1757 del Código Judicial). Específicamente el artículo 1720 del Código Judicial señala que los incidentes propuestos en los procesos ejecutivos se regirán por las reglas del Título VI de este Libro, que comprende los artículos 686 a 701 del Código Judicial.

El señor Julio Alcedo Velarde puede interponer recursos, incidentes y excepciones dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo seguido en su contra y por tanto procede el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechaza de plano el incidente de nulidad de lo actuado, por contemplarlo así el artículo 1806 del Código Judicial, y porque en acatamiento del artículo 1804 ibidem, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá debió remitirlo a esta Superioridad para que se sustanciara y resolviera.

Por lo anteriormente expuesto, previa revocatoria de la resolución apelada, la Sala procede a resolver el incidente que accede al proceso ejecutivo, previo el estudio de los actos procesales ejecutados en él.

El incidente de nulidad de todo lo actuado, se fundamenta en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: El día 24 de abril de 1985 el Juez Ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ libró mandamiento de pago ejecutivo y embargo en contra de la HACIENDA LA HERRADURA, S.A. y el señor JULIO CÉSAR ALCEDO VELARDE; por la suma de B/.527,662.10.
>
> SEGUNDO: El Juzgado Ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (CASA MATRIZ) no intentó si quiera ubicar al señor ALCEDO para notificarlo

del auto de mandamiento de pago ejecutivo expedido en su contra y lo que hizo fue proceder a su emplazamiento por edicto de manera directa.

TERCERO: El señor JULIO ALCEDO durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 1985 frecuentaba el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (CASA MATRIZ), incluso, el BANCO sabía donde localizarlo, mas nunca se le comunicó siquiera por el BANCO que estaba demandado y nunca intentaron siquiera notificarlo del auto ejecutivo.

CUARTO: Según el artículo 472 del Código Judicial de 1917, vigente al momento de iniciarse el presente proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva, el juzgado ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ debió intentar hallar al señor JULIO ALCEDO para notificarlo del auto ejecutivo, mas así no lo hizo, situación que se constata en el expediente, específicamente a foja 73 del expediente, en donde se aprecia que el aludido juzgado ejecutor optó por el emplazamiento por edicto directo del señor JULIO ALCEDO.

QUINTO: Según el artículo 481 del Código Judicial de 1917 las notificaciones que se hicieran en otra forma que las expresadas en dicho código son nulas.

SEXTO: El proceso al que accede la presente incidencia todavía no ha terminado, por lo que procede esta incidencia de conformidad a lo previsto en el artículo 1002 del Código Judicial(sic) día vigente y la nulidad que aquí se alega constituye un vicio que anula el proceso.

SÉPTIMO: Con fundamento en lo expuesto en los hechos anteriores tenemos que es nulo el emplazamiento por edicto del demandado JULIO ALCEDO, la notificación del auto ejecutivo al defensor de ausente designado para su defensa, y todo lo actuado en el proceso, con vista a lo previsto en los artículos, 472 y 481 del Código Judicial de 1917 y en los artículos 1002, 1013, 689 y 690 del Código Judicial." (f. 232 del expediente del proceso ejecutivo)

Conforme al artículo 32 del Código Civil, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. En el presente caso, tanto las actuaciones procesales de libramiento del auto ejecutivo, emplazamiento de los deudores para que comparecieran al proceso, designación del defensor de ausente y su notificación del auto que libró mandamiento de pago contra los deudores, se iniciaron y agotaron durante la vigencia del Código Judicial de 1917, puesto que el nuevo Código Judicial comenzó a regir a partir del 1° de abril de 1987, fecha para la cual ya se había efectuado el remate de los bienes hipotecados como garantía de la obligación contraída por Hacienda La Herradura, S.A. con el Banco Nacional de Panamá.

Observa la Sala que el apoderado especial del incidentista pretende la declaratoria de nulidad de todo lo actuado por pretermisión de los requisitos legales necesarios, específicamente del artículo 472 del Código Judicial de 1917, para notificar personalmente a los deudores, lo que trajo como consecuencia el emplazamiento por edicto y posterior notificación al defensor de ausente, a juicio del recurrente, en detrimento del procedimiento establecido para ello en el Código Judicial de 1917, vigente cuando se surtió este trámite procesal.

Como consta en el expediente del proceso ejecutivo, el auto que libró mandamiento de pago ejecutivo fue dictado el 24 de abril de 1985, los deudores fueron emplazados por edicto fijado en lugar público del despacho ejecutor el 25 de junio de 1985 (f. 73) y se remitió copia del mismo para su publicación en

periódicos de la localidad, según se ve de los recortes de periódicos de foja 76 del expediente del proceso ejecutivo y del informe secretarial de foja 88, mediante el cual el 16 de julio de 1985, se puso en conocimiento del Juez Ejecutor que el edicto emplazatorio había sido publicado durante ciertos días en el Diario El Matutino. El 16 de julio de 1985, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá nombra defensor de ausente al licenciado Alexis Valdés, en virtud que Hacienda la Herradura, S.A. y Julio César Alcedo Velarde no comparecieron a hacer valer sus derechos en la ejecución (f. 91).

El licenciado Alexis Valdés tomó posesión del cargo el 16 de julio de 1985 (f. 93) y a partir de la fecha se notificó de las resoluciones dictadas contra los deudores sin presentar ningún recurso, incidente ni excepción en oposición a las pretensiones del Banco Nacional de Panamá.

Rematados y adjudicados definitivamente los bienes hipotecados en garantía de la obligación, el Banco Nacional de Panamá, el Juez Ejecutor, mediante resolución de 17 de septiembre de 1985 y en base al artículo 1270 del Código Judicial, mantuvo abierto el juicio incoado contra Hacienda La Herradura, S. A. y Julio César Alcedo Velarde hasta su cancelación total, porque el producto del remate no cubrió la acreencia (f. 174 del expediente del proceso ejecutivo).

En noviembre de 1999, el Juzgado Ejecutor inició nuevamente gestiones de cobro del saldo adeudado por Hacienda La Herradura, S. A. y Julio Alcedo Velarde, dictando el 23 de marzo de 2000, el auto de embargo N° 237 sobre bienes muebles e inmuebles, valores y dinero, de propiedad del señor Julio Alcedo Velarde, auto notificado al defensor de ausente, licenciado Alexis Valdés, el 14 de abril de 2000 (f. 204 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo).

Luego de este extenso recuento del proceso ejecutivo, corresponde a la Sala indicar al incidentista que no procede la declaratoria de nulidad solicitada, porque el poder especial a nombre del licenciado Lawson fue recibido en la Secretaría del Juzgado Ejecutor el 25 de abril de 2000, con lo cual se le tuvo como apoderado e inmediatamente interpuso en la citada fecha recurso de apelación contra el auto de embargo N° 237 de 23 de marzo de 2000, y según el artículo 726 del Código Judicial, la falta de notificación de la demanda, en este caso del auto ejecutivo, no produce la nulidad cuando se haya hecho alguna gestión en el proceso sin solicitar su declaratoria.

En este sentido, el artículo 737 del Código Judicial establece que, tratándose de nulidad subsanable, no podrá pedir su declaratoria en el proceso quien haya hecho alguna gestión en él con posterioridad al vicio invocado, sin formular oportuna reclamación.

Además, la petición oportuna de la nulidad de lo actuado tiene como consecuencia que se decrete la misma y que se ordene retrotraer el proceso al estado que tenía cuando ocurrió la nulidad, con lo cual se observa que esta es una causal subsanable, sin embargo la petición inoportuna da lugar a la convalidación de la supuesta nulidad y a que el proceso siga su curso, por disponerlo así el artículo 735 del Código Judicial.

En este mismo orden de ideas es necesario citar el contenido del artículo 1008 del Código Judicial, que en la parte pertinente señala:

> "ARTÍCULO 1008. Ninguna resolución judicial puede comenzar a surtir efectos antes de haberse notificado legalmente a las partes.
> ...."

De conformidad con el citado artículo, la falta de notificación no es causal de nulidad de una resolución, sino que produce su ineficacia pues ninguna resolución puede surtir efectos si no ha sido notificada legalmente a las partes.

A pesar de la inoportuna presentación del incidente de nulidad de lo actuado en razón de la gestión procesal efectuada antes de solicitarla, que de

por sí lo hace improcedente, esta Sala considera conveniente hacer algunas acotaciones en torno a lo aducido por el apoderado especial de la parte actora en cuanto a la nulidad de la notificación del auto ejecutivo al defensor de ausente y de todo lo actuado con posterioridad, por no haberse emplazado al señor Julio Alcedo Velarde conforme a las normas contenidas en los artículos 472 y 481 del Código Judicial de 1917, vigente en aquél tiempo.

Al confrontar el procedimiento seguido para emplazar y notificar a los deudores Hacienda La Herradura, S. A. y Julio Alcedo Velarde, con las normas relativas a las notificaciones del Código Judicial de 1917, esta Superioridad considera que fue procesalmente correcto. Veamos:

Se libró mandamiento de pago el 24 de abril de 1985. En la escritura pública N° 3936, contentiva del contrato de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética del Banco Nacional de Panamá con Hacienda La Herradura, S. A., donde el señor Julio César Alcedo Velarde se constituyó en fiador solidario de la obligación, no constan las direcciones de ninguno de los dos, y tampoco existe constancia de éstas en ningún otro documento del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo seguido en contra de los deudores. El incidentista no ha presentado ninguna prueba que acredite que el Banco Nacional de Panamá tenía conocimiento de la oficina, habitación o lugar designado por los ejecutados para ser notificados.

Conforme al artículo 472 del Código Judicial de 1917, se emplazó por edicto a los demandados (f. 73 del expediente del proceso ejecutivo), por el término de diez días, haciéndose las publicaciones ordenadas por el artículo 473 idem. La última publicación fue la del 1° de julio de 1985, y el 16 de julio siguiente se nombró al defensor de ausente, licenciado Alexis Valdés, o sea más de diez días después de la publicación del último anuncio, según lo ordena el artículo 473 de Código Judicial de 1917.

El defensor de ausente tomó posesión del cargo el 16 de julio de 1985 y el 19 de julio de ese año, se notificó del auto que libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva.

Así pues, como la notificación del auto ejecutivo fue hecha al defensor de ausente del señor Julio César Alcedo Velarde conforme lo establecía el Código Judicial vigente, no está viciada de nulidad y de haber sido procedente el incidente que pide su declaratoria, esta Superioridad tampoco hubiera podido decretarla.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución N° 335 de 8 de mayo de 2000, mediante la cual el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá rechazó de plano el incidente de nulidad propuesto por el licenciado Gabriel Lawson en representación de Julio Alcedo Velarde y NIEGA la declaratoria de nulidad solicitada dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo seguido por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá contra HACIENDA LA HERRADURA y JULIO ALCEDO VELARDE.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR ELA FIRMA BERRÍOS Y BERRÍOS EN REPRESENTACIÓN DE DORIS ENEIDA VEGA DE LOS RÍOS Y ERNESTO DE LOS RÍOS LOMBARDO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (SUCURSAL DE CHITRÉ). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI

DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Berríos y Berríos, en nombre y representación de Doris Eneida Vega de De Los Ríos y Ernesto De Los Ríos Lombardo, interpuso recurso de apelación contra el auto N° 55 de 8 de junio de 2000, dictado dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá (Sucursal de Chitré).

Mediante el auto N° 55 de 8 de junio de 2000, se adjudica definitivamente al señor Sebastián Castro Castro, la finca N° 15869 de propiedad de los ejecutados (f. 150 del expediente del proceso ejecutivo).

Antes de admitir el presente recurso de apelación y conceder los términos para su sustentación y oposición, se ha logrado determinar, previo estudio del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo remitido a esta Superioridad, que es manifiestamente improcedente porque accede a un proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo con renuncia de trámites, iniciado mediante el auto N° 57 de 2 de septiembre de 1999 (f. 41 del expediente del proceso ejecutivo) que libró mandamiento de pago contra Doris Eneida Vega de De Los Ríos y Ernesto De Los Ríos Lombardo y embargó la finca N° 15869, inscrita al rollo 16745, documento 2, Sección de la Propiedad, Provincia de Los Santos, del Registro Público de propiedad de Doris Eneida Vega de De Los Ríos y catorce vacas.

La finca embargada, rematada (f. 143 del expediente del proceso ejecutivo) y adjudicada definitivamente mediante el auto N° 55 de 8 de junio de 2000, fue hipotecada como garantía de la obligación crediticia contraída por los señores Doris Eneida Vega de De los Ríos y Ernesto De Los Ríos Lombardo, tal como consta en la escritura pública N° 162, en cuya cláusula décimo octava, la parte deudora renuncia al domicilio y a los trámites del juicio ejecutivo (fs. 1 a 11 del expediente del proceso ejecutivo).

El artículo 1768 del Código Judicial establece que cuando en el contrato de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el Juez ordenará la venta del inmueble con notificación del dueño actual del bien hipotecado; pero no se podrán proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción.

De conformidad con el artículo 1772 del Código Judicial, los derechos que tengan los ejecutados o el tercero propietario con título inscrito contra el acreedor por causa de la venta sin trámite de proceso ejecutivo, los harán valer mediante proceso sumario.

Por las razones expuestas, el recurso de apelación interpuesto debe rechazarse de plano por improcedente, ya que fue interpuesto contra el auto de adjudicación definitiva del bien inmueble hipotecado, dictado dentro del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo con renuncia de trámites.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO por improcedente, el recurso de apelación interpuesto por la firma Berríos y Berríos en representación de DORIS ENEIDA VEGA de DE LOS RÍOS y ERNESTO DE LOS RÍOS LOMBARDO, dentrod el proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá (Sucursal de Chitré).

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PAOLO & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS DE LA CRUZ ECHEVARRÍA, ELVIA CERRUD SORIANO, GLORIELA MERCEDES PAOLO IVALDI, OMAR AMAT GONZÁLEZ, ARNOLDO DONALDO HERAZO Y HÉCTOR SÁNCHEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL LE SIGUE A LAS EMPRESAS DEL GRUPO AMADO. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Paolo & Asociados, actuando en nombre y representación de LUIS DE LA CRUZ ECHEVARRÍA, ELVIA CERRUD SORIANO, GLORIELA MERCEDES PAOLO IVALDI, OMAR AMAT GONZÁLEZ, ARNOLDO DONALDO HERAZO y HÉCTOR SÁNCHEZ, ha interpuesto tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Caja de Seguro Social le sigue a las empresas del GRUPO AMADO.

Los terceristas solicitan que se reconozca el crédito laboral preferencial a su favor por la suma de ciento cincuenta y ocho mil seiscientos noventa balboas con 20/100 (B/.158,690.20), consignado en la Sentencia No. 26 de 26 de febrero de 1999 del Juzgado Segundo Seccional de Trabajo de Panamá.

El apoderado judicial de los terceristas fundamentan su petición en los hechos que a continuación se transcriben:

> "PRIMERO: Que el día 21 de Mayo de 1996, la Caja de Seguro Social, procede a la intervención judicial de las empresas FIBRAS Y URETANOS, S.A.; CORPORACION INGENIERIA AMADO, S.A.; IDUSTRIAS (sic) METALURGICAS DE PANAMA, S.A.; CONSORCIO METALICO, S.A.; CONSTRUCTORA A, S.A.; Y EQUIPOS Y MAQUINARIAS, S.A., en concepto de cuotas de Seguro Social, prima de Riesgos Profesionales, Décimo Tercer mes y recargos de ley; Sumas dejadas de pagar por las empresas demandadas, durante el período comprendido entre el mes de agosto de 1985 al mes de marzo de 1996, siendo los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación.
>
> SEGUNDO: Que nuestros poderdantes al momento de decretarse el secuestro de las empresas demandadas por parte de la Caja de Seguro Social mantenían vigente su relación de trabajo con las empresas FIBRAS Y URETANO, S.A.; y CORPORACION DE INGENIERIA AMADO, S.A., habiendo empezado a laborar con estas empresas indistintamente según el presente detalle:
>
> A- ELVIA CERRUD SORIANO, desde el 5 de Mayo de 1980 (16 años)
>
> B- GLORÍELA (sic) M. PAOLO IVALDI, desde el 3 de Julio de 1978 (18 años)
>
> C- OMAR AMAT GONZALEZ, desde 26 de Agosto de 1969 (27 años)
>
> D- ARNOLDO DONADO HERAZO, desde el 11 de Abril de 1960 (36 años)
>
> E- HECTOR SANCHEZ TEJADA, desde el 16 de Enero de 1974 (22 años).
>
> TERCERO: Que nuestros poderdantes interpusieron ante la Jurisdicción Seccional de Trabajo, formal Proceso Común de Trabajo, para que se le reconociese por la vía judicial sus derechos en concepto de vacaciones, prima de antigüedad, décimo tercer mes y salarios

dejados de pagar al momento de dar por terminada la relación laboral.

CUARTO: Que el Juzgado Segundo Seccional de Trabajo de Panamá, mediante Sentencia No. 25 del 24 de Septiembre de 1998, reconoció el derecho constitucional que le asiste a nuestros poderdantes y condenó a pagar solidariamente a las empresas demandadas del GRUPO AMADO a pagar los derechos adquiridos reclamados por los actores hasta la concurrencia de OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO (sic) BALBOAS CON 10/100 (B/.87,731.10).

QUINTO: Que posterior a la sentencia antes señalada, se procedió a solicitarle al señor Juez A-quo que se ejecutase la sentencia en cuestión y que por ende se hicieran los nuevos cálculos y recargos de la ley, razón por la cual el señor Juez Segundo Seccional de Trabajo de Panamá, mediante el Auto No. 26 de 10 de Febrero de 1999 que sentenció la suma total adeudada por las empresas GRUPO AMADO demandadas en este proceso a favor de nuestros poderdantes es de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA BALBOAS CON 20/100 (B/.158,690.20) la cual adjuntamos a esta Tercería.

SEXTO: Que en la precitada sentencia laboral se "Decretó Formal Embargo" sobre los bienes muebles, cuentas por cobrar, acciones y demás valores que fueron cautelados por la Caja de Seguro Social a las empresas corporativas INGENIERIA AMADA, S.A. y FIBRAS Y URETANO, S.A. miembros del denominado GRUPO AMADO, en forma solidaria.

SEPTIMO: Que la Caja de Seguro Social cauteló el producto del Contrato de Ejecución de Obra No. DAP-PSP-34 celebrado por las empresas del GRUPO AMADO con el Instituto de Mercadeo Agropecuario, de donde se conoce que hasta la fecha la Contraloría General de la República aún no ha ejecutado dicho pago.

OCTAVO: Que tenemos conocimientos que la Caja de Seguro Social ha sostenido en varias ocasiones negociaciones con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República, La Defensoría del Pueblo y el Sindicato de las Empresas del GRUPO AMADO, en donde incluso se redactó un documento de acuerdo, que no ha sido firmado y en donde se desconoce los derechos que le asisten por ley a nuestros poderdantes y que a través de esta gestión judicial queremos que sean tomados en cuenta como deben ser."

Los demandantes acompañaron tercería de los siguientes documentos:

1. Copia autenticada del auto de 11 de septiembre de 1995, mediante el cual la Caja de Seguro Social decreta secuestro por B/.14,409.73, contra Constructora A, S. A. (f. 1).

2. Copia autenticada del auto de 21 de mayo de 1996, mediante el cual la Caja de Seguro Social decreta embargo por B/.630,949.76 contra Fibras y Uretano, S. A. (fs. 2).

3. Copia autenticada del auto de 21 de mayo de 1996, mediante el cual la Caja de Seguro Social decreta embargo por B/.119,366.22, contra Maquinarias y Equipo, S. A. (fs. 3).

4. Copia autenticada del auto de 21 de mayo de 1996, mediante el cual la Caja de Seguro Social decreta embargo por B/.809,551.09, contra Industria Metalúrgica de Panamá, S. A. (fs. 4).

5. Copia autenticada de la Sentencia No. 25, dictada por el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección el 24 de septiembre de 1998 (fs. 5 a 9).

6. Copia autenticada del Auto No. 26 de 10 de febrero de 1999, proferido por el Juzgado Segundo de Trabajo (fs. 10 a 14).

7. Copia autenticada del Oficio No.97 de 12 de febrero de 1999, expedido por el Juez Segundo de Trabajo, dirigido a la Directora de la Caja de Seguro Social (fs. 15).

8. Copia del borrador de compromiso celebrado el 6 de agosto de 1999 (fs. 16).

9. Carta de intención, fechada el 22 de diciembre de 1999 (fs. 18).

10. Notas de 5 y 20 de enero de 2,000, enviadas por el licenciado Jaime Paolo al Director de la Caja de Seguro Social (fs. 23 a 25).

11. Oficio No. 44 de 17 de enero de 2,000, enviado por el Juez Segundo de Trabajo al Director de la Caja de Seguro Social (fs. 26).

En esta etapa del proceso es oportuno hacer algunas aportaciones.

La solicitud de los terceristas se apoya en la Sentencia No. 25, expedida por el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección, el 24 de septiembre de 1998, como título ejecutivo, cuya copia autenticada reposa de fojas 5 a 9 del expediente; mediante la cual se condena a las sociedades CORPORACIÓN INGENIERÍA AMADO, S. A. y FIBRAS Y URETANO, S. A., de forma solidaria, a pagarles en concepto de prestaciones laborales a Elvia Cerrud Soriano, la suma de B/.5,569.58, desglosados en B/.2,077.68 de vacaciones, B/.255.94 de décimo tercer mes, B/.2,446.24, por prima de antigüedad y B/.789.92 de salarios; a Gloria Mercedes Paolo Vivaldi, la suma de B/.12,234.19, desglosados en B/.4,953.84 de vacaciones, B/.576.86 de décimo tercer mes, B/.5,149.13 en concepto de prima de antigüedad; a Omar Amat González, la suma de B/.19,081.66, desglosados en B/.8,758.27, en concepto de vacaciones, B/.839.89 de décimo tercer mes, B/.7,875.14 de prima de antigüedad y B/.1,554.36 de salarios, a Arnoldo Donando Herazo, la cantidad de B/.12,707.09, que corresponden a B/.2,538.72 de vacaciones, B/.347.49 de décimo tercer mes, B/.8,532.98 de prima de antigüedad y B/.1,287.90 por salarios, a Héctor Sánchez Tejada, la cuantía de B/.17,817.66, detallados de la siguiente manera: B/.8,709.87 por vacaciones, B/.889.85 de décimo tercer mes, B/.6,663.58 de prima de antiguedad y B/.1,554.36 por salarios; y a Luis De La Cruz Echevarría, la cantidad de B/.20,320.92, correspondientes a vacaciones (B/.7,640.85), décimo tercer mes (B/.620.00), prima de antigüedad (B/.10,298.46) y salarios (B/.1,761.61), cantidades que totalizan la suma de B/.87,731.10.

Posteriormente, el Tribunal de la Jurisdicción Laboral, mediante el Auto No. 26 de 10 de febrero de 1999, decretó embargo sobre bienes muebles, cuentas por cobrar, acciones y demás valores que fueron cautelados por la Caja de Seguro Social a las empresas Corporación Ingeniería Amado, S. A. y Fibras y Uretano, S. A., solidariamente, hasta la concurrencia de B/.158,690.20, en concepto de capital y costas judiciales, más costas de ejecución que se estiman en el 20% del total del condena.

El artículo 1794 del Código Judicial que contiene los presupuestos de las tercerías coadyuvantes, dispone lo siguiente:

> "Artículo 1794. Las demandas de tercerías coadyuvantes se sujetarán a las siguientes disposiciones:
>
> 1....
> 5. La tercería coadyuvante debe apoyarse en alguno de los documentos que presten mérito ejecutivo y de fecha cierta anterior al auto ejecutivo. Pero si se tratare de las sentencias a que se refieren los ordinales 1 y 2 del artículo 1639, las tercerías serán admisibles con fecha posterior, siempre que el proceso, en que dicha

sentencia se hubiera dictado se haya promovido con anterioridad al auto ejecutivo; y,
...".
(El subrayado es nuestro).

La demanda que dio origen al proceso laboral, que culminó con la sentencia de condena aportada como título ejecutivo de la presente tercería, fue recibida el 19 de junio de 1996, según consta en el sello a pie de página del libelo a foja 7 del cuaderno que contiene el proceso laboral. Dicha demanda fue repartida al Juzgado Segundo de Trabajo al 24 de junio de 1996 (ver sello al reverso de la foja 7 del expediente laboral).

Los peticionarios han recurrido "con el objeto de interponer Formal Tercería Coadyuvante dentro de los Procesos Ejecutivos de Jurisdicción Coactiva seguidos en contra de las empresas del GRUPO AMADO ...".

Según los peticionarios las Empresas del Grupo Amado están integradas por Granitos Panameños D'Orazio, Industria Metalúrgica de Panamá, Balongas, S. A., Transporte Las Cumbres, S. A., Corporación Ingeniería Amado, S. A., Camilo Amado y Asociación, S. A., Fibras de Uretano, S. A., Maquinarias y Equipos Modernos, S. A. y Administración, Finanzas y Servicios, S. A.

En el proceso por cobro coactivo seguido por la Caja de Seguro Social a Constructora A, S. A., con número patronal No. 87-400-3060, el auto que libra mandamiento fue emitido el 23de agosto de 1995 (fs. 10 del cuaderno que contiene el proceso por cobro coactivo contra Constructora A, S. A.).

El auto ejecutivo contra Fibras y Uretano, S. A., fue emitido por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social el 5 de enero de 1989, y le fue notificado a la empresa el 27 de abril de 1993 (fs. 6 y 62 del expediente contentivo del proceso por cobro coactivo contra Fibras y Uretano, S. A.).

En el caso de Maquinaria y Equipo Moderno, S. A., número patronal 87-611-3598, el auto ejecutivo está fechado 19 de septiembre de 1986 y, fue notificado el 7 de octubre de 1986 (fs. 4 y 11 del proceso por cobro coactivo contra Maquinaria y Equipo Moderno, S. A., respectivamente).

El auto que libra mandamiento de pago contra Industrias Metalúrgicas de Panamá, S. A., número patronal 87-350-0145, expedido por la Caja de Seguro Social, fue notificado el 7 de octubre de 1986 (ver fs. 4 y 7 del Tomo I del proceso ejecutivo por cobro coactivo de Industrias Metalúrgicas de Panamá, S. A.).

De lo antes expuesto se colige con claridad que la demanda laboral, dentro de cuyo proceso fue dictada la Sentencia que presta mérito ejecutivo para la presente tercería, fue presentada con posterioridad a la fecha de emisión de todos y cada uno de los autos ejecutivos librados en los distintos procesos que, por cobro coactivo, le sigue la Caja de Seguro Social a las empresas Industria Metalúrgica de Panamá, S. A., Maquinaria y Equipo Modernos, S. A., Fibras de Uretano, S. A., y Constructora A, S. A.

La norma antes transcrita dispone claramente que la tercería coadyuvante apoyada en sentencia posterior será admisible si, dicha sentencia hubiese sido dictada dentro de proceso promovido con fecha anterior a la fecha del auto ejecutivo.

De lo que se desprende que en este caso no se ha cumplido ese requisito, pues los peticionarios, que apoyan su tercería en la Sentencia No. 25, de 24 de septiembre de 1998, del Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección, han enderezado su pretensión contra distintas empresas y los autos que libran mandamiento de pago contra dichas empresas, son de fecha anterior al 19 de junio de 1996, cuando los afectados interpusieron su reclamación laboral.

En vista de que el documento que presta mérito ejecutivo en la presente tercería no cumple con los presupuestos estipulados en el numeral 5 del artículo 1794 del Código Judicial, resulta imperativo aplicar lo que dispone el este artículo en su último párrafo, "La tercería que no se apoye en instrumento ejecutivo será rechazada de plano ...".

Por las razones expuestas, no puede dársele curso a la tercería interpuesta.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la tercería coadyuvante interpuesta por la firma forense Paolo & Asociados, en representación de LUIS DE LA CRUZ ECHEVARRÍA, ELVIA CERRUD SORIANO, GLORIELA MERCEDES PAOLO IVALDI, OMAR AMAT GONZÁLEZ, ARNOLDO DONALDO HERAZO y HÉCTOR SÁNCHEZ, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Caja de Seguro Social le sigue a las empresas del GRUPO AMADO.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCION DE PAGO, INTERPUESTA POR LA FIRMA VÍCTOR MÉNDEZ FÁBREGA & ASSOCIATES EN REPRESENTACIÓN DE J. YOUNG, S. A. Y JORGE YOUNG, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Víctor Méndez Fábrega & Associates, actuando en su condición de apoderado judicial de J. YOUNG, S. A. y JORGE YOUNG ha promovido EXCEPCION DE PAGO dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el BANCO NACIONAL DE PANAMA le sigue a la empresa J. YOUNG, S. A., JORGE YOUNG RODRIGUEZ, JOSE YOUNG RODRIGUEZ y la COMPAÑIA COLONIAL DE SEGUROS DE PANAMA.

I. FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION DE PAGO

Para sustentar la existencia de la excepción alegada, el apoderado judicial del actora parte del hecho de que la cuantía a la que asciende el embargo decretado por el Banco Nacional de Panamá, en virtud de la resolución del 4 de junio de 1990, según el hecho primero del libelo de demanda se desglosa en los siguientes conceptos:

> "DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.250,000.00) de Capital, SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE BALBOAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (B/6,809.47) de intereses y una "extraña" suma llamada "Gastos de Cobranza" por VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS BALBOAS (B/25,432.00)"

Esta suma, a juicio del demandante, fue cancelada en su totalidad cuando el Banco Nacional de Panamá vendió en un 67% de su valor nominal, documentos negociables denominados Cheques Fiscales que fueron emitidos por la Contraloría General de la República a nombre de J. YOUNG S. A./BANCO NACIONAL DE PANAMA y cuyo monto total ascendía a TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN BALBOAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (B/.336,341.72).

Para el Licenciado Víctor Méndez Fábrega, la emisión y aceptación de los

Cheques Fiscales a nombre de los demandantes, debió conllevar, por un lado, la congelación de los intereses y, por el otro, la cancelación de la obligación, conforme lo previsto por los artículos 995 del Código Civil y 801 del Código de Comercio.

El excepcionante concluye su alegato, afirmando que el Banco Nacional de Panamá ignorando las disposiciones citadas, "ha seguido cobrando intereses y extendiendo otras notas de embargo como si la deuda no hubiese sido cobrada en su totalidad por dicha institución."

II. OPOSICION PLANTEADA POR EL BANCO NACIONAL DE PANAMA

La entidad ejecutante se opone al reconocimiento de la excepción de pago promovida por el Licenciado Víctor Méndez Fábrega, aduciendo básicamente que el saldo adeudado por J. YOUNG, S. A. al 7 de septiembre de 1998 ascendía a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE BALBOAS CON 00/100 (B/.246,711.00), por lo cual al verificarse el canje de los cheques fiscales emitidos por la Contraloría General de la República pagaderos en Bonos del Tesoro Nacional al 67% de su valor nominal, conforme lo dispuesto por el Decreto de Gabinete No. 21 de 16 de enero de 1998, la suma recuperada por el Banco Nacional de Panamá fue de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON 91/100 (B/.225,348.91). Esta cantidad no era suficiente para cubrir la totalidad de la deuda en la que había incurrido la empresa ejecutada, y en consecuencia el Juez Ejecutor al expedir la resolución correspondiente hizo mención de que la cantidad de dinero abonada se recibía con "reserva de intereses" a efectos de evitar la extinción de la obligación.

Otro aspecto que el Banco Nacional de Panamá aborda en su escrito de oposición, es el referente a los intereses generados en razón de la morosidad en la que ha incurrido la sociedad J. YOUNG, S. A.. Respecto de este tema, aduce que la suma adeudada en dicho concepto asciende a la cantidad de SESENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE BALBOAS CON 47/100 (B/.60,809.47) y no a SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE BALBOAS CON 47 (B/.6,809.47) como erróneamente ha sido afirmado el actor.

III. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La señora Procuradora de la Administración, después de haber realizado un detallado estudio cronológico sobre los diversos hechos que giran en torno del presente litigio, solicitó a los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, desestimar la pretensión de la parte ejecutada y en consecuencia que declaren no probada la Excepción de Pago, interpuesta por la firma forense Víctor Méndez Fábrega & Associates en nombre representación de J. Young, S. A. y Jorge Young, dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que les sigue el Banco Nacional de Panamá.

La opinión de esta servidora pública de alta jerarquía se sustenta en el hecho de que desde la fecha en la que el Banco Nacional expidió el Auto de Secuestro por la suma de B/.336,241.72 (24 de mayo de 1990), hasta el momento en que dicha entidad recupera la suma de B/.336,341.72 en Cheques Fiscales (7 de noviembre de 1994), el Banco se mantuvo realizando sin éxito alguno las gestiones de cobro pertinentes; lo cual a su vez tuvo como consecuencia que los intereses vencidos y no pagados continuaran aumentando conforme lo previsto por la Cláusula Tercera del Contrato de Préstamos con Fianza Solidaria suscrito entre J.YOUNG, S. A. y el BANCO NACIONAL DE PANAMA. Esta última situación a su vez, da como resultado que el saldo deudor reflejado para 1994 fuera superior al monto que se adeudaba en el año de 1990.

La Procuradora de la Administración finaliza su intervención en los siguientes términos:

> "En consecuencia, estimamos que, al no haber cancelado los deudores el total de la deuda que mantenían con el Banco Nacional de Panamá, era incongruente que se congelaran los intereses y se extinguiera la

obligación, según lo dispone el artículo 995 del Código Civil, que en su arte (sic) medular dispone lo siguiente:

Artículo 995: El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna respecto a los intereses, extingue la obligación del deudor en cuanto a éstos..." (la subraya es nuestra)"

IV. DECISION DE ESTA SUPERIORIDAD

Antes de entrar a dilucidar el aspecto medular de la presente contienda, es pertinente dejar establecido que el análisis de la misma se verificará sobre los elementos probatorios aportados al proceso con posterioridad al día 17 de julio de 1992. Esto obedece a que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, en fallo de dicha fecha, consideró que conforme a lo actuado en autos el Licenciado Víctor Méndez Fábrega, actuando en su condición de apoderado judicial de J. YOUNG, S. A. y JORGE YOUNG RODRIGUEZ, no demostró, hasta ese momento, que el préstamo conferido por el Banco Nacional de Panamá a su poderdante fue cancelado en su totalidad. En consecuencia esta Superioridad procedió a declarar no probada la excepción de pago incoada en aquella oportunidad.

Al promoverse el reconocimiento de la excepción de pago motivo del presente estudio, el demandante parte del hecho de que el saldo que su patrocinado debía cancelar al Banco Nacional de Panamá correspondía a la suma que el Juzgado Ejecutor de esta entidad bancaria fijó mediante auto ejecutivo No. 291 de 4 de junio de 1990, de acuerdo al cual la cantidad adeudada por J. YOUNG, S. A. ascendía al monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.250,000.00) en concepto de capital, SESENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE BALBOAS CON 47/100 (B/.60,809.47) por intereses vencidos, más la suma de VEINTICINCO MIL CUATROCEINTOS TREINTA Y DOS BALBOAS concernientes a gastos de cobranza. Es pertinente destacar que la suma reclamada en virtud de esta resolución, de acuerdo al contenido de la misma, no incluía los intereses que continuarán generándose hasta el momento en que la deuda fuera cancelada en su totalidad; por lo cual se entiende que mientras el deudor se mantuviera moroso en el cumplimiento de su obligación, la cuantía de la misma se iría incrementando gradualmente, causando intereses equivalentes al 12.5% anual.

Tanto el contenido del cuadernillo administrativo, como del expediente judicial permiten a esta Superioridad concluir que los deudores, voluntariamente, jamás realizaron pago alguno tendiente a amortiguar el saldo adeudado al Banco Nacional de Panamá, en el término de 5 meses contados a partir de la fecha de liquidación del préstamo, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda del referido contrato de préstamo.

En virtud de esta situación, la referida entidad bancaria se vio en la necesidad de iniciar las gestiones de cobro pertinentes a fin de recuperar la alta suma de dinero que en concepto de préstamo había facilitado a J. YOUNG, S. A..

El primer mecanismo a través del cual el Banco Nacional de Panamá, pretendía recuperar sus acreencias consistió en la realización de instrumentos crediticios denominados Cheques Fiscales los cuales fueron emitidos por la Contraloría General de la República, en favor de J. YOUNG, S. A. con el fin cubrir los gastos en los que tuvo que incurrir esta empresa para llevar a cabo la rehabilitación de la Carretera entrada Río de Jesús, Soná y Calles de Soná. El Banco Nacional de Panamá reservó su derecho sobre los referidos instrumentos fiscales afectándolos mediante la medida cautelar de secuestro, hasta la concurrencia de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN BALBOAS CON 72/100 (B/.336,241.72), sin perjuicio de los intereses que se sigan causando hasta el completo pago de la obligación (veáse auto No. 230 de 24 de mayo de 1990, visible a fojas 63 del expediente administrativo.)

Para el día 5 de abril de 1993, la Doctora Fanny Díaz de Correa, en su

calidad de Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, correspondiendo a una nota que le fuera enviada por Licenciado José Chen Barría quién en aquel entonces ocupaba el cargo de Subcontralor de la República, certifica que la medida de secuestro decretada sobre los cheques fiscales aún se mantenía vigente y que la misma a esa fecha ascendía a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA BALBOAS CON 30/100 (B/.446,970.30). Este secuestro es elevado a la categoría de embargo mediante auto No. 653 de 12 de julio de 1993, visible a fojas 229 del cuadernillo administrativo.

Sin embargo dado el hecho de que la Contraloría General de la República informó al Banco Nacional de Panamá que el valor de los Cheques Fiscales que le estaban por ser desembolsados era inferior al valor que se les atribuía en el Mercado de Valores, (lo cual tendría como consecuencia que la prestación cuyo cumplimiento se reclama demoraría más tiempo en ser satisfecha); la entidad ejecutante procedió, mediante auto No. 765 de 9 de agosto de 1993, a ampliar el secuestro y consecuentemente el embargo decretado sobre los cheques fiscales a recibir a la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/800,000.00), "monto este, que en cheques fiscales a su valor comercial cubre el saldo del BANCO NACIONAL DE PANAMA".

Por su parte, el Subcontralor de la República en nota calendada 6 de octubre de 1993 confirmó al Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá que tenía a su disposición cheques fiscales por la suma de B/.800,000.00, pero que la emisión de tales instrumentos debía ser solicitada al Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Después de dar cumplimiento a una serie de trámites burocráticos, la Contraloría General de la República entrega, en custodia, el día 15 de noviembre de 1994 al Banco Nacional de Panamá la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN BALBOAS CON SETENTA Y DOS CENTESIMOS (B/.336,341.72) en cheques fiscales embargados a J. YOUNG, a efectos de que los mismos fueran posteriormente rematados; diligencia esta cuya celebración es fijada, mediante auto de 16 de febrero de 1995, para el día 29 de marzo de 1995. Posteriormente, mediante resolución de 26 de febrero de 1996, se fijó como nueva fecha de remate el día 22 de abril de 1996. No obstante la celebración de este nuevo remate fue suspendido, mediante auto de 18 de marzo de 1996, en virtud de la empresa ejecutante se encontraba realizando algunas negociaciones para proceder con la venta de los referidos cheques fiscales.

Sin embargo al 9 de julio de 1998, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, ordenó proceder con la solicitud de canje de los cheques fiscales embargados, debido a que éstos habían sufrido una marcada depreciación en el mercado de valores, la cual podría alcanzar hasta un 75% de su valor nominal.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Banco Nacional de Panamá, para recuperar sus acreencias, vemos que no es sino hasta el día 13 de septiembre de 1994 cuando en virtud de la venta judicial practicada sobre la Camioneta TOYOTA LAND CRUISER del año 1985, placa 8-5305, color mostaza con franja cholocate, motor diesel de 6 cilindros, No. D5104538, chasis No. TEICLLI1420, transmisión manual, de 4 cambios y reversa cuyo propietario era el señor JOSE YOUNG RODRIGUEZ, portador de la cédula de identidad personal 8-87-401; esta entidad bancaria recibe un primer pago por la suma de TRES MIL QUINIENTOS UN BALBOA CON 00/100. (B/.3,501.00); suma que al no cubrir la totalidad del crédito cuya titularidad ostenta el Banco Nacional de Panamá, conlleva que el presente proceso ejecutivo aún se mantenga abierto. De igual modo, también cabe destacar que en el auto de adjudicación de dicho bien mueble, la entidad ejecutante, advirtió que "en el evento de que el referido producto del remate no alcance para cancelar los intereses, de conformidad con los artículos 995 del Código Civil y 801 del Código de Comercio, se hace la reserva respectiva para evitar su extinción, pues se procurará su cobro en el futuro."

Respecto del tema de la realización de los cheques fiscales, esta Superioridad no encontró ni el expediente administrativo ni en el judicial, documento

alguno que de manera expresa y clara nos informará, por un lado, el tipo de transacción de la que fueron objeto y, por otro, el monto de la deuda que cubrieron. No obstante, a fojas 434 del expediente administrativo, reposa una resolución calendada 12 de noviembre de 1998 emitida por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá que es del tenor siguiente:

> "Dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo propuesto por el BANCO NACIONAL DE PANAMA-AREA METROPOLITANA-CASA MATRIZ en contra de J. YOUNG, S.A. y OTROS, una vez cancelado el monto a capital adeudado por la parte deudora J. YOUNG, S.A., por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE BALBOAS CON 00/100 (B/.246,711.00) con el fin de evitar la extinción de la obligación contenida en el documento No.70279 tipo comercial, concedido el 22 de septiembre de 1987, en cuanto al cobro de los intereses vencidos por el BANCO NACIONAL DE PANAMA, CASA MATRIZ en calidad de acreedor ejecutante, se hace la reserva respecto a los intereses por cobrar, en base a lo dispuesto en el artículo 801 del Código de Comercio."

Vemos pues, que el Banco Nacional de Panamá en todas las resoluciones dictadas en el curso de la presente ejecución, siempre hizo mención, por una parte, de que las sumas secuestradas o embargadas continuarían causando intereses mientras no fuese cancelada la totalidad de la deuda y, por la otra, también siempre señala expresamente que el dinero recibido se hace con la debida "reserva de intereses" lo cual tiene un doble propósito, por una parte, evitar que se entienda tácitamente que los mismos han sido condonados, y por la otra, impedir que se produzca la extinción de la obligación.

En resumen, vemos pues, que en el desarrollo de la presente contienda son trascendentales tres fechas:

a.) 8 de septiembre de 1987: fecha en que el Banco Nacional de Panamá y J. YOUNG, S. A. suscriben contrato de Préstamo Comercial a Corto Plazo con Fianza Solidaria, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.250,000.00).

b.) 13 de septiembre de 1994: remate de la Camioneta TOYOTA LAND CRUISER del año 1985, placa 8-5305, color mostaza con franja chocolate, motor diesel de 6 cilindros, No. D5104538, chasis No. TEICLLI1420, transmisión manual, de 4 cambios y reversa cuyo propietario era el señor JOSE YOUNG RODRIGUEZ, por la suma de TRES MIL QUINIENTOS UN BALBOA CON 00/100. (B/.3,501.00)

c.) 12 de noviembre de 1998: el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá dicta una resolución en la que acepta que los demandados han cancelado a capital la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE BALBOAS CON 00/100 (B/.246,711.00).

Relacionando estas tres circunstancias, salta a la vista que el tiempo transcurrido desde el momento en que la obligación se hace exigible (22 de febrero de 1988) hasta el día en que se recibe el primer abono aplicable al saldo deudor (13 de septiembre de 1994), es bastante prolongado, similar situación también se advierte entre el primer y segundo pago efectuado (12 de noviembre de 1998). Aunado a esto, debe considerarse que la cantidad de dinero prestada a J. YOUNG, S. A. es bastante elevada, que los deudores nunca realizaron pagos voluntarios con el fin de amortiguar el saldo en el término de 5 meses contados a partir de la fecha en la que se liquidó el préstamo (que era el período dentro del cual los deudores debían cancelar al Banco Nacional la totalidad del préstamo conferido), las diversas gestiones de cobro a las que tuvo que recurrir el Banco Nacional para recuperar su dinero, así como los gastos que se produjeron en razón de la realización de tales diligencias.

Las circunstancias descritas han sido debidamente acreditadas y es obvio que las mismas tuvieron como consecuencia directa el aumento de la deuda a cargo de J. YOUNG, S. A. y sus respectivos fiadores, incremento que se ha ido refle-

jando en las diversas certificaciones de saldo emitidas por el Departamento de Contabilidad Centralizada de Préstamos de la Gerencia Ejecutiva de Operaciones del Banco Nacional de Panamá, como las notas de secuestro y embargo dictadas a lo largo de la tramitación del presente cobro coactivo.

El expediente administrativo, también contiene una serie de documentos que acreditan que J. YOUNG, S. A. presentó al Banco Nacional de Panamá determinada propuesta de pago con miras a cancelar la deuda contraída. Dado el hecho de que la transacción ofrecida por la sociedad deudora no satisfacía las expectativas del Banco Nacional de Panamá, este ente procedió a elaborar y presentar una nueva contrapuesta de pago, que no llegó a adoptarse formalmente; toda vez que J. YOUNG, S. A. no contaba con la capacidad económica para satisfacer los intereses del Banco Nacional de Panamá.

El artículo 1710 del Código Judicial al referirse al mecanismo para acreditar la excepción de pago, literalmente dispone lo siguiente:

> "Artículo 1710. Tratándose de la excepción de pago si ésta se propone dentro de los ocho días siguientes al término previsto en el artículo 1706, ésta puede acreditarse mediante los medios comunes de prueba. Si se invoca con posterioridad a los ocho días debe acompañarse la prueba documental. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las normas substanciales." (Lo resaltado es del Tribunal)

La relación de hechos elaborada en párrafos anteriores, el contenido del material probatorio objeto del presente análisis y lo dispuesto en la norma transcrita, llevan a los miembros de este Tribunal Colegiado a concluir que ni la sociedad J. YOUNG, S. A., ni sus fiadores han cancelado al Banco Nacional de Panamá la obligación contraída en virtud del Contrato de Préstamo Comercial a corto plazo con fianza solidaria, suscrito entre éstos; toda vez que no ha sido aportado al expediente documento alguno (recibo, factura, nota, carta, etc.) que acredite que el Banco Nacional de Panamá recibió, a su entera satisfacción, la totalidad de la suma de dinero que se le adeuda conforme a los términos pactados. Ante esta omisión, lo procedente es rechazar la pretensión del deudor y declarar no probada la excepción de pago promovida por el Licenciado Víctor Méndez Fábrega

En mérito de los razonamientos expuestos, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN NO PROBADA la EXCEPCION DE PAGO presentada por la firma Víctor Méndez Fábrega & Associates en nombre y represenatción de J. YOUNG, S. A. y JORGE YOUNG, dentro del Juicio Ejecutivo por CobroCoactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá.

Notifiquise.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PAOLO & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS DE LA CRUZ ECHEVARRÍA, ELVIA CERRUD SORIANO, GLORIELA MERCEDES PAOLO IVALDI, OMAR AMAT GONZÁLEZ, ARNOLDO DONALDO HERAZO Y HÉCTOR SÁNCHEZ TEJADA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL LE SIGUE A LAS EMPRESAS DEL GRUPO AMADO. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Paolo & Asociados, actuando en nombre y representación de LUIS DE LA CRUZ ECHEVARRÍA, ELVIA CERRUD SORIANO, GLORIELA MERCEDES PAOLO IVALDI, OMAR AMAT GONZÁLEZ, ARNOLDO DONALDO HERAZO y HÉCTOR SÁNCHEZ TEJADA, ha interpuesto tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Caja de Seguro Social le sigue a las empresas del GRUPO AMADO.

Los terceristas solicitan que se reconozca el crédito laboral preferencial a su favor por la suma de ciento cincuenta y ocho mil seiscientos noventa balboas con 20/100 (B/.158,690.20), consignado en la Sentencia No. 26 de 26 de febrero de 1999 dictada por el Juzgado Segundo Seccional de Trabajo de Panamá.

El apoderado judicial de los terceristas fundamentan su petición en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Que el día 21 de Mayo de 1996, la Caja de Seguro Social, procede a la intervención judicial de las empresas FIBRAS Y URETANOS, S.A.; CORPORACION INGENIERIA AMADO, S.A.; IDUSTRIAS (sic) METALURGICAS DE PANAMA, S.A.; CONSORCIO METALICO, S.A.; CONSTRUCTORA A, S.A.; Y EQUIPOS Y MAQUINARIAS, S.A., en concepto de cuotas de Seguro Social, prima de Riesgos Profesionales, Décimo Tercer mes y recargos de ley; Sumas dejadas de pagar por las empresas demandadas, durante el período comprendido entre el mes de agosto de 1985 al mes de marzo de 1996, siendo los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación.

SEGUNDO: Que nuestros poderdantes al momento de decretarse el secuestro de las empresas demandadas por parte de la Caja de Seguro Social mantenían vigente su relación de trabajo con las empresas FIBRAS Y URETANO, S.A.; y CORPORACION DE INGENIERIA AMADO, S.A., habiendo empezado a laborar con estas empresas indistintamente según el presente detalle:

A- ELVIA CERRUD SORIANO, desde el 5 de Mayo de 1980 (16 años)
B- GLORÍELA (sic) M. PAOLO IVALDI, desde el 3 de Julio de 1978 (18 años)
C- OMAR AMAT GONZALEZ, desde 26 de Agosto de 1969 (27 años)
D- ARNOLDO DONADO HERAZO, desde el 11 de Abril de 1960 (36 años)
E- HECTOR SANCHEZ TEJADA, desde el 16 de Enero de 1974 (22 años).

TERCERO: Que nuestros poderdantes interpusieron ante la Jurisdicción Seccional de Trabajo, formal Proceso Común de Trabajo, para que se le reconociese por la vía judicial sus derechos en concepto de vacaciones, prima de antigüedad, décimo tercer mes y salarios dejados de pagar al momento de dar por terminada la relación laboral.

CUARTO: Que el Juzgado Segundo Seccional de Trabajo de Panamá, mediante Sentencia No. 25 del 24 de Septiembre de 1998, reconoció el derecho constitucional que le asiste a nuestros poderdantes y condenó a pagar solidariamente a las empresas demandadas del GRUPO AMADO a pagar los derechos adquiridos reclamados por los actores hasta la concurrencia de OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO (sic) BALBOAS CON 10/100 (B/.87,731.10).

QUINTO: Que posterior a la sentencia antes señalada, se procedió a solicitarle al señor Juez A-quo que se ejecutase la sentencia en cuestión y que por ende se hicieran los nuevos cálculos y recargos de la ley, razón por la cual el señor Juez Segundo Seccional de Trabajo de Panamá, mediante el Auto No. 26 de 10 de Febrero de 1999 que sentenció la suma total adeudada por las empresas GRUPO AMADO demandadas en este proceso a favor de nuestros poderdantes es de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA BALBOAS CON 20/100 (B/.158,690.20) la cual adjuntamos a esta Tercería.

SEXTO: Que en la precitada sentencia laboral se "Decretó Formal Embargo" sobre los bienes muebles, cuentas por cobrar, acciones y demás valores que fueron cautelados por la Caja de Seguro Social a las empresas corporativas INGENIERIA AMADA, S.A. y FIBRAS Y URETANO, S.A. miembros del denominado GRUPO AMADO, en forma solidaria.

SEPTIMO: Que la Caja de Seguro Social cauteló el producto del Contrato de Ejecución de Obra No. DAP-PSP-34 celebrado por las empresas del GRUPO AMADO con el Instituto de Mercadeo Agropecuario, de donde se conoce que hasta la fecha la Contraloría General de la República aún no ha ejecutado dicho pago.

OCTAVO: Que tenemos conocimientos que la Caja de Seguro Social ha sostenido en varias ocasiones negociaciones con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República, La Defensoría del Pueblo y el Sindicato de las Empresas del GRUPO AMADO, en donde incluso se redactó un documento de acuerdo, que no ha sido firmado y en donde se desconoce los derechos que le asisten por ley a nuestros poderdantes y que a través de esta gestión judicial queremos que sean tomados en cuenta como deben ser."

Los demandantes acompañaron tercería de los siguientes documentos:

1. Copia autenticada de la Sentencia No. 25, dictada por el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección el 24 de septiembre de 1998 (fs. 1 a 5).

2. Copia autenticada del Auto No. 26, de 10 de febrero de 1999, proferido por el Juzgado Segundo de Trabajo (fs. 6 a 10).

3. Copia autenticada del Oficio No. 97, de 12 de febrero de 1999, expedido por el Juez Segundo de Trabajo, dirigido a la Directora de la Caja de Seguro Social (fs. 11).

4. Oficio No. 44 de 17 de enero de 2,000, enviado por el Juez Segundo de Trabajo al Director de la Caja de Seguro Social (fs. 12)

5. Copia del borrador de compromiso celebrado el 6 de agosto de 1999 (fs. 13 y 14).

6. Carta de intención, de 22 de diciembre de 1999 (fs. 15 a 19).

En esta etapa del proceso es oportuno hacer algunas aportaciones.

La solicitud de los terceristas se apoya en la Sentencia No. 25, expedida por el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección, el 24 de septiembre de 1998, como título ejecutivo, cuya copia autenticada reposa de fojas 1 a 5 del expediente; mediante la cual se condena a las sociedades CORPORACIÓN INGENIERÍA AMADO, S. A. y FIBRAS Y URETANO, S. A., de forma solidaria, a pagarles en concepto de prestaciones laborales a Elvia Cerrud Soriano, la suma de B/.5,569.58, desglosados en B/.2,077.68 de vacaciones, B/.255.94 de décimo tercer mes, B/.2,446.24, por prima de antigüedad y B/.789.92 de salarios; a Gloria Mercedes Paolo Vivaldi, la suma de B/.12,234.19, desglosados en B/.4,953.84 de vacaciones, B/.576.86 de décimo tercer mes, B/.5,149.13 en concepto de prima de antigüedad; a Omar Amat González, la suma de B/.19,081.66, desglosados en B/.8,758.27, en concepto de vacaciones, B/.839.89 de décimo tercer mes, B/.7,875.14 de prima de antigüedad y B/.1,554.36 de salarios, a Arnoldo Donando Herazo, la cantidad de B/.12,707.09, que corresponden a B/.2,538.72 de vacaciones, B/.347.49 de décimo tercer mes, B/.8,532.98 de prima de antigüedad y B/.1,287.90 por salarios, a Héctor Sánchez Tejada, la cuantía de B/.17,817.66, detallados de la siguiente manera: B/.8,709.87 por vacaciones, B/.889.85 de décimo tercer mes, B/.6,663.58 de prima de antiguedad y B/.1,554.36 por salarios; y a Luis De La Cruz Echevarría, la cantidad de B/.20,320.92, correspondientes a

vacaciones (B/.7,640.85), décimo tercer mes (B/.620.00), prima de antigüedad (B/.10,298.46) y salarios (B/.1,761.61), cantidades que totalizan la suma de B/.87,731.10.

Posteriormente, el Tribunal de la Jurisdicción Laboral, mediante el Auto No. 26 de 10 de febrero de 1999, decretó embargo sobre bienes muebles, cuentas por cobrar, acciones y demás valores que fueron cautelados por la Caja de Seguro Social a las empresas Corporación Ingeniería Amado, S. A. y Fibras y Uretano, S. A., solidariamente, hasta la concurrencia de B/.158,690.20, en concepto de capital y costas judiciales, más costas de ejecución que se estiman en el 20% del total del condena.

El artículo 1794 del Código Judicial que contiene los presupuestos de las tercerías coadyuvantes, dispone lo siguiente:

> "Artículo 1794. Las demandas de tercerías coadyuvantes se sujetarán a las siguientes disposiciones:
> 1....
>
> 5. La tercería coadyuvante debe apoyarse en alguno de los documentos que presten mérito ejecutivo y de fecha cierta anterior al auto ejecutivo. Pero si se tratare de las sentencias a que se refieren los ordinales 1 y 2 del artículo 1639, las tercerías serán admisibles con fecha posterior, siempre que el proceso, en que dicha sentencia se hubiera dictado se haya promovido con anterioridad al auto ejecutivo; y,
> ...
> (El subrayado es nuestro).

La demanda que dio origen al proceso laboral, que culminó con la sentencia de condena aportada como título ejecutivo de la presente tercería, fue recibida el 19 de junio de 1996, según consta en el sello a pie de página del libelo a foja 7 del cuaderno que contiene el proceso laboral. Dicha demanda fue repartida al Juzgado Segundo de Trabajo al 24 de junio de 1996 (ver sello al reverso de la foja 7 del expediente que contiene el proceso laboral).

Los peticionarios han recurrido "con el objeto de interponer Formal Tercería Coadyuvante dentro de los Procesos Ejecutivos de Jurisdicción Coactiva seguidos en contra de las empresas del GRUPO AMADO ...".

Según los peticionarios las Empresas del Grupo Amado están integradas por Granitos Panameños D'Orazio, Industria Metalúrgica de Panamá, Balongas, S. A., Transporte Las Cumbres, S. A., Corporación Ingeniería Amado, S. A., Camilo Amado y Asociación, S. A., Fibras de Uretano, S. A., Maquinarias y Equipos Modernos, S. A. y Administración, Finanzas y Servicios, S. A.

En el proceso por cobro coactivo seguido por la Caja de Seguro Social a Constructora A, S. A., con número patronal No. 87-400-3060, el auto que libra mandamiento fue emitido el 23 de agosto de 1995 (fs. 10 del cuaderno que contiene el proceso por cobro coactivo contra Constructora A, S. A.).

El auto ejecutivo contra Fibras y Uretano, S. A., fue emitido por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social el 5 de enero de 1989, y le fue notificado a la empresa el 27 de abril de 1993 (fs. 6 y 62 del expediente contentivo del proceso por cobro coactivo contra Fibras y Uretano, S. A.).

En el caso de Maquinaria y Equipo Moderno, S. A., número patronal 87-611-3598, el auto ejecutivo está fechado 19 de septiembre de 1986 y, fue notificado el 7 de octubre de 1986 (fs. 4 y 11 del proceso por cobro coactivo contra Maquinaria y Equipo Moderno, S. A., respectivamente).

El auto que libra mandamiento de pago contra Industrias Metalúrgicas de Panamá, S. A., número patronal 87-350-0145, expedido por la Caja de Seguro

Social, fue notificado el 7 de octubre de 1986 (ver fs. 4 y 7 del Tomo I del proceso ejecutivo por cobro coactivo de Industrias Metalúrgicas de Panamá, S. A.).

De lo antes expuesto se colige con claridad que la demanda laboral, dentro de cuyo proceso fue dictada la Sentencia que presta mérito ejecutivo para la presente tercería, fue presentada con posterioridad a la fecha de emisión de todos y cada uno de los autos ejecutivos librados en los distintos procesos que, por cobro coactivo, le sigue la Caja de Seguro Social a las empresas Industria Metalúrgica de Panamá, S. A., Maquinaria y Equipo Modernos, S. A., Fibras de Uretano, S. A., y Constructora A, S. A.

La norma antes transcrita dispone claramente que la tercería coadyuvante apoyada en sentencia posterior será admisible si, dicha sentencia hubiese sido dictada dentro de proceso promovido con fecha anterior a la fecha del auto ejecutivo.

De lo que se desprende que en este caso no se ha cumplido ese requisito, pues los peticionarios, que apoyan su tercería en la Sentencia No. 25, de 24 de septiembre de 1998, del Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección, han enderezado su pretensión contra distintas empresas y los autos que libran mandamiento de pago contra dichas empresas, son de fecha anterior al 19 de junio de 1996, cuando los afectados interpusieron su reclamación laboral.

En vista de que sentencia que sirve como título ejecutivo en la presente tercería no cumple con los presupuestos estipulados en el numeral 5 del artículo 1794 del Código Judicial, resulta imperativo aplicar lo que dispone el este artículo en su último párrafo, "La tercería que no se apoye en instrumento ejecutivo será rechazada de plano ...".

Por las razones expuestas, no puede dársele curso a la tercería interpuesta.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la tercería coadyuvante interpuesta por la firma forense Paolo & Asociados, en representación de LUIS DE LA CRUZ ECHEVARRÍA, ELVIA CERRUD SORIANO, GLORIELA MERCEDES PAOLO IVALDI, OMAR AMAT GONZÁLEZ, ARNOLDO DONALDO HERAZO y HÉCTOR SÁNCHEZ TEJADA, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Caja de Seguro Social le sigue a las empresas del GRUPO AMADO.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LCDO. LUIS ANTONIO CARRASCO MORENO, EN REPRESENTACIÓN DE BERNARDO AVILA DEL CID, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO PANAMEÑO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (IFARHU), LE SIGUE A ROGELIO VAN HORN, BERNARDO AVILA DEL CID Y ADELICIA FERNANDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Luis Antonio Carrasco Moreno, en representación de BENERANDO AVILA DEL CID, ha interpuesto incidente de nulidad dentro del proceso ejecutivo

por cobro coactivo que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (I.F.A.R.HU.), le sigue a Rogelio Van Horn, Bernardo Avila del Cid y Adelicia Fernández.

Mediante el auto de 4 de enero de 1999 fue admitido el presente incidente de nulidad, se le corrió traslado del mismo al Juez Ejecutor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (I.F.A.R.HU.) e igualmente a la Procuradora de la Administración.

El licenciado Carrasco Moreno sustentó el incidente de nulidad en los siguientes términos:

> Primero: El Juzgado Ejecutor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, promovió Proceso Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva en Contra de ROGELIO VAN HORN, BERNARDO AVILA DEL CID y ADELICIA FERNANDEZ, hasta la concurrencia de TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN BALBOAS CON 36/100, para lo que dictó el Auto Ejecutivo de 24 de abril de 1990.
>
> Segundo: El auto en mención se nutre de los documentos que categoriza como títulos ejecutivos a saber:
>
> 1) El contrato de préstamo celebrado entre la institución ejecutante y el Señor ROGELIO VAN HORN AVILA.
> 2) Pagaré
> 3) Letra de Cambio.
>
> Tercero: Válidos de la existencia de los supuestos títulos ejecutivos, que dieron pie al proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva discutido, se han secuestrado bienes de propiedad de mi representado, causándole enormes perjuicios.
>
> Cuarto: Se indica en el Auto Ejecutivo que: "Como quiera que de conformidad con lo establecido en el artículo 1083 en concordancia con el artículo 1639 del Código Judicial el Contrato de Préstamo, la letra de cambio y el pagaré que reposan en el expediente, prestan mérito ejecutivo...", se procedió a librar mandamiento de pago contra el deudor y los codeudores, en base a los antedichos documentos.
>
> Quinto: Los documentos que prestan mérito ejecutivo deben reunir una serie de requisitos, que no cumplen los indicados en el auto ejecutivo meritado, y que pasamos a analizar:
>
> A) El Contrato De Préstamo no contiene ninguna obligación que pueda ser exigible por la Vía Ejecutiva. No consta ninguna suma líquida exigible, en los términos del contrato traído como recaudo ejecutivo. Por el contrario, remite a los contratantes a suscribir documentos negociables alternos que sirvan como recaudo ejecutivo.
>
> B) El Pagaré: Este documento no contiene cantidad líquida o liquidable alguna en su texto, por el contrario, es un documento que está en blanco en lo relativo al número de pagaré, identificación de los firmantes, fecha, cantidad, etc., y como tal no es útil como documento ejecutivo.
>
> C) La Letra de Cambio. Al igual que el anterior, este documento está en blanco, por lo que le caben los mismos comentarios que hicimos respecto al pagaré, además, solo está firmado por ROGELIO VAN HORN, lo que lo hace inoponible a los otros demandados.
>
> SEXTO: El Artículo 1640 del Código Judicial, determina como se configura un documento ejecutivo. Dicho en otras palabras, que

formalidades debe contener el mismo para servir como recaudo ejecutivo, y estas son:

"ARTICULO 1640: Los artículos especificados en las disposiciones anteriores se rigen por las siguientes reglas:

1. ...
2. Los documentos especificados no prestan mérito ejecutivo, sino cuando de ellos resulte una obligación clara y de plazo cumplido, de pagar una cantidad líquida o liquidable o de entregar, hacer o dejar de hacer alguna cosa.

Entiéndese por cantidad líquida la expresada en una cifra numérica precisa, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas; pero no tienen carácter de indeterminado los intereses de un capital líquido aunque no estén liquidados, ni aquellas cantidades determinables mediante operaciones aritméticas que el título suministre."

Evidentemente, el contrato de préstamo no establece la existencia de una obligación líquida, que pudiera ser reclamada por esta vía, toda vez que el mismo en su cláusula Décimo Cuarta, remite a la suscripción de documentos privados para hacer exigible el pago de la cantidad contentiva en los mismos, por la vía ejecutiva.

Del pagaré no resulta ninguna obligación clara exigible y de plazo cumplido, ya que adolece de una cantidad líquida, de un término fatal que se haya producido, y que intime el pago de una determinada cantidad, sencillamente porque el documento está en blanco. Igual circunstancia sucede con la Letra de Cambio, que también está en blanco.

SEPTIMO: El Juzgado Ejecutor del Instituto Para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, carece de jurisdicción para promover Proceso Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva en la presente causa por lo siguiente:

1) El artículo 1083 del Código Judicial establece de manera específica que documentos prestan mérito ejecutivo para ejercer la Jurisdicción Coactiva, y en cuanto a lo tocante a este proceso establece que los documentos privados deben reunir los requisitos de formalidad necesarios para adquirir esa categoría de documento ejecutivo. De esa guisa, debemos entender que si no reúnen dichos requisitos no prestan mérito ejecutivo, por consiguiente no pueden ser utilizados como recaudo en procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva, toda vez que esta jurisdicción solo puede ser ejercida si la institución ejecutora cuenta con títulos válidos a la luz de las normas positivas que regulan la materia.

OCTAVO: De no contar con documentos ejecutivos válidos, la institución debió escoger la vía jurisdiccional ordinaria, para demostrar la existencia de la obligación que reclama y la cuantía de la misma, que indebidamente reclama por esta vía.

NOVENO: El artículo 722 del Código Judicial establece como causal de nulidad, la de distinta jurisdicción, que puede ser alegada como incidente, inclusive puede ser decretada por el Juez, de oficio, al momento que la advirtiera.

DECIMO: Esta causal de nulidad, de carácter absoluto e insubsanable, es común a todos los procesos por lo que la misma es aplicable a la Jurisdicción Coactiva a cargo de las entidades públicas que cuenten con ese ejercicio; y a pesar de haberse invocado en tiempo oportuno, puede pedirse en cualquier etapa del proceso.

Por su parte, la apoderada judicial del Instituto Panameño para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos se opone a la petición del incidentista, por considerar que no existe la causal invocada.

La Procuradora de la Administración, mediante la Vista No.32 de 3 de febrero de 1999, le solicitó a la Sala que declare probado el presente incidente de nulidad, toda vez que el Instituto Panameño para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos no puede realizar el cobro de las sumas adeudadas al señor Benerando Avila, quien funge como codeudor del contrato de préstamo educativo, utilizando el pagaré y las letras de cambio, los cuales fueron firmados en blanco por el señor Rogelio Van Horn Avila y no por el incidentista.

Decisión de la Sala:

Una vez evacuados los trámites legales, la Sala procede a resolver la presente controversia.

Mediante resolución de 30 de abril de 1999 la Sala Tercera confirmó el auto de 24 de abril de 1990, emitido por el Juez Ejecutor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos de Recursos Humanos (I.F.A.R.HU.), por medio del cual se libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra Rogelio A. Van Horn Avila, Adelicia Fernández y Berando Avila Del Cid y a favor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos de Recursos Humanos (I.F.A.R.HU.). En dicha resolución se señaló que el contrato de préstamo, la letra de cambio, el pagaré y, adicionalmente, la certificación de deuda debidamente emitida por la institución que acredita la existencia de una obligación líquida y exigible, prestan mérito ejecutivo para reclamar el cumplimiento de la obligación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, lo procedente es declarar no probado el presente incidente de nulidad, pues en resolución citada se indicó que los documentos que el incidentista señala que no prestan mérito, sí son documentos que prestan mérito ejecutivo.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADO el incidente de nulidad interpuesto por el licenciado Luis Antonio Carrasco Moreno, en representación de BENERANDO AVILA DEL CID, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (I.F.A.R.HU.), le sigue a Rogelio Van Horn, Bernardo Avila del Cid y Adelicia Fernández.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCION DE PRESCRIPCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. RITO TORRES, EN REPRESENTACIÓN DE MOISES FORERO CASTILLO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Rito Torres, actuando en nombre y representación de MOISES FORERO CASTILLO, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema

excepción de prescripción dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

El licenciado Torres fundamenta la excepción de prescripción de la siguiente forma:

> "PRIMERO: Que el señor MOISES ANIBAL FORERO con número de contribuyente 01-1984-1429, quien ejercía labores de Fumigación por lo que el Contribuyente de cerro (sic) operaciones de la actividad como persona Natural, a partir del 31 de junio de 1988.
>
> SEGUNDO: Que de acuerdo a la fecha han transcurrido 7 (siete años), de (sic) que mi representado no se dedica ha (sic) dicha actividad por lo que no ha gravado impuesto municipal, por lo que debe declararse la prescripción extintiva de la Obligación según lo dispuesto en los artículos 96 y 134 de la ley 106 de 1973, reformada por la ley 52 de 1984; artículo 737 del Código Fiscal y artículo 93 del Código de Comercio.
>
> TERCERO: Que por las consideraciones antes expuestas es por lo que solicitamos se declare la prescripción extintiva del Impuesto Municipal causado. Toda vez que está prescrita a favor del Contribuyente."

Mediante auto de 19 de julio de 1999 se admitió la presente excepción de prescripción y se corrió traslado de la misma tanto al Juez Ejecutor del Municipio de Panamá como a la Procuradora de la Administración.

La Procuradora de la Administración por medio de la Vista No.383 de 9 de agosto de 1999 le solicitó a los Magistrados de la Sala Tercera que declaren probada parcialmente la excepción de prescripción, toda vez que los impuestos que corresponden a los años 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, hasta el 1° de julio de 1995, se encuentran prescritos por haber transcurrido más de cinco (5) años desde que se causó el impuesto, hasta la fecha en que se expidió el auto que libra mandamiento de pago.

Decisión de la Sala:

Una vez cumplidos los trámite que a ley corresponden, la Sala procede a resolver la presente controversia.

Observa la Sala que por medio del auto de 2 de julio de 1999 (f.7 del expediente contentivo del proceso ejecutivo), el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá libra mandamiento de pago contra el señor Moisés Aníbal Forero Castillo, hasta la concurrencia de seis mil ochocientos treinta y cinco balboas con noventa centésimos (B/.1,835.90). Dicho auto le fue notificado al señor Moisés Aníbal Forero Castillo, mediante la diligencia de notificación el día 5 de julio de 1999.

Sirvió de recaudo ejecutivo el estado de cuenta, fechado el 1 de julio de 1999, correspondiente desde el mes de julio de 1987 hasta el mes de enero de 1995, visible de foja 1 a 4 del expediente.

Cabe señalar que no consta en el expediente que el contribuyente hubiera cumplido con la obligación de notificar por escrito al Tesorero Municipal del cese en sus operaciones, tal como lo preceptúa el artículo 86 de la Ley 106 de 1973, por lo que deberá pagar los impuestos por todo el tiempo de esta omisión.

Del estudio del expediente, la Sala coincide con los argumentos expuestos por la Procuradora de la Administración, toda vez que se observa claramente que le ha prescrito la acción al Municipio de Panamá para cobrar parte de los tributos adeudados por la Moisés Aníbal Forero Castillo, tal como se infiere de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 106 de 1973 que establece que la

prescripción para el pago de impuestos municipales es de cinco años los cuales se computan desde que se causa la obligación. Esto es así, pues de las constancias procesales se advierte que desde el mes de julio de 1988 hasta la fecha en que se dicta el auto que libra mandamiento de pago, el 2 de julio de 1999, ha transcurrido más del término previsto en la disposición en referencia. Por lo tanto, se ha producido la prescripción alegada en relación a los impuestos municipales causados desde el mes de julio de 1988 hasta el mes de julio de 1994.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PROBADA la excepción de prescripción sólo en cuanto a los impuestos municipales comprendidos entre los meses de julio de 1988 hasta julio de 1994.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ANÍBAL HERRERA PEÑA, EN REPRESENTACIÓN DE FRANCO SALGADO LASSO, CONTRA LA SENTENCIA DE 2 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: FRANCO SALGADO LASSO -VS- SEGURIDAD UNIDAD,S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Aníbal Herrera Peña, actuando en representación de FRANCO SALGADO LASSO, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 2 de julio de 1999, dentro del proceso laboral promovido por el FRANCO SALGADO LASSO -VS- SEGURIDAD UNIDA,S. A.

El casacionista persigue con este recurso que la Sala revoque la sentencia recurrida y, en su lugar, condene a la empresa demandada a todas las pretensiones de la demanda.

La parte demandada no presentó escrito de oposición al recurso de casación laboral.

Se trata de un proceso común de trabajo en el cual el demandante pide que la parte demandada sea condenada a pagarle la suma de B/.7,443.22 en concepto de horas extras, más intereses, recargos, costas y gastos del proceso. El juzgador de primera instancia absolvió a la demandada y el Tribunal Superior de Trabajo confirmó dicha sentencia.

La Sala pasa a examinar los cargos que se formulan a la sentencia recurrida en el recurso de casación.

El actor señala que la sentencia de segunda instancia ha infringido los artículos 33, 34, 37 y 812 del Código de Trabajo.

Analizaremos de forma conjunta los artículos 33, 34 y 37, toda vez que mantienen un fundamento común, consistente en que el trabajador aportó pruebas documentales y testimoniales en relación a las horas extras laboradas y no pagadas por la demandada y que estos derechos adquiridos no le han sido

reconocidos.

El recurrente sostiene que la sentencia por él impugnada ha infringido las normas citadas, toda vez que el trabajador Salgado Lasso permaneció a disposición del empleador durante días feriados, domingos, días de descanso y durante el exceso de horas extras laboradas diariamente, sin que éstas le fueran pagadas y el Tribunal Superior de Trabajo no le reconoció al trabajador estos derechos adquiridos. Además, sostiene el actor que fueron aportadas pruebas documentales como los registros de horas extras laboradas y pruebas testimoniales, sin ser reconocidos en la sentencia de segundo grado.

El Tribunal Superior de Trabajo concluyó que no existía en el expediente prueba válida alguna de que el trabajador demandante hubiera laborado las jornadas extraordinarias a las que alude en su demanda, toda vez que "la prueba presentada por el actor consiste en un listado a manuscrito que no contiene firma alguna, por lo que no tiene o carece de valor probatorio en ese sentido, ya que incluso se desconoce su procedencia y más bien son las anotaciones hechas por el propio trabajador demandante" (Cfr. fojas 107 y 108).

La Sala coincide con el criterio vertido por el juzgador de segundo grado, pues, esa ha sido nuestra posición al respecto, "en el sentido de que la prueba sobre el trabajo en horas extras debe ser precisa, determinada y concreta, incumbiendo la carga de la prueba a la parte que afirma la existencia de hechos (artículo 735 del Código de Trabajo) como fundamento de su acción o excepción y no requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos o reconocidos por la contraria. Como en el presente caso no hay presunción legal a favor del trabajador que lo exima de la carga de la prueba, le corresponde a éste comprobar que, efectivamente, laboró horas extraordinarias (Cfr. sentencias de 8 de febrero de 1994, 30 de diciembre de 1994 y 28 de abril de 2000).

En ese sentido, las horas extras, supuestamente laboradas, no constituyen un derecho adquirido, razón por la cual no le compete al empleador comprobar que fueron o no trabajadas y pagadas.

Dentro de este contexto, observa la Sala que el trabajador no aportó material probatorio idóneo a la luz de lo dispuesto por nuestro ordenamiento laboral, pues se limitó a aportar un manuscrito que no contiene firma y que carece de todo valor probatorio, pues se limita a describir en una columna el día del mes y al lado, en otra columna, las horas trabajadas. A todas luces, esto no reúne los requisitos de un registro de asistencia de entradas y salidas de un trabajo, pues no nos dice a qué hora entró y a qué hora salió el trabajador de su jornada de trabajo, el que a su vez debe contener su firma.

Se colige entonces, que no se ha acreditado en el proceso las horas extras trabajadas y que las mismas no hayan sido canceladas, toda vez que el documento presentado como prueba por el trabajador no reúne los requisitos para que su ponderación sea válida.

La Sala ha sido constante en señalar, que si bien es cierto, que le corresponde a la empresa demandada probar que ha pagado los salarios reclamados por tener en su poder los elementos necesarios para tal probanza, como lo son las planillas, recibos, etc., no es menos cierto que dicho criterio sólo puede ser aplicable al pago de jornadas ordinarias, pero tratándose de horas extras corresponde al trabajador probar en forma concreta y específica haberlas trabajado, para tener derecho a su cobro. En el caso in examine no se ha presentado prueba en concreto para probar que se ha trabajado las horas extras reclamadas.

Dentro de este contexto la Sala estima que la decisión del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial fue conforme a derecho, por lo tanto, no ha transgredido las normas citadas, y como consecuencia, no proceden los cargos.

Afirma el casacionista que el Tribunal Superior de Trabajo ha infringido el artículo 812 del Código de Trabajo, "ya que es testimonio brindado en el proceso por el señor Erónides Pérez Montenegro fue rendido con pleno conocimiento de los hechos, en virtud de que éste laboró con el señor Salgado y presenció las veces en que el demandante laboraba en días domingos, días feriados y horas extras diarias" (Cfr. foja 5).

Al respecto, el Tribunal Superior de Trabajo manifestó que en lo atinente al único testigo llevado a la audiencia, Sr. Erónide Pérez Montenegro, "no existe tampoco una determinación clara de cuál es el número de las horas extras, supuestamente laboradas y ha sido reiterado, por este Tribunal, que las mismas no pueden reconocerse a base de meras deducciones o estimaciones globales y teóricas, sino de forma específica y concreta. En todo caso, según la primera parte del artículo 812 del Código de Trabajo, un testigo no puede formar por sí solo plena prueba" (Cfr. foja 108).

Compartimos plenamente el criterio expuesto por el juzgador de segundo grado, pues, las declaraciones del Sr. Pérez Montenegro hacen referencia a que la empresa nunca le pagó a él ni al señor Salgado las horas extras y que ambos laboraban horas extras, su testimonio no presta mérito suficiente para demostrar que en efecto se laboraron horas extras y que éstas no fueron canceladas.

Al respecto, el artículo 812 del Código de Trabajo establece lo siguiente:

> "Artículo 812: Un testigo no puede formar por sí solo plena prueba, pero sí gran presunción cuando es hábil. No obstante, se tendrá por prueba suficiente cuando, a juicio del juzgador, declare con absoluta sinceridad y pleno conocimiento de los hechos, según las circunstancias especiales del caso."

No obstante lo anterior, "la razón que indujo al Legislador el permitir el testigo único estribó en que, en virtud del conjunto de presunciones que amparaban al trabajador, se consideró que, para establecer un equilibrio, debía reconocérsele pleno valor- siempre, que mediante las reglas de la sana crítica, se le atribuye fuerza de convicción" (Fábrega, Jorge.Medios de Prueba, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1997, pág.192).

La Sala ha expresado en múltiples ocasiones que es el examen lógico-crítico lo que debe imponerse ante la apreciación de las pruebas en autos, examen que conduzca en forma razonable a determinar -conforme el grado de credulidad que le ofrezcan las pruebas, esencialmente testimoniales- la verdad real de los hechos materia de la controversia.

Ante este escenario jurídico, la Sala estima que no se ha producido la violación del artículo invocado, toda vez que el juzgador de segundo grado falló conforme a derecho, razón por la cual, se desestima el cargo endilgado.

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 2 de julio de 1999, dentro del proceso laboral promovido por el FRANCO SALGADO LASSO -VS- SEGURIDAD UNIDA,S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RAMIRO GUERRA EN

REPRESENTACIÓN DE SONIA CARABALLO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 15 DE MAYO DE 2000 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: YANNUS S. A. V. S. SONIA CARABALLO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ramiro Guerra, actuando en representación de SONIA CARABALLO, ha interpuesto Recurso de Casación Laboral contra la Sentencia de 15 de mayo de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del Proceso Laboral propuesto por YANNUS S. A. contra SONIA CARABALLO.

Vencido el término del emplazamiento al que se refiere el artículo 927 del Código de Trabajo, la Sala procede a analizar el presente recurso a objeto de determinar si el mismo ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley.

Conforme lo ordena el artículo 927 ibidem, el recurso de casación laboral debe interponerse dentro de los cinco días siguientes al en que fue notificada la Resolución del Tribunal Superior de Trabajo, directamente ante la Corte de Casación Laboral.

Como consta en autos, el fallo impugnado fue notificado por medio de edicto que se desfijó el 17 de mayo de 2000. Siendo lo anterior así, el término de interposición del recurso venció el 24 de mayo del mismo año, y no fue sino hasta el 25 de mayo de 2000 cuando el apoderado de SONIA CARABALLO lo interpuso ante la Secretaría de esta Sala.

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera-Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO, por extemporáneo, el recurso de casación laboral propuesto por el licenciado Ramiro Guerra, en representación de SONIA CARABALLO, contra la Sentencia de 15 de mayo de 2000, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral promovido por YANNUS S. A. contra SONIA CARABALLO.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ROSAURA REYES EN REPRESENTACIÓN DEL ASENTAMIENTO CAMPESINO 11 DE OCTUBRE, CONTRA LA SENTENCIA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ARISTIDES CASTILLO Y OTROS -VS- ASENTAMIENTO CAMPESINO 11 DE OCTUBRE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

La licenciada ROSAURA REYES, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 1 de septiembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del proceso laboral promovido por ARISTIDES CASTILLO Y OTROS -VS- ASENTAMIENTO CAMPESINO 11 DE OCTUBRE.

El casacionista persigue con este recurso que la Sala revoque la sentencia

recurrida y se absuelva al Asentamiento 11 de octubre de la condena establecida en la misma.

La parte demandada presentó oposición al recurso de casación por considerar, entre otras cosas, que el mismo es dilatorio y que atenta contra los derechos, garantías y vida de los trabajadores.

Se trata de un proceso común (acumulación) en el cual los demandantes reclaman a la demandada el pago de vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad, más los intereses, recargos, costas y gastos del proceso. El juzgador de primera instancia declaró probada la excepción de pago de las vacaciones y décimo tercer mes de forma parcial; condenó a la demandada al pago de B/.2,528.19 en concepto de vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad, y la absolvió de las reclamaciones de vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad posteriores al mes de septiembre de 1997. El juzgador de segundo grado reformó la sentencia y condenó a la demandada al pago de B/.2,490.69 en concepto de vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad.

La Sala pasa a analizar los cargos que se le imputan a la sentencia de segundo grado.

El actor señala que la sentencia recurrida ha infringido los artículos 730 y 732 del Código de Trabajo.

Observa la Sala que el recurrente señala que se han transgredido los artículos citados toda vez que, a su juicio, existió error en la apreciación de las pruebas aportadas, tanto testimoniales como documentales.

En ese sentido, esta Corporación de Justicia considera que las infracciones señaladas no proceden puesto que no han sido formuladas en relación con una norma de carácter sustancial o material que consagre un derecho a favor del trabajador. Además, la Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que el recurso de casación no es una tercera instancia y que este recurso en materia laboral sólo procede para corregir errores in judicando en que haya incurrido el juzgador de segundo grado, pero que dicho cargo no procede al tratarse de la valoración de pruebas según la sana crítica que le dé el juzgador, como el que se endilga en este caso a la sentencia recurrida, si no está acompañado con infracciones a una norma sustancial o material.

Se colige entonces que sólo en ocasiones excepcionales la Sala puede entrar a juzgar la valoración que el juez le dé a las pruebas, y es en los casos en que dicho tribunal haya incurrido en un error manifiesto, un error que salte a la vista sin mayor dificultad, o haya infringido la regla de la sana crítica basado en un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o al contrario.

"Las normas adjetivas que tratan sobre pruebas, valoración de pruebas y presunciones pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En ese sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquéllas han sido violentadas. Esto significa que el Tribunal de Casación conoce sólo de errores in judicando y no de errores in procedendo " (Cfr. Sentencias de 18 de abril de 1996, 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994).

Cuando la acusación se sustenta exclusivamente en normas de carácter adjetivo, como en el caso bajo estudio, el cargo o los cargos endilgados quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, ya que así lo dispone el párrafo final del artículo 928 del Código de Trabajo. Esta disposición es del tenor siguiente:

"ARTICULO 928: Recibido el expediente, el Tribunal de Casación

Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando en el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales".

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación laboral interpuesto por la licenciada Rosaura Reyes contra la sentencia de 1 de septiembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del proceso laboral promovido por ARISTIDES CASTILLO Y OTROS -VS- ASENTAMIENTO CAMPESINO 11 DE OCTUBRE.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SIXTO ABREGO EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO SILVERA, CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE AGOSTO DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ALBERTO SILVERA -VS- ASEGURADORA MUNDIAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El Lcdo. Sixto Abrego Camaño, actuando en representación del señor ALBERTO SILVERA, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 30 de agosto de 1999, dentro del proceso laboral promovido por el señor ALBERTO SILVERA -VS- ASEGURADORA MUNDIAL, S. A.

Se trata de un proceso laboral promovido por el señor Silvera contra la mencionada empresa a fin de que ésta sea condenada a pagar la suma de B/.68,853.36 que comprende salarios básicos adeudados, vacaciones vencidas y proporcionales adeudadas, décimos terceros meses vencidos y proporcionales adeudados, más los recargos, intereses, gastos y costas del proceso.

El juzgador de primera instancia declaró probada la excepción de inexistencia de la relación laboral y como consecuencia absolvió a la demandada de los cargos presentados en la demanda, y el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial confirmó dicha decisión.

El Lcdo. Luis Shirley, de la firma Shirley y Asociados, se opuso, como apoderado judicial especial de la empresa demandada al recurso de casación pues afirma que entre el arquitecto Silvera y la sociedad Aseguradora Mundial,S. A., no existió relación de trabajo.

La Sala pasa a examinar los cargos que se le endilgan a la sentencia de segundo grado.

El casacionista sostiene que la sentencia por él impugnada ha infringido los artículos 62, 65, y 242 del Código de Trabajo.

La Sala pasa a examinar lo atinente a la infracción del artículo 242 del Código de Trabajo, ya que de su existencia depende que se hayan producido o no el resto de las infracciones aducidas en el recurso de casación.

La parte actora estima que la norma citada ha sido transgredida, pues, "antes del 13 de agosto de 1995, era menester que concurriera en su caso particular, todas y cada una de las circunstancias que allí se disponen...significa que en la medida que se demostrara que entre un corredor de seguros y la compañía demandada existió claramente uno de los elementos de la relación de trabajo, tenía que reconocerse la existencia de dicha relación legalmente...Uno de dichos elementos es la dependencia económica, de tal manera que aún cuando no hubiera horario, ni tarjetas, ni se demostrara la dependencia económica había relación de trabajo".

El Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial determinó que no existió relación de trabajo entre el demandante y la empresa demandada, entre otras cosas, porque "el demandante Alberto Silvera Gómez si bien colocó pólizas de la empresa demandada, no es menos cierto que también hubo de haber realizado este trabajo para otras empresas aseguradoras tal cual se desprende del caudal probatorio visible a foja 56 (Certificación de la Superintendencia de Seguros) donde aparecen las empresas para las cuales colocó pólizas el señor Silvera Gómez. Igualmente, a foja 57 del infolio se observa certificación de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Panamá donde consta una serie de planos en los cuales aparece como arquitecto responsable el demandante, lo cual indica que el señor Silvera ejercía paralelamente la profesión de arquitecto y corredor de seguros por lo que desvirtúa el elemento de dependencia económica que caracteriza una relación laboral" (Cfr. foja 80).

Considera la Sala que el razonamiento del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial en el caso in examine se ajusta a derecho, toda vez que resulta palmario que no existía relación de trabajo pues el demandante prestó sus servicios sin control, sin supervisión ni horario de asistencia y el mismo colocaba pólizas para varias compañías aseguradoras, tal como se desprende del documento que obra a foja 56 y además, consta a foja 57 nota suscrita por el Director de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, de la que se colige que el arquitecto Silvera fue responsable de ciertos planos en calidad de arquitecto.

Estos hechos evidencian que no hubo dependencia económica entre las partes, toda vez que quedó demostrado que los honorarios profesionales recibidos por el señor Silvera no constituían su única o principal fuente de ingresos, es decir, que el demandante no se encuentra vinculado económicamente al giro de actividad que desarrolla la empresa.

Dentro de este contexto, se presentaron declaraciones de testigos que afirman que el arquitecto Silvera no estaba sujeto a horario de trabajo, no marcaba reloj, ni tenía control de asistencia (Cfr. fojas 37, 40 y 43).

Esta Sala ha reiterado en múltiples ocasiones que un corredor de seguros que percibe comisiones de múltiples compañías de seguros, además de la empresa demandada, y que al equiparar las sumas percibidas tanto por la compañía de seguros demandada como por las otras compañías, no se puede concluir que el demandante dependía económicamente de la compañía demandada. (Cfr. sentencias de 4 de abril de 2000, 7 de enero de 1991 y 30 de septiembre de 1983).

Ante este escenario jurídico, la Sala arriba a la conclusión de que no existía relación de trabajo entre el demandante y la demandada, ya que no reúne los requisitos del artículo 62 del Código de Trabajo, por lo tanto, la sentencia de segunda instancia no ha infringido el artículo 242 del Código de Trabajo. La Sala considera que no es necesario entrar a examinar los otros cargos.

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 30 de agosto de 1999, dentro del proceso laboral promovido por el señor ALBERTO SILVERA -VS- ASEGURADORA MUNDIAL, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ALVARO MUÑOZ FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ANTONIO AGUIRRE, CONTRA LA SENTENCIA DE 23 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CARLOS ANTONIO AGUIRRE VS CHIRIQUÍ LAND COMPANY Y/O PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alvaro Muñoz Fuentes, actuando en representación de CARLOS ANTONIO AGUIRRE, ha interpuesto Recurso de Casación Laboral contra la Sentencia de 23 de mayo de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral propuesto por CARLOS ANTONIO AGUIRRE contra CHIRIQUÍ LAND COMPANY Y/O PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY.

Vencido el término del emplazamiento al que se refiere el artículo 927 del Código de Trabajo, la Sala procede a analizar el presente recurso a objeto de determinar si el mismo ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley.

Conforme lo ordena el artículo 927 ibidem, el recurso de casación laboral debe interponerse dentro de los cinco días siguientes al en que fue notificada la Resolución del Tribunal Superior de Trabajo, directamente ante la Corte de Casación Laboral.

Como consta en autos (Ver foja 651 del antecedente), el fallo impugnado fue notificado por medio de edicto que se desfijó el 26 de mayo de 2000. Siendo lo anterior así, el término de interposición del recurso venció el 2 de junio del mismo año, y no fue sino hasta el 5 de junio de 2000 cuando el apoderado de CARLOS ANTONIO AGUIRRE lo interpuso ante la Secretaría de esta Sala.

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera-Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO, por extemporáneo, el recurso de casación laboral propuesto por el licenciado Alvaro Muñoz Fuentes, en representación de CARLOS ANTONIO AGUIRRE, contra la Sentencia de 23 de mayo de 2000, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del proceso laboral promovido por CARLOS ANTONIO AGUIRRE contra CHIRIQUÍ LAND COMPANY Y/O PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL INTERPUESTO POR EL LICDO. CANDELARIO SANTANA VASQUEZ EN REPRESENTACION DE ARNOLD ELOY VASQUEZ CONTRA LA RESOLUCION DEL 29 DE MAYO DE 2000, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ARNOLD ELOY VASQUEZ VS PARTES DIESEL S.

A. Y/O TALLER DIESEL S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Candelario Santana, actuando en su calidad de apoderado judicial de ARNOLDO ELOY VASQUEZ, ha presentado recurso de Casación Laboral contra la Sentencia de 29 mayo de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: ARNOLDO ELOY VASQUEZ -vs- PARTES DIESEL S. A., Y/0 TALLER DIESEL S. A.

Por recibido el recurso, se emplazó a la parte deman-dada para que hiciera valer sus objeciones conforme lo prevé el artículo 927 del Código de Trabajo, sin que en el término de ley hubiese comparecido al proceso.

I. ANTECEDENTES

El negocio laboral tiene su génesis en un proceso común presentado por el trabajador ARNOLDO VASQUEZ contra las empresas PARTES DIESEL S. A., Y/0 TALLER DIESEL S. A., a fin de que éstas fuesen condenadas a pagarle Ajustes de Prestaciones Laborales e Indemnización por Despido Injustificado.

Las razones de la renuncia consistieron en el supuesto desmejoramiento de las condiciones de trabajo del señor VÁSQUEZ, quien no estaba recibiendo comisiones por viajes al interior de la República (al haberse suspendido dichos viajes), y en el maltrato de hecho y de palabra a que alegadamente había sido sometido el trabajador.

Según señalara la parte actora, las empresas demanda-das, al aceptar la renuncia, liquidaron sus prestaciones sobre el cálculo de su salario base de B/.600.00 mensuales, sin contar las comisiones que elevaban su ingreso mensual a B/. 1,400.00. Por ende la cuantía reclamada era de B/. 17,924.03.

El Juzgado Cuarto de Trabajo que conoció en primera instancia del negocio laboral, expidió la Sentencia No.29 de 2 de julio de 1998, absolviendo a las empresas demandadas, al señalar por una parte, que no existía ninguna prueba que vinculara a ARNOLDO VASQUEZ con la empresa TALLER DIESEL S. A., y que en lo que respecta a PARTES DIESEL S. A., ésta no adeudaba suma alguna al trabajador, toda vez que en el curso del proceso laboral se demostró que ARNOLDO VASQUEZ no ganaba comisiones, sino que tenía un salario base de B/.600.00 sobre el cual fueron correctamente calculadas lass prestaciones del trabajador.

II. SENTENCIA IMPUGNADA ANTE LA SALA DE CASACION LABORAL

Apelada la sentencia del Juzgado Cuarto Seccional de Trabajo ante el Tribunal Superior de Trabajo, éste examinó la decisión proferida por el juzgador A-quo, así como los elementos en que ésta se apoyaba, arribando a la conclusión de que la sentencia expedida era conforme a derecho.

En este contexto expresó, mediante sentencia de 29 de mayo del 2000, que si bien debía reconocerse la existencia de unidad económica entre las empresas demandadas PARTES DIESEL y TALLER DIESEL, el material probatorio que reposaba en autos no era indicativo de que el trabajador devengara salario de B/.1,400.00 mensuales -como aducía en su demanda-, fundamentalmente porque:

1- los comprobantes de pago efectuados al trabajador evidencian que el señor VASQUEZ recibía viáticos por sus ocasionales viajes al interior y no comisiones;

2- en inspección ocular a los libros de la empresa PARTES DIESEL S. A., se constató que el salario mensual que devengaba ARNOLDO VASQUEZ era efectivamente de B/.600.00 mensuales; y

3- testimonios aducidos y otros elementos de convicción allegados al proceso permitían apreciar que contrario a lo esbozado por el trabajador, quien se decía víctima de injurias y maltrato por parte del empleador, existía en realidad una relación laboral basada en la confianza, respeto y cooperación mutua, destacándose que incluso el trabajador recibía préstamos de la empresa, que se los otorgaba sin pago de intereses de ningún tipo, a fin de que el señor VASQUEZ hiciera frente a compromisos de índole personal.

Concluyó el Tribunal Superior de Trabajo que era al demandante a quien correspondía probar la veracidad de sus afirmaciones, y que las constancias procesales que obraban en autos no tenían aquella virtud, razón por la cual era procedente la absolución de las empresas demandadas, confirmando la sentencia laboral de primera instancia.

III. CARGOS PRESENTADOS POR EL CASACIONISTA

El casacionista sustenta su pretensión aduciendo que la sentencia impugnada resulta violatoria de los artículos 740; 788; 812; 843 y 851 del Código de Trabajo.

Por la estrecha vinculación de las normas aducidas, que en su mayoría versan sobre el tema de la valoración probatoria y de la sana crítica, el Tribunal procede a esquematizar las violaciones alegadas, de la siguiente manera:

1- La violación del artículo 740 del Código de Trabajo

El artículo 740 del Código de Trabajo establece la facultad y el deber que tiene el juez de practicar de manera oficiosa, todas las pruebas que estime procedentes para verificar las afirmaciones de las partes.

Se dice violado, en virtud de que el Tribunal Superior no ordenó la práctica de pruebas para aclarar puntos oscuros o dudosos del proceso, como lo sería determinar si los pagos realizados al trabajador eran realmente viáticos o comisiones.

2. La violación del artículo 788 del Código de Trabajo

El artículo 788 establece la forma en que el Juez apreciará documentos contradictorios: en concordancia con las otras pruebas del proceso y con base al sistema de sana crítica.

Se aduce infringido, porque según el actor se valoró indebidamente un documento elaborado el 24 de octubre de 1996 por un Inspector de Trabajo, que alude a "comisiones" del señor ARNOLDO VÁSQUEZ.

3. La violación del artículo 812 del Código de Trabajo.

El artículo 812 del Código de Trabajo establece que un solo testigo no constituye plena prueba, pero que se tendrá por suficiente cuando a juicio del juzgador declare con absoluta sinceridad y pleno conocimiento de los hechos.

Según el casacionista, la norma en cita fue violada de manera directa, al no apreciarse debidamente una de las pruebas testimoniales presentadas por el trabajador en el proceso.

4. La violación de los artículos 843 y 851 del Código de Trabajo

El artículo 843 del Código de Trabajo contiene la previsión de que las inspecciones judiciales pueden realizarse con la asistencia de un testigo, excepto que se requieran conocimientos especiales (prácticos, científicos etc.) para realizar la diligencia, en cuyo caso se designarán peritos. Por su parte, el artículo 851 ibídem establece que la inspección judicial se verificará por medio de acción exhibitoria cuando recaiga sobre libros y documentos de comercio

de la parte contraria a la que aduce la prueba.

Señala el recurrente, que el artículo 843 del Código de Trabajo fue indebidamente aplicado, toda vez que en lugar de designarse un perito, el Juez solicitó al Ministerio de Trabajo que un Inspector de Trabajo fuese a la empresa a examinar las planillas y demás documentos contables, lo que hace que la inspección tomada como prueba fuese deficiente.

En este mismo contexto se alega la supuesta violación del artículo 851 del Código de Trabajo, al no haberse realizado diligencia exhibitoria sobre los libros de las empresas demandadas, sino inspección ocular por un inspector del Ministerio de Trabajo.

IV. DECISION DEL TRIBUNAL DE CASACION

Al examinar los cargos presentados el Tribunal se per-cata de inmediato, que el casacionista ha fundado su recurso en la supuesta violación de normas procesales relacionadas con la valoración probatoria.

En efecto, esta Superioridad advierte que los artículos 740, 788, 812 y 843 del Código de Trabajo que se aluden infringidos, se encuentran todos relacionados con el tema de la valoración probatoria y la facultad del juez de practicar las pruebas que estime procedentes, para desatar la controversia. De otra parte, la acusada transgresión del artículo 851 del Código de Trabajo radica en que supuestamente no se cumplió el procedimiento establecido a fin de realizar una inspección judicial.

En este contexto se hace necesario reiterar, que la jurisprudencia de esta Máxima Corporación Judicial ha sido constante y uniforme, al señalar que la actividad de apreciación de pruebas que adelante el juzgador laboral con base al sistema de sana crítica, no es susceptible de reparo por el Tribunal de Casación excepto que se haya incurrido en un error de hecho en la valoración de pruebas.

Hemos similarmente insistido, en que el Recurso de Casación no puede estar fundado en la supuesta violación de normas procesales, excepto que éstas se encuentren asociadas con el desconocimiento de un derecho sustancial, lo que no acontece en este caso.

Constatamos que el Tribunal Superior de Trabajo ha valorado el caudal probatorio de manera racional, con arreglo a la ley, la lógica, y la experiencia. La sentencia impugnada claramente destaca además, que fue la parte demandada y no el demandante, quien realizó la gestión probatoria, acreditando por diversos medios (testimoniales, documentales, etc.) que la empresa había cancelado correctamente las prestaciones laborales que correspondían al trabajador ARNOLDO VASQUEZ.

Tampoco se ha desconocido derecho sustancial alguno al trabajador con la realización de la inspección judicial, toda vez que de conformidad con lo solicitado por el propio demandante, se ordenó la evacuación de la prueba de inspección ocular para que por percepción directa a los libros de la empresa se determinara si los emolumentos pagados al trabajador VASQUEZ constituían comisiones o viáticos.

Dicha inspección fue adelantada por un perito en la materia (Auditor del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social), quien cumplió con la diligencia y rindió un informe que consistentemente con los otros elementos probatorios allegados al expediente, evidenciaba que el trabajador no recibía comisiones sino viáticos.

Satisfacen a esta Sala los razonamientos y motivaciones que acompañan la sentencia acusada de ilegal, por cuanto evidencian una valoración congruente y racional del caudal probatorio, que reafirman la aplicación de la Sana Crítica como sistema de apreciación de las pruebas en este proceso laboral. Esta valoración es idónea y no tiene por qué ser cuestionada por esta Sala, pues coincide

con las reglas mínimas que establece el Código de Trabajo en el artículo 732: objetividad, sensatez, y lógica razonable, a fin de otorgarle su justo valor al material probatorio.

Se concluye por lo anterior, que el recurso presentado no cumple con lo dispuesto en el artículo 928 del Código de Trabajo, por lo que debe negársele curso legal.

En consecuencia, la Sala Tercera, CASACIÓN LABORAL, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de Casación Laboral presentado por el licenciado CANDELARIO SANTANA VASQUEZ, actuando en su calidad de apoderado judicial de ARNOLDO ELOY VASQUEZ dentro del proceso laboral ARNOLDO ELOY VASQUEZ -vs- PARTES DIESEL S. A., Y/0 TALLER DIESEL S. A.

Notifiquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTA POR EL LCDO. RICARDO STEVENS EN REPRESENTACIÓN DE WILLIAM TERAN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 2 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: WILLIAM TERAN -VS- YAPELO, S. A. O CLÍNICA EL CARMEN. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (SALA TERCERA). LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Ricardo Stevens, en nombre y representación de WILLIAM TERAN ha propuesto recurso de casación laboral contra la Resolución de 2 de mayo de 2000 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del Proceso laboral: WILLIAM TERAN -vs- YAPELO , S. A. o CLINICA EL CARMEN.

Del recurso se le corrió traslado a la empresa de acuerdo a lo previsto en el artículo 927 del Código de Trabajo, y la misma no hizo uso de su derecho de oposición a este medio de impugnación extraordinario.

ANTECEDENTES DE ESTE RECURSO

La génesis de este recurso de casación descansa en un proceso ordinario en reclamo de salarios por el trabajo en horas extraordinarias, y los días sábados, propuesto por el señor WILLIAM TERAN contra Yapelo, S. A. o Clínica del Carmen. Frente a los hechos de esta acción de Trabajo, el Juez Segundo de Trabajo de la Segunda Sección, por medio de la Sentencia N° 6 de 21 de junio de 1999 decidió condenar a las empresas demandadas al pago de la suma de B/.5,168.40 en concepto de salario por horas extraordinarias laboradas y no pagadas a favor de WILLIAM TERAN.

Disconforme con la decisión del juzgador a-quo, la empresa propuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo.

DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO

El Tribunal Colegiado de Segunda Instancia al conocer de la alzada, emitió la Sentencia de 2 de mayo de 2000 por medio de la cual revocó la Decisión del Juez a-quo considerando lo siguiente:

"Como puede apreciarse del informe pericial, el Dr. Terán no marcaba tarjetas durante los días sábados que se encontraba de turno, a pesar de que las copias de las tarjetas de tiempo que fueron adjuntadas por el perito, se observa que el demandante marcaba tarjetas de lunes a viernes, por lo que no se puede determinar en forma cierta cuál fue el período de tiempo que laboró durante los sábados que estaba de turno.

las horas extraordinarias, para que puedan ser reconocidas deben estar fehacientemente probadas en el proceso, no se pueden presumir que el trabajador laboró horas extraordinarias.

Adicionalmente, observa esta Superioridad, que del informe pericial se desprende que a pesar de que el sábado estaba dentro los días laborables dentro del contrato, al demandante se le pagaba una suma adicional por laborar esos días, más extras cobradas por rayos X y exámenes.

Estas sumas eran reportadas como representación en los pagos quincenales del trabajador, y que en mucho superan lo que correspondería al pago de horas extraordinarias.

Esta Superioridad considera que el demandante no ha logrado probar las horas extraordinarias que dicen se le adeudan, por lo que la Sentencia de primera instancia debe ser revocada".

Este discernimiento jurídico, ha sido señalado como ilegal por parte del trabajador **WILLIAM TERAN**, por medio de su procurador judicial, al considerar que el Tribunal Superior de Trabajo quebrantó el mandato contenido en los artículos 33, 63, 730, y 732 del Código de Trabajo, supuesto éste que lo condujo a proponer el presente recurso de casación.

Encontrándose el recurso en este estado los Magistrados que integran la Sala proceden a resolver lo pertinente.

DECISION DE LA SALA

Cuestiones Previas

Antes de adentrarnos al conocimiento de fondo de este asunto laboral, esta Corporación de Justicia deja claro que el recurso extraordinario de casación, en concordancia con el artículo 924 del Código de Trabajo, tiene como objeto enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales de segunda instancia que hacen tránsito de cosa juzgada y en las que sin esta última circunstancia pueden acarrear graves e irreparables perjuicios.

También cabe reiterar que para la formalización del referido medio de impugnación extraordinario, el escrito del casacionista debe cumplir con ciertas formalidades estatuidas en los artículos 925, 926, y 928 ibídem, con los cuales cumple parcialmente el interesado.

Sostenemos que parcialmente se ha dado cumplimiento a las precitadas exigencias, en vista de que el demandante ha señalado que la Sentencia de 2 de mayo de 2000 presuntamente quebranta normas, que han sido calificadas por la doctrina como disposiciones adjetivas o de procedimiento, como lo son los artículo 730 (medios de prueba) y artículo 732 (sana crítica) del Código de Trabajo, y que no son revisables individualmente en esta vía procesal. Sobre este punto, la Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas, pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido quebrantadas.

Cuando la acusación se refiere exclusivamente a normas de carácter adjetivo, como en el presente caso, el cargo o los cargos quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, ya que así lo dispone el párrafo final del artículo 928 ibídem. Esta disposición recoge lo siguiente:

> "Artículo 928.- Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales". (subrayado es nuestro)

El Tribunal de Casación conoce de errores in judicando y no de errores in procedendo (Ver Sentencias de 25 de enero de 2000, 28 de junio de 1999, 3 de marzo de 1998, 27 de febrero de 1998, de 24 de junio de 1997, 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994).

Como corolario de la explicación vertida en párrafos anteriores, el análisis de los cargos planteados quedará limitada a los señalamientos que expone el recurrente en relación a los artículos 33 y 63 del Código de Trabajo.

Fondo

La primera norma que estima infringida el casacionista es el artículo 33 del Código de Trabajo, cuyo tenor literal es el siguiente:

> "Artículo 33.- Jornada de trabajo es todo el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente por estar a disponibilidad del empleador.
>
> El tiempo de trabajo que exceda de los límites señalados en el artículo anterior, o de límites contractuales o reglamentarios inferiores, constituye la jornada extraordinaria y será remunerado así:
>
> 1.- Con un veinticinco por ciento de recargo sobre el salario cuando se efectúe en el período diurno;
>
> 2.- Con un cincuenta por ciento de recargo sobre el salario cuando se efectúe en el período nocturno o cuando fuere prolongación de la jornada mixta iniciada en el período diurno; y
>
> 3.- Con un setenta y cinco por ciento de recargo sobre el salario cuando la jornada extraordinaria sea prolongación de la nocturna o de la jornada mixta iniciada en el período nocturno"

El argumento esgrimido por el casacionista para respaldar su pretensión, descansa en que, la Sentencia de Segunda Instancia desconoció las ocho horas laboradas más allá de las ordinarias, como trabajo en tiempo extraordinario, los días sábados 18 de enero, 1 de febrero, 15 de febrero, 1 de marzo, 15 de marzo, 29 de marzo, 12 de abril, 26 de abril, 24 de mayo, todos de 1997, y 28 de febrero, 14 de marzo, 29 de marzo, 11 de abril, 9 de mayo, 23 de mayo, 6 de junio, 20 de junio, 4 de julio, 18 de julio, 1 de agosto, 15 de agosto y 29 de agosto, todos de 1998, como quedó determinado, y que consta en el expediente mediante la prueba de inspección judicial practicada por el Tribunal.

Frente a lo argüido por la parte trabajadora este Tribunal de Casación no coincide con sus apreciaciones en virtud de que, de acuerdo a las pruebas que obran en el expediente, antecedente de este recurso de casación, las mismas no logran acreditar la pretensión del doctor TERAN que es el pago de horas extraordinarias desde 1997.

Lo anterior obedece a que obra en el proceso el informe elaborado por peritos de la parte trabajadora del cual se desprende que efectivamente el doctor

TERAN laboró los sábados antes enunciados, pero no se estableció claramente el horario de estos días pues el trabajador no marcaba las tarjetas de tiempo lo que imposibilitó calcular las reclamadas horas extras laboradas. Por otro lado, y esto lo señaló el Tribunal Superior de Trabajo, el señor WILLIAM TERAN recibió en concepto de "representaciones" remuneración que supuestamente correspondían a horas extras, circunstancia ésta que evidencia el pago del trabajo en horas extraordinarias presuntamente laboradas. Estos pagos eran B/.2.50 por paciente, adicionales al salario correspondiente al horario regular, lo que supera en creces en la suma reclamada por el trabajador en concepto de horas extras. Esta situación obvia desvirtúa los señalamientos del casacionista, pues el Tribunal Superior de Trabajo no ha quebrantado lo previsto en el artículo 33 del Código de Trabajo.

En relación en el artículo 63 del Código de Trabajo, manifiesta el recurrente que cuando la Sentencia de Segunda Instancia se refiere a las sumas reportadas como representación en los pagos quincenales y dice que superan lo que corresponde a las horas extras, está dándole valor a un acto simulado, en lugar de reconocer la materialidad de una prestación laboral realizada en condiciones de subordinación jurídica, en los términos dictados por el empleador. Esta disposición es del tenor siguiente:

> "Artículo 63.- Para la determinación de la relación de trabajo, o de los sujetos de la misma, se prescindirá de los actos y contratos simulados, de la participación de interpuestas personas como supuestos empleadores, y de la constitución u operación simulada de una persona jurídica en calidad de empleador".

No compartimos el criterio de la parte trabajadora en razón de que el caso in examine no está en duda la relación de trabajo entre el doctor TERAN y Yapelo, S. A. por lo que no es atinada la norma citada por casacionista para endilgarle vicios de ilegalidad a la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Trabajo. Sin embargo, a pesar de la inaplicabilidad de la excerta al caso que nos ocupa, creemos entender el sentir de la parte trabajadora, pues considera que el pago bajo el concepto de "representación" es una manera de disfrazar el derecho al pago de horas extras. En párrafos anteriores indicamos que, no emerge del proceso elementos irrebatibles que hagan concluir a esta Corporación Judicial de que bajo el concepto de representación se estaba evitando pagar horas extras al doctor WILLIAM TERAN, pues el galeno estaba recibiendo pagos de B/.2.50 adicionales por paciente, atendido los días sábados fuera de del horario regular, pagos estos que computados superan la totalidad de la suma pretendida en concepto de horas extras. Otra situación sería que Yapelo, S. A. (Clínica El Carmen) hubiese omitido hacer pago alguno por esos pacientes atendidos después de haber finalizado la jornada ordinaria de labores del doctor TERAN. La circunstancia medular que no permite acceder a la pretensión deprecada, es que no se sabe a ciencia cierta cuantas horas extras laboró el médico, pues como se señaló anteriormente, no marcaba estas presuntas horas en la tarjeta de asistencia. Es por ello que no aceptamos el cargo impetrado contra la Resolución de 2 de mayo de 2000 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Por las razones expuestas, los Magistrados que integran la Sala Tercera (CASACION LABORAL) administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASAN la Sentencia de 2 de mayo de 2000, dictada por Tribunal Superior de Trabajo, dentro del Proceso laboral: WILLIAM TERAN -vs- YAPELO , S. A. o CLINICA EL CARMEN.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GASPAR DE PUY EN REPRESENTACIÓN DE JOYERIA LA ESPAÑOLA, S. A. CONTRA LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: DORA ELENA HART -VS- JOYERIA LA ESPAÑOLA,S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Gaspar De Puy Barranco, apoderado judicial de la sociedad JOYERIA LA ESPAÑOLA,S. A. ha presentado desistimiento del recurso de casación laboral interpuesto contra la sentencia de 11 de abril de 2000 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: DORA ELENA HART -VS- JOYERIA LA ESPAÑOLA, S. A.

El recurrente presentó un Mutuo Acuerdo firmado por las partes a través del cual acuerdan, entre otras cosas, desistir del presente proceso (Cfr. fojas 9 y 10).

Dentro de este contexto, la Sala estima que el desistimiento presentado es procedente y debe acogerse, toda vez que los artículos 941 y 942 del Código de Trabajo señalan que se puede desistir en cualquier estado del proceso, siempre que medie facultad expresa para ello y se cuente con la conformidad de la otra parte, requisitos que se cumplen en el presente caso.

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento del recurso de casación laboral interpuesto contra la sentencia de 11 de abril de 2000 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: DORA ELENA HART -VS- JOYERIA LA ESPAÑOLA, S. A.

Notifíquese

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, ALEMÁN Y MORA EN REPRESENTACIÓN DE ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 13 DE ABRIL DE 2999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: BERTA GOFF QUINTERO, VIUDA DEL SEÑOR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ -VS- ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (SALA TERCERA). LABORAL.

VISTOS:

La firma Arias, Alemán, y Mora en nombre y representación de ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A., ha interpuesto recurso de casación laboral contra la Sentencia de 13 de abril de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: BERTA GOFF QUINTERO, viuda del señor JOSÉ LUIS MARTÍNEZ -vs- ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A.

Del recurso de casación se le corrió traslado a la parte trabajadora, de acuerdo a lo previsto en el artículo 927 del Código de Trabajo, quien mediante apoderada judicial, se opuso a la pretensión del recurrente.

ANTECEDENTES DE ESTE RECURSO

La génesis de este recurso de casación descansa en un proceso común incoado por la señora Berta Goff Quintero viuda del señor José Luis Martínez, contra ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A., en reclamo de prestaciones laborales, por la suma de B/.13,847.16 en concepto de prima de antigüedad, recargos, costas e intereses, dado que, esta empresa había sustituido a Astillero Balboa, S. A. en las obligaciones laborales, entre otras.

El Tribunal de Primera Instancia que conoció de la causa, fue el Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección, el cual mediante Sentencia N° 39 de 29 de septiembre de 1998 declaró no probada la excepción de inexistencia de la obligación presentada por la empresa y en consecuencia condenó a ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A., al pago de B/.13,856.81 que corresponden a la prima de antigüedad adeudada al trabajador José Luis Martínez Revetria (q. e. p. d.) y que debe ser entregada su menor hijo Bruno Guillermo Martínez Goff representado por su madre Berta Goff Quintero.

Disconforme la empresa con la decisión del juzgador a-quo, propuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO

El Tribunal Colegiado de Segunda Instancia al conocer de la alzada, emitió la Sentencia de 13 de abril de 2000, por medio de la cual se confirmó la decisión del Juzgado Primero de Trabajo.

Las razones fundamentales en que se apoyó el Tribunal Superior para coincidir con el criterio expuesto por el Juzgador a-quo son básicamente lo que a continuación transcribimos:

> "En dicha sentencia de primera instancia, el Juez trae al proceso un fallo emitido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el 9 de noviembre de 1995, en donde se determina que la empresa demandada sustituyó jurídicamente como empleador a la empresa ASTILLEROS BALBOA, S.A. En dicha resolución la Corte anota que la demandante contrajo las obligaciones anteriores de ASTILLEROS BALBOA, S.A., entre las cuales se encuentra la de mantener en sus puestos de trabajo a los trabajadores; quedando también demostrado que la nueva concesionaria no varió el objeto de la antigua concesionaria que era la explotación del Puerto Balboa, propiedad estatal.
>
> Demostrada la continuidad de labores del trabajador extinto con la empresa ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S.A. a través del extenso caudal probatorio contenido en el proceso, tenemos que no cabe duda de que efectivamente le cabe razón al Juez A quo en desestimar la excepción de inexistencia de la obligación por parte de la demandada y acceder a las reclamaciones interpuestas por la demandante como viuda del trabajador y madre del menor hijo del señor José Luis Martínez (q.e.p. d.)"

Este discernimiento jurídico que confirma la decisión del Juzgador de Primera Instancia, ha sido señalado como ilegal por parte de la empresa ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A., por medio de su procurador judicial, al considerar que el Tribunal Superior de Trabajo quebrantó el mandato contenido en el artículo 14 del Código de Trabajo.

DECISIÓN DE LA SALA

El argumento esgrimido por ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A. para proponer el presente recurso descansa en el hecho de que, presuntamente no se ha producido la sustitución patronal, ya que no se han verificado los supuestos

jurídicos que darían lugar a ello. Continúa señalando que, no se ha dado la alteración en la estructura económica de la empresa Astilleros Balboa, S. A., la cual era la antigua beneficiaria de la concesión otorgada por el Estado Panameño a través de la Autoridad Portuaria Nacional, para la explotación de las instalaciones del astillero del Puerto de Balboa.

Además explica el casacionista, que la concesión de Astilleros Balboa, S. A. la canceló el Estado Panameño por incumplimiento de contrato y posteriormente, mediante contratación por separado y acto jurídico distinto, el Estado Panameño otorgó una nueva concesión a ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A.

Para finalizar, afirma la recurrente que ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A. no es la cesionaria jurídica de la sociedad Astilleros Balboa, S. A., y que entre ambas no se verificó transferencia o cesión alguna, ni mucho menos, acto que conllevara una alteración en la estructura jurídica o económica de la empresa Astilleros Balboa, S. A., elementos indispensables para la configuración del principio jurídico conocido como sustitución patronal.

La única excerta legal que se estima infringida es el artículo 14 del Código de Trabajo que prevé lo siguiente:

> Artículo 14. Toda alteración en la estructura jurídica o económica de la empresa, o la sustitución del empleador, se regirá por las siguientes reglas:
>
> 1.- La alteración o la sustitución no afectarán las relaciones de trabajo existente, en perjuicio de los trabajadores.
>
> 2.- Sin perjuicio de la responsabilidad legal entre ambos, conforme al derecho común, en todo caso el empleador sustituido será solidariamente responsable con el nuevo empleador, por las obligaciones derivadas de los contratos o de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de una año, contado a partir de la fecha de la notificación a que se refiere el ordinal siguiente. Concluido este plazo, la responsabilidad subsistirá únicamente para el nuevo empleador.
>
> 3.- La sustitución debe notificarse por escrito a los trabajadores y a los sindicatos respectivos, a más tardar dentro de los quince días siguientes a la fecha de la sustitución.
>
> 4.- La inexistencia de la notificación mantendrá la responsabilidad solidaria de los empleadores hasta tanto se haga la notificación correspondiente.
>
> 5.-En ningún caso afectarán los derechos y acciones de los trabajadores, ni alterarán la unidad del empleador, el fraccionamiento económico de la empresa en la que presten servicios, ni los contratos, arreglos o combinaciones comerciales que tiendan a disminuir o distribuir las responsabilidades del empleador.
>
> 6.- Cuando el patrimonio de una empresa haya sido transferido a un tercero por acto arbitrario, judicial o de otra naturaleza, que haya sido posteriormente declarado ilegal o inconstitucional, no se causará continuidad de empresa, ni sustitución de empleador y el beneficiario de dicho acto será el único responsable por las consecuencias jurídicas derivadas de los actos, contratos, o de la ley, que tuvieron lugar entre la fecha en que se transfirió el patrimonio y la fecha en que éste haya sido restituido a su legítimo dueño, salvo en caso de simulación o fraude en beneficio de quien traspasó dicho patrimonio.
>
> El beneficiario del acto arbitrario responderá a la satisfacción de

los pasivos causados durante el período correspondiente con el patrimonio por él adquirido o producidos luego del inicio de su gestión y con los de sus accionistas y directores, si los hubiere, solidariamente.

Este artículo es de orden público e interés social y tiene carácter retroactivo y deroga o modifica cualquier disposición que le sea contraria".

Antes de adentrarnos para decidir la controversia planteada, queremos señalar que en la concesión administrativa, contrato típicamente administrativo, una persona se compromete a explotar o ejecutar actividades de servicio público, pero en nombre propio y por su cuenta, y esa actividad delegada por el Estado a la persona está supeditada a la supervisión y control de la Administración Pública, pero sólo en relación a la ejecución del servicio. Esta situación que entra en el ámbito del Derecho Público, no tiene nada que ver con el aspecto laboral que rige a la empresa internamente, pues los trabajadores no son considerados empleados públicos, sino, las relaciones laborales se rigen por los lineamentos establecidos en el Código de Trabajo. Es evidente que la relación laboral entre la empresa y el trabajador no es impuesta por la Administración Pública, al contrario, responde a la autonomía de la voluntad de la empleadora de establecer quien o quienes quiénes deben ser contratados para desempeñarse en determinados puestos.

ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A., empresa creada de acuerdo a las normas de sociedades anónimas, ámbito del Derecho Comercial, le fue adjudicada la concesión de manejo del Puerto Balboa, precediendo a la empresa Astilleros Balboa, S. A en la actividad de Puertos. No sólo asumió las mismas actividades de Astilleros Balboa, como ya lo hemos indicado, sino que, también asumió la responsabilidad frente a los trabajadores que hasta el momento se venían desempeñando en aquella empresa.

Lo anterior se colige de todo el proceso de concesión que se desarrollo a través de autorizaciones hasta culminar con el Contrato de la Nación, tal como puede corroborarse en las copias remitidas por el Director de la Autoridad Portuaria Nacional, a través de la Nota N° 1278-LEG-96 de 13 de agosto de 1996, a solicitud del Juez Primero de Trabajo de la Primera Sección.

Efectivamente de foja 102 a 113, milita una copia autenticada del Contrato N° 271-81, de 28 de agosto de 1981, por medio del cual la Autoridad Portuaria Nacional otorga a Astilleros Balboa S. A. el uso exclusivo de las infraestructuras, instalaciones, equipo y terrenos del Astillero del Puerto de Balboa, concesión que fue rescindida por la causal de incumplimiento de contrato contemplada en el Código Fiscal, según se lee en la Resolución N° D. G. N° 231-91, de 7 de octubre de 1991, expedida por el Director General de la Autoridad Portuaria Nacional (ver fojas 114 y 115).

Consta también en el expediente copia de la Resolución C. E. N° 17-91, de 6 de septiembre de 1991 (fojas 116 y 117), la cual fue expedida por el Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional, y en la que se autoriza al Director General de la Autoridad Portuaria Nacional que rescindiera el Contrato N° 271-81 de 28 de agosto de 1981.

Mediante la Resolución C. E. N° 19-91, de 9 de septiembre de 1991 (fojas 134 y 135), el Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional autoriza al Director General de la Autoridad Portuaria Nacional para que una vez obtenida la aprobación de que trata la resolución antes transcrita -expedida por el Consejo de Gabinete- proceda a celebrar un contrato de concesión administrativa con la empresa ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A., cuyo objeto sería el uso exclusivo de las infraestructuras, instalaciones, equipo y terrenos del Astillero del Puerto de Balboa, el cual se "dedicará a la reparación, mantenimiento y carena de todo artefacto flotante con el fin de obtener una rentabilidad máxima según las mejores reglas en vigor en la industria de la reparación naval, por el

término de veinte (20) años".

Todo la anterior constituye la secuencia lógica de los pasos que se ejecutaron para otorgarle la concesión a ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A. para que se dedicara a la misma actividad que realizaba su antecesora Astilleros Balboa, S. A. Reafirma lo anterior, lo que disponía la cláusula primera del contrato de concesión que celebró el Estado con la antigua concesionaria del Astillero del Puerto de Balboa -contrato que fue rescindido- y lo que prevé la cláusula primera de la actual concesión, pues ambos contratos tienen el mismo objeto, que es la explotación del referido bien estatal. Esta circunstancia demuestra de manera ineludible que, se mantuvo la misma actividad empresarial luego de ocurrida la sustitución patronal, lo que contradice la apreciación de la empresa demandada de que, debió darse la transmisión de la propiedad para que el la parte trabajadora reclamara derechos por la continuidad laboral.

La Sala en Sentencia de 3 de agosto de 1998 indicó, al respecto de la transmisión de la propiedad lo siguiente:

> "En primer lugar, en relación a la excepción de inexistencia de la obligación es necesario tener presente que precisamente por tratarse de una concesión del Estado, resulta imposible que se verifique el elemento transmisión de la propiedad alegado por el casacionista."

En lo que respecta a los trabajadores, la cláusula 9 del Contrato celebrado entre ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A. y la Autoridad Portuaria Nacional, en su literal u), dispone, a cargo de la empresa, la obligación de asumir únicamente las prestaciones laborales de los Trabajadores Sindicalizados del Astillero del Puerto de Balboa (esto ya es un reconocimiento de la continuidad laboral), relacionada esta condición, con la Cláusula Décimo Cuarta de este Contrato (ver foja 127 del expediente). Esta cláusula discriminatoria, que a toda luces resulta contraria a los principios del derecho laboral, circunscribía la responsabilidad laboral de ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A. sólo frente a los trabajadores sindicalizados, pero aplicando las reglas de interpretación no debe entenderse que es así, pues vulnera los derechos laborales consagrados en nuestra legislación, instituida para brindar una especial protección a la clase trabajadora.

En este sentido este Tribunal de Casación, ha expresado en la Sentencia de 9 de noviembre de 1995, que dicha cláusula no debe entenderse textualmente en detrimento del resto de los trabajadores, pues tal disposición convencional no excluye de protección a los trabajadores no sindicalizados, que igual tienen derechos que deben ser satisfechos por la empresa. Así se pronunció esta Superioridad Colegiada:

> "La cláusula 9 del Contrato celebrado entre ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S.A. y la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, en su literal u), dispone a cargo de la empresa la obligación de asumir las prestaciones laborales de los Trabajadores Sindicalizados del Astillero del Puerto de Balboa, de conformidad con la Cláusula Décimo Cuarta de este Contrato. Cláusula que trata de las relaciones laborales y su segundo acápite preceptúa que tales relaciones "...se regirán por el Código de Trabajo y demás leyes laborales vigentes en la República de Panamá". Observa la Sala que tal disposición convencional no excluye de protección a los trabajadores no sindicalizados, caso del señor HENRY KOURANY, quien ocupó en las empresas demandadas el puesto de Jefe de Personal y de Director Administrativo, respectivamente (fojas 397 y 368)."

Por ello, frente a lo argüido por la empresa ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A., esta Corporación Judicial conceptúa que, no le asiste la razón, ya que de acuerdo a la documentación que reposa en este proceso laboral y a la jurisprudencia, efectivamente se verificó la sustitución patronal de Astilleros Balboa, S. A. El señor MARTÍNEZ, quien ocupó en la empresa demandada el puesto

de Director de Producción, (foja 44), y antes en Astilleros Balboa era Jefe de Abordo (ver testimonio del Jefe de Personal a foja 36), no formaba parte de sindicato alguno, pero como ya lo hemos aclarado, esto no era limitante para que le sea reconocidos derechos que en vida obtuvo por la prestación del servicio que brindó de manera continua e ininterrumpida en las actividades de puerto que realizaba en primer lugar Astilleros Balboa, S. A, y posteriormente ASTILLEROS BRASWELL, S. A. (ver testimonio del Jefe de Personal y la Secretaria de Personal, foja 78). Por ende la empresa debe asumir el compromiso del pago de la prima de antigüedad, en favor del menor Bruno Guillermo Martínez Goff, hijo de José Luis Martínez (q. e. p. d.) quien laboró para la recurrente.

Es importante destacar que la temática referente a la sustitución patronal, en donde se ha visto involucrada la empresa mencionada y afectada con la decisión del Tribunal Superior de Trabajo, ya ha sido objeto de discusión, por parte de esta Superioridad Judicial en casos anteriores, como lo hemos resaltado en párrafos precedentes. Las decisiones a que hacemos referencia son la Sentencia de 3 de agosto de 1998 y Sentencia de 9 de noviembre de 1995. En esta última se dijo:

> "A juicio de la Sala, sí se dio la sustitución de empleador entre ASTILLEROS BALBOA, S.A. y ASTILLEROS BRASWELL INTERNACIONAL, S.A. ya que esta última reemplazó a la anterior empresa titular de la concesión sobre las instalaciones del Puerto de Balboa. Este fenómeno jurídico se configura por una serie de circunstancias que han quedado claramente acreditadas en autos, tales como: los actos administrativos y los contratos a los cuales se ha hecho referencia, y en los cuales la nueva concesionaria adquiere entre otras obligaciones la de mantener en sus puestos de trabajo a los trabajadores que laboraban para ASTILLEROS BALBOA, S.A., también ha quedado demostrado que el objeto de la empresa ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S.A. continuó siendo el mismo, o sea, la explotación del puerto de Balboa propiedad del Estado".
>
> Contrario a la opinión del casacionista que considera que es requisito necesario que se dé un traspaso o transacción entre el antiguo y nuevo empleador (o bien una alteración sustancial de dichas empresas) para que opere la sustitución, esto es, el cambio de titularidad de la empresa, tal argumento no tiene asidero. La Sala ha señalado en anteriores ocasiones que la sustitución patronal es un hecho objetivo, y en dicho sentido se pronunció en sentencia de 24 de septiembre de 1976 dictada en el proceso laboral habido entre Nathaniel Hinks Vs. Calvin Porter y otros, al manifestar que "El fenómeno de la sustitución patronal no requiere, como sugiere el recurrente, un acto o acuerdo entre el dueño de una empresa y otra, transmitiendo su derecho de dominio. Es una situación objetiva, que se produce, independientemente de la causa, cuando surge la continuación de una empresa, que está integrada por un conjunto de factores (patrimonio personal, organización, objeto, actividad, "good will" (GARCÍA MARTÍN, Carlos. 20 años de Jurisprudencia de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (1972-1991), Panamá, 1992, p. 593).
>
> El requisito de transferencia de la propiedad en el asunto sub-exámine tampoco es aceptable por la simple razón de que el bien objeto de concesión es una res de dominio público, por lo que al estar limitado o afectado por dicha circunstancia, no puede ser objeto de apropiación privada. Sin embargo, es claro que la nueva concesionaria mantuvo el objeto o actividad de la anterior empresa titular de la concesión al igual que el personal que trabajaba para la empresa ASTILLEROS BALBOA, S.A., "garantizando todos los derechos adquiridos acorde con el Código de Trabajo", lo mismo que se observa que posterior a la sustitución patronal siguieron rigiendo en la empresa ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S.A., durante cierto

período, la Convención normativa de condiciones de trabajo y el Reglamento Interno de la antigua concesionaria del puerto de Balboa, según atestiguan los señores JUAN COMPARAZ, Encargado de Planillas de la sociedad ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S.A. (foja 281), y FRANKLIN CASTILLO, Jefe de Personal de la citada sociedad (foja 252), además de que el representante legal de la empresa sustituida mediante Nota S/N de 8 de octubre de 1991, cuya copia consta a fojas 13, comunicó a los trabajadores de ASTILLEROS BRASWELL INTERNACIONAL, S.A., entre otras cosas, la sustitución indicada, dando cumplimiento al numeral 3° del artículo 14 del Código de Trabajo. Todas estas circunstancias y elementos objetivos evidencian la sustitución patronal de que hablamos y es sostenida por los fallos de primera y segunda instancia, lo cual hace que se mantenga la responsabilidad respecto de las obligaciones derivadas de los contratos o de la Ley en favor del trabajador HENRY KOURANY, en los términos establecidos en el artículo 14 del Código Laboral, persona que como ha quedado acreditado en autos inició su relación laboral con ASTILLEROS BALBOA, S.A. el 1° de noviembre de 1981 y terminó el 3 de junio de 1992, al ser despedido por ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S.A. (Cfr. fojas 6 y 205).

Como corolario de todo lo expuesto, este Tribunal Colegiado es del criterio que no se ha quebrantado lo preceptuado en el artículo 14 del Código de Trabajo.

En virtud de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Casacion Laboral) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASAN la Sentencia de 13 de abril de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: BERTA GOFF QUINTERO, viuda del señor JOSE LUIS MARTINEZ -vs- ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CÉSAR ELÍAS SANJUR, EN REPRESENTACIÓN DE ARMAR, S. A. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EL 9 DE MAYO DE 2000 POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MERCEDES RIVERA DE PÉREZ O MERCEDES RIVERA -VS- ARMAR, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS :

El licenciado César Elías Sanjur, actuando en representación de ARMAR, S. A., interpuso recurso de casación laboral contra la Resolución dictada el 9 de mayo de 2000 por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral incoado por MERCEDES RIVERA DE PÉREZ o MERCEDES RIVERA contra ARMAR, S. A.

I. CONTENIDO DE LA SENTENCIA IMPUGNADA CON EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL.

Mediante la sentencia recurrida el Tribunal Superior de Trabajo, del Segundo Distrito Judicial, revocó la sentencia dictada el 24 de septiembre de 1999 por el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección por medio de la cual declaró la nulidad de lo actuado dentro del proceso seguido por la señora Mercedes Rivera de Pérez o Mercedes Rivera contra la Empresa Armar, S. A. y

ordenó el archivo del expediente previo su registro en el libro respectivo. En lugar de la sentencia revocada, el Tribunal Superior de Trabajo condenó a la empresa Armar, S. A. a pagar a la demandante la suma de siete mil novecientos treinta balboas con ochenta centavos (B/.7,930.80), en concepto de pensión o renta por Riesgo Profesional como sobreviviente del trabajador Nicolás Quintero Rivera.

II. NORMAS QUE SE CONSIDERAN INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El recurrente alega que en este caso el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial infringió los artículos 304, 520 y 675 numeral 1 del Código de Trabajo y el artículo 42 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970. Estos artículos son del siguiente tenor literal:

> CÓDIGO DE TRABAJO
> "Artículo 304. En lo relativo a los trabajadores cubiertos por el régimen obligatorio del Seguro Social se estará a lo que dispone al respecto la legislación especial que sobre esta materia rige a la Caja de Seguro Social.
>
> En cualquier caso en que por mora u omisión del empleador la Caja de Seguro Social no se encuentre obligada a reconocer las prestaciones a que se refiere dicha legislación especial, tales prestaciones correrán íntegramente a cargo del empleador.
> ...
> Artículo 520. El procedimiento laboral regula el modo cómo deben tramitarse y resolverse los asuntos laborales cuyo conocimiento corresponde a los tribunales de trabajo y a los funcionarios que determinan este Código y otras leyes.
> ...
>
> Artículo 675. Son causas de nulidad:
>
> 1. La de distinta jurisdicción, la cual es absoluta, y puede ser alegada por cualquiera de las partes como incidente. El juez la declarará de oficio en el momento en que la advierta;"
>
> DECRETO DE GABINETE N° 68 DE 1970.
> "Artículo 42. Si por culpa u omisión del patrono en la inscripción del trabajador y en el pago de la prima, la Caja no pudiere conceder a un trabajador o a sus beneficiarios las prestaciones a que hubiere podido tener derecho en caso de riesgo profesional, o si resultaren disminuidas dichas prestaciones por falta de cumplimiento de las obligaciones del patrono, éste será responsable de los perjuicios causados al trabajador o a sus deudos. El monto de las obligaciones a cargo del patrono será determinado por la Caja de Seguro Social y el patrono estará obligado a depositar en ésta la suma correspondiente o a garantizarle su pago en forma satisfactoria dentro de los diez días siguientes al acuerdo emitido por la Caja.
>
> Vencido este término, si el patrono no ha efectuado el depósito de la suma correspondiente o garantizado su pago a satisfacción de la Caja, ésta iniciará el cobro por la jurisdicción coactiva.
>
> En caso de insolvencia, concurso, quiebra, embargo, sucesión u otros similares, el crédito originado de acuerdo con este Artículo, tiene prelación sobre cualquier otro, sin limitación de suma a favor de la Caja de Seguro Social."

La casacionista señala que el artículo 304 del Código de Trabajo fue violado, por indebida aplicación, ya que la Caja de Seguro Social la condenó a pagarle la suma de B/.8,731.20 en concepto de prestaciones por el accidente de trabajo ocurrido al trabajador Nicolás Quintero Rivera y aunque contra dicha

resolución se interpusieron recursos de reconsideración y apelación, la Caja de Seguro Social mantuvo su decisión, ejerciendo las facultades coercitivas que le otorga la ley, a través del procedimiento tramitado en su contra, asumiendo de esta forma la facultad para el cobro de las prestaciones derivadas del riesgo profesional ocurrido al trabajador.

En cuanto a los cargos de violación de los artículos 520 y 675 del Código de Trabajo, y a pesar de que estas normas son de procedimiento y no consagran derechos sustantivos a favor de la recurrente, serán analizados por esta Sala en virtud que fueron invocados en relación o en conjunto con el artículo 42 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970.

Alega el representante legal de la parte actora que el artículo 42 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970 fue violado, por falta de aplicación, porque si el Tribunal lo hubiera aplicado, habría concluido que a quien correspondía fijar el monto de las obligaciones del patrono era a la Caja de Seguro Social por expreso y claro mandato del primer párrafo de la norma citada como violada. Agrega que esta facultad no sólo se limita a lo relativo a la fijación del monto de esas obligaciones, sino a la de iniciar el cobro por la jurisdicción coactiva.

Por lo anterior, la parte actora concluye que también fue aplicado indebidamente el artículo 520 del Código de Trabajo, toda vez que el Tribunal tramitó un proceso laboral común de una materia que es del conocimiento de la Caja de Seguro Social según lo dispuesto en el citado artículo 42 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970. En sus propias palabras el apoderado judicial de la casacionista expresó que: "La aplicación indebida del art. 520 hizo que el Tribunal resolviera revocar la Sentencia de primera instancia y condenara a ARMAR, S. A., en circunstancias en que esta empresa ya había sido condenada antes por la Caja de Seguro Social sobre el mismo asunto, lo cual constituye una doble condena".

III. OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL.

El apoderado judicial de la señora Mercedes Rivera de Pérez o Mercedes Rivera presentó escrito de oposición al recurso de casación interpuesto por la sociedad anónima Armar, S.A., visible de fojas 9 a 14, en los siguientes términos:

> "Consta en autos que ARMAR, S.A. no tenía inscrito al trabajador NICOLÁS QUINTERO RIVERA en la Caja de Seguro Social con anterioridad a la ocurrencia del imprevisto laboral, razón por la cual dicha entidad sostiene y así lo ha establecido que no tiene que pagarle suma alguna a MERCEDES RIVERA DE PÉREZ o MERCEDES RIVERA en concepto de pensión de sobreviviente por el infortunio laboral ocurrido a NICOLÁS QUINTERO RIVERA (Q.E.P.D.), su hijo.
>
> En consecuencia, la jurisdicción de Trabajo o la Autoridad de Trabajo tiene competencia y jurisdicción en la presente causa, y por tanto el Artículo 42 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970, no ha sido infringido por la Sentencia recurrida en Casación en forma directa por falta de aplicación.
>
> Conforme a los artículos 1, 2, 3 y 1067 del Decreto de Gabinete N° 252 de 30 de diciembre de 1971 (Código de Trabajo) en concordancia con los artículos 300, 304 y 318 del cuerpo de normas citado, y, conforme a la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia (Sentencia de 6 de octubre de 1978. -Sala Tercera.-Corte Suprema de Justicia. -Juicio León de Lobo VS Helicóptero de Panamá - citada por Jorge Fábrega P. -Código de Trabajo -16ªEdición. -Enero de 1998, Artículo 304; Sentencia de 24 de junio de 1982 -Sala Tercera -Corte Suprema de Justicia -Juicio Cruz Marquínez Bordones VS Dídimo Araúz y/o Chiriquí Land Company), la Jurisdicción de Trabajo de la Autoridad de Trabajo, en consecuencia, tienen

> competencia para conocer a través de un Proceso Laboral Común cuyo debate de la litis sea un riesgo profesional ocurrido a un trabajador, siempre que el empleador haya incurrido en mora u omisión de tal gravedad para que la Caja de Seguro Social no se encuentre obligada a pagar la prestación correspondiente." (fs. 11 y 12)

IV. DECISION DE LA SALA.

Luego de un detallado análisis de los hechos y cargos de violación expuestos por la parte recurrente en su escrito de casación laboral, y de los argumentos planteados por la parte opositora del citado recurso, la Sala concluye que la resolución dictada el 9 de mayo de 2000 por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, es conforme a derecho y no ha violado ninguna de las normas invocadas por la actora. Esta conclusión tiene su fundamento en las consideraciones que a continuación se exponen.

En primer lugar, quedó debidamente demostrado en el expediente laboral, con las copias autenticadas del proceso administrativo surtido ante la Caja de Seguro Social, que el trabajador Nicolás Quintero Rivera, fue inscrito o reportado como trabajador de la empres ARMAR, S.A., dos días después de su fallecimiento. Así se desprende, específicamente del documento visible a foja 120 del expediente laboral, en el que el Agente Administrativo de la Agencia de la Caja de Seguro Social de David, Jorge A. Camacho, informa al señor Juez Primero de Trabajo de la Tercera Sección-David, que el día 4 de abril de 1994 se reportó a la Caja de Seguro Social que el trabajador fallecido el 2 de abril, inició labores el 28 de marzo de 1994 (ver también reverso de la foja 208 del expediente laboral). A foja 165 del mismo expediente consta el protocolo de necropsia del trabajador fallecido, en el cual se deja constancia que murió el 2 de abril de 1994 a las 2:00 p. m.

Acreditado lo anterior, y tal como lo dijo la propia Caja de Seguro Social en sus resoluciones N° 8857-95 D.G. de 20 de noviembre de 1995 (f. 53 del expediente laboral), 1734-D.G. de 16 de diciembre de 1996 (f. 63 del expediente laboral) y N° 15,428-97-J.D. de 27 de noviembre de 1997 (f. 236 del expediente laboral), el trabajador Nicolás Quintero Rivera no estaba cubierto por el régimen de seguro de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social. Agrega esta Sala Laboral lo siguiente: Sin la cobertura del seguro de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social regulada en el Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970, no correspondía a la Caja de Seguro Social asumir el pago de las prestaciones que contempla dicho cuerpo legal, y por tanto es la empresa ARMAR, S.A. quien debe hacerle frente al pago de la indemnización que en este concepto deben recibir los sobrevivientes del trabajador fallecido.

Es conveniente señalar que el Decreto de Gabinete N° 68 de 1970 es aplicable a aquellos trabajadores que sí están inscritos en la Caja de Seguro Social, y es esta institución la que deberá asumir el riesgo, siempre que el empleador esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones de pago de las cuotas de seguridad social destinadas a este rubro.

En cuanto al artículo 42 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970 la Sala ha expresado que no está vigente porque fue derogado por el Capítulo III del Título II del Libro II (Riesgos Profesionales) del Código de Trabajo vigente.

En resolución dictada por la Sala Tercera el 2 de septiembre de 1994, para resolver el recurso de apelación interpuesto por Compañía de Productos de Arcillas, S.A. dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social, se expresó lo siguiente:

> Observa este Tribunal Colegiado que el Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970 en su artículo 42 estatuye que:
> ...

Sin embargo, el Código de Trabajo que establece los preceptos aplicables a las situaciones derivadas de las relaciones de trabajo, y específicamente lo atinente a los riesgos profesionales y su forma de pago, advino al mundo jurídico mediante el Decreto de Gabinete N° 252 de 30 de diciembre de 1971, con la finalidad de regular las relaciones entre el capital y trabajo, y su vigencia se inició el 2 de abril de 1972; derogando además, la Ley 67 de 1947, el Decreto de Gabinete N° 191 de 2 de septiembre de 1971 y todas las disposiciones que le sean contrarias. Por lo tanto, de acuerdo a las reglas de hermenéutica legal, las disposiciones del Código de Trabajo priman sobre las de la Caja de Seguro Social en este caso en concreto por tratarse de normas posteriores y de carácter especial en materia de competencia y de riesgos profesionales.

El artículo 304 del Código de Trabajo establece que, en 'lo relativo a los trabajadores cubiertos por el régimen obligatorio del Seguro Social se estará a lo que dispone al respecto la legislación especial que sobre esta materia rige a la Caja de Seguro Social.

En cualquier otro caso de que por mora u omisión del empleador la Caja de Seguro Social no se encuentre obligada a reconocer las prestaciones que se refiere dicha legislación especial, tales prestaciones correrán íntegramente a cargo del empleador'.

Se entenderá entonces que salvo prueba en contrario de la mora aducida por la Caja de Seguro Social, la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A. deberá saldar completamente los dineros a los cuales tenga derecho el señor LUIS CÁRDENAS por la responsabilidad derivada del riesgo profesional, que en este caso específico acarreó la incapacidad parcial permanente del mencionado trabajador, y en caso de controversia sobre esta materia, resolverá la contienda la jurisdicción laboral ordinaria.

De lo anterior se deduce que la Caja de Seguro Social solamente tiene competencia para reclamar mediante la facultad de cobro coactivo aquellas cantidades que le adeude la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A., más no aquellas que correspondan al trabajador producto del accidente configurante del riesgo profesional. Ello deberá ser saldado como acotamos en el párrafo anterior, mediante orden emitida en un proceso instaurado ante la jurisdicción laboral como lo establecen los artículos 301 y 302 del Código de Trabajo..."(Registro Judicial de septiembre de 1994, págs. 261 a 263)

En este mismo sentido se pronunció esta Sala Tercera en la resolución de 16 de mayo de 1995, dictada para resolver el recurso de apelación interpuesto por Consultorio Popular El Carmen dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social (Registro Judicial de mayo de 1995, págs. 403 a 407).

En el caso del señor Nicolás Quintero Rivera, la empresa no lo inscribió antes de su muerte, por ello nunca llegó a existir vinculación jurídica ni traslado de la responsabilidad del riesgo que recaía sobre la empresa al programa de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social, así lo ha resuelto la Caja de Seguro Social en las resoluciones que reposan a las fojas 53, 63 y 236 del proceso laboral.

Por tanto, no corresponde a la Caja de Seguro Social asumir el pago de una pensión de sobreviviente a los deudos del trabajador Nicolás Quintero Rivera (se denomina pensión de sobreviviente cuando las prestaciones derivadas del riesgo profesional por causa de muerte son asumidas por la Caja de Seguro Social), y tampoco conocer o dictaminar acerca de la indemnización por riesgo profesional que deberá pagar el empleador (se denomina indemnización cuando las prestaciones

derivadas del riesgo profesional son asumidas por el empleador o cuando el beneficiario no reúne todos los requisitos establecidos en el Decreto de Gabinete N° 68 de 1970 para recibir una pensión por riesgo profesional).

No siendo aplicables al caso del trabajador Nicolás Quintero Rivera y de la empresa ARMAR, S.A. las disposiciones contenidas en el Decreto de Gabinete N° 68 de 1970, y por estar derogado, debe desestimarse la alegada violación. Por tanto, la resolución de 9 de mayo de 2000, tampoco infringió los artículos 520 y 675 del Código de Trabajo, los cuales fueron citados en relación con el artículo 42 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970.

Entonces ¿qué normas deben aplicarse?, las del Código de Trabajo, específicamente las aplicadas por el Tribunal Superior de Trabajo contenidas en el Título II del Libro II del Código de Trabajo sobre riesgos profesionales.

La demanda promovida por la madre sobreviviente del trabajador Nicolás Quintero Rivera fue conocida por la autoridad jurisdiccional correspondiente, fue tramitada mediante el procedimiento laboral y resuelta por el tribunal de trabajo competente.

El Capítulo III del Título II del Libro II del Código de Trabajo establece en su artículo 305, que se regirán por las disposiciones de ese capítulo, los trabajadores que no estén cubiertos por el régimen obligatorio del Seguro Social, por ello la Sala considera que no se ha producido la alegada violación del artículo 304 del Código de Trabajo, pues el mismo fue correctamente aplicado a la controversia.

El señor Nicolás Quintero Rivera no estaba cubierto por el régimen obligatorio del Seguro Social y por ello no le era aplicable la legislación especial sobre esta materia que rige a la Caja de Seguro Social, o sea el Decreto de Gabinete N° 68 de 1970. Por el contrario y tal como lo dice el inciso final de el citado artículo 304, por la omisión del empleador ARMAR, S.A. de inscribir al trabajador en el régimen, la Caja de Seguro Social no estaba obligada a reconocer las prestaciones a que se refiere la legislación especial, y debía el empleador correr íntegramente con las prestaciones correspondientes.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial revocó la sentencia de primera instancia y procedió a calcular la indemnización adeudada por la empresa ARMAR, S.A. a la madre del trabajador fallecido, según lo establece el numeral 3 del artículo 311 del Código de Trabajo.

Como el fallo recurrido no viola el artículo 304 del Código de Trabajo, y no está vigente el artículo 42 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970, invocado como infringido, en concordancia con los artículos 520 y 675 del Código de Trabajo, lo procedentes es no casar la sentencia recurrida.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia dictada el 9 de mayo de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral de indemnización por riesgos profesionales instaurado por MERCEDES RIVERA DE PÉREZ o MERCEDES RIVERA contra ARMAR, S.A.

Las costas se fijan en 20%.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ELÍAS IBARRA RUIZ, EN REPRESENTACIÓN DE PATRICIO HAWTHORNE STERLING, CONTRA LA SENTENCIA FECHADA EL 25 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO COMÚN LABORAL PATRICIO HAWTHORNE STERLING CONTRA COMPAÑÍA EL PASO Y/O NORA RODRÍGUEZ DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Elías Ibarra, actuando en nombre y representación de Patricio Hawthorne Sterling, ha interpuesto recurso de casación laboral contra la sentencia de 25 de mayo del 2000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral que su patrocinado le sigue a la Compañía El Paso, S. A. y Nora Rodríguez de Rodríguez.

Por medio del fallo censurado, el Tribunal Ad-quem revocó la sentencia No. 7, de 25 de febrero de 1999, emitida por el Juzgado Tercero Seccional de Trabajo, que declaró existencia de relación de trabajo entre el casacionista y la empresa demandada, condenando a esta última al pago en favor del primero de la suma de B/. 1,405.09, en concepto de vcaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad, más los intereses legales, y absolvió a la señora Nora Rodríguez de Rodríguez de la demanda (Cfr. fojas 105-108 vlta., 118-123, del expediente principal).

Cumplidos los trámites previstos en el artículo 927 del Código de Trabajo, y previo análisis de los presupuestos que para este tipo de medio de impugnación establece el artículo 925 de la misma excerta legal, la Sala pasa a resolver el recurso extraordinario.

A juicio del casacionista, la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Trabajo es violatoria de los artículos 6, 62, 63, 92 y 93 del Código Laboral.

A decir del casacionista, la sentencia de 25 de mayo del 2000 recurrida, no entró a determinar si en el fondo de lo demandado existía o no subordinación jurídica y dependencia económica, o si el trabajador realizaba o no una actividad para el empleador, realidad que había sido confirmada por el Juzgado Tercero de Trabajo mediante sentencia No. 7, de 25 de febrero de 1999. Agrega que de acuerdo con aquella sentencia lo que se dio fue un contrato de arrendamiento con fundamento en la carta que reposa en el expediente "donde el demandado (sic) solicita a su empleador que lo incluya en la planilla de la Caja de Seguro Social" (Cfr. foja 2 del cuadernillo de casación).

Afirma que esto último es falso porque en autos también consta una denuncia por falsificación fechada el 24 de enero de 1996, ante la Policía Técnica Judicial, en la que el demandante asegura que la firma que aparece en la supuesta carta no es de él, por lo que denunció tal hecho. Y agrega lo siguiente:

> **"En cuanto a la carga de la prueba que alega la sentencia recurrida, el Tribunal Superior de trabajo sostiene que un solo testimonio no hace plena prueba, que sólo se toma como una presunción.**
>
> **La Magistrada de la sala tercera, para el caso que nos ocupa deberá tomar en consideración las declaraciones de los testigos REYNALDO WORREL VASELL, JORGE ELIEZER APONTE, que declararon que las ordenes (sic) y el pago de los salarios loa realizaba (sic) el señor ELIAS RODRIGUEZ, significando que existía Dependencia Económica y Subordinación Jurídica que conforman la relación de trabajo, mientras que el testigo MANUEL ANTONIO DIAZ, declaró que el trabajador PATRICIO HAW THORNE STERLING, laboraba para la empresa**

COMPAÑIA EL PASO, S.A. y para la empleadora NORA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ portadora de la cédula de identidad personal No. 8-143-542, esposa de ELIAS RODRIGUEZ.

A foja 91 de la sentencia recurrida, mediante AUTO No 370 fechado el 24 de Septiembre de 1998, se solicitó ante el Ministerio de Vivienda la certificación de la existencia de un contrato de arrendamiento, entre el trabajador PATRICIO HAW THORNE STERLING y la COMPAÑIA EL PASO, S.A. y/o la señora NORA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-143-542.

Según consta en el expediente, este supuesto contrato de arrendamiento jamás existió, por lo tanto no existe contrato de arrendamiento de ninguna naturaleza, sino una relación Laboral.

El Tribunal Superior de Trabajo de la Primera Sección, (sic) señala que para tomar esta decisión de revocar la Sentencia No 7 de 25 de febrero de 1999, se refiere el fallo del 15 de febrero del año 2000, firmado por los Magistrados: ZAMORANO, DE ICAZA, VILLALOBOS, en la cual se confirmó la Sentencia de la Junta de Conciliación y Decisión del 24 de octubre de 1997, en la cual no se reconocía la existencia de la Relación Laboral.

Somos de la opinión, que el Tribunal Superior de Trabajo, no efectuó su labor puesto que en la demanda anterior el demandante reclamaba un despido injustificado, que sólo las Juntas son competentes, por lo que sus decisiones son revisadas, por el Tribunal Superior de Trabajo, mientras que ante el Juzgado Tercero de Trabajo se reclama el reconocimiento del pago de los derechos adquiridos, que son reclamaciones totalmente diferentes.

El Tribunal Superior de Trabajo, soslayó el Principio Universal de la Sana Crítica consagrado en los artículos 755, 778 y 886 del Código de Trabajo cuando descartó las pruebas documentales y testimoniales que en el expediente giran alrededor del fondo y a la naturaleza del reclamo central, lo que representa el genuino terreno sobre el que mi representado fue explotado en la prestación del servicio en donde los elementos esenciales de la Relación Laboral, no obstante existir y ser probados, fueron censurados injustamente por el Tribunal AD QUEM o de Segunda Instancia" (foja 3).

En función de lo anterior, el recurrente pide a la Sala que case la sentencia de segundo grado y, en su defecto, mantenga "la condena por despido injustificado" a su favor (Cfr. foja 4).

Por su parte, el empleador, a través de su apoderado legal, se opuso dentro del término respectivo al presente recurso, según escrito que corre de fojas 8 a la 11 del cuadernillo de casación, en los siguientes términos:

Que el hoy demandante propuso ante las Juntas de Conciliación y Decisión una demanda por despido injustificado contra la empresa, en la que este Tribunal declaró que no existía relación laboral, decisión que fue apelada y el Tribunal Superior confirmó; este último fallo no fue objeto de ningún recurso.

En el proceso que nos ocupa, el Juzgado Tercero Seccional condenó a la empresa por considerar que sí existía relación de trabajo, basándose para ello en fichas del seguro social a favor del demandante, sentencia que fue apelada, y el casacionista no se opuso.

Mediante la sentencia de segunda instancia se revocó la de primera instancia con fundamento en dos razones: Que según jurisprudencia de la Sala el pago de seguro social, seguro educativo e impuesto sobre la renta no implica la relación laboral; y que la Junta de Conciliación y Decisión No. 15, en sentencia

PJ-15, de 24 de octubre de 1997, recaida en proceso por despido injustificado entre el casacionista y su representado, decidió que no existía relación de trabajo entre dichas partes y absolvió a la empresa, resolución que fue apelada y confirmada por el Tribunal Ad-quem. El opositor al recurso de casación afirma lo siguiente:

> "A nuestro criterio el recurrente en su recurso, no aporta ningún elemento que en su momento no haya sido analizado, tanto en las Juntas como en el Primer Tribunal Superior de Trabajo y que les llevaron a la conclusión que, entre el demandante y los demandados no existía una relación de trabajo.
>
> Dentro de ambos procesos, fue un hecho cierto la existencia de los contratos de arrendamiento, los cuales para ser validos (sic), no requieren necesariamente estar registrados en el Ministerio de la Vivienda como afirma el recurrente, y cierto es también, la carta firmada por el propio demandante, en la que solicita que para los efectos del seguro social, se le incluyera en la planilla.
>
> Estas pruebas documentales, que para nosotros son de gran importancia porque prueban la inexistencia de la relación laboral, en su momento fueron acusadas de falsa, al igual que ahora, sin embargo, han pasado ya cuatro (4) años desde que el demandante interpuso una denuncia penal por falsificación de firma y a la fecha, no ha podido aportar al proceso ninguna documentación que afirme, que efectivamente las firmas que aparecen en esos documentos son falsas.
>
> También alega el recurrente, que la decisión del Primer Tribunal Superior de Trabajo, en el sentido de tomar en cuenta el fallo de la Junta de Decisión y Conciliación (sic) es erróneo, porque en la Junta se pedía despido injustificado y en el Juzgado Tercero el pago de derechos adquiridos.
>
> Al respecto tenemos que disentir con el argumento presentado por el recurrente, ya que no tendría sentido que el propio Tribunal Superior de Trabajo, después de haber confirmado el fallo de la Junta, que estableció que entre las partes no existió la relación laboral, pudiera fallar en forma diferente siendo las partes y los hechos los mismos, sólo sé varía en lo pedido (sic).
>
> Por último, es importante destacar que la sentencia que se pretende CASAR, revoco (sic) el fallo de primera instancia proferido por Juzgado Tercero de Trabajo, el cual reconocía la existencia de la relación de trabajo, sin embargo, en su escrito el recurrente le solicita a los Honorables Magistrados, que revoquen la misma y que en su lugar se ordene y mantenga la condena por despido injustificado, al respecto debemos señalar, que nuestros representados en ningún momento han sido condenados por despido injustificado" (fojas 10-11).

Por las razones antes expuestas, el opositor pide a la Sala que no case la sentencia recurrida.

Esta Superioridad observa que el actor en su escrito de casación sólo cita y explica el concepto de la presunta infracción incurrida contra el artículo 62 del Código de Trabajo, además de transcribir los artículos 775, 778 y 768 de dicho Código, por lo que se centrará en examinar el referido cargo en relación con el artículo 62 con los artículos 775, 778 y 768 del referido Código.

También se percata la Sala que el casacionista incurre en el error de solicitar que se case la sentencia impugnada y se mantenga la condena por despido injustificado a favor de su representado. Esto evidentemente constituye una

equivocación del recurrente porque en autos no consta que el trabajador haya sido favorecido en otra instancia con resolución estimatoria en tal sentido.

El argumento medular del actor por el cual éste estima que debe ser anulada la sentencia proferida por el Tribunal Ad-quem y mantenerse la dictada por el Juzgador de primera instancia, estriba en que el Tribunal de apelación desconoció la existencia de relación de trabajo entre el señor Patricio Hawthorne Sterling y la empresa El Paso, S.A., decisión que en su opinión es violatoria del artículo 62 enunciado.

La Sala considera que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que el Tribunal de alzada pronunció su decisión -que esta Sala de casación comparte- revocatoria de la sentencia del Juzgador de primer grado, fundamentándose en las constancias procesales, pruebas existentes en el proceso común laboral instaurado entre las partes, además de las disposiciones jurídicas aplicables del Código Laboral. Parte de las consideraciones de la sentencia de 25 de mayo del 2000 impugnada explican lo siguiente:

> "Con relación a la carga de la prueba, fuera de que no es tan amplia, en este caso, en donde el demandante aduce la existencia de una relación, y ésta es negada por la demandada, queda a cargo del demandante el probar que sí existe la relación y no a la demandada el probar que no.
>
> Vale la pena mencionar que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: 'el pago de cuotas del Seguro Social, Seguro Educativo e Impuesto Sobre la Renta no implica necesariamente relación laboral'. (Sentencia: 7 de mayo de 1976, Ricardo Arturo Valdés Perkins -vs- Empresa Colonial, S.A.).
>
> En este mismo sentido debemos manifestarnos sobre la existencia de contratos simulados. No basta que se haga mención de los artículos del Código de trabajo; el demandante debe probar la existencia de esta simulación. La única prueba aportada, para esto, son las fichas del Seguro Social, que ya fueron analizadas y como se dijo anteriormente las fichas del Seguro Social no implican necesariamente que haya existido una relación laboral entre las partes.
>
> Por otra parte, ya este Tribunal se había manifestado, en proceso anterior entre las mismas partes (fallo del 15 de febero del año 2000, firmando los magistrados Zamorano, De Icaza y Villalobos), en el cual se confirmó la sentencia de la Junta de Conciliación y Decisión del 24 de octubre de 1997, en la cual la Junta no reconoció la existencia de la relación de trabajo" (foja 122).

A juicio de la Sala, el Tribunal yerra cuando afirma que negada la relación de trabajo la carga de la prueba recae en el demandante. Según el artículo 737, numeral 1, del Código de Trabajo, probada la prestación del servicio personal se presume la relación de trabajo, salvo prueba en contrario, por tanto, a quien correspondía probar en contrario era a la demandada. Pero ocurre que en autos reposa prueba documental aportada por la actora, que no ha sido desvirtuada y que está, además, corroborada por testigos.

La Sala estima que el Ad-quem ha procedido en derecho al valorar las pruebas que reposan en autos, por cuanto los elementos de convicción existentes en el proceso fueron justipreciados de acuerdo a la sana razón que regula el artículo 732 del Código de Trabajo.

En efecto, las pruebas documentales y testimoniales, examinadas demuestran que entre la compañía el Paso, S. A. y Patricio Hawthorne Sterling no existía vínculo laboral sino una relación jurídica de derecho común.

Los documentos identificados como talonarios o fichas de la Caja de Seguro Social a nombre de Patricio Hawthorne Sterling, que se observan de fojas 20 a la 26 del expediente principal, no acreditan el vínculo laboral que alega el casacionista, tomando en consideración que de acuerdo a la Nota S/N aparentemente suscrita por Patricio Hawthorne, la cual reposa a fojas 16 ibídem, hubo un convenio entre el representante legal de la compañía demandada y el señor Hawthorne Sterling para que éste pagara las cuotas obrero patronales a la Caja de Seguro Social, a través de la empresa demandada, para así obtener las prestaciones y beneficios que concede la Ley a los asegurados de dicha institución pública.

Hilado a lo anterior, a fojas 9, 10 y 11 del dossier laboral, yacen sendos contratos de arrendamiento, el tercero de los cuales consiste en un sub-arriendo, entre compañía El Paso, S. A., que figura como arrendadora, y los señores Omar Renier Sevilla y Patricio Hawthorne Sterling, en calidad de arrendatarios, sobre parte del local comercial denominado Billar El Paso. A estos últimos, según los citados contratos, la empresa arrendadora (propietaria) les alquiló la parte de dicho local dedicado al "juego de boliche", comprometiéndose los arrendatarios a pagar la suma de cien balboas diarios.

Los dos primeros contratos fueron acordados por un término de tres (3) meses prorrogables y el tercero por un año, también prorrogable, según se aprecia en la cláusula cuarta de los mismos. El primero de ellos se pactó desde el 1 de septiembre de 1992 hasta el 1 de diciembre de 1992; el segundo, desde el 20 de enero de 1993 hasta el 20 de abril de 1993; y el tercero, desde el 20 de enero de 1996 hasta el 20 de enero de 1997.

Respecto de dichos contratos, el casacionista alega que interpuso denuncia por falsedad de su firma, ya que asegura que él no suscribió los referidos convenios; sin embargo, en el proceso no consta prueba alguna que acuerpe su aserción, por lo cual ésta resulta irrelevante.

A juicio de los sucritos Magistrados, tampoco existe relación de trabajo como así lo reconoció el Juzgador Ad-quem, porque no hay evidencias de la subordinación jurídica o bien dependencia económica entre la empresa demandada y quien alega ser empleado de ésta. Esto es así porque según el inciso segundo del artículo 62 del Código de Trabajo, que se estima violado, "Se entiende por relación de trabajo, cualquiera sea el acto que le dé origen, la prestación de un tabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o de dependencia económica", en relación a lo cual esta Superioridad ha dicho que basta la presencia de por lo menos una de estas dos circunstancias prescritas por la norma jurídica para que se configure el vínculo de naturaleza laboral, situación que no se ha producido en el presente caso.

En mérito de lo expuesto, lo pertinente es desestimar el recurso de casación analizado, y a ello se aboca la Sala.

Consecuentemente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (Casación Laboral), administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 25 de mayo de 2000, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, que revocó la sentencia No. 7, fechada el 25 de febrero de 1999, expedida por el Juzgado Tercero Seccional, dentro del proceso común de trabajo entre Patricio Hawthorne Sterling y la empresa El Paso, S. A. y/o Nora Rodríguez de Rodríguez.

Sin costas.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO BERNARDINO GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE ORIEL ERNESTO JARAMILLO, CONTRA LA SENTENCIA DE 16 DE NOVIEMBRE ED 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ORIEL ERNESTO JARAMILLO -VS- ARISTIDES DE ICAZA HIDALGO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Bernardino González Jr., apoderado judicial principal del señor ORIEL ERNESTO JARAMILLO PEREZ, interpuso recurso de casación laboral contra el auto de 16 de noviembre de 1999, dictado por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial para resolver solicitud presentada dentro del proceso ejecutivo promovido por ORIEL ERNESTO JARAMILLO -VS- ARISTIDES DE ICAZA HIDALGO.

Como antecedente del caso tenemos que, la Junta de Conciliación y Decisión, dentro de un proceso laboral por despido injustificado, emitió sentencia de 13 de noviembre de 1989 y condenó a "La Exitosa de las Provincias Centrales y Aristides De Icaza Hidalgo a pagarle a Oriel Jaramillo la suma de B/.3,464.20 en concepto de indemnización, más salarios caídos que van desde la fecha del despido hasta la ejecutoria de la sentencia". Dicha decisión no incluía los intereses y recargos contenidos en los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo.

Mediante Auto No.41 de 15 de septiembre de 1999, el Juzgado de Trabajo de la Sexta Sección, libra mandamiento de pago contra el demandado por la suma de B/.41,748.31, que representa la indemnización, salarios caídos, costas judiciales y costas de ejecución. A solicitud del demandante el juzgador de primera instancia adiciona el auto ejecutivo en el sentido de decretar embargo sobre varios bienes inmuebles del demandado, según autos No. 43 y 52. No obstante, mediante Auto No.51 de 4 de octubre de 1999 el juzgador de primer grado negó por improcedente la solicitud de adición del auto ejecutivo presentada por el demandante.

El citado Auto No. 51 de 4 de octubre de 1999, fue apelado por la parte demandante y el Tribunal Superior de Trabajo al resolver el recurso lo confirmó.

Antes de resolver el presente recurso de casación laboral, la Sala observa que el mismo tiene errores que lo hacen inadmisible a la luz de nuestro ordenamiento jurídico laboral, por las razones que a continuación se explican.

En primer lugar, según lo preceptuado por el artículo 925 del Código de Trabajo, son susceptibles del recurso de casación laboral las sentencias o autos dictados por el Tribunal Superior de Trabajo que ponen fin al proceso o imposibilitan su continuación, y en el caso subjúdice el auto dictado por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial el 16 de noviembre de 1999, no pone fin al proceso, sino que resuelve confirmar el Auto No.51 de 4 de octubre de 1999, el cual niega la solicitud de aplicar intereses y recargos legales a las sumas de dinero que el demandado le adeuda al demandante en concepto de prestaciones laborales, dentro de un proceso ejecutivo laboral.

Cabe advertir que el casacionista se limita a citar como violadas normas procedimentales y no cita ni explica qué norma laboral que consagre derechos subjetivos fue violada por la resolución recurrida, tal como lo exige el numeral 3 del artículo 926 del Código de Trabajo.

En ese sentido, como la resolución recurrida en casación no es de aquellas contra las cuales la ley permite promover este recurso, debe rechazarse de plano como lo preceptúa el artículo 928 del Código Laboral.

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación laboral interpuesto por el licenciado Bernardino González Jr., apoderado judicial principal del señor ORIEL ERNESTO JARAMILLO PEREZ, contra el Auto de 16 de noviembre de 1999, dictado por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial para resolver solicitud presentada dentro del proceso ejecutivo promovido por ORIEL ERNESTO JARAMILLO -VS- ARISTIDES DE ICAZA HIDALGO.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL INTERPUESTO POR EL LCDO. CARLOS DEL CID EN REPRESENTACIÓN DE JOSE ALPIDIO JIMENEZ EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE 19 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JOSE ALPIDIO JIMENEZ VS. COMPAÑIA PANAMEÑA DE ACEITES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Carlos del Cid en nombre y representación de ALPIDIO JIMENEZ ha propuesto recurso de casación contra la Resolución de 19 de mayo de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del Proceso Laboral:JOSE ALPIDIO JIMENEZ -vs- COMPAÑIA PANAMEÑA DE ACEITES, S. A.

Del recurso se le corrió traslado a la empresa de acuerdo a lo previsto en el artículo 927 del Código de Trabajo, y la misma hizo uso de su derecho de oposición a este medio de impugnación extraordinario, mediante escrito de 19 de junio de 2000.

ANTECEDENTES DE ESTE RECURSO

La génesis de este recurso de casación descansa en un proceso ordinario en reclamo de prestaciones laborales en concepto de indemnización por despido indirecto que asciende a la cuantía de B/.23,032.13.

Frente a los hechos de esta acción de laboral, el Juez Primero de Trabajo de la Primera Sección, por medio de la Sentencia N°38 de 28 de septiembre de 1998 decidió absolver a las empresas demandadas del pago de la suma pretendida por el trabajador en concepto de indemnización por renuncia justificada.

Disconforme el trabajador con la decisión del juzgador a-quo, propuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo.

DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO

El Tribunal Colegiado de Segunda Instancia al conocer de la alzada, emitió la Sentencia de 19 de mayo de 2000 por medio de la cual confirmó la Decisión del Juez a-quo considerando lo siguiente:

> "Para hablar con fundamento de la presencia de una situación enmarcada dentro de la figura en cuestión, la cual es acogida en nuestra legislación en el artículo 223 del Código de Trabajo, donde se señalan las causas que facultan al trabajador para dar por terminada la relación de trabajo por causas imputables al empleador,

> se hace necesario probar por parte de quien alega este hecho de que efectivamente existe la situación que acusa; en este sentido, y como ya lo hemos manifestado con anterioridad, observa esta Superioridad que la parte actora ha sido incapaz de probar sus afirmaciones. Así tampoco, de las pruebas aportadas por ambas partes se llega a la conclusión que ello se haya dado; muy por el contrario todo nos indica que no existe ninguna vinculación entre las pruebas que se trajeron al proceso y los hechos que afirma el demandante."

Este discernimiento jurídico, ha sido señalado como ilegal por parte del trabajador JOSE ALPIDIO JIMENEZ, por medio de su procurador judicial, al considerar que el Tribunal Superior de Trabajo quebrantó el mandato contenido en los artículos 197, 223, numeral 3, 732 y 812 del Código de Trabajo y la Cláusula 14 de la Convención Colectiva vigente, supuesto éste que lo condujo a proponer el presente recurso de casación.

Encontrándose el recurso en este estado los Magistrados que integran la Sala proceden a resolver lo pertinente.

DECISION DE LA SALA

Antes de adentrarnos al conocimiento de fondo de este asunto laboral, esta Corporación de Justicia deja claro que el recurso extraordinario de casación, en concordancia con el artículo 924 del Código de Trabajo, tiene como objeto enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales de segunda instancia que hacen tránsito de cosa juzgada y en las que sin esta última circunstancia pueden acarrear graves e irreparables perjuicios.

También cabe reiterar que para la formalización del referido medio de impugnación extraordinario, el escrito del casacionista debe cumplir con ciertas formalidades estatuidas en los artículos 925, 926, y 928 ibídem, con los cuales cumple el interesado.

Como corolario de la explicación vertida en párrafos anteriores, el análisis de los cargos planteados serán ponderados con los artículos 197, 223, numeral 3, 732 y 812 del Código de Trabajo y la Cláusula 14 de la Convención Colectiva vigente.

Fondo

Estima el casacionista que se ha infringido el artículo 197 del Código de Trabajo, cuyo tenor literal es el siguiente:

> "Artículo 197.- Las condiciones del contrato de trabajo solamente podrán ser modificadas:
>
> 1.- Por la convención colectiva de trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo en los casos y con las limitaciones previstas en este Código; y
>
> 2.- Por el mutuo consentimiento.
>
> En estos casos se permitirá la alteración siempre que no conlleve directa o indirectamente una disminución, renuncia, dejación o adulteración de cualquier derecho reconocido a favor del trabajador.
>
> La alteración de las condiciones de trabajo que infrinja esta norma será ineficaz y el trabajador podrá pedir a su opción, el cumplimiento de las condiciones contractuales originales o dar por terminado el contrato, por causa imputable al empleador".

La transgresión se sustenta argumentándose que la norma reserva al trabajador el derecho de aceptar o negarse a ser trasladado de una empresa a

otra. Que en el presente caso, la empresa demandada no pidió el consentimiento previo del trabajador JOSE ALPIDIO JIMÉNEZ para trasladarlo a otra compañía, tal como lo aceptó la empresa y que consta en el Acta N° 1261 de 19 de mayo de 1995. Expresa además el casacionista, que reposan en el expediente las cartas de suspensión por tres días consecutivos y tienen fechas de 9 y 12 de mayo de 1995, las cuales establecen con claridad que las mismas obedecieron a la negativa del trabajador de acceder a la orden de traslado. Agrega la recurrente que la oposición al traslado se debía a que, en esa otra empresa iba a realizar un trabajo que no conocía, estaba a mayor distancia de su residencia, e iba a ser sometido a horarios rotativos que afectarían más su salud.

Advierte este Tribunal de Casación que la controversia se circunscribe básicamente en el hecho de que el trabajador demostró que su renuncia al puesto de trabajo en la empresa Compañía Panameña de Aceites, S. A., fue justificada, debido a que fue objeto de traslado de una empresa a otra sin su consentimiento, aunado al hecho de que fue suspendido de manera sucesiva por no acceder a la pretensión de la empresa, y que el Tribunal Superior no reconoció, a pesar de que existen pruebas suficiente que acreditan tal situación. Adiciona el trabajador que, esta situación constituye alteración en las condiciones de trabajo.

Previo el análisis de este debate laboral esta Sala Tercera comparte la apreciación que tiene el trabajador de lo acontecido puesto que, lo decidido por el Tribunal Superior de Trabajo no es compatible con las pruebas que reposan en los antecedentes de este recurso de casación.

Esto lo afirma el tribunal de Casación , en virtud del documento público que milita de foja 4 a la 7 de los antecedentes, que corresponde al Acta de Conciliación N° 1261 de 19 de mayo de 1995 (esta prueba no fue objetada por la empresa en la demanda ni en la audiencia), y en la cual el señor ALPIDIO JIMÉNEZ consigna su disconformidad el traslado a otra empresa y con las reiteradas suspensiones de que era objeto por tal renuencia, además en donde se evidencia claramente la aceptación del representante del empleador de dichas suspensiones y del mencionado traslado. Cabe destacar que, esta última situación, posteriormente, fue negada por la empresa en la contestación del libelo de demanda (ver foja 15 del antecedente). Veamos textualmente lo manifestado por el Jefe de Personal Víctor Uribe en aquella diligencia administrativa de Conciliación:

> "La empresa mantiene la suspensión dada al señor Jiménez y de trasladarse a la istmica de plásticos después de haber conversado con el(sic); quiero aclarar que el señor Jiménez, en ningún momento se presentó a laborar a dicha empresa. La Empresa mantiene el traslado o que regrese a la empresa."

Aunado a lo anterior, otro elemento de relevancia que motiva a esta Corporación Judicial a ser consecuente con lo deprecado por el trabajador es que, a fojas 39 y 40 del expediente contentivo de la actuación tramitada en primera y segunda instancia, reposan dos suspensiones de labores, dirigidas al señor JIMÉNEZ, las cuales tuvieron efectos los días de 9 a 11 de mayo de 1995 y de 12 a 15 de mayo del mismo año respectivamente (T-4 Y T-5), pues llama la atención que en las mismas no se especifican detalladamente las razones que motivaron esas sanciones (situación distinta ocurre en las otras suspensiones- ver fojas 36 y 37 de los antecedentes), sólo se limitan a indicar "negarse rotundamente a cumplir con una orden de trabajo" y "al no acatar la orden impartida, clara, y precisa de trabajo como supervisor" circunstancias éstas que da lugar a pensar que las verdaderas razones estaban sostenidas en el hecho de que el trabajador se resistía a trasladarse a la otra empresa filial de la Compañía Panameña de Aceite, S. A., es decir, a Istmica de Plásticos, S. A.

Obsérvese que las fechas de dichas sanciones coinciden con el tiempo en que señor ALPIDIO JIMENEZ se apersonó a la Sección de Conciliación Individual de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, hoy, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para exponer su dificultad laboral

referente al traslado y sucesivas suspensiones. En este punto traemos a colación, el testimonio del señor Ursulo Crispiano Escobar Barragán, Secretario de Acta y Correspondencia de SITRAPA, quien a pesar de ser el único testigo por la parte trabajadora, corroboró algunos de los hechos y las pruebas traídos al proceso por el casacionista. En este sentido declaró el testigo que, tenía conocimiento de que el señor ALPIDIO JIMENEZ, dejó de laborar en empresa Compañía Panameña de Aceite, S. A., en virtud de que, lo habían trasladado a la Istmica de Plásticos, y que el demandante rechazó esta movilidad porque no le convenía, pues le perjudicaba en el horario, y en la distancia desde y hacia su hogar. Acotó el dirigente sindical, que tuvo conocimiento de dicho traslado, porque el señor JIMENEZ se acercó a su persona y al Secretario de Defensa del SITRAPA, para solicitarles orientación en su caso (ver foja 56 de los antecedentes). No obstante, el declarante, aunque manifestó que no recordaba exactamente el contenido de la carta que preveía las razones que dieron lugar a la suspensión del trabajador, repite casi textualmente lo que decía uno de los documentos contentivo de la sanción (ver foja 59): "Se negaba a cumplir ordenes(sic) impartidas", lo que confirma la apreciación de este Tribunal de que, las sanciones impuestas estaban estrechamente relacionadas con la resistencia del trabajador de trasladarse a otra empresa filial de la Compañía Panameña de Aceite, S. A.

Es importante en este tema del traslado, introducir lo previsto en la Cláusula 14 de la Convención Colectiva, debidamente autenticada por el Ministerio de Trabajo (también señala el demandante que sido violada por el Juzgador ad-quem - ver fojas 45 y 46 de los antecedentes), la cual condiciona la decisión de la empresa en estos menesteres, al consentimiento del trabajador. La cláusula preceptúa:

> "Cuando por necesidades del servicio, LAS EMPRESAS necesitan transferir a un trabajador de un Departamento a otro, o de una Empresa a otra, podrán hacerlo siempre que se trate de traslados dentro de una misma clasificación y salario, mediante el consentimiento del trabajador.
>
> No obstante se podrá transferir a un trabajador a un puesto de diferente clasificación y salario si el trabajador, actuando en total y absoluta libertad, decide que por una u otra razón le conviene".

En otras palabras, si el trabajador no consiente el traslado a otra empresa, su empleadora no puede obligarlo, por ningún medio, a que acceda a dicho cambio.

Por otro lado, en cuanto a que si el trabajador tenía razones para renunciar y ser acreedor de una indemnización, el artículo 223, numeral 3 del Código de Trabajo, en relación al artículo 197 arriba transcrito, estipula que es causa justa para que el trabajador de por terminada la relación de trabajo, con derecho a percibir la indemnización, el que el empleador, de manera unilateral, altere las condiciones de trabajo pactadas, y dicha alteración puede estar definida, inclusive, en el traslado arbitrario, y presiones por diversos medios, tal como ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

Al revisar la Resolución del Tribunal Superior de Trabajo, la misma no hizo alusión alguna al Acta de Conciliación N° 1261 de 19 de mayo de 1995, elemento este de vital relevancia ya que esta prueba, aunada a las cartas de suspensiones antes descritas, servían de sustento idóneo para la comprobación de la pretensión del trabajador. El señor JIMÉNEZ demostró que efectivamente la empresa dispuso su traslado hacia la sociedad Istmica de Plástico, S. A., pues así se deduce de lo que consta en la diligencia de conciliación que milita a fojas 4 a 7 de los antecedentes, situación que desvirtúa la negación del traslado planteada por la empresa demandada a lo largo del proceso, y lo manifestado por el Tribunal Ad-quem de que, no existe vinculación entre las pruebas y lo alegado por el recurrente.

El Tribunal Superior de Trabajo se limitó a valorar las pruebas referentes a la suspensiones, sin tomar en cuenta que el expediente había sido aportada el Acta de Conciliación en donde palmariamente la empresa, por medio de su Jefe de Personal, acepta que el señor ALPIDIO JIMENEZ había sido trasladado a otra empresa tal como ya lo hemos reproducido.

Por tanto, conforme a todo lo expresado este Tribunal de Casación, es de la opinión que procede la indemnización solicitada por el señor ALPIDIO JIMENEZ pues su renuncia obedeció a que le fueron alteradas las condiciones de trabajo al promover una serie de condiciones hóstiles para imponer al referido trabajador el traslado de una empresa a otra sin su consentimiento, por lo que se ha quebrantado lo previsto en el artículo 197, 223, numeral 3, 732 (valoración de pruebas, según la sana crítica) y 812 (un solo testigo no hace plena prueba, pero sí gran presunción) del Código de Trabajo y la Cláusula 14 de la Convención Colectiva vigente.

Se hace la aclaración de que si bien es cierto, las normas atinentes a valoración de pruebas no son revisables de manera aislada en el recurso de casación, no es menos cierto que, al confrontar el caudal probatorio con las motivaciones del Tribunal Superior de Trabajo, se ha verificado error de hecho en la valoración de la prueba, lo que ha permitido a esta instancia extraordinaria ponderar los argumentos del casacionista con el artículo 732 y 812 del Código de Trabajo. En este sentido existe jurisprudencia reiterada que alude a la posibilidad del Tribunal de Casación conocer de infracciones a normas de procedimiento, tal como lo exponemos a continuación:

> "Esto significa que el Tribunal de Casación conoce sólo de errores in judicando y no de errores in procedendo, salvo que se desprenda de las actuaciones, error de hecho en la valoración de pruebas que llevó a cabo el juez del conocimiento (Ver Sentencias de 24 de junio de 1997, 18 de abril de 1996, 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994), que en este caso serían los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo".(resaltado el de la Sala- ver Sentencia de 16 de junio de 1998)

En lo que atañe al monto de la indemnización que corresponde pagar al trabajador, la Sala manifiesta lo siguiente:

El cálculo de la indemnización a que tiene derecho el trabajador queda determinado así:

-Salario: B/.1127.72 mensuales.

-Inicio de labores: 12 de enero de 1970 (certificados de sueldo de la Caja de Seguro Social-foja 75 y ss.).

-Terminación de la relación de trabajo: 22 de mayo de 1995.

-Indemnización antes de la vigencia del Código de Trabajo (de 12 de enero a 1 de abril de 1972): 12 semanas.

-Indemnización después de la vigencia del Código de Trabajo (de 2 de abril de 1972 a 22 de mayo de 1995): 47 semanas

-Total de semanas: 59 semanas multiplicado por B/.260.26 (salario semanal) arroja como resultado: B/.15,355.34.

Por las razones expuestas, los Magistrados que integran la Sala Tercera (CASACION LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASAN la Sentencia de 19 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Circuito Judicial dentro del proceso laboral: JOSE ALPIDIO JIMENEZ -vs- COMPAÑIA PANAMEÑA DE ACEITES, S. A. en el sentido de que condena a la empresa COMPAÑIA PANAMEÑA DE ACEITES, S. A.

al pago de la la indemnización al señor JOSE ALPIDIO JIMENEZ, por la suma de B/.15,355.52 (25 años deservicio), por renuncia justificada al puesto de trabajo que desempeñaba en la misma, más lo intereses estipulados en el artículo 169 del Código de Trabajo.

Se fijan las Costas del Juicio en un 15% de la condena.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ARTURO HOYOS

Con todo respeto manifiesto que disiento del criterio adoptado por la Sala Tercera al resolver el recurso de casación laboral interpuesto por José Alpidio Jiménez dentro del proceso que entabló contra la Compañía Panameña de Aceites, S. A.

La prueba documental que se indica en la sentencia para considerar que se ha acreditado la orden arbitraria de traslado es insuficiente para tal propósito. En efecto, en la diligencia de conciliación el jefe de personal señaló que el demandante, que se había ausentado de sus labores, debía trasladarse "o que regrese a la empresa". De allí deduzco que el demandante tenía la opción, no la obligación, de trasladarse y que de no aceptarla debía regresar a su puesto original en la empresa. Creo, pues, que no se infringió el artículo 197 del Código de Trabajo.

Por lo antes expuesto y muy respetuosamente, salvo mi voto.

Panamá, fecha ut supra.

(fdo.) ARTURO HOYOS
MAGISTRADO
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR CARLOS DEL CID EN REPRESENTACIÓN DE JORGE CANO PINILLA, CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JORGE CANO -VS- MARIA JUDITH CANO DE CHACON O MARIA JUDITH CANO CATTAN (LA MISMA PERSONA) DUEÑA DE LA FARMACIA BAHÍA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Carlos Del Cid en nombre y representación de JORGE CANO PINILLA ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 25 de mayo de 2000 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Laboral: JORGE CANO -vs- MARIA JUDITH CANO DE CHACON o MARIA JUDITH CANO CATTAN (dueña de la Farmacia Bahía).

Del recurso se le corrió traslado a la parte empleadora de acuerdo a lo previsto en el artículo 927 del Código de Trabajo, y la misma no hizo uso de su derecho de oposición a este medio de impugnación extraordinario.

ANTECEDENTES DE ESTE RECURSO

La génesis de este recurso de casación descansa en un proceso ordinario en reclamo de prestaciones laborales en concepto de vacaciones y décimos tercer mes vencidos, proporcionales, salario y recargos de trabajo en los días domingos, días de fiesta y duelo nacional, y prima de antigüedad que asciende a la cuantía de B/.29,007.45.

Frente a los hechos de esta acción de laboral, el Juez Tercero de Trabajo de la Primera Sección, por medio de la Sentencia N° 46 de 20 de octubre de 1998 decidió absolver a MARIA JUDITH CANO DE CHACON o MARIA JUDITH CANO CATTAN (dueña de la Farmacia Bahía), del pago de prestaciones reclamadas.

Disconforme el trabajador con la decisión del juzgador a-quo, propuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo.

DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO

El Tribunal Colegiado de Segunda Instancia al conocer de la alzada, emitió la Sentencia de 25 de mayo de 2000 por medio de la cual confirmó la Decisión del Juez a-quo considerando básicamente lo siguiente:

> "Coincidimos con lo señalado por el Juez de primera instancia, al decir que los documentos probatorios presentados por la parte actora dentro del presente proceso, nos llevan a considerar que la pretensión incoada por éste no puede ser acogida positivamente, y acceder al pago de las reclamaciones interpuestas, toda vez que el mismo hace referencia al cumplimiento de obligaciones que tienen su origen en una relación laboral. no se puede percibir dentro del presente proceso la existencia de tal relación entre las partes, ya que como hemos observado a través de la presente encuesta que desatamos estamos ante la presencia de un negocio de tipo familiar, en donde tanto el padre como las hijas estaban involucrados, no sujetos entre ellos a un régimen de dependencia o subordinación jurídica que exige nuestra legislación para la configuración de una relación entre patrono y trabajador y la consecuente obligación del pago de un salario"

Este discernimiento jurídico, ha sido señalado como ilegal por parte del trabajador JORGE CANO PINILLA, por medio de su procurador judicial, al considerar que el Tribunal Superior de Trabajo quebrantó el mandato contenido en los artículos 34, 62, 64, 65, 66, 69, 82 y 735 del Código de Trabajo.

Encontrándose el recurso en este estado los Magistrados que integran la Sala proceden a resolver lo pertinente.

DECISION DE LA SALA

Antes de adentrarnos al conocimiento de fondo de este asunto laboral, esta Corporación de Justicia deja claro que el recurso extraordinario de casación, en concordancia con el artículo 924 del Código de Trabajo, tiene como objeto enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales de segunda instancia que hacen tránsito de cosa juzgada y en las que sin esta última circunstancia pueden acarrear graves e irreparables perjuicios.

También cabe reiterar que para la formalización del referido medio de impugnación extraordinario, el escrito del casacionista debe cumplir con ciertas formalidades estatuidas en los artículos 925, 926, y 928 ibídem, con los cuales cumple parcialmente el interesado.

Sostenemos que parcialmente se ha dado cumplimiento a las precitada exigencias, en vista de que el demandante ha señalado que la Sentencia de 25 de mayo de 2000 presuntamente quebranta normas, que ha sido calificada por la

doctrina como disposiciones adjetiva o de procedimiento, como lo son los artículos 735 (carga de la prueba) y 69 (presunción) del Código de Trabajo, y que no son revisables individualmente en esta vía procesal. Sobre este punto, la Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas, pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido quebrantadas.

Cuando la acusación se refiere exclusivamente a normas de carácter adjetivo, como en el presente caso, el cargo o los cargos quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, ya que así lo dispone el párrafo final del artículo 928 ibídem. Esta disposición recoge lo siguiente:

> "Artículo 928.- Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales". (subrayado es nuestro)

El Tribunal de Casación conoce de errores in judicando y no de errores in procedendo (Ver Sentencias de 25 de enero de 2000, 28 de junio de 1999, 3 de marzo de 1998, 27 de febrero de 1998, de 24 de junio de 1997, 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994).

Como corolario de la explicación vertida en párrafos anteriores, el análisis de los cargos planteados serán ponderados con los artículos 34, 62, 64, 65, 66, y 82 del Código de Trabajo.

Fondo

En virtud de que las disposiciones que se estiman infringidas, guardan estrecha relación en el tema del contrato de trabajo (subordinación jurídica y dependencia económica), las mismas serán confrontadas conjuntamente, con la Sentencia del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.

Estas normas son del tenor siguiente:

> "ARTICULO 34. Se computa en jornada, como tiempo de trabajo sujeto a salario:
>
> 1.- El tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición exclusiva de su empleador;
>
> 2.- El tiempo que un trabajador permanece inactivo dentro de la jornada, cuando la inactividad sea extraña a su voluntad o a las causas legales de suspensión del contrato de trabajo; y
>
> 3.- El tiempo requerido para su alimentación dentro de la jornada, cuando por la naturaleza del trabajo se haga necesaria la permanencia del trabajador en el local o lugar donde realiza su labor."
>
> "Artículo 62.- Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de ésta.
>
> Se entiende por relación de trabajo, cualquiera sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal en condiciones de

subordinación jurídica o dependencia económica.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

La existencia de la relación de trabajo determina la obligación de pagar salario."

"ARTICULO 63. Para la determinación de la relación de trabajo, o de los sujetos de la misma, se prescindirá de los actos y contratos simulados, de la participación de interpuestas personas como supuestos empleadores, y de la constitución u operación simulada de una persona jurídica en calidad de empleador."

"ARTICULO 65. Existe dependencia económica en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Cuando las sumas que percibe la persona natural que preste el servicio o ejecute la obra constituyen la única o principal fuente de sus ingresos;

2.- Cuando las sumas a que se refiere el ordinal anterior provienen directa e indirectamente de una persona o empresa, o como consecuencia de su actividad;

3.- Cuando la persona natural que preste el servicio o ejecuta la obra no goza de autonomía económica, y se encuentra vinculada económicamente al giro de actividad que desarrolla la persona o empresa que puede considerar se como empleador.

En caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo, la prueba de la dependencia económica determina que se califique como tal relación existente."

"Artículo 66.- Se presume la existencia del contrato de trabajo y de la relación de trabajo entre quien presta personalmente un servicio o ejecuta una obra, y la persona que recibe aquel o éstas."

El quebrantamiento al contenido mandatorio de las normas transcritas por parte del Tribunal de Segunda Instancia, según el recurrente obedece a que se desconoció que la señora María Cano Cattan era la dueña de la Farmacia, que la misma le impuso un horario de trabajo al señor JORGE CANO PINILLA, y que daba órdenes al resto del personal que laboraba en el establecimiento. Además estima que, no se aportaron pruuebas que evidenciaran que el negocio de la Farmacia Bahía era familiar.

La presente controversia laboral se circunscribe a la existencia o no de la relación laboral entre JORGE CANO PINILLA y María Judith Cano de Chacón o María Judith Cano Cattan, dueña de la Farmacia Bahía.

De acuerdo a las constancias procesales que obran en este expediente, observa este Tribunal de Casación que el argumento expuesto por el recurrente carece de fundamento jurídico, por varias razones a saber:

Es evidente que, entre el señor CANO PINILLA y la señora Maria Judith Cano Pinilla existe una relación de padre e hija. Consta en Autos, que a pesar de que el casacionista, debidamente representado, era regente de la Farmacia Bahía desde 1990 (ver foja 40 de los antecedentes), y era quien atendía el establecimiento, preparaba los medicamentos, y hacía los pedidos, no escapa de esta realidad el hecho de que, el precitado mantenía la imágen del que el negocio le pertenecía, y actuaba en consecuencia, aunque el negocio estaba a nombre de una de sus hijas. Esto lo afirmamos en virtud de dos declaraciones la una de Fernando Cano Pinilla (hermano del presunto trabajador) y la otra de César Lezcano Espinoza (ex

trabajador de la Farmacia Bahía) que obran a fojas 29 y 32 de los antecedentes respectivamente. Veámos que señalaron los testigos del recurrente:

(Fernando Cano Pinilla)

"P. Quién era el dueño del establecimiento Farmacia BAHÍA.

R. el dueño de la farmacia Bahía era el sr. JORGE CANO PINILLA

P. Diga como fue posible que la sra. MARIA JUDITH CANO CATTAN despidiera al sr. JORGE CANO PINILLA.

R. Sencillamente la farmacia estaba a nombre de la sra. MARIA CANO CHACON en la patente está". (subrayado es de la Sala)

(César Lezcano Espinoza)

"P. Diga si la farmacia BAHIA laboraba cuando usted trabajó allí, los domingos y día de fiesta nacional o Duelo nacional.

R. Sí como no, porque en varias ocasiones el sr. JORGE CANO me ponía el turno ese de los domingos, y días feriados". (subrayado es de la Sala)

Lo anterior confirma la apreciación del Tribunal Ad-quem, quien subrayó el hecho de que la situación que se plantea frente a nosotros para su decisión obedece a un típico negocio familiar, en las que se diluye inevitablemente la relación obrero patronal por las características propias de las relaciones familiares.

En adición a lo anterior, el recurrente no aportó prueba alguna del supuesto salario devengado por su trabajo o de la dependencia económica (cheques, planilla, sobres, o cualquier otro documento), y no se explica esta Superiridad Judicial, el por qué demoró tanto JORGE CANO, ocho años aproximadamente, para reclamar prestaciones que según él, nunca les fueron cancelados.

Por otro lado, no debe soslayarse el hecho de que, el señor JORGE CANO sólo se limitó a aportar pruebas tendientes a acreditar su calidad de regente de la Farmacia Bahía y el salario mínimo que debía devengar por dicha actividad profesional. El cargo de regentar una farmacia no constituye plena prueba para demostrar una relación de trabajo, pues puede darse el caso de que el regente sea o no trabajador de la farmacia, como ocurre en el caso in examine.

Por último, en lo que respecta al trabajo en días domingos, de fiesta y duelo nacional, si no se ha probado una relación de trabajo, el tribunal no puede pronunciarse sobre dicha pretensión, pues se entiende la inexistencia de un horario de trabajo que de cabida a este tipo de reclamación.

Como corolario de lo expresado, este Tribunal de Casación arriba a la conclusión de que no se han violado 34, 62, 64, 65, 66, 69, y 82 del Código de Trabajo.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera (CASACION LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la Sentencia de 25 de mayo de 2000, dentro del proceso laboral: JORGE CANO -vs- MARIA JUDITH CANO DE CHACON o MARIA JUDITH CANO CATTAN (dueña de la Farmacia Bahía).

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL INTERPUESTO POR EL LICDO. PEDRO A. CEDEÑO EN REPRESENTACION DE CHIRIQUI LAND COMPANY Y PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY LTD., CONTRA LA RESOLUCION DEL 22 DE JUNIO DE 2000, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EVANGELISTA RIOS VS CHIRIQUI LAND COMPANY Y PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

VISTOS:

El licenciado Pedro Cedeño, actuando en su calidad de apoderado judicial de CHIRIQUI LAND COMPANY Y PUERTO ARMUELES FRUIT COMPANY LTD., ha presentado recurso de Casación Laboral contra la Sentencia de 22 junio de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: EVANGELISTA RIOS -vs- CHIRIQUI LAND COMPANY Y PUERTO ARMUELES FRUIT COMPANY LTD.

Recibido el recurso, se emplazó a la parte contraria para que hiciera valer sus objeciones conforme lo prevé el artículo 927 del Código de Trabajo, sin que en el término de ley hubiese comparecido al proceso.

Una vez examinado el libelo, la Sala se percata que el recurso presentado no puede ser admitido, por las siguientes razones:

Consta en la resolución de 22 de junio de 2000, que el recurso de apelación presentado por CHIRIQUI LAND COMPANY Y PUERTO ARMUELES FRUIT COMPANY LTD., contra la sentencia N° 10 de 5 de abril de 2000 expedida por Juez Segundo de Trabajo de la Tercera Sección, fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Trabajo, en seguimiento a lo establecido en los artículos 554 y 914 del Código de Trabajo, toda vez que la cuantía a la que habían sido condenadas las empresas demandadas, era menor de quinientos balboas.

Recordemos en este contexto, conforme lo establece el artículo 554 numeral 1° del Código de Trabajo: que para los efectos de los recursos en los procesos de trabajo se considerará que la cuantía para el demandado, es la suma a que se le hubiese condenado.

No obstante, y siendo que el trabajador demandante también había apelado de la decisión de primera instancia, alzada a la que tenía derecho conforme a lo previsto en el numeral 2° del citado artículo 554 ibídem que establece que para el demandante la cuantía será siempre el valor económico de las prestaciones reclamadas, el Tribunal Ad-quem conoció de la reclamación laboral, modificando la sentencia del A-quo, sólo en el sentido de que la suma de B/.497.31 a la que habían sido condenadas las empresas CHIRIQUI LAND COMPANY Y PUERTO ARMUELES FRUIT COMPANY LTD., debía ser aplicada a la suma ya entregada por dichas empresas al trabajador, en concepto de entrega voluntaria.

De acuerdo a lo anterior, esta Sala ha de señalar al casacionista, conforme a la normativa que rige los procesos laborales en materia de cuantía, que el recurso presentado deviene inadmisible, toda vez que para el promotor del recurso, la cuantía del proceso asciende a los B/.497.31 que fueron condenados a pagar, mientras que el artículo 925 numeral 1° del Código de Trabajo establece como presupuesto para la presentación del recurso de Casación Laboral, que la cuantía sea mayor de mil balboas.

La norma en cita claramente establece lo siguiente:

"Artículo 925. El recurso de casación puede interponerse contra las sentencias y los autos que pongan fin al proceso o imposibiliten su

continuación, dictados por los Tribunales Superiores de Trabajo en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Cuando hubieren sido pronunciados en conflictos individuales o colectivos con una cuantía mayor de mil balboas;
....."
(El resaltado es de la Corte)

A tenor de lo expresado, procede en consecuencia negarle viabilidad al recurso presentado.

De consiguiente, la Sala Tercera, de Casación Laboral, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el Recurso de Casación interpuesto por el licenciado Pedro Cedeño, en su calidad de apoderado judicial de CHIRIQUI LAND COMPANY Y PUERTO ARMUELES FRUIT COMPANY LTD. dentro del Proceso Laboral: EVANGELISTA RIOS -vs- CHIRIQUI LAND COMPANY Y PUERTO ARMUELES FRUIT COMPANY LTD.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

RECURSO DE HECHO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GABRIEL LAWSON EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS STANZIOLA, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A CENTRO INTERNACIONAL DE MUEBLES, S. A., ISAAC BLASSER ALEXIS STANZIOLA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Gabriel Lawson, actuando en nombre y representación de Alexis Stanziola, interpuso recurso de hecho dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá le sigue a Centro Internacional de Muebles, S. A., Isaac Blasser y Alexis Stanziola.

En su recurso de hecho el apoderado judicial del señor Alexis Stanziola solicita a esta Sala que se admita y conceda la apelación que interpuso en nombre del señor Alexis Stanziola contra la resolución de 4 de abril de 2000, mediante la cual el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá fija como fecha para el remate del bien inmueble embargado dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo interpuesto por este Banco contra Centro Internacional de Muebles, S. A. Isaac Blazer Cweiber y Alexis Stanziola, el día 26 de mayo de 2000.

Entre los hechos fundamento de la petición, el recurrente señala lo siguiente:

"NOVENO: Dicha resolución de 4 de abril del 2000 es apelable al tenor de lo dispuesto en el artículo 1806 del Código Judicial y de la misma el apoderado judicial del Sr. STANZIOLA apeló dentro del término de su ejecutoria.

DÉCIMO: Mediante resolución de 12 de abril del 2000 se negó la apelación interpuesta en contra de la resolución de 4 de abril de 2000, alegando que la misma tiene evidente propósito de dilatar el

proceso.

UNDÉCIMO: Dentro de la ejecutoria de la resolución de 12 de abril, se solicitaron las copias para formalizar el presente recurso de hecho (dado que según el artículo 502 del Código Judicial los términos judiciales se suspenden en Semana Santa) y se retiran dichas copias dentro del término de tres días previsto en el artículo 1139 del Código Judicial." (f. 7)

El recurso de apelación interpuesto contra la resolución de 4 de abril de 2000, fue negado por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá el 12 de abril de 2000.

La apoderada judicial del Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá se opuso al recurso de hecho señalando que el mismo no se interpuso oportunamente de conformidad con el artículo 1137 del Código Judicial, porque las copias de la resolución de 12 de abril de 2000 fueron solicitadas después de haberse notificado la misma y explicó que los términos en el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá no se suspendieron durante los días 10, 11, 12 y 13 de abril, fundamentando esta aseveración en jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, según la cual, la suspensión de los términos judiciales en Semana Santa, contenida en el artículo 502 del Código Judicial, no es aplicable a los despachos que ejercen la jurisdicción coactiva. (f. 11 y 12)

La señora Procuradora de la Administración, mediante su Vista Fiscal N° 247 de 26 de mayo de 2000 (fs. 15 a 17), solicitó a esta Sala que no se admita el recurso de hecho presentado por el apoderado del señor Alexis Stanziola, porque hizo la solicitud de la copia de la resolución impugnada el 25 de abril de 2000, y tenía hasta el 18 de abril (martes de Semana Santa) para hacerlo. Esta explicación es sustentada con el análisis de las constancias de la notificación por edicto de la resolución de 12 de abril de 2000, fijado en los tableros del Juzgado Ejecutor el mismo día de su expedición y desfijado el 14 de abril de 2000, fecha ésta a partir de la cual, contaba con los dos días siguientes, o sea 17 y 18 de abril de 2000, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1137 del Código Judicial.

Finalmente, la señora Procuradora se manifestó contraria a lo expuesto por la parte recurrente, señalando que la solicitud de copias para formalizar el recurso de hecho no fue hecha dentro de la ejecutoria de la resolución de 12 de abril de 2000, porque los términos judiciales no se suspenden en los despachos que ejercen la jurisdicción coactiva, durante Semana Santa.

Luego del análisis de lo planteado en los escritos del recurso de hecho y de oposición al mismo, esta Sala concluye que les asiste la razón a la apoderada judicial del Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá y a la señora Procuradora de la Administración.

Tal como se observa, la resolución de 12 de abril de 2000 (f. 321 del expediente del proceso ejecutivo) fue notificada mediante edicto fijado por veinticuatro horas y desfijado el 14 de abril de 2000 (f. 322 del expediente del proceso ejecutivo). El licenciado Lawson presentó el 25 de abril del 2000 la solicitud de copias de la resolución de 4 de abril de 2000 y demás piezas procesales, en exceso de los dos días siguientes a la notificación por edicto del auto que le negó la apelación interpuesta contra éste. Esto es así, porque la suspensión de los términos judiciales durante la Semana Santa, no es aplicable a los despachos que tramitan procesos por cobro coactivo, tal como lo ha expresado anteriormente la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante su jurisprudencia.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 1141 del Código Judicial, lo procedente en el presente caso es no admitir el recurso de hecho interpuesto.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia,

administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de hecho presentado por el licenciado Gabriel Lawson, en nombre y representación de ALEXIS STANZIOLA, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá le sigue a CENTRO INTERNACIONAL DE MUEBLES, S. A., ISAAC BLASSER y ALEXIS STANZIOLA.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GABRIEL LAWSON EN REPRESENTACIÓN DE JULIO ALCEDO VELARDE, DENTRO DEL JUICIO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (CASA MATRIZ), LE SIGUE A LA HACIENDA LA HERRADURA, S. A. Y AL SR. JULIO ALCEDO VELARDE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Gabriel Lawson, actuando en nombre y representación de Julio Alcedo Velarde, interpuso recurso de hecho dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá (Casa Matriz) le sigue a Hacienda La Herradura, S. A. y a Julio Alcedo Velarde.

El apoderado especial del señor Julio Alcedo Velarde solicita a esta Sala que se admita el recurso de hecho presentado y se conceda la apelación contra el auto N° 237 de 23 de marzo de 2000, mediante la cual el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá embargó bienes y dineros de su representado.

Señala el apoderado del recurrente que la apelación interpuesta contra el auto N° 237 de 23 de marzo de 2000 fue negada mediante el auto N° 310 de 26 de abril de 2000, por improcedente en vista de que los ejecutados habían renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, pero a su juicio, la renuncia de trámites se refiere a la no presentación de incidentes y excepciones distintas a las de pago y prescripción, pero no a las apelaciones y otros medios de impugnación de las resoluciones judiciales en este tipo de procesos (f. 8).

La apoderada judicial del Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá se opuso al recurso de hecho señalando que el mismo no debe admitirse por las siguientes razones:

> "...El Auto N° 237 fechado 23 de marzo de 2000, se dicta dentro de un Proceso Ejecutivo Hipotecario y no de un Proceso Ejecutivo, y que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1801 del Código Judicial, su trámite es regulado por las normas de los Procesos Ejecutivos Hipotecarios. A manera de discusión, aún en el supuesto de que dicho auto fuera apelable en baso al artículo 1806 del Código Judicial, y contrario a lo que afirma el apoderado especial del señor JULIO CÉSAR ALCEDO VELARDE, el mismo se le notificó personalmente al Defensor de Ausente designado en la presente ejecución, el día 14 de abril del 2000; por lo que la apelación interpuesta contra dicha resolución, no sólo es improcedente por lo resuelto mediante Auto N° 310 de 26 de abril del 2000, sino también extemporáneo, ya que la apelación se interpone el día martes 25 de abril, es decir, fuera de término.
>
> Sobre este hecho debemos indicar que existe jurisprudencia de la

Sala de lo Contencioso Administrativo, específicamente de la propia Magistrada Sustanciadora del recurso de hecho que nos ocupa, que señala que la suspensión de los términos judiciales en Semana Santa no es aplicable a los despachos que ejercen la jurisdicción coactiva. (Recurso de Apelación interpuesto dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario por Cobro Coactivo propuesto por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ contra BERCELIO ANTONIO CERRUD). (f. 15)

La señora Procuradora de la Administración, mediante su Vista Fiscal N° 301 de 14 de junio de 2000 (fs. 19 a 21), solicitó a esta Sala que no se admita el recurso de hecho presentado por el apoderado del señor Julio Alcedo Velarde, porque no reúne los requisitos legales contenidos en el artículo 1141 del Código Judicial, ya que si bien el artículo 1806 del Código Judicial dispone que contra las resoluciones en los procesos por cobro coactivo podrá interponerse apelación en el efecto devolutivo; a tenor de lo dispuesto en el artículo 1768 del Código Judicial, en los procesos ejecutivos hipotecarios con renuncia de trámites como el presente, no se podrán proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción.

Finalmente, la señora Procuradora manifestó que este es el razonamiento que fundamenta el auto N° 310 de 26 de abril de 2000, mediante el cual se rechazo de plano por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución N° 237 de 23 de marzo de 2000, dictada dentro del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo seguido a Hacienda la Herradura, S. A. y a Julio César Alcedo Velarde.

Luego del análisis de las constancias procesales, esta Sala concluye que el presente recurso de hecho no debe admitirse, pero por razones distintas a las expuestas por los opositores, ya que incumple con el requisito contemplado en el artículo 1141 del Código Judicial que exige que para que proceda el recurso de hecho, el recurso de apelación debió ser interpuesto oportunamente y negado por el Juez.

Tal como se observa, en el auto que libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra Hacienda La Herradura, S. A. y Julio César Alcedo Velarde (fs. 59 a 61 del expediente del proceso ejecutivo), la sociedad anónima citada ha sido demandada en su calidad de deudora y el señor Julio César Alcedo Velarde, lo fue en su calidad de fiador solidario. Si bien nos encontramos ante un proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de domicilio y trámite de la sociedad Hacienda la Herradura (clausula décimo novena de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética N° 3936 de 28 de agosto de 1980, foja 30 del expediente del proceso ejecutivo), el señor Julio Alcedo Velarde, fiador solidario, sólo renunció al domicilio (cláusula vigésimo segunda de la escritura referida, foja 31) y no al trámite del proceso ejecutivo.

En el expediente del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo consta que fueron rematados y adjudicados al Banco Nacional de Panamá los bienes inmuebles que garantizaban la deuda por una suma menor al monto de ésta (fs. 136 a 142 del expediente del proceso ejecutivo), por ello el Juzgado Ejecutor sigue persiguiendo bienes del deudor y del fiador solidario, señor Julio Alcedo Velarde, tal como lo señala el artículo 1785 del Código Judicial, según el cual, puede acumularse ejecución hipotecaria o prendaria con ejecución común contra el deudor o fiador, o ambos, cuando además de las garantías reales, hubiere fianza personal, como en el caso del señor Alcedo Velarde.

Puede constatarse que el auto de embargo N° 237 de 23 de marzo de 2000 fue notificado al defensor de ausente, debidamente nombrado, posesionado y notificado del mandamiento ejecutivo, licenciado Alexis Valdés, el 14 de abril de 2000. Debió interponerse la apelación dentro de los dos días siguientes, y no fue sino hasta el 25 de abril de 2000 que el señor Julio Alcedo Velarde apoderó al licenciado Gabriel Lawson y éste presentó el recurso de apelación contra el auto que decretó embargo (fs. 216 y 217 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo).

Es conveniente puntualizar que el término de dos días correspondía al lunes 17 y martes 18 de abril de 2000, porque la suspensión de los términos judiciales contemplada en el artículo 502 del Código Judicial no es aplicable a los despachos que tramitan procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva, tal como lo ha expresado reiteradamente en su jurisprudencia esta Superioridad.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 1141 del Código Judicial, lo procedente es no admitir el recurso de hecho interpuesto.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de hecho presentado por el licenciado Gabriel Lawson, en nombre y representación de JULIO ALCEDO VELARDE, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá le sigue a HACIENDA LA HERRADURA, S. A. y JULIO ALCEDO VELARDE.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE REPACIÓN DIRECTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS

DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS HERRERA MORÁN, EN REPRESENTACIÓN DE EDUCACION AVANZADA, S. A., POR DAÑOS Y PERJUICIOS, OCASIONADOS POR UNA MALA Y Y DEFICIENTE ADMINISTARCIÓN DE JUSTICIA, POR LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, CON SEDE EN PENONOMÉ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera Morán, actuando en nombre y representación de EDUCACION AVANZADA, S. A., interpuso demanda de reparación directa por daños y perjuicios, ocasionados por una mala y deficiente administarción de justicia, por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial de Panamá, con sede en Penonomé.

Señala el recurrente que los demandados que conforman el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, profirieron la resolución de 30 de junio de 1997, mediante la cual no admitieron la demanda de amparo de garantías constitucionales impetrada por el demandante contra la orden de hacer contenida en la Resolución No. AMP/005 de 13 de junio de 1997, proferida por el Juez Primero del Circuito de Coclé del Ramo Civil. Esta resolución dictada por el Tribunal Superior fue revocada, por medio de la resolución de 8 de agosto de 1997, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y se ordenó admitir el amparo, por lo que la decisión adoptada por el Tribunal Superior refleja una deficiente y mala administración de justicia al omitir su deber de acoger la demanda de amparos de garantías constitucionales presentada por la sociedad de EDUCACION AVANZADA, S. A..

El Magistrado Sustanciador considera que la presente demanda de reparación directa es inadmisible por las razones que se detallan a continuación. En caso de que la actora se sienta ofendida por la resolución emitida por el Tribunal Superior, el Código Judicial prevé para estos casos la posibilidad de interponer el recurso de apelación para que el superior examine la decisión dictada por el Juez de primera instancia, tal como lo preceptúa el artículo 2616 de dicho cuerpo

legal. Como el Pleno de la Corte Suprema subsanó el error en que incurrió el Tribunal al revocar la resolución emitida por éste y al ordenar que se admita la acción de amparo de garantías constitucionales, resulta inaplicable el numeral 10 del artículo 98 del Código Judicial que establece que la Sala Tercera conocerá en materia administrativa "de las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos".

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de reparación directa interpuesta por el licenciado Carlos Herrera Morán, actuando en nombre y representación de EDUCACION AVANZADA, S. A., por daños y perjuicios, ocasionados por una mala y deficiente administarción de justicia, por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial de Panamá, con sede en Penonomé.

Notifiquese.

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, INTERPUESTA POR LICENCIADO MARCELINO JAÉN, EN REPRESENTACIÓN DE RIGOBERTO ENRIQUE PAREDES Y THILCIA ROBLES DE PAREDES, DENTRO DEL JUICIO POR COBRO COACTIVO QUE LES SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Licenciado Marcelino Jaén, en representación de RIGOBERTO ENRIQUE PAREDES Y THILCIA ROBLES DE PAREDES, dentro del Juicio por Cobro Coactivo que les sigue el Banco Nacional de Panamá.

La Procuradora de la Administración en su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consignada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, emitió concepto respecto de los hechos que generaron el presente Proceso por Cobro Coactivo, mediante la Consulta N° 298 de 6 de noviembre de 1998, visible a fojas 59 a 62 del expediente.

El solicitante fundamenta su pretensión en los artículos 749, numeral 5, 754 y 388 del Código Judicial, los cuales son del tenor siguiente:

> "Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.
> Son Causales de impedimentos:
> .....
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o por haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo....."
> (El Subrayado es nuestro)

"Artículo 754. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las

causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos (2) días siguientes al ingreso del expediente a su despacho exponiendo el hecho que constituya la causal.
....."
"Artículo 388. Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces."

A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera, las circunstancias presentadas hacen aplicables las normas transcritas referentes a las causales de impedimento, por lo que es dable acceder a la petición invocada en este caso.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, por lo tanto la separan del conocimiento del presente negocio, y ORDENAN designar al suplente que le corresponda para que conozca del asunto.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

JULIO DE 2000

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

EXHORTO LIBRADO POR LA PROCURADURÍA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PIREO, REPÚBLICA DE GRECIA, PARA HACER ENTREGA DE DEMANDA CONTRA LA COMPAÑÍA "SKYDOME CORP." MAGISTRADO PONENTE: CESAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia , conoce de la Carta Rogatoria procedente de la Embajada de Grecia, por la Procuraduría del Tribunal de Primera Instancia del Pireo, República de Grecia, relativa al requerimiento de la notificación a la compañía cuya razón social es "SKYDOME CORP", dentro del proceso que se surte en el Tribunal Múltiple de Primera Instancia de la Ciudad de Pireo (Sección Pleitos Marítimos).

El suplicatorio bajo análisis tiene como objeto que se notifique a la compañía cuya razón social es "SKYDOME CORP.", la cual está constituida en la ciudad de Panamá (Edificio Plaza Bancomer, Calle 50) de acuerdo y conforme a la legislación vigente, siendo la misma propietaria del buque "TRADEWIND ISLAND" el cual enarbola bandera panameña.

En este punto es importante destacar que la Sala Cuarta de la Corte Suprema es el ente idóneo para "recibir exhortos y comisiones rogatorias libradas por los Tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento", según lo establece el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial.

Es preciso determinar en primera instancia la existencia de alguna convención internacional entre el Estado requirente y el requerido, en este caso, Panamá, de manera que el procedimiento a seguir para el diligenciamiento del exhorto sea conforme a aquella.

En este sentido se observa que la petición formulada a través de la Embajada de Grecia se sustanciará en atención a la buena fe que deberá caracterizar a los países miembros de la comunidad internacional, y al principio de reciprocidad, tomando como marco legal el artículo 864 del Código Judicial Panameño, dado que la República de Grecia y la República de Panamá no han suscrito convenio alguno que rija la cooperación judicial de carácter internacional.

Dicho precepto contempla como requisito para acceder a la solicitud básicamente que la documentación aportada se suministre en idioma castellano producto de la traducción de interprete público autorizado, así como que dichos documentos se encuentren debidamente legalizados por el consulado o embajada panameña con funciones en el país del cual procedan o, en su defecto, por el representante consular o diplomático de una nación amiga. Cabe señalar que los documentos pueden ser autenticados mediante la incorporación de la Apostilla.

Las autoridades griegas adjuntan como único documento que sustenta su petición Demanda interpuesta por la compañía cuya razón social es "KARELL S.A" en contra de la compañía cuya razón social es "SKYDOME CORP.", la cual está constituida en la ciudad de Panamá. El requerimiento efectuado por la Procuraduría del Tribunal de Primera Instancia del Pireo, República de Grecia no ha sido acompañado de suficientes elementos de juicio sobre el proceso que se surte en la República de Grecia, de forma tal que se establezca el interés dimanante para acceder a la presente petición toda vez que la autoridad exhortante no adjunta copias de los antecedentes procesales del caso, ni un informe resumido del proceso y la dirección suministrada no es amplia.

Se observa que los documentos portan la acotación o apostilla y poseen el certificado de autenticación de Constantinos Matarangas Vice Cónsul de Panamá en

Pireo Grecia y la certificación de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá acreditando que Constantino Matarangas ejercía efectivamente el cargo de Vice Cónsul de Panamá en Pireo, Grecia el 10 de mayo de 2000; además, se observa que en la documentación aportada no hay una solicitud formal del Tribunal que solicita la asistencia judicial internacional.

Ante este escenario jurídico, esta Superioridad considera que no es viable acceder a la solicitado en el presente suplicatorio, toda vez que la documentación aportada no cumple con los requisitos mínimos para su diligenciamiento.

No obstante lo anterior, es preciso reiterar que la República de Panamá tiene a bien prestar auxilio judicial en torno a notificaciones de procesos extranjeros, siempre que reúnan un mínimo de requisitos fundamentales. Subsanados los errores aquí señalados, puede se la solicitud presentada a esta Superioridad a fin de prestarle el auxilio judicial correspondiente.

En mérito de lo expresado, los Magistrados que integran la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN NO VIABLE la solicitud de asistencia judicial procedente de la Embajada de Grecia, instaurada por el Tribunal de Primera Instancia de la Ciudad de Pireo, interpuesto por la compañía "KARREL , S. A." para lograr la notificación de la demanda interpuesta en contra de "SKYDOME CORP".

REMITASE el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores para su posterior devolución a las autoridades correspondientes.

Notifiquese y Cúmplase.

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO PENAL DE CARTAGO, COSTA RICA, DENTRO DE LA CAUSA PENAL NO.99-20172-345-PE SEGUIDA CONTRA JAIME MORA SANDI, POR EL DELITO DE ESTAFA EN PERJUICIO DE WALTER ZUÑIGA MOLINA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Nos ha sido remitido, a través de las autoridades diplomáticas costarricenses, la solicitud de asistencia judicial internacional, librada por el honorable Juez Penal de Cartago, para que luego de examinada la misma, a la luz de nuestro fuero, sea diligenciada en debida forma y se constituya en pieza del expediente que se lleva en la Fiscalía Adjunta de Cartago dentro la causa penal No.99-201072-345-PE contra JAIME MORA SANDI por el delito de estafa en perjuicio de WALTER ZUÑIGA MOLINA.

La solicitud in examine tiene como fin recabar la siguiente información:

"A)- Si la Compañía Comercial Miroma S. A. de Costa Rica es o ha sido deudora del Banco Alemán Platino.

B)- Quienes son los representantes de dicha empresa nacional en su país.

C)- Si la Referida empresa comercial Miroma S. A. ha tramitado

documentos de exportación de Café por medio del citado banco.

D)- Cómo fueron aplicados los pagos de las transacciones de exportaciones de café, donde haya intervenido la empresa Miroma S. A.

E)- Favor remitirnos además toda la información que sea útil para la investigación que se realiza en nuestro país, a raíz de dichas negociaciones."

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En base a lo establecido en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, corresponde a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, determinar la viabilidad de los exhortos y comisiones rogatorias libradas por tribunales extranjeros; así como el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

Observa la Sala, que si bien es cierto, la República de Panamá y la República de Costar Rica, son suscriptores de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, las mismas no pueden ser invocadas en esta ocasión. Esto es así, ya que, el artículo 2 de ambas, circunscribe el alcance de las Convenciones a los procesos en materia civil y comercial.

El expediente, en el cual se libró el exhorto, trata materia penal; como se desprende de las piezas procesales enviadas con la solicitud de asistencia judicial internacional; lo cual, lo sustrae del alcance de las convenciones.

Por otro lado, las autoridades panameñas y costarricenses, tampoco han suscrito convenios referentes a la asistencia judicial sobre recepción de pruebas en materia penal; por lo que, procede la revisión de la petición incoada a través de la reciprocidad ofrecida, para casos similares, por el Estado Requirente; tomando como parámetros, el respeto al ordenamiento positivo interno y la costumbre internacional.

Se debe precisar que la inexistencia de tratados o convenios bilaterales entre la República de Panamá y el Estado Requirente no es motivo para rehusar la práctica de auxilio internacional, dado que, la asistencia judicial, tal como ha mencionado esta Sala de la Corte en oportunidades anteriores, tiene su sustento en la buena fe de los Estados miembros de la Comunidad Internacional.

Luego de examinados los presupuestos legales para determinar la viabilidad de la solicitud, debemos considerar también los requisitos formales a tenor de nuestra legislación y el derecho internacional. Al respecto debemos indicar que la documentación aportada se encuentra debidamente legalizada a través de los conductos diplomáticos correspondientes.

Examinadas las formalidades, pasamos a considerar la petición efectuada por el Juez Penal de Cartago, República de Costa Rica.

La Honorable Juez Lidia Fallas Monge solicita información vital acerca de transacciones comerciales realizadas por la empresa costarricense COMPAÑÍA COMERCIAL MIROMA S. A. a través del Banco Alemán Platino, específicamente relacionadas con la exportación de Café. Para obtener tal información, debemos solicitarla a la entidad bancaria antes mencionada. Al respecto nuestra legislación vigente, prohibe, bajo el capítulo XIII de la Ley 1 de 2 de enero de 1998 (Ley Bancaria), denominado Reserva Bancaria, divulgar información sobre sus clientes o transacciones realizadas con sus clientes; salvo que éstos lo autoricen o medie solicitud formal de autoridad competente de conformidad con la ley (Artículo 85).

Nuestro ordenamiento comercial vigente señala como formalidad indispensable

para hacer u ordenar pesquisa o diligencia sobre la correspondencia, libros y demás papeles y documentos de comerciantes o corredores la acción exhibitoria.

> "Artículo 88. Ninguna autoridad, juez o tribunal, puede hacer u ordenar pesquisa o diligencia alguna, para examinar si el comerciante lleva o no debidamente sus libros de contabilidad mercantil, ni hacer investigación ni examen general de la contabilidad en las oficinas o escritorios de los comerciantes.
>
> Artículo 89. Tampoco podrá decretarse la comunicación, entrega o reconocimiento general de libros, correspondencia y demás papeles y documentos de comerciantes o corredores excepto en los casos de sucesión o quiebra, o cuando proceda la liquidación.
>
> Fuera de estos casos, sólo podrá ordenarse la exhibición de documentos respectivos, a instancia de parte legítima o de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan, tenga interés o responsabilidad en el asunto o cuestión que se ventila...
>
> ...Ninguna autoridad está facultada para obligar al comerciante a suministrar copias o reproducciones de sus libros (o parte de ellos), correspondencia o demás documentos en su poder. Cuando procediere obtener algún dato al respecto, se decretará la acción exhibitoria correspondiente...".

Siendo las cosas así, la Sala que no puede declarar la viabilidad plena de la solicitud, realizada por las autoridades costarricenses, en cuanto los puntos A), C), D) y consecuentemente el D); más, si considera viable el obtener la información señalada en el punto B); es decir, "Quienes son los representantes de dicha empresa nacional en su país."

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PARCIALMENTE VIABLE, la solicitud de asistencia judicial internacional efectuada por la Juez Penal de Cartago, República de Costa Rica y ordena que el punto B) de los solicitados, sea diligenciado a través de la Secretaría de la Sala, remitiendo un oficio a la Dirección del Registro Público, a fin de obtener dicha información.

Luego de diligenciado el exhorto, remítanse las actuaciones a la cancillería, para su posterior devolución a las autoridades costarricenses, previa anotación de su salida en libro respectivo.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARTA ROGATORIA

EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL No. 7 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, DENTRO DE LA CAUSA No. 607 CARATULADA "N.N. S/DELITO DE ACUSACIÓN PUBLICA QUE SE INSTRUYE EN CONTRA DE NORBERTO OSCAR BATTAGLIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Tratados ha ingresado a esta Sala Cuarta de Negocios Generales, mediante Nota A.J. No. 1048 de 23 de mayo de 2000, la Carta Rogatoria expedida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 7 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, dentro de la causa que se instruye en contra de NORBERTO OSCAR BATTAGLIA.

El proposito de la presente Carta Rogatoria es que las autoridades panameñas diligencien lo siguiente:

> "...solicito al señor Fiscal que remita a esta Fiscalía copia legalizada de las partes que se consideran de utilidad del sumario instruido contra Hermel Augusto Palacios Sáenz y, en especial, Norberto Oscar Battaglia, debiendo indicar concretamente si se requiere el cumplimiento de alguna medida con referencia al nombrado, como asimismo se haga saber si la maniobra investigada en Panamá puede haber tenido consecuencias en territorio argentino, de modo que se pueda sospechar que Norberto Oscar Battaglia hubiera cometido algún delito de acción pública en la República de Argentina..." (fs 5-6)

De acuerdo con el Código judicial en su artículo 101, numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia la función de recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por Tribunales extranjeros, determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

Ahora bien en cuanto al aspecto formal se aprecia que la documentación adjuntada a la presente carta rogatoria se encuentra debidamente autenticada con la acotación de la apostilla, requisito indispensable para el trámite de Exhortos, según el convenio por el cual se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos en el extranjero del cual las Repúblicas de Panamá y Argentina son partes.

Al analizar la viabilidad de la diligencia solicitada observamos que se trata de información acerca de un sumario que se sigue en la Fiscalía Primera de Circuito de Panamá, al ciudadano argentino NORBERTO OSCAR BATTAGLIA para así establecer según las autoridades argentinas "...la posible comisión de algún delito de acción pública en el territorio argentino..." (fs 5), en este sentido llama la atención a esta Superioridad el hecho que la información solicitada conforma un sumario que se sigue en nuestro país, misma que de ser enviada al estado exhortante podría constituirse en prueba para entablar un proceso similar que se le seguiría al prenombrado por un mismo hecho, vulnerandose de este modo la garantía fundamental consagrada en el artículo 32 de la Constitución Nacional que a la letra establece que "Nadie será Juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni mas de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria".

Aunado a lo anterior es preciso señalar que en el exhorto in comento no se anexan los escritos y resoluciones que fundamenten y motiven el mismo, así como tampoco se remite un informe del proceso seguido en la nación Argentina, requisitos estos establecidos en el artículo IV de la Convención Interamericana Sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, la cual ha sido suscrita por ambos países; por estos señalamientos esta Magistratura considera que es improcedente acceder a la solicitud proveniente de la sede Diplomática Argentina.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la comisión rogatoria librada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 7 de la ciudad de Buenos Aires Argentina y ORDENA que el mismo sea remitido a la Cancillería Panameña a través de la Secretaría de esta Sala, para que esta dependencia oficial lo devuelva a las autoridades Argentinas.

Notífiquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO NO. 335-2000 EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NO. 2 DE RIBIERA, LA CORUÑA, ESPAÑA LIBRA EXHORTO DENTRO DE LOS AUTOS CIVILES DE MENOR CUANTIA INTERPUESTO POR TRI MARINE INTERNATIONAL (PTE) LTD, CONTRA JUAN RAMON REPARAZ MAIZA, BARONA PROPERTIES INC. Y TRANSATUB S. A. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores ha ingresado a esta Sala Cuarta de Negocios Generales, mediante Nota A.J. No. 800 de 19 de abril de 2000, el exhorto librado por el Juzgado de Primera Instancia No. 2 de Ribiera, La Coruña, España Libra Exhorto Dentro De Los Autos Civiles de Menor Cuantía interpuesto por Tri Marine International (PTE) LTD, contra JUAN RAMON REPARAZ MAIZA, BARONA PROPERTIES INC. Y TRANSATUB S. A.

El propósito de la presente Carta Rogatoria es:

> "que con entrega de las adjuntas cédula de emplazamiento, copia de la demanda y documentos, se emplace a quien se dirá a continuación, a fin de que dentro del plazo de VEINTE DÍAS comparezca en autos en legal forma mediante Abogado y Procurador y conteste a la demandada, bajo el apercibimiento de que no efectuándolo será declarado en rebeldía, siguiendo el juicio su curso, dándose por precluído el trámite de contestación a la demanda, notificándose en la sede del Juzgado dicha resolución y las demás que se dicten
> .....
> Demandado a emplazar:
> BARONA PROPERTIES INC.
> C/37 Perejil, Edificio D. Alejandro, planta baja, Panamá..."

De acuerdo al Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

Esta superioridad al analizar la documentación anexada a la presente carta rogatoria aprecia que la misma se encuentra debidamente presentada, ya que al ser tramitada por vía diplomática no es necesario la legalización de la misma, al tenor de lo establecido en el artículo VI de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de la cual son suscriptores el Estado Español y el Panameño.

De igual forma apreciamos que la diligencia solicitada no vulnera nuestro ordenamiento jurídico, ya que se trata de la notificación de una demanda civil y se señala la dirección exacta de la empresa a notificar, así como se adjuntan copias del proceso entablado en el país exhortante, siendo entonces procedente acceder a la solicitud proveniente de la sede diplomática española.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

DECLARA VIABLE la comisión rogatoria librada por el Juzgado de Primera Instancia No. 2 de Ribiera, La Coruña, España, dentro De Los Autos Civiles de Menor Cuantía interpuesto por Tri Marine International (PTE) LTD, contra JUAN RAMON REPARAZ MAIZA, BARONA PROPERTIES INC. Y TRANSATUB S. A. y ORDENA que el mismo sea diligenciado por la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales, y una vez tramitado se proceda a remitirlo a la Cancillería Panameña a través de la Secretaría de esta Sala, para que esta dependencia oficial la devuelva a las autoridades españolas.

Notífiquese y Cúmplase.

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO DE INSTRUCCION DEL TRIBUNAL DE GRAN INSTANCIA DE AGEN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA SEBASTIAN DA SOLEDADE. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Tratados ha ingresado a esta Sala Cuarta de Negocios Generales, mediante Nota A.J. No. 1080 de 25 de mayo de 2000, la Carta Rogatoria expedida por la Juez de Instrucción del Tribunal de Gran Instancia de Agen, República de Francia, dentro del proceso seguido a SEBASTIEN DA SOLEDADE acusado de violación de una menor de 15 años con arma, violaciones bajo amenaza de arma, violación de domicilio y violación voluntaria.

El proposito de la presente Carta Rogatoria es que las autoridades panameñas diligencien lo siguiente:

> **"Proceder a la audición del Sr Maurice Da SOLEDADE domiciliado en DAVID**
>
> **Identificar y oír a una joven llamada GONZALES domiciliada en CALDERA y que vivió con DA SOLEDADE Maurice.**
> **Oir:**
> **-A la sra Aidée MIRANDA y a su hija domiciliadas en CALDERA provincia de CHIRIQUI**
> **-Al Sr Roberto SANTA MARÍA domiciliado en CALDERA**
> **-Al Sr ROJAS gerente de la residencia "Le Constructeur" en BOQUETTE**
> **-A la Sra Elise RIOS representante del distrito de BOQUETTE**
> **-Al Sr Alcalde de BOQUETTE entre 1995 y 1997**
> **-Al Sr ESPIRIO propietario de los Supermercados de DAVID..."**

De acuerdo al Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

Ahora bien, es preciso destacar que Panamá y la República Francesa no han celebrado convenio, tratado o protocolo que rijan o establezcan los requisitos y disposiciones indispensables para evaluar las solicitudes efectuadas a través de la vía de exhorto, por lo que la presente solicitud debe evaluarse tomando en cuenta el principio de reciprocidad y buena fe que debe primar entre la comunidad

internacional, respetando el ordenamiento interno panameño.

Así las cosas al evaluar el contenido de la presente carta rogatoria es preciso indicar que la misma cumple los requisitos formales exigidos como lo son la apostilla y la traducción al idioma español; sin embargo se aprecia que al tratarse de diligencias propias de un proceso penal como lo son la ubicación e interrogatorios a distintas personas no se suministran los datos completos para la localización de éstas, ni los cuestionarios a los cuales deben ser sometidas, por lo que ante estas carencias no es procedente acceder a la petición incoada por el Juzgado de Instrucción del Tribunal de Gran Instancia de Agen, República de Francia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la comisión rogatoria librada por el Juzgado de Instrucción del Tribunal de Gran Instancia de Agen, República Francesa, dentro del proceso penal seguido contra SEBASTIAN DA SOLEDADE.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

ELSA GRAHAM BARKERS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DEL ESTADO DE NUEVA YORK, CONDADO DE KINGS, EN LA CUAL DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE MANTIENE CON EL SEÑOR RICARDO ORTEGA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

En atención a poder especial visible a foja 1, conferido por la señora Elsa R. Graham al Licenciado Luis Felipe Vaughan, se ha presentado ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que sea reconocida y ejecutada en la República de Panamá, la sentencia extranjera de divorcio dictada el 16 de agosto de 1995, por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Kings, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial existente entre los señores Ricardo Ortega y Elsa R. Graham Bakers.

El apoderado judicial fundamenta principalmente, su solicitud en los siguientes hechos:

> "1.- Los esposos ELSA GRAHAM BARKERS y RICARDO ORTEGA contrajeron matrimonio el 3 de agosto de 1992, en el Juzgado Segundo Municipal de Colón, unión que duró por un tiempo, pero posteriormente surgieron incidencias sobre ésta pretensión personal.
>
> 2. El señor RICARDO ORTEGA hizo abandono absoluto de sus deberes de esposo, lo que motivó la demanda.
>
> 3.-Se procedió a su notificación respecto, tal como consta en la sentencia dictada.
>
> 4.-La acción promovida por mi mandante está contemplada en las leyes nacionales en l (sic) Derecho de la Familia. 5. Para el efecto

adjuntamos copia debidamente autenticada dictada por la Corte Matrimonial de la Corte Suprema del Estado de Nueva York."

ANTECEDENTES DEL CASO

La solicitud de exequátur surge como consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial, conformada por el señor RICARDO ORTEGA y ELSA GRAHAM BARKERS, mediante sentencia dictada el 16 de agosto de 1995 por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Kings.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 1410 del Código Judicial de la República de panamá, se le corrió traslado del presente negocio al Procurador General de la Nación para que emitiera concepto.

Mediante vista No. 25 calendada 6 de junio de 2000, visible a foja 11 del expediente, el señor Procurador estimó.

"...2.- Según la exigencia del numeral 2 de la norma aludida, se observa que la sentencia sometida al escrutinio de la hipótesis que configura dicho numeral, expresamente consigna que el tribunal de la causa determinó que el demandado quedó incurso en rebeldía. (F.7). Frente a tal circunstancia, atentatoria del orden público judicial panameño, no es factible acceder a la petición que general presente proceso de exequátur".

DECISIÓN DE LA SALA

Cumplido con todo el procedimiento establecido en el Código Judicial panameño a este respecto, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, pasa a conocer la solicitud presentada con la finalidad de examinar si la resolución extranjera es susceptible de ser reconocida mediante el trámite de exequátur.

Al ponderar los documentos que acompañan la solicitud con la opinión vertida por el Señor Procurador General, la Sala considera necesario puntualizar sobre los siguiente:

1. Que la solicitud de reconocimiento en cuestión, adjunta visible a foja 7 y 8 del cuadernillo, sentencia traducida al idioma español.

2. Que la parte resolutiva de la sentencia manifiesta lo siguiente:

"... habiendo sido el Demandado notificado por el servicios de notificación alterna; y no habiendo comparecido el Demandado y considerándosele en rebeldía; y la Demandante, habiendo solicitado ante esta Corte sentencia para recibir la asistencia compensatoria indicada en la citación y notificación; y habiendo la Corte aceptado prueba por escrito de notificación no-militar; y habiendo esta Corte considerado tal prueba y ejecutado por separado las cuestiones de hecho y su decisión y conclusiones de derecho, en misma fecha que la arriba indicada;..."

Igualmente, la sentencia judicial en examen, señala:

"... y se ORDENA, asimismo, y DECRETA¡ que, Se le instruye a la Demandante el enviar copia de la sentencia con notificación de su inscripción, al Demandado, a través de su abogado dentro del término de 30 días, a partir de hoy, y debe inscribirse bajo declaración jurada copia de la notificación ante el Secretario del Condado."

De lo anterior esta Sala observa, la participación en el proceso del

demandante el señor RICARDO ORTEGA, entendiéndose el concepto de rebeldía como: "Situación Procesal producida por la incomparecencia de una de las partes ante la citación o llamamiento judicial". (Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres, edición 1998). El estado de rebeldía del demandado desaparece al producirse una notificación, distinguida como notificación no-militar, practicada y aceptada por ese Tribunal de los Estados Unidos.

Por otro lado, se observa que la sentencia extranjera es resultado del ejercicio de una pretensión personal de efectos lícitos en nuestro país, se encuentra debidamente autenticada por la autoridad consular correspondiente y no violenta los principios del Derecho Internacional Privado reconocidos por nuestro derecho, llenando a cabalidad los requerimientos del Artículo 864 del Código Judicial.

Por todo lo antes expuesto, considera la Sala que la solicitud de ejecución de sentencia es viable conforme a lo establecido en los artículos 1409 y 864 del Código Judicial.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia extranjera dictada el día (16) dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995) por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Kings, Estados Unidos de Norteamérica, que disuelve el vínculo matrimonial que unía al señor RICARDO ORTEGA, portador de la cédula de identidad personal No. 3-95-359 y la señora ELSA GRAHAM BARKERS, portadora de la cédula de identidad personal número 3-88-136, ambos de nacionalidad panameña y AUTORIZA a la Dirección General del Registro Civil a realizar las anotaciones de lugar en su libro de divorcios, en los términos establecidos en la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JERARDO HERNANDEZ SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO PROFERIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE BERRIEN, ESTADO DE MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUE DISUELVE EL VINCULO MATRIMONIAL CON LA SEÑIRA LIZBETH OSIRIS HERNANDEZ. MAGISTRADA PONENTE MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

En el cuaderno contentivo de la solicitud de Ejecución de Sentencia Extranjera presentada ante esta superioridad por el Licenciado AGUSTIN SANTOS LEONE actuando en nombre y representación de JERARDO HERNÁNDEZ, esta sala expidió una resolución datada 22 de noviembre de 1999, mediante la cual se le concede el término de cuarenta y cinco (45) días a fin de que se notifique a la parte demandada señora LISBETH OSIRIS HERNANDEZ, de la sentencia de divorcio proferida en el Segundo Circuito Judicial, Condado de Berrien Estado de Michigan, Estados Unidos de América.

En tiempo oportuno el licenciado SANTOS LEONE presenta ante la Secretaría de esta Sala poder que le fuese otorgado por la señora LISBETH OSIRIS HERNÁNDEZ y solicita la ejecución de la sentencia extranjera en la República de Panamá.

En virtud de lo anterior, la sala entra a conocer el fondo de la solicitud que pretende se declare ejecutable en la república de panamá. Al verificar la documentación aportada concluye esta superioridad que la misma cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por los artículos 864 y 1404 del Código Judicial patrio, ya que en base a la certificación expedida el 13 de agosto de 1999 por JULIA MCKAY en su calidad de Jefa de Autenticaciones y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ostensible a foja 9 del cuaderno legal, se ha podido constatar que la señora MYLENE MARRONE DE RUIZ ejercía la representación diplomática de nuestra nación en la ciudad de Washintong el día 22 de julio de 1999, con lo que se perfecciona la autenticación de la sentencia in examine surtida por vía consular.

Aunado a lo anterior observamos que la sentencia extranjera objeto de estudio, es el producto de una pretensión personal de efectos lícitos en nuestro país, misma que se encuentra debidamente traducida al idioma español. En cuanto a la omisión señalada por esta Sala en relación a la omisión de la notificación de la demandada, se aprecia que la señora LISBETH OSIRIS HERNÁNDEZ solicita a través del licenciado SANTOS LEONE la ejecución de la referida resolución, lo cual consta a folios 28 a 30 del dossier, por lo que no se materializa el hecho de que dicho fallo haya sido dictado en rebeldía.

Por las consideraciones antes vertidas y toda vez que se ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 1410 de la citada excerta legal, es que este ente colegiado concluye que debe declarar ejecutable en la República de Panamá la sentencia que nos ocupa.

En mérito de lo anterior, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la Sentencia de Divorcio dictada por el Segundo Circuito Judicial Condado de Berrien Estado de Michigan Estados Unidos de América, calendada 1 de febrero de 1999, que declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre el señor JERARDO HERNÁNDEZ de nacionalidad norteamericana y la señora LISBETH OSIRIS HERNÁNDEZ de nacionalidad panameña, llevado a cabo el 2 de agosto de 1996 en la ciudad de Panamá; y en consecuencia, AUTORIZA a la Dirección General del registro Civil a realizar las anotaciones respectivas en el libro de divorcios en los términos establecido en la ley y en esta resolución.

Notifíquese y Cúmplase

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CAROLINA ESTHER GARCÍA IZOS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO NO. 98-03058 DICTADA POR LA CORTE DE DISTRITO DEL CONDADO DE TRAVIS DISTRITO JUDICIAL NO.126 DE TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN LA CUAL DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE MANTIENE CON EL SEÑOR CÉSAR ANTONIO SENTMAT ROSAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La señora CAROLINA ESTHER GARCÍA IZOS, mediante apoderado judicial, licenciado HAROLD F. RIVERA P., ha solicitado ante esta Sala, el reconocimiento y la ejecución de la sentencia de 28 de mayo de 1998, dictada por la Corte de Distrito del Condado de Travis, Distrito Judicial No.126, del Estado de Texas, Estados Unidos de América, por la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial

que la mantiene unida al señor CÉSAR ANTONIO SENTMAT.

ANTECEDENTES

El apoderado judicial de la solicitante basa su petición en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Nuestra mandante, ciudadana panameña, quien para la fecha residía en la Ciudad de Panamá, contrajo matrimonio civil con el señor CÉSAR ANTONIO SENTMAT ROSAS ante el Señor Juez Sexto Municipal del Distrito de Panamá, provincia de Panamá el Once de Julio de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).
>
> SEGUNDO: Los cónyuges, señores CÉSAR ANTONIO SENTMAT y CAROLINA ESTHER GARCÍA IZOS mi mandante, de común acuerdo decidieron poner término a la unión conyugal y mediante Apoderado Judicial solicitaron al Señor Juez Segundo del Distrito de Condado de TRAVIS, TEXAS, EE.UU., la disolución del vínculo matrimonial que los mantenía unidos.
>
> TERCERO: Substanciada la causa, mediante sentencia del 26 de mayo de 1998, el Juez Segundo del Distrito de Condado de TRAVIS, TEXAS, EE.UU., decretó el divorcio demandado por los señores CÉSAR ANTONIO SENTMAT y CAROLINA ESTHER GARCÍA IZOS, mi mandante.
>
> CUARTO: La sentencia cuya ejecución se solicita por este medio fue dictada a consecuencia de una pretensión personal.
>
> QUINTO: La sentencia no ha sido dictada en rebeldía, pues las partes comparecieron personalmente al proceso.
>
> SEXTO: La obligación para cuyo cumplimiento se procede es lícita en Panamá."

Se acompañaron a la solicitud, como pruebas, copia auténtica de la Sentencia de 26 de mayo de 1998, dictada por la Corte Distrital del Condado de TRAVIS, Estado de Texas, Estados Unidos de América, en idioma inglés; la correspondiente traducción y una certificación, expedida por el Registro Civil, donde se hace constar la inscripción del matrimonio habido entre los señores CAROLINA ESHTER GARCÍA IZOS y CÉSAR ANTONIO SENTMAT ROSAS.

Seguidamente, el expediente se remitió al señor Procurador General de la Nación, para que emitiera su opinión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1410 del Código Judicial. Mediante Vista No.28 de 21 de junio del año en curso, concluyó lo siguiente:

> "...Constituidos cada uno de los presupuestos que señala el Código Judicial, esta Procuraduría concluye que la sentencia extranjera proferida el 26 de mayo de 1998, por la Corte del Distrito del Condado de Travis, Distrito Judicial N°126, Estado de Texas, de los Estados Unidos de América, que decretó el divorcio entre la señora CAROLINA ESTHER GARCÍA IZOS y el señor CÉSAR ANTONIO SENTMAT ROSAS, materia objeto del presente negocio, no cumple con los requisitos exigidos por nuestra legislación procesal, razón por la cual estimo que no debe accederse a la pretensión que originó el presente proceso de exequátur."

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala considerar la solicitud presentada. La señora CAROLINA ESTHER GARCÍA IZOS, ha solicitado se reconozca la sentencia de divorcio dictada por la Corte del Condado de Travis, del Estado de Texas, Estados Unidos de América, por la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial que la

mantiene unida al señor CÉSAR ANTONIO SENTMANT ROSAS, toda vez que cumple con los requisitos exigidos por nuestra legislación, para dicho reconocimiento.

Por su parte el señor Procurador opina que la sentencia, in examine, no es lícita en nuestro país; toda vez que, viola lo preceptuado en el numeral 2, del ordinal 10, del artículo 212 del Código de La Familia; es decir, que para que pueda solicitarse la disolución del vínculo matrimonial, por el mutuo consentimiento de los cónyuges, deben haber permanecido unidos en matrimonio por los menos durante dos (2) años.

Si observamos la certificación expedida por el Registro Civil de Panamá, el matrimonio celebrado entre los señores CAROLINA ESTHER GARCÍA IZOS y CÉSAR ANTONIO SENTMAT ROSAS, se llevó a cabo el día 11 de julio de 1996, en el Juzgado Sexto Municipal del Distrito de Panamá; mientras que, la sentencia que hoy nos ocupa, fue dictada el día 26 de mayo de 1998 (v.fj.11). Los señores GARCÍA IZOS y SENTMAT ROSAS, al momento de darse la sentencia, sólo habían permanecido unidos en matrimonio, un año, diez meses y quince días.

Por lo tanto, se deja de cumplir con lo establecido en el numeral 3, del artículo 1409 del Código Judicial; es decir que la obligación cuyo cumplimiento se haya procedido, sea lícita en Panamá. La sentencia dictada en los Estados Unidos de América, en el presente caso, colisiona con nuestro derecho, al disolver el vínculo matrimonial sin exigir, a los cónyuges, una de las dos formalidades indispensables para solicitar el divorcio por la causal número 10 del articulo 212 del Código de la Familia; lo cual la hace ilícita, ante nuestro fuero interno.

Luego del examen de las piezas que conforman el expediente y efectuadas nuestras consideraciones, vemos que le asiste la razón al Señor Procurador General de La Nación, por lo que estamos de acuerdo con su opinión de no reconocer la sentencia dictada por la Corte del Distrito del Condado de Travis, Distrito Judicial No.126 de Texas, Estados Unidos de América; hoy in examine.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO RECONOCE y DECLARA NO EJECUTABLE la sentencia de divorcio dictada por la Corte del Distrito del Condado de Travis, Estado de Texas, Estados Unidos de América, por la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial que mantiene unidos a los señores CAROLINA ESTHER GARCÍA IZOS o CAROLINA ESTHER SENTMAT y CÉSAR ANTONIO SENTMAT.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ENRIQUE ALBERTO ORTEGA MORGAN SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA, DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DEL ESTADO DE NUEVA YORK, CONDADO DE KINGS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR LA CUAL SE DECLARA DISUELTA LA UNIÓN MARITAL QUE MANTIENE CON LA SEÑORA CHARLETTE PETULIA ORTEGA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Diógenes Horacio Luna Reina, actuando en nombre y representación de ENRIQUE ALBERTO ORTEGA MORGAN, ha concurrido ante este

Tribunal, para que se declare ejecutable en la República de Panamá la sentencia de Divorcio No. 13920 decretada en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Kings, fechada el día 4 de octubre de 1996, visible a fojas 4 a 7 del cuadernillo).

Cabe destacar que de foja 1 obra el poder otorgado al licenciado Diógenes Horacio Luna Reina, conferido ante la Cónsul General de Panamá en Nueva York, el cual se encuentra debidamente apostillado .

Se sustenta la solicitud, básicamente, en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Que mi mandante ENRIQUE ALBERTO ORTEGA y CHARLETTE PETULIA ORTEGA cuyo nombre completo según el certificado de matrimonio es CHARLETTE PETULIA THOMAS DE ORTEGA, con pasaporte No. 110144152 de nacionalidad estadounidense, contrajeron matrimonio ante el Juzgado Segundo Municipal de Panamá el día 20 de enero de 1989, dicho matrimonio consta inscrita al tomo 235 de matrimonios de la provincia de Panamá, asiento 705.

SEGUNDO: Que según puede apreciarse en la Sentencia Extranjera que solicitamos se reconozca y ejecute, no se configura rebeldía, pues tanto mi mandante como la contraparte participaron en el proceso de divorcio.

TERCERO: Que la demanda ha sido notificada personalmente a la demandada dentro de la Jurisdicción de Tribunal, según se hace constar expresamente en la Sentencia, en cumplimiento del numeral 2 del artículo 1409 CJ para el Reconocimiento y Ejecución de Sentencia Extranjera, ya que la misma ha sido decretada como consecuencia del ejercicio de una acción personal.

CUARTO: Que la obligación de que trata la Sentencia Extranjera que se solicita y reconocer y ejecutar es totalmente lícita en Panamá y cumple con los requisitos del numeral 3 del artículo 1409.

QUINTO: Que la Sentencia consta debidamente autenticada por las autoridades competentes."

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación por el término de cinco (5) días, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 1410 de la citada excerta legal.

El señor Procurador, a través de su vista No. 29 de 30 de junio del año que decurre, virtió su criterio arribando a la conclusión de que "debe accederse a la solicitud de exequátur bajo examen"(visible a foja 13 a 15).

Observa la Sala que, de conformidad con el artículo 864 del Código Judicial, los documentos aportados en el presente negocio cumplen con el requisito de la legalización consular diplomática, requerimiento indispensable para todo documento extendido en país extranjero cuya ponderación va a ser sometida a los tribunales panameños.

Dentro de este contexto, una vez expuestas las opiniones del petente y del señor Procurador, procede la Sala al análisis de la solicitud.

De los documentos aportados como pruebas, esta Superioridad observa que de foja 4 a 6 y reverso obra copia debidamente autenticada, por la vía consular, de la sentencia in examine, con su correspondiente traducción a nuestro idioma oficial visible a foja 8 a 9 del presente expediente. La misma fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal de efectos lícitos en nuestro país; no fue proferida en rebeldía, como lo expresa la sentencia de divorcio al señalar que la acción de Divorcio fue debidamente notificada personalmente dentro

de ese Estado. Tenemos, pues, que se cumple con todos los requisitos exigidos por los artículos 864 y 1409 de nuestro Código Procedimental.

En mérito de lo anteriormente expuesto, considera esta Sala que la solicitud de ejecución de sentencia es viable.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia extranjera de divorcio proferida por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Kings, Estados Unidos de América, por la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre la señora CHARLETTE PETULIA ORTEGA estadounidense y ENRIQUE ALBERTO ORTEGA MORGAN de nacionalidad panameña, celebrado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 20 de enero de mil novecientos ochenta y nueve.

Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios, en los términos que establece la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTOS

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NO. 1 DE MAJADAHONDA MADRID, ESPAÑA, SOLICITA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PARA QUE SE RECIBA DECLARACIÓN A FRANCISCO LAJARRAGA LÓPEZ DE ARROYABE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente de la Sub Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores ingresa a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Exhorto distinguidos con 28080 1 010104/1999, procedimiento de Separación Contenciosa 271/1998 del Juzgado de 1ª Instancia No.1 Majadahonda, entre los señores FRANCISCO LEJARRAGA LÓPEZ DE ARROYABE y MILAGROS ESPEJO-SAAVEDRA ESQUERRA.

La comisión rogatoria antes descrita tiene como finalidad la práctica de la siguiente diligencia:

> "QUE a tenor del pliego de posiciones que en pliego cerrado se acompaña, y que han sido declaradas pertinentes por este Juzgado se reciba confesión judicial a quien a continuación se indica:
>
> DON FRANCISCO LEJARRAGA LÓPEZ DE ARROYABE
> EDIFICIO MARINA DEL REY, COCO DEL MAR
> REPÚBLICA DE PANAMÁ...".

Sobre el particular, se debe acotar en primer lugar, que la Sala Cuarta de Negocios Generales es el ente competente para "recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por los tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo", conforme lo establece el artículo 101 numeral 3 del Código Judicial.

Una vez visto el contenido del presente suplicatorio, la Sala Cuarta considera que, efectivamente el mismo cumple con todos los requisitos de forma exigidos por las normas y los Convenios Internacionales aplicables a esta materia, puesto que la presentación de los documentos se ha hecho conforme a lo estatuído en el artículo 6 de la Convención Interamericana Sobre Exhortos y Cartas Rogatorias que a continuación describimos:

> "Artículo 6: Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular o diplomática o por medio de la autoridad central será innecesario el requisito de la legalización".

La práctica de la prueba solicitada se da dentro del procedimiento procesal panameño, en el artículo 890 y que a continuación describimos:

> "Las partes podrán pedir, por una sola vez y sólo en la primera instancia, que la contraparte se presente a declarar sobre el interrogatorio...".

De lo anterior se desprende, que la petición no vulnera el orden público panameño al acceder a la solicitud del Tribunal Español.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia y por Autoridad de la Ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional del Exhorto librado por el Juzgado de Primera instancia No. 1 de Majadahonda, Madrid, España, en le proceso de separación contenciosa distinguido en 28080 1 0101040/1999, instaurado por Milagros Espejo-Saavedra Ezquerra contra Francisco Lejarraga López de Arroyabe, y ORDENA que el mismo sea remitido al Juzgado de Familia, Primer Distrito Judicial de Panamá, en turno, para que practique las pruebas solicitadas por el Tribunal Español, utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro orden procesal vigente, y una vez realizadas las diligencias pertinentes, sea devuelto a esta Sala para ser remitido vía Cancillería, a su lugar de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO PROMOVIDO POR EL JUZGADO DE LETRA SEGUNDO DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ, REPÚBLICA DE HONDURAS, EN RELACIÓN A LA CAUSA INSTRUIDA CONTRA JUAN CARLOS RIVERA AGUILAR Y OTROS, POR EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO EN EL DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JESÚS ADOLFO MANZANARES MOLINA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS

Procedente de la Sub Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores ha ingresado a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Suplicatorio procedente del Juzgado de letras Segundo Departamental de intibucá, República de Honduras, en relación a la causa instruida contra JUAN CARLOS RIVERA AGUILAR y otros, por el delito de Tentativa de homicidio en perjuicio de JESÚS ADOLFO MANZANARES MOLINA.

El exhorto antes descrito, tiene la finalidad que las autoridades competentes de la República de Panamá realicen la siguiente DILIGENCIA:

"LÍBRESE ATENTO SUPLICATORIO, al señor Director del Ministerio Público de la república de Panamá, para que se asigne a la persona o personas que estime idóneas, y éstas a su vez comparezcan ante las oficinas de "TOYOTA Southeast Toyota Distribitora, Inc.", de la ciudad de Panamá, y de donde corresponda CERTIFIQUEN la orden de pedido No. 8697034526-W 00345 que corresponde al vehículo MARCA: TOYOTA, TIPO camioneta, color: rojo, motor: No. 0085056, SERIE No. HDEJ800002927, CILINDRAJE: 4164..."

En este punto es importante destacar que la sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia es el ente idóneo para "recibir exhortos y comisiones rogatorias librados por los Tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo", conforme a lo que establece el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial.

La documentación procedente del Juzgado Letras Segundo Departamental de Intibucá, República de Honduras, en relación a la causa instruida contra JUAN CARLOS RIVERA AGUILAR Y OTROS, por el delito de Encubrimiento en el delito de Tentativa de homicidio en perjuicio de JESÚS ADOLFO MANZANARES MOLINA, viene conforme lo exige el artículo 864 del Código Judicial Panameño, es decir que se realizó la certificación de la firma por la Misión Consular de la República de Honduras y de igual forma se adjuntó la certificación de la firma del Consejero Encargado de los Asuntos Consulares de Panamá en Honduras por el Departamento de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Sala observa que la República de Panamá y la República de Honduras han suscrito convenios en lo referente a obtención y práctica de pruebas, y que al respecto resulta preciso señalar que específicamente en materia penal la República de Panamá se reserva la potestad discrecional de acceder a las peticiones efectuadas por el petente, dadas las limitaciones que pudieran presentarse en nuestra legislación sustantiva.

Se pone de manifiesto que la documentación aportada cumple con el requisito imperativo de legalización consular, que la colaboración judicial peticionada por el Estado requirente, tiene su génesis en el proceso adelantado por la comisión del delito de Encubrimiento en el delito de Tentativa de Homicidio, por lo que seguidamente procede adentrarse al examen del exhorto en cuestión.

Del análisis anterior se observa que este ilícito aparece tipificado en nuestro ordenamiento penal vigente, específicamente en su artículo 363 del Código Penal Panameño, y que señala:

"El que después de cometido un delito, sin haber participado en él, ayude a asegurar su provecho; a eludir las investigaciones de la autoridad, a sustraerse a la acción de ésta o al cumplimiento de la condena, será sancionado con prisión por 1 o 2 años..."

Lo expuesto implica que la conducta investigada en el estado Petente y en la República de Panamá constituye delito; siendo éste un presupuesto básico para que las diligencias solicitadas puedan ser practicas por un agente de instrucción competente en nuestro país. De lo contrario, no podría accederse a la viabilidad de las pruebas que se requieren mediante el presente exhorto.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el Exhorto librado por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de intibucá, República de Honduras, dentro de la causa instruida contra JUAN CARLOS RIVERA AGUILAR Y OTROS, por el delito de Encubrimiento dentro del delito de tentativa de Homicidio en perjuicio de JESÚS ADOLFO MANZANARES MOLINA.

Como resultado de lo anterior, ORDENA que la misma sea remitida a la SECRETARÍA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el objeto de que designe el funcionario de instrucción competente para que lleve a cabo el

diligenciamiento de la presente solicitud internacional en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL N°10, SECRETARÍA 19, DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA DE ARGENTINA, SOLICITA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL, DENTRO DE LOS AUTOS CARATULADOS "CONSTRUCTORA EMBALSE CASA DE PIEDRA S. A. CONTRA ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE ECONOMÍA (DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA). MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

A través de la nota A.J. No. 850 suscrita por la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestra República, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema , exhorto librado en los autos caratulados "CONSTRUCTORA EMBALSE CASA DE PIEDRA S. A. C/ ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE ECONOMÍA S/ ORDINARIO" que se tramitan en el Juzgado Nacional en primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal No. 10 , Secretaría 19.

Según lo establece el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros, determinar su cumplimiento en el territorio nacional y considerar si vulnera el orden público y, en el evento de que no lo vulnere, determinar el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

LA PETICIÓN

A foja 2 del expediente se aprecia que la petición al tribunal competente panameño consiste en que se sirva disponer las medidas pertinentes con el propósito de dirigirse a Morris & Sullivan Corp. con oficinas en Edificio Plaza Bancomer Piso 14, Call3 50 y 53, Apartado 6307, Panamá 5, República de Panamá, a fin de que informe al Juzgado de V.S. si las copias de los contratos que se acompañan, y que deberán devolverse juntamente con la respuesta a este requerimiento, son autenticas y reflejan operaciones realizadas por la entidad con la actora en este proceso. Asimismo se solicita se requiera a la entidad financiera aludida, informe si en las fechas que se indican en la planilla anexa al presente, puso a disposición de la actora la cantidad de Bonos Externos de la República Argentina que se indican en la referida planilla en carácter de depósito.

La solicitud obedece a que el juzgado exhortante aceptó pruebas a producirse en el extranjero las cuales requieren de la asistencia o auxilio del Tribunal Panameño.

LOS REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y LA LEY APLICABLE

Dentro de los requisitos formales para estos negocios debemos tener en cuenta en primer término si el país exhortante, en este caso Argentina, al igual que Panamá forman parte de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, así como del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatoria, cuyos textos son leyes

aplicables para estos casos, conjuntamente con nuestra normas de procedimiento judicial . Como quiera que ambos países son signatarios de la Convención , conviene en este punto señalar que las prácticas de las diligencias solicitadas sólo serán posibles si la petición una vez analizada no vulnera nuestro orden público.

La Sala observa que la documentación procedente de las autoridades argentinas se encuentra exenta del requisito de la legalización, toda vez que los documentos han sido remitidos por la vía diplomática, se aprecia que los documentos anexos tienen impreso el sello del Tribunal de la causa.

DECISIÓN DE LA SALA

Conforme al derecho internacional, el exhorto o comisión rogatoria es parte de los medios típicos de ayuda procesal, que consisten en que los jueces del proceso o de la caUsa soliciten al juez extranjero que los asistan en una tramitación dentro de un negocios jurídico, ventilándose en el extranjero.

El convenio de la Haya suscrito el 5 de octubre de 1961, en sus artículos 2 y 3 establece lo siguiente:

> "Artículo 2: Cada Estado contratante eximirá de la legalización a los documentos a los que se apliquen el presente convenio y que deberán ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido del presente convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto, certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente .
>
> Artículo 3: La única formalidad que podrá ser exigida para certificar la autenticidad de la firma, el carácter con que ha actuado el signatario del documento y, de corresponder, la identidad del sello o del timbre que lleva el documento será una acotación que deberá ser hecha por la autoridad competente del Estado en el cual se originó el documento de conformidad con lo previsto en el artículo 4.
>
> Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o las costumbres vigentes en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o eximan al documento del requisito de la legalización".

De los artículos antes transcritos se colige, que al no encontrarse Panamá dentro de las excepciones señaladas en el párrafo segundo artículo 3, resulta obligatorio el cumplimiento de la formalidad de la "acotación o apostilla".

La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias en su artículo VI suprime la exigencia de la legalización "diplomática o consular", cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular o por intermedio de la autoridad central, no obstante, es evidente, por lo expresado en párrafos precedentes, que este artículo no establece de forma alguna la exclusión de la formalidad exigida relativa al cumplimiento de la "apostilla", la cual se tiene en el Estado requirente.

Esta Corporación estima que no es posible acceder al diligenciamiento del presente exhorto, toda vez que ha señalado reiteradamente que la convenciones y tratados internacionales otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes, siendo esta una regla de conducta obligatoria para los Estados que las suscriben y ratifican.

En consecuencia la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto librado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal No. 10, Secretaría 19, de la Ciudad de Buenos Aires, República de Argentina en los autos caratulados "CONSTRUCTORA EMBALSE CASA DE PIEDRA S. A. CONTRA ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA S/ ORDINARIO".

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUZGADO DÉCIMO PENAL DE PICHINCHA, QUITO, ECUADOR, SOLICITA LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DENTRO DEL JUICIO PENAL QUE SE SIGUE POR LA MUERTE DE RICARDO ARTURO JARRIN JARRIN (Q.E.P.D.). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce del Exhorto procedente del Juzgado Décimo Penal de Pichincha, Quito, Ecuador, dentro del proceso penal que se sigue por la muerte de RICARDO ARTURO JARRÍN JARRÍN (q.e.p.d.), remitido a esta Corporación de Justicia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.

Al respecto se observa que el petente solicita que ante las autoridades panameñas, rinda testimonio propio el abogado Ab Abdala Bucaram, en su residencia domiciliaria en la ciudad de Panamá, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 del Código Procesal penal de ese país, (visible a foja 7 del expediente).

A renglón seguido la corte constata que toda la documentación que ha sido aportada, se encuentra autenticada por autoridad jurisdiccional correspondiente, como también contiene los sellos consulares respectivos del país petente que certifican el envío diplomático, de acuerdo a lo establecido en el artículo VI de la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias.

Antes estas circunstancias es pertinente acotar en primer lugar, que en atención a los preceptuado en el artículo 101 numeral 3 del Código Judicial, es competencia de esta Sala de la Corte, "Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

En este sentido se observa que la República de Panamá, y el estado del Ecuador, son suscriptores de la Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. No obstante , es preciso tener presente que específicamente en materia penal la República de Panamá se reserva la potestad discrecional de acceder a las peticiones efectuadas por el suplicante, dadas las limitaciones que pudieran presentarse en nuestra legislación procesal sustantiva.

En este orden de ideas se observa que la colaboración judicial peticionada por el Estado requiriente, tiene su génesis en el proceso penal que se sigue para descubrir autores, cómplices y encubridores de la muerte de RICARDO ARTURO JARRÍN JARRÍN (q.e.p.d.)., que para tal efecto se solicita que se reciba el testimonio propio del señor Abogado Abdalá Bucaram Ortíz.

Así las cosas es indispensable poner de relieve que el requiriente no

suministra en detalle las preguntas destinadas para la realización de la diligencia solicitada a través de la presente carta rogatoria al señor Ab Adala Bucaram, por lo que este Tribunal se encuentra imposibilitado de llevar a cabo el interrogatorio requerido, en atención a que no le es dable convertirse en parte de la controversia, el elaborar el cuestionario necesario para recibir el testimonio antes indicado, que se desprenda directamente del contenido del presente exhorto.

Es preciso destacar que en el proceso panameño debe suministrarse el referido cuestionario por escrito, el Juez interrogará al testigo en primer término acerca de sus generales y le ordenará que conteste los hechos objeto de su declaración. Seguidamente el Juez dirigirá el interrogatorio que se surta y al concluirse éste, le hará las preguntas adicionales que juzgue necesarias al testigo producto del desarrollo de la misma gestión, y firmará la declaración tomada. Así mismo resolverá las objeciones que se susciten en el momento del interrogatorio con carácter irrecurrible, y sancionará al testigo cuando fuere necesario (artículos 926, 928 y 930 y ss del Código Judicial, que en materia de citación de testigos se refiere).

De lo expuesto se infiere que impera que los interesados proporcionen por escrito el interrogatorio se solicita se practique a AB ABDALA BUCARAM.

Por tal motivo no procede acceder a la petición incoada por el Juzgado Décimo Penal de Pichincha, Quito, Ecuador.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declaran NO VIABLE el exhorto librado por el Juzgado Décimo Penal de Pichincha, Quito, Ecuador, dentro del proceso penal que se sigue por la Muerte de RICARDO ARTURO JARRÍN JARRÍN (q.e.p.d.).

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR LA FISCALÍA NACIONAL EN LO CRIMINAL NO.8 DE BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA DENTRO DE LOS AUTOS CARATULADOS NÚMERO 48.984/99 RELATIVO A LA EMPRESA INVERSABE, S. A. CONTRA VEN YORKA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Nos ha sido remitido, a través de las autoridades diplomáticas argentinas, el exhorto librado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal No.8 de Buenos Aires, Capital Federal, dentro de los autos caratulados No.48.984/99 por el delito de "*estafa en grado de tentativa*" en base a la denuncia presentada por la señora ISABEL SÁNCHEZ MALDONADO, en representación de la sociedad anónima "INVERSABE, S. A.", para que esta Sala, considere la viabilidad de su diligenciamiento en nuestro país.

ANTECEDENTES

El señor Fiscal Nacional de Instrucción No.8, en lo Criminal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República de Argentina, lleva en su despacho las sumarias correspondientes a la denuncia presentada por la

representante legal de la sociedad anónima "INVERSABE, S. A.", como quiera que, contra la misma, se efectuaron actos contrarios a las leyes penales argentinas.

Según la denunciante, en el año 1996 fueron suscritos, por el señor ANTONIO ABELLO SUÁREZ, diez pagarés; cada uno de ellos por la suma de CINCUENTA y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US$ 52,500.00) con el fin de realizar una operación inmobiliaria. Afirma la denunciante que la operación en mención no se llevó a cabo; pero que, los pagarés, fueron archivados en las dependencias de la firma "INVERSABE, S. A.".

Posteriormente, los pagarés fueron sustraidos ilegítimamente de las oficinas de "INVERSABE, S. A." y que los mismos fueron utilizados por la firma panameña "VEN YORKA, S. A." para solicitar la quiebra de la empresa "INVERSABE, S. A.; proceso que se ventila en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No.9, Secretaría No.17, de Buenos Aires.

El objeto de la presente solicitud de asistencia judicial internacional, es lograr el testimonio del señor JORGE ALEXIS GARRIDO y del representante legal de la sociedad "VEN YORKA, S. A." en relación a los hechos que motivaron la denuncia y su participación en los mismos. A foja 54 del expediente, se encuentra legible, fotocopia de la certificación expedida por el Registro Público de Panamá, donde se hace constar que para el día 10 de mayo de 1999, la sociedad "VEN YORKA, S.A" es representada por YADITA BRAGIN.

A fojas 8 y 9 del expediente se encuentra el cuestionario que deberán absolver los testigos. Además se indica la dirección donde pueden ser localizados los mismos; el señor JORGE ALEXIS GARRIDO, tiene oficinas en calle Samuel Lewis y calle Gerardo Ortega, Edificio Banco Central, piso 3°, estudio Infante-Garrido; y la firma "VEN YORKA, S. A.", en la calle Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, Edificio Banco Central, piso 4°, oficina 3°; ambos en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

CONSIDERACIONES

En base a lo establecido en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, corresponde a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, determinar la viabilidad de los exhortos y comisiones rogatorias libradas por tribunales extranjeros; así como el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

Observa la Sala, que si bien es cierto, la República de Panamá y la República Federal Argentina, son suscriptores de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, las mismas no pueden ser invocadas en esta ocasión. Esto es así, ya que, el artículo 2 de ambas, circunscribe el alcance de las Convenciones a los procesos en materia civil y comercial.

El expediente, en el cual se libró el exhorto, trata materia penal; como se desprende de las piezas procesales enviadas con la solicitud de asistencia judicial internacional; lo cual, lo sustrae del alcance de las convenciones.

Por otro lado, las autoridades panameñas y argentinas, tampoco han suscrito convenios referentes a la asistencia judicial sobre recepción de pruebas en materia penal; por lo que procede la revisión de la petición incoada a través de la reciprocidad ofrecida, para casos similares, por el Estado Requirente; tomando como parámetros, el respeto al ordenamiento positivo interno y la costumbre internacional.

Se debe precisar que la inexistencia de tratados o convenios bilaterales entre la República de Panamá y el Estado Requirente no es motivo para rehusar la práctica de auxilio internacional, dado que la asistencia judicial tal como ha mencionado esta Sala de la Corte, en oportunidades anteriores, tiene su sustento en la buena fe de los Estados miembros de la Comunidad Internacional.

Luego de examinados los presupuestos legales para determinar la viabilidad de la solicitud, debemos considerar también los requisitos formales a tenor de nuestra legislación y el derecho internacional. Al respecto debemos indicar que la documentación aportada se encuentra debidamente legalizada a través de la "APOSTILLE"; convenio de legalización de documentos emitidos en el extranjero, al cual esta adherida la República de Panamá.

Examinadas las formalidades, pasamos a considerar la petición efectuada por el Fiscal Nacional en lo Criminal de Instrucción, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal N°8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República de Argentina.

Pretende el agente de instrucción argentino, la evacuación de las declaraciones, en base a cuestionario preelaborado y aportado, del señor JORGE ALEXIS GARRIDO y del representante legal de la sociedad "VEN YORKA, S. A."; siendo para el 10 de mayo de 1999, la señora YADITA BRAGIN; según copia de la certificación expedida por el Registro Público de Panamá, legible a foja 54 del expediente.

Para la evacuación de dicha prueba, las autoridades argentinas, han proporcionado la dirección de las personas, de quienes se requiere testimonio; señalan que, el señor JORGE ALEXIS GARRIDO tiene domicilio en la Calle Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, Edificio Banco Central, piso 3°, -estudio Infante-Garrido-, ciudad de Panamá, República de Panamá; y, para el representante legal de la firma "Ven Yorka, S. A.", el domicilio es en la Calle Samuel Lewis y calle Gerardo Ortega, Edificio Banco Central, piso 4°, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Luego del estudio de la solicitud se aprecia, sin lugar a dudas, que el presente exhorto posee los requisitos mínimos exigidos, para su diligenciación en nuestro país: una indicación clara sobre el objeto de la prueba; copia de los escritos y resoluciones que fundan la carta rogatoria; así como los interrogatorios y documentos necesarios para su cumplimiento; nombre y dirección de las personas de quien se solicita testimonio; informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo; y, la legislación correspondiente a la recepción u obtención de la prueba.

Por lo antes expuesto y en virtud de que la recepción de los testimonios solicitada, no vulnera nuestro fuero interno, la Sala considera que debe acceder a lo solicitado por las autoridades argentinas.

Advierte la Corte que las diligencias se practicarán de acuerdo a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE, el diligenciamiento en el territorio nacional del exhorto librado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina dentro de los autos caratulados 48.984/99 relativo a la empresa INVERSABE, S. A. contra VEN YORKA, S. A. y ORDENA enviar, al señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, la presente solicitud de asistencia judicial internacional para que designe al Agente de Instrucción del Ministerio Público que diligenciará en debida forma las declaraciones solicitadas.

Una vez debidamente diligenciado el presente exhorto, remítanse las actuaciones correspondientes a la cancillería para su posterior devolución a las autoridades argentinas.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARTA ROGATORIA S/N DE 10 DE FEBRERO DE 2000 LIBRADA POR LA FISCALÍA DÉCIMA ADSCRITA A LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, PROCESO NO.224393. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

A través de la nota A.J. No 922 suscrita por la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestra República, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia , exhorto librado por la Fiscalía Décima Adscrita a la Unidad de Delitos Financieros de Santafé de Bogotá en el proceso No.224393.

Según lo establece el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros, determinar su cumplimiento en el territorio nacional y considerar si vulnera el orden público y, en el evento de que no lo vulnere, determinar el funcionario o tribunal que debe cumplirlo. A foja 3 del expediente se aprecia que la petición al tribunal competente panameño consiste en:

1. **Verificar si en el BANCO CAFETERO de PANAMÁ existe la cuenta corriente No 120294000-1 indicando a quien pertenece y si por algún motivo se sabe que corresponde a la firma "COMERCIALIZADORA HORIZONTES OVERSEAS S. A."**

2. **Remitir los extractos de la referida cuenta entre 1992 y 1995, inclusive.**

3. **Informar si EDUARDO CAMARGO CERON identificado con la c.c. No. 17.091.093 expedida en Bogotá, posee cuentas en esa entidad bancaria, en caso afirmativo se indique la fecha de apertura de dichas cuentas y se envié extractos de las mismas desde 1992 hasta 1995.**

La solicitud obedece a que la Fiscalía 10 adscrita a la Unidad de Delitos Financieros de Santafé Bogotá D.C. de la República de Colombia pretende determinar si la conducta de los sindicados configura el delito denominado EXPORTACIÓN FICTICIA.

Dentro de los requisitos formales para estos negocios debemos tener en cuenta en primer término si el país exhortante, en este caso Colombia, al igual que Panamá forman parte de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, así como del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias , cuyos textos son las leyes aplicables para estos casos, conjuntamente con nuestras normas de procedimiento judicial . Como quiera que ambos países son signatarios del la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero como del Protocolo Adicional a la Convención , conviene en este punto señalar que las prácticas de las diligencias sólo serán posibles si la petición una vez analizada no vulnera nuestro orden público.

En el caso que nos ocupa, la Sala observa que al folio 5 del exhorto que se expide por la Fiscalía Décima Adscrita a la Unidad de Delitos Financieros de Santafé de Bogotá, proceso No 224393, la certificación expedida por el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Encargado de Asuntos Consulares en Santafé de Bogotá, Colombia, está acreditando la firma de BLANCA INÉS ACOSTA GARCÍA, firma esta que no aparece en la Solicitud de Asistencia Judicial , a foja 4 del expediente se observa que el nombre de la

persona que expidió la Solicitud de Asistencia Judicial es MARTHA SALCEDO DE TORRES Fiscal 10 y a foja 6 se observa que HERMES ARDILA QUINTANA, Director Seccional de Fiscalías de Santafé de Bogotá acredita la firma de MARTHA SALCEDO DE TORRES y no la de BLANCA INÉS ACOSTA GARCÍA, como se aprecia registrado en la citada certificación expedida por nuestras autoridades en Santafe de Bogotá . Por otro lado observa la Sala que el aludido documento no porta la certificación de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores acreditando quien ejercía el cargo de Encargado de Asuntos Consulares de Santafé de Bogotá el 29 de marzo de 2000.

Conforme al derecho internacional, el exhorto o comisión rogatoria es parte de los medios típicos de ayuda procesal, que consisten en que los jueces del proceso o de la causa soliciten al juez extranjero que los asistan en una tramitación dentro de un negocio jurídico, ventilandose en el extranjero.

Observa esta Corporación de Justicia vicios de carácter formal en la presentación del exhorto en estudio y en torno al objetivo de la diligencia solicitada cabe señalar que resulta imposible practicar la asistencia judicial solicitada en el sentido de verificar si en el BANCO CAFETERO de PANAMÁ existe la cuenta corriente No. 120294000-1 e indicar a quien pertenece , remitir los movimientos de la referida cuenta entre 1992 y 1995 e informar si EDUARDO CAMARGO CERON posee cuentas en esa entidad, puesto que ello sólo es posible cuando se ha presentado una acción exhibitoria y conforme a las normas y procedimiento que nuestro orden interno establece para tal finalidad; y es evidente que en el caso que ahora nos ocupa tal medida no se ha presentado, por lo tanto se desestima pues este petitorio.

El Artículo 89 del Código de Comercio dispone en su último párrafo lo siguiente:

> "Ninguna autoridad está facultada para obligar al comerciante a suministrar copias o reproducciones de sus libros (o parte de ellos), correspondencia o demás documentos en su poder. Cuando procediere obtener algún dato al respecto, se decretará la acción exhibitoria correspondiente. El comerciante que suministre copia o reproducciones del contenido de sus libros, correspondencia u otros documentos para ser usada en litigio en el exterior, en acatamiento a orden de autoridad que no sea de la República de Panamá, será penado con multa no mayor de Cien balboas (B/. 100.00)."

En este mismo orden de ideas, tenemos, que al otorgar de plano la información solicitada, se estaría contraviniendo nuestro ordenamiento jurídico interno, una vez que la cuenta bancaria a la que se hace alusión en este documento, se le debe dar el trámite establecido por los artículos 85 y 86 del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998 por el cual se reforma el régimen bancario y se crea la Superintendencia de Bancos en la República de Panamá ,en el cual se manifiesta que la reserva bancaria prevalecerá salvo que medie una solicitud que haya cumplido con las formalidades legales.

Ante la ausencia de un procedimiento judicial en un tribunal panameño que ordene una acción exhibitoria, resulta inadmisible acceder a la petición formulada.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el exhorto librado por la Fiscalía Décima Adscrita a la Unidad de Delitos Financieros de Santafé de Bogotá, proceso No. 224393 y ordena DEVOLVER el expediente contentivo de la presente documentación a la Cancillería Panameña para los ulteriores trámites diplomáticos aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR LA OFICINA DE EJECUCIONES DEL TRIBUNAL DEL DISTRITO DE LA SARINE DEL CANTÓN DE FRIBOURG, SUIZA, PARA QUE SE EFECTÚE UNA NOTIFICACIÓN A CORNELIS DE JONG. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce del exhorto librado por la Oficina de Ejecuciones del Tribunal del Distrito de la Sarine del Cantón de Fribourg, Suiza, en materia civil con la finalidad de que se notifique a DE JONG CORNELIS de una Orden de Secuestro con su respectivo protocolo y de la Orden de Pago No. 845352 como convalidación del secuestro No. 828 180 .

Según lo establece el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta recibir exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y considerar si vulnera o no el orden público y, en el evento de que no lo vulnere, determinar el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

En primera instancia , es preciso determinar si existe entre la República de Panamá y Suiza convención suscrita relativa a exhortos o cartas rogatorias.

En cuanto a esta materia, observa la Sala que no existe convención alguna entre ambos países, de manera que esta solicitud de asistencia judicial internacional será tramitada en base al principio de reciprocidad internacional el cual debe imperar en la comunidad internacional, no obstante, el procedimiento a seguir en cuanto al diligenciamiento del suplicatorio en estudio, será conforme a lo preceptuado en nuestro Código Judicial como fuente supletoria en este caso.

De conformidad con el artículo 864 del Código Judicial, se requiere que los documentos procedentes del extranjero cumplan con el requisito de la autenticación. Esta puede ser por vía consular o diplomática o a través del mecanismo de la apostilla.

La Sala observa que la documentación procedente de la autoridad exhortante se encuentra debidamente legalizada, pues consta la incorporación de la apostilla en cada uno de los documentos a diligenciar, lo cual encierra la presunción de que han sido expedidos conforme a la ley local del país requirente; además, toda la documentación se encuentra traducida al idioma español; no obstante la Sala observa que la dirección suministrada a saber: DE JONG CORNELIS c/o Agencies , P.O. Box 2078 Pier Street 60, U- Balboa - Panamá no es amplia.

La Sala considera que no es posible acceder a lo solicitado en la presente comisión rogatoria toda vez que ha señalado reiteradamente que la dirección de las partes debe ser amplia y que este es un requisito indispensable para el diligenciamiento de las notificaciones.

No obstante lo anterior, es preciso reiterar que la República de Panamá tiene a bien prestar auxilio judicial en torno a notificaciones de procesos extranjeros, siempre que reúnan un mínimo de requisitos fundamentales. Subsanada la omisión aquí señalada, puede ser la solicitud presentada nuevamente ante esta Superioridad a fin de realizar la diligencia correspondiente.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto librado por la Oficina de Ejecuciones del Tribunal del Distrito de la Sarine del Cantón de Fribourg, Suiza con la finalidad que se notifique DE JONG CORNELIS de una orden de secuestro y de la Orden de Pago No. 8281180 Y ORDENA, que el expediente se remita al Ministerio de Relaciones Exteriores para su posterior devolución a las autoridades competentes.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL FISCAL SECCIONAL CIENTO VEINTUNO - DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE ALI VALLE - REPÚBLICA DE COLOMBIA DENTRO DEL PROCESO QUE SE SIGUE CONTRA MANUEL BENITO LLANOS, IVAN DE JESÚS ARBELAEZ AGUIERRE, GUILLERMO MEJÍA CARVAJAL, HUMBERTO MEJÍA VELÉZ Y ANTONIO LOZANO ARANA DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDA POR EL DELITO DE USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

A través de la nota A.J. No. 1169 suscrita por la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestra República, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema, exhorto librado por el Fiscal Seccional 121 Delegado Ante los Jueces Penales del Circuito de Santiago de Cali Valle-República de Colombia en el proceso 153665 que se sigue contra MANUEL BENITO HINESTROZA LLANOS, IVAN DE JESÚS ARBELAEZ AGUIRRE, GUILLERMO MEJÍA CARVAJAL, HUMBERTO MEJÍA VÉLEZ Y ANTONIO LOZANO ARANA dentro de las sumarias seguida por el delito de USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES.

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

La autoridad colombiana solicita lo siguiente:

1. OFICIAR al Ministerio de Hacienda y Tesoro y/o Dirección General de Ingresos de Panamá, solicitando se certifique si la Compañía LEVI'S STRAUSS&CORPORATION DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ figura como contribuyente, en caso afirmativo se certificará quien es su representante legal, lugares de funcionamiento, valores recaudados provenientes de estas empresas, fechas de pago de impuesto. Igualmente se solicitará copia auténtica y en doble ejemplar de toda la documentación aportada para la inscripción de dicha entidad como contribuyente.

2. OFICIAR a la entidad administrativa de Panamá que corresponda, se certifique si la marca LEVI'S STRAUSS& CORPÒRATION tiene registrada su explotación comercial, en caso afirmativo se certificará quién es el representante legal y se solicitará copia auténtica y en doble ejemplar de toda la documentación aportada para patentar dicha marca.

3. REALIZAR diligencia de INSPECCIÓN JUDICIAL en la Notaria Duodécima de Panamá para allegar copia auténtica y en doble ejemplar de la escritura pública 8247 celebrada el 5 de noviembre de 1996 y su correspondiente registro ante la entidad que corresponda, la que trata de la constitución de la compañía LEVI'S STRAUSS CORPORATION DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, cuya escritura al parecer fue registrada con la ficha 231399 rollo 28413, imagen 015..

Procede este ente colegiado a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan tanto a la nación colombiana como a la panameña, relativos a la materia, pudiendo constatar que ambas Repúblicas son parte de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero aprobada en Panamá mediante la Ley No. 13 de veintitrés (23) de octubre de mil novecientos setenta y cinco (1975), así como del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Ley de la República No.10 de 18 de junio de 1991.

A foja 5 del expediente se observa, que las autoridades de la República de Colombia, han cumplido con el requisito de la legalización; la aludida documentación porta una certificación expedida por nuestras autoridades en la ciudad Santafe de Bogotá- Colombia y posteriormente por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Panamá.

El artículo IV de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero preceptúa:

"ARTÍCULO IV: Los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la recepción u obtención de pruebas o informes en el extranjero deberán contener la relación de los elementos pertinentes para su cumplimiento, a saber:

1. Indicación clara y precisa acerca del objeto de la prueba solicitada;

2. Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto o carta rogatoria, así como los interrogatorios y documentos que fueran necesarios para su cumplimiento;

3. Nombre y dirección tanto de las partes como de los testigos, peritos y demás intervinientes y los datos indispensables para la recepción u obtención de la prueba;

4. Informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo en cuanto fuere necesario para la recepción u obtención de la prueba;

5. Descripción clara y precisa de los requisitos, procedimientos especiales que el órgano jurisdiccional requirente solicitare en relación con la recepción u obtención de la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2 párrafo primero, y en el Artículo 6."

El requerimiento efectuado por el Fiscal Seccional Ciento Veintiuno - Delegado Ante los Jueces Penales Del Circuito de Santiago de Cali Valle-República de Colombia, ha sido acompañado de todos los requisitos formales para su diligenciamiento, no obstante esta Corporación de Justicia estima que no es posible acceder a practicar la totalidad de las pruebas solicitadas pues de hacerlo se estaría vulnerando el contenido de los artículo 88 y 89 de nuestro Código de comercio que preceptúan lo siguiente

"Artículo 88: Ninguna autoridad, juez o tribunal, puede hacer u ordenar pesquisa o diligencia alguna, para examinar si el comerciante lleva o no debidamente sus libros de contabilidad mercantil, ni hacer investigación ni examen general de la contabilidad en las oficinas o escritorios de los comerciantes".

"Artículo 89: Tampoco podrá decretarse comunicación, entrega o reconocimiento general de libros, correspondencia y demás papeles y documentos de comerciantes o corredores excepto en los casos de sucesión o quiebra".

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PARCIALMENTE VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto diplomático librado por el Fiscal Seccional Ciento Veintiuno- Delegado Ante los Jueces Penales Del Circuito de Santiago de Cali Valle- República de Colombia y ORDENA que se realicen las siguientes diligencias.

Oficiar a la Dirección General De Ingresos Del Ministerio De Economía y Finanzas para que certifique si la Compañía LEVI'S STRAUSS & CORPORATION DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ figura como contribuyente;

Oficiar al Ministerio De Comercio e Industria Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial para que certifique si la marca LEVI'S STRAUSS & CO o LEVI'S STRAUSS & CORPORATION tiene registrada su explotación comercial;

Que la diligencia de inspección Judicial en la Notaría Duodécima sobre la Constitución de la Compañía LEVI'S STRAUSS sea diligenciada a través de la Procuraduría General de la Nación con el objeto que se designe el funcionario de instrucción que va a llevar a cabo la misma.

Una vez reingrese el presente cuaderno a esta Superioridad, procédase a su remisión a la Cancillería panameña para su posterior devolución a su lugar de origen.

Notifiquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE ANULACIÓN

PUNTA BARCO RESORTS, SOLICITA LA ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL PROFERIDO EL DÍA 4 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO DENTRO DEL PROCESO QUE LA SOCIEDAD DISTINCTIVE POOL CONSTRUCTION, S. A. SIGUE CONTRA PUNTA BARCO RESORTS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La firma forense Infante, Garrido & Garrido, ha solicitado ante la Sala de Negocios Generales que previo a la ejecución de del Laudo Arbitral proferido el día 4 de abril del año en curso dentro del Proceso que la Sociedad Distinctive Pool Construction, S. A. sigue contra Punta Barco Resorts solicita el Recurso de Anulación contra la citada decisión proferida por el Tribunal Arbitral de Proceso Arbitral en Equidad de la Empresa Distinctive Pool Construction vs Punta Barco Resort, se pronuncie sobre la condena a la sociedad Punta Barco Resort, Inc., parte demandada en el presente proceso arbitral, al pago de treinta y cuatro mil trescientos veintinueve balboas con cuarenta y un centésimos (B/. 34, 329.41) en concepto de capital, intereses e indemnización a favor de la sociedad DISTINCTIVE POOL CONSTRUCTION, así como el pago de los honorarios de los árbitros, los gastos ocasionados en el presente proceso y al pago de las costas que se fijan en la suma de tres mil cuatrocientos treinta y dos balboas con noventa y cuatro centésimos (3,432.94).

Los apoderados legales impugnan el citado Laudo Arbitral en virtud que se encuentran disconformes con los honorarios presentados por el Tribunal Arbitral puesto que consideran que los mismos se encuentran fijados previamente.

Procedió esta Corporación a examinar la presente solicitud a fin de determinar si la misma cumplía con los requisitos formales necesarios para su admisión. Por lo que se le dio traslado del petitorio a los Representantes Legales de la Sociedad Distinctive Pool Construction, S. A. la firma forense Maud & Maud para que se pronunciaran sobre el mismo.

Entre los argumentos presentados por la firma forense Maud & Maud trasncribiremos los últimos que son del tenor siguiente:

.....

"SEXTO: Que por ende, no existe violación alguna a disposición o norma del Decreto Ley No.5 de 8 de julio de 199 mediante el cual se establece el Régimen General de Arbitraje, de la Conciliación y la Mediación, constituyendo este Recurso un claro acto de dilación por parte de la demandada-condenada quien tenía hasta el 27 de abril de 2000 para cancelar la suma a la que se le condenó, tal y como consta en Certificación expedida por la Secretaría Ejecutiva del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio que también adjuntamos.

No entendemos, entonces, el planteamiento que hace el recurrente en el sentido de que las costas al ser fijadas por los árbitros "debieron incluir al ser fijadas los honorarios de los árbitros". (ver pág. 10 del escrito sustentativo del Recurso de Anulación) puesto que eso fue exactamente lo que hicieron los árbitros en el Laudo de 4 de abril de 2000 y su Aclaración de 18 de abril, lo que queda sumamente claro de la lectura de los pasajes de ambos documentos transcritos en los hechos primero, segundo, tercero y cuarto del presente escrito.

"SÉPTIMO: Que alegar una presunta violación del artículo 29 del Decreto Ley 5 de 8 de julio de 1999 resulta sin fundamento alguno pues no existió violación del mismo, como pretende hacer ver la recurrente, dado que se cumplió cabalmente con proferir la condena en COSTAS de la cual, según la Aclaración del Laudo de 18 de abril de 2000, forman parte integrante los gastos del proceso y de árbitros tal cual lo manda el citado artículo 29 del Decreto Ley 5.

"OCTAVO: Que, asi mismo, resulta sin fundamento alguno e improcedente del presente Recurso de anulación toda vez que el mismo no se fundamenta en ninguno de los tres supuestos contemplados en el artículo 34, numeral 1, del Decreto Ley 5 de 8 de julio de 1999. Y ello es así en virtud de que no existe infracción alguna de las disposiciones del Decreto Ley, ya que el Laudo Arbitral fue expedido ajustándose a lo establecido en el Reglamento aplicable (del Centro de Conciliación y Arbitraje) y al Decreto en comento".

Le recuerda la Sala a los letrados que el artículo 34 del Capítulo V sobre Impugnación del Laudo Arbitral Interno manifiesta lo siguiente:

Artículo 34: Contra el laudo arbitral interno sólo podrá interponerse el Recurso de anulación, por los siguientes motivos tasados:

1. Cuando la parte interpone el recurso pruebe:

a) Que el convenio arbitral estaba viciado por alguna de las causas de nulidad consagradas en el Código Civil y las causales contenidas en los Convenios Internacionales que la República de Panamá haya ratificado sobre la materia.

b) Que la constitución del tribunal arbitral, el desarrollo del procedimiento arbitral o la emisión del laudo, no se ha ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o de conformidad con lo establecido en el presente Decreto Ley, o no haya sido una de las partes notificada en debida forma de la iniciación del arbitraje o de cualquier trámite del procedimiento.

c) Que el laudo se refiere a una controversia no contenida en el Convenio Arbitral, o que contiene decisiones que exceden de su ámbito o alcance.

d) Si el laudo se hubiere obtenido en virtud de violencia, cohecho o prevaricato.

Paragrafo: La anulación afectará únicamente a las cuestiones a que se refieren los párrafos anteriores que se puedan separar de las demás contenidas en el laudo.

2. Que el tribunal compruebe que el objeto de la controversia no es arbitrable conforme a la ley panameña, o que el laudo es contrario al orden público panameño.

Por lo tanto el Decreto - Ley No 5 de 1999 señala de manera clara y taxativa cuales son los casos que no admitirán recursos de anulación. Para mayor claridad citaremos una Sentencia del Pleno bajo la ponencia de la Magistrada Guerra de Villalaz de fecha de 29 de octubre de 1992 donde señala:

"Por lo que respecta al arbitraje, es importante dejar establecido que el mismo es un mecanismo ideado con la finalidad de resolver conflictos entre sujetos de derecho, sean entes de derecho público o personas jurídicas de derecho privado, que sin recurrir a las autoridades jurisdiccionales establecidas por el Estado conceden a un tercero, unipersonal o pluripersonal, la facultad de decidir sobre un cuestión de interés para ambas partes.

La doctrina privatista entiende que el arbitraje supone la existencia de un problema material, mientras que las concepciones más modernas consideran al arbitraje como un autentico medio jurisdiccional de solución de conflictos, pues le conceden carácter de auténtico proceso regulado por el Estado.

Aunque árbitros y arbitradores no ostentan la misma potestad jurisdiccional que la Ley otorga a Jueces y Magistrados, si tiene facultad legal para decidir una cuestión sometida a su consideración y ello implica, en alguna medida, ejercer la jurisdicción que por autorización de la Ley los sujetos que recurren al arbitraje le reconocen a árbitros y arbitradores en el caso particular que los enfrenta como sujetos de derechos".

Se desprende del extracto jurisprudencial citado y de las normas transcritas que el presente Recurso de Anulación resulta improcedente puesto que la causa de invalidación argüido por los proponentes no se encuentra contenida en ninguna de las causales previstas en la Ley que reglamenta el Arbitraje Interno en Panamá.

La Sala desea manifestar que el Recurso de Anulación es un Recurso extraordinario y como tal solo se debe invocar excepcionalmente en especiales circunstancias, taxativamente determinadas por la ley, sin generalidad, limitado a ciertos fines, y cuando no procede ningún otro recurso. Todo pronunciamiento, o laudo dado por un arbitro, que le ponga término a un conflicto, lleva aparejada tanto la posibilidad de recurrir por las partes contra la decisión, cuando ésta no se ajuste al procedimiento legal establecido, o si la decisión es arbitraria (entendida la voz aquí como sinónima de infudada), y no cual obra de un arbitro cabal, como la de sancionar el incumplimiento de la resolución arbitral. Y en el

caso que nos ocupa observa esta Alta Magistratura diafanamente que la causa de impugnación no tiene relación con la decisión del Laudo emitido. La ejecución voluntaria o forzosa del laudo es consubstancial con el arbitraje. En efecto, la impunidad del incumplimiento tomaría aquella resolución tan débil como una fórmula conciliatoria extrajudicial, que sólo se concreta por la espontaneidad de la partes.

En consecuencia, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el Recurso de Anulación presentado contra el Laudo Arbitral proferido el día 4 de abril del año en curso dentro del Proceso que la Sociedad Distinctive Pool Construction, S. A. sigue contra Punta Barco Resorts Inc.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR RENE C. QUEZADA M. CONTRA EL LICENCIADO EUDARDO BADILLO P. POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE JULIO DE DOS (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ingresó a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno que contiene la denuncia por Faltas a la Etica y la Responsabilidad del Abogado, interpuesta por el señor RENE C. QUEZADA M. contra el licenciado EDUARDO BADILLO.

El Tribunal de Honor en virtud de lo preceptuado por el Artículo 26 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993 solicitó mediante Vista de 20 de mayo de 1999 (fs.26-28), el llamamiento a juicio del licenciado EDUARDO BADILLO por presunta violación al Código de Etica y Responsabilidad del abogado en especial el ordinal b del artículo 34 de la ley 8 de 1993.

Al examinarse el escrito, la Corte observa que el señor RENE C. QUEZADA M. basa su denuncia en las siguientes razones:

1. Él contrató los servicios del licenciado EDUARDO BADILLO PAZ, para que por vía judicial procediera al cobro de una deuda por daños y perjuicios que le ocasionó Katherine Tudisco con el auto de la abogada Fátima Tudisco.

2. Se le abono honorarios por la cantidad de 125.00.

3. Por medio de otro abogado, se entero que el proceso civil de secuestro se encuentra en total abandono y que la licenciada Tudisco había retirado su bono de garantía.

Por su parte, el Tribunal de Honor mediante resolución visible a fojas 7 del presente cuaderno, abrió la investigación de los hechos denunciados y decidió correr traslado al licenciado EDUARDO BADILLO PAZ por el término de cinco (5)

días hábiles, para que la misma presentara los descargos; y las pruebas correspondientes.

A fojas 12 del expediente consta informe secretarial de 15 de septiembre de 1997 donde se explica que mediante nota de 20 de agosto de 1997 el Tribunal de Honor intentó remitir al licenciado BADILLO, su solicitud para que el mismo presentara sus descargos, no obstante, ha resultado todos los esfuerzos infructuosos ya que no han conseguido su teléfono o dirección por lo que no ha podido presentar contestación o pruebas a su favor.

El Tribunal de Honor, mediante Vista calendada el 17 de noviembre de 1998, solicita a la Corte Suprema citación a juicio el licenciado EDUARDO BADILLO por presunta violación al Código de Etica y Responsabilidad del abogado en especial el ordinal b del artículo 34 de la ley 8 de 1993. En tal sentido establece lo siguiente:

"Artículo 34

Literal b) Demore maliciosamente la iniciación o prosecución de las gestiones que le fueron encomendadas".

Visible a fojas 35 del presente cuaderno consta el Emplazamiento Edictal por paradero desconocido ordenado para cumplir con la diligencia de notificación para el licenciado Badillo Paz. También se observa la designación de Defensor de Oficio del licenciado Ernesto Muñoz Gamboa.

Ahora bien, a fojas 43 del expediente consta notificación el oficio CSJ-SNG-147-2000 del Doctor Carlos H. Cuestas G. solicitandole al Juez Quinto de Circuito el Proceso Ejecutivo del señor Rene C. Quezada M. contra la joven Katherine Tudisco.

Dentro del cuaderno contentivo del Juicio Ordinario podemos observar no solo el poder y la solicitud de pretensión, además un sinnúmero de escritos de notificación y de impulso procesal a favor de su poderdante, además de una sustitución a favor del licenciado Víctor Manuel Harding; seguidamente se observa otro poder conferido al licenciado Nemesio Fajardo Angulo de lo que se desprende que se revoca cualquier otro poder conferido con anterioridad, por lo que mal se podría decir que el jurista abandono el caso cuando en realidad lo que ocurrió es que al mismo se le relevó de su obligación. Además que es importante resaltar la intervención del licenciado Harding puesto que esta situación indica que este último Licenciado tenía facultad para notificarse y tramitar en el proceso cuestionado.

Expuestos los argumentos, y los razonamientos del Tribunal de Honor, procede la Sala a analizar los elementos probatorios aportados al proceso y los alegatos correspondientes, a fin de determinar si es procedente llamar a juicio al licenciado EDUARDO BADILLO PAZ por supuesta violación al Código de Etica y la Responsabilidad del abogado.

La Sala advierte como un hecho lo vertido por el denunciante, en relación a que el licenciado EDUARDO BADILLO PAZ recibió la suma de B/.125.00 en concepto de abono de honorarios, por representar al señor QUEZADA M. dentro del PROCESO ORDINARIO en el Juzgado Quinto de Circuito Civil del Primer Distrito Judicial contra Katherine Henderson Tudisco. Igualmente esta acreditado en el expediente, la presentación ante el juzgado de la causa, del poder conferido a la licenciada BRENES DE SANJUR, el día 6 de noviembre de 1996 (fs.1), solicitudes al tribunal (fs. 7), corrección de demanda (fs.8), escrito de sustitución (fs.11), escrito de solicitud de edicto en puerta (fs.16), escrito de solicitud de Edicto Emplazatorio y Defensor de Ausente (fs.17), solicitud especial (fs.27), solicitud de impulso procesal (fs.28) y notificaciones (todos dentro del cuaderno civil).

Por otra parte, de las piezas probatorias presentadas en los dos cuadernillos seguidos en el Juzgado Quinto de Circuito Civil, se deduce que el

licenciado BADILLO PAZ no era el único abogado del caso ya que se desprende que el licenciado Harding fue designado como abogado sustituto. Frente a estos acontecimientos, el denunciado no es el único letrado al frente del caso además que luego de la revocación del poder tácita por parte del denunciante.

A criterio de la Corte, la presentación del poder ante el juez de la causa, las notificaciones por escrito, las solicitudes de impulso procesal, constituyen unas gestiones más que suficientes dentro del proceso que sobrepasan la suma cobrada. Es importante establecer que la representación judicial dentro de un proceso debe considerarse como una importante participación del abogado dentro de la causa, pues a partir de ese instante las partes o la parte involucrada se encuentra legalmente representada en juicio, de otro modo estaría en estado de indefensión. Por estas razones, no puede tomarse como argumento válido lo expresado por el denunciante, cuando indica que el licenciado tenía "en total abandono el caso de secuestro", pues, aunque a su criterio el no hubiese realizado una gestión relevante, la realidad y la práctica profesional indican que asumir un poder dentro de una causa, más diversas solicitudes legales al tribunal, presentar escritos y trasladarse al Tribunal para ver como se desarrolla el caso involucra una serie de gestiones que el abogado, como representante de una de las partes debe efectuar, lo que en estos casos no se puede ver reflejado en resultados, puesto que a los abogados no se les contrata para obtener un resultado sino por una gestión que podrá dar resultados positivos o adversos para su cliente; y posteriormente el señor QUEZADA M. revocó el poder al licenciado BADILLO PAZ y se lo otorgó al licenciado NEMESIO FAJARDO ANGULO (fs.38 del cuaderno del Juzgado Quinto de Circuito Civil), impidiéndole continuar el negocio jurídico.

Por otra parte, dentro de la tarifa de honorarios legales que establece el Colegio, que es la aplicable a falta de contrato escrito, podemos observar que la redacción de poder, proceso ordinario de mayor cuantía hasta B/. 5,000 balboas equivale al 25% de la cosa en litigio, causará honorarios mínimos de quinientos balboas (B/.500.00), siendo así, el cobro de B/.125.00 efectuado por el licenciado BADILLO PAZ, para la redacción del poder la presentación del mismo, proceso ordinario de mayor cuantía resulta mínimo en relación a lo fijado en la tarifa legal.

Aunado a lo anterior, la Sala desea aclarar uno de los argumentos utilizados por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados para solicitar el llamamiento a juicio del licenciado BADILLO, cuando dentro de la vista señala que la denunciada evadió la responsabilidad de aclarar la denuncia, por lo que el tribunal considera violado el Artículo 34 en su Literal b que señala: " Demore maliciosamente la iniciación o prosecución de las gestiones que le fueron encomendadas.

Finalmente, el Tribunal de Honor estima que ningún abogado después de comprometerse en una causa, y de haber recibido abonos puede demorar maliciosamente la iniciación o prosecución de las gestiones que le fueren encomendadas, criterio que comparte plenamente la Sala. Sin embargo, la situación procesal que se refleja en el expediente es sustancialmente distinta, ya que, tal como consta dentro del cuadernillo, aunado que el proceso contaba con un abogado sustituto al licenciado BADILLO PAZ le fue revocado el poder otorgado, impidiéndole continuar la gestión iniciada, pues no consta dentro del expediente prueba de que el se hubiere negado a continuar la gestión, o que se le hubiere vencido el término de algún trámite, o que se hubiere negado expresamente a notificarse de alguna resolución, situaciones que podrían provocar un perjuicio del cliente, y constituirse en negligencia del abogado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que no existen méritos para llamar a juicio al licenciado BADILLO PAZ, dentro de la denuncia interpuesta en su contra por el señor RENE C. QUEZADA M. por faltas a la Etica y la Responsabilidad del Abogado y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese Y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA FELIPA ESTHER FLASHY CONTRA EL LICENCIADO RUDESINDO PEREA ARRIETA, POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La señora FELIPA ESTHER FLASHY SOTO, interpuso, ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, denuncia por supuestas faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado, contra el licenciado RUDESINDO PEREA ARRIETA.

El proceso disciplinario ingresó a esta Sala de Negocios Generales, toda vez que, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, mediante resolución de 23 de mayo del año en curso, solicitó el llamamiento a juicio del abogado RUDESINDO PEREA ARRIETA por contravenir el acápite b) del artículo 10 y el ch) del artículo 34, de la Ley 9 de 1984, reformada por la Ley 8 de 1993; la cual regula el ejercicio de la profesión abogado en la República de Panamá.

A foja 40 del expediente, se encuentra legible el escrito presentado, personalmente ante la Licenciada NOEMI MORENO ALBA, Notaria Pública Décima del Circuito de Panamá, por la señora FELIPA ESTHER FLASHY SOTO, donde hace constar su formal desistimiento a la denuncia interpuesta ante el Colegio Nacional de Abogados por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado, contra el Licenciado RUDESINDO PEREA ARRIETA.

En consecuencia, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la denuncia presentada por la señora FELIPE ESTHER FLASHY contra el Licenciado RUDESINDO PEREA ARRIETA y ORDENA el archivo del expediente, previa anotación de su salida en libro respectivo.

Notifíquese y Cúmplase

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BUSSIERE CAROLE JEAN INTEPONE DENUNCIA POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO EN CONTRA DEL LICENCIADO RIGOBERTO A. VERGARA C. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES

VISTOS:

El licenciado DANILO MONTENEGRO, Defensor de Oficio, designado para representar al Licenciado RIGOBERTO VERGARA en el proceso, que por faltas a la

ética y responsabilidad profesional del abogado, sigue esta Corporación de Justicia contra el licenciado RIGOBERTO VERGARA, delegó en la Licenciada ELDA LUQUE, la representación del denunciado, por no poder asistir, a la audiencia correspondiente, en la fecha prefijada. La Licenciada LUQUE en su intervención se refirió a las denuncias interpuestas, ante la Policía Técnica Judicial, por la señora CAROLE BUSSIERE y el señor ALAN LAWRENCE A., identificadas con los números AB-1-295-93 y AB-1-296-93.

Dichas denuncias se encuentran indicadas en el escrito legible a foja 5 del expediente, en donde los señores ALAN LAWRENCE A. y CAROLE BUSSIERE confieren poder a los abogados RIGOBERTO VERGARA C. y VICTOR M. MARTÍNEZ C., para que los representen en las investigaciones seguidas por el delito denunciado; escrito que está dirigido al Fiscal Auxiliar de la República.

A foja 19 del expediente, encontramos la nota de 16 de octubre de 1997, dirigida por el Secretario General de la Corte Suprema de Justicia al Licenciado Carlos Augusto Herrera, Fiscal Auxiliar de la República, donde le solicita información en relación a la denuncia interpuesta por el Licenciado Rigoberto Vergara, por el supuesto delito de hurto de joyas en perjuicio de los señores Carole Bussiere y Alan Lawrence; así como, los trámites que dicho abogado ha realizado en beneficio de los denunciantes; seguidamente, a foja 20, encontramos la respuesta del señor Fiscal Auxiliar: "*...después de revisar nuestros archivos no consta que el licenciado RIGOBERTO VERGARA, haya interpuesto denuncia por hurto, en perjuicio de CAROLE BUSSIERE y ALAN LAWRENCE, de enero de 1994, hasta la fecha*".

Considera la Sala que, antes de emitir un veredicto, es oportuno determinar la participación, si la hubo, del licenciado Vergara dentro de las investigaciones realizadas a raíz de las denuncias interpuestas por los señores BUSSIERE y LAWRENCE; para lo cual, solicitaremos mayor información sobre las denuncias identificadas en la Policía Técnica Judicial de Balboa como AB-1-295-93 y AB-1-296-93; así como, a la Fiscalía de Circuito, Especial, del Área de Ancón y al Juzgado Séptimo de Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, con sede en Ancón.

Por las consideraciones arriba expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA a la Secretaría de la Sala de Negocios Generales, dicte los oficios correspondientes a la Policía Técnica Judicial; a la Fiscalía de Circuito, Especial, del Área de Ancón y al Juzgado Séptimo de Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Ancón; para que suministren información acerca de las denuncias presentadas por los señores CAROLE BUSSIERE y ALAN LAWRENCE, en el año de 1993; por el supuesto delito de hurto en su contra.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR HÉCTOR F. LÓPEZ BARRIOS CONTRA EL LICENCIADO LUIS BARRÍA POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES

VISTOS:

El señor HÉCTOR F. LÓPEZ BARRIOS, interpuso, ante el Tribunal de Honor del

Colegio Nacional de Abogados, denuncia por supuestas faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado, contra el licenciado LUIS ALBERTO BARRÍA.

A foja 26 del expediente, se encuentra legible el escrito presentado, personalmente, por el señor HECTOR FRANCISCO LÓPEZ BARRIOS, donde hace constar su formal desistimiento a la denuncia interpuesta, ante el Colegio Nacional de Abogados, por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado, contra el Licenciado LUIS ALBERTO BARRÍA.

En consecuencia, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la denuncia presentada por el señor HÉCTOR FRANCISCO LÓPEZ BARRIOS contra el Licenciado LUIS ALBERTO BARRÍA y ORDENA el archivo del expediente, previa anotación de su salida en libro respectivo.

Notifíquese y Cúmplase

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL, DE VALPARAISO, CHILE, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO CARATULADO "COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, S. A.". MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Considerado el informe Secretarial anterior, encuentra la Sala que, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Civil, mediante Sentencia de once (11) de enero del año en curso, se pronunció sobre el caso para el cual hemos sido comisionados por las autoridades chilenas.

Por lo que, a tenor de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 203 de nuestra Constitución Nacional, lo examinado en la solicitud que nos ocupa, es cosa juzgada.

En consecuencia, la Sala de Negocios Generales, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, previa anotación de su salida en libro respectivo; y, REMÍTANSE las actuaciones realizadas, a la Cancillería, para su posterior devolución a las autoridades chilenas. ADJÚNTESE copia autenticada de la Sentencia de 11 de enero de 2000, dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Cúmplase,

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACLARACIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DE LA SEÑORA YADIRA JIMÉNES ORTEGA ANTE EL TRIBUNAL DE HONOR POR FALTAS A LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO CONTRA LA LICENCIADA MARICELA CEBALLOS DE RUDAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS

La licenciada Erayda Simití, actuando en nombre y representación de Maricela Ceballos de Rudas, en el proceso de Ética que se le sigue por denuncia interpuesta por la señora YADIRA JIMÉNEZ ORTEGA, ha presentado aclaración de resolución de fecha 30 de marzo de dos mil (2000).

La apoderada Judicial de la denunciada considera que sentencia cuya aclaración se pide es necesaria por las siguientes razones:

> "Solicitamos dicha aclaración dado que el presente auto se decretó nulo el llamamiento a juicio de mi poderdante, citando las fojas 58 a 61 del presente expediente, cuando nos hemos percatado de que el llamamiento a juicio está visible de fojas 58 a 65.
>
> Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a los Honorables Magistrados de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, se sirva aclarar la presente confusión existente en el expediente".

La Sala advierte que dicha solicitud es improcedente, porque no se ajusta a lo preceptuado en los artículos 986 del Código Judicial, al establecer que "puede el juez que dictó una sentencia aclarar las frases obscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva". No obstante, como la intención del escrito presentado es que la citada resolución sea corregida, con fundamento en el artículo 471 del Código Judicial, que faculta al tribunal de la causa para darle a la demanda, petición, recurso o incidente, "el trámite que legalmente le corresponda" a ello procede esta Superioridad.

El artículo 986 del Código Judicial preceptúa que las resoluciones judiciales en la cuales se haya incurrido, en su parte resolutiva, en un "error pura y manifiestamente aritmético de escritura o de cita" pueden ser corregidas en cualquier momento.

Esta es la situación que se ha dado en el caso bajo estudio en el que se observa un error de cita que debe corregirse. En efecto la resolución anulada mediante el auto que motivó esta petición es el auto de citación a juicio que va de fojas 58 a 65 y no a fojas 61 como por error se señaló.

De consiguiente, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se corrige el error contenido en la parte resolutiva de la resolución de 30 de marzo de dos mil , la cual quedará así: DECLARA LA NULIDAD DE LO ACTUADO EN EL PRESENTE ASUNTO DE FOJAS 58 HASTA LA 65, Y ORDENA IMPRIMIRLE EL CURSO NORMAL A ESTE NEGOCIO.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=